

I

OFICIO DE REMISIÓN / BIDALKETA-OFIZIOA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**



**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**HONEKIN BATERA AUCRKEZTEN DIREN
AGIRIAK**

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

I. BIDALKETA-IDAZKIA	OFICIO DE REMISIÓN
II. LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO
III. LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA
IV. TXOSTENA, 2016KO OTSAILAREN 23AN ONARTUTAKO LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA	INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO EL 23 DE FEBRERO DE 2016.
V. AZALPEN MEMORIAK	MEMORIAS EXPLICATIVAS
VI. MEMORIA EKONOMIKOA	MEMORIA ECONÓMICA
VII. AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA	INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA
VIII. EMPRESAREN INGURUKO ERAGIN TXOSTENA	INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA EMPRESA
IX. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN TXOSTENA	INFORME DE LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
X. GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA	INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
XI. EMAKUNDEAREN TXOSTENA	INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
XII. HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA (TXOSTEN-ESKAERA)	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (SOLICITUD DE INFORME)
XIII. KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUAREN BATZORDE IRAUNKORRAREN ZIURTAGIRIA	CERTIFICADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE
XIV. EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAREN IRIZPENA	DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO
XV. EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLAREN TXOSTENA	INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO
XVI. EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA	DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
XVII. PROZEDURA HASTEKO AGINDUA	ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
XVIII. PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA	ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

I

OFICIO DE REMISIÓN / BIDALKETA-OFIZIOA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**ANDRE HORI:****EXCMA. SRA.:**

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2017ko azaroaren 7an egindako bilkuran, **Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2017, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.**

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoaren.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 7a.

Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2017.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

Consulta de Documento

Archivo del documento	PROYECTO DE LEY deporte.pdf
Descripción	Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco / Lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa.
Creador	Cortés Larramendi, Carmen
Cargo firmante	Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki
Fecha modificación	08/11/2017
 Firmado digitalmente por	JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO

Cerrar

II

**TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

PROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en materia deportiva. Asimismo, ostenta, de conformidad con el artículo 10.22 competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y de ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

En ejercicio de la competencia en materia de deporte, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que ya establecía en su artículo 62 que para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. Es decir, la Ley del Deporte no concretó las titulaciones requeridas para esas actividades profesionales y, por tanto, se veía precisada de una normativa que regulase tal exigencia.

Por otra parte, el Parlamento Vasco también aprobó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales. Esta ley se divide en dos partes diferenciadas; por un lado, regula algunos aspectos generales del ejercicio profesional y, por otra, regula la actividad colegial propia de las profesiones colegiadas. En cuanto a la primera, establece un marco normativo común a toda actividad profesional que debe complementarse, como abiertamente reconoce su exposición de motivos, con la regulación separada del ejercicio de cada una de las profesiones. Es decir, cohabitan una regulación común del ejercicio profesional y una regulación sectorial.

La práctica deportiva es, desde sus orígenes, una combinación de aspectos biológicos y culturales, y, especialmente de un tiempo a esta

parte, ha ganado muchas posiciones en las sociedades postindustriales por su evidente contribución a la salud de las personas. La sociedad vasca no se escapa a esta realidad. Y, desde ese punto de vista, el deporte como fuente de salud está siendo incluido en la agenda de las políticas públicas de todos los países del mundo desarrollado y emergente; todo ello sin menoscabo de su contribución a la formación en valores y a la educación, a la actividad económica, al turismo y al ocio responsable, lo que convierten al deporte en un ámbito transversal de interés público en toda su magnitud y que precisa una continua adaptación del ordenamiento jurídico a los requerimientos vigentes habida cuenta de su carácter dinámico.

En este contexto se sitúa la presente Ley, que ya cuenta con dos antecedentes autonómicos merecedores de mención en esta Exposición de Motivos. El Parlamento de Cataluña aprobó, por unanimidad, la Ley 3/2008, de 23 de abril, del Ejercicio de las Profesiones del Deporte, bajo el argumento de la notable incidencia de las actividades deportivas en la salud y seguridad de las personas que lo practican. Y también la Asamblea de Extremadura, con el mismo fundamento, ha aprobado la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en dicha Comunidad Autónoma.

La problemática del ejercicio profesional en actividades deportivas directamente vinculadas a la salud y a la seguridad de las y los deportistas por personas carentes de una mínima formación es análoga en las Comunidades Autónomas. Efectivamente, existe una innegable incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de las personas que practican deporte, incidencia que conduce inexorablemente a una regulación de su acceso y ejercicio, máxime en un ámbito en el que la realización de las actividades profesionales ha venido siendo asumida por personas carentes de una adecuada formación.

El propio Plan Vasco del Deporte 2003-2007 ya denunció que existe una percepción general de que la falta de regulación profesional ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de dicho Plan era regular las exigencias mínimas de titulaciones para actividades profesionales, teniendo en cuenta, según reconocía, el propio Plan, la incidencia de la práctica deportiva en la salud y seguridad de los practicantes.

**PROYECTO DE LEY sobre acceso y ejercicio de
profesiones del deporte en el País Vasco**

Es innegable que la práctica deportiva de los ciudadanos y ciudadanas conlleva por lo general, importantes beneficios si se realiza en condiciones aceptables, pero también puede constituir una importante amenaza si se ejecuta bajo la dirección o supervisión de personas sin la formación necesaria.

Con relación a la necesidad de la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte cabe resaltar en esta exposición de motivos que el Tribunal Constitucional ya afirmó en su Sentencia 194/1998, de 1 de octubre, que *“la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte (artículo 43.3 de la CE) y que tales actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo 43.3 CE, de suerte que no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas”*.

El texto articulado trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

La presente ley concibe el ámbito material del deporte al igual que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, es decir, en un sentido muy amplio y contempla el fenómeno deportivo vasco en todas sus manifestaciones, sin constreñir tal concepto a las modalidades y disciplinas deportivas oficialmente reconocidas ni al mundo de la pura competición. El sistema deportivo vasco, como puso de manifiesto el citado Plan Vasco del Deporte, está compuesto de subsistemas de características muy heterogéneas. Por esta razón, la ley no se circunscribe sólo al ámbito de la competición o al ámbito federado, sino que trata de contemplar toda la policromía del deporte de conformidad con la Carta Europea del Deporte de 1992, que comprende por deporte *«todo tipo de actividades físicas que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física y*

psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles».

En las sociedades desarrolladas, como lo es la sociedad vasca, el deporte se debe convertir ya en un ámbito de actuación decididamente transversal, en el sentido de que debe ser abordado no sólo desde departamentos específicos, sino desde toda la acción de gobierno, dada su afectación a la salud, a la educación, al mercado de trabajo, a los consumidores y usuarios, al uso del euskera, al medio natural, etcétera.

Las profesiones que se regulan en esta ley abarcan el ámbito educativo, el ámbito recreativo, el ámbito competitivo y el ámbito de la dirección. En cada uno de estos ámbitos se ha reconocido una profesión.

Salvo la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, que ya es una profesión regulada y titulada con arreglo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las demás profesiones que se contienen en esta Ley sólo deben considerarse «profesiones reguladas» de conformidad con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Con arreglo a la jurisprudencia constitucional «profesión titulada» es aquella profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos oficiales de educación superior cuando así se establezca en norma estatal con rango de ley por razones de interés general. Por el contrario, se define «profesión regulada» la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados, de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales.

Esa es una de las claves de esta Ley. El acceso o ejercicio de las profesiones del deporte no está sujeto a la posesión de un título de educación superior, sino a la acreditación de las correspondientes cualificaciones profesionales. Y estas cualificaciones podrán acreditarse mediante los títulos académicos de diferentes niveles así como mediante aquellos otros títulos, como los certificados de profesionalidad, de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

La ley comienza complementando la legislación educativa, reformada recientemente en el ámbito de las enseñanzas deportivas de régimen especial mediante la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la

mejora de la calidad educativa (LOMCE), sobre la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física. A pesar de constituir actualmente una profesión titulada que cuenta con una gran tradición, no se ha beneficiado hasta la fecha del reconocimiento adecuado y, además, presenta diversas carencias que esta Ley trata de cubrir para garantizar la salud y la seguridad de los alumnos y alumnas. La ley trata de garantizar la importante función del Profesor o Profesora de Educación Física y por esta razón, respetando las exigencias de cualificación de la legislación educativa y aplicando lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, exige una formación mínima en primeros auxilios.

El deporte practicado en el País Vasco con propósitos de salud, ocio y recreación, integración social, educación y análogos ha experimentado un extraordinario auge en las últimas décadas y por ello es un innegable campo de actuación profesional. Asimismo, el aumento cada vez mayor del interés por la práctica de los deportes de aventura, de riesgo o en el medio natural, o el mismo fenómeno de la proliferación de centros deportivos, públicos y privados, ha alimentado una importante oferta y demanda de profesionales que precisa una urgente regulación. Por ello, en la ley se reconoce y regula la profesión del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, que también cuenta con una extraordinaria tradición en el mundo del deporte.

Dentro del deporte de competición conviven realidades muy diferentes y la ley ha tratado de ser sensible a dicha pluralidad. En este ámbito de la competición deportiva se reconoce la profesión de Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente. Esta profesión permite, fundamentalmente, planificar y dirigir el entrenamiento y dirección de deportistas y equipos con miras a la competición.

El ámbito de la dirección deportiva tampoco escapa a la regulación, de modo que en la ley se ha optado por reconocer la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva, que permite realizar el conjunto de actividades profesionales relacionadas con la dirección, programación, planificación, coordinación, control y supervisión de centros y actividades deportivas aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte. Queda excluida, por el contrario, la figura del gestor o gestora de instalaciones o entidades deportivas por varias razones. Debe significarse que en esta Ley sólo se regulan aquellas profesiones que se ven precisadas de aplicar los conocimientos y

técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte. Sin embargo, el gestor o gestora de una instalación o una entidad requiere unos conocimientos propios del ámbito de la gestión o administración que, en principio, no precisan de regulación y de reserva de actividad por respeto al principio de proporcionalidad en las limitaciones en el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte.

En el ejercicio de la iniciativa normativa, los poderes públicos deben actuar de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, garantía de los derechos lingüísticos, simplicidad y eficacia. Por ello, la ley, respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, no regula todas las profesiones relacionadas con el deporte sino, tan sólo, determinadas profesiones del deporte. Se ha optado por dejar libres de regulación otras profesiones del deporte tales como las de jueces o juezas, de deportistas o de agentes de deportistas. Se trata de profesiones cuya prestación de servicios no incide directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia como son la salud y la seguridad de los terceros destinatarios de aquellos servicios profesionales.

Asimismo, en la medida que se regula el ejercicio profesional, han quedado fuera del ámbito de aplicación de la presente regulación las actividades técnico-deportivas realizadas por el voluntariado deportivo, es decir, sin carácter profesional. No obstante lo anterior, el legislador, consciente del trascendental papel que desempeña el voluntariado en el ámbito de los entrenadores recoge también medidas para garantizar la salud y la seguridad de las y los deportistas.

Por tanto, en esta iniciativa normativa queda suficientemente justificada la adecuación a aquellos principios, debiéndose hacer referencia, fundamentalmente al principio de necesidad, pues la ley está justificada por una razón de interés general, que es la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, el texto articulado opta por las medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.

El texto legal ha incorporado un catálogo de principios y deberes de actuación para el ejercicio de las profesiones del deporte. Tales principios y deberes son, como regla general, los propios y específicos de dichas profesiones quedando sometidas en todo lo restante al marco común del ejercicio profesional.

En cumplimiento de los principios contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco, se ha prestado especial atención al tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito profesional. Por ello, el texto promueve, entre otras cosas, la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales.

Por otra parte, en consonancia con la oficialidad del euskera y castellano establecida mediante el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, y los derechos lingüísticos reconocidos en la Ley 10/1982 de 24 de noviembre básica de normalización del uso del euskera y en la Ley 6/2003 de 22 de diciembre de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, se impulsará la garantía del derecho de la ciudadanía a usar la lengua oficial de su elección.

Debe dejarse constancia en esta parte expositiva que la ley se ha acomodado a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, eliminando los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los profesionales de los estados miembros de la Unión y a la libre circulación de servicios, garantizando a los destinatarios de los servicios profesionales como a los propios restadores, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También se ha tenido en consideración la legislación estatal en materia de servicios y colegios profesionales y sobre garantía de unidad de mercado.

Especial atención presta la ley al Derecho Transitorio. Todo cambio legislativo, y máxime aquellas leyes que disciplinan por primera vez el acceso y ejercicio de una profesión, plantean serios problemas de transición. Este es un problema que se ha tratado de resolver a través del Derecho transitorio. De este modo, la ley es respetuosa con los derechos de quienes, a la entrada en vigor de la misma, se encuentran desarrollando profesiones objeto de esta regulación legal sin la cualificación requerida en la ley. De igual modo se han contemplado mecanismos para la implantación progresiva y no traumática de la

misma y se han previsto, asimismo, situaciones de falta de profesionales titulados que puedan hacer frente a la demanda de las entidades prestadoras de servicios deportivos.

Naturalmente, la presente Ley, además de las competencias prevalentes expuestas al comienzo de esta exposición de motivos, también desarrolla, aunque con menor intensidad, otros títulos competenciales sobre los que Euskadi también ostenta competencias como, por ejemplo, la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 10.28) o la educación (artículo 16).

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1.- La presente Ley tiene por objeto ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y expresando la cualificación requerida para el acceso de tales profesiones.

2.- La Ley sólo será de aplicación al acceso y ejercicio profesional de forma habitual en el ámbito territorial del País Vasco y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación que, en su caso, apruebe la Comunidad Autónoma o el Estado en materia de servicios y Colegios Profesionales.

3.- Se considerará que el ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información y la comunicación se desarrolla en el ámbito territorial del País Vasco cuando se cumplan dos requisitos: las personas físicas o jurídicas prestadoras de tales servicios tengan su sede o domicilio en esta Comunidad Autónoma y, además, aquellos servicios profesionales puedan ser utilizados por consumidores o usuarios de la misma.

4.- La Ley regula el acceso y ejercicio profesional por cuenta propia y ajena y resulta igualmente aplicable tanto si la profesión se ejerce en el sector público como si se desarrolla en el sector privado con independencia de la naturaleza pública o privada, lucrativa o no lucrativa, de las entidades en donde se presten servicios profesionales. La referencia al acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en el sector público ha de entenderse circunscrita al ámbito del sector

público de la Administración General y de las Administraciones Forales y Locales del País Vasco, tanto para el acceso a puestos de trabajo como para la contratación de servicios profesionales.

5.- Se considera ejercicio profesional, a los efectos de esta Ley, la prestación de los servicios propios de las profesiones del deporte reguladas en la misma bajo remuneración, quedando excluidas las actividades realizadas en el marco de relaciones de voluntariado, amistad, familiares y análogas.

6.- A efectos de la presente Ley se entiende por voluntariado la actividad desarrollada por las y los monitores, entrenadores y directores deportivos en el ámbito de la Ley 17/1998, de 15 de junio, de Voluntariado, o disposición que, en su caso, le sustituya.

7.- Quedan fuera del ámbito de la presente Ley las actividades profesionales siguientes:

- a) Las relacionadas con el buceo profesional.
- b) Las actividades profesionales de salvamento y socorrismo no deportivo.
- c) Las actividades profesionales de paracaidismo no deportivo.
- d) Las actividades profesionales basadas en la conducción de aparatos o vehículos de motor, de carácter no deportivo.
- e) Las actividades profesionales de manejo o gobierno de embarcaciones de recreo, de carácter no deportivo.
- f) Las actividades profesionales de gestor de instalaciones deportivas o de entidades deportivas.
- g) Las actividades profesionales de preparación física en los centros de las Fuerzas Armadas radicados en el País Vasco.
- h) Las actividades profesionales propias de las y los técnicos de senderos.
- i) Las actividades de danza y bailes no deportivos.

8.- A los efectos de esta Ley, el término deporte incluye todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles e incluye a todas las actividades físico-deportivas realizadas en el seno del deporte federado, del deporte escolar, del deporte universitario, del deporte para todos, del deporte recreativo o de otras estructuras y con independencia de que su

fin sea la educación física, la competición, la iniciación, el aprendizaje, el rendimiento, la salud, la recreación, el ocio o fines análogos.

9.- Lo dispuesto en esta Ley respecto a la exigencia de cualificaciones profesionales para el acceso y ejercicio de las profesiones se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Artículo 2.- Profesiones propias del deporte, ámbito funcional general y cualificaciones.

1.- Tiene el carácter de profesión propia del deporte, a los efectos de esta Ley, aquella profesión que se manifiesta específicamente en el seno del deporte y que precisa la aplicación de conocimientos y técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte.

2.- Se reconocen, a los efectos de esta Ley, como profesiones propias del deporte las siguientes:

- a) Profesor o Profesora de Educación Física.
- b) Monitor Deportivo o Monitora Deportiva.
- c) Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- d) Director Deportivo o Directora Deportiva.

3.- Los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la presente Ley establecen el ámbito funcional general de cada profesión y tienen carácter enunciativo y no limitativo. Dentro de las atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la presente Ley, deben considerarse comprendidas las funciones de emisión de dictámenes, estudios, informes, peritajes y actividades análogas si las cualificaciones de acceso a dichas profesiones incluyen dichas competencias o si se acredita que tal competencia ha sido adquirida por otras vías.

4.- Las atribuciones vinculadas a las profesiones reguladas en esta Ley no constituyen una limitación del ámbito profesional de las titulaciones que acreditan las citadas cualificaciones.

5.- La cualificación profesional es, a efectos de esta Ley, la capacidad para el acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de competencia, por una experiencia profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias. Las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones reguladas en esta Ley podrán acreditarse mediante los títulos académicos a los que se refieren los siguientes artículos o equivalentes a nivel profesional, así como mediante aquellos otros títulos o certificados de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

6.- A los efectos de la presente Ley se considerarán títulos o certificaciones oficiales las expedidas por la Administración Educativa en el marco de las enseñanzas reguladas en la legislación educativa, las expedidas por la Administración Laboral en el ámbito de la legislación sobre cualificaciones profesionales y las expedidas por la Administración Deportiva en el marco de la legislación deportiva.

7.- El Gobierno Vasco adoptará medidas destinadas a impulsar la normalización del uso del euskera en el ámbito de ejercicio de las profesiones propias del deporte, especialmente en los ámbitos del deporte escolar y la juventud, con el objeto de que el euskera sea lengua de uso habitual en dichas actividades.

Artículo 3.- Profesión de Profesor o Profesora de Educación Física.

1.- La profesión de Profesor o Profesora de Educación Física permite impartir Educación Física en los correspondientes niveles de enseñanza y realizar todas las funciones instrumentales o derivadas previstas en la legislación educativa.

2.- Las clases de Educación Física impartidas a los alumnos y alumnas requerirán la presencia física del profesor o profesora.

3.- Quedan fuera del ámbito de esta profesión las actividades profesionales de profesor en materias deportivas incluidas en las enseñanzas universitarias, en las enseñanzas de formación profesional, en las enseñanzas deportivas de régimen especial, en las enseñanzas de la carrera militar, en las actividades formativas no formales, y en aquellas materias que no constituyen propiamente la docencia del área de Educación Física.

Artículo 4.- Profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva

1.- La profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva permite realizar funciones de planificación, instrucción, aprendizaje, animación, acondicionamiento físico, recuperación o mejora de la condición física, entrenamiento o preparación personal, monitorización, control, guía, acompañamiento, evaluación y funciones análogas sobre cualquier deportista o grupo de deportistas cuando dicha actividad no está enfocada a la competición deportiva.

2.- Para ejercer tal profesión en actividades de acondicionamiento físico, recuperación o mejora de la condición física, entrenamiento o preparación personal o análogas se requerirá una cualificación acreditable mediante los siguientes títulos académicos:

- a) Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
- c) Técnico o Técnica Superior en Acondicionamiento Físico.

3.- Para ejercer tal profesión en actividades de enseñanza, aprendizaje o análogas de carácter general, multideportivo o multidisciplinar, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, se requerirá una cualificación acreditable mediante uno de los siguientes títulos académicos:

- a) Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
- c) Técnico o Técnica Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

4.- Cuando las actividades de enseñanza, aprendizaje y análogas posean una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, y se realicen en el ámbito de la iniciación deportiva o de nivel básico, se requerirá una cualificación acreditable mediante uno de los siguientes títulos o certificados:

- a) Certificado del Ciclo Inicial del Grado Medio del título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad, especialidad o disciplina deportiva correspondiente.
- b) Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- c) Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

También podrán ejercer profesionalmente en este tipo de actividades de enseñanza, aprendizaje y análogas de carácter unidisciplinar y de nivel básico quienes posean una cualificación acreditable mediante una de las titulaciones mencionadas en el apartado tercero siempre que, además, ostenten una formación específica en la correspondiente modalidad o disciplina deportiva.

5.- Cuando las actividades de enseñanza, aprendizaje y análogas posean una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, y se realicen en el ámbito del perfeccionamiento técnico o de nivel medio se requerirá una cualificación acreditable mediante uno de los siguientes títulos:

- a) Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- b) Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

También podrán ejercer en este tipo de actividades de enseñanza, aprendizaje y análogas de carácter unidisciplinar de nivel medio quienes posean una cualificación acreditable mediante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con formación específica en la correspondiente modalidad o disciplina deportiva.

6.- Para ejercer tal profesión en actividades de cierto riesgo en el medio acuático, en la montaña, en la nieve, en el medio aéreo y en otros espacios del medio natural, así como con animales, se exigirá una cualificación acreditable mediante uno de los siguientes títulos académicos:

- a) Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

- c) Técnico o Técnica Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
- d) Técnico o Técnica en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.
- e) Técnico o Técnica en Actividades Ecuestres cuando la profesión se circunscriba a guiar y a dinamizar a personas por itinerarios a caballo.

Para ejercer la profesión en este ámbito resulta necesario que las personas que dispongan de tal cualificación cuenten, además, con la formación específica para la concreta actividad a desarrollar.

También podrán ejercer la profesión en este ámbito las personas que cuenten con una cualificación acreditable mediante el Certificado del Ciclo Inicial del Grado Medio del título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva, el título de Técnico Deportivo, Técnica Deportiva, Técnico Deportivo Superior y Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina correspondiente a la actividad desarrollada en el medio natural o con animales. En este caso, deberán tenerse en cuenta los niveles o ámbitos establecidos en los apartados cuatro y cinco del presente artículo.

7.- Para el ejercicio de la actividad profesional de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva en actividades físico-deportivas específicamente dirigidas a personas que requieran especial atención, tales como mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad, personas con problemas de salud y asimilados, será preciso una cualificación acreditable mediante el título de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las atribuciones que pueden desarrollar otros profesionales con arreglo a la legislación de ordenación de las profesiones sanitarias.

8.- Asimismo, quien ostente la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física también queda facultado para ejercer la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva en las actividades deportivas que se programen en el seno de los centros educativos fuera del horario lectivo o en el seno de otras entidades, siempre que las edades de las y los escolares se correspondan con su cualificación docente. En el caso de ejercer en actividades que posean una orientación específica a una única

modalidad o disciplina deportiva, o en las actividades de riesgo mencionadas en el apartado seis del presente artículo, se requerirá, además, una formación específica en la correspondiente modalidad deportiva.

9.- Asimismo, las personas que posean una cualificación acreditable mediante un master universitario oficial específico o un certificado de profesionalidad podrán ejercer la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva en aquellas actividades en las que hayan adquirido las competencias acreditables mediante el citado título o certificado.

10.- La prestación de los servicios propios del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva a menores de edad o a personas pertenecientes a otros grupos de riesgo así como la prestación de servicios en actividades en el medio natural o con animales requiere su presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas, salvo que la función sea de planificación o programación.

Artículo 5.- Profesión de Entrenador o Entrenadora.

1.- La profesión de Entrenador o Entrenadora permite el entrenamiento, selección, asesoramiento, planificación, programación, dirección, conducción, control, evaluación, seguimiento y funciones análogas de deportistas y equipos con miras a la competición.

2.- Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos en el ámbito del deporte escolar, durante su participación en actividades de competición de carácter multideportivo o multidisciplinar, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, se exigirá una cualificación acreditable mediante uno de los siguientes títulos:

- a) Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
- c) Técnico o Técnica Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
- d) Técnico o Técnica en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural cuando la actividad de competición escolar se desarrolle fundamental o exclusivamente en el medio natural.

Para ejercer la profesión en actividades de competición multidisciplinares de cierto riesgo en el medio natural, así como con animales resulta necesario que, además de acreditar alguna de las cualificaciones anteriores, se cuente con una formación específica para las actividades a desarrollar.

3.- Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de una única modalidad o disciplina deportiva de nivel básico se exigirá una cualificación acreditable mediante uno de los siguientes certificados o títulos:

- a) Certificado de profesionalidad de la modalidad o disciplina correspondiente.
- b) Certificado del Ciclo Inicial del Grado Medio del título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- c) Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- d) Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

También podrán ejercer en competiciones de una única modalidad o disciplina deportiva de nivel básico quienes posean una cualificación acreditable mediante alguna de las titulaciones mencionadas en el apartado segundo y que, además, acrediten una formación específica en la correspondiente modalidad o disciplina deportiva.

4.- Para ejercer tal profesión de Entrenador o Entrenadora respecto a deportistas y equipos en competiciones de nivel medio se exigirá una cualificación equivalente a la de los siguientes títulos:

- a) Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- b) Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

Asimismo, también podrán ejercer en competiciones de nivel medio quienes posean una cualificación acreditable mediante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con formación específica.

5.- Para ejercer tal profesión de Entrenador o Entrenadora respecto a deportistas calificados como de alto nivel o alto rendimiento, o respecto a equipos en competiciones de esa categoría, se exigirá una cualificación acreditable mediante el título de Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

6.- Asimismo, quien ostente la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física también queda facultado para ejercer la profesión de Entrenador o Entrenadora en las competiciones deportivas a las que se refieren los apartados segundo y tercero y que se programen en el seno de los centros educativos fuera del horario lectivo o en el seno de otras entidades, siempre que las edades de las y los escolares se correspondan con su cualificación docente. En el caso de ejercer en competiciones de una única modalidad o disciplina deportiva o en las actividades en el medio natural o con animales se requerirá, además, una formación específica en la correspondiente actividad deportiva.

7.- A los efectos de esta Ley se considera que las personas que ayudan al Entrenador o Entrenadora conduciendo, dirigiendo o controlando los entrenamientos y competiciones, dando instrucciones a las y los deportistas y actuaciones análogas también ejercen la profesión de Entrenador o Entrenadora y, en consecuencia, deberán cumplir la cualificación establecida en este artículo.

8.- Cuando el Entrenador o Entrenadora desarrolla sus atribuciones en la recuperación y mejora de la condición física de las y los deportistas, en la prevención de lesiones, en la readaptación o reeducación tras lesiones, en la realización de test de valoraciones y actuaciones análogas a través de la actividad física y del deporte se exigirá una cualificación equivalente a la del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las atribuciones que pueden desarrollar otros profesionales con arreglo a la legislación de ordenación de las profesiones sanitarias.

9.- Las cualificaciones señaladas en este artículo sólo serán exigibles cuando se ejerza la profesión en el País Vasco o para entidades deportivas y deportistas que tienen su domicilio en País Vasco. Dichas cualificaciones no serán exigibles a las y los entrenadores de entidades deportivas o de deportistas con domicilio en otros países o Comunidades Autónomas que entrenan o compiten ocasionalmente en

el País Vasco con ocasión de la preparación o participación en competiciones deportivas estatales o internacionales.

10.- La prestación de los servicios propios del Entrenador o Entrenadora a menores de edad o a personas pertenecientes a otros grupos de riesgo así como la prestación de servicios en actividades en el medio natural o con animales requiere su presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas, salvo que la función sea de planificación o programación.

Artículo 6.- Profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva.

1.- La profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva permite realizar el conjunto de actividades profesionales relacionadas con la dirección técnica, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y funciones análogas respecto a centros, servicios, actividades y entidades deportivas, tanto de titularidad pública como privada, aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte. Tal actividad profesional del Director Deportivo o Directora Deportiva no precisa su presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas.

2.- Para ejercer la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva en actividades o servicios integrales, generales, multidisciplinarios o multideportivos, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, será necesario poseer una cualificación acreditable mediante el título de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

3.- Si la dirección se proyecta sobre actividades de una única modalidad o disciplina deportiva en el ámbito de la iniciación deportiva o de nivel básico deberá acreditarse, además, una formación específica en esa modalidad o disciplina deportiva.

4.- En el caso de dirección de actividades en el ámbito del perfeccionamiento técnico o de nivel medio deberá acreditarse, en este caso, además, una formación específica o, en su defecto, poseer una cualificación acreditable mediante el título Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

5.- Para ejercer tal profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva respecto de actividades y servicios orientados al alto rendimiento se exigirá una cualificación acreditable mediante el título de Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente. Quienes acrediten esta cualificación, podrán también ejercer la profesión en actividades deportivas de nivel básico y de nivel medio.

6.- Si la dirección se proyecta sobre actividades deportivas de animación también podrán ejercer la profesión quienes acrediten una formación equivalente al título de Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o de Técnico o Técnica Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y, en el caso de que la dirección se proyecte sobre actividades de acondicionamiento físico o análogas, quienes acrediten una formación equivalente al título de Técnico o Técnica Superior en Acondicionamiento Físico.

7.- Asimismo, quien ostente la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física también queda facultado para impulsar, planificar, programar, coordinar, evaluar o dirigir las actividades deportivas escolares que se programen en el seno de los centros educativos fuera del horario lectivo, o en el seno de otras entidades, siempre que las edades de las y los escolares se correspondan con su cualificación docente. En el caso de ejercer en competiciones de una única modalidad o disciplina deportiva o en las actividades en el medio natural o con animales se requerirá, además, una formación específica en la correspondiente actividad deportiva.

Artículo 7.- Requisitos de cualificación en supuestos especiales.

1.- En el supuesto de aquellos profesionales de clubes y otras asociaciones deportivas análogas que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional sólo se les exigirán las cualificaciones previstas en esta Ley si tales entidades tienen su domicilio social en el País Vasco.

2.- A los profesionales de las federaciones deportivas españolas y demás entidades deportivas, públicas o privadas, de ámbito estatal sólo se les exigirán las cualificaciones establecidas en la presente Ley si ejercen su profesión de forma habitual en centros radicados en el País Vasco.

3.- Las cualificaciones establecidas en la presente Ley no serán exigibles a las y los profesionales de otras Comunidades Autónomas o países que desarrollen servicios profesionales de forma ocasional o puntual en el País Vasco y que estén dirigidos a consumidores o usuarios que residan fuera del propio País Vasco.

4.- Las y los deportistas de alto rendimiento sin la cualificación establecida en la presente ley podrán realizar actividades de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, o de Entrenador o Entrenadora de su modalidad o disciplina deportiva de forma ocasional y puntual, siempre y cuando estén acompañados permanente por una persona que se encuentre en posesión de la cualificación requerida para la correspondiente actividad.

Artículo 8.- Adaptación a nuevas cualificaciones y títulos oficiales.

Corresponde al Gobierno Vasco, en el ámbito de su competencia, adaptar las referencias a las cualificaciones y títulos contenidas en esta Ley a las nuevas cualificaciones profesionales y títulos oficiales. En tanto no se adapten tales referencias a las nuevas cualificaciones y títulos oficiales que se creen, resultarán válidas aquellas que se declaren equivalentes a nivel profesional en la normativa vigente.

Artículo 9.- Reserva de denominaciones.

1.- Sólo podrán utilizarse las denominaciones de las profesiones enumeradas en esta Ley cuando el ejercicio profesional se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en las demás normas aplicables.

2.- No podrán utilizarse por otros profesionales aquellas denominaciones que, por su significado o por su similitud, puedan inducir a error con las reguladas en la presente Ley.

3.- Las denominaciones de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, de Entrenador o Entrenadora y de Director Deportivo o Directora Deportiva también podrán emplearse en los respectivos deportes cuando la actividad se desarrolle en régimen de voluntariado.

4.- La denominación de la profesión de Entrenador o Entrenadora se entiende sin perjuicio de la nomenclatura que puedan contemplar las organizaciones deportivas para clasificar en su seno los diferentes niveles de cualificación.

Artículo 10.- Colegiación y Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.

1.- Será requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la presente Ley la incorporación al colegio profesional correspondiente si así lo dispone la legislación estatal correspondiente. En tal caso, el colegio profesional correspondiente deberá facilitar al Registro de Profesionales del Deporte la siguiente información de sus colegiados: nombre y apellidos y datos de su cualificación profesional.

2.- Las y los demás profesionales que deseen desarrollar su actividad profesional y que se encuentren en posesión de la cualificación exigida para ejercer cualquiera de las profesiones reguladas en esta Ley, deberán presentar una declaración responsable ante el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco en la que consten los siguientes datos: nombre y apellidos y datos de su cualificación profesional.

3.- El Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, que será público, quedará adscrito al Departamento competente en materia de deporte y a través del mismo, para la mejor defensa de los derechos de las y los consumidores y usuarios, ofrecerá de forma clara, gratuita, en euskera y castellano, y accesible electrónicamente, la información citada en los apartados anteriores. Reglamentariamente habrán de fijarse la estructura, funciones y el régimen de funcionamiento y publicidad del Registro.

4.- La mera presentación de la declaración responsable permitirá, con carácter general, el ejercicio de la profesión desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección.

5.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato manifestación o documento que se acompañe e incorpore a una declaración responsable, o su no presentación, determinará,

previa la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, la imposibilidad de continuar el ejercicio de la profesión desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

6.- El acceso, intercambio e intercomunicación de los datos de carácter personal reflejados en las declaraciones responsables se realizará, en todo caso, de conformidad con lo establecido en la normativa específica en materia de protección de datos de carácter personal.

7.- La declaración responsable no será exigible a las y los profesionales cuando ejerzan exclusivamente la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física vinculados con la Administración Pública mediante una relación de servicios regulada por el derecho administrativo o laboral, sin perjuicio del deber de la Administración Pública de remitir al Registro la información establecida en este artículo en los términos que se determinen reglamentariamente

Artículo 11.- Deberes en el ejercicio profesional.

1.- En el ejercicio de las profesiones del deporte objeto de la presente Ley las y los profesionales deberán:

- a) Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades personales de las personas destinatarias de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos de cada momento, con los niveles de calidad y seguridad que se establezca en la normativa vigente y contemplando las diferencias por razón de género.
- b) Velar por la salud y seguridad de las personas destinatarias de sus servicios y colaborar activamente en la erradicación de prácticas atentatorias a la salud de las y los deportistas.
- c) Desarrollar su actuación profesional con presencia física en la realización de las actividades deportivas salvo en los supuestos previstos en esta Ley.
- d) Colaborar de forma activa en la realización de cualesquiera controles de dopaje y en el cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones previstas en la legislación antidopaje.
- e) Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas destinatarias de sus servicios.

- f) Ofrecer a los destinatarios de los servicios una información suficiente y comprensible de las actividades físico-deportivas que vayan a desarrollarse bajo su dirección.
- g) Identificarse ante los destinatarios de los servicios e informar a los mismos sobre su profesión y cualificación profesional.
- h) Desarrollar la praxis profesional bajo el principio de que el deporte puede contribuir al desarrollo completo y armónico del ser humano y de que el deporte hace posible su formación integral, favoreciendo la consecución de una mejor calidad de vida y de un mayor bienestar social.
- i) Promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el deporte y su incorporación a la práctica deportiva a todos los niveles, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza.
- j) Proyectar la actividad deportiva como opción del tiempo libre y como hábito de salud.
- k) Procurar una constante actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos.
- l) Colaborar de forma activa en el debido control médico de los deportistas a través de los correspondientes profesionales sanitarios.
- m) Colaborar de forma activa con cualesquiera otros profesionales que puedan ayudar al deportista a su mejor rendimiento o a la mejora de su salud.
- n) Desarrollar su actuación profesional fomentando una práctica deportiva exenta de cualquier tipo de violencia, de racismo, de intolerancia o de xenofobia.
- o) Desarrollar su actuación profesional protegiendo a los deportistas, especialmente los menores, de toda explotación abusiva, con especial atención al acoso o abuso sexual.
- p) Procurar una utilización de material deportivo que no cause daño al medio natural y que garantice la superación de estereotipos de género.
- q) Garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos normativamente reconocidos a los destinatarios de los servicios vinculados a su ejercicio profesional.

2.- El incumplimiento de los citados principios y deberes dará lugar, en su caso, a la exigencia de las correspondientes responsabilidades administrativas y disciplinarias.

Artículo 12.- Ejercicio a través de sociedades profesionales.

1.- El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente Ley podrá realizarse a través de sociedades profesionales salvo en los supuestos de acceso al empleo público o en aquellos supuestos no admitidos en la legislación en materia educativa.

2.- Las sociedades profesionales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la presencia física de las personas cualificadas correspondientes en el ejercicio de las profesiones del deporte, salvo en los supuestos previstos en esta Ley.

Artículo 13.- Aseguramiento de la responsabilidad civil.

1.- El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente Ley precisa la previa suscripción del oportuno seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que se causen a terceros con ocasión de la prestación de los servicios profesionales.

2.- A los y las profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una administración pública no les resulta exigible tal obligación. Este seguro tampoco es obligatorio en el caso de que la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de terceros.

3.- En las disposiciones de desarrollo de la presente Ley se determinarán las condiciones esenciales del aseguramiento.

Artículo 14.- Otros requisitos.

1.- Los requisitos de cualificaciones para el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte que se establecen en la presente Ley se entienden sin perjuicio de cualesquiera licencias, autorizaciones, títulos o requisitos adicionales exigibles con arreglo a la legislación vigente.

2.- No podrá ser exigible una licencia federativa para el ejercicio de una profesión del deporte si la actividad profesional se desarrolla al margen de las competiciones federadas.

3.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva autorizará, mediante la aprobación de la correspondiente reglamentación de las federaciones vascas, que las federaciones

deportivas exijan, además de las cualificaciones previstas en esta Ley, formaciones específicas siempre que no encubran un trato discriminatorio respecto a las formaciones obtenidas en centros no federativos.

Artículo 15.- Competencia en primeros auxilios.

1.- Todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en esta Ley con presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas, incluidos las y los voluntarios, deberán acreditar la formación en primeros auxilios.

2.- El Departamento competente en materia deportiva establecerá reglamentariamente las condiciones y el procedimiento de acreditación de la formación referida.

Artículo 16.- Ejercicio de las profesiones sin amparo en la Ley.

El ejercicio de las profesiones que no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley y, particularmente, a la obligación de contar con la cualificación profesional correspondiente dará lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable.

Artículo 17.- Marco normativo común. Libre competencia.

1.- Las profesiones reguladas en la presente Ley quedarán sujetas, en lo no establecido en la misma, por el marco normativo común sobre ejercicio de profesiones.

2.- El acceso y el ejercicio de las profesiones reguladas en la presente Ley y la intervención del colegio profesional que, en su caso, agrupe a las mismas estarán sujetos a la legislación sobre Defensa de la Competencia y sobre Competencia Desleal.

3.- Las federaciones deportivas deberán respetar los requisitos de cualificación previstos en la presente Ley, quedando prohibida cualquier discriminación de las formaciones obtenidas en centros no federativos.

Artículo 18.- Reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados.

1.- El reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en estados miembros de la Unión Europea, o en estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios de los y las profesionales, se ajustará a lo que establezcan los convenios internacionales y las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento, así como en las disposiciones estatales de transposición de dicho ordenamiento.

2.- El reconocimiento para el ejercicio profesional de las cualificaciones profesionales obtenidas en los restantes estados no citados en el apartado anterior se realizará con arreglo a los convenios y Leyes que en cada caso resulten aplicables.

Artículo 19.- Protección de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

1.- El Gobierno Vasco garantizará, en el ejercicio de sus competencias, la salud y la seguridad de las y los consumidores y usuarios pudiendo establecer los oportunos sistemas de autorización, declaración responsable, comunicación, evaluación, acreditación e inspección con relación a la exigencia de cualificaciones para el ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en esta Ley.

2.- La publicidad realizada por las personas físicas y por las entidades que oferten productos y servicios correspondientes a las profesiones reguladas en el ámbito del deporte deberá ser veraz y no podrá fomentar prácticas deportivas perjudiciales para la salud y seguridad de las personas usuarias y consumidoras.

3.- Las y los titulares de los centros deportivos, gimnasios y cualesquiera otras instalaciones deportivas en las que se presten servicios deportivos serán responsables de ofrecer información clara y visible a usuarios y usuarias sobre la cualificación profesional que posean las y los profesionales deportivos.

4- Con el fin de garantizar el cumplimiento de la cualificación mínima de las y los profesionales que se encuentran dentro del ámbito de esta Ley, todos los contratos de prestación de servicios con dichos y dichas profesionales se formalizarán por escrito y recogerán con claridad la acreditación de su cualificación.

5- Las funciones de inspección controlando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley corresponderán, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, a la Inspección Deportiva.

Artículo 20.- Ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información y la comunicación.-

1.- Las funciones atribuidas en esta Ley a las y los monitores y entrenadores podrán desarrollarse, con las excepciones previstas en la misma, mediante plataformas virtuales y las tecnologías de la información y la comunicación, pero aquellos deberán ostentar la cualificación prevista en esta Ley cuando aquellos monitores y entrenadores ejerzan las profesiones de forma habitual en el País Vasco.

2.- Las páginas Web, aplicaciones y demás tecnologías de la información y la comunicación de carácter análogo que incluyan planes de entrenamiento *on line* e información de contenido técnico-deportivo similar deberán identificar adecuadamente a las y los profesionales que elaboran tales planes e informar sobre su cualificación profesional.

3.- La utilización de tales plataformas o tecnologías por los centros o entidades deportivas radicados en el País Vasco para la elaboración de planes de entrenamiento o la realización de clases o sesiones colectivas con sus usuarios deberá contar con la supervisión de un profesional del deporte que ostente la cualificación profesional que corresponda con arreglo a la Ley.

4.- La Administración velará, a través de los servicios de inspección, por la salud y la seguridad de las personas usuarias de aquellas plataformas y tecnologías en centros deportivos radicados en el País Vasco.

5.- Se garantizará el uso del euskera en las páginas Web, aplicaciones y demás tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por centros o entidades deportivas radicados en el País Vasco.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Mecanismos de colaboración con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas

El Gobierno Vasco promoverá mecanismos de colaboración con otras administraciones públicas, con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas análogas del País Vasco para que en el ejercicio de las profesiones del deporte objeto de la presente regulación se fomenten prácticas deportivas saludables, seguras y de calidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Políticas de igualdad y de normalización del uso del euskera en las profesiones del deporte

El Gobierno Vasco, en colaboración con otras administraciones públicas, con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas análogas, promoverá la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso y ejercicio a las profesiones reguladas en esta Ley, así como la normalización del uso del euskera en el ámbito de ejercicio de las profesiones del deporte objeto de la presente regulación, especialmente en los ámbitos de la infancia y la juventud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas

1.- Los requisitos de cualificación del voluntariado para la participación en sus actividades deportivas serán, como regla general, idénticos a los establecidos para las y los profesionales en la presente Ley al objeto de garantizar la salud y seguridad de las personas participantes.

2.- No obstante lo anterior, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, previa solicitud razonada, podrá dispensar a colectivos específicos de voluntarios de la exigencia de cualificación prevista en esta Ley y admitir una cualificación diferente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Acreditación de cualificaciones para el acceso y ejercicio de las profesiones

1.- El acceso y ejercicio de las profesiones puede realizarse a través de las cualificaciones acreditadas mediante los títulos académicos y certificados determinados en esta Ley. Los departamentos del Gobierno Vasco competentes determinarán los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes a los citados títulos y certificados.

2.- El Gobierno Vasco garantizará que las acciones formativas se puedan cursar en euskera y castellano.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.- Formación específica.

1.- La formación específica exigida a lo largo del texto articulado deberá acreditarse, en principio, mediante títulos, certificaciones o formaciones de carácter oficial, incluidos el título de master universitario y el certificado de profesionalidad.

2.- También se podrán reconocer formaciones oficiales incompletas que se correspondan con una parte de un título o una certificación oficial.

3.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá especificar en determinados supuestos el nivel de formación específica.

4.- Sólo en los supuestos de inexistencia o insuficiencia de ofertas formativas oficiales podrá el Departamento competente en materia deportiva promover y/o reconocer formaciones, títulos o certificaciones no oficiales que cumplan unos requisitos mínimos de calidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.- Niveles de las actividades.

1.- A los efectos de la presente Ley se considerarán actividades de iniciación deportiva o de nivel básico a aquellas actividades en la que las y los practicantes y deportistas se encuentran en las primeras fases de aprendizaje de las correspondientes actividades, independientemente de su edad.

2.- A los efectos de la presente Ley se considerarán actividades de perfeccionamiento técnico o de nivel medio a aquellas actividades en la que las y los deportistas se encuentran en la etapa de perfeccionamiento técnico en una fase en la que poseen un dominio de la actividad correspondiente, independientemente de su edad.

3.- A los efectos de la presente Ley se considerarán competiciones deportivas de alto rendimiento aquellas competiciones absolutas de ámbito internacional incluidas en los calendarios deportivos oficiales que estén autorizadas, supervisadas o arbitradas por la federación deportiva internacional competente o la liga profesional internacional que corresponda, aquellas competiciones de ámbito estatal de la máxima categoría absoluta, tengan carácter profesional o no y aquellas otras que pueda determinar el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.

4.- En las competiciones deportivas de alto rendimiento que tengan carácter abierto o mixto, la cualificación profesional se exigirá sólo a las y los entrenadores de aquellas y aquellos deportistas cuyo nivel es propio de aquellas competiciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Formación en actividades con deportistas en edad escolar.

1.- En el supuesto de inexistencia o insuficiencia de títulos oficiales o certificaciones de profesionalidad de carácter específico para las y los monitores y entrenadores en actividades polideportivas con deportistas en edad escolar, los Departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia deportiva y en materia de cualificaciones promoverán conjuntamente acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen sus funciones con deportistas en edad escolar.

2.- Las actividades formativas ofertadas deberán permitir la oferta modular, cuya superación dará lugar a la obtención de las correspondientes certificaciones acreditativas.

3.- Las personas que acrediten la superación de estas formaciones quedarán habilitadas para ejercer de monitor o monitora y de entrenador o entrenadora en actividades de deporte escolar de carácter multideportivo. Asimismo, podrán ejercer en actividades de deporte escolar de iniciación deportiva o nivel básico orientadas a una única modalidad, siempre y cuando la actividad formativa haya contado con módulos específicos de la correspondiente disciplina.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.- Formaciones en modalidades deportivas no reconocidas por el Estado y formaciones en modalidades deportivas sin plan formativo aprobado por el Estado.

1.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva promoverá y certificará oficialmente acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen su actividad profesional en modalidades y disciplinas deportivas no reconocidas por el Estado.

2.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva promoverá y certificará oficialmente acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen su actividad profesional en modalidades y especialidades deportivas y niveles formativos sin plan formativo aprobado por el Estado.

3.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva garantizará que las acciones formativas se puedan cursar en euskera y castellano.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.- Contratos para la formación y aprendizaje o formación dual.

1.- Las cualificaciones profesionales previstas en esta Ley para el acceso y ejercicio profesional no serán exigibles para las y los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje o de la formación dual siempre que esa formación sea propia del ámbito del deporte.

2.- Las y los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje deberán inscribirse en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.- Cualificaciones equivalentes a las titulaciones de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva Superior.

1.- Las referencias a las titulaciones académicas de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior establecidas en la presente Ley son extensibles a aquellas titulaciones derivadas de las siguientes formaciones:

- a) Las formaciones deportivas de periodo transitorio.
- b) En modalidades o especialidades con título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y/o Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior, las formaciones federativas previas con posibilidad de reconocimiento, según la legislación vigente.
- c) En modalidades o especialidades sin título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y/o Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior, formaciones federativas previas con posibilidad de acceso a las formaciones deportivas de periodo transitorio o de reconocimiento posterior.

2.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deporte podrá habilitar un plazo para que las personas con alguna de las formaciones anteriormente mencionadas tengan que obtener el reconocimiento de equivalencia profesional con el correspondiente título de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA.- Potestad sancionadora.

El ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones de la presente Ley corresponderá al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Ejercicio profesional sin la cualificación requerida en la Ley.

1.- En tanto no se implanten los procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las correspondientes competencias de las y los profesionales del deporte adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, quedarán habilitados para el

desarrollo de las correspondientes profesiones quienes acrediten, en los términos que reglamentariamente se establezcan, que a la entrada en vigor de la Ley desarrollaban las actividades profesionales reguladas de forma continuada o no esporádica. En cualquier caso, la habilitación se ceñirá a la tarea o nivel que ya desarrollaba, en la misma o en otra entidad, pero no será operativa en aquellas federaciones deportivas que exijan reglamentariamente la posesión de la correspondiente cualificación para ejercer la actividad de entrenador.

2.- También quedarán habilitadas para desarrollar su actividad como monitoras o monitores y entrenadores o entrenadoras en actividades polideportivas de deporte escolar las personas que hayan superado las acciones formativas ofertadas por las diputaciones forales en materia de deporte escolar antes de la entrada en vigor de la Ley.

3.- Los Departamentos del Gobierno Vasco competentes implantarán los procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las correspondientes competencias de las y los profesionales del deporte adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Las personas que se encuentren en la situación mencionada en el apartado primero y segundo quedarán obligadas a obtener tal acreditación en el plazo que se fije reglamentariamente.

4.- Sin perjuicio de la habilitación establecida en el apartado primero, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá dejar sin efecto la habilitación para el ejercicio profesional a personas cuando, en atención a las características de la actividad desarrollada, dicho ejercicio profesional sin cualificación ponga en riesgo grave y directo la salud y seguridad de las personas. A tal efecto, el Departamento citado elaborará una relación de las actividades profesionales que se encuentren en tal situación.

5.- Provisionalmente, y en tanto la correspondiente federación internacional o española permitan desarrollar las funciones de entrenador o entrenadora en las competiciones deportivas de alto rendimiento establecidas en la disposición adicional novena sin la cualificación requerida en la presente ley, quedarán habilitados automáticamente quienes se encuentren en posesión de la máxima titulación exigida por la correspondiente federación española o internacional. El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá dejar sin efecto la presente habilitación en ciertas modalidades o disciplinas deportivas.

6.- El incumplimiento del deber de acreditar la cualificación profesional en el plazo que se fije reglamentariamente podrá ser considerado causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52, apartado a, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

7.- En todo caso, dichos profesionales habilitados deberán inscribirse en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco en una sección específica para habilitados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Aplicación progresiva de la Ley para las profesiones de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, Entrenador o Entrenadora y Director Deportivo o Directora Deportiva.

1.- En todos aquellos ámbitos materiales propios del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, del Entrenador o Entrenadora y del Director Deportivo o Directora Deportiva en los que el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, en el ámbito exclusivo de su competencia, verifique la falta de profesionales con las cualificaciones previstas en esta Ley para atender adecuadamente la demanda existente, la ausencia de formación oficial o la existencia de nuevos ámbitos deportivos, se habilitará provisionalmente a aquellas personas que acrediten la posesión de una cualificación inferior u otro tipo de formación análoga.

2.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva establecerá las condiciones y términos de dicha aplicación progresiva y de las habilitaciones profesionales contempladas en el apartado anterior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Obligación de colegiación.

La prohibición de ejercicio de la profesión del deporte sin la colegiación obligatoria prevista, en su caso, en la legislación estatal correspondiente, sólo será exigible a partir del momento en que la correspondiente profesión disponga de su organización colegial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Incumplimiento del deber de obtener la cualificación en primeros auxilios.

1.- Las y los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta Ley, no cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente Ley podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el 31 de diciembre de 2020.

2.- El incumplimiento del deber de obtener tal formación en el citado plazo, podrá ser considerado causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52, apartado a, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

3.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de otras responsabilidades que se puedan depurar por el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- Voluntariado.

Las habilitaciones provisionales y reconocimientos de las competencias, previstas para las y los profesionales del deporte en las disposiciones transitorias primera y segunda también serán de aplicación a las personas que realicen las actividades profesionales contempladas en esta Ley en régimen de voluntariado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- Reglamentaciones federativas.

Las federaciones deportivas vascas deberán adaptar la reglamentación federativa a esta Ley o, en su caso, aprobar las disposiciones correspondientes y remitirlas al Registro de Entidades Deportivas del País Vasco para su aprobación e inscripción antes del 1 de enero de 2020.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, así como todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Modificación del artículo 127 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Se añade la letra k) al artículo 127 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, sobre infracciones administrativas muy graves con el siguiente texto:

«k) La prestación de servicios profesionales sin la posesión de la cualificación profesional exigida en la legislación reguladora de las profesiones del deporte o la contratación de profesionales sin la cualificación profesional preceptiva por no exigir la misma»

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Modificación del artículo 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Se añaden las letras h) e i) al artículo 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, sobre infracciones administrativas graves con el siguiente texto:

« h) El incumplimiento de la obligación, en su caso, de colegiación o de inscripción en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, así como el incumplimiento de la obligación de disponer del seguro de responsabilidad civil establecido en la legislación deportiva o del ejercicio de las profesiones del deporte.

i) El incumplimiento de la obligación de reserva de denominaciones de las profesiones del deporte.

j) El incumplimiento de los deberes profesionales contenidos en la legislación sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco cuando de ello resulte un perjuicio o riesgo grave para la salud y la seguridad de las personas.

k) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco en materia de información y publicidad.

l) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco en materia de ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información y la comunicación.

m) La prestación de servicios en régimen de voluntariado sin la posesión de la cualificación profesional exigida en la citada Ley o la incorporación de tales voluntarios sin la exigencia de la cualificación correspondiente»

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Habilitación general para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Corresponde al Gobierno Vasco dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley, salvo aquellos supuestos en los que se habilita expresamente al titular del Departamento competente en materia de deportes.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- Habilitación expresa para la definición de conceptos y para la delimitación de las atribuciones y ámbitos materiales de las profesiones

Corresponde al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva definir con precisión los diferentes conceptos empleados en la presente Ley y las atribuciones y ámbitos materiales de las correspondientes profesiones.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.- Habilitación expresa para el procedimiento de reconocimiento de la formación específica.

Corresponde al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva determinar el procedimiento de reconocimiento de la formación específica a la que se refiere la Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.- Entrada en vigor.

1.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.- No obstante lo anterior, las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas en la presente Ley serán exigibles a partir del día 1 de enero de 2021. La exigencia de cualificaciones profesionales a las y los voluntarios se realizará a partir del día 1 de enero de 2022.



III

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

LEGE-PROIEKTUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA.

ZIOEN AZALPENA

Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluaaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren arloko eskumen eskusiboa du. Era berean, 10.22 artikuluaaren arabera, eskumen eskusiboa du profesionalen elkargoen arloan eta tituludun lanbideetan jardutearen arloan, hargatik eragotzi gabe Konstituzioko 36. eta 139. artikuluek xedatutakoa.

Eusko Legebiltzarrak, kirol-arloko eskumena betez, ekainaren 11ko 14/1998 Legea onartu zuen, Euskadiko kirolarena. Lege horrek 62. artikuluan ezartzen zuen ezen agintari publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, titulu ofizialak eskatuko dituztela kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak eskaintzeko, hots, irakaskuntza-zuzendaritza-, kudeaketa-, entrenamendu- eta animazio-zerbitzuak eta bestelakoak eskaintzeko. Hau da, Kirolaren Legeak ez zuen zehaztu zer titulazio eskatu lanbide-jarduera horietarako; ondorioz, eskakizun hori arautu beharra zegoen.

Beste alde batetik, Eusko Legebiltzarrak azaroaren 21eko 18/1997 Legea ere onartu zuen, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa. Lege hori bitan banatuta dago: alde batetik, lanbide-jardunari buruzko zenbait alderdi orokor arautzen ditu, eta, bestetik, elkargoen jarduera, elkargoetan bilduta dauden lanbideei dagokiena. Lehenengo zatia dagokionez, araudi-esparru bakarra ezartzen du lanbide-jarduera guztietarako; baina araudi hori, zioen azalpenean argi eta garbi adierazten denez, osatu egin behar da lanbide bakoitzaren jardunari dagokion araudi zehatzarekin. Hau da, batera datoz lanbide-jardunari buruzko araudi komuna eta araudi sektoriala.

Kirol-jarduna alderdi biologiko eta kulturalen nahasketa bat izan da betidanik, eta garai jakin batetik aurrera, garrantzia hartzen joan da gizarte postindustrialetan, agerikoa baita mesedegarria dela pertsonen osasunerako. Euskal gizartearen ere ez dago egoera horretatik kanpo. Eta, ikuspegi horretatik, herrialde garatuen eta gorabidean diren herrialdeen politika publikoen agendan sartu da kirola, osasun-iturri gisa, betiere ahaztu gabe kirola lagungarri dela balioetan oinarritutako prestakuntzarako eta hezkuntzarako, jarduera ekonomikorako, turismorako eta aisia arduratsurako. Horrek guztiak interes publikodun zeharkako eremu bat bilakatzen du kirola bere osotasunean, eta

daukan izaera dinamikoak ezinbesteko egiten du ordenamendu juridikoa indarrean dauden eskakizunetara etengabe egokitzea.

Testuinguru horretan kokatzen da lege hau, eta zioen azalpen honetan aipatzekoa da aurrekari bi dituela beste erkidego batzuetan. Kataluniako Parlamentuak aho batez onartu zuen apirilaren 23ko 3/2008 Legea, Kirol-arloko lanbideetan jarduteari buruzkoa. Lege hori onartzeko arrazoia izan zen, hain zuzen ere, kirol-jarduerak nabarmen eragiten duela kirola egiten duten pertsonen osasunean eta segurtasunean. Extremadurako Biltzarrak ere arrazoi berbera baliatu zuen 15/2015 Legea onartzeko (15/2015 Legea, apirilaren 16koa, kirol-arloko lanbide-jarduna antolatzen duena Extremaduran).

Kirolarien osasun eta segurtasunarekin zuzenean lotuta dauden kirol-jardueretan gutxieneko prestakuntzarik gabe lanbidean jardutearen problematika antzekoa da autonomia erkidego batean eta bestean. Izan ere, ezin uka daiteke kirol-arloko lanbide batzuk kirolarien osasunean eta segurtasunean eragiten dutela. Hori dela eta, nahitaezkoa da arautzea nola sartu eta jardun lanbide horietan; izan ere, eremu horretan, prestakuntza egokirik gabeko profesionalek bete izan dituzte lanbide-jarduera horiek.

Kirolaren Euskal Planak (2003-2007) berak ere salatu zuenez, pertzepzio orokorra da ez dagoela lanbide-araudirik, eta horrek ekarri duela, batetik, prestakuntzarik gabeko pertsonak sartzeari merkatuan, eta, bestetik, behar baino kualifikazio gutxiagoko jendea ibiltzea lanbide horietan. Hori dela eta, plan horren lehentasunezko helburuetako bat zen arautzea zein diren lanbide horietan jarduteko behar diren gutxieneko titulazioak, kontuan izanik, planak berak onartzen duenez, zelan eragiten duen kirola egiteak kirola egiten dutenen osasunean eta segurtasunean.

Ezin uka daiteke herritarrentzat, oro har, oso onuragarria dela kirola egitea, ondo egiten bada; baina, kirola egitea oso kaltegarria ere izan daiteke, baldin eta izan beharreko prestakuntza ez duten pertsonak zuzenduta edo gainbegiratuta egiten bada.

Kirol-arloko lanbideetan jarduteko modua arautzeko premiari dagokionez, zioen azalpen honetan nabarmendu behar da Konstituzio Auzitegiak hau azaldu zuela urriaren 1eko 194/1998 Epaian: *"Konstituzioak berak agindua ematen die agintari publikoei gorpuz-*

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

hezkuntza eta kirola susta dezaten (Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua). Jarduera horiek oso lotuta azaltzen dira EKko 43. artikuluan aipatzen den osasunarekin; hain lotuta daude ezen, osasuna mantentzen lagundu ez ezik, haiei esker saihestu egin baitaiteke gorputz- eta kirol-jardueretako hainbat ariketa desegokik osasunean izan dezakeen eragin negatiboa; batez ere, zenbait kirol oso arriskutsu egitean. Jakina da, bestalde, jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta baloratuagoak direna; beraz, egoera horri erantzuteko, agintari publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionali".

Testu artikulatuan, kirol-arloko berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzakoak diren zenbait alderdi arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zein diren lanbide horiek; era berean, lanbide horietan jarduteko zer kualifikazio izan behar den zehazten da, eta lanbide bakoitzari dagokion eremu funtzional orokorra esleitzen zaio.

Lege honek Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen antzera ulertzen du kirolaren arloa; hau da, oso zentzu irekian ulertzen du, eta euskal kirolaren arloko adierazpen guztiak jasotzen ditu, baina haien kontzeptua mugatu barik, ez ofizialki onartutako kirol-modalitate eta -diziplinetara, ez lehiaketa hutsaren mundura. Kirolaren euskal sistemak, Kirolaren Euskal Planak adierazi zuenez, azpisistemak ditu, oso ezaugarri heterogeneoak dituztenak. Horregatik, legea ez da soilik mugatzen lehiaketaren eremura edo federatuen eremura; aitzitik, kirol-arloko polikromia osoa jaso nahi du, 1992ko Kirolaren Europako Gutunarekin bat etorritik, zeinak honela ulertzen baitu kirola: "edozein motatako jarduera fisikoa, helburu duena egoera fisiko edo psikikoa azalaraztea edo hobetzea, gizarte-harremanak garatzea edo maila guztietako lehiaketetan emaitza onak lortzea, parte-hartze antolatutak baten bidez edo beste mota bateko parte-hartzearen bidez".

Gizarte garatuetan (eta halaxe da euskal gizartearen), zeharkako jardute-eremu bat bilakatu behar du jada kirolak; hau da, kirola ez dute sail espezifiko batzuek bakarrik landu behar, gobernuaren ekintza osoak baizik. Izan ere, kirolak eragina du osasunean, hezkuntzan, lan-merkatuan, kontsumitzaile eta erabiltzaileengan, euskararen erabileran, ingurune naturalean eta abarretan.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

Lege honek arautzen dituen lanbideek hezkuntzaren eremua, aisiaren eremua, lehiaren eremua eta zuzendaritzaren eremua hartzen dute. Eredu horietan guztietan onartu da lanbideren bat.

Lege honek jasotzen dituen lanbideak «lanbide araututzat» baino ezin dira jo, Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2005/36/EE Zuzentarauaren arabera, zeina lanbide-kualifikazioak onartzeari buruzkoa baita. Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbidea, aldiz, bestelakoa da; izan ere, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera arautu eta ezarri ziren lanbide hori eta titulu hori. Konstituzio-jurisprudentziaren arabera, «tituludun lanbidea» da: lanbide bat, zeinean jarduteko goi-mailako titulu ofizialak eskatzen baitira, baldin eta, interes orokorreko arrazoiak direla eta, hala ezartzen badu lege-mailako arau estatalak. Aldiz, «lanbide arautua» da: lanbide-jarduera bat edo lanbide-jardueren multzo bat, zeinean sartzeko edo jarduteko beharrezkoa baita zuzenean edo zeharka lege-, arau- edo administrazio-xedapenen ondorioz arautzen diren lanbide-kualifikazioak edukitzea; era horretako lanbide-kualifikazioa eskatzen duten lanbide-modalitateak ere izan daitezke «lanbide arautuak».

Hori da lege honen giltzarrietako bat. Izan ere, kirol-arloko lanbideetan sartzeko edo jarduteko, ez da beharrezkoa goi-mailako hezkuntzako titulua izatea; bai, ordea, dagozkion lanbide-kualifikazioak egiaztatzea. Kualifikazio horiek, berriz, hainbat mailatako titulu akademikoen bidez egiaztatu ahal izango dira, baita beste titulu batzuen bidez ere (esaterako, profesionaltasun-ziurtagiriak), zeinek ofizialak izan beharko baitute une bakoitzean indarrean den ordenamenduaren arabera.

Legeak, hasteko, Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbideari buruzko hezkuntza-legeria osatzen du, zeina oraintsu aldatu baita araubide bereziko kirol-irakaskuntzen eremuari dagokionez, Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Legearen bidez (LOMCE). Izan ere, lanbide horrek, egun tituludun lanbidea izan arren eta tradizio handia izan arren, ez du aintzatespen egokirik izan gaurko egunera arte; horrez gain, zenbait gabezia ditu, lege honek konpondu nahi dituenak, ikasleen osasuna eta segurtasuna bermatze aldera. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen egitekoak duen garrantzia bermatu nahi du legeak, eta, horregatik, lehen laguntzak emateko gutxieneko prestakuntza bat izatea eskatzen du, hezkuntza-legeriaren kualifikazio-eskakizunak errespetatuta, eta abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren xedapen gehigarrietatik laugarrena aplikatuta.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

Euskal Autonomia Erkidegoan, garrantzi handia hartu du azken hamarkadetan osasunerako, aisia eta jolaserako, gizarteratzeko, hezkuntzarako eta antzeko xedeetarako egiten den kirolak; hori dela eta, eremu horretan, profesionalek jardun behar dute, ezbairik gabe. Era berean, gero eta interes handiagoa dago abentura-kirolak edo arrisku-kirolak egiteko edo natura-ingurunean kirola egiteko, eta ugaritu egin dira kirol-zentro publiko zein pribatuak. Horrek guztiak profesionalen eskaintza eta eskaera handia sortu du, eta ezinbestekoa da hori lehenbailehen arautzea. Horrenbestez, legeak Kirol Monitorearen lanbidea onartu eta arautzen du, zeinak tradizio itzela baitu kirolaren munduan.

Lehiaketazko kirolean, oso errealitate desberdinak daude, eta legeak ahaleginak egin ditu aniztasun hori kontuan hartzeko. Lehiaketazko kirolaren eremu horretan, dagokion modalitateko edo diziplinako Entrenatzaile lanbidea onartzen da. Lanbide horrek ahalmena ematen du, funtsean, lehiatu nahi duten kirolari eta taldeak zuzentzeko eta haien entrenamenduen plangintza egiteko.

Araudiak kirol-zuzendaritzako arloa ere jasotzen du; horrela, legeak Kirol Zuzendariaren lanbidea onartu du, profesional horrek, kirol-zientzien berezko jakintzak eta teknikak aplikatuz, kirol-zentroak eta -jarduerak zuzendu, programatu, planifikatu, koordinatu eta gainbegiratzearekin lotutako hainbat lanbide-jarduera egin ditzan. Baina, hainbat arrazoi direla medio, araudi horretatik kanpo utzi da kirol-instalazioen edo -erakundeen kudeatzailearen figura. Izan ere, garbi izan behar dugu lege honetan lanbide hauek bakarrik arautzen direla: jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien ezagutzak eta teknikak aplikatzea ezinbestekoa duten lanbideak. Baina instalazio edo erakunde baten kudeatzaileak izan behar dituen ezagutzak kudeaketaren edo administrazioaren arlokoak dira, eta, printzipioz, ez dute araudirik eta jarduera-erreserbarik behar, errespetatu egin behar baita kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko mugetan egon behar den proportzionaltasun-printzipioa.

Araugintzari ekitean, agintari publikoek printzipio hauek bete behar dituzte: premia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna, irisgarritasuna, hizkuntza-eskubideen bermea, sinpletasuna eta eraginkortasuna. Hori dela eta, premia- eta proportzionaltasun-printzipioak errespetatuz, legeak kirol-arloko lanbide jakin batzuk baino ez ditu arautzen, eta ez guztiak. Kirol-arloko

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

beste lanbide batzuk arautu gabe uztea erabaki da; esaterako, kirolarien epaileak edo kirolarien agenteak. Izan ere, zerbitzu horiek ematen dituzten lanbideek ez dute zuzenean eragiten ondasun juridikorik garrantzitsuenetan, hau da, ez dute eragiten zerbitzu profesional horien hirugarren hartzaileen osasunean eta segurtasunean.

Era berean, lanbidean jarduteko modua arautzen den heinean, araudi honen aplikazio-eremutik kanpo geratu dira kirol-boluntarioek egiten dituzten kirol-jarduera teknikoak; hau da, profesionalak ez diren kirol-jarduerak. Hala eta guztiz ere, legegileak, boluntarioek entrenatzaileen eremuan duten zeregin garrantzitsuaz jabeturik, neurri batzuk jasotzen ditu kirolarien osasuna eta segurtasuna bermatzeko.

Horregatik, araugintza-ekimen honetan, nahikoa justifikatzen da zelan egokitzen den jarduera printzipio horietara, eta batez ere premia-printzipioa aipatu behar da; izan ere, interes orokorreko arrazoi bat dago lege hau emateko: herritarren osasuna eta segurtasuna babestea. Era berean, testu artikulatuak, proportzionaltasun-printzipioa betez, horren murriztaileak eta distortsionatzaileak ez diren neurriak jartzera jo du, emaitza bera lortzeko.

Lege-testuak, bestalde, kirol-arloko lanbideak betetzeko jarduketa-printzipio eta -betebeharren katalogo bat jaso du. Printzipio eta betebehar horiek, oro har, berezkoak eta berariazkoak dira lanbide horietan; gainerako guztirako, lanbide-jardunerako esparru komunera jo behar da.

Arreta berezia jarri da lan-eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko gaiaren inguruan, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako edukiak betetzeko (3/2007 Lege organikoa, Gizonen eta Emakumeen Berdintasun Eraginkorrerakoa, eta 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa). Hori dela eta, besteak beste, testuak sustatzen du tratu- eta aukera-berdintasunerako politikak bideratu behar direla lege honetan araututako lanbideetan sartzeko eta jarduteko, eta lanbidean aurrera egiteko; era berean, elkargoetan ere politika berberak bideratzea sustatzen du.

Bestalde, Autonomia Estatutuaren 6. artikulua ezartzen duen euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunarekin bat eta Euskararen

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legean xedatutakoari jarraituz, herritarrek aukeratzen duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidearen bermea bultzatuko da.

Zioen azalpen honetan, jasota geratu behar da lege hau Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/123/EE Zuzentaraura egokitu dela (2006/123/EE Zuzentzura, 2006ko abenduaren 12koa, Barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa). Horretarako, batetik, oztopoak kendu dira, hots, Batasuneko estatu kideetan profesionalak kokatzeko askatasuna eta zerbitzuen zirkulazio librea eragozten duten oztopoak kendu dira; eta, bestetik, bai zirkuitu profesionalen hartzaileei, bai zerbitzu-emaleei eurei ere, segurtasun juridiko nahikoa bermatzen zaie Europar Batasuna eratzen duen Ituneko oinarrizko askatasunak eraginkortasunez baliatzeko. Era berean, kontuan izan da zer legeria dagoen estatuan zerbitzuei eta lanbide-elkargoei buruz eta merkatu batasuna bermatzeari buruz.

Lege honek arreta berezia jartzen du Zuzenbide Iragankorrean. Lege-aldaketa guztiek trantsizio-arazo handiak eragiten dituzte, eta are gehiago lanbide baten lehenengoz sartzeko eta jarduteko diziplina jartzen duten legeek. Hori dela eta, Zuzenbide Iragankorrera jo da arazo hori ebazteko. Horrela, legeak errespetu handiz jokatzeko du berau indarrean jartzen denean lege honen bidez arautuko diren lanbideetan legeak eskatutako kualifikaziorik gabe jarduten ari direnen eskubideekin. Era berean, mekanismoak aurreikusi dira lege hau apurka-apurka eta modu ez traumatiko batean ezartzeko. Eta aurreikusi da, halaber, zer egoeratan faltako diren tituludun profesionalak kirol-zerbitzuak ematen dituzten erakundeen eskariari aurre egiteko.

Lege honek, zioen azalpen honen hasieran adierazitako eskumenez gain, beste eskumen-titulu batzuk ere garatzen ditu, maila apalago batean, Euskadiren eskumenak diren aldetik; besteak beste, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsa (10.28 artikulua) edo hezkuntza (16. artikulua).

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

1. artikulua.- Xedea eta aplikazio-eremua.

1.- Lege honen xedea da kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko oinarrizko alderdiak antolatzea. Berariaz adieraziko da zein diren lanbide horiek, lanbide bakoitzaren jardun-eremu funtzional orokorra ezarriko da, eta aditzera emango da lanbide horietan sartzeko zer kualifikazio eskatzen den.

2.- Lege hau EAEko ohiko lanbide-sarbide eta -jardunari bakarrik aplikatuko zaio, betiere hargatik eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoak edo Estatuak, hala badagokio, zerbitzu eta elkargo profesionalen arloan onartzen duen legeria.

3.- Plataforma birtualen bidez edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez egiten den lanbide-jarduna EAEren eremukoa izango da, baldin eta bi baldintza hauek betetzen badira: zerbitzu horiek ematen dituzten pertsona fisiko edo juridikoen egoitza edo helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan badago, eta, horretaz gain, bertako kontsumitzaile edo erabiltzaileek eskuragarri badituzte zerbitzu profesional horiek.

4.- Lege honek arautzen du nola sartu eta jardun lanbide horietan norbere kontura edo inoren kontura. Halaber, legea aplikatuko da, hala sektore publikoan betetzen denean lanbidea, nola pribatuan betetzen denean; berdin izango da zerbitzu profesionalak zein erakundetan ematen diren, hau da, erakunde publiko edo pribatuetan ematen diren, edo irabazi-asmoa duten erakundeetan edo irabazi-asmorik gabekoetan ematen diren. Sektore publikoan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko egiten den aipamena, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Foru eta Toki Administrazioko sektore publikora mugatu behar dela ulertu behar da, bai lanpostuetara sartzeari dagokionez, bai zerbitzu profesionalak kontratatzeari dagokionez.

5.- Lege honen ondorioetarako, lanbidean jardutea da lege honetan arautzen diren kirol-lanbideen berezko zerbitzuak ematea, lansari baten truke. Lege honetatik kanpo geratzen dira boluntarioen, adiskideen, familiakoen eta antzekoen arteko harremanen esparruan gauzatzen diren jarduerak.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

6.- Lege honen ondorioetarako, boluntariotzat jotzen dira kirol-monitore, -entrenatzaile eta -zuzendariek Boluntarioei buruzko ekainaren 15eko 17/1998 Legearen eremuan egiten dituzten jarduerak, edo, hala badagokio, hura ordezkatzeko duen xedapenaren eremuan egiten dituztenak.

7.- Lege honen eremutik kanpo geratzen dira lanbide-jarduera hauek:

- a) Urpekaritza profesionalarekin lotutako jarduerak.
- b) Salbamendu eta laguntzako lanbide-jarduerak, kirol-arlokoak ez direnak.
- c) Parakaidismoko lanbide-jarduerak, kirol-arlokoak ez direnak.
- d) Ibilgailu edo tresna motordunak gidatzean oinarritzen diren lanbide-jarduerak, kirol-arlokoak ez direnak.
- e) Laketontziak maneiatzeko edo gobernatzeko lanbide-jarduerak, kirol-arlokoak ez direnak.
- f) Kirol-instalazio edo -erakundeetako kudeatzaileen lanbide-jarduerak.
- g) Prestakuntza fisikoko lanbide-jarduerak, Indar Armatuak Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten zentroetan burutzen direnak.
- h) Bide-teknikariei dagozkien lanbide-jarduerak.
- i) Dantza-jarduerak, kirol-arlokoak ez direnak.

8.- Lege honen ondorioetarako, honako hau sartzen da kirol terminoaren barruan: edozein motatako jarduera fisikoa, helburu duena egoera fisiko edo psikikoa azalaraztea edo hobetzea, gizarte-harremanak garatzea edo maila guztietako lehiaketetan emaitza onak lortzea, parte-hartze antolatu baten bidez edo beste mota bateko parte-hartzearen bidez. Termino horren barruan, gorputz- eta kirol-ekintza guztiak sartzen dira, hots, kirol federatuaren, eskola-kirolaren, unibertsitate-kirolaren, guztiontzako kirolaren, aisialdiko kirolaren edo bestelako egituradun kirolaren barruan egiten direnak, zeinahi delarik ere horien xedea: gorputz-hezkuntza, lehiaketa, hastapena, ikaskuntza, errendimendua, osasuna, jolasa, aisia edo antzekoren bat.

9.- Lanbideetan sartzeko eta jarduteko eskatzen diren lanbide-kualifikazioei buruz lege honek ezartzen duenak, berriz, ez dio kalterik eragingo Merkatu-batasuna bermatzeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legeak ezarritakoari.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

2. artikulua.- Kirol-arloko berezko lanbideak, eremu funtzional orokorra eta kualifikazioak.

1.- Lege honen ondorioetarako, kirol-arloko berezko lanbidea da kirol-arloan berariaz azaltzen dena eta jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien arloko jakintza eta teknikak aplikatzea eskatzen duena.

2.- Lege honen ondorioetarako, lanbide hauek jotzen dira kirol-arloko berezko lanbidetzat:

- a) Gorputz Hezkuntzako Irakaslea.
- b) Kirol Monitorea.
- c) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Entrenatzailea.
- d) Kirol Zuzendaria.

3.- Lanbide bakoitzaren eremu funtzional orokorra ezartzen dute lege honetan lanbide horietarako jasotzen diren eskumenen zerrendek; horien helburua ez da mugak jartzea, adierazpen -mailakoak baitira. Lege honetan bildutako lanbideen eskumenen barruan sartzen da irizpenak, ikerlanak, txostenak, aditu-txostenak eta antzekoak egitea, betiere profesionalek lanbidera sartzeko dauzkaten kualifikazioen barruan badaude gaitasun horiek edo egiaztatzen badute gaitasun horiek beste bide batzuetatik eskuratu dituztela.

4.- Lege honetan araututako lanbideekin lotutako eskumenek, bestalde, ez dute aipatutako kualifikazioek egiaztatzen dituzten titulazioen lanbide-eremua mugatuko.

5.- Lanbide-kualifikazioa, lege honen ondorioetarako, lanbide jakin batean sartzeko edo jarduteko bidea da, ofizialki egiaztatzen dena prestakuntza-titulu baten bidez, gaitasun-ziurtagiri baten bidez edo formalki onartutako lan-esperientzia baten bidez, edo inguruabar horietariko bat baino gehiago bilduz. Lege honetan arautzen diren lanbideetan jarduteko beharrezkoak diren kualifikazioak honako hauen bidez egiaztatu ahal izango dira: hurrengo artikuluetan adierazten diren titulu akademikoen bidez, lanbide-mailako agiri baliokideen bidez edo une bakoitzean indarrean den ordenamenduan ofizialtzat jotzen diren beste titulu edo ziurtagiri ofizial batzuen bidez.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

6.- Lege honen arabera, honako hauek izango dira titulu edo ziurtagiri ofizialak: Hezkuntza Administrazioak hezkuntza-arloko legeen bidez araututako ikasketetan ematen dituen titulu eta ziurtagiriak, Lan Administrazioak lanbide-kualifikazioei buruzko legeen esparruan ematen dituenak eta Kirol Administrazioak kirol-legeen esparruan ematen dituenak.

7.- Eusko Jaurlaritzak kirol-arloko berezko lanbideetan euskararen erabilera normalizatzeko neurriak hartuko ditu, batez ere eskola-kirolean eta gazterian, jarduera horietan euskararen erabilera ohikoa izan dadin.

3. artikulua.- Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbidea.

1.- Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbideak bide ematen du Gorputz Hezkuntzako eskolak emateko dagozkion hezkuntza-mailetan; era berean, bide ematen du hezkuntza-legerian aurreikusitako funtzio instrumental edo eratorri guztiak betetzeko.

2.- Ikasleei Gorputz Hezkuntzako eskolak ematen zaizkienean, irakasle batek egon beharko du bertan.

3.- Lanbide honen eremutik kanpo geratzen dira honako irakaskuntza hauen barruan kirol-gaiak ematen dituzten irakasleen lanbide-jarduerak: unibertsitate-irakaskuntza, lanbide-heziketa, araubide bereziko kirol-irakaskuntza, karrera militarreko irakaskuntza, prestakuntza-jarduera ez-formalak; eremu horretatik kanpo gelditzen dira, halaber, berez Gorputz Hezkuntzako irakaskuntzakoak ez diren gaiak ematen dituztenen lanbide-jarduerak.

4. artikulua.- Kirol Monitorearen lanbidea.

Kirol Monitorearen lanbideak bide ematen du edozein kirolari edo kirolari-talderentzat honako funtzio hauek betetzeko: plangintza, instrukzioa, ikaskuntza, animazioa, egokitze fisikoa, egoera fisikoa berreskuratzea edo hobetzea, entrenamendu edo prestaketa pertsonala, monitorizazioa, kontrola, gidaritza, laguntza, ebaluazioa eta antzekoak. Nolanahi ere, jarduera horrek ez du egon behar kirol-lehiaketetara bideratuta.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

2.- Lanbide horretan aritu ahal izateko egokitze fisikoarekin, egoera fisikoa errekupearekin edo hobetzearekin eta entrenamendu edo prestaketa pertsonalarekin lotutako jardueretan edo antzekoetan, titulu akademiko hauen bidez egiazta daitekeen kualifikazio bat eskatuko da:

- a) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua.
- b) Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko goi-mailako teknikaria.
- c) Egokitzen Fisikoko goi-mailako teknikaria

3.- Lanbide horretan aritu ahal izateko izaera orokorrekoak edo kirol edo diziplina anitzekoak diren ikaskuntza- eta irakaskuntza-jardueretan edo antzekoetan (kirol-modalitate edo -diziplina jakin batera bideratzen ez diren jarduerak), honako titulu akademiko hauen bidez egiazta daitekeen kualifikazio bat eskatuko da:

- a) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua.
- b) Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko goi-mailako teknikaria.
- c) Gizarteko eta Kirol-ekintzen Irakaskuntzako eta Animazioko goi-mailako teknikaria.

4.- Irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduera horiek eta antzekoak kirol-modalitate edo -diziplina bakar batera bideratuta badaude, eta kirol-arloko hastapenetan edo oinarritzko mailan egiten badira, honako titulu edo ziurtagiri hauen bidez egiaztatu daitekeen kualifikazio bat eskatuko da:

- a) Dagokion kirol-modalitate, -espezialitate edo -diziplinako Kirol-teknikariaren titularen Erdi Mailako Hasiera Zikloaren ziurtagiria.
- b) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Kirol-teknikaria.
- c) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Goi-mailako kirol-teknikaria.

Hirugarren zenbakian aipatzen diren titulazioen bidez egiaztatu daitekeen kualifikazioen bat duten guztiek, era berean, diziplina bakarreko eta oinarritzko mailako irakaskuntza- eta ikaskuntza-jardueretan eta antzekoetan lan egin ahal izango dute, betiere prestakuntza berezia badute dagokion kirol-modalitate edo -diziplinan.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

5.- Irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduera horiek eta antzekoak berariaz bideratzen direnean kirol-modalitate edo -diziplina bakar batera, eta teknika-hobekuntzaren eremuan edo erdiko mailan egiten direnean, honako titulu hauen bidez egiaztatu daitekeen kualifikazio bat eskatuko da:

- a) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Kirol-teknikaria.
- b) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Goi-mailako kirol-teknikaria.

Diziplina bakarreko erdi mailako irakaskuntza- eta ikaskuntza-jardueretan eta antzekoetan jardun ahal izango dute, halaber, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduaren bidez egiazta daitekeen kualifikazioaren bat dutenek, baldin eta berariazko prestakuntza badute, dagokien kirol-modalitate edo -diziplinan.

6.- Lanbide hori nolabaiteko arriskua duten jardueretan betetzeko (uretan, mendian, elurretan, airean eta natura-inguruneko beste gune batzuetan egiten diren jarduerak, baita animaliekin egiten direnak ere), titulu akademiko hauen bidez egiazta daitekeen kualifikazioaren bat eskatuko da:

- a) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua.
- b) Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko goi-mailako teknikaria.
- c) Gizarteko eta Kirol-ekintzen Irakaskuntzako eta Animazioko goi-mailako teknikaria.
- d) Natura-inguruneko Gorputz- eta Kirol-ekintzak Gidatzeko teknikaria.
- e) Zaldi-jardueretako teknikaria, lanbidea mugatzen denean zaldiz egiten diren ibilbideetan pertsonak gidatzera eta dinamizatzen

Lanbidea eremu horretan betetzeko, ezinbestekoa da kualifikazio hori duten pertsonak egin beharreko jardueren inguruko prestakuntza berezia edukitzea.

Honako titulu hauen bidez egiazta daitekeen kualifikazioa dutenek ere jardun ahal izango dute lanbidean eremu horretan: Kirol-teknikariaren titularen Erdi Mailako Hasiera Zikloaren ziurtagiria; Kirol-

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

teknikariaren titulua, eta Goi-mailako kirol-teknikariaren titulua (natura-ingurunean edo animaliekin batera egiten den jarduerari dagokion modalitate edo diziplinako tituluak). Kasu horretan, kontuan izan behar dira artikuluko honen laugarren eta bosgarren zenbakietan ezarritako mailak edo eremuak.

7.- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduaren bidez egiazta daitekeen kualifikazioa izan beharko da arreta berezia eskatzen duten pertsonekin gorputz- eta kirol-ekintzetan jarduteko, Kirol Monitorearen lanbidean; esate baterako, 65 urtetik gorako pertsonekin, desgaitasunen bat dutenekin eta osasun-arazoak eta antzekoak dituztenekin. Hori gorabehera, beste profesional batzuek ere baliatu ahal izango dituzte eskumenak, osasun-lanbideak antolatzeke legeriaren arabera.

8.- Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa dutenek, era berean, ahalmena izango dute Kirol Monitorearen lanbidean jarduteko, bai ikastetxeetan irakastorduez kanpo programatzen diren kirol-jardueretan, bai beste erakunde batzuetan programatzen direnetan. Baina, horretarako, irakaslearen kualifikazioak bateragarria izan behar du ikasleen adinarekin. Kirol-modalitate edo -diziplina bakarrera berariaz bideratutako jardueretan edo artikuluko honen seigarren zenbakian jasotako arriskudun jardueretan arituz gero, bestalde, dagokion kirol-modalitateko prestakuntza espezifiko eskatuko da.

9.- Era berean, inork unibertsitate-master espezifiko baten bidez edo profesionaltasun-ziurtagiri baten bidez egiaztatu ahal badu kualifikazioa daukala, Kirol Monitorearen lanbidean jardun ahal izango du titulu edo ziurtagiri horren bidez lortu dituen gaitasunak eskatzen dituzten jardueretan.

10.- Adingabeei edo beste arrisku-talde batzuetakoei Kirol Monitorearen zerbitzuak emateko, baita natura-ingurunekeo jardueretan edo animaliekin egiten diren jardueretan zerbitzuak emateko ere, ezinbestekoa izango da monitorea bertan egotea kirol-jarduera gauzatzen ari den bitartean, non eta ez den plangintza- edo programazio-zeregin bat.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

5. artikulua.- Entrenatzaile lanbidea.

1.- Entrenatzaile lanbideak bide ematen du lehiatu nahi duten kirolariak eta kirolari-taldeak entrenatzeko, hautatzeko, aholkatzeko, planifikatzeko, zuzentzeko, gidatzeko, kontrolatzeko, ebaluatzeko eta jarraitzeko, eta antzeko funtzioak betetzeko.

2.- Jarraian azaltzen diren tituluen bidez egiazta daitekeen kualifikazioren bat eskatuko da, lanbide horretan eskola-eremuko kirolari eta taldeekin jarduteko eta kirol edo diziplina anitzeko lehiaketetan parte hartzeko, beren-beregi kirol-modalitate edo -diziplina bakar batera mugatu gabe:

- a) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua.
- b) Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko goi-mailako teknikaria.
- c) Gizarteko eta Kirol-ekintzen Irakaskuntzako eta Animazioko goi-mailako teknikaria.
- d) Natura-inguruneen Gorputz- eta Kirol-ekintzen Gidatzeko teknikariaren titulua, baldin eta eskola-lehiaketa funtsean edo oso-osorik egiten bada natura-ingurune batean.

Natura-ingurunean antolatzen diren eta nolabaiteko arriskua duten diziplina anitzeko lehiaketetan lan egiteko edota animaliekin lan egiteko, ezinbestekoa izango da aurreko kualifikazio horietako batzuk egiaztatzea eta, horretaz gain, garatu beharreko jardueretan aritzeko prestakuntza espezifikoa izatea.

3.- Kirolariekin eta taldeekin lan egin behar bada lehiaketetan parte hartzeko kirol- modalitate edo -diziplina bateko oinarritzko mailan, honako ziurtagiri edo tituluen bidez egiazta daitekeen kualifikazio bat izan beharko da:

- a) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako profesionaltasun-ziurtagiria.
- b) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Kirol-teknikariaren tituluaren Erdi Mailako Hasiera- Zikloaren ziurtagiria.
- c) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Kirol-teknikaria.
- d) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Goi-mailako kirol-teknikaria.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

Era berean, kirol-modalitate edo -diziplina bakarreko oinarritzko mailako lehiaketetan lan egin ahal izango dute bigarren zenbakian aipatzen diren titulazioen bidez egiaztatu daitekeen kualifikazioen bat duten guztiek, baldin eta, kualifikazio horrez gain, prestakuntza espezifikoa ere egiaztatzen badute dagokien kirol-modalitatean edo -diziplinan.

4.- Kirolari eta taldeekin Entrenatzaile lanbidean jarduteko erdi mailako lehiaketetan, honako titulu hauen baliokide den kualifikazio bat eskatuko da:

- a) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Kirol-teknikaria.
- b) Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Goi-mailako kirol-teknikaria.

Era berean, erdi mailako lehiaketetan jardun ahal izango dute Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua dutenek; horrez gain, prestakuntza espezifikoa ere izan beharko dute.

5.- Kualifikazio egiaztagarria eduki beharko da Entrenatzaile lanbidean jarduteko goi-mailako edo errendimendu handiko kirolariekin edo kategoria horretako lehiaketetako taldeekin. Kualifikazio hori dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren bidez egiaztatuko da.

6.- Animazioko kirol-jarduerak zuzendu behar badira, honako tituluen baliokidea den prestakuntza egiaztatzen dutenek ere jardun ahal izango dute lanbidean: Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko goi-mailako teknikaria, Gizarteko eta Kiroleko Irakaskuntzako eta Animazioko goi-mailako teknikaria eta, zuzendaritza-lana bideratzen bada egokitzen fisikorako jardueretara edo antzekoetara, Egokitzen Fisikoko goi-mailako teknikariaren tituluaren baliokidea den prestakuntza egiaztatzen dutenek.

7.- Lege honen ondorioetarako, Entrenatzaile lanbidean jarduten dute entrenatzaileari laguntzen diotenek entrenamenduak eta lehiaketak gidatzen, zuzentzen edo kontrolatzen, kirolari jarraibideak ematen edo antzeko jarduerak egiten. Beraz, horiek ere izan beharko dute artikulua honetan ezartzen den kualifikazioa.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

8.- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduaren baliokidea den kualifikazioa izatea eskatuko da Entrenatzaileak bereak dituen eskumenak honako hauetarako baliatzen dituenen: kirolarien egoera fisikoa berreskuratzeko eta hobetzeko, lesioak aurreikusteko, lesio ostekoak berregokitzeko eta berriro hezteko, eta balorazio-testak eta antzekoak egiteko. Hori gorabehera, beste profesional batzuek ere baliatu ahal izango dituzte eskumenak, osasun-lanbideak antolatzeke legeriaren arabera.

9.- Artikulu honetan adierazitako kualifikazioak bakar bakarrik eskatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten denean lanbidean edo egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten kirol-erakundeentzat eta kirolarientzat lan egiten denean. Kualifikazio horiek, bestalde, ez zaizkie eskatuko egoitza beste herrialde edo autonomia-erkidego batean duten kirol-erakundeen edo kirolarien entrenatzaileei, baldin eta inoiz Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen badute edo lehiatzen badira estatu-mailako edo nazioarteko lehiaketak prestatzeko edo horietan parte hartzeko.

10.- Adingabeei edo beste arrisku-talde batzuetakoei entrenatzailearen zerbitzuak emateko, baita natura-inguruneke jardueretan edo animaliekin egiten diren jardueretan zerbitzuak emateko ere, ezinbestekoa izango da entrenatzailea bertan egotea kirol-jarduera gauzatzen ari den bitartean, non eta ez den plangintza- edo programazio-zeregin bat.

6. artikulua.- Kirol Zuzendariaren lanbidea.

1.- Kirol Zuzendariaren lanbideak ahalmena ematen du kirol-zentro, -zerbitzu, -jarduera eta -erakunde publiko nahiz pribatuetan zuzendaritza, programazio, plangintza, koordinazio, kontrol, gainbegiratze eta antzeko zereginekin zerikusia duten lanbide-jarduerak gauzatzeko, kirol-zientzietako ezagupenak eta teknikak aplikatuz. Kirol Zuzendariaren lanbide-jarduera gauzatzeko, ez dago zertan egon kirol-jarduera egiten ari den lekuan.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloke lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

2.- Jarduera edo zerbitzu integral, orokor eta diziiplina edo kirol anitzekoetan Kirol Zuzendariaren lanbidea gauzatzeko (berariaz kirol-modalitate edo -diziiplina bakar batean murgildu gabe), beharrezkoa izango da kualifikazio egiaztagarria edukitzea. Kualifikazio hori Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Graduaren bidez egiaztatuko da.

3.- Kirol-modalitate edo -diziiplina bakarreko kirol-hastapena edo oinarritzko maila zuzendu behar bada, kirol-modalitate edo -diziiplina horretako prestakuntza espezifikoa egiaztatu beharko da aurrekoen gain.

4.- Teknika-hobekuntzako edo erdi-mailako jarduerak zuzendu behar badira, prestakuntza espezifiko bat ere egiaztatu beharko da; edo, bestela, kualifikazio egiaztagarria eduki beharko da, hots, dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Kirol-teknikariaren tituluaren bidez egiaztatuko den kualifikazioa.

5.- Errendimendu handiko jarduera edo zerbitzuetan Kirol Zuzendariaren lanbidea gauzatzeko, kualifikazio egiaztagarria eduki beharko da. Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren bidez egiaztatuko da kualifikazio hori. Kualifikazio hori egiaztatzen dutenek oinarritzko mailako eta erdi-mailako kirol-jardueretan ere gauzatu ahal izango dute lanbidea.

6.- Animazioko kirol-jarduerak zuzendu behar badira, honako tituluen baliokidea den prestakuntza egiaztatzen dutenek ere jardun ahal izango dute lanbidean: Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko goi-mailako teknikaria, Gizarteko eta Kiroleko Irakaskuntzako eta Animazioko goi-mailako teknikaria eta Egokitzen Fisikoko goi-mailako teknikaria.

7.- Era berean, Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa dutenek ahalmena izango dute eskolako kirol-jarduerak sustatu, planifikatu, programatu, koordinatu, ebaluatu edo zuzentzeko, bai ikastetxeetan ikastorduetatik kanpo egiteko programatzen direnak, bai beste erakunde batzuetan programatzen direnak. Baina, horretarako, irakasleen kualifikazioak bateragarria izan behar du ikasleen adinarekin. Kirol-modalitate edo -diziiplina bakarreko lehiaketetan edo natura-ingurunean edo animaliekin egiten diren jardueretan arituz gero, bestalde, dagokion kirol-jarduerarako prestakuntza espezifikoa ere eskatuko da.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

7. artikulua.- Kasu berezietako kualifikazio-baldintzak.

1.- Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badaukate bakarrik eskatuko zaie estatu- edo nazioarte-mailako lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten klub eta kirol-elkarteetako profesionalei lege honek ezartzen dituen kualifikazioak betetzeko.

2.- Lanbide-jarduna Euskal Autonomia Erkidegoko zentroetan gauzatu ohi badute, bakarrik eskatuko zaie Espainiako kirol-federazioetako eta estatu-mailako gainerako kirol-erakunde publiko edo pribatuetao profesionalei lege honek ezartzen dituen kualifikazioak betetzeko.

3.- Lege honek ezartzen dituen kualifikazioak ez zaizkie eskatuko beste autonomia erkidego edo herrialde batzuetako profesionalei, hots, EAEn –noizbehinka edo unean-unean– zerbitzu profesionalak ematen dituzten profesionalei, baldin eta EAetik kanpo bizi diren kontsumitzaile edo erabiltzaileentzat badira zerbitzu horiek.

4.- Errendimendu handiko kirolariek, lege honetan ezarritako kualifikaziorik ez badute ere, Kirol Monitorearen edo Entrenatzailearen jarduerak egin ahal izango dituzte, noizbehinka, euren kirol-modalitate edo diziplinan, betiere une oro euren alboan baldin badute dagokion jarduerarako eskatzen den kualifikazioa duen norbait.

8. artikulua.- Kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzea.

Eusko Jaurlaritzari dagokio, bere eskumenen esparruan, lege honek kualifikazio eta tituluei egiten dizkien erreferentziak lanbide-kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzea. Erreferentzia horiek sortzen diren kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzen ez diren bitartean, indarrean dagoen araudiak lanbide-mailari dagokionez baliokidetzat jotzen dituenak izango dira baliozkoak.

9. artikulua.- Izenen erabilera.

- 1.- Lanbidean lege honek eta gainerako arau aplikagarriek xedatzen dutenarekin bat etorriz jarduten denean bakarrik erabili ahal izango dira lege honetan azaltzen diren lanbideen izenak.
- 2.- Beste profesionalek ezin izango dituzte erabili esanahiarengatik edo antzarengatik lege honek arautzen dituen izenekin nahastu daitezkeen izenak.
- 3.- Kirol bakoitzean boluntario gisa gauzatzen denean jarduera, orduan ere erabili ahal izango dira "Kirol Monitore", "Entrenatzaile" eta "Kirol Zuzendari" izenak.
- 4.- Entrenatzaile lanbidearen izenak ez du eragotziko kirol-erakundeek haien barruan dauden kualifikazio-mailak sailkatzeko erabil dezaketen nomenklatura.

10. artikulua.- Elkargoko kide egitea eta Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa.

- 1.- Lege honek arautzen dituen lanbideetan sartzeko eta jarduteko, derrigorrezko baldintza izango da dagokion elkargo profesionalean sartzea, baldin eta estatuko kasuan kasuko legeek hala ezartzen badute. Kasu horretan, kasuan kasuko elkargo profesionalak elkargokideei buruzko informazioa eman behar dio Kirol-arloko Profesionalen EAEko Erregistroari: izen-abizenak eta lanbide-kualifikazioari buruzko datuak.
- 2.- Lanbidean jardun nahi duten gainerako profesionalek, baldin eta lege honetan araututako lanbideetako edozeinetan jarduteko eskatzen den kualifikazioa badaukate, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu behar dute Kirol-arloko Profesionalen EAEko Erregistroan. Adierazpen horretan, honako datu hauek jaso behar dituzte: izen-abizenak eta lanbide-kualifikazioari buruzko datuak.
- 3.- Kirol-arloko Profesionalen EAEko Erregistroa, zeina publikoa izango baita, kirol-arloko eskumena duen sailari atxikita geldituko da, eta horren bidez, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak ahalik eta ondoen defendatze aldera, aurreko zenbakietan adierazitako informazio

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

hori emango du, euskaraz eta gaztelaniaz, modu argi, doako eta elektronikoki eskuragarri batean. Erregelamenduz ezarri beharko dira erregistroaren egitura, zereginak eta publizitate- eta funtzionamendu-erregimena.

4.- Erantzukizunpeko adierazpena aurkezten den egunetik bertatik jardun ahal izango da, oro har, lanbidean, betiere hargatik eragotzi gabe egiaztapenerako, kontrolerako eta ikuskapenerako ahalmena.

Erantzukizunpeko adierazpen baten barruan edo harekin batera aurkezten diren datu, adierazpen eta dokumentuetan funtsezko zehaztasun-gabeziaren bat, faltsukeriaren bat edo ez-egiteren bat badago edo datu eta dokumentu horiek aurkezten ez badira, ezin izango da lanbidean jardun gertakari horien berri izaten denetik aurrera (aurrez, administrazio-prozedura bat izapidetuko da), eta horrek hainbat erantzukizun ekar ditzake, gainera.

6.- Erantzukizunpeko adierazpenetan dauden datu pertsonalak eskuratzeko eta horien truke eta interkomunikaziorako, datu pertsonalen babesari buruz dagoen araudi espezifikoan ezarritakoari jarraituko zaio beti.

7.- Erantzukizunpeko adierazpena ez zaie eskatuko Gorputz Hezkuntzako Irakaslearen lanbidean jarduten duten profesionalei, baldin eta Administrazio Publikoari lotuta badaude administrazio- edo lan-zuzenbidearen araberrako zerbitzu-harreman baten bidez. Nolanahi ere, Administrazio Publikoak bidali egin beharko du Erregistrora artikulua honetan ezarritako informazioa, erregelamenduz zehazten den moduan.

11. artikulua.- Lanbidean jarduteko betebeharrak.

1.- Profesionalek, lege honek xede dituen kirol-arloko lanbideetan jarduterakoan, betebeharrak hauek izango dituzte:

- a) Hartzaile bakoitzak dituen baldintza eta beharizanetara egokitutako zerbitzuak eman behar dituzte, unean uneko zientzia-ezagupenen egoerarekin bat etorriz, indarrean dauden arauak ezartzen dituzten kalitate- eta segurtasun-mailak betez, eta generoa dela-eta dauden desberdintasunak kontuan hartuta.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

- b) Beren zerbitzuak hartzen dituzten pertsonen osasuna eta segurtasuna zaindu behar dute, eta lankidetza aktiboan jardun behar dute kirolarien osasunari kalte egiten dioten jardunak desagerrarazteko.
- c) Kirol-jarduera egiten den lekuan bertan egonda gauzatu behar dute haien lanbide-jarduera, lege honetan aurreikusten diren kasuetan izan ezik.
- d) Lankidetza aktiboa eskaini behar dute dopin-kontrolak egiterakoan eta dopinaren aurkako legeetan aurreikusten diren betebeharrak betearazterakoan.
- e) Haien zerbitzuak hartzen dituzten pertsonen nortasuna, duintasuna eta intimitatea errespetatu behar dute.
- f) Beren zuzendaritzapean egingo diren jarduera fisikoei eta kirol-jardueri buruzko informazio nahikoa eta ulergarria eman behar diete zerbitzuak hartzen dituztenei.
- g) Beren burua identifikatu behar dute haien zerbitzuak hartzen dituztenen aurrean, eta zein lanbide eta lanbide-kualifikazio duten adierazi behar diete.
- h) Printzipio hau kontuan hartuta jardun behar dute lanbidean: kirolak giza garapen osoa eta harmonikoa lortzen lagun dezakeela; kirolak pertsonaren prestakuntza integrala ahalbidetzen duela, eta bizi-kalitate hobea eta gizarte-ongizate handiagoa lortzen laguntzen duela.
- i) Kirolean emakumeen benetako berdintasuna lortzen laguntzen duten eta emakumeak kirol-maila guztietan aritzea ahalbidetzen duten baldintzak bultzatu behar dituzte, eta edozein motatako diskriminazio-egintzak saihestu behar dituzte.
- j) Aisialdirako aukera gisa eta ohitura osasungarri gisa aurkeztu behar dute kirol-jarduera.
- k) Ezagupenak etengabe eguneratuta eta hobetuta edukitzen ahalegindu behar dute.
- l) Lankidetza aktiboan jardun behar dute, kirolariek osasun-kontrol egokia izan dezaten, osasun-langileen bidez.
- m) Lankidetza aktiboan jardun behar dute kirolariei errendimendu edo osasun hobea izaten lagun diezaieketen beste profesionalekin.
- n) Inolako indarkeria, arrazakeria, intolerantzia edo xenofobiarik gabeko kirola egitea sustatu behar dute beren lanbide-jardunean.
- o) Beren lanbide-jardunean kirolariak eta, batez ere, adingabeak babestu behar dituzte, neurrigabeko esplotaziorik egon ez dadin

(arreta berezia eskaini behar zaio sexu-jazarpen edo -gehiegikeriari).

- p) Kirol-materiala erabiltzerakoan, ahalegina egin behar dute natura-inguruneari kalterik ez egiteko eta genero-estereotipoak gaindituta daudela bermatzeko.
- q) Haien lanbide-jardunarekin loturiko zerbitzuetan hartzaileei legez aitortzen zaizkien hizkuntza-eskubideak benetan egikaritzeko baldintzak bermatzea.

2.- Aipatutako printzipio eta betebeharrak bete ezean, dagozkion administrazio- eta diziplina-erantzukizunak exijituko dira, hala badagokio.

12. artikulua.- Lanbide-sozietateen bidez jardutea.

1.- Lanbide-sozietateen bidez jardun ahal izango da lege honek arautzen dituen lanbideetan, enplegu publikora iristeko kasuetan edo hezkuntza-arloko legeek onartzen ez dituzten kasuetan izan ezik.

2.- Lanbide-sozietateek beharrezkoak diren neurriak hartu behar dituzte kirol-arloko lanbide-jardunean pertsona kualifikatuen presentzia izango dela bermatzeko (lege honetan aurreikusten diren kasuetan izan ezik).

13. artikulua.- Erantzukizun zibila bermatzea.

1.- Lege honek arautzen dituen lanbideetan jarduteko, dagokion erantzukizun zibileko aseguru sinatu behar da, eta zerbitzu profesionalak ematerakoan hirugarrenei eragiten zaizkien kalteengatik eman beharreko kalte-ordainak estali behar ditu aseguru horrek.

2.- Administrazio publiko baten zerbitzura bakarrik diharduten profesionalei ez zaie betebeharrak hori exijituko. Lanbide-jarduera hirugarrenen kontura bakarrik gauzatzen den kasuetan ere aseguru ez da derrigorrezkoa izango.

3.- Lege hau garatzeko xedapenetan zehaztuko dira aseguramenduaren oinarritzako baldintzak.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

14. artikulua.- Bestelako baldintzak.

1.- Lege honek kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko ezartzen dituen kualifikazio-baldintzak betetzeaz gain, eduki edo bete egin beharko da indarrean dauden legeen arabera exijitu daitekeen beste edozein lizentzia, baimen, titulu edo baldintza.

2.- Kirol-arloko lanbidean jarduteko, ez da federazioaren lizentziarik eskatuko, lanbide-jarduera lehiaketa federatuetatik kanpo gauzatzen bada.

3.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak euskal federazioen dena delako araudia onartuko du, eta, horrela, baimena emango du kirol-federazioek, lege honetan aurreikusitako kualifikazioez gain, prestakuntza espezifikokoak eska ditzaten, betiere prestakuntza horien atzean ez badago tratu diskriminatzaile bat, zentro ez-federatiboetan lortutako prestakuntzekiko.

15. artikulua.- Lehen laguntza emateko gaitasuna.

1.- Lege honetan araututako lanbideren batean jarduten duten pertsonak, baldin eta kirol-jarduera gauzatzen den lekuan bertan egoten badira, egiaztatu egin behar dute lehen laguntzako prestakuntza dutela (baita boluntarioek ere).

2.- Kirol-arloko eskumena duen sailak ezarriko ditu, erregelamenduz, aipatutako prestakuntza egiaztatzeke baldintzak eta prozedura.

16. artikulua.- Lanbideetan legearen babespetik at jardutea.

Lanbideetan lege honek xedatutakoaren arabera jardun ezean, eta, bereziki, dagokion lanbide-kualifikazioarekin jarduteko betebeharra bete ezean, ordenamendu juridiko aplikagarriaren arabera administrazio-erantzukizunak, diziiplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak eskatuko dira.

17. artikulua.- Arau-esparru erkidea. Lehia askea.

- 1.- Lege honetan ezarri ez den guztian, lanbideetan jarduteko arau-esparru erkideak ezartzen duena bete beharko da lege honek arautzen dituen lanbideetan jardun ahal izateko.
- 2.- Lege honetan araututako lanbideetan sartzeko eta jarduteko, eta lanbide horiek biltzen dituzten profesionalen elkargoek esku hartzeko, lehiaren defentsari eta lehia desleialari buruzko legeak bete beharko dira.
- 3.- Lege honetan aurreikusten diren kualifikazio-baldintzak errespetatu beharko dituzte kirol-federazioek, eta debekatuta egongo da zentro ez-federatiboetan eskuratutako prestakuntza diskriminatzea.

18. artikulua.- Beste estatuetan lortutako lanbide-kualifikazioak onartzea.

- 1.- Europar Batasunaren barruko estatuetan edo langileen joan-etorri askea, kokatzeko askatasuna eta profesionalek zerbitzuak emateko askatasuna aplika daitezkeen estatuetan eskuratutako lanbide-kualifikazioak onartzeko, nazioarteko hitzarmenetan, onarpen horri buruzko arau komunitarioetan eta ordenamendu horren estatu-mailako transposizio-xedapenetan ezarritakoa beteko da.
- 2.- Aurreko paragrafoan aipatzen ez diren gainerako estatuetan eskuratutako lanbide-kualifikazioak lanbide-jardunerako onartzeko, kasu bakoitzean aplikatu beharreko hitzarmen eta legeak beteko dira.

19. artikulua.- Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babestea.

- 1.- Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatuko du Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak erabiliz; eta, horretarako, lege honek arautzen dituen kirol-arloko lanbideetan jarduteko kualifikazioak edukitzeari dagokionez, beharrezko baimen, erantzukizunpeko adierazpen, komunikazio, ebaluazio, egiaztapen eta ikuskapeneko sistemak ezarri ahal izango ditu.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

2.- Kirol-arloko lanbideei dagozkien produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsona fisikoek eta erakundeek egiten duten publizitateak egiazkoa izan behar du, eta ez ditu inola ere sustatu behar erabiltzaile eta kontsumitzaileen osasun eta segurtasunerako kaltegarriak diren kirol-jardunak.

3.- Kirol-zentroetako, gimnasioetako eta kirol-zerbitzuak ematen dituzten beste edozein instalaziotako titularren ardura izango da erabiltzaileei informazio argia eta erraz ikusteko modukoa ematea, kirol-arloko profesionalen lanbide-kualifikazioari buruz.

4.- Lege honen esparruan dauden profesionalek gutxieneko kualifikazioa edukitzearen baldintza betetzen dutela bermatzeko, idatziz formalizatuko dira profesional horiekin egiten diren zerbitzu-kontratu guztiak, eta, kontratuetan argi jasota geratuko da profesionalek egiaztatuta dutela kualifikazioa.

5.- Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 119. artikulua ezarritakoari jarraituz, Kirol Ikuskaritzari dagokio ikuskatze-lanak egitea eta lege honek ezartzen dituen xedapenak betetzen direla kontrolatzea.

20. artikulua.- Plataforma birtualen bidezko edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidezko lanbide-jarduna.

1.- Lege honetan monitoreei eta entrenatzaileei esleitu zaizkien egitekoak plataforma birtualen bidez edo informazioaren komunikazioaren teknologien bidez gauzatu ahal izango dira, legean aurreikusitako salbuespenak salbuespen. Nolanahi ere, ezinbestekoa da monitore eta entrenatzaile horiek lege honetan aurreikusitako kualifikazioa izatea, ohiko lanbide-jarduna EAEn gauzatzen badute.

2.- Web orriek, aplikazioek eta informazioaren eta komunikazioaren gainerako teknologiek, baldin eta on line entrenamendu-planak eta gisa bereko kirol-arloko eduki teknikoa barne hartzen badute, behar bezala identifikatu behar dituzte plangintza horiek egiten dituzten profesionalak, eta horien kualifikazioari buruzko informazioa eman behar dute.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

3.- EAEn kokatuta dauden kirol-zentro edo -erakundeek plataforma edo teknologia horiek erabiltzen dituztenean entrenamendu-planak egiteko edo euren erabiltzaileekin taldekako eskolak edo saioak emateko, legearen arabera lanbide-kualifikazioa duen kirol-arloko profesional batek gainbegiratu behar du plataforma edo teknologia horien erabilera.

4.- Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-zentroek dituzten plataforma eta teknologien erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna zainduko ditu, ikuskaritza-zerbitzuen bidez.

5.- Euskararen erabilera bermatuko da Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden kirol-zentro eta -erakundeek erabiltzen dituzten web orrialdeetan, aplikazioetan eta gainerako informazio- eta komunikazio-teknologietan.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.- Kasuan kasuko elkargo-antolamenduarekin, kirol-federazioekin eta bestelako kirol-erakundeekin lankidetzan aritzeko mekanismoak.

Eusko Jaurlaritzak lankidetzak-mekanismoak bultzatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio publikoekin, kasuan kasuko elkargo-antolamenduarekin, kirol-federazioekin eta antzeko beste kirol-erakundeekin lankidetzan aritzeko eta, horrela, lege honek arautzen dituen kirol-arloko lanbide-jardueran kirol-jarduera osasungarri, seguru eta kalitatezkoak sustatzeko.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Berdintasun-politikak eta euskararen erabilera normalizatzeko politikak kirol-arloko lanbideetan.

Lege honetan arautzen diren lanbideetan sartzeko eta jarduteko orduan tratu- eta aukera berdintasuna egoteko politikak sustatuko ditu Eusko Jaurlaritzak, beste administrazio publikoekin, kasuan kasuko elkargo-antolamenduarekin, kirol-federazioekin eta antzeko beste kirol-erakundeekin lankidetzan.

LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Boluntarioen eta antzekoen jarduerak.

1.- Boluntarioek kirol-jardueretan parte hartzeko bete beharreko kualifikazio-baldintzak, oro har, lege honetan profesionalentzat ezarritako berberak izango dira, jarduera horietan parte hartzen dutenen osasuna eta segurtasuna bermatze aldera.

2.- Hala ere, aurretik eskaera arrazoitua aurkeztuz gero, lege honetan ezarritako kualifikazioa barkatu eta horren ordeztu bestelako kualifikazio bat eska diezaieke Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak boluntario-talde jakin batzuei.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Lanbideetan sartzeko eta jarduteko kualifikazioak egiaztatzea.

Lanbideetan sartzeko eta jarduteko, lege honek adierazitako titulu akademiko eta ziurtagirien bidez egiaztatutako kualifikazioak baliatu daitezke. Eusko Jaurlaritzako sail eskumendunek ezarriko dituzte aipatutako titulu eta ziurtagiriez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzeke kasu, baldintza eta prozedurak.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Prestakuntza espezifikoa.

1.- Testu artikulatuan zehar eskatzen den prestakuntza egiaztatzeke, printzipioz, titulu, ziurtagiri edo prestakuntza ofizialak erabiliko dira, unibertsitateko masterrak eta profesionaltasun-ziurtagiriak barne.

2.- Onartu ahal izango dira, halaber, amaitu gabeko prestakuntza ofizialak, hau da, titulu edo ziurtagiri ofizial baten zati bati dagozkionak.

3.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak prestakuntza espezifikoren maila zehaztu ahal izango du kasu jakin batzuetan.

4.- Prestakuntza-eskaintza ofizialik ez dagoen edo eskaintza hori nahikoa ez den kasuetan bakarrik sustatu edo/eta onartu ahal izango ditu kirol-arloko eskumena duen sailak gutxieneko kalitate-baldintzak betetzen dituzten prestakuntza, titulu edo ziurtagiri ez-ofizialak.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Jardueren mailak.

- 1.- Lege honen arabera, hauek izango dira kirol-hastapeneko edo oinarrizko mailako jarduerak: kirola egiten dutenek edo kirolariek, edozein adin izanda ere, jarduera ikasteko aurreneko faseetan egiten dituztenak.
- 2.- Lege honen arabera, hauek izango dira teknika-hobekuntzako edo erdi-mailako jarduerak: kirolariek teknika-hobekuntzaren etapan egiten dituzten jarduerak. Fase horretan, kirolariek, edozein adin izanda ere, jarduera menperatzen dute.
- 3.- Lege honen arabera, hauek izango dira errendimendu handiko kirol-lehiaketak: nazioarteko kirol-federazio eskumendunek edo dagokion nazioarteko liga profesionalak baimentzen, ikuskatzen eta arbitratzen dituzten nazioarteko lehiaketa absolutuak, kirol-egutegi ofizialetan sartuta daudenak; estatu-mailako kategoria absolutu goreneko lehiaketa profesional eta ez-profesionalak, eta Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak zehazten dituenak.
- 4.- Errendimendu handiko kirol-lehiaketa ireki edo mistoetan, lanbide-kualifikazioa bakar bakarrik eskatuko zaie lehiaketa horien mailakoak diren kirolarien entrenatzaileei.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Eskola-adinean dauden kirolariek in jarduerak egiteko prestakuntza.

- 1.- Eskola-adinean dauden kirolariek in kirol-jarduerak egiten dituzten monitoreentzat eta entrenatzaileentzat titulu ofizial edo profesionaltasun-ziurtagiri espezifikorik ez badago edo daudenak nahikoak ez badira, Eusko Jaurlaritzan kirolaren arloko eta kualifikazioen arloko eskumenak dituzten sailek prestakuntza-ekintza espezifikoak sustatuko dituzte elkarrekin, eskola-adinean dauden kirolariek in lan egiten duten pertsonentzat.
- 2.- Eskainitako prestakuntza-jarduerak moduluko eskaintza ahalbidetuko dute, eta behin horiek gaindituta, dagozkion egiaztagiriak lortuko dira.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

3.- Prestakuntza horiek gainditu izana egiaztatzen dutenek, eskola-kiroleko kirol anitzeko jardueretan monitore eta entrenatzaile izateko gaikuntza izango dute. Halaber, modalitate bakar batera bideratuta dauden eta kirol-hastapenekoak edo oinarrizko mailakoak diren eskola-kiroleko jardueretan aritu daitezke, baldin eta prestakuntza-jarduerak dagozkion diziplinako modulu espezifikoak izan baditu.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Estatuak onartu gabeko kirol-modalitateetarako prestakuntza eta Estatuak onartutako prestakuntza-planik gabeko modalitateetarako prestakuntza.

1.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak prestakuntza-ekintza espezifikoak sustatuko ditu lanbide-jarduera estatuak onartu gabeko kirol-modalitate eta -diziplinetan gauzatzen dutenentzat. Halaber, sail horrek emango ditu jarduera horien ziurtagiri ofizialak ere.

2.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak prestakuntza-ekintza espezifikoak sustatuko ditu lanbide-jarduera estatuak onartutako prestakuntza-planik ez duten kirol-modalitate eta -espezialitateetan nahiz prestakuntza-mailetan gauzatzen dutenentzat. Halaber, sail horrek emango ditu jarduera horien ziurtagiri ofizialak ere.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Prestakuntza eta ikaskuntzarako edo prestakuntza dualerako kontratuak.

1.- Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak edo prestakuntza dualerako kontratuak dituzten langileei, lanbidean sartzeko eta jarduteko, ez zaizkie eskatuko lege honetan aurreikusten diren lanbide-kualifikazioak, betiere prestakuntza hori kirolaren eremukoa bada.

2.- Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak dituzten langileek izena eman beharko dute Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan.

HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Kirol-teknikariaren titulazioaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren titulazioaren baliokideak diren kualifikazioak.

1.- Kirol-teknikariaren eta Goi-mailako kirol-teknikariaren titulazio akademikoei egiten zaizkien aipamenak (lege honetan ezarri dira titulu horiek) honako prestakuntza hauetatik eratorritako titulazioetara heda daitezke:

- a) Aldi iragankorreko kirol-prestakuntzak.
- b) Kirol-teknikariaren eta Goi-mailako kirol-teknikariaren titulua duten modalitate edo espezialitateetan, lehenagoko prestakuntza federatiboak, indarreko legeriaren arabera onar daitezkeenak.
- c) Kirol-teknikariaren eta Goi-mailako kirol-teknikariaren titulurik ez duten modalitate edo espezialitateetan, lehenagoko prestakuntza federatiboak, aldi iragankorreko kirol-prestakuntzetara sartzeko edo gerora onartzeko aukera dutenak.

2.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak epe bat jarri ahal izango du aipatutako prestakuntza horietakoren bat dutenei lanbide-baliokidetasuna aitortzeko, Kirol-teknikariaren edo Goi-mailako kirol-teknikariaren tituluarekiko.

HAMAIKAGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Zehatzeko ahala.

Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak izango du zehatzeko ahala, lege honetan ezarritakoa hausten bada.

HAMABIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Euskararen erabileraren normalizazioa.

1.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak bermatuko du prestakuntza-ekintzak euskaraz eta gaztelaniaz egin ahal izateko aukera, bai eta euskararen erabileraren normalizazioa ere, arau honek barne hartzen duen kirol-eremuko lanbideen jardunean, batez ere haurren eta gazteen eremuetan.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.- Legeak eskatutako kualifikaziorik gabe jardutea lanbidean.

1.- Kirol-arloko profesionalek lan-eskarmentuaren bidez edo prestakuntza ez-formalaren bidetik eskuratutako gaitasunak egiaztatzeko administrazio-prozedurak ezartzen ez diren bitartean, kasuan kasuko lanbidean jarduteko gaikuntza izango dute erregelamenduz ezarritako moduan hau egiaztatzen dutenek: lege hau indarrean sartu zenean, modu jarraituan –eta ez noizean behin– aritzen zirela araututako lanbide-jardueretan. Nolanahi ere, gaikuntza hori mugatuko da erakunde berean edo beste batean zeukaten zeregin edo mailara, eta ez du balioko entrenatzaile moduan jarduteko dagokion kualifikazioa izatea eskatzen duten kirol-federazioetarako, erregelamenduz hala ezarri badute.

2.- Halaber, eskola-kiroleko kirol-anitzeko jardueretan monitore eta entrenatzaile moduan jarduteko gaikuntza izango dute lege hau indarrean jarri aurretik foru aldundiek eskola-kirolerako eskainitako prestakuntza-ekintzak gainditu dituztenek.

3.- Eusko Jaurlaritzako sail eskudunek ezarriko dituzte kirol-arloko profesionalek lan-eskarmentuaren bidez edo prestakuntza ez-formalaren bidetik eskuratutako gaitasunak egiaztatzeko administrazio-prozedurak. Lehenengo eta bigarren zenbakian aipatutako egoeran daudenek gaikuntza eskuratu beharko dute, erregelamenduz ezarriko den epean.

4.- Lehenengo zenbakian ezarritako gaikuntzari buruz esandakoa eragotzi gabe, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak baliorik gabe utzi ahal izango du lanbidean jarduteko gaikuntza, baldin eta, jarduerak nolako ezaugarriak dituen kontuan hartuta, ikusten bada lanbidean kualifikaziorik gabe jarduteak arrisku zuzen eta larrian jartzen duela pertsonen osasuna eta segurtasuna. Horregatik, ezaugarri horiek dituzten lanbide-jardueren zerrenda egingo du aipatu sailak.

5.- Behin-behinean, harik eta kasuan kasuko federazio espainiarrak edo nazioartekoak baimena ematen duen arte, bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarritako errendimendu handiko lehiaketetan entrenatzaile-lanak egiteko lege honetan eskatzen den kualifikaziorik gabe, automatikoki lortuko dute gaikuntza kasuan kasuko federazio espainiar edo nazioartekoak eskatzen duen titulazio gorena duten

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

pertsonek. Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak baliorik gabe utz dezake gaikuntza hori kirol-modalitate edo diziplina batzuetan.

6.- Erregelamenduz ezartzen den epean kualifikazioa egiaztatzeko betebeharra ez betetzea arrazoitzat hartu ahal izango da lanpostutik kentzeko (Euskal Herriko Autonomi Elkarte Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen babesean), eta, horrez gain, Langileen Estatutua onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52. artikuluko a) letran aipatzen den ezgaitasuna agertutzat hartzeko.

7.- Gaikuntza lortu duten profesional horiek Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan eman behar dute izena, gaikuntzadunen atal espezifiko batean.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Legea pixkanaka aplikatzea Kirol Monitore, Entrenatzaile eta Kirol Zuzendariaren lanbideetan.

1.- Kirol Monitore, Entrenatzaile edo Kirol Zuzendariaren lanbideei dagozkien eremu material guztietan, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak bere eskumenen eremuan egiaztatzen badu ez dagoela lege honetan aurreikusitako kualifikazioak dituen profesionalik une bakoitzean dagoen eskaintzari behar bezala erantzuteko, edo egiaztatzen badu prestakuntza ofizialik ez dagoela edo kirol-esparru berriak sortu direla, kualifikazio txikiagoa edo antzeko beste prestakuntza-mota bat duten pertsonak gaituko ditu behin-behingo.

2.- Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak ezarriko ditu legea pixkanaka aplikatzeko baldintzak eta modua, bai eta aurreko zenbakian bildutako lanbide-gaikuntzak aplikatzeko baldintzak eta modua ere.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Elkargoko kide egiteko betebeharra

Estatu-mailako legeek ezartzen badute kirol-arloko lanbidean jarduteko derrigorrezkoa dela dagokion elkargoko kide egitea, lanbide bakoitzak

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

bere elkargoa eratzen duenetik aurrera debekatuta egongo da elkargoko kide izan gabe jardutea kirol-arloko lanbidean.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Lehen laguntza emateko kualifikazioa eskuratzeko betebeharra ez betetzea.

1.- Lege hau indarrean sartzen denean lege honek ezartzen duen lehen laguntza emateko kualifikaziorik ez duten kirol-arloko profesionalek 2020ko abenduaren 31ra arte jarraitu ahal izango dute lanbide-jardueran.

2.- Aipatutako epean prestakuntza jasotzeko betebeharra ez betetzea arrazoitzat hartu ahal izango da lanpostutik kentzeko (Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen babesean), eta, horrez gain, Langileen Estatutua onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52. artikuluko a) letran aipatzen den ezgaitasuna agertutzat hartzeko.

3.- Lege honetan xedatutakoa bete ezean, aurreko paragrafoan ezarritakoa gertatzeaz gain, bestelako erantzukizunak ere eskatu ahal izango dira.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Boluntarioak.

Lehen eta bigarren xedapen iragankorretan profesionalentzat ezarri diren behin-behineko gaikuntzak eta eskumen-aitorpenak aplikatu ahal izango zaizkie, halaber, lege honetan jasotako jarduera profesionaletan boluntario gisa dihardutenei.

SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Federazioen araudia

EAEko kirol-federazioek lege honetara egokitu behar dute euren araudia, edo, hala badagokio, dagozkion xedapenak onartu behar dituzte, eta Kirol-Erakundeen EAEko Erregistrora bidali, onartuak izan daitezen eta erregistroan inskriba daitezen 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratu dira Eskola-kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren 25. artikuluko 1., 2. eta 3. zenbakiak, bai eta lege honetan xedatutakoaren kontra doazen maila bereko edo maila baxuagoko arau guztiak ere.

AZKEN XEDAPENETIK LEHENA.- Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. artikulua aldatzea.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. artikuluari, administrazioako arau-hauste oso larriei buruzkoari, k) letra gehitzen zaio. Honela idatzita egongo da:

«k) Kirol-arloko lanbideak arautzen dituzten legeek eskatzen duten lanbide-kualifikaziorik gabe ematea zerbitzu profesionalak, edo profesionalak kontratatzerakoan ez eskatzea lanbide-kualifikazio derrigorrezkoa»

AZKEN XEDAPENETIK BIGARRENA.- Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 128. artikulua aldatzea.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 128. artikuluari, administrazioako arau-hauste larriei buruzkoari, h) eta i) letrak gehitzen zaizkio. Honela idatzita egongo da:

« h) Elkargoko kide egiteko edo Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena emateko betebeharra ez betetzea, bai eta kirol-legediak edo kirol-arloko lanbideetan jarduteko legeek ezartzen duten erantzukizun zibileko asegururik ez edukitzea ere»

i) Kirol-lanbideen izenak erabiltzeko betebeharra ez betetzea.

j) Ez betetzea EAEko kirol-lanbideetan sartzeko eta jarduteko legerian jasotako lanbide-betebeharrak, eta horrek kalte edo arrisku larria eragitea pertsonen osasunean eta segurtasunean.

**LEGE-PROIEKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoan
kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa**

k) Ez betetzea EAEko kirol-lanbideetan sartzeko eta jarduteko legerian jasotako betebeharrak, informazioaren eta publizitatearen arloari dagokionez.

l) Ez betetzea EAEko kirol-lanbideetan sartzeko eta jarduteko legerian jasotako betebeharrak, plataforma birtualen bidez edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez lanbidean jardutearen arloari dagokionez.

m) Boluntario moduan zerbitzuak ematea legean eskatutako lanbide-kualifikaziorik izan gabe, edo boluntarioak sartzea dagokion kualifikaziorik eskatu gabe».

AZKEN XEDAPENETIK HIRUGARRENA.- Lege hau garatu eta aplikatzeko gaikuntza orokorra.

Eusko Jaurlaritzari dagokio lege hau garatu eta betearazteko behar diren xedapen guztiak ematea, kirol-arloko eskumena duen sailaren titularra espresuki gaitzen den kasuetan izan ezik.

AZKEN XEDAPENETIK LAUGARRENA.- Kontzeptuak definitzeko eta lanbideen eskudantziak eta eremu materialak mugatzeko berariazko gaikuntza.

Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailari dagokio lege honetan erabiltzen diren kontzeptuak zehaztasunez definitzea eta lanbide bakoitzaren eskudantziak eta eremu materialak zehaztea.

AZKEN XEDAPENETIK BOSGARRENA.- Prestakuntza espezifikoa onartzeko prozedurarako berariazko gaikuntza.

Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailari dagokio lege honetan aipatzen den prestakuntza espezifikoa onartzeko prozedura zehaztea.

AZKEN XEDAPENETIK SEIGARRENA.- Indarrean jartzea.

- 1.- Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
- 2.- Hala ere, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera eskatuko zaizkie profesionalei lege honek arautzen dituen lanbideetan jarduteko gaikuntza ematen duten lanbide-kualifikazioak. Boluntarioei 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatuko zaizkie lanbide-kualifikazioak.



IV

**INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL VASCO APROBADO EL 23 DE FEBRERO DE 2016**

**TXOSTENA, 2016KO OTSAILAREN 23AN ONARTUTAKO EUSKAL KULTURA
ONDAREAREN LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO
HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**



OPINIÓN LEGAL: Viabilidad jurídica de que se vuelva a retomar por el Consejo de Gobierno el texto del proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, y remitirlo al Parlamento Vasco admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente.

110/2017 DDLCN-OL

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de octubre de 2017, desde la Asesoría Jurídica del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se dirigió a esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo una consulta con el siguiente texto de la solicitud: *Viabilidad jurídica de la posibilidad que se vuelva a aprobar por el Consejo de Gobierno el mismo anteproyecto de "Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco", en los mismos términos en los que se hizo en la anterior legislatura (sin modificaciones sustanciales), para su posterior remisión al Parlamento, sin la necesidad de realizar ningún trámite previo y admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente.*

Por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, se emite el presente informe, en virtud de las funciones atribuidas al Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco por el artículo 5.2 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco; de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.h) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, así como en base a las competencias atribuidas a la citada Dirección, por el artículo 14.1.a), del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y el Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

2. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DISTINCIÓN RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN ADMINISTRATIVO

El Capítulo IX del reglamento del Parlamento Vasco, trata de la caducidad de las tramitaciones parlamentarias, señalando, con carácter general, en su artículo 130, que

*«Disuelto el Parlamento Vasco o expirado su mandato, **caducarán todos los asuntos en tramitación** con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal.»*

Por tanto, independientemente de otros factores a los que luego atenderemos, el punto de partida de este análisis sobre las posibilidades de reiterar la iniciativa legislativa ejercida

mediante el correspondiente acuerdo de Consejo de Gobierno, debe ser el clarificar la naturaleza e incidencia de los proyectos y anteproyectos de Ley aprobados por Consejo de Gobierno.

Como decíamos en nuestros informes (“Opiniones legales” en términos del Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco) DDLCN 51/2017, 56/2017 y 61/2017, del contenido del artículo 130 del Reglamento del Parlamento Vasco, resulta evidente que acaecida su disolución o expirado su mandato por el trascurso del tiempo (a salvo las proposiciones de ley fruto de una iniciativa legislativa popular, que son prorrogadas conforme al inciso final del mismo en virtud del artículo 12 de la Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular) todas las demás iniciativas y, por tanto, todos los proyectos de ley remitidos por el Gobierno Vasco a él –en el ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, tal y como se reconoce en los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno (LG)– caducan en su tramitación parlamentaria.

Ahora bien, como también decíamos en aquél informe, siendo doctrina ya consolidada la referida a que –y salvo contadas excepciones– *«caducan»* los procedimientos, y *«prescriben»* los derechos, decaído un procedimiento por caducidad, el derecho pretendido puede volverse a ejercerse en otro procedimiento, en tanto en cuanto, el derecho no ha prescrito. Así, de entrada, *“es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de reiterar ante la nueva cámara salida del correspondiente procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho del Gobierno para su presentación”*.

Por tanto, como ya sucediera con el citado Informe DDLCN 51/2017 (del que extraeremos, aún a riesgo de resultar redundantes, la mayor parte de las consideraciones que verteremos en este que nos ocupa), este informe debe circunscribirse a los eventuales efectos de la retirada o de la disolución del Parlamento, exclusivamente, sobre los procedimientos administrativos que sirvieron de base a la presentación por el Gobierno Vasco del correspondiente proyectos de Ley. Es decir, debe atender o descartar, únicamente, los potenciales efectos sobre la tramitación gubernativa o administrativa, y a su expediente, con independencia de la terminación o de la caducidad producida con respecto a la tramitación parlamentaria y su respectivo expediente.

Así mismo, cumple advertir que **este informe se circunscribirá también a la validez formal o procedimental, a día de hoy, de los actos de tramitación efectuados de forma previa a la aprobación y remisión al Parlamento del correspondiente proyecto de ley, sin atender a la actualidad o vigencia, desde un punto de vista material o de fondo, del proyecto o de sus premisas jurídicas**. Cuestión esta última que, obviamente, trasciende el objeto y el alcance de esta consulta.

3. ESPECIAL NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES CUANDO ES APLICADO A LOS ANTEPROYECTOS DE LEY

Como ya sucediera en el caso analizado en las opiniones legales DDLCN 51/2017, 56/2017 y 61/2017, de lo anterior debe extraerse que el punto de partida más adecuado para dar contestación a la pregunta que se nos plantea debe ser el estudio de la exegesis procedimental de estos *“anteproyectos de ley”* generados dentro de Ejecutivo y de forma previa a su aprobación remisión al Parlamento como *“proyectos de ley”*, al amparo, principalmente, de lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de disposiciones generales del País Vasco (en adelante LPEDG). Incluyendo en el análisis todos los trámites preceptivos a los que se refieren

los artículos 8 a 11 y cuya culminación concluye con la toma en consideración del Consejo de Gobierno que decide su aprobación final o no conforme al artículo 13 del mismo texto. Y ello porque, como dispone su exposición de motivos *«en el caso de las leyes, el procedimiento administrativo sólo comprende la fase previa a la iniciación del procedimiento legislativo stricto sensu, cuya regulación está establecida en el Reglamento del Parlamento Vasco»*.

Ello no obstante, la nítida separación que venimos realizando respecto del procedimiento parlamentario caducado obliga a que este examen de las exigencias legales deba seguir la doctrina firmemente establecida de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), en el sentido de que *«cuando valora el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley toma en cuenta el distinto papel que aquél tiene en las normas legales y en las normas reglamentarias, tal y como se reconoce en la propia LPEDG»* (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 55). La diferencia con las iniciativas reglamentarias, en lo que ahora importa, introduce en el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley una obligada flexibilidad y un carácter eminentemente material y anti-formalista. Y ello porque: *«Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE) o el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas, imponen condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos: cuando menos, la memoria general, anejo de financiación e informe de control económico en aquellos proyectos que comportan un gravamen al presupuesto, el dictamen de este órgano consultivo y los informes que, con arreglo a la legislación, sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara)»* (Dictamen Nº: 120/2014 sobre anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca; párrafo 85).

La especial naturaleza de los anteproyectos de ley permitiría relativizar incluso dicha exigibilidad de los informes preceptivos. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, que desestimaba un recurso contra la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que carecía del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, estimó que: *«la ausencia de un determinado precedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero, en este caso, el efecto, que tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas Cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose producido esa denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el informe era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este Tribunal pueda interferirse en la valoración de la relevancia que un elemento de juicio tuvo para los parlamentarios»*. Y más adelante aplica la misma doctrina por lo que se refiere a la falta de remisión al Congreso por el Gobierno de la exposición de motivos y de la memoria explicativa del proyecto de ley. No faltó la remisión de estos antecedentes sino que se hizo tardíamente, a juicio de los recurrentes. Pero, aunque hubieran faltado, dice el Alto Tribunal que: *«El defecto indicado sólo tendría relevancia si hubiese menoscabado los derechos de Diputados o grupos parlamentarios del Congreso, y siendo los hechos, en caso de ser ciertos, plenamente conocidos por ellos sin que mediase protesta por su parte, hay que entender que los afectados no consideraron que existiese lesión de sus derechos, y que, si defecto hubo, fue convalidado por la misma Cámara, por lo que este Tribunal no puede entrar a examinar su existencia o relevancia»*. En otras palabras, el Tribunal entiende que sólo puede considerarse necesario aquello que la propia Cámara estima como tal.

Bien es cierto que, en nuestro ordenamiento, la referencia del artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara a los informes preceptivos es explícita, lo que habilita perfectamente a la Cámara para exigirlos como requisito de admisibilidad del proyecto de ley que le sea remitido. Lo que a su vez nos vuelve a remitir a la LPEDG y su exégesis, aunque sea desde una lectura flexible y finalista.

Siguiendo nuevamente a la COJUA *“para realizar su análisis —material y esencialmente finalista— del procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites ; (ii) una fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente afectadas por aquella; (iii) una fase de informes —preceptivos y facultativos—; y (iv) una fase final, en la que el órgano impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, establece el texto definitivo y elabora los documentos finales —memoria justificativa y económica—”* (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 56).

Tanto la COJUA como esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente dictaminado (con pronunciamientos esencialmente referidos a la tramitación de iniciativas reglamentarias) que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites realizados en el seno de dichos procedimientos. Así, es práctica común, validada tanto por esta DDLCN como por la COJUA, que los trámites iniciados por un Consejero o Consejera anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente que el Consejero o Consejera que lo sustituya en la legislatura siguiente remita a la aprobación en Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación iniciada en una legislatura se ha continuado en la siguiente sin interrupción ni solución de continuidad (por todos, entre los dictámenes de nuestro máximo órgano consultivo podemos citar: Dictamen 203/2009 sobre el proyecto Decreto de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi, párrafos 2 y 37; Dictamen 217/2009 sobre proyecto de Decreto por el que se regula el desarrollo y aplicación en la CAPV de la reglamentación comunitaria en el sector de frutas y hortalizas y el régimen de ayudas derivadas de la misma, párrafos 1 y 30; Dictamen 64/2013 «Proyecto de Decreto sobre el Consejo Económico y Social Vasco», párrafos 2 y 34).

Dicho de otra manera, la cuestión de la validez jurídica de esos actos de tramitación es independiente de que los mismos fueran o no anteriores a la disolución del Parlamento o a la conformación de un nuevo Gobierno, puesto que la Administración es una, con una única personalidad jurídica para toda su estructura y todas sus funciones (artículos 53 de la LG y 3.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público —en adelante LRJSP—), independientemente de los cambios de Gobierno como de titular de la misma. Si esto es así, la autoría de los actos de tramitación, y por tanto su validez, permanece inalterable no obstante el cambio de titular del Ejecutivo.

En sentido estricto, no es necesario ningún acto específico de *«conversión»*, *«conservación»* o *«convalidación»* de los trámites ya realizados en la legislatura anterior (figuras estas previstas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas —en adelante, LPACAP— como medidas de subsanación de los vicios de determinados actos), en la medida en que dichos trámites

realizados en el seno del procedimiento de elaboración no devienen nulos ni pierden valor por el cambio de legislatura (artículos 47, 48 y 49 de la LPACAP). Y ello excluye, a pesar de ser idéntica la lógica de economía procesal que subyace en la LPEDG, la necesidad de, en la medida de lo posible, conservar la validez de las actuaciones realizadas hasta ese momento (art. 4.2 LPEDG).

Consecuentemente, y toda vez que no es precisa esa «economía procedimental de conservación», sólo será preciso la realización por el órgano competente de trámites procedentes para el impulso del procedimiento en sus diversas fases, lo sea ordenando su continuación o lo sea con ocasión de cualquiera de los hitos del procedimiento marcados por la LPEDG y la LG (orden de inicio, orden de aprobación previa, orden de solicitud de dictamen de la COJUA, proposición del texto definitivo de la norma al Consejo de Gobierno...).

Estos actos de impulso de la tramitación, en sí mismos, implican una asunción de la tramitación precedente y, por tanto, una valoración de su eficacia formal y material, que no sólo debe conectarse con el cumplimiento formal del expediente, sino que debe también atender a la utilidad real del mismo al objeto de dotar al órgano decisor de los elementos de juicio adecuados para ajustar la norma a la coyuntura de cada momento presente, ya sea el decisor el órgano Gobierno, en el caso de las normas reglamentarias, o lo sea aquél el Parlamento en el caso de los proyectos de Ley.

Por consiguiente, para decidir si se considera oportuno continuar con la tramitación desde un momento concreto de un procedimiento anterior a fin de que no sea preciso reiniciarlo nuevamente, o para asumir y dar por buenos todos los trámites ya realizados, **deben tenerse en cuenta todos los factores circunstanciales que en el procedimiento concurren** en el momento de tal decisión.

Una de estos factores circunstanciales será la constatación de si la norma proyectada ha sido objeto de anteriores tramitaciones que impliquen una duplicidad de actuaciones, al objeto de evitar duplicar trámites innecesariamente y agilizar el procedimiento o, si razones de urgencia debidamente acreditadas, justifican la necesidad de prescindir de alguno de los trámites, incluso cuando no se hubieran llevado a cabo antes, salvo que éstos vengan exigidos por normas con rango de Ley, so pena de nulidad (Dictamen nº 129/2015 de la COJUA sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco, párrafos 55, 59, 63 u 85),

También habrá de considerarse si en el ínterin han sobrevenido o no importantes cambios normativos o sociales que determinen la pérdida de actualidad o valor informativo de los trámites realizados hasta la fecha.

Del mismo modo, es también evidente que, sin soslayar las finalidades materiales a las que responde el proceso de elaboración, el hecho de simplificar o no la tramitación administrativa debe ser un criterio relevante a la hora de realizar esa valoración, pues resultan plenamente aplicables al procedimiento de elaboración de la norma los mismos principios de buena regulación que son aplicables a las normas que serán fruto de dicho procedimiento, de forma que *«en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia»* (artículo 129 de la LPACAP).

En todo caso, lo dicho hasta ahora es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento, desde la orden de inicio hasta el acto de

aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos a todos ellos, incluido este último de remisión, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material, en el sentido de los párrafos anteriores.

Pues bien, cuando hablamos de «*anteproyectos y proyectos de ley*», que implican la remisión al Parlamento como otra fase añadida posterior al procedimiento de elaboración, la valoración antes mencionada atañe tanto al Consejero o Consejera (que tendrá la responsabilidad durante el procedimiento previo y también en la decisión de su elevación al Consejo de Gobierno), como al propio Gobierno, como titular de la iniciativa legislativa ante la Cámara (que deberá efectuar esa misma valoración a la hora de aprobarlo y de decidir el momento de la remisión al órgano legislativo junto con los documentos preceptivos o la realización de cualquier otra actuación complementaria, tal y como dispone el artículo 13 LPEDG). Será por tanto, responsabilidad de dichos órganos, cada cual en el momento correspondiente, despejar cualquier duda que pudiera existir al respecto, incluso si para ello fuera necesario recabar, de sus propios servicios o de otros órganos, los informes que resulten pertinentes o si fuera necesario requerir algún trámite adicional o reiterar cualquiera de los ya efectuados.

Y ello, sin perder de vista que, como ya hemos dejado sentado, la importancia de una eventual modificación sobrevenida del ordenamiento o cualquier otra circunstancia coyuntural que se hubiera dado en el ínterin y que afectara al proyecto, debería ser sopesada de una forma relativa, puesto que el «*proyecto de ley*», aún después de ser remitido a la Cámara y transformarse el procedimiento en parlamentario, ha de ser sometido a la tramitación prevista en aquella sede; durante la cuál, y previo a su aprobación final y transformación en Ley, puede ser sujeto de enmienda por la Cámara; circunstancia esta, que en ese momento, permite realizar los ajustes que resulten pertinentes.

En el caso concreto que se informa, la afirmación de la validez formal de los actos de tramitación previos que se pueda deducir de este Informe no releva al Departamento promotor, en tanto que responsable del impulso del procedimiento y detentor del conocimiento sectorial especializado en el asunto, de ponderar si estas afirmaciones sobre la cuestión de fondo son o no correcta.

Ya hemos advertido que no es objeto de este informe el análisis material o de fondo del proyecto concreto por el que ahora se nos pregunta, si bien en una preliminar aproximación al mismo, y a partir exclusivamente de la presunción de que la consulta que se nos dirige se sustenta sobre una ponderación previa de la oportunidad de relanzar el texto aprobado por el anterior Consejo de Gobierno, en su sesión de 23 de febrero de 2016, no parece que existan razones de fondo, o cambios normativos relevantes que, independientemente de la mentada validez formal de los efectuados en su día, impidan a día de hoy la aprobación del mismo texto que fue aprobado en su día.

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA E INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO COMO TRÁMITES ESPECÍFICOS.

Aunque la Disposición Adicional Segunda de la LEDCG, por razones estrictamente históricas (se aprobó un año antes de que se promulgara la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi o LCOJUE) se remite al Decreto 187/1999, de 13 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, es la

LCOJUA (en concreto su artículo 3.1.a) la que, fuera de la LEDCG pero por remisión de la misma, regula la cuestión de la preceptividad del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA).

Conforme al citado artículo, la COJUA *«debe ser consultada»* en relación con todos los *«anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos...»* (excepto los de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y los de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales). Hasta aquí, lo dicho hasta ahora sobre el resto de trámites sería también aplicable al dictamen del alto órgano consultivo, cuya validez jurídica no resulta alterada por el cambio de Gobierno o por la caducidad de los expedientes parlamentarios a resultas de la disolución de la cámara.

Ahora bien, la especial naturaleza de este dictamen, ratificada por la jurisprudencia constitucional, hace que nuestro informe deba dedicarle un apartado específico. Como la propia COJUA explicaba en su dictamen nº 084/2003 sobre el anteproyecto de Ley de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco (párrafo 25), la interpretación que la jurisprudencia constitucional ha hecho del artículo 107 de la Constitución Española (CE) *«a juicio del Tribunal Constitucional, supone una suerte de constitucionalización de la "función consultiva superior", no del órgano, Consejo de Estado. Es el alto asesoramiento a la administración activa el que se convierte, por mor de aquél precepto, en un instrumento de relevancia constitucional, al configurar una "importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo»*. Se trata, afirma el Tribunal, *«...de una función muy cualificada que permite su subsunción en la categoría de norma básica del régimen jurídico de las administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común (artículo 149.1.18ª CE)»*.

Es esta singular y cualificada naturaleza del trámite la que justifica que el dictamen de la COJUA merezca una mención específica (junto con el informe previo de control económico normativo de la OCE) por el artículo 133 del reglamento del Parlamento entre los documentos que deben acompañar a todo proyecto de ley que sea remitido a la cámara. Y es la razón también que motiva la mención introducida en la LG por la Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, al dar a los artículos 56 y 57 de la LG la siguiente redacción:

Artículo 56

1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que haya dictado la orden de iniciación.

2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios.

3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.

Artículo 57

1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe.

2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley.

Cabe, por tanto, preguntarse si estos artículos implican especiales obligaciones de comunicación al Parlamento cuando se pretenda rescatar la tramitación de proyectos de ley elaborados durante legislaturas anteriores. De entrada, debe distinguirse (i) si de lo que hablamos es de continuar una tramitación previamente iniciada en la que no se hubieran producido aún la aprobación previa del texto (en cuyo caso será necesario cumplimentar la comunicación requerida por el artículo 56.1 LG), o bien si dicho procedimiento tenía aún pendiente el trámite de solicitud de dictamen a la COJUA (en cuyo caso sería necesario remitir al Parlamento todo lo dispuesto por el artículo 56.2 LG) (ii) de la situación en que nos encontramos ante un anteproyecto o un proyecto que sólo tuviera pendiente la aprobación del Consejo de Gobierno o la de adoptar el acuerdo por este órgano de su remisión al Parlamento, bien por vez primera o bien por reiteración de otro acuerdo de remisión previamente efectuada (en cuyo caso nos encontraríamos ya en los casos previstos por los artículos 56.3 y 57 LG, y 133 del Reglamento del Parlamento).

Así mismo, cuando el anteproyecto o proyecto en cuestión hubiera llegado a ser dictaminado por la COJUA, a la vista de lo previsto en el artículo 29 LCOJUA, cabe también preguntarse si es suficiente en los casos anteriores con adjuntar el dictamen emitido en una legislatura anterior o si sería necesario la solicitud de un nuevo dictamen.

Dicho precepto determina que: «Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que se ve es objeto de modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios» Por tanto, del literal de la norma cabe colegir que, independientemente de que el dictamen hubiera sido o no emitido bajo un Gabinete anterior, **procederá un nuevo examen sólo si en la propuesta de proyecto de ley que se vaya a presentar de nuevo a Consejo de Gobierno para su aprobación o remisión concurren «modificaciones sustanciales»**, concepto jurídico indeterminado para cuya concreción, siguiendo el literal del artículo y como tiene explicado la propia COJUA, habrá de estarse a la conexión de aquellas con el previo anterior dictamen.

A este respecto, resulta relevante atender a la doctrina de la propia COJUA respecto a la interpretación que debe darse al artículo 29 LCOJUA, siendo esta una doctrina firmemente establecida en sus dictámenes y acuerdos de inadmisión. Por todos, podemos traer a este informe las palabras del reciente Acuerdo nº 4/2017 del Pleno de la COJUA, al inadmitir una solicitud de dictamen en la sesión del día 26 de abril de 2017:

7. O, en otras palabras, como se señaló en el Dictamen 10/2000, la Comisión sólo tendrá que volver a examinar el asunto cuando de su nueva elaboración se colija la existencia de elementos o aspectos sustantivos distintos de los examinados en su anterior intervención y cuya relevancia reclamen un nuevo análisis.

8. Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en relación con el Consejo de Estado y, por tanto, plenamente aplicable a los supuestos de intervención de esta Comisión.

9. De acuerdo con dicha doctrina, en síntesis, procede la nueva consulta cuando "...las innovaciones introducidas tras el dictamen del Consejo de Estado no han sido sugeridas por éste, son ajenas a los términos de la consulta y, además, ostentan una relevancia sustancial" (STS de 27 de mayo de 1993 —RJ 1993\102040—).

10. Los supuestos han sido precisados en posteriores pronunciamientos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya "que no es necesaria una nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen modificaciones no sustanciales (...), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición general de que se trate (...)."

11. La misma STS de 10 de marzo de 2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general no sean sustanciales resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de Estado, "entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (...)."

12. E invoca también la STS de 31 de enero de 2001, por referencia a la Sentencia de 27 de mayo de 1993, valorando las modificaciones allí producidas, que no requerían nuevo dictamen del Consejo de Estado, "ya que es necesario compatibilizar el carácter final de dicho dictamen, como juicio de síntesis de todas las cuestiones planteadas e informes específicos emitidos con anterioridad, con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno (...), de la que resultaría desapoderado este si hubiese de ajustarse literalmente en la redacción definitiva a dicho dictamen, pues sólo si se regulasen materias no incluidas en el Proyecto remitido a dictamen o su ordenación resultase completa o sustancialmente diferente, sin haber sido sugerida por el propio Consejo de Estado, debería recabarse sobre tales extremos nuevo informe, ya que el titular de la potestad reglamentaria ostenta la facultad de introducir en el texto remitido al Consejo de Estado las reformas que considere adecuadas para la redacción final sin otro límite que el expresado (...)."

13. La precedente doctrina sigue plenamente vigente, tal y como se desprende de la lectura de la STS de 22 de diciembre de 2016 (RJ 2017/106).

14. Procede, por tanto, examinar el texto del proyecto sometido a consulta, conforme al señalado criterio de la conexión de las innovaciones con las consideraciones del dictamen anterior, esto es, si derivan de las sugerencias del dictamen de la Comisión o si, ajenas a este, ostentan una relevancia sustancial que exija una nueva intervención preceptiva.»

También se debe de hacer en este apartado, en tanto que informe explícitamente mencionado por el artículo 133 del Reglamento del Parlamento, al informe de control económico normativo que debe hacer la Oficina de Centro Económico a los «anteproyectos de ley» en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEyC).

Este informe aunque previo al informe que ha de realizar la COJUA (art. 27.1 LCEyC), es también de singular trascendencia pues la determinación del contenido o del impacto significativo que los «anteproyectos de ley» puedan tener en la actividad económica pueden determinar la preceptividad de la emisión de tal informe (art. 41 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley 14/1994) o la necesaria información y audiencia a la ciudadanía del proyecto (art. 133.4 LPACAP).

Este informe de control económico normativo, tiene más que ver con el contexto que con el texto mismo del «proyecto de ley», pues su finalidad no es otra que hacer un pronunciamiento sobre si las disposiciones en él previstas repercuten o afectan directa o indirectamente, en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco así como en el régimen presupuestario y de ejecución del gasto e ingreso público; siendo de singular pertinencia el dictaminar sobre «la incidencia o repercusión de la norma o disposición en el régimen de la Tesorería General del País Vasco, patrimonial, contable, de contratación, tributario propio, de endeudamiento o de concesión de garantías vigente en cada momento» (art. 26.1.b de la LCEyC) o «la razonabilidad financiera en términos cuantificables de la norma o disposición propuesta.» (art. 26.1.b de la LCEyC); aspecto este último que, entre otros muchos matices, tiene repercusión en la normativa denominada de «Estabilidad financiera de las Administraciones Publicas».

Es bien cierto que aunque este informe preceptivo fuera desfavorable y obstativo, el «anteproyecto de ley» podría continuar su *iter* procedimental hasta su elevación por el Consejero o Consejera competente a Consejo de Gobierno, el cual es libérrimo en su decisión de aprobación o no según venimos exponiendo a lo largo de este informe.

Ahora bien, cabe reiterarse la ya esencial pregunta que pretende dar respuesta ente informe: ¿es precisa su nueva emisión de informe OCE en relación con un «proyecto de ley» ya aprobado por Consejo de Gobierno e independientemente de si este tomó el acuerdo de su remisión al Parlamento o no? ¿podría bastar con el informe OCE emitido previamente incluso aunque, remitido éste al Parlamento, su expediente parlamentario hubiera caducado por la disolución de la Cámara?

La normativa que regula este control económico normativo no establece de forma específica sobre la necesidad de nuevo pronunciamiento. Solo hace referencia en el artículo 27.1 *in fine* de la LCEyC, a los supuestos de proyectos normativos en que deba dictaminar la COJUA y, toda vez que esta es la última en pronunciarse, «...con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo.».

Es decir, sólo «deberá comunicarse», sin más trámites, la modificación introducida. No se debe formalizar un nuevo dictamen, y ello con independencia que el Consejero competente en materia de Hacienda deba conocer de estas modificaciones por vía interna departamento y haga valer sus consideraciones en el Consejo de Gobierno.

Consecuentemente, y teniendo en cuenta las trascendentes repercusiones que cualquier normativa puede tener en la economía, quien esto informa cree que se debe ser consecuente con lo expuesto en los párrafos precedentes de este apartado, de forma tal que (i) si la COJUA no considera procedente pronunciarse sobre el reenvío de un proyecto de ley ya aprobado por Consejo de Gobierno al Parlamento, tampoco parece procedente que lo haga la OCE, y (ii) caso de que la COJUA decidiera que ha de pronunciarse sobre ese proyectos de ley, tampoco parece procedente que se pronuncie la OCE, sin perjuicio de que le sea comunicado el dictamen o parecer de ésta a los efectos legales oportunos, así como las modificaciones que en su caso se introdujeran.

Todo ello sin perjuicio de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley14/1994, existe un deber de remisión del anteproyecto de ley a la OCE, a los efectos de su conocimiento del trámite y la valoración de la existencia o ausencia de contenido económico.

5. LA DISTINCIÓN ENTRE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE LEY Y EL ACTO DE REMISIÓN A LA CÁMARA

Conforme a nuestra LG, es atribución de los Consejeros o Consejeras la presentación al Gobierno de anteproyectos que se deberán «*proponer para su aprobación por el Gobierno [como] Proyectos de Ley*» (artículo 26.8 LG en relación con el 55 LG). Los anteproyectos de ley «*se someterán a la toma en consideración del Consejo de Gobierno, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su redacción final y las actuaciones que, en su caso, hayan de seguirse en su tramitación ulterior hasta dicha aprobación*» (artículo 13 LPEDG). Por su parte, corresponde el Gobierno «*aprobar los Proyectos de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara*» (artículo 18.a LG).

En efecto, tanto la especial consideración de los anteproyectos de ley en comparación con la tramitación de las iniciativas reglamentarias, como la preceptividad de que sean tomados en consideración por el Consejo de Gobierno es un plus de especialidad en la tramitación que reconoce la propia LPEDG al incluir el artículo 13 dentro de su Capítulo III, de «*Disposiciones Especiales*». Y ello porque, tal y como refiere en su Exposición de Motivos: «*Dada la especial relevancia de las leyes, se ha previsto con respecto a ellas un trámite específico de toma en consideración por el Consejo de Gobierno de los anteproyectos de ley. Su finalidad es que el órgano que ha de ejercer la iniciativa legislativa asuma y oriente la planificación ulterior del procedimiento de elaboración a la vista de un texto ya articulado y sin perjuicio de las modificaciones que resulten de los trámites de audiencia, consulta e informe posteriores*».

En este punto cabe preguntarse de nuevo cuál es la diferencia jurídica entre «*anteproyecto de ley*» objeto de tramitación administrativa y aprobado o no como «*proyecto de ley*», por un lado, y el sustancial «*proyecto de ley*» que se remite al Parlamento, por otro. De entrada, debemos aclarar que no resulta esencialmente relevante para el presente informe la distinción nominal que de habitual se hace entre «*anteproyectos*» y «*proyectos*» –en los artículos de nuestra LG arriba citados parece extraerse que en el Ordenamiento de la CAE llama «*anteproyecto*» a los textos elaborados por los departamentos, que son presentados al Gobierno como propuestas para su adopción como «*proyectos de ley*», convirtiéndose en tales en el momento en que cuentan con la aprobación de dicho Órgano–. Sí resulta más relevante y sustancial, sin embargo, la distinción entre el «*texto*» en su fase de elaboración administrativa hasta su culminación en la aprobación por el Consejo de Gobierno y el «*documento objeto de*

ulterior remisión al Parlamento», con la consiguiente y definitiva conversión en objeto de tramitación parlamentaria, en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa del Ejecutivo.

A este respecto, existe abundante documentación doctrinal, pero en la actualidad –y a salvo de exegesis más doctas– resulta bastante esclarecedor lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo el epígrafe «*Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley*» dice:

«El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.

La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. (...)»

Aunque la primera parte de este artículo puede considerarse de los preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado (por lo que no sería de aplicación a la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos de la Disposición final primera LPACAP), no resulta contradictorio en ese punto con nuestra LG. Es decir, los Órganos de gobierno ejercen en dos fases la iniciativa legislativa que, en el presente caso, le confieren al Gobierno Vasco los artículos 16 y 18.a) LG: una primera e interna «*mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley*», y otra segunda y posterior con «*la ulterior remisión de los proyectos de ley*» al Parlamento Vasco.

Estas dos fases –y el producto resultante de sus tramitaciones– tienen, sin lugar a dudas, su trascendencia, pues reflejan la dicotomía del actuar del Ejecutivo en su doble faceta, pues por un lado es el órgano de dirección política y, por otro, es el órgano que culmina la estructura administrativa pública.

Así, se puede considerar que un «*anteproyecto de Ley*» es fruto de una actividad interna administrativa, con notables criterios de discrecionalidad pero sometida a programación (planificación normativa: art. 132 LPACAP) y un específico procedimiento (LPEDG), cuya ausencia puede ocasionar vicios de nulidad –incluso su impugnación en vía jurisdiccional–, y cuya aprobación por Consejo de Gobierno (y transformación en «*proyecto de ley*» en la terminología de nuestra LG) le da ya un carácter acto jurídico final –art. 13 LPEDG–, que bien pudiera concluir su tramitación y efectos en ese momento.

Naturalmente, la finalidad última de los «*anteproyectos de Ley*», va más allá de su simple aprobación o conclusión del *iter* procedimental regulado en la LPEDG. Es decir, trasciende más allá de su aprobación y lánguida residencia como «*proyecto de ley aprobado*» en los servicios administrativos de Consejo de Gobierno (o de su Secretaría). Su pretensión es transformar el ordenamiento jurídico en un aspecto determinado –el objeto y finalidad del anteproyecto de ley–, y ello en base a un programa de Gobierno definido en función de las demandas reales de la sociedad y de la ciudadanía a la que sirve.

A esta finalidad novadora contribuye la remisión al Parlamento del «*proyecto de ley*», acto que se enmarca dentro de los denominados «*actos políticos*» cuya potestad no está reglada actualmente por norma alguna de Derecho Administrativo. Y ello, porque los preceptos referidos a cómo y junto a qué documentación ha de remitirse el proyecto al Parlamento están tan en la frontera de ambos mundos que prácticamente se pueden considerar como de Derecho

parlamentario (artículo 57 LG como correlato del artículo 133 del Reglamento del Parlamento, artículo 58 LG como regulación del propio procedimiento parlamentario).

En este sentido el acto de remisión es un acto que concede un *plus* que se añade al ya de por sí ya perfecto del «*proyecto de ley*» aprobado por el Gobierno, con una finalidad superior cual es el dar contenido al programa legislativo contenido en el Programa de Gobierno en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el ordenamiento jurídico le reconoce.

La naturaleza «*política*» de este «*acuerdo de remisión*» del Consejo de Gobierno de un «*proyecto de ley*» al Parlamento, se halla refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, entre otras, en su Sentencia de 15 de marzo de 1990 (RTC 1990, 45), cuyo ponente fue el Excmo. Sr. LEGUINA VILLA, manifiesta:

«... no toda actuación del gobierno, cuyas funciones se enuncian en el artículo 97 del Texto Constitucional, está sujeta al Derecho administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley u otros semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado artículo 97 CE. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a una u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes».

En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, que aunque centrada fundamentalmente en los supuestos de relaciones entre los poderes del Estado, ha dictado pronunciamientos referidos a supuestos de denegación de la solicitud de ejercicio de la iniciativa legislativa o el ejercicio de ésta (SSTS 13 marzo 1990 [RJ 1990, 1938]; 25 octubre 1990 [RJ 1990, 7972]; y 10 diciembre 1991 [RJ 1991, 9254]).

De ello podemos obtener ya algunas conclusiones:

- I. La tramitación de los anteproyectos de Ley no se ve, en principio, afectada por la caducidad de los procedimientos parlamentarios fruto de la disolución del Parlamento.
- II. No se puede obviar la tramitación establecida en la LPEDG, pero en la medida de lo posible, y sin perjudicar a su finalidad material, debe entenderse que los trámites efectuados con anterioridad conservan plenamente su valor, sin perjuicio de que ello deba ser siempre objeto de valoración por el órgano al que en cada caso corresponde el impulso del procedimiento y teniendo en cuenta, además, la especial consideración flexible y antiformalista que el procedimiento tiene en esos casos.
- III. Los «*anteproyectos de ley*» presentados al Consejo de Gobierno y aprobados por este como «*proyectos de ley*», independientemente de su remisión o no al Parlamento para continuar su tramitación en sede parlamentaria, son actos administrativos válidos (aunque no eficaces en la innovación del ordenamiento jurídico) y quedan residenciados en dicho Consejo de Gobierno, sin fecha de caducidad alguna, ya que suponen el fin del *iter* procedimental previsto en la LPEDG.
- IV. La toma en consideración y aprobación final del «*anteproyecto de ley*» por el Consejo de Gobierno puede ser anterior o simultánea en el tiempo a la decisión de su remisión al Parlamento como «*proyectos de ley*».

- V. Una vez aprobado por Consejo de Gobierno un «proyecto de ley», la decisión de su remisión a Parlamento excede de la función administrativa de éste, debiendo ser considerado como un «acto político», y por lo tanto no sujeto a mandato normativo alguno sino, más bien, a criterios de oportunidad, sin perjuicio de las normas que especifican la documentación que debe acompañar esa remisión y que determinarán, en todo caso, su admisión o no por la mesa de la Cámara.

6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS «PROYECTOS DE LEY» REMITIDOS AL PARLAMENTO TRAS SU DISOLUCIÓN.

Ya se ha comentado anteriormente que tras la disolución del Parlamento Vasco o expirado su mandato, caducarán en cuanto a su expediente parlamentario todos los asuntos en tramitación, y entre estos asuntos los «proyectos de ley» remitidos antes de su disolución. Entonces, cabe preguntarse en qué situación quedan, desde el punto de vista del Derecho administrativo, los «proyectos de ley» aprobados en Consejo de Gobierno y que posteriormente fueron remitidos como iniciativas legislativas al Parlamento, una vez que este es disuelto.

A juicio de quien esto informa tales «proyectos de ley» ya aprobados por Consejo de Gobierno cumplen, también después de la disolución del Parlamento, con la finalidad para la que se han previsto en la fase, llamémosla administrativa. Esto es, y en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPEDG, prever el contenido tanto de forma como de fondo de una previsible y concreta iniciativa legislativa mediante el método de:

«...aplicar a la redacción de las leyes en el seno del ejecutivo la misma metodología que a las disposiciones reglamentarias. De ese modo se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone. Sobre esa base más precisa y segura corresponde a la Cámara parlamentaria su enmienda y aprobación.»

La razón de ello es la decisión de iniciar la elaboración de las normas, tanto en su fase administrativa como en la puesta en marcha de su tramitación parlamentaria mediante la remisión al Parlamento, “... no se concibe como una mera formalidad, sino como un acto de gran trascendencia jurídica y política que ha de basarse en una mínima reflexión sobre la necesidad y viabilidad de aquéllas. Por eso, se exige que tenga en cuenta los condicionamientos de toda clase (estudios, informes, audiencias, consultas, negociaciones, etc.) que puedan incidir en la fijación de su contenido, y una estimación del coste y eficacia de su puesta en vigor no sólo en relación con las Administraciones públicas, sino, también, para los ciudadanos y la economía en general» (Exposición de Motivos de la LPEDG).

Ahora bien, y es aquí donde entra en valor la alta dirección política de la que es titular el Consejo de Gobierno, ¿puede asumirse por el Consejo de Gobierno un «anteproyecto de ley» tramitado o incluso un «proyecto de ley» ya aprobado anteriormente y remitirlo de nuevo al Parlamento como «proyecto de ley»? ¿Puede hacerlo, incluso cuando dicho proyecto de Ley hubiera sido remitido ya previamente al Parlamento?

Según venimos exponiendo, independientemente de su “gran trascendencia”, en términos literales de la LPEDG, la decisión de asumir como propio un proyecto anterior y de decidir su remisión o no al nuevo Parlamento, reafirmando como iniciativa legislativa necesaria y

oportuna –y por lo tanto vigente– conforme al Programa de Gobierno surgido de ese nuevo Parlamento, es **una decisión eminentemente política**.

Cierto es que **la remisión al Parlamento de cualquier proyecto de ley deberá acompañarse siempre, a fin de que no haya dudas respecto a la admisión del mismo por la Mesa de la Cámara, de los antecedentes y documentos exigidos por los artículos 57 LG y 133 del Reglamento del Parlamento. Pero a partir de ahí, es también una decisión eminentemente política la de asumir ese proyecto y esa tramitación administrativa llevada a cabo con anterioridad**. Decisión de carácter político adoptada por el nuevo Gobierno, todo más cuando en su faceta de dirección política y superior de la misma Administración que los adoptó originalmente –Administración que actúa siempre con personalidad única a pesar del cambio de Gobierno–, que conlleva el afirmar la suficiencia, actualidad y vigencia de lo ya tramitado en la fase administrativa.

Es decir, supuesta la validez jurídica de los actos de tramitación efectuados, tales actos no se han visto afectados ni por el cambio de Gobierno ni por la disolución del Parlamento.

Por tanto, en opinión de quien esto suscribe, en la respuesta a la cuestión planteada a esta Dirección no se podrá *«obviar»* y será preceptivo la tramitación de la LPEDG aunque, tanto la Consejera o Consejero en su decisión de elevar la propuesta correspondiente al Consejo de Gobierno, como el Consejo de Gobierno al adoptar, en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa, el acuerdo de remisión al Parlamento, habrá de tener en cuenta y aprovechar los trámites válidamente efectuados con anterioridad, toda vez que se constate que tal *«proyecto de ley»* se adecue a las previsión política del nuevo Consejo de Gobierno a realizar durante su mandato, que siga siendo precisa su implementación en el ordenamiento jurídico y que los elementos esenciales del texto del *«proyecto de ley»* no se hayan visto afectados por normativa surgida con posterioridad a su aprobación. Valoración esta que habrá de hacerse, en todo caso, desde criterios materiales y de estricta oportunidad y conveniencia.

7. CONCLUSIÓN

A modo de resumen: el actual y vigente Consejo de Gobierno, puede en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el reconocen los artículos 16 y 18.a) de la LG acordar la aprobación y remisión al Parlamento de un *«proyecto de ley»* aprobado ya con anterioridad, previa elevación a él por el o la Consejera competente (o por varios si fueran varios los competentes) de la correspondiente propuesta.

Esta elevación por uno o varios miembros del Consejo de Gobierno ha de tener por finalidad, además de reflejar la decisión formal de pertinencia y propuesta recogida en el art. 26.8 LG, la de aseverar tanto la vigencia de la viabilidad normativa (es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión) como la vigencia de los trámites anteriormente efectuados y la oportunidad y necesidad innovadora del ordenamiento jurídico que pretende, de acuerdo con los términos previstos en el proyecto político del Gobierno actual.

Así, los *«proyectos de ley»* ya aprobados y residenciados en el Consejo de Gobierno, volverán a ser desde una perspectiva parlamentaria nuevos *«proyectos de ley»* al ser remitidos, con todos sus antecedentes, al Parlamento, iniciándose de nuevo la tramitación parlamentaria caducada en su día por la disolución de este.

No podemos concluir este informe sin hacer mención a que el nuevo texto del **Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, aprobado en el anterior Consejo de Gobierno en su sesión de 23 de febrero de 2016**, incluye algunas modificaciones en su texto, y sobre las cuales hacemos nuestro el pronunciamiento referido en el Apartado 26 de la Memoria que lo acompaña; esto es que *«las modificaciones propuestas no son sustanciales ni desde el punto de vista cuantitativo ni desde el punto de vista cualitativo.»*.

En efectos, tales modificaciones –concretamente especificadas en los Apartados 22 a 24 de la Memoria– se pueden agrupar en tres ámbitos: (i) garantía de los derechos lingüísticos, (ii) incorporación de tres nuevas titulaciones académicas aprobadas por el Gobierno con posterioridad a la caducidad del trámite parlamentario y que alteran la denominación de las titulaciones prescrita en el anteproyecto de ley y (iii) modificación de la entrada en vigor de la Ley y de exigencia de las cualificaciones profesionales.

Su introducción obedece, esencialmente, a que tales modificaciones son: **a)** consecuencia necesaria del mero transcurso del tiempo, es decir, se **alteran la fechas** previsibles de entrada en vigor, pero sin que ello suponga una variación sobre los plazos previstos en el anterior Proyecto de ley; **b)** propuestas de modificación que se refieren a **derechos lingüísticos preexistentes al anterior Proyecto de ley** y cuya introducción ahora obedece más a una explicitación y afectación de tales vigentes derechos en la regulación del Proyecto de Ley que a una nueva ordenación o desarrollo de nuestra legislación lingüística; y **c)** la introducción de las **referencias a las tres nuevas titulaciones académicas**, no es más que la adecuación del Proyecto de ley a los conceptos y denominaciones jurídicos ya vigentes en el ordenamiento.

Este es mi informe que emito y someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **UNANUE ORTEGA, XABIER**
Fecha de la firma: **25/10/2017 11:34:23**

Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **JESUS MARIA FERNANDEZ AGUADO**
Fecha de la firma: **25/10/2017 13:16:17**

Validación de la firma:  **Correcta**



LEGE-IRITZIA: Txostena, Gobernu Kontseiluak, lehenago egindako prozedura-izapideak baliozkotzat jota, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko lege-proiektuaren testua berriz hartu eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzearen bideragarritasun juridikoari buruzkoa.

110/2017 LGAKZ-LI

1. AURREKARIAK

2017ko urriaren 24an, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Aholkularitza Juridikoak kontsulta bat helarazi zion Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honi eskaera-testu honekin: *Aztertzea juridikoki bideragarria ote den Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko lege-proiektuaren testua berriro onartzea, aurreko legegintzaldiko termino berberetan (funtsezko aldaketarik gabe), eta hura Eusko Legebiltzarrera igortzea, aurretik beste izapiderik egin gabe eta aurrekoan egindako prozedura-izapideak baliozkotzat emanda.*

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikitako Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak ematen du txosten hau, ekainaren 2ko 7/2016 Legeak (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa antolatzekoa) 5.2 artikuluan Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiari ezartzen dizkion eginkizunak betez, Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen) 6.1.h artikuluan ezarritakoarekin bat, eta, halaber, apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren (Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa) 14.1.a artikuluan eta apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuan (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoarena) gorago aipatutako zuzendaritzari ematen zaizkion eskumenetan oinarrituta.

2. PROZEDURA PARLAMENTARIOAREN IRAUNGIPENA, ETA ADMINISTRAZIOKO PROZEDURAREKIKO BEREIZKETA

Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren IX. kapituluak *Legebiltzarreko tramitazioen iraungipena* du izenburua, eta honako hau dio, arau orokor gisa, kapitulu horretako **130. artikulua**:

*«Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan, **iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak**, salbu eta Diputazio Iraunkorrak aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak».*

Horrenbestez, ondoren aztertuko ditugun beste zenbait faktore gorabehera, Gobernu Kontseiluan hartutako erabakiaren ondorioz legegintzako ekimen hori berriz aurkezteko aukerei buruzko analisiaren abiapuntua Gobernu Kontseiluak onetsitako lege-proiektu eta -aurreproiektuen izaera eta eragina argitzea da.

LGAKZ 51/2017, 56/2017 eta 61/2017 txostenetan («Lege-iritzia», Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoari buruzko apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuan xedatutakoaren terminoetan) adierazi genuen bezala –Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 130. artikulua edukari buruzkoa–, nabarmena da denbora igarotzeagatik desegitea edo agintaldiaren iraungitzea gertatzean (salbu legegintzako herri-ekimenen ondoriozko lege-proposamenak, luzatu egiten baitzaie epea azken hitz-tartean adierazitakoa betez, Legegintzako Herri Ekimena arautzeari buruzko ekainaren 30eko 10/2016 Legearen 12. artikuluan ezarritakoaren babesean), gainerako ekimen guztiak, eta, horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrera igorritako lege-proiektu guztiak iraungi egiten dira izapidetze parlamentarioan –Jaurlaritzak badu legegintzako ekimenaren ahala, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 16. eta 18.a artikuluetan xedatutakoari jarraikiz–.

Txosten hartan esaten genuen bezala, jada sendotuta dagoen doktrinaren arabera, «*iraungi*» prozedurak iraungitzen dira eta «*preskribatu*» eskubideak preskribatzen dira, aldi bakanetan izan ezik. Hala, prozedura bat iraungita egoteagatik bertan behera geratzen denean, baliatu nahi izan den eskubidea berriro balia daiteke beste prozedura batean, eskubidea preskribatu gabe dagoen heinean. Beraz, hasteko «*zalantzarik gabekoa da guztiz, legebiltzarrari dagokionez soilik, Eusko Jaurlaritza berriak, legegintzako ekimenerako eskubidea duen neurrian, hauteskunde-prozeduraren ondoriozko ganbera berriaren aurrean aurreko kabineteak onartutako ekimenak modu berean errepikatzeko gaitasun osoa duela, ekimenaren iraungipenak ez baitio eragiten Jaurlaritzak haiek aurkezteko duen eskubideari*».

Horrenbestez, arestian aipatutako LGAKZ 51/2017 txostenarekin gertatu zen bezala (txosten horretatik aterako ditugu –errepikakor izateko arriskuarekin– jorratzen ari garen gai honi buruz jarriko ditugun gogoeta gehienak), Legebiltzarra desegin edo lege-proiektua alde batera uzten bada, dagokion lege-proiektua aurkezteko Eusko Jaurlaritzak oinarritzat erabili zituen administrazio-prozedurei buruzko balizko ondorioetara soilik mugatu behar du txostenak. Alegia, Jaurlaritzako edo Administrazioko izapidetzean eta horren espedientean izan ditzakeen ondorioez bakarrik arduratu behar du, edo alde batera utzi, izapidetze parlamentarioa eta dagokion espedientea azkendu edo iraungi izana gorabehera.

Era berean, komeni da ohartaraztea **txosten hau mugatuko dela, halaber, lege-proiektu bakoitza onartu edo Legebiltzarrera bidali baino lehenago egindako izapidetze-egintzen gaur eguneko prozedurazko edo formazko baliozkotasunera, kontuan hartu gabe proiektu bakoitzaren edo haren premisa juridikoen gaurkotasuna edo iraunaldia –ikuspuntu material edo funtsezko ikuspegi batetik–**. Azken gai horrek argi eta garbi gaintitzen du kontsulta honen xedea eta irismena.

3. XEDAPEN OROKORRAK EGITEKO PROZEDURAREN IZAERA BEREZIA, PROZEDURA HORI LEGE-AURREPROIEKTUEI APLIKATZEN ZAIENEAN

LGAKZ 51/2017, 56/2017 eta 61/2017 lege-iritzietan aztertutako kasuan gertatu zen bezala, aurrekoaz ondorioztatu behar da egin zaigun galderari erantzun ahal izateko abiapunturik egokiena Exekutiboan sortutako «*lege-aurreproiektu*» horien prozedura-exegesiaren azterketa egitea dela, haiek Legebiltzarrean onartu eta Legebiltzarrera «*lege-proiektu*» gisa igorri baino lehen zuten forman, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen babesean, nagusiki (aurrerantzean, XOEPL). Analisisian 8.-11. artikuluetan adierazten diren nahitaezko izapideak sartzen dira. Haiek amaitutzat jotzen dira Gobernu Kontseiluak hartzen duen behin betiko erabakiarekin, hau da, onartzeko ala ez onartzeko erabakiarekin, testu horren 13. artikuluan ezarritakoa betez. Eta arrazoia zera da, zioen azalpenean adierazten den

bezala, «legeak egiteko orduan, berez legegintza-ekimena denaren aurreko fasea baino ez delako sartzen administrazio-prozeduraren baitan; izan ere, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduak arautzen du berez legegintza-ekimena dena».

Hori gorabehera, amaitu edo iraungitako prozedura parlamentarioarekiko egiten ari garen bereizketa garbia dela-eta legezko eskakizunen azterketa honetan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak sendo ezarritako doktrinari jarraitu behar diogu, zeren eta «Batzordeak lege-aurreproiektuak egiteko prozedurak aztertzean, aldatu egiten baita haren langintza aztertutako araua legea edo erregelamendua denean, XOEPL berak adierazten duen moduan» (129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 55. paragrafoa). Erregelamendu-ekimenekin alderatuz, orain axola duenari dagokionez, lege-aurreproiektuak egiteko prozeduraren azterketan beharrezko malgutasun bat sartzen du, bai eta izaera batez ere material eta antiformalista bat ere. Eta horren arrazoia hau da: «Legebiltzarrean hedatzen da bere zabalean legegintza-prozedura, eta Konstituzioak (EK), Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuak (EAAE) edo, batzuetan, lege organikoek lege-proiektua onartzeko baldintzak ezartzen dituzten berariazko kasuetan izan ezik, lege-proiektuek bete behar duten baldintza bakarra da beharrezko aurrekariekin batera bidaltzea Legebiltzarrera, Legebiltzarrak bere iritzia eman eta erabakia hartu ahal izan dezan; gutxienez ere, memoria orokorra, finantzaketari buruzko eranskina eta kontrol ekonomikoko txostena (aurrekontuari karga dakarkioten proiektuetan), kontsulta-organo honen irizpena eta legeriaren arabera nahitaezko diren beste txostenak (Jaurlaritzaren Legearen 57. artikulua, eta Eusko Legebiltzarreko Erregelamenduaren 133.2. artikulua)» (120/2014 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa; 85. paragrafoa).

Lege-aurreproiektuen izaera bereziak nahitaezko txostenen derrigortasun hori erlatibizatzea ere ahalbidetuko luke. Konstituzio Auzitegiak bere uztailaren 29ko 108/1986 Epaian errekurtsio bat gaitzesten zuen Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzeko lege-proiektuaren aurkakoa, zeinak Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren nahitaezko txostena ez baitzuen. Honako hau baietsi zuen: «aurrekari jakin bat ez egoteak garrantzia izango du soilik Ganberei kendu izan balitzaie erabakia hartzeko beharrezko judizio-elementu bat, baina, kasu honetan, ondorioa, zeinak berehala izan behar zuen ezagun, Ganberen aurrean salatu beharra zegoen eta errekurtsogileek ez dute alegatu inoiz hori gertatu zenik. Salaketa hori egin ez denez, derrigorrezkoa da ondorioztatzea Ganberak ez zutela uste izan txostena erabakia hartzeko beharrezko judizio-elementu bat zenik; Auzitegi honek ez dauka sartzerik baloratzera judizio-elementu batek parlamentarioengan zenbaterainoko garrantzia izan zuen». Eta, ondoren, doktrina bera aplikatzen du Gobernuak Kongresuari lege-proiektuaren zioen azalpena eta azalpen-memoria igortzen ez dion kasuetan. Aurrekari horiek igorri ziren, baina berandu, errekurtsogileen iritziz. Nolanahi ere, falta izan balira ere, honako hau dio Goi-auzitegiak: «Adierazitako akats horrek garrantzia izango luke soilik Diputatuen edo Kongresuko talde parlamentarioen eskubideak kaltetu balitu, eta egitateak –egiazkoak izatekotan– haientzat guztiz ezagunak balira eta ez balego protestarik haien aldetik, ulertu behar da eragindakoek ez zutela uste izan beren eskubideak kaltetzen zirenik, eta, akatsik izan balitz, Ganberak berak baliozkotu zuela; horrenbestez, Auzitegi hau ezin daiteke sartu baloratzera horrelako akatsik egon zen ala ez edo zenbaterainoko garrantzia izan zezakeen». Bestela esanda, Auzitegiak ulertzen du garrantzitsutzat jo daitekeela soilik Ganberak garrantzitsutzat jotzen duena.

Gure ordenamenduan, Ganberaren Erregelamenduaren 133.2 artikulua nahitaezko txostenak esplizituki aipatzen ditu, eta horrek Ganbera erabat gaitzen du txosten horiek baldintzat eskatzera, bidaltzen zaizkion lege-proiektuak onartuak izan daitezen. Ildo horretatik,

berriro jo behar dugu Xedapen Orokorra Egiteko Prozeduraren Legera eta beraren exegesisira, betiere irakurketa malgua eta finalista bat eginez.

Berriz ere Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraituz, «lege-proiektuak egiteko prozedura aztertzei —azterketa materiala da, eta funtsean, finalista—, XOEPLaren jarraibideak sistematizatu ditu Batzordeak, eta honako fase hauek bereizi: (i) hasierako fasea, ekimena proposatu duen organoan garatu eta helburu nagusitzat duena hasierako testua finkatzea, hari eusten dioten arrazoiak nabarmentzea, eta, kasuan kasu, beharrezkoak diren izapideak egiteko beharrezkoa den dokumentazioa egitea; (ii) prozedura irekitzeko fasea, arauaren eraginpean gerta daitezkeen sektore eta administrazioak aintzat hartuta; (iii) txostenak —nahitaezkoak eta aukerakoak— egiteko fasea; eta (iv) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak, prozedura-iter guztia ebaluatuta, behin betiko testua finkatu, eta azken dokumentuak —justifikatzeko memoria eta memoria ekonomikoa— prestatzen ditu» (129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 56. paragrafoa).

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak zein Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honek berariaz emana dute irizpen hau (funtsean, izapidetzeari eta erregelamendu-ekimenei buruzko adierazpenen bidez): legegintzaldi-aldaketak eta exekutiboko kabinete-aldaketak ez dute berez ekartzen, inola ere ez, arauak egiteko prozedurak iraungitzea, ez eta prozedura horien baitan egindako izapideak balio gabe bihurtzea ere. Beraz, ohikoa da –LGAKZ honek zein Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak baliozkotzat jotzen dute– aurreko sailburu batek abiarazitako izapideak ontzat jotzea eta aurreko sailburua ordeztzen duen sailburuak Gobernu Kontseiluaren onespenerako bidaltzen duen espedientean, modu naturalean, jasota egotea. Horrela, legegintzaldi batean hasitako izapidetzea hurrengo legegintzaldian jarraitu da etenik gabe (gure kontsulta-organo gorenaren irizpenen artetik zenbait aipa ditzakegu: 203/2009 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Batasunak emandako neurriak garatzeko eta aplikatzeko Dekretuaren proiektuari buruzkoa (2. eta 37. paragrafoak); 217/2009 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoan fruten eta barazkien sektorea laguntzeko Europako Batasunaren araudia, bai eta araudi horretatik eratorritako laguntzen erregimena ere, garatzeko eta aplikatzeko Dekretuaren proiektuari buruzkoa (1. eta 30. paragrafoak); 64/2013 Irizpena, «Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko Dekretuaren proiektua», (2. eta 34. paragrafoak).

Bestela esanda, izapidetze-egintza horien baliozkotasun juridikoaren auzia ez dago Legebiltzarra desagitearen edo Gobernu berria osatzaren mendean; izan ere, Administrazioa bakarra da, pertsonalitate juridiko bakarra du bere egitura osorako eta funtzio guztietarako (Jaurlaritzaren Legearen 53. artikulua eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.4 artikulua), Gobernuan eta haren titulartasunean egon daitezkeen aldaketak gorabehera. Hori horrela bada, izapidetze-ekintzen egiletza, eta, horrenbestez, haien baliozkotasuna, ez da aldatzen Exekutiboaren titularrak aldatu arren.

Hertsiki, ez dago aurreko legegintzaldian egindako izapideak «bihurtzeko», «mantentzeko» edo «baliozkotzeko» berariazko egintzen beharrik —figura horiek aurreikusten ditu urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearenak), hurrenez hurren 50., 51. eta 52. artikuluetan, zenbait egintzaren akatsak zuzentzeko neurri gisa—, xedapenak egiteko prozeduraren barruko izapide horiek ez baitira inoiz deusez bihurtzen eta ez dutelako baliorik galtzen, nahiz eta legegintzaldia aldatu (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 47., 48. eta 49. artikulua). Eta horrek baztertu egiten du —nahiz eta

XOEPLaren azpian ekonomia prozesaleko logika bera dagoen– une horretara arte egindako egintzen baliozkotasuna kontserbatzeko beharra, ahal den neurrian (XOEPLaren 4.2 artikulua).

Hortaz, «kontserbaziorako ekonomia prozesal» hori behar ez den bakoitzean, bidezko izapideen organo eskudunari dagokio, soil-soilik, prozeduraren fase ezberdinak aurrera eramateko izapideak egitea, dela prozedurak jarrai dezala aginduz, dela Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legean eta Jaurlaritzari buruzko Legean markatutako prozedura-mugarrietan behar diren izapideak eginez (abiarazte-agindua, aurretiazko onarpena emateko agindua, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari irizpena eskatzeko agindua, arauaren behin betiko testua proposatzea Gobernu Kontseiluari...).

Tramitazioa aurrera eramateko egintza horiek berez adierazten dute aurretik egindako izapideak onartzen direla eta horien eraginkortasun formala eta materiala baloratzen dela, ez bakarrik espedientearen betetze formalari lotuta, baizik eta haren benetako erabilgarritasuna ere kontuan hartuta, organo erabakitzaileak judizio-elementu egokiak izan ditzan araua unean uneko egoerari egokitzeko, bai erabakitzailea Jaurlaritza-organoa denean, erregelamenduzko arauen kasuan, bai Legebiltzarra denean, lege-proiektuen kasuan.

Horrenbestez, horrelako erabakia hartzeko unean **prozeduran biltzen diren faktore zirkunstantzial guztiak hartu behar dira kontuan** erabaki ahal izateko ea egokitzen jotzen den, une jakin batetik aurrera, aurreko prozedura bat izapidetzen jarraitzea, prozedurari berriro hasieratik ekin beharrik ez izateko edo egindako izapide guztiak ontzat eman ahal izateko.

Faktore zirkunstantzial horietako bat izan daiteke proiektatutako araua lehendik ere izapidetuta egotea eta eginda dauden jarduketak bikoiztea saihestea, prozedura bizkortze aldera; edo are, behar bezala egiaztatutako eta presako arrazoiengatik, egin gabe dagoen izapideren bat lehenago egin gabe utzi nahi izatea, salbu eta ez duen hura egiteko agintzen lege-mailako arauen batek, deuseztasun-zigorpean (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 129/2015 Irizpena, Euskal sektore publikoaren gardentasunaren, herritarren parte-hartzearen eta gobernu onaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa, 55., 59., 63. eta 85. paragrafoak).

Era berean, kontuan hartu beharko da bitartean arau- edo gizarte-aldaketa garrantzitsuren bat gertatu ote den, behinola egindako izapideek gaurkotasuna edo informazio-balioa galtzea eragin dezakeena.

Balorazio hori egiteko orduan, garrantzi handia izan behar du, halaber, administrazio-izapidetzea errazteak edo ez errazteak, prestatze-prozesuaren xede diren helburu materialak alde batera utzi gabe; izan ere, araua prestatzeko prozeduran ere aplika daitezke prozedura horren ondoriozko arauak aplika dakizkiekeen erregulazio onaren printzipioak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 129. artikuluan jasotako hauek: *«legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazio publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia»*.

Edozein kasutan, orain arte esandakoa aplikagarria da proiektua Legebiltzarrera igorri aurreko administrazio-prozedurako egintza guztietarako (abiarazte-agindutik hasi eta Gobernu Kontseiluaren onarpenerainoko egintza guztiak, bi horiek barne). Denetan, azken igorpen-egintza horretan ere bai, predikagarria da administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoa mantentzearen printzipioa, eta haien indar materiala bakarrik baloratu behar da, aurreko paragrafoetan esandakoaren ildotik.

Bada, «*lege-aurreproiektuak eta -proiektuak*» aipatzen ditugunean —zeinek inplikatzeko baitute Legebiltzarrerara igortzea prestatzeko prozeduraren osteko fase erantsi gisa—, prozedura bultzatzeko egintzei dagokien arestian aipatutako balorazio hori egin behar dute bai sailburuak (prozedura bultzatzeko egintzen erantzukizuna izango du aurretiazko prozeduran zehar eta baita haiek Gobernu Kontseiluari aurkezteko erabakia hartzerakoan ere), bai Jaurlaritzak berak, legegintzako ekimenaren titularra baita Legebiltzarraren aurrean (balorazio hori berori egin beharko du hura onartzeko orduan eta nahitaezko agiriekin batera legegintzako organoari noiz igorri behar zaion erabakitze orduan edo beste edozein jarduketa osagarri egiterako orduan, XOEPLaren 13. artikuluan xedatutakoari jarraikiz). Horrenbestez, organo horien erantzukizuna izango da —organo bakoitzarena, dagokion unean— gaiari buruz egon daitezkeen edozein zalantza argitzea, eta, horretarako, beharrezkoa izango balitz, dagozkion txostenak edo izapide osagarriren bat eskatzea edo eginda daudenak berriz errepikatzea.

Eta hori guztia, bistatik galdu gabe, jada finkatu dugun bezala, gerora egon daitezkeen ordenamenduaren aldaketan edo bitartean gerta zitezkeen eta proiektuari eragin diezaiokkeen beste edozein koiunturazko egoeraren garrantzia modu erlatibo batean aztertu beharko litzatekeela; izan ere, «*lege-proiektuari*», Ganberara bidali eta prozedura prozedura parlamentario bihurtu ondoren ere, Legebiltzarrean bertan aurreikusitako izapidetzea egin behar zaio, eta, prozedura horretan, onetsi eta lege bihurtu baino lehen, Ganberak zuzenketak aurkez diezazkioke, eta, horrela, une horretan egokitzen diren doikuntzak egin daitezke.

Informatzen den kasu zehatz honi dagokionez, txosten honetatik ondoriozta daitezkeen aurrez egindako izapidetzeen baliozkotasun formalari buruzko baieztapenak ez du ordeztan sail sustatzailea funtsezko gaiari buruzko baieztapen hauek zuzenak diren ala ez haztatze; izan ere, Saila bera da prozedura sustatu duena eta gai horri buruzko ezagutza sektorial espezializatua duena.

Jada ohartarazi dugu ez dela txosten honen xedea orain galdera egiten zaigun proiektu zehatzari buruzko funtsezko analisia edo analisi materiala egitea. Nolanahi ere, atariko hurbilketa batean, eta helarazi zaigun eskaera aurreko Gobernu Kontseiluak 2016ko otsailaren 23an onetsitako testua berriz bultzatzeko aukeraren aurretiazko haztapen batean oinarrituta dagoela uste izanda, badirudi ez dagoela funtsezko arrazoirik edo lege-aldaketa esanguratsurik, bere garaian egin zirenen aipatutako baliozkotasun formala gorabehera, orduan onetsi zen testu berbera orain onestea uzten ez duenik.

4. AHOLKULARITZA JURIDIKOKO BATZORDEAREN IRIZPENA ETA KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA IZAPIDE ESPEZIFIKO GISA.

Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legearen 2. xedapen gehigarrian, arrazoi historikoak soilik direla medio (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legea aldarrikatu baino urtebete lehenago onetsi zen), Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa sortu eta arautzen duen apirilaren 13ko 187/1999 Dekretuan xedatutakora jotzen bada ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legeak (zehazki 3.1.a artikulua) —XOEPLetik kanpo baina hark hala bidaltzen duelako— arautzen du Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren derrigortasunaren gaia.

Aipatutako artikuluekin bat etorritik, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari «*kontsultatu behar*» zaizkio: «*Lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere...*» (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuenak eta baliabideen banaketarako eta foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak izan ezik). Honaino, gainerako izapideei

buruz orain arte esandakoa aholku-organo gorenaren irizpenari ere aplikatu ahalko litzaioke; irizpen horren baliozkotasun juridikoa ez da aldatzen gobernu-aldaketaren ondorioz edo Legebiltzarra desegin eta espediente parlamentarioak iraungitzearen ondorioz.

Horrenbestez, irizpen honen izaera berezia dela eta –konstituzio-jurisprudentziak berretsia–, gure txostenak atal espezifiko bat eskaini behar dio. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bere Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoaren Lege-aurreproiektuari buruzko 084/2003 Irizpenean (25. Paragrafoa) azaltzen zuen konstituzio-jurisprudentziak Espainiako Konstituzioaren (EK) 107. artikuluari buruz egin duen interpretazioa: «Konstituzio Auzitegiaren iritziz, “aholku-organo gorenaren funtzioaren” konstituzionalizazio-modu bat da, ez organoarena, Estatu Kontseilua. Administrazio aktiboaren aholkularitza gorena, manu haren ondorioz, garrantzia konstituzionaleko tresna bihurtzen da, “interes orokorraren eta legalitate objektiboaren oso berme garrantzitsua” eratzen baitu, eta, horren ondorioz, administrazio-prozedura jakin bateko alderdi direnen eskubide eta legezko interesena ere bai». Auzitegi horrek dioenez, «... oso funtzio kualifikatua da, administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarritzko arauaren kategoriaren barruan edo administrazio-prozedura erkidearen barruan sar daitekeena» (Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikulua)».

Izapidetzearen izaera bakar eta berezi horrek justifikatzen du Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenari aipamen berezi bat egitea Legebiltzarreko Erregelamenduaren 133. artikulua aldetik Ganberara igortzen den lege-proiektu ororekin bidali beharreko dokumentuen artean. Eta arrazoi horregatik sartu zen aipamena Jaurlaritzari buruzko Legean (ekainaren 2ko 8/2016 Legearen bidez, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea aldatzen duena), Jaurlaritzari buruzko Legearen 56. eta 57. artikuluetan honela idatziz:

56. artikulua

1. Jaurlaritzak, Aholku Batzorde Juridikoari igorri behar zaizkion lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak egiteko hasierako fasean, xedapenaren testua bakarrik igorriko dio Eusko Legebiltzarrari, behin prozedura hasteko agindua eman duen organoaren alde aurreko onespena izanda.

2. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari ere igorriko zaio, legebiltzar-taldeek dokumentazio hori ezagut dezaten.

3. Jaurlaritzak erabaki beharreko Lege-aurreproiektuak eta Dekretu-proiektuak Jaurlaritzako idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien Sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Kontseiluak aztertze gaitan sartu edo ez sartu erabakitzea.

57. artikulua

1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuekin batera, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena ere igorriko da eta, halakorik bada, txosten horretara egokitze oraitidazkia.

2. Lege-proiektuek Aurrekonturako zamaren bat badario horrentzako dirubideei buruzko eranskin bat eraman beharko du eta, hori, Legebiltzarraren Araudiak Lege-proiektuei buruz agindu dezanez eztabaidatuko eta bototara jarriko da.

Galdetu liteke, beraz, ea, artikuluen horien ondorioz, Legebiltzarrari jakinarazpena egiteko betebeharrak berezirik ba ote dagoen, aurreko legegintzaldietan sortutako lege-proiektuak izapidetze berritzaileekin ekin nahi zaionean. Lehenengo eta behin, bereizi egin behar da (i) lehendik hasita baina oraindik testuaren aurretiazko onarpenik gabe dagoen izapidetze bati jarraipena emateaz ari garen (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.1 artikuluan eskatzen den

jakinarazpena egin beharko da), edo, bestela, prozedura horretan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari irizpena eskatzeko izapidea oraindik bete gabe dagoen (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.2 artikuluan aipatutako guztia igorri beharko zaio Legebiltzarrari); edo, aldiz, (ii) dena delako aurreproiektua edo proiektua soil-soilik Gobernu Kontseiluaren onarpenaren zain dagoen, edo organo horrek Legebiltzarrera igortzea erabaki zain, dela lehenengo aldiz, dela alde zureko beste igortze-erabaki bat errepikatuta (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.3 eta 57. artikuluetan eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan aurreikusitako kasuetan egongo gara).

Era berean, aurreproiektu bat edo proiektu bati buruz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bere iritzia emango balu, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legearen 29. artikuluan xedatutakoarekin bat etorritik, planteatu behar da, halaber, ea arestiko kasuetan nahikoa den aurreko legegintzaldian emandako irizpena atxikitzea edo, osterik, irizpen berri bat eskatu beharko litzatekeen.

Manu horrek honako hau zehazten du: «Irizpena eman eta gero, irizpenaren aztergai garrantziko aldaketak egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gaituzten dituzten eduki berriak jasotzen badira, aldaketa horiei buruzko kontsulta berria egin beharra dago». Arauaren testutik ondorioztatu daiteke, beraz, dagoen irizpena aurreko gobernu batentzat egin izan zein ez, **beste azterketa bat egitea bidezkoa izango dela baldin eta «funtsezko aldaketak» gertatu badira Gobernu Kontseiluari onarpenerako edo igorpenerako berriro aurkeztuko zaion lege-proiektuaren proposamenean**. Funtsezko aldaketen kontzeptu juridiko lausoa zehazteko, artikuluen testuari jarraituz eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak berak adierazi izan duen bezala, aldaketa horiek aurreko irizpenarekin duten loturari erreparatu beharko zaio.

Horri dagokionez, garrantzizkoa da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren beraren doktrinara jotzea, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legearen 29. artikuluari eman behar zaion interpretazioa dela-eta. Ez onartzeko bere erabakietan eta irizpenetan Batzordeak irrimo ezarritako doktrina da. Duela gutxi Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkuran egindako 4/2017 Akordioa –2017ko apirilaren 26ko saioko irizpenaren eskaera onartzen ez zuena– hitzak ekar ditzakegu txosten honetara:

7. Edo, bestela esanda, 10/2000 Irizpenean adierazitakoaren ildotik, Batzordeak berriz aztertu beharko du gaia, baldin eta lantze berri horretatik ateratzen bada aurreko esku-hartzean aztertutako elementu edo alderdi substantiboez bestelakorik badela, eta duten garrantziagatik, beste azterketa bat eskatzen dutela: orduan bakarrik, eta ez bestela.

8. Doktrina hori bat dator Auzitegi Gorenak Estatu Kontseiluari dagokionez ezarritakoarekin, eta, ondorioz, guztiz aplikagarri zaie batzorde honek esku hartzeko kasuei.

9. Doktrina horrekin bat etorritik, laburbilduz, kontsulta berriz egitea egokia da, baldin eta «... Estatuko Kontseiluaren irizpenaren ostean egindako berrikuntzak ez baditu hark iradoki, kontsultarekin loturarik ez badute eta, gainera, funtsezko garrantzia badute» (AGE, 1993ko maiatzaren 27koa, RJ 1993\102040).

10. Ondorengo erabakietan zehaztu dituzte kasu horiek; horrela, bada, Auzitegi Gorenen 2009ko martxoaren 10eko Epaiak (AGE – RJ\2009\5110) honako hau nabarmentzen du: «Ez da beharrezkoa Estatuko Kontseiluari beste kontsulta bat egitea testua orrazten badute edo funtsezkoak ez diren aldaketak egiten badituzte (...), ezta proiektuaren eta behin betiko testuaren arteko desadostasunak egiteko prozeduraren ondorio logikoak badira; horren barruan, izan ere, hainbat organok txostenak egiten dituzte eta aldaketak eragiten dituzte horiek azkenean onartzen den xedapenean. Gaineratu

daiteke, orobat, Salaren doktrinak berak nabarmendu duela xedapen orokorrak egiteko ezarritako prozedurako bermeen interpretazio funtzional eta teleologikoa egiteko beharra. Horiek ez baitaude justifikatuta egitearen formalismo hutsagatik, duten xedeagatik baizik, eta haien balorazioan dena delako xedapen orokorraren berezitasunak hartu behar dira kontuan (...).»

11. 2009ko martxoaren 10eko Auzitegi Gorenaren Epaiak gogorarazten du Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia dela honako hau (AGE, 2006ko martxoaren 8koa): xedapen orokor baten behin betiko testuan egindako aldaketak funtsezkoak ez badira, ez zaie xedapenak zuzenean eragiten dien elkarte, korporazio edo entitateei entzunaldi berririk egin behar eta ez da Estatu Kontseiluaren txosten edo irizpen berririk behar, «besteak beste, haren iritzia ez baita loteslea; beraz, aldaketa jasota badago ikuspegi erlatibo batetik, testuan egindako berrikuntzak direla eta, zein ikuspegi absolutu batetik, berezkoa duen garrantzia dela eta, ez du funtsezko aldaketarik eragiten aurrez entzunaldia edo txostena egin duen ordenamenduan. Horien gabeziak, txertatutako erreformari dagokionez, ez dakar haren erabateko deuseztasuna; izan ere, xedapena behin betiko idazteko ahala duenak kontuan hartu ditu kontsultatutako entitate, korporazio, elkarte eta organismoen irizpide edo ilustrazioak, eta hori da, azken batean, bilatzen den helburua (...), erregelamenduak egiteko prozedura bat ezartzen baita (...).»

12. Era berean, 2001eko urtarilaren 31ko AGE aipatzen du, 1993ko maiatzaren 27ko Epaiaren erreferentziaz, eta han egindako aldaketak balioesten ditu, zeinak ez baitzuten Estatu Kontseiluaren irizpen berri bat eskatzen: «beharrezkoa baita irizpen horren behin betiko izaera bateratzea, aurrez emandako txosten espezifikoak eta planteatutako galdera guztien laburpen-judizio gisa, Gobernuaren arauzko ahala baliatzearekin (...), zeinari ahalmen hori kenduko litzaiokeen irizpen horren behin betiko idazketan literalki lotu beharko balitzaio; izan ere, irizpenerako bidalitako Proiektuak barne hartzen dituen gaiak arautuko balira soilik edo haren antolaketa osoa edo funtsean desberdina izango balitz, Estatu Kontseiluak halakorik iradoki gabe, orduan, alderdi horiei buruzko txosten berri bat eskatu beharko litzateke; izan ere, arauzko ahalmenaren titularrak Estatu Kontseilura bidalitako testuan beharrezkotzat jotzen dituen erreformak sartzeko ahalmena du azken idazketarako, adierazitakoa baino muga gehiagorik gabe (...).»

13. Aurreko doktrina erabat indarrean dago, 2016ko abenduaren 22ko AGE irakurrita ondorioztat daitekeenez (JB 2017/106).

14. Horrenbestez, egokia da kontsultatutako proiektuaren testua aztertzea, berrikuntzen eta aurreko irizpeneko gogoeten arteko loturaren aipatutako irizpidearekin bat etorriz, alegia, Kontseiluaren irizpeneko iradokizunetik eratortzen badira edo, bestela, hortik kanpokoak izanik, derrigorrezko esku-hartze berri bat eskatzen duen funtsezko garrantzia badute.»

Halaber, Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan berariaz aipatutako txostena denez gero, atal honetan egin behar da arauen kontrol ekonomikoko txostena, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak «lege-aurreproiektuei» egin behar diena, ekainaren 30eko 14/1994 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzkoa) 25.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak egin behar duen txostena (Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko legearen 27.1 artikulua) baino lehenagokoa den arren, txosten horrek ere garrantzi berezia du; izan ere, jarduera ekonomikoan «lege-aurreproiektuek» izan dezaketen edukiaren zehaztapenak edo inpaktu nabarmenak horrelako txosten bat bidaltzeko derrigortasuna determina dezake (urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41. artikulua, 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duena), bai eta hiritarrei eman beharreko proiektuari buruzko ezinbesteko informazioa eta entzunaldia ere (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 133.4 artikulua).

Arauen kontrol ekonomikoko txosten horrek zerikusi gehiago du testuinguruarekin «lege-proiektuaren» testuarekin baino, hauxe besterik ez baitu helburu: erabakitzea ea bertan aurreikusitako xedapenek zuzenean nahiz zeharka eragin edo ondoriorik sortuko duten EAEko Ogasun Nagusiari dagozkion gaitan, aurrekontu-araubidean eta gastu zein diru-sarrera publikoak gauzatzeko araubidean; batez ere, irizpena eman behar da «*arauak edo xedapenak aldian-aldian indarrean dagoen Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren jaurbidean, hau da, ondarearen, kontabilitatearen, kontratazioaren, berezko zergen, zorren edo bermeak emateko jaurbidean duen eraginaz*» (EAEko Kontrol Ekonomikoa eta Kontabilitateari buruzko Legearen 26.1.b artikulua) edo «*proposatutako arauaren edo xedapenaren finantza-arrazoizkotasunaz, modu zenbakarrian*» (EAEko Kontrol Ekonomikoa eta Kontabilitateari buruzko Legearen 26.1.b artikulua); azken alderdi horrek, beste ñabardura askoren artean, «Administrazio Publikoen Finantza Egonkortasuna» izeneko araudian du eragina.

Egia da nahitaezko txosten hori kontrakoa eta eragozlea izanda ere «lege-aurreproiektuak» bere prozeduran aurrera egin lezakeela harik eta sailburu eskudunak hura Gobernu Kontseiluari aurkeztu arte. Azken horrek proiektua onartzeko edo baztertzeko askatasun osoa du, txosten honetan zehar adierazi dugun moduan.

Txosten honen bidez erantzun nahi den funtsezko galderari helduko diogu berriz: beharrezkoa al da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak berriro txostena ematea Gobernu Kontseiluak jada onetsia duen «lege-proiektu» bati buruz, alбора utzita zer erabaki zuen Gobernu Kontseiluak, proiektua Legebiltzarrera igortzea edo ez? Kontrol Ekonomikoko Bulegoak behinola emandako txostena nahikoa ote liteke hura Legebiltzarrera igorri eta gero espediente parlamentarioa Ganbera desagitearen ondorioz iraungi bada?

Arauen kontrol ekonomiko horri buruzko araudiak ez du berariaz ezer xedatzen beste txosten baten beharrari buruz. Aipatzen ditu, soilik, EAEko Kontrol Ekonomikoa eta Kontabilitateari buruzko 27.1 *in fine* artikuluan aipatu ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena egin behar dien arau-proiektuak, eta, batzorde hori izango denez erabakitzen azkena, «... *Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio organo aholku-emaille horren irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezkeen aldaketak, onartu baino lehen*».

Alegia, egindako aldaketa «komunikatu» besterik ez da egin behar. Ez dago beste irizpen bat formalizatu beharrik, nahiz eta, hori gorabehera, Ogasun gaitan eskumena duen sailburuak aldaketen berri jaso, sailaren barruko bideetatik, eta Gobernu Kontseiluan bere gogoetak baliarazi.

Ondorioz, kontuan izanik edozein araudik ekonomian garrantzizko eragina izan dezakeela, txosten honen egileak uste du atal honetako goiko paragrafoetan azaldutakoari eutsi behar diola; hala, bada, (i) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak ez badu bidezkotzat jotzen Gobernu Kontseiluak jada onetsitako lege-proiektu bat Legebiltzarrari berriro igortzeari buruz bere iritzia azaltzea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak hori egiteak ere ez dirudi bidezkoa, eta (ii) erabakiko balitz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak lege-proiektu horren gaineko iritzia azaldu behar duela, kasu horretan ere ez dirudi bidezkoa Kontrol Ekonomikoko Bulegoak bere iritzia azaltzeak, ezertan galarazi gabe haren iritzia jakinaraztea legezko ondorio egokietarako, bai eta aldaketak ere, halakorik egiten bada.

Hori guztia eragotzi gabe, baldin eta lege-aurreproiektua Kontrol Ekonomikoko Bulegoari igortzeko betebeharra badago, izapidearen jakitun izan dadin eta eduki ekonomikoa badagoen

ala ez balora dezan, bat etorri 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41.2 artikuluan ezarritakoarekin.

5. LEGE-AURREPROIEKTUEN ETA -PROIEKTUEN ARTEKO BEREIZKETA ETA LEGEBILTZARRERA IGORTZEKO EGINTZA

Jaurlaritzari buruzko Legearen arabera, sailburuen eskumena da Jaurlaritzari aurreproiektuak aurkeztea, eta horiek *«Jaurlaritzak lege-proiektu gisa onar ditzan proposatu»* behar dira (Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikulua, Jaurlaritzari buruzko Legearen 55. artikuluaekin lotuta). Lege-aurreproiektuak *«Gobernu Kontseiluari aurkeztuko zaizkio, azter ditzan; aztertzen diren bilkuran bertan erabakiko du haiek behin betiko onartu edo ez, edo, bestela, azken idazketa egiteko kontuan hartu beharko diren irizpideak ezarriko ditu, bai eta, hala balegokio, behin betiko onartu bitarteko bidean egin beharreko jarduketak ere»* (XOEPLaren 13. artikulua). Bestalde, Jaurlaritzari dagokio *«Legebiltzarrera bidaltzeko lege-proiektuak onartzea edo baztertzea, Legebiltzarraren Erregelamenduak finkatutako baldintzetan»* (Jaurlaritzari buruzko Legearen 18. artikulua).

Izan ere, bai lege-aurreproiektuek erregelamendu-ekimenen izapidetzearen aldean duten izaera berezia, bai Gobernu Kontseiluak nahitaez haiek aintzat hartu beharra, berezitasun gehigarriak dira lege-aurreproiektuak izapidetzean, eta horrela aitortzen du Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legeak berak, *«Xedapen bereziak»* izenburuko bere III. kapituluaren sartzen baitu 13. artikulua. Zioen azalpenean adierazten du horren arrazoa: *«Legeen garrantzi berezia dela eta, lege-aurreproiektuak aztertzeko berariazko izapide bat ezarri da Gobernu Kontseiluarentzat. Horren helburua da legegintzako ekimena erabili behar duen organoak, artikulua banatutako testu bat aurrean izanez, legea egiteko prozeduraren planifikazioa bideratzea eta haren ardura bere gain hartzea, ondorengo entzunaldi-, kontsulta- eta txosten-izapideek ekar ditzaketen emaitzak gorabehera»*.

Hemen, berriz ere galdetu liteke zertan diren juridikoki ezberdin izapidetze administratiboaren xede izandako eta *«lege-proiektu»* gisa onartutako edo onartu gabeko *«lege-aurreproiektuak»*, batetik, eta Legebiltzarrera igortzen diren *«lege-proiektu»* substantzialak, bestetik. Hasteko, argitu behar dugu txosten honetarako ez duela funtsezko garrantzirik *«aurreproiektuen»* eta *«proiektuen»* artean egin ohi den izen-bereizketak —gorago aipatu ditugun Jaurlaritzari buruzko Legearen artikulua horien arabera, badirudi EAEko antolamenduan *«aurreproiektu»* deitzen zaiela sailek egindako testuei, zeinak Jaurlaritzari proposamen gisa aurkezten baitzaizkio *«lege-proiektu»* eran onar daitezkeen eta lege-proiektu bihurtzen baitira aipatutako organoaren onarpena jasotzen dutenean—. Garrantzi eta funts handiagokoa da, ordea, honako haiek bereiztea: *«testua»*, bere prestatze administratiboaren fasean, harik eta Gobernu Kontseiluak onartzen duen arte, eta *«Legebiltzarrera igortzekoa den dokumentua»*, izapidetze parlamentarioaren xede bihurtuko dena behin betiko, Jaurlaritzak legegintzako ekimenerako ahala baliatzean.

Horri buruzko doktrina ugari dago, baina gaur egun —exegesi jasoagoak salbu— nahiko argigarria da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 127. artikuluan *«Legegintza-ekimena eta erregelamenduak eta lege-mailako xedapenak emateko ahala»* izenburupean xedatutakoa:

«Nazioko gobernuak Konstituzioan aurreikusitako legegintza-ekimena baliatuko du, lege-aurreproiektuak prestatuz eta onetsiz eta gero lege-proiektuak Gorte Nagusietara igorritik».

Autonomia-erkidegoetako gobernu-organismoek Konstituzioan eta beren autonomia-estatutuetan ezarritako moduan baliatuko dute legegintza-ekimena. (...)».

Nahiz eta artikuluko horren lehenengo zatia kontsideratu daitekeen Estatuko Administrazio Orokorren esparruan haren aplikazio eskusiboa aplikatzea aurreikusten duten manuen arabera (horregatik, ez litzateke Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarria Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen azken xedapenetatik lehenengoan ezarritako moduan), ez dago kontraesanean, puntu horretan, Jaurlaritzari buruzko Legearekin. Alegia, gobernu-organismoek bi fasetan egikaritzen dute legegintzako ekimena, zeina, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari esleitzen baitiote Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a artikuluek: lehenengo fasean, barrukoan, «lege-aurreproiektuak eginez eta onartuz», eta gero, bigarren fasean, «lege-proiektuak Eusko Legebiltzarrerara bidaliz».

Bi fase horiek —eta beren izapidetzeen emaitzak—, zalantzarik gabe, badute garrantzia, Jaurlaritzaren jardunaren bi aldeak islatzen dituztelako: batetik, zuzendaritza politikoko organoa da, eta, bestetik, Administrazio Publikoaren egiturako organo gorena.

Esan daiteke, bada, «lege-aurreproiektu» bat Administrazioaren barruko jardueraren emaitza dela; jarduera horrek diskrezionaltasun-irizpide nabarmenak ditu, baina programaziopean dago (arau-plangintza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 132. artikulua) eta berariazko prozedura baten pean; horren gabeziak deuseztasun-akatsak sor ditzake —are bide jurisdikzionaletan aurkaratzeko modukoak—. Gobernu Kontseiluak hura onartzeak (eta «lege-proiektu» bihurtu, Jaurlaritzari buruzko Legearen terminologian) jada amaierako egintza juridikoaren izaera ematen dio —Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legearen 13. artikulua—, eta une horretantxe buka litezke haren izapidetzea eta ondorioak.

«Lege-aurreproiektuen» azken xedea, noski, onartze soiletik edo Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legean araututako prozedura-ibilbidea bukatzetik harantzago doa. Hau da, onartua izatetik eta Gobernu Kontseiluko (edo haren Idazkaritzako) administrazio-zerbitzuetan «onartutako lege-proiektu» gisa egonean egotetik harago doa. Aldiz, asmoa da antolamendu juridikoa eraldatzea alderdi jakin batean —lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua—, oinarritzat hartuta gizartearen eta zerbitzatu beharreko herritarren benetako eskakizunen arabera taxututako gobernu-programa bat.

Xede eraberritzaile horretarako lagungarria da «lege-proiektua» Legebiltzarrerara igortzea, gaur egun Administrazio Zuzenbideko inongo arauen pean ez dagoen ahala erabiliz burutzen diren «egintza politiko» horietako bat, hain zuzen. Izan ere, proiektua Legebiltzarrerara nola eta zein agirirekin batera igorri behar den zehazten duten manuak hain daude bi munduen arteko mugatik hurbil non ia-ia Zuzenbide Parlamentarioko manutzat jo daitezkeen (Jaurlaritzari buruzko Legearen 57. artikulua Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikulua korrelatibo gisa, Jaurlaritzari buruzko Legearen 58. artikulua prozedura parlamentarioaren beraren araudi gisa).

Illo horretatik, igortzeko egintzak *plus* bat eransten dio Jaurlaritzak onartutako «lege-proiektu» jada perfektuari, helburu jasoago batekin, hots, gobernu-programan dagoen legegintza-programari edukia emateko helburuarekin, antolamendu juridikoak aitortutako legegintzako ekimenerako ahala baliatuz.

Gobernu Kontseiluak «lege-proiektu» bat Legebiltzarrari aurkezteko hartzen duen «igorpen-erabaki» horren izaera «politikoa» Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzian berretsita dago. Izan

ere, 1990eko martxoaren 15eko Epaian (KAB 1990, 45), LEGUINA VILLA jauna txostengilea zela, honako hau adierazi zuen Konstituzio Auzitegiak:

«... Gobernuaren eginkizunak Konstituzioaren 97. artikuluan aipatzen dira; ez daude Gobernuaren jarduketa guztiak Administrazio Zuzenbideari loturik. Dudarik gabe, adibidez, ez daude loturik beste organo konstituzional batzuekiko harremanekin zerikusia duten jarduketak; besteak beste, lege-proiektu bat edo antzekoren bat Gorteetara bidaltzeko erabakia. Espainiako Konstituzioaren 97. artikuluan esleitzen zaion zuzendaritza politikoko eginkizuna ere betetzen du Gobernuak Gorteen bitartez. Kontrol judizialaren pean dauden administrazio-jarduketan aldean bestelakoak dira Gobernuaren jarduketa horiek; mota horretakoak dira Gobernuari dagokion akzioaren alderdi bati edo besteari lehentasuna ematen dioten erabakiak, salbu eta lehentasun hori nahitaezkoa denean, legeek xedatutakoa betetzeko».

Auzitegi Gorenak ere ildo bereko adierazpenak egin ditu bere jurisprudentzian, funtsean Estatuko botereen arteko harremanei jarri badie ere arreta. Hala, legegintzako ekimena egikaritzeko eskaerari ezetza emateko edo ekimen hori egikaritu den kasuei buruzko epaiak eman ditu (Auzitegi Gorenaren 1990eko martxoaren 13ko Epaia [JB 1990, 1938]; 1990eko urriaren 25ekoa [JB 1990, 7972]; eta 1991ko abenduaren 10ekoa [JB 1991, 9254]).

Hortik jada ondorio batzuk atera ditzakegu:

- I. Lege-aurreproiektuen izapidetzeari ez dio eragiten, printzipioz, Legebiltzarra desegin eta prozedura parlamentarioak iraungitzeak.
- II. Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legear ezarritako izapidetzea ezin da saihestu, eta ahal den neurrian, eta haren xede materialari kalterik egin gabe, ulertu behar da lehenago egindako izapideek beren balio osoari eusten diotela; betiere, kasu bakoitzean prozedura bultzatzeko ardura duen organoak baloratu behar du hori, eta kontuan hartu behar da, gainera, horrelako kasuetan prozedurak duen izaera berezia, malgua eta antiformalista.
- III. Gobernu Kontseiluari aurkezten zaizkion «lege-aurreproiektuak», hark «lege-proiektu» eran onartzen dituenak —Legebiltzarrera bidali edo ez bidali bertan izapidetzen jarraitzeko—, administrazio-egintza baliozkoak dira (antolamendu juridikoaren berrikuntzan eraginkorrak ez badira ere), eta Gobernu Kontseilu horretan dute egoitza, inongo iraungitze-datarik gabe, Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legear aurreikusitako prozedura-ibilbideari amaiera ematen diotelako.
- IV. Gobernu Kontseiluak «lege-aurreproiektua» aintzat har dezake eta amaierako onarpena eman diezaioke Legebiltzarrera «lege-proiektu» gisa igortzea erabaki aurretik edo hori erabakitzearekin batera.
- V. Behin Gobernu Kontseiluak «lege-proiektua» onartutakoan, Legebiltzarrera bidaltzeko erabakia haren administrazio-funtziotik kanpo dago; «egintza politikotzat» jo behar da eta, beraz, ez dago inongo araugintza-mandaturi lotuta, baizik eta, areago, egokitasun-printzipioei, albora utzi gabe proiektuarekin batera zer dokumentazio igorri behar den zehazten duten arauak. Arau horietan ezarriko da, halaber, Mahaiak proiektua onartuko duen ala ez.

6. LEGEBILTZARRERA IGORRITAKO «LEGE-PROIEKTUEN» EGOERA ADMINISTRATIBOA HURA DESEGINDAKOAN.

Lehenago azaldu denez, Eusko Legebiltzarra desegin edo haren agintaldia amaitutakoan, iraungi egingo dira, beren espediente parlamentarioari dagokionez, izapidetzen ari diren gai guztiak, Legebiltzarra desegin aurretik bertara bidali diren «lege-proiektuak» ere tartean direla. Galdetu liteke, bada, Gobernu Kontseiluan onartu eta Legebiltzarrerara legegintzako ekimen gisa igorritako «lege-proiektuak» zer egoeratan geratzen diren Legebiltzarra desegin ondoren, Administrazio Zuzenbidearen ikuspuntutik.

Gobernu Kontseiluak onartutako «lege-proiektu» horiek, txosten honen egilearen iritziz, fase administratiboa deituko diogun horretan ezarri zaien helburua betetzen dute baita Legebiltzarra desegin eta gero ere. Hau da, eta Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen zioen azalpenean adierazitako terminoetan, aurrez ikus daitekeen eta zehatza den legegintzako ekimen baten edukiaren forma eta funtsa aurreikustea, metodo honi jarraikiz:

«...erregelamenduaren mailako xedapenetarako ezarritako metodologia bera ezartzea Jaurlaritzaren barruan egiten diren legeetarako. Horrela legegintzako ahala duenaren eginkizuna erraztu egingo da, hobeto funtsatutako egitasmoak aurkeztuko baitzaizkio eztabaidarako eta erabakia hartzeko, helburuak iristeko egokiagoa eta finagoa den teknika juridikoaz artikuluna banatuak. Funts zehatzago eta ziurrago horren gainean dagokio Legebiltzarrari egitasmoak zuzendu eta onartzea».

Izan ere, arauak egiten hasteko erabakia, bai fase administratiboan, bai araua Legebiltzarrerara igorritz haren izapidetze parlamentarioa abiarazteko garaian, ez da «... betekizun formal huts bat, baizik eta garrantzi juridiko eta politiko handia duen egintza bat, arauaren beharrian eta bideragarritasunaren gainean gutxieneko gogoeta behar duen egintza bat, alegia. Horrexegatik, arauaren edukia finkatzen eragina izango duten era guztietako aldagaiak kontuan hartzea eskatzen du (azterlanak, txostenak, entzunaldiak, kontsultak, negoziazioak eta abar); orobat, araua indarrean sartzeko gutxi gorabehera zer kostu ekarriko duen eta zer eraginkortasun izango duen kalkulatzeko eskatzen du, ez bakarrik herri-administrazioei begira, baita herritarrei eta, eskuarki, ekonomiari begira ere» (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen zioen azalpena).

Hala ere —eta hemen hartzen du balioa Gobernu Kontseiluari dagokion goi-zuzendaritza politikoak—, Gobernu Kontseiluak bere egin ote dezake lehenago izapidetutako «lege-aurreproiektu» bat, edo are lehenik onartuta dagoen «lege-proiektu» bat, eta hura berriro igorri Legebiltzarrerara «lege-proiektu» gisa? Hori egin al dezake dagoeneko lege-proiektu hori aurrez Legebiltzarrerara bidalita dagoenean?

Azaltzen ari garenez, eta alde batera utzita xedapenaren «garrantzi handia» (Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko Legeak hitzez hitz dioen moduan), erabaki politikoa da, argi eta garbi, Gobernu Kontseiluak lehenagoko proiektu bat bere egitea eta Legebiltzar berriari igorri behar zaion ala ez erabakitzea; horrela, proiektu hori sendotu egiten du, beharrezkoa eta egokia den —eta, beraz, indarra duen— **legegintzako erabaki politiko** gisa, Legebiltzar berritik sortutako gobernu-programari jarraituz.

Egia da edozein lege-proiektu Legebiltzarrerara igortzen denean beti erantsi behar direla Jaurlaritzari buruzko Legearen 57. artikuluan eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan eskatzen diren aurrekariak eta agiriak, ez dadin zalantzarik izan Legebiltzarreko Mahaiak hura onartzeari begira. Hortik aurrera, ordea, era berean erabaki nabarmenki

politikoa da proiektu hori eta aurretik egindako izapidetze administratibo hori Gobernu Kontseiluak bere egitea. Jaurlaritza berriak erabaki politiko hori hartu du, hasiera batean proiektu horiek onartu zituen Administrazio beraren goi-zuzendaritzan eta zuzendaritza politikoa diharduela –Administrazioak nortasun juridiko bakarrarekin dihardu beti, nahiz eta Jaurlaritza aldatu–, dagoeneko fase administratiboan izapidetua izan den proiektuaren nahikotasuna, gaurkotasuna eta indarra berretsiz.

Hau da, egindako izapidetze-egintzen balizko baliozkotasun juridikoa ontzat emanda, egintza horiek ez dute eraginik izan Gobernua aldatzearen eta Legebiltzarra desegitearen ondorioz.

Horrenbestez, hau idazten duenaren iritziz, zuzendaritza honi egindako galderaren erantzunean ezin da saihestu eta derrigorrezkoa izango da Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko Legea izapidetzea, baina, hala ere, sailburuak dagokion proposamena Gobernu Kontseiluari aurkeztea erabakitzen badu edo Gobernu Kontseiluak, legegintzako ekimenaren ahalmena baliatuz, Legebiltzarrera bidaltzeko erabakia hartzen badu, kontuan izan beharko ditu eta baliatu aurrez egin diren izapidetze baliodunak, baldin eta egiaztatzen bada «*lege-proiektu*» hori Gobernu Kontseilu berriak bere agintaldian egin beharreko aurreikuspen politikoarekin bat datorrela, hura ordenamendu juridikoan inplementatzea beharrezkoa dela eta «*lege-proiektuaren*» testuko funtsezko elementuetan aldaketarik ez dela gertatu hura onetsi eta gero sortutako arauen ondorioz. Balorazio hori, izatekotan, irizpide materialetan eta aukera- eta egokitasun-irizpide zorrotzetan oinarrituz egin beharko da.

7. ONDORIOA

Laburpen gisa: gaur egun indarrean dagoen Gobernu Kontseiluak, Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a artikuluek aitortzen dioten legegintzako ekimenerako ahala baliatuz, erabaki dezake lehendik ere onartuta dagoen «*lege-proiektu*» bat onartzea eta Legebiltzarrera igortzea, aldeztu aurretik sailburu eskudun batek (edo gehiagok, eskudunak gehiago badira) proposamena aurkeztuta.

Gobernu Kontseiluko kide batek edo gehiagok aurkeztutako proposamen horrek helburutzat izan behar du, Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikuluan jasotako egokitasun-erabaki formala eta proposamena islatzeaz gainera, berrestea bai arauaren bideragarritasunak indarrean dirauela (hots, ez diotela eragin lehengo igorpenaren ondoren onartutako arauak), bai lehenago egindako izapideek indarrean dirautela eta antolamendu juridikoan egin nahi den berrikuntza egokia eta beharrezkoa dela, egungo Jaurlaritzaren proiektu politikoan aurreikusitako ildoekin bat etorritik.

Hartara, jada onartuta eta Gobernu Kontseiluaren eskuetan dauden «*lege-proiektuak*» berriro izango dira, ikuspegi parlamentariotik, «*lege-proiektu*» berriak, Legebiltzarrera igortzen direnean, beren aurrekari guztiekin batera; eta berriro hasiko da behinola Legebiltzarra desegin zenean iraungitako izapidetze parlamentarioa.

Ezin dugu txosten hau amaitu aipatu gabe **aurreko Gobernu Kontseiluak 2016ko otsailaren 23an onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuaren** testu berriak badituela zenbait aldaketa, eta gure egiten dugula hari buruz atxikita doan Memoriaren 26. atalean adierazten den erabakia,

alegia: «*proposatutako aldaketak ez dira funtsezkoak ez ikuspuntu kuantitatibotik, ez ikuspuntu kualitatibotik*».

Ondorioei dagokienez, aldaketa horiek –Memoriaren 22. ataletik 24. atalera zehaztuak– hiru esparrutan multzokatu daitezke: (i) hizkuntza-eskubideen bermea; (ii) Gobernuak legebiltzarreko izapidetzea iraungi eta gero onetsitako hiru titulazio akademiko berri sartzea, lege-aurreproiektuan preskribatutako titulazioen izenak aldatzen dituztenak; eta (iii) Legea indarrean sartzeko data eta kualifikazio profesionalen eskakizun-maila aldatzea.

Aldaketa horiek sartzen dira, funtsean, honako arrazoi hauen ondorioz: **a)** denbora igarotzearen ezinbesteko ondorioa, hau da, indarrean sartzeko **datak aldatzen dira**, baina horrek ez ditu aldatzen aurreko lege-proiektuak aurreikusten zituen epeak; **b) aurreko lege-proiektua baina lehenagotik zeuden hizkuntza-eskubideei** dagozkien aldaketa proposamenak. Haiek orain sartzearen arrazoia indarrean dauden eskubide horiek Lege-proiektuan nola zehazten diren eta zer eragin duten erregulatzea da, eta ez ordenazio berri bat sortzearen edo gure hizkuntzari buruzko araudia garatzearen ondorioa; eta **c) hiru titulazio akademikoen izenak sartzeko** arrazoia da Lege-proiektua egokitzea jada ordenamenduan indarrean dauden kontzeptu eta izendapen juridikoak erabiliz.

Hauxe da egindako txostena, eta zuzenbidean hobeto oinarrituriko beste edozeinen mende dago.

V

MEMORIAS EXPLICATIVAS /
AZALPEN MEMORIAK.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.



MEMORIA COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.

I.- INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES

1. Se realiza esta memoria a fin de justificar la viabilidad jurídica de que por parte del Consejero de Cultura y Política Lingüística se eleve nuevamente al Consejo de Gobierno el texto articulado que fue aprobado, en sesión del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de febrero de 2016, como *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*.
2. Dicho Proyecto de Ley fue remitido al Parlamento Vasco y la Mesa del Parlamento, en su sesión del día 12 de abril de 2016, acordó admitir a trámite el Proyecto de Ley, ordenó su remisión a la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte, así como su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, publicación que se materializó con fecha de 15 de abril de 2016.
3. El Capítulo IX del Reglamento del Parlamento Vasco, regula la caducidad de las tramitaciones parlamentarias, señalando, con carácter general, en su artículo 130, lo siguiente:

*“Disuelto el Parlamento Vasco o expirado su mandato, **caducarán todos los asuntos en tramitación** con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal.”*
4. Con arreglo a lo dispuesto en el citado precepto, y en la medida que el 2 de agosto de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 23/2016, de 1 de agosto, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones, el *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido posteriormente al Parlamento Vasco, caducó en su tramitación parlamentaria.



5. Además de estos breves antecedentes debe reseñarse que la presente memoria tiene su razón de ser en varias circunstancias que deben tenerse en consideración. En primer lugar, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 28 de febrero de 2017, ha aprobado el Programa Legislativo para la XI Legislatura, programa que contempla la remisión a la Cámara Vasca de 28 proyectos de ley. Y en la relación de proyectos de ley a remitir al Parlamento Vasco por el ejecutivo se encuentra numerado con el número 26 el *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, atribuyendo la iniciativa normativa al Departamento de Cultura y Política Lingüística.
6. En segundo lugar, la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, ha emitido el 9 de mayo de 2017, a instancia de la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura y Política Lingüística, y a propósito de la tramitación *del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte*, un informe jurídico titulado “*Viabilidad jurídica de la posibilidad que se vuelva a aprobar por el Consejo de Gobierno el mismo anteproyecto de Ley, en los mismos términos en los que se hizo en la anterior legislatura, para su posterior remisión como proyecto de ley al Parlamento, sin la necesidad de realizar ningún trámite previo y admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente*”. Tal dictamen contiene, entre otras, las siguientes conclusiones:

Primero.- De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente es claro que la disolución del Parlamento implica, siempre y en todo caso, la caducidad de los proyectos legislativos anteriormente presentados y, consiguientemente, la necesidad de su reiteración mediante el nuevo ejercicio del derecho de iniciativa legislativa del Gobierno. Sin embargo, el actual y vigente Consejo de Gobierno, puede en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que le reconocen los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, acordar la aprobación y remisión al Parlamento de un Proyecto de Ley aprobado ya con anterioridad, previa



elevación a él por el o la consejera competente de la correspondiente propuesta. De este modo, la caducidad de la tramitación parlamentaria del anterior *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco* no implica que dicha iniciativa legislativa no pueda ser reiterada, es decir, presentada de nuevo, en los mismos términos que lo fueron anteriormente. El dictamen concluye que *“es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de reiterar ante la nueva cámara salida del procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho del Gobierno para su presentación”*.

Segundo.- Tanto la Comisión Jurídica Asesora como la citada Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente dictaminado que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos administrativos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites administrativos realizados en el seno de dichos procedimientos previos a la tramitación parlamentaria, de modo que es práctica común, validada por ambos órganos en sus dictámenes, que los trámites realizados por el Gobierno anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente que en la legislatura siguiente se remita a la aprobación del Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación iniciada en una legislatura es plenamente válida y utilizable, sin que sea necesario ningún acto de conversión o convalidación, para una nueva aprobación por el Consejo de Gobierno. Y ello es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento, desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos a todos ellos, incluido este último, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material.



Tercero.- Esta elevación del *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco* al Consejo de Gobierno por uno de sus miembros –en este caso el Consejero de Cultura y Política Lingüística-, precisa, además de reflejar la decisión formal de pertinencia de la propuesta, recogida en el art. 26.8 de la citada Ley de Gobierno, aseverar tanto la vigencia de la viabilidad normativa (es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión), como la vigencia de los trámites anteriormente efectuados y la oportunidad y necesidad innovadora del ordenamiento jurídico que pretende, de acuerdo con los términos previstos en el proyecto político del Gobierno actual.

7. A tenor de las conclusiones reproducidas *ut supra*, no cabe duda de que el Consejero de Cultura y Política Lingüística puede elevar al Consejo de Gobierno el *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco* aprobado en el anterior Consejo de Gobierno, en su sesión de 23 de febrero de 2016. Para ello resulta preciso que se:

- a) Asevere la **viabilidad normativa del Proyecto de Ley** anterior, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión.
- b) Asevere la **vigencia de los trámites anteriormente efectuados**.

8. El dictamen elaborado por la Dirección de Desarrollo Normativo y Control Económico también concluye, como se ha expuesto anteriormente, que resulta preciso que la propuesta del correspondiente consejero o consejera al Consejo de Gobierno avale la oportunidad y necesidad del Proyecto de Ley. A nuestro juicio, este requisito en cierto modo ya está resuelto y no precisa de nuevo informe y pronunciamiento en la medida que el actual Consejo de Gobierno, en su sesión de 28 de febrero de 2017, ya ha incluido este Proyecto de Ley en su *Programa Legislativo* para la vigente Legislatura XI y es razonable sostener que tal acuerdo ha ido precedido de una adecuada ponderación de su necesidad y oportunidad.



9. Por todo lo anterior, la presente memoria se va a centrar en abordar la viabilidad normativa del Proyecto de Ley anterior, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión, así como la vigencia de los trámites administrativos anteriormente efectuados.

II.- CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS CON OCASIÓN DEL ANTERIOR PROYECTO DE LEY

10. Ya se ha indicado anteriormente que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites administrativos realizados en el seno de dichos procedimientos previos a la tramitación parlamentaria del *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, de modo que es práctica común que los trámites iniciados por un Consejero o Consejera anterior o por el Gobierno anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente del Proyecto de Ley que en la legislatura siguiente se remita a la aprobación en Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación administrativa realizada para la aprobación del Proyecto de Ley en la legislatura anterior es plenamente válida y utilizable, sin que sea necesario ningún acto de conversión o convalidación, para una nueva aprobación por el Consejo de Gobierno. Y tal conclusión es absolutamente lógica en la medida que dichos trámites realizados en el seno de un procedimiento administrativo en una anterior legislatura no devienen nulos ni pierden valor por el cambio de legislatura. Además, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa “*actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia...*” (artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
11. Y ello es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento del *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco*, desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo



de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos de todos ellos, incluido este último, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material.

12. En el dictamen de la Dirección de Desarrollo Normativo y Control Económico, citado en el presente informe, se analiza, en términos generales, la necesidad de un nuevo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora e Informe de la Oficina de Control Económico. Resulta necesario traer a colación tales criterios generales para examinar posteriormente, en relación con el *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, si deben reiterarse o no los informes de los dos órganos citados.
13. Sobre la intervención preceptiva de la Comisión Jurídica Asesora es indiscutible que tal órgano debe ser consultado en relación con todos los anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos (artículo 3.1.a de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi). Asimismo, son categóricos los artículos 56 y 57 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, en la redacción conferida por la Ley 8/2016, de 2 de junio:

“Artículo 56

1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que haya dictado la orden de iniciación.
2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios.
3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.

Artículo 57

1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe.

2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley.”

14. Resuelta la cuestión de que toda iniciativa legislativa que se eleve al Consejo de Gobierno debe ir acompañada del correspondiente dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, se suscita la duda sobre la necesidad o no de que vuelva a dictaminar sobre el mismo texto que anteriormente dictaminó o es suficiente con el dictamen evacuado con la anterior iniciativa normativa en la pasada legislatura. Esta cuestión es resuelta de modo fundado en el informe de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo con base en el artículo 29 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que establece lo siguiente:

*“Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de **modificaciones sustanciales** que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios”*

15. Del tenor literal de esta disposición cabe colegir, como expresamente advierte la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, que sólo procederá un nuevo examen del *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco* si es objeto de **modificaciones sustanciales**, haciendo abstracción del dato de si el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora se ha realizado con este gabinete del ejecutivo o con un gabinete anterior. Y para avalar tal conclusión trae a colación el Acuerdo nº 4/2017, del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora, al inadmitir una solicitud de dictamen en la sesión del día 26 de abril de 2017:



“7. O, en otras palabras, como se señaló en el Dictamen 10/2000, la Comisión sólo tendrá que volver a examinar el asunto cuando de su nueva elaboración se colija la existencia de **elementos o aspectos sustantivos distintos** de los examinados en su anterior intervención y cuya **relevancia** reclamen un nuevo análisis.

8. Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en relación con el Consejo de Estado y, por tanto, plenamente aplicable a los supuestos de intervención de esta Comisión.

9. De acuerdo con dicha doctrina, en síntesis, procede la nueva consulta cuando “...las innovaciones introducidas tras el dictamen del Consejo de Estado no han sido sugeridas por éste, son ajenas a los términos de la consulta y, además, ostentan una **relevancia sustancial**” (STS de 27 de mayo de 1993 RJ 1993\102040).

10. Los supuestos han sido precisados en posteriores pronunciamientos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya “que no es necesaria una nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen **modificaciones no sustanciales** (...), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición general de que se trate (...).”

11. La misma STS de 10 de marzo de 2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general **no sean sustanciales** resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de Estado, “entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una **alteración sustancial** en el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (...).”



12. E invoca también la STS de 31 de enero de 2001, por referencia a la Sentencia de 27 de mayo de 1993, valorando las modificaciones allí producidas, que no requerían nuevo dictamen del Consejo de Estado, “ya que es necesario compatibilizar el carácter final de dicho dictamen, como juicio de síntesis de todas las cuestiones planteadas e informes específicos emitidos con anterioridad, con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno (...), de la que resultaría desapoderado este si hubiese de ajustarse literalmente en la redacción definitiva a dicho dictamen, pues sólo si se regulasen materias no incluidas en el Proyecto remitido a dictamen o su ordenación resultase **completa o sustancialmente diferente**, sin haber sido sugerida por el propio Consejo de Estado, debería recabarse sobre tales extremos nuevo informe, ya que el titular de la potestad reglamentaria ostenta la facultad de introducir en el texto remitido al Consejo de Estado las reformas que considere adecuadas para la redacción final sin otro límite que el expresado (...)”.

13. La precedente doctrina sigue plenamente vigente, tal y como se desprende de la lectura de la STS de 22 de diciembre de 2016 (RJ 2017/106).

14. Procede, por tanto, examinar el texto del proyecto sometido a consulta, conforme al señalado criterio de la conexión de las innovaciones con las consideraciones del dictamen anterior, esto es, si derivan de las sugerencias del dictamen de la Comisión o si, ajenas a este, ostentan una **relevancia sustancial** que exija una nueva intervención preceptiva.”

16. Respecto al informe de la Oficina de Control Económico, la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo también concluye la preceptividad de aquel informe en relación con todo Anteproyecto de Ley que se desee elevar al Consejo de Gobierno. Se trata de un informe explícitamente mencionado por el artículo 133 del Reglamento del Parlamento Vasco, en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como en otras disposiciones legislativas y de naturaleza reglamentaria que no es preciso reproducir ahora.

17. Sentado lo anterior, al igual que lo hace la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Económico, cabe preguntarse: ¿es precisa una nueva emisión de informe de la Oficina de Control Económico en relación con un Proyecto de Ley ya aprobado por Consejo de Gobierno? ¿O podría bastar con el informe emitido previamente? El criterio jurídico de dicha Dirección es el siguiente:



Primero.- La normativa que regula este control económico normativo no establece de forma específica la necesidad de nuevo pronunciamiento. Solo hace referencia en el artículo 27.1 *in fine* de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a los supuestos de proyectos normativos en que deba dictaminar la Comisión Jurídica Asesora y, toda vez que este órgano es el último en pronunciarse, *“con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo”*. Es decir, sólo deberá comunicarse, sin más trámites, la modificación introducida. No se debe formalizar un nuevo dictamen.

Segundo.- Si la Comisión Jurídica Asesora no considera procedente pronunciarse sobre el reenvío de un Proyecto de Ley ya aprobado por Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento, tampoco parece procedente que lo haga la Oficina de Control Económico. Y en el supuesto de que la Comisión Jurídica Asesora decidiera que ha de pronunciarse sobre ese Proyecto de Ley, tampoco parece procedente que se pronuncie la Oficina de Control Económico, sin perjuicio de que le sea comunicado el dictamen o parecer de ésta a los efectos legales oportunos, así como las modificaciones que en su caso se introdujeran.

III.- VIABILIDAD NORMATIVA DEL ANTERIOR PROYECTO DE LEY. VIGENCIA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EFECTUADOS CON EL ANTERIOR PROYECTO DE LEY

18. Ya hemos indicado en el párrafo 7 de este informe jurídico que el Consejero de Cultura y Política Lingüística puede elevar al Consejo de Gobierno el Proyecto de *Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, aprobado en el anterior Consejo de Gobierno, en su sesión de 23 de febrero de 2016. Para ello resulta preciso que se asevere la viabilidad normativa del Proyecto de Ley anterior, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión.



19. A nuestro juicio el *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, que aprobó el Consejo de Gobierno el 23 de febrero de 2016, no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión, salvo la precisión que se realizará posteriormente. Repárese en que sólo han transcurrido un breve periodo de tiempo desde su aprobación por el Consejo de Gobierno y, además, ha coincidido con un periodo de inactividad legislativa como consecuencia de las sucesivas convocatorias de elecciones en el ámbito estatal y vasco.
20. El actual Presidente del Consejo Superior de Deportes, tal y como consta en el Diario de Sesiones de la Comisión de Educación y Deporte, del Congreso de los Diputados, de 9 de mayo de 2017, ya ha anunciado una “*ordenación de las profesiones del deporte, por la que se pretende garantizar unos servicios deportivos adecuados, seguros y de calidad*”. Aunque esa Ley, reiteradamente anunciado por precedentes gobiernos del Estado, tendrá incidencia en la legislación autonómica, a día de hoy se desconocen sus líneas generales, su contenido y alcance, por lo que no cabe concluir la afectación alguna por nuevas normas.
21. Cuestión diferente a la anterior es la oportunidad de incorporar al *Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del Deporte en el País Vasco* diversas modificaciones, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno el 23 de febrero de 2016, que por parte de la Dirección de la Actividad Física y Deporte se consideren oportunas.
22. A nuestro juicio resulta totalmente procedente la modificación de las siguientes disposiciones:
- a) La Disposición transitoria cuarta, apartado primero:

*“1.- Las y los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta Ley, no cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente Ley podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el **31 de diciembre de 2018**”*
 - b) La disposición transitoria sexta:



*“Las federaciones deportivas vascas deberán adaptar la reglamentación federativa a esta Ley o, en su caso, aprobar las disposiciones correspondientes y remitirlas al Registro de Entidades Deportivas del País Vasco para su aprobación e inscripción antes del **1 de enero de 2018**”*

c) La Disposición final sexta:

*“2.- No obstante lo anterior, las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas en la presente Ley serán exigibles a partir del día **1 de enero de 2019**. La exigencia de cualificaciones profesionales a las y los voluntarios se realizará a partir del **1 de enero de 2020**”*

23. A la vista de la convocatoria de elecciones, disolución del Parlamento y caducidad del anterior Proyecto de Ley, del tiempo transcurrido desde su anterior aprobación por el Consejo de Gobierno y de la necesidad de que por parte del Consejo de Gobierno se apruebe la nueva remisión al Parlamento, se estima necesario modificar las referencias temporales destacadas en negrita en el párrafo anterior de modo que las citadas fechas se retrasen dos años.

24. Asimismo, desde la Dirección de Actividad Física y Deporte se plantean las siguientes modificaciones no sustanciales del Proyecto de Ley, alguna de ellas a propuesta del órgano del Departamento competente en materia de normalización lingüística:

Exposición de motivos.- Se propone añadir una mención a que el deporte constituye un ámbito de actuación transversal y, concretamente, que tiene su afectación en el ámbito del “uso del **euskera**”.

Exposición de motivos.- Se propone hacer referencia a que los poderes públicos, en el ejercicio de la iniciativa normativa, deben actuar con arreglo a una serie de principios y, concretamente, se propone añadir el principio de “*garantía de los **derechos lingüísticos***”.



Exposición de motivos.- Se propone, en consonancia con la oficialidad del **euskera** y castellano, añadir la “*garantía del derecho de la ciudadanía a usar la lengua oficial de su elección*”.

Artículo 2.- Se propone añadir un apartado 7 estableciendo la obligación del Gobierno Vasco de adoptar medidas para “*impulsar la normalización del uso del **euskera** en el ámbito de ejercicio de las profesiones propias del deporte*”.

Artículo 4.-Se propone añadir en los apartados 2, 3 y 6 de este artículo, dedicado a la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, las nuevas titulaciones académicas aprobadas por el Gobierno:

- Técnico Superior en acondicionamiento físico, título aprobado mediante Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de julio de 2017.
- Técnico en actividades ecuestres, título aprobado mediante Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de julio de 2017.
- Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva, título aprobado mediante el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio de 2017.

Artículo 5.-Se propone añadir en el apartado 2 de este artículo, dedicado a la profesión de Entrenador Deportivo o Entrenadora Deportiva, la nueva titulación de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva.

Artículo 6.-Se propone añadir en el apartado 6 de este artículo, dedicado a la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva, las nuevas titulaciones de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y Técnico Superior en acondicionamiento físico.



Artículo 10.- Se propone hacer una mención a que el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco ofrezca la información “*en euskera y castellano*”.

Artículo 11.- Se propone añadir una letra q, para “*garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio efectivo de los **derechos lingüísticos** normativamente reconocidos a los destinatarios de los servicios*”.

Artículo 20.- Este artículo regula el ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información y la comunicación. Se propone añadir un apartado 5 para garantizar “*el uso del **euskera** en las páginas Web, aplicaciones...*”.

Disposición adicional segunda. Esta disposición se refiere a las políticas de igualdad en las profesiones del deporte. Se propone añadir un párrafo que obligue al Gobierno Vasco a promover “*la normalización del uso del **euskera** en el ámbito de ejercicio de las profesiones del deporte*”.

Disposición adicional cuarta. Esta disposición se refiere a la acreditación de cualificaciones para el acceso y ejercicio de las profesiones. Se propone añadir que el Gobierno Vasco garantizara “*que las acciones formativas se puedan cursar en **euskera** y castellano*”.

Disposición adicional octava.- Esta disposición se refiere a las formaciones en modalidades deportivas no reconocidas por el Estado y a las formaciones en modalidades deportivas sin plan formativo aprobado por el Estado. Se propone añadir un precepto que disponga que “*el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva garantizará que las acciones formativas se puedan cursar en **euskera** y castellano*”.

25. Las anteriores propuestas de modificación respecto del Proyecto de Ley que se remitió al Parlamento Vasco se refieren a tres ámbitos: garantía de los derechos lingüísticos, la incorporación de tres nuevas titulaciones académicas aprobadas



por el Gobierno con posterioridad a la caducidad del trámite parlamentario y modificación de la entrada en vigor de la Ley y de exigencia de las cualificaciones profesiones.

26. Respecto a las propuestas de modificación expuestas en los párrafos precedentes procede manifestar que **las modificaciones propuestas no son sustanciales ni desde el punto de vista cuantitativo ni desde el punto de vista cualitativo**. Por un lado, algunas propuestas de modificación constituyen una consecuencia necesaria del mero transcurso del tiempo, es decir, se difieren en el tiempo algunos de los plazos del anterior Proyecto de Ley. Por otro, las propuestas de modificación que se refieren a derechos lingüísticos, tampoco son sustanciales, hasta el punto de que, en realidad, desde una óptica de rigurosa técnica legislativa, en su mayor parte podrían calificarse como modificaciones innecesarias de acuerdo con el acertado criterio de la Comisión Jurídica Asesora, en su Dictamen nº 12/2016, sobre el *Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*, pues los objetivos perseguidos por la norma son los referidos a la salud y a la seguridad y no resulta necesario incorporar propuestas que *“que, aun asumiendo que persiguen loables objetivos... gozan de protección dentro de otros ámbitos normativos”*. Es decir, de conformidad con este criterio de técnica legislativa, las modificaciones propuestas ya gozan de un marco de protección en otras disposiciones legales en materia de normalización lingüística, sólo pretenden enfatizar las garantías y, en consecuencia, no cabe reputar la nueva regulación propuesta como *“completa y sustancialmente diferente”*. Por último, tampoco la introducción de las referencias a las tres nuevas titulaciones académicas aprobadas por el Gobierno constituye una modificación sustancial por numerosas razones: sólo afectan a tres artículos de la Ley y, además, a una parte muy reducida de los mismos. Por otro lado, también debe tenerse presente que el Proyecto de Ley remitido al Parlamento Vasco en 2016 ya contemplaba en su artículo 8 la adaptación reglamentaria a la aprobación posterior de nuevos títulos oficiales. Incluso, uno de los tres nuevos títulos aprobados por el Gobierno es sustitutivo de uno de los títulos académicos ya mencionados en la Ley.



27. A tenor de todas las consideraciones precedentes cabe concluir que, **al no introducirse modificaciones esenciales en el Proyecto de Ley, deben calificarse como válidos todos los trámites administrativos efectuados con ocasión de la aprobación del Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 23 de febrero de 2016.**

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI

JON REDONDO LERTXUNDI

Consejero de Cultura y Política Lingüística

Director de Actividad Física y Deporte

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **24/10/2017 9:41:48**

Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI**
Fecha de la firma: **24/10/2017 12:34:50**

Validación de la firma:  **Correcta**



EUSKADIN KIROL ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKO LEGE-PROIEKTUAREN GAINEKO TXOSTEN OSAGARRIA.

I.- SARRERA. AURREKARIAK

1. Memoria hau honako erabaki honen bideragarritasun juridikoa justifikatzeko egin da: Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak gobernu-kontseilura berriz aurkeztea gobernu-kontseiluak 2016ko otsailaren 23an egindako bilkuran *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektu* gisa onartutako testu artikulatua.
2. Lege-proiektu hori Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zuten, eta Legebiltzarreko Mahaiak, 2016ko apirilaren 12ko bilkuran, Lege-proiektua izapidetzeko onartzea erabaki zuen; halaber, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Batzordera igortzeko ere agindu zuen, baita Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzeko ere; 2016ko apirilaren 15ean argitaratu zuten.
3. Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren IX. kapituluak legebiltzarreko izapideen iraungipena arautzen du eta, oro har, honakoa adierazten du 130. artikuluan:

*«Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan, **iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak**, salbu eta Diputazio Iraunkorrak aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak».*

4. Aipatutako manu horretan xedatutakoarekin bat etorriz, eta 2016ko abuztuaren 2an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zenez abuztuaren 1eko 23/2016 Dekretua, Lehendakariarena, Eusko Legebiltzarra desegin eta hauteskundeetarako deia egiten duena, *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua*, gobernu-kontseiluak onartu eta ondoren Eusko Legebiltzarrera igorria, iraungi zen legebiltzarreko tramitazioan.



5. Aurrekari labur horietaz gain, adierazi behar dugu memoria honek kontuan hartu beharreko hainbat inguruabarretan ere baduela izateko arrazoia. Lehenik, Gobernu Kontseiluak, 2017ko otsailaren 28ko bilkuran, XI. Legegintzaldirako Legegintza Programa onartu du. Programa horrek Euskal Ganberara 28 lege-proiektu igortzea jasotzen du. Eta Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrera igorri beharreko lege-proiektuen zerrendan *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua* dago, 26. zenbakiarekin; araugintza-ekimena, halaber, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari egotzi diote.
6. Bigarrenik, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak, 2017ko maiatzaren 9an, txosten juridiko bat egin du, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzaren eskariz, *ekainaren 21eko Kiroleko Dopinaren aurkako 12/2012 Legea aldatzeko Lege-aurreproiektuaren* tramitazioaren harira, honako izenburu honekin: «Gobernu Kontseiluak lege-aurreproiektu bera, aurreko legegintzaldian egindako modu berean, berriaz onartzeko aukeraren bideragarritasun juridikoa, ondoren lege-proiektu gisa Legebiltzarrera igortzeko, aurretiko izapiderik egin beharrik gabe eta aldeaz aurretik egindako prozedura-izapideak baliozkotzat onartuta». Irizpen horrek honako ondorio hauek ditu, bestek beste:

Lehena.- Indarrean den ordenamendu juridikoarekin bat etorriz, argi da Legebiltzarra desegiteak, beti eta kasu guztietan, aurretik aurkeztutako legegintzako proiektu guztiak iraungitzea dakarrela eta, ondorioz, Jaurlaritzaren legegintzako ekimenerako eskubidea berriaz baliatuz errepikatu behar izatea. Orain indarrean den Gobernu Kontseiluak, ordea, Jaurlaritzari buruzko Legeak (ekainaren 30eko 7/1981) 16. eta 18a) artikuluetan legegintzako ekimenerako aitortzen dion ahalmena baliatuz, erabaki dezake aldeaz aurretik onartutako lege-proiektu bat onartzea eta Legebiltzarrera igortzea, eskumena duen sailburuak dagokion proposamena hari aurkeztu ondoren. Era horretan, aurretik aurkeztutako *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuaren* legebiltzarreko tramitazioa



iraungitzeak ez dakar legegintzako ekimen hori errepikatu, hau da, berriz aurkeztu ezin denik aurretik egindako modu berean. Irizpenak, amaitzeko, hau ere xedatzen du: *«Zalantzarik gabekoa da guztiz, legebiltzarrari dagokionez soilik, Eusko Jaurlaritza berriak, legegintzako ekimenerako eskubidea duen neurrian, hauteskunde-prozeduraren ondoriozko ganbera berriaren aurrean aurreko kabineteak onartutako ekimenak modu berean errepikatzeke gaitasun osoa duela, ekimenaren iraungipenak ez baitio eragiten Jaurlaritzak haiek aurkezteko duen eskubideari».*

Bigarren.- Bai Aholku Batzorde Juridikoak bai Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak berariaz xedatu dute legegintzaldia eta kabinetea aldatzeak ez dakarrela berez, inola ere ez, arauak egiteko administrazio-prozedurak iraungitzea, eta ez duela eragiten izapidetze parlamentarioaren aurretiko prozedura horien barruan eginiko administrazio-izapideak baliogabeak izatea. Hori horrela, ohikoa da, bi organo horiek hainbat irizpenetan baliozkotuta, aurreko Jaurlaritzak egindako izapideak ontzat jotzea eta izapide horiek, modu natural batez, hurrengo legegintzaldian Gobernu Kontseiluak onartzeko igortzen duten espedientearen zati izan daitezen. Era horretan, legegintzaldi batean hasitako izapideak guztiz baliozkoak eta erabilgarriak dira, bihurtzeko edo baliozkotzeko egintzaren beharrik gabe, Gobernu Kontseiluaren onespene berri bati begira. Eta hori aplikagarri zaie Legebiltzarrerara igorri aurretiko administrazio-prozeduraren egintza guztiei –hasiera emateko agindutik hasita Gobernu Kontseiluak onartzeko egintzara arte, biak barne–; hala, bada, administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoari eustea zein egintzak kontserbatzeko printzipioa horientzat guztientzat dira aldarrikatzekoak, azken hori barne, eta haien indarraldi materiala baino ez da baloratu behar.

Hirugarrena.- *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua* Gobernu Kontseilura haren kide batek –kasu honetan, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak– aurkez dezan, beharrezkoa da, proposamenaren egokitasunaren erabaki formala erakustea ez ezik –aipatutako Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikuluan jasota–, araubideragarritasuna indarrean dagoela (aurretik igorri ondoren onartutako



arauek eragin ez diotela, alegia) eta aurretik eginiko izapideak indarrean daudela baieztatzea ere, baita nahi duen ordenamendu juridikoa berritzea egokia eta beharrezkoa dela baieztatzea ere, oraingo Jaurlaritzaren proiektu politikoan aurreikusitakoari jarraikiz.

7. *Ut supra* adierazitako ondorioak aintzat hartuta, ez dago zalantzarik Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Gobernu Kontseilura aurkez dezakeela *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua*, Gobernu Kontseiluaren 2016ko otsailaren 23ko bilkuran onetsitakoa. Hartarako, hau egin behar da:

a) Aurreko **lege-proiektuaren arau-bideragarritasuna** baieztatzea, hots, igorri ondoren onartutako arauek eragin ez diotela frogatzea.

b) **Aurretik egindako izapideak indarrean daudela** baieztatzea.

8. Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak egindako irizpenak ondorioztatzen du, halaber, aurretik azaldu dugun bezala, dagokion sailburuak Gobernu Kontseiluari egindako proposamenak Lege-proiektua egokia eta beharrezkoa dela ere abalatu behar duela. Gure iritziz betekizun hori beteta dago nolabait, eta ez da beste txosten eta irizpen bat behar; izan ere, egungo Gobernu Kontseiluak, 2017ko otsailaren 28ko bilkuran, lege-proiektu hori jaso du jada indarrean den XI. Legegintzaldirako *Legegintza Programan*, eta arrazoizkoa da pentsatzea erabaki horren aurretik haren beharra eta egokitasuna behar bezala aztertu zirela.

9. Hori guztia dela eta, memoria honek aurreko lege-proiektuaren arau-bideragarritasunari helduko dio funtsean, hots, igorri ondoren onartutako arauek ez diotela eragin; horrez gain, aurretik egindako administrazio-izapideak indarrean dauden ere aztertuko da.



II.- AURREKO LEGE-PROIEKTUA ZELA-ETA EGINDAKO ADMINISTRAZIO-IZAPIDEEI BURUZKO IRIZPIDE OROKORRAK

10. Aurretik ere adierazi dugu legegintzaldia eta Jaurlaritzan kabinetea aldatzeak berez ez dakarrela, inola ere ez, arauak egiteko prozedurak iraungitzea, eta ez duela eragiten, orobat, *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua* legebiltzarrean izapidetu aurretiko prozedura horien barruan egindako administrazio-izapideak baliogabeak izatea; horrenbestez, ohikoa da aurreko sailburu batek edo aurreko Jaurlaritzak hasitako izapideak ontzat jotzea eta, modu natural batez, hurrengo legegintzaldian Gobernu Kontseiluan onartzeko igortzen duten lege-proiektuaren espedientearen zati izan daitezen. Era horretan, aurreko legegintzaldian Lege-proiektua onartzeko hasitako izapideak guztiz baliozkoak eta erabilgarriak dira, bihurtzeko edo baliozkotzeko egintzaren beharrik gabe, Gobernu Kontseiluaren onespén berri bati begira. Eta erabat logikoa da ondorio hori, administrazio-prozedura baten barruan aurreko legegintzaldi batean egindako izapide horiek ez baitira deusez bilakatzen eta ez baitute baliorik galtzen legegintzaldia aldatzeagatik. Gainera, Administrazio Publikoek, legegintzako ekimena baliatuz, «*printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia...*» (urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 129. artikulua).
11. Eta hori aplikagarri zaie *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua* Legebiltzarrera igorri aurretiko administrazio-prozeduraren egintza guztiei –hasiera emateko agindutik hasita Gobernu Kontseiluak onartzeko egintzara arte, biak barne–; hala, bada, administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoari eustea zein egintzak kontserbatzeko printzipioa horientzat guztientzat dira aldarrikatzekoak, azken hori barne, eta haien indarraldi materiala baino ez da baloratu behar.
12. Txosten honetan aipatu dugun Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzaren irizpenean aztertu da beharrezkoa den Aholku Batzorde Juridikoak beste irizpen bat eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak beste txosten bat ematea, oro



har. Irizpide orokor horiek hizpidera ekarri behar dira, ondoren –*Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuari* dagokionez– aipatutako bi organo horien txostenak berriz egin behar diren edo ez aztertzeke.

13. Aholku Batzorde Juridikoaren nahitaezko esku-hartzeari buruz, eztabaidaezina da organo horri aholkularitza eskatu behar zaiola lege-aurreproiektu guztiekin lotuta, haien gaia eta xedea edozein dela ere (azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 9/2004 Legearen 3.1.a artikulua). Eztabaidaezinak dira, halaber, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 56. eta 57. artikulua, ekainaren 2ko 8/2016 Legeak idatzitako moduan:

«56. artikulua

1. Jaurlaritzak, Aholku Batzorde Juridikoari igorri behar zaizkion lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak egiteko hasierako fasean, xedapenaren testua bakarrik igorriko dio Eusko Legebiltzarrari, behin prozedura hasteko agindua eman duen organoaren alde aurreko onespena izanda.
2. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari ere igorriko zaio, legebiltzar-taldeek dokumentazio hori ezagut dezaten.
3. Jaurlaritzak erabaki beharreko lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak Jaurlaritzako idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Kontseiluak aztertzeke gaietan sartu edo ez sartu erabakitzea.

57. artikulua

1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuekin batera, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena ere igorriko da eta, halakorik bada, txosten horretara egokitzeke oroitidazkia.
2. Lege-proiektuek, aurrekonturako kargaren bat badakarte, dagokien finantzaketa-eranskin bat eraman behar dute, eta hori Legebiltzarraren erregelamenduak lege-proiektuei buruz xedatutakoari jarraiki eztabaidatuko eta bozkatuko da».



14. Gobernu Kontseilura aurkezten den legegintzako ekimen orok Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena ere eduki beharraren kontua ebatzita, zalantza dago horrek aurretik irizpena emandako testu berari buruz beste irizpen bat ematea beharrezkoa den edo amaitutako legegintzaldiaren aurreko araugintza-ekimenarekin emandako irizpena nahikoa den. Gai hori zioetan oinarrituz ebatzi da Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzaren txostenean, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Legeak (azaroaren 24ko 9/2004) 29. artikuluan xedatzen duena oinarri hartuta. Honako hau dio:

*«Irizpena eman eta gero irizpenaren aztergaiari **garrantzizko aldaketak** egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gainditzen dituzten eduki berriak jasotzen badira, kontsulta berria egin beharra dago berri, aldaketa horiei buruz».*

15. Xedapen horrek hitzez hitz adierazten duenetik ondorioztatu behar da, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak espresuki ohartarazten duen moduan, *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua* berriz ere aztertuko dela **garrantzizko aldaketak** baditu bakarrik, alde batera utzita Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena Jaurlaritzaren kabinete honekin edo aurreko kabinete batekin egin den. Eta, ondorio hori abalatzeko, Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkuraren 4/2017 erabakia dakar hizpidera, irizpen-eskaera bat atzera bota baitzuen 2017ko apirilaren 26ko bilkuran:

*«7. Edo, beste hitz batzuekin, 10/2000 irizpenean adierazi bezala, Batzordeak gaia berri ere aztertu beharko du, baldin eta aurretik aztertutakoak ez diren **funtssezko elementuak edo alderdiak** badaude eta haien **garrantzia** dela-eta beste azterketa bat egin beharra badago bakarrik.*

8. Doktrina hori bat dator Auzitegi Gorenak Estatu Kontseiluari dagokionez ezarritakoarekin, eta, ondorioz, guztiz aplikagarri zaie batzorde honek esku hartzeko kasuei.

9. Doktrina horrekin bat etorri, laburbilduz, kontsulta berri egitea egokia da, baldin eta "...Estatuko Kontseiluaren irizpenaren ostean egindako berrikuntzak ez baditu hark iradoki, kontsultarekin loturarik ez badute eta,



gainera, **funtsezko garrantzia** badute” (AGE, 1993ko maiatzaren 27koa, RJ 1993\102040).

10. Ondorengo erabakietan zehaztu dituzte kasu horiek; horrela, bada, Auzitegi Gorenaren 2009ko martxoaren 10eko Epaiak (AGE – RJ\2009\5110) honako hau nabarmentzen du: “Ez da beharrezkoa Estatuko Kontseiluari beste kontsulta bat egitea testua orrazten badute edo **funtsezkoak ez diren aldaketak** egiten badituzte (...), ezta proiektuaren eta behin betiko testuaren arteko desadostasunak egiteko prozeduraren ondorio logikoak badira; horren barruan, izan ere, hainbat organok txostenak egiten dituzte eta aldaketak eragiten dituzte horiek azkenean onartzen den xedapenean. Gaineratu daiteke, orobat, Salaren doktrinak berak nabarmendu duela xedapen orokorrak egiteko ezarritako prozedurako bermeen interpretazio funtzional eta teleologikoa egiteko beharra. Horiek ez baitaude justifikatuta egitearen formalismo hutsagatik, duten xedeagatik baizik, eta haien balorazioan dena delako xedapen orokorraren berezitasunak hartu behar dira kontuan (...)”.

11. AGE horrek, 2009ko martxoaren 10ekoak, gogoraratzen du, orobat, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia dela (AGE, 2006ko martxoaren 8koa) xedapen orokor baten behin betiko testuan erantsitako aldaketak **funtsezkoak ez direnean** ez dela beharrezkoa beste entzunaldi bat egitea xedapenaren xedearekin harreman zuzena duten interes legítimoak ordezkatzeko dituzten elkarte, korporazio edo erakundeei, ezta Estatuko Kontseiluaren txosten edo irizpen berri bat egitea ere; “besteak beste, haien iritzia loteslea ez delako, hortaz, aldaketa ikuspegi erlatibotik –txostena jasotako testuaren berrikuntzagatik– zein ikuspegi absolututik –berezko garrantziagatik– aztertu ondoren **funtsezko aldaketarik** ez badakar aldeaz aurretik entzunaldi-izapidetik igaro edo txostena jaso duen ordenamenduan, egindako aldaketari dagokionez horiek ez egiteak ez dakar haren dusezintasun erradikalik, xedapena behin betiko idazteko ahalmena duenak kontsultatutako erakundeen, korporazioen, elkarten eta erakundeen irizpidea edo ilustrazioa izan baitu, eta hori da, funtsean, bilatutako xedea (...) erregelamenduak egiteko prozedura ezartzean (...)”.

12. Eta 2001eko urtarrilaren 31ko AGEak aldarrikatzen du, orobat, 1993ko maiatzaren 27ko epaiari erreferentzia eginda, han egindako aldaketak baloratu, aldaketa horiek ez zutela Estatuko Kontseiluaren irizpen berririk behar, “bateragarri egin behar baitira irizpen horren izaera finala, aurretik azaldutako gai guztiak eta egindako txosten espezifiko guztiak laburbiltzen dituen judizio modura, eta Gobernuaren erregelamenduak egiteko abala baliatzea (...); eta hori kenduko zitzaion irizpen horren behin betiko idazketara bitzez bitz egokitu behar izanez gero, irizpena emateko igorritako proiektuan jaso gabeko gaiak arautzen baziren edo haren antolaketa **guztiz edo funtsean ezberdina** bazen –betiere horiek Estatuko Kontseiluak berak iradoki ez bazituen– baino ez zen alderdi horiei buruzko txosten berri bat eskatu behar, erregelamenduak egiteko ahalaren titularrak baitu Estatuko Kontseilura igorritako testuan azken idazketarako



egoki deritzen erreformak gehitzeko ahalmena, adierazitakoa beste mugarik gabe (...)”.

13. Aurreko doktrina erabat indarrean dago, 2016ko abenduaren 22ko AGE irakurrita ondoriozta daitekeenez (RJ 2017/106).

*14. Egokia da, horrenbestez, kontsultara aurkeztutako proiektuaren testua aztertzea berrikuntzen eta aurreko irizpenaren gogoeten arteko loturari buruzko irizpenari jarraikiz, hau da, Batzordearen irizpenaren iradokizunen ondorio diren edo, horrekin zerikusirik izan gabe, nahitaezko esku-hartze berri bat eskatzen duen **funtsezko garrantzia** duten».*

16. Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostenari dagokionez, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak ere ondorioztatzen du txosten hori nahitaezkoa dela Gobernu Kontseilura aurkeztu nahi den lege-aurreproiektu orori dagokionez. Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikulua berariaz aipatutako txostena da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legean ere badago (ekainaren 30eko 14/1994), 25.1 artikuluan, baita orain errepikatu behar ez ditugun legegintzako eta erregelamenduzko beste xedapen batzuetan ere.
17. Aurrekoa ezarrita, honako galdera hau egin behar dugu, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak egiten duen modu berean: beharrezkoa al da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak beste txosten bat egitea Gobernu Kontseiluak jada onartutako lege-proiektu bati buruz?, edo aski izan liteke alde aurretik egindako txostenarekin? Zuzendaritza horren irizpide juridikoa honako hau da:

Lehena.- Ekonomia- eta arau-kontrol horren gaineko araudiak ez du berariaz xedatzen gaiari berriz heldu beharra dagoenik. Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legeak (ekainaren 30eko 14/1994), 27.1 artikuluan, *in fine* baino ez ditu aipatzen Aholku Batzorde Juridikoak irizpena eman behar duen kasuak, eta, organo hori irizpena ematen azkena denez, «*Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharke zuzenki organo aholku-emale horren irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezkeen aldaketak, onartu baino lehen*». Hau da, gehitutako aldaketa baino ez dute



jakinarazi beharko, bestelako izapiderik gabe. Ez da formalizatu behar beste irizpen bat.

Bigarrena.- Aholku Batzorde Juridikoaren iritziz ez bada egokia Gobernu Kontseiluak jada onartuta eta Legebiltzarrera igorrita dagoen lege-proiektu bat berriz igortzeari buruzko irizpena ematea, ez dirudi egokia denik Kontrol Ekonomikoko Bulegoak hori egitea. Eta, Aholku Batzorde Juridikoak lege-proiektu horri buruzko irizpena eman behar duela erabakiko balu ere, ez dirudi bidezkoa izango litzatekeenik Kontrol Ekonomikoko Bulegoak irizpena ematea, alde batera utzita haren irizpena edo iritzia eta erantsitako aldaketak –halakorik balego– jakinarazten zaizkion dagozkion legezko ondorioetarako.

III.- AURREKO LEGE-PROIEKTUAREN ARAU-BIDERAGARRITASUNA. AURREKO LEGE-PROIEKTUAREKIN EGINDAKO ADMINISTRAZIO-IZAPIDEEN INDARRALDIA

18. Adierazi dugu jada, txosten juridiko honen 7. lerrokadan, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Gobernu Kontseilura aurkez dezakeela *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektua*, Gobernu Kontseiluaren 2016ko otsailaren 23ko bilkuran onetsitakoa. Aurreko lege-proiektuaren arau-bideragarritasuna indarrean dagoela baieztatu behar du horretarako, hots, igorri ondoren onartutako arauak ez diotela eragin.
19. Gure iritziz, Gobernu Kontseiluak 2016ko otsailaren 23ko bilkuran onetsitako *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuari* ez diote eragin igorri ondoren onartu diren arauak, ondoren adieraziko dugun zehaztapenekin. Kontuan izan behar da denbora-tarte labur bat baino ez dela igaro Gobernu Kontseiluan onartu zenetik eta, gainera, legegintzako jarduera geldirik izan dela aldi horretan, estatu-mailako zein Euskadiko hauteskunde-deialdiak direla eta.



20. Kirol Kontseilu Goreneko egungo presidenteak, Diputatuen Kongresuko Hezkuntza eta Kirol Batzordeko 2017ko maiatzaren 9ko Bilkuraren Egunkarian jasota dagoenez, «kirol-arloko lanbideen antolaketa» iragarri du *«kirol-zerbitzu egoki, seguru eta kalitatezkoak bermatzeko»*. Estatuko aurreko gobernuek behin eta berriz iragarri dute lege hori, eta eragina izango du autonomia-erkidegoetako legerian, baina gaurko egunez ez dira haren ildo nagusiak ezagutzen, ez eta haren edukia edo irismena ere, eta, hortaz, ezin da ondorioztatu arau berrien ondoriozko eraginik izango dela.
21. Bestelakoa da, ordea, *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuan* hainbat aldaketa txertatzeko aukera; proiektua Gobernu Kontseiluak 2016ko otsailaren 23an onetsi ondoren Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak egoki jotako aldaketak dira, hain zuzen ere.
22. Gure iritziz, guztiz egokia da jarraian zerrendatuko diren xedapenen aldaketa:
- a) Laugarren xedapen iragankorraren lehen zenbakia:
- «1.- Lege hau indarrean sartzzen denean lege honek ezartzen duen lehen laguntza emateko kualifikaziorik ez duten kirol-arloko profesionalek **2018ko abenduaren 31ra** arte jarraitu ahal izango dute lanbide-jardueran».*
- b) Seigarren xedapen iragankorra:
- «EAEko kirol-federazioek lege honetara egokitu behar dute euren araudia, edo, hala badagokio, dagozkion xedapenak onartu behar dituzte, eta Kirol-Erakundeek EAEko Erregistrora bidali, onartuak izan daitezzen eta erregistroan inskriba daitezzen **2018ko urtarrilaren 1a** baino lehen».*
- c) Azken xedapenetatik seigarrena:
- «2.- Hala ere, **2019ko urtarrilaren 1etik** aurrera eskatuko zaizkie profesionalei lege honek arautzen dituen lanbideetan jarduteko gaikuntza ematen duten lanbide-kualifikazioak. Boluntarioei **2020ko urtarrilaren 1etik** aurrera eskatuko zaizkie lanbide-kualifikazioak».*



23. Ikusirik hauteskunderen deialdia egin, Legebiltzarra desegin eta aurreko lege-proiektua iraungi zela, Gobernu Kontseiluak proiektua onetsi zuenetik denbora igaro dela eta Gobernu Kontseiluak proiektua Legebiltzarrera berriz igortzeko onartu behar duela, beharrezkotzat jo da aurreko lerrokadan letra lodiarekin nabarmendutako denbora-erreferentziak aldatzea, bi urte atzeratuz.

24. Era berean, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak funtsezkoak ez diren aldaketa hauek proposatu ditu Lege-proiekturako; horietako batzuk hizkuntza-normalizazioaren esparruan eskumenak dituen sailaren organoak proposatu ditu:

Zioen azalpena.-Aipamen bat txertatzea proposatzen da, kirola jarduera-esparru transbertsala dela eta, zehazkiago, «**euskararen erabileran**» eragina duela esaten duena.

Zioen azalpena.- Botere publikoek araugintza-ekimena gauzatzean bete behar dituzten printzipioei aipamen bat egitea proposatzen da, eta, zehazkiago, «**hizkuntza-eskubideak bermatzeko**» printzipioa txertatzea proposatzen da.

Zioen azalpena.- **Euskararen** ofizialtasunarekin bat etorririk, «*herritarrek beren aukerako hizkuntza ofiziala erabiltzeko duten eskubidearen bermea*» gehitzea proposatzen da.

2. artikulua.- 7. atal bat gehitzeko proposamena egin da, Eusko Jaurlaritzari «*kirolarekin lotutako lanbideen jarduera-eremuan **euskararen** erabileraren normalizazioa sustatzeko*» neurriak hartzeko betebeharra ezartzeko.

4. artikulua.-Kiroletako begiraleei buruzko artikulua honen 2., 3. eta 6. zenbakietan Gobernuak onartutako titulazio akademiko berriak txertatzea proposatu da:



- Egokitzaipen fisikoko goi-teknikaria; ekainaren 23ko 651/2017 Errege Dekretuaren bidez onartu zen titulazio hori (2017ko uztailaren 8ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua).
- Zaldizko jardueretarako teknikaria; ekainaren 23ko 652/2017 Errege Dekretuaren bidez onartu zen titulazio hori (2017ko uztailaren 8ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua).
- Gizarte- eta kirol-hezkuntza eta -animazioko goi-teknikaria; ekainaren 23ko 653/2017 Errege Dekretuaren bidez onartu zen titulazio hori (2017ko uztailaren 15eko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua).

5. artikulua.-Kiroletako entrenatzaileei buruzko artikulua honen 2. zenbakian Gobernuak onartutako gizarte- eta kirol-hezkuntza eta -animazioko goi-teknikariaren titulazio berria txertatzea proposatu da.

6. artikulua.-Kiroletako zuzendariei buruzko artikulua honen 6. zenbakian Gobernuak onartutako gizarte- eta kirol-hezkuntza eta -animazioko goi-teknikariaren eta egokitzaipen fisikoko goi-teknikariaren titulazio berriak txertatzea proposatu da.

10. artikulua.- Euskadiko Kiroleko Profesionalen Erregistroak informazioa *«euskaraz eta gaztelaniaz»* emango duela dioen aipamen bat txertatzeko proposamena egin da.

11. artikulua.- Beste letra bat, q, gehitzea proposatu da, *«zerbitzuen hartzzaileek arauz onartuak dituzten **hizkuntza-eskubideak** benetan gauzatzea abalbidetuko duten baldintzak bermatzeko»*.

20. artikulua.- Artikulu honek plataforma birtualen bidezko edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidezko lanbide-jarduna arautzen du. Bertan, 5. zenbaki bat gehitzea proposatu da, *«webguneetan, aplikazioetan eta abarretan **euskararen** erabilera»* bermatzeko.



Hamabigarren xedapen gehigarri bat txertatu da, euskararen normalizazioari buruzkoa, honela dioena:

1.- Kirolaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailak bermatuko du prestakuntza-ekintzak euskaraz eta gaztelaniaz egin abal izateko aukera, bai eta erregulazio honen bidez arautzen diren kirol-lanbideen jarduera-eremuko euskararen normalizazioa ere, batik bat haurren eta gazteen esparruetan.

25. Eusko Legebiltzarrera igorri zen lege-proiektuan txertatzeko proposatu diren aldaketa horiek hiru esparrutakoak dira: hizkuntza-eskubideak bermatzea; legebiltzarreko izapidetzea iraungi ondoren Gobernuak onartutako hiru titulazio akademiko berri txertatzea; eta Legearen indarraldiaren hasiera eta lanbide-kualifikazioak eskatzeko hasierako data aldatzea.
26. Aurreko lerrokadetan azaldutako aldaketa-proposamenei dagokienez, esan behar da **ez direla funtsezkoak, ez ikuspuntu kuantitatibotik ez ikuspuntu kualitatibotik ere**. Batetik, aldaketa-proposamen batzuk denboraren joate hutsaren ondorio dira, hau da, luzatu egiten dituzte aurreko lege-proiektuaren epe batzuk. Bestetik, hizkuntza-eskubideei dagozkien aldaketa-proposamenak ere ez dira funtsezkoak; izatez, gehienak beharrik gabeko aldaketak direla ere esan daiteke, Aholku Batzorde Juridikoak *Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuari* buruzko 12/2016 irizpenean emandako irizpide zuzenari erreparatuz; izan ere, arauaren xedeak osasunarekin eta segurtasunarekin lotutakoak dira eta ez da beharrezkoa bestelako proposamenik txertatzea, *«helburu laudagarriak dituztela pentsa litekeen arren (...) beste arau-esparru batzuetan dagoeneko babestuta badaude»*. Hau da, legegintzako irizpide horren arabera, proposatutako aldaketak jasota daude dagoeneko hizkuntza-normalizazioari buruzko bestelako lege-xedapenetan. Horien xede bakarra, beraz, berme horiek azpimarratzea eta, ondorioz, ezin esan daiteke proposatutako araudi berria *«guztiz edo funtsean desberdina»* denik. Azkenik, ezin har daiteke garrantzizko aldaketatzat Gobernuak onartutako hiru titulazio berrien aipamenak txertatzea: Legearen hiru artikuluri baino ez diete eragiten eta, gainera, horien zati txiki bati bakarrik. Bestalde, kontuan izan behar da, halaber, 2016an Eusko Legebiltzarrera igorritako lege-aurreproiektuan ere jasota



zegoela, 8. artikuluan, etorkizunean onartuko ziratekeen titulazio berriei araudia egokitzeke aukera. Are gehiago, Gobernuak onartutako hiru titulazioetako bat Legean aipatutako ikasketa-tituluetako baten ordezkoa da.

27. Azaldutako gogoeta guztiak kontuan izanik, ondorioztatu behar da, **Lege-proiektuan funtsezko aldaketarik sartu ez denez, baliozkoak direla Gobernu Kontseiluaren 2016ko otsailaren 23ko bilkuran onetsi zuen Euskadin kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege-proiektuaren onarpenaren arloan egin diren administrazio-izapide guztiak.**

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI

JON REDONDO LERTXUNDI

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
zuzendaria

Firmante: JON REDONDO LERTXUNDI

Fecha de la firma: 24/10/2017 9:41:54

Validación de la firma: Correcta

Firmante: BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI

Fecha de la firma: 24/10/2017 12:34:33

Validación de la firma: Correcta

VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS Y LOS INFORMES REALIZADOS AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, el Anteproyecto elaborado por la Dirección de Juventud y Deportes fue remitido a las entidades que pudieran resultar afectadas, para trámite de audiencia e información pública.

Además, El 2 de febrero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Vasco la Resolución de 23 de enero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, por el que se sometía a información pública el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

Una vez finalizado el periodo de información pública y alegaciones se han recibido Alegaciones de las siguientes entidades que se pasa a valorar:

I.- ALEGACIONES DE LA ASOCIACIÓN GIPUZKOANA DE EMPRESAS GESTORAS DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.

1. Por parte de Don Juan Ignacio Moyua Ayala se presentan, con fecha de 25 de febrero de 2015, alegaciones en nombre de la Asociación Gipuzkoana de Empresas Gestoras de Servicios y Equipamientos Deportivos, que tiene, entre sus funciones, la de representar a los asociados ante las diversas Administraciones Públicas.

2. Una primera alegación que presenta la Asociación es la relativa al **artículo 10**, que se refiere a la colegiación y al Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco. A su juicio, se deberían tener en cuenta las tendencias legislativas a hacer desaparecer los colegios profesionales o, cuando menos, acotar éstos a unas pocas actividades profesionales.

3. A nuestro juicio, la presente alegación no debe ser acogida por diversas razones. En primer lugar, no nos consta tal tendencia legislativa a hacer desaparecer colegios profesionales. Si se examinan adecuadamente los boletines oficiales, tanto estatales como autonómicos, de la última década se observa la creación de numerosos colegios profesionales respecto a profesiones que antes carecían de corporación colegial. Cuestión diferente es la atinente a los sucesivos borradores del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que ha ido elaborando el Gobierno estatal a lo largo de 2013 y 2014, en donde se contemplaba una reducción de las profesiones sujetas a colegiación obligatoria. Sin embargo, el Gobierno ha decidido retirar tal iniciativa legislativa. Además, nótese que el artículo 10 del Anteproyecto sometido a información pública deja sentado que tal requisito de colegiación sólo es exigible *“si así lo dispone la legislación estatal correspondiente”*. Es decir, no es el Anteproyecto que ahora se examina el que establece la colegiación obligatoria, pues ello constituye una competencia legislativa del Estado. Tampoco parece procedente la supresión de tal disposición pues la misma configura el Registro de Profesionales del Deporte, que es uno de los ejes de la Ley y que va a posibilitar el adecuado control del cumplimiento de la Ley. A mayor abundamiento, procede resaltar que la primera disposición legislativa existente en España en materia de regulación de las profesiones del deporte, la Ley catalana 3/2008, también contiene un Registro de Profesionales del Deporte. Por último, no puede pasarse por alto que en otros ámbitos materiales también existen registros de profesionales. Por ejemplo, el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, prevé en su artículo 5.2 la existencia de registros públicos de profesionales como un instrumento de garantía para profesionales y para pacientes. Según el Preámbulo del Real Decreto *“el carácter público de determinados datos del registro contribuirá a generar mayor seguridad y confianza en los profesionales de nuestro sistema de salud”*.

4. La Asociación también formula alegaciones respecto a la **Disposición Adicional Cuarta** y la **Disposición Adicional Séptima**. La Asociación manifiesta que le preocupa más el desarrollo reglamentario de la Ley, su aplicación práctica, más que la propia Ley, pues los motivos y fines que persigue el Anteproyecto son plenamente compartidos por la Asociación. La entidad alegante manifiesta que le inquieta el coste económico que conllevará la aplicación de la Ley y quién va a acabar asumiendo dicho coste, pues más del 60% de los empleados de las empresas integrantes de la Asociación que realizan funciones de monitor deportivo no gozan de las titulaciones que el Anteproyecto establece como oficiales.

5. La Asociación considera que las citadas disposiciones adicionales abren la puerta a que desde el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva se prevean fórmulas diferentes de acreditación de la cualificación profesional adquirida por vías diferentes a las formaciones académicas oficiales. La Asociación está muy preocupada por la incidencia de la exigencia de cualificaciones profesionales en el ámbito de los monitores deportivos pues, a su juicio, la posesión de los títulos oficiales requeridos por la Ley no implica, por si misma, que los monitores y monitoras que posean los mismos estén capacitados para prestar servicios en sus equipamientos deportivos, de forma que los puestos de trabajo que ofrecen exigen unas cualificaciones diferentes. Asimismo, propone que previamente a la aprobación de la Ley el Departamento competente en materia deportiva determine los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes a los títulos y certificados oficiales

6. Apuntado lo anterior, la Asociación realmente no formula una alegación concreta sobre tales disposiciones adicionales sino que se pone a disposición de la Dirección de Juventud y Deportes para abordar, antes de la aprobación de la Ley, la previsión del futuro desarrollo reglamentario exponiendo algunos de los puntos críticos que deberán tenerse en cuenta y que compartimos en su integridad. Ciertamente, tal y como manifiestan los alegantes, el desarrollo reglamentario de esta Ley reviste una extraordinaria importancia y deberá hacerse un esfuerzo en garantizar la adecuada aplicación práctica de la Ley.

7. Respecto a la **Disposición Transitoria Primera** la Asociación vuelve a realizar la misma reflexión y se ofrece a colaborar en el diseño del proceso de habilitación de profesionales del sector. Asimismo, propone añadir un párrafo al apartado 5 para que no se considere que concurre el supuesto de ineptitud sobrevenida previsto en el Estatuto de los Trabajadores en el caso de profesionales que preste sus servicios en contratas vigentes con las Administraciones Públicas y propone que sea responsabilidad de éstas advertir en los pliegos administrativos y/o técnicos de estas situaciones, así como sea responsabilidad de las mismas dotar al concurso de la partida económica suficiente para sufragar los gastos necesarios ante la necesidad de hacer frente a un hipotético despido.

8. En esta alegación se mezclan por parte de la Asociación diferentes cuestiones que merecen diversas respuestas. Respecto a la propuesta de que el Gobierno Vasco comience a trabajar desde este instante en la validación del personal que ya está desarrollando funciones profesionales se comparte esa sugerencia y, de hecho, desde la Dirección de Juventud y Deportes ya se está trabajando en ese tema y se ha contratado un estudio. Respecto a la conveniencia de añadir una disposición transitoria para que no resulte de aplicación la exigencia de cualificaciones en los contratos administrativos otorgados por las empresas de servicios deportivos con las Administraciones Públicas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley no se formula objeción alguna, aunque con una redacción diferente a la propuesta por la Asociación, tanto por razones de redacción como de fondo, pues no debe mezclarse esta cuestión con la legislación laboral sobre extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida.

9. Sobre la **Disposición Transitoria Segunda**, vuelve a realizar la misma reflexión sobre la necesidad de estudiar la actual situación de profesionales cualificados en cada uno de los sectores y de estudiar cuándo esa falta de profesionales cualificados se debe a circunstancias ajenas a las empresas y cuándo se debe a la dejación de responsabilidades de las empresas.

10. Ya se ha manifestado *ut supra* que la Dirección de Juventud y Deportes ya está trabajando en conocer la situación de las y los trabajadores en el sector en orden a la implantación progresiva de la Ley. Si alguna característica pone de manifiesto el Anteproyecto es su sensibilidad por la hipotética situación de falta de profesionales

cualificados y a tal efecto contempla una aplicación progresiva de la Ley, complementada de medidas como la habilitación de profesionales con una cualificación inferior.

11. La Asociación también realiza, respecto a la **Disposición Final Primera** y la **Disposición Final Segunda**, relativas a las infracciones administrativas por incumplimiento de la Ley, una propuesta consistente en que, dado el régimen sancionador, en los supuestos de existencia de necesidad urgente de profesionales cualificados, tal necesidad pueda ser cubierta de forma provisional – por ejemplo durante situaciones de incapacidad temporal-, por trabajadores con formaciones inferiores a las requeridas.
12. A nuestro entender, las empresas del sector, si hay un número suficiente de profesionales cualificados, deben dotarse de herramientas para resolver las posibles incidencias o demandas que puedan presentarse en circunstancias determinadas. Un ejemplo de esa clase de herramientas de gestión de recursos humanos, máxime en un contexto de gran desempleo en el segmento de personas jóvenes, son las bolsas de trabajo para sustituciones con personal cualificado. Resulta impensable en otras profesiones vinculadas a la salud –piénsese en las profesiones sanitarias- cubrir las necesidades con profesionales sin la cualificación establecida en la legislación vigente. El Anteproyecto arbitra diversas soluciones ante la inexistencia de suficientes profesionales cualificados. Por ejemplo, si no existen suficientes profesionales en el ámbito material correspondiente la propia Ley ya contempla la habilitación de personas con una cualificación inferior.

II.- ALEGACIONES DE LA FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTES AÉREOS.

13. Por parte de José Antonio Lejarza Rementeria se presenta, con fecha de 23 de febrero de 2015, alegaciones en nombre y representación de la Federación Vasca de Deportes Aéreos.
14. Con relación a los párrafos 4, 5 y 6 del **artículo 4**, la Federación considera conveniente concretar que para los deportes considerados de riesgo la formación específica requerida debe alcanzar siempre el Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en

la modalidad o disciplina deportiva correspondiente, independientemente de que se posean otros títulos académicos (Grado o Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, etcétera). Con relación al apartado 6 del artículo 4, la Federación interpreta que no queda suficientemente claro que las titulaciones académicas referidas en los apartados a, b y c constituyen una alternativa a los títulos requeridos en el apartado 4 del mismo artículo.

15. Compartimos esencialmente las observaciones de la Federación alegante y, de hecho, antes de presentarse la alegación, ya se había constatado la necesidad de realizar algunos ajustes en las diferentes reuniones de trabajo del equipo redactor. En principio, parece razonable que en actividades de cierto riesgo en el medio natural también puedan ejercer la profesión quienes posean las titulaciones previstas en las letras a, b y c del artículo 4 (Certificado del Ciclo Inicial del Grado Medio del título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad, especialidad o disciplina deportiva correspondiente, así como este título y el superior). Asimismo, en sintonía con la alegación se indicará en el apartado 6 que para ejercer la profesión en el ámbito de las actividades deportivas de riesgo, además de las titulaciones previstas en las letras a, b y c del apartado 6 resultará precisa una formación específica de la actividad a desarrollar, que no tiene que ser necesariamente el Ciclo Inicial de la modalidad, pues repárese en que hay –y puede haber más en un futuro– actividades de riesgo en el medio natural no catalogadas como modalidad, especialidad o disciplina deportiva.
16. Por último, se solicita, de cara a desarrollo reglamentario, que se articulen eficazmente los diversos procedimientos para las habilitaciones provisionales, la acreditación de las cualificaciones a través de la experiencia, etcétera.
17. Compartimos la preocupación de la Federación Vasca de Deportes Aéreos, le consta que en el seno de la Dirección de Juventud y Deportes ya se está trabajando en el proceso de futura implantación de la Ley.

III.- ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.

18. Por parte de Doña Carmen Gutiérrez Fraile se presentan, con fecha de 24 de febrero de 2015, en nombre de la Diputación Foral de Álava, alegaciones respecto al anteproyecto sometido al trámite de información pública.
19. La primera alegación que formula la Diputación va referida a la **Disposición Adicional Décima**, sobre la formación en actividades con deportistas en edad escolar. A tal efecto, constata que en la actualidad hay una clara insuficiencia de personas con títulos oficiales o certificaciones en este ámbito. Actualmente, en Álava sólo un 20% de los y las monitores y entrenadoras que participan en la campaña de deporte escolar poseen alguna titulación, académica o deportiva. A su juicio, solicitar la cualificación que se indica en la Ley supondría dejar fuera del deporte escolar gran cantidad de escolares como consecuencia de la falta de titulados. Por ello se solicita al Gobierno Vasco un compromiso para habilitar acciones formativas específicas en el ámbito del deporte en edad escolar y promover las convalidaciones y homologaciones de las acciones formativas que desde hace cinco años vienen impartiendo las tres diputaciones forales.
20. Compartimos la preocupación formulada por la Diputación y a tal efecto se constata que el Anteproyecto contempla numerosas medidas para evitar problemas con la implantación de la Ley. En primer lugar, el borrador sometido al periodo de información pública contemplaba una exigencia de las cualificaciones profesionales a partir del 1 de enero de 2018, pero tal exigencia, tras las sucesivas reuniones realizadas con los agentes sociales, se va a posponer para el voluntariado, que es el colectivo que principalmente se dedica al ámbito del deporte escolar, al 1 de enero de 2020, según la Disposición Final Sexta. En segundo lugar, la Disposición Transitoria Segunda contempla que ante supuestos de falta de profesionales con las cualificaciones necesarias, la ausencia de formaciones oficiales o la existencia de nuevos ámbitos se habilitará provisionalmente a aquellas personas que acrediten una cualificación inferior u otro tipo de formación análoga. Es decir, se contempla la herramienta de la habilitación.

Asimismo, a lo largo de la Ley se contempla la acreditación de las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes a los títulos y certificados oficiales.

21. La segunda alegación se realiza sobre el **artículo 18**. Su apartado 5 dispone que las funciones de inspección controlando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley corresponderán, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, a la Inspección Deportiva. En opinión de la Diputación Foral de Álava la función inspectora de las cualificaciones profesionales para el ámbito escolar, que en su opinión es competencia de las Diputaciones Forales hasta la fecha, supondrá una carga futura que no pueden asumir.

22. La preocupación de la Diputación por este tema de la inspección tiene una sencilla respuesta: no corresponde a la Diputación Foral de Álava la función inspectora en materia de titulaciones en el ámbito del deporte escolar. El artículo 119 de la vigente Ley 14/1998, al que se remite el artículo 18.5 del Anteproyecto, dispone que *“[E]l Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes ejercerá las funciones de inspección deportiva, controlando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia deportiva, especialmente el cumplimiento de aquellas que hacen referencia a los centros deportivos y a las titulaciones relativas al deporte”*. Es decir, no corresponde a las diputaciones forales tal función de inspección, sino al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes.

23. La tercera alegación se refiere a la **Disposición Adicional Sexta**, que regula la competencia en primeros auxilios. A su juicio, existe una imposibilidad de que todas las personas que desarrollen las profesiones del deporte acrediten esta cualificación profesional para el día de su implantación.

24. Sobre esta alegación debe señalarse que, precisamente por la razón apuntada por la Diputación Foral de Álava, la exigencia de cualificaciones profesionales se ha pospuesto, para los profesionales, al 1 de enero de 2019, y para las personas que presten servicios en régimen de voluntariado al día 1 de enero de 2020. En la medida que constituye una formación de pocas horas parece razonable pensar que esa competencia puede ser exigida a partir de dichas fechas.

25. Respecto al **apartado 4** del **artículo 4**, profesión de monitor deportivo o monitora deportiva, se propone exceptuar de tal profesión las competiciones de itinerario de participación, pues se corresponde con las funciones del entrenador o entrenadora.
26. La Diputación Foral de Álava quizás no ha reparado que el artículo 5, apartado 2 del Anteproyecto, incluye, dentro de la profesión de Entrenador o Entrenadora, las funciones respecto a deportistas y equipos en el ámbito del deporte escolar durante su participación en actividades de competición de carácter multideportivo o multidisciplinar.
27. La Diputación Foral de Álava formula una alegación respecto al **apartado 3** del **artículo 4**, también sobre la profesión del monitor deportivo o monitora deportiva. Se propone habilitar para ejercer la profesión en actividades de enseñanza, aprendizaje o análogas de carácter multideportivo o multidisciplinar, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, a los y las técnicos de los niveles I, II y III de las enseñanzas deportivas de régimen especial ya que, en su opinión, los bloques comunes de estas formaciones incluyen los contenidos para poder trabajar en ese ámbito.
28. A nuestro entender, no procede contemplarse la alegación presentada en el texto de la ley. El RD 1363/2007 que regula las enseñanzas deportivas en su artículo 1, establece claramente que dichas enseñanzas habilitan a los alumnos/as en una única modalidad o especialidad deportiva. *“Conforme a lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva, y facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.”* Por otra parte, los bloques comunes de las enseñanzas deportivas poseen contenidos de carácter general como pueden ser “primeros auxilios”, “organización y legislación”, “deporte y género”, “deporte adaptado”, “bases del entrenamiento deportivo”, “bases del aprendizaje deportivo”, etc., pero carecen de contenidos que promuevan la obtención de conocimientos en la enseñanza multidisciplinar o multideportiva como

es el caso de, por ejemplo, las siguientes asignaturas del Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas: actividades físico-deportivas con implementos (180 horas); actividades físico-deportivas de equipo (315 horas); actividades físico-deportivas individuales (220 horas). Situación diferente es la valoración de la propuesta de la Diputación Foral de Álava de cara a una posible aplicación progresiva de la ley como establece la disposición transitoria segunda.

29. Respecto al **apartado 6** del **artículo 6**, referente a la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva, por la Diputación Foral de Álava se propone habilitar a quien ostente la cualificación necesaria para ser Profesor o Profesora de Educación Física para impulsar, planificar, programar, coordinar, evaluar o dirigir actividades deportivas escolares que se programen también fuera de los centros educativos fuera del horario lectivo.
30. No se formula objeción a tal alegación pues, de hecho, ya se ha incorporado al Anteproyecto, de modo que podrán realizar aquellas funciones en el seno de los centros escolares fuera del horario lectivo o en el seno de otras entidades siempre que las edades de los escolares se correspondan con su cualificación docente. Incluso esa alegación debe extenderse a los artículos 4 y 5.

IV.- ALEGACIONES DE KIROL MANAGEMENT S.L.U.

31. La empresa especializada en servicios deportivos, KIROL MANAGEMENT S.L.U., ha presentado, con fecha de 25 de febrero de 2015, a través de su representante, Don Eduardo González González, un escrito con diversas consideraciones en torno al Anteproyecto sometido a información pública.
32. La empresa citada, propone modificar la **Disposición Adicional Tercera** de la Ley con relación a las actividades realizadas en régimen de voluntariado y análogas. En su opinión, la exigencia de los mismos requisitos al colectivo de voluntariado, mayoritario en el ámbito del deporte escolar o del deporte de base, no se ajusta a la realidad deportiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco. A su juicio, las características de ese colectivo se significan por ser personas jóvenes, incluso menores de edad, que permanecen generalmente un curso o temporada, o poco

más, y que no tienen en su mayoría voluntad de dedicarse profesionalmente a la actividad física y al deporte. Asimismo, por parte de KIROL MANAGEMENT se deja constancia de las consecuencias muy graves de tal medida en el sistema deportivo como el descenso de practicantes, actividades, estructuras, etcétera, por lo gravoso que puede ser para padres, madres, clubes, etcétera, el incremento de las cuotas para hacer frente a la contratación de personal cualificado, pues éste no va a dedicarse a la actividad en régimen de voluntariado.

33. En nuestra opinión, la presente ley se justifica por la *“innegable incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y la seguridad del deportista”*. Las administraciones han de velar por que las actividades que se desarrollen de una forma organizada y estructurada en ámbitos como, por ejemplo, el deporte escolar o el deporte federado sean desarrolladas en los mismos términos de salud y de seguridad, independientemente de que la actividad se desarrolle en régimen laboral o en régimen de voluntariado. Así, y extrapolando la situación a otro sector, nadie entendería que una persona realizara labores de médico en una ONG sin la correspondiente cualificación, por mucho que la realizara en forma de voluntariado. No requerir o exigir una formación de carácter inferior a las personas que actúan en entidades deportivas en forma de voluntariado daría a entender que, o bien los requerimientos de cualificación y, por lo tanto, la ley no sería necesaria, o bien que las cualificaciones establecidas en el anteproyecto resultan excesivas para las necesidades reales de las personas que ejercen en el deporte. De todos modos, como compartimos esencialmente la preocupación de la citada compañía alegante, en el supuesto de que no existan suficientes monitores y entrenadores con cualificación la fórmula que contiene el Anteproyecto en su la Disposición Transitoria Segunda, permitiría resolver el problema mediante la habilitación a personas con una formación inferior.

V.- ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

34. Con fecha de 23 de febrero de 2015, por parte de Doña Maitane Leizaola Zulueta se presentan, en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia, alegaciones respecto al Anteproyecto.

35. La primera consideración que realiza la Diputación Foral es que para poder llevar a cabo la aplicación de la Ley será necesario conocer la situación actual y, a tal efecto, realizar, entre otras acciones, un diagnóstico de la situación laboral y de cualificación en el ámbito del deporte al objeto de saber cuántos voluntarios o voluntarias existen en la actualidad, cuántos profesionales trabajan en el sector, etcétera.
36. Compartiendo la sugerencia, desde la Dirección de Juventud y Deportes ya se viene trabajando en ese tema para conocer la situación real con más detalle en orden a la adecuada implantación de la Ley.
37. Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se pone manifiesto, en orden a la aplicación de la Ley y de sus desarrollos reglamentarios, que el plazo de 1 de enero de 2018 puede resultar imposible de cumplir.
38. También compartimos la sugerencia de la Diputación y, tal y como se ha manifestado en este informe *ut supra*, precisamente por la razón apuntada por la Diputación la exigencia de cualificaciones profesionales se ha pospuesto, para profesionales, al 1 de enero de 2019, y para las personas que presten servicios en régimen de voluntariado al día 1 de enero de 2020.
39. En el importante tema de la exigencia a las y los voluntarios de cualificaciones profesionales idénticas a los profesionales, exigencia que puede provocar problemas, tal y como han advertido algunos alegantes, por parte de la Diputación Foral se considera que, al realizar ambos colectivos las mismas funciones y en las mismas entidades, las diferencias de cualificación y plazos de exigencia a profesionales y voluntarios deben ser las mismas. A tal efecto, se considera que la exigencia de cualificación profesional en primeros auxilios (**disposición adicional sexta**) y la **disposición transitoria cuarta** respecto al incumplimiento del deber de obtener la cualificación de primeros auxilios debe extenderse al voluntariado (**disposición transitoria quinta**).
40. Sobre esta alegación debe apuntarse que en el Anteproyecto que fue sometido a información pública se estableció, en sintonía con la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia, la exigencia de la misma cualificación para las personas que

presten servicios, con independencia de su condición de profesionales y voluntarios. Por esa razón, y en atención a que a las y los voluntarios constituyen, por lo general, un colectivo que se significa por ser personas jóvenes, incluso menores de edad, que permanecen una media de un curso o temporada, o poco más, que no tienen en su mayoría voluntad de dedicarse profesionalmente a la actividad física y al deporte y de adquirir las cualificaciones previstas en la Ley, se ha propuesto un plazo diferente de exigencia de cualificaciones, aunque lo cierto es que es muy parecido. No obstante lo anterior, no formulamos objeción jurídica alguna a que el plazo para ambos colectivos sea idéntico.

41. Respecto a la alegación de que también se exija a las y los voluntarios la competencia en primeros auxilios en la Disposición Adicional Sexta debe señalarse que realmente no excluye a los voluntarios tal disposición, pues se refiere a *“[T]odas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en esta Ley”*. No obstante lo anterior, al objeto de evitar cualquier interpretación inadecuada se procede a modificar la redacción para que resulte diáfana su inclusión.
42. Respecto a la cualificación profesional en primeros auxilios, regulada en la **Disposición Adicional Sexta**, por parte de la Diputación se considera que existe dificultad de que todas los profesionales que desarrollen las profesiones acrediten tal cualificación. La Diputación Foral de Bizkaia no formula una propuesta concreta.
43. Sobre esta alegación debe señalarse que, precisamente por la razón también apuntada por la Diputación Foral de Álava, la exigencia de cualificaciones profesionales se ha pospuesto para los profesionales al 1 de enero de 2019 y para las personas que presten servicios en régimen de voluntariado al día 1 de enero de 2020.
44. Respecto al procedimiento sancionador para las infracciones previstas en la **Disposición Final Primera y Segunda**, la Diputación Foral afirma que habría que definir cuál es el procedimiento sancionador pues no queda claro si va a establecerse un procedimiento *ad hoc* o será de aplicación el procedimiento existente.

45. En realidad no existe en el Anteproyecto un procedimiento *ad hoc* y la potestad sancionadora deberá ejercerse por el Gobierno Vasco con arreglo a la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas del País Vasco.
46. La Diputación Foral de Bizkaia manifiesta que, a la vista de la experiencia con el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, genera inquietud el funcionamiento del Registro previsto en el **artículo 10** del Anteproyecto.
47. En este sentido, resultará fundamental que se dote al Registro de Profesionales del Deporte de los recursos humanos y materiales si se desea una aplicación efectiva y garantista de la Ley.
48. Respecto al **artículo 4.8**, la Diputación considera que habría que modificar su redacción para que las personas con cualificación para ejercer de Profesor de Educación Física puedan ejercer cualquiera de las profesiones previstas en la Ley no sólo en centros escolares, sino también en todo tipo de entidades deportivas, incluido el nivel básico de una modalidad deportiva.
49. No se formula objeción a tal alegación pues, de hecho ya se ha incorporado al Anteproyecto.
50. En la **disposición transitoria primera, apartado cuarto**, la Diputación considera que debe modificarse la expresión “*se habilitará provisionalmente*” por “*podrá habilitarse*”, ya que existen ciertas modalidades deportivas minoritarias en las que casi todas las categorías o muchas de las categorías se consideran nacionales y, por lo tanto, podría desvirtuarse la intención de hacer mención, exclusivamente, a los niveles máximos.
51. Se comparte la sugerencia de la Diputación Foral de Bizkaia y no se formula objeción para su incorporación.
52. Respecto a la **Disposición Adicional Décima**, relativa a la formación en actividades con deportistas en edad escolar, se desea un compromiso temporal.

Asimismo, se insta, conociendo el Gobierno Vasco la existencia del cursos de monitorado de Deporte Escolar llevado a cabo por las diputaciones forales desde hace cinco años, se promuevan las convalidaciones y homologaciones necesarias al objeto de que se capacite al alumnado que ha realizado tales formaciones el desarrollo de su actividad como monitores y entrenadores en el ámbito del multideporte y a nivel básico de una modalidad deportiva.

53. Respecto a la primera propuesta que se incorpore un plazo para la promoción de acciones formativas para monitores en el ámbito del deporte escolar no cabe formular objeción. Respecto a las convalidaciones u homologaciones de las formaciones ofertadas en los últimos años por las Diputaciones Forales debe señalarse que la Disposición Transitoria Segunda del Anteproyecto posibilita, ante supuestos de falta de profesionales con las cualificaciones necesarias o la ausencia de formaciones oficiales –es el caso de los cursos de monitorado de deporte escolar- que por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deporte se habilite provisionalmente a aquellas personas que acrediten una cualificación inferior a la prevista en la Ley, que es el caso de aquella formación ofertada por las diputaciones forales. Es decir, se contempla la herramienta de la habilitación de quienes superaron dichas formaciones ofertadas por las diputaciones forales. Asimismo, a lo largo de la Ley se contempla la acreditación de las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes a los títulos y certificados oficiales.

VII.- ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.

54. Por parte de Don Asier Sarriegi Zumarraga, Director de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se presentan con fecha de 25 de febrero de 2015, unas alegaciones respecto al Anteproyecto de Ley.
55. La Diputación Foral de Gipuzkoa, en relación al **artículo 4** y la **Disposición Adicional Décima**, manifiesta que el Anteproyecto establece una exigencia de unas determinadas titulaciones a los técnicos que trabajan en el ámbito del deporte escolar sin que se hayan asentado las bases de una formación específica oficial en el deporte escolar y se queja de que el Gobierno Vasco no haya puesto los medios

necesarios para ello hasta la fecha. También manifiesta su malestar de que, con arreglo al Decreto 125/2008, sobre Deporte Escolar, debía haber sido la Escuela Vasca del Deporte, servicio adscrito a la Dirección de Juventud y Deportes, quien hubiera asumido la formación de los monitores de deporte escolar y que, sin embargo, han sido las diputaciones forales quienes han llevado a cabo tales formaciones.

56. Respecto a las quejas manifestadas no cabe, dada su naturaleza, formular opinión jurídica alguna en este informe.
57. Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa valora positivamente que el Anteproyecto exija cualificaciones profesionales a los monitores de deporte escolar, pero considera que esa exigencia precisa de tiempo.
58. En nuestra opinión, el Anteproyecto contempla un conjunto de medidas para que la aplicación de la Ley sea progresiva en el tiempo y no traumática. El Anteproyecto recoge numerosas medidas para adaptar progresivamente la aplicación de la Ley a la diversas de situaciones y de problemas que puedan ir suscitándose, es decir, se adelanta a tales eventualidades. Y no puede perderse de vista que en el borrador sometido al trámite de información pública se planteaba una exigencia de las cualificaciones para los profesionales el 1 de enero de 2018 y, a tenor de las diferentes reuniones mantenidas con los agentes sociales, se va a retrasar al 1 de enero de 2019 para los profesionales y, asimismo, para los voluntarios se retrasaría la exigencia de cualificaciones al 1 de enero de 2020. De este modo, se da satisfacción a la sugerencia formulada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
59. Por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa se solicita, al igual que las otras diputaciones forales, que se creen los correspondientes sistemas de validación u homologación para que los monitores que han realizado o estén cursando las actividades formativas de las diputaciones forales, puedan seguir realizando las tareas de monitor de deporte escolar.
60. Procede la remisión a lo ya manifestado *ut supra* sobre este particular.

61. La Diputación Foral de Gipuzkoa interpreta, en relación al **artículo 18.5**, que corresponde al Gobierno Vasco la labor de inspección y realiza dos preguntas acerca de si existe un órgano de inspección actualmente en el Gobierno Vasco y en el supuesto de que la respuesta sea negativa, pregunta cuándo y cómo se prevé su creación y cuáles serán sus cometidos y procedimientos. Y en el caso de las inspecciones en el ámbito del deporte escolar, se pregunta por la labor de coordinación que se ejercerá por el Gobierno Vasco y las diputaciones forales.
62. Entendemos que este informe no resulta ser el foro adecuado para dar respuesta a esta observación.
63. En relación a la **Disposición Adicional Tercera**, sobre el voluntariado, consideran que se debe aprovechar la Ley para adoptar medidas para cubrir las carencias formativas de los monitores. A su juicio, el incremento del nivel de las cualificaciones exigidas no va a solucionar el actual problema de infracualificación de los voluntarios.
64. En nuestra opinión, el actual problema de infracualificación de los monitores voluntarios en el ámbito del deporte escolar no es ignorado por el Anteproyecto, que dedica un precepto monográficamente a las formaciones de los técnicos en deporte escolar y, asimismo, contempla la posibilidad de promover acciones formativas oficiales específicas.
65. En relación a la **Disposición Adicional Sexta**, sobre formación en primeros auxilios, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa se considera que es mejor que el plazo de cumplimiento de tal cualificación se establezca en la correspondiente reglamentación.
66. Sobre esta alegación debe señalarse que, precisamente por la razón también apuntada por otras diputaciones, la exigencia de cualificaciones profesionales – incluidas las cualificaciones en primeros auxilios- se ha pospuesto para los profesionales al 1 de enero de 2019 y para las personas que presten servicios en régimen de voluntariado al día 1 de enero de 2020.

67. Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa manifiesta que la exigencia de tal formación de primeros auxilios es necesaria pero que la exigencia de la unidad de competencia YC0272_2 quizás puede resultar excesiva.
68. En opinión de los técnicos de la Dirección de Juventud y Deportes la problemática versa más en la forma de acreditar dicha competencia que en la propia exigencia de la formación. La unidad de competencia UC0272_2 es una acreditación reciente; es la unidad de competencia referente en primeros auxilios de muchas enseñanzas oficiales, de todas aquellas que estén referenciadas al sistema de cualificaciones, y, por lo tanto, ha de ser la referencia del futuro en esta materia. Sin embargo, anteriormente, muchos profesionales y/o voluntarios del deporte se han formado en primeros auxilios de otras maneras diferentes a la propia unidad de competencia: formaciones no oficiales o formaciones incluidas dentro de las enseñanzas oficiales universitarias, de formación profesional o de las propias enseñanzas deportivas. Así, por ejemplo, el Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas posee un módulo específico de “Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático” de 120 horas que no está referenciado al sistema de cualificaciones ni posee, de momento, un sistema de correspondencias formativas. Por lo tanto, de cara a acreditar la unidad de competencia establecida en la disposición adicional sexta, la mayoría de las personas que ejercen en la actualidad y que ya poseen una formación específica en primeros auxilios debería pasar por los correspondientes dispositivos de reconocimiento de las competencias, dispositivos, que, como sabemos, poseen un complejo desarrollo. En definitiva, resulta necesario habilitar otras posibilidades de acreditación de la competencia en primeros auxilios de cara a poder cumplir con dichos requerimientos y, por lo tanto, entendemos que es conveniente eliminar de la disposición adicional sexta la referencia a la unidad de competencia UC0272_2 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirla en la posterior reglamentación que se menciona en el apartado 2 de la propia disposición.
69. Respecto a la **Disposición Adicional Décima**, de formación de monitores en materia de deporte escolar, señala que la primera frase del apartado primero de las versiones en castellano y euskera son diferentes. La Diputación Foral de Gipuzkoa solicita aclarar tal errata.

70. En la versión definitiva se corregirá la traducción.
71. La Diputación Foral de Gipuzkoa considera necesario aclarar si la **Disposición Adicional Décima** se refiere a los monitores o también se refiere a los entrenadores.
72. Debe responderse a esa cuestión señalando que la Disposición Adicional Décima sólo se refiere a *“los monitores de actividades polideportivas con deportistas en edad escolar”*.
73. Por último, en relación a la **Disposición Adicional Décima**, la Diputación Foral de Gipuzkoa considera que la solicitud de formaciones para los monitores de deporte escolar que vayan más allá de 200 horas es excesivo.
74. Realmente constituye una reflexión para el futuro desarrollo y aplicación de la Ley, pues la Disposición Adicional Décima se refiere a la posibilidad de que el Gobierno Vasco promueva acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen sus funciones con deportistas en edad escolar.

VII.- ALEGACIONES DE AKTIBA, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE EUSKADI.

75. La Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi AKTIBA ha presentado, con fecha de 25 de febrero de 2015, a través de Don Francisco Javier Fuertes Udaondo, alegaciones ante el Anteproyecto.
76. Por parte de la Asociación se hace referencia a la *“presentación del Decreto”* y se hace referencia a la necesidad de un registro de empresas de turismo activo *“previo a este decreto”*. Y respecto al registro de empresas, se manifiesta que se deberá contemplar un registro en el ámbito turístico, además del registro en el ámbito deportivo.

77. La Asociación no formula realmente alegación alguna sobre ninguno de los textos del Anteproyecto. Debe indicarse que con una lectura conjunta y global del texto de alegaciones se deduce de forma meridiana que se refiere reiteradamente a otro texto legal – Decreto- y a la necesidad de regular reglamentariamente el turismo activo en el País Vasco, es decir, “*un registro en el ámbito turístico*”. En la medida que esta materia turística no es objeto del Anteproyecto y este Departamento carece de competencias sobre la materia no cabe formular consideraciones sobre el particular.

VIII.- ALEGACIONES DE KAIT (KIROL ARLORAKO IRITZI TALDEA – ASOCIACIÓN DE GESTORES DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO).

78. Por parte de Juan Antonio Compañón Duque se presenta, con fecha de 24 de febrero de 2015, alegaciones sobre el Anteproyecto de Ley en nombre y representación de la Asociación KAIT (*Kirol Arlorako Iritzi Taldea – Asociación de Gestores del Deporte del País Vasco*).

79. Respecto a la **exposición de motivos** la Asociación propone diversas modificaciones en la redacción.

80. No se formula objeción jurídica a tal propuesta pues, considera que, con matices, mejora el texto del Anteproyecto.

81. Respecto al **título de la Ley**, la Asociación considera que lo más lógico es que la Ley se denomine “*Ley de profesiones del deporte y la actividad física*”.

82. Sobre esta alegación, debe indicarse que en el Anteproyecto se emplea el término “*deporte*” interpretando este fenómeno social en su contenido más amplio y comprensivo de todo tipo de actividades. Ya se ha tenido oportunidad de indicar en la Memoria justificativa del Anteproyecto que son innumerables los fundamentos y criterios que avalan tal opción legislativa. La propia denominación del título competencial deporte (10.36 del Estatuto de Autonomía), la propia denominación de la vigente ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y de todos sus desarrollos reglamentarios, la denominación de los organismos con

competencias en la materia (Consejo Superior de Deportes, Dirección General de Deportes, Secretaria General del Deporte, Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, Consejo Vasco del Deporte, etcétera), la denominación de los documentos estratégicos (Plan Vasco del Deporte), etcétera, revelan que el término “*deporte*” es comprensivo de múltiples y diferentes manifestaciones. Es decir, no se ciñe al ámbito de las modalidades y disciplinas deportivas. Asimismo, es muy revelador y contundente el apartado sexto del artículo 1 del Anteproyecto que expresamente aclara que el término deporte engloba numerosas manifestaciones físico-deportivas.

83. Respecto al **artículo 1, apartado 4**, la Asociación propone eliminar el párrafo que define qué se entiende por voluntariado de los monitores y entrenadores ya que, a su juicio, no parece coherente tratar en una Ley sobre el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte, la figura del voluntariado.
84. A nuestro juicio, nos encontramos ante uno de los preceptos nucleares de la regulación pues será el decisivo para delimitar el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley. Si la Ley regula el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte, habrá que delimitar qué es ejercicio profesional y qué no es tal ejercicio. Básicamente, el legislador tiene dos opciones: emplear la técnica legislativa de remisión normativa y, en consecuencia, remitirse a la definición general de voluntariado prevista en la Ley 17/1998, de 15 de junio de Voluntariado, o aportar una definición de ejercicio profesional y de voluntariado al exclusivo objeto de la Ley. Lo que queda fuera de toda duda es que, dado el diverso alcance de la ley, para el personal profesional y para el personal voluntario, resulta menester realizar una delimitación de ambas categorías. El Anteproyecto, en la medida que las obligaciones son diferentes para ambos colectivos, procede a realizar una delimitación positiva de qué se entiende por ejercicio profesional y, asimismo, procede a realizar una delimitación negativa para aportar más certidumbre jurídica.
85. En relación al **artículo 1, apartado 5**, se propone retirar la exclusión del ámbito de la Ley de “*las actividades profesionales de gestor de instalaciones deportivas o de entidades deportivas*”. Desde la Asociación se considera que el gestor deportivo es el máximo responsable de la salud y la seguridad de las personas de la instalación que gestiona y que, por tanto, una mala gestión pudiera afectar a dichos ámbitos.

86. El Anteproyecto excluye acertadamente la regulación de las actividades profesionales del gestor de instalaciones deportivas o del gestor de entidades deportivas. La profesión de gestor deportivo puede, como otras actividades profesionales relacionadas con las instalaciones deportivas –responsables de seguridad o mantenimiento- afectar a la seguridad de los usuarios de las instalaciones deportivas, pero no es una profesión que precisa la aplicación de conocimientos y técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte, elemento nuclear de la Ley. Quien gestiona instalaciones deportivas o entidades deportivas puede acreditar cualificaciones profesionales diferentes que no guardan relación con las ciencias de la actividad física y del deporte. La exclusión responde, asimismo, al principio de proporcionalidad. El objetivo de la Ley, respetando el principio de proporcionalidad, no es regular todas las profesiones relacionadas con el deporte sino, tan sólo, determinadas profesiones del deporte. Por ello, han quedado libres de regulación de profesiones del deporte que no deben aplicar necesariamente las ciencias y técnicas de la actividad física y del deporte, tal y como requiere el artículo 2, apartado 1, de la Ley, que es una de las claves del proyecto.
87. En el **artículo 1, apartado 6**, que contiene actualmente una definición de deporte a efectos de la Ley, se propone que se reproduzca la definición del Consejo de Europa en la Carta Europea del Deporte.
88. No se formula objeción jurídica a esta propuesta.
89. En el **artículo 4, apartado 1**, sobre la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, se propone que aparezcan las funciones de planificación y la evaluación.
90. No se formula objeción a tal propuesta, aunque resulte innecesaria la mención expresa de esas dos funciones toda vez que el artículo 2, apartado tercero del Anteproyecto ya indica que los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en el articulado tienen por objeto establecer un ámbito funcional general de cada profesión y como consecuencia de ello ostentan un carácter enunciativo y no limitativo.

91. Respecto al **artículo 4, apartado 7**, en donde se exige la cualificación para el ejercicio de la actividad profesional de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva en actividades físico-deportivas específicamente dirigidas a personas que requieran especial atención, KAIT propone eliminar, tras la exigencia de una cualificación acreditable mediante el título de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el Título de Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, la expresión “*así como una formación específica correspondiente a la actividad*”. Se justifica dicha alegación en que la redacción da la sensación de que el Graduado o Graduada también necesita una formación específica cuando, a su juicio son varias las asignaturas que se desarrollan en este ámbito dentro del currículo del grado.
92. En opinión de los técnicos de la Dirección de Juventud y Deportes que se ocupan del estudio de los contenidos de las diferentes formaciones ha de contemplarse la alegación presentada. El Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte establece que los estudios de esta titulación tienen la asignatura troncal de “Actividad Física y Calidad de Vida” (Actividad Física y Salud), con una carga de 12 créditos ECTS, que ha de ser cursada por todos los alumnos/as. En situación parecida nos encontramos en el apartado 8 del artículo 5. Se solicita al Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte una formación específica para ejercer en funciones de preparador físico, readaptador o similares. En este caso, todo el alumnado cursa una asignatura troncal de 12 créditos ECTS denominada “Metodología del Entrenamiento Deportivo”, pero además existe la mención de “Entrenamiento Deportivo”, de 30 créditos adicionales. Por lo tanto, se sugiere eliminar la exigencia de formación específica de los artículos 4.7 y 5.8 para las y los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte dado que adquieren unos conocimientos mínimos en estas materias a lo largo de sus estudios oficiales.
93. KAIT también formula una alegación respecto al **artículo 4, apartado 8**, sobre la facultad de quienes ostentan la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física para ejercer, también, la profesión de Monitor o Monitora en las actividades deportivas que se programen en los centros educativos como fuera de ellos. A su juicio, la formación de estas personas tiene el

bagaje suficiente como para realizar la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva tanto dentro como fuera de los centros escolares.

94. No se formula objeción a tal alegación pues, de hecho, antes de su formulación, ya se ha incorporado al Anteproyecto, tal y como se ha expresado con anterioridad.
95. Respecto al **artículo 6, apartado 1**, se considera imprescindible la introducción del término “*gestión*” con objeto de que se indique que corresponde a la profesión de “*Director/Gestor Deportivo*” la tarea de gestión.
96. Ya se ha indicado *ut supra* que queda fuera del ámbito de regulación del Anteproyecto la profesión de Gestor Deportivo.
97. Se formula propuesta de supresión de los **apartados primero y tercero del artículo 10**.
98. En el escrito de alegaciones no se expone la razón o fundamento de tal supresión, por lo que no se puede realizar un examen de tal propuesta de KAIT.
99. Por parte de KAIT se propone añadir, en el **apartado 1 del artículo 11**, sobre los principios y deberes en el ejercicio profesional, una nueva letra sobre la obligación de los profesionales de “*participación y colaboración activa en el estudio del hecho deportivo en las investigaciones que se lleven a cabo*”.
100. En principio, el artículo 11 va a quedar configurado finalmente como un conjunto de deberes u obligaciones de las y los profesionales con diferentes niveles de exigibilidad jurídica (a través de diversas disposiciones legales, infralegales, etcétera) y de consecuencias sancionadoras, disciplinarias, etcétera. La propuesta de KAIT no encaja en esa nueva arquitectura jurídica del artículo 11.
101. KAIT propone añadir el siguiente párrafo al apartado 2 del artículo 11: “*El Reglamento Disciplinario de los Profesionales del Deporte del País Vasco será adscrito a la Escuela Vasca del Deporte y a través del mismo se ejercerá la ponderación de las sanciones administrativas y disciplinarias. Quienes realizarán*

las labores de ejecución he interposición de las sanciones administrativas y disciplinarias han de ser titulados en las materias que estamos tratando". La justificación de tal propuesta es dejar claro qué entidad tiene la competencia en esta cuestión y que sean titulados en deporte quienes realicen esta función.

102. Tal propuesta no puede ser admitida toda vez que no va a existir un Reglamento Disciplinario de los Profesionales del Deporte, dada la exigencia de reserva de ley para las cuestiones sancionadoras. En según lugar, no es dable referirse a la adscripción de una norma –reglamento- a un órgano o servicio. Ni tampoco es admisible en técnica jurídica referirse a la ponderación e interposición de las sanciones.
103. En la misma línea que la alegación anterior, por parte de KAIT se propone en el **artículo 18, apartado 5**, que la Inspección Deportiva sea un órgano que esté *“adscrito a la Escuela Vasca del Deporte”* y a través de la misma se ejerza *“la ponderación de inspección del cumplimiento de la presente Ley”*.
104. Sobre la citada alegación procede que nos remitamos a las consideraciones realizadas anteriormente.
105. KAIT propone añadir un **nuevo artículo 19**, creando la Comisión Asesora de las Profesiones del Deporte, pues considera que es una forma de que la Ley garantice la evaluación periódica en este ámbito.
106. Esta Dirección no lo considera necesario en estos momentos.
107. En la **Disposición Adicional Tercera**, sobre las actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas, se propone eliminar el apartado 4, sobre la exigencia de las cualificaciones al voluntariado, y establecer que el plazo de exigencia de cualificaciones sea idéntico al de los profesionales.
108. En atención a que a los voluntarios constituyen, por lo general, un colectivo que se significa por ser personas jóvenes, incluso menores de edad, que permanecen una media de un curso o temporada, o poco más, y que no tienen en su mayoría

voluntad de dedicarse profesionalmente a la actividad física y al deporte y de adquirir las cualificaciones previstas en la Ley, se ha propuesto un plazo diferente, aunque parecido, entre ambos colectivos.

109. Asimismo, por parte de KAIT se propone que, en caso de mantenerse una regulación del régimen de voluntariado en la Disposición Adicional Tercera, se diferencie entre el “*ámbito del voluntariado*” y el “*ámbito del benévolo deportivo*”. Los primeros, en su opinión colaboran en tareas instrumentales de las entidades deportivas de cualquier tipo. En este supuesto no se precisará acreditar cualificación alguna. Por el contrario, el ámbito del “*benévolo deportivo*” está referido, según KAIT, a las personas que colaboran en tareas técnico/docentes en contacto directo con deportistas con objetivo formativo concreto y que no perciben retribución económica”. En este caso, “*deberán acreditar una formación a determinar, coherente con las tareas que desempeñen y en la especialidad en la que prestan sus servicios*”.
110. No se comparte la alegación de KAIT por varias razones. En primer lugar, ni nuestro ordenamiento jurídico ni nuestra realidad social están impregnados de esa diferenciación. Y, además, no resulta claro que los voluntarios sólo colaboran en tareas instrumentales de las entidades deportivas.
111. Respecto a la **Disposición Adicional Novena**, KAIT propone una supresión parcial del texto del apartado tercero, pues tal y como está expresado, cierra la posibilidad a que se dé una modificación en el ámbito vasco de la competición deportiva.
112. El ordenamiento jurídico no ha regulado hasta la fecha el denominado ámbito vasco de competición de modo que constituye un concepto jurídico de difíciles contornos materiales. Con el marco jurídico vigente ya existe un ámbito vasco de competición oficial. Y, en segundo lugar, el texto del Anteproyecto no cierra la posibilidad a que se apruebe una disposición para el desarrollo del ámbito vasco de competición. La disposición sólo contempla una categoría de competiciones en las que se va a exigir una cualificación superior.

113. En la **Disposición Adicional Decimotercera**, sobre los contratos para la formación y aprendizaje o formación dual, KAIT considera que no está clara la redacción pues parece que cualquier persona con un contrato para la formación y el aprendizaje o de la formación dual- aún no siendo del deporte- puede ejercer las profesiones sin ostentar las cualificaciones profesionales exigidas por la Ley.
114. Aunque el texto se refiere expresamente a los “*contratos para la formación y el aprendizaje o de la formación dual en el ámbito del deporte y la actividad física*”, no se formula objeción jurídica a la clarificación de la duda suscitada.

IX.- ALEGACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL HARROBIA.

115. Por parte de Don Fernando Garrigós Gabilondo se presenta el 16 de febrero de 2015, en nombre y representación del Centro de Formación Profesional Harrobia diferentes alegaciones respecto al Anteproyecto de Ley.
116. El centro Harrobia propone incorporar en el **artículo 2, apartado 2**, otra nueva profesión: “*socorrista de instalaciones y espacios acuáticos naturales*”. En consonancia con la alegación anterior, el centro Harrobia propone incluir un **nuevo artículo 7** regulando tal profesión. Por parte del citado centro se ofrecen tres argumentos:
- a) Existe una formación cualificante que se consigue en exclusiva en la familia profesional en actividades físicas y deportivas.
 - b) La actividad profesional de socorrismo acuático incide directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia como son la salud y la seguridad de los terceros.

- c) Se trata de una profesión precisada de aplicar conocimientos y técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte.

117. En nuestra opinión no debe admitirse la alegación propuesta pues la Ley pretende regular las profesiones propias del deporte, tal y como se ha justificado en la Memoria y en el preámbulo de la Ley. Y la profesión de socorrista no es una profesión propia del deporte. Es cierto que tiene una proyección sobre instalaciones deportivas, pero también se proyecta sobre playas, lagos, ríos, parques de ocio, etcétera, de modo que no puede decirse que sea una profesión propia del ámbito del deporte.

X.- ALEGACIONES DE DON ASIER RIAÑO TORRE.

118. Por parte de Don Asier Riaño Torre se presentan en su propio nombre y representación, con fecha de 24 de febrero de 2015, alegaciones sobre el Anteproyecto de Ley.

119. La primera alegación que presenta dicha persona es que el Anteproyecto no contempla la posibilidad de ejercer las profesiones del deporte a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

120. No se formula objeción jurídica alguna respecto a tal propuesta. Parece razonable tal propuesta en la medida que es una realidad cada vez más presente en la prestación de servicios en el ámbito del deporte.

121. Respeto al **apartado 3 del artículo 1** la persona alegante propone añadir, en la referencia al sector público, una mención expresa a las Administraciones “*Forales*”.

122. No se formula objeción jurídica alguna respecto a tal propuesta.

123. La persona alegante formula una alegación de mejora de la redacción del **artículo 1, apartado 5**, y propone sustituir la referencia a la exclusión del “*buceo profesional o el buceo no deportivo o recreativo*” por la referencia al “buceo profesional no deportivo-recreativo”.

124. No cabe formular objeciones a tal propuesta.
125. La persona alegante propone incluir en el **artículo 1, apartado 5**, la exclusión expresa de las actividades profesionales propias de los técnicos de senderos.
126. Realmente las y los técnicos de senderos no ejercen profesiones propias del deporte, pues los senderos tienen una dimensión transversal (uso cultural, turístico, etcétera), ni esencialmente deben aplicar las ciencias y técnicas de la actividad física y del deporte y, en consecuencia, no forman parte del ámbito subjetivo de aplicación. De todos modos no cabe formular objeción jurídica a tal propuesta de aclaración.
127. Respecto al **apartado 6 del artículo 1** se propone sustituir la expresión “*manifestaciones físicas y deportivas*” por la expresión “*manifestaciones físico-deportivas*”.
128. Consideramos que la expresión “*físicas y deportivas*” está en consonancia con la terminología empleada por los expertos en el ámbito formativo oficial o de las cualificaciones profesionales: “*Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas*”, “*Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas*”, “*Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*”, etcétera. No obstante lo anterior, no se formula objeción jurídica para su modificación.
129. Respecto al **apartado 6 del artículo 2** se propone clarificar que la equivalencia de los títulos a la que se refiere el citado apartado se circunscriba a la equivalencia profesional, pues nos encontramos ante una Ley que regula el ejercicio de las profesiones del deporte.
130. No cabe formular objeción jurídica a tal propuesta.
131. La persona alegante propone, al igual que KAIT, añadir, en el **apartado 1 del artículo 4**, las funciones de planificación y evaluación a las funciones de los monitores deportivos.

132. No se formula objeción a tal propuesta, aunque resulte innecesaria la mención de esas funciones toda vez que el artículo 2, apartado tercero, del Anteproyecto ya indica que los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en el articulado tienen por objeto establecer un ámbito funcional general de cada profesión y como consecuencia de ello ostentan un carácter enunciativo y no limitativo.
133. En relación al **apartado 2** del **artículo 4**, se propone matizar las atribuciones del Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Se propone limitar sus atribuciones a las actividades de carácter básico. Si la intervención directa en las citadas actividades requiere de conocimientos especializados como consecuencia de la complejidad de la actividad o de los espacios o soportes a emplear, deberán poseer una formación adicional adecuada a aquella complejidad o deberán ser supervisadas por un Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
134. En opinión de los técnicos de la Dirección de Juventud y Deportes que se ocupan del estudio de los contenidos de las diferentes formaciones, en las actividades de monitor o monitora de acondicionamiento físico o de enseñanza-aprendizaje de carácter multidisciplinar de los apartados 2 y 3 del artículo 4 no se establecen niveles (básico o avanzado) como puede suceder en el caso de la profesión de monitor o monitora de una modalidad o disciplina deportiva concreta, dado que en las actividades a las que se hace referencia (actividades dirigidas del ámbito del fitness, actividades de multideporte, etc...) no existen, habitualmente, niveles de complejidad que precisen de cualificaciones diferentes. La única diferenciación realmente importante en cuanto a la complejidad de este tipo de actividades es la posible existencia de grupos poblacionales con especiales características. Por lo tanto, no procede contemplar dicha alegación en este apartado y sí, en relación con una nueva aportación del alegante, en el apartado 7 del propio artículo 4, estableciendo que las actividades orientadas específicamente a grupos poblacionales especiales sean desarrolladas exclusivamente por Graduados y Gradudas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

135. Se propone una mejora en la redacción del **apartado 4** del **artículo 4** al objeto de aclarar que pueden ejercer profesionalmente en este tipo de actividades de enseñanza, aprendizaje y análogas de carácter unidisciplinar y de nivel básico quienes posean una cualificación acreditable mediante una de las titulaciones mencionadas en el apartado tercero del artículo 4 siempre que, además, ostenten una formación específica en la correspondiente modalidad o disciplina deportiva.
136. Aunque se considera que no resulta necesario añadir el adverbio “*siempre*”, no se formula objeción jurídica respecto a la propuesta de mejora de la redacción.
137. En el **apartado 6** del **artículo 4** se propone incluir la matización de que las personas que ostenten las titulaciones previstas en el citado apartado para ejercer la profesión de monitor en actividades de cierto riesgo deben disponer, además, la formación específica de la correspondiente actividad deportiva a desarrollar.
138. Aunque consideramos que no resulta necesario realizar la precisión, no se formula objeción jurídica respecto a la propuesta de mejora de la redacción.
139. Asimismo, la persona alegante propone que en el **artículo 4, apartado 6**, se debe aclarar que las personas con las titulaciones de Técnicos Deportivos también podrán desarrollar las funciones de monitor, aunque sólo en aquellas actividades específicas de riesgo para las cuales se les haya formado.
140. No cabe formular objeción a tal propuesta de aclaración.
141. La persona alegante formula una alegación respecto al **artículo 4, apartado 7**, eliminando la posibilidad de que el título de Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas permita realizar funciones profesionales con personas que requieren una especial atención, tales como mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad, etcétera. Asimismo, propone que se haga una mención a las atribuciones que puedan desarrollar otros profesionales con arreglo a la legislación de ordenación de las profesiones sanitarias, siguiendo el mismo criterio que el artículo 5.8.

142. En la medida que el Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, dispone que dichos titulados son capaces de enseñar y dinamizar en actividades básicas de acondicionamiento físico, no cabe formular objeción alguna a tal propuesta.
143. Tampoco debe formularse objeción, aunque no resulte necesaria la mención propuesta, a que se aclare que el ejercicio de la actividad de monitor en actividades físico-deportivas específicamente dirigidas a personas que requieran de especial atención se entiende sin perjuicio de las atribuciones que pueden desarrollar otros profesionales sanitarios.
144. La persona alegante, en relación al **artículo 4, apartado 8**, y coincidiendo con las alegaciones formuladas por KAIT y la Diputación Foral de Bizkaia, considera que la persona que ostente la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física también debe estar facultada para ejercer la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva en las actividades que se programen tanto dentro como fuera de los centros educativos.
145. No se formula objeción a tal alegación pues, de hecho, antes de su formulación, ya se ha incorporado al Anteproyecto por el equipo de trabajo de modo que podrán realizar aquellas funciones en el seno de los centros escolares fuera del horario lectivo o en el seno de otras entidades siempre que las edades de los escolares se correspondan con su cualificación docente. Incluso esa alegación debe extenderse a los artículos 5 y 6.
146. En el **apartado 9 del artículo 4** se formula una propuesta de mejora de la redacción sustituyendo el tiempo verbal “*han adquirido*” por “*hayan adquirido*”.
147. En la medida que la propuesta mejora la redacción no se formula objeción alguna a tal alegación.

148. El **apartado 10, del artículo 4**, es objeto de alegación en el sentido de matizar los supuestos en los que resulta precisa la presencia física de los monitores en el desarrollo de las actividades deportivas.
149. En relación a esta cuestión tampoco se formula objeción jurídica.
150. Respecto al **artículo 5, apartado 2**, se propone en primer lugar una mejora técnica a la hora de determinar la competencia del Técnico o Técnica en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural cuando la actividad de competición escolar se desarrolle en el medio natural. En el Anteproyecto se hace referencia a la actividad de competición escolar que “*se desarrolle exclusivamente en el medio natural*”. A su juicio, pueden existir actividades de competición que no se desarrollen total o exclusivamente en el medio natural, pero sí mayoritariamente o principalmente. En tal circunstancia propone la persona alegante que también se contemple la atribución profesional. También se propone una mejora de la redacción del último párrafo.
151. Ninguna objeción cabe formular al respecto.
152. Respecto al **artículo 5, apartado 2**, se sugiere por el alegante que habría que valorar la posibilidad de incluir también como formación habilitante el posible certificado de profesionalidad en deporte escolar que se pudiera aprobar en un futuro.
153. Consideramos que las titulaciones que se recojan en el articulado de la Ley deben ser las actualmente existentes, no las probables o futuras, y no existe en la actualidad el certificado de profesionalidad en deporte escolar. Además, el artículo 8 del Anteproyecto ya contempla la adaptación del mismo a las nuevas cualificaciones y títulos oficiales. De todos modos, la Disposición Adicional Décima, obvia que las formaciones polideportivas de deporte escolar habilitarán para la actividad de entrenador/a o monitor/a de carácter polideportivo y también para aquellas modalidades o disciplinas en las que se reciba una formación específica y, por lo tanto, resulta conveniente la incorporación de un apartado adicional que establezca la habilitación correspondiente.

154. Respecto al **apartado 5 del artículo 5** se propone una mejora de redacción.
155. No se formula ninguna objeción a tal propuesta de mejora.
156. En relación al **artículo 5, apartado 5**, la persona alegante, coincidiendo con las alegaciones formuladas por KAIT y la Diputación Foral de Bizkaia, considera que la persona que ostente la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física también debe estar facultada para ejercer la profesión Entrenador Deportivo o Entrenadora Deportiva en las actividades que se programen tanto dentro como fuera de los centros educativos.
157. No se formula ninguna objeción al respecto y esa misma previsión se debe extender a las profesiones de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y de Director Deportivo o Directora Deportiva.
158. En el **artículo 5, apartado 8**, se propone, para evitar confusiones o conflictos con otros ámbitos profesionales, aclarar que la readaptación o reeducación tras lesiones, la recuperación o mejora de la condición física de los deportistas, etcétera, son funciones de los entrenadores cuando se desarrollan *“a través de la actividad física y del deporte”*.
159. Aunque el artículo 2.1 del Anteproyecto deja claro que el ejercicio de todas las profesiones reguladas en la Ley precisan *“la aplicación de conocimientos y técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte”*, parece razonable añadir la matización propuesta para evitar cualquier controversia.
160. El **apartado 10, del artículo 5**, es objeto de alegación en el sentido de matizar los supuestos en los que resulta precisa la presencia física de los entrenadores en el desarrollo de las actividades deportivas.
161. En relación a esta cuestión no se formula objeción jurídica.

162. La persona alegante propone matizar el **apartado 1 del artículo 6** en el sentido de que la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva permite realizar funciones de dirección “*técnica*”. El adjetivo se añade por la persona alegante para poner de manifiesto que la dirección no es la propia de la gestión o de gerencia sino la técnico-deportiva.
163. La alegación propuesta aunque, en rigor, resultaría innecesaria, toda vez que queda claro que el Director o Directora al que se refiere el Anteproyecto es al Director o Directora que aplica –en virtud del artículo 2.1 del Anteproyecto- las ciencias y técnicas de la actividad física y del deporte, quizás parece oportuna la precisión considerando que ya se han producido algunos errores en la interpretación del contenido de esta profesión.
164. El alegante propone dividir el **apartado 3 del artículo 6** en dos apartados diferentes pues, en su opinión, se trata de dos funciones profesionales diferentes, que requieren titulaciones diferentes.
165. Nos parece acertada esta alegación.
166. En relación al **apartado 4 del artículo 6** se propone simplemente sustituir “*alto nivel*” por “*alto rendimiento*”.
167. No se formula objeción jurídica aunque consideramos que lo más adecuado sería referirse al sustantivo “*nivel*”, pues es el sustantivo empleado en los demás apartados del artículo para el “*nivel básico*” y “*nivel medio*”.
168. En relación al **artículo 6, apartado 6**, la persona alegante, coincidiendo con las alegaciones formuladas por KAIT y la Diputación Foral de Bizkaia, considera que la persona que ostente la cualificación necesaria para ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física también debe estar facultada para ejercer la profesión Director Deportivo o Directora Deportiva en las actividades que se programen tanto dentro como fuera de los centros educativos. Asimismo, se propone añadir que si se ejerce la profesión en competiciones de una sola

modalidad o disciplina o en el medio natural o con animales se requerirá una formación específica.

169. No se formula ninguna objeción al respecto, tal y como se ha manifestado *ut supra* respecto otras alegaciones análogas.
170. En el **artículo 8, apartado 10**, que se refiere a las titulaciones equivalentes, se sugiere que esa declaración de equivalencia se circunscriba al ámbito profesional, pues no se refiere a la equivalencia académica.
171. No se formula ninguna objeción al respecto, tal y como se ha manifestado *ut supra* respecto otras alegaciones análogas.
172. En el **artículo 11, apartado 2**, se indica que el incumplimiento de los principios y deberes en el ejercicio profesional dará lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades administrativas y disciplinarias. El texto propuesto por el alegante añade las responsabilidades “*penales*”.
173. Nos parece atinada la enmienda presentada.
174. En el **artículo 12, apartado 3**, del Anteproyecto se indica que “*las sociedades profesionales deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar la presencia física de los titulados correspondientes en el ejercicio de las profesiones del deporte*”. El alegante propone sustituir la mención de “los titulados” por “*las personas cualificadas*”.
175. Nos parece acertada esa modificación toda vez que se acomoda mejor al tenor general de la Ley, que se refiere, en primera instancia, a las cualificaciones, aunque éstas se puedan acreditar mediante titulaciones o mediante otras vías.
176. Por parte del alegante se propone añadir, en el **artículo 14**, un nuevo apartado, para aclarar que las federaciones podrán exigir para determinadas funciones profesionales una formación extra o adicional pero en tal caso, y para evitar abusos federativos o tratos discriminatorios respecto a formaciones obtenidas en

centros no federativos, la reglamentación federativa deberá ser aprobada por el Gobierno Vasco.

177. No se formula objeción sobre el particular pues la realidad federativa viene poniendo de manifiesto prácticas discriminatorias por parte de algunas federaciones deportivas en cuanto a la procedencia de las formaciones oficiales, según sean federativas o extrafederativas. De todos modos, con arreglo a lo dispuesto en la ley 14/1998 y en el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de federaciones deportivas del País Vasco, los reglamentos federativos deben ser aprobados por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.
178. Respecto a la **Disposición Adicional Tercera**, relativa a las actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas, el alegante propone diversas modificaciones que tratan de mejorar la redacción y, asimismo, se propone que los plazos de exigencia de las cualificaciones se ubiquen en las disposiciones finales.
179. Compartimos la sugerencia formulada por el alegante y los plazos de exigencia de las cualificaciones deberán ubicarse en la Disposición Final Sexta.
180. Respecto a la formación específica regulada en la **Disposición Adicional Séptima, apartado 3**, se propone por el alegante incluir en los supuestos de inexistencia o insuficiencia de ofertas formativas oficiales, el reconocimiento de títulos y certificaciones no oficiales, así como de formaciones que se pueden corresponder con una parte de un título o una certificación, una determinada carga de créditos, es decir, no tiene por qué ser una formación completa oficial.
181. No se formula objeción sobre el particular.
182. En línea con otra de las alegaciones formuladas, se propone modificar el **apartado 2** de la **Disposición Adicional Novena**, el concepto “*deporte de alto nivel*” por “*deporte de alto rendimiento*”.
183. Tal y como se ha señalado *ut supra* no se formula objeción, aunque se considera que lo más adecuado sería referirse al sustantivo “*nivel*”, pues el

sustantivo empleado para el “*nivel básico*” y “*nivel medio*” en los apartados precedentes.

184. En línea con la alegación anterior, la persona alegante propone modificar en el **apartado 3 de la Disposición Adicional Novena**, el concepto “*deporte de alto nivel*” por “*deporte de alto rendimiento*”.
185. Cabe reiterarse en lo señalado en los párrafos precedentes.
186. Se propone añadir un nuevo apartado a la **Disposición Adicional Novena** para clarificar la cualificación profesional en aquellas competiciones deportivas de alto rendimiento que tendrán carácter abierto o mixto. En tal caso sólo se exigirá la cualificación profesional a los entrenadores de aquellos deportistas cuyo nivel es propio de aquellas competiciones de alto rendimiento, no del resto de participantes.
187. Se considera oportuna la matización propuesta por el alegante.
188. La persona alegante propone diversas modificaciones en la **Disposición Adicional Décima**, que regula la formación en actividades con deportistas en edad escolar. Además de las mejoras de redacción, se propone aclarar que las personas que desarrollen sus funciones con deportistas en edad escolar en ocasiones deberán desarrollar sus actividades bajo la programación, dirección, supervisión o asistencia de los profesionales con las cualificaciones previstas en la Ley.
189. No se formula objeción al respecto.
190. Se propone añadir una nueva **Disposición Adicional Decimocuarta** para las cualificaciones equivalentes a las titulaciones de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva Superior, cualificaciones derivadas de las formaciones deportivas de periodo transitorio, formaciones federativas previas con posibilidad de reconocimiento, etcétera.

191. Se comparte la alegación propuesta pues aunque el Anteproyecto ya contiene algunas previsiones que se refieren a tales formaciones, parece conveniente, para disipar cualquier duda, realizar tal aclaración.
192. La persona alegante también propone añadir una nueva **Disposición Adicional Decimoquinta**, para clarificar que el ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones derivadas de la ley corresponde al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.
193. Se trata de una alegación oportuna toda vez que en el trámite de información pública, se ha suscitado tal duda. No cabe duda que si el artículo 119 de la Ley 14/1998 atribuyó al Gobierno Vasco la competencia en materia de inspección deportiva en el ámbito de la cualificaciones profesionales debe ser también el Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en materia de deporte, quien ejerza también la potestad sancionadora.
194. En la **Disposición Transitoria Primera, apartado primero**, se propone, en una enmienda de mejora de redacción, sustituir el verbo “*adapten*” por “*implanten*” en referencia a los procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las correspondientes competencias.
195. No se formula objeción alguna a tal propuesta. Posiblemente se produjo una errata en el verbo que se pretende sustituir y en lugar de “*adapten*” debería haberse dicho “*adopten*”. De cualquier modo, el verbo propuesto por el alegante es correcto.
196. Asimismo, por parte de la persona alegante se formula una propuesta de que la habilitación contenida en dicha **Disposición Transitoria Primera, apartado primero**, para quienes vienen trabajando a la entrada en vigor de la Ley, no sea operativa en aquellas federaciones deportivas que exijan la posesión de la correspondiente cualificación para ejercer la actividad de entrenador.
197. Quien suscribe este informe considera que la propuesta debe ser aceptada pues trata de ser respetuosa con el marco federativo y el que una persona esté

ejerciendo como entrenador en un club a la entrada en vigor de la Ley no le debe habilitar automáticamente a seguir ejerciendo si la federación requiere una titulación superior.

198. En relación a la **Disposición Transitoria Primera, apartado tercero**, se propone una mejora de la redacción.
199. No se formula objeción a la propuesta de nueva redacción.
200. La alegación número 38 se refiere al apartado 4 de la Disposición Transitoria Primera del Anteproyecto. Se propone por el alegante sustituir la habilitación expresa e individual a los entrenadores o entrenadoras en competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional sin la cualificación requerida en la ley, por una habilitación automática
201. No se formula objeción jurídica a tal alegación. De ese modo, se evitaría la sobrecarga de trabajo administrativo con procedimientos formales de habilitación.
202. La alegación número 39 aborda el apartado 5 de la Disposición Transitoria Primera. Se propone sustituir la referencia al “deber de acreditar la formación” por la referencia al “deber de acreditar la cualificación profesional”.
203. No se formula objeción jurídica para la sustitución del sustantivo pues esta enmienda está en consonancia con otras enmiendas que se han aceptado en los anteriores informes y con el propio Anteproyecto de Ley que tiene como referencia básica la acreditación de cualificaciones profesionales.
204. En la alegación número 40 se propone añadir en la Disposición Transitoria Primera un nuevo apartado en el que quede claro que en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco deban inscribirse también los profesionales habilitados en esta Disposición.
205. Nos parece atinada tal aportación.

206. En la alegación número 41 se propone eliminar en la Disposición Transitoria Segunda las referencias a las formaciones del periodo transitorio y a las formaciones federativas anteriores, ya que se incluyen, de acuerdo con la enmienda número 34, en las disposiciones adicionales y no en las disposiciones transitorias.
207. No se formula objeción jurídica a esta alegación.
208. En la enmienda número 42 se realiza una sugerencia sobre la Disposición Transitoria Quinta, referida a las y los voluntarios. A juicio del alegante, en la medida que a las personas voluntarias se les va a exigir la misma cualificación que a las profesionales, se les debe ofrecer también la posibilidad de reconocer las competencias adquiridas por vía de la experiencia y de formación no formal y, además, la obligación de exigir el cumplimiento de la competencia en primeros auxilios.
209. En nuestra opinión, debe aceptarse la enmienda propuesta.
210. En la enmienda número 43 se propone añadir una nueva disposición transitoria sobre el deber de las federaciones deportivas vascas de aprobar disposiciones federativas sobre exigencia de cualificaciones en un determinado plazo. Esta obligación se recoge actualmente en una disposición adicional. A juicio del alegante es necesario poner un plazo y recogerlo en una disposición transitoria.
211. No se formula objeción a la exigencia de que las federaciones deportivas adapten la normativa federativa sobre cualificaciones a lo dispuesto en la Ley, y se acepta posponer la fecha límite propuesta al 1 de enero de 2018.
212. En la enmienda número 44 se propone incluir una disposición derogatoria nueva con una derogación expresa de los apartados 1, 2 y 3 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar. Dichos apartados establecen unas exigencias de cualificación que pueden resultar incompatibles con el nuevo Anteproyecto.
213. Esta alegación es acertada y, en consecuencia, no se formula objeción a la misma.

214. En la enmienda número 45 se propone modificar la redacción de la letra k) del artículo 127 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que se redacta con la Disposición Final Primera del Anteproyecto. El alegante propone la tipificación como infracción muy grave la contratación de profesionales sin la citada cualificación.
215. Efectivamente, la infracción no ha de recaer exclusivamente en la persona que comete la irregularidad de ejercer sin poseer la cualificación sino también en la entidad que le contrata. Sin embargo, la infracción, dada la calificación como muy grave, debe consistir no en la mera contratación sin la cualificación, sino en la no contratación de personal sin cualificación por no exigencia de la misma. Puede suceder que la Administración o una empresa contrate a una o un técnico que no ostente la cualificación pero la contratación haya ido precedida de una falsedad documental del técnico. La mera ausencia de cualificación no es la que debe motivar el reproche culpabilístico del empleador, sino la exigencia la cualificación que no era necesaria.
216. En la enmienda número 46 se propone añadir en la Disposición Final Primera una nueva infracción administrativa grave mediante la letra i) del artículo 128 de la Ley 14/1998, infracción que consista en el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 11, 18 y 19 del Anteproyecto.
217. No se formula objeción a tal aportación.
218. En la enmienda número 47 se propone añadir en la Disposición Final Sexta que la exigencia de cualificaciones profesionales a los profesionales se retrase al 1 de enero de 2019 y la exigencia al voluntariado se realice a partir del 1 de enero de 2020 pues la Ley no se aprobará hasta 2016, previsiblemente.
219. No se formula objeción a tal aportación.
220. En la enmienda número 48 se propone añadir en el apartado 5 del artículo 1 del Anteproyecto de las exclusiones del ámbito de aplicación de la Ley las actividades de danza y baile del ámbito de la cultura, al objeto de diferenciarlas de las actividades de baile y danza de carácter deportivo, que sí están incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley.

221. Se considera que no sería estrictamente necesaria esa matización, pues el Anteproyecto regula cuatro profesiones deportivas, no del ámbito de la cultura, no se formula tampoco objeción a tal aportación en la medida que existe una modalidad deportiva, al menos a nivel estatal, de baile deportivo. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar con fecha de 15 de mayo de 2015 los estatutos de la Federación Española de Baile Deportivo. No obstante lo anterior se realiza una redacción alternativa a la del alegante de modo que la exclusión se refiera a la “danza y el baile no deportivos”.

222. Por último, el alegante propone incluir un nuevo apartado en el artículo 7 para excluir de la exigibilidad de cualificaciones profesionales a las y los profesionales de otros países o Comunidades Autónomas que intervengan en el País Vasco con ocasión de estancias o viajes o actividades de carácter ocasional.

223. Realmente no sería necesaria esa matización en la medida que el Anteproyecto de Ley incluye dentro del ámbito de aplicación el ejercicio profesional de forma principal en el País Vasco. No obstante lo anterior, no se formula objeción alguna pues el apartado 9 del artículo 5 sólo hace referencia a las y los entrenadores y debe tenerse en consideración que en el País Vasco existen monitores y monitoras que vienen con grupos turísticos con carácter ocasional a quienes no se les puede exigir el cumplimiento de las exigencias de cualificación del Anteproyecto. Sí se formula objeción respecto a la redacción propuesta, pues es redundante en algunos aspectos con otras regulaciones contenidas en la Ley, y además debe simplificarse.

Realizada la valoración de las alegaciones, asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, se han recibido informes de los siguientes órganos cuya valoración se realiza a continuación:

I.- APORTACIONES DE EMAKUNDE.

1. Por parte de EMAKUNDE se emite, con fecha de 5 de marzo de 2015, un informe en el que *“se valora de modo muy positivo este compromiso explícito con la igualdad entre hombres y mujeres en el texto normativo”*.
2. EMAKUNDE, con relación al Anteproyecto, y concretamente en lo relativo a la **toma de decisiones**, señala que no prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres.
3. Sobre dicha observación es menester señalar que el Anteproyecto no contempla la creación de entidad u órgano con toma de decisiones, razón por la cual no se incluye en aquel una previsión expresa sobre el particular.
4. EMAKUNDE, con relación al **artículo 2**, apartado 6, del Anteproyecto, que define la cualificación profesional a efectos de la Ley, señala que cualquier reconocimiento de la competencia adquirida por vía de la experiencia laboral deberá plantearse desde el enfoque de género.
5. En realidad, EMAKUNDE no formula ninguna enmienda de adición, supresión o modificación del texto articulado y proyecta su alegación sobre futuras actuaciones de la Administración en materia de cualificaciones en cumplimiento de la Ley.
6. EMAKUNDE propone, con relación al **artículo 3**, relativo a la profesión de profesor o profesora de educación física, que uno de los requisitos para ejercer en la escuela pública sea una capacitación mínima en materia de igualdad y coeducación, de manera que pueda impartir los contenidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 y 32 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
7. Con relación a esta aportación de EMAKUNDE deben realizarse diversas precisiones. En primer lugar, tal y como ya ha reconocido el Tribunal Constitucional (STC 194/1998) esta profesión de profesor o profesora de educación física ya se encuentra regulada y, además, constituye una profesión

titulada. Y lo único que trata de aportar el Anteproyecto es alguna garantía en materia de salud y seguridad de alumnos y alumnas.

8. En segundo lugar, si la citada Ley 4/2005 ya establece una previsión normativa en materia de igualdad y coeducación para todo el profesorado de todos los niveles, no corresponde a esta Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte volver a recoger lo que disponen sus preceptos. La propuesta de EMAKUNDE es prescindible pues no innova el ordenamiento jurídico. Precisamente, una de las objeciones que formulan otras entidades respecto al Anteproyecto es que incorpora previsiones que ya forman parte del ordenamiento jurídico.

9. Además, procede constatar en este informe que los artículos 31 y 32 de la Ley 4/2005 no establecen lo que se infiere del informe de EMAKUNDE. El artículo 31.1 establece que, con el fin de integrar la perspectiva de género en su labor, los órganos responsables de la evaluación, investigación e innovación educativa, así como los servicios de apoyo al profesorado, dispondrán de personal con capacitación específica en coeducación. No se refiere al profesorado. Asimismo, el apartado 2 dispone que Administración educativa potenciará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la docencia en las diferentes áreas de conocimiento y etapas educativas, así como en los órganos de dirección de los centros. Y, por último, el apartado 3 obliga al profesorado a poner en conocimiento de los órganos directivos de los centros los indicios de violencia contra mujeres y niños o niñas que les consten.

10. El artículo 32 de la Ley 4/2005 establece que la Administración educativa pondrá en marcha planes de formación sobre coeducación dirigidos a las y los profesionales de la educación, que abarquen a todos los centros de enseñanza no universitaria. A continuación, en el apartado segundo, se dispone que, a fin de que cada centro establezca las medidas oportunas para la puesta en marcha de dichos planes de formación, la Administración educativa posibilitará las correspondientes adaptaciones horarias y organizativas. Además, establece que se establecerán mecanismos para atender al alumnado que pueda verse afectado por el calendario y horarios previstos en los citados planes. Por último, el apartado tercero dispone que la oferta de formación permanente

dirigida a las y los profesionales de la educación, tanto de forma individual como a través de los centros, además de integrar la filosofía coeducativa de modo transversal en sus contenidos, ha de incorporar cursos específicos en materia de coeducación.

11. El **artículo 7** del Anteproyecto regula los requisitos de cualificación en supuestos especiales. Como el Anteproyecto establece que la Ley se aplicará para el acceso a los puestos de trabajo y para la contratación de servicios en el sector público, por parte de EMAKUNDE se reseña que las posteriores normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción de empleo público deben incluir una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación de éstas sea inferior al 40%.
12. En realidad EMAKUNDE no formula ninguna enmienda de adición, supresión o modificación del texto articulado y proyecta su alegación sobre futuras actuaciones de la Administración en cumplimiento de la Ley 4/2005.
13. Respecto al **Artículo 10**, sobre Colegiación y Registro de Profesionales del Deporte, EMAKUNDE sugiere que las estadísticas relacionadas con el Registro incluyan la variable del sexo en las estadísticas.
14. No cabe formular ninguna objeción a que ello se produzca en un futuro pero consideramos, en primer lugar, que los detalles estadísticos del Registro deben estar especificados, en su caso, en el reglamento ejecutivo de la Ley. Además, el artículo 5 de la Ley 4/2005 ya establece que la competencia de las instituciones comunes en materia de igualdad de mujeres y hombres se concreta, por lo que respecta a la Administración de la Comunidad Autónoma, en la función de planificación y diseño de la metodología para adecuar las estadísticas al principio de igualdad, así como adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención autonómica. Por tanto, tal obligación no constituye tampoco una innovación del ordenamiento jurídico.

15. Respecto al **artículo 11**, si bien EMAKUNDE valora de forma muy positiva la promoción de la igualdad dentro de los principios y deberes en el ejercicio profesional, EMAKUNDE considera que el enfoque de género debería impregnar el resto de principios.
16. Entendemos que el Anteproyecto no debe reiterar aquellas prescripciones que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que no lo innovan, de modo que sólo debe limitarse a incorporar aquellas previsiones que complementen las previsiones de la Ley 4/2005. No obstante lo anterior, se han incorporado algunas de las sugerencias que formula EMAKUNDE.
17. Finalmente, desde EMAKUNDE se considera necesario hacer una revisión y adecuación de los términos enunciados en masculino en el texto del anteproyecto de ley, tales como monitores, entrenadores, directores, destinatarios, titulados, etcétera.
18. No se formula objeción a esta última observación.

II.- OBSERVACIONES QUE FORMULA EL DEPARTAMENTO DE SALUD.

19. Por parte del Departamento de Salud se realizan diversas observaciones al Anteproyecto, observaciones que son suscritas por Doña María Eugenia Ugartondo Segura, con fecha de 4 de marzo de 2015, en nombre de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales de aquel Departamento.
20. Respecto a las menciones a la salud que incorporan los **artículos 5 y 11** tal Dirección manifiesta su conformidad con el texto proyectado.
21. Por el contrario, la Dirección citada formula objeciones sobre los **apartados uno, dos y tres del artículo 18**, dedicado a la protección de la salud y

seguridad de consumidores y usuarios, propone su supresión o reformulación. Respecto a los apartados cuarto y quinto no formula objeción alguna.

22. La primera objeción general que formula el Departamento de Salud es que la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, aunque se encuentra vinculada al ejercicio del deporte, no incide en aspectos esenciales de las profesiones del deporte. A tal efecto, manifiesta que el precepto rebasa los límites del propio objetivo de la norma que es, según el artículo 1, regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del deporte.
23. En nuestra opinión, no se puede discutir que la protección de la salud y seguridad es el auténtico *leitmotiv* de la Ley, su auténtica razón de ser, hasta el punto que no se entiende la Ley, ni se podría justificar, sin ese objetivo de protección de la salud y seguridad de las y los destinatarios de los servicios de profesionales del deporte. Y esa protección se instrumenta en el Anteproyecto mediante diferentes mecanismos, siendo uno de ellos la exigencia de una cualificación mínima de las y los profesionales del deporte.
24. Por parte del Departamento de Salud se argumenta también que las materias de salud y seguridad de los consumidores y usuarios tienen una naturaleza transversal que provoca el inconveniente de la dispersión normativa y que es preciso poner cuidado a la hora de abordar los objetivos sin engrosar innecesariamente el ordenamiento jurídico. No le falta razón al órgano alegante sobre el habitual quebranto del principio de economía normativa y la proliferación desordenada de disposiciones generales. Y ello acarrea el peligro de rebasar los límites competenciales dentro de los cuales se ha de sustanciar la elaboración de la disposición general. En nuestra opinión, el anteproyecto es cuidadoso con estos aspectos pues establece el deber del Gobierno Vasco de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios “*en el ejercicio de sus competencias*”, como no podía ser de otro modo.
25. Respecto al **apartado primero**, del **artículo 18**, que dispone que el Gobierno Vasco garantizará, en el ejercicio de sus competencias, la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios pudiendo establecer los oportunos sistemas de autorización, declaración responsable, comunicación, evaluación, acreditación

e inspección con relación a la exigencia de cualificaciones para el ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en la Ley, el Departamento de Salud alega que en realidad no entraña una innovación del ordenamiento jurídico pues viene a reproducir el precepto constitucional que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios y, asimismo, incluye un abanico de opciones que se encuentran en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

26. A nuestro juicio, el apartado primero va mucho más allá de tal genérica previsión constitucional y, en definitiva, contiene una importante habilitación al Gobierno Vasco para establecer reglamentariamente diversos mecanismos para la acreditación de cualificaciones en el ejercicio de las profesiones del deporte. En segundo lugar, los artículos 29 y 30 de la Ley 14/1986, que regulan los sistemas de autorización, acreditación inspección, etcétera, se refieren a establecimientos y centros sanitarios, ámbito material que nada tiene que ver con este Anteproyecto. En tercer lugar, el artículo 29 se refiere a una autorización sanitaria que en el presente Anteproyecto no es objeto de regulación. En resumen, en ningún caso nos encontramos ante una reiteración normativa.

27. El **apartado segundo del artículo 18** establece que, sin perjuicio de la potestad disciplinaria del respectivo colegio profesional sobre sus miembros, las Administraciones Públicas competentes velarán por que la publicidad de las personas y entidades que presten servicios en el ámbito de las profesiones reguladas en la Ley sea objetiva, prudente y veraz, no fomente prácticas deportivas atentatorias a la salud y seguridad de los deportistas y respete rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones no creando falsas esperanzas. A juicio del Departamento de Salud, tal apartado no presenta grandes novedades –salvo la obligación de respetar la base científica de las actividades- y su eficacia es mínima, pues no pasa de ser una especie de declaración de intenciones. Y añade que esas previsiones se apoyan en que el Anteproyecto concibe el deporte como una actividad orientada, en todo caso, a obtener un efecto beneficioso para la salud.

28. En nuestra opinión, el apartado segundo contiene un mandato a la Administración Pública que resulte competente por razón de la materia para

adoptar medidas que garanticen que la publicidad en el ámbito de las profesiones del deporte no fomente prácticas deportivas atentatorias a la salud y seguridad de las personas. Se trata de una previsión normativa análoga a la que existen en otros ámbitos, como en el de la igualdad de mujeres y hombres. No constituyen meras declaraciones de intenciones; se erigen en mandatos concretos. Y lo que realmente hace el Anteproyecto es trasladar al ámbito de los profesionales del deporte una prescripción contenida en la Ley 22/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y, naturalmente, destinada exclusivamente a los profesionales sanitarios. Su artículo 44 dispone que la publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los profesionales sanitarios *“deberá respetar rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones, y será objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados”*.

29. Realmente, tal y como apunta el Departamento de Salud, las observaciones anteriores no constituyen motivo suficiente para formular alguna objeción respecto a su legalidad.
30. Sin embargo, el Departamento de Salud considera que el **apartado tercero del artículo 18** conculca los principios que, de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, presiden el ejercicio de la iniciativa normativa del conjunto de las Administraciones Públicas. A su juicio, el apartado tercero encierra una prohibición que ni siquiera prevé la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. El apartado tercero del artículo 18 del Anteproyecto establece que no podrán ser objeto de publicidad por las y los profesionales objeto de regulación en esta Ley aquellos servicios sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para la salud, quedando prohibida la publicidad de aquellos servicios o productos-milagro.
31. La conclusión del Departamento de Salud se fundamenta en que la prohibición de publicidad no se limita a aquellos servicios que causen o puedan causar efectos nocivos sobre la salud, sino que abarca cualquier servicio que presten los profesionales objeto de regulación. Y añade que convierte en norma general la prohibición de ejercer una de las actividades más estrechamente vinculadas a la comercialización de los servicios, la actividad publicitaria, que además está garantizada por expreso mandato del artículo 24 de la Ley

17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Y considera que la vulneración más grave es la que concierne al principio de proporcionalidad.

32. No podemos compartir la argumentación del Departamento de Salud pues el Anteproyecto de Ley se ha limitado a transponer una previsión normativa ya aplicable a profesionales sanitarios en el artículo 44 de la Ley 22/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: *“No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos sanitarios no autorizados, o sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para el ser humano, quedando prohibida la publicidad de productos y servicios de carácter creencial y de los productos-milagro”*.
33. A mayor abundamiento, el precepto que invoca el Departamento de Salud, el artículo 24 de la Ley 17/2009, no establece un principio de actividad publicitaria sin límites, sino todo lo contrario. Su apartado segundo establece que *“no podrán establecerse prohibiciones totales”* pero, a *sensu contrario*, sí parciales, a las comunicaciones comerciales en las profesiones reguladas. Y reconoce expresamente la posibilidad de establecer limitaciones publicitarias: *“Las limitaciones que se puedan imponer no podrán ser discriminatorias, habrán de estar siempre justificadas por una razón imperiosa de interés general y serán proporcionadas”*.
34. A juicio del Departamento de Salud, con arreglo al apartado 3, los profesionales del deporte en el País Vasco, a diferencia de cualquier otro sector profesional, sólo podrá publicitar servicios que comporten un beneficio evidente para la salud. Tal limitación, además de ser desproporcionada, constituye, a juicio del citado Departamento, una restricción que contraviene el principio de seguridad jurídica pues la limitación se vincula a la ausencia de una evidencia sobre el beneficio de la salud.
35. Ya se ha reseñado *ut supra* que no es cierto que la limitación publicitaria no existe en ningún otro sector profesional. Precisamente, el argumento más sólido para su inclusión es que el Anteproyecto se basa en otra disposición legal que ordena el ejercicio de otras profesiones, las sanitarias, y nadie ha formulado objeción hasta la fecha sobre su constitucionalidad, sobre el canon de proporcionalidad, etcétera.

36. Por último, el Departamento considera que el apartado tercero conculca el principio de legalidad en la medida que existe una norma, el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Tal disposición establece, en su artículo 4, una prohibición de una serie de productos y servicios con detalle suficiente para garantizar la seguridad jurídica. Y, además, tal precepto se considera normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.16.
37. El error en el que incurre el Departamento es identificar la limitación publicitaria de los servicios de profesionales no sanitarios –como son los regulados en el Anteproyecto- con los servicios con pretendida finalidad sanitaria.

III.-INFORME DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA.

38. Por parte de la Viceconsejería de Política Lingüística no se formula objeción al Anteproyecto y únicamente se señala que en el Registro de Profesionales del Deporte, regulado en el **artículo 10** del Anteproyecto, se deberá asegurar la utilización de ambas lenguas según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, y así deberá ser reflejado en la correspondiente reglamentación.
39. En realidad, la Viceconsejería no formula ninguna enmienda de adición, supresión o modificación del texto articulado y proyecta su alegación sobre futuras actuaciones de la Administración en cumplimiento de la Ley.

IV.- INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA.

40. La Asesoría Jurídica del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura emite un informe con fecha de 12 de marzo de 2015.
41. Respecto al **artículo 1, apartado 2**, que establece que la Ley se aplicará “*sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica que, en su caso, apruebe el Estado en materia de servicios y colegios profesionales*”, se recomienda que, dado que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias atribuidas en dichas materias, la referencia no sólo incluya la legislación básica del Estado.
42. No cabe formular objeción jurídica alguna a tal recomendación.
43. Respecto al **artículo 1, apartado 5**, del Anteproyecto, la Asesoría Jurídica formula una recomendación para suprimir la referencia de que no se considerará retribución económica la percepción de compensaciones económicas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Se aconseja la eliminación del inciso por considerar que no es acorde con el concepto de voluntariado previsto en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado del País Vasco.
44. Sobre esta cuestión debe aclararse, en primer lugar, que el citado texto no aparece en el texto oficial sometido al trámite de información pública. Se trata de un borrador de trabajo que se manejó en el proceso de elaboración del Anteproyecto.
45. No obstante lo anterior, nos parecen muy útiles las consideraciones jurídicas que plantea la Asesoría Jurídica, que merecen un análisis más detenido pues nos encontramos ante uno de los preceptos nucleares del anteproyecto pues la definición de profesionales se proyecta en el texto de diverso modo. Existe una delimitación positiva -son aquellas personas que desarrollan su actividad mediante retribución- y una delimitación negativa –quedan excluidos quienes desarrollan su actividad en régimen de voluntariado-. A nuestro juicio, tal inciso de aquel borrador es acorde con el artículo 2 de la Ley 17/1998 pues el requisito de retribución económica, concepto jurídico indeterminado,

simplemente es concretado por el Anteproyecto por exigencias de seguridad jurídica.

46. Entendemos que no existe una antinomia, es decir, ante dos normas que pertenecientes al mismo ordenamiento jurídico, y que concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material, atribuyen consecuencias o contienen requisitos incompatibles entre sí. El Anteproyecto no contiene una previsión que contraría la prohibición de retribución económica, sino que concreta el concepto a los solos efectos del Anteproyecto. En cualquier caso, nos encontramos ante una norma del mismo rango jerárquico que la Ley 17/1998 y no existiría problema para que la nueva Ley concrete esa cuestión. No cabría aplicar, en caso de antinomia, el criterio jerárquico (*“lex superior derogat legi inferiori”*). Al ser del mismo rango, en caso de antinomia, se aplicaría el criterio cronológico: *“lex posterior derogat legi priori”*. Y, en cualquier caso, si aplicásemos el criterio de especialidad (*“lex specialis derogat legi generali”*) debería aplicarse en caso de antinomia la prescripción contenida en el Anteproyecto que está siendo informado.

47. No obstante lo anterior, debe indicarse que existe un compromiso del Gobierno Vasco, testimoniado en sede parlamentaria, en incorporar en la tramitación del Anteproyecto, alguna disposición en la que se delimite los conceptos de profesional y voluntario, a los efectos de proporcionar más certidumbre jurídica a las organizaciones deportivas y más protección a las personas que reciben aportaciones de escasa significación económica. En España ya se cuenta con un antecedente normativo reciente: el artículo 19 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja, establece lo siguiente: *“Tendrán la consideración de técnicos sin dedicación profesional aquellas personas que ejercen la actividad, aun remunerada, siempre que la cantidad percibida en cómputo mensual sea inferior al salario mínimo interprofesional, así como quienes solo perciban la compensación de los gastos que derivan de las mismas”*.

48. Tal y como afirma la Asesoría Jurídica, el **artículo 2**, que concreta las profesiones objeto de regulación, es uno de los pilares básicos de la Ley. Por parte de dicha Asesoría no se formula objeción alguna. Tan sólo se propone

una mejora de la redacción del **apartado 3** y se propone la siguiente redacción:
“Los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la presente Ley establecen el ámbito funcional general de cada profesión y tienen un carácter enunciativo y no limitativo”.

49. No cabe formular objeción a tal propuesta de mejora de la redacción.
50. Respecto a la Profesión de Profesor de Educación Física, contenida en el **artículo 3** del Anteproyecto, por parte de la Asesoría Jurídica se considera que la redacción propuesta, en la que se establece que se valorará de forma preferente el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalente, excede de las competencias atribuidas a la CAPV.
51. Respecto a esta objeción procede realizar diversas consideraciones. En primer lugar, no hay que olvidar en ningún momento que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Pleno de 30 de enero de 2014, ya ha reiterado de forma contundente que *“en todo caso, las Comunidades Autónomas, por su parte, podrán establecer criterios adicionales de titulación y experiencia que supongan la preferencia de unos profesores frente a otros a la hora de impartir una asignatura”.*
52. Asimismo, la propuesta del Anteproyecto se ha inspirado en el artículo 3, apartado segundo, de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña, que con similar marco competencial en materia educativa establece lo siguiente: *“La administración educativa puede valorar la formación universitaria específica en educación física para la enseñanza primaria y la formación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte para la enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional”.* Tal precepto no fue objeto de reproche competencial en el seno de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. No obstante lo anterior, no se formula objeción a la supresión de tal valoración preferente.
53. Respecto al **artículo 5, apartado 5**, que exige el título de Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y que, además, la persona

cuenta con una formación específica cuando suponga atribuciones en la recuperación y mejora de la condición física de las y los deportistas, en la prevención de lesiones, en la realización de test de valoraciones y actuaciones análogas, la Asesoría Jurídica recomienda un esfuerzo de concreción pues se desconoce a qué tipo de formación se refiere, lo que dificultará enormemente su consiguiente desarrollo reglamentario

54. Compartimos la observación de la Asesoría Jurídica en el sentido de que lo deseable es que el Anteproyecto incluya, con la mayor determinación y concreción posible, las cualificaciones, formaciones, etcétera, exigibles en cada caso. Sin embargo, a pesar de este deseo, no resulta posible en este caso esa concreción pues nos encontramos ante una multitud de formaciones, de diferente contenido, naturaleza, duración y procedencia, en este ámbito. Y precisamente para estos problemas el Tribunal Supremo pone en valor la colaboración reglamentaria. El Anteproyecto exige la colaboración reglamentaria precisamente para favorecer la simplificación y evitar que la ley incurra en un excesivo legalismo y rigidez en el cual incurriría, por ejemplo, si de una forma prolija se dedicara a regular todas las formaciones existentes, máxime en un ámbito tan dinámico y prolijo como el de las formaciones.
55. Respecto al **artículo 7** considera la Asesoría Jurídica que el **título** del artículo –“*requisitos de cualificación en supuestos especiales*”- no se corresponde con el contenido del artículo.
56. A nuestro juicio, el contenido del artículo sí se refiere a los requisitos de cualificación en los siguientes supuestos:
 - a) Supuesto de ejercicio de las profesiones en otras Comunidades Autónomas. En este caso se preceptúa que los requisitos de cualificación de la Ley no serán de aplicación.
 - b) Supuesto de ejercicio profesional en clubes y otras asociaciones que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional. En este caso, los requisitos de cualificación sólo se exigen si las entidades deportivas tienen su domicilio social en el País Vasco.

- c) Supuesto de ejercicio profesional en federaciones deportivas españolas y demás entidades si la actividad profesional se ejerce principalmente en centros radicados en el País Vasco. En este caso sí se exigen las cualificaciones establecidas en la Ley.
- d) Supuesto de ejercicio profesional en el sector público. Se concreta que se exigirán las cualificaciones en el sector público autonómico, foral y vasco.

57. Respecto al **apartado 1** del **artículo 7** se manifiesta por parte de la Asesoría Jurídica que reitera el ámbito territorial de aplicación de la norma, ya definido en el artículo 1, por lo que supone una reiteración.

58. No se formula ninguna objeción a la supresión del apartado primero.

59. La Asesoría Jurídica formula diversas consideraciones respecto a los **apartados 2 y 3** del **artículo 7**. El análisis de este artículo se realiza en conexión con el artículo 1 del Anteproyecto, que es el relativo al ámbito de aplicación de la Ley. A tal efecto, la Asesoría Jurídica sugiere cierta indefinición en el ámbito objetivo y subjetivo de la norma pues parece desprenderse que están sujetos a la Ley quienes ejerzan de forma habitual en la CAPV, aunque ello no se señala expresamente. Y, asimismo, apunta que debería concretarse qué se entiende por ejercer la actividad de forma habitual en la CAPV o que se entiende por *“ejercer la profesión principalmente en la CAPV”*.

60. Resulta obligado compartir con la Asesoría Jurídica la reflexión sobre la importancia de delimitar adecuadamente el ámbito de aplicación de la norma pues coincidimos en que es la parte esencial de la norma y, de su correcta configuración depende el éxito de la consecución de los objetivos de la norma. Dicho ello, también debe advertirse de la dificultad general que todo proyecto normativo tiene para delimitar su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación. Si se examinan con detalle las leyes aprobadas por el Parlamento Vasco a lo largo de la historia es fácil de constatar que la definición de los ámbitos de aplicación está basada en conceptos jurídicos abiertos. La Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, establece en el artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, que la Ley *“es de aplicación a las asociaciones que*

desarrollen sus actividades principalmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco". En los mismos términos se pronuncia la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, cuando en su artículo segundo también establece que se regirán por lo dispuesto en la Ley "*las fundaciones que desarrollen sus funciones principalmente en el País Vasco*". ¿Qué se entiende por el adverbio "*principalmente*"? A tenor de la observación que formula Asesoría Jurídica se propone añadir el adverbio "habitual" en el artículo 1, apartado segundo, del Anteproyecto. Ello es perfectamente compatible con la exigencia de cualificaciones a los profesionales de las entidades deportivas que tengan su domicilio en el País Vasco (artículo 7) o a profesionales de federaciones deportivas españolas si tales profesionales ejercen su profesión principalmente en centros radicados en el País Vasco (artículo 7), pues no existe contradicción con lo dispuesto en el artículo 1.

61. Respecto al **apartado 4** del **artículo 7** se considera por parte de la Asesoría Jurídica que puede resultar innecesario, porque tal previsión ya se encuentra contenida en el apartado 3 del artículo 1.

62. Realmente, el apartado 4 del artículo 7 introduce un importante matiz que no se encuentra en el apartado 3 del artículo 1. Mientras el artículo primero establece que la referencia al acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en el sector público ha de entenderse circunscrita al ámbito del sector público de la Administración General y de las Administraciones Locales del País Vasco, el artículo 7 especifica que la Ley se aplica en dos áreas: acceso a los puestos de trabajo y la contratación administrativa de servicios. No obstante lo anterior, no se formula objeción para que se fusionen ambas previsiones diferentes en el artículo primero.

63. Respecto al **artículo 8**, relativo a la adaptación de las referencias de las cualificaciones y títulos contenidos en la Ley, a las nuevas ofertas formativas y cualificaciones profesionales oficiales, la Asesoría Jurídica considera que el contenido es más propio de una disposición adicional. Según la Asesoría Jurídica, de acuerdo con las directrices para la elaboración de disposiciones de carácter general, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 23 de marzo de

2003, tales disposiciones adicionales deben fijar el plazo en el que debe cumplirse el mandato.

64. Realmente el artículo 8 no contiene un mandato al Gobierno Vasco, sino que el texto normativo determina a quién corresponde –Gobierno Vasco- resolver un determinado problema en el supuesto de que se suscite. En la medida que la previsión es abierta e intemporal y no constituye propiamente un mandato no cabe establecer un plazo.
65. La Asesoría Jurídica advierte, con relación al **apartado 3** del **artículo 10**, que debe ser modificado. El texto sometido a información pública establecía lo siguiente: *“Los requisitos de inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte y, si procede de colegiación, no pueden exigirse a las y los profesionales vinculados con la Administración pública mediante una relación de servicios reguladas por el derecho administrativo o laboral”*. El Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia 150/2014, de 22 de septiembre, que ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el inciso del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de colegios profesionales del País Vasco, que ha sido declarado inconstitucional. Según el Tribunal Constitucional, el hecho de eximir de la colegiación obligatoria a los empleados públicos, cuando ejercen una profesión por cuenta de la Administración, establece una excepción que no contempla en la Ley estatal de colegios profesionales. A juicio del Tribunal, siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria lo es también para establecer las excepciones.
66. En efecto, después de la elaboración del Anteproyecto –la versión objeto de información pública es de 5 de octubre de 2014- se publicó la citada sentencia el 28 de octubre de 2014. Por tanto se procede a la supresión íntegra del apartado tercero.
67. Con relación al **artículo 10** también viene a manifestar la Asesoría Jurídica que parece existir una contradicción en el apartado 2 toda vez que parece crearse un sistema registral y, sin embargo, en el inciso final se apuntaría más a un

órgano registral. Y para ello se basa en los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora.

68. Compartimos consideraciones de la Asesoría Jurídica y consideramos que, estando concebido el Registro de Profesionales del Deporte, como un sistema, no como un órgano administrativo, procede modificar el apartado 2 para que se sitúen dichas funciones registrales en el ámbito de la Dirección competente en materia de deportes.
69. Por parte de la Asesoría Jurídica se formula una sugerencia con relación a los principios y deberes contenidos en el **artículo 11** del Anteproyecto, pues se mezclan principios y deberes. A tal efecto, considera que resultaría más oportuno tratar principios y deberes de forma separada.
70. Entendemos que la diferenciación entre principios y deberes que realiza la Asesoría Jurídica es, en el plano teórico y atemporal, totalmente acertada. Sin embargo, todos los ítems que contiene el artículo 11 tienen una vocación de ser realmente obligaciones o deberes, aunque algunos puedan carecer temporalmente de sanción alguna y presentar transitoriamente el carácter de principio. El incumplimiento de dichos deberes del artículo 11 tiene diferentes respuestas: algunos incumplimientos ya están previstos en la vigente Ley 14/1998; otros incumplimientos están previstos en la Ley 12/2012; otros se contemplan en el propio Anteproyecto (disposiciones finales primera y segunda); otros incumplimientos están previstos en la Ley 6/1993; etcétera. Naturalmente, el texto también abre la posibilidad de que los colegios y asociaciones profesionales aprueben sus propios códigos o reglamentos para exigir la responsabilidad disciplinaria a sus miembros al amparo de lo previsto en el artículo 11 del Anteproyecto. Si la Ley cataloga tales deberes como principios, parecería que está vedando la posibilidad de que su incumplimiento conlleve sanción jurídica alguna.
71. Con relación al **artículo 11** se proponen diversas mejoras de redacción. En primer lugar, se considera que en el apartado c) es redundante la mención a la «*presencia física directa*». Se propone suprimir el adjetivo *directa*, pues es suficiente.

72. Se comparte esta propuesta de mejora técnica.
73. También se considera que el inciso «*salvo en los supuestos previstos en esta Ley*» no resulta aclaratorio, ya que en ninguna parte de la Ley se aclara cuáles son esos supuestos.
74. En el Anteproyecto ya se indican diversos supuestos en los que no se precisa la presencia directa como, por ejemplo, el artículo 6.1 relativo a la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva. Otro ejemplo es el artículo 4, apartado 10, que establece que la prestación de los servicios propios de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva requiere su presencia física en el desarrollo de actividades deportivas, salvo que la función sea exclusivamente de planificación o programación.
75. Por último, y con relación al **artículo 11, apartado k**, se apunta que el sustantivo “*hombre*” debe ir en plural.
76. El apartado k del artículo 11 se refiere a promover “*las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de la mujer en el deporte y su incorporación a la práctica deportiva a todos los niveles*”. Se comparte la propuesta de mejora técnica y en lugar de citar el sustantivo “*mujer*”, en singular, irá en plural.
77. La Asesoría Jurídica recomienda la supresión del **artículo 12**. A su juicio, no introduce ninguna especificidad pues se remite a la legislación general en cuanto a la posibilidad de que los profesionales se organicen en sociedades profesionales. Asimismo, la Asesoría Jurídica indica que “[L]a obligación en sí de adoptar una forma societaria tampoco está justificada en tanto en cuanto la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, no necesariamente societarias, como es el Emprendedor de Responsabilidad Limitada”.
78. Respecto a la primera observación, deseamos reseñar que el precepto es, básicamente, una reproducción del texto legal aprobado por el Parlamento de

Cataluña mediante la Ley 3/2008, concretamente en su artículo 10. En cualquier caso, no se formula objeción a la supresión del apartado segundo, que simplemente se remite a las *“formas societarias previstas en las Leyes y cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación estatal sobre sociedades profesionales”*. Por otra parte, resta añadir que dos de los tres apartados del artículo 12 sí contienen alguna especificidad. En el apartado primero se recoge la posibilidad general prevista en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, de ejercer las profesiones del deporte a través de sociedades profesionales. Sin embargo, se introduce un inciso o una excepción lógica: el ejercicio de las profesiones del deporte en el empleo público o en materia educativa. Y el apartado tercero, como reconoce la propia Asesoría Jurídica, sí contiene una previsión singular sobre la obligación de las sociedades profesionales de adoptar las medidas necesarias para garantizar la presencia física de las y los titulados correspondientes en el ejercicio de las profesiones del deporte. Tal mención es necesario mantener pues en otras partes del Anteproyecto la obligación de presencia física se centra en los profesionales que son personas físicas y en este caso versa sobre las sociedades, personas jurídicas.

79. Respecto a la segunda observación de la Asesoría Jurídica debe precisarse que realmente el artículo 12 no obliga a adoptar una forma societaria concreta. Los profesionales pueden elegir la forma de organizarse que mejor se acomode a sus intereses y si optan por crear sociedades profesionales deben aplicar con carácter general las disposiciones reguladoras de las sociedades profesionales más las previsiones singulares del Anteproyecto que, debemos insistir, no contiene la obligación de adoptar formas societarias. El apartado segundo, que se recomienda suprimir, meramente indica que si el profesional opta libremente por el ejercicio profesional *“a través de las sociedades profesionales... sólo podrá realizarse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes”*, pero se trata de una reproducción de lo prescrito en el artículo 1.2 de la citada Ley 2/2007.

80. La Asesoría Jurídica formula una observación respecto al **apartado 1 del artículo 14**. Tal apartado dispone que los requisitos de cualificaciones para el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte se entiende sin perjuicio de cualesquiera licencias, autorizaciones o requisitos adicionales exigibles con

arreglo a la legislación vigente. Considera la Asesoría Jurídica que el contenido del artículo 14 podría recolocarse en el artículo 2.

81. No se considera procedente la inclusión del contenido del artículo 14 en el artículo 2 pues éste tiene básicamente el contenido que enuncia su título: enunciado de las profesiones propias del deporte, ámbito funcional general y cualificaciones. No se refiere a otros requisitos diferentes a las cualificaciones. A mayor abundamiento procede resaltar que el Parlamento de Cataluña optó por el mismo criterio en el artículo 12 de la Ley 3/2008.
82. El **artículo 16** del Anteproyecto dispone que las profesiones reguladas en la Ley quedarán sujetas, en lo no establecido en la misma, por el marco común sobre ejercicio de profesiones. La Asesoría Jurídica considera que se establece una regla de supletoriedad que, conforme a lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices de técnica normativa, debe incluirse en las disposiciones finales.
83. A nuestro entender tal Acuerdo del Consejo de Gobierno se refiere a otras normas de supletoriedad: *“Las reglas de supletoriedad tanto las que atribuyen el carácter supletorio de la propia norma a otras, como las que declaran a esa norma como supletoria de disposiciones distintas”*. En el caso que nos ocupa no se atribuye a esta Ley carácter supletorio. De todos modos, también debe indicarse que el criterio adoptado en el Anteproyecto es el seguido por el Parlamento de Cataluña en la Ley 3/2008, en su artículo 14.
84. Respecto a los **artículos 16.2** (aplicación de la legislación en materia de defensa de la competencia), **artículo 17** (reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados) y **artículo 18** (protección de la salud y seguridad de consumidores y usuarios), Asesoría Jurídica considera que son remisiones generales a la normativa específica aplicable, problema del que, según la Asesoría Jurídica, adolece el texto en líneas generales, por lo que entiende que son remisiones innecesarias e ineficaces.
85. Es cierto que el Anteproyecto emplea el instrumento de la remisión, que supone la denominada regulación *per relationem* a otra regulación, pero

cuando el legislador legisla por remisión lo hace, entre otros motivos, pero básicamente, por razones de economía legislativa y por razones de sistematización material del ordenamiento. Es por ello que, por ejemplo, las dos únicas leyes que regulan las profesiones del deporte (Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura, y la reiterada Ley 3/2008) realizan las mismas remisiones que aparecen en el Anteproyecto.

86. Respecto a la **disposición adicional tercera**, titulada “*Actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas*” se sugiere por parte de la Asesoría Jurídica corregir el título de la disposición adicional ya que en el título “*únicamente se hace referencia a las actividades de voluntariado y análogas y, sin embargo, el contenido es más amplio y se refiere también a las actividades de entrenador*”.
87. Realmente no se alcanza a comprender qué es lo que realmente desea significar Asesoría Jurídica con la propuesta de modificación del título pues la exigencia de cualificaciones del voluntariado no sólo se ciñe a los entrenadores.
88. Por parte de la Asesoría Jurídica se indica que la **disposición adicional cuarta** y la **disposición adicional séptima** pueden formularse conjuntamente pues están directamente relacionadas.
89. En nuestra opinión, la disposición adicional cuarta trata de establecer que, en principio, el acceso y ejercicio de las profesiones sólo puede realizarse a través de los títulos académicos y certificados determinados en la Ley y que corresponde al Gobierno Vasco determinar los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías, mientras que la disposición adicional séptima aborda otra realidad: la formación específica exigida a lo largo del texto articulado.
90. También se indica por parte de Asesoría Jurídica que, de conformidad con las directrices de técnica normativa, los mandatos de actuación o complemento normativo, deben colocarse en las disposiciones finales.

91. Sin embargo, tales disposiciones adicionales no constituyen propiamente mandatos de actuación, sino que se limitan a la determinación de la autoridad llamada a resolver determinados problemas que puede suscitar la aplicación de diversos preceptos de la Ley.
92. La Asesoría Jurídica también indica que las **disposiciones adicionales quinta** y **sexta** podrían insertarse dentro del articulado pues la calificación de un precepto como residual y, en consecuencia, incardinable dentro de las disposiciones adicionales, debe ser excepcional.
93. A este respecto, no se formula objeción jurídica alguna a tal sugerencia.
94. Por parte de la Asesoría Jurídica se indica que también la **disposición adicional octava** podría encontrar acomodo dentro del articulado, concretamente dentro del artículo 2.
95. A este respecto, no se formula objeción jurídica alguna a tal sugerencia.
96. La **disposición adicional novena** define los niveles de actividades deportivas (iniciación deportiva o nivel básico, nivel medio o perfeccionamiento técnico y alto nivel). Por parte de Asesoría Jurídica considera que la previsión contenida en el apartado cuarto, en el que se establece que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá adaptar las definiciones mediante Orden, no resulta posible pues no puede modificarse vía reglamento una definición dada por la Ley.
97. Aunque es muy habitual en materia de técnica legislativa la actualización mediante reglamento de contenidos de la Ley (sanciones, anexos, etcétera), no se formula objeción jurídica alguna a la supresión del apartado cuarto, si bien se suprimen las ejemplificaciones finales de cada uno de los tres apartados iniciales.

98. Respecto a la **disposición adicional décima**, que regula la formación en actividades con deportistas en edad escolar, la Asesoría Jurídica considera que no se concreta si se refiere sólo a los monitores.
99. El apartado primero de la citada disposición se refiere a “*los monitores en actividades polideportivas*”, si bien procede también incorporar a las y los entrenadores en actividades polideportivas.
100. Por parte de la Asesoría Jurídica se considera que las **disposiciones adicionales undécima y duodécima** se pueden agrupar en una sola disposición.
101. No se formula objeción jurídica a tal agrupación.
102. Respecto a la **Disposición Transitoria Primera**, la Asesoría Jurídica considera que el apartado 2 (“*en el supuesto de que los departamentos del Gobierno Vasco (...) implanten los mecanismos y procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las correspondientes competencias profesionales*”) introduce un aparente régimen provisional para aquellos que vienen ejerciendo de forma continuada las actividades profesionales reguladas en el Anteproyecto.
103. El apartado 2 que cita la Asesoría Jurídica, que da lugar a la incertidumbre jurídica por entender que no hay certeza de que vayan a establecerse los mecanismos de acreditación de las competencias profesionales y que en tal caso no podrán los profesionales continuar con el desempeño profesional, no existe en la versión del Anteproyecto sometido a información pública.
104. Respecto a la **disposición transitoria segunda**, la Asesoría Jurídica propone una redacción alternativa.
105. No se formula objeción a la redacción alternativa que propone la Asesoría Jurídica.

106. El Anteproyecto contempla una **Disposición Derogatoria** según la cual quedan derogadas “*todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley*”. Por parte de la Asesoría Jurídica se indica que tal redacción es contraria a lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices de técnica normativa, que conmina a no establecer una cláusula genérica.
107. En la medida que los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, entran en contradicción con la Ley se sugiere consignar de forma expresa su derogación acompañado con la cláusula genérica de cierre, que sí admiten las directrices de técnica normativa.
108. La **Disposición Final Tercera** del Anteproyecto habilita al Gobierno Vasco para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del Anteproyecto. Por parte de la Asesoría Jurídica se significa que la Comisión Jurídica del Gobierno Vasco ha venido insistiendo en que se suprima tal previsión por tratarse de una previsión legal que reitera lo que el ordenamiento jurídico ya prevé.
109. Repárese en que la Disposición Final Tercera no se limita a una mera habilitación al Gobierno Vasco para el desarrollo reglamentario de la Ley pues, como se indicaba en la Memoria, esa habilitación general ya se encuentra en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y en el artículo 16 de la Ley de Gobierno, sino que la Disposición Final Tercera aclara que la habilitación general al Gobierno se complementa con la habilitación específica al Departamento competente en materia deportiva en aquellos supuestos previstos en la Ley, en los que resulta necesario un desarrollo reglamentario con gran flexibilidad.

V.- INFORME DE LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.

110. El Pleno del Consejo Vasco de la Competencia (en adelante, la AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA o AVCD), en su reunión de 3 de marzo de 2015, ha aprobado el informe en relación con el Anteproyecto de Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.
111. Este órgano inicia su informe reconociendo que los servicios profesionales se encuentran sometidos, a menudo, a restricciones de la competencia que, en cierto modo, suponen barreras de entrada para el acceso y ejercicio profesional. Y añade que una intervención restrictiva en el mercado que no se encamine a la satisfacción de los intereses públicos dignos de protección en el mercado resulta contraria al interés general.
112. Compartimos estas consideraciones iniciales en la medida que casi todos los servicios profesionales se encuentran hoy en día sometidos a condiciones que constituyen una barrera de entrada en el mercado. Cualquier persona no puede ejercer de auditor, de registrador, de notario, de arquitecto, de ingeniero, de fisioterapeuta, de médico, etcétera. Resulta necesaria acreditar una cualificación. La cuestión nuclear es si esas exigencias de cualificación están realmente encaminadas a la satisfacción de intereses públicos.
113. Realizada la consideración anterior, la AVDC analiza el Anteproyecto desde la perspectiva de la competencia. Y comienza realizando diversas afirmaciones que no son rigurosas y que, de algún modo, vician sus consideraciones anteriores. En primer lugar, señala que *“no existe hasta el momento en la CAPV vínculo concreto entre las titulaciones existentes y la prestación de servicios profesionales, si bien la Ley del Deporte Vasco establece que para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. Dado que no se ha desarrollado el mandato normativo, los operadores económicos prestan actualmente sus servicios en la CAPV sin otras restricciones de acceso y ejercicio”*.

114. No es cierto que, hasta la fecha, no exista un vínculo concreto entre las titulaciones existentes y la prestación de servicios profesionales en el deporte. En primer lugar, el Parlamento Vasco, no la Administración Pública, aprobó la Ley 14/1998 con un claro mandato a las administraciones públicas para exigir el correspondiente título oficial para la prestación de servicios en el ámbito del deporte. Es decir, durante casi dos décadas existe en nuestro ordenamiento jurídico de la CAPV un mandato claro y expreso para exigir titulaciones oficiales para la prestación de servicios en el ámbito del deporte. Y resulta revelador que el preámbulo de dicha Ley 14/1998 señalase precisamente que *“el tema de la formación de técnicos deportivos y de las titulaciones se presenta en la ley como una de sus más importantes preocupaciones. Son diversas las líneas de actuación que en esta área se diseñan: por un lado, se da cobertura legal a la exigencia de técnicos deportivos titulados para la realización de actividades de enseñanza, dirección, etc.”*.
115. También dice la AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA que *“no se ha desarrollado el mandato”* contenido en la Ley 14/1998. No es cierto. El artículo 25.1 del Decreto 125/2008, de julio, sobre Deporte Escolar, ya desarrolla la Ley 14/1998 y establece que *“para ejercer funciones de dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y funciones análogas en materia de deporte escolar será preciso estar en posesión del título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el título de Grado correspondiente”*.
116. Asimismo, las federaciones deportivas del País Vasco vienen exigiendo a los entrenadores requisitos de cualificación para el ejercicio de sus actividades de técnicos deportivos. Es decir, tampoco es dable hablar de que los operadores económicos prestan actualmente sus servicios en la CAPV sin restricciones de acceso y ejercicio y que el Anteproyecto constituye un cambio total en el paradigma normativo.
117. Tampoco es ajustado a la realidad manifestar que el Anteproyecto instaura *ex novo* las denominadas profesiones de monitor, profesor de educación física y director y pretende *ex novo* realizar una reserva de actividad para las mismas. Las profesiones de monitor, profesor de educación física,

entrenador o monitor son profesiones preexistentes desde hace muchas décadas, preexisten a la intervención del legislador a través del Anteproyecto de Ley e, incluso, alguna de ellas, como la de Profesor de Educación Física es una profesión regulada, titulada y colegiada en estos momentos.

118. La AVDC manifiesta que ni la Memoria del Anteproyecto ni su Exposición de Motivos *“detallan la efectiva incidencia negativa que las actividades desarrolladas hasta el momento en estos ámbitos hayan provocado en la salud y la seguridad de los deportistas ni ofrecen tampoco datos que muestren la necesidad de la protección de fines públicos constitucionalmente relevantes que puedan justificar una limitación a la libertad de prestación de servicios”*. Y en consonancia con ello la primera conclusión del informe es que el Anteproyecto genera una reserva de actividad para las personas que ostentan unas determinadas titulaciones o cualificaciones profesionales *«sin que haya quedado acreditado que existan razones de interés general que justifiquen su necesidad”*.

119. La conclusión precedente merece diversas consideraciones jurídicas en este informe. La falta de acreditación sobre la incidencia negativa de las actividades profesionales en el ámbito del deporte, realizadas por personas carentes de formación, así como la no concurrencia de fines públicos constitucionalmente relevantes son dos apreciaciones de la AVDC fácilmente rebatibles.

120. El Tribunal Constitucional, máxime intérprete de la Constitución y de los fines públicos constitucionalmente relevantes, señaló en su sentencia de 1 de octubre de 1998, 194/1998, que la calificación de una profesión como colegiada, como la de Profesor de Educación Física, con la consiguiente incorporación obligatoria, *“requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el Colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional con*

determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados; extremos que podrán ser controlados por este Tribunal”.

121. Como se puede comprobar, el Tribunal Constitucional verifica la legitimación de la colegiación obligatoria de los profesores de educación física mediante la comprobación de si se ven afectados o no fines públicos constitucionalmente relevantes. Y en ese control de la afectación de esa restricción, que corresponde al propio Tribunal Constitucional, enfatiza con relación a una de las profesiones del deporte que es objeto de regulación en el Anteproyecto lo siguiente: *“la adscripción forzosa se configura en este supuesto como un instrumento necesario para que el Colegio asuma la responsabilidad de velar sobre las actividades desarrolladas en ámbitos educativos privados o referidos al ejercicio libre de la profesión por los Profesores de Educación Física, para que aquéllas se realicen sin merma de la garantía de los derechos de los ciudadanos en cuanto destinatarios de tales actividades. Por último, también desde la perspectiva de la actividad profesional desarrollada puede justificarse la legitimidad de la adscripción obligatoria de los Profesores de Educación Física. En punto a la valoración de la trascendencia de la actividad que los mismos desempeñan hay que recordar que la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten “la educación física y el deporte” (art. 43.3 C.E.) y que ambas actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud -a la que se refiere el apartado 1 del mismo art. 43 C.E.- De suerte que, no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas y, de modo especial, para quienes tienen como función la de docentes de esta materia en los centros de enseñanza. Debe, además, tenerse en cuenta que los destinatarios de tales actividades son, en una buena parte de los casos, menores de edad, y ello redunda en unas mayores exigencias de preparación y responsabilidad para quienes asumen*

dicha docencia. Razones que en el presente caso legitiman la norma que impone dicha colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión”.

122. Por tanto, no puede ponerse en duda esta doctrina del Tribunal Constitucional en la que, precisamente, se ha basado el Anteproyecto de Ley. Para el intérprete supremo de la Constitución la educación física y el deporte no sólo son un medio para mantener la salud de las personas sino que permiten *“evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas”*. Por tanto, ningún órgano o entidad puede sustraerse a esta declaración jurisdiccional y discutir la necesidad de la protección de fines públicos constitucionalmente relevantes que puedan justificar una limitación a la libertad de prestación de servicios. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional enfatiza que no debe *“desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas y, de modo especial, para quienes tienen como función la de docentes de esta materia en los centros de enseñanza”*.

123. Por si ello no fuera suficiente, existe un dato que no puede pasar desapercibido; la mayor parte de los destinatarios de los servicios profesionales que regula el Anteproyecto de Ley son menores. Y a este respecto el Tribunal Constitucional establece que *“además, tenerse en cuenta que los destinatarios de tales actividades son, en una buena parte de los casos, menores de edad, y ello redunda en unas mayores exigencias de preparación y responsabilidad para quienes asumen dicha docencia”*. Y sobre la base de ello concluye que es legítima ese obstáculo o barrera de la colegiación profesional.

124. Aclarada, por tanto, desde el punto de vista constitucional, la esencial afectación de bienes dignos de protección en el ejercicio de las profesiones del deporte, y, avalada la legitimidad constitucional para establecer limitaciones en el acceso y el ejercicio de las profesiones del deporte en el País Vasco, resta por examinar las objeciones concretas que formula la AVDC. Una primera

observación es que existe una parcelación de los servicios de las actividades de monitor o entrenador «*sin que resulte suficientemente motivado cómo esta compartimentación contribuye, en sí misma, a la protección de la salud de los destinatarios*». A nuestro juicio, la compartimentación responde, por una parte, a un elemental principio de proporcionalidad, que implica que las limitaciones establecidas en orden a la exigencia de cualificaciones profesionales son las más adecuadas para cada actividad deportiva al objeto de garantizar la consecución del objetivo que se persigue. Es decir, el Anteproyecto trata de no exigir la misma cualificación para todas las actividades profesionales sino que trata de ser respetuoso con el principio de proporcionalidad y exigir mayores cualificaciones sólo en aquellos casos en que esté debidamente justificado. Resulta difícil de comprender el reproche a la compartimentación cuando, precisamente, tiende a garantizar que las barreras o restricciones, consistentes en una exigencia de cualificación, sean proporcionadas.

125. El AVDC señala que no comprende cómo en el **artículo 4** se permite que los profesores de educación física puedan llevar a cabo actividades de monitor en los centros educativos fuera del horario lectivo, pero no las mismas labores fuera del centro escolar.
126. Esta consideración, que también ha sido objeto de alegación por otras entidades, debe ser tomada en consideración en el nuevo texto que se vaya a elaborar tras el periodo de información pública.
127. Por parte de la AVDC se manifiesta que la regulación genera un cierre de mercado a determinadas actividades sin que se deriven de la misma ventajas para los usuarios ni un incremento de la seguridad ni de la salud.
128. Estas afirmaciones *ut supra* no pueden ser compartidas. Y para ello basta con remitirse a todos los convenios y manifiestos internacionales, a todas las leyes del deporte aprobadas por las Comunidades Autónomas, a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la aprobación de las leyes reguladoras de las profesiones del deporte en Extremadura y Cataluña, etcétera. Todos los textos coinciden precisamente en

lo contrario: la exigencia de la cualificación profesional se concibe como un claro beneficio para los usuarios y contribuye a garantizar su salud y seguridad.

129. La AVDC trata de cuestionar la legitimidad de la exigencia de cualificaciones profesionales con la exclusión del ámbito de aplicación de la norma de actividades que se presten en régimen de voluntariado.
130. Tal argumento no puede prosperar. Desde el punto de vista de técnica jurídica, si se regula el ejercicio profesional, es decir, el ejercicio mediante remuneración, por definición, no forma parte de la regulación la actividad en régimen de voluntariado. Además, olvida la AVDC que la Disposición Adicional Tercera exige los mismos requisitos de cualificación a quienes prestan servicios en régimen de voluntariado. Y lo hace mediante una disposición adicional pues, con arreglo a las directrices de técnica normativa, es el instrumento donde se deben abordar aquellas cuestiones que quedan fuera del ámbito ordinario de aplicación.
131. También pone como ejemplo la AVDC, para cuestionar la justificación de las medidas de exigencia de cualificación profesional y su conexión con la salud, que se dispense en el **artículo 5, apartado 9**, de los requisitos de cualificación a entrenadores de entidades deportivas o de deportistas de otros países o Comunidades Autónomas. A su juicio, si la mera falta de titulación amenaza la salud o la seguridad, tal cualificación debería exigirse a cualquier profesional que ofrezca sus servicios, aunque sea de forma temporal.
132. La justificación del Anteproyecto es muy sencilla y plena de sentido común. Atendiendo al criterio de proporcionalidad, el ámbito subjetivo de aplicación de la ley es, como se ha señalado *ut supra*, el de las personas que ejercen de forma habitual las profesiones del deporte en la CAPV. No puede llegarse al absurdo de condenar a todo el sistema deportivo vasco a ser privado de competiciones de ámbito estatal e internacional porque los entrenadores de los equipos rivales –piénsese, por ejemplo, los entrenadores de equipos de fútbol de prestigio como Chelsea, Liverpool, Inter de Milán, Bayer de Munich, etcétera) no tengan la cualificación que se exige a los entrenadores de la Comunidad Autónoma. Un o una entrenadora de Alemania,

India o Perú que acompaña a su club o selección nacional para competir contra un equipo en el País Vasco no se puede encontrar con la prohibición de dirigir a su equipo en la CAPV, por el mero hecho de que esta Comunidad se haya dotado de una norma de exigencia de cualificaciones profesionales en el ámbito del deporte. Las actuaciones de dichos profesionales son esporádicas, casi reducidas a la conducción de los equipos en las competiciones a disputar en la CAPV y no puede concebirse que una medida, como la prevista en el Anteproyecto, proyectada en beneficio del deporte y sus deportistas, acarree más desventajas –cierre del deporte vasco a todo tipo de competición estatal e internacional- que ventajas.

133. Por parte de la AVDC se comete un error cuando se afirma que es incongruente que quien quiera ejercer como monitor en niveles básicos y limitados a una disciplina concreta no puede actuar “*si tiene un grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*”. El **apartado 4** del **artículo 4** del Anteproyecto autoriza a quienes ostenten tal cualificación profesional a ejercer tal actividad profesional de monitor.
134. También se alega por parte de la AVDC que las titulaciones que habilitan al acceso y ejercicio de las profesiones del deporte se encuentran taxativamente restringidas a las del ámbito deportivo sin que se prevea la posibilidad de que personas con titulaciones diferentes –o en algunos casos, con experiencia acreditada que garantice la adecuada prestación de los servicios- pueda acceder al mercado tal y como lo hacen en este momento. Y la AVDC se refiere, por ejemplo, a médicos deportivos, fisioterapeutas, etcétera.
135. En nuestra opinión parece razonable que las formaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones del deporte sean, naturalmente, las formaciones vinculadas al deporte, del mismo modo que las formaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones sanitarias sean las formaciones del ámbito sanitario o que la formación básica necesaria para ejercer profesiones jurídicas (Abogado o Abogada, Procurador o Procuradora, etcétera) sean el Grado en Derecho. No nos resulta concebible que habilite para el ejercicio de una profesión del deporte una formación del ámbito

sanitario, del mismo modo que habilite para el ejercicio de una profesión sanitaria una formación del ámbito deportivo, por mucho que en éstas se cursen materias de contenido sanitario.

136. Además de lo anterior debe precisarse que no es correcto afirmar que sólo es posible el acceso y ejercicio de las profesiones desde las titulaciones del ámbito deportivo. El Anteproyecto realiza un gran esfuerzo en posibilitar el acceso al ejercicio de las profesiones del deporte a través del amplio concepto de la cualificación profesional, que puede venir acreditada, según el apartado 6 del artículo 2, *«por un título oficial de formación, por un certificado de competencia, por una experiencia profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias»*.
137. Respecto a la profesión de Director o Directora, **artículo 6**, la AVDC alega que no queda acreditado en qué medida la exigencia de cualificación profesional para las tareas de dirección contribuye a la protección de la salud o seguridad de los o las deportistas. No queda acreditada la razón por la que exista un cierre de este mercado a personas que tienen titulaciones vinculadas con el deporte del mismo que no se requieren vinculaciones semejantes en gerencias, direcciones empresariales, etcétera.
138. La primera precisión que debe objetarse a dicha alegación es que el Anteproyecto, compartiendo la preocupación de la AVDC, no restringe el mercado a los gestores deportivos, es decir, a aquellas personas que asumen la dirección general, o la dirección empresarial, administrativa, financiera, comercial, etcétera, de entidades deportivas o de equipamientos deportivos. Estos no requieren, a pesar de que existen alegaciones en sentido contrario al Anteproyecto, una reserva de actividad. El profesional del que habla el Anteproyecto de Ley es la persona que asume la dirección *«aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte»*. Es decir, nos encontramos ante directores puramente técnicos que supervisan, coordinan, programan, actividades deportivas aplicando las ciencias del deporte, no la gestión administrativa, financiera, etcétera, de entidades o centros deportivos. De hecho, el artículo 1, apartado 5, expresamente excluye de su ámbito de

aplicación “*las actividades profesionales de gestor de instalaciones deportivas o de entidades deportivas 2.*”

139. Asimismo, tampoco puede pasarse por alto un dato trascendental: el artículo 62 de la vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, establece que para la realización de servicios de dirección relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. Y añade tal precepto que, a través de las disposiciones de desarrollo de la presente ley se efectuará, en los distintos ámbitos, la concreta delimitación del alcance de la obligatoriedad de las titulaciones.
140. Respecto a la profesión de Profesor de Educación Física la AVDC sostiene que, como indica el propio Anteproyecto, la profesión está regulada en la legislación educativa y, a su juicio, «*no cabe la posibilidad de que otra norma pueda establecer títulos que se valorarán de forma preferente*».
141. Esta alegación no puede ser compartida. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Pleno de 30 de enero de 2014 ya ha reiterado de forma contundente que “*en todo caso, las Comunidades Autónomas, por su parte, podrán establecer criterios adicionales de titulación y experiencia que supongan la preferencia de unos profesores frente a otros a la hora de impartir una asignatura*”.
142. En segundo lugar, tampoco puede pasarse por alto que la AVDC no justifica esa imposibilidad legal de que se pueda valorar de forma preferente una determinada formación especializada y que, por otra parte, sí existen otras disposiciones autonómicas vigentes que emplean esta fórmula. Cabe significar que, por ejemplo, el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña, establece que “*para ejercer como profesor o profesora de educación física en el marco del sistema educativo debe acreditarse la titulación exigida por la correspondiente legislación. La administración educativa puede valorar la formación universitaria específica en educación física, para la enseñanza primaria, y la formación universitaria en*

ciencias de la actividad física y el deporte, para la enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional”.

143. Por parte de la AVDC también se formulan una serie de cuestiones comunes a las profesiones “*creadas*” por la propuesta normativa. Es importante significar que la Ley no “*crea*” profesiones; las profesiones preexisten al Anteproyecto de Ley y, además, se encuentran en parte reguladas. Lo que sustancialmente hace el Anteproyecto es añadir o concretar determinadas exigencias de cualificación profesional.
144. Asimismo, se alega por parte de la AVDC que el **artículo 2** del Anteproyecto establece que los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidas en la Ley tienen por objeto establecer un ámbito funcional general de cada profesión y, como consecuencia de ello, ostentan un carácter enunciativo y no limitativo. A su juicio, tal reserva con carácter enunciativo y no limitativo es contraria al principio de que cualquier excepción recogida en una norma debe ser interpretada con carácter estricto y no amplio.
145. A esta alegación de la AVDC cabe formular varias objeciones. En primer lugar, el viejo aforismo “*odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda*” constituye una pauta interpretativa, de interpretación de las normas, no un mandato al legislador, al que crea las citadas normas. El Parlamento Vasco ni los demás parlamentos se pueden ver constreñidos por un viejo aforismo cuya virtualidad se despliega en el ámbito interpretativo o en el ámbito aplicativo, no en el ámbito de la producción normativa.
146. En segundo lugar debe reseñarse en este informe jurídico que el Anteproyecto emplea una técnica es utilizada con acierto en otros textos legales sin que se haya formulado ninguna tacha. Por ejemplo, el artículo 2.3 de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña, contiene esta misma redacción en la que se ha inspirado el Anteproyecto de Ley: “*Las listas de actuaciones profesionales de las profesiones reguladas por la presente ley tienen el objeto de establecer un ámbito funcional general para cada profesión y, en consecuencia, tienen un carácter enunciativo y no limitado*”.

147. Por parte de la AVDC se manifiesta que el Anteproyecto hace referencia a titulaciones concretas «o *equivalentes*» y expresiones similares que generan un margen de incertidumbre pues queda en manos de la Administración la concreción.
148. Efectivamente, en las disposiciones adicionales se habilita al Gobierno Vasco a determinar y concretar determinadas cuestiones que resulta imposible determinar a través de una Ley, atendiendo al carácter dinámico y evolutivo de las formaciones oficiales, de las cualificaciones, etcétera. Resulta impensable una regulación de esta naturaleza a través del legislador sin la colaboración de los reglamentos ejecutivos de desarrollo.
149. Respecto al tema de la colegiación, regulado en el **artículo 10** del Anteproyecto, por parte de la AVDC se alega que la obligatoriedad de colegiación constituye una barrera de entrada que sólo se considera justificada cuando así lo establezca una Ley. A su juicio, en varios preceptos de esta propuesta se hace una referencia genérica o hipotética a la existencia de colegios profesionales en este ámbito. Se señala que tan solo existe colegio profesional en estos momentos para los y las profesores y profesoras de Educación Física y que estas referencias deberían evitarse en la medida que puedan generar una apariencia de existencia lo cual resultaría contrario a la competencia y, sobre todo, al interés general.
150. Ante esta alegación deben formularse las siguientes objeciones. En primer lugar, no es correcto que tan sólo existe colegio profesional para los profesores de Educación Física. Tras la modificación operada mediante el Real Decreto 1641/1999, de 22 de octubre, la organización colegial se transformó en Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y posteriores Reales Decretos y Decretos y Leyes de las Comunidades Autónomas han consolidado una organización colegial de licenciados o licenciadas en educación física y en ciencias de la actividad física y del deporte. Y no es lo mismo la profesión que la titulación académica. Los licenciados o licenciadas en ciencias de la actividad física y del deporte ejercen actualmente las cuatro profesiones que

aparecen en el Anteproyecto de Ley: profesor o profesora de educación física, monitor o monitora, entrenador o entrenadora y director deportivo o directora deportiva.

151. Asimismo procede apuntar que el Anteproyecto es meridiano, diáfano, en cuanto a que la incorporación de los profesionales al colegio profesional correspondiente es obligatoria *“si así lo dispone la legislación estatal correspondiente”*. Es decir, resulta de aplicación el viejo aforismo que aplican reiteradamente los tribunales: *“in claris non fit interpretatio”* o, lo que es lo mismo, *«no estaría de más recordar, aunque al hacerlo reiteremos conceptos sobradamente conocidos por su propia esencialidad, que una actuación de naturaleza interpretativa, es decir de estricta hermenéutica, debe limitarse a explicar o declarar el sentido de una cosa y, principalmente, el de los textos faltos de claridad de ahí que, como ya rezaba el viejo aforismo romano in claris non fit interpretatio, no cabe interpretar aquello que no ofrece duda alguna. Dicho de otro modo, los criterios hermenéuticos a que alude el artículo 3.1 de Código Civil necesariamente determinan que, a la hora de interpretar cualquier norma, deba partirse del “sentido propio de sus palabras”, de tal suerte que “... no existiendo omisión, ni duda en lo que el precepto ha querido señalar, no puede sostenerse otra interpretación que la que literalmente se fija en el precepto” ya que “siendo claro y terminante el precepto que ha de aplicarse, huelga todo comentario e interpretación, toda vez que la expresión literal es lo primero a tener en cuenta en la interpretación de la norma»* (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de enero de 2013).

152. Respecto al Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, contemplado en el **artículo 10** del Anteproyecto, la AVDC alega que la obligatoria inscripción en un Registro constituye una restricción a la libertad de prestación de servicios, sin que se haya acreditado que contribuya a una mejor protección de los usuarios.

153. Ante tal alegación cabe realizar diversas consideraciones. Por un lado, la Ley 3/2008, de 23 de abril, de ejercicio de profesiones del deporte de Cataluña, y que al ser la primera disposición legislativa en España ha servido de referencia para el Anteproyecto, contiene un Registro de Profesionales del

Deporte. Es muy reveladora su Exposición de Motivos: “Teniendo en cuenta la trascendencia que el ejercicio de las profesiones reguladas por la presente ley tiene en la salud de las personas y las repercusiones negativas que puede provocar un ejercicio no adecuado de las profesiones que se regulan en la misma, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en la Sentencia 194/1998, se considera absolutamente necesario crear el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña y establecer la obligatoriedad de inscribirse en él para ejercer la profesión, salvo en los casos de colegiación obligatoria que regula también la presente ley. Dicho registro, al igual que el resto de registros para el ejercicio de distintas actividades profesionales, es una herramienta necesaria para el seguimiento, la valoración de competencias, la asignación de ámbitos de trabajo, el control adecuado del ejercicio de los profesionales y la asignación de las profesiones a los ocho niveles del Marco Europeo de Cualificaciones, ya que estos profesionales tienen también como destinatario principal de sus servicios un colectivo de personas merecedoras de una especial protección, como son los niños, y las personas de la tercera edad o con problemas de salud”.

154. En otros ámbitos también existen registros de profesionales. Por ejemplo, el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, prevé en su artículo 5.2 la existencia de registros públicos de profesionales como un instrumento de garantía para los profesionales y para los pacientes. Según el Preámbulo del Real Decreto *2el carácter público de determinados datos del registro contribuirá a generar mayor seguridad y confianza en los profesionales de nuestro sistema de salud*”.
155. Tampoco puede pasarse por alto que la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en su artículo 10.2 regula la Ventanilla única y establece que *“a través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:*
 - a) *El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos*

oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional”.

156. La AVDC formula una alegación respecto a la reserva de denominaciones del **artículo 9** y concluye que en actividades profesionales no sometidas a colegiación, la reserva de denominación constituye una reserva de actividad que impide a los profesionales que cumplen los requisitos académicos exigidos (y, en consecuencia, las competencias que garantizan su adecuada prestación) el empleo de la denominación profesionalizante. Para ello, reseña un informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los colegios profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios.
157. Nótese que, en primer lugar, que el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que cita la alegación se refiere a un supuesto diferente; la reserva de denominaciones por los colegios profesionales y añade que *«en profesiones en las que no es obligatoria la colegiación, esta clase de restricción no tienen justificación»*. En este caso no nos encontramos ante una reserva de denominaciones por los colegios profesionales.
158. En segundo lugar, nada impide que los profesionales que cumplan los requisitos de cualificación profesional puedan emplear las denominaciones previstas en la Ley.
159. El **artículo 15** del Anteproyecto se refiere al ejercicio de actividades reguladas sin respetar lo dispuesto en la Ley. Este precepto establece que el ejercicio profesional sin contar con la cualificación profesional correspondiente dará lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable. Y en la **Disposición Final Primera y Segunda** se crean infracciones que pueden llevar aparejadas serias consecuencias pero, según la AVDC, en ninguna de ellas se hace referencia a que la prestación de servicios se haya realizado sin garantía para la seguridad o salud de los usuarios o se hayan producido riesgos en el mismo sentido, de modo que, a juicio de la AVDC, la creación de infracciones por vulneración de requisitos formales (como la falta de cualificaciones o la falta de inscripción en el Registro) genera una barrera injustificada de acceso al

mercado profesional, que puede contribuir a inhibir a profesionales que no pondrían en cuestión en modo alguno la seguridad y la salud de los usuarios a llevar a cabo sus servicios.

160. En el supuesto de que se llegue a la conclusión de que es necesaria esta Ley que supedita el ejercicio de actividades profesionales al cumplimiento de determinados requisitos de cualificación profesional, y así han coincidido los grupos parlamentarios a los largo de estos últimos años en el Parlamento Vasco, es obvio que debe disponerse de un régimen de infracciones y sanciones tendente a garantizar el cumplimiento de la Ley. Una disposición general que no contemple herramientas para sancionar su incumplimiento no pasa de ser una norma voluntarista, carente de fuerza de obligar y propicia a su fracaso. Por tanto, no cabe albergar duda alguna que el régimen sancionador es la garantía de la que se dota toda regulación sectorial y, en principio, es algo irrenunciable y no cabría concebir esta Ley sin un régimen sancionador.

161. También debe significarse que el Anteproyecto de Ley ha tratado de ser respetuoso con el principio de proporcionalidad a la hora de la tipificación de las infracciones, en cuanto que la decisión misma de tipificar una infracción y su calificación abstracta en función de su gravedad deben responder a una necesidad concreta de protección y tener en cuenta, por ende, el bien jurídico atacado y la gravedad de la lesión o del riesgo que la conducta o el hecho comporte. Por parte de la AVDC se manifiesta que en ninguno de los tipos infractores se hace referencia a que la prestación de servicios se haya realizado sin garantía para la seguridad o salud de los usuarios o se hayan producido riesgos. No es necesario anudar la tipificación de la infracción al requisito de que la prestación se haya realizado con lesiones, pues ambas infracciones son, de algún modo, infracciones en las que no se requiere la lesión o el daño, sino que basta con que la conducta sea la puesta en peligro de las garantías de salud y seguridad, la amenaza de dichas garantías.

162. Tampoco podemos compartir la manifestación de la AVDC de que la creación de infracciones genera una barrera de entrada injustificada pues contribuye a inhibir a profesionales a llevar a cabo sus servicios. Sólo hay una

barrera de acceso a quienes pretenden incumplir los requerimientos de la Ley y esta no trata de inhibir a profesionales a que lleven a cabo sus servicios; simplemente trata de inhibir su incumplimiento.

163. También debe formularse objeción a la alegación de la AVDC de que el ordenamiento jurídico tiene reguladas las responsabilidades contractuales y civiles por generación de daños en estos sectores y puede concluirse por tanto que la creación de las infracciones no contribuye a mejorar la protección de los usuarios. En nuestra opinión, no puede confundirse las responsabilidades civiles con las responsabilidades de carácter sancionador. Las responsabilidades civiles, sean contractuales o aquilianas, tienen naturaleza reparadora; tienen como objetivo reparar el daño causado, resarcir a la víctima sólo en el caso de que el daño se haya producido, mientras que el régimen sancionador trata de garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. El *ius puniendi* de la Administración está dirigido al cumplimiento de las leyes, haya o no daños, como consecuencia de las infracciones. Es por ello que casi todas las disposiciones sectoriales o generales en materia sancionadora contemplan la diversidad y compatibilidad de responsabilidades (civiles, penales o sancionadoras administrativas) pues responden a presupuestos y objetivos totalmente diferentes.

164. El **artículo 18.3** del Anteproyecto establece restricciones en la publicidad de los servicios profesionales. Según la AVDC las prohibiciones a la publicidad de los servicios están estrictamente restringidas por la normativa de la competencia en la medida que la publicidad es precisamente una de las herramientas más eficaces para competir en el mercado. A juicio de la AVDC estas limitaciones están adecuadamente reguladas en la normativa de publicidad en materia sanitaria y en la de competencia desleal (en materia de publicidad engañosa). Por tanto, a su juicio, no queda acreditada la limitación de la publicidad.

165. Sobre la anterior alegación debe señalarse que la publicidad en materia sanitaria regula la publicidad en el ámbito sanitario y esta Ley no ordena profesiones sanitarias. Y, por otra parte, la legislación en materia de competencia desleal contempla de modo general la prohibición de publicidad

engañoso desde la perspectiva de la competencia, no desde la perspectiva de protección de la salud de los deportistas que diseña el Anteproyecto de Ley. Asimismo, nótese que las dos únicas leyes vigentes en España que regulan las profesiones propias del deporte, la Ley 15/2015, de 16 de abril, de Extremadura, y la repetida Ley 3/2008, de Cataluña, también contienen restricciones en materia de publicidad. Y, por último, tampoco puede pasarse por alto el Anteproyecto de Ley se ha limitado a transponer una previsión normativa ya aplicable a los profesionales sanitarios en el artículo 44 de la Ley 22/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

166. La AVDC formula una objeción al **artículo 18.4** del Anteproyecto de Ley que, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cualificación mínima de los profesionales que se encuentren dentro del ámbito de la Ley, todos los contratos de servicios con dichos profesionales se formalizarán por escrito y recogerán con claridad la acreditación de la cualificación de dichos profesionales. La AVDC alega que deberá acreditarse si –y en qué medida– estas exigencias normativas (forma escrita de los contratos y la mención a la cualificación profesional) contribuyen a la mejora del interés general.

167. El Anteproyecto de Ley se ha limitado a transponer una previsión normativa ya aplicable a los profesionales sanitarios en el artículo 42 de la Ley 22/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: *“Con el fin de garantizar la titulación oficial de profesionales y especialistas, la calidad y seguridad de los equipamientos e instalaciones, y la sujeción a la disciplina profesional y a los otros requisitos y garantías que se determinan en esta ley, todos los contratos de prestación de servicios sanitarios, así como sus modificaciones, que se celebren entre profesionales sanitarios, entre profesionales y centros sanitarios o entre profesionales y entidades de seguros que operen el ramo de enfermedad, se formalizarán por escrito”*.

168. Por último, la AVDC alega que la **Disposición Adicional Sexta** del Anteproyecto, que establece que todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en el mismo, con presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas, deben acreditar la competencia en primeros auxilios. A juicio de la AVDC la legislación educativa ya establece los requisitos legales de

acceso y ejercicio a la profesión de profesor o profesora de Educación Física, por lo que, en su opinión, no procede establecer requisitos añadidos.

169. Respecto a esta alegación de la AVDC cabe formular varias objeciones. En primer lugar, no fundamenta la AVDC en qué precepto legal se basa para concluir la imposibilidad de establecer requisitos adicionales para el acceso y ejercicio de la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física. Buena prueba de que sí es posible que la Ley 3/2008, de 23 de abril, de ejercicio de las profesiones de Cataluña, establece en su artículo 1.7 que *“todos los profesionales en activo que ejerzan tareas reguladas por la presente ley deben tener competencias de asistencia sanitaria inmediata, referidas a la reanimación cardiopulmonar. En caso de que la titulación de acceso a la profesión no permita acreditar dicha competencia, la acreditación debe obtenerse en centros autorizados por la Generalidad”*. También el artículo 13.2 de la reciente Ley 15/2015, de Extremadura establece una previsión análoga.

170. Tampoco hay que olvidar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Pleno de 30 de enero de 2014, ya ha reiterado de forma contundente que *“en todo caso, las Comunidades Autónomas, por su parte, podrán establecer criterios adicionales de titulación y experiencia”*.

V.- INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.

A la vista del informe realizado por la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco se realizan las siguientes modificaciones:

171. La Comisión considera que convendría completar la información unida al expediente, incorporando por un lado datos actualizados sobre la situación actual de los profesionales potencialmente afectados por la norma y sobre la posible incidencia de la actuación de estos en la salud de quienes practican deporte, así como sobre los potenciales efectos económicos de la iniciativa para sus destinatarios y destinatarias. Respecto a ello hay que manifestar que ya se ha elaborado un estudio denominado *“ESTUDIO DE LA SITUACIÓN LABORAL Y DE CUALIFICACIÓN DE LOS RRHH EN EL DEPORTE”*, de Enero de 2016,

de 87 páginas de extensión, realizado por una consultora externa, que, aunque efectivamente debería haber sido previo, en realidad será muy útil de cara a la aplicación práctica de la ley.

172.En cuanto al Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, previsto en el artículo 10 del Anteproyecto, la Comisión considera que su configuración como requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones debe ser considerado como un régimen de autorización. Asimismo, en el párrafo 190 de su informe, la Comisión afirma que *“atendiendo al objetivo perseguido por el anteproyecto –la salud y la seguridad- el legislador puede introducir un registro de estas características”*. No obstante lo anterior, la Comisión manifiesta que se precisa de una reflexión específica respecto de que sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, porque no existan otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado y por ello somete al órgano promotor la posibilidad de valorar si para conseguir los objetivos del anteproyecto *“no resultaría suficiente con establecer una comunicación previa o, en su caso, una declaración responsable, unida a un registro de carácter informativo”* y ello por constituir una medida menos restrictiva que la prevista en el anteproyecto y más acorde, a su juicio con los principios que pretende implantar la Directiva de Servicios. Se acepta la sugerencia de la Comisión y el artículo 10 elimina la inscripción registral como requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones a modo de control previo o *ex ante* del cumplimiento de los requisito, y se sustituye ese modelo de Registro por un régimen de declaración responsable, manteniendo el Registro, que tendrá un carácter informativo.

173.Respecto al artículo 1, relativo al objeto y ámbito de aplicación, la Comisión considera que debería realizarse un esfuerzo en determinar cuándo debe considerarse que los servicios profesionales son desarrollados en la Comunidad Autónoma *“de forma habitual”*, dado que son varias las posibilidades interpretativas. No se considera necesaria su modificación, pues el Parlamento Vasco ha venido empleando sin tacha u objeción alguna un adverbio - *“principalmente”*- cuando se ha referido precisamente al ámbito subjetivo de aplicación de la legislación vasca a las fundaciones, asociaciones, etcétera. Los términos *“principalmente”*, *“habitualmente”* y análogos son empleados de forma reiterada por el legislador.

174. Respecto al artículo 9, la Comisión considera que el incumplimiento de la obligación de reserva de denominaciones debería tener reflejo en el régimen sancionador de la LDPV. Se ha atendido tal recomendación de la Comisión en la Disposición Final Segunda.
175. La Comisión recomienda suprimir algunos apartados del art. 11 depurando la lista de deberes de los profesionales del deporte, debiéndose limitar el artículo, a juicio de la Comisión, a enunciar aquellos en los que se aprecie conexión, aunque sea remota, con los objetivos perseguidos por la norma. Concretamente, la Comisión recomienda la supresión de los apartados f), d), q), s), t), v), w), x). Atendiendo a la recomendación de la Comisión se han suprimido tales apartados.
176. La Comisión somete al promotor la conveniencia de reconsiderar los extremos efectos que pueden derivarse de la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta sobre el incumplimiento del deber de obtener la cualificación en primeros auxilios. No se considera oportuna su modificación pues la Comisión reconoce que la exigencia de tal formación para los profesionales que tutelan o dirigen a quienes tutelan o dirigen a quienes practican algún deporte *“puede considerarse coherente con el objetivo último que persigue la norma –la salud y seguridad de las personas- y no parece desproporcionada”*. A juicio del órgano promotor las consecuencias previstas en la Disposición Transitoria Cuarta ante la falta de cualificación no pueden considerarse extremas o desproporcionadas por cuanto el bien jurídico protegido es la salud y la seguridad de las personas.
177. Respecto al artículo 16, que se refiere al ejercicio de las profesiones sin amparo en la Ley, y que dispone que tal ejercicio dará lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable, considera la Comisión que, dejando al margen la profesión de profesor o profesora de educación física, el hecho de otorgar protección penal en el anteproyecto parece excesivo para el resto de las profesiones contempladas, siendo suficiente la protección que ofrece el ámbito administrativo. Este órgano promotor, aunque el Anteproyecto no otorga protección penal, pues realiza un reenvío a la legislación estatal correspondiente, ha suprimido la referencia al ámbito penal.

178. Respecto de la Disposición Adicional Quinta, relativa a la formación específica, la Comisión considera que esa habilitación precisa de mayor concreción. A juicio de este órgano promotor, en la medida que la casuística de formación específica es inabarcable y compleja, considera precisa una amplia habilitación al Gobierno Vasco al objeto de que se concrete a través del desarrollo reglamentario
179. Según la Comisión la Disposición Transitoria Primera, sobre el ejercicio profesional sin cualificación requerida, precisa de diversas clarificaciones. En primer lugar, se señala que el párrafo 3 atribuye a los departamentos del Gobierno Vasco competentes la implantación de unos procedimientos para acreditar la disposición de las competencias necesarias a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en aparente contradicción con lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta, que atribuye al Departamento del Gobierno Vasco en materia deportiva la competencia para determinar los supuestos así como las condiciones y procedimientos para acreditar la cualificación. Se ha subsanado tal contradicción.
180. A juicio de la Comisión otro ejemplo de falta de claridad es el párrafo 4 de la Disposición Transitoria Primera, que se refiere a que el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá dejar sin efecto la habilitación contemplada en la Disposición Transitoria citada por razones de riesgo grave y directo para la salud y seguridad de las personas. Según la Comisión, hay que clarificar si tales personas han sido habilitadas o si tales personas “nunca habrían estado habilitados” pues en el primer supuesto nos encontraríamos ante la revocación de un acto declarativo de derechos para cuya revisión la Administración debe acudir a las causas y vías previstas en la legislación sobre procedimiento administrativo común. A juicio de este órgano promotor nos encontramos ante un supuesto de excepción a la habilitación general para el ejercicio profesional, no ante la revocación por la Administración de un acuerdo suyo. Tratándose de un mandato del Parlamento a la Administración para que deje sin efecto la habilitación general en determinados supuestos, no se encuentra razón para la modificación.

181. También formula la Comisión una observación respecto al citado párrafo 4 pues la habilitación al Departamento del Gobierno Vasco para dejar sin efecto la habilitación – “*riesgo grave y directo*” para la salud y seguridad de personas-cuenta con un excesivo margen de apreciación. A juicio del órgano promotor no cabe incluir una relación de tales actividades pues esa congelación del rango normativo impide o dificulta las sucesivas adecuaciones a las diversas situaciones que se puedan ir planteando.
182. La misma objeción formula la Comisión respecto al párrafo 5 y el criterio de este órgano promotor acaba de ser reflejado en el párrafo anterior.
183. Respecto al párrafo 6 de la Disposición Transitoria Primera la Comisión vuelve a plantear la reconsideración sobre las consecuencias del incumplimiento del deber de acreditar la cualificación profesional correspondiente. Sobre tal observación ya se ha reseñado la posición de este órgano promotor.
184. Respecto de la Disposición Transitoria Sexta, la Comisión estima que sería suficiente establecer el plazo en el cual las distintas federaciones han de adaptar su reglamentación o aprobar las disposiciones necesarias. El resto del precepto, de naturaleza coercitiva, puede resultar superfluo. Atendiendo a la recomendación de la Comisión se suprime dicho párrafo.
185. Respecto a la Disposición Transitoria Séptima, que se refiere a los contratos vigentes a la entrada en vigor de la Ley y que hayan suscrito las empresas con las entidades del sector público, la Comisión la considera innecesaria pues la exigencia de las cualificaciones profesionales se produce a partir del 1 de enero de 2019 y las empresas dispondrían de tiempo para acomodarse a las nuevas exigencias. Atendiendo a la recomendación de la Comisión se suprime tal Disposición.
186. Disposiciones finales primera y segunda. En estas disposiciones se incluyen nuevas infracciones que se incorporan a los artículos 127 y 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. A juicio de la Comisión, tanto las infracciones contenidas en el artículo 127.k como en el artículo 128.h están descritas de manera “*precisa y clara*”. Sin embargo, la genérica referencia en el artículo 128.i a diversos incumplimientos de artículos de la Ley no parece

muy adecuada pues posibilita una amalgama de posibles infracciones que difícilmente puede conciliarse con la claridad y precisión exigibles en el derecho sancionador, y, a su juicio, sería preciso que la tipificación y calificación de las infracciones que se pretenden introducir en ese apartado concreto se determinaran con mayor certeza y precisión. Este órgano promotor, atendiendo a las indicaciones de la Comisión, ha procedido a precisar mejor las citadas infracciones siguiendo, en parte, el criterio de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura

187.Finalmente, por parte de la Comisión se realizan una serie de consideraciones de técnica legislativa que se incorporan al texto en su totalidad.

Fdo. JON REDONDO LERTXUNDI
DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTES

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **22/02/2016 16:34:48**
Validación de la firma:  **Correcta**

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZ JASOTAKO ALEGAZIOEN ETA EGINDAKO TXOSTENEN BALIOESPENA

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. eta 9. artikuluetan ezarritakoari jarraituz, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak egindako aurreproiektua haren eraginpean egon daitezkeen erakundeei bidali zitzaien, entzunaldiko eta informazio publikoko izapidea betetzeko.

Horrez gain, 2015eko otsailaren 2an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 2015eko urtarrilaren 23ko Ebazpena argitaratu zen, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektua jendaurrean jartzen zuena.

Jendaurrean jartzeko eta alegazioak aurkezteko epea amaituta, ondoren adierazten diren erakundeen alegazioak jaso dira, eta ondoren balioetsi egingo dira:

I.- KIROL EKIPAMENDU ETA ZERBITZUEN ENPRESA AHOLKULARIEN GIPUZKOAKO ELKARTEAREN ALEGAZIOAK.

1. Juan Ignacio Moyua Ayala jaunak 2015eko otsailaren 25ean hainbat alegazio aurkeztu zituen Kirol Ekipamendu eta Zerbitzuen Enpresa Aholkularien Gipuzkoako Elkartearen izenean, zeinak, beste hainbat eginkizunen artean, elkarteko kideak ordezkatzen dituen.
2. Elkarateak aurkeztu duen lehen alegazioa **10. artikuluari** lotuta dago, hau da, elkargoko kide egiteari eta Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari buruzkoa dena. Haren ustez, profesionalen elkargoak desagerrarazteko legegintza-joerak kontuan izan beharko lirarteke, edo bestela, gutxienez ere, elkargo horiek lanbide-jarduera gutxi batzuetara mugatu.

3. Gure ustez, alegazio hori ez da kontuan izan behar hainbat arrazoi direla medio. Lehenik eta behin, profesionalen elkargoak desagerrarazteko legegintza-joera horren berririk ez dugu. Azken hamarkadako estatuko nahiz autonomia-erkidegoetako aldizkari ofizialak behar bezala aztertzen badira, ikus daiteke profesionalen elkargo ugari sortu direla lehendik elkargo-korporaziorik ez zuten lanbideei dagokienez. Gauza desberdina da estatuko gobernua 2013. eta 2014. urteetan lantzen aritu den Profesionalen Zerbitzu eta Elkargoen Legearen Aurreproiektuaren zirriborroei dagokiena, bertan nahitaez elkargoa egin beharreko lanbideen murrizketa biltzen baitzen. Hala eta guztiz ere, gobernuak legegintza-ekimen hori erretiratzea erabaki du. Gainera, kontuan izan behar da jendaurrean jarritako Aurreproiektuaren 10. artikulua argi uzten duela baldintza hori soilik eska daitekeela *“estatuko kasuan kasuko legeek hala ezartzen badute”*. Hau da, orain aztergai dugun Aurreproiektua ez da derrigorrez elkargoan izena ematea ezartzen duena, hori estatuaren legegintza-eskumena baita. Era berean ez dirudi bidezkoa xedapen hori ezabatzea, Kirol-arloko Profesionalen Erregistroa eratzen baitu, eta hori Legearen ardatzetako bat da eta Legea betetzen dela kontrolatzea ahalbidetuko du. Are gehiago, azpimarratu behar da Espainian kirol-arloko lanbideak arautzearen alorrean dagoen lehen legegintza-xedapenak, Kataluniako 3/2008 Legea, Kirol-arloko Profesionalen Erregistro bat ere barnean hartzen duela. Azkenik, ez da aipatu gabe utzi behar beste eremu material batzuetan ere profesionalen erregistroak badaudela. Adibidez, 640/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, Osasun Langileen Estatuko Erregistroa arautzen duena. Azaroaren 21eko 44/2003 Legeak, lanbide sanitarioen antolamenduari buruzkoak, 5.2 artikuluan aurreikusten du profesionalen erregistro publikoak egotea, profesionalentzako eta pazienteentzako berme-tresna bat bezala. Errege Dekretuaren hitzaurrearen arabera, *“erregistroko datu jakin batzuen izaera publikoak gure osasun-sistemako profesionalengan segurtasun eta konfiantza handiagoa sortzen lagunduko du”*.
4. Elkarreak era berean alegazioak formulatu ditu **Laugarren Xedapen Gehigarriari** eta **Zazpigarren Xedapen Gehigarriari** dagokienez. Elkarreak adierazi du gehiago kezkatzen duela Legearen erregelamendu-garapenak, haren aplikazio praktikoak, Legeak berak baino, izan ere, Elkarrea Aurreproiektuak dituen zio eta xedeekin erabat bat baitator. Erakunde alegatzaileak adierazten du bere kezka Legearen aplikazioak ekarriko duen kostu ekonomikoa dela, baita kostu hori azkenean nork hartuko duen bere gain ere, Elkarrea osatzen duten enpresetan kirol-monitore

eginkizunak betetzen dituzten langileen % 60k baino gehiagok ez dituztelako Aurreproiektuak ofizialtzat ezartzen dituen titulazioak.

5. Elkartearen ustez xedapen gehigarri horiek kirolaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari aukera ematen diote prestakuntza akademiko ofizialez bestelako bideen bitartez eskuratutako lanbide-gaitasuna egiaztatzeke formula desberdinak aurreikusteko. Elkartea oso kezkatuta dago kirol-monitoreen eremuan lanbide-kualifikazioak eskatzeak izan dezakeen eraginarekin, izan ere, bere ustez legeak eskatzen dituen titulu ofizialak edukitzeak ez baitakar, berez, titulu ofizial horiek dituzten monitoreak beren kirol-ekipamenduetan zerbitzuak egiteko gaituta daudenik, eskaintzen dituzten lanpostuek beste kualifikazio batzuk eskatzen dituztelako. Era berean, proposatzen du Legea onartu aurretik kirol-arloko eskumena duen sailak aipatutako titulu eta ziurtagiri ofizialez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzeke kasu, baldintza eta prozedurak ezar ditzala.
6. Aurrekoa adierazi ondoren, Elkarreak berez ez du alegazio zehatz bat formulatzen xedapen gehigarri horiei buruz, izan ere, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren esku jartzen da Legea onartu aurretik etorkizuneko erregelamendu-garapenaren aurreikuspenari ekiteko, kontuan izan beharko diren eta guztiz bat gatozen puntu kritikoetako batzuk azalduz. Egia esan, alegatzaileek adierazten duten bezala, Lege honen erregelamendu-garapena oso garrantzitsua da eta Legearen aplikazio praktiko egokia bermatzeko ahalegina egin beharko da.
7. **Lehen Xedapen Gehigarriari** dagokionez, Elkarreak hausnarketa berbera egiten du eta sektoreko profesionalen gaikuntza-prozesuaren diseinuan laguntzeko eskaintza egiten du. Era berean, proposatzen du 5. zenbakiari paragrafo bat gaineratzea Langileen Estatutuan aurreikusten den ondoren agertutako trebetasunik ezaren kasua gertatzen dela kontuan ez izateko Administrazio Publikoekin indarrean dauden kontratetan zerbitzuak egiten dituzten profesionalen kasuan, eta proposatzen du haien erantzukizuna izatea administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoan agirietan egoera horiei buruz ohartaraztea, eta era berean haien erantzukizuna izatea balizko kaleratze bati aurre egin behar izanez gero beharrezko gastuak ordaintzeko behar adinako partida ekonomikoa zuzkitzea lehiaketari.

8. Alegazio honetan Elkartek hainbat gai nahasten ditu, eta horiei hainbat erantzun eman behar zaizkie. Eusko Jaurlaritza une honetatik aurrera dagoeneko lanbide-eginkizunak garatzen ari diren langileen baliozkotzean lanean hasteko proposamenari dagokionez ados gaude iradokizun horrekin, izan ere, Gazteria eta Kirol Zuzendaritza dagoeneko gai hori lantzen ari baita eta azterlan bat kontratatu da. Kirol-zerbitzuetako enpresek Administrazio Publikoekin Legea indarrean jarri aurretik sinatutako administrazio-kontratueta kualifikazioen eskakizuna aplikatzekoa ez izateko xedapen iragankor bat gaineratzeko komenigarritasunari dagokionez ez da inolako eragozpenik jartzen, baina Elkartek proposatu duenaz bestelako idazkuntza batekin, hala idazkuntzako nola funtsezko arrazoiak direla medio, izan ere, ez baita nahastu behar gai hori ondoren agertutako trebetasunik ezagatik lan-kontratua amaitzeari buruzko lan-legeriarekin.
9. **Bigarren Xedapen Iragankorrari** dagokionez, sektoreetako bakoitzean profesional kualifikatuen egungo egoera aztertu beharrari eta profesional kualifikatuen gabezia hori enpresaz bestelako zirkunstantzien ondorio noiz den eta enpresek beren erantzukizunak alde batera uztearen ondorio noiz den aztertu beharrari buruzko hausnarketa berdina egiten du.
10. Dagoeneko adierazi da *ut supra* Gazteria eta Kirol Zuzendaritza dagoeneko lanean ari dela sektoreko langileen egoera ezagutzeko, legearen ezarpen progresiboa egin ahal izateko. Aurreproiektuak agerian uzten duen ezaugarrietako bat profesional kualifikaturik ezaren balizko egoerarekiko sentsibilitatea da, eta hori dela medio legearen aplikazio progresiboa aurreikusten du, hainbat neurriekin osatua, adibidez kualifikazio txikiagoa duten profesionalen gaikuntza.
11. Elkartek, era berean, Legea ez betetzeagatiko administrazioako arau-hausteei buruzko **Azken Xedapenetatik Lehenengoari** eta **Azken Xedapenetatik Bigarrenari** dagokienez, honako proposamen hau egiten du: zehapen-araubidea dela medio, profesional kualifikatuen premia larria dagoen kasuetan, premia hori behin-behineko izaeraz estali dezakete –adibidez aldi baterako ezintasuneko egoeretan– eskatzen direnak baino txikiagoak diren prestakuntzak dituzten langileek.

12. Gure ustez, sektoreko enpresek, profesional kualifikatuen kopuru nahikoa baldin badago, egoera jakin batzuetan gerta daitezkeen gorabeherak edo eskariak konpontzeko tresnak zuzkitu beharko dituzte. Giza baliabideak kudeatzeko tresna mota horren adibide bat, are gehiago gazteen segmentuan dagoen langabezia handia kontuan izanik, langile kualifikatuekin ordezkpenak egiteko lan-poltsak dira. Osasunari lotutako beste lanbide batzuetan pentsaezina da –adibidez lanbide sanitarioetan– premia horiek indarrean dagoen legeriak ezarritako kualifikaziorik ez duten profesionalekin estaltzea. Aurreproiektuak hainbat irtenbide arbitratzen ditu profesional kualifikatu nahikoak ez dauden kasuetarako. Adibidez, ez badago behar adina profesionalik dagokion eremu materialean, Legeak berak aurreikusten du kualifikazio txikiagoa duten pertsonen gaikuntza.

II.- EUSKAL AIRE KIROL FEDERAZIOAREN ALEGAZIOAK.

13. José Antonio Lejarza Rementeria jaunak 2015eko otsailaren 23an alegazioak aurkeztu ditu Euskal Aire Kirol Federazioaren izenean eta ordezkaritzan.
14. **4. artikuluko** 4., 5. eta 6. zenbakiei dagokienez, Federazioak komenigarritzat jotzen du nolabaiteko arriskua duten kiroletarako eskatzen den prestakuntza espezifikoak dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako kirol-teknikariaren hasierako zikloa izan behar duela beti, beste titulu akademiko batzuk (Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako gradua edo lizentziatura, eta abar) dituen ala ez kontuan izan gabe. 4. artikuluko 6. zenbakiari dagokionez, Federazioak interpretatzen du ez dela behar adina argi geratzen a, b eta c letratan aipatzen diren titulazio akademikoak artikuluko beraren 4. zenbakian eskatzen diren tituluekiko alternatiba direnik.
15. Federazio alegatzailearen oharrekin bat gatoz funtsean, eta gainera, alegazioa aurkeztu baino lehen, idazkuntza-taldearen lan-bileretan hainbat doikuntza egin behar zirela argi geratu zen. Printzipioz, arrazoigarria dirudi natura-ingurunean nolabaiteko arriskua duten jardueretan 4. artikuluko a, b eta c letratan aurreikusitako titulazioak (Dagokion kirol-modalitate, -espezialitate edo -diziplinako kirol-teknikariaren tituluko erdi mailako hasiera-zikloaren ziurtagiria, baita titulu hori eta goi-mailakoa ere) dituztenek ere lanbidea bete ahal izatea). Era berean,

alegazioarekin bat etorri 6. zenbakian adieraziko da nolabaiteko arriskuko kirol-jardueren eremuan lanbidea betetzeko, 6. zenbakiko a, b eta c letratan aurreikusitako titulazioez gain, garatu beharreko jardueraren prestakuntza espezifiko beharrezkoa izango dela, modalitatearen hasiera-zikloa nahitaez izan behar ez duena, ohartu behar baita natura-ingurunean nolabaiteko arriskua duten hainbat jardura daudela –eta etorkizunean gehiago egon daitezkeela– kirol-modalitate, -espezialitate edo -diziplina gisa katalogatuta ez daudenak.

16. Azkenik, erregelamendu-garapenari begira, eskatzen da behin-behineko gaikuntzetarako, esperientziaren bitartez kualifikazioak egiaztatze eta abarretarako prozedurak eraginkortasunez artikulatzeko.
17. Euskal Aire Kirol Federazioaren kezkarekin bat gatoz, jakin badaki Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren barnean Legea etorkizunean ezartzeko prozesuan lan egiten ari direla dagoeneko.

III.- ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ALEGAZIOAK.

18. Carmen Gutiérrez Fraile andreak 2015eko otsailaren 24an hainbat alegazio aurkeztu zituen, Arabako Foru Aldundiaren izenean, jendaurrean jarritako aurreproiektuari dagokionez.
19. Aldundiak aurkezten duen lehen alegazioa eskola-adinean dauden kirolariekin jarduerak egiteko prestakuntzari buruzko **Hamargarren Xedapen Gehigarriari** dago lotuta. Horri lotuta, adierazten du gaur egun eremu horretan titulu ofizialak edo ziurtagiriak dituzten pertsonen urritasun argia dagoela. Gaur egun, Araban eskola-kiroleko kanpainan parte hartzen duten monitore edo entrenatzaileen % 20k bakarrik daukate titulazio akademikoren edo kirol-titulazioren bat. Haren ustez, Legean adierazten den kualifikazioa eskatzeak eskola-adineko neska-mutil ugari eskola-kiroletik kanpo uztea ekarriko luke tituludunik ezaren ondorioz. Horregatik Eusko Jaurlaritzari konpromiso bat eskatzen zaio eskola-adineko kirolaren eremuan prestakuntza-ekintza espezifikoak gaitzeko eta hiru foru-aldundiak duela bost urtez geroztik irakasten ari diren prestakuntza-ekintzen baliozkotzeak eta homologazioak sustatzeko.

20. Aldundiak adierazitako kezkarekin bat gatoz, eta horri lotuta adierazi behar da Aurreproiektuak hainbat neurri aurreikusten dituela Legearen ezarpenarekin sor daitezkeen arazoak saihesteko. Lehenik eta behin, jendaurrean jarritako zirriborroak adierazten zuen lanbide-kualifikazioak 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatuko zirela, baina eskaera hori, gizarte-agenteekin hainbat bilera egin ondoren, geroratu egingo da boluntarioentzat, horixe baita eskola-kirolaren eremuan nagusiki diharduen kolektiboa, 2020ko urtarrilaren 1era arte, Azken Xedapenetatik Seigarrenak dioenaren arabera. Bigarren, beharrezko kualifikazioak dituzten profesionalak falta direnean, prestakuntza ofizialik ez dagoenean edo eremu berriak sortzen direnean, Bigarren Xedapen Iragankorrak aurreikusten du kualifikazio txikiagoa edo antzeko beste prestakuntza-mota bat duten pertsonak gaituko direla behin-behingo. Hau da, gaikuntzaren tresna aurreikusten da. Era berean, Legean zehar aurreikusten da titulu eta ziurtagiri ofizialez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatuko direla.
21. Bigarren alegazioa **18. artikuluari** buruzkoa da. 5. zenbakiak adierazten duenez, ikuskatze-lanak egitea eta lege honek ezartzen dituen xedapenak betetzen direla kontrolatzea, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 119. artikulua ezarritakoari jarraituz, Kirol Ikuskaritzari dagokiola. Arabako Foru Aldundiaren ustez, eskola-eremurako lanbide-kualifikazioen ikuskatze-lanak, haren iritziz orain arte foru-aldundien eskumena izan denak, beren gain hartu ezingo duten etorkizuneko karga ekarriko du.
22. Aldundiak ikuskaritzaren gai honi buruz duen kezkak erantzun erraza du: eskola-kirolaren eremuan titulazioen alorreko ikuskatze-lana ez dagokio Arabako Foru Aldundiari. Aurreproiektuaren 18.5 artikulua aipatzen duen indarrean dagoen 14/1998 Legearen 119. artikulua honako hau xedatzen du: *“Eusko Jaurlaritzaren barruan kirol arloko eskumenak dituen sailak beteko ditu kirol-ikuskatze eginkizunak, eta kirol arloko lege-xedapenak eta araudi-xedapenak betetzea kontrolatuko du, batez ere kirol-zentroei eta kirol-titulazioei buruzko xedapenak betetzea”*. Hau da, ez dagokie foru-aldundiei ikuskatze-lanak egitea, baizik eta Eusko Jaurlaritzan kirolaren alorrean eskumena duen sailari.

23. Hirugarren alegazioa, lehen laguntza emateko gaitasunari buruzko **Seigarren Xedapen Gehigarriari** dago lotuta. Bere ustez, kirol-arloko lanbideak garatzen dituzten pertsona guztiek ezartzen diren egunerako lanbide-kualifikazio hori egiaztatzea ezinezkoa da.
24. Alegazio horri buruz adierazi behar da, hain zuzen ere Arabako Foru Aldundiak adierazitako arrazioa dela medio, lanbide-kualifikazioen exijentzia geroratu egin dela, profesionalentzat, 2019ko urtarrilaren 1era arte, eta zerbitzuak boluntariotza-erregimenean egiten dituztenentzat 2020ko urtarrilaren 1era arte. Ordu gutxiko prestakuntza bat denez gero, arrazoizkoa dirudi gaitasun hori data horietatik aurrera exijitu ahal izatea.
25. Kirol-monitore lanbideari buruzko **4. artikuluko 4. zenbakiari** dagokionez, lanbide horretatik parte-hartzeko ibilbideko lehiaketak salbuestea proposatzen da, entrenatzailearen eginkizunekin bat datorrelako.
26. Arabako Foru Aldundia beharbada ez da konturatu Aurreproiektuaren 5. artikuluko 2. zenbakiak Entrenatzaile-lanbidearen barnean eskola-eremuko kirolari eta taldeekin bete beharreko eginkizunak biltzen dituela kirol edo diziplina anitzeko lehiaketetan parte hartzen duten bitartean.
27. Arabako Foru Aldundiak alegazio bat formulatzen du era berean kirol-monitore lanbideari buruzkoa den **4. artikuluko 3. zenbakiari** dagokionez. Proposatzen da araubide bereziko kirol-irakaskuntzetako I., II. eta III. mailetako teknikariak gaitzea lanbide hori ikasi eta irakasteko jardueretan edo izaera orokorreko edo kirol edo diziplina anitzeko jardueretan betetzeko, zeinak ez baitira berariaz zuzenduko kirol-arloko modalitate edo diziplina jakin batera, izan ere, bere ustez, prestakuntza horien bloke komunek eremu horretan lan egin ahal izateko edukiak biltzen baitituzte.
28. Gure ustez, ez da bidezkoa aurkeztu den alegazioa legearen testuaren barnean hartzea. Kirol-irakaskuntzak arautzen dituen 1363/2007 Errege Dekretuak 1. artikuluan argi ezartzen du irakaskuntza horiek ikasleak kirol-modalitate edo -espezialitate bakar batean gaitzen dituela. *“Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 63.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, kirol-*

irakaskuntzen helburua honako hau da: ikasleak kirol-modalitate edo kirol-espezialitate bati lotutako lanbide-jarduerarako prestatzea, eta prestatutako teknikariak lan- eta kirol-munduaren bilakaerara eta herritartasun aktibora egokitzeko aukera erraztea.” Bestalde, kirol-irakaskuntzen bloke komunek izaera orokorreko edukiak dituzte, hala nola: “lehen laguntzak”, “antolaketa eta legeria”, “kirola eta generoa”, “kirol egokitua”, “kirol-entrenamenduaren oinarriak”, “kirol-ikaskuntzaren oinarriak”, eta abar, baina ez daukate diziplina anitzeko edo kirol anitzeko irakaskuntzan jakintzak eskuratzea sustatzen duten edukirik, adibidez Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko Goi-mailako Teknikariaren honako irakasgai hauen kasuan bezala: tresna bidezko kirol-ekintza fisikoak (180 ordu); taldeko kirol-ekintza fisikoak (315 ordu); kirol-ekintza fisiko indibidualak (220 ordu). Arabako Foru Aldundiak bigarren xedapen iragankorrak ezartzen duen moduan legearen balizko aplikazio progresibo bati begira egindako proposamenaren balioespena guztiz desberdina da.

29. Kirol zuzendari lanbideari buruzko **6. artikuluko 6. zenbakiari** dagokionez, Arabako Foru Aldundiak proposatzen du Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa dutenak ikastetxeetatik kanpo eta ikastorduetatik kanpo egiteko ere programatzen diren eskolako kirol-jarduerak sustatu, planifikatu, programatu, koordinatu, ebaluatu edo zuzentzeko gaitzea.
30. Ez zaio inolako objekziorik egiten alegazio horri, izan ere dagoeneko Aurreproiektuari gaineratu baitzaio, eta horrela, eginkizun haiek egin ahal izango dituzte ikastetxeetan ikastorduetatik kanpo edota beste erakunde batzuetan, betiere ikasleen adinak bere irakaskuntza-kualifikazioarekin bat badatoz. Are gehiago, alegazio hori 4. eta 5. artikuluetara hedatu behar da.

IV.- KIROL MANAGEMENT SLUren ALEGAZIOAK.

31. Kirol-zerbitzuetan espezializatuta dagoen KIROLO MANAGEMENT SLU enpresak, 2015eko otsailaren 25eko datarekin eta haren ordezkari Eduardo González González jaunaren bitartez, idazki bat aurkeztu du jendaurrean jarritako Aurreproiektuaren inguruko hainbat kontsiderazioarekin.

32. Aipatu enpresak proposatzen du Lege horretan bilduta dagoen boluntariorik erregimenean egindako jardueri eta antzeko jardueri buruzko **Hirugarren Xedapen Gehigarria** aldatzea. Haren ustez, eskola-kirolaren edo oinarritzko kirolaren eremuan gehiengo osatzen duen boluntarioen kolektiboari baldintza berberak exijitzea ez da egokitzen Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-errealitatera. Uste du kolektibo horren ezaugarri berezietako bat dela gazte jendea dela, baita adingabeak ere, normalki ikasturte edo denboraldi bat edo zertxobait gehiago irauten dutenak, eta kasu gehienetan jarduera fisikora edo kirolera profesionalki dedikatzeko borondaterik ez dutenak. Era berean, KIROL MANAGEMENT sozietateak adierazten du neurri horrek oso ondorio larriak eragingo dizkiola kirol-sistemari, adibidez kirolgileen, jardueren, egituren eta abarren beherakada, langile kualifikatuen kontratazioari aurre egiteko kuota-igoera gurasoentzat, klubentzat eta abarrentzat oso garestia izan daitekeelako, langile kualifikatuek jarduera ez baitute boluntario-erregimenean egingo.
33. Gure ustez, lege honen justifikazioa honako honetan datza: *“ezin uka daiteke kirol-arloko lanbide batzuk kirolarien osasunean eta segurtasunean eragiten dutela”*. Administrazioek zaindu behar dute eskola-kirola edo kirol federatua bezalako eremuetan modu antolatu eta egituratuan garatzen diren jarduerak osasun- eta segurtasun-termino berberetan garatzen direla, jarduera lan-erregimenean edota boluntariorik-erregimenean garatzen den kontuan izan gabe. Horrela, eta egoera beste sektore batera estrapolatuz, ez luke inork ulertuko pertsona batek Gobernu Kanpoko Erakunde batean mediku-eginkizunak betetzea dagokion kualifikaziorik gabe, eginkizun hori boluntario moduan egiten badu ere. Kirol-erakundeetan boluntario gisa diharduten pertsonen prestakuntzarik ez eskatzeak edota maila txikiagoko prestakuntza eskatzeak aditzera emango luke kualifikazio-eskakizunak, eta beraz legea bera ere, ez liratekeela beharrezkoak izango, edota aurreproiektuan ezarritako kualifikazioak gehiegizkoak direla kirolean diharduten pertsonen benetako beharrezkoak. Dena dela, aipatu konpainia alegatzaileen kezkarekin funtsean bat gatozenez gero, kualifikazioa duten behar adina monitore eta entrenatzaileak ez dagoen kasuan Aurreproiektuak Bigarren Xedapen Iragankorrean biltzen duen formulak maila txikiagoko prestakuntza duten pertsonen gaikuntzaren bitartez arazoa konpontzeko aukera emango luke.

V.- BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ALEGAZIOAK.

34. 2015eko otsailaren 23an, Maitane Leizaola Zulueta andreak, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta ordezkaritzan, hainbat alegazio aurkeztu dizkio Aurreproiektuari.
35. Foru Aldundiak egiten duen lehen kontsiderazioa da legearen aplikazioa gauzatu ahal izateko beharrezkoa izango dela egungo egoeraren berri izatea eta, horretarako, besteak hainbat ekintzaren artean, kirolaren eremuko lan- eta kualifikazio-egoeraren diagnostiko bat egitea, gaur egun zenbat boluntario dauden, sektorean zenbat profesionalek lan egiten duten eta abar jakiteko.
36. Iradokizunarekin bat etorritik, Gazteria eta Kirol Zuzendaritza gai horri lotuta lanean ari da dagoeneko, benetako egoera xehetasun handiagoarekin ezagutzeko eta legea modu egokian ezarri ahal izateko.
37. Bizkaiko Foru Aldundiak adierazten du, legearen aplikazioari eta bere erregelamendu-garapenei dagokienez, 2018ko urtarrilaren 1eko epea betetzea ezinezkoa izan daitekeela.
38. Aldundiaren iradokizunarekin ere bat gatoz eta, txosten honetan *ut supra* adierazten bezala, hain zuzen ere Aldundiak adierazitako arrazoia dela medio, lanbide-kualifikazioen exigentzia geroratu egin da, profesionalentzat, 2019ko urtarrilaren 1era arte, eta zerbitzuak boluntariotza-erregimenean egiten dituztenentzat 2020ko urtarrilaren 1era arte.
39. Boluntarioei profesionalen lanbide-kualifikazio berberak exijitzeari buruzko gai garrantzitsuan, kontuan izanik exigentzia horrek arazoak eragin ditzakeela, hainbat alegatzailek ohartarazi duten bezala, foru aldundiaren ustez bi kolektiboek eginkizun berberak eta erakunde berberetan egiten dituztenez gero, profesionalei eta boluntarioei egin beharreko kualifikazio-exigentziek eta exigentzia-epeek berberak izan behar dute. Horretarako, uste dugu lehen laguntzako lanbide-kualifikazioaren exigentzia (**Seigarren Xedapen Gehigarria**) eta lehen laguntza emateko kualifikazioa eskuratzeko betebeharra ez betetzeari buruzko **Laugarren Xedapen Iragankorra** boluntarioetara hedatu behar direla (**Bosgarren Xedapen Iragankorra**).

40. Alegazio horri buruz adierazi behar da jendaurrean jarri zen Aurreproiektuan, Bizkaiko Foru Aldundiaren alegazioarekin bat etorriz, zerbitzuak egiten dituzten pertsonentzako kualifikazio berberaren exigentzia ezarri zela, profesionalak edota boluntarioak diren kontuan izan gabe. Horregatik, eta kontuan izanik boluntarioen kolektiboa, oro har, gazte jendea dela, baita adingabeak ere, normalki ikasturte edo denboraldi bat edo zertxobait gehiago irauten dutenak, eta kasu gehienetan jarduera fisikora edo kirolera profesionalki dedikatzeko eta Legean aurreikusten diren kualifikazioak eskuratzeko borondaterik ez dutenak, kualifikazioak exijitzeko epe desberdina proposatu da, nahiz eta egia esan oso antzekoa den. Aurrekoa hala izanik ere, ez diogu inolako objekziorik egiten bi kolektiboentzako epea berdina izateko aukerari.
41. Seigarren Xedapen Gehigarrian adierazten den lehen laguntza emateko gaitasuna boluntarioei ere exijitzeko egiten den alegazioari dagokionez, adierazi behar da xedapen horrek berez ez dituela boluntarioak kanpo uzten, izan ere *“Lege honetan araututako lanbideren batean jardun diren guztiak”* aipatzen baititu. Aurrekoa hala izanik ere, edozein interpretazio desegoki saihesteko xedez, idazkuntza aldatu egingo da gai hori argi eta garbi gera dadin.
42. Lehen laguntza emateko lanbide-kualifikazioari dagokionez, zeina **Seigarren Xedapen Gehigarria** arautzen den, aldundiaren ustez zaila da lanbideak garatzen dituzten profesional guztiek kualifikazio hori egiaztatzea. Bizkaiko Foru Aldundiak ez du proposamen zehatzik egiten.
43. Alegazio horri buruz adierazi behar da, hain zuzen ere Arabako Foru Aldundiak ere adierazitako arrazoia dela medio, lanbide-kualifikazioen exigentzia geroratu egin dela, profesionalentzat, 2019ko urtarrilaren 1era arte, eta zerbitzuak boluntariotza-erregimenean egiten dituztenentzat 2020ko urtarrilaren 1era arte.
44. Foru Aldundiak, **Azken Xedapenetatik Lehenengoan** eta **Bigarreanean** aurreikusita dauden arau-hausteen zehapen-prozedurari dagokionez, adierazten du zehapen-prozedura zein den zehaztu beharko litzatekeela, ez baita argi geratzen *ad hoc* prozedura bat ezarriko den edota egun dagoen prozedura aplikatuko den.

45. Egia esan Aurreproiektuan ez dago inolako *ad hoc* prozedurarik, eta zigortzeko ahalmena Eusko Jaurlaritzak egikaritu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen arabera.
46. Bizkaiko Foru Aldundiak adierazten duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroarekin izandako esperientzia ikusita kezka sortzen duela Aurreproiektuaren **10. artikuluan** aurreikusitako Erregistroaren funtzionamenduak.
47. Ildo horretan, funtsezkoa izango da Kirol-arloko Profesionalen Erregistroa behar diren giza baliabideez eta baliabide materialez hornitzea, Legearen aplikazio efektibo eta bermatzailea lortu nahi bada.
48. Bestalde, **4.8 artikuluari** dagokionez, aldundiaren ustez horren idazkuntza aldatu egin beharko litzateke Gorputz Hezkuntzako Irakasle gisa jarduteko kualifikazioa duten pertsonen legeari aurreikusitako edozein lanbide bete ahal izan dezaten ez soilik ikastetxeetan, baizik eta mota guztietako kirol-erakundeetan, kirol-modalitate baten oinarritzko maila barne.
49. Ez zaio inolako objekziorik egiten alegazio horri, izan ere dagoeneko Aurreproiektuari gaineratu baitzaio.
50. Aldundiaren ustez **Lehen Xedapen Iragankorraren laugarren zenbakian** “*behin-behineko gaikuntza emango zaie*” adiera “*gaitu ahal izango dira*” adierarekin ordeztu behar da, hainbat kirol-modalitate minoritario baitaude non ia kategoria guztiak edo kategorietako asko nazionalizat jotzen diren, eta beraz, maila gorenak eskusiboki aipatzeko asmoa indargabetu egingo litzateke.
51. Bizkaiko Foru Aldundiaren iradokizunarekin bat gatoz eta ez da inolako objekziorik egiten testuan txertatzeko.
52. Eskola-adinean dauden kirolariekin jarduerak egiteko prestakuntzari buruzko **Hamargarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, aldi baterako konpromiso bat lortu nahi da. Era berean, Eusko Jaurlaritza foru-aldundiak duela bost urtez geroztik

irakasten ari diren Eskola Kiroleko monitore-ikastaroaren jakitun izanik, eskatzen da beharrezko baliozkotzeak eta homologazioak sustatzea, prestakuntza horiek jaso dituzten ikasleak gaitzeko, kirol anitzaren eremuan eta kirol-modalitate baten oinarrizko mailan monitore eta entrenatzaile gisa beren jarduera garatu ahal izan dezaten.

53. Eskola-kirolaren eremuan monitoreentzako prestakuntza-ekintzak sustatzeko epe bat txertatzeari buruzko lehen proposamenari dagokionez ez da inolako objektziorik egiten. Azken urteetan foru-aldundiek eskainitako prestakuntzen baliozkotze eta homologazioei dagokienez, aipatu behar da Aurreproiektuaren Bigarren Xedapen Iragankorrak, beharrezko kualifikazioak dituzten profesionalak falta direnean edota prestakuntza ofizialik ez dagoenean –eskola-kiroleko monitore-ikastaroen kasua da hori–, ahalbidetzen du Eusko Jaurlaritzan kirol-arloan eskumena duen sailak Legean aurreikusita dagoena baino kualifikazio txikiagoa egiaztatzen duten pertsonak gaitu ahal izatea behin-behingo, azken hori izanik foru-aldundiek eskaintzen duten prestakuntzaren kasua. Hau da, foru-aldundiek eskainitako prestakuntza horiek gainditu zituztenak gaitzeko tresna aurreikusten da. Era berean, Legean zehar aurreikusten da titulu eta ziurtagiri ofizialez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatuko direla.

VII.- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ALEGAZIOAK.

54. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirolletako zuzendari Asier Sarriegi Zumarraga jaunak 2015eko otsailaren 25ean hainbat alegazio aurkeztu dizkio Lege Aurreproiektuari.
55. Gipuzkoako Foru Aldundiak, **4. artikuluari** eta **Hamargarren Xedapen Gehigarriari** dagokienez, adierazten du Aurreproiektuak eskola-kirolaren eremuan lan egiten duten teknikariei titulazio jakin batzuk exijitzen dizkiela eskola-kirolean prestakuntza espezifiko ofizial baten oinarriak finkatu ez diren arren, eta kexu da Eusko Jaurlaritzak orain arte horretarako beharrezko baliabideak ez dituelako jarri. Era berean bere haserrea adierazten du, izan ere, Eskola Kirolari buruzko 125/2008 Dekretuaren arabera Kirolaren Euskal Eskolak (Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari atxikitako zerbitzua) izan beharko zukeela eskola-kiroleko

monitoreen prestakuntza bere gain hartzen zuena, eta, hala eta guztiz ere, foru-aldundiak izan direla prestakuntza horiek irakatsi dituztenak.

56. Adierazitako kexei dagokionez, haien izaera kontuan izanik ez da bidezkoa inolako iritzi juridikorik ematea txosten honetan.
57. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak positibotzat jotzen du Aurreproiektuak eskola-kiroleko monitoreei lanbide-kualifikazioak exijitzea, baina uste du exigentzia horrek denbora-epe bat behar duela.
58. Gure ustez, Aurreproiektuak hainbat neurri aurreikusten ditu Legea apurka-apurka eta modu ez traumatikoan aplikatzeko. Aurreproiektuak neurri ugari biltzen ditu Legearen aplikazioa sor daitezkeen egoera eta arazo desberdinetara pixkanaka egokitzeke, hau da, gertakari horiei aurrea hartzen die. Eta ezin da bazter utzi behar jendaurrean jarritako zirriborroak planteatzen zuela profesionalentzako kualifikazioak 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatuko zirela eta, gizarte-agenteeekin hainbat bilera egin ondoren, geroratu egingo dela 2019ko urtarrilaren 1era arte profesionalentzat, eta era berean boluntarioentzat 2020ko urtarrilaren 1era arte geroratuko litzatekeela. Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako iradokizuna betetzen da.
59. Gipuzkoako Foru Aldundiak, gainerako foru-aldundiek bezalaxe, eskatzen du dagozkion baliozkotze- edo homologazio-sistemak sortzea foru-aldundien prestakuntza-jarduerak egin dituzten edo egiten ari diren monitoreek eskola-kiroleko monitore-eginkizunak betetzen jarraitu ahal izan dezaten.
60. Bidezko da gai honi buruz *ut supra* adierazi denera jotzea.
61. Gipuzkoako Foru Aldundiak, **18.5 artikuluari** dagokionez, interpretatzen du Eusko Jaurlaritzari dagokiola ikuskaritza-zeregina betetzea, eta bi galdera egiten ditu: lehenik, Eusko Jaurlaritzan gaur egun ikuskaritza-organoren bat ba ote dagoen, eta erantzuna ezezkoa baldin bada, galdetzen du organo hori noiz eta nola sortzea aurreikusten den eta zer zeregin eta prozedura hartuko dituen barnean. Eta eskola-

kirolaren eremuko ikuskapenei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek egingo duten koordinazio-lanari buruz galdetu du.

62. Gure ustez txosten hau ez da ohar horri erantzuteko foro egokia.
63. Boluntariotzari buruzko **Hirugarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, uste dute legea aprobetxatu behar dela monitoreen prestakuntza-gabeziak estaltzeko neurriak hartzeko. Haien ustez, exijitzen diren kualifikazioen maila handitzeak ez du konponduko boluntarioek behar baino kualifikazio txikiagoak edukitzearen arazoa.
64. Gure ustez, eskola-kirolaren eremuko monitore boluntarioek behar baino kualifikazio txikiagoak edukitzearen egungo arazoa ez du bazter uzten Aurreproiektuak, eskola-kiroleko teknikarien prestakuntzei agindu bat dedikatzen baitie monografikoki, eta era berean prestakuntza-ekintza ofizial espezifikoak sustatzeko aukera kontuan hartzen du.
65. Lehen laguntza emateko prestakuntzari buruzko **Seigarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ustez hobe da kualifikazio hori betetzeko epea dagokion erregelamenduan ezartzea.
66. Alegazio horri buruz adierazi behar da, hain zuzen ere beste foru-aldundiek ere adierazitako arrazoiak dela medio, lanbide-kualifikazioen exigentzia –lehen laguntza emateko kualifikazioak barne– geroratu egin dela profesionalentzat 2019ko urtarrilaren 1era arte, eta zerbitzuak boluntariotza-erregimenean egiten dituztenentzat 2020ko urtarrilaren 1era arte.
67. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazten du lehen laguntza emateko prestakuntza horren exigentzia beharrezkoa dela baina UC0272_2 gaitasun-atalaren exigentzia beharbada gehiegizkoa izan daitekeela.
68. Gazteria eta Kirol Zuzendaritzako teknikarien ustez arazoaren funtsa gaitasun hori egiaztatzeko modua da, eta ez prestakuntzaren exigentzia bera. UC0272_2 gaitasun-atala duela gutxi sortutako akreditazioa da; ikaskuntza ofizial askotan lehen laguntzen erreferentziazko gaitasun-atala da, kualifikazio-sistemaren

barnean hartuta dauden ikaskuntza guztietan, eta beraz, gai honetan etorkizuneko erreferentzia izan behar du. Hala eta guztiz ere, lehendik, kiroleko profesional eta/edo boluntario askok lehen laguntza emateko prestakuntza ikasi dute gaitasun-atalaz bestelako hainbat modutan: prestakuntza ez-ofizialak, edo unibertsitateko, lanbide-heziketako edota kirol-irakaskuntza beretako irakaskuntza ofizialetan bildutako prestakuntzak. Horrela, adibidez, Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko Goi-mailako Teknikariak "Lehen laguntzak eta uretako sorospena" izeneko modulu espezifikoa bat dauka, 120 ordukoa, kualifikazio-sistemaren barnean ez dagoena eta, oraingoz behintzat, prestakuntza-korrespondentzien sistemarik ez daukana. Beraz, seigarren xedapen gehigarrian ezarritako gaitasun-atala egiaztatzeari begira, gaur egun lanean diharduten eta lehen laguntza emateko prestakuntza espezifikoa dagoeneko badaukaten pertsona gehienek gaitasunak aitortzeko gailuetatuik pasatu beharko lukete, gailu horiek, jakin badakigunez, oso garapen konplexua izanik. Azken batean, lehen laguntza emateko gaitasuna egiaztatzeko beste posibilitate batzuk gaitzea beharrezkoa da aipatu eskakizunak bete ahal izateko, eta beraz, uste dugu komenigarria dela Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko UC0272_2 gaitasun-atalari buruzko aipamena seigarren xedapen gehigarritik kentzea eta xedapen beraren 2. zenbakian aipatzen den ondorengo erregelamenduaren barnean hartzea.

69. Eskola-kirolaren alorreko monitoreen prestakuntzari buruzko **Hamargarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, adierazten du lehen zenbakiko lehen esaldia gaztelaniazko eta euskarazko bertsioetan desberdina dela. Gipuzkoako Foru Aldundiak errakuntza hori argitzeko eskatu du.

70. Behin betiko bertsioan itzulpena zuzenduko da.

71. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ustez argitu behar da **Hamargarren Xedapen Gehigarriak** soilik monitoreak aipatzen dituen edota entrenatzaileak ere aipatzen ote dituen.

72. Gai horri erantzun behar zaio adieraziz Hamargarren Xedapen Gehigarriak soilik *"eskola-adinean dauden kirolariekin kirol-jarduerak egiten dituzten monitoreak"* aipatzen dituela.

73. Azkenik, **Hamargarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ustez eskola-kiroleko monitoreentzat 200 ordutik gorako prestakuntzak eskatzea gehiegizkoa da.

74. Egia esan Legearen etorkizuneko garapen eta aplikaziorako hausnarketa bat da, izan ere, Eusko Jaurlaritzak eskola-adinean dauden kirolariek lan egiten duten pertsonentzat prestakuntza-ekintza espezifikoak sustatzeko posibilitatea aipatzen baitu Hamargarren Xedapen Gehigarriak.

VII.- AKTIBA, EUSKADIKO TURISMO AKTIBOKO ETA ABENTURA KIROLETAKO ENPRESEN ELKARTEAREN ALEGAZIOAK.

75. AKTIBA, Euskadiko Turismo Aktiboko eta Abentura Kiroletako Enpresen Elkarteak 2015eko otsailaren 25ean, Francisco Javier Fuertes Udaondo jaunaren bitartez, alegazioak aurkeztu dizkio Aurreproiektuari.

76. Elkarteak “*Dekretuaren aurkezpenari*” buruzko aipamena egiten du, eta era berean aipatzen du turismo aktiboko enpresen erregistro bat eratu behar dela “*dekretu horren aurretik*”. Eta enpresen erregistroari dagokionez, adierazten da turismo-eremuan erregistro bat aurreikusi beharko dela, kirol-eremuko erregistroaz gain.

77. Elkarteak, egia esan, ez du alegazio bakar bat ere egiten Aurreproiektuaren inolako testuren gainean. Adierazi behar da alegazioen testuaren irakurketa bateratua eta globala egin ondoren argi eta garbi ondorioztatzen dela behin eta berriz beste lege-testu bati –Dekretua– eta turismo aktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan erregelamenduz erregulatu beharrari buruz, hau da, “*turismo-eremuko erregistro bati*” buruz ari dela. Turismo-gai hori Aurreproiektuaren xede ez denez eta Sail honek gaiari buruzko eskumenik ez duenez, ez da bidezkoa horri buruzko adierazpenik egitea.

VIII.- KAIT (KIROL ARLORAKO IRITZI TALDEA – ASOCIACIÓN DE GESTORES DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO) ELKARTEAREN ALEGAZIOAK.

78. Juan Antonio Compañón Duque jaunak 2015eko otsailaren 24an Lege Aurreproiektuari lotutako alegazioak aurkeztu ditu KAIT (*Kirol Arlorako Iritzi Taldea – Asociación de Gestores del Deporte del País Vasco*) Elkartearen izenean eta ordezkaritzan.
79. Elkartek, **zioen azalpenari** dagokionez, idazkuntzan hainbat aldaketa egiteko proposatzen du.
80. Ez zaio objekzio juridikorik egiten proposamen horri, izan ere, Aurreproiektuaren testua hobetzen duela uste baitu, ñabardura batzuekin bada ere.
81. **Legearen tituluari** dagokionez, elkartearen ustez Legearen izena “*Kirolaren eta jarduera fisikoaren lanbideen Legea*” izatea da logikoa.
82. Alegazio honi lotuta, adierazi behar da Aurreproiektuan “*kirola*” terminoa erabiltzen dela, fenomeno sozial hori bere edukirik zabalenean eta mota guztietako jarduerak barnean hartzen direla interpretatuz. Aurreproiektuaren justifikazio-memorian dagoeneko adierazi da legeria-aukera hori abalatzen duten funtsak eta irizpideak ugariak direla. Kirola eskumen-tituluaren izenak berak (Autonomia Estatutuaren 10.36 artikulua), Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen eta haren erregelamendu-garapen guztien izenak berak, gai horretan eskumenak dituzten organismoen izenak (Kirol Batzorde Nazionala, Kirol Zuzendaritza Nagusia, Kirol Idazkaritza Nagusia, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritza, Kirolaren Euskal Kontseilua, eta abar), dokumentu estrategikoen izenak (Kirolaren Euskal Plana), eta abarrek, agerian uzten dute “*kirola*” terminoak adierazpen asko eta desberdinak hartzen dituela barnean. Hots, ez da kirol-modalitate eta -diziplinen eremura mugatzen. Era berean, oso adierazgarria eta irmoa da Aurreproiektuaren 1. artikuluko seigarren zenbakia, “*kirola*” terminoak gorputz- eta kirol-adierazpen ugari biltzen dituen terminoa dela argitzen baitu esanbidez.
83. Elkartek, **1. artikuluko 4. zenbakiari** dagokionez, monitoreen eta entrenatzaileen boluntariotza gisa zer ulertzen den definitzen duen paragrafoa ezabatzea proposatzen du, bere ustez kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege batean boluntarioaren irudia tratatzeak ez baitirudi oso koherentea denik.

84. Gure ustez, erregulazioaren agindu nuklearretako baten aurrean gaude, Legea aplikatzeko eremu subjektiboa mugatzeko erabakigarria izango baita. Legeak kirol-arloko lanbideetan sartzea eta jardutea erregulatzen badu, lanbide-jarduna zer den eta zer ez den mugatu beharko da. Funtsean, legegileak bi aukera ditu: arauetara bidaltzeko legegintza-teknika erabiltzea eta, ondorioz, Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legean aurreikusten den boluntariotzaren definizio orokorrera bidaltzea, edota lanbide-jardunaren eta boluntariotzaren definizio bat egitea Legearen xede eskusiborako. Ziur dagoen gauza bat zera da, legeak langile profesionalentzat eta langile boluntarioentzat duen hedadura kontuan izanik, ezinbestekoa dela bi kategoria horien mugapen bat egitea. Aurreproiektuak, betebeharrak bi kolektiboentzat desberdinak diren neurrian, lanbide-jarduntzat ulertzen denari buruzko mugapen positibo bat egiten du, eta era berean, mugapen negatibo bat egiten du ziurtasun juridiko handiagoa emateko xedez.
85. Bestalde, **1. artikuluko 5. zenbakiari** dagokionez, proposatzen da *“kirol-instalazio edo -erakundeetako kudeatzaileen lanbide-jarduerak”* Legearen eremutik kanpo uztea erretiratzea. Elkartearen ustez kirol-kudeatzailea berak kudeatzen duen instalazioko pertsonen osasunaren eta segurtasunaren arduradun nagusia da, eta beraz, kudeaketa txar batek eremu horietan eragina izan dezake.
86. Aurreproiektuak kirol-instalazioetako kudeatzailearen edo kirol-erakundeetako kudeatzailearen lanbide-jardueren erregulazioa zuzenki uzten du kanpoan. Kirol-kudeatzailearen lanbideak, kirol-instalazioei lotutako beste lanbide-jarduera batzuek egiten duten bezala –segurtasun- edo mantentze-arduradunak– kirol-instalazioetako erabiltzaileen segurtasunean eragina izan dezake, baina ez da jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien jakintzak eta teknikak aplikatzea behar duen lanbide bat, hori izanik Legearen elementu nuklearra. Kirol-instalazioak edo kirol-erakundeak kudeatzen dituenak, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziekin loturarik ez duten lanbide-kualifikazio desberdinak egiazta ditzake. Baztertzek, era berean, proportzionaltasun-printzipioari erantzuten dio. Legearen helburua, proportzionaltasun-printzipioa errespetatuz, ez da kirolari lotutako lanbide guztiak arautzea, baizik eta kirol-arloko lanbide jakin batzuk bakarrik arautzea. Horregatik, erregulaziotik salbuetsita geratu dira jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziak eta teknikak nahitaez aplikatu behar ez dituzten kirol-arloko lanbideak, Legearen 2.

artikuluko 1. zenbakiak eskatzen duen bezala, horixe baita proiektuaren gakoetako bat.

87. Gaur egun Legearen ondorioetarako kirolaren definizio bat biltzen duen **1. artikuluko 6. zenbakian** proposatzen da Europako Kontseiluak Europako Kirolaren Gutunean egiten duen definizioa kopiatzea.

88. Ez zaio objekzio juridikorik egiten proposamen horri.

89. Kirol Monitorearen lanbideari buruzko **4. artikuluko 1. zenbakian**, proposatzen da plangintza-funtzioak eta ebaluazioa ager daitezela.

90. Ez zaio objekziorik egiten proposamen horri, bi funtzio horien aipamen espresa premiagabekoa den arren, izan ere, Aurreproiektuaren 2. artikuluko hirugarren zenbakiak adierazten baitu lanbide bakoitzaren funtzio-eremu orokorra ezartzea dela lege honetan lanbide horietarako jasotzen diren eskumenen zerrenden helburua, eta horren ondorioz zerrenda horien helburua ez dela mugak jartzea, orientatzea baino.

91. Arreta berezia eskatzen duten pertsonen espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan Kirol Monitorearen lanbide-jarduera egiteko kualifikazioa eskatzen duen **4. artikuluko 7. zenbakiari** dagokionez, KAITek proposatzen du, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradudun tituluaren edo Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko Goi-mailako Teknikari tituluaren bidez egiazta daitekeen kualifikazio bat exijitu ondoren, *“kualifikazio horrez gain, dagokion jarduerako prestakuntza berezia ere izan beharko da”* adierazpena ezabatzea. Alegazio hori egin du idazkuntzaren arabera badirudielako gradudunak ere prestakuntza espezifiko behar duela, baina bere ustez eremu horretan hainbat irakasgai garatzen dira graduaren curriculumaren barruan.

92. Prestakuntzen edukiak aztertzeaz arduratzen diren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzako teknikarien ustez, aurkeztu den alegazioa kontuan hartu behar da. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradudun tituluaren Liburu Zuriak ezartzen du titulazio horren ikasketek *“Jarduera Fisikoa eta Bizi Kalitatea”*

(Jarduera Fisikoa eta Osasuna) izeneko irakasgai ardatza dutela, 12 ECTS kredituko kargarekin, eta ikasle guztiek ikasi behar dute. Antzeko egoeran gaude 5. artikuluko 8. zenbakian. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradudunari prestakuntza espezifikoa eskatzen zaio prestatzaile fisikoaren, berregokitzailearen eta antzeko eginkizunetan jarduteko. Kasu honetan, ikasle guztiek 12 ECTS kreditu dituen eta "Kirol Entrenamenduaren Metodologia" izena duen irakasgai ardatz bat ikasten dute, baina gainera 30 kreditu osagarri dituen "Kirol Entrenamendua" aipamena ere badago. Beraz, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradudunentzako 4.7 eta 5.8 artikuluetako prestakuntza espezifikokoaren exigentzia ezabatzeko iradokizuna egiten da, beren ikasketa ofizialetan gai horiei buruzko gutxieneko jakintza batzuk eskuratzen dituztelako.

93. KAITek era berean alegazio bat formulatzen du **4. artikuluko 8. zenbakiari dagokionez**, Gorputz hezkuntzako Irakasle lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa dutenek era berean ikastetxeetan nahiz ikastetxeetatik kanpo programatzen diren kirol-jardueretan Kirol Monitore lanbidea betetzeko duten ahalmenari lotuta. Bere ustez, pertsona horien prestakuntzak ikasteetan nahi ikastetxeetatik kanpo Kirol Monitore lanbidea betetzeko behar adinako ezaguera hartzen du barne.
94. Ez zaio objekziorik egiten alegazio horri, izan ere, formulatu baino lehen dagoeneko Aurreproiektuan txertatuta baitzegoen, lehendik adierazi den moduan.
95. **6. artikuluko 1. zenbakiari dagokionez**, ezinbestekotzat jotzen da “*kudeaketa*” terminoa sartzea kudeaketa-eginkizuna “*Kirol Zuzendaria/Kudeatzailea*” lanbideari dagokiola adierazteko.
96. Dagoeneko *ut supra* adierazi da Kirol Kudeatzailearen lanbidea Aurreproiektuaren erregulazio-eremutik kanpo geratzen dela.
97. **10. artikuluko lehen eta hirugarren zenbakiak** ezabatzeko proposamena egiten da.

98. Alegazio-idazkian ez da ezabaketa horren arrazoia edo funtsa azaltzen, eta beraz ezin da KAITen proposamen horren azterketa bat egin.
99. KAITek proposatzen du lanbidean jarduteko printzipioei eta betebeharrei buruzko **11. artikuluko 1. zenbakian** beste letra bat gaineratzea, profesionalak *“egiten diren ikerketetan kirol-egitatearen azterketan aktiboki parte hartzeko eta lankidetzan jarduteko”* betebeharrari buruz.
100. Printzipioz, 11. artikulua azkenik profesionalen eginbeharren eta betebeharren multzo bat bezala konfiguratuta geratuko da, exigigarritasun juridikoko maila desberdinekin (hainbat legezko eta lege-azpiko xedapenen eta abarren bitartez) eta zehapen- eta diziiplina-baldintzekin eta abar. KAITen proposamena ez dator bat 11. artikuluaaren arkitektura juridiko berri horrekin.
101. KAITek 11. artikuluko 2. zenbakiari honako paragrafo hau gaineratzea proposatu du: *“Euskal Autonomia Erkidegoko Profesionalen Diziiplina Araubidea Kirolaren Euskal Eskolari atxikiko zaio, eta horren bitartez administrazio- eta diziiplina-zehapenen ponderazioa egingo da. Administrazio- eta diziiplina-zehapenak betearazteko eta jartzeko lanak egingo dituztenek aztertzen ari garen jakintzagaietan tituludunak izan behar dute”*. Proposamen hori egiteko arrazoia da gai horretan zer erakundek duen eskumena argi uztea eta eginkizun hori egiten dutenak kirol-arloko tituludunak izatea.
102. Proposamen hori ezin da onartu, ez delako egongo Kiroleko Profesionalen Diziiplina Erregelamendurik, zehapen-gaietarako lege-erreserbaren exigentzia dela medio. Bestalde, ez litzateke egokia arau bat –erregelamendu bat– organo edo zerbitzu bati adskribatzea. Era berean teknika juridikoan ez da onargarria zehapenak ponderatzeari eta jartzeari buruz hitz egitea.
103. Aurreko alegazioaren ildo beretik, KAITek **18. artikuluko 5. zenbakian** proposatzen du Kirol Ikuskaritza *“Kirolaren Euskal Eskolari atxikita”* dagoen organo bat izatea eta haren bitartez *“Lege honen betetzearen ikuskaritza-ponderazioa”* egikaritzea.

104. Aipatu alegazioari dagokionez bidezko da lehendik egindako kontsiderazioetara jotzea.
105. KAITEk proposatzen du **19. artikulua berria** gaineratzea, Kirol-arloko Lanbideen Aholkularitza Batzordea sortuz, Legeak eremu horretan aldizkako ebaluazioa bermatzeko modu bat dela uste baitu.
106. Zuzendaritza honek ez du beharrezkotzat jotzen une honetan.
107. Boluntario gisa egindako jardueri edo antzekoei buruzko **Hirugarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, proposatzen da boluntarioei kualifikazioak exijitzeari buruzko 4. zenbakia ezabatzea, eta kualifikazioak exijitzeko epea profesionalen epearen berbera izan dadila ezartzea.
108. Kontuan izanik boluntarioen kolektiboa, oro har, gazte jendea dela, baita adingabeak ere, normalki ikasturte edo denboraldi bat edo zertxobait gehiago irauten dutenak, eta kasu gehienetan jarduera fisikora edo kirolera profesionalki dedikatzeko eta Legean aurreikusten diren kualifikazioak eskuratzeko borondaterik ez dutenak, kolektibo bakoitzari kualifikazioak exijitzeko epe desberdina baina antzekoa proposatu da.
109. Era berean, KAITEk zera proposatzen du: Hirugarren Xedapen Gehigarrian boluntario-erregimenaren erregulazioari eusten bazaio, *“boluntarioaren eremua”* eta *“kirol-ongilearen eremua”* bereiztea. Lehenik aipatutakoek, bere ustez, edozein motatako kirol-erakundeen zeregin instrumentaletan laguntzen dute. Kasu horretan ez da beharrezkoa inolako kualifikaziorik egiaztatzea. Aitzitik, *“kirol-ongilearen”* eremuan, KAITEk dioenez, honako hauek daude bilduta: zeregin teknikoetan eta irakaskuntza-zereginetan eta kirolariekin zuzeneko harremana izanik laguntzen duten pertsonak, prestakuntza-helburu jakin batekin eta inolako ordainsari ekonomikorik jaso gabe. Kasu horretan, *“finkatzeko dagoen prestakuntza egiaztatu beharko dute, betetzen dituzten zereginekin bat etorriko dena eta zerbitzuak egiten dituzten espezialitateari lotuta”*.
110. Ez gatoz bat KAITEn alegazioekin, hainbat arrazoirengatik: Lehenik, gure ordenamendu juridikoan eta gure errealitate sozialean ez dago errotuta bereizketa

hori. Eta gainera, ez dago batere argi boluntarioek kirol-erakundeen zeregin instrumentaletan bakarrik laguntzen dutenik.

111. **Bederatzigarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, KAITEk hirugarren zenbakiko testua partzialki ezabatzea proposatzen du, izan ere, adierazita dagoen moduan, kirol-lehiaketaren euskal eremuan aldaketaren bat egiteko posibilitatea ixten baitu.
112. Ordenamendu juridikoak orain arte ez du erregulatu euskal lehiaketa-eremua deitutakoa, eta inguru material zailak dituen kontzeptu juridikoa da. Indarrean dagoen esparru juridikoarekin euskal lehiaketa-eremu ofiziala existitzen da dagoeneko. Eta bigarren, Aurreproiektuaren testuak euskal lehiaketa-eremua garatzeko xedapenen bat onartzeko posibilitatea ez du ixten. Xedapenak maila handiagoko kualifikazioa eskatuko den lehiaketa-kategoria bat bakarrik aurreikusten du.
113. Prestakuntza eta ikaskuntzarako edo prestakuntza dualerako kontratuei buruzko **Hamahirugarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, KAITEk ustez ez dago argi idazkuntza, izan ere, badirudielako prestakuntza eta ikaskuntzarako edo prestakuntza dualerako kontratu bat –kirolekoa ez bada ere– daukan edozein pertsonak lanbidean jardun dezakeela Legeak exijitutako lanbide-kualifikaziorik eduki gabe.
114. Testua espresuki “*prestakuntza eta ikaskuntzarako edo prestakuntza dualerako kontratuak kirolaren eta jarduera fisikoaren eremuan*” definizioari lotuta dagoen arren, ez da objekzio juridikorik egiten sortutako zalantza argitzeari dagokionez.

IX.- HARROBIA LANBIDE-HEZIKETAKO ZENTROAREN ALEGAZIOAK.

115. Fernando Garrigós Gabilondo jaunak 2015eko otsailaren 16an, Harrobia Lanbide-heziketako Zentroaren izenean eta ordezkaritzan, hainbat alegazio aurkeztu ditu Legearen Aurreproiektuari dagokionez.

116. Harrobia zentroak proposatzen du **2. artikuluko 2. zenbakian** lanbide berri bat txertatzea: *“instalazioetako eta gune akuatiko naturaletako soroslea”*. Aurreko alegazioari lotuta, Harrobia zentroak proposatzen du **7. artikuluko berri** bat txertatzea lanbide hori erregulatzeke. Aipatu zentroak hiru argudio ematen ditu:

- a) Gorputz- eta kirol-ekintzen lanbide-arloan eskusiboki lortzen den prestazio kualifikatzaile bat egon badago.
- b) Uretako sorospenaren lanbide-jarduerak zuzeneko eragina du garrantzi handiko ondasun juridikoetan, hau da, hirugarrenen osasunean eta segurtasunean.
- c) Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien jakintzak eta teknikak aplikatzea behar duen lanbide bat da.

117. Gure ustez ez da onartu behar proposatu den alegazioa, Legeak kirolaren berezko lanbideak arautu nahi baititu, Memorian eta Legearen hitzaurrean justifikatu den bezala. Eta sorosle-lanbidea ez da kirolaren berezko lanbide bat. Egia da kirol-instalazioen gaineko proiektzioa duela, baina era berean hondartza, laku, ibai, aisialdiko parke eta abarretan ere proiektatzen da, eta beraz ezin da esan kirol-eremuk berezko lanbide bat denik.

X.- ASIER RIAÑO TORRE JAUNAREN ALEGAZIOAK.

118. Asier Riaño Torre jaunak 2015eko otsailaren 24an, norbere izenean eta ordezkaritzan, Legearen Aurreproiektuari buruzko hainbat alegazio aurkeztu ditu.

119. Aurkezten duen lehen alegazioan adierazten du Aurreproiektuak ez duela aurreikusten kirol-arloko lanbideetan informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez jarduteko posibilitatea.

120. Ez zaio inolako objekzio juridikorik egiten proposamen horri. Proposamen horrek arrazoigarria dirudi, kirolaren eremuko zerbitzugintzan gero eta presentzia handiagoa duen errealitatea baita.
121. Alegatzaileak, **1. artikuluko 3. zenbakiari** dagokionez, proposatzen du sektore publikoari buruzko aipamenean “*Foru*” Administrazioen aipamen espresa txertatzea.
122. Ez zaio inolako objekzio juridikorik egiten proposamen horri.
123. Alegatzaileak **1. artikuluko 5. zenbakiaren** idazkuntza hobetzeko alegazio bat egiten du, eta proposatzen du “*urpekaritza profesionala, aisialdiko urpekaritza edo kirol-arlokoa ez dena*” kanpo uzteari buruzko erreferentzia “urpekaritza profesionala, aisialdiko baina kirol-arlokoa ez dena” erreferentziarekin ordeztzea.
124. Ez zaio objekziorik egiten proposamen horri.
125. Alegatzaileak proposatzen du **1. artikuluko 5. zenbakian** bide-teknikarien berezko lanbide-jarduerak espresuki kanpo uzten direla adieraztea.
126. Egia esan bide-teknikariek ez dituzte kirolaren berezko lanbideak betetzen, bideek zeharkako dimentsioa (kultura-erabilera, turismo-erabilera eta abar) dutelako, eta funtsean jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziak eta teknikak aplikatu behar ez dituztelako, eta ondorioz, ez daude aplikazioko eremu subjektiboaren barnean hartuta. Dena dela ez zaio objekzio juridikorik egiten argibide-proposamen horri.
127. Bestalde, **1. artikuluko 6. zenbakiari** dagokionez, proposatzen da gaztelaniazko “*manifestaciones físicas y deportivas*” esamoldea “*manifestaciones físico-deportivas*” esamoldearekin ordeztzea.
128. Uste dugu “*físicas y deportivas*” esamoldea adituek prestakuntza-eremu ofizialean eta lanbide-kualifikazioen eremuan erabiltzen duten terminologiarekin bat datorrela: “*Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y*

Deportivas”, “*Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas*”, “*Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*”, eta abar. Aurrekoa hala izanik ere, ez da objektzio juridikorik egiten aldaketari dagokionez.

129. **2. artikuluko 6. zenbakiari** dagokionez, proposatzen da zenbaki horrek aipatzen duen tituluen baliokidetasuna lanbide-baliokidetasunera mugatzen dela argitzea, kirol-arloko lanbideetako jarduna arautzen duen Legea baitugu aztergai.

130. Ez zaio objektzio juridikorik egiten proposamen horri.

131. Alegatzaileak, KAITEk egin duen bezala, proposatzen du **4. artikuluko 1. zenbakian** kirol-monitoreen funtzioei plangintza- eta ebaluazio-funtzioak gaineratzea.

132. Ez zaio objektziorik egiten proposamen horri, funtzio horien aipamena premiagabekoa den arren, izan ere, Aurreproiektuaren 2. artikuluko hirugarren zenbakiak adierazten baitu lanbide bakoitzaren funtzio-eremu orokorra ezartzea dela lege honetan lanbide horietarako jasotzen diren eskumenen zerrenden helburua, eta horren ondorioz zerrenda horien helburua ez dela mugak jartzea, orientatzea baino.

133. **4. artikuluko 2. zenbakiari** dagokionez, Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko Goi-mailako Teknikariaren eskudantziak zehaztea. Proposatzen da bere eskudantziak oinarrizko izaera duten jardueretara mugatzea. Aipatu jardueretan egin beharreko zuzeneko esku-hartzeak jakintza espezializatuak izatea eskatzen badu jarduera edota erabili beharreko guneak edo euskarriak konplexuak direlako, konplexutasun hari egokitutako prestakuntza gehigarria eduki beharko dute edo Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradudun batek ikuskatu beharko ditu.

134. Prestakuntzen edukiak aztertzeaz arduratzen diren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzako teknikarien ustez, 4. artikuluko 2. eta 3. zenbakietako egokitze fisikoko edo diziplina anitzeko irakaskuntza eta ikaskuntzako monitore-jardueretan ez da mailarik ezartzen (oinarrizkoa edo aurreratua) kirol-modalitate edo -diziplina

jakin bateko monitore-lanbidean gerta daitekeen bezala, izan ere, aipatzen diren jardueretan (fitnessaren eremuko jarduerak, kirol anitzeko jarduerak eta abar) ez dago, normalki, kualifikazio desberdinak behar duen konplexutasun-mailarik. Jarduera mota horren konplexutasunari dagokionez benetan garrantzitsua den bereizketa bakarra, ezaugarri bereziak dituzten biztanle-taldeak egotea da. Beraz, ez da bidezkoa alegazio hori kontuan izatea zenbaki honetan, baina gai, alegatzailearen beste ekarpen bati lotuta, 4. artikulua beraren 7. zenbakian, biztanle-talde bereziei espezifikoki zuzendutako jarduerak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradudunek eskusiboki gara ditzatela ezarritz.

135. Proposatzen da **4. artikuluko 4. zenbakiaren** idazkuntzan hobekuntza bat sartzea, argi eta garbi uzteko diziplina bakarreko eta oinarritzko mailako ikasi eta irakasteko jarduera horietan eta antzekoetan profesionalki jardun dezaketela 4. artikuluko hirugarren zenbakian aipatutako titulazioetako baten bidez egiazta daitekeen kualifikazio bat dutenek, betiere, horretarako, prestakuntza berezia badute dagokion kirol-modalitate edo -diziplinan.
136. “*Betiere*” hitza gaineratzea beharrezkoa ez dela uste izan arren, ez da objekzio juridikorik egiten idazkuntza hobetzeko proposamenari dagokionez.
137. **4. artikuluko 6. zenbakian** ñabardura bat sartzea proposatzen da, hau da, nolabaiteko arriskua duten jardueretan monitore-lanbidean jarduteko aipatu zenbakian aurreikusitako titulazioak dituzten pertsonak, gainera, garatu beharreko kirol-jarduerari dagokion prestakuntza espezifikoa eduki behar dute.
138. Zehaztasuna egitea beharrezkoa ez dela uste izan arren, ez da objekzio juridikorik egiten idazkuntza hobetzeko proposamenari dagokionez.
139. Eran berean, alegatzaileak proposatzen du **4. artikuluko 6. zenbakian** argi utzi behar dela Kirol Teknikari titulazioak dituzten pertsonak monitore-eginkizunak ere garatu ahal izango dituztela, baina prestakuntza jaso duten arrisku-jarduera espezifikoetan bakarrik.
140. Ez zaio objekziorik egiten argibide-proposamen horri.

141. Alegatzaileak alegazio bat egin du **4. artikuluko 7. zenbakiari** dagokionez, Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko Goi-mailako Teknikari tituluak aukera eman dezan arreta berezia eskatzen duten pertsonekin lanbide-eginkizunetan jarduteko, esaterako, 65 urtetik gorako pertsonekin, desgaitasunen bat dutenekin eta abar. Era berean, proposatzen du beste profesional batzuek osasun-lanbideen ordenamendu-legeriaren arabera gara ditzaketen eskumenei buruzko aipamen bat egitea, 5.8 artikuluaaren irizpide berari jarraiki.
142. Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioko Goi-mailako Graduaren titulua ezartzen duen abenduaren 22ko 2048/1995 Errege Dekretuak tituludun horiek egokitze fisikoko oinarrizko jardueretan irakasteko eta dinamizatzeko gai direla ezartzen duenez gero, ez da bidezkoa inolako objekziorik egitea proposamen horri.
143. Proposatutako aipamena beharrezkoa ez bada ere, ez zaio objekziorik egin behar arreta berezia eskatzen duten pertsonen zuzendutako gorputz- eta kirol-ekintzetan egin beharreko monitore-jardura beste osasun-profesional batzuek gara ditzaketen eskumenak bazter utzi gabe ulertzen dela argi eta garbi uzteari.
144. Alegatzaileak, **4. artikuluko 8. zenbakiari** dagokionez, eta KAITEk eta Bizkaiko Foru Aldundiak egindako alegazioekin bat etorriz, uste du Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa duen pertsonak era berean ikastetxeetan nahiz ikastetxeetatik kanpo programatzen diren jardueretan Kirol Monitore lanbidea betetzeko ahalmena ere izan behar duela.
145. Ez zaio inolako objekziorik egiten alegazio horri, izan ere, formulatu aurretik, dagoeneko Aurreproiektuari gaineratu baitio lan-taldeak, eta horrela, eginkizun haiek egin ahal izango dituzte ikastetxeetan ikastorduetatik kanpo edota beste erakunde batzuetan, betiere ikasleen adinak beren irakaskuntza-kualifikazioarekin bat badatoz. Are gehiago, alegazio hori 5. eta 6. artikuluetara hedatu behar da.
146. **4. artikuluko 9. zenbakian** idazkuntza hobetzeko proposamen bat egiten da, *“lortu dituen”* esamoldea *“lortzen diren”* esamoldearekin ordeztzeko.

147. Proposamenak idazkuntza hobetzen duenez, ez zaio inolako objekziorik egiten alegazio horri.
148. **4. artikuluko 10. zenbakiari** alegazioa egin zaio, kirol-jardueren garapenean monitoreen presentzia fisikoa beharrezkoa den kasuak zehazteko xedez.
149. Gai horri dagokionez ere ez da objekzio juridikorik egiten.
150. **5. artikuluko 2. zenbakiari** dagokionez, lehenik eta behin proposatzen da hobekuntza tekniko bat egitea Natura-ingurune gorputz- eta kirol-ekintzak gidatzeko teknikariaren eskumena zehazteko eskola-lehiaketako jarduera natura-ingurunean garatzen denean. Aurreproiektuan egiten den aipamenak dio eskola-lehiaketa *“berariaz antolatzen denean natura-ingurune batean”*. Bere ustez, hainbat lehiaketa-jarduera egon daitezke natura-ingurunean erabat edo eskusiboki garatzen ez direnak, baina bai gehienbat edo nagusiki. Kasu horretan alegatzaileak proposatzen du lanbide-eskudantzia ere kontuan izan dadila. Azken paragrafoaren idazkuntzan ere hobekuntza bat egitea proposatzen da.
151. Ez da horri buruzko objekziorik egiten.
152. **5. artikuluko 2. zenbakiari** dagokionez, alegatzaileak iradokitzen du etorkizunean onar daitekeen eskola-kiroleko profesionaltasun-ziurtagiria ere gaitzen duen prestakuntza gisa barnean hartzeko posibilitatea balioetsi egin beharko litzatekeela.
153. Uste dugu Legearen artikuluko multzoan biltzen diren titulazioek egun daudenak izan behar dutela, ez balizkoak edota etorkizunekoak, eta gaur egun ez da existitzen eskola-kiroleko profesionaltasun-ziurtagiria. Gainera, Aurreproiektuaren 8. artikuluko kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzea aurreikusten du. Edozein kasutan, Hamargarren Xedapen Gehigarriak ez du adierazten eskola-kiroleko kirol anitzeko prestakuntzek kirol anitzeko entrenatzaile- edo monitore-jarduerarako gaituko dutela, baita prestakuntza espezifiko bat jasotzen den modalitate edo diziplinetarako ere, eta beraz, komenigarria da dagokion gaikuntza ezartzen duen atal gehigarri bat txertatzea.

154. **5. artikuluko 5. zenbakiari** dagokionez, idazkuntza-hobekuntza bat proposatzen da.
155. Ez zaio objekziorik egiten hobekuntza-proposamen horri.
156. Alegatzaileak, **5. artikuluko 5. zenbakiari** dagokionez, eta KAITEk eta Bizkaiko Foru Aldundiak egindako alegazioekin bat etorriz, uste du Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa duen pertsonak era berean ikastetxeetan nahiz ikastetxeetatik kanpo programatzen diren jardueretan Kirol Entrenatzaile lanbidea betetzeko ahalmena ere izan behar duela.
157. Ez da horri buruzko objekziorik egiten, eta aurreikuspen berbera Kirol Monitorearen eta Kirol Zuzendariaren lanbideetara hedatu behar da.
158. **5. artikuluko 8. zenbakian**, beste lanbide-eremu batzuekin nahasteak edo gatazkak saihesteko, proposatzen da argi eta garbi uztea lesioen osteko berregokitzea eta berriro hezteak, kirolarien egoera fisikoa berreskuratu eta hobetzea eta abar entrenatzaileen funtzioak direla *“jarduera fisikoaren eta kirolaren bitartez”* garatzen direnean.
159. Aurreproiektuaren 2.1 artikulua argi uzten du Legean arautzen diren lanbide guztiek *“jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien arloko jakintza eta teknikak aplikatzea eskatzen dutela”*, baina arrazoigarria dirudi proposatu den zehaztapena gaineratzea edozein eztabaida saihesteko.
160. **5. artikuluko 10. zenbakiari** alegazioa egin zaio, kirol-jardueren garapenean entrenatzaileen presentzia fisikoa beharrezkoa den kasuak zehazteko xedez.
161. Gai horri dagokionez ez da objekzio juridikorik egiten.
162. Alegatzaileak proposatzen du **6. artikuluko 1. zenbakia** ñabartzea, Kirol Zuzendariaren lanbideak zuzendaritza *“teknikoko”* funtzioak betetzea ahalbidetzen

duela adieraziz. Alegatzaileak adjektibo hori gaineratzen du argi uzteko zuzendaritza hori ez dela kudeaketaren edo gerentziaren berezkoa, baizik eta zuzendaritza teknikoa eta kirol-zuzendaritza.

163. Proposatzen den alegazioa, zorrotz hitz eginez, ez litzateke beharrezkoa izango, argi geratzen baita Aurreproiektuak aipatzen duen Zuzendaria jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziak eta teknikak –Aurreproiektuaren 2.1 artikulua indarrez– aplikatzen dituen Zuzendaria dela, baina beharbada bidezkoa da zehaztapen hori egitea, are gehiago kontuan izanik lanbide horren edukiaren interpretazioan jadanik hainbat errakuntza gertatu direla.
164. Alegatzaileak proposatzen du **6. artikuluko 3. zenbakia** bi zenbakitan zatitzea, bere ustez bi lanbide-funtzio desberdin direlako eta titulazioa desberdinak eduki behar dituztelako.
165. Alegazio hori egokia dela iruditzen zaigu.
166. **6. artikuluko 4. zenbakiari** dagokionez, proposatzen da “*goi-mailako*” esamoldea “*errendimendu handiko*” esamoldearekin ordeztea.
167. Ez da objekzio juridikorik egiten, baina uste dugu egokiena “*maila*” substantiboa erabiltzea izango litzatekeela, artikulua gainerako zenbakietan substantibo hori erabili baita “*oinarrizko maila*” eta “*maila ertaina*” adierazteko.
168. Alegatzaileak, **6. artikuluko 6. zenbakiari** dagokionez, eta KAITEk eta Bizkaiko Foru Aldundiak egindako alegazioekin bat etorritik, uste du Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbidean jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa duen pertsonak era berean ikastetxeetan nahiz ikastetxeetatik kanpo programatzen diren jardueretan Kirol Zuzendari lanbidea betetzeko ahalmena ere izan behar duela. Era berean, lanbidea modalitate edo diziplina bakarreko lehiaketetan edo natura-ingurunean edo animaliekin betetzen bada prestakuntza espezifiko bat beharko dela gaineratzea proposatzen da.

169. Ez da horri buruzko alegaziorik egiten, antzeko beste alegazio batzuei dagokienez *ut supra* adierazi den moduan.
170. Titulazio baliokideei buruzko **8. artikuluko 10. zenbakiari** dagokionez, iradokitzen da baliokidetasun-deklarazio hori lanbide-eremura mugatzea, ez baita baliokidetasun akademikoari buruz hitz egiten ari.
171. Ez da horri buruzko alegaziorik egiten, antzeko beste alegazio batzuei dagokienez *ut supra* adierazi den moduan.
172. **11. artikuluko 2. zenbakian** adierazten da lanbidean jarduterakoan aipatutako printzipio eta betebeharrak bete ezean, dagozkion administrazio- eta diziplina-erantzukizunak eskatuko direla. Alegatzaileak proposatutako testuak erantzukizun “*penalak*” gaineratzen ditu.
173. Aurkeztutako zuzenketa ez zaigu egokia iruditzen.
174. Aurreproiektuaren **12. artikuluko 3. zenbakian** adierazten denez, “*kirol-arloko lanbideen jardunean tituludunen presentzia fisikoa bermatzeko hartu beharreko neurriak hartu beharko dituzte lanbide-sozietateek*”. Alegatzaileak proposatzen du “*tituludunen*” aipamena “*pertsona kualifikatuen*” aipamenarekin ordeztea.
175. Egokia iruditzen zaigu aldaketa hori, Legearen eduki orokorrera hobeto egokitzen baita, izan ere Legeak lehen instantzian kualifikazioak aipatzen baititu, kualifikazio horiek titulazioen edo beste bide batzuen bitartez egiazta daitezkeen arren.
176. Alegatzaileak proposatzen du **14. artikuluan** beste zenbaki bat gaineratzea, argi uzteko federazioek lanbide-funtzio jakin batzuetarako prestakuntza osagarria edo gehigarria eskatu ahal izango dutela, baina kasu horretan, federazioaren gehiegikeriak edota federazioarenak ez diren prestakuntzei dagokienez bereizkeriazko tratuak saihesteko, federazio-araudia Eusko Jaurlaritzak onartu beharko du.

177. Ez da horri buruzko objekziorik egiten, izan ere, federazio-errealitatea agerian uzten ari da hainbat kirol-federazioen aldetik bereizkeriazko praktikak egiten direla prestakuntza ofizialen jatorriaren arabera, federaziokoak edo federazioz kanpokoak diren kontuan izanik. Hala eta guztiz ere, 14/1998 Legean eta Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan xedatutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzan kirolaren alorrean eskumena duen zuzendaritzak onartu beharko ditu federazio-araudiak.
178. Boluntario gisa egindako jardueri edo antzekoei buruzko **Hirugarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, alegatzaileak idazkuntza hobetu nahi duten hainbat aldaketa proposatzen ditu, eta bestalde, kualifikazioak exijitzeko epeak azken xedapenetan jar daitezela proposatzen da.
179. Alegatzaileak egin duen iradokizunarekin bat gatoz, eta kualifikazioak exijitzeko epeak Azken Xedapenetatik Seigarrenean jarri beharko dira.
180. **Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren 3. zenbakian** arautzen den prestakuntza espezifikoari dagokionez, alegatzaileak proposatzen du prestakuntza-eskaintza ofizialik ez dagoen edo eskaintza hori nahikoa ez den kasuetan titulu eta ziurtagiri ez-ofizialak onartzea, baita titulu baten edo ziurtagiri baten zati batekin edo kreditu-karga jakin batekin bat datozenak ere, hau da, ez du prestakuntza oso ofizial bat izan beharko.
181. Ez da horri buruzko objekziorik egiten.
182. Egin den beste alegazio baten ildotik, proposatzen da **Bederatzigarren Xedapen Gehigarriaren 2. zenbakian** “*goi-mailako kirola*” kontzeptua “*errendimendu handiko kirola*” kontzeptuarekin ordezteak.
183. *Ut supra* adierazi den bezala ez da objekziorik egiten, baina uste dugu egokiena “*maila*” substantiboa erabiltzea izango litzatekeela, aurreko zenbakietan “*oinarrizko maila*” eta “*maila ertaina*” adierazteko erabili den substantiboa baita

184. Aurreko alegazioaren ildotik, alegatzaileak proposatzen du **Bederatzigarren Xedapen Gehigarriaren 3. zenbakian** “*goi-mailako kirola*” kontzeptua “*errendimendu handiko kirola*” kontzeptuarekin ordezte.
185. Aurreko paragrafoetan adierazitakoa berretsi behar da.
186. Proposatzen da **Bederatzigarren Xedapen Gehigarriari** zenbaki bat gaineratzea, izaera irekia edo mistoa izango duten errendimendu handiko kirol-lehiaketetan lanbide-kualifikazioa argi uzteko. Kasu horretan, errendimendu handiko lehiaketetan aritzeko maila duten kirolarien entrenatzaileei bakarrik exijituko zaie lanbide-kualifikazioa, ez ordea gainerako partaideen entrenatzaileei.
187. Alegatzaileak proposatu duen zehaztapena bidezkotzat jotzen da.
188. Alegatzaileak eskola-adinean dauden kirolariekin jarduerak egiteko prestakuntza arautzen duen **Hamargarren Xedapen Gehigarrian** hainbat aldaketa egitea proposatzen du. Idazkuntza-hobekuntzez gain, proposatzen da argi eta garbi uztea beren funtzioak eskola-adinean dauden kirolariekin garatzen dituzten pertsonen hainbat kasutan Legean aurreikusitako kualifikazioak dituzten profesionalen programazio, zuzendaritza, ikuskapen edo laguntzaren pean garatu beharko dituztela beren jarduerak.
189. Ez da horri buruzko objekziorik egiten.
190. Proposatzen da **Hamalagarren Xedapen Gehigarri** bat gaineratzea kirol-teknikarien eta goi-mailako kirol-teknikarien titulazioen baliokide diren kualifikazioetarako, igaroaldiko kirol-prestakuntzetatik eratorritako kualifikazioetarako, onartuak izateko posibilitatea duten lehenagoko prestakuntza federatiboetarako eta abar.
191. Proposatzen den alegazioarekin bat gatoz, Aurreproiektuak prestakuntza horiei buruzko hainbat aurreikuspen biltzen baditu ere komenigarria dirudielako hori argi uztea, edozein zalantza desagerrarazteko.

192. Alegatzaileak era berean proposatzen du **Hamabosgarren Xedapen Gehigarri** bat gaineratzea, Legetik eratorritako arau-hausteengatiko zehapen-ahalmena Eusko Jaurlaritzan kirol-arloan eskumena duen sailari dagokiola argi eta garbi uzteko.
193. Alegazio hori bidezkoa da, jendaurreko izapidean zalantza hori sortu baita. Inolako zalantzarik gabe, 14/1998 Legearen 119. artikulua lanbide-kualifikazioen eremuko kirol-ikuskatzearen eskumena Eusko Jaurlaritzari esleitu zionez, era berean Eusko Jaurlaritzak izan behar du kirol-arloko eskumena duen sailaren bitartez zehapen-ahalmena egikaritzen duena.
194. **Lehen Xedapen Iragankorraren lehen zenbakian**, idazkuntza hobetzeko zuzenketa batean, proposatzen da “*egokitzen*” (adapten) aditza “*ezartzen*” (implanten) aditzarekin ordezte, dagozkion gaitasunak egiaztatze administrazio-prozedurei buruzko aipamenean.
195. Ez zaio inolako objekziorik egiten proposamen horri. Beharbada ordeztu nahi den aditzean errakuntza bat egin zen, eta “*adapten*” jarri bazen ere “*adopten*” jarri beharko litzateke. Edozein kasutan, alegatzaileak proposatu duen aditza zuzena da.
196. Era berean, alegatzaileak proposamen bat egiten du, hau da, aipatu **Lehen Xedapen Iragankorraren lehen zenbakian** bilduta dagoen gaikuntza, Legea indarrean sartzen denean lanean ari direnentzat, operatiboa ez izatea entrenatzaile-jarduera egiteko dagokion kualifikazioa edukitzea eskatzen duten kirol-federazioetan.
197. Txosten hau sinatzen duenak uste du proposamena onartu egin behar dela, federazio-esparruarekiko errespetutsua izan nahi duelako, eta Legea indarrean sartzen denean pertsona bat klub batean entrenatzaile gisa lanean aritzeak ez du esan nahi automatikoki lanean jarraitzeko gaituta dagoenik federazioak goragoko mailako titulazio bat eskatzen badu.

198. **Lehen Xedapen Iragankorraren hirugarren zenbakiari** dagokionez, idazkuntza hobetzeko proposamen bat egiten da.
199. Ez zaio objekziorik egiten idazkuntza berrirako proposamen horri.
200. 38. alegazioa Aurreproiektuaren Lehen Xedapen Gehigarriaren 4. zenbakiari buruzkoa da. Alegatzaileak proposatzen du estatuko edo nazioarteko lehiaketetan entrenatzaile-lanak lege honetan eskatzen den kualifikaziorik gabe egiten dituztenei ematen zaien gaikuntza espresa eta indibiduala gaikuntza automatiko batekin ordeztea.
201. Ez zaio objekzio juridikorik egiten alegazio horri. Horrela, administrazio-lanaren gainkarga saihestuko litzateke gaikuntza-prozedura formalekin.
202. 39. alegazioa Lehen Xedapen Iragankorraren 5. zenbakiari buruzkoa da. Proposatzen da “prestakuntza egiaztatzeko betebeharra” esaldia “lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko betebeharra” esaldiarekin ordeztea.
203. Ez zaio objekzio juridikorik egiten substantiboaren aldaketari, zuzenketa hau aurreko txostenetan onartu diren beste zuzenketa batzuekin eta oinarrizko erreferentzia gisa lanbide-kualifikazioen egiaztapena duen Lege Aurreproiektuarekin berarekin bat datorrelako.
204. 40. alegazioan proposatzen da Lehen Xedapen Iragankorrean beste zenbaki bat txertatzea, non argi utziko den xedapen honetan gaitutako profesionalek ere Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena eman behar dutela.
205. Ekarpen hori egokia dela iruditzen zaigu.
206. 41. alegazioan proposatzen da Bigarren Xedapen Iragankorrean igaroaldiko prestakuntzei eta lehenagoko prestakuntza federatiboari buruzko aipamenak ezabatzea, izan ere, 34. zuzenketaren arabera, xedapen gehigarrietan txertatzen baitira, eta ez xedapen iragankorretan.

207. Ez zaio objekzio juridikorik egiten alegazio horri.
208. 42. zuzenketan boluntarioei buruzko Bosgarren Xedapen Iragankorrari buruzko iradokizun bat egiten da. Alegatzailearen ustez, boluntarioei profesionalei eskatuko zaien kualifikazio berbera exijituko zaien neurrian, esperientziaren eta prestakuntza ez-formalaren bitartez eskuratutako konpetentziak onartzeko posibilitatea ere eskaini behar zaie, eta horrez gain, lehen laguntza emateko gaitasuna betetzea exijitzeko betebeharra.
209. Gure ustez, proposatu den zuzenketa onartu egin behar da.
210. 43. zuzenketan proposatzen da beste xedapen iragankor bat gaineratzea, euskal kirol-federazioek kualifikazioak epe jakin batean exijitzeari buruzko xedapen federatiboak onartzeko duten betebeharrari buruzkoa. Betebehar hori gaur egun xedapen gehigarri batean dago bilduta. Alegatzailearen ustez beharrezkoa da epe bat ezartzea eta epe hori xedapen iragankor batean biltzea.
211. Ez zaio objekziorik egiten kirol-federazioek kualifikazioei buruzko federazio-araudia legean ezarritakora egokitzeak exijentziari, eta proposatu den muga-eguna 2018ko urtarrilaren 1era geroratzea onartzen da.
212. 44. zuzenketan proposatzen da xedapen indargabetzaile berri bat txertatzea, Eskolako Kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren 1., 2. eta 3. zenbakiak espresuki indargabetuz. Zenbaki horiek ezartzen dituzten kualifikazio-exijentziak Aurreproiektu berriarekin bateraezinak izan daitezke.
213. Alegazio hori zuzena da, eta ondorioz ez zaio objekziorik egiten.
214. 45. zuzenketan proposatzen da Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. artikuluko k) letraren idazkuntza aldatzea, zeina Aurreproiektuaren Azken Xedapenetatik Lehenengoan idazten den. Alegatzaileak proposatzen du aipatu kualifikaziorik gabeko profesionalen kontratazioa arau-hauste oso astun gisa tipifikatzea.
215. Halaxe da, arau-haustea ez du kualifikaziorik eduki gabe jarduteko irregulartasuna egiten duen pertsonarengan bakarrik izan behar eragina, hura

kontratatzeko duen erakundean ere eragina izan behar baitu. Hala eta guztiz ere, arau-haustea, oso astun gisa kalifikatu denez gero, ez da soilik kualifikaziorik gabe kontratatzea izango, baizik eta hura ez exijitzeagatik kualifikaziorik gabeko langileak ez kontratatzea. Gerta daiteke Administrazioak edo enpresa batek kualifikaziorik gabeko teknikari bat kontratatzea baina kontratazio horren aurretik teknikariak egindako agiri-faltsutasuna egotea. Kualifikaziorik ez egote soila ez da enplegatzailearen erruduntasun-leporatzea motibatatu behar duena, baizik eta beharrezkoa ez zen kualifikazioaren exigentzia.

216. 46. zuzenketan proposatzen da Azken Xedapenetatik Lehenengoan administrazioko arau-hauste astun berri bat gaineratzea 14/1998 Legearen 128. artikuluko i) letraren bitartez, eta arau-hauste hori izango da Aurreproiektuaren 11., 18. eta 19. artikuluetan bildutako betebeharrak ez betetzea.

217. Ez zaio objekziorik egiten ekarpen horri.

218. 47. zuzenketan proposatzen da Azken Xedapenetatik Seigarrenean gaineratzea profesionalei lanbide-kualifikazioak aurkezteko exigentzia 2019ko urtarilaren 1era geroratzen dela eta boluntarioei exigentzia hori 2020ko urtarilaren 1etik aurrera egingo zaiela, aurreikuspenen arabera Legea ez baita onartuko 2016. urtera arte.

219. Ez zaio objekziorik egiten ekarpen horri.

220. 48. zuzenketan proposatzen da Legearen aplikazio-eremutik kanpo utzitako jardueren buruzko 1. artikuluko 5. zenbakian kulturaren eremuko dantza-jarduerak gaineratzea, kirol-izaerako dantza-jardueretatik bereizteko, azken horiek legearen aplikazio-eremuaren barnean hartuta egonik.

221. Uste dugu ez litzatekeela behar-beharrezkoa izango zehaztapen hori egitea, Aurreproiektuak lau kirol-lanbide arautzen dituelako, ez ordea kulturaren eremuko lanbideak, eta bestalde, ez zaio objekziorik egiten ekarpen horri, kirol-dantzako kirol-modalitate bat egon badagoelako, estatuan behintzat. Estatuko Aldizkari ofizialak 2015eko maiatzaren 15eko datarekin argitaratu berri ditu Espainiako Kirol Dantza Federazioaren estatutuak. Aurrekoa hala izanik ere, alegatzailearenaz

bestelako idazkuntza bat egiten da, kanpo uztea “kirol-arlokoa ez den dantzari” buruzkoa izan dadin.

222. Azkenik, alegatzaileak proposatzen du 7. artikuluan zenbaki bat txertatzea, noizbehinkako egonaldiak edo bidaiak edo jarduerak direla medio Euskal Autonomia Erkidegoan esku hartzen duten beste herrialde edo autonomia-erkidego batzuetako profesionalak kualifikazio-exijentziatik kanpo uzteko.

223. Egia esan ez litzateke beharrezkoa izango ñabardura hori egitea, Lege Aurreproiektuak aplikazio-eremuaren barnean hartzen baitu lanbidea batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzea. Aurrekoa hala izanik ere, ez da inolako objektziorik egiten 5. artikuluko 9. zenbakiak soilik entrenatzaileak aipatzen dituelako, eta kontuan izan behar da Euskal Autonomia Erkidegoan noizbehinka turismo-taldeekin etortzen diren monitoreak egon badaudela eta ezin zaiela exijitu Aurreproiektuaren kualifikazio-exijentziak betetzea. Proposatutako idazkuntzari, ordea, objektzioa egiten zaio, hainbat alderditan legean bildutako beste erregulazio batzuekin erredundantea delako, eta gainera sinplifikatu egin behar delako.

Alegazioen balorazioa eginda egonik, era berean, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 11. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, ondoren aipatzen diren organoen txostenak jaso dira, eta horien balorazioa egingo dugu ondoren:

I.- EMAKUNDEREN EKARPENAK.

1. EMAKUNDEk, 2015eko martxoaren 5eko datarekin, txosten bat jaulki du, eta bertan *“oso modu positiboan balioesten da arauen testuan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekiko konpromiso esplizitu hau”*.
2. EMAKUNDEk, Aurreproiektuari dagokionez, eta zehazki **erabaki-hartzeari** lotuta, adierazi du ez duela aurreikusten emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua egongo denik.

3. Adierazpen horri buruz adierazi behar da Aurreproiektuak ez duela aurreikusten erabaki-hartzea bilduko duen erakunde edo organorik sortzea, eta horregatik Aurreproiektuan ez da aurreikuspen espresik egiten gai horri buruz.
4. EMAKUNDEk, Legearen ondorioetarako lanbide-kualifikazioa definitzen duen Aurreproiektuaren **2. artikuluko** 6. zenbakiari dagokionez, adierazten du lan-esperientziaren bidetik eskuratutako gaitasunaren edozein onarpen genero-ikuspegitik planteatu beharko dela.
5. Egia esan, EMAKUNDEk ez du testu artikulatua gehitzeko, ezabatzeko edo aldatzeko zuzenketarik egiten, eta bere alegazioa Administrazioak legea betez eta kualifikazioen alorrean etorkizunean egin ditzakeen jardunen gainean proiektatzen du.
6. EMAKUNDEk, gorputz-hezkuntzako irakasle-lanbideari buruzko **3. artikuluari** dagokionez, proposatzen du eskola publikoan jarduteko baldintzetako bat berdintasunaren eta baterako hezkuntzaren alorrean gutxieneko gaikuntza bat edukitzea izan dadila, edukiak emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 31. eta 32. artikuluetan ezarritakoaren arabera irakatsi ahal izan ditzan.
7. EMAKUNDEren ekarpen honi dagokionez hainbat zehaztapen egin behar dira. Lehenik eta behin, Konstituzio Auzitegiak dagoeneko onartu duen bezala (KAE, 194/1998) gorputz-hezkuntzako irakasle-lanbide hori dagoeneko araututa dago, eta gainera lanbide titulatu bat da. Eta Aurreproiektuak egin nahi duen ekarpen bakarra ikasleen osasun eta segurtasunaren alorrean bermeren bat izatea da.
8. Bigarren, aipatu 4/2005 Legeak dagoeneko maila guztietako irakasle guztientzat berdintasunaren eta baterako hezkuntzaren alorreko arau-aurreikuspen bat ezartzen badu, kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege honi ez dagokio bere aginduek xedatzen dutena berriro biltzea. EMAKUNDEren proposamena alde batera utzi daiteke, ez baitu berrikuntzarik sartzen ordenamendu juridikoan. Hain zuzen ere, beste hainbat erakundek Aurreproiektuari dagokionez egiten duten objezioetako bat da Aurreproiektuak

dagoeneko ordenamendu juridikoaren barnean dauden aurreikuspenak biltzen dituela.

9. Gainera, txosten honetan azpimarratu behar da 4/2005 Legearen 31. eta 32. artikuluek ez dutela ezartzen EMAKUNDEren txostenetik ondorioztatzen dena. 31.1 artikulua ezartzen duenez, beren zereginetan genero-ikuspegia integratzeko, hezkidetzan trebakuntza zehatza jaso duten langileak izango dira hezkuntzaren arloa ebaluatu, ikertu eta berritzeaz arduratzen diren organoetan eta irakasleen laguntzarako zerbitzuetan. Ez ditu irakasleak aipatzen. Era berean, 2. zenbakiak xedatzen duenez, Hezkuntza Administrazioak zera bultzatuko du: emakume zein gizon irakasleek presentzia orekatua izan dezatela jakintza-arlo eta hezkuntzako etapa ezberdinetan, eta halaber ikastetxeen zuzendaritza-organoetan. Eta, azkenik, 3. zenbakiak adierazten duenez, irakasleek ikastetxeen zuzendaritza-organoei jakitera eman behar diete emakumeen eta neskato-mutikoen aurka nabaritzen duten indarkeria-zantzu oro.
10. 4/2005 Legearen 32. artikulua ezartzen du Hezkuntza Administrazioak hezkidetzari buruzko prestakuntza-planak jarriko dituela abian; plan horiek irakaskuntzako profesionalei zuzenduta egongo direla, eta unibertsitateaz kanpoko ikastetxe guztiak hartuko dituztela beren baitan. Ondoren, bigarren zenbakian xedatzen denez, ikastetxe bakoitzak prestakuntza-plan horiek abian jartzerakoan neurri egokiak ezar ditzan, Hezkuntza Administrazioak beharrezko egokitzapenak egingo ditu ordutegian eta antolaketan. Gainera, adierazten du mekanismoak ezarriko direla plan horietan aurreikusi diren egutegi eta ordutegiek eragindako ikasleei erantzuteko. Azkenik, hirugarren zenbakiak xedatzen duenez, irakaskuntzako profesionalei -banaka zein ikastetxeen bidez-zuzentzen zaien etengabeko prestakuntzarako eskaintzak, bere edukietan, zeharka, hezkidetzako filosofia barneratu behar du, eta, horrezaz gain, hezkidetzari buruzko ikastaro zehatzak jaso behar ditu.
11. Aurreproiektuaren **7. artikulua** kasu berezietako kualifikazio-baldintzak arautzen ditu. Aurreproiektuak ezartzen duenez Lege hau aplikatuko dela sektore publikoko lanpostuak betetzeko eta zerbitzuak kontratatzeko, EMAKUNDEk adierazten du enplegu publikoko lanpostuak eskuratu, bete eta

sustatzeko hautatze-prozesuak erregulatzen dituzten ondorengo arauak klausula bat izan behar dutela, administrazioaren jardueraren kidego, eskala, maila eta kategorietan emakumeei lehentasuna ematen diena, baldin eta trebakuntzaren ikuspegitik berdintasuna badago, eta kidego, maila, eskala eta kategoria horietan emakumeak % 40 baino gutxiago badira.

12. Egia esan, EMAKUNDEK ez du testu artikulatua gehitzeko, ezabatzeko edo aldatzeko zuzenketarik egiten, eta bere alegazioa Administrazioak legea betez eta kualifikazioen alorrean etorkizunean egin ditzakeen jardunen gainean proiektatzen du.
13. Elkargoko kide egiteari eta Kirol-arloko Profesionalen Erregistroari buruzko **10. artikuluari** dagokionez, EMAKUNDEK iradokitzen du Erregistroari lotutako estatistikek sexuaren aldagaia barnean har dezatela.
14. Ez zaio inolako objekziorik egiten hori guztia etorkizunean gertatzeko aukerari, baina uste dugu, lehenik eta behin, Erregistroaren xehetasun estatistikoek, halakorik balego, Legearen erregelamendu betearazlean zehaztuta egon behar dutela. Gainera, 4/2005 Legearen 5. artikulua ezartzen duenez, osorako erakundeek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan duten eskumena, Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokionez, ondoko eginkizunetan gauzatuko da: estatistikak berdintasun-printzipioari egokitzeko metodologia diseinatzea eta horri buruzko plangintza egitea, bai eta estatistikak egokitu eta eguneratzea ere, horien bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak esku hartzen duen eremu guztietan emakumeek eta gizonek bizi duten egoeraren ezberdintasunak ezagutu ahal izateko. Beraz, betebeharrak horrek ere ez du berrikuntzarik sartzen ordenamendu juridikoan.
15. **11. artikuluari** dagokionez, EMAKUNDEK lanbidean jarduteko printzipioen eta betebeharren barruan berdintasuna sustatzea oso modu positiboan balioesten duen arren, uste du genero-ikuspegiak gainerako printzipioetan eragina izan beharko zukeela.
16. Uste dugu Aurreproiektuak ez dituela errepikatu behar gure ordenamendu juridikoan dagoeneko bilduta dauden, hau da, berritzen ez duten preskripzioak,

eta beraz, 4/2005 Legearen aurreikuspenen osagarri diren aurreikuspenak bakarrik gaineratu behar ditu. Aurrekoa hala izanik ere, EMAKUNDEk egindako iradokizunetako batzuk txertatu dira.

17. Azkenik, EMAKUNDEn beharrekotzat jotzen dute Legearen aurreproiektuaren gaztelaniazko testuan genero maskulinoan idatzitako terminoen (adibidez, monitores, entrenadores, directores, destinatarios, titulados, eta abar) berrikuspena eta egokitzapena egitea.
18. Ez zaio objekziorik egiten azken ohar horri.

II.- OSASUN SAILAK EGITEN DITUEN OHARRAK.

19. Osasun Sailak hainbat ohar egiten dizkio Aurreproiektuari, eta ohar horiek María Eugenia Ugartondo Segura andreak izenpetu ditu, 2015eko martxoaren 4an, Sail horren Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzaren izenean.
20. **5. eta 11. artikuluetan** gaineratzen diren osasunari buruzko aipamenei dagokienez, aipatu zuzendaritzak adierazten du ados dagoela proiektatutako testuarekin.
21. Aitzitik, aipatu zuzendaritzak objekzioak egiten ditu kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babestea helburu duen **18. artikuluko lehen, bigarren eta hirugarren zenbakiei** dagokienez, eta ezabatzea edo birformulatzea proposatzen du. Laugarren eta bosgarren zenbakiei dagokienez ez du objekziorik egiten.
22. Osasun Sailak egiten duen lehen objekzio orokorra da kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasunaren eta segurtasunaren babesak, kirol-jarduerari lotuta badago ere, ez duela eraginik kirol-arloko lanbideen funtsezko alderditan. Hori lotuta, adierazten du aginduak arauaren helburuaren beraren mugak gainditzen

- dituela, helburua, 1. artikuluaaren arabera, kirol-arloko berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzakoak diren hainbat alderdi arautzea izanik.
23. Gure ustez, eztabaida ezina da osasunaren eta segurtasunaren babesa dela legearen benetako *leitmotiva*, bere benetako izateko arrazoia, eta ez da Legea ulertzen, eta ezingo litzateke justifikatu, kirol-arloko profesionalen zerbitzuen hartzaileen osasuna eta segurtasuna babesteko helburu hori gabe. Eta babes hori Aurreproiektuan hainbat mekanismoren bidez instrumentatzen da, mekanismo horietako bat kirol-arloko profesionalen gutxieneko kualifikazio bat exijitzea izanik.
24. Osasun Sailak, bestalde, argudiatzen du kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasun eta segurtasunari lotutako gaiek zeharkako izaera dutela eta arau-sakabanaketaren eragozpena sortzen duela, eta helburuak lantzerakoan arretaz jardun behar dela, ordenamendu juridikoa behar ez den moduan gizendu gabe. Ez zaio arrazoirik falta organo alegatzaileari arau-aurrezpenaren printzipioaren ohiko urratzeari eta xedapen orokorren ugaltze desordenatuari dagokionez. Eta horrek, xedapen orokorren lantzea gauzatuko den konpetentzia-mugak gainditzeko arriskua dakar. Gure ustez, aurreproiektuak ondo zaintzen ditu alderdi horiek, izan ere, ezartzen baitu Eusko Jaurlaritzaren betebeharra izango dela kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatzea “*bere eskumenak erabiliz*”, hain zuzen ere.
25. **18. artikuluko lehen zenbakiari** dagokionez, zeinak ezartzen duen kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatuko duela Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak erabiliz; eta, horretarako, lege honek arautzen dituen kirol-arloko lanbideetan jarduteko kualifikazioak edukitzeari dagokionez, beharrezko baimen, erantzukizunpeko adierazpen, komunikazio, ebaluazio, egiaztapen eta ikuskapeneko sistemak ezarri ahal izango dituela, Osasun Sailak alegatzen du errealitatean ez dakarrela ordenamendu juridikoaren berrikuntzarik, botere publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa bermatzeko duten betebeharra ezartzen duen konstituzio-agindua erreproduzitzen baitu, eta, era berean, osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean eta osasun publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrean aurkitzen diren aukera-sorta bat hartzen du barnean.

26. Gure ustez, lehen zenbakia aurreikuspen konstituzional orokor horretaz haraindi joaten da erabat, eta, azken batean, Eusko Jaurlaritzari kirol-arloko lanbideetan jarduterakoan kualifikazioak egiaztatzeko hainbat mekanismo erregelamenduz ezartzeko egindako gaikuntza garrantzitsu bat biltzen du. Bigarren, 14/1986 Legearen 29. eta 30. artikuluek, baimentze-, egiaztatze- eta ikuskatze-sistemak arautzen dituztenek, establezimendu eta zentro sanitarioak aipatzen dituzte, eta eremu material horrek ez du zerikusirik Aurreproiektu honekin. Hirugarren, 29. artikulua Aurreproiektu honetan arautzen ez den baimen sanitario bat aipatzen du. Laburbilduz, ez gaude, inolaz ere, arau-errepikatze baten aurrean.
27. **18. artikuluko bigarren zenbakiak** ezartzen du profesionalen elkargo bakoitzak bere kideekiko daukan diziplina-ahalari kalterik egin gabe, administrazio publiko eskudunak arduratuko direla lege honek arautzen dituen lanbideen arloan zerbitzuak ematen dituzten pertsona eta erakundeek egiten duten publizitatea objektiboa, zuhurra eta egiazkoa izateaz. Halaber, administrazio publiko horiek arduratuko dira publizitate horrek kirolarien osasun eta segurtasunaren aurkako kirol-jarduerarik ez bultzatzeaz, jarduera eta preskripzioen oinarri zientifikoa zehatz-mehatz errespetatzeaz eta esperantza faltsurik ez sortzeaz. Osasun Sailaren ustez, zenbaki horrek ez dauka berritasun handirik –jardueren oinarri zientifikoa zehatz-mehatz errespetatzea salbu– eta bere eraginkortasuna oso txikia da, nolabaiteko asmo-deklarazio bat besterik ez baita. Eta gaineratzen du aurreikuspen horien oinarria dela Aurreproiektuak osasunerako eragin onuragarria lortzera bideratutako jardueratzat jotzen duela kirola.
28. Gure ustez, bigarren zenbakiak irakasgaiaren arabera eskumena duen Administrazio Publikoari agindua ematen dio kirol-arloko lanbideen eremuko publizitateak pertsonen osasun eta segurtasunaren aurkako kirol-jarduerarik sustatuko ez duela bermatzen duten neurriak har ditzan. Beste eremu batzuetan, adibidez emakume eta gizonen berdintasunaren eremuan, existitzen diren arau-aurreikuspenen antzekoa da arau-aurreikuspen hori. Ez dira asmo-deklarazio soilak; mandatu zehatzak dira. Eta Aurreproiektuak benetan egiten duena zera da: Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legean bilduta dagoen eta, noski, profesional sanitarioei eskusiboki bideratutako preskripzio bat kirol-arloko profesionalen eremura lekualdatu. 44. artikulua adierazten du profesional sanitarioek jendeari eskainitako zerbitzuen

eta prestazioen publizitateak *“jardueren eta preskripzioen oinarri zientifikoa zehatz-mehatz errespetatu beharko duela, eta objektiboa, zuhurra eta egiazkoa izango dela, esperantza faltsurik ez sortzeko edo oinarririk gabeko kontzeptuak ez hedatzeko”*.

29. Egia esan, Osasun Sailak adierazten duen bezala, aurreko oharra ez dira nahiko arrazoia haien legezkotasunari dagokionez objekzioen bat egiteko.
30. Hala eta guztiz ere, Osasun Sailak uste du **18. artikuluko hirugarren zenbakiak** Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 4.1 artikulua araberak Administrazio Publikoen multzoaren arau-ekimenaren oinarri diren printzipioak urratzen dituela. Sailaren ustez, hirugarren zenbakiak osasun produktuen eta medikamentuen garantiei eta arrazoizko erabilerari buruzko uztailaren 26ko 29/2006 Legeak berak ere aurreikusten ez duen debekua hartzen du barnean. Aurreproiektuaren 18. artikuluko hirugarren zenbakiak ezartzen du Lege honek ezartzen dituen arauen menpe dauden profesionalek ezin izango dutela zerbitzuen publizitaterik egin zerbitzu horiek osasunari onura egiten diotela egiaztatzeko ebidentziarik ez badago. Halaber, debekatuta izango dute mirarizko zerbitzu edo produktuen publizitatea egitea.
31. Osasun Sailak ateratzen duen ondorioaren oinarria da publizitate-debekua ez dela mugatzen osasunean ondorio kaltegarriak sortzen dituzten edo sor ditzaketen zerbitzuetara, izan ere, arauen menpe dauden profesionalek egiten duten edozein zerbitzu hartzen baitu barnean. Eta gaineratzen du zerbitzuen komertzializazioari gehien lotuta dagoen jardueretako bat, hau da, publizitate-jarduera, betetzeko debekua arau orokor bihurtzen duela, zeina, gainera, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 legearen 24. artikulua mandatu espresaren bitartez bermatuta dagoen. Eta haren ustez urratze larriena proportzionaltasun-printzipioari lotuta dagoena da.
32. Ezin gara bat etorri Osasun Sailaren argumentazioarekin, izan ere, Aurreproiektuak Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen 44. artikuluan profesional sanitarioei dagoeneko aplikatutako arau-aurreikuspen baten transposizioa besterik ez baitu egin: *“Ezin izango da baimendu gabeko jarduera edo produktu sanitarioen publizitaterik egin, edota zerbitzu edo produktu horiek osasunari onura egiten diotela*

egiaztatzenko ebidentziarik ez badago. Halaber, debekatuta izango dute sinestez-izaerako produktu eta zerbitzuen eta mirarizko produktuen publizitatea egitea”.

33. Gainera, Osasun Sailak argudiatzen duen aginduak, hau da, 17/2009 legearen 24. artikulua, ez du ezartzen mugarik gabeko publizitate-jarduerako printzipio bat, baizik eta guztiz aurkakoa. Bigarren zenbakiak ezartzen duenez, araututako lanbideetan komunikazio komertzialei *“ezin izango zaizkie ezarri erabateko debekuak”* baina, *sensu contrario*, partzialak bai. Eta publizitate-mugapenak ezartzeko posibilitatea espresuki onartzen du: *“Ezarri ahal izango diren mugapenak ez dira diskriminatzaileak izango, betiere interes orokorreko premiazko arrazoi batek justifikatu beharko ditu, eta neurrikoak izango dira”*.
34. Osasun Sailaren ustez, 3. zenbakiaren arabera, kirol-arloko profesionalek Euskal Autonomia Erkidegoan, beste edozein sektore profesionalek ez bezala, osasunari onura nabarmena eragiten dioten zerbitzuen publizitatea bakarrik egin ahal izango du. Mugapen hori, neurriz kanpoko izateaz gain, aipatu Sailaren ustez segurtasun juridikoaren printzipioa urratzen duen mugapena da, mugapena osasunaren onurari buruzko ebidentziarik ezari lotzen zaiolako.
35. Dagoeneko *ut supra* adierazi da ez dela egia publizitate-mugapena lanbide-sektore bakar batean ere ez dagoenik. Hain zuzen ere, barnean hartzeko argudiorik sendoena da Aurreproiektua beste lanbide batzuen jarduna, lanbide sanitarioena, arautzen duen beste legezko xedapen batean oinarritzen dela, eta orain arte ez du inork objekziorik egin bere konstituzionaltasunari, proportzionaltasun-kanonari eta abarri dagokienez.
36. Azkenik, Sailaren ustez hirugarren zenbakiak legezkotasun-printzipioa urratzen du arau bat egon badagoelako, hain zuzen ere 1907/1996 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, osasun-helburua duten produktuen, jardueren edo zerbitzuen publizitateari eta sustapenari buruzkoa. Xedapen horrek 4. artikuluan hainbat produktu eta zerbitzuren debekua ezartzen du, segurtasun juridikoa bermatzeko adinako xehetasunarekin. Eta gainera, agindu hori 149.1.16 artikulua babesean emandako oinarritzko arauditzat jotzen da.
37. Saila errakuntza bat egiten du: profesional ez-sanitarioen zerbitzuen – Aurreproiektuan arautzen direnak, adibidez– publizitate-mugapena ustez osasun-helburua duten zerbitzuekin identifikatzen du.

III.- HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDEZAREN TXOSTENA.

38. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak ez dio objekziorik egiten Aurreproiektuari, eta soilik adierazten du Aurreproiektuaren **10. artikuluan** arautzen den Kirol-arloko Profesionalen Erregistroan bi hizkuntzen erabilera ziurtatu beharko dela azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta horrelaxe adierazi beharko da dagokion erregelamenduan.
39. Egia esan, sailburuordetzak ez du testu artikulatua gehitzeko, ezabatzeko edo aldatzeko zuzenketarik egiten, eta bere alegazioa Administrazioak legea betez etorkizunean egin ditzakeen jardunen gainean proiektatzen du.

IV.- HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILEKO AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA.

40. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Aholkularitza Juridikoak 2015eko martxoaren 12an txosten bat jaulki zuen.
41. **1. artikuluko 2. zenbakiari** dagokionez, zeinak ezartzen duen Legea aplikatuko dela *“kalterik eragin gabe Estatuak, hala badagokio, lanbideen zerbitzuetaako eta elkargoetarako onartzen duen oinarrizko legeriari”*, gomendatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoak gai horietan eskumenak esleituta dituen gero, erreferentziak ez dezala barnean hartu soilik Estatuko oinarrizko legeria.
42. Ez zaio objekzio juridikorik egiten gomendio horri.

43. Aurreproiektuaren **1. artikuluko 5. zenbakiari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoak gomendio bat egiten du, lanbide arteko gutxieneko soldatatik beherako konpentsazio ekonomikoak jasotzea ordainsari ekonomikotzat joko ez dela dioen erreferentzia ezabatzeke. Gomendatzen da tarteki hori ezabatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legean aurreikusten den boluntariotza-kontzeptuarekin bat ez datorrela uste delako.
44. Gai honi buruz, lehenik eta behin, argitu behar da aipatu testua ez dela agertzen jendaurrean jarritako testu ofizialean. Aurreproiektuaren lantze-prozesuan erabili zen lan-zirriborro bat da.
45. Aurrekoa hala izanik ere, Aholkularitza Juridikoak planteatzen dituen kontsiderazio juridikoak oso baliagarriak iruditzen zaizkigu, eta merezi du horiei buruzko azterketa sakonagoa egitea, aurreproiektuaren agindu nuklearretako baten aurrean gaudelako, izan ere, profesionalen definizioa testuan hainbat modutan proiektatzen baita. Mugapen positibo bat dago –beren jarduera ordainsari bidez garatzen duten pertsonak dira–, baita mugapen negatibo bat ere –beren jarduera boluntariotza-erregimenean garatzen dutenak kanpoan geratzen dira–. Gure ustez, zirriborro haren tarteki hori bat dator 17/1998 legearen 2. artikuluekin, ordainsari ekonomikoaren betebeharra, kontzeptu juridiko zehaztugabea dena, Aurreproiektuak segurtasun juridikoko exijentziengatik bakarrik zehazten baitu.
46. Uste dugu ez dagoela antinomia bat, hau da, ordenamendu juridiko berdinekoak diren eta denbora-eremu eta eremu espazial, pertsonal eta material berdinean biltzen diren baina elkarren artean bateraezinak diren ondorioak esleitzen dituzten edo baldintzak biltzen dituzten bi arau. Aurreproiektuak ez du ordainsari ekonomikoaren debekuari aurka egiten dion aurreikuspenik, izan ere, kontzeptua zehazten baitu soilik Aurreproiektuaren ondorioetarako. Edonola ere, 17/1998 Legearen lerrun hierarkiko berdina duen arau baten aurrean gaude, eta ez da arazorik izango Lege berriak gai hori zehazteko. Ezingo litzateke aplikatu, antinomiaren kasuan, ("*lex superior derogat legi inferiori*") irizpide hierarkikoa. Lerrun berekoak izaterakoan, antinomiaren kasuan, honako irizpide kronologiko hau aplikatuko litzateke: "*lex*

posteriori derogat legi priori”). Eta, edozein kasutan, (*“lex specialis derogat legi generali”*) espezialitate-irizpidea aplikatuko bagenu, antinomiaren kasuan txostenaren xede den Aurreproiektuan bildutako preskripzioa aplikatu beharko litzateke.

47. Aurrekoa hala izanik ere, adierazi behar da Eusko Jaurlaritzaren konpromiso bat dagoela, legebiltzarrean adierazitakoa, Aurreproiektuaren izapidetzean profesionalaren eta boluntarioaren kontzeptuak mugatzen dituen xedapenen bat txertatzeko, kirol-erakundeei ziurtasun juridiko handiagoa eta ekonomikoki garrantzi txikia duten ekarpenak jasotzen dituzten pertsonen babes handiagoa emateko xedez. Espainian duela gutxi arau-aurrekari bat badago: Errioxako ariketa fisikoari eta kirolari buruzko martxoaren 23ko 1/2015 Legearen 19. artikulua honako hau ezartzen du: *“Dedikazio profesionalik gabeko teknikaritzat hartuko dira jarduera egikaritzen duten pertsonak, ordainduta izanik ere, hilabeteko jasotako zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa baldin bada, baita jardueratik eratortzen diren gastuen konpentsazioa bakarrik jasotzen dutenak”*.

48. Aholkularitza Juridikoak adierazten duen bezala, **2. artikulua**, erregulazio-xede diren lanbideak zehazten dituen, Legearen oinarritzko zutabeetako bat da. Aipatu Aholkularitzak ez du inolako objektuorik egiten. Soilik **3. zenbakiaren** idazkuntzaren hobekuntza bat proposatzen da, honako idazkuntza hau proposatuz: *“Lanbide bakoitzaren funtzio-eremu orokorra ezartzen dute lege honetan bildutako lanbideen eskumenen zerrendek, eta izaera orientatzailea dute, ez ordea mugatzailea”*.

49. Ez zaio objektuorik egiten idazkuntza hobetzeko proposamen horri.

50. Aurreproiektuaren **3. artikuluan** bilduta dagoen Gorputz Hezkuntzako Irakasle Lanbideari dagokionez, Aholkularitza Juridikoak uste du proposatutako idazkuntzak, non ezartzen den Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua tituluari edo haren baliokideari lehentasuna emango zaiola, EAEri esleitutako konpetentziak gaitzen ditu.

51. Objektzio horri dagokionez zenbait oharpen egin behar dira. Lehenik eta behin, ez da inoiz ere ahaztu behar Konstituzio Auzitegiak, 2014ko urtarrilaren 30eko Osoko Bilkuraren epaian, jadanik irmoki errepikatu duela honako hau: *“edozein kasutan, Autonomia Erkidegoek titulazioari eta esperientziari lotutako irizpide gehigarriak ezarri ahal izango dituzte, irakasgai bat emateko garaian irakasle batzuei beste batzuen aurrean lehentasuna ematea dakartenak”*.
52. Era berean, Aurreproiektuaren proposamenak Kataluniako kirolaren lanbideen egikaritzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legearen 3. artikuluko bigarren zenbakia hartu du oinarritzat, hezkuntzaren alorrean eskumen-esparru berdintsua izanik honako hau adierazten duena: *“Hezkuntza-administrazioak gorputz-hezkuntzako unibertsitate-prestakuntza espezifikoa balioetsi dezake lehen hezkuntzarako, eta jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako unibertsitate-prestakuntza derrigorrezko bigarren hezkuntzarako, batxilergorako eta lanbide-heziketarako”*. Agindu horri ez zitzaion inolako eskumen-erantzukirik egin Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzerdean. Aurrekoa hala izanik ere, ez zaio objektziorik lehentasunezko balioespen hori ezabatzeari.
53. **5. artikuluko 8. zenbakiari** dagokionez, zeinak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziaturaren edo Graduaren titulua eskatzen duen, eta horrez gain, pertsona horrek prestakuntza espezifikoa izatea eskumenak garatzen dituenean kirolarien egoera fisikoa berreskuratu eta hobetzen, lesioak aurreikusten, eta balorazio-testak eta antzekoak egiten, Aholkularitza Juridikoak gomendatzen du zehazteko ahalegina egitea, zer prestakuntza motari buruz ari den ezin delako jakin, eta horrek erabat oztopatuko du dagokion erregelamendu-garapena egitea.
54. Aholkularitza Juridikoaren oharrarekin bat gatoz, izan ere, Aurreproiektuak ahalik eta zehaztasunik handienarekin kasu bakoitzean eska daitezkeen kualifikazioak, prestakuntzak eta abar adieraztea baita egokiena. Hala eta guztiz ere, hori nahi izan arren, kasu honetan ezinezkoa da zehaztasun hori egitea, eremu horretan hainbat eduki, izaera, iraupen eta jatorri dituzten prestakuntza askoren aurrean gaudelako. Eta hain zuzen ere arazo horietarako

Auzitegi Gorenak balioa ematen dio erregelamendu-lankidetzari. Aurreproiektuak erregelamendu-lankidetzara eskatzen du hain zuzen ere sinplifikazioa bultzatzeko eta legea gehiegizko legalismo eta zurruntasunean eror dadin saihesteko, eta adibidez horixe gertatuko litzateke egun dauden prestakuntza guztiak zehatz-mehatz erregulatzeari ekingo balio, are gehiago hain dinamikoa eta luzea den prestakuntzen eremu batean.

55. **7. artikuluari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoak uste du artikulua **titulua** –“*Kasu berezietako kualifikazio-baldintzak*”– ez datorrela bat artikulua **edukiarekin**.

56. Gure ustez artikulua **edukiak** kualifikazio-baldintzak aipatzen ditu honako kasu hauetan:

- a) Lanbideetan beste autonomia-erkidego batzuetan jardutea. Kasu horretan adierazten da legearen kualifikazio-baldintzak ez direla aplikagarriak izango.
- b) Estatuko edo nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten klub eta kirol-elkarteetako lanbide-jardunaren kasua. Kasu horretan, kirol-erakundeek egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badaukate bakarrik eskatzen dira kualifikazio-baldintzak.
- c) Lanbidea Espainiako kirol-federazioetako eta gainerako erakundeetan gauzatzea, Lanbidea batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko zentroetan gauzatzen bada. Kasu horretan, Legeak ezartzen dituen kualifikazioak exijitzen dira.
- d) Lanbidea sektore publikoan gauzatzea. Zehazten da kualifikazioak sektore publiko autonomikoan, foralean eta tokikoan exijituko direla.

57. **7. artikuluko 1. zenbakiari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoak adierazten du arauaren aplikaziorako lurralde-eremua errepikatzen duela, 1. artikuluan dagoeneko definituta baitago, eta beraz errepikapena dakar.

58. Ez zaio objektziorik egiten lehen zenbakia ezabatzeari.

59. Aholkularitza Juridikoak hainbat oharpen egiten ditu **7. artikuluko 2. eta 3. zenbakiei** dagokienez. Artikulu horren azterketa Aurreproiektuaren 1. artikuluari lotuta egiten da, Legearen aplikazio-eremuari buruzkoa baita. Horri lotuta, Aholkularitza Juridikoak adierazten du nolabaiteko definiziorik eza dagoela arauaren eremu objektibo eta subjektiboan, badirudielako ondoriozta daitekeela Legeari lotuta daudela EAEn ohiko moduan lan egiten dutenek, hori espresuki adierazten ez den arren. Eta, era berean, adierazten du zehaztu beharko litzatekeela EAEn ohiko moduan jarduera gauzatzea zeri esaten zaion, edota zer den *“lanbidea batez ere EAEn gauzatzea”*.
60. Aholkularitza Juridikoak arauaren aplikazio-eremua modu egokian mugatzeak duen garrantziari buruz egiten duen hausnarketarekin bat etortzea nahitaezkoa da, guk ere uste dugulako arauaren funtsezko zatia dela, eta zuzen konfiguratu behar dela arauaren helburuen lorpenean arrakasta izateko. Hori esan ondoren, aipatu ere egin behar da arau-proiektu orok bere aplikazio-eremu subjektiboa eta objektiboa mugatzeko duen zailtasun orokorra. Eusko Legebiltzarrak historian zehar onartutako legeak xehetasunez aztertzen badira, erraz ikus daiteke aplikazio-eremuen definizioa kontzeptu juridiko irekietan oinarrituta dagoela. Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legeak, aplikazio-eremuari buruzko 2. artikuluan adierazten du Legea *“beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituzten elkarteei aplikatuko zaiela”*. Horixe bera dio Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legeak, bere bigarren artikuluan era berean ezartzen baitu Legeak arautuko dituela *“batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten fundazioak”*. Zer ulertzen da *“batez ere”* esaten denean? Aholkularitza Juridikoak egiten duen oharren arabera arrazoigarria da Aurreproiektuaren 1. artikuluko 2. zenbakian “ohiko” adjektiboa eranstea. Hori erabat bateragarria da egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten kirol-erakundeetako profesionalei (7. artikulua) edo lanbidea batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko zentroetan gauzatzen duten Espainiako kirol-federazioetako profesionalei (7. artikulua), ez baitago kontraesanik 1. artikuluan xedatuta dagoenarekin.
61. **7. artikuluko 4. zenbakiari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoaren ustez ez litzateke beharrezkoa izango, aurreikuspen hori 1. artikuluko 3. zenbakian dagoeneko bilduta dagoelako.

62. Egia esan, 7. artikuluko 4. zenbakiak 1. artikuluko 3. zenbakian ez dagoen ñabardura garrantzitsu bat sartzen du. Lehen artikulua ezartzen du sektore publikoan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko egiten den aipamen hori, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Toki-administrazioetako sektore publikora mugatu behar dela ulertu behar dela, eta 7. artikulua, bestalde, zehazten du Legea 2 arlotan aplikatzen dela: lanpostuak betetzeko eta zerbitzuen administrazio-kontrataziorako. Aurrekoa hala izanik ere, ez da objekziorik egiten bi aurreikuspen desberdin horiek lehen artikuluan bateratzeko.
63. Legean bilduta dauden kualifikazioen eta tituluen erreferentziak prestakuntza-eskaintza eta lanbide-kualifikazio ofizial berrietara egokitzeari buruzko **8. artikuluari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoaren ustez eduki hori berez egokiagoa da xedapen gehigarri baterako. Aholkularitza Juridikoak dioenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko martxoaren 23an onartutako izaera orokorreko xedapenak egiteko jarraibideen arabera, xedapen gehigarri horiek agindua bete behar den epea finkatu behar dute.
64. 8. artikulua, egia esan, ez du Eusko Jaurlaritzari emandako agindurik biltzen, izan ere, testu arautzaileak ezartzen baitu nori dagokion –Eusko Jaurlaritza– arazo jakin bat ebaztea hura gertatuko balitz. Aurreikuspena irekia eta intenporala denez eta berez agintaldi bat eratzen ez duenez, ez dago zertan epe bat ezartzerik.
65. Aholkularitza Juridikoak ohartarazten du **10. artikuluko 3. zenbakia** aldatu egin behar dela. Jendaurrean jarritako testuak honako hau ezartzen zuen: *“Kirol-arloko Profesionalen Erregistroan izena emanda egoteko eta, bidezko bada, elkargoko kide egiteko betekizuna, ezin zaie eskatu lan- nahiz administrazio-arloko zuzenbideak araututako zerbitzu-harreman baten bidez Administrazio Publikoari lotuta dauden profesionalei”*. Konstituzio Auzitegiak irailaren 22an 150/2014 Epaia eman zuen, eta epai horrek Euskal Autonomia Erkidegoko profesionalen elkargoei buruzko azaroaren 21eko Eusko Legebiltzarraren 18/1997 Legearen 30.2 artikuluko hasierako tartekiaren aurka planteatutako konstituzio-kontrakotasuneko arazoa ebatzi zuen, eta konstituzio-kontrakotzat

jo zuen. Konstituzio Auzitegiaren arabera, enplegatu publikoak derrigorrez kolegiatzetik salbuestean, Administrazioaren kontura ari badira lanbidean, lanbide-elkargoei buruzko estatu-legean jasotzen ez den salbuespen bat ezartzen du. Auzitegiaren ustez, Estatuak eskumena izanik derrigorrezko kolegiatzea ezartzeko, eskumena du, halaber, salbuespenak ezartzeko.

66. Bestalde, Aurreproiektua egin ondoren –jendaurrean jarritako bertsioa 2014ko urriaren 5koa da–, aipatu epaia argitaratu zen 2014ko urriaren 28an. Ondorioz, hirugarren zenbakia osorik ezabatzen da.

67. **10. artikuluari** dagokionez ere Aholkularitza Juridikoak adierazten du badirudiela kontraesan bat dagoela 2. zenbakian, erregistro-sistema bat sortzen dela dirudielako, eta amaierako tartekian, ordea, erregistro-organo bat dela dirudi. Eta hori adierazteko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenetan oinarritzen da.

68. Aholkularitza Juridikoak esandakoarekin bat gatoz, eta uste dugu Kirol-arloko Profesionalen Erregistroa sistema bat bezala eratuta dagoenez gero, ez ordea administrazio-organo bat bezala, bidezko dela 2. zenbakia aldatzea, erregistro-funtzio horiek kirol-arloan eskumena duen zuzendaritzaren eremuan kokatzeko.

69. Aholkularitza Juridikoak iradokizun bat egiten du Aurreproiektuaren **11. artikuluan** bilduta dauden printzipio eta betebeharrak dagokienez, printzipioak eta betebeharrak nahasten baitira. Horretarako, uste du egokiagoa izango litzatekeela printzipioak eta betebeharrak bananduta tratatzea.

70. Uste dugu Aholkularitza Juridikoak printzipioen eta betebeharren artean egiten duen bereizketa, plano teoriko eta denboragabea, erabat egokia dela. Hala eta guztiz ere, 11. artikuluko biltzen dituen item guztiek benetan betebeharrak edo eginbeharrak izateko bokazioa dute, horietako batzuek aldi baterako inolako berronespenik ez badute eta modu iragankorrean printzipio-izaera badute ere. 11. artikuluko betebeharrak horiek ez betetzeak hainbat erantzun ditu: ez-betetze batzuk dagoeneko aurreikusita daude indarrean dagoen 14/1998 Legean; beste ez-betetze batzuk 12/2012 Legean daude aurreikusita; beste batzuk Aurreproiektuan bertan daude bilduta (azken xedapenetatik lehenengoa

eta bigarrena); beste ez-betetze batzuk 6/1993 Legean daude aurreikusita, eta abar. Testuak, noski, era berean profesionalen elkargoek eta elkarteek beren kideei Aurreproiektuaren 11. artikuluan aurreikusitakoaren arabera diziplina-erantzukizuna exijitzeko euren berezko kodeak edo erregelamenduak onartzeko posibilitatea irekitzen du. Legeak betebeharroriek printzipio gisa katalogatzen baditu, badirudi haien ez-betetzeak inolako zehapen juridikorik izateko posibilitatea galarazten ari dela.

71. **11. artikuluari** dagokionez, idazkuntzan hainbat hobekuntza proposatzen dira. Lehenik eta behin, uste dugu c) zenbakian erredundantea dela «*fisikoki zuzenean han egonda*» adieraztea. Proposatzen da *zuzenean* hitza ezabatzea, nahikoa delako.

72. Hobekuntza teknikoko proposamen horrekin bat gatoz.

73. Era berean uste dugu «*Lege honetan aurreikusten diren kasuetan izan ezik*» tartekia ez dela argigarria, legearen ezein zatitan ez delako argitzen zein diren kasu horiek.

74. Aurreproiektuan zuzeneko presentzia beharrezkoa ez den hainbat kasu adierazten dira dagoeneko, adibidez Kirol Zuzendari lanbideari buruzko 6.1 artikulua. Beste adibide bat 4. artikuluko 10. zenbakia da, Kirol Monitorearen berezko zerbitzuak emateko, kirol-jarduerak egiten diren bitartean zerbitzuak ematen diren toki berean egon beharko dela ezartzen duena, salbu bakar-bakarrik plangintza- eta programazio-funtzioak betetzen direnean.

75. Azkenik, eta **11. artikuluko k letrari** dagokionez, adierazten da “gizon” substantiboak pluralean egon behar duela.

76. 11. artikuluko k letra “*kirolean emakumeen benetako berdintasuna lortzen laguntzen duten eta emakumeak kirol-maila guztietan aritzea ahalbidetzen duten baldintzak*” bultzatzeari buruzkoa da. Hobekuntza teknikoko proposamenarekin bat gatoz eta “*emakumea*” hitza pluralean jarriko da.

77. Aholkularitza Juridikoak **12. artikulua** ezabatzea gomendatzen du. Haren ustez, ez du inolako espezifikotasunik sartzen, legedi orokorrera bidaltzen baitu profesionalak lanbide-sozietateetan antolatzeko aukerari dagokionez. Era berean, Aholkularitza Juridikoak honako hau adierazten du: *“Sozietate-eredu bat izateko berezko betebeharra ere ez dago justifikatuta, ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legeak lanbide-antolakuntzako beste modu batzuk aurreikusi dituelako oraindik orain, ezinbestean sozietate-motakoak ez direnak, hala nola “erantzukizun mugatuko ekintzailea”*”.
78. Lehen oharrari dagokionez, adierazi nahi dugu agindua, funtsean, Kataluniako Parlamentuak 3/2008 Legearen bitartez, zehazki 10. artikuluan onartutako legezko testuaren erreprodukzioa dela. Edonola ere, ez zaio objekziorik egiten bigarren zenbakia ezabatzeari, *“legeak aurreikusten duten edozein sozietate-formaren arabera eta betiere estatuko legeak lanbide-sozietateei buruz ezartzen dituzten baldintzak betez”* aipatu besterik ez baitu egiten. Bestalde, aipatu behar da 12. artikulua hiru zenbakietatik bitan espezifikotasunen bat biltzen dela. Lehen zenbakian Lanbide-sozietateei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 legean aurreikusitako posibilitate orokorra biltzen da, hau da, kirol-arloko lanbideetan lanbide-sozietateen bitartez jarduteko posibilitatea. Hala eta guztiz ere, tarteki bat edo salbuespen logiko bat sartzen da: kirol-arloko lanbideen jarduna enplegu publikoan edo hezkuntza-arloan. Eta hirugarren zenbakiak, Aholkularitza Juridikoak berak onartzen duen bezala, aurreikuspen berezi bat biltzen du, kirol-arloko lanbideen jardunean tituludunen presentzia fisikoa bermatzeko hartu beharreko neurriak hartu beharko dituztela lanbide-sozietateek. Aipamen horri eustea beharrezkoa da, izan ere, Aurreproiektuaren beste zati batzuetan presentzia fisikoaren betebeharra pertsona fisikoak diren profesionaletan oinarritzen baita, eta kasu honetan sozietateei buruz ari da, azken horiek pertsona juridikoak izanik.
79. Aholkularitza Juridikoaren bigarren oharrari dagokionez, zehaztu behar da 12. artikulua berez ez duela behartzen sozietate-forma jakin bat hartzera. Profesionalek beren interesetara hobekien egokitzen den antolatzeko modua aukeratu dezakete, eta lanbide-sozietateak sortzea aukeratzen badute izaera orokorrarekin lanbide-sozietateen xedapen erregulatzailerak gehi Aurreproiektuaren aurreikuspen bereziak aplikatu behar dituzte, eta berriro

diogu Aurreproiektuak ez duela biltzen sozietate-forma jakin bat hartzeko betebeharra. Ezabatzea gomendatzen den bigarren zenbakiak soilik adierazten du profesionalak libreki erabakitzen badu lanbidea *“lanbide-sozietateen bidez gauzatzea... legeek aurreikusten duten edozein sozietate-formaren arabera bakarrik gauzatu ahal izango dela”*, baina aipatu 2/2007 Legearen 1.2 artikuluan adierazitakoaren erreprodukzioa da.

80. Aholkularitza Juridikoak ohar bat egiten ditu **14. artikuluko 1. zenbakiari** dagokionez. Zenbaki horrek xedatzen du kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko kualifikazio-baldintzak betetzeaz gain, eduki edo bete egin beharko dela indarrean dauden legeen arabera exijitu daitekeen beste edozein lizentzia, baimen, titulu edo baldintza. Aholkularitza Juridikoaren ustez 14. artikularen edukia 2. artikuluan birkokatu daiteke.
81. Ez da bidezkotzat jotzen 14. artikularen edukia 2. artikuluan sartzea, azken honek funtsean bere izenburuak adierazten duen edukia baitauka: kirol-arloko berezko lanbideen, funtzio-eremu orokorraren eta kualifikazioen aipamena. Ez ditu kualifikazioez bestelako baldintzak aipatzen. Are gehiago, azpimarratu behar da Kataluniako Parlamentuak irizpide berbera aukeratu zuela 3/2008 Legearen 12. artikuluan.
82. Aurreproiektuaren **16. artikulua** xedatzen du Legean ezarri ez den guztian, lanbideetan jarduteko arau-esparru erkideak ezartzen duena bete beharko dela lege honek arautzen dituen lanbideetan jardun ahal izateko. Aholkularitza Juridikoak uste du ordezkoko arau bat ezartzen dela, zeina, arau-teknikarako irizpideak onartzen dituen 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Erabakian aurreikusitakoaren arabera, azken xedapenetan jaso beharko bailitzateke.
83. Gure ustez Gobernu Kontseiluaren Erabakia beste ordezkoko arau batzuei buruz ari da: *“Ordezkatze-indarra duten arauak, bai xedapenari beste batzuk ordezkatzeko indarra ematen diotenak eta bai, xedapen hau, beste xedapen batzuk ordezkatzekotzat deklaratu dezaten arauak ere”*. Aztergai dugun kasuan Lege honi ez zaio ordezkoko izaerarik esleitzen. Nolanahi ere, era berean adierazi

behar da Aurreproiektuan hartutako irizpidea Kataluniako Parlamentuak 3/2008 Legearen 14. artikuluan jarraitutakoa dela.

84. **16.2 artikuluari** (lehiaren defentsaren alorreko legeriaren aplikazioa), **17. artikuluari** (beste estatuetan lortutako lanbide-kualifikazioak onartzea) eta **18. artikuluari** (kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babestea) dagokienez, Aholkularitza Juridikoaren ustez araudi espezifikoa aplikagarriko bidaltzeak dira, eta Aholkularitza Juridikoaren ustez testuak oro har arazo hori du, bidaltze horiek beharrezkoak ez direla eta eraginkortasunik ez dutela adieraziz.
85. Egia da aurreproiektuak bidaltzearen tresna erabiltzen duela, beste erregulazio baterako *per relationem* erregulazioa deitutakoa dakarrena, baina legegileak legeak bidaltze bidez egiten dituen beste hainbat arrazoren artean, baina funtsean, legegintza-ekonomiako arrazoiengatik eta ordenamenduaren sistematizazio materialeko arrazoiengatik egiten du. Horregatik, adibidez, kirol-arloko lanbideak arautzen dituzten bi lege bakarrek (15/2015 Legea, apirilaren 16koa, Extremaduran kirol-arloko lanbideen jarduna antolatzen duena, eta lehendik aipatu den 3/2008 Legea) Aurreproiektuan agertzen diren bidaltze berdinak egiten dituzte.
86. "*Boluntarioen eta antzekoen jarduerak*" izenburua duen **Hirugarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, "Aholkularitza Juridikoak iradokitzen du xedapen gehigarriaren izenburua zuzentzea, izan ere, izenburuan "*boluntario-jarduerak eta antzekoak aipatzen baitira, eta edukia, ordea, zabalagoa da eta entrenatzaile-jarduerak ere aipatzen ditu*".
87. Egia esan ez dugu ulertzen Aholkularitza Juridikoak benetan zer nahi duen izenburua aldatzeko proposamenarekin, boluntariotzaren kualifikazioen exigentzia ez baita soilik entrenatzaileetara mugatzen.
88. Aholkularitza Juridikoak adierazi du **Laugarren Xedapen Gehigarria** eta **Zazpigarren Xedapen Gehigarria** elkarrekin formulatu daitezkeela, zuzenean lotuta daudelako.

89. Gure ustez, laugarren xedapen gehigarriak ezarri nahi du lanbideetan sartzeko eta jarduteko, lege honek adierazitako titulu akademiko eta ziurtagirien bidez egiaztatutako kualifikazioak behar direla, printzipioz, eta Eusko Jaurlaritzari dagokiola aipatutako titulu eta ziurtagiriez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzeko kasu, baldintza eta prozedurak ezartzea, eta zazpigarren xedapen gehigarriak, ordea, beste errealitate bat aztertzen du: testu artikulatuan zehar eskatzen den prestakuntza espezifikoa.
90. Aholkularitza Juridikoak, era berean, adierazten du arau-teknikarako gidalerroekin, jarduteko aginduekin edo arau-osagarrieekin bat etorritik azken xedapenetan ipini behar direla.
91. Hala eta guztiz ere, xedapen gehigarri horiek ez dira berez jarduteko aginduak, izan ere, Legearen hainbat aginduren aplikazioak sor ditzakeen arazo jakin batzuk konponduko dituen agintaritza ezartzera mugatzen baitira.
92. Aholkularitza Juridikoak era berean adierazten du **Bosgarren eta Seigarren Xedapen Gehigarriak** artikulatuaren barnean txerta daitezkeela, izan ere, agindu bat hondar gisa eta, ondorioz, xedapen gehigarrien barnean txertagarri gisa kalifikatzeak ezohikoa izan behar baitu.
93. Horri dagokionez, ez zaio inolako objekzio juridikorik egiten iradokizun horri.
94. Aholkularitza Juridikoak adierazten du **Zortzigarren Xedapen Gehigarria** ere artikulatuan txerta daitezkeela, hain zuzen ere 2. artikulatuaren barruan.
95. Horri dagokionez, ez zaio inolako objekzio juridikorik egiten iradokizun horri.
96. **Bederatzigarren Xedapen Gehigarriak** kirol-jardueren mailak definitzen ditu (kirol-hastapena edo oinarrizko maila, erdiko maila edo teknika hobetzekoa, eta goi-maila). Aholkularitza Juridikoaren ustez laugarren zenbakian bildutako aurreikuspena, non adierazten den Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena

duen sailak definizio hauek egokitu ahal izango dituela agindu bidez, ezinezkoa da, Legeak emandako definizio bat erregelamendu bidez ezin delako aldatu.

97. Legegintza-teknikaren alorrean Legearen edukiak (zigorrak, eranskinak, eta abar) erregelamendu bidez eguneratzea oso ohikoa den arren, ez zaio inolako objekzio juridikorik egiten laugarren zenbakia ezabatzeari, baina hasierako hiru zenbakietako bakoitzaren azken adibideak ezabatzen dira.
98. Eskola-adinean dauden kirolariek jarduerak egiteko prestakuntza erregulatzen duen **Hamargarren Xedapen Gehigarriari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoaren ustez ez da zehazten soilik monitoreei buruz ari ote den.
99. Aipatu xedapenaren lehen zenbakiak *“kirol-jarduerak egiten dituzten monitoreak”* aipatzen ditu, baina era berean bidezkoa da kirol-jarduerak egiten dituzten entrenatzaileak txertatzea.
100. Aholkularitza Juridikoaren ustez **Hamargarren** eta **Hamaikagarren Xedapen Gehigarriak** xedapen bakar batean taldekatu daitezke.
101. Ez zaio objekzio juridikorik egiten taldekatze horri.
102. **Lehen Xedapen Iragankorrari** dagokionez, Aholkularitza Juridikoak uste du 2. zenbakiak (*“Eusko Jaurlaritzako sailek (...) ezarriko dituzte dagozkion lanbide-gaitasunak egiaztatze mekanismoak eta administrazio-prozedurak”*) itxurazko behin-behineko araubide bat sartzen duela Aurreproiektuan erregulatzen diren lanbide-jarduerak modu jarraituan egiten ari direnentzat.
103. Aholkularitza Juridikoak aipatzen duen 2. zenbakia, ziurgabetasun juridikoa dakarrena uste baita ez dagoela ziur lanbide-gaitasunak egiaztatze mekanismoak ezarriko ote diren, eta kasu horretan profesionalek ezingo dutela jarraitu lan egiten, ez da existitzen jendaurrean jarritako Aurreproiektuaren bertsioan.

104. Aholkularitza Juridikoak, **Bigarren Xedapen Iragankorrari** dagokionez, idazkuntza alternatibo bat proposatzen du.
105. Ez zaio objekziorik egiten Aholkularitza Juridikoak proposatzen duen idazkuntza alternatiboari.
106. Aurreproiektuak **Xedapen Indargabetzaile** bat biltzen du, zeinaren arabera indargabetuta geratzen diren “*lege honetan jarritakoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko arau guztiak*”. Aholkularitza Juridikoak adierazten du idazkuntza hori arau-teknikarako irizpideak onartzen dituen 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Erabakian aurreikusten denaren aurkakoa dela, klausula orokor bat ez ezartzera behartzen baitu.
107. Eskola Kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren 25. artikuluko 1., 2. eta 3. zenbakiak Legearekin kontraesanean daudenez gero, iradokitzen da espresuki kontsignatzea haien indargabetzea itxiera-klausula generikoarekin, arau-teknikarako irizpideek hori onartzen baitute.
108. Aurreproiektuaren **Azken Xedapenetatik Hirugarrenak** ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari aurreproiektua garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan. Aholkularitza Juridikoak adierazten du Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoak behin eta berriro eskatu duela aurreikuspen hori kentzeko, ordenamendu juridikoak berez xedatutakoa errepikatzen baitu legeko xedapen horrek.
109. Kontuan izan behar da Azken Xedapenetatik Hirugarrena ez dela mugatzen Eusko Jaurlaritza Legearen erregelamendu-garapenerako gaitzera, izan ere, Memorian adierazten zen bezala, gaikuntza orokor hori dagoeneko ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 29. artikuluan eta Gobernu Legearen 16. artikuluan, eta Azken Xedapenetatik Hirugarrenak argi uzten du Eusko Jaurlaritzari ematen zaion gaikuntza orokorra kirol-arloko eskumena duen sailaren gaikuntza espezifikoarekin osatzen dela Legean aurreikusitako kasuetan, zeinetan beharrezkoa den malgutasun handiko erregelamendu-garapena egitea.

V.- LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN TXOSTENA.

110. Lehiaren Euskal Kontseiluaren osoko bilkurak (aurrerantzean LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA edo LEA), 2015eko martxoaren 3an egindako bileran, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektuari buruzko txostena onartu du.
111. Organo horrek bere txostena hasten du onartuz askotan lanbide-zerbitzuak lehiaren murrizketen eraginpekoak direla eta, arruntean, lanbideari heltzeko hesiak direla edo lanbidean jarduteko baldintza zehatzak. Eta gaineratzen du merkatuko akatsak zuzendu edo babestu beharreko interes publikoari eusteko asmoz bideratzen diren merkatuko esku-hartze murriztaile oro interes orokorraren aurkakoa dela.
112. Hasierako ohar horiekin bat gatoz, gaur egun ia lanbide-zerbitzu guztiak merkatuan sartzeko oztopo bihurtzen diren baldintzen eraginpean daudelako. Edozeinek ezin du lan egin auditore, erregistratzaile, notario, arkitekto, ingeniari, fisioterapeuta edo mediku gisa eta abar. Beharrezkoa da kualifikazio bat egiaztatzea. Oinarrizko auzia da kualifikazio-exijentzia horiek interes publikoei mesede egitera bideratuta ote dauden benetan.
113. Aurrekoa adierazi ondoren, LEAk Aurreproiektua aztertzen du lehiaren ikuspuntutik. Eta hasteko, oso zehatzak ez diren eta, nolabait ere, aurrez egindako kontsiderazioak ezeztatzen dituzten hainbat baiespen egiten ditu. Lehenik eta behin, honako hau adierazten du: *“Gaurdaino, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago lotura zehatzik kirol-titulazioen eta zerbitzu profesionalen artean. Nolanahi ere, Euskadiko Kirolaren Legeak honakoa ezartzen du: “Kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamenduak, sustapena eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, agente publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute. Hala, araudiak agintzen duena oraindik ere garatu ez denez, operadore ekonomikoek, gaur egun, zerbitzuak eskaintzen dituzte Euskal*

Autonomia Erkidegoan merkatuari heltzeko eta horretan jarduteko inolako mugapenik gabe”.

114. Ez da egia gaurdaino lotura zehatzik egon ez denik kirolari lotutako titulazioen eta zerbitzu profesionalen artean. Lehenik eta behin, Eusko Legebiltzarrak, ez Administrazio Publikoak, 14/1998 Legea onartu zuen, administrazio publikoei agindu argia emanez kirol-arloan zerbitzuak egiteko dagokion titulu ofiziala exijitzeko. Hau da, ia azken bi hamarkadetan EAEko ordenamendu juridikoan agindu argia eta espresa dago kirol-arloan zerbitzuak egiteko titulazio ofizialak exijitzeko. Eta argigarria da aipatu 14/1998 Legearen hitzaurreak hain zuzen ere honako hau adieraztea: *“Kirol-teknikarien prestakuntzaren eta titulazioen gaia da legearen kezkarik nagusienetako bat. Jarraibide asko diseinatu dira arlo horretan: batetik, legezko babesak eman zaio kirol-teknikari tituludunak izan beharri, irakasteko, zuzentzeko eta bestelako jarduerak burutzeko”.*

115. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAK era berean adierazten du 14/1998 Legeak *“agintzen duena oraindik ez dela garatu”.* Ez da egia. Eskola Kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren 25.1 artikulua 14/1998 legea garatzen du dagoeneko, eta honako hau ezartzen du: *“zuzendaritza-, programazio-, planifikazio-, koordinazio-, kontrol- eta ikuskeren-funtzioak eta eskola-kirolaren arloko beste antzeko funtzio batzuk betetzeko, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziadunaren titulu ofiziala edo behar den Graduaren titulua izan beharko da”.*

116. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioek entrenatzaileei kualifikazio-baldintzak eskatzen dizkiete kirol-teknikari gisa jarduerak egiteko. Hau da, era berean ezin da esan operadore ekonomikoek gaur egun EAEn zerbitzuak merkatuari heltzeko eta horretan jarduteko inolako mugapenik gabe egiten dituztenik eta Aurreproiektuak arau-paradigman erabateko aldaketa dakarrenik.

117. Era berean ez dator bat errealitatearekin Aurreproiektuak monitore, gorputz-hezkuntzako irakasle eta zuzendari lanbideak deitutakoak *ex novo* ezartzen dituela eta horientzat jarduera-erreserba bat *ex novo* egin nahi duela

adieraztea. Monitore-, gorputz-hezkuntzako irakasle- eta entrenatzaile-lanbideak duela hamarkada askoz geroztik dauden lanbideak dira, legegileak Legearen aurreproiektuaren bitartez egin duen esku-hartzea baino lehenagotik daude, eta are gehiago, horietako bakarren bat, adibidez Gorputz-hezkuntzako Irakaslearena, une honetan araututa, titulaturik eta kolegiaturik dagoen lanbidea da.

118. LEAk adierazten du Aurreproiektuaren Memoriak ezta bere Zioen Azalpenak ere ez dutela *“xehatzen eremu horietan orain arte garatu diren jarduerak kirolarien osasun eta segurtasunean sortu ahal izan duten eragin negatiboa, eta era berean zerbitzugintzarako askatasunari mugapen bat jartzea justifika dezaketen konstituzioaren ikuspegitik garrantzitsuak diren xede publikoak babestu beharra adierazten duen daturik ez dute eskaintzen*». Eta horrekin bat etorritik, txostenaren lehen ondorioa da Aurreproiektuak jardueraren erreserba sorrarazten duela kirolari atxikitako zerbitzuak ematean, titulazio edo lanbide-kualifikazio jakin batzuk eskuratu dituzten pertsonei dagokienez, *«baina ez da egiaztatu inolako arrazoirik dagoenik erreserbaren beharrik izango justifikatzeko*”.

119. Aurreko ondorio horri hainbat ohar egin behar zaizkio txosten honetan. Prestakuntzarik ez duten pertsonek egindako lanbide-jarduerak kirol-eremuan sortutako eragin negatiboari buruzko egiaztapenik eza, baita konstituzioaren ikuspegitik garrantzitsuak diren xede publikoak ez egotea ere, LEAk egin dituen eta erraz ezeztatu daitezkeen bi iritzi dira.

120. Konstituzio Auzitegiak, Konstituzioaren eta konstituzioaren ikuspegitik garrantzitsuak diren xede publikoen interpretatzaile gorena izanik, 1998ko urriaren 1eko 194/1998 epaian honako hau adierazi zuen: lanbide bat elkargokoa dela esateko, adibidez Gorputz-hezkuntzako Irakaslearena, eta elkargoko kide egiteko baldintzak ezartzeko, *“Konstituzioaren ikuspegitik ezinbestekoa izango da eraginpean egon daitezkeen interes orokorrak egotea edo, beste modu batean esanda, beharrezkoa izango da elkargoak konstituzioaren ikuspegitik garrantzitsuak diren xede publikoak lortzea. Erabaki hori zilegi izateko, elkargoak benetan bete beharko ditu elkargoko profesionalek emango dituzten zerbitzuen hartzaileen interesak zaintzeko zereginak, baita*

jarduera profesional zehatzaren eta Konstituzioaren bitartez bermatutako zenbait eskubide, balio eta ondasunen artean dagoen lotura zaintzeko zeregina ere; Auzitegi honek kontrolatu ahal izango ditu gai horiek”.

121. Egiazta daitekeenez, Konstituzio Auzitegiak gorputz-hezkuntzako irakasleen derrigorrezko kolegiatzearen legitimazioa egiaztatzen du, konstituzioaren ikuspegitik garrantzitsuak diren xede publikoak eraginpean hartzen diren ala ez egiaztatuz. Eta Konstituzio Auzitegiari berari dagokion murrizketa horren afektazioaren kontrol horretan, Aurreproiektuan erregulazio-xede den kirol-arloko lanbideetako bati buruz honako hau azpimarratzen du: “derrigorrezko adskripzioa, kasu honetan, beharrezko tresna bat izango da Elkargoak hezkuntza-eremu pribatuetan edo Gorputz-hezkuntzako Irakasleek lanbidea libreki gauzatzen dutenetan garatzen diren jarduerak zaintzeko erantzukizuna bere gain har dezan, aipatu jarduerak herritarrek haien hartzaille diren heinean dituzten eskubideen bermea murriztu gabe egin daitezen. Azkenik, garatutako lanbide-jardueraren ikuspegitik ere, Gorputz-hezkuntzako irakasleen derrigorrezko adskripzioaren legitimitatea justifika daiteke. Kirol-arloko lanbideetan jarduteko modua arautzeko premiari dagokionez, zioen azalpen honetan nabarmendu behar da Konstituzio Auzitegiak hau azaldu zuela urriaren 1eko 194/1998 Epaian: "Konstituzioak berak 43.3 artikuluan agintari publikoei agindua ematen die gorputz-hezkuntza eta kirola sustatzeko; bertan, jarduera horiek osasunarekin oso lotuta azaltzen dira. EK-ko 43 artikulua horretako 1. paragrafoan azaltzen denez; hain lotuta daude, ezen osasuna mantentzen lagundu ez ezik, haiei esker, saihestu egin baitaiteke gorputz- eta kirol-jardueratako hainbat ariketa desegoki osasunean izan dezakeen eragin negatiboa, batez ere zenbait kirol oso arriskutsu egitean. Jakina da, bestalde, jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta baloratuagoak direla; beraz, egoera horri erantzuteko, agintari publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionalei, eta bereziki ikastetxeetan gai horretako irakasle-funtzioa betetzen dutenei. Gainera, kontuan izan behar da jarduera horien hartzailleak, kasu gehienetan, adingabeak direla, eta horrek prestakuntza- eta erantzukizun-exijentzia handiagoak ekarriko dizkie irakaskuntza hori beren gain hartzen dutenei. Arrazoi horiek, kasu honetan, lanbidean jarduteko derrigorrezko kolegiatzea ezartzen duen araua legitimatzen dute”.

122. Beraz, ezin da zalantzan jarri Konstituzio Auzitegiaren doktrina hau, zeina oinarritzat hartu duen Legearen aurreproiektuak. Konstituzioaren interpretatzaile gorenarentzat gorputz-hezkuntza eta kirola, pertsonen osasuna mantentzen lagundu ez ezik, haiei esker *“saihestu egin baitaiteke gorputz- eta kirol-jardueratako hainbat ariketa desegokik osasunean izan dezakeen eragin negatiboa”*. Beraz, organo edo erakunde bakar batek ere ezin du bazter utzi deklarazio jurisdikzional hau, ezta zerbitzuak emateko askatasunari jarritako muga bat justifika dezaketen konstituzioaren ikuspegitik esanguratsuak diren xede publikoak babesteko beharra zalantzan jarri ere. Are gehiago, Konstituzio Auzitegiak azpimarratzen du ez dela *“ahaztu behar jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta baloratuagoak direla; beraz, egoera horri erantzuteko, agintari publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionalei, eta bereziki ikastetxeetan gai horretako irakasle-funtzioa betetzen dutenei”*.
123. Hori nahikoa ez balitz, ezin da bazter utzi datu bat; Aurreproiektuak arautzen dituen lanbide-zerbitzuen hartzaile gehienak adingabeak dira. Eta horri dagokionez Konstituzio Auzitegiak honako hau ezartzen du: *“Gainera, kontuan izan behar da jarduera horien hartzaileak, kasu gehienetan, adingabeak direla, eta horrek prestakuntza- eta erantzukizun-exijentzia handiagoak ekarriko dizkie irakaskuntza hori beren gain hartzen dutenei”*. Eta hori oinarritzat hartuz adierazten du lanbide-kolegiatzearen oztopo edo hesi hori legitimoa dela.
124. Konstituzioaren ikuspegitik, beraz, kirol-arloko lanbideen jardunean babesteko modukoak diren ondasunen funtsezko afektazioa argi geratu denez, eta Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari mugak ezartzeko konstituzio-legitimitatea abalatuta egonik, LEAk egiten dituen objektzio zehatzak aztertzea geratzen da. Lehen ohar bat da monitore- edo entrenatzaile-jardueren zerbitzuen partzelazioa sorrarazten dela, *«baina ez da nahikotasunez arrazoitzen konpartimentazio horrek ahalbidetzen duela hartzaileen osasuna babesten”*. Gure ustez, konpartimentazioak erantzuten dio, batetik, funtsezko proportzionaltasun-printzipio bati, eta horrek dakar lanbide-kualifikazioa exijitzeko ezarri diren mugapenak kirol-jarduera bakoitzarentzat egokienak direla lortu nahi den helburua lortuko dela bermatzeko. Hau da, Aurreproiektua saiatzen da lanbide-jarduera guztiei

kualifikazio berdina ez eskatzen, eta proportzionaltasun-printzipioarekin errespetutsua izan nahi du eta soilik behar bezala justifikatuta dagoenean bakarrik kualifikazio handiagoak exijitu. Konpartimentazioari egindako erantzukia nekez uler daiteke, izan ere, oztopo edo mugapenak, kualifikazio-exijentziak alegia, proportzionalak izan daitezen bermatzen baitu.

125. LEAk adierazten du ez duela ulertzen nola **4. artikuluan** uzten den gorputz-hezkuntzako irakasleek monitore-jarduerak egin ahal izatea irakastorduetatik kanpo, baina ez ordea zeregin berdinak ikastetxetik kanpo.

126. Kontsiderazio hori, beste erakunde batzuek ere alegatu dutena, jendaurreko epearen ondoren egingo den testu berrian kontuan izan behar da.

127. LEAk adierazten du erregulazioak jarduera jakin batzuei merkatua ixten diela, eta erregulazioaren ondorioz ez da ondorioztatzen erabiltzaileentzako abantailarik, segurtasun handiagorik edota osasun hoberik.

128. Ezin gara bat etorri *Ut supra* adierazitakoarekin. Eta horretarako nahikoa da honako hauetara jotzea: nazioarteko hitzarmen eta manifestu guztietara, Autonomia Erkidegoek onartutako kirol-arloko lege guztietara, Konstituzio Auzitegiaren doktrinara, Extremaduran eta Katalunian kirol-arloko lanbideak arautzen dituzten legeen onarpenean lortutako legebiltzarreko alderdi guztien aho-batasunera, eta abar. Testu guztiak bat datoz, hain zuzen ere, aurkakoan: lanbide-kualifikazioaren exigentzia erabiltzaileentzako onura argi gisa ikusten da, eta haien osasuna eta segurtasuna bermatzen laguntzen du.

129. LEAk lanbide-kualifikazioen exigentziaren legitimitatea zalantzan jarri nahi du boluntario gisa egiten diren jarduerak arauaren aplikazio-eremutik kanpo utziz.

130. Argudio horrek ezin du aurrera egin. Teknika juridikoaren ikuspuntutik, lanbide-jarduna arautzen bada, hau da, ordainketa bidezko jarduna, definizioz, ez da erregulazioaren barnean hartuko boluntario-erregimenean egindako jarduera. Gainera, LEAk ahaztu egin du Hirugarren Xedapen Gehigarriak

kualifikazio-baldintza berdinak exijitzen dizkiela zerbitzuak boluntariora-erregimenean egiten dituztenei. Eta xedapen gehigarri baten bitartez egiten du, izan ere, araugintza-teknikaren jarraibideen arabera, ohiko aplikazio-eremutik kanpo geratzen diren gaiak aztertu ahal izateko tresna da.

131. Era berean adibide gisa jartzen du LEAk, lanbide-kualifikazioa exijitzeko neurrien justifikazioa eta osasunarekiko konexioa zalantzan jartzeko, **5. artikuluko 9. zenbakian**, kualifikazio-baldintzetatik salbuesten direla beste herrialde edo Autonomia Erkidego batzuetako kirol-erakundeen edo kirolarien entrenatzaileak. Haren ustez, titulaziorik ez edukitze soilak osasuna edo segurtasuna mehatxatzen badu, kualifikazio hori zerbitzuak, aldi baterako bada ere, eskaintzen dituen edozein profesionali exijitu beharko litzaioke.

132. Aurreproiektuaren justifikazioa erraza eta oso zentzuzkoa da. Proportzionaltasun-irizpidea kontuan izanik, legearen aplikazio-eremu subjektiboa, *ut supra* adierazi den bezala, EAEn kirol-arloko lanbideetan ohiko moduan diharduten pertsonak dira. Ezin da absurdora iritsi eta euskal kirol-sistema osoa estatuko eta nazioarteko lehiaketetatik kanpo utzi aurkako ekipoetako hainbat entrenatzailek –adibidez, talde ospetsuetako entrenatzaileek, hala nola Chelsea, Liverpool, Milaneko Inter, Municheko Bayer, eta abar– Euskal Autonomia Erkidegoko entrenatzaileei exijitzen zaien kualifikazioa ez dutelako. Alemania, India edo Peruko entrenatzaile batek, bere klubarekin edo selekzio nazionalarekin Euskal Autonomia Erkidegoan ekipo baten aurka jolastera badator, ezin du topo egin bere taldea EAEn zuzentzeko debekuarekin, erkidego honek kirol-arloan lanbide-kualifikazioak exijitzeko arau bat onartu duelako. Profesional horien jardunak noizean behingoak dira, EAEn egin beharreko lehiaketetan ekipoak gidatzera murrizten direnak, eta ezin da ulertu Aurreproiektuan aurreikusten den bezalako neurri batek, kirolaren eta kirolarien onurarako proiektatu denak, abantailak baino desabantaila gehiago ekartzea –euskal kirola estatuko eta nazioarteko lehiaketa orotara ixtea–.

133. LEA oker dago adierazten duenean ez duela zentzurik oinarritzko mailatan eta diziiplina jakin batean monitore gisa jardun nahi duen pertsona batek ezin duela jardun “*Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako gradu*

bat baldin badu”. Aurreproiektuaren **4. artikuluko 4. zenbakiak** lanbide-kualifikazio hori dutenei baimena ematen die monitore-lanbidean jarduteko.

134. Era berean LEAk alegatzen du kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko gaitzen duten titulazioak kirol-arlokoetara zehatz-mehatz mugatuta daudela, eta ez dela aurreikusten titulazio desberdinak dituzten pertsonak –edo kasu batzuetan, zerbitzuen prestazio egokia bermatzen duen eta egiaztatuta dagoen esperientzia dutenak– merkaturako sarbidea izango dutenik gaur egun gertatzen den moduan. Eta LEAk, adibidez, kirol-medikuak, fisioterapeutak eta abar aipatzen ditu.
135. Gure ustez arrazoigarria dirudi kirol-arloko lanbideetan jarduteko beharrezkoak diren prestakuntzak, noski, kirolari lotutako prestakuntzak izan daitezela, lanbide sanitarioetan jarduteko beharrezkoak diren prestakuntzek sanitatearen eremukoak izan behar duten bezala, edota lanbide juridikoetan (abokatua, prokuradorea eta abar) jarduteko beharrezko oinarritzko prestakuntza Zuzenbidean Gradua izatea. Pentsaezina iruditzen zaigu sanitate-eremuko prestakuntza batek kirol-arloko lanbide batean jarduteko gaitzea, baita kirol-eremuko prestakuntza batek sanitate-arloko lanbide batean jarduteko gaitzea ere, horietan sanitateari buruzko edukiak dituzten jakintzagaiak ikasten badira ere.
136. Aurrekoaz gain zehaztu behar da lanbideetan sartu eta jardutea kirol-eremuko titulazioetatik bakarrik egin daitekeen gauza dela esatea ez dela zuzena. Aurreproiektuak ahalegin handia egiten du kirol-arloko lanbideetan lanbide-kualifikazioaren kontzeptu zabalaren bitartez jarduteko aukera ahalbidetzeko, eta kualifikazio hori, **2. artikuluko 6. zenbakiaren arabera**, egiazta daiteke, *«prestakuntza-titulu baten bidez, gaitasun-ziurtagiri baten bidez edo formalki onartutako lan-esperientzia baten bidez, edo inguruabar horietariko bat baino gehiago bilduz»*.
137. Zuzendari lanbideari dagokionez, **6. artikulua**, LEAk alegatzen du ez dela egiaztatuta geratu zuzendaritza-zereginetarako lanbide-kualifikazioa exijitzeak zein neurritan laguntzen duen kirolarien osasuna edo segurtasuna babesten. Kirolari lotutako titulazioak dituzten pertsonen merkatu hau ixteko

arrazoia ez da egiaztatuta geratu, gerentzietan, enpresa-zuzendaritzetan eta abar antzeko loturak eskatzen ez diren modu berean.

138. Alegazio horri egin behar zaion lehen zehaztapena zera da, Aurreproiektuak, LEAren kezkarekin bat eginik, ez diela merkatua mugatzen kirol-kudeatzaileei, hau da, kirol-erakundeen edo kirol-ekipamenduen zuzendaritza nagusia, edo zuzendaritza enpresariala, administratiboa, finantzarioa, komertziala eta abar beren gain hartze duten pertsonen. Horiek ez dute behar, Aurreproiektuari aurkako zentzuan alegazioak egin zaizkion arren, jarduera-erreserbarik. Legearen aurreproiektuak aipatzen duen profesionala, zuzendaritza «*kirol-zientzien berezko jakintzak eta teknikak aplikatuz*» bere gain hartzen duen pertsona da. Hau da, soil-soilik teknikoak diren zuzendariak dira, kirol-jarduerak kirolaren zientziak aplikatuz ikuskatzen, koordinatzen, programatzen dituztenak, ez ordea kirol-erakunde edo -zentroen kudeaketa administratiboa, finantzarioa eta abar. Izan ere, 1. artikuluko 5. zenbakiak espresuki bere aplikazio-eremutik kanpo uzten ditu “*kirol-instalazio edo -erakundeetako kudeatzaileen lanbide-jarduerak*”.

139. Era berean, funtsezko datu bat ezin da bazter utzi: indarrean dagoen Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 62. artikulua ezartzen du kirolarekin zuzenean lotutako zuzendaritza-zerbitzuak egiteko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dutela. Eta agindu horrek gaineratzen du Lege hau garatzeko xedapenen bitartez, titulazioen nahitaezkotasunaren norainokoa mugatuko da, zehazki.

140. Gorputz-hezkuntzako Irakasle lanbideari dagokionez, LEAk adierazten du, Aurreproiektuak berak adierazten duen bezala, lanbidea hezkuntza-legerian dagoela araututa, eta bere ustez «*ezinezkoa da beste arau batek lehentasunez balioetsiko diren tituluak ezarri ahal izatea*».

141. Ezin dugu bat egin alegazio horrekin. Ez da ahaztu behar Konstituzio Auzitegiak, 2014ko urtarrilaren 30eko Osoko Bilkuraren epaian, jadanik irmoki errepikatu duela honako hau: “*edozein kasutan, Autonomia Erkidegoek titulazioari eta esperientziari lotutako irizpide gehigarriak ezarri ahal izango*

dituzte, irakasgai bat emateko garaian irakasle batzuei beste batzuen aurrean lehentasuna ematea dakartenak”.

142. Bestalde, era berean ezin da bazter utzi LEAk ez duela prestakuntza espezializatu jakin bat lehentasunez balioetsi ahal izateko legezko ezintasun hori ez duela justifikatzen, eta bestalde, formula hori erabiltzen duten eta indarrean dauden beste xedapen autonomiko batzuk egon badaudela. Adierazi behar da, adibidez, Kataluniako kirolaren lanbideen egikaritzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legearen 3.2 artikulua, ezartzen duela *“hezkuntza-sistemaren esparruan gorputz-hezkuntzako irakasle gisa jarduteko dagokion legeriak exijitzen duen titulazioa egiaztatu behar dela. Hezkuntza-administrazioak gorputz-hezkuntzako unibertsitate-prestakuntza espezifiko balioetsi dezake lehen hezkuntzarako, eta jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako unibertsitate-prestakuntza derrigorrezko bigarren hezkuntzarako, batxilergorako eta lanbide-heziketarako”.*

143. LEAk, bestalde, arau-proposamenak *“sortutako”* lanbideei buruzko hainbat gai formulatzen ditu. Adierazi beharra dago legeak ez dituela lanbideak *“sortzen”*; lanbideak Legearen aurreproiektua baino lehenagokoak dira, eta gainera zati batean araututa daude. Aurreproiektuak funtsean egiten duena da lanbide-kualifikazioko exijentzia jakin batzuk gaineratzea edo zehaztea.

144. Era berean, LEAk alegatzen du Aurreproiektuaren **2. artikulua** ezartzen duela lanbide bakoitzaren funtzio-eremu orokorra ezartzea dela Lege honetan lanbide horietarako jasotzen diren eskumenen zerrenden helburua. Ondorioz, zerrenda horien helburua ez da mugak jartzea, orientatzea baino. LEAren ustez, izaera orientatzailea eta ez-mugatzailea duen erreserba hori arau batean bildutako edozein salbuespen modu hertsian eta ez zabalean interpretatu behar izanaren printzipioaren aurka doa.

145. LEAren alegazio honi hainbat objektio egin behar zaizkio. Lehenik eta behin, *«odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda»* aforismo zaharra interpretazio-jarraibide bat da, arauak interpretatzekoa, eta ez ordea legegileari, hots, aipatu arauak sortzen dituenari, emandako agindu bat. Aforismo zahar batek ezin ditu mugatu edo hertsatu Eusko Legebiltzarra eta gainerako

parlamentuak, aforismo horren birtualitatea interpretazio-eremuan edo aplikazio-eremuan zabaltzen baita, ez ordea arau-produkzioaren eremuan.

146. Era berean, txosten juridiko honetan adierazi behar da Aurreproiektuak erabili duen teknika beste legezko testu batzuetan modu egokian erabiltzen dela inolako akatsik sortu gabe. Adibidez, Kataluniako kirolaren lanbideen egikaritzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legearen 2.3 artikulua, Legearen aurreproiektuak oinarritzat hartu duen idazkuntza berdina du: *"Lanbide bakoitzaren funtzio-eremu orokorra ezartzea da lege honetan lanbide horietarako jasotzen diren eskumenen zerrenden helburua. Ondorioz, zerrenda horien helburua ez da mugak jartzea, orientatzea baino".*
147. LEAk adierazten du Aurreproiektuak aipatzen dituela titulazio zehatzak «edo baliokideak» eta antzeko esamoldeak, eta horiek kezka sortzen dutela, zehaztapena administrazioaren esku geratzen baita.
148. Hain zuzen ere, xedapen gehigarrietan Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio Lege baten bitartez ezarri ezin diren hainbat gai ezartzeko eta zehazteko, prestakuntza ofizialen, kualifikazioen eta abarren izaera dinamiko eta ebolutiboa kontuan izanik. Pentsaezina da izaera horretako erregulazio bat legegilearen bitartez eta garapen-erregelamendu betearazleen lankidetzarik gabe.
149. Aurreproiektuaren **10. artikuluan** arautzen den elkargoko kide egitearen gaiari dagokionez, LEAk alegatzen du elkargoko kide egiteko nahitaezko baldintza oztopo bat dela, eta hori justifikatutzat ematen dela lege batek hala ezartzen duenean soilik. LEAren ustez, proposamen honen hainbat agindutan eremu honetan lanbide-elkargoen existentziari buruzko aipamen generikoa edo hipotetikoa egiten da. Adierazten da une honetan Gorputz-hezkuntzako Irakasleentzako bakarrik dagoela profesionalen elkargoa, eta aipamen horiek saihestu egin beharko liratekeela, itxuraz elkargoak egon badaudela pentsa daitekeelako, eta hori lehiaren aurkakoa, eta batez ere interes orokorraren aurkakoa izango litzateke.

150. Alegazio horri honako objekzio hauek egin behar zaizkio. Lehenik eta behin, ez da zuzena Gorputz-hezkuntzako Irakasleentzako bakarrik dagoela profesionalen elkargoa. Urriaren 22ko 1641/1999 Errege Dekretuaren bitartez egindako aldaketaren ondoren, elkargo-antolaketa Gorputz-hezkuntzan eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatuen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusi bihurtu zen, eta ondorengo Errege Dekretuek eta autonomia-erkidegoetako dekretu eta legeek gorputz-hezkuntzan eta jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentziatuen elkargo-antolaketa bat finkatu dute. Eta ez dira gauza bera lanbidea eta titulazio akademikoa. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatuek gur egun legearen aurreproiektuan agertzen diren lau lanbideetan dihardute: gorputz-hezkuntzako irakaslea, monitorea, entrenatzailea eta kirol-zuzendaria.

151. Era berean adierazi behar da Aurreproiektua argia eta gardena dela, dagokion profesionalen elkargoan izena ematea derrigorrezkoa izateari dagokionez, *“estatuko kasuan kasuko legeek hala ezartzen badute”*. Hau da, auzitegiek behin eta berriz aplikatzen duten aforismo zaharra aplikatu behar da: *“in claris non fit interpretatio”* edo beste modu batean esanda, *«gogoratu beharko genuke, hori egiterakoan funtsezkoak izateagatik aski ezagunak diren kontzeptuak errepikatzen baditugu ere, interpretazio-izaerako jardun batek, hau da hermeneutika zehatzekoa, gauza baten zentzua azaltzera edo deklaratzera mugatu behar duela, eta batez ere argi ez dauden testuena, eta horregatik, in claris non fit interpretatio aforismo erromatar zaharrak zioen bezala, ez da interpretatu behar inolako zalantzarik sortzen ez duen zerbait. Beste modu batean esanda, Kode Zibilaren 3.1 artikulua aitpatzen dituen irizpide hermeneutikoek nahitaez ezartzen dute edozein arau interpretatzeko unean abiapuntua “bere hitzen berezko zentzua” dela, eta horrela “... agindua adierazi nahi izan duenari dagokionez omisiorik edo zalantzarik ez dagoenez, ezin da aginduan hitzez hitz ezartzen denaz bestelako interpretaziorik egin”, izan ere, “aplikatu behar den agindua argia eta eztaba daezina izanik, komentario edo interpretazio oro sobera dago, arauaren interpretazioan kontuan izan behar den lehen gauza hitzez hitzeko adierazpena baita»* (Madrilgo Auzitegi Nagusiaren 2013ko urtarrilaren 11ko Epaia).

152. Aurreproiektuaren **10. artikuluan** bilduta dagoen Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari dagokionez, LEAk

alegatzen du Erregistro batean derrigorrez izena eman beharra zerbitzu-prestaziorako askatasunaren murrizketa bat dela, eta ez dela egiaztatu erabiltzaileak hobeto babesten laguntzen duenik.

153. Alegazio horren aurrean hainbat oharpen egin behar dira. Batetik, Kataluniako kirolaren lanbideen egikaritzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeak, Espainian lehen legegintza-xedapena izaterakoan Aurreproiektuarentzat erreferentzia gisa erabili denak, Kirol-arloko Profesionalen Erregistro bat biltzen du. Legearen zioen azalpena oso argigarria da: “Lege honek arautzen dituen lanbideen jardunak pertsonen osasunean duen garrantzia eta legean arautzen diren lanbideen jardun desegoki batek sor ditzakeen ondorio negatiboak kontuan izanik, Konstituzio Auzitegiak 194/1998 Epaian adieraz duen bezala, erabat nahitaezkotzat jotzen da Kataluniako Profesionalen Erregistro Ofiziala sortzea eta lanbidean jardun ahal izateko bertan izena emateko nahitaezko baldintza ezartzea, lege honek berak arautzen dituen derrigorrez elkargoko kide egiteko kasuetan salbu. Erregistro hori, lanbide-jarduera desberdinetan jarduteko gainerako erregistroak bezala, beharrezko tresna da jarraipenerako, eskumenak balioesteko, lan-eremuak esleitzeko, profesionalen jardunaren kontrol egokia egiteko, eta lanbideak Europako Kualifikazio Esparruko zortzi mailetan esleitzeko, profesional horiek ere beren zerbitzuen hartzaile nagusi gisa babes berezia behar duten pertsonen kolektiboa baita, bertan haurrak eta hirugarren adinekoak diren edo osasun-arazoak dituzten pertsonak”.

154. Beste eremu batzuetan ere egon badaude profesionalen erregistroak. Adibidez, 640/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, Osasun Langileen Estatuko Erregistroa arautzen duena. Azaroaren 21eko 44/2003 Legeak, lanbide sanitarioen antolamenduari buruzkoak, 5.2 artikuluan aurreikusten du profesionalen erregistro publikoak egotea, profesionalentzako eta pazienteentzako berme-tresna bat bezala. Errege Dekretuaren hitzaurrearen arabera, *“erregistroko datu jakin batzuen izaera publikoak gure osasun-sistemako profesionalengan segurtasun eta konfiantza handiagoa sortzen lagunduko du”*.

155. Era berean ezin da aipatu gabe utzi Profesionalen Elkargoei buruzko otsailaren 13ko 2/1974 legeak, 10.2 artikuluan leihatila bakarra arautzen du eta honako hau adierazten du: *“leihatila bakar horren bitartez, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak hobeto defenditzeko, elkargo-erakundeek ondorengo informazioa eskainiko dute, argia, dudarik gabea eta doakoa izan beharko duena: a) Elkargokideen erregistroan sartzea, etengabe eguneratuta egongo dena eta gutxienez ere honako datu hauek bilduko dituen: elkargokideen izen-abizenak, elkargoko zenbakia, dituzten titulu ofizialak, lanbide-helbidea eta lanbide-gaikuntzako egoera”*.
156. LEAk alegazio bat egiten du **9. artikuluko** izenen erabilerari dagokionez, eta adierazten du kolegiatu beharrik ez duten lanbide-jardueretan izenen erreserba eskatzen diren baldintza akademikoak (eta, ondorioz, haien prestakuntza egokia bermatzen duten gaitasunak) betetzen dituzten profesionalei izendapen profesionalizatzailea erabiltzea eragozten dieten jarduera-erreserba bat dela. Horretarako, Lehiaren Batzorde Nazionalaren “profesionalen elkargoak Zerbitzu Zuzentzarauaren transposizioaren ondoren” izeneko txostena aipatzen du.
157. Kontuan izan behar da, lehenik eta behin, alegazioak aipatzen duen Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena kasu desberdin bati buruzkoa dela; profesionalen elkargoek izenak erreserbatzea, eta honako hau gaineratzen du: *«elkargoko kide egitea derrigorrezko baldintza ez den lanbideetan, murrizketa mota horrek ez du justifikaziorik»*. Kasu honetan ez da profesionalen elkargoek egiten duten izenen erreserba bat.
158. Bestalde, ez du ezerk eragozten lanbide-kualifikazioko baldintzak betetzen dituzten profesionalek legean aurreikusitako izenak erabili ahal izatea.
159. Aurreproiektuaren **15. artikulua** araututako jardueretan legeak ezartzen duena errespetatu gabe jardutea aipatzen du. Agindu horrek ezartzen du dagokion lanbide-kualifikazioarekin jarduteko betebeharra bete ezean, ordenamendu juridiko aplikagarriaren arabera eskatu beharreko administrazio-erantzukizunak, diziplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak eskatuko direla. Eta **Azken Xedapenetatik Lehenengoan eta Bigarrenean** ondorio

larriak sor ditzaketen arau-haustek sortzen dira, baina LEAren ustez, horietako bakar batean ere ez da aipatzen zerbitzugintza erabiltzaileen segurtasun edo osasunerako bermerik gabe egin denik edota ildo horretan arriskurik izan denik, eta beraz, LEAren ustez, betekizun formalak urratzeagatiko (adibidez kualifikaziorik ez izatea edota erregistroan izena emanda ez egotea) arau-haustek sortzeko lanbide-merkatuan sartzeko justifikaziorik gabeko oztopo bat sortzen du, eta erabiltzaileen segurtasuna eta osasuna inola ere zalantzan jarriko ez zuketuen profesionalak beren zerbitzuak egitetik inhibititu ditzake.

160. Lanbide-jardueretan jardutea lanbide-kualifikazioko betekizun jakin batzuen betetzera baldintzatzen duen Lege hau beharrezkoa dela ondorioztatzen bada, eta Eusko Legebiltzarrean azken urteotan legebiltzar-taldeak bat datoz gai horrekin, argi dago Legea betetzen dela bermatuko duen arau-hausteen eta zehapenen araubide bat eduki beharko dela. Xedapen orokor batek berau ez betetzea zigortzeko tresnarik ez badu aurreikusten arau boluntarista bat besterik ez da izango, behartzeko indarrik ez duena eta porrot egiteko joera izango duena. Beraz, ez dago inolako zalantzarik zehapen-araubidea sektore-erregulazio orok zuzkitzen duen bermea dela, eta printzipioz uko egin ezinezkoa da, eta ez litzateke ulertuko Lege honek zehapen-araubide bat ez izatea.

161. Era berean adierazi behar da Legearen aurreproiektua arau-haustek tipifikatzerakoan proportzionaltasun-printzipioarekiko errespetutsua izaten ahalegindu dela, izan ere, arau-hauste bat tipifikatzeko erabakia bera eta haren larritasunaren arabeko kalifikazio abstraktuak babes-premia jakin bati erantzun behar diote eta, ondorioz, eraso egindako ondasun juridikoa eta jokabideak edo egitateak dakarren lesioaren edo arriskuaren larritasuna kontuan izan behar du. LEAk adierazten du arau-hauste mota bakar batean ere ez dela adierazten zerbitzugintza erabiltzaileen segurtasunerako edo osasunerako bermerik gabe egin denik edota arriskurik sortu denik. Arau-haustearen tipifikazioa prestazioa lesioekin egin izanari lotzea ez da beharrezkoa, bi arau-haustek, nolabait ere, lesioa edo kaltea beharrezkoa ez den arau-haustek baitira, izan ere, nahikoa baita jokabide horrek osasun- eta segurtasun-bermeak arriskuan jartzea, berme horiei mehatxu egitea.

162. Era berean, LEAk adierazten du arau-hausteen sorkuntzak justifikaziorik gabeko sarrera-oztopo bat sortzen duela, profesionalak beren zerbitzuak egitetik inhibitzen lagundu dezakeelako, eta gu ez gatoz bat adierazpen horrekin. Legearen errekerimenduak bete nahi ez dituztenentzat bakarrik dago sartzeko eragozpena, eta Legeak ez ditu profesionalak beren zerbitzuak egitetik inhibitzen, ez-betetzea inhibitu nahi du, besterik ez.
163. Ordenamendu juridikoak sektore hauetan kalteak sortzeagatik kontratu-erantzukizunak eta erantzukizun zibilak araututa dituela alegatzen du LEAk, eta horri ere objektzioa egin behar zaio, eta beraz, ondoriozta daiteke arau-hausteen sorkuntza ez dela lagungarria erabiltzaileen babesa hobetzeko. Gure ustez, ezin dira nahastu erantzukizun zibilak eta zehapen-izaerako erantzukizunak. Erantzukizun zibilek, kontratupekoak nahiz akilarrak izan, izaera konpontzailea dute; eragindako kaltea konpontzea. biktimari kalte-ordaina soilik kaltea sortu bada ematea dute helburu, eta zehapen-araubideak ordenamendu juridikoa betetzen dela bermatu nahi du. Administrazioaren *ius puniendi* legeak betetzera dago bideratuta, arau-hausteen ondorioz kalterik dagoen ala ez berdin izanik. Horregatik zehapen-alorreko ia xedapen sektorial edo orokor guztiek erantzukizunen (zibilak, penalak edo administrazio-zehapenekoak) aniztasuna eta bateragarritasuna biltzen dute, asmo eta helburu erabat desberdinei erantzuten dietelako.
164. Aurreproiektuaren **18.3 artikulua** zerbitzu profesionalen publizitatean mugapenak ezartzen ditu. LEAk dioenez zerbitzuen publizitatearekiko debekuak erabat mugatzen ditu lehiaren araudiak, publizitatea hain zuzen ere merkatuan lehiatzeko tresna eraginkorrenetako bat den heinean. LEAren ustez mugapen horiek behar bezala araututa daude sanitatearen alorreko publizitatearen araudian eta lehia desleialari buruzkoan (publizitate engainagarriaren alorrean). Beraz, LEAren ustez ez da egiaztatuta geratu publizitatearen mugapena.
165. Aurreko alegazioari dagokionez adierazi behar da sanitatearen alorreko publizitateak sanitate-eremuko publizitatea arautzen duela, eta Lege honek ez ditu sanitate-lanbideak ordenatzen. Eta bestalde, lehia desleialaren alorreko legeriak modu orokorrean biltzen du publizitate engainagarriaren debekua

lehiaren ikuspuntutik, ez ordea Legearen aurreproiektuak diseinatzeko duen kirolarien osasunaren babesaren ikuspuntutik. Era berean, kontuan izan behar da kirol-arloko lanbideak arautzen dituzten bi lege bakarrek (15/2015 Legea, apirilaren 16koa, Extremadurakoa, eta lehendik aipatu den 3/2008 Legea, Kataluniakoa) ere publizitatearen alorrean mugapenak biltzen dituztela. Eta azkenik, ezin da aipatu gabe utzi Legearen aurreproiektuak Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen 44. artikuluan profesional sanitarioei dagoeneko aplikatu dakiekeen arau-aurreikuspen baten transposizioa besterik ez duela egin.

166. LEAk objekzio bat egiten dio Legearen aurreproiektuaren **18.4 artikuluari**, eta Lege honen eremuaren barruan dauden profesionalen gutxienezko kualifikazioa edukitzearen baldintza betetzen dutela bermatzeko, idatziz formalizatuko dira profesional horiekin egiten diren zerbitzuak emateko kontratu guztiak, eta, kontratuetan argi jasota geratuko da profesionalen egiaztatuta dutela kualifikazioa. LEAk alegatzen du egiaztatu beharko dela araudi-exijentzia horiek (kontratuen idatzizko forma eta lanbide-kualifikazioaren aipamena) interes orokorra hobetzen laguntzen duten –eta zer neurritan–.

167. Legearen aurreproiektuak Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen 42. artikuluan profesional sanitarioei dagoeneko aplikatu dakiekeen arau-aurreikuspen baten transposizioa besterik ez duela egin. *“Profesionalen eta espezialisten titulazio ofiziala, ekipamendu eta instalazioen kalitatea eta segurtasuna, eta lanbide-diziplinari eta Lege honetan ezartzen diren gainerako betekizun eta bermeak kontuan izango direla bermatzeko, sanitate-zerbitzuak egiteko sanitateko profesionalen artean, sanitateko profesionalen eta zentroen artean edota profesionalen eta gaixotasunaren adarrean diharduten aseguru-erakundearen artean sinatzen diren kontratu guztiak, baita haien aldaketak ere, idatziz formalizatuko dira”*.

168. Azkenik, LEAk alegatzen du Aurreproiektuaren **Seigarren Xedapen Gehigarriak** ezartzen duela Lege horretan araututako lanbideren batean jardun diren guztiek, kirol-jarduera egiten den lekuan fisikoki egoten badira, lehen laguntza emateko gaitasuna dutela egiaztatu behar dute. LEAren ustez hezkuntza-legeriak jadanik ezartzen ditu Gorputz-hezkuntzako irakasle

lanbidean sartzeko eta jarduteko legezko baldintzak, eta beraz, ez da bidezkoa baldintza gehigarriak ezartzea.

169. LEAren alegazio honi hainbat objekzio egin behar zaizkio. Lehenik eta behin, LEAk ez du adierazten zer lege-agindutan oinarritzen den Gorputz-hezkuntzako irakasle lanbidean sartzeko eta jarduteko baldintza gehigarriak ezartzea ezinezkoa dela ondorioztatzeko. Hori egitea posible dela frogatzen du Kataluniako kirolaren lanbideen egikaritzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legearen 1.7 artikulua, honako hau ezartzen baitu: *“Lege honek arautzen dituen zereginak betetzen dituzten jarduneko profesional guztiek berehalako asistentzia sanitarioko gaitasunak izan behar dituzte, bihotz-biriketako bizkortzeari lotuta. Lanbidean sartzeko titulazioak ez badu aukerarik ematen gaitasun hori egiaztatzeko, akreditazioa Generalitateak baimendutako zentroetan lortu behar da”*. Duela gutxi eman den Extremadurako 15/2015 Legearen 13.2 artikulua ere antzeko aurreikuspen bat ezartzen du.

170. Era berean ez da ahaztu behar Konstituzio Auzitegiak, 2014ko urtarrilaren 30eko Osoko Bilkuraren epaian, jadanik irmoki errepikatu duela honako hau: *“edozein kasutan, Autonomia Erkidegoek titulazioari eta esperientziari lotutako irizpide gehigarriak ezarri ahal izango dituzte”*.

V.- AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN TXOSTENA.

Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoak egindako txostena aztertuta honako aldaketa hauek egiten dira:

171. Batzordearen ustez komenigarria litzateke espedienteari erantsitako informazioa osatzea, alde batetik arauak potentzialki eragindako profesionalen egungo egoerari buruzko eta profesional horien jardunak kirola egiten dutenen osasunean izan dezakeen eraginari buruzko datu eguneratuak txertatuz, baita ekimenak bere hartzailleentzat izan ditzakeen balizko eragin ekonomikoei buruzko datuak ere. Horri

dagokionez adierazi behar da kanpoko aholkularitza-enpresa batek 2016ko urtarrilean 87 orrialdeko azterlan bat egin duela, “KIROLEKO GIZA BALIABIDEEN LAN- ETA KUALIFIKAZIO-EGOERARI BURUZKO AZTERLANA” deitutakoa, aldezturik eginda egon behar zuena, baina egia esan oso baliagarria izango dena legearen aplikazio praktikoari begira.

172. Aurreproiektuaren 10. artikuluan aurreikusten den Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari dagokionez, Batzordearen ustez lanbideetan sartzeko eta jarduteko derrigorrezko baldintza izatea baimen-araubidetzat hartu behar da. Era berean, bere txostenaren 190. zenbakian Batzordeak honako hau adierazten du: *“aurreproiektuak lortu nahi duen helburua kontuan izanik –osasuna eta segurtasuna-, legegileak ezaugarri horiek dituen erregistro bat txerta dezake”*. Aurrekoa hala izanik ere, Batzordeak adierazten du hausnarketa espezifiko bat egin behar dela lortu nahi den helburua lortuko dela bermatzeko tresnarik egokiena den aztertze, emaitza bera lortzea ahalbidetzen duten eta hain murriztaileak ez diren beste neurri batzuk ez daudelako, eta horregatik organo sustatzailearen irizpenera jartzen du aurreproiektuaren helburuak lortzeko *“ez litzatekeen nahikoa izango aurretiazko komunikazio bat edo, hala badagokio, erantzukizunpeko aitorpen bat ezartzea, informazio-izaerako erregistro bati elkartuta”*, eta hori guztia aurreproiektuan aurreikusitakoa bezain murriztailea ez den neurria delako, eta bere ustez Zerbitzuen Zuzentzarauak ezarri nahi duen printzipioetara hobeto egokitzen delako. Batzordearen iradokizuna onartzen da eta 10. artikulua lanbideetan sartzeko eta jarduteko derrigorrezko baldintza den erregistroan izena ematea ezabatzen du baldintzak betetzearen aurretiazko kontrol edo *ex ante* moduan, eta erregistro-eredu hori erantzukizunpeko aitorpen-araubide batekin ordeztzen da, Erregistroari eutsiz, zeinak informazio-izaera izango duen.

173. Helburuari eta aplikazio-eremuari buruzko 1. artikuluari dagokionez, Batzordearen ustez ahalegin bat egin beharko litzateke

lanbide-zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan “*ohiko moduan*” noiz garatzen diren ezartzeko, izan ere, interpretazio-posibilitate bat baino gehiago baitago. Ez da beharrezkotzat jotzen hori aldatzea, Eusko Legebiltzarrak inolako akatsik eta objekziorik gabe erabili baitu - “*nagusiki*”- hitza fundazioei, elkarteei eta abar euskal legeria aplikatzeko eremu subjektiboa aipatu izan duenean. “*Nagusiki*”, “*ohiko moduan*” eta antzeko terminoak behin eta berriz erabiltzen ditu legegileak.

174. 9. artikuluari dagokionez, Batzordearen ustez izenen erreserbarako betebeharraren ez-betetzea Euskadiko Kirolaren Legearen zigor-araubidean bildu beharko litzateke. Batzordearen gomendio hori kontuan izan da Azken Xedapenetatik Bigarreanean.

175. Batzordeak gomendatzen du 11. artikuluko zenbait letra ezabatzea kirol-arloko profesionalen betebeharren zerrenda garbituz, eta artikuluko horrek, Batzordearen ustez, arauak lortu nahi dituen helburuekin loturaren bat, txikia izan arren, dutenak aipatu besterik ez lituzke egin beharko. Zehazki, Batzordeak gomendatzen du f), d), q), s), t), v), w) eta x) letrak ezabatzea. Batzordearen gomendioa kontuan hartu da eta letra horiek ezabatu egin dira.

176. Lehen laguntza emateko kualifikazioa eskuratzeko betebeharra ez betetzeari buruzko Laugarren Xedapen Iragankorraren aplikaziotik erator daitezkeen eragin larriak berriro aztertzeak komenigarritasuna sustatzailearen irizpenera jartzen du Batzordeak. Ez da egokitzat jotzen aldaketa egitea, Batzordeak onartzen baitu kirolen bat egiten dutenak tutoretzen edo zuzentzen dituztenak tutoretzen edo zuzentzen dituzten profesionalentzat prestakuntza hori exijitzea “arauak lortu nahi duen helburu nagusiarekiko –*pertsonen osasuna eta segurtasuna*– koherentea dela eta ez dirudiela neurritz kanpokoia”. Organo sustatzailearen ustez Laugarren Xedapen Iragankorrean kualifikaziorik ezari dagokionez aurreikusitako ondorioak ezin dira muturrekotzat edo neurritz kanpokotzat hartu, babesten den ondasun juridikoa pertsonen osasuna eta segurtasuna baitira.

177. Lanbideetan Legearen babespetik at jarduteari buruzko 16. artikuluari dagokionez, zeinak ezartzen baitu lanbide-kualifikazioarekin jarduteko betebeharra bete ezean, ordenamendu juridiko aplikagarriaren arabera eskatu beharreko administrazio-erantzukizunak, diziplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak eskatuko direla, Batzordearen ustez, gorputz-hezkuntzako irakasle lanbidea alde batera utziz, aurreproiektuan babes penala emateak gehiegizkoa dirudi bilduta dauden gainontzeko lanbideentzat, administrazio-eremuak eskaintzen duen babesa nahikoa izanik. Organo sustatzaile honek, Aurreproiektuak babes penalik ematen ez badu ere, dagokion estatuko legerako birbidaltze bat egiten baitu, eremu penalaria buruzko aipamena ezabatu du.
178. Prestakuntza espezifikoari buruzko Bosgarren Xedapen Gehigarriari dagokionez, Batzordearen ustez gaikuntza horrek zehaztasun handia izan behar du. Organo sustatzaile honek, prestakuntza espezifikoari buruzko kasuistika zabala eta konplexua den heinean, uste du Eusko Jaurlaritzari gaikuntza zabal bat egitea beharrezkoa dela, erregelamendu-garapenaren bidez zehaztu ahal izateko xedez.
179. Batzordearen ustez, lanbidean Legeak eskatutako kualifikaziorik gabe jarduteari buruzko Lehen Xedapen Iragankorrari dagokionez hainbat gauza argitu behar dira. Lehenik eta behin, adierazten da 3. zenbakiak Eusko Jaurlaritzan eskumena duten sailei esleitzen diela lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza ez-formalaren bidetik eskuratutako beharrezko gaitasunak egiaztatze prozedura batzuen ezarpena, Laugarren Xedapen Gehigarrian aurreikusitakoarekin itxurazko kontraesanean egonik, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloan eskumena duen sailari esleitzuz kasuak eta kualifikazioa egiaztatze baldintzak eta prozedurak ezartzeko eskumena. Kontraesan hori zuzendu da.

180. Batzordearen ustez argitasunik ezaren beste adibide bat Lehen Xedapen Iragankorraren 4. zenbakia da, zeinak adierazten duen Eusko Jaurlaritzan kirol-arloan eskumena duen sailak aipatu Xedapen Iragankorrean bildutako gaikuntza eraginik gabe utzi ahal izango duela lanbidean kualifikaziorik gabe jarduteak arrisku zuzen eta larrian jartzen badu pertsonen osasuna eta segurtasuna. Batzordearen ustez, argitu behar da pertsona horiek gaitu egin dituzten edota pertsona horiek “ez liratekeen inoiz gaituta egongo”, izan ere, lehen kasuan eskubideen deklarazio-egintza baten aurrean egongo ginateke, eta hori berrikusteko Administrazioak administrazio-prozedura erkideari buruzko legerian aurreikusitako kausa eta bideetara jo behar du. Organo sustatzaile honen ustez lanbidean jarduteko gaikuntza orokorrerako salbuespen-kasu baten aurrean gaude, ez ordea Administrazioak egindako bere erabaki baten errelokazioaren aurrean. Legebiltzarrak Administrazioari emandako agindu bat izanik, kasu jakin batzuetan gaikuntza orokorra eraginik gabe uzteko eskatuz, ez da arrazoirik aurkitzen aldaketa egiteko.
181. Batzordeak era berean aipatu 4. zenbakiari buruzko ohar bat egiten du, izan ere, Eusko Jaurlaritzako sailari gaikuntza eraginik gabe uzteko egindako gaikuntzak –“arrisku zuzen eta larrian” jartzen badu pertsonen osasuna eta segurtasuna- apreziazio-marjina handiegia duelako. Organo sustatzailearen ustez ez da bidezkoa jarduera horien zerrenda bat txertatzea, arau-lerrun horren izozteak planteatzen daitezkeen egoeretarako hurrenez hurreneko egokitzapenak eragozten edo oztopatzen dituelako.
182. Batzordeak objekzio berdina egiten du 5. zenbakiari dagokionez, eta organo sustatzaile honen irizpidea aurreko zenbakian adierazi da.
183. Lehen Xedapen Iragankorraren 6. zenbakiari dagokionez, Batzordeak dagokion lanbide-kualifikazioa egiaztatzeke baldintza ez

betetzearen ondorioei buruzko auzia berriro planteatzen du. Organo sustatzaile honek ohar horri buruz duen jarrera aipatu da dagoeneko.

184. Seigarren Xedapen Iragankorrari dagokionez, Batzordearen ustez nahikoa izango litzateke federazioek euren erregelamentazioa egokitzeko edo beharrezko xedapenak onartzeko izango duten epea ezartzea. Aginduaren gainerako zatia, hertsagarria dena, ez beharrezkoa izan daiteke. Batzordearen gomendioa kontuan hartu da eta letra hori ezabatu egin da.
185. Legea indarrean jartzerakoan indarrean zeuden eta enpresek sektore publikoko erakundeekin sinatu dituzten kontratuak aipatzen dituen Zazpigarren Xedapen Iragankorrari dagokionez, Batzordearen ustez ez da beharrezkoa, lanbide-kualifikazioen exigentzia 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera egingo baita, eta enpresek denbora izango lukete exigentzia berrietara moldatzeko. Batzordearen gomendioa kontuan hartu da eta Xedapen hori ezabatu egin da.
186. Azken xedapenetatik lehenengoa eta bigarrena. Xedapen horietan, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. eta 128. artikuluetan txertatzen diren arau-hauste berriak biltzen dira. Batzordearen ustez, 127.k artikuluan nahiz 128.h artikuluan bilduta dauden arau-hausteak modu “*zehatz eta argian*” deskribatuta daude. Hala eta guztiz ere, Legearen artikuluen hainbat ez-betetzei buruz 128.i artikuluan egiten den aipamen orokorrak ez dirudi oso egokia, zigorzuzenbidean eskatzen diren argitasun eta zehaztasunarekin nekez bateratu daitekeen baizko arau-hausteen nahaspila ahalbidetzen baitu, eta uste du zenbaki zehatz horretan sartu nahi diren arau-hausteen tipifikazioa eta kalifikazioa ziurtasun eta zehaztasun handiagoekin ezarri beharko liratekeela. Organo sustatzaile honek, Batzordearen jarraibideak kontuan izanik, aipatu arau-hausteak hobeto zehaztu ditu, Extremaduran kirol-arloko lanbideen jarduna antolatzen duen apirilaren 16ko 15/2015 Legearen irizpideari jarraituz neurri batean.

187. Azkenik, Batzordeak legegintza-teknikako hainbat ohar egiten ditu eta testuan osorik txertatzen dira.

Sin.: JON REDONDO LERTXUNDI
GAZTERIA ETA KIROLETAKO ZUZENDARIA

Sin. JON REDONDO LERTXUNDI
GAZTERIA ETA KIROLETAKO ZUZENDARIA

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**Fecha de la firma: **17/02/2015 15:37:13**Validación de la firma:  **Correcta****Memoria complementaria relativa al anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco****SUMARIO****A.- Introducción.....****B.- Cuestiones competenciales.....****C.- Referencias normativas. Derecho Comunitario.....****D.- Rango de la disposición. Contenido de la reserva de Ley.....****E.- Ámbito de aplicación del proyecto.....**

a) Introducción.....

b) Profesiones.....

c) Deporte.....

d) Sector público y sector privado.....

e) Ejercicio profesional. Voluntariado.....

f) Actividades excluidas.....

F.-Título de la Ley.....

**G.- Objetivos y propuestas del proyecto.....**

a) Consideraciones previas.....

b) Margen de libertad para la regulación de las profesiones. Incidencia de la regulación en la actividad económica.....

c) Exclusividad y concurrencia de titulaciones.....

d) Cualificaciones y competencias profesionales.....

e) Empleo de denominaciones para designar a las profesiones.....

f) Profesiones reguladas en la Ley.....

g) Requisitos de titulación en supuestos especiales. Adaptación a los procesos de cambio en la oferta formativa.....

h) Colegiación.....

i) Otros requisitos para el ejercicio profesional.....

j) Principios y deberes de los profesionales.....

k) Sociedades profesionales.....

l) Responsabilidad civil.....

m) Intrusismo. Responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.....

n) Marco normativo común.....



o) Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.....

p) Protección de la salud y seguridad de consumidores y
usuarios.....

H.- Disposiciones adicionales.....

I.- Derecho transitorio.....

J.- Disposiciones finales.....

K.- Incidencia del texto en la normativa vigente.....

L.- Consideraciones de técnica normativa.....

**M- Viabilidad del texto propuesto. cumplimiento de los requisitos de
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, simplicidad y
eficacia.....**

N.- Impacto de género.....

O.- Impacto económico.....

**A.- INTRODUCCIÓN.**

El artículo 57.1 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, tras la modificación realizada mediante la disposición final de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, quedó redactado en los siguientes términos:

“Los proyectos de Ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, así como una evaluación previa del impacto de género y de las medidas correctoras correspondientes. Asimismo, habrá de hacerse constar si dicho proyecto supone o no gravamen presupuestario”

Asimismo, con arreglo a las directrices de técnica normativa aprobadas mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, publicadas por la Orden del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico del Gobierno Vasco, de 6 de abril de 1993, en los proyectos de Ley debe existir una parte expositiva, que debe ir precedida del título “*Exposición de Motivos*”, en la que deben indicarse sumariamente los motivos que hayan dado lugar a su elaboración, los objetivos perseguidos, los fundamentos jurídicos habilitantes en que se apoye, los principios y líneas generales de la regulación y su incidencia en la normativa en vigor, con especial incidencia en los aspectos novedosos.

Siguiendo las citadas directrices de técnica normativa también debe acompañarse al proyecto una memoria, que responde a un análisis más amplio del proyecto en el que se debe tener en cuenta la situación o problema al que se pretende dar una respuesta legal, las distintas alternativas existentes y las razones que aconsejan optar por las alternativas propuestas y la estimación de la incidencia organizativa y/o financiera de la regulación propuesta. Precisamente, a este requerimiento atiende la presente



memoria que trata de justificar, entre otras cuestiones, la necesidad de la Ley, su habilitación competencial, los objetivos perseguidos, las medidas elegidas en el anteproyecto entre las distintas opciones posibles, así como la viabilidad de la misma.

Con este objetivo general, debe comenzarse señalando en esta memoria que, para abordar de forma adecuada la regulación del acceso y del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, resulta imprescindible conocer suficientemente cuál es la situación de partida en el País Vasco desde diferentes puntos de vista: jurídico-competencial, formativo, laboral, deportivo, económico, etcétera. Procede conocer los antecedentes legales de la regulación, cuáles son las referencias normativas comunitarias, estatales o autonómicas, cuáles son las tendencias de futuro, cuáles son las implicaciones o repercusiones reales que puede conllevar una regulación de esta naturaleza, etcétera. Y, por supuesto, debe quedar suficientemente acreditada en la memoria la necesidad de una regulación del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte a través de una disposición aprobada por el Parlamento.

Actualmente existe un notable consenso parlamentario, tanto en el ámbito autonómico como estatal, en que la práctica deportiva constituye uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia e impacto. El cambio de valores producido en nuestra sociedad ha provocado que la actividad deportiva haya experimentado un espectacular desarrollo. Y también es constatable un cierto consenso en la legislación deportiva, que reconoce que dicha práctica contribuye a un mayor bienestar de los ciudadanos, a una mejora de su salud y a la formación integral de los jóvenes. Por todo ello, la vigente legislación reconoce que el deporte constituye una actividad de interés público. Este interés se justifica de forma clara por los importantes beneficios que reporta la práctica deportiva en la salud y bienestar, individual y social, de las personas.

Ahora bien, si esa práctica deportiva de los ciudadanos no es conducida, guiada, planificada, desarrollada, controlada, etcétera, por personal debidamente capacitado se corre un claro riesgo de que sea nociva para la salud de las personas o para su seguridad. Por esta razón, las diferentes manifestaciones de actividad físico-deportiva de los ciudadanos requieren una regulación del acceso y ejercicio profesional



desarrollado por aquellas personas que deben velar por que la práctica deportiva se desarrolle en unas razonables coordenadas de salud y seguridad.

Ello es corroborado por la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Según esta Directiva *“la prestación de servicios debe garantizarse en el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la protección del consumidor. Por lo tanto, se deben prever disposiciones específicas para las profesiones reguladas que tengan relación con la salud o la seguridad”*.

La vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, del País Vasco, atendiendo a esa preocupación por la salud y seguridad de los deportistas, dispuso en su artículo 62 que *“para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial”*.

En la medida que no existe actualmente en el País Vasco una regulación legal de las profesiones del deporte, tal exigencia de titulaciones se ha producido, hasta la fecha, sólo en un determinado ámbito, el deporte escolar, pero sin regular ejercicio profesional alguno. El artículo 25 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, de Deporte Escolar, ha establecido las titulaciones exigibles en tal ámbito:

“1.– Para ejercer funciones de dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y funciones análogas en materia de deporte escolar será preciso estar en posesión del título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el título de Grado correspondiente.

2.– Si las citadas actividades de dirección deportiva se ejercen con relación a una sola modalidad deportiva será posible desarrollar la actividad estando en posesión del título de Técnico Deportivo Superior



de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente, o título equivalente.

3.– Para las citadas actividades de dirección del deporte escolar que se programen en el seno de los centros educativos fuera del horario lectivo también será válido el título de Maestro con especialización en Educación Física, o título equivalente.

4.– La Escuela Vasca del Deporte promoverá, de común acuerdo con los órganos forales de los territorios históricos, ofertas formativas para las personas que colaboren en el desarrollo de los entrenamientos, competiciones y demás actividades que integran los programas de deporte escolar .

5.– Mediante Orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes, podrá adaptarse la exigencia de los títulos contenidos en esta Decreto a las nuevas titulaciones que se aprueben como consecuencia de las nuevas ofertas formativas.

6.– Las citadas exigencias de titulaciones se entienden sin perjuicio de la exigencia de titulaciones oficiales para el ejercicio de profesiones propias del deporte a través de la correspondiente Ley.”

Es decir, el propio Decreto deja claro que esa exigencia de titulaciones que contiene el Decreto se entiende sin perjuicio de la regulación del ejercicio de las profesiones pues, como se tendrá oportunidad de exponer posteriormente, no debe confundirse la regulación del acceso y ejercicio de profesiones con el sometimiento de determinadas actividades a algún requisito de formación o de titulación. Una disposición deportiva general puede exigir que los componentes de un órgano de justicia deportiva sean licenciados o licenciada o graduado o graduada en Derecho, pero ello no significa regular la profesión de abogado o abogada. En nuestro ordenamiento jurídico se supedita o condiciona el desarrollo de una actividad a la posesión de una titulación o



cualificación, sin que ello signifique que nos encontremos ante una regulación del ejercicio de una profesión.

El Plan Vasco del Deporte 2003-2007 ya denunció que existe una percepción general entre los agentes del deporte sobre la falta de regulación profesional, hecho que ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación que deben erradicarse. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de dicha Plan fue regular las cualificaciones profesionales mínimas, teniendo en cuenta, según reconoce el propio Plan, la incidencia de la práctica deportiva en la salud y seguridad de los practicantes.

Dicho ello, y por lo que atañe a la necesidad de la regulación del acceso y ejercicio de tales profesiones del deporte, resulta significativo que tal necesidad se esté dejando sentir en los últimos años con diversas iniciativas parlamentarias.

- En la Comunidad Autónoma de **Cataluña** se aprobó la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, por unanimidad de todos sus parlamentarios.
- En la Comunidad Autónoma de **Canarias**, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Canarias aprobó el 28 de noviembre de 2005 una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno Canario para que requiriese, a su vez, al Gobierno de la Nación a que, en estrecha colaboración con los distintos sectores implicados, elaborase una Ley en la que de manera sistemática y ordenada se regulen las profesiones relacionadas con el deporte. Posteriormente, en la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias, celebrada el 8 y 9 de junio de 2010, se aprobó por unanimidad, una Proposición No de Ley en la que el Parlamento de Canarias instaba al Gobierno de Canarias a que *“al amparo de sus facultades estatutarias, proceda a regular las distintas profesiones del deporte, de tal forma que se determinen, en función de la formación, las competencias profesionales de cada una de ellas”*.



- El gobierno de la Comunidad Autónoma de **Andalucía** el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley del Deporte, que dedica todo el Título VII a la regulación de las profesiones del deporte. Tal proyecto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 8 de septiembre de 2014.
- En la Comunidad Autónoma de **Extremadura** se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 25 de noviembre de 2013 el anuncio de trámite de información pública de la Ley de Ejercicio de Profesiones del Deporte de la Comunidad,.
- También en la Región de **Murcia** el gobierno autonómico se encuentra tramitando el Anteproyecto de Ley de la Actividad Física y el Deporte, que dedica todo el Título IV a la regulación del ejercicio de las profesiones de la actividad física y el deporte. Tal Anteproyecto ya ha sido objeto de diversos dictámenes preceptivos.
- En la **Comunitat Valenciana** se aprobó Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física, cuya disposición adicional segunda, establece lo siguiente: *“El Consell de la Generalitat presentará a Les Corts un proyecto de ley de regulación de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana”*.
- En la Comunidad Autónoma de **Aragón** por parte de la Dirección General de Deporte ya se difundió un primer borrador, de 1 de marzo de 2013, del Anteproyecto de Ley de la Actividad Física y del Deporte, que dedica todo un capítulo a las titulaciones deportivas *“y el ejercicio de las profesiones relativas al deporte y la actividad física”*.
- En el ámbito del Parlamento del **Estado** la Comisión de Educación y Deporte, del Congreso de los Diputados, en su sesión de 25 de mayo de 2011, aprobó, sin votos en contra, la siguiente Proposición no de Ley: *“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda, desde el más estricto respeto a las competencias autonómicas, a regular las distintas profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral para garantizar*



la seguridad y la salud de las personas". Tras la conformación del nuevo Gobierno en la X Legislatura, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte compareció ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, el 31 de enero de 2012, y expuso lo siguiente: *"Otra cuestión importante que abordaremos en esta legislatura es la relativa a la regulación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte. Lo consideramos un tema esencial, sobre todo en lo que concierne a la protección de las personas, ya que permitirá que sean profesionales formados, los que se encarguen de cuidado y gestión fisiológica y biológica de su salud"*. En la posterior comparecencia ante el Congreso de los Diputados del Presidente del Consejo Superior de Deportes, celebrada el 18 de julio de 2012, se reiteraron las mismas palabras del Ministro. Los dos presidentes anteriores del Consejo Superior de Deportes adelantaron el mismo objetivo programático. Uno de ellos compareció en el Congreso de los Diputados el 24 de junio de 2008 y, según su Diario de Sesiones, manifestó lo siguiente: *"Hay una asignatura pendiente que tiene que ver con las profesiones deportivas, profesiones derivadas de enseñanzas deportivas. Yo creo que el ciudadano exige cada vez más una calidad de servicio y es algo sobre lo que tendremos que reflexionar y presentar algunas medidas. Algunas Comunidades, como es Cataluña, han aprobado ya una ley con respeto a las profesiones ligadas a las enseñanzas deportivas y nosotros queremos contribuir también al debate. Andalucía ha trabajado también bastante, aunque no tiene una ley específica en este aspecto, pero a ver si podemos encontrar un común denominador a ese reconocimiento de las enseñanzas deportivas, sus profesiones, sobre todo con los límites de las directivas autonómicas y por supuesto de las competencias de las comunidades autónomas; sería la medida número nueve"*.

Por lo que respecta a esta Comunidad Autónoma, el Parlamento Vasco, en sesión plenaria de 9 de febrero de 2012, aprobó el siguiente texto: *"El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que presente, dentro del marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos, un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte, en colaboración con todos los agentes implicados, de tal forma que se determinen las profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de*



ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral para organizar la seguridad y la salud de las personas". El 4 de marzo de 2013, la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura respondió por escrito a la pregunta de un grupo parlamentario sobre la valoración por el nuevo Departamento del Gobierno de la citada declaración parlamentaria. La respuesta oficial fue la siguiente: "Este Departamento valora muy positivamente aquella declaración y por esta razón se ha marcado como objetivo prioritario, tal y como ha adelantado esta Consejera en su comparecencia parlamentaria en la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte y Comisión de Educación (11/02/2013), elaborar el anteproyecto de ley regulador del ejercicio de las profesiones del deporte".

Por tanto, la situación actual es que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han puesto de manifiesto un consenso en la necesidad de regular mediante Ley las profesiones del deporte. Se ha pasado de una etapa en la que las comunidades autónomas se limitaban a incluir tímidamente en sus correspondientes leyes del deporte una previsión muy genérica sobre la obligatoriedad de contar con la correspondiente titulación para realizar determinados servicios profesionales de carácter deportivo, realizando de este modo una vaga remisión a la legislación que en un futuro regule la materia, a una nueva etapa en la que se manifiesta la necesidad de regular mediante Ley las profesiones del deporte.

Al objeto de evitar las habituales confusiones en esta materia, conviene precisar, tal y como se ha indicado anteriormente, que no todo condicionamiento legal o reglamentario de determinadas actividades a concretas titulaciones o cualificaciones constituye una regulación del ejercicio de profesiones. No deben confundirse tres realidades jurídicamente diferentes que frecuentemente se entremezclan:

- a) La regulación de la formación y de las titulaciones académicas. Tal regulación cabe realizarse por vía reglamentaria y su título competencial es el de educación.
- b) La regulación de las profesiones. Con esta regulación una profesión pasa de ser una profesión libre a ser una profesión regulada. Y dentro de las



profesiones reguladas se encuentran las tituladas y las no tituladas. La regulación de las profesiones tituladas se encuentra sometida al principio de reserva de Ley (artículo 36 CE) y, por tanto, no se puede hacer por vía reglamentaria. Idéntica conclusión debe obtenerse respecto a la regulación de las profesiones no tituladas; parece lógico que la transformación de una profesión libre en profesión regulada requiere una norma de máximo rango. De hecho, el artículo 7.3 del anteproyecto de ley estatal sobre servicios y colegios profesionales¹ establece que *“las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de ley”*.

- c) La exigencia de determinadas condiciones para desarrollar actividades concretas. Tal exigencia es susceptible de realizarse, según reconocen las Leyes del deporte de varias Comunidades Autónomas, por vía reglamentaria. Como señala expresamente el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 5 de junio de 2003, *“la sujeción a determinadas condiciones o el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ejercer una determinada actividad laboral o profesional es cosa bien distinta y alejada de la creación de una profesión titulada”*. Un ejemplo de exigencia de requisitos de cualificación o titulación para desarrollar actividades, pero sin constituir la regulación de una profesión, es el Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, que se ha citado anteriormente en esta memoria. En este Decreto no se regula ninguna profesión; tan sólo se exige una determinada cualificación para la realización de algunas actividades en el ámbito del deporte escolar. El propio artículo 25 lo reconoce expresamente: *“Las citadas exigencias de titulaciones se entienden sin perjuicio de la exigencia de titulaciones oficiales para el ejercicio de profesiones propias del deporte a través de la correspondiente Ley”*.

Para salir de cualquier duda respecto a los tres ámbitos regulatorios antes citados puede ser útil el tenor de la Disposición Adicional Segunda del derogado Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, el cual ya establecía que sus preceptos sobre formaciones no constituirían regulación del ejercicio de profesión titulada alguna:

¹ Versión de 20 de diciembre de 2013 remitida para su dictamen al Consejo de Estado.



“Los elementos que definan el perfil profesional en las correspondientes enseñanzas mínimas de cada modalidad y, en su caso, especialidad deportiva, se entenderán en el contexto del presente Real Decreto no constituyendo regulación del ejercicio de profesión titulada alguna”.

Tras la aprobación del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, se ha continuado con el mismo criterio. Así, por ejemplo, la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, los elementos recogidos en el presente real decreto, no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna”

Es decir, la regulación relativa a las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, aunque defina perfiles profesionales, no constituye la regulación del ejercicio de una profesión. Esto debe quedar muy claro en esta memoria pues es frecuente objeto de confusión, tal y como acaba de evidenciar el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de junio de 2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, que resuelve la impugnación del Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo con Escafandra Autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. Las entidades recurrentes impugnaban el Real Decreto por contradecir la reserva de ley prevista en el artículo 36 de la Constitución española respecto la regulación de una profesión titulada. El Tribunal Supremo rechaza la impugnación y considera que el Real Decreto no infringe el principio de reserva legal *“no sólo porque su artículo 1.2 disponga que ‘los elementos recogidos en el presente real decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna’.* Sino porque realmente es así...no regula ‘atribuciones’ profesionales propiamente



dichas, en el sentido de facultades o actividades que queden reservadas a uno u otro profesional, sino, más bien, 'competencias' profesionales, personales y sociales, entendidas como conocimientos, aptitudes y habilidades que se adquieran en el proceso formativo".

Igualmente, tampoco debe confundirse la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas, prevista en el artículo 36 de la Constitución, y reservada a la Ley, con la exigencia de determinados requisitos para el desarrollo de determinados servicios o actividades. No es lo mismo establecer el requisito de que un centro o establecimiento deportivo determinado (un polideportivo, una piscina olímpica, o un centro de alto rendimiento, por ejemplo) deba contar con un Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, exigencia que claramente puede hacerse por vía reglamentaria (respetando la legislación vigente), que regular el acceso o contenido esencial de una profesión y supeditar el acceso y ejercicio profesional a la posesión del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Igualmente, no es lo mismo exigir que en las piscinas de uso público exista una persona con determinada cualificación para prestar servicios de socorrismo que regular la formación de los socorristas acuáticos o que regular la profesión del socorrista acuático. Son tres realidades totalmente diferentes.

Interesa resaltar en esta memoria que la delimitación de ámbitos profesionales y el condicionamiento del acceso a los mismos mediante la exigencia de titulaciones o cualificaciones determinadas ha constituido históricamente en todas las áreas sociales, no sólo en el deporte, una compleja labor. La delimitación del ámbito de cada profesión y sus atribuciones, a la que se vincula una determinada cualificación o titulación, implica casi siempre una confrontación con el ámbito propio de otras profesiones contiguas, también vinculadas con otras cualificaciones o titulaciones, lo que da lugar con frecuencia a conflictos judiciales promovidos por organizaciones colegiales, asociaciones representativas de intereses profesionales, universidades, etcétera. La delimitación del ámbito profesional suele ser por lo general muy confusa como revela la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 16 de junio de 1981 refiriéndose a un conflicto entre Ingenieros Industriales e Ingenieros de Caminos:



“...todos ellos tienen en su formación una base común, que se deja sentir, al resultar difícil establecer entre ellos fronteras naturales y claramente divisorias, lo que da pie, a que a falta de ellas tengan que ser suplidas por preceptos de creación artificial, origen de conflictos, en los que pesa más el espíritu expansivo de los distintos cuerpos que una política global, coordinadora y armonizante”.

El propio Gobierno estatal, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, antes citada, establece que la situación de partida es la existencia de una regulación “*conflictiva (entre profesionales)*”.

Esta dificultad se agudiza, más si cabe, en el mundo del deporte, en la medida que constituye un campo con numerosas actividades profesionales que no se han delimitado adecuadamente y en el que, por añadidura, existen numerosas concurrencias o solapamientos entre cualificaciones o titulaciones de muy diferente naturaleza y procedentes de formaciones con niveles también diferentes. Existe una clara falta de disección de las competencias o atribuciones que deben corresponder a las distintas cualificaciones o formaciones probablemente porque la proliferación de las nuevas ofertas formativas se está produciendo sin una adecuada reflexión.

Además, el mundo de las enseñanzas y titulaciones del deporte constituye un ámbito en continua renovación, poco asentado y desestructurado, donde se mezclan y sobreponen niveles de formación sin una clara disección de sus espacios. La regulación de las titulaciones a través del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, hizo pensar que se podía conseguir un cierto orden en el mapa de las titulaciones deportivas. Sin embargo, la regulación de las enseñanzas y titulaciones de los técnicos deportivos se halla en continuo proceso de transitoriedad, como lo prueba el hecho de que dicho Real Decreto derogó el Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, y que el propio Real Decreto 1913/1997 ha sido derogado por el Real Decreto 1363/2007. Y tampoco hay que desdeñar las numerosas cualificaciones profesionales reconocidas oficialmente en el ámbito del deporte y que se hallan recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.



Debe dejarse claro en esta memoria que con la regulación de las formaciones y sus correspondientes títulos tan sólo se da solución a una pequeña parte del problema de la prestación de servicios profesionales por personas no cualificadas; pero la clave del problema radica en la necesidad de poner en conexión dichas formaciones académicas con el ejercicio de concretas profesiones. Es decir, una vez implantado el mapa de las titulaciones o cualificaciones del deporte queda pendiente de estructurar lo más difícil: las profesiones vinculadas a las mismas. La lógica de un sistema integral es que, salvo las profesiones enteramente libres, cada profesión esté sometida a unas titulaciones o cualificaciones concretas y a un ámbito funcional que puede ser exclusivo o compartido con otras profesiones.

Además de dichas dificultades, también resulta unánimemente aceptado que existe una precariedad en la prestación de servicios profesionales a los ciudadanos que practican deporte y el País Vasco no es una excepción, pues no es infrecuente ver que personas, sin un mínimo de formación, experiencia o conocimientos, impartan enseñanzas deportivas, presten servicios profesionales o controlen determinadas actividades deportivas con riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Según lo expuesto en el Estudio *“Deporte y empleo en Europa”*, de la Dirección General X de la Comisión Europea, con la participación de la Red Europea de Institutos de Ciencias del Deporte y del Observatorio Europeo del Empleo Deportivo, *“el número de personas que ejercen sin formación adaptada una profesión en el sector del deporte es muy elevado en la mayoría de los países de la UE”*. Existe coincidencia general en que resulta necesaria una Ley que regule la actividad profesional en el deporte para responder a las necesidades sociales y al objeto de que las diversas actividades deportivas sean dirigidas por personas que tengan un nivel mínimo de formación. Uno de los problemas más significativos existentes en el campo del deporte, tal y como revelan los expertos, es la considerable presencia en el ámbito laboral del deporte de personas con formaciones diversas no relacionadas directamente con la actividad física y deportiva.

El sector del deporte ha sido, hasta la fecha, uno de los mercados laborales más abiertos y susceptibles de permitir el ejercicio de determinadas profesiones a



formaciones y titulaciones muy heterogéneas, a personas con una formación muy deficiente o, incluso, sin ningún tipo de formación. Resulta ilógico que un sector económico, tan vinculado a la salud y la seguridad de las personas continúe sin un mínimo marco normativo en lo referente a la regulación de las actividades profesionales.

Es muy significativa la opinión de la Comisión Jurídica Asesora del País Vasco cuando, en su Dictamen 7/2004, destaca que *“la estructuración de profesiones en el ámbito deportivo a través de titulaciones oficiales constituye una cuestión demandada por amplios sectores sociales”*. Asimismo, la Comisión Jurídica Asesora sostiene que *“los poderes públicos no pueden seguir siendo ajenos a la seguridad de la actividad deportiva si simultáneamente hacen emerger el mensaje de su fomento e incremento. La actividad física debe realizarse en condiciones de seguridad y una parte sustantiva de la misma se encuentra en las que personas que intervienen en los distintos niveles de aprendizaje y conducción de la misma. Esto exige acotar los ámbitos funcionales e implantarlos en el conjunto de la actividad deportiva tanto la competitiva como la recreativa pasando, claro está, por la educativa tanto en su aspecto reglado como en aquellas facetas que, por insertarse en el contexto de lo que se denominan actividades extraescolares, parece que se margina a las reglas generales”*.

Como consecuencia de todos los factores anteriores, y considerando de forma especial la íntima conexión que tienen las profesiones propias del ámbito del deporte con la educación integral, la salud y la seguridad de las personas, resulta inaplazable un tratamiento legislativo específico y diferenciado de las profesiones del deporte.

Debe insistirse en que el objeto del Anteproyecto de Ley no es regular las formaciones y titulaciones académicas- que ya cuentan con su regulación- ni las ocupaciones, puestos o lugares de trabajo, o los perfiles profesionales de las distintas titulaciones. Tampoco es objeto de la Ley abordar los contenidos formativos necesarios para el ejercicio profesional en el sector deportivo ni el establecimiento de las facultades o atribuciones profesionales que corresponden a cada una de las titulaciones. Esto último es un error muy común en los distintos foros o documentos de debate. Una titulación universitaria, tal y como se expondrá en esta memoria, puede dar lugar a



diferentes profesiones y, a su vez, una misma profesión puede ejercerse sobre la base de distintas titulaciones académicas.

Por tanto, el objeto de la Ley es muy claro: regular el acceso y ejercicio de determinadas profesiones propias del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Como hemos tenido oportunidad de señalar en líneas precedentes, la estructuración de las profesiones del deporte responde a la necesidad de asegurar a los ciudadanos que las actividades de entrenamiento, enseñanza, dirección, etcétera, sean realizadas por quienes tienen el nivel de formación exigible y, por tanto, resulta necesario que dichas actividades no sean dejadas en manos de cualquier persona sin una mínima cualificación. Los poderes públicos deben garantizar la salud, la seguridad y el normal desarrollo de las prácticas deportivas de sus ciudadanos. El deporte implica, por lo general, una actividad que puede ser beneficiosa para los ciudadanos si se realiza en condiciones aceptables, pero también puede constituir un grave riesgo si se realiza bajo la dirección o supervisión de personas sin la formación adecuada, especialmente en determinadas circunstancias (personas menores de edad, discapacitados, prácticas en el medio natural, etcétera). Los poderes públicos no pueden seguir siendo ajenos al mandato constitucional del artículo 43 y deben garantizar la salud y la seguridad en la práctica deportiva. Y ello depende en buena medida de la formación exigible a las personas que prestan los servicios deportivos a los ciudadanos.

B.- CUESTIONES COMPETENCIALES.

La propuesta de regulación del acceso y ejercicio de determinadas profesiones tituladas del deporte por parte del País Vasco debe sustentarse en unos títulos o habilitaciones competenciales y por ello es menester que la presente memoria aborde tal cuestión. Por supuesto, no resulta posible examinar en este documento, con la suficiente profundidad y detalle, el sinfín de complejas cuestiones que genera, desde una perspectiva competencial, la regulación de las profesiones propias del deporte.



La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en materia deportiva. Asimismo, Euskadi ostenta, de conformidad con el artículo 10.22, competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

No obstante esta posesión de claros títulos competenciales para aprobar la presente Ley, no cabe ocultar que la materia de la regulación de las profesiones conlleva una importante transversalidad que arrastra complejas cuestiones competenciales. Procede significar que, al menos, existe un antecedente que, desde el punto de vista competencial, resulta muy esclarecedor. Cataluña, con idénticas competencias que el País Vasco en materia de deporte y de ejercicio de las profesiones, aprobó y publicó la Ley 3/2008, de 23 de abril, de ejercicio de las profesiones del deporte. En la medida que la citada disposición suscitó algunas discrepancias competenciales, que ya han sido resueltas, este Anteproyecto de Ley se ha inspirado en los criterios contenidos en la Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publicó el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la citada Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte.

Tras las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de fecha 30 de julio de 2008, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas sobre la Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, ambas partes consideraron solventadas aquellas discrepancias competenciales.

Por un lado, ambas partes coincidieron en interpretar que la referencia al ejercicio de las profesiones del deporte en el sector público ha de entenderse circunscrita al ámbito del sector público de la Generalitat y de las Administraciones locales de Cataluña. Por esta razón, se ha incluido en el presente Anteproyecto varias referencias expresas al



sector público vasco. Asimismo, ambas partes coincidieron en interpretar que las actuaciones del Instituto Catalán de las Cualificaciones Profesionales en orden a reconocer la habilitación para el ejercicio de las profesiones deportivas se deben circunscribir en todo caso al ámbito material de competencias asumidas por la Generalidad de Cataluña en estas materias. Idéntico criterio se ha seguido en este Anteproyecto.

Este tema de las competencias para la regulación de las profesiones se ha visto condicionado por la cuestionada doctrina del Tribunal Constitucional en el campo de las profesiones tituladas, lo cual obliga a diferenciar las profesiones libres, las profesiones reguladas y, dentro de éstas, las profesiones tituladas y las profesiones colegiadas. Veamos:

Profesión libre: es aquella profesión carente de regulación o no sometida a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales.

Profesión regulada: es aquella profesión cuyo acceso se encuentra subordinado a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales.

Profesión titulada: es aquella profesión para cuyo acceso se exige estar en posesión de un título académico oficial de educación superior.

Profesión colegiada: es aquella profesión titulada para cuyo ejercicio se exija la colegiación o la pertenencia a un colegio profesional.

A tenor de estas definiciones, extraídas –no literalmente– del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, antes meritado, las profesiones reguladas pueden ser tituladas o no tituladas. Y las profesiones tituladas pueden ser, a su vez, colegiadas o no colegiadas.

Con arreglo al citado Anteproyecto estatal, artículo 8, “*sólo podrá exigirse título oficial de educación superior para el acceso a una actividad profesional o profesión cuando así se establezca en norma estatal con rango de ley*”. Es decir, con arreglo a esta



propuesta legislativa del Gobierno estatal sólo el Estado, mediante Ley, puede regular las profesiones tituladas o aquellas profesiones cuyo acceso se vincula a la posesión de un título oficial de educación superior. Asimismo, según su artículo 25.1 *“sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta. La colegiación obligatoria se podrá exigir únicamente mediante cuando así se establezca mediante norma estatal con rango de ley”*. Como consecuencia de tal propuesta, amparada en una discutible doctrina del Tribunal Constitucional, sólo el Estado puede aprobar una Ley del ejercicio de profesiones tituladas y colegiadas.

Mientras la reserva de actividad basada en un título universitario o de formación profesional superior –profesión titulada- sólo puede hacerse por ley estatal, la reserva de actividad basada en cualesquiera otras cualificaciones se puede realizar por ley estatal o autonómica según el ámbito material de la misma. En el ámbito material que nos ocupa, el deporte, resulta indubitada la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco al amparo del artículo 10.36 del Estatuto. Este es el criterio seguido en el País Vasco con la regulación de las profesiones turísticas, contenida en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril. Y también es el criterio que se deduce del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuyo artículo 22.1 dispone que el incumplimiento por los profesionales de las obligaciones recogidas en la Ley *“será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial, tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional”*

Tal formulación competencial del Estado, con base en cierta doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, dista mucho de ser clara y pacífica toda vez que las Comunidades Autónomas han venido regulando de forma pacífica y habitual profesiones tituladas y colegiadas sin objeción o reproche competencial del Estado.

Es cierto que el Estado ha aprobado diversas disposiciones en materia de profesiones tituladas. Un ejemplo de ellas es la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El Estado, como carece de título competencial de ejercicio de las profesiones tituladas, viene aprobando las leyes reguladoras de las



profesiones al amparo de las competencias que ostenta en el ámbito material de las respectivas profesiones (sanidad, justicia, educación, etcétera). Así, la citada Ley 44/2003 se aprobó al amparo de sus competencias en materia sanitaria, no en virtud de una competencia propia en materia de ejercicio de las profesiones tituladas. Asimismo, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, regula el ejercicio en común de actividades profesionales que requieren titulación universitaria oficial, y que es de plena aplicación en todo el territorio español, está amparada en los títulos competenciales del Estado relativos a la legislación mercantil, la ordenación de los registros e instrumentos públicos y las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Por otra parte, en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en contra de lo que pueda parecer, no se regulan ambas profesiones. Como señala acertadamente su Exposición de Motivos se regulan las titulaciones profesionales, competencia estatal al amparo del artículo 149.1.30, titulaciones profesionales que *“complementan al título universitario en Derecho”*. Según dicho preámbulo *“la Ley no interfiere, más allá de constituir estos títulos, en los presupuestos del ejercicio profesional de la abogacía y de la procura”*.

Además de Cataluña y el País Vasco existen más comunidades autónomas que ostentan competencia exclusiva en materia de ejercicio de las profesiones tituladas y, asimismo, la mayoría de las comunidades autónomas tiene competencia exclusiva en el campo del deporte al amparo de sus Estatutos de Autonomía. Según la vertebración institucional llevada a cabo por la Constitución Española y los diferentes Estatutos de Autonomía, los entes llamados a desarrollar de forma general la política deportiva en España son las comunidades autónomas.

Como se acaba de apuntar más arriba, dista de ser diáfana la reserva competencial que propugna el Estado en materia de profesiones tituladas, cuando no existe ninguna atribución expresa de tal competencia al Estado en la Constitución, al contrario de lo que sucede al País Vasco que, al igual que unas pocas Comunidades Autónomas, ostenta competencia exclusiva en materia de profesiones tituladas y que, al amparo de la misma, ya cuenta con su ley en materia de profesiones tituladas.



Las restantes Comunidades Autónomas ostentan competencias de desarrollo y ejecución en el marco de la legislación básica del Estado y otras no ostentan competencia alguna:

ANDALUCÍA

Tiene competencia exclusiva sobre “*colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado*” (artículo 79.3 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo).

ARAGÓN

Tiene competencia **exclusiva** en materia de “*colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, respetando las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución*” (artículo 71.30 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril).

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asturias tiene, “*en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde al Principado de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias:...* 9. Corporaciones de Derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas” (artículo 11 Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero).

ILLES BALLEARS

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, Illes Balears **no tiene** competencia exclusiva, ni de desarrollo legislativo, en materia de ejercicio de profesiones tituladas. La Comunidad Autónoma de las islas Baleares sólo podrá



asumir competencias en materia de “Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas” por uno de los siguientes procedimientos:

“Primero.- Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del art. 148 de la Constitución, previo acuerdo del Parlamento de las islas Baleares adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el apartado 3 del art. 147 de la Constitución.

Segundo.- A través de los procedimientos establecidos en los núms. 1 y 2 del art. 150 de la Constitución, bien a iniciativa del Parlamento de las islas Baleares, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.”

CANARIAS

*“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el **desarrollo legislativo y la ejecución** en las siguientes materias: ... 13. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales y ejercicio de profesiones tituladas **en el marco de lo dispuesto en los arts. 36 y 139 de la Constitución.**”*
(artículo 32 Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre).

CANTABRIA

*“En el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el **desarrollo legislativo y la ejecución** de las siguientes materias: ... 5.- Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de profesiones tituladas”* (artículo 25 Ley Orgánica 11/1998, 30 de diciembre).

CASTILLA LA MANCHA

*“En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el **desarrollo legislativo y la ejecución** en las materias siguientes: ... 5.*



Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas” (artículo 32 Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio)

CASTILLA Y LEÓN

*“En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León **el desarrollo legislativo y la ejecución** de la legislación del Estado en las siguientes materias: 11ª Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas”* (artículo 27 Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero).

CATALUÑA

*“Corresponde a la Generalitat, **respetando las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución, la competencia exclusiva** sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, que incluye en todo caso:*

- a) La determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas así como de los derechos y obligaciones de los profesionales titulados y del régimen de incompatibilidades.*
- b) La regulación de las garantías administrativas ante el intrusismo y las actuaciones irregulares, así como la regulación de las prestaciones profesionales de carácter obligatorio.*
- c) El régimen disciplinario del ejercicio de las profesiones tituladas”*

(artículo 125.4 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio)

EXTREMADURA

*“En el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca corresponde a la Comunidad Autónoma **el desarrollo legislativo y***



ejecución de: ...6. Colegios profesionales y *ejercicio de las profesiones tituladas*. Cámaras Agrarias, Cámaras de Comercio e Industria y demás corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales” (artículo 8 Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo).

GALICIA

Galicia ***no tiene***, al amparo de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, ***competencia expresa*** en materia de ejercicio de profesiones tituladas.

LA RIOJA

“En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias: 10. Cámaras agrarias de comercio e industria o entidades equivalentes, Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, así como cualquiera otra corporación de derecho público representativa de intereses económicos y profesionales” (Artículo 9 Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero).

MADRID

“En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias: ... 6. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas” (artículo 27 Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio).



REGIÓN DE MURCIA

*“En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el **desarrollo legislativo** y la **ejecución** en las siguientes materias ...10. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, Cámaras Agrarias, de Comercio, Industria y Navegación, Cofradías de Pescadores y demás corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales”* (artículo 11 Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio)

NAVARRA

*“Navarra tiene **competencia exclusiva** sobre las siguientes materias: ... Veintiséis. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, **conforme a la legislación general**”* (Artículo 44 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto).

PAÍS VASCO

*“La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene **competencia exclusiva** en las siguientes materias: ... 22. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, **sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 36 y 139 de la Constitución**. Nombramiento de Notarios de acuerdo con las Leyes del Estado”* (Artículo 10 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre)

COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat tiene **competencia exclusiva** sobre las siguientes materias: *“Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, **sin perjuicio de lo que disponen los arts. 36 y 139 de la Constitución Española**”* (artículo 49 Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril).



Se ha señalado anteriormente la complejidad de la cuestión competencial atinente a este Anteproyecto de Ley, provocada por la falta de mención expresa en la Constitución Española a la competencia del Estado para la regulación general de la materia. La única mención existente es a las profesiones tituladas y se produce en el artículo 36 de la Constitución Española, pero dicho precepto no otorga al Estado título competencial alguno: *“La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas”*.

Como puede comprobarse fácilmente con la lectura de dicho precepto, no se establece que deba ser una Ley estatal la que regule el ejercicio de tales profesiones. Por supuesto, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, esa falta de mención expresa de competencias sobre un ámbito material no impide que el Estado pueda intervenir en esta materia; tampoco el Estado contaba con una mención expresa en la Constitución para regular el fenómeno deportivo y, sin embargo, el Parlamento español aprobó la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte, así como la Ley 10/1990, de 15 de octubre. Según la Exposición de Motivos de esta Ley si bien es cierto que *“la atribución de competencias sobre deporte o promoción del deporte se halla explícita en los diferentes Estatutos de Autonomía –y, por ello esta Ley no trata de realizar operaciones de redistribución que no le corresponde – no es menos cierto que, en primer lugar, semejante atribución ha de ponerse en conexión estricta con los ámbitos territoriales de las respectivas Comunidades Autónomas y, en segundo lugar, que el deporte constituye una materia –por emplear términos constitucionales- sobre la que, sin duda, inciden varios títulos competenciales”*. Y algo parecido ha sucedido con la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje, derogada por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. En esta legislación sobre dopaje han incidido distintos títulos competenciales. Además de la competencia autoorganizativa que corresponde al Estado, así como aquella de que dispone sobre los intereses generales que afectan al deporte español en su conjunto, concurren en dicha Ley diversas competencias específicas, entre las que caben destacar las relativas a las bases y coordinación general de la sanidad, legislación penal, administración de



justicia, seguridad pública, relaciones internacionales o estadística para fines estatales, todas ellas derivadas del artículo 149.1 de la Constitución Española.

Por la misma razón, la existencia de competencia exclusiva por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejercicio de profesiones tituladas no impide que el Estado pueda incidir, siquiera parcialmente, en dicho ejercicio. Según el Tribunal Constitucional, la calificación jurídica que las competencias de las Comunidades Autónomas deben merecer no deriva de una lectura aislada de la denominación que tales competencias reciban en los textos estatutarios, sino de una interpretación sistemática de todo el bloque de constitucionalidad. Naturalmente, no es válido cualquier título competencial. En este sentido no sería ajustado al texto constitucional una regulación por parte del Estado de las profesiones tituladas en base, solamente, a su competencia en materia de titulaciones académicas y profesionales. Según el artículo 149.1.30 corresponde al Estado la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Debe recordarse de nuevo que en este Anteproyecto de Ley no se van a regular de forma general las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos o profesionales, sino el acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte. En este sentido tampoco resulta admisible el argumento siguiente: si una profesión requiere un título académico la competencia estatal para la regulación del ejercicio de la profesión titulada es consecuencia de que el Estado es competente en materia de obtención de títulos académicos y éstos no se pueden desvincular del ejercicio. Esta vinculación competencial entre títulos y profesiones no es ajustada al bloque de constitucionalidad, que claramente da un tratamiento autónomo a ambas materias.

Aunque el objeto del presente Anteproyecto de Ley no será la regulación de profesiones tituladas, pues se van a requerir cualificaciones profesionales (acreditables mediante títulos académicos que no son necesariamente de educación superior y mediante certificaciones no académicas), desde algún sector de la doctrina científica se ha argumentado en alguna ocasión que sólo por una Ley estatal se puede regular una profesión en el sector deportivo y se llega a tal conclusión tomando como base el artículo 149.1.1 de la Constitución que garantiza la igualdad de todos los



españoles. Sin embargo, tal y como se viene admitiendo por la propia jurisprudencia, el Estado no puede alegar, sin más, en ausencia de otro título competencial específico, el principio de igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado para atribuirse competencias reservadas a las comunidades autónomas, ya que ello *“chocaría abiertamente con lo dispuesto en el art. 149.1.30, que no reserva al Estado el control o la habilitación de cualesquiera actividades profesionales, sino sólo le encomienda la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales”* (Fundamento jurídico 5º de la sentencia del Tribunal Constitucional 122/1989, de 6 de julio). En el supuesto de que se admitiese aquella interpretación de la igualdad de todos los españoles casi todas las materias que son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas caerían bajo la órbita de las normas estatales, de modo que la invocación de la igualdad se convertiría en un instrumento de asunción por el Estado de competencias exclusivas atribuidas a las comunidades autónomas. En este sentido, el propio Tribunal Constitucional ha delimitado el alcance del artículo 149.1.1 CE y al objeto de situarlo en su debido contexto, hace numerosas precisiones acerca de la naturaleza y alcance de la competencia estatal citada para determinar, desde una interpretación sistemática, cómo ha de articularse con las competencias autonómicas correspondientes.

En el País Vasco ya se cuenta con otros ejemplos de profesiones reguladas. El artículo 40 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, establece que son *“profesiones turísticas las relativas a la realización, de manera habitual y retribuida, de actividades de orientación, información, asistencia y otras similares, y que reglamentariamente se determinen como tales, pudiendo establecer la necesidad de poseer una cualificación y sin perjuicio del reconocimiento de la cualificación profesional de otros estados miembros”*.

Tal y como se ha apuntado anteriormente, la regulación general del ejercicio de profesiones es, en principio, una competencia que han asumido algunas Comunidades Autónomas y de ahí se explica que, por ejemplo, el País Vasco cuente con la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, dictada en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 10.22 del



Estatuto de Autonomía del País Vasco, que atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de *“ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución”*.

Precisamente son estos dos preceptos constitucionales, el artículo 36 y el artículo 139 de la Constitución, los que también deben interpretarse adecuadamente. No constituyen, *per se*, títulos habilitantes del Estado sino que deben concebirse como auténticos límites específicos de la potestad autonómica en materia de regulación del ejercicio de las profesiones. Respecto al artículo 36, que establece el límite de la reserva legal, y al que posteriormente se hará referencia en esta memoria, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 20/1988, dispone claramente que *“(C)omo punto de partida, cabe admitir que el artículo 36 no puede ser entendido como norma atributiva de competencia legislativa al Estado”*. El propio Tribunal Constitucional señala que la Ley a que se refiere el art. 36 *“ha de ser estatal en cuanto a la fijación de criterios básicos en materia de organización y competencia de las Corporaciones públicas profesionales”*, no exigiendo una ley estatal para el tema de las profesiones tituladas. Sin embargo, posteriores sentencias del Tribunal Constitucional, en una errónea identificación de titulaciones y profesiones, consideraron que la ley a la que se refiere el artículo 36 CE es la ley estatal de conformidad con el artículo 149.1.30 CE.

El artículo 139, apartado primero, sienta el principio de igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado, y el apartado segundo constituye una interdicción de medidas que obstaculicen la libre circulación de personas en el territorio del Estado. Es decir, el artículo 139 tampoco es un precepto constitucional atributivo de competencia legislativa, tal y como lo establece de forma meridiana el Tribunal Constitucional en su sentencia de 23 de julio de 1998:

“DECIMO.- Por último, respecto de la previsión contenida en el art. 139.1 C.E. conforme a la cual “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”, conviene dejar constancia, en primer lugar de que este tipo de preceptos “son presupuestos o límites, pero no títulos competenciales” (STC 61/1997, fundamento jurídico 7º). El principio consagrado en este art. 139.1 C.E. constituye un límite y una directriz que acota y guía el



ejercicio de las competencias, que poseen el Estado ex. art. 149 C.E., y las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. El Estado mediante sus competencias y la reserva de Ley orgánica puede y debe asegurar "una determinada uniformidad normativa en todo el territorio nacional y preserva(r) también, de este modo una posición igual o común de todos los españoles, más allá de las diferencias de régimen jurídico que resultan, inexcusablemente del legítimo ejercicio de la autonomía" (STC 319/1993, fundamento jurídico 5º, con cita de la STC 122/1988). Para las Comunidades Autónomas este precepto también establece una limitación, aunque debe advertirse que ese "principio no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones" (STC 337/1994, fundamento jurídico 19) y, en segundo lugar, que dado el ámbito de aplicación territorialmente limitado de la legislación autonómica lo primero que en ella debe preservarse es el trato igual que en ella debe dispensarse a todos los residentes en una determinada Comunidad Autónoma"

Debe insistirse en que en el presente Anteproyecto de Ley no se regulan los títulos académicos y profesionales del deporte, materia sobre la que el Estado sí ostenta una clara competencia al amparo del artículo 149.1.30 CE, sino que el texto legal propuesto parte de los títulos académicos y profesionales ya regulados estatalmente.

En cualquier caso, en la medida que el Estado ostenta en determinadas materias relacionadas con las profesiones del deporte, por ejemplo, la educación o los colegios profesionales, competencias básicas, el Anteproyecto de Ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal, siguiendo así el criterio adoptado en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales del País Vasco.

C.- REFERENCIAS NORMATIVAS. DERECHO COMUNITARIO.



Resulta oportuno, de cara a ponderar las propuestas contenidas en el presente Anteproyecto de Ley, conocer algunas referencias normativas que dispone el País Vasco para la aprobación de una Ley del acceso y ejercicio de las profesiones del deporte.

En el ámbito comunitario son varias las referencias que se pueden hacer pero basta con citar expresamente la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Según esta Directiva, en virtud de lo dispuesto en el art. 3, apartado 1, letra c), del Tratado, la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la Comunidad. Dicha supresión supone concretamente para los nacionales de los Estados miembros la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido sus cualificaciones profesionales.

La garantía que confiere la citada Directiva a las personas que han adquirido sus cualificaciones profesionales en un Estado miembro para acceder a la misma profesión y ejercerla en otro Estado miembro con los mismos derechos que los nacionales debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento por el profesional migrante de las condiciones de ejercicio no discriminatorias que pueda imponerle este último Estado miembro, siempre que tales condiciones estén justificadas objetivamente y sean proporcionadas.

Dicha Directiva legitima la regulación de las profesiones en la medida que afirma que *“la prestación de servicios debe garantizarse en el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la protección del consumidor. Por lo tanto, se deben prever disposiciones específicas para las profesiones reguladas que tengan relación con la salud o la seguridad”*.

También debe dejarse constancia en esta memoria que el Anteproyecto de Ley se ha acomodado a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, eliminando los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los profesionales de los estados miembros de la Unión y a la libre circulación de servicios, garantizando a los



destinatarios de los servicios profesionales como a los propios restadores, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

D.- RANGO DE LA DISPOSICIÓN. CONTENIDO DE LA RESERVA DE LEY.

Es muy habitual encontrar disposiciones que se refieren a la regulación reglamentaria de las profesiones. Un ejemplo es la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, del País Vasco, cuyo artículo 40 se refiere a las “*profesiones turísticas*” y dispone que tales profesiones se determinarán “*reglamentariamente*”. El mismo criterio es adoptado en las leyes autonómicas reguladoras de las profesiones turísticas o de otras profesiones.

Sin embargo, la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas está sometido al principio de reserva de Ley. En efecto, el artículo 36 de la Constitución Española establece lo siguiente: “*La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas*”. Y, por otra, el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, con vocación de erigirse en legislación básica estatal, establece que “*las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de ley*”. Las restricciones de acceso a una profesión basadas en cualificaciones implican una limitación a la libertad profesional establecida en el artículo 35 CE y por ello también requieren una Ley. La exigencia de una cualificación para el acceso a una actividad profesional que hasta ese momento era libre implica una limitación de la libertad personal de las personas y parece razonable la interpretación de que sólo puede establecerse por Ley.

Asimismo, tampoco puede perderse de vista que el artículo 11 del Anteproyecto citado establece que “*sólo podrán imponerse condiciones al ejercicio de una actividad profesional o profesión cuando así lo establezca una norma con rango de ley o mediante una disposición de carácter general que desarrolle una previsión legal o transponga una norma de derecho de la Unión Europea*”. Y el artículo 20 del



Anteproyecto también exige que sea una norma con rango de ley la que establezca el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil de los profesionales.

En este mismo sentido de que compete al legislador la adopción de decisiones tan importantes como la de transformar las profesiones libres, el Tribunal Constitucional señaló en la sentencia de 10 de abril de 1986 que el artículo 36 de la CE “*contiene fundamentalmente una reserva de Ley en punto al establecimiento del régimen jurídico de colegios profesionales y al ejercicio de las profesiones tituladas*” y añade:

“compete pues, al legislador, atendiendo a las exigencias de interés público y a los datos producidos en la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión debe de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia [...] Puede el legislador crear nuevas profesiones y regular su ejercicio, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que el ejercicio de una profesión titulada debe inspirarse en el criterio del interés público y tener como límite el respeto del contenido esencial de la libertad profesional”.

En este caso, compete al Parlamento Vasco considerar cuándo existe en el País Vasco una profesión y cuándo debe pasar una profesión libre a ser profesión regulada, mientras que la determinación de cuándo una profesión es titulada o colegiada compete al legislador estatal. Al Parlamento Vasco le corresponde reconocer profesiones y regular su ejercicio. Cuestión diferente, una vez concluida la clara reserva legal en materia de regulación del ejercicio de las profesiones del deporte, es examinar qué contenidos de la regulación deben tener rango legal y cuáles pueden ser objeto de desarrollo reglamentario. Para responder a ello es conveniente apuntar que, con arreglo a la sentencia de 24 de julio de 1984 del Tribunal Constitucional, el principio de reserva de Ley recogido en el artículo 36 CE tiene como significado último “*el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los*



ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos deben quedar exentos de la acción del Ejecutivo". Desde esta perspectiva, la transformación de ámbitos profesionales libres en profesiones reguladas debe tener rango de Ley aunque ello, como dice la citada sentencia, *"no excluye la posibilidad de que las normas contengan remisiones a normas reglamentarias"*. Lo que realmente queda vedado al Parlamento Vasco es una remisión en blanco al poder ejecutivo. En efecto, el principio de reserva de Ley no debe interpretarse, como advierte el Tribunal Constitucional en su sentencia de 4 de febrero de 1983, en términos absolutos de modo que toda la materia debe regularse necesariamente por Ley sino que debe ser una Ley la que establezca el contenido esencial de la profesión.

Como se viene advirtiendo en esta memoria, es frecuente confundir la regulación del ejercicio de profesiones con la regulación de los centros o servicios deportivos que deban disponer, como mínimo, de titulados o tituladas en el campo del deporte. La reserva de Ley hay que entenderla en el sentido de que la regulación de los criterios o bases generales debe hacerse por Ley pero resulta absolutamente necesario el desarrollo reglamentario mediante reglamentos ejecutivos para que se concreten algunos extremos. Es constitucional que el legislador fije las cuestiones fundamentales y remita a la Administración su concreción. Ello no significa una burla del principio de reserva legal o una deslegalización de la materia.

En mérito de lo anterior, el presente Anteproyecto de Ley contiene varias habilitaciones expresas al Gobierno Vasco para desarrollar diferentes aspectos de la Ley. Esta reconoce expresamente unas profesiones, las denomina, las somete a cualificaciones determinadas y, además, les dota de un marco general de atribuciones ajustado a la casuística del deporte, pero no puede pretenderse una mayor pormenorización y detalle. La colaboración Ley-Reglamento se hace imprescindible. Tiene que ser necesariamente a través del desarrollo reglamentario cómo se concretan los procedimientos y requisitos de las disposiciones transitorias, cómo se implanta progresivamente la exigencia de cualificaciones para la profesión de Entrenador o Entrenadora, cómo se adaptan las titulaciones previstas al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior tras la Declaración de Bolonia, etcétera.



E.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO.

a.- Introducción.

Ya se ha apuntado en esta memoria que el objetivo del Anteproyecto no es regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales relacionados con el deporte (artículo 149.1.30). Además, no corresponde a una Ley que regula el ejercicio de las profesiones la determinación de las funciones de cada título académico relacionado con el deporte.

El texto articulado propuesto trata de regular los aspectos básicos del acceso y del ejercicio de algunas, no todas, profesiones tituladas propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones profesionales necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general, que en algunos casos será exclusivo de una cualificación profesional y en otros será compartido con otras cualificaciones.

El Anteproyecto diferencia entre el acceso y el ejercicio de una profesión. Se trata de dos fases totalmente distintas, tal y como ha puesto de manifiesto el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco con relación al artículo 19.3 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Mientras que la regulación del acceso aborda en primera instancia las restricciones para acceder a una profesión –por ejemplo, las basadas en la posesión de una cualificación profesional- la regulación del ejercicio se refiere al modo de desarrollar la profesión por parte de quienes ya han accedido a la profesión y contiene disposiciones atinentes al aseguramiento, a la prestación de servicios mediante estructuras societarias, al código deontológico, al ejercicio en libre competencia, etcétera.



Por supuesto, la Ley que se propone sólo será de aplicación al ejercicio profesional en el ámbito territorial del País Vasco, aunque no todo ejercicio profesional del deporte en el País Vasco quedará sujeto a la Ley; el ejercicio de la profesión de Entrenador o Entrenadora Profesional de equipos deportivos o de deportistas que no pertenezcan al País Vasco pero que disputen competiciones internacionales o estatales en la Comunidad Autónoma no puede ser sometido a los preceptos de esta Ley.

Mención especial merece la mención que se hace en el Anteproyecto de Ley a que la exigencia de cualificaciones profesionales para el acceso y ejercicio de las profesiones se entiende sin perjuicio de lo establecido en la citada Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), que ha sido objeto de controversia constitucional, aunque la misma ha quedado solventada mediante el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de agosto de 2014.

La finalidad de esta Ley es que cualquier servicio prestado al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado o prestado en todo el territorio de España sin necesidad de trámite adicional, salvo en algunos casos. Se pretende eliminar el coste de someterse a diecisiete regulaciones autonómicas diferentes para operar en el Estado. El fundamento jurídico de tal disposición se encuentra contenido en el artículo 139.2 de la Constitución, según el cual *“(N)inguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y libre circulación de bienes en todo el territorio español”*.

Este criterio ya estaba recogido de algún modo en la legislación aprobada por el Parlamento Vasco. Así, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, ya establece, tras su modificación mediante la Ley 7/2012, de 23 de abril, que *“(L)os prestadores establecidos en otras comunidades autónomas podrán ejercer libremente su actividad, de forma permanente o eventual, en la Comunidad Autónoma vasca”*.

El artículo 19.3 de la LGUM, objeto de varios recursos de inconstitucionalidad (Gobierno y Parlamento de Cataluña, Gobierno de Andalucía, etcétera) establece que



“(C)uando conforme a la normativa del lugar de destinado se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno”. De conformidad con el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el inciso “la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos” se entenderá “en el sentido de que las autoridades de destino asumirán la plena validez de los requisitos, cualificaciones, controles previos o garantías exigidos por las autoridades de origen para acceder a una determinada actividad económica, sin que tal asunción alcance al régimen de ejercicio que las autoridades de destino establezcan en su territorio”.

b.- Profesiones.

La configuración jurídica de las profesiones permite una doble opción: las profesiones pueden ser libres y también pueden ser reguladas. El principio general es que, inicialmente, todas las profesiones son libres y sólo puede regularse una profesión cuando concurren intereses públicos de carácter constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 42/1986 al respecto lo siguiente:

“...compete pues, al legislador, atendiendo a las exigencias de interés público y a los datos producidos en la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión debe de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia [...] Puede el legislador crear nuevas profesiones y regular su ejercicio, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que el ejercicio de



una profesión titulada debe inspirarse en el criterio del interés público y tener como límite el respeto del contenido esencial de la libertad profesional”.

La regulación del acceso y del ejercicio de determinadas profesiones del deporte obliga a determinar si las profesiones del deporte serán tituladas o no. El Anteproyecto no regula profesiones tituladas, es decir, aquellas profesiones *“para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia”* (STC 42/1986). Los elementos configuradores de la profesión titulada son: la determinación de la actividad profesional reconocida formalmente como profesión, la especificación de los títulos académicos de educación superior y una vinculación legal entre la profesión y esa titulación académica de educación superior.

El Anteproyecto de Ley no contiene esos tres elementos pues, aunque determina una serie de profesiones del deporte estableciendo su ámbito funcional general, no exige estar en posesión de un título académico oficial de educación superior. La Ley exige cualificaciones profesionales y éstas se pueden acreditar por un título académico –no necesariamente de educación superior-, por un certificado de profesionalidad, por una experiencia profesional formalmente reconocida por la Administración, etcétera. Con arreglo a tal criterio se encuentran en el elenco de titulaciones oficiales que acreditan cualificaciones profesionales, títulos que no son de educación superior como el de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural o el título de Técnico Deportivo de la modalidad deportiva correspondiente.

En este Anteproyecto de Ley se ha optado, al igual que en las Leyes reguladoras de otras profesiones, por exigir cualificaciones profesionales, que se pueden acreditar mediante títulos académicos universitarios pero también mediante títulos no académicos, académicos de educación no superior, etcétera.

Otra cuestión que debe reseñarse necesariamente en esta memoria es el concepto de profesión. En algunos preámbulos de textos legales reguladores de profesiones ya se reconoce que el concepto de profesión es un concepto que ha sido desarrollado



fundamentalmente desde la sociología en función de una serie de presupuestos (formación, autonomía, capacidad autoorganizativa, etcétera) y es evidente que algunos de ellos pueden encontrarse en crisis en la actualidad. La evolución de la sociedad y los modos de articular la prestación de servicios profesionales han desconfigurado el antiguo concepto de profesión y su ejercicio individual. La existencia de prestaciones profesionales bajo relaciones de dependencia laborales o funcionariales, o la misma admisión de sociedades de profesionales, ha obligado a replantear el concepto mismo de profesión y hoy nadie duda que existen profesiones, incluidas las del deporte, que se ejercen bajo fuertes relaciones de dependencia o con escasa autonomía o capacidad de autoorganización.

Por todo ello, no se puede ocultar que en la actualidad existe una gran confusión y dificultad a la hora de identificar, en general, cuáles son, o cuáles deben ser, las profesiones objeto de regulación. De esta dificultad no se escapa, evidentemente, el mundo del deporte en el que, se viene reiterando en esta memoria, también se confunden frecuentemente las profesiones con las titulaciones o, también, con los puestos de trabajo, ocupaciones o funciones. En el estudio encargado por la Comisión Europea, elaborado por la red de Institutos de Ciencias del Deporte y titulado “*Deporte y empleo en Europa*” (1999), se señalaba lo siguiente: “*se considera que una profesión existe cuando dispone de un reconocimiento social basado en la existencia de: una organización profesional propia (sindicato u organización profesional); una o varias formaciones específicas; una forma de reconocimiento legal (título oficial, convenio colectivo que la menciona, etcétera)*”. Sin embargo, la presente propuesta legislativa de acotación de profesiones prescinde de alguno de dichos requisitos; la existencia de una organización profesional propia no es un presupuesto previo para el reconocimiento de una profesión; en ocasiones es una consecuencia jurídica de dicho reconocimiento, no un *prius*. La profesión de entrenador, tal y como es configurada en la actualidad, es reconocible desde el siglo XIX y, sin embargo, no precisa de una organización profesional. La propuesta legislativa que incluye el Anteproyecto se ha basado en dos presupuestos; deben ser actividades profesionales que cuentan con unas formaciones académicas específicas, con independencia de si gozan o no de una organización profesional y deben ser actividades profesionales que cuenten con una identidad o reconocimiento social histórico.



c.- Deporte.

La regulación del ejercicio de las profesiones propias del deporte precisa, naturalmente, acotar cuál es ese ámbito material denominado “*deporte*”. Entre las profesiones del deporte que existen en la actualidad cabe destacar a aquellas relacionadas con el campo del deporte profesional, fundamentalmente aquellas que se mueven en torno al espectáculo deportivo. Este sector del fenómeno deportivo ha generado una auténtica economía con innumerables actividades profesionales: entrenadores, deportistas, árbitros, etcétera.

Pero el universo del deporte no se circunscribe sólo al ámbito más mercantilizado del espectáculo, al ámbito de la alta competición o al ámbito profesional, sino que, dada la policromía del deporte, existen otras numerosas manifestaciones deportivas generadoras de actividades profesionales. El deporte responde a la demanda de un importante sector de la población que ve en él un instrumento para el ocio, para el esparcimiento, para la recreación, para la estética o, simplemente, para una vida sana. Y estas dimensiones del deporte originan también un considerable número de profesiones.

La exigencia de cualificaciones en el deporte no se circunscribe en el Anteproyecto a la típica realización de actividades de entrenamiento o enseñanza en el deporte sino que se extiende a las actividades de “*dirección*” y “*cualesquiera otras que se establezcan relacionadas con las actividades físico-deportivas*”. Las profesiones que se regulan en este Anteproyecto de Ley se pueden agrupar básicamente, y sin perjuicio de que también cabría hacer otras clasificaciones, en los siguientes sectores:

- **Ámbito educativo.** Las profesiones propias del ámbito educativo se extienden a las enseñanzas de la Educación Física en las distintas etapas, ciclos, grados, cursos y niveles en que se organiza nuestro sistema educativo: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato,

formación profesional, etcétera. La existencia de profesiones de la enseñanza está admitida internacionalmente.

- **Ámbito competitivo.** El ámbito del deporte de competición es otro de los sectores básicos de demanda de profesionales. Por supuesto, dentro del deporte de competición cohabitan realidades muy diferentes. La competición profesional o la competición de alto nivel requieren profesionales de alta especialización en los aspectos directamente deportivos (entrenadores, deportistas, psicólogos, médicos, etcétera). La competición deportiva de nivel medio, que representa la actividad que realiza un porcentaje elevado de los deportistas con licencia, demanda asimismo profesionales pero con una cualificación diferente. La competición deportiva de nivel básico requiere otra cualificación.
- **Ámbito recreativo.** El ámbito recreativo en todas sus manifestaciones (con fines de salud, de estética, de simple ocupación del tiempo libre, etcétera) es el que ha manifestado mayor expansión y es el que ofrece un importante campo de actuación profesional. Existen varios factores que constituyen causas de la proliferación de profesionales en este sector. El crecimiento del deporte para todos y la incorporación progresiva a la práctica deportiva de numerosos colectivos con una presencia que históricamente ha sido minoritaria (mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera) así como el cada vez mayor interés de los antiguos deportistas en mantener en una edad adulta una práctica deportiva continuada son circunstancias que han constituido considerable aumento de la práctica deportiva recreativa. Asimismo, el aumento progresivo del interés por la práctica de los denominados deportes de aventura, de riesgo, en el medio natural, o el fenómeno social de la revalorización del propio cuerpo por motivos estéticos o de salud o de bienestar personal, han potenciado este subsector del deporte y han alimentado una extraordinaria presencia de profesionales, muchos de ellos sin una formación adecuada para ello.



- Ámbito de la dirección deportiva. En este ámbito también existen, sin lugar a dudas, numerosos profesionales en el deporte que, a diferencia de los meros gestores de instalaciones deportivas o de entidades deportivas, aplican en su actividad profesional las ciencias de la actividad física y del deporte.

En este tema de la regulación de las profesiones no deben confundirse “*las profesiones relacionadas con el deporte*”, que son innumerables, con “*las profesiones del deporte*”, que son las que deben ser abordadas por la nueva Ley. Este es el criterio expuesto en el Estudio “*Deporte y empleo en Europa*”, de la Dirección General X de la Comisión Europea, con la participación de la Red Europea de Institutos de Ciencias del Deporte y del Observatorio Europeo del Empleo Deportivo (1999), antes citado. Aunque el presente Anteproyecto se aparta de la división que efectúa dicho estudio europeo, debe apuntarse que tal documento incluye cinco grandes grupos de “*profesiones del deporte*”:

- deportistas
- jueces deportivos
- animadores deportivos
- monitores deportivos
- entrenadores deportivos

El Anteproyecto de Ley no afronta, por diferentes razones, la regulación de todas las profesiones en torno al deporte vasco –médicos, psicólogos, abogados, fisioterapeutas o nutricionistas especializados en el ámbito del deporte- sino aquellas profesiones que se manifiestan en el seno del deporte y que, además, precisan la aplicación de conocimientos y técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte. En las profesiones antes citadas, el deporte sólo constituye un área de especialización o actuación de esos profesionales, no siendo más que un elemento accesorio de su actividad profesional y, por tanto, no es el elemento definitorio o consustancial de su actividad profesional.

Tampoco aborda el Anteproyecto de Ley la regulación de todas las profesiones específicas del deporte. El legislador vasco puede optar por dejar libres de regulación



determinadas profesiones propias del deporte. Acogiéndose a dicha posibilidad legal, el Anteproyecto deja fuera de la regulación numerosas profesiones del deporte (deportistas profesionales, árbitros, agentes o intermediarios de deportistas, etcétera). Se trata de profesiones tradicionales en el ámbito del deporte en las que no se encuentra amenazada la salud y la seguridad de los deportistas. Por supuesto, ello no significa que estas actividades profesionales que quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley se encuentren libres de ataduras y sin normas. Algunas de ellas pueden contar con otras normas sectoriales como las laborales, o las federativas. Es el caso, por ejemplo, del Real Decreto 1006/1985, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, o el caso de la normativa federativa sobre agentes de deportistas.

A lo largo de la Ley se ha evitado emplear expresiones como “*actividad física y deportiva*”, “*educación física, actividad física y deporte*” y similares. Se ha optado por utilizar, siguiendo el criterio de la vigente Ley 14/1998 y de la mayoría de las Comunidades Autónomas, el término “*deporte*” como comprensivo de todas las realidades diferentes que se pueden englobar bajo esa área. El deporte es concebido en el Anteproyecto de forma amplia. A los efectos de esta Ley, el término deporte engloba todas las manifestaciones físicas y deportivas contempladas en la legislación deportiva y no se ciñe a las modalidades y disciplinas reconocidas oficialmente. En virtud de ello, el término deporte incluye a todas las actividades físicas y deportivas realizadas en el seno del deporte federado, del deporte escolar, del deporte universitario, del deporte para todos, del deporte recreativo o de otras estructuras y con independencia de que su fin sea la educación física, la competición, la iniciación, el aprendizaje, el rendimiento, la salud, la recreación, el ocio o fines análogos.

d) Sector público y sector privado.

La Ley regula el ejercicio profesional por cuenta propia y ajena y resulta igualmente aplicable tanto si la profesión se ejerce en el sector público como en el sector privado. Asimismo, la obligatoriedad de la Ley será exigible con independencia de la tipología o naturaleza de las entidades donde desarrollen las actividades profesionales.



En el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de fecha 30 de julio de 2008, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas sobre la Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, ambas partes consideraron coincidieron en interpretar que la referencia al ejercicio de las profesiones del deporte en el sector público ha de entenderse circunscrita al ámbito del sector público de la Generalitat y de las Administraciones locales de Cataluña. Este es el criterio que también se sigue en el Anteproyecto, que se ciñe al sector público vasco.

e) Ejercicio profesional. Voluntariado.

En la medida que el Anteproyecto de Ley regula el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte quedan fuera de la regulación las actividades técnico-deportivas realizadas por el voluntariado deportivo, es decir, sin carácter profesional. Se considera ejercicio profesional, a los efectos de la Ley, la prestación de servicios bajo remuneración, quedando excluida la actividad realizada en el marco de relaciones de voluntariado y la actividad desarrollada en el seno de relaciones de amistad, de carácter familiar o de benevolencia. Este es el criterio asumido en el Estudio *“Deporte y empleo en Europa”* (1999), de la Dirección General X de la Comisión Europea, con la participación de la Red Europea de Institutos de Ciencias del Deporte y del Observatorio Europeo del Empleo Deportivo, que reserva *“la categoría de profesiones del deporte a todas personas que ejercen una actividad deportiva remunerada”*. Dicho documento señala que *“las directivas europeas relativas a la libre circulación estiman que existe una profesión cuando se ejerce a cambio de una remuneración”*.

Es cierto que el voluntariado deportivo desempeña en el campo del deporte un papel trascendental, especialmente a través de los entrenadores y monitores, pero quienes desempeñan una actividad deportiva de forma altruista y desinteresada, sin remuneración, o sólo con pequeñas compensaciones por los gastos de la actividad, no



pueden ser incluidos dentro del ámbito de aplicación de una Ley que regula el ejercicio profesional.

Sin perjuicio de que la presente Ley sólo regula el acceso y ejercicio profesional y quedan excluidas de su ámbito de aplicación las actividades en régimen de voluntariado y análogas, el Anteproyecto establece que las Administraciones Públicas y demás entidades públicas o privadas competentes deberán establecer reglamentariamente los requisitos de cualificación del voluntariado para la participación en sus actividades deportivas. Tales requisitos serán idénticos a los establecidos para los profesionales en la presente ley al objeto de garantizar la salud y seguridad de las personas participantes. No resultaría concebible que los ciudadanos destinatarios de los mismos servicios de profesionales y voluntarios sean acreedores a una menor protección de su salud y seguridad cuando son guiados, controlados o asesorados por voluntarios.

f) Actividades excluidas.

En el articulado del Anteproyecto de Ley se excluye expresamente del ámbito de aplicación determinadas actividades profesionales relacionadas con el deporte. En la tramitación de algún proyecto legislativo análogo se ha sugerido, en el trámite de audiencia, que *“las exclusiones del cumplimiento de la Ley aparezcan en las disposiciones adicionales”*. No resulta posible atender esta sugerencia por cuanto, en realidad, no existe una excepción de cumplimiento de la Ley, sino una delimitación negativa del ámbito de aplicación de la Ley.

Una de las actividades profesionales excluida del ámbito de aplicación de la Ley es el buceo profesional o el buceo no deportivo o recreativo. Se trata de una actividad profesional que ha contado con una normativa propia, que no ha venido emanada de la Administración deportiva.

También han sido excluidas del ámbito de aplicación las actividades profesionales de salvamento y socorrismo no deportivo. Dentro de la Familia Profesional de las



Actividades Físicas y Deportivas, prevista en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, se encuentra la cualificación profesional de “*Socorrismo en instalaciones acuáticas*”. Sin embargo, el borrador de Anteproyecto de Ley ha optado por la no regulación de la profesión de socorrista. La función general del socorrista es velar por la seguridad de los usuarios de piscinas, playas y otros medios acuáticos, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia. Tal actividad se desarrolla tanto en el ámbito público como privado (ayuntamientos, infraestructuras privadas de servicios deportivos, empresas turísticas, etcétera) en espacios de actividad acuática diversa, es decir, no ligada al deporte necesariamente; se desarrolla en piscinas deportivas, en piscinas recreativas convencionales, en piscinas naturales, en parques acuáticos, en parques temáticos, etcétera. Los sectores productivos donde se desarrolla la actividad profesional son muy diferentes (deportes, educación, turismo, ocio o tiempo libre). El Anteproyecto de Ley tiene como objeto regular profesiones del deporte, es decir, profesiones que sean propias del deporte, y es evidente que la profesión de socorrista se puede desarrollar en instalaciones deportivas pero también en playas, ríos, parques temáticos, es decir, instalaciones que no son propiamente deportivas, y al margen del deporte. Se sigue el mismo criterio que se tiene con otras profesiones presentes en el deporte. Un masajista, un fisioterapeuta, un médico o un técnico de mantenimiento también pueden desarrollar su actividad en instalaciones deportivas pero no son profesiones características o propias del deporte.

Las actividades profesionales de paracaidismo no deportivo tampoco se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley, pues el paracaidismo constituye otra actividad profesional que tiene su proyección en diferentes campos diferentes al estrictamente deportivo, como es el militar.

El Anteproyecto también excluye de su ámbito de aplicación las actividades profesionales basadas en la conducción de aparatos o vehículos de motor, de carácter no deportivo.

Siguiendo el mismo criterio también se excluye del ámbito de aplicación de la Ley a las actividades profesionales de manejo o gobierno de embarcaciones de recreo, de



carácter no deportivo. Existe un reconocimiento general de que la actividad náutico-deportiva constituye una manifestación autónoma y con tintes propios respecto a otras actividades marítimas y deportivas. Se trata de una realidad diferente y su regulación, en lo que atañe al ejercicio de las profesiones ligadas a ese sector, reivindica un ordenamiento también diferente. La actividad náutica cuenta con un régimen propio y diferenciado, presenta una serie de peculiaridades que aconsejan un tratamiento propio en esa materia. Las personas que desarrollan profesionalmente su actividad en el sector náutico-deportivo se encuentran sometidos a un régimen normativo singularizado con el objeto de garantizar unos estándares mínimos de seguridad en la navegación. Por dicha razón, uno de los requisitos para desarrollar actividades náutico-deportivas es la obtención de la denominada “*titulación náutica*” que tiene por objeto habilitar a las personas al gobierno de determinadas embarcaciones (Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de Embarcación, Patrón para Navegación Básica, Patrón de Moto Náutica, etcétera).

El Anteproyecto excluye expresamente, a pesar de la demanda del sector, la regulación de las actividades profesionales de gestor de instalaciones deportivas o de entidades deportivas. La profesión de gestor deportivo no es una profesión que precisa la aplicación de conocimientos y técnicas de las ciencias de la actividad física y del deporte. Quien gestiona instalaciones deportivas o entidades deportivas puede acreditar cualificaciones profesionales que no guardan relación con las ciencias de la actividad física y del deporte.

Por último, se excluyen en el texto articulado las actividades profesionales de preparación física en los centros de las Fuerzas Armadas radicados en el País Vasco. La razón de esta exclusión radica en que la Ley trata de regular el acceso y ejercicio profesional en el sector público vasco.

A mayor abundamiento debe significarse que tales materias excluidas han sido, en su caso, reguladas desde títulos competenciales ajenos al deporte y ello constituye otro aval al criterio seguido en el Anteproyecto para excluir a este sector de su ámbito de aplicación.



F.- TÍTULO DE LA LEY.

En materia de directrices de técnica normativa se viene reiterando que el título de una Ley forma parte importante del texto legal pues permite su identificación, interpretación y cita. El título se debe iniciar siempre con la identificación del tipo de disposición: Anteproyecto de Ley, Proyecto de Decreto, etcétera. En este caso no cabe duda que nos encontramos con un texto que debe aprobarse inicialmente como “*Anteproyecto de Ley*” antes de su remisión al Consejo de Gobierno para que este órgano lo apruebe como “*Proyecto de Ley*” y lo remita al Parlamento Vasco para su tramitación parlamentaria.

El nombre de la disposición es la parte del título que indica el contenido y objeto de dicha disposición, la que permite identificarla y describir su contenido esencial. La redacción del nombre, según las directrices de técnica normativa comúnmente aceptadas, debe ser clara y concisa, evitando descripciones o extensiones inadecuadas para la identificación o cita.

En el título del Anteproyecto de Ley se ha optado por realizar alguna modificación respecto a la Ley 3/2008, de Cataluña. Por un lado, se hace una mención al ámbito territorial de aplicación, País Vasco, siguiendo así el criterio de otras Leyes como, por ejemplo, las siguientes:

- Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
- Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
- Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.



- Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Ley 15/2008, de 19 de diciembre, de creación de diversos cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi.
- Ley 2/2008, de 28 de mayo, de tercera modificación de la Ley de Policía del País Vasco.
- Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi.
- Ley 6/2007, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2006, de 17 de noviembre, de Patrimonio de Euskadi.
- Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.
- Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
- Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi.
- Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014.

Asimismo, se ha optado por referir la Ley al acceso y ejercicio a las profesiones del deporte por las razones que ya se han indicado a lo largo de la memoria. Tanto el acceso como el ejercicio constituyen dos realidades diferenciadas.

Por último, se emplea el término *deporte* interpretando este fenómeno social en su contenido más amplio y comprensivo de todo tipo de actividades. Ya se ha tenido oportunidad de indicar con anterioridad que son innumerables los fundamentos y



criterios que avalan tal opción legislativa. La propia denominación del título competencial deporte (10.36 del Estatuto de Autonomía), la denominación de los organismos con competencias en la materia (Consejo Superior de Deportes, Dirección General de Deportes, Secretaria General del Deporte, Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, Consejo Vasco del Deporte, etcétera), la denominación de los documentos estratégicos (Plan Vasco del Deporte), o las denominaciones de las propias Leyes deportivas aprobadas por las comunidades autónomas, revelan que el término “*deporte*” es comprensivo de múltiples y diferentes manifestaciones. Es decir, no se ciñe al ámbito de las modalidades y disciplinas deportivas.

G.- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DEL PROYECTO.

a) Consideraciones previas.

Ya se ha señalado anteriormente que, según las citadas directrices de técnica normativa, debe acompañarse a cada proyecto legislativo una memoria, que responde a un análisis más amplio del proyecto en el que se debe tener en cuenta la situación o problema al que se pretende dar una respuesta legal, las distintas alternativas existentes y las razones que aconsejan optar por las alternativas propuestas y la estimación de la incidencia organizativa y/o financiera de la regulación propuesta.

Precisamente, a este requerimiento atiende el presente apartado de la memoria que trata de justificar las propuestas que contiene el borrador del Anteproyecto de Ley.

b) Margen de libertad para la regulación de las profesiones. Incidencia de la regulación en la actividad económica.

Como ya se ha apuntado, hasta la fecha las profesiones del deporte no se encuentran reguladas en el País Vasco. Tan sólo dispone de una regulación parcial la profesión de Profesor o Profesora, pero no específicamente la Profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, mediante la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



A la hora de afrontar la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte en el País Vasco se suscitan en cascada numerosas interrogantes: ¿cuándo podemos considerar que existe una profesión? ¿qué instancia ostenta competencias para decidir tal realidad? ¿cuándo puede pasar una profesión de ser enteramente libre a ser profesión titulada? ¿puede el legislador crear nuevas profesiones y regular su ejercicio con total libertad?

De entrada, conviene advertir que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 24 de julio de 1984, interpreta que *“la regulación del ejercicio profesional, en cuanto no choque con otros principios constitucionales, puede ser hecha por el legislador en los términos que tenga por conveniente”*. Es decir, es el correspondiente Parlamento quien ostenta ese amplio margen para regular las profesiones del deporte. Por supuesto, el legislador vasco no goza de una libertad absoluta para convertir cualquier profesión libre en una profesión titulada. Tal transformación implica una reducción de la libertad personal que sólo puede producirse por Ley cuando lo exige el interés público.

Uno de las posibles objeciones que puede formularse a un proyecto de esta naturaleza es su posible distorsión de la actividad económica y que la regulación de las profesiones del deporte, como cualesquiera otras profesiones, puede resultar excesiva y generar más costes que beneficios. Este es, por ejemplo, el enfoque de algunos órganos gubernamentales competentes en materia de economía que, como regla general, son contrarios a la regulación de las profesiones por dicha razón. Ante esta objeción debe apuntarse que la regulación de las profesiones del deporte a través del Anteproyecto proporciona, indudablemente, más e importantes beneficios que supuestas desventajas:

- a. La necesidad de regulación por razones de salud, seguridad y defensa de los consumidores y usuarios es reconocida expresamente por todos los poderes públicos, estatales y autonómicos, e incluso por el Tribunal Constitucional. Y tales bienes jurídicos a proteger son, sin duda, de



mayor valor o relevancia que una supuesta distorsión de la actividad económica.

- b. No existen alternativas jurídicas a la regulación. Resulta muy difícil dar una solución satisfactoria a los problemas de salud y seguridad en el amplio ámbito de los servicios profesionales en el deporte si no se ordena el acceso y ejercicio profesional.
- c. La sugerencia de que sean las federaciones deportivas las que regulen esta problemática, que ya se ha sugerido desde algún ministerio, no cabe ser atendida pues no puede perderse de vista que el universo del deporte no se ciñe a las competiciones federadas; en el País Vasco existe una extraordinaria práctica deportiva, competitiva o no, al margen de las federaciones: el deporte practicado por razones de salud, ocio o recreación, el deporte universitario, el deporte escolar, el deporte de competición organizado por otras estructuras, etcétera. Si se encomienda la regulación de toda la problemática de la salud y la seguridad de los servicios profesionales a las federaciones se está cometiendo un grave error; se ignoran todas las demás realidades del deporte promovidas por las corporaciones locales, centros deportivos privados, centros escolares, empresas, etcétera.
- d. Tal y como se apunta en el estudio denominado *“Programa Nacional de Reformas y Ordenación de las Profesiones de la Actividad Física y del Deporte”*², la regulación del ejercicio de algunas profesiones del deporte *“tendrá un impacto muy favorable sobre los factores de producción, los mercados y el entorno empresarial, por el aumento de la calidad y la seguridad en los servicios y del capital humano en los diversos entornos y niveles profesionales de la actividad física y del deporte. Favorecerá la competencia y la regulación de este ámbito socio-económico. Aumentará la eficacia de la Administración Pública cuando oferta*

² Su autor es Rafael Martín Acero, Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física (INEF Galicia) y Presidente de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tal trabajo es de 7 de abril de 2007.



instalaciones y actividades físico deportivas, sobre todo incidiendo en la seguridad y derechos de los usuarios. Mejorará e incrementará el mercado de trabajo, rentabilizando la inversión formativa por incremento de productividad y aumento de empleo...". Siguiendo las conclusiones de este informe debe resaltarse que es indudable que una regulación de estas características contribuirá a corregir la situación de sobrecualificación, corrección que favorece la mejora de nuestro sistema productivo, y al mismo permitirá también acabar con la situación de infracualificación, tan peligrosa para la salud y seguridad de los que reciben los servicios de estos profesionales.

Es cierto que la exigencia de cualificación representa, subjetivamente, una limitación al derecho de libre ejercicio de un oficio o profesión. Objetivamente, constituye una barrera que limita el acceso al ejercicio de aquella actividad restringiendo con ello el número de posibles oferentes del servicio. Sin embargo, tal y como reconoció expresamente el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC)³, *"esta restricción está justificada en la medida en que la protección de los usuarios de los servicios profesionales aconseje prohibir su prestación a quien no tenga los conocimientos especializados pertinentes"*. Asimismo, el TDC señalaba que *"prácticamente en todos los países, el poder público suele decidir que, para ejercer determinados oficios o profesiones, es requisito indispensable haber demostrado tener los conocimientos necesarios para desempeñar la profesión"*. En opinión del TDC *"no parece que, tal como ha sido administrada hasta hoy en España la exigencia de titulación, haya creado graves problemas de competencia. Ello se ha debido, probablemente, a que el Estado ha reservado la facultad de concesión de los títulos académicos y no ha delegado la misma en los Colegios profesionales. Por tanto, consideramos que esta restricción, hoy por hoy, opera de forma adecuada y cumple con el interés público de garantizar unos conocimientos mínimos y no está impidiendo la competencia entre los profesionales"*.

³ En el documento *"Propuesta para adecuar la normativa sobre profesiones colegiadas al régimen de libre competencia vigente en España"*, Junio 1992.



A tenor de dicha doctrina del TDC en la materia de profesiones, cabe señalar en esta memoria que la restricción contenida en esta Ley está justificada en la medida en que la protección de la salud y la seguridad de los usuarios de los servicios deportivos profesionales aconsejan prohibir su prestación a quien no tenga los conocimientos especializados pertinentes. Y dicha restricción opera de forma adecuada pues cumple un interés público de garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos.

En la medida que una Ley de estas características, que exige cualificaciones profesionales para el ejercicio profesional, puede generar dudas respecto a su compatibilidad con el principio constitucional de la libre competencia, el artículo 16.2 del Anteproyecto de Ley, siguiendo la redacción de otras Leyes, establece que el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la Ley y la intervención de las organizaciones colegiales estarán sujetos a la legislación sobre Defensa de la Competencia y sobre Competencia Desleal.

c) Exclusividad y concurrencia de titulaciones.

El objetivo de reconocimiento y regulación legal de las profesiones tropieza por lo general con la dificultad de descifrar tales profesiones y, posteriormente, reconocer un espacio exclusivo para cada una de ellas. Además, la tarea se encuentra con la dificultad añadida de supeditar dichas profesiones a la exigencia de determinadas cualificaciones profesionales que, tradicionalmente, se han acreditado mediante los correspondientes títulos académicos oficiales.

Para la atribución de funciones a las diferentes profesiones que van a ser objeto de regulación se han tenido en consideración, obviamente, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y los títulos académicos oficiales existentes, que configuran diferentes perfiles profesionales que cualifican para el desempeño de actividades profesionales en diversos ámbitos.

El criterio general que se ha pretendido seguir en el Anteproyecto de Ley es condicionar el acceso a una profesión del deporte a una cualificación profesional que



se puede acreditar a través de diferentes títulos académicos oficiales, pero también a través de certificados de profesionalidad, etcétera. Nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado tradicionalmente en otros sectores una concurrencia de titulaciones académicas oficiales para el desarrollo de una determinada profesión y parece razonable alejarse de cualquier exclusivismo de titulaciones que, además, no respondería al complejo marco jurídico de los títulos académicos oficiales existente en la actualidad en el sector deportivo. Tal marco, como ya se ha apuntado, está en continua renovación, poco asentado, y en él se superponen niveles de formación sin una clara disección de sus respectivos espacios profesionales. Este escenario de las titulaciones académicas en el deporte y el desorden y desestructuración que viven las actividades profesionales en torno al deporte obligan a que la propuesta legislativa no se base en soluciones radicales de exclusividad para quienes han acreditado una determinada formación académica.

Un tema muy delicado en las leyes reguladoras de las profesiones es la cuestión de los ámbitos competenciales de las profesiones. En esta propuesta legislativa, siguiendo el modelo de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se reconocen simultáneamente espacios competenciales compartidos interprofesionalmente y espacios específicos de cada profesión. Por ello, en la propuesta contenida en este Anteproyecto de Ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones de una forma muy cerrada y concreta, sino que el texto articulado posibilita una cierta flexibilidad en previsión de que las praxis cotidianas de los profesionales evolucionen.

Los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la presente Ley tienen por objeto establecer un ámbito funcional general de cada profesión y como consecuencia de ello tienen un carácter enunciativo y no limitativo. Por ello, conviene señalar en esta memoria que, al margen de las atribuciones citadas, los profesionales objeto de regulación en la Ley gozarán de los derechos, facultades y prerrogativas reconocidas por otras disposiciones como, por ejemplo, las educativas.

En el Anteproyecto se deja sentado que las atribuciones vinculadas en esta Ley a determinadas profesiones mediante la posesión de las correspondientes



cualificaciones profesionales no constituye una limitación del ámbito profesional de las titulaciones académicas que acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales. Por ejemplo, la impartición de docencia en el régimen especial de las enseñanzas deportivas puede ser realizada en determinadas materias por un/a Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte⁴, o por un/a Técnico/a Deportivo/a Superior, y, sin embargo, no aparecen tales atribuciones en la Ley. ¿Cuál es la razón? La Ley pretende regular la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, pero no pretende regular las atribuciones profesionales de un concreto título académico. Por tanto, la persona que ostente la Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte podrá realizar otras actividades profesionales, aunque no estén previstas en la Ley.

d) Cualificaciones y competencias profesionales.

La Constitución, en su artículo 40, exige a los poderes públicos el fomento de la formación y readaptación profesionales, instrumentos de esencial importancia para hacer realidad el derecho al trabajo, la libre elección de profesión u oficio o la promoción a través del trabajo.

En cumplimiento de dicho mandato, se aprobó la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, desarrollada por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aplicable en todo el Estado sobre la base del artículo 7.1 de la Ley Orgánica. Dicho Catálogo es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional, que es el marco de las acciones formativas dirigidas a responder a las demandas del sector productivo. Tal Catálogo ordena las cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.

⁴ La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 37 que las enseñanzas universitarias se estructuran en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado de modo que la superación de tales enseñanzas dará derecho a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.

El citado sistema de reconocimiento y acreditación de cualificaciones profesionales, que también tiene un apartado dedicado al deporte, no debe confundirse con la regulación del ejercicio de las profesiones. De hecho, la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, aclara que este sistema de cualificaciones profesionales *“no supone en ningún caso la regulación de las profesiones tituladas en los términos previstos en el artículo 36 de la Constitución Española”*.

Como se ha señalado, el citado Real Decreto 1128/2003, antes citado, ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Y dicho Real Decreto, por el que se aprueba el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, contempla una familia profesional específica para el deporte denominada *“Actividades físicas y deportivas”*. El Catálogo, que ha sufrido posteriores modificaciones, contempla cinco niveles de cualificación y reconoce varias cualificaciones profesionales en la familia *“Actividades físicas y deportivas”*:

Nivel 1

- *AFD500_1* Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas.

146/2011

Nivel 2

- *AFD096_2* Socorrismo en instalaciones acuáticas.

295/2004-1087/2005-1521/2007-146/2011

- *AFD159_2* Guía por itinerarios de baja

1087/2005-1521/2007



y media montaña.

- AFD160_2 Guía por itinerarios en bicicleta. 1087/2005-1521/2007  
- AFD161_2 Guía en aguas bravas. 1087/2005-1521/2007  
- AFD338_2 Guía por barrancos secos o acuáticos. 1521/2007  
- AFD339_2 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. 1521/2007  
- AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales. 1521/2007  
- AFD501_2 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiabiles. 146/2011  
- AFD502_2 Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo. 146/2011  
- AFD503_2 Guía de espeleología. 146/2011  
- AFD504_2 Iniciación deportiva en espeleología. 146/2011  
- AFD505_2 Iniciación deportiva en hípica y ecuestre. 146/2011  
- AFD506_2 Iniciación deportiva en natación y sus especialidades. 146/2011  
- AFD507_2 Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y 146/2011  



fijo.

- AFD508_2 Iniciación y promoción deportiva en judo y defensa personal. 146/2011  
- AFD538_2 Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas. 141/2011  
- AFD612_2 Iniciación deportiva en esgrima. 1034/2011  
- AFD613_2 Iniciación deportiva en golf. 1034/2011  
- AFD614_2 Iniciación deportiva en piragüismo. 1034/2011  
- AFD615_2 Iniciación deportiva en tenis. 1034/2011  
- AFD663_2 Iniciación deportiva en karate. 1788/2011  
- AFD664_2 Iniciación deportiva en rugby. 1788/2011  
- AFD665_2 Iniciación deportiva en taekwondo. 1788/2011  

Nivel 3

- AFD097_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 295/2004-
1087/2005-
1521/2007-
146/2011  



- *AFD162_3* Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 1087/2005-1521/2007-146/2011   
- *AFD341_3* Actividades de natación. 1521/2007-146/2011  
- *AFD509_3* Animación físico-deportiva y recreativa. 146/2011  
- *AFD510_3* Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad. 146/2011  
- *AFD511_3* Fitness acuático e hidrocinésia. 146/2011  
- *AFD539_3* Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos. 141/2011  
- *AFD616_3* Instrucción en yoga. 1034/2011  

De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestión del sistema se descentraliza en las Comunidades Autónomas, a las que corresponde la convocatoria y gestión de los procesos de evaluación y acreditación de las competencias. En el País Vasco, mediante el Decreto 119/1998, de 23 de junio, se creó el Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional. Sus funciones son, entre otras, identificar las necesidades de cualificación de los procesos productivos, del mercado de trabajo y de las personas, identificando y definiendo para ello, los estándares de competencia, con la intervención directa del sistema productivo; definir el «Repertorio Vasco de Cualificaciones Profesionales» que satisfaga las necesidades de la economía y de las personas, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Vasco de Formación Profesional; establecer los criterios para definir las competencias profesionales. Asimismo, mediante el Decreto 62/2001 se creó la Agencia Vasca para



la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional. Los objetivos de dicha agencia son, entre otros, desarrollar un dispositivo de evaluación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y los aprendizajes no formales, y verificar, a su vez, la calidad de esa evaluación.

Las cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, antes citadas, no son propiamente títulos académicos o profesionales que habilitan directamente para el acceso y ejercicio de profesiones. Dichas cualificaciones profesionales deben ser entendidas como el conjunto de competencias profesionales adquiridas a través de un proceso formativo formal, e incluso no formal, que son objeto de los correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación. Las cualificaciones profesionales reflejan la capacidad para el acceso a las profesiones del deporte y vienen acreditadas oficialmente mediante diversas vías; títulos académicos, certificados de profesionalidad, etcétera.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica, los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado, son expedidos por las Administraciones competentes y tendrán los efectos que les correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general de reconocimiento de la formación profesional en los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichos títulos y los certificados acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido y, en su caso, surten los correspondientes efectos académicos según la legislación aplicable.

¿Cómo integrar todo este sistema de cualificaciones profesionales en una Ley que regula el ejercicio de profesiones del deporte? La respuesta no es sencilla pues la escasa regulación legal de las profesiones va acompañada de insuficientes referencias al acceso a profesiones a través del sistema de acreditación y reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Por añadidura, el marco de las familias profesionales y de las cualificaciones profesionales que forman parte de las mismas es muy dinámico. Buena prueba de ello es la Disposición Adicional única del Real Decreto 1128/2003,



de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:

“En atención a la evolución de las necesidades del sistema productivo y de las demandas sociales, el Gobierno podrá modificar las familias profesionales que se relacionan en el anexo I”.

En razón de todo ello, el presente Anteproyecto de Ley trata de recoger de manera nominal, además de los correspondientes a las enseñanzas deportivas de régimen especial, los títulos de Formación Profesional específicos del deporte (título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, título de Técnico en Conducción de Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural, etcétera).

La Ley, de conformidad con el Derecho comunitario vigente en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados de la Unión Europea y siguiendo el criterio contenido en el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, en relación con la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña, posibilita el ejercicio profesional mediante la acreditación de las competencias correspondientes. Además, en determinados supuestos y con ciertos requisitos, la acreditación de las competencias para el ejercicio de las profesiones reguladas en la Ley, no sólo puede realizarse mediante la vía general de títulos académicos determinados sino también mediante otras titulaciones, acreditaciones o certificados que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

Así, según la disposición adicional cuarta del Anteproyecto, el acceso y el ejercicio de las profesiones del deporte sólo puede realizarse, en principio, mediante la posesión de los títulos académicos y certificados determinados en esta Ley. Además, habilita al Departamento del Gobierno Vasco para que regule los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías al objeto de permitir el acceso a las profesiones reguladas en la Ley.



Asimismo, la disposición transitoria primera establece que los requisitos de titulación establecidos en la Ley no se exigirán a quienes, a la entrada en vigor de la misma, acrediten de forma fehaciente, y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, que desarrollaban las actividades profesionales reguladas en la Ley. En el supuesto de que dichas personas tengan la posibilidad, al amparo de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, deberán obtener tal acreditación en el plazo reglamentario que fije la Ley.

En la Disposición Transitoria Segunda se aborda la aplicación progresiva de la Ley para las profesiones de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y Entrenador o Entrenadora. Resulta absolutamente necesario que los requisitos de cualificación establecidos en la Ley para la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y de Entrenador o Entrenadora de una modalidad o especialidad deportiva sean exigibles a medida que vayan implantándose las titulaciones de Técnico/a Deportivo/a y Técnico/a Deportivo/a Superior en las correspondientes modalidades deportivas. Repárese que en el campo del deporte una buena parte de las ofertas formativas son las correspondientes al periodo transitorio previsto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1913/1997.

Por ello, en todos aquellos ámbitos materiales propios del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y del Entrenador o Entrenadora en los que el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva verifique la falta de profesionales titulados para atender la demanda existente, la ausencia de formación oficial o la existencia de nuevos ámbitos deportivos, se contempla la habilitación a aquellas personas que acrediten la posesión de cualificación profesional inferior.

e) Empleo de denominaciones para designar a las profesiones.

Antes de entrar a examinar cada una de las profesiones reguladas en el Anteproyecto se ha de realizar una explicación previa sobre el empleo de las denominaciones de las



profesiones contenidas en esta Ley. Se trata de una cuestión sobre la que, posiblemente, sea difícil conseguir un consenso absoluto como consecuencia de una insuficiente identidad profesional y de la repetida confusión histórica entre profesiones y titulaciones.

Sobre la insuficiente identidad profesional en el campo de las profesiones del deporte ya se ha venido escribiendo por la doctrina científica desde hace tiempo. Y la doctrina apunta que en este sector de las profesiones del deporte ha existido una histórica, dudosa e insuficiente definición identitaria. A lo largo del último siglo se han producido algunas iniciativas tendentes a resolver este problema pero ninguna ha sido capaz de aportar un marco jurídico suficiente.

Respecto a la confusión histórica entre titulaciones académicas y profesiones, se ha huido de denominar a las profesiones con las denominaciones de las titulaciones pues esta medida resulta trascendental para evitar esa desafortunada confusión. La utilización de la denominación de una titulación académica para designar una profesión cuenta con algunos ejemplos pero ha sido objeto de lógicas críticas y, en todo caso, sólo estaría justificada en una titulación académica que conduzca a una sola profesión, pero no en el caso presente en el que una misma profesión (por ejemplo, Profesor o Profesora de Educación Física) puede ejercerse sobre la base de varias titulaciones académicas o en el que una misma titulación -Licenciado o Graduado o Licenciada o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o en Derecho- permite ejercer varias profesiones diferentes.

Ya hemos tenido oportunidad de reseñar en esta memoria que las titulaciones y las profesiones constituyen conceptos y ámbitos materiales diferentes y con títulos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas, también diversos. La experiencia demuestra diariamente que cuando las personas son requeridas o preguntadas sobre su profesión (Monitor, por ejemplo) responden frecuentemente de forma equivocada proporcionando datos sobre su titulación académica (Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y viceversa, cuando se solicita información sobre tu titulación académica (Licenciatura en Derecho) se responde con la denominación de una profesión (abogacía). La Licenciatura o Grado en Derecho es



un buen ejemplo de tal confusión entre titulación y profesión y entre título académico y título profesional. Habitualmente, a los licenciados o graduados en Derecho se les identifica con la profesión de “Abogado” o “Abogada”. Sin embargo, con la Licenciatura en Derecho se pueden ejercer diferentes profesiones previo cumplimiento de otros requisitos: Profesor, Abogado, Juez, Fiscal, Secretario Judicial, Notario, Registrador, Procurador, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Gestor Administrativo, Agente de la Propiedad Industrial, etcétera. Y al mismo tiempo una persona puede ejercer una misma profesión con titulaciones diferentes. Por ejemplo, se puede ejercer la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física estando en posesión de diferentes titulaciones.

Esta es, precisamente, una de las acertadas aportaciones que formuló el Ministerio de Economía y Hacienda, en un informe de 2 de abril de 2007, sobre uno de los borradores generados en el seno de la Comisión de Estudio del Consejo Superior de Deportes para la Regulación del Ejercicio Profesional en el Ámbito de la Actividad Física y el Deporte:

“En todo caso, lo que parece más grave a este respecto es que parte de un enfoque erróneo de identificar las profesiones con los títulos académicos. En efecto, en el artículo 3 se refiere como profesionales a quienes posean un título académico y no, como sería lo atinado, con quienes ejercen la actividad. Con ello se produce una confusión entre el ámbito de lo académico y el de la regulación de la actividad económica y profesional del todo indeseable”.

Por otra parte, también se han empleado en el Anteproyecto de Ley las denominaciones de profesiones ya asentadas o con tradición y, especialmente, denominaciones cortas. No parece razonable emplear denominaciones de profesiones que son excesivamente largas y no reconocibles en la vida real. Por ejemplo, no puede denominarse una profesión con una denominación tan larga como “*Técnico o Técnica en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*”, como “*Técnico o Técnica en Animación de Actividades Físicas y Deportivas*”, o denominaciones análogas, salvo que se quiera correr el riesgo de emplear acrónimos y similares. Son denominaciones



difíciles de identificar con profesiones. Además, uno de los requisitos es el de su fácil reconocimiento o identificación social.

En la elección de las denominaciones se han tenido en cuenta numerosos estudios, tesis doctorales, etcétera, publicados. Por ejemplo, en el año 2006 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer) publicó un estudio⁵ en el que se contienen las cuatro profesiones contenidas en el Anteproyecto con la excepción de que no aparece el ámbito material de la profesión (por ejemplo, el deportivo) pues eso hubiera obligado a multiplicar la relación de las profesiones (por ejemplo, la de profesor) sobre la base de los innumerables campos de actuación. Aparecen tales profesiones por el siguiente orden:

Directora (Deportiva) y Director (Deportivo)
Entrenadora (Deportiva) y Entrenador (Deportivo)
Monitora (Deportiva) y Monitor (Deportivo)
Profesora (de Educación Física) y Profesor (de Educación Física)

Una de las grandes dificultades a las que debe hacer frente el Anteproyecto de Ley es el empleo de denominaciones de profesiones con distintas acepciones o que hacen referencia a distintos ámbitos. La Ley ha optado por emplear la denominación de *Director Deportivo* o *Directora Deportiva* en lugar de *Director Técnico* o *Directora Técnica* al objeto de singularizar la denominación de la profesión vinculándola al ámbito del deporte. La denominación de *Director Técnico* o *Directora Técnica* al igual que sucede con la profesión de *Monitora* o *Monitor*⁶, también se emplea en otras áreas sociales que nada tienen que ver con el deporte y, en definitiva, es preciso que cuando se escuche o lea la denominación se identifique de forma exclusiva con una profesión del deporte. Es cierto, como se ha apuntado anteriormente, que algunas denominaciones del deporte tienen distintas acepciones pero, debe insistirse, que ese es un problema irresoluble. Por ejemplo, en el mundo del ciclismo el concepto de *Director Deportivo* o *Directora Deportiva* tiene una connotación diferente a la empleada en el Anteproyecto de Ley. En el argot ciclista el Director Deportivo o Directora

⁵ *Las profesiones de la A a la Z. En femenino y en masculino*, realizado por EULALIA LLEDÓ

⁶ La profesión de *Monitor* también se emplea en el ámbito de las actividades juveniles, de campamentos, actividades de ocio, etcétera, no deportivas.

Deportiva es, en parte, equivalente al Entrenador o Entrenadora de otros deportes colectivos (balonmano, baloncesto, fútbol, etcétera). Asimismo, el término *Monitor* o *Monitora* es empleado para los entrenadores en los niveles más básicos de las competiciones deportivas (por ejemplo, en las categorías inferiores), pero también se utiliza en actividades físicas en el medio natural, en el aeróbic, en el fitness, etcétera.

La denominación de Entrenador o Entrenadora se debe completar con la de la modalidad o especialidad deportiva de que se trate, al igual que sucede con la denominación de las titulaciones de los técnicos deportivos.

El Anteproyecto incluye varias previsiones para la protección de las denominaciones. Por ello, sólo podrán utilizarse las denominaciones de las profesiones reguladas en la Ley cuando el ejercicio profesional se ajuste a lo dispuesto en la misma y en las demás normas aplicables. Asimismo, no podrán utilizarse otras denominaciones que, por su significado o por su similitud, puedan inducir a error con aquellas.

Tal y como se reseña en el apartado de esta memoria dedicado al impacto de género, se ha descartado la opción del empleo del sustantivo genérico masculino, criterio seguido por el propio Parlamento español en Leyes como, por ejemplo, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, o en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Se han seguido así las recomendaciones contenidas en las publicaciones editadas por el Instituto de la Mujer, pues en las mismas ya se señalan “*las dificultades del masculino para englobar el femenino*” y que debe evitarse, por tanto, usar el masculino “*en sentido genérico*”.

g) Profesiones reguladas en la Ley.

Las profesiones que inicialmente regula la Ley son las siguientes:

1.- Profesor o Profesora de Educación Física.



Entre las profesiones del mundo del deporte una de las más reconocidas es la de *Profesor o Profesora de Educación Física*, ya reconocida por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 194/1998, de 1 de octubre, como profesión colegiada. Realmente, de todas las profesiones reguladas en esta Ley es una de las que cuenta con una mayor regulación, a través de la legislación educativa, que se refiere a los profesores en general.

En las escasísimas monografías o estudios publicados sobre la materia se contiene un reconocimiento expreso de esta profesión. En el libro *Las profesiones del mundo del deporte*⁷ se reivindica “*la docencia deportiva como profesión*” y se enumera entre las citadas profesiones la de Profesor o Profesora de Educación Física. Asimismo, en la monografía titulada *La configuración jurídica de las profesiones tituladas*⁸ se dedica especial atención, en el capítulo dedicado a las profesiones, a la de “*Profesor de Educación Física*”.

La primera aclaración que procede hacer en esta memoria es la relativa a la denominación de la profesión. En el Anteproyecto de Ley se ha optado por incluir a los denominados “*maestros*” dentro de la profesión de “*Profesor o Profesora de Educación Física*” en la medida que los maestros también constituyen profesorado. Aunque la legislación educativa diferencia distintas categorías de profesorado lo cierto es que también ha venido englobando a los maestros dentro del género docente de los profesores. Por ejemplo, el artículo 19 de la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación, que se refería a la impartición de la Educación Física por maestros, los englobaba bajo la denominación de “*profesorado*”. Lo mismo se desprendía del Preámbulo del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Ingreso, Acceso y Adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo. Idéntico criterio se sigue en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Aunque es evidente que a los profesores de la Educación Secundaria Obligatoria y a los profesores de la Educación Primaria se les denomina de forma diferente en

⁷ Su autor es Luis MIRACLE, Planeta, Barcelona, 1992.

⁸ Escrito por José María SOUVIRON MORENILLA y editado en 1988 por el Consejo de Universidades.



ocasiones, no es menos cierto que ambos colectivos profesionales son considerados profesores y se les aplica todo el régimen de derechos y obligaciones del profesorado.

Una de las posibles objeciones que se pueden formular a esta regulación es que se trata de una materia que cuenta con una regulación propia del sector educativo, una regulación que es, además, de carácter básico, y que, por tanto, esta Ley no podría modificar. Las respuestas a este planteamiento pueden ser innumerables:

- a) La profesión de Profesor o Profesora de Educación Física se regula en esta Ley desde perspectivas diferentes a la materia educativa (formación obligatoria en reanimación cardiopulmonar, colegiación, presencia física, deberes deontológicos, etcétera). Por tanto, la legislación educativa básica no agota todo los aspectos de la profesión. Prueba acreditativa de ello es la abundante legislación autonómica que ha complementado facetas de la legislación básica del Estado. Piénsese, por ejemplo, en toda la legislación de las comunidades autónomas en materia de autoridad del profesorado, en materia de protección jurídica del profesorado, en materia de responsabilidad civil, etcétera.
- b) Las cualificaciones profesionales que contempla este Anteproyecto de Ley son respetuosas con las titulaciones fijadas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y tan sólo se procede a una especificación, que está en consonancia con los bienes constitucionales que se desean proteger (salud, seguridad, etcétera), de conformidad con la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional para esta profesión (STC 194/1998).
- c) Una normativa básica es, por esencia, un ordenamiento susceptible de desarrollo normativo y no podría concebirse el ordenamiento educativo aprobado por el Parlamento estatal como un ordenamiento “congelado” que no puede ser objeto de concreción por otra norma, máxime cuando reviste rango de Ley.
- d) El Anteproyecto establece que las cualificaciones exigidas al profesorado de Educación Física serán las establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de



Educación. Repárese en que el Anteproyecto de Ley no condiciona el ejercicio profesional de los profesores de Educación Física a titulaciones diferentes a las previstas en la legislación educativa sino que, en un deseo de regular dicha profesión sin fricciones, valora de forma preferente determinada cualificación profesional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

- e) La Ley 3/2008, de 23 de abril, de ejercicio de las profesiones de Cataluña, contempla la posibilidad de que la administración educativa catalana valore la formación específica en el ámbito de la actividad física y del deporte.

Quedan fuera de la Ley los requisitos de titulación para la impartición de las materias correspondientes a las ciencias de la actividad física y del deporte en las enseñanzas deportivas de régimen especial previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y en las enseñanzas deportivas del denominado periodo transitorio. No se puede perder de vista que esta Ley regula la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física y no puede entrar a regular todos los supuestos de impartición de docencia en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte. Será cada Real Decreto de ordenación de la correspondiente titulación o enseñanza la que establezca los correspondientes requisitos de titulación.

También quedan fuera de esta profesión, por las mismas razones, las actividades profesionales de profesor en materias deportivas incluidas en las enseñanzas universitarias, en las enseñanzas de formación profesional, en las enseñanzas de la carrera militar, en las actividades formativas no formales y, en definitiva, en aquellas materias que no constituyen propiamente la docencia del área de Educación Física.

La profesión de Profesor o Profesora de Educación Física permite impartir en los citados niveles de enseñanza las correspondientes clases de Educación Física a los alumnos y realizar todas las funciones instrumentales o derivadas previstas en la legislación educativa tales como planificar, programar, coordinar, tutorizar, evaluar o dirigir la actividad docente.

Asimismo, el Anteproyecto dispone que las clases de Educación Física impartidas a los alumnos y alumnas requerirán la presencia física del profesor o profesora. Por tanto, quedan fuera de la obligada presencia física todas las funciones de los profesores vinculadas a la planificación, programación, tutorización, etcétera. Esta medida se encuentra justificada por la abundante casuística de siniestros en clases de educación física con ausencia del profesor o profesora.

2.- Monitor Deportivo o Monitora Deportiva.

También se reconoce en el Anteproyecto de Ley la profesión de Monitor Deportivo. En el Anteproyecto se propone una denominación de la profesión que no coincide literalmente con títulos oficiales existentes al objeto de evitar las peligrosas confusiones entre profesiones y titulaciones.

Y dentro de esta profesión de Monitor Deportivo se han contemplado actividades profesionales de muy diversa naturaleza. Así, en el grupo de los monitores también se ha incluido la actividad de animación deportiva. Precisamente, en los diferentes estudios sobre el mercado profesional en el campo del deporte aparece la actividad de animación deportiva como una de las actividades de mayor notoriedad en la sociedad actual.

También se incluye en esta categoría de Monitor Deportivo Profesional a los profesionales que son conocidos bajo denominaciones muy diferentes: entrenador personal, preparador personal, *coach*, etcétera. Se trata de una actividad con una gran progresión, muy extendida, que no puede seguir desregulada, pues esta profesión está íntimamente relacionada con la salud y la seguridad de las personas.

La profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva permite realizar funciones de instrucción deportiva, aprendizaje, animación, acondicionamiento físico básico, recuperación, mejora de la condición física, monitorización, control, guía y análogas sobre el deportista cuando dicha actividad no está enfocada a la competición



deportiva. Esta constituye una de las diferencias sustanciales con la profesión de Entrenador Deportivo o Entrenadora Deportiva, actividad que se encuentra focalizada hacia la competición.

La prestación de servicios del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, a diferencia de la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva, también requiere una presencia en el desarrollo de las actividades deportivas que se desarrollen.

3.- Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

En el Anteproyecto de Ley se reconoce expresamente la profesión de Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente. La denominación genérica de Entrenador o Entrenadora se completará con la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

La Ley estatal 10/1990, de 15 de octubre, encomendó al Gobierno, a través de su artículo 55, regular las enseñanzas de los técnicos deportivos según las exigencias marcadas por los distintos niveles educativos, así como las condiciones de acceso, los programas, directrices y planes de estudio. El Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos, se limitó a desarrollar la citada previsión de la Ley del Deporte, pero sin considerar la inclusión de estas enseñanzas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que configuró como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos y por el que se aprobaron las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. Precisamente en este Real Decreto se hacía mención al grupo profesional de los entrenadores deportivos que *“se han orientado preferentemente a la enseñanza y al entrenamiento de una modalidad o especialidad deportiva y, por tanto, han tenido su principal campo de aplicación en las actuaciones profesionales que convergen en la profesión reglada”*.



Posteriormente, este Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, actualmente vigente.

La profesión de Entrenador o Entrenadora es una de las que cuenta con mayor tradición en el mundo del deporte. Por ello, no es casualidad que los estudios realizados sobre el mercado de trabajo en el deporte coincidan unánimemente a la hora de referirse a la profesión del “*Entrenador*”.

Esta profesión permite el entrenamiento, selección, asesoramiento, planificación, programación, dirección, conducción, control, evaluación, seguimiento y actuaciones análogas de deportistas y equipos con miras a la competición. Esta es la gran diferencia respecto a otras profesiones recogidas en la presente Ley; mientras el Monitor Deportivo o Monitora Deportiva está facultado para realizar funciones de instrucción, aprendizaje, animación, monitorización, control y análogas al margen de la competición, el Entrenador o Entrenadora Profesional de Fútbol, de Rugby, de Atletismo, o de Balonmano, trata de realizar su actuación profesional con deportistas o equipos con miras a la competición.

Las cualificaciones profesionales requeridas para ejercer esta profesión son diferentes en función del ámbito material de actuación. Por ejemplo, para ejercer tal profesión dirigiendo a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de nivel básico y de nivel medio se exige una formación inferior que para las competiciones de alto nivel.

En el texto legal se emplean los conceptos de “*competiciones de nivel básico, de nivel medio y de alto nivel*” por ser los conceptos empleados en la propia normativa reguladora de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Una figura que aparece en los estudios realizados en torno al mercado de trabajo en el deporte se encuentra la figura del ayudante del entrenador con numerosas denominaciones. Entre sus funciones se encuentran las de colaborar con el entrenador principal en la planificación de la temporada, conducir los entrenamientos, trabajar en la recuperación de los deportistas lesionados, etcétera. Se trata de una



figura que, sobre todo, en el deporte profesional tiene una gran relevancia y se ha prestado a numerosos fraudes pues los supuestos ayudantes del entrenador eran, de facto, los primeros entrenadores, aunque con una cualificación inferior a la requerida en la normativa federativa para los primeros entrenadores. Por todo ello, el Anteproyecto de Ley aborda tal figura y considera que las personas que, en el ámbito profesional, ayudan al entrenador principal conduciendo los entrenamientos, recuperando a los deportistas, aplicando test de valoración, dando instrucciones a los deportistas y actuaciones análogas también ejercen la profesión de Entrenador o Entrenadora y, en consecuencia, deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos en el artículo regulador de esta profesión.

Por razones obvias, las cualificaciones profesionales señaladas en este artículo sólo serán exigibles cuando se ejerza la profesión en el País Vasco y para entidades deportivas y deportistas que tienen su domicilio en el País Vasco. Dichas cualificaciones profesionales no serán exigibles a los entrenadores de entidades deportivas o de deportistas de otros ámbitos territoriales que compiten de forma transitoria en el País Vasco con ocasión de competiciones deportivas estatales o internacionales o con ocasión de concentraciones o sesiones de preparación. Aunque la Comunidad Autónoma del País Vasco puede ostentar competencias para exigir en el País Vasco las cualificaciones profesionales que estime convenientes, sería irrazonable que cualquier selección o equipo extranjero o de otra Comunidad Autónoma deba disponer de un entrenador con las cualificaciones profesionales previstas en el Anteproyecto de Ley.

4.- Director Deportivo.

En diversos estudios sobre las profesiones del mundo del deporte se menciona a esta profesión aludiendo a los “*directores deportivos*”.

En el Decreto 183/2006, de 17 de octubre, por el que se regula la acreditación de centros deportivos y se crea y regula el Registro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos, aunque no regula el ejercicio de profesiones, a lo largo del texto se refiere



a la figura del *Director Técnico*. Sin embargo, tal y como se ha comentado en esta memoria, el problema de las denominaciones de las profesiones del deporte es de difícil resolución. Si bien es cierto que la denominación de *Director Técnico* se emplea en ocasiones en el ámbito del deporte no es menos cierto que deben singularizarse las denominaciones de las profesiones del deporte de modo que no puedan ser empleadas en otros sectores sociales o ámbitos profesionales. Por todo ello, en el presente Anteproyecto se ha optado por reconocer la profesión de *Director Deportivo o Directora Deportiva*. Al igual que sucede con las denominaciones otras profesiones, existe una tipología de ámbitos materiales y especialidades que requieren una adjetivación diferenciador.

La profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva permite realizar el conjunto de actividades profesionales relacionadas con la dirección, programación, planificación, coordinación, control y supervisión de centros y actividades deportivas aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte. La actividad profesional del Director Deportivo o Directora Deportiva, que también puede conllevar en algunos casos funciones instrumentales de gestión, no precisa su presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas.

No se considerará que una persona ejerce la profesión de Director Deportivo cuando, a pesar de emplear tal denominación en el seno de la organización privada correspondiente, su actividad se centra en el entrenamiento, selección, asesoramiento, planificación, programación, dirección, control, evaluación, seguimiento y actuaciones análogas de deportistas y equipos con miras a la competición. En tal caso nos encontramos ante la profesión de Entrenador o Entrenadora.

g) Requisitos de cualificación en supuestos especiales. Adaptación a los procesos de cambio en la oferta formativa.

En el texto articulado de la Ley, después de definir cada profesión, su ámbito funcional y los requisitos de cualificación, se han regulado determinados supuestos especiales.



En el supuesto de aquellos profesionales de clubes y otras entidades deportivas que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional se le exigirán las cualificaciones profesionales aplicables en la Comunidad Autónoma donde la entidad deportiva tenga su domicilio social.

A los profesionales de las federaciones deportivas y demás entidades deportivas, públicas o privadas, de ámbito estatal sólo se les exigirán las titulaciones establecidas en la presente Ley si trabajan exclusivamente en el País Vasco. Si una organización deportiva de ámbito estatal tiene un centro en el País Vasco en donde se prestan servicios profesionales resulta razonable exigir la correspondiente cualificación a sus profesionales.

En el artículo 8, al objeto de adaptar la exigencia de cualificaciones, prevista en este Anteproyecto de Ley, a los previsibles procesos de cambio en la oferta de formaciones asociadas a las mismas, se admite aquellas cualificaciones y títulos, correspondiendo al Gobierno Vasco realizar tal adaptación. En esta materia no resultaría concebible una congelación de rango normativo pues ello obligaría a remitir al Parlamento constantes proyectos legislativos de adaptación de la Ley.

h) Colegiación.

El Anteproyecto de Ley elude el establecimiento de la colegiación obligatoria, pues, de acuerdo con el artículo 3.2 de la vigente Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, *“será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal”*. Asimismo, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, estableció lo siguiente: *“En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación”*.



Por otra parte, con arreglo al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, citado en repetidas ocasiones en esta memoria, *“la colegiación obligatoria se podrá exigir únicamente mediante norma estatal con rango de ley”*. Con arreglo a tal previsión legislativa, y de acuerdo con una cuestionable doctrina del Tribunal Constitucional, sólo la ley estatal podrá crear obligaciones de colegiación y no habrá profesiones que sean obligatorias en unas comunidades autónomas y en otras, como sucede en la actualidad, donde buena parte de las comunidades autónomas han aprobado disposiciones legales sobre la colegiación obligatoria en determinadas profesiones.

Por esa razón, el artículo 10 del Anteproyecto establece que será requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la Ley *“la incorporación al colegio profesional correspondiente, si así lo dispone la legislación estatal correspondiente”*.

i) Otros requisitos para el ejercicio profesional

El artículo 14 del Anteproyecto aborda otra cuestión muy importante, la de los demás requisitos para el ejercicio profesional. Por supuesto, una persona que desee ejercer una de las profesiones del deporte reguladas en la Ley deberá cumplir, en su caso, otros requisitos; en materia tributaria, en materia de Seguridad Social, en materia de licencias de apertura, en materia de licencias federativas, etcétera. Por ello, en dicho precepto se aclara que los requisitos de cualificaciones profesionales para el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte que se establecen en la Ley se entienden sin perjuicio de cualesquiera licencias, autorizaciones o títulos exigibles con arreglo a la legislación vigente. Si un Entrenador o Entrenadora desea ejercer su profesión dirigiendo a un equipo federado deberá cumplir, además del lógico requisito de la cualificación, el requisito de la afiliación federativa, es decir, deberá obtener la licencia federativa correspondiente. Sólo así cabe que la correspondiente federación deportiva pueda ejercer sobre el mismo la potestad disciplinaria.



Este es también el criterio que se contiene en el Acuerdo de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del Deporte de Cataluña. Según el mismo, *“ambas partes coinciden en admitir la posible existencia de requisitos previos para el ejercicio de estas profesiones no explicitados en la Ley como ocurre, por ejemplo, en relación con la profesión de profesor o profesora de educación física que, para ejercerse en el ámbito público, requiere la pertenencia a un Cuerpo estatal de profesores”*.

Según el apartado segundo del artículo 14, no podrá ser exigible una licencia federativa para el ejercicio de una profesión del deporte si la actividad profesional se desarrolla al margen de la correspondiente organización federativa. Tal apartado es perfectamente compatible con lo señalado anteriormente y, en realidad, responde a una demanda muy habitual de los profesionales que trabajan en el mundo del deporte. Existen profesiones cuyo ejercicio ha venido históricamente condicionado a la posesión de la previa licencia federativa. Sobre esta cuestión existen abundantes trabajos y documentos denunciando tal situación⁹. Es evidente que no resulta conforme a Derecho que las federaciones deportivas, o las administraciones públicas, requieran para el ejercicio de una profesión del deporte la previa obtención de la licencia federativa si el profesional no va ejercer su profesión en el ámbito de una actividad deportiva federada. La licencia constituye un documento que está concebido para integrarse en las federaciones al objeto de participar en las competiciones oficiales que organizan las mismas, pero no puede tener un carácter obligatorio para quien desee prestar servicios extramuros del deporte federado. Tal propuesta legislativa se encuentra en sintonía con la normativa vigente en el País Vasco, que ya establece expresamente que *“(L)as federaciones deportivas no ostentan competencias sobre todas las competiciones o actividades propias de su modalidad deportiva en su ámbito territorial”* (artículo 38.4 del Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco).

⁹ Por ejemplo, en el trabajo *La validez de la formación de Socorrismo Acuático* del Dr. PALACIOS AGUILAR. Véase al respecto la Memoria Final del 4º Congreso de Salvamento y Socorrismo: *Actividades acuáticas y Socorrismo profesional*, diciembre de 2005.

**j) Principios y deberes de los profesionales.**

Siguiendo el modelo de otras disposiciones legales, como la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se ha incorporado un catálogo de principios y deberes de actuación para el ejercicio de las profesiones objeto de regulación.

Una Ley que regula unas determinadas profesiones debe ceñirse a articular aquellas disposiciones que sean propias y específicas de dichas profesiones quedando sometidas en todo lo restante al marco común del ejercicio profesional. Por ello, el Anteproyecto de Ley parte de la base de que los profesionales del deporte que son objeto de regulación deben inspirarse en unos principios propios o característicos del deporte. Dichos principios rectores del Anteproyecto se inspiran, en buena parte, en los principios rectores de actuación consagrados en la vigente legislación deportiva.

Resulta oportuno apuntar que se han incluido diversos deberes relacionados con la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y con la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte del País Vasco. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en un deber que, a tenor de la jurisprudencia existente en el campo de la responsabilidad civil y patrimonial, se incumple con una frecuencia no deseable: el deber de presencia física del profesional. Se trata de un problema que debe erradicarse y el texto legal propuesto camina en esa dirección.

La relación de principios de actuación no es exhaustiva e incluye un apartado que permite al colegio profesional correspondiente añadir los que se consideren oportunos.

Asimismo, se añade una última previsión respecto a las consecuencias disciplinarias derivadas del incumplimiento de dichos deberes.

k) Sociedades profesionales.



El Anteproyecto es consciente de la extraordinaria evolución de las actividades profesionales, incluidas las del ámbito deportivo, que ha dado lugar a que la actuación individualista de los profesionales se vea sustituida por equipos multidisciplinares como consecuencia de la creciente complejidad de las actividades profesionales y de las ventajas que derivan de la especialización y división del trabajo. Por ello, el ámbito de los servicios profesionales, al que no escapan las profesiones del deporte, tiende a organizar el ejercicio de las profesiones por medio de sociedades. De ahí que en estos momentos se haya tenido en cuenta la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que camina en la citada dirección.

El presente Anteproyecto de Ley realiza una remisión normativa a la legislación general que resulte de aplicación. No parece que el campo profesional del deporte deba apartarse de las normas generales que disciplinen el ejercicio profesional a través de sociedades. Tan sólo se incluye una previsión singular para garantizar la presencia física de los profesionales correspondientes en el ejercicio de la actividad organizada a través de sociedades profesionales.

El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente Ley podrá realizarse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las Leyes y cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación reguladora de las sociedades profesionales, salvo en los supuestos de acceso al empleo público o en aquellos supuestos no admitidos en la legislación en materia educativa.

1) Responsabilidad civil

En el ámbito de la regulación del ejercicio de las profesiones es habitual que se aborde expresamente esta cuestión. Así, por ejemplo, en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, dispone lo siguiente:

“Artículo 46. Cobertura de responsabilidad



Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.

Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las condiciones esenciales del aseguramiento, con la participación de los profesionales y del resto de los agentes del sector.

En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales podrán adoptar las medidas necesarias para facilitar a sus colegiados el cumplimiento de esta obligación.”

Otro ejemplo lo constituye la antes citada Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas del País Vasco, que establece lo siguiente:

“Artículo 12. Aseguramiento

1.- Los profesionales titulados tendrán el deber de cubrir, mediante el correspondiente seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir a consecuencia de su ejercicio profesional.

2.- Dicha obligación no será exigible cuando los derechos de terceros estén garantizados en virtud de otra legislación aplicable a la actividad de que se trate, o en virtud de acuerdos de aplicación general con el mismo fin.

3.- En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del deber de aseguramiento por parte de sus colegiados.”



El Anteproyecto de Ley también contiene una referencia especial a la cobertura obligatoria de la responsabilidad civil de los profesionales del deporte. El artículo 20 del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales exige que sea una norma con rango de ley la que establezca el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil de los profesionales.

Con arreglo al mismo, los profesionales regulados por la presente Ley deben tener asegurada la responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que se causen a terceros con ocasión de la prestación de los servicios profesionales previstos en esta Ley.

A los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una Administración Pública y, en definitiva, a quienes ejerzan su actividad profesional por cuenta de terceros no les resulta obligatorio el aseguramiento de la responsabilidad civil.

m) Intrusismo. Responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.

Desde numerosos colectivos relacionados con las titulaciones académicas específicas del deporte viene denunciándose desde hace muchos años el extraordinario intrusismo que existe en el mercado laboral o profesional del deporte. El intrusismo al que se refieren los distintos colectivos es el intrusismo en sentido no técnico, es decir, no hace referencia al delito de intrusismo tipificado en el artículo 403 del Código Penal.

Es evidente que para que pueda hablarse de la comisión de un delito de intrusismo por la realización de actos de una profesión sin tener la titulación para el ejercicio de la misma se precisa una Ley que defina la profesión y que someta el ejercicio de la misma a una determinada titulación. El delito de intrusismo no se comete respecto a los actos propios de una titulación; se comete respecto a los actos propios de una profesión que precisa de la posesión de un título determinado por la disposición correspondiente. El Tribunal Constitucional, a través de su Sala Primera, ha tenido oportunidad de abordar el tema de la comisión de un delito de intrusismo por ejercer la especialidad médica de cirugía plástica sin título oficial previsto en un Real Decreto.



En opinión del Tribunal Constitucional, y también del Tribunal Supremo (S. de 1 de abril de 2003), el Real Decreto 127/1984 es inadecuado para integrar la remisión normativa incluida en el tipo penal de intrusismo en virtud de dos argumentos. De una parte, desde una perspectiva formal, la norma reguladora de las especialidades médicas no es adecuada para complementar el tipo penal de intrusismo por su carencia de rango de Ley expresamente exigido por el artículo 36 CE para el “*ejercicio de las profesiones tituladas*”. Y, de otra parte, a la misma conclusión debe llegarse desde una perspectiva material, pues la citada norma reglamentaria no define los actos propios de cada especialidad, conculcando la garantía de *lex certa* que incorpora el derecho a la legalidad penal y el principio de seguridad jurídica.

El intrusismo al que se ha hecho referencia al comienzo de este apartado de la memoria es consecuencia directa de la falta de regulación legislativa del sector. Si no están reguladas las profesiones, o si no están determinadas las titulaciones o cualificaciones que resultan precisas para el desarrollo de las mismas, es difícil imputar la comisión del delito de intrusismo a determinadas personas.

Con arreglo al artículo 15 del Anteproyecto el ejercicio de las profesiones reguladas en la presente Ley que no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley y, particularmente, a la obligación de contar con la titulación correspondiente dará lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que procedan con arreglo a la Ley.

Además de las sanciones administrativas y disciplinarias, el Anteproyecto se refiere a las responsabilidades penales que procedan con arreglo a la legislación vigente. El artículo 403 del Código Penal aprobado en 1995 establece lo siguiente: “*El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses*”. Con este artículo 403 nos encontramos ante lo que se denomina una Ley penal en blanco, ya que uno de sus elementos debe ser definido mediante la aplicación de normas jurídicas extrapenales, que de esta manera se integran en la Ley penal. Para que la protección penal sea eficaz resulta preciso que exista una normativa que determine “*los actos propios de*



una profesión”, es decir, aquellas atribuciones propias de unos profesionales concretos. El Anteproyecto de Ley no tipifica nuevos ilícitos penales pues, obviamente, Euskadi no ostenta competencias en materia penal y, por otra parte, no estamos hablando de una ley Orgánica. Lo que sucede es que, a pesar de que los elementos esenciales configuradores del tipo penal están plenamente contenidos en el artículo 403, es precisa *“la llamada, de forma indirecta, a la norma complementaria”*. Dicho de otra manera, el citado precepto penal (artículo 403 CP) cumple la exigencia del principio de tipicidad penal al describir el núcleo esencial de la conducta prohibida y al contener la pena (así, STC 127/1990, relativa a las exigencias que deben cumplir las llamadas Leyes penales en blanco para ser consideradas constitucionalmente legítimas). El Anteproyecto de Ley actúa, tan solo, de norma complementaria en orden a determinar cuáles son las cualificaciones y atribuciones propias de cada profesión del deporte. Sólo así podremos hablar de una eficaz protección penal en este ámbito.

Como no todos los supuestos de colaboración entre el Código Penal y las normas extrapenales son constitucionalmente admisibles resulta conveniente apuntar los requisitos exigibles con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional. Con este objetivo parece útil citar la doctrina contenida en la STC de 17 de febrero de 2005:

“TERCERO.- Los órganos judiciales apuntan como uno de los motivos de inconstitucionalidad del precepto cuestionado el de la infracción de la reserva de Ley orgánica establecida en el art. 81.1 CE, habida cuenta que el apartado uno de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985 tipifica un delito que lleva aparejada una pena privativa de libertad, y la Constitución exige que los elementos esenciales del tipo y de la pena se establezcan por Ley orgánica. Frente a ello tanto el Abogado del Estado como el Fiscal defienden que nos encontramos ante una Ley extrapenal por la que se completa, cumpliendo las exigencias constitucionalmente establecidas al respecto, una norma penal en blanco en virtud del reenvío efectuado por ésta a la Ley ordinaria.

La cuestión a analizar se centra, entonces, en determinar si nos encontramos ante uno de los supuestos de colaboración entre la



norma penal y la extrapenal constitucionalmente admisibles conforme a nuestra doctrina. A este respecto debemos comenzar precisando que, como señalamos en la STC 120/1998, de 15 de junio, (en un recurso de amparo relativo a una condena por un delito de contrabando de especies protegidas), con referencia al art. 1.1.4, puesto en relación con los arts. 3.2 y 3.3, todos ellos de la Ley Orgánica 7/1982, que la que entra en juego en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento es "una Ley penal de las denominadas por la doctrina 'en blanco', que impone taxativamente la consecuencia jurídica, pero cuyo supuesto de hecho no se encuentra totalmente previsto en ella, sino que requiere de un complemento previsto en otra norma; la norma penal se remite a otra norma de naturaleza no penal, que se integra de este modo en la definición del delito o falta" (FJ 2; en el mismo sentido, y con relación al delito contra la hacienda pública, la STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8."

Sentando lo anterior debemos seguidamente señalar que, conforme a doctrina reiterada de este Tribunal, la reserva de Ley que opera en materia penal no impide la existencia de posibles "*Leyes penales en blanco*", esto es, de normas penales incompletas en las que la conducta jurídico-penal no se encuentre exhaustivamente prevista en ellas y que remiten para su integración a otras normas distintas (por todas, STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 3).

Reforzando la protección de la salud y la seguridad de los destinatarios de los servicios profesionales, la Disposición Final Primera añade una letra k al artículo 127 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, al tipificar como infracción muy grave la prestación de servicios profesionales sin la posesión de la cualificación profesional exigida en la legislación reguladora de las profesiones del deporte. No se puede perder de vista que la mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con leyes deportivas con regímenes sancionadores administrativos y disciplinarios que pueden resultar de aplicación, por ejemplo, al ejercicio de las profesiones sin cumplir con los requisitos de cualificación. El artículo 65 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía, tipifica como infracción



administrativa grave *"la prestación de servicios profesionales de carácter técnico deportivo sin haber obtenido la titulación correspondiente"*. El artículo 65 de la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte de Cantabria también considera infracción administrativa grave *"la prestación de servicios profesionales de carácter técnico-deportivo sin haber obtenido la titulación correspondiente"*. El artículo 74 de la Ley del Deporte de Cataluña, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, tipifica como infracción administrativa grave *"el incumplimiento de alguna de las obligaciones o condiciones establecidas en la presente Ley en materia de licencias, instalaciones deportivas, titulación de los técnicos y control médico y sanitario"*. En Canarias, sin embargo, el artículo 59 de su Ley 8/1997, de 9 de julio, del Deporte, tipifica como infracción disciplinaria muy grave *"la realización o prestación de servicios de forma reiterada relacionados con la enseñanza, formación, dirección, entrenamiento o animación de carácter técnico-deportivo sin la titulación correspondiente, de acuerdo con las normas establecidas por la Administración y por las federaciones deportivas en materia de titulaciones deportivas"*. En materia de ejercicio de profesiones se puede poner el ejemplo del artículo 15 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales del País Vasco. Tal precepto considera infracción muy grave *"el ejercicio de una profesión sin estar en posesión del título a que se refiere el artículo 5.1.a"*.

n) Marco normativo común.

Es evidente que la propuesta del Anteproyecto no tiene pretensión alguna de agotar la regulación de las profesiones contenidas en el mismo. La Ley se limita a regular los aspectos básicos del acceso y del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

Por todo ello, según el artículo 16 del Anteproyecto, las profesiones reguladas en la misma quedarán sometidas, en lo no establecido por ello, al marco normativo común a toda actividad profesional que aprueben las instituciones competentes. La Comunidad Autónoma del País Vasco ya cuenta en estos momentos con marco común del



ejercicio de las profesiones, concretamente la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales, del País Vasco.

Este marco normativo común resulta perfectamente compatible con la regulación individualizada de las profesiones del deporte de modo que cada profesión del deporte dispondrá de un marco común y, asimismo, dispondrá de disposiciones sectoriales en atención a las peculiaridades en cada ámbito como puede ser el del deporte.

En la medida que la problemática del ejercicio profesional siempre genera dudas respecto a su compatibilidad con el principio constitucional de la libre competencia, el artículo 16.2 establece que el ejercicio de las profesiones reguladas en la Ley y la intervención de las organizaciones colegiales estarán sujetos a la legislación sobre Defensa de la Competencia y sobre Competencia Desleal. Se ha seguido así el criterio aprobado por diversos parlamentos. La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía¹⁰, establece en su artículo 3.2 que *“el ejercicio de las profesiones colegiadas en Andalucía se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la legislación sobre Defensa de la Competencia y sobre Competencia Desleal”*. En idénticos términos se pronuncia la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura¹¹.

o) Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.

El artículo 10 del Anteproyecto establece que será requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la Ley la incorporación al colegio profesional correspondiente, si así lo dispone la legislación estatal correspondiente, o al Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco. Tal requisito de colegiación sólo es exigible si existe el colegio profesional correspondiente, que deberá facilitar,

¹⁰ Boletín Oficial del Estado de 17 de diciembre de 2003.

¹¹ Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2003.



con finalidades informativas y estadísticas, al Registro una lista de sus miembros colegiados. En todo caso, todos los profesionales deben estar inscritos en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.

El Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, que será público, quedará adscrito a la Escuela Vasca del Deporte, y a través del mismo, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, se ofrecerá, como mínimo, la siguiente información de forma clara y gratuita: nombre y apellidos de los profesionales inscritos y referencia de sus titulaciones, certificados o documentos análogos acreditativos de su cualificación profesional. Reglamentariamente habrán de fijarse la estructura, las funciones y el régimen de publicidad y funcionamiento del Registro.

p) Protección de la salud y seguridad de consumidores y usuarios.

A lo largo de la presente memoria se ha insistido sobre la incidencia que tiene el ejercicio de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de los practicantes y en los derechos de consumidores y usuarios. En consonancia con este discurso, el artículo 18 establece que el Gobierno Vasco garantizará, en el ejercicio de sus competencias, la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios estableciendo los oportunos sistemas de información autorización, declaración responsable, comunicación, evaluación o acreditación con relación a la exigencia de cualificaciones para el ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en esta Ley.

Como quiera que el mercado relacionado con el acondicionamiento físico de las personas está salpicado de mensajes que carecen de objetividad o de base científica, la Ley establece que el Gobierno Vasco, sin perjuicio de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales sobre sus miembros, velará por que la publicidad de las personas y entidades que presten servicios en el ámbito de las profesiones reguladas en esta Ley sea objetiva, prudente y veraz y no fomente prácticas deportivas atentatorias a la salud y seguridad de los deportistas, respete rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones, de modo que no levante falsas esperanzas. Por esta razón, no podrán ser objeto de publicidad por los profesionales objeto de regulación en esta Ley aquellas actividades deportivas sobre los que no



exista evidencia de sus efectos beneficiosos para la salud, quedando prohibida la publicidad de aquellos servicios o productos-milagro.

Asimismo, con el fin de garantizar la cualificación de los profesionales que se encuentran dentro del ámbito de esta Ley, todos los contratos de prestación de servicios con dichos profesionales se formalizarán por escrito y recogerán con claridad la acreditación de la cualificación de dichos profesionales.

H.- DISPOSICIONES ADICIONALES.

De acuerdo con lo previsto en el campo de la técnica parlamentaria, las disposiciones adicionales sirven para incluir regímenes diferentes de los regulados con carácter general en el texto articulado y que no pueden ubicarse en otros apartados de la Ley.

La Disposición Adicional Primera contiene un mandato expreso al Gobierno Vasco para que promueva mecanismos de colaboración con otras administraciones públicas, con la organización colegial profesional, con las federaciones deportivas vascas y con otras entidades para que en el ejercicio de las profesiones del deporte se fomenten prácticas deportivas saludables.

La Disposición Adicional Segunda incluye una medida análoga a la anterior, pero en el campo de las políticas de igualdad en las profesiones del deporte. El Gobierno Vasco, en colaboración con otras administraciones públicas, con el colegio profesional, con las federaciones deportivas y con otras entidades análogas, promoverá la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en la Ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales.

En la Disposición Adicional Tercera se completan las referencias al régimen de las actividades relacionadas en régimen no profesional o de voluntariado deportivo. Recuérdese que en el artículo primero de la Ley se establece el ámbito de aplicación de la Ley y se prescribe que la Ley sólo regula el ejercicio profesional y quedan excluidas de su ámbito de aplicación las actividades en régimen de voluntariado y



análogas. Por ello, y sin perjuicio de que la Ley sólo regula el acceso y ejercicio profesional y de que quedan excluidas de su ámbito de aplicación las actividades en régimen de voluntariado y análogas, el Anteproyecto establece que las Administraciones Públicas y demás entidades públicas o privadas competentes deberán establecer reglamentariamente los requisitos de cualificación del voluntariado para la participación en sus actividades deportivas. Tales requisitos serán idénticos a los establecidos para los profesionales en la presente ley al objeto de garantizar la salud y seguridad de las personas participantes. Este bien jurídico a proteger no puede quedar amenazado por la calificación jurídica que merezca la prestación de servicios a los ciudadanos. Resulta tan acreedor a una protección de su salud y de su seguridad el deportista menor de edad que recibe los servicios de un profesional mediante remuneración que el deportista menor de edad que es dirigido, asesorado o entrenado por un voluntario.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25.1 y 62 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, las federaciones deportivas vascas deberán establecer reglamentariamente los requisitos mínimos de cualificación para desarrollar la actividad de entrenador o entrenadora en sus competiciones.

No obstante lo anterior, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, previa solicitud razonada, podrá dispensar, excepcionalmente y de forma provisional, a colectivos específicos de voluntarios de la exigencia de cualificación prevista en la Ley y exigir una cualificación diferente.

Las cualificaciones exigibles al voluntariado serán aprobadas, como máximo, a partir de dos años del plazo establecido en la disposición final sexta, apartado uno, de la presente ley.

Según la Disposición Adicional Cuarta la acreditación de las competencias sólo se puede realizar, en principio, mediante los títulos académicos y certificados determinados en la Ley. Además, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva determinará los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por vías diferentes a las previstas, como regla



general, en el Anteproyecto. Es decir, el texto recoge otras formas de acreditar la cualificación profesional de las personas.

La Disposición Adicional Quinta responde a una lógica que no admite una gran discusión. La Ley que regula las profesiones del deporte sólo puede establecer, como sucede con los demás profesionales, un ámbito funcional general a lo largo del articulado, pero no una relación exhaustiva de funciones. Sin embargo, en la medida que en ocasiones se han suscitado dudas por parte de algunos colectivos profesionales ahora regulados sobre sus funciones, se ha añadido una disposición que establece que, dentro de las atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la Ley, y que tienen por objeto establecer de modo enunciativo un ámbito funcional general de cada profesión, deben considerarse comprendidas las funciones de emisión de dictámenes, estudios, informes, peritajes y actividades análogas si las titulaciones de acceso a dichas profesiones incluyen dichas competencias o si se acredita que tal competencia ha sido adquirida por otras vías.

La competencia profesional en primeros auxilios se configura en la Disposición Adicional Sexta como requisito para ejercer algunas de las profesiones. Con arreglo a dicha disposición, todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en esta Ley con presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas deberán acreditar la posesión de la unidad de competencia UC0272_2 del Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales en materia de primeros auxilios. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva establecerá reglamentariamente las condiciones y el procedimiento de acreditación de la competencia referida.

La formación específica exigida a lo largo del texto articulado deberá acreditarse, en principio, de conformidad con la Disposición Adicional Séptima, mediante títulos o certificaciones de carácter oficial, incluidos el título de master universitario o el certificado de profesionalidad. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá especificar en determinados supuestos el nivel de formación específica. Sólo en los casos de inexistencia o insuficiencia de ofertas formativas oficiales podrá el departamento citado promover y/o reconocer formaciones, títulos o certificaciones no oficiales que cumplan unos requisitos mínimos de calidad.



En la medida que el Anteproyecto se refiere constantemente, al objeto de acreditar la posesión de competencias profesionales, a los títulos o certificados oficiales, la Disposición Adicional Octava de la Ley concreta tales conceptos y establece que, a los efectos de la Ley, se considerarán títulos o certificaciones oficiales las expedidas por la Administración Educativa en el marco de las enseñanzas reguladas en la legislación educativa, las expedidas por la Administración Laboral en el ámbito de la legislación sobre cualificaciones profesionales y las expedidas por la Administración Deportiva en el marco de la legislación deportiva.

En la medida que la exigencia de cualificaciones a los profesionales del deporte se ha hecho depender del nivel deportivo de las actividades donde se prestan los servicios profesionales, la Disposición Adicional Novena trata de realizar una aproximación a esos diferentes niveles, de modo que se considerarán actividades de iniciación deportiva o de nivel básico a aquellas actividades en la que los deportistas se encuentran en las primeras fases de aprendizaje de las correspondientes actividades, independientemente de su edad. En esta tipología se incluyen, entre otras, las actividades de deporte escolar que se encuentren en el itinerario de participación. Asimismo, se considerarán actividades de nivel medio a aquellas actividades en la que los deportistas se encuentran en la etapa de tecnificación deportiva, de mejora técnica, en una fase en la que ya poseen un dominio de la actividad correspondiente, independientemente de su edad. En esta tipología se incluyen, entre otras, las actividades de deporte escolar que se encuentren en el itinerario de rendimiento y de identificación de talentos, así como todas las competiciones de deporte federado, a excepción de las de alto nivel. Por último, se considerarán competiciones deportivas de alto nivel aquellas competiciones de ámbito internacional incluidas en los calendarios deportivos oficiales que estén autorizadas, supervisadas o arbitradas por la federación deportiva internacional competente o la liga profesional internacional que corresponda, así como aquellas competiciones de ámbito estatal de la máxima categoría, tengan carácter profesional o no.

Tales conceptos, dado el carácter dinámico y evolutivo de la plural y heterogénea realidad deportiva, demandan un instrumento ágil y flexible que pueda adaptarlos en



cada momento a las diferentes necesidades que surjan. Por ello, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá adaptar estas definiciones mediante Orden.

Una de las mayores preocupaciones que ha suscitado en el movimiento deportivo el anuncio de la regulación de las profesiones del deporte es la formación exigible a las personas que participan en las actividades de deporte escolar, dada la inexistencia de un título académico oficial o un certificado de profesionalidad específico para los monitores de actividades polideportivas con deportistas en edad escolar. Por ello, en el supuesto de inexistencia o insuficiencia de títulos oficiales o certificaciones de profesionalidad de carácter específico para los monitores en actividades polideportivas con deportistas en edad escolar, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia deportiva y en materia de cualificaciones promoverán de mutuo acuerdo acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen sus funciones con deportistas en edad escolar. El Anteproyecto también establece que las actividades formativas deberán permitir la oferta modular y los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia deportiva y en materia de cualificaciones podrán establecer que la superación de ciertos módulos dé lugar a la obtención de certificaciones. Por último, el Anteproyecto añade que tales personas deberán desarrollar sus actividades bajo la programación, dirección, supervisión o asistencia de los profesionales con las cualificaciones previstas en la Ley.

En la medida que existen en el País Vasco modalidades deportivas no reconocidas por el Estado, la Disposición Adicional Undécima establece que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva promoverá y certificará oficialmente acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen su actividad profesional en modalidades y disciplinas deportivas no reconocidas por el Estado.

El Anteproyecto también aborda la realidad de las modalidades deportivas sin plan formativo aprobado por el Estado. A tal efecto, la Disposición Adicional Duodécima establece que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva promoverá y certificará oficialmente acciones formativas específicas para aquellas



personas que desarrollen su actividad profesional en modalidades y especialidades deportivas y niveles formativos sin plan formativo aprobado por el Estado.

De acuerdo con la naturaleza propia de las disposiciones adicionales, la Disposición Adicional Decimotercera, establece las cualificaciones profesionales previstas en la Ley para el acceso y ejercicio profesional no serán exigibles para los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje o de la formación dual. No obstante lo anterior, los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje deberán inscribirse en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.

I.- DERECHO TRANSITORIO.

Todo cambio legislativo o toda Ley que disciplina por primera vez un sector plantea delicados problemas de transición de la anterior situación normativa a un nuevo escenario legal. Este es un problema que, descuidado frecuentemente, se ha tratado de resolver en el texto articulado a través de las disposiciones transitorias. Con el Derecho transitorio contenido en el borrador del Anteproyecto de Ley se han pretendido evitar los denominados conflictos intertemporales.

Precisamente, el Derecho transitorio juega un papel trascendental en la conversión de profesiones sin regulación legal a profesiones reguladas. Dicha conversión plantea numerosos problemas y uno de ellos es la situación en que quedan los profesionales que, sin poseer un determinado título o cualificación profesional, venían realizando la actividad profesional que ahora es objeto de regulación.

Este problema enunciado se ha resuelto del siguiente modo: los profesionales que acrediten su condición antes de la regulación se les habilita para continuar ejerciendo la profesión. Así, lo establecido en el Anteproyecto de Ley trata de no perjudicar la situación y derechos de quienes, a la entrada en vigor de la misma, acrediten de forma fehaciente y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, que



desarrollaban las actividades profesionales reguladas en la Ley, de forma esporádica o continuada.

Algunas disposiciones suelen optar por una solución más traumática consistente en la habilitación de un periodo transitorio para que los profesionales sin titulación puedan conseguir la titulación exigible con el nuevo marco legal. Si embargo, la Ley ha tratado de respetar a aquellos profesionales que han venido desarrollando su actividad en el sector y por ello, previa acreditación de la experiencia, se les garantiza la posibilidad de continuar con su actividad, aunque la habilitación sólo se ciñe a la tarea que el profesional desarrollaba antes de la entrada en vigor de la Ley.

Esta disposición transitoria contiene una garantía importante. En esta disposición se establece que, sin perjuicio de la habilitación establecida en el apartado primero, la Administración podrá impedir el ejercicio profesional de una persona sin la cualificación requerida cuando, en atención a las características de la actividad desarrollada, dicho ejercicio profesional ponga en grave riesgo la salud y seguridad de las personas. No resultaría concebible que una Ley fundada jurídicamente en la necesidad de preservar la salud y la seguridad de las personas, no establezca mecanismos de garantía de esta naturaleza. El Departamento del Gobierno competente en materia de deporte elaborará una relación de las actividades profesionales que se encuentren en tal situación.

Asimismo, en la medida de que están en juego la salud y la seguridad, el Anteproyecto opta por dotar a esta solución de algunas garantías. Así, en el supuesto de que exista la posibilidad, al amparo de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, que tengan como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, quienes han ejercido las profesiones con anterioridad a la Ley deberán obtener tal acreditación en el plazo reglamentario que fije la Ley. Téngase en cuenta que ese sistema de evaluación y acreditación se desarrolla siguiendo criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.



En tanto la correspondiente federación deportiva permita desarrollar las funciones de entrenador en competiciones de carácter estatal o internacional sin la cualificación requerida en la ley, se habilitará provisionalmente a aquellas personas que estén en posesión de la máxima titulación exigida por la correspondiente federación española o internacional.

El incumplimiento del deber de acreditar la formación en el plazo que se fije reglamentariamente podrá ser considerado causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52, apartado a, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Con esta misma filosofía, el Anteproyecto de Ley contempla una Disposición Transitoria Segunda referida fundamentalmente a las profesiones de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y Entrenador o Entrenadora. Dicha disposición se refiere a la aplicación progresiva de la Ley para tales profesiones. Los requisitos de titulación establecidos en la Ley para la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y de Entrenador o Entrenadora de una modalidad o especialidad deportiva serán exigibles a medida que vayan implantándose las titulaciones de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior en las correspondientes modalidades deportivas. Esta previsión es absolutamente necesaria. Repárese en que una buena parte de las enseñanzas o formaciones deportivas son las propias del periodo transitorio y se refiere a aquellos títulos que todavía no han sido ofertados.

Por dicha razón, dentro de este contexto de aplicación gradual, en todos aquellos ámbitos materiales propios del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva y del Entrenador o Entrenadora en los que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva verifique la falta de profesionales titulados para atender la demanda existente, o la existencia de nuevos ámbitos deportivos, se habilitará a aquellas personas que acrediten la posesión de competencias profesionales o la



formación adecuada para el desempeño de las funciones propias de tales monitores y entrenadores.

Se añade una Disposición Transitoria Tercera. Con arreglo a la misma la prohibición de ejercicio de la profesión sin la colegiación prevista en el artículo 8.1 sólo será exigible a partir del momento en que la correspondiente profesión disponga de su organización colegial. Repárese en que actualmente sólo existe en el País Vasco el Colegio Oficial de Licenciados y Licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es decir, se trata de una organización colegial que aglutina a las personas que ostentan una titulación académica concreta, no a todas las profesiones reguladas en el Anteproyecto.

La Disposición Transitoria Cuarta tiene como objetivo resolver el problema del incumplimiento del deber de obtener una cualificación en primeros auxilios. Los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta Ley, no cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente Ley podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el 31 de diciembre de 2017 en los términos previstos en las disposiciones transitorias. El incumplimiento del deber de obtener tal formación en el citado plazo podrá ser considerado causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52, apartado a, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

En la Disposición Transitoria Quinta se establece que las habilitaciones provisionales que se establezcan reglamentariamente para los profesionales según lo dispuesto en las disposiciones transitoria primera y segunda serán también de aplicación al voluntariado. Resulta lógico que esa aplicación progresiva de la Ley también se extienda a quienes prestan servicios dentro del ámbito del voluntariado.

J.- DISPOSICIONES FINALES.



Por lo que respecta a las disposiciones finales debe apuntarse que se ha respetado el criterio establecido en las directrices de técnica legislativa comúnmente aceptadas.

En primer lugar, las disposiciones finales primera y segunda incorporan modificaciones de los artículos 127 y 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. En la primera se añade la letra k) al artículo 127, sobre infracciones administrativas muy graves, con el siguiente texto: «*k) La prestación de servicios profesionales sin la posesión de la cualificación profesional exigida en la legislación reguladora de las profesiones del deporte*». En la segunda, se añade la letra h) al artículo 128 de la Ley 14/1998, sobre infracciones administrativas graves, con el siguiente texto: «*h) El incumplimiento de la obligación, en su caso, de colegiación o, en su caso, de inscripción en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, así como el incumplimiento de la obligación de disponer del seguro de responsabilidad civil establecido en la legislación deportiva o del ejercicio de las profesiones del deporte*»

En la Disposición Final Tercera se incorpora una habilitación general al Gobierno Vasco para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueda dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley. Como bien señala la Comisión Jurídica Asesora (Dictamen 231/2011), el titular de la potestad reglamentaria para desarrollar la Ley del acceso y ejercicio de las profesiones del deporte es el Gobierno Vasco, aunque excepcionalmente se puede encomendar aquella “*al titular del departamento competente en materia de deportes*”. De conformidad con el artículo 152.1 CE, 29 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y 16 de la Ley de Gobierno, es el Gobierno Vasco quien, en primera instancia, ostenta la potestad reglamentaria genérica “*aunque en supuestos en los que sea necesaria una gran flexibilidad se ha admitido la competencia de los Consejeros para dictar un reglamento ejecutivo de ley, siempre que la ley les habilite para dictar las disposiciones reglamentarias concretas*”.

A esta disposición final le sucede otra disposición final con una habilitación específica al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva para la definición de conceptos empleados en la Ley. Corresponde al Gobierno Vasco definir



los diferentes conceptos empleados en la Ley y para delimitar las atribuciones y ámbitos materiales de las correspondientes profesiones. Resulta imposible pretender que una Ley delimite de forma pormenorizada todo el ámbito de funciones de cada profesión. Tal y como se ha señalado en otro de los apartados de esta memoria, la habilitación no infringe el principio de reserva legal. Esta fórmula de colaboración entre la Ley y el reglamento es imprescindible en materia de regulación de las profesiones.

En la Disposición Final Quinta se contiene una habilitación expresa al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva para establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos y el procedimiento de reconocimiento de la formación complementaria y experiencia a la que se refiere la Ley.

Por último, se aborda en la Disposición Final Sexta el tema de la vigencia de la norma. El criterio seguido es el habitual en las Leyes aprobadas por el Parlamento Vasco, es decir, la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el “*Boletín Oficial del País Vasco*”. No existen razones especiales para que la Ley deba disponer de un plazo especial de vigencia. En el Anteproyecto no se hace coincidir la fecha de vigencia de la Ley con la fecha de exigibilidad de las cualificaciones, que se pospone a un periodo posterior. Esta exigibilidad se difiere al 1 de enero de 2018.

K.- INCIDENCIA DEL TEXTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.

Con arreglo a las directrices de técnica normativa, toda propuesta de disposición general debe ir acompañada de una lista de las disposiciones afectadas por la nueva propuesta y la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, en la cual han de consignarse de forma expresa las que han de quedar total o parcialmente derogadas.

En la medida que el presente Anteproyecto de Ley regula por primera vez las profesiones del deporte en el País Vasco, la afectación del ordenamiento jurídico vigente será, en todo caso, mínima. Tan sólo son objeto de modificación dos preceptos de la Ley 14/1998 en materia sancionadora.



Tal y como se ha indicado anteriormente la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, ya establecía que para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. La Ley del Deporte no concretó las cualificaciones requeridas para esas actividades profesionales y, por tanto, el País Vasco se ve precisado de una normativa que regule la exigencia de cualificaciones profesionales.

L.- CONSIDERACIONES DE TÉCNICA NORMATIVA.

Tal y como se ha indicado al comienzo de esta memoria se han observado en la redacción del Anteproyecto de Ley las directrices de técnica normativa aprobadas mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, de 23 de marzo de 1993, y publicadas por la Orden del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico del Gobierno Vasco, de 6 de abril de 1993. Con la aplicación de estas directrices se pretende alcanzar una calidad formal en la Ley pues ello redundará en una mayor seguridad jurídica y en una mejor comprensión de la misma.

Según una de las recomendaciones de técnica normativa comúnmente aceptadas, en las disposiciones de gran complejidad y amplitud suele ser conveniente insertar un índice antes de la parte expositiva. Como el presente Anteproyecto de Ley tiene una extensión reducida –18 artículos- no se ha considerado precisa la inserción de un índice.

No se ha dividido el texto articulado en secciones, capítulos, títulos o libros por cuanto el número reducido de artículos del borrador del Anteproyecto de Ley no obliga a ello de acuerdo con dichas directrices de técnica normativa comúnmente aceptadas. Los textos legales con un número reducido de artículos no deben agrupar éstos.



M.- VIABILIDAD DEL TEXTO PROPUESTO. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE NECESIDAD, PROPORCIONALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, SIMPLICIDAD Y EFICACIA.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, contiene disposiciones básicas sobre la mejora de la calidad de la regulación, recogiendo los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas. Según su artículo 4, en el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones Públicas debe actuar de acuerdo con una serie principios (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, etcétera). En tal disposición se establece que en toda iniciativa normativa quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios.

En esta iniciativa normativa por parte del Gobierno Vasco queda suficientemente acreditado el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, simplicidad y eficacia.

El actual sistema deportivo vasco, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos documentos a lo largo de los últimos años, viene padeciendo la vieja problemática del ejercicio de actividades profesionales directamente vinculadas a la salud y a la seguridad de los deportistas sin control alguno y por personas carentes de una mínima formación. Y de ello ya se hizo eco el Parlamento Vasco en 1998 con ocasión del debate y aprobación de la vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, y en momentos posteriores. Desde esta perspectiva, la iniciativa normativa cumple el **principio de necesidad** en la medida que concurre una clara razón de interés general; la Ley responde a la innegable incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de los deportistas, incidencia que conduce inexorablemente a una regulación de su ejercicio, máxime en un ámbito en el que la realización de las actividades profesionales ha venido siendo asumida por personas carentes de una adecuada formación y sobre colectivos especialmente sensibles, como es el caso de los niños y niñas o jóvenes en edad escolar, y más acreedores a una adecuada protección.



El propio Plan Vasco del Deporte 2003-2007 ya denunció que existe una percepción general de que la falta de regulación profesional ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de dicho Plan era regular las exigencias mínimas de cualificaciones para actividades profesionales, teniendo en cuenta, según reconocía el propio Plan, la incidencia de la práctica deportiva en la salud y seguridad de los practicantes.

Es innegable que la práctica deportiva de los ciudadanos de Euskadi conlleva por lo general, importantes beneficios para su salud y su bienestar personal si se realiza en condiciones aceptables, pero también puede constituir una importante amenaza si se ejecuta bajo la dirección o supervisión de personas sin la formación necesaria.

Con relación a la necesidad de la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte cabe resaltar en esta memoria que el Tribunal Constitucional ya afirmó en su Sentencia 194/1998, de 1 de octubre, que *“la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte (artículo 43.3 de la CE) y que tales actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo 43.3 CE, de suerte que no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas”*.

En este contexto, el texto articulado tiene por objeto regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.



El objetivo de la ley, respetando el **principio de proporcionalidad**, no es regular todas las profesiones relacionadas con el deporte sino, tan sólo, determinadas profesiones del deporte. Por ello, han quedado libres de regulación otras profesiones del deporte: jueces o juezas profesionales, deportistas profesionales, agentes de deportistas, etcétera. En estas profesiones excluidas de la regulación la prestación de servicios a terceros no incide directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia como son la salud y la seguridad de los terceros destinatarios de aquellos servicios profesionales.

La iniciativa normativa que se va a llevar a cabo también es congruente con el principio de proporcionalidad desde otra perspectiva; el texto articulado ha optado por las medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.

A fin de garantizar el **principio de seguridad jurídica**, la iniciativa normativa trata de preservar tal principio contemplando el resto del ordenamiento jurídico, otras regulaciones sectoriales, creando un entorno de certidumbre jurídica. Especialmente, en la elaboración de la ley se han tenido en cuenta importantes proyectos normativos, estatales y autonómicos, que se están tramitando en la actualidad.

La iniciativa también responde al **principio de simplicidad**, pues el objetivo de la Ley es conseguir un marco normativo en Euskadi que resulte sencillo y claro para todos los destinatarios de la ley, de modo que facilite el conocimiento y comprensión del mismo.

Asimismo, esta iniciativa normativa atiende al **principio de eficacia** pues se encuentran muy identificados los fines perseguidos y las medidas previstas para alcanzar los mismos de la forma más eficaz.

Respecto a la viabilidad de la ley desde la perspectiva de su aceptación social, debe resaltarse que en los diferentes agentes sociales existe unanimidad en la necesidad y oportunidad de la Ley, especialmente significativa en los grupos parlamentarios que representan la voluntad de la ciudadanía. Como testimonios reveladores de la necesidad y oportunidad de la Ley debe reseñarse que en el seno del Parlamento



Vasco, en diversas ocasiones, se ha instado al Gobierno Vasco a la elaboración de la Ley del ejercicio de las profesiones en el deporte. Concretamente, el Parlamento Vasco en sesión plenaria de 9 de febrero de 2012 instó al Gobierno Vasco a elaborar *“un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte”*. Y posteriormente se han producido diversas iniciativas parlamentarias instando al Gobierno Vasco en el mismo sentido. Y no menos revelador es que en los programas electorales de los partidos que aspiraban a obtener una representación en la actual legislatura del Parlamento Vasco existió una casi unanimidad en la necesidad de aprobar una ley que regulase el ejercicio de las profesiones del Deporte. Resulta extraordinariamente llamativo que los partidos políticos que cuentan 74 parlamentarios, de los 75 que cuenta la cámara, formularon en sus programas electorales su compromiso de regular legalmente el ejercicio de las profesiones del deporte. El Partido Nacionalista Vasco (27 parlamentarios) proponía en su programa *“desarrollar la Ley de regulaciones de las profesiones del ámbito del deporte”*. EH Bildu (21 parlamentarios) propuso *“regular el ejercicio de las profesiones del deporte, incluida las titulaciones deportivas, al objeto de proteger la salud y la seguridad de las y los deportistas y garantizar la calidad del deporte vasco”*. Asimismo, el Partido Socialista de Euskadi (16 parlamentarios) propuso *“reglar el ejercicio de las profesiones relacionadas con el deporte y la actividad física”*. Por último, el Partido Popular Vasco decía en su programa: *“Se elaborará el Proyecto de Ley para regular las distintas profesiones del deporte en colaboración con los agentes implicados de tal forma que se determinen las profesiones del deporte, las competencias, la formación y capacitación de los profesionales y lo referente al mercado laboral de las mismas”*.

No puede ocultarse en esta memoria que la viabilidad final de la Ley sólo estarán garantizadas si se asume el reto de desarrollar adecuadamente la misma y dotando los necesarios recursos humanos y materiales. El único precedente legislativo existente en el Estado español es la Ley 3/2008, de 23 de abril, de Ejercicio de las Profesiones del Deporte de Cataluña, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Después de su implantación, el balance de los agentes sociales ha sido satisfactorio pues se ha conseguido educar al sector profesional exigiendo formación y cualificación; se ha ordenado el sector; se han inscrito más de 15.000 profesionales en el registro administrativo de profesionales del deporte, que es



una de las garantías previstas a favor de los consumidores y usuarios; se han multiplicado las colegiaciones de los profesionales, con lo que ello implica de previa acreditación de la cualificación y del aseguramiento obligatorio de riesgos, etcétera.

La propuesta normativa contenida en el Anteproyecto pretender ser realista pues parte de una realidad existente en el País Vasco y ha tomado como base la propia problemática planteada a lo largo de los años por los distintos agentes sociales relacionados con el deporte. El texto propuesto es, en consecuencia, una respuesta a la reivindicación que han puesto de manifiesto distintos sectores e instituciones (parlamentos autonómicos, colegios profesionales, centros docentes, doctrina científica, etcétera).

Por supuesto, es probable que algunas de las normas contenidas en el Anteproyecto de Ley quizás no sean bien acogidas por alguno de los colectivos de destinatarios, pero ello es inevitable por cuanto la Ley delimita algunos ámbitos profesionales, inicialmente libres, que ahora son condicionados a la posesión de determinadas cualificaciones. Todo texto normativo que transforma un mercado profesional parcialmente libre en un mercado profesional regulado, que somete la prestación de servicios profesionales al requisito de poseer unas mínimas cualificaciones, puede conllevar cierta resistencia. En todo sistema legal en el que se pasa de un escenario de ejercicio profesional libre, sin garantías de ningún tipo, a un escenario en el que se exigen unas cualificaciones acordes a las funciones desarrolladas existe un coste económico que debe asumirse. Es el precio necesario que debe asumirse si se desea llevar a cabo una ordenación del ejercicio de profesiones estrechamente vinculadas a la salud y a la seguridad.

Desde el punto de vista de su viabilidad, el Anteproyecto realiza un esfuerzo para dotar al sistema deportivo vasco de aquellas medidas necesarias para otorgar una razonable protección a los deportistas destinatarios de los servicios que prestan los que ejercen las profesiones del deporte objeto de regulación. Y en este sentido la Ley:

- a) Evita la infracualificación al vincular las profesiones del deporte a la posesión de unas adecuadas cualificaciones profesionales.



- b) Impide que determinados profesionales realicen funciones propias de otra profesión para la que no están autorizados.
- c) Articula un conjunto de obligaciones y principios específicos de estos profesionales.
- d) Establece obligaciones de aseguramiento de la responsabilidad civil.
- e) Posibilita que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco requieran, en los equipamientos deportivos y la prestación de servicios, las cualificaciones profesionales adecuadas.
- f) Crea un registro administrativo donde se contiene información de los profesionales inscritos, especialmente sobre sus cualificaciones, para la mejor defensa de los consumidores y usuarios.

N.- IMPACTO DE GÉNERO.

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

Asimismo, la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.

En el ámbito de la Unión Europea, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y la eliminación de las desigualdades constituye una de las prioridades a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea. En su seno, se han aprobado estrategias a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres, destacando la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos de intervención (vida económica, social, vida civil, roles, etc.), como una de las acciones a emprender para el logro de los objetivos mencionados en el referido programa.



Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea ante la constatación de que decisiones políticas que, en principio, parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara, aprobó una comunicación sobre la transversalidad “*mainstreaming*” como un primer paso hacia la realización del compromiso de la Unión Europea de integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas comunitarias y elaboró una “*Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género*” diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionadas que favorezcan situaciones de discriminación y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias.

Con arreglo a este marco internacional, el artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de Euzkadi, a través de una remisión a lo dispuesto en la Constitución Española, proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 9.2.d establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad de las personas y los grupos en que se integre sea real y efectiva.

Con este marco normativo, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Dicha Ley establece el deber de todos los poderes públicos de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de hombres y mujeres. Como concreción de este principio general de actuación, el artículo 18 de la Ley establece que los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de igualdad de mujeres y hombres en la elaboración de las normas. Asimismo, el artículo 19 dispone que, antes de acometer la elaboración de una norma, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto ambiental de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad.



La disposición final de dicha Ley modificó el artículo 57.1 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, en el siguiente sentido:

“Los proyectos de Ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, así como una evaluación previa del impacto de genero y de las medidas correctoras correspondientes. Asimismo, habrá de hacerse constar si dicho proyecto supone o no gravamen presupuestario”

Por otra parte, con fecha de 23 de marzo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Su artículo 19 dispone que los proyectos de disposiciones de carácter general que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deben incorporar también un informe sobre su impacto por razón de género.

Con este marco legal, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 13 de marzo de 2007, aprobó unas directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación d medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

La evaluación del impacto de género tiene como objetivo evitar consecuencias negativas no intencionadas que favorezcan situaciones de discriminación y también tiene como objetivo mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias en tal ámbito. Tal evaluación consiste en verificar si la propuesta normativa puede afectar de manera diferente a las mujeres y a los hombres sobre la base de las diferencias sociales entre ambos.

Pues bien, sin perjuicio de que la memoria del Proyecto deba ir acompañada de dicho estudio detallado sobre el impacto de género, procede señalar que la situación de la mujer en el mundo de las profesiones del deporte está lejos de alcanzar los niveles cuantitativos de los hombres. Aunque no se dispone en estos momentos de un estudio exhaustivo sobre la situación de hombres y mujeres con relación al ejercicio de las



profesiones propias del deporte en el País Vasco, es público y notorio que existen circunstancias, como la abrumadora *“mayoría de entrenadores hombres en las distintas modalidades deportivas”*¹², que han sido tenidas en consideración en el Anteproyecto de Ley. Los hombres suelen incorporarse laboralmente al ámbito profesional de los monitores, entrenadores o directores deportivos de la mayor parte de modalidades deportivas con mucha más facilidad y las mujeres tienen menos oportunidades.

Existen en el seno de la Dirección de Juventud y Deportes algunos datos reveladores de la integración de la mujer en el ejercicio de las profesiones del deporte. Según los datos proporcionados por la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, en 2007 recibieron ayuda de la Fundación 2 técnicas deportivas (10%) y 18 técnicos deportivos (90%). Y en el ejercicio 2008 recibieron 3 técnicas deportivas (8,7 %) y 26 técnicos deportivos (91,3%). Es decir, como reconoce la citada Dirección de Deportes, en el estudio sobre impacto de género, antes citado, existe una *“alarmante infrarrepresentación de las mujeres entre el personal técnico”*. De esta situación también se hace eco Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en su informe de 3 de julio de 2009, con relación al proyecto de Decreto sobre Deporte de Alto Nivel, al sugerir que *“la adopción de medidas específicas dirigidas a la incorporación de las mujeres en el ámbito del entrenamiento, la gestión y el arbitraje deportivo”*.

Las normas que se contienen en el Anteproyecto de Ley no conllevan impacto significativo por razón de género. Si se examina el contenido del Anteproyecto de Ley no cabe concluir que favorezca situaciones discriminatorias o que pueda afectar de modo diferente a hombres y mujeres por las diferencias sociales.

El texto propuesto contempla específicamente disposiciones que afectan a la igualdad en línea con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva:

¹² Informe sobre la evaluación del impacto de género en relación al Decreto sobre Deporte de Alto Nivel del País Vasco, emitido con fecha de 6 de abril de 2009 por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.



“El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado”.

Respecto a la denominación de las profesiones no se ha optado por seguir el criterio adoptado por el Parlamento en otras Leyes análogas recientes: en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, o en la reciente Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. De este modo, las denominaciones de las profesiones aparecen en la Ley en masculino y en femenino siguiendo las recomendaciones contenidas en las publicaciones editadas por el Instituto de la Mujer, que se han tenido muy en consideración para la elaboración del Anteproyecto, se señalan *“las dificultades del masculino para englobar el femenino”* y que debe evitarse, por tanto, usar el masculino *“en sentido genérico”*. Aunque las instituciones que aprueban normas sobre profesiones emplean el masculino genérico, se ha tratado de recoger simultáneamente los nombres de las profesiones en masculino y en femenino pues la Ley desea asegurar, tal y como se aconseja en dichos textos del Instituto de la Mujer, *“la visibilidad de las mujeres”* en el ejercicio de las profesiones del deporte.



Por otra parte, la Disposición Adicional Segunda del Anteproyecto establece que el Gobierno Vasco, en colaboración con el colegio que aglutinará a los profesionales objeto de regulación, promoverá la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta Ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales.

Por último, el artículo 9.1.k del Anteproyecto establece el deber de los profesionales de promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de la mujer en el deporte y su incorporación a la práctica deportiva a todos los niveles, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza.

O.- IMPACTO ECONÓMICO.

Sin perjuicio del estudio exhaustivo que deba realizarse sobre el impacto económico que genere la aprobación de la Ley, parece razonable señalar en esta memoria que la propuesta normativa debe suponer necesariamente incremento significativo de gasto público.

Aunque la Ley se limita a regular el ejercicio de profesiones del deporte, es decir, se limita a reconocer unas profesiones, exigir unas cualificaciones para el ejercicio de las mismas y describir una serie de atribuciones genéricas, y a pesar de que no tiene como objetivo la creación expresa de nuevas entidades u organismos, la Ley va a tener un inevitable impacto en el presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma, pues los objetivos de la Ley van a precisar inevitablemente un desarrollo normativo, la implantación de procesos administrativos de habilitación provisional de los profesionales que, sin la debida cualificación, vienen ejerciendo las profesiones a la entrada en vigor de la misma, así como la articulación de un registro de profesionales del deporte en garantía de los consumidores y usuarios.



Al mismo tiempo, el sector económico del deporte al que va destinado la Ley va a precisar de profesionales más cualificados y ello, indudablemente, requerirá acciones formativas, acreditación de competencias, etcétera.

Jon Redondo Lertxundi
Director de Juventud y Deportes



Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektuari dagokion memoria osagarria

AURKIBIDEA

A.- Sarrera.....

B.- Eskumen-kontuak.....

C.- Arau-erreferentziak. Europako Erkidegoko zuzenbidea.....

D.- Xedapenaren maila. Lege-erreserbaren edukia.....

E.- Proiektuaren aplikazio-eremua.....

a) Sarrera.....

b) Lanbideak.....

c) Kirola.....

d) Sektore publikoa eta pribatua.....

e) Jardun profesionala.....
Boluntarioak.....

f) Kanpo utzitako jarduerak.....

F.-Legearen izenburua.....

G.- Proiektuaren helburuak eta proposamenak.....



- a) Aldez aurreko kontsiderazioak.....
- b) Lanbideak arautzeko askatasun-marjina.....
Erregulazioak jarduera ekonomikoan duen eragina.....
- c) Esklusibotasuna eta tituluen konkurrentzia.....
- d) Kualifikazioak eta lanbide-gaitasunak.....
- e) Izenak erabiltzea lanbideak izendatzeko.....
- f) Legean araututako lanbideak.....
- g) Kasu berezietako titulazio-baldintzak.....
Prestakuntza-eskaintzako aldaketa-prozesuetara egokitzea...
- h) Elkargoko kide egitea.....
- i) Lanbidean jarduteko bestelako baldintzak.....
- j) Profesionalen printzipioak eta betebeharrak.....
- k) Lanbide-sozietateak.....
- l) Erantzukizun zibila.....
- m) Intrusismoa.....
Administrazio-, diziplina- eta zigor-
erantzukizunak.....
- n) Arau-esparru erkidea.....
- o) Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko



Erregistroa.....

p) Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna
babestea.....

H.- Xedapen gehigarriak.....

I.- Zuzenbide iragankorra.....

J.- Azken xedapenak.....

K.- Testuak indarreko araudian duen
eragina.....

L.- Araugintza-teknikari dagozkion
kontsiderazioak.....

M- Proposatutako testuaren bideragarritasuna. Premia,
proportzionaltasun, segurtasun juridiko, sinpletasun eta
eraginkortasunaren baldintzak betetzea..

N.- Genero-eragina.....

O.- Eragin ekonomikoa.....

**A.-SARRERA**

Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 57.1 artikulua honela geratu zen idatzita otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenaren bitartez egindako aldaketaren ostean:

“Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako lege-proiektuek honako hauek jasoko dituzte: zioen adierazpen bat eta beharrezko aurrekariak, haiei buruzko iritzia eman ahal izateko; generoaren arabera inpaktuari buruzko alde aurreko ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak, eta proiektuak aurrekonturako kargarik dakarren ala ez. Lege-proiektuek aurrekonturako kargarik badakarte, dagokion finantza-eranskina izango dute.”

Halaber, Gobernu Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an egin zuen bilkurako Akordioaren bidez onartutako araugintza-teknikaren jarraibideak betez – Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomi Garapenerako sailburuak 1993ko apirilaren 6an emandako Aginduaren bidez argitaratu ziren jarraibide horiek–, lege-proiektuetan, “Zioen azalpena” izenez ezagutzen den tituluz emango zaio hasiera azalpen-zatiari. Zati horretan, honako hauek jaso behar dira: legea lantzea bultzatu duten zioak, legearen bidez lortu nahi diren helburuak, legeak oinarri dituen arrazoibide juridikoak, araugintzako printzipio eta ildo orokorrak eta indarrean dagoen araudian izango duen eragina, eta, bereziki, dituen alderik berrienak.

Araugintza-teknikaren jarraibide horiei jarraiki, proiektuarekin batera memoria bat ere aurkeztu behar da; memoria horretan, proiektuaren azterketa zabalagoa egin behar da, lege bidez erantzun nahi den egoera edo arazoa zein den ez ezik, dauden aukera guztiak eta proposatutako aukeren alde egitea gomendatzen duten arrazoiak zeintzuk



diren ere aintzat hartuta, baita proposatutako erregulazioak antolamenduan eta/edo finantza-arloan izango duen eraginaren aurreikuspena ere. Hain justu, eskakizun horri erantzun diogu memoria honetan; besteak beste, honako alderdi hauek justifikatuko ditugu: Legea zergatik den beharrezkoa, eskumen-gaikuntza, zer helburu bete nahi diren, dauden aukeren artean aurreproiektuan zer neurri hautatu diren, eta legea bideragarria ote den.

Helburu orokorra hori izanik, zera adierazi nahi dugu hasteko, memoria honetan, kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko aukera behar bezala arautu nahi bada, ezinbestekoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan abiapuntuko egoera zein den ongi jakitea, hainbat ikuspegitatik begiratuta: juridiko-kompetentziala, prestakuntzarena, lan-arlokoa, kirol-arlokoa, ekonomikoa eta abar. Erregulazioaren lege-aurrekariak zeintzuk diren jakin behar da, zeintzuk diren Europako, Estatuko edo autonomia-erkidegoko arau-erreferentziak, zeintzuk diren etorkizuneko joerak, zeintzuk diren horrelako erregulazio batek benetan izan ditzakeen ondorio edo eraginak eta abar. Eta, noski, memorian behar beste egiaztatuta geratu beharko du kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartzea eta jardutea arautuko duen erregulazioa beharrezkoa dela, Legebiltzarrak onartutako xedapen baten bitartez.

Autonomia Erkidegoko zein Estatuko parlamentuetan, adostasun handia lortu da gaur egun kirol-jarduna garrantzi eta eraginik handieneko gizarte-fenomenoetako bat dela adieraztean. Gure gizartean balioak aldatu izanaren ondorioz kirol-jarduerak garapen ikusgarria izan du. Eta egiazta daiteke, halaber, kirol-arloko legerian ere adostasuna dagoela: kirola egitea lagungarri da herritarren ongizaterako, osasuna hobetzeko eta gazteen prestakuntza integralerako. Horregatik guztiagatik, indarreko legerian onartzen da kirola interes publikoko jardura dela. Interes hori argi eta garbi justifikatuta dago, kirola egiteak pertsonen osasun eta ongizate indibidual eta sozialean eragiten dituen onurak ikusita.

Baina herritarren kirol-jardun hori behar bezala trebatutako langileek bideratzen, gidatzen, planifikatzen, garatzen, kontrolatzen... ez badute jardura hori pertsonen osasun edo segurtasunerako kaltegarria izateko arriskua dago. Horregatik, herritarren gorputz- eta kirol-jardueraren adierazpenei dagokienez, kirol-jarduna osasunaren eta



segurtasunaren zentzuzko koordinatuen barruan garatuko dela zaindu behar dutenek garatutako lanbide-jardueran sartzea eta jardutea arautu egin behar da.

Kualifikazio profesionalen aintzatespenari buruzko irailaren 7ko 2005/36/EE Zuzentarauaren bitartez berretsi da hori guztia. Zuzentarau horren arabera *“zerbitzuak emateari dagokionez, kontsumitzailearen osasun eta segurtasun publikoa eta babesa zorrotz errespetatuko dituen esparruan emango direla bermatu behar da. Hortaz, araututako lanbideei dagokienez, osasunarekin edo segurtasunarekin lotura duten lanbideetarako xedapen espezifikoak aurreikusi behar dira”*.

Kirolarien osasun eta segurtasunarekiko kezka horri erantzutearren, indarrean dagoen Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 62. artikuluan honako hau xedatu zen: *“kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu, sustapen eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute”*.

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dugunez kirol-arloko lanbideak arautzen dituen legerik, titulua eskatze hori, orain arte, eremu zehatz batean soilik bete da; hain zuzen ere, eskolako kirolaren eremuan, baina lanbide-jardunik arautu gabe. Eskolako kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren 25. artikuluan, eskolako kirolaren eremuan eskatu beharreko tituluak finkatu dira:

“1.- Eskolako kirolean zuzendaritza zereginak, programazioa, planifikazioa, koordinazioa, kontrola, gainbegiratzea eta antzekoak burutzeko, beharrezkoa izango da Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentziaren titulua edo dagokion graduaren titulu baliokidea izatea.

2.- Kirol zuzendaritzako zeregin horiek kirol modalitate bakar batean burutzen badira, nahikoa izango da modalitate edo espezialitate horren Goi-mailako Kirol Teknikari titulua edo baliokidea izatea.



3.- *Ikastetxeetan eskola-orduz kanpo programatzen diren eskolako kirolaren zuzendaritza-jarduera horietan baliozkoa izango da, baita ere, gorputz-hezkuntzaren espezializazioan egindako Maisu-Maistra titulua edo baliokidea.*

4.- *Kirolaren Euskal Eskolak, lurralde historikoetako foru organoekin adostuta, prestakuntza-eskaintzak sustatuko ditu eskolako kirolari buruzko programetako entrenamendu, lehiaketa eta bestelako jardueretan parte hartzen duten pertsonen begira.*

5.- *Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen saileko titularrak agindu bidez egokitu ahal izango ditu dekretu honetan jasotako tituluen ezinbestekotasuna, prestakuntza-eskaintza berrien ondorioz onartzen diren titulazio berriak barne hartzeko.*

6.- *Titulazio horiek eskatzeak ez du eraginik kirolaren esparruko lanbideetan lege bidez eskatzen diren titulazio ofizialetan”.*

Alegia, Dekretuan bertan argi geratzen da Dekretuan aipatzen den tituluen eskakizun horrek ez duela esan nahi lanbideen jarduna arautu behar ez denik, zeren –geroago azalduko dugunez– ez baitira nahastu behar, alde batetik, lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko arauketa eta, bestetik, zenbait jarduera egin ahal izateko prestakuntzaren edo tituluren bat eskatzea. Kirol-arloko xedapen orokor batean eska daiteke kirol-arloko justizia-organo bateko kideak Zuzenbidean lizentziadunak edo gradudunak izatea, baina horrek ez du esan nahi abokatuen lanbidea arautzen denik. Gure ordenamendu juridikoan, jarduera bat egin ahal izateko titulu edo kualifikazio jakin bat izan behar da, baina horrek ez du esan nahi lanbide baten jarduna arautzen denik.

Kirolaren Euskal Planak (2003-2007) berak ere salatu zuenez, kirol-agenteen artean pertzepzio orokorra da ez dagoela lanbide-araudirik, eta horrek ekarri duela, batetik, prestakuntzarik gabeko pertsonak sartzea merkatuan, eta, bestetik, behar baino kualifikazio gutxiagoko jendea ibiltzea lanbide horietan. Hori dela eta, Plan horren



lehentasunezko helburuetako bat zen arautzea zeintzuk diren lanbide horietan jarduteko behar diren gutxieneko titulazioak, kontuan izanik, Planak berak onartzen duenez, zelan eragiten duen kirola egiteak kirola egiten dutenen osasunean eta segurtasunean.

Hori guztia aipatuta, eta kirol-arloko lanbide horietan sartzeari eta jarduteari buruzko erregulazioaren premiari dagokionez, nabarmendu behar dugu azken urteotan premia hori behin eta berriz sumatu izan dugula parlamentuko hainbat ekimenen bitartez.

- **Kataluniako** autonomia-erkidegoan, Kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legea onartu zuten parlamentario guztiek aho batez.
- **Kanarietako** autonomia-erkidegoan, Kanarietako Parlamentuaren Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzordeak Legez besteko proposamen bat onartu zuen 2005eko azaroaren 28an, eta proposamen horren bitartez, Kanarietako Gobernuari eskatu zioten Estatuko Gobernuari honako hau eskatzeko: inplikaturako sektore guztiekin elkarlan estuan arituta, kirolarekin lotutako lanbideak modu sistematiko eta ordenatuan arautuko dituen Lege bat egitea. Geroago, Kanarietako Parlamentuak 2010eko ekainaren 8an eta 9an egindako Osoko Bilkuretan Legez besteko beste proposamen bat onartu zen aho batez, eta Kanarietako Parlamentuak honako hau eskatzen zion Kanarietako Gobernuari: *“estatutuetan esleitutako ahalmenei jarraiki, kirol-arloko lanbide guztiak arautzeari ekitea, betiere lanbide bakoitzari dagozkion lanbide-gaitasunak zehaztuta, prestakuntzaren arabera”*.
- **Andaluziako** autonomia-erkidegoko gobernuak Kirolaren Lege Proiektua onartu du, eta VII. titulu osoan kirol-arloko lanbideak arautzen dira. Proiektu hori Andaluziako Parlamentuaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2014ko irailaren 8an.
- **Extremadurako** autonomia-erkidegoan, Kirol-arloko Lanbideetan Jarduteari buruzko Legearen jendaurreko informazioaren izapidearen iragarkia argitaratu zen 2013ko azaroaren 25ean, Extremadurako Aldizkari Ofizialean.



- **Murtziako** eskualdean ere, autonomia-erkidegoko gobernua Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Legearen aurreproiektua izapidetzen ari da, eta IV. titulu osoan jarduera fisikoarekin eta kirolarekin lotutako lanbideen jarduna arautzen da. Aurreproiektu horri buruzko nahitaezko hainbat irizpen eman dira jada.
- **Valentziako Erkidegoan** Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren martxoaren 22ko 2/2011 Legea onartu zen, eta bigarren xedapen gehigarrian honako hau ezartzen da: *“Generalitateko Consell-ak Valentziako Erkidegoko jarduera fisikoaren eta kirolaren arloko lanbideak arautzeko lege-proiektua aurkeztu du Les Corts-etan”*.
- **Aragoiko** autonomia-erkidegoan, Kirolaren Zuzendaritza Nagusiak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa aurkeztu zuen 2013ko martxoaren 1ean, eta kapitulu oso batean kirol-arloko lanbideak eta *“kirolarekin eta jarduera fisikoarekin lotutako lanbideetan jardutea”* dira aztergai.
- **Estatuko** Parlamentuaren eremuan, Diputatuen Kongresuko Hezkuntza eta Kirol Batzordeak honako Legez besteko Proposamena onartu zuen 2011ko maiatzaren 25ean, kontrako botorik gabe: *“Diputatuen Kongresuak honako hau eskatzen dio Gobernuari: autonomia-erkidegoetako eskumenak zorrotz errespetatuta, kirol-arloko lanbideak, profesionalen prestakuntza eta gaikuntza, eta lan-merkatuan duten jardun-eremua arautzeari ekitea, pertsonen segurtasuna eta osasuna bermatzeko”*. X. Legegintzaldiko Gobernu berria eratu ostean, Hezkuntza, Kultura eta Kirol ministro berriak Diputatuen Kongresuko Hezkuntza eta Kirol Batzordean parte hartu zuen 2012ko urtarrilaren 31n, eta honako hau azaldu zuen: *“Legealdi honetan egingo dugun beste gauza garrantzitsu bat da kirol-arloko lanbide jakin batzuen jarduna arautzea. Gure ustez funtsezko gaia da, batik bat, pertsonen babesari dagokionez; izan ere, horri esker, prestatutako profesionalak arduratuko baitira osasunaren zainketa kudeaketa fisiologiko eta biologikoaz”*. Kirol Kontseilu Goreneko presidentea Diputatuen Kongresuan egon zen aurrerago, 2012ko uztailaren 18ko saioan, eta ministroaren hitz horiek berretsi zituen. Kirol Kontseilu Goreneko aurreko bi presidentek helburu programatiko bera iragarri zuten. Haietako bat Diputatuen Kongresuan egon zen 2008ko ekainaren 24an, eta Bilkuren Egunkarian jasota dagoenez, honako hau esan zuen: *“Badugu konpondu*



gabeko arazo bat: kirol-arloko lanbideak, kirol-irakaskuntzen ondoriozko lanbideak. Nire ustez herritarrak gero eta kalitate handiagoko zerbitzua eskatzen du, eta horren gainean hausnarketa egiten eta neurriak aurkezten hasi beharko genukeela uste dut. Zenbait autonomia-erkidegotan –Katalunian, esaterako–, kirol-irakaskuntzekin lotutako lanbideei buruzko lege bat onartu dute jada, eta guk ere eztabaida horretan parte hartu nahi dugu. Andaluzian ere lan handia egin dute, nahiz eta ez duten lege espezifikorik alderdi horretan; dena den, ea lortzen dugun kirol-irakaskuntzak, kirol-arloko lanbideak aintzatestearekin bat datorren izendatzaile komuna, batik bat, autonomia-erkidegoetako zuzentarauen mugak eta, nola ez, autonomia-erkidegoetako eskumenak aintzat hartuta; bederatzigarren neurria izango litzateke”.

Gure autonomia-erkidegoari dagokionez, Eusko Legebiltzarrak honako testu hau onartu zuen 2012ko otsailaren 9ko Osoko Bilkuran: *"Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio kiroleko lanbideak arautzeko lege-proiektu bat aurkez dezala, Autonomia Estatutuan eta Lurralde Historikoen Legean aurreikusitako eskumen-esparruaren barruan eta inplikaturako eragile guztiekin lankidetzan arituz, halatan non zehaztu daitezkeen kiroleko lanbideak, kiroleko profesionalen prestakuntza eta trebakuntza, kirol-lanbide bakoitzaren eskumen profesionalak eta lan-merkatuan duten jarduera-eremua, era horretara bermatu ahal izateko pertsonen segurtasuna eta osasuna".* 2013ko martxoaren 4an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak idazki bidez erantzun zion legebiltzar-talde batek egindako galderari, Jaurlaritzaren Sail berriak legebiltzarraren adierazpen hori nola baloratzen zuen jakiteko. Erantzun ofiziala honako hau izan zen: *"Sail honek oso era positiboan baloratzen du adierazpen hori eta, horregatik, sailburu honek Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol eta Hezkuntza Batzordeetan egindako agerraldian (2013/02/11) aurreratu duenez, kirol-lanbideetan aritzea erregulatzeko lege-aurreproiektua egitea jarri du lehentasunezko helburuen artean".*

Hortaz, orain, bai Estatuak, bai Autonomia Erkidegoek kirol-arloko lanbideak Lege bidez arautzeko premiarekin ados daudela adierazi dute. Orain arte, autonomia-erkidegoek kirol-arloko zerbitzu profesional jakin batzuk egiteko zegokion titulua izan behar zela adierazten zuen aurreikuspen oso orokor bat baino ez zuten txertatzen



beren kirol-legeetan, eta gai hori etorkizunean arautuko duen legeriari atxikitzen zitzazkion, besterik gabe; baina orain, kirol-arloko lanbidean Lege bidez arautu behar direla adierazten hasi dira.

Arlo honetan ohiko moduan izaten diren nahasketak saihestearren, lehen ere esan dugunez, zera zehaztu nahi dugu, jarduera jakin batzuk egiteko titulu edo kualifikazio zehatz bat eskatzen duten lege edo erregelamendu bidezko baldintza guztiak ez direla lanbide-jardunaren erregulaziotzat hartu behar. Juridikoki bestelakoak diren hiru errealtate daude, eta sarri nahastu egiten diren arren, ez da halakorik egin behar:

- a) Titulu akademikoaren eta prestakuntzaren erregulazioa. Erregulazio hori erregelamendu bidez egin daiteke, eta eskumen-titulua hezkuntzari dagokio.
- b) Lanbideen erregulazioa. Erregulazio horren bitartez, lehen lanbide librea zena orain araututako lanbide bihurtzen da. Eta araututako lanbideen barruan, tituludunak eta titulurik gabekoak daude. Lanbide tituludunen erregulazioa Lege-erreserbaren printzipioaren mende dago (Konstituzioaren 36. artikulua) eta, beraz, ezin da erregelamendu bidez egin. Ondorio horixe bera atera behar da titulurik gabeko lanbideen erregulazioari dagokionez; logikoa da, antza, lanbide libre bat araututako lanbide bihurtzeko maila goreneko araua behar izatea. Izan ere, Zerbitzu eta elkargo profesionalei buruzko Estatuko Legearen aurreproiektuaren 7.3 artikuluan¹ honako hau xedatzen da: *“sartzeko mugak lege-mailako arau bidez aurreikusi behar dira”*.
- c) Jarduera zehatzak egiteko baldintza jakin batzuk eskatzea. Eskakizun hori erregelamendu bidez egin daiteke, hainbat Autonomia Erkidegotako Kirol Legeetan jasota dagoenez. Konstituzio Auzitegiak 2003ko ekainaren 5eko Epaian esanbidez adierazi duenez, *“lan- edo lanbide-jarduera jakin batean jarduteko hainbat betekizun bete behar izateak edo baldintza jakin batzuei atxikita egoteak ez du inolako zerikusirik tituludun lanbide bat sortzearekin”*. Jardueretan jardun ahal izateko tituluaren edo kualifikazioaren baldintzak eskatu bai, baina lanbidea arautzen ez den adibide bat da Eskolako Kirolari

¹ 2013ko abenduaren 20ko bertsioa, Estatu Kontseiluari bidalitakoa, irizpena egiteko.



buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretua, memoria honetan lehen ere aipatu duguna. Dekretu horretan ez da ezein lanbide arautzen; aitzitik, eskolako kirolaren arloan zenbait jarduera egiteko kualifikazio zehatz bat baino ez da eskatzen. Dekretuaren 25. artikuluan esanbidez aipatzen da: "*Titulazio horiek eskatzeak ez du eraginik kirolaren esparruko lanbideetan lege bidez eskatzen diren titulazio ofizialetan*".

Lehen aipatu ditugun hiru erregulazio-eremu horiei buruzko zalantzak argitzeko, abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarria lagungarri izan daiteke; izan ere, xedapen horren arabera, prestakuntzei buruzko aginduak ez ziren hartu behar ezein lanbide tituludunen jardunari buruzko erregulaziotzat:

"Kirol-arloko modalitate eta, hala badagokio, espezialitate bakoitzaren gutxieneko irakaskuntzetan lanbide-profila zehazten duten elementuak Errege Dekretu honen testuinguruan ulertu behar dira eta ez dira hartu behar ezein lanbide tituludunen jardunaren erregulaziotzat".

Araubide bereziko kirol-irakaskuntzaren antolaketa orokorra ezartzen duen urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretua onartuz geroztik ere, irizpide berari jarraitu zaio. Horrela, bada, Espeleologiako kirol-teknikariaren titulua ezarri eta irakaskuntza horietara sartzeko gutxieneko irakaskuntzak eta bidea arautzen dituen urtarilaren 29ko 64/2010 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian honako hau xedatzen da:

"Araubide bereziko kirol-irakaskuntzaren antolaketa orokorra ezartzen duen urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, Errege Dekretu honetan bildutako elementuak ez dira hartu behar ezein lanbide tituludunaren jardunaren erregulaziotzat"

Alegia, titulu akademikoak lortu, eman eta homologatzeko baldintzei buruzko erregulazioan ez da lanbide baten jarduna arautzen, lanbide-profilak zehazten diren arren. Memoria honetan, alderdi hori oso argi izan behar dugu, maiz gertatzen baitira



nahasketak; horren adierazgarri, Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salaren Laugarren Sekzioak 2013ko ekainaren 18an eman zuen Epaia, Kirol-urpekaritzako (eskafandra autonomoarekin) kirol-teknikariaren titulua ezarri eta irakaskuntza horietara sartzeko gutxieneko irakaskuntzak eta bidea arautzen dituen uztailaren 23ko 932/2010 Dekretuaren inpugnazioa ebazten duena. Errekurtsoa aurkeztu zuten erakundeek Errege Dekretua aurkaratu zuten Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluan tituludun lanbide baten erregulazioari buruz aurreikusitako lege-erreserbari aurka egiten ziolako. Auzitegi Gorenak atzera bota zuen inpugnazioa, eta Errege Dekretuak lege-erreserbaren printzipioa ez duela urratzen iritzi dio, *“ez soilik 1.2 artikuluan honako hau xedatzen duelako: ‘Errege Dekretu honetan bildutako elementuak ez dira ezein lanbide tituludunen jardunaren erregulaziotzat hartu behar’. Baizik eta benetan horrela delako... Ez ditu lanbide-‘eskumenak’ berak arautzen, lanbide bati edo besteri erreserbatutako jarduera edo ahalmentzat hartuta, baizik eta ‘eskumenak’ baino gehiago, ‘gaitasunak’ –lanbide-arlokoak, pertsonalak eta sozialak– arautzen ditu, betiere prestakuntza-prozesuan eskuratzen diren jakintza, gaitasun eta trebetasuntzat hartuta”*.

Halaber, lanbide tituludunen jardunaren erregulazioa –Konstituzioaren 36. artikuluan aurreikusitakoa eta Legeari dagokiona– ez da nahastu behar zerbitzu edo jarduera jakin batzuk garatzeko baldintza jakin batzuk eskatzeko betekizunarekin. Ez dira gauza berdina, alde batetik, kirol-arloko zentro edo establezimendu jakin batean (kiroldegi bat, igerileku olinpiko bat edo goi-mailako errendimenduko zentro bat, esate baterako) jarduteko Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduduna izateko baldintza ezartzea –eta eskakizun hori erregelamendu bidez egin daiteke, argi eta garbi, indarreko legeriari jarraiki– eta, bestetik, lanbide baten sarbidea edo funtsezko edukia arautzea eta lanbide-jardun horretan sartu eta jardun ahal izateko Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduduna izan behar izatea. Era berean, ez dira gauza berdina, alde batetik, erabilera publikoko igerilekuetan sorosle-lanetan jarduteko kualifikazio jakin bat duen norbait behar dela eskatzea, eta bestetik, uretako sorosleen prestakuntza arautzea edo uretako soroslearen lanbidea arautzea. Hiru errealitate horiek guztiz bestelakoak dira.



Memoria honetan nabarmendu nahi genuke lanbide-eremuen mugaketa eta lanbide horietarako sarbidea titulu edo kualifikazio espezifikokoak eskatzearekin baldintzatzea lan konplexua izan dela, historia osoan, gizartearen arlo guztietan, ez soilik kirolatan. Kualifikazio edo titulu jakin bat lotuta duen lanbide bakoitzaren eremua eta eskumenak finkatzeak ondoko beste lanbide batzuekin –lanbide horiek ere beste kualifikazio edo titulu batzuek izaten dituzte lotuta– liskarrak eragiten ditu ia beti, eta horren ondorioz, maiz, elkargoen erakundeek, interes profesionalak ordezkatzan dituzten elkarteek, unibertsitateek eta abarrek bultzatutako gatazka judizialak izaten dira. Lanbide-eremua finkatzea oso lan nahasgarria izaten da, oro har, Auzitegi Gorenaren (3. Sala) 1981eko ekainaren 16ko epaiak ikus daitezkeen; Industria Ingeniarien eta Bideetako Ingeniarien arteko gatazka bati buruzkoa da epaia:

“...haiek guztiek oinarri komuna dute prestakuntzan, eta hori nabaria da, oso zaila baita muga naturalak eta bereizleak ezartzea haien artean; horren ondorioz, muga horiek ezean, artifizialki sortu eta gatazka-iturri izaten diren aginduen bitartez ordeztu behar dira, eta agindu horietan garrantzi handiagoa izaten du kidegoen espiritu hedatzaileak, politika global, koordinatzaile eta harmonizatzaile batek baino”.

Estatuko Gobernuak berak, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren bitartez, lehen aipatutako Zerbitzu eta Elkargo Profesionaleen Legearen aurreproiektua lantzean ezarri zuenez, abiapuntuko egoeran erregulazio *“gatazkatsua dago (profesionaleen artean)”*.

Zailtasun hori areagotu egiten da, areagotu badaiteke, kirolaren munduan; izan ere, esparru horretan lanbide-jarduera ugari biltzen dira eta jarduera horiek ez dira behar bezala zehaztu, eta gainera, kualifikazio edo titulu asko gainjartzen edo lehian egoten dira, betiere oso bestelakoak eta maila ere desberdina duten prestakuntzetatik datozenak izanik kualifikazio edo titulu horiek. Kualifikazio edo prestakuntza bakoitzari dagozkion gaitasun edo eskumenak zeintzuk diren ez da behar bezala bereizi, ziurrenik prestakuntza-eskaintza berriak sortu eta sortu ari direlako, hausnarketa egokirik egin gabe.



Horretaz gain, kirol-arloko irakaskuntza eta tituluen mundua etengabe aldatzen da, ez dago finkatuta eta desegituratuta dago, eta prestakuntza-mailak nahastu eta gainjarri egiten dira, bakoitzaren espazioa ez dagoelako argi eta garbi bereizita. Tituluak abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren bitartez arautu zirelarik, kirol-arloko tituluen mapan ordena ezar zitekeela pentsatzera iritsi ginen. Baina kirol-teknikarien irakaskuntzen eta tituluen erregulazioa iragankortasun-prozesuan dago etengabe; horren adierazgarri argia da Errege Dekretu horren bitartez apirilaren 8ko 594/1994 Errege Dekretua indargabetu izana, eta 1913/1997 Errege Dekretua bera ere 1363/2007 Errege Dekretuaren bitartez indargabetu izana. Eta ez dira gutxietsi behar kirolaren eremuan ofizialki onartuta eta Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalan bilduta dauden lanbide-kualifikazio ugariak.

Memoria honetan argi utzi nahi dugu prestakuntzak eta haiei dagozkien tituluak araututa ere arazoaren zati txiki bat baino ez dela konponduko kualifikaziorik gabeko pertsonak zerbitzu profesionalak emateari dagokionez; baina arazoaren mamia zera da, prestakuntza akademiko horiek lanbide zehatz batzuetan jardutearekin lotu behar direla. Bestela esateko, kirol-arloko tituluen eta kualifikazioen mapa ezarritakoan, zailena egituratzea faltako da: haiei lotutako lanbideak. Sistema integral baten logikari jarraiki, erabat libre diren lanbideen kasuan, lanbide bakoitza titulu edo kualifikazio zehatz batzuen mende egongo da, baita eremu funtzional baten mende ere, eta eremu hori eskusiboa izan daiteke, edo beste lanbide batzuekin partekatua.

Zailtasun horietaz gain, kirola egiten duten herritarrei zerbitzu profesionalak ematen zaizkienean baldintzak txarrak izaten direla ere esaten da, eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez da salbuespen horri dagokionez; izan ere, maiz gertatzen da prestakuntzarik, esperientziarik edo jakintza nahikorik ez duen norbaitek kirol-irakaskuntzak ematea, zerbitzu profesionalak ematea edo pertsonen osasuna edo segurtasuna arriskuan jar dezaketen kirol-jarduera jakin batzuk kontrolatzea. Europako Batzordearen X Zuzendaritza Nagusiak, Kirol Zientzietako Institutuen Europako Sarearen eta Kirol Enpleguaren Europako Behatokiaren laguntzarekin, *“Kirola eta enplegua Europan”* azterlana egin du, eta lan horren arabera, *“kirolaren sektorean lanbide bati egokitutako prestakuntzarik gabe jarduten dutenen kopurua oso handia da EBko herrialde gehienetan”*. Jende gehienak uste du Lege bat behar dela, kirol-arloko



lanbide-jarduera arautuko duen Legea, betiere gizartearen premiei erantzuteko eta kirol-jarduerak bideratuko dituztenek gutxieneko prestakuntza-maila bat izan dezaten. Kirolaren esparruan dagoen arazo garrantzitsuenetako bat, adituek diotenez, zera da, kirolaren lan-eremuan jende asko dagoela zuzenean jarduera fisikoarekin eta kirolarekin loturarik ez duen askotariko prestakuntza duela.

Orain arte, kirolaren sektorea lan-merkatu irekienetako bat izan da, eta prestakuntza eta titulu oso heterogeneoak dituztenei, prestakuntza oso eskasa edo, baita inolako prestakuntzarik ez dutenei ere lanbide jakin batzuetan jarduteko aukera ematen zien. Ez da logikoa sektore ekonomiko batek –pertsonen osasunarekin eta segurtasunarekin lotura hain handia duen sektorea izanik, gainera– gutxieneko arau-esparrurik gabe jarraitzea lanbide-jardueren erregulazioari dagokionez.

Euskal Autonomia Erkidegoko Aholku Batzorde Juridikoak 7/2004 Irizpenean emandako iritzia oso adierazgarria da: *“kirol-arloko lanbideak titulazio ofizialen bitartez egituratzea eskatzen dute gizarteko sektore askok”*. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoak dioenez, *“botere publikoek ezin dute kirol-jardueraren segurtasuna alde batera uzten jarraitu, baldin eta aldi berean jarduera hori bultzatzeko eta areagotzeko mezua zabaltzen ari badira. Jarduera fisikoa segurtasun-baldintzetan egin behar da, eta segurtasunaren zati garrantzitsu bat jarduera bideratzen eta ikaskuntza-mailetan parte hartzen duten pertsonen esku dago. Horrek esan nahi du eremu funtzionalak mugatu egin behar direla, eta kirol-jardueran ezarri, jarduera hori lehiakorra nahiz aisialdikoa izan daitekeela, baita, nola ez, hezkuntza-arlokoa ere, dela araututako alderdiari dagokionez, dela eskolaz kanpoko jardueren testuinguruan txertatzen direlako, arau orokorretatik kanpo uzten diren bestelako alderdiei dagokienez ere”*.

Aurreko faktore horien guztien ondorioz, eta kirolaren eremuko berezko lanbideek pertsonen heziketa integralarekin, osasunarekin eta segurtasunarekin duten lotura estu-estu hori bereziki aintzat hartuta, kirol-arloko lanbideei dagokien legegintzako tratamendu espezifiko eta berezia gauzatzea ezin atzeratuzko kontua da.

Azpimarratu nahi dugu Legearen aurreproiektuaren xedea ez dela prestakuntza eta titulu akademikoak –horiek badute erregulazioa–, okupazioak, lanpostuak, lanlekuak



edo tituluen lanbide-profilak arautzea. Era berean, Legearen xedea ere ez da kirol-sektoreko lanbide-jardunerako beharrezkoak diren prestakuntza-edukiak lantzea, ezta titulu bakoitzari dagozkion lanbide-ahalmenak edo lanbide-eskumenak ezartzea ere. Akats hori askotan gertatzen da eztabaidarako foro edo dokumentuetan. Memoria honetan azalduko dugunez, unibertsitateko titulu berak lanbide bat baino gehiago sor ditzake eta, aldi berean, lanbide berean jardun daiteke hainbat titulu akademikotan oinarrituta.

Horrenbestez, Legearen xedea oso argi dago: Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko berezko lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko aukera arautzea. Lehen ere esan dugunez, kirol-arloko lanbideak egituratu egin behar dira, herritarrei ziurtatu egin behar baitzaie entrenamenduko, irakaskuntzako, bideratzeko eta abarreko jarduerak prestakuntza-maila jakin bat dutenek gauzatuko dituztela eta, beraz, jarduera horiek ezin ditugu utzi gutxieneko kualifikaziorik ez duen edonoren esku. Botere publikoek herritarren osasuna eta segurtasuna bermatu behar dituzte kirola egitean, baita jarduera hori behar bezala garatuko dela ere. Kirola egitea, oro har, oso onuragarria izan daiteke herritarrentzat betiere baldintza onargarrietan egiten bada, baina kirola egitea arrisku larria ere izan daiteke, baldin eta beharrezkoa den prestakuntza ez duten pertsonen zuzenduta edo gainbegiratuta egiten bada, bereziki egoera jakin batzuetan (adingabeen edo desgaituen kasuan, landa-ingurunekeo jardueretan eta abar). Botere publikoek Konstituzioaren 43. artikulua betetzen hasi behar dute, eta kirola egitean osasuna eta segurtasuna bermatu behar dituzte. Eta hori guztia, hein handi batean, herritarrei kirol-zerbitzuak ematen dizkieten pertsonen eskatu beharreko prestakuntzak baldintzatuko du.

B.- ESKUMEN-KONTUAK

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukera arautzeko proposamenak eskumen-tituluetan edo -gaikuntzetan oinarritu behar du eta, horregatik, memoria honetan gai hori ere aztertu behar dugu. Noski, ezinezkoa da dokumentu honetan kirol-arloko berezko lanbideen arautzeak sortzen dituen



amaigabeko zalantza konplexuak, eskumenen ikuspegitik begiratuta, sakon eta zehatz-mehatz aztertzea.

Autonomia Estatutuaren 10.36 artikularen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren arloko eskumen eskusiboa du. Era berean, 10.22 artikularen arabera, Euskadik eskumen eskusiboa du profesionalen elkargoen arloan eta tituludun lanbideak betearaztean, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluek xedatutakoa alde batera utzi gabe.

Lege hau onartzeko eskumen-tituluak nahiko argi dauden arren, ezin dugu ezkutatu lanbideak arautzeko arloak zeharkakotasun-maila handia duela eta horrek eskumenekin lotutako zalantza konplexuak eragiten dituela. Baina nabarmendu nahi genuke badela, gutxienez, aurrekari bat, eskumenen ikuspegitik begiratuta oso argigarria dena. Kataluniak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen berdin-berdinak ditu kirolaren eta lanbideetan jardutearen arloan, eta Kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legea onartu zuen. Xedapen horrek eskumenekin lotutako hainbat desadostasun eragin zituela –jada konpondu dira– kontuan izanik, Legearen aurreproiektu hau Lurralde Lankidetzako Estatu Idazkaritzaren 2009ko urtarrilaren 30eko Ebazpenaren irizpideetan oinarritu da; ebazpen horren bitartez, Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzordeak Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeaz hartutako Erabakia argitaratu zen.

Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzordearen 2008ko uztailaren 30eko Erabakian aurreikusitakoa betez eratutako Lantaldeak aldeztu aurretik negoziazioan jardun behar izan zuen, Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeari dagokionez, eskumenekin lotutako desadostasunak aztertzeko eta konponbidea proposatzeko; negoziazioen ondorioz, bi aldeek eskumen-desadostasunak konpondutzat hartu zituzten.

Alde batetik, bi aldeek uste zuten sektore publikoan kiroleko lanbideak betetzea aipatzen denean, erreferentzia hori Generalitatearen eta Kataluniako tokiko



administrazioen sektore publikoaren eremuari atxikita ulertu behar dela. Horregatik, aurreproiektu honetan EAEko sektore publikoaren esanbidezko hainbat erreferentzia txertatu dira. Halaber, bi aldeek uste zuten kiroleko lanbideak betetzeko gaikuntza onartzeari dagokionez, Lanbide Kualifikazioen Kataluniako Institutuaren jardunak Kataluniako Generalitateak bere gain hartutako eskumenen –gai horrekin lotuta– eremu materialari atxikita ulertu behar direla. Aurreproiektu honetan ere irizpide horri berari jarraitu diogu.

Lanbideak arautzeko eskumenen gai hori baldintzatuta egon da Konstituzio Auzitegiaren tituludun lanbideen esparruko doktrinarekin, eta horregatik, honako hauek bereizi behar dira: lanbide libreak, araututako lanbideak eta, azken horien barruan, tituludun lanbideak eta elkargoetan bilduta dauden lanbideak. Ikus ditzagun:

Lanbide librea: erregulaziorik ez duen lanbidea edo lanbide-kualifikazio zehatzik izatea eskatzen ez duena.

Araututako lanbidea: lanbide horretan sartzeko lanbide-kualifikazio zehatzak izatea eskatzen duena.

Tituludun lanbidea: lanbide horretan sartzeko goi-mailako hezkuntzako titulu akademiko ofiziala izatea eskatzen duena.

Elkargoetan bildutako lanbidea: tituludun lanbide horretan sartzeko elkargo profesional batean sartzea edo kide izatea eskatzen duena.

Definizio horiek lehen aipatu dugun Zerbitzu eta Elkargo Profesionalei buruzko Legearen aurreproiektutik atera ditugu –ez hitzez hitz–, eta definizio horien arabera, araututako lanbideak tituludunak edo titulurik gabeak izan daitezke. Eta tituludun lanbideak, aldi berean, elkargoan bildutakoak izan daitezke, edo ez.

Estatuko aurreproiektu horren 8. artikuluari jarraiki, “*goi-mailako hezkuntzako titulua eskatu ahal izango da lanbide-jarduera edo lanbide batean sartzeko, baina soilik lege-mailako Estatuko arau batean horixe xedatzen denean*”. Alegia, Estatuko Gobernuaren



lege-proposamen horri jarraiki, soilik Estatuak arau ditzake, Lege bidez, tituludun lanbideak edo sartzeko goi-mailako hezkuntzako titulu ofizial bat izatea eskatzen duten lanbideak. Era berean, 25.1 artikularen arabera, *“tituludun lanbide batean edo horrelako lanbide baten berezko zenbait jardueretan jarduteko soilik eskatu ahal izango da nahitaez elkargo bateko kide izatea. Lege-lerruneko estatu-arau bidez horixe xedatzen denean baino ezingo da eskatu derrigorrez kolegiatzeko”*. Konstituzio Auzitegiaren doktrina eztabaidagarri batean oinarritutako proposamen horren ondorioz, Estatuak baino ezin du onartu Tituludun lanbideetan eta elkargo batean bildutako lanbideetan jarduteari buruzko Lege bat.

Unibertsitateko edo goi-mailako lanbide-heziketako titulu batean oinarritutako jarduera-erreserba –tituludun lanbidea– Estatuko lege bidez baino ezin da egin, baina beste edozein kualifikaziotan oinarritutako jarduera-erreserba, ordea, Estatuko edo Autonomia Erkidegoko lege bidez egin daiteke, legearen eremu materialaren arabera. Gure dagokion eremu materialean, kirola Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen eksklusiboa da, zalantzarik gabe, Estatutuaren 10.36 artikularen babesean. Euskal Autonomia Erkidegoan irizpide horri jarraitu diogu turismo-arloko lanbideak arautzeko garaian (Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legea, apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bidez aldatutakoa). Eta irizpide hori ondorioztatzen da, halaber, Zerbitzu eta Elkargo Profesionalen Legearen aurreproiektutik ere; izan ere, 22.1 artikularen arabera, profesionalak ez badituzte betetzen Legean bildutako betebeharrak *“zehapena jasoko dute, lanbide-jarduera bakoitzean aplikatu beharreko sektoreko araudian –Estatukoan eta Autonomia Erkidegokoan– xedatutakoaren arabera”*

Estatuaren eskumenen formulazio hori –Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren batean oinarritutakoa– ez da batere argia, ezta baketsua ere, baina Autonomia Erkidego guztiek modu baketsuan arautu izan dituzte tituludun lanbideak eta elkargotan bildutako lanbideak, Estatuak eskumenekin lotutako eragozpen edo kexarik egin gabe.

Egia da Estatuak tituludun lanbideei buruzko hainbat xedapen onartu dituela. Horren adibide da Lanbide sanitarioak antolatzeari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legea. Estatuak ez duenez eskumen-titulurik tituludun lanbideetan jarduteari dagokionez,



lanbideak arautzeko legeak onartzen ditu lanbide horien (osasuna, justizia, hezkuntza eta abar) eremu materialean dituen eskumenen babespean. Horrela, bada, 44/2003 Legea osasun-eremuko eskumenen babespean onartu zen, ez tituludun lanbideetan jardutearen eremuko berezko eskumen baten arabera. Lanbide Elkargoei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legearen bitartez unibertsitateko titulu ofiziala eskatzen duten lanbide-jardueretan jarduteko aukera komuna arautzen da, eta Espainiako lurralde osoan aplikatzekoa da; Lege hori Estatuaren honako eskumen-titulu hauetan oinarritzen da: merkataritza-legeriari, erregistro eta tresna publikoen antolamenduari eta Administrazio Publikoen araubide juridikoaren oinarriei dagozkienetan. Bestalde, Auzitegietako abokatu eta prokuradore izateari buruzko urriaren 30eko 34/2006 Legean, gezurra dirudien arren, ez dira bi lanbide horiek arautzen. Zioen Azalpenean adierazten duenez, ongi adierazi ere, Estatuaren eskumeneko lanbide-tituluak arautzen dira, 149.1.30 artikulua babesean, lanbide-titulu horiek *“Zuzenbideko unibertsitate-tituluaren osagarri”* dira. Atariko horren arabera, *“Legea ez da sartzen abokatu eta prokuradore lanbideetan jarduteko aurreikusten diren kasuetan, titulu horiek eratzeke ez bada”*.

Kataluniaz eta Euskal Autonomia Erkidegoaz gain, tituludun beste autonomia-erkidego batzuek ere badute lanbideetan jardutearen eremuko eskumen eskusiboa eta, halaber, autonomia-erkidego gehienek kirol-arloko eskumen eskusiboa dute, Autonomia Estatutuen babespean. Espainiako Konstituzioaren eta Autonomia Estatutuen arabera egindako erakunde-egituraketari jarraiki, Espainian kirol-arloko politikak, oro har, garatu behar dituzten erakundeak autonomia-erkidegoak dira.

Lehentxeago esan dugunez, Estatuan tituludun lanbideen arloan defendatutako eskumen-erreserba ez da batere argia, Konstituzioan ez baitzaio Estatuari esanbidez esleitzen eskumen hori; aitzitik, Euskal Autonomia Erkidegoak –baita beste Autonomia Erkidego gutxi batzuek ere– eskumen eskusiboa du tituludun lanbideen eremuan eta, eskumen horretan oinarrituta, jada badu lanbide tituludunei dagokien legea.

Gainerako Autonomia Erkidegoek garatzeko eta betearazteko eskumenak dituzte Estatuaren oinarrizko legeriaren esparruan, eta beste zenbait autonomia-erkidegok ez du ezein eskumenik:



ANDALUZIA

Eskumen eskusiboa du “*profesionalen elkargoei eta tituludun lanbideetan jarduteari dagokienez, **Konstituzioaren 36. artikulua eta Estatuko legeriaren arabera**” (martxoaren 19ko 2/2007 Lege Organikoaren 79.3 artikulua).*

ARAGOI

Eskumen **esklusiboa** du “*profesionalen elkargoei eta tituludun lanbideetan jarduteari dagokienez, **titulu akademikoei eta profesionalei buruzko arau orokorrak eta Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa betez**” (apirilaren 20ko 5/2007 Lege Organikoaren 71.30 artikulua).*

ASTURIASKO PRINTZERRIA

Asturiasen kasuan, “**Estatuaren oinarrizko legeriaren esparruan eta, hala badagokio, legeria horretan xedatutako baldintzetan, Asturiasko Printzerriari dagokio **legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan:...** 9. Interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzeko dituzten zuzenbide publikoko korporazioak. Tituludun lanbideetan jardutea” (urtarrilaren 5eko 1/1999 Lege Organikoaren 11. artikulua).

BALEAR UHARTEAK

Otsailaren 28ko 1/2007 Lege Organikoaren 16. artikulua arabera, Balear Uharteek **ez dute** eskumen eskusiborik, ezta lege-garapenerako ere, tituludun lanbideetan jarduteari dagokionez. Balear Uharteetako autonomia-erkidegoak “*profesionalen elkargoei eta tituludun lanbideetan jarduteari” dagozkion eskumenak baino ezin izango ditu hartu bere gain, honako prozedura hauetakoren baten bitartez:*

“*Lehenen.* Konstituzioaren 148. artikulua 2. zenbakian aurreikusitako bost urteak igaro ostean, Balear Uharteetako Parlamentuak alde aurretik erabakita, gehiengo



osoz eta Gorte Nagusiek onartutako Lege Organiko bidez onartu ostean, Konstituzioaren 147. artikulua 3. zenbakian aurreikusitakoari jarraiki.

Bigarrena.- Konstituzioaren 150. artikulua 1. eta 2. zenbakietan xedatutako prozeduren bitartez, Balear Uharteetako Parlamentuaren, Nazioko Gobernuaren, Diputatuen Kongresuaren eta Senatuaren ekimenez.”

KANARIAK

“Kanarietako Autonomia Erkidegoari dagokio **legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan: ... 13. Interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzeko dituzten zuzenbide publikoko korporazioak eta tituludun lanbideetan jardutea **Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoaren esparruan.**” (abenduaren 30eko 4/1996 Lege Organikoaren 32. artikulua).

KANTABRIA

“**Estatuaren oinarritzko legeriaren esparruan eta legeria horretan xedatutako baldintzetan, Kantabriako Autonomia Erkidegoari dagokio legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan: ... 5.- Interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzeko dituzten zuzenbide publikoko korporazioak. Tituludun lanbideetan jardutea” (abenduaren 30eko 11/1998 Lege Organikoaren 25. artikulua).

GAZTELA-MANTXA

“**Estatuaren oinarritzko legeriaren esparruan eta, hala badagokio, legeria horretan xedatutako baldintzetan, Komunitateen Batzordeari dagokio legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan: ... 5. Interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzeko dituzten zuzenbide publikoko korporazioak. Tituludun lanbideetan jardutea” (uztailaren 3ko 3/1997 Lege Organikoaren 32. artikulua).



GAZTELA ETA LEON

*“Estatuaren oinarritzko legeriaren esparruan eta, hala badagokio, legeria horretan xedatutako baldintzetan, Gaztela eta Leongo Erkidegoari dagokio Estatuko **legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan: 11. Profesionalen elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea”* (urtarrilaren 8ko 4/1999 Lege Organikoaren 27. artikulua).

KATALUNIA

*“Generalitateari dagokio, **titulu akademiko eta profesionalei buruz ezarrita dauden arau orokorrak eta Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan ezarritakoa errespetatuta, tituludun lanbideetan jarduteari buruzko eskumen eskusiboa**, honako hauek ere barruan direla beti:*

- a) Tituludun lanbideetan jarduteko betekizunak eta baldintzak zehaztea, profesional tituludunen eskubideak eta eginbeharrak finkatzea eta bateraezintasunen inguruko erregimena ezartzea.*
- b) Intrusismoaren eta jarduera okerrean aurkako administrazioko bermeak arautzea, eta nahitaez eman beharreko zerbitzu profesionalak arautzea.*
- c) Tituludun lanbideetan jarduteko diziplina-araubidea.”*

(uztailaren 19ko 6/2006 Lege Organikoaren 125.4 artikulua).

EXTREMADURA

*“Estatuaren oinarritzko legeriaren esparruan eta legeria horretan xedatutako baldintzetan, Autonomia Erkidegoari dagokio **legeak garatzea eta betearaztea** honako hauetan: ...6. Profesionalen elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea. Nekazari Ganberak, Merkataritza eta Industria Ganberak, eta interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzeko dituzten zuzenbide publikoko gainerako korporazioak”* (maiatzaren 6ko 12/1999 Lege Organikoaren 6. artikulua).



GALIZIA

Galiziak **ez du**, apirilaren 6ko 1/1981 Lege Organikoaren babesean, **eskumen espresurik** tituludun lanbideetan jarduteari dagokionez.

ERRIOXA

*“Estatuaren oinarrizko legeriaren esparruan eta, hala badagokio, legeria horretan xedatutako baldintzetan, Errioxako Autonomia Erkidegoari dagokio **legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan:... 10. Nekazari Ganberak, Merkataritza eta Industria Ganberak, edo erakunde baliokideak, Profesionalen Elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea, baita interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzan dituzten zuzenbide publikoko gainerako korporazioak ere”* (urtarrilaren 7ko 2/1999 Lege Organikoaren 9. artikulua).

MADRIL

*“Estatuaren oinarrizko legeriaren esparruan eta, hala badagokio, legeria horretan xedatutako baldintzetan, Madrilgo Autonomia Erkidegoari dagokio **legeak garatzea, erregelamendu-ahala eta betearaztea** honako eremu hauetan: ... 6. Interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzan dituzten zuzenbide publikoko korporazioak. Tituludun lanbideetan jardutea”* (uztailaren 7ko 5/1998 Lege Organikoaren 27. artikulua).

MURTZIAKO ESKUALDEA

*“Estatuaren oinarrizko legeriaren esparruan eta, hala badagokio, legeria horretan xedatutako baldintzetan, Autonomia Erkidegoari dagokio **legeak garatzea eta betearaztea** honako eremu hauetan:...10. Profesionalen Elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea, Nekazari Ganberak, Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberak, Arrantzale Kofradiak eta interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzan*



dituzten zuzenbide publikoko gainerako korporazioak” (ekainaren 15eko 1/1998 Lege Organikoaren 11. artikulua)

NAFARROA

*“Nafarroak **eskumen eskusiboa** du honako eremu hauetan: ... Hogeita sei. Profesionalen Elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea, **legeria orokorrari jarraiki**” (abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 44. artikulua).*

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

*“Euskal Autonomia Erkidegoak **eskumen eskusiboa** du honako eremu hauetan: ... 22. Profesionalen Elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea, **Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa alde batera utzi gabe**. Notarioak izendatzea, Estatuko Legeei jarraiki” (abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10. artikulua)*

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

Generalitateak **eskumen eskusiboa** du honako eremu hauetan: *“Profesionalen Elkargoak eta tituludun lanbideetan jardutea, **Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa alde batera utzi gabe**” (apirilaren 10eko 1/2006 Lege Organikoaren 49. artikulua).*

Lehen ere aipatu dugu Legearen aurreproiektu honi dagokion eskumenen alderdia oso konplexua dela, Espainiako Konstituzioan ez baita esanbidez aipatzen Estatuak eremu honetako erregulazio orokorra egiteko eskumena duenik. Tituludun lanbideak soilik aipatzen dira, eta Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluan agertzen dira, baina agindu horretan ez zaio Estatuari ezein eskumen-titulu esleitzen: *“Legeak lanbide-elkargoen araubidea ezarri eta tituludun lanbideen jardura arautuko du”*.

Agindu hori irakurrita erraz egiazta daitekeenez, ez da zehazten Estatuko Lege baten bidez arautu behar denik lanbide horien jardura. Noski, Konstituzio Auzitegiaren



doktrinari jarraiki, eremu material bati buruzko eskumenak esanbidez ez aipatzeak ez du esan nahi Estatuak ezin duenik eremu horretan esku hartu; halaber, Konstituzioan Estatua ez zen esanbidez aipatzen kirol-fenomenoa arautzeko, baina Espainiako Parlamentuak honako lege hauek onartu zituen: Kultura Fisikoaren eta Kirolaren 13/1980 Lege Orokorra, martxoaren 31koa; eta urriaren 15eko 10/1990 Legea. Lege honen Zioen Adierazpenaren arabera, egia da *“kirolari buruzko edo kirola sustatzeari buruzko eskumenen esleipena Autonomia Estatutuetan esanbidez jasota dagoela –eta, horregatik, ez da Lege honen asmoa ez dagozkion birbanaketako eragiketak egitea–, baina egia da, halaber, lehenik, esleipen hori Autonomia Erkidego bakoitzaren lurralde-eremuekin estu-estu lotu behar dela eta, bigarrenik, kirolaren arloan –Konstituzioko terminoak erabilia–, zalantzarik gabe, hainbat eskumen-tituluk dutela eragina”*. Eta horren antzeko zerbait gertatu da Kirol-arloan osasuna babesteari eta dopinaren kontrako borrokari buruzko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoarekin ere; izan ere, Kirol-jardueretan kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoaren bitartez indargabetu baita. Dopinari buruzko legeria horretan, hainbat eskumen-eremuk izan dute eragina. Estatuari dagokion autoantolaketa-eskumenaz gain, baita Espainiako kirolari orokorrean eragiten dioten interesen gaineko eskumenaz gain ere, berariazko zenbait eskumenek parte hartzen dute Lege horretan. Eskumen horien artean nabarmentzeko modukoak dira, besteak beste, gai hauen oinarriari eta koordinazio orokorrari buruzkoak: osasuna, zigor-arloko legegintza, Justizia Administrazioa, herri-segurtasuna, nazioarteko harremanak eta Estatuaren helburuetarako estatistika. Eskumen horiek guztiak dira Konstituzioaren 149.1 artikuluan ezarritakoak.

Arrazoi beragatik, Euskal Autonomia Erkidegoak tituludun lanbideetan jarduteari buruzko eskumen eksklusiboa izateak ez du eragozten Estatuak jarduera horretan eragiteko aukera izatea, partzialki bada ere. Konstituzio Auzitegiaren arabera, Autonomia Erkidegoen eskumenek merezi duten kalifikazio juridikoa ez da eskumen horiek Estatutueta testuetan duten izenaren irakurketa isolatuaren ondorio, baizik eta konstituzionaltasunaren bloke osoaren interpretazio sistematikoaren ondorio. Noski, edozein eskumen-tituluk ez du balio. Horri dagokionez, Estatuak –titulu akademiko eta profesionalen arloko eskumenean soilik oinarrituta– tituludun lanbideak arautzea ez litzateke Konstituzioaren araberakoa izango. 149.1.30 artikuluaaren arabera, titulu



akademikoak eta lanbide-tituluak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzea Estatuari dagokio. Ez dugu ahaztu behar Legearen aurreproiektu honetan ez direla titulu akademikoak eta lanbide-tituluak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak, orokorrean, arautuko, baizik eta kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko aukera. Horri dagokionez, honako argudio hau ere ez da onargarria: lanbide batek titulu akademikoa eskatzen baldin badu, Estatuak tituludun lanbidearen jarduna arautzeko eskumena honako honen ondorio da: Estatuak titulu akademikoak lortzearen arloko eskumena izan badu, eta titulu horiek ezin dira jardunetik deslotu. Tituluen eta lanbideen arteko eskumen-lotura hori ez dator bat konstituzionaltasunaren blokearekin, bi gaiak modu autonomoan lantzen baititu argi eta garbi.

Legearen aurreproiektu honen xedea ez da izango tituludun lanbideak arautzea, lanbide-kualifikazioak eskatuko baitira (goi-mailako titulu akademikoen bitartez egiazta daitezke, baina ez dute goi-mailakoak izan beharrik, edo bestela, ziurtagiri ez-akademikoen bitartez); hala ere, doktrina zientifikoaren sektoreren batek argudiatu izan du inoiz Estatuko Lege baten bidez baino ezin dela arautu kirolaren sektoreko lanbide bat, eta ondorio hori atera dute espainiar guztien berdintasuna bermatzen duen Konstituzioaren 149.1.1 artikuluan oinarrituta. Dena den, jurisprudenzian bertan onartzen ari denez, Estatuak ezin du, besterik gabe, beste eskumen-titulu espezifikorik ezean, espainiar guztien berdintasunaren printzipioa argudiatu Estatuko lurraldearen edozein tokitan, Autonomia Erkidegoei gordetako eskumenak bere gain hartzeko; izan ere, hori eginez gero, *“149.1.30 artikuluan xedatutakoaren aurka joango litzateke, argi eta garbi, artikulua horretan ez baitzaio Estatuari esleitzen lanbide-jarduera ororen kontrola edo gaikuntza. Aitzitik, lanbide-tituluak lortzeko, emateko eta homologatzeko baldintzak arautzea esleitzen dio, ez besterik”* (Konstituzio Auzitegiaren uztailaren 6ko 122/1989 epaiaren 5. oinarri juridikoa). Espainiar guztien berdintasunaren interpretazio hori onartuko balitz, Autonomia Erkidegoen eskumen eskusiboa diren eremu gehientsuenak Estatuko arauen eraginpean geratuko lirateke; beraz, berdintasunera jotze hori tresna bat izango litzateke Estatuarentzat, hain zuzen ere, autonomia-erkidegoei esleitutako eskumen eskusiboak Estatuak bereganatzeko tresna. Horri dagokionez, Konstituzio Auzitegiak berak Espainiako Konstituzioaren 149.1.1 artikulua norainokoa mugatu du eta, dagokion testuinguruan kokatzearren, Estatuaren eskumenaren izaerari eta norainokoari buruzko zehaztapen ugari egin ditu,



betiere interpretazio sistematikoa eginez, autonomia-erkidegoetako eskumenekin nola egituratu behar duen finkatzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoan baditugu adibide gehiago araututako lanbideei dagokienez. Turismoa antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen –apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bidez aldatu zen– 40. artikuluen arabera, *“orientazio, informazio, laguntza eta antzeko jardunak ohikotasunez eta ordaindurik egiteari buruzko lanbide izan eta erregelamenduz horrelakotzat zehaztutakoak dira turismo-lanbideak. Kualifikazioaren bat eduki beharra eskatzeko aukera ere badago, beste estatu kide batzuetako lanbide-kualifikazioa aitortzeari kalterik egin gabe”*.

Lehen ere esan dugunez, lanbideen jardunaren erregulazio orokorra, hasteko, zenbait Autonomia Erkidegok beren gain hartu duten eskumena da; beraz, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.22 artikuluan xedatutakoari jarraiki emana; artikulua horretan Autonomia Erkidego honi eskumen eskusiboa esleitzen zaio *“tituludun lanbideak betearaztean, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluek xedatutakoa alde batera utzi gabe”*.

Hain justu Konstituzioaren 36. eta 139. artikulua horiek dira behar bezala interpretatu behar direnak. Ez dira, *per se*, Estatua gaitzen duten tituluak, baizik eta lanbideen jarduna arautzearen eremuan autonomia-erkidegoen ahalmena mugatzen duten muga espezifikotzat hartu behar dira. 36. artikuluan lege-erreserba ezartzen da eta memoria honetan aurrerago ere aipatuko dugu artikulua hori; 36. artikulua horri dagokionez, beraz, Konstituzio Auzitegiak honako hau xedatu zuen 20/1988 epaian, argi eta garbi: *“Hasteko, onar daiteke 36. artikulua ezin dela ulertu Estatuari legegintza-eskumena esleitzen dion arautzat”*. Konstituzio Auzitegiak berak dio 36. artikuluan aipatzen den Legeak *“Estatukoa izan behar duela profesionalen korporazio publikoen antolamenduaren eta eskumenaren arloko oinarrizko irizpideak finkatzeari dagokionez”*, baina ez du Estatuko legerik eskatzen tituludun lanbideen gairako. Alabaina, Konstituzio Auzitegiaren geroagoko epaietan tituluak eta lanbideak identifikatu egin dira, oker identifikatu ere; izan ere, Konstituzioaren 36. artikuluan



aipatzen den legea Konstituzioaren 149.1.30 artikulua araberako Estatuko legetzat hartu zuten.

139. artikulua lehen zenbakiak espainiar guztien berdintasun-printzipioa ezartzen du Estatuko lurralde osoan, eta bigarrenak, berriz, Espainiako lurralde osoan gizabanakoek askatasunez zirkulatzea eta bertan ezartzea oztopatzen duten neurriak hartzeko aukera eragozten du. Bestela esateko, Konstituzioaren 139. artikuluan ere ez zaio Estatuari esleitzen legegintza-eskumena, Konstituzio Auzitegiak 1998ko uztailaren 23ko epaian argi eta garbi ezartzen denez:

"HAMARGARRENA.- Azkenik, Konstituzioaren 139.1 artikuluan bildutako aurreikuspenaren arabera, "Espainiar guztiek eskubide eta betebeharrak dituzte, estatuko lurraldeko edozein tokitan", baina horri dagokionez, komeni da argitzea, lehenik, horrelako aginduak "premisak edo mugak direla, baina ez eskumen-tituluak" (61/1997 KAE, 7. oinarri juridikoa). Espainiako Konstituzioaren 139.1 artikuluan ezarritako printzipioa Estatuak Konstituzioaren 149. artikulua zenari eta Autonomia Erkidegoek beren estatutuei jarraikiz dituzten eskumenak baliatzeko zeregina mugatzen eta bideratzen duen muga eta jarraibidea da. Estatuak, bere eskumenen eta Lege organikoaren erreserbaren bitartez, "nolabaiteko arau-uniformetasuna bermatu dezake eta bermatu behar du Estatuko lurralde osoan, eta hartara, espainiar guztiek kokapen berdina edo komuna izango dutela zaindu, autonomiaren zilegizko baliatzearen ezinbesteko ondorio diren aldeak –araubide juridikoari dagokionez– gairatuta" (319/1993 KAE, 5. oinarri juridikoa, 122/1988 KAE hitzez hitz aipatuta). Autonomia Erkidegoen kasuan, agindu horrek muga bat ere ezartzen du, baina aintzat hartu behar da "printzipio hori ez dela ulertu behar, inolaz ere, ordenamenduaren uniformetasun zorrotz eta monolitikotzat, betiere uniformetasun horren ondorioz lurraldearen edozein tokitan eskubide eta betebeharrak berdinak izanik" (337/1994 KAE, 19. oinarri juridikoa) eta, bigarrenik, autonomia-erkidegoetako legeriaren aplikazio-eremua mugatua denez lurraldeari dagokionez, legeri horretan zaindu behar den lehenengo gauza zera



*da, Autonomia Erkidego jakin batean bizi diren guztiei tratatu berdina
emango zaiela”*

Berriz esango dugu Legearen aurreproiektu honetan ez direla kirol-arloko titulu akademiko eta profesionalak arautzen, gai horri dagokionez Estatuak bai baitu eskumen argia Konstituzioaren 149.1.30 artikulua araberak; aitzitik, proposatutako lege-testua Estatuan jada arautu diren titulu akademiko eta profesionaletatik abiatzen da.

Nolanahi ere, Estuari dagozkionez kirol-arloko lanbideekin lotutako zenbait eremutako –esaterako, heziketa edo profesionalen elkargoak– oinarritzko eskumenak, Legearen aurreproiektua aplikatzean Estatu legerian xedatutakoa ez da alde batera utziko, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legean finkatutako irizpideari jarraiki.

C.- ARAU-ERREFERENTZIAK. EUROPAKO ERKIDEGOKO ZUZENBIDEA.

Legearen aurreproiektu honetan bildutako proposamenak aztertze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoak kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legea onartzeko zer arau-erreferentzia dituen jakitea komeni da.

Europako Erkidegoaren eremuan, hainbat erreferentzia aipa ditzakegu, baina Lanbide-kualifikazioak onartzeari buruzko irailaren 7ko 2005/36/EE Zuzentaraua esanbidez aipatzearekin nahikoa izango da. Zuzentarau horren arabera, Tratatuaren 3. artikulua 1. zenbakiko c) letran xedatutakoari jarraiki, estatu kideen artean pertsonen eta zerbitzuen zirkulazio libreak dituen oztopoak kentzea da Erkidegoaren helburuetako bat. Oztopoak kentze horren ondorioz, Estatu kide bateko nazionalak aukera dute lanbide-kualifikazioak eskuratu dituztena ez den Estatu kide batean lanbide batean jarduteko, norbere edo besteren kontura.

Lanbide-kualifikazioak Estatu kide batean eskuratu dituztenei lanbide horretan bertan sartzeko eta beste Estatu kide batean –nazionalen eskubide berdinekin– jarduteko aukera ematen die Zuzentarauak; berme horrek ez du esan nahi, ordea, profesional



migratzaileak ez dituenik bete behar azken Estatu kide horrek jarduteko ezar dakizkiokeen baldintzak –ez-diskriminatzaileak–, betiere baldintza horiek objektiboki justifikatuta badaude eta proportzionatuak badira.

Zuzentzarau horrek lanbideen erregulazioa legezkotzen du; izan ere, “*zerbitzuak emateari dagokionez, kontsumitzailearen osasun eta segurtasun publikoa eta babesa zorrotz errespetatuko dituen esparruan emango direla bermatu behar da. Hortaz, araututako lanbideei dagokienez, osasunarekin edo segurtasunarekin lotura duten lanbideetarako xedapen espezifikoak aurreikusi behar dira*”.

Memoria honetan aipatu behar dugu, halaber, Legearen aurreproiektua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentzaurara egokitu dela. Horretarako, batetik, oztopoak kendu dira, hain zuzen ere Batasuneko estatu kideetan profesionalak kokatzeko askatasuna eta zerbitzuen zirkulazio librea eragozten duten oztopoak kendu dira; bestetik, lanbide-zerbitzuen hartzaileei zein zerbitzu-emaleei segurtasun juridiko nahikoa bermatzen zaie Europako Erkidegoa eratzen duen Tratatuako oinarritzko askatasunez eraginkortasunez baliatzeko.

D.- XEDAPENAREN MAILA. LEGE-ERRESERBAREN EDUKIA.

Oso ohikoa da lanbideak erregelamendu bidez arautzen dituzten xedapenak aurkitzea. Horren adibide dugu EAEko Turismoa antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legea; 40. artikuluan “*turismo-lanbideak*” aipatzen dira, eta lanbide horiek “*erregelamenduz*” zehaztuko direla xedatzen da. Irizpide berari jarraitu zaio turismo-lanbideak edo bestelako lanbideak arautzen dituzten Autonomia Erkidegoetako legeetan.

Alabaina, tituludun lanbideetan jarduteari buruzko erregulazioa Lege-erreserbaren printzipioaren eraginpean dago. Izan ere, Espainiako Konstituzioaren 36. artikulua honako hau ezartzen du: “*Legeak lanbide-elkargoen araubidea ezarri eta tituludun lanbideen jarduera arautuko du*”. Eta, bestalde, Estatuko oinarritzko lege bihurtuko den Zerbitzu eta elkargo profesionalei buruzko Legearen aurreproiektuan honako hau



xedatzen da: *“sartzeko mugak lege-mailako arau bidez aurreikusi behar dira”*. Lanbide batean sartzeko kualifikazioetan oinarritutako murrizketak ezartzen badira, Konstituzioaren 35. artikuluan ezarritako lanbidea aukeratzeko askatasuna mugatzen da, eta horregatik, Lege bat behar da. Lanbide-jarduera batean sartzea libre izanik, orain kualifikazio bat eskatzen bada, horrek pertsonen askatasun pertsonala mugatzen du eta, beraz, zentzuzkoa dirudi soilik Lege bidez ezar daitekeela interpretatzea.

Era berean, ezin dugu ahaztu aurreproiektu horren 11. artikuluan xedatzen dena: *“lanbide-jarduera edo lanbide batean jarduteko baldintzak ezarri ahal izango dira baina soilik lege-mailako arau batean horixe xedatzen denean, edo lege-aurreikuspen bat garatzen duen edo Europar Batasuneko zuzenbideko arau bat ekartzen duen xedapen orokor baten bidez”*. Eta aurreproiektuaren 20. artikuluan honako hau ere eskatzen da: lege-mailako arau baten bidez ezarri behar dela profesionalen erantzukizun zibileko nahitaezko aseguruak.

Lanbide libreak aldatzea eta horren antzeko erabaki garrantzitsuak hartzea legegileari dagokiola aintzat hartuta, Konstituzio Auzitegiak honako hau adierazi zuen 1986ko apirilaren 10eko epaian: Konstituzioaren 36. artikulua *“ezartzen duen lege-erreserba profesionalen elkargoen araubide juridikoaren ezarpenari eta tituludun lanbideen jardunari lotuta dago funtsean”* eta honako hau gaineratu:

“Legegileari dagokio, beraz, interes publikoaren eskakizunak eta bizitza sozialak sortutako datuak kontuan hartuta, zehaztea lanbide bat noiz den lanbide eta lanbide horrek noiz uzten dion guztiz libre izateari eta noiz bihurtzen den tituludun lanbide, hau da, jarduteko tituluak edukitzea (goi-mailako ikasketak izatea eta ikasketa horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidez berrestea) eskatzen duen lanbide [...]. Legegileak lanbide berriak sortu ditzake, eta lanbide horien jarduna arautu, kontuan izanik, lehen esan dugunez, tituludun lanbide baten jardunak interes publikoaren irizpidean oinarritu behar duela, eta lanbidea aukeratzeko askatasunaren funtsezko edukia errespetatzea izan behar duela muga”.



Kasu honetan, Eusko Legebiltzarrari dagokio Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide bat noiz den lanbide zehaztea, baita lanbide libre batek noiz bihurtu behar duen araututako lanbide ere; aldiz, lanbide bat noiz den tituludun lanbide edo noiz elkargoetan bildutako lanbide Estatuko legegileak erabaki behar du. Eusko Legebiltzarrari dagokio lanbideak onartzea eta haien jarduna arautzea. Kirol-arloko lanbideen jardunaren erregulazioari dagokion lege-erreserba argia amaitu dugularik, beste kontu bat da aztertzea erregulazioaren zer edukik izan behar duten lege-maila, eta zer eduki gara daitezkeen erregelamendu bidez. Galdera horri erantzuteko, zera argitzea komeni da, Konstituzio Auzitegiaren 1984ko uztailaren 24ko epaiaren arabera, Konstituzioaren 36. artikuluan bildutako Lege-erreserbaren printzipioaren azken esanahia dela *“herritarren askatasun-eremuak haien ordezkarien borondateari jarraiki arautuko direla ziurtatzea, eta beraz, eremu horiek Gobernuaren jardunetik kanpo geratu behar dute”*. Ikuspegi horretatik begiratuta, lanbide-eremu libreak araututako lanbide bihurtzeak lege-maila izan behar du nahiz eta, epai horretan esaten denez, *“horrek ez du esan nahi arauak ezin dutenik erregelamendu-arauetara jo”*. Eusko Legebiltzarrak benetan egin ezin duena zera da, botere betearazlera jo, besterik gabe. Izan ere, Lege-erreserbaren printzipioa ez da interpretatu behar –Konstituzio Auzitegiak 1983ko otsailaren 4ko epaian ohartarazi zuenez– termino absolututan, eremu guztia ez baita derrigorrez Lege bidez arautu behar, baizik eta Lege batek ezarri behar du lanbidearen funtsezko edukia.

Memoria honetan behin eta berriz adierazi dugunez, maiz nahasten dira, alde batetik, lanbideetako jardunaren erregulazioa eta, bestetik, kirol-arloko tituludunak, gutxienez, izan behar dituzten kirol-zentro edo -zerbitzuen erregulazioa. Lege-erreserbak zera esan nahi du, irizpide edo oinarri orokorrak Lege bidez arautu behar direla, baina erregelamendu betearazle bidez garatzea behar-beharrezkoa izaten da, zenbait alderdi zehazteko. Konstituzioak dio legegileak zehaztu behar dituela funtsezko alderdiak, eta Administrazioa jo behar dela alderdi horiek zehazteko. Horrek ez du esan nahi, ordea, lege-erreserbaren printzipioa betetzen ez denik edo eremua legez kanpo geratzen denik.



Aurrekoaren arabera, Legearen aurreproiektu honetan Eusko Jaurlaritzari hainbat ahalmen ematen zaizkio esanbidez, Legearen zenbait alderdi garatzeko. Legean hainbat lanbide esanbidez onartzen dira, izendatu egiten ditu, kualifikazio jakin batzuen eraginpean jartzen ditu, eta horretaz gain, kirolaren kasuistikari egokitutako eskumenen esparru orokorra ere esleitzen die, baina ezin da zehaztasun eta xehetasun handiagotan sartu. Lege-Erregelamendu lankidetzak ezinbestekoa da. Erregelamendu bidezko garapenaren bidez zehaztu behar dira, derrigorrez, honako alderdi hauek: xedapen iragankorren betekizunak eta prozedurak nola zehaztuko diren; kualifikazioen eskakizuna nola ezarriko den, arian-arian, entrenatzailearen lanbiderako; aurreikusitako lanbideak nola egokituko diren Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparru berrira, Bolognako Adierazpenaren ostean; eta abar.

E.- PROIEKTUAREN APLIKAZIO-EREMUA.

a.- Sarrera.

Memoria honetan lehen ere aipatu dugu aurreproiektuaren helburua ez dela kirolarekin lotutako titulu akademikoak eta profesionalak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzea (149.1.30 artikulua). Gainera, lanbideetako jarduna arautzen duen Lege bati ez dagokio kirolarekin lotutako titulu akademiko bakoitzaren eginkizunak zehaztea.

Proposatutako testu artikulatuan, kirol-eremuaren berezko tituludun lanbide batzuetan –ez guztietan– sartzeko eta jarduteko oinarritzko alderdiak arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer lanbide-kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer eremu funtzional esleitzen zaion lanbide bakoitzari. Zenbait kasutan, lanbide-kualifikazio bakar bati dagokion eremu funtzionala izango da, eta beste zenbaitetan, kualifikazio batek baino gehiagok partekatuko dute.

Aurreproiektuan, lanbide batean sartzeko eta jardutea bereizten dira Bi fase horiek guztiz bestelakoak dira, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko



Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioan argi geratu denez, abenduaren 9ko 20/2013 Legearen 19.3 artikuluari dagokionez. Sartzeko aukeraren erregulazioan, lehen instantzian, lanbide batean sartzeko murrizketak dira aipagai –adibidez, lanbide-kualifikazio bat izatean oinarritzen direnak–, baina jardunaren erregulazioan, ordea, lanbidean jada sartu direnek lanbide hori nola garatu behar duten adierazten da, eta honako gai hauei buruzko xedapenak biltzen ditu: aseguruak, zerbitzuak sozietate-egituren bitartez ematea, kode deontologikoa, lehia librean jardutea eta abar.

Noski, proposatu den Legea Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan garatutako lanbide-jardunari baino ez zaio aplikatuko, baina Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den kirol-arloko lanbide-jardun guztia ez da Legearen eraginpean egongo; Euskal Autonomia Erkidegoak izan gabe autonomia-erkidegoan Estatuko edo nazioarteko lehiaketetan parte hartzen duten kirol-taldeak eta kirolarien entrenatzailearen lanbidearen jarduna ezin da Lege honetako aginduen eraginpean egon.

Legearen aurreproiektuan aipatzen da lanbideetan sartzeko eta jarduteko lanbide-kualifikazioak eskatzeak ez duela esan nahi Merkatu-batasuna bermatzeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legean xedatutakoa ez denik bete behar; izan ere, Lege horren inguruan konstituzio-eztabaida egon da, baina Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordio bidez ebatzi da –2014ko abuztuaren 2ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Akordioa–.

Lege honen helburua da autonomia-erkidegoetako edozein araudiren babesean emandako zerbitzu oro Espainiako lurralde osoan eskaini edo eman ahal izatea, izapide gehigarriak egin behar izan gabe, zenbait kasutan izan ezik. Estatuan jardun ahal izateko autonomia-erkidegoetako hamazazpi erregulazio bete behar izatearen kostua desagerrarazi nahi da. Xedapen horren oinarri juridikoa Konstituzioaren 139.2 artikuluan jasota dago; horren arabera, *“(E)zin du inolako agintarik neurririk hartu, baldin eta neurri horiek, zuzenean edo zeharka, oztopatzen badute Espainiako*



lurralde osoan gizabanakoek askatasunez zirkulatzea eta bertan ezartzea, eta ondasunek askatasunez zirkulatzea”.

Irizpide hori jada jasota zegoen, modu batera edo bestera, Eusko Legebiltzarrak onartutako legerian. Adibidez, Turismoa antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 40. artikuluan –apirilaren 23ko 7/2012 Lege bidez aldatu ostean– zera xedatzen da, *“Beste autonomia-erkidego batzuetan kokatutako zerbitzu-emaileek askatasunez gauzatu ahal izango dute beren jarduera, etengabe nahiz aldi baterako, Euskal Autonomia Erkidegoan”.*

Merkatu-batasuna bermatzeari buruzko Legearen –Kataluniako Gobernuak eta Parlamentuak, Andaluziako Gobernuak eta abarrek konstituzio-kontrakotasuneko hainbat errekurtsio aurkeztu dituzte lege horren aurka– 19.3 artikuluan honako hau xedatzen da: *“(X)ede-tokiko araei jarraiki, operadore ekonomikoei edo ondasunei baldintzak, kualifikazioak, aldez aurreko kontrolak edo bermeak eskatzen bazaizkie, eta ez badira jatorrizko tokiko araudiaren babesean eskatu edo lortutakoen berdinak, azken horiek erabat baliozkoak direla onartuko dute agintari hartzaileek, norainokoa edo zenbatekoa desberdina izan arren. Halaber, askatasunez gauzatu ahal izango da jatorrizko tokiko araudian ezein betekizunik, kontrolik, kualifikaziorik edo bermerik eskatzen ez bada ere”.* Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioari jarraiki, *“azken horiek erabat baliozkoak direla onartuko dute agintari hartzaileek”* tarteki horrek esan nahi du *“agintari hartzaileek erabat baliozkotzat joko dituztela jatorrizko agintariek jarduera ekonomiko bati ekiteko eskatzen dituzten baldintzak, kualifikazioa, aurretiazko kontrolak edo bermeak. Nolanahi ere, onarpen horrek ez du eraginik izango agintari hartzaileek euren lurraldean ezarria duten jarduera-erregimenaren gainean”.*

b.- Lanbideak.

Lanbideen konfigurazio juridikoari esker, bi aukera daude: lanbideak libreak izan daitezke, baita arautuak ere. Printzipio orokorra honako hau da: hasieran, lanbide guztiak libre dira; eta lanbide bat arautzeko baldintza izango da Konstituzioan bildutako



interes publikoak gertatu behar direla. Konstituzio Auzitegiak honako hau adierazi du 42/1986 epaian:

“...legegileari dagokio, beraz, interes publikoaren eskakizunak eta bizitza sozialak sortutako datuak kontuan hartuta, zehaztea lanbide bat noiz den lanbide eta lanbide horrek noiz uzten dion guztiz libre izateari eta noiz bihurtzen den tituludun lanbide, hau da, jarduteko tituluak edukitzea (goi-mailako ikasketak izatea eta ikasketa horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidez berrestea) eskatzen duen lanbide [...]. Legegileak lanbide berriak sortu ditzake, eta lanbide horien jarduna arautu, kontuan izanik, lehen esan dugunez, tituludun lanbide baten jardunak interes publikoaren irizpidean oinarritu behar duela, eta lanbidea aukeratzeko askatasunaren funtsezko edukia errespetatzea izan behar duela muga”.

Kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko aukera arautzeko, kirol-arloko lanbideak tituludunak izango diren edo ez diren izango erabaki behar da. Aurreproiektuan ez dira tituludun lanbideak arautzen, hau da, *"jarduteko tituluak edukitzea (goi-mailako ikasketak izatea eta ikasketa horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidez berrestea) eskatzen dutenak"* (42/1986 KAE). Tituludun lanbidea honako elementu hauek eratzen dute: formalki lanbidetzat onartuta dagoen lanbide-jarduera erabakitzea, goi-mailako hezkuntzako titulu akademikoak zehaztea, eta lanbidearen eta goi-mailako hezkuntzako titulu akademiko horren arteko lege-lotura ezartzea.

Legearen aurreproiektuan ez dira hiru elementu horiek agertzen, zeren, kirol-arloko hainbat lanbide finkatzen dituen arren eta haien funtzio-eremu orokorra ere ezartzen duen arren, ez baitu eskatzen goi-mailako hezkuntzako titulu akademiko ofizial bat izatea. Legearan lanbide-kualifikazioak eskatzen dira, eta kualifikazio horiek titulu akademiko baten bitartez –ez du goi-mailako hezkuntzako izan beharrik– egiazta daitezke, profesionaltasun-ziurtagiri baten bitartez, Administrazioak formalki onartutako lanbide-esperientziaren bitartez, eta abar. Irizpide horri jarraiki, lanbide-kualifikazioak



egiaztatzen dituzten titulu ofizialen sortan badira goi-mailako hezkuntzakoak ez diren tituluak; hala nola, Landa-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritzako teknikariaren titulua edo dagokion kirol-modalitateko kirol-teknikariaren titulua.

Legearen aurreproiektu honetan, beste lanbide batzuk arautzen dituzten Legeetan bezalaxe, lanbide-kualifikazioak eskatzearen alde egin da, eta kualifikazio horiek unibertsitateko titulu akademikoen bitartez ez ezik, titulu ez-akademikoen bitartez, goi-mailakoa ez den hezkuntzako tituluen bitartez ere egiazta daitezke, besteak beste.

Bada memoria honetan nahitaez aipatu beharreko beste alderdi bat: lanbide-kontzeptua. Lanbideak arautzen dituzten lege-testuen atarikoetan onartuta dago lanbide-kontzeptua funtsean soziologian oinarrituta garatu dela, hainbat premisaren arabera (prestakuntza, autonomia, nork bere burua antolatzeko ahalmena eta abar); eta esan gabe doa horietako zenbait krisian egon daitezkeela gaur egun. Gizartea bera ez ezik, zerbitzu profesionalak emateko moduaren antolaketa ere aldatu egin da eta, horren ondorioz, lanbidearen orain arteko kontzeptua eta lanbide-jardun indibiduala itxuraldatu egin dira. Zenbait prestazio profesional lan- edo funtzionario-kontratupeko mendetasun-harremanetan ematen dira, edo profesionalen sozietateak ere onartu dira; besteak beste, bi faktore horiek aintzat hartuta, lanbidearen kontzeptua bera berraztertutik egin behar dira, eta gaur egun inork ez du zalantzan jartzen badirela zenbait lanbide, baita kirol-arlokoak ere, mendetasun handiko harremanetan gauzatzen direnak, edo autonomia nahiz nork bere burua antolatzeko ahalmen eskasa dutenak.

Horregatik guztiagatik, argi dago gaur egun nahasmendu eta zailtasun handia dagoela arautu behar diren lanbideak, oro har, zeintzuk diren edo zeintzuk izan beharko luketen identifikatzeko garaian. Eta kirolaren munduan ere, zalantzarik gabe, badago zailtasun hori; izan ere, memoria honetan behin eta berriz esan dugunez, lanbideak eta titulazioak nahastu egiten diren kirolaren arloan, edo bestela, lanbideak eta lanpostu, okupazio edo eginkizunak. Europako Batzordeak aginduta, Kirol Zientzietako Institutuen sareak *“Kirola eta enplegua Europan”* azterlana (1999) egin zuen, eta lan horren arabera: *“lanbide bat lanbide dela esan daiteke gizartean onartuta dagoenean, honako elementu hauek badituelako: berezko erakunde profesionala (sindikatura edo erakunde profesionala); prestakuntza espezifiko bat edo batzuk; lege onartzeko modu*



bat (titulu ofiziala, lanbide hori aipatzen duen hitzarmen kolektibo bat, eta abar)”. Alabaina, lanbideak mugatzeko legegintzako proposamen honetan ez dira aintzat hartu eskakizun horietako zenbait; berezko erakunde profesionala izatea ez da lanbide bat onartzeko alde aurreko premisa; zenbaitetan, onarpen horren ondorio juridikoa da, ez *prius* bat. Entrenatzailearen lanbidea, gaur egun eratuta dagoen moduan, XIX. mendetik dago onartuta, eta hala ere, ez du erakunde profesionalik behar. Aurreproiektuan egiten den legegintza-proposamena bi premisatan oinarritzen da: prestakuntza akademiko espezifikoa duten lanbide-jarduerak izan behar dute, erakunde profesionalik izan ala ez izan; eta nortasun edo gizartearen onarpen historikoa duten lanbide-jarduerak izan behar dute.

c.- Kirola.

Kirol-arloko berezko lanbideen jarduna arautzeko, noski, *“kirola”* esaten zaion eremu material hori zein den mugatu behar da. Gaur egun kirol-arloan dauden lanbideen artetik, kirol profesionalarekin lotutakoak nabarmentzen dira, batik bat, kirol-ikuskizunen ingurukoak. Kirol-fenomenoaren sektore horrek benetako ekonomia bat eragin du, hamaika lanbide-jardura biltzen dituela: entrenatzaileak, kirolariak, arbitroak eta abar.

Baina kirolaren unibertsoa ez da mugatzen soilik ikuskizunaren eremu merkantilizatuenera, goi-mailako kirolaren eremura edo eremu profesionalera; izan ere, kirolaren polikromia dela-eta, lanbide-jarduerak eragiten dituzten beste kirol-adierazpen ugari ere badira. Kirolak biztanleriaren sektore garrantzitsu baten eskaerari erantzuten dio, kirola aisialdirako, ongi pasatzeko, jolaserako, estetikarako edo, besterik gabe, bizimodu osasungarria izateko tresnatzat hartzen baitute. Eta kirolaren dimentsio horiek ere lanbide ugari sorrarazten dituzte.

Kirol-arloan kualifikazioak eskatzeari dagokionez, aurreproiektuan eskakizun hori ez da mugatzen kirol-entrenamenduko edo -irakaskuntzako jardueretara, baizik eta *“zuzendaritzako”* jarduerak ez ezik, *“gorputz- eta kirol-jarduerekin lotura duten beste guztiak”* ere hartzen ditu eraginpean. Legearen aurreproiektu honetan arautzen diren



lanbideak, funtsean –eta beste sailkapen batzuk ere egin litezkeela aintzat hartuta–, honako sektore hauetan multzoka daitezke:

- Hezkuntza-eremua. Kirol-eremuaren berezko lanbideak gure hezkuntza-sisteman sartzen diren etapa, ziklo, gradu, ikasturte eta maila guztietako Gorputz Hezkuntzako irakaskuntzak: haur-hezkuntzan, lehen hezkuntzan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan, lanbide-heziketan eta abar. Irakaskuntzako lanbideak nazioartean onartuta daude.
- Lehiaketa-eremua. Lehiaketazko kirolaren eremua da profesionalak eskatzen dituen oinarritzko sektoreetako bat. Noski, lehiaketazko kirolaren barruan oso bestelako errealitateak biltzen dira. Lehiaketa profesionalean edo goi-mailako lehiaketan zuzenean kirolarekin lotutako alderdietan goi-mailako espezializazioa duten profesionalak behar dira (entrenatzaileak, kirolariak, psikologoak, medikuak eta abar). Erdi-mailako kirol-lehiaketan –maila horretan sartzen dira lizentzia duten kirolarien ehuneko oso handi bat– ere profesionalak behar dituzte, baina beste kualifikazio bat dutenak. Oinarritzko mailako kirol-lehiaketak beste kualifikazio bat eskatzen du.
- Aisia-eremua. Aisia-eremuko adierazpen guztiak (osasunari edo estetikari begirakoak, aisialdia okupatzeko baino ez direnak eta abar) hedatu dira gehien, eta profesionalak jarduteko esparru garrantzitsua eskaintzen du. Sektore honetan profesionalak ugaritzearen arrazoi izan daitezkeen hainbat faktore daude. Guztiontzako kirolak gora egin du, eta historikoki presentzia txikia izan duten kolektiboak (emakumeak, adinekoak, desgaituak eta abar) kirol-jarduerak egiten hasi dira, arian-arian; halaber, kirolari izandakoek ere helduaroan kirol-jarduerari eutsi nahi izaten diote, gero eta gehiago. Zirkunstantzia horien guztien ondorioz, aisia-eremuko kirol-jardunak gora egin du, nabarmen. Era berean, abentura-kirolak, arrisku-kirolak edota natura-inguruneko kirolak egiteko gero eta interes handiagoa izateak eta estetikako, osasun-arloko edo ongizate pertsonaleko arrazoien ondorioz norberaren gorputzari balio handiagoa emateak kirolaren azpisektore hori indartu dute, eta profesional asko



eta asko egotea eragin dute, baina horietako ugarik ez du prestakuntza egokirik.

- Kirol-zuzendaritzaren eremua. Eremu honetan ere badira, zalantzarik gabe, kirol-arloko profesional asko eta, kirol-instalazioetako edo kirol-erakundeetako kudeatzaileen kasuan ez bezala, haien lanbide-jardueran gorputz- eta kirol-zientziak aplikatzen dituzte.

Lanbideak arautzeari buruzko gai honetan, ongi bereizi behar dira, alde batetik, “*kirolarekin lotutako lanbideak*” –hamaika direla– eta bestetik, “*kirolaren lanbideak*”; azken hauek dira Lege berrian landu behar direnak. Irizpide hori agertzen da lehen aipatu dugun azterlanean; hain zuzen ere, Europako Batzordearen X Zuzendaritza Nagusiak, Kirol Zientzietako Institutuen Europako Sarearen eta Kirol Enpleguaren Europako Behatokiaren laguntzarekin egindako “*Kirola eta enplegua Europan*” (1999) azterlanean. Aurreproiektu hau ez dator bat Europako azterlan horretan egiten den banaketarekin, baina hala ere, aipatuko dugu dokumentu horretan “*kirolaren lanbideak*” bost multzo handitan banatzen direla:

- kirolariak
- kirol-epaileak
- kirol-animatzaileak
- kirol-monitoreak
- kirol-entrenatzaileak

Hainbat arrazoiengatik, Legearen aurreproiektuan ez dira arautzen EAEko kirolaren inguruko lanbide guztiak –kirol-eremuan espezializatutako medikuak, psikologoak, abokatuak, fisioterapeutak edo nutrizionistak–, baizik eta kirolaren barruan sortzen direnak; kirolaren barruko lanbide horietan, gainera, gorputz- eta kirol-jardueren zientzietako jakintza eta teknikak aplikatu behar izaten dira. Lehen aipatu ditugun lanbideetan, kirola profesional horien espezializazioko eta jardunerako arlo bat baino ez da, elementu osagarri bat euren lanbide-jardueran; hortaz, ez da euren lanbide-jarduerako elementu erabakigarri edo funtsezkoena.



Legearen aurreproiektuan ez dira arautzen kirol-arloko lanbide espezifiko guztiak. EAEko legegileak arautu gabe utz ditzake kirol-arloko berezko lanbide jakin batzuk. Lege-aukera horri jarraiki, aurreproiektuan arautu gabe geratu dira kirol-arloko lanbide ugari (kirolari profesionalak, arbitroak, kirolarien agente edo bitartekariak eta abar). Kirol-eremuan tradizio handiko lanbideak dira, baina kasu horietan kirolarien osasuna eta segurtasuna ez da arriskuan egoten. Noski, horrek ez du esan nahi Lege honen aplikazio-eremutik at geratu diren lanbide-jarduera horiek ez dutenik arau eta baldintzarik bete behar. Zenbait kasutan, beste arau sektorial batzuk izan ditzakete, lan-arlokoak edo federaziokoak. Esate baterako, Kirolari profesionalen lan-harreman berezia arautzen duen 1006/1985 Errege Dekretua, edo kirolarien agenteei buruzko federazioaren araudia.

Lege osoan, honelako esamoldeak ez erabiltzeko ahalegina egin da: “*gorputz- eta kirol-jarduera*”, “*gorputz-hezkuntza, jarduera fisikoa eta kirola*” eta antzekoak. Indarrean dagoen 14/1998 Legearen eta Autonomia Erkidego gehienek irizpideari jarraiki, “*kirol-arloa*” erabili da, arlo horretan sar daitezkeen askotariko errealitateak biltzeko asmoz. Aurreproiektuan, kirola zentzu zabalean ulertzen da. Lege honen ondorioetarako, “kirol” terminoak bere barnean hartzen ditu kirol-arloko legerian jasotzen diren gorputz- eta kirol-adierazpen guztiak, eta ez da bakarrik mugatzen ofizialki onartutako modalitate eta diziplinetara. Horren ondorioz, “kirol” terminoak gorputz- eta kirol-jarduera guztiak biltzen ditu, kirol federatuan, eskola- eta unibertsitate-kirolean, guztiontzako kirolean, aisialdiko kirolean edo beste egitura batzuetan egiten direnak, berdin izanik jarduera horien helburua zein den: gorputz-hezkuntza, lehiaketa, kirolean hastea, kirola egiten ikastea, errendimendua, osasuna, jolasa, aisia edo antzeko helburuak.

d) Sektore publikoa eta pribatua.

Legearen bitartez, norberaren eta besteren konturako lanbide-jarduna arautzen da, eta lanbidean sektore publikoan zein sektore pribatuan jardutean aplikatu behar da. Era berean, Legea nahitaez bete beharrekoa izatea eskatu ahal izango da lanbide-jarduerak garatzen diren erakundeen tipologia edo izaera edozein izanik ere.



Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzerdeak, 2008ko uztailaren 30ean, Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeari dagokionez, eskumenekin lotutako desadostasunak aztertzeko eta konponbidea proposatzeko Erabakia hartu zuen, eta horren arabera, bi aldeek uste zuten sektore publikoan kiroleko lanbideak betetzea aipatzen denean, erreferentzia hori Generalitatearen eta Kataluniako tokiko administrazioen sektore publikoaren eremuari atxikita ulertu behar dela. Aurreproiektuan ere irizpide horri jarraitu zaio, baina EAEko sektore publikoari dagokionez.

e) Jardun profesionala. Boluntarioak.

Legearen aurreproiektuan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukera arautzen da, baina erregulaziotik at geratu dira kirol-boluntarioek egindako kirol-arloko jarduera teknikoak, hau da, profesionalak ez direnak. Lege honen ondorioetarako, jardun profesionala da zerbitzuak ematea, ordainduta, baina hortik kanpo geratzen dira boluntario-harremanen esparruan gauzatzen den jarduera eta adiskidetasuneko, familiarreko edo ongintzako harremanen baitan garatzen dena. Irizpide horri jarraitzen zaio lehen aipatu dugun azterlanean; hain zuzen ere, Europako Batzordearen X Zuzendaritza Nagusiak, Kirol Zientzietako Institutuen Europako Sarearen eta Kirol Enpleguaren Europako Behatokiaren laguntzarekin egindako *“Kirola eta enplegua Europan”* (1999) azterlanean, *“kiroleko lanbideak kategorian sartzen baititu ordainpeko kirol-jardueran jarduten duten pertsona guztiak”*. Dokumentu horren arabera, *“zirkulazio libreaki buruzko Europako zuzentzauei jarraiki, lanbide bat lanbide da ordainsari baten truke egiten denean”*.

Egia da kirol-arloko boluntarioek eginkizun biziki garrantzitsua betetzen dutela kirolaren esparruan, batik bat, entrenatzaile eta monitoreen bitartez, baina kirol-jarduerak modu altruistan eta eskuzabaltasunez, ordainsaririk jaso gabe edo jarduerak eragindako gastuak ordaintzeko konpentsazio txikien truke egiten dituztenak ezin dira sartu jardun profesionala arautzen duen Lege baten aplikazio-eremuan.



Profesionalak lanbidean sartzeko eta jarduteko modua arautzen du Lege honek, eta legearen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira boluntarioek eta antzekoek egiten dituzten jarduerak. Hala ere, aurreproiektuan xedatzen denez, Administrazio publikoek eta eskumena duten gainerako erakunde publiko edo pribatuak ezarri beharko dituzte, erregelamendu bidez, boluntarioek kirol-jardueretan parte hartzeko bete behar dituzten kualifikazio-baldintzak. Parte-hartzaileen osasuna eta segurtasuna bermatze aldera, lege honek profesionalentzat ezartzen dituen baldintza berberak ezarriko dituzte boluntarioentzat ere. Ez litzateke ulergarria izango profesionalen eta boluntarioen zerbitzu berdinak jasotzen dituzten herritarrek babes-maila txikiagoa izatea osasunari eta segurtasunari dagokienez, boluntarioen gidaritzapean, kontrolpean edo aholkularitzapean ari direnean.

f) Kanpo utzitako jarduerak.

Legearen aurreproiektuaren artikuluetan, aplikazio-eremutik esanbidez kanpo utzi dira kirolarekin lotura duten zenbait lanbide-jarduera. Antzeko beste legegintza-proiektuen baten izapidetze-prozesuan honako hau iradoki izan da, entzunaldiaren izapidean: *“Legea bete behar izateari buruzko salbuespenak xedapen gehigarrietan ager daitezela”*. Kasu honetan ezinezkoa da iradokizun hori betetzea, ez baitago, berez, Legea bete behar izateari buruzko salbuespenik, baizik eta Legearen aplikazio-eremuaren mugaketa negatiboa.

Legearen aplikazio-eremutik kanpo utzitako lanbide-jardueretako bat da urpekaritza profesionala edo kirol- nahiz aisia-arlokoa ez den urpekaritza. Lanbide-jarduera horrek berezko araudia izan du eta ez du kirol-administrazioak egin.

Aplikazio-eremutik at geratu dira, halaber, kirol-arlokoak ez diren salbamendu- eta laguntza-jarduera profesionalak. Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean aurreikusitako *Jarduera Fisikoak eta Kirolak* lanbide-arloaren barruan *“Ur-instalazioetako sorospena”* lanbide-kualifikazioa dago. Dena den, Legearen aurreproiektuan soroslearen lanbidea ez arautzea erabaki da. Soroslearen eginkizun



orokorra zera da, igerileku, hondartza eta bestelako ur-inguruneetan erabiltzaileen segurtasuna zaintzea, potentzialki arriskutsuak izan daitezkeen egoerak prebenituta eta istripu bat edo larrialdi-egoera bat gertatuz gero, modu eraginkorrean esku hartuta. Jarduera hori eremu publikoan naiz pribatuan garatzen da (udalak, kirol-zerbitzuetako azpiegitura pribatuak, turismo-enpresak eta abar), askotariko ur-jardueretarako espazioetan, hau da, ez dago ezinbestean kirolarekin loturik; kirol-igerilekuetan, ohiko aisia-igerilekuetan, igerileku naturaletan, ur-parkeetan, parke tematikoetan eta abarretan garatzen da. Lanbide-jarduera produkzio-sektore oso desberdinetan (kirola, hezkuntza, turismoa, aisialdia edo denbora libre) garatzen da. Legearen aurreproiektuaren xedea da kirol-arloko lanbideak arautzea, hau da, kirol-arloan berezkoak direnak, eta esan gabe doa soroslearen lanbidea kirol-instalazioetan gara daitekeela, baina baita hondartza, erreka edo parke tematikoetan ere; alegia, berez kirol-arlokoak ez diren eta kirolarekin loturarik ez duten instalazioetan. Kirolean agertzen diren beste lanbide batzuen kasuan jarraitutako irizpide berari jarraitu zaio. Masajista batek, fisioterapeuta batek, mediku batek edo mantentze-lanetako teknikari batek ere kirol-instalazioetan egin dezake lan, baina ez dira kirol-arloaren berezko lanbideak edo lanbide bereizgarriak.

Kirol-arlokoa ez den paraxutismoko lanbide-jarduerak ere ez dira sartzen Legearen aplikazio-eremuan, paraxutismoa kirolari zorrotz dagozkion esparruetatik kanpo ere garatzen baita, hala nola, esparru militarrean.

Aurreproiektuaren aplikazio-eremutik kanpo geratu dira, era berean, motordun gailu edo ibilgailuak gidatzean oinarritzen diren lanbide-jarduerak, betiere kirol-arlokoak ez badira.

Irizpide berari jarraiki, Legearen aplikazio-eremutik at utzi dira kirol-arlokoak ez diren laketontziak maneiatzeko edo gobernatzeko lanbide-jarduerak. Orokorrean onartuta dago kirol-jarduera nautikoak bereziak direla eta beste itsas kirol-jardurekin alderatuta, desberdintasunak dituztela. Beste errealitate bat da, eta sektore horri lotutako lanbideetan jarduteari dagokionez, errealitate horren erregulazioak ere beste ordenamendu bat izatea eskatzen du. Jarduera nautikoak araubide berezitua eta berezia du, eta eremu horretan tratamendu berezitua izatea komeni da, berezitasunak



aintzat hartuta. Lanbide-jarduna kirol-sektore nautikoan garatzen dutenak arau-erregimen berezituaren eraginpean daude, nabigazioan segurtasunaren gutxieneko estandarrak bermatzearren. Horregatik, kirol-jarduera nautikoak egiteko baldintzetako bat “*titulu nautikoa*” lortzea da, hau da, ontzi jakin batzuk gobernatzeko pertsonak gaitzen dituen titulua (yateko kapitaina, yateko patroia, itsasontziko patroia, oinarritzko nabigaziorako patroia, moto nautikoko patroia eta abar).

Sektoreak eskatzen duen arren, kirol-instalazioetako edo kirol-erakundeetako kudeatzailearen jardueren erregulazioa aurreproiektutik at utzi da, esanbidez. Kirol-kudeatzailearen lanbidean ez dira jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako jakintza eta teknikak aplikatu behar. Kirol-instalazioak edo kirol-erakundeak kudeatzen dituenak jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziekin loturarik ez duten lanbide-kualifikazioak egiazta ditzake.

Bukatzeko, testu artikulatutik kanpo utzi dira Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako Indar Armaturen zentroetako prestakuntza fisikoko lanbide-jarduerak. Horren arrazoia zera da, Legearen bitartez EAEko sektore publikoko lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukera arautu nahi dela.

Are gehiago, kanpoan geratu diren eremu horiek, hala badagokie, kiroletik kanpoko eskumen-tituluetatik arautu izan dira, eta horrek berretsi egiten du sektore hori aurreproiektuaren aplikazio-eremutik at uzteko irizpidea.

F.- LEGEAREN IZENBURUA.

Araugintza-teknikaren jarraibideen arloan, behin eta berriz nabarmendu izan da Lege baten izenburua lege-testuaren zati garrantzitsua dela, legea bera identifikatzeko, interpretatzeko eta aipatzeko aukera ematen duen aldetik. Tituluaren hasieran zer xedapen mota den identifikatu behar da: Legearen aurreproiektua, Dekretuaren proiektua eta abar. Kasu honetan, argi dago testu hori “*Legearen aurreproiektutzat*” onartu behar dela Gobernu Kontseilura helarazi baino lehen; organo horrek “*Legearen proiektutzat*” onartuko du, eta Eusko Legebiltzarrera bidali, izapidetzeko.



Xedapenaren izena izenburuaren zati bat da, eta xedapen horren edukia eta xedea adierazten ditu; zati horrek, halaber, xedapena identifikatzeko aukera ematen du, baita funtsezko edukia deskribatzeko ere. Orokorrean onartutako araugintza-teknikaren jarraibideen arabera, izena argi eta labur idatzi behar da, identifikatzeko edo aipamenak egiteko desegokiak izan daitezkeen deskribapen edo luzapenak alde batera utzita.

Legearen aurreproiektu honen izenburuan aldaketaren bat txertatu da Kataluniako 3/2008 Legearen aldean. Alde batetik, aplikatuko den lurralde-eremua aipatzen da, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoa, beste Lege batzuen irizpide berari jarraiki; hala nola:

- 1/2010 Legea, martxoaren 11koa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzekoa.
- 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema antolatzekoa.
- 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa.
- 11/2012 Legea, ekainaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxena.
- 15/2008 Legea, abenduaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan zenbait irakasle kidego sortzekoa.
- 6/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei buruzkoa.
- 2/2008 Legea, maiatzaren 28koa, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen hirugarren aldaketarena.



- 11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.
- 6/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Ondareari buruzko azaroaren 17ko 5/2006 Legea aldatzekoa.
- 7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa.
- 10/2006 Legea, abenduaren 29koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoari buruzkoa.
- 7/2006 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Museoei buruzkoa.
- 4/2013 Legea, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen dituenak.

Era berean, Legean kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukera aipatzea erabaki da, memoria osoan aipatu ditugun arrazoiengatik. Bai sartzea, bai jardutea, bi errealitate desberdin dira.

Azkenik, *kirol* terminoa erabili da, fenomeno sozial hori zentzu zabalenean interpretatuta eta jarduera mota guztiak biltzen dituela. Lehen ere aipatu dugu legegintzako aukera hori babesten duten oinarriak eta irizpideak ugari direla. Kirolaren eskumen-tituluaren izena bera (Autonomia Estatutuaren 10.36 artikulua), gaian eskudunak diren organismoen izena (Kirol Kontseilu Gorena, Kirol Zuzendaritza Nagusia, Kirol Idazkaritza Nagusia, Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirolak Zuzendaritza, Kirolaren Euskal Kontseilua eta abar), dokumentu estrategikoen izena (Kirolaren Euskal Plana), edo autonomia-erkidegoetan onartutako kirol-legeen izenak ikusita, "*kirol*" terminoan adierazpen asko eta askotarikoak biltzen direla ulertzen da. Hau da, ez dagokio soilik kirol-modalitate eta -diziplinen eremuari.

G.- PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA PROPOSAMENAK.

**a) Aldez aurreko kontsiderazioak.**

Lehen ere esan dugunez, araugintza-teknikaren jarraibide horiei jarraiki, legegintza-proiektu bakoitzarekin batera memoria bat ere aurkeztu behar da; memoria horretan, proiektuaren azterketa zabalagoa egin behar da, lege bidez erantzun nahi den egoera edo arazoa zein den ez ezik, dauden aukera guztiak eta proposatutako aukeren alde egitea gomendatzen duten arrazoiak zeintzuk diren ere aintzat hartuta, baita proposatutako erregulazioak antolamenduan eta/edo finantza-arloan izango duen eraginaren aurreikuspena ere.

Hain justu, eskakizun horri erantzungo diogu atal honetan, Legearen aurreproiektuaren zirriborroan dauden proposamenak justifikatzeko memoriaren atal honetan.

b) Lanbideak arautzeko askatasun-marjina. Erregulazioak jarduera ekonomikoan duen eragina.

Lehen ere esan dugunez, orain arte, kirol-arloko lanbideak arautu gabe egon dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Irakaslearen lanbideak –baina ez, berariaz, Gorputz Hezkuntzako Irakaslearenak– erregulazio partziala baino ez du, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Legearen bitartez.

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetako jarduna arautzeko garaian, galderak bata bestearen atzetik sortzen dira: noiz har dezakegu lanbide bat lanbidetzat? zer instantziak du errealitate hori erabakitzeke eskumenik? noiz bihur daiteke lanbide guztiz libre bat tituludun lanbide? legegileak sor al ditzake lanbide berriak eta lanbide horien jarduna arautu?

Hasteko, Konstituzio Auzitegiak 1984ko uztailaren 24ko epaian egindako interpretazioa aipatu nahi dugu: *“lanbide-jardunaren erregulazioa, Konstituzioaren beste agindu batzuen kontrakoa ez den heinean, legegileak egin dezake komenigarritzat hartzen dituen baldintzetan”*. Bestela esateko, dena delako Parlamentuari dagokio kirol-arloko lanbideak arautzeko marjina zabal hori. Noski, EAEko legegileak ez du erabateko



askatasunik edozein lanbide libre tituludun lanbide bihurtzeko. Aldaketa hori egiteak askatasun pertsonala murriztea dakar, eta hori Lege bidez baino ezin da egin, interes publikoak eskatzen duenean.

Horrelako proiektu bati aurkez dakizkiokeen objekzioetako bat zera da, jarduera ekonomikoa itxuraldatu dezakeela eta kirol-arloko lanbideen erregulazioa –beste lanbide guztiena bezalaxe– gehiegizkoa izan daitekeela, kostuak etekinak baino handiago izatea eraginda. Zenbait gobernu-organo, oro har, lanbideak arautzearen kontrako izaten dira, arrazoi horregatik, eta ikuspegi horixe bera aipatzen dute, adibidez, ekonomia-eremuan eskudunak diren gobernu-organoek. Objekzio horren aurrean, kirol-arloko lanbideak aurreproiektuaren bitartez arautzeak ustezko alde txarrak baino alde on gehiago eta garrantzitsuagoak dituela esan behar dugu:

- a. Osasunarekin, segurtasunarekin eta kontsumitzaile eta erabiltzaileak defendatzearekin lotutako arrazoiengatik arautzeko premia botere publiko guztiek onartzen dute, estatuko nahiz autonomia-erkidegoko, baita Konstituzio Auzitegiak ere. Eta ondasun juridiko horiek, zalantzarik gabe, jarduera ekonomikoaren ustezko desitxuratzea baino balio edo garrantzi handiagoak dira.
- b. Ez dago alternatiba juridikorik erregulazioarentzat. Kirol-arloko zerbitzu profesionalen eremu zabalean osasun- eta segurtasun-arazoei konponbide egokia bilatzea oso zaila da, baldin eta lanbidean sartzeko eta jarduteko aukera antolatzen ez bada.
- c. Ministerioren batek iradoki zuen arazo hori kirol-federazioetatik arau zezatela, baina hori ez da egingarria, ez baitugu ahaztu behar kirolaren unibertsoan ez direla federatutako lehiaketak soilik sartzen; Euskal Autonomia Erkidegoan, kirol asko egiten da, lehiaketetan nahiz lehiaketetatik kanpo: osasunarekin, aisialdiarekin edo jolasarekin lotutako arrazoiengatik egiten dena; unibertsitateko kirola, eskolako kirola, beste egitura batzuek antolatutako lehiaketazko kirola eta abar. Osasunarekin eta segurtasunarekin lotutako problematika guztia eta



zerbitzu profesionalen segurtasuna federazioek arautu behar badute, akats larria izango da; tokiko korporazioek, kirol-zentro pribatuek, ikastetxeek, enpresek eta abarrek sustatutako kirolaren gainerako errealtate guztiak baztertuta geratuko dira.

- d. *“Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Lanbideak Antolatzeko eta Erreformatzeko Programa Nazionalea”² azterlanaren arabera, kirol-arloko zenbait lanbideren jarduna arautzeak “eragin oso positiboa izango du produkzio-faktoreetan, merkatuetan eta enpresa-ingurunean, zerbitzuen kalitatea eta segurtasuna areagotu egingo delako, baita giza kapitala ere, jarduera fisikoaren eta kirolaren maila eta ingurune profesional guztietan. Eremu sozio-ekonomiko horren erregulazioa eta lehia ahalbidetuko du. Administrazio Publikoaren eraginkortasuna areagotuko du kirol-arloko instalazio eta jarduera fisikoak eskaintzen dituenen eta, batik bat, erabiltzaileen segurtasunaren eta eskubideen mesederako izanik. Lan-merkatua hobetu eta handitu egingo du, prestakuntzan egindako inbertsioa errentagarri bihurtuko baita produktibitatea handitu eta enpleguak gora egin duelako...”. Txosten horren ondorioei jarraiki, zalantzarik gabe, horrelako erregulazio bat gainkualifikazio-egoera zuzentzeko lagungarri izango da; izan ere, zuzenketa horri esker, gure produkzio-sistema hobetuko baita. Aldi berean, behar baino kualifikazio gutxiagoko egoera amaitzeko ere lagungarri izango da, eta kontuan izan behar dugu egoera hori oso arriskutsua dela profesional horien zerbitzuak jasotzen dituztenen osasunerako eta segurtasunerako.*

Egia da kualifikazioaren eskakizunak, subjektiboki begiratuta, lanbide edo ogibide batean libreki jarduteko eskubidea mugatzen duela. Objektiboki begiratuta, oztopo bat da, jarduera horretan sartzeko aukera mugatzen duen oztopoa eta, beraz, zerbitzuak izan ditzakeen eskaintzaileen kopurua murrizten du. Alabaina, Lehiaren Defentsarako

² Azterlanaren egilea Rafael Martín Acero jauna da, Kirolaren eta Gorputz Hezkuntzaren Zientzien Fakultateko dekanoa (GHIN Galizia) eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Institutu eta Fakultateetako Konferentziaren presidentea. 2007ko apirilaren 7an egin zuen lan hori.



Auzitegiak (LDA) esanbidez onartu zuenez³, *“murrizketa hori justifikatuta dago, zerbitzu profesionalen erabiltzaileak babesteko komeni baita jakintza espezializatu egokirik ez dutenei zerbitzu hori eman dezaten debekatzea”*. Halaber, LDAk zioenez, *“ia herrialde guztietan, botere publikoak zera erabakitzen du, lanbide edo ogibide jakin batzuetan jarduteko ezinbesteko baldintza dela lanbidea betetzeko beharrezkoa den jakintza egiaztatzea”*. LDAren ustez, *“gaur egun arte Espainian titulazio-eskakizun hori nola administratu den ikusita, ez dirudi lehia-arazo larririk eragin dituenik. Ziurrenik, Estatuak titulu akademikoak emateko ahalmena gorde duelako izan da hori, ez duelako ahalmen hori Profesionalen Elkargoen esku utzi. Hortaz, gure ustez, murrizketa hori, gaur egun, egokia da eta gutxieneko jakintza bermatzeko interes publikoa betetzen du; halaber, ez da profesionalen arteko lehia eragozten ari”*.

Lanbideen eremuko LDAren doktrina horri jarraiki, memoria honetan zera nabarmendu nahi dugu, Lege honetan aipatzen den murrizketa justifikatuta dagoela, zerbitzu profesionalen erabiltzaileak babesteko komeni baita jakintza espezializatu egokirik ez dutenei zerbitzu hori eman dezaten debekatzea. Eta murrizketa hori egitea egokia da, herritarren osasuna eta segurtasuna bermatzeko interes publikoa betetzen duen aldetik.

Lanbidean jarduteko lanbide-kualifikazioak eskatzen dituen horrelako Lege batek zalantzak eragin ditzake Konstituzioaren lehia askeari buruzko printzipioarekin bateragarri ote den, baina Legearen aurreproiektu honen 16.2 artikuluan, beste Lege batzuen idazketari jarraiki, honako hau xedatzen da: Legeara arautzen diren lanbideetan sartzea eta jardutea, eta elkargo-erakundeen esku-hartzea Lehiaren Defentsari eta Lehia Desleialari buruzko legeei atxikita egongo dira.

c) Tituluen eskusibotasuna eta konkurrentzia.

Lanbideak lege bidez onartzeko eta arautzeko helburuak hainbat eragozpen izaten ditu bidean: hasteko, lanbide horiek argitu behar dira eta, gero, bakoitzari espazio

³ “Propuesta para adecuar la normativa sobre profesiones colegiadas al régimen de libre competencia vigente en España” dokumentuan, 1992ko ekaina.



esklusiboa onartu behar zaio. Gainera, beste zailtasun bat ere izaten da: lanbide horien kasuan, orain arte titulu akademiko ofizialen bitartez egiaztatu diren lanbide-kualifikazioak eskatzen direla.

Arautuko den lanbide bakoitzari dagozkion eginkizunak esleitzeko, esan gabe doa Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala eta lehendik dauden titulu akademiko ofizialak izan direla kontuan, hainbat eremutako lanbide-jardueretan jarduteko gaitzen duten lanbide-profilak eratzen baitituzte.

Legearen aurreproiektuan irizpide orokor honi jarraitu nahi izan zaio: kirol-arloko lanbide batean sartu ahal izateko titulu akademiko ofizialen bitartez egiazta daitekeen lanbide-kualifikazioa izan behar da, baina profesionaltasun-ziurtagirien edo bestelakoen bitartez ere egiazta daitezke. Beste zenbait sektoreri dagokionez, gure ordenamendu juridikoan lanbide jakin bat garatu ahal izateko titulu akademikoen konkurrentzia dago, eta logikari jarraiki, tituluen eskusibotasunetik urruntzea komeni da, ez baitator bat gaur egun kirolaren sektorean dauden titulu akademiko ofizialen esparru juridiko konplexuarekin. Lehen eren aipatu dugunez, esparru hori etengabe aldatzen ari da, ez dago finkatuta, eta prestakuntza-mailak gainjarri egiten dira, bakoitzaren espazio profesionala ez dagoelako argi eta garbi berezita. Kirol-arloko titulu akademikoen egoera hori izanik, eta kirolaren inguruko lanbide-jardueretan ordenarik eta egiturarik ez dagoela kontuan hartuta, legegintza-proposamenak ezin du eskusibotasuneko muturreko konponbideetara jo prestakuntza akademiko zehatz bat egiaztatu dutenentzat.

Lanbideak arautzen dituzten legeei dagokienez, lanbideen eskumen-eremuen alderdia oso gai zaila da. Legegintzako proposamen honetan, Lanbide Sanitarioien Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen ereduari jarraiki, lanbideartean partekatutako eskumen-espazioak eta lanbide bakoitzaren espazio espezifikoak onartu dira aldi berean. Horregatik, Legearen aurreproiektu honetan bildutako proposamenean ez dira lanbide baten edo bestearen eskumenak modu itxi eta zehatzean erabaki nahi izan; aitzitik, testu artikulatuak malgutasunez jokatzeko du, profesionalen eguneroko praxiak alda daitezkeela aurreikusita.



Lanbide bakoitzaren funtzio-eremu orokorra ezartzea da Lege honetan lanbide horietarako jasotzen diren eskumenen zerrenden helburua. Horren ondorioz, zerrenda horien helburua ez da mugak jartzea, orientatzea baino. Horregatik, memoria honetan aipatu nahi dugu, eskumen horiek alde batera utzita, Legean arautzen diren lanbideetako profesionalek beste xedapen batzuen bidez –esate baterako, hezkuntza-arloko xedapenen bidez– onartutako eskubide, ahalmen eta prerrogatibak baliatu ahal izango dituztela.

Lege honetan lanbide jakin batzuei eskumenak atxiki zaizkie dagozkien lanbide-kualifikazioak izatearen bitartez, baina aurreproiektuan erabakita geratu da eskumen horiek ez direla muga bat; hain zuzen ere, lanbide-kualifikazioak egiaztatzen dituzten titulu akademikoen lanbide-eremuaren muga. Adibidez, kirol-irakaskuntzen araubide berezian irakasle izateko, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziadun edo gradudun batek bete dezake postu hori⁴, edo Goi-mailako kirol-teknikari batek; eskumen horiek, ordea, ez dira Legean agertzen. Zein da horren arrazoia? Legearen bitartez Gorputz Hezkuntzako irakaslearen lanbidea arautu nahi da, baina ez titulu akademiko zehatz baten lanbide-eskumenak. Hortaz, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentzia edo Gradua duenak beste lanbide-jarduera batzuk ere egin ditzake, Legean aurreikusi ez badira ere.

d) Kualifikazioak eta lanbide-gaitasunak.

Konstituzioaren 40. artikulua araberak, botere publikoek lanbideko heziketa eta birmoldatzea bermatzea sustatuko dute, lanerako eskubidea, lanbide edo ogibidea askatasunez aukeratzeko eta lanean igotzeko eskubidea gauzatzeko funtsezko tresna diren aldetik.

Agindu hori betetzeko, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoa onartu zen. eta Lege Organiko horren 7.1 artikuluan

⁴ Unibertsitatei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa aldatzen duen apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren 37. artikuluan xedatzen denez, unibertsitateko irakaskuntzak honako ziklo hauetan egituratzen dira: Gradua, Masterra eta Doktoregoa; beraz, irakaskuntza horiek gainditzeko dituenak dagozkion titulu ofizialak lortzeko eskubidea izango du.



oinarrituta, Estatu osoan aplikatu beharrekoa da; Kualifikazioen Katalogo Nazionala arautzen duen irailaren 5eko 1128/2003 Errege Dekretu bidez garatu zen 5/2002 Lege Organiko hori. Katalogo hori Lanbide Heziketaren eta Kualifikazioen Sistema Nazionalaren tresna bat da, eta sistema hori, aldi berean, produkzio-sistemaren premiei erantzuteko prestakuntza-ekintzen esparrua. Katalogoaren bitartez, produkzio-sisteman identifikatu diren lanbide-kualifikazioak –errekonozitu eta egiaztatu daitezkeenak– antolatzen dira lanbide-jardunerako gaitasun egokien arabera.

Lanbide-kualifikazioen errekonozimenduko eta egiaztapeneko sistema hori –kirolari buruzko atala ere badu– ez da nahastu behar lanbideen jardunaren erregulazioarekin. Izan ere, ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren Zioen Azalpenean argitzen denez, lanbide-kualifikazioen sistema horrek “*ez dakar, ezein kasutan, tituludun lanbideen jarduna Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluan aurreikusi bezala arautzea*”.

Lehen ere esan dugunez, goian aipatutako 118/2003 Errege Dekretuaren bitartez produkzio-sisteman identifikatu diren lanbide-kualifikazioak –errekonozitu eta egiaztatu daitezkeenak– antolatzen dira lanbide-jardunerako gaitasun egokien arabera. Eta Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala onartzen duen Errege Dekretu horretan lanbide-arlo espezifiko bat aurreikusten da kirolerako: “*Gorputz- eta kirol-jarduerak*”. Katalogoa gerora aldatu egin da, baina hala ere, bost kualifikazio-maila aurreikusten ditu, eta “*Gorputz- eta kirol-jarduerak*” arloan hainbat lanbide-kualifikazio errekonozitzen ditu:

1. maila

- *AFD500_1* Jarduerak antolatzeko eta kirol-instalazioak funtzionarazteko eragiketa osagarriak.

146/2011

2. maila

- *AFD096_2* Ur-instalazioetako

295/2004-



sorospena.	<u>1087/2005-</u> <u>1521/2007-</u> <u>146/2011</u>	
• AFD159_2 Behe- eta erdi-mendiko ibilbideetan zeharreko gidaritza.	<u>1087/2005-</u> <u>1521/2007</u>	 
• AFD160_2 Bizikletazko ibilbideetan zeharreko gidaritza.	<u>1087/2005-</u> <u>1521/2007</u>	 
• AFD161_2 Ur-amiletako gidaritza.	<u>1087/2005-</u> <u>1521/2007</u>	 
• AFD338_2 Sakan lehor edo urtarretan zeharreko gidaritza.	<u>1521/2007</u>	 
• AFD339_2 Ingurune naturalean, zaldi-ibilbideetan zeharreko gidaritza.	<u>1521/2007</u>	 
• AFD340_2 Ur-eremu naturaletako sorospena.	<u>1521/2007</u>	 
• AFD501_2 Espazio eskiagarrietan pistak balizatzea, seinaleztatzea eta sorospena.	<u>146/2011</u>	 
• AFD502_2 Urpeko gidaritza eta kirol-urpekaritzako hastapenak.	<u>146/2011</u>	 
• AFD503_2 Espeleologiako gidaritza.	<u>146/2011</u>	 
• AFD504_2 Espeleologiako kirol-hastapenak.	<u>146/2011</u>	 
• AFD505_2 Hipikako eta zaldi-jardueretako kirol-hastapenak.	<u>146/2011</u>	 
• AFD506_2 Igeriketako eta haren	<u>146/2011</u>	 



espezialitateetako kirol-hastapenak.

- AFD507_2 Aparailu libreko eta finkoko
ontzien belako kirol-hastapenak. 146/2011  
- AFD508_2 Judoko eta defentsa
pertsonaleko kirol-hastapenak eta
sustapena. 146/2011  
- AFD538_2 Ur-instalazioetako
salbamenduko eta sorospenekeo
modalitateko kirol-hastapenak. 141/2011  
- AFD612_2 Eskrimako kirol-hastapenak. 1034/2011  
- AFD612_2 Golfeko kirol-hastapenak. 1034/2011  
- AFD612_2 Piraguismoko kirol-
hastapenak. 1034/2011  
- AFD612_2 Teniseko kirol-hastapenak. 1034/2011  
- AFD612_2 Karateko kirol-hastapenak. 1788/2011  
- AFD612_2 Errugbiko kirol-hastapenak. 1788/2011  
- AFD612_2 Taekwondoko kirol-
hastapenak. 1788/2011  

3. maila

- AFD097_3 Balio anitzeko
entrenamendu-aretoko egokitze fisikoa. 295/2004-
1087/2005-
1521/2007-
146/2011  



- *AFD162_3* Musikaren laguntza bidezko taldeko egokitze fisikoa. 1087/2005-1521/2007-146/2011  
- *AFD341_3* Igeriketa-jarduerak. 1521/2007-146/2011  
- *AFD509_3* Gorputz- eta kirol-ekintzetako animazioa eta jolas-animazioa. 146/2011  
- *AFD510_3* Minusbalioetasuna duten pertsonentzako gorputz- eta kirol-ekintzetako animazioa eta jolas-animazioa. 146/2011  
- *AFD511_3* Uretako fitnessa eta hidrozinesia. 146/2011  
- *AFD539_3* Ur-eremu naturaletako eta instalazioetako sorospen-zerbitzuen koordinazioa. 141/2011  
- *AFD616_3* Yogako heziketa. 1034/2011  

Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera, sistemaren kudeaketa Autonomia Erkidegoetan deszentralizatu da eta haiei dagokie gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesuen deialdia egin eta kudeatzea. Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainaren 23ko 119/1998 Dekretuaren bitartez, Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutua sortu zen. Besteak beste, honako eginkizun hauek dagozkio: ekoizpen-prozesuen, lan-merkatuaren eta pertsonen kualifikazio-beharrak antzematea. Horretarako, gaitasunen estandarrak zehaztu behar ditu, eta, gainera, ekoizpen-sistemak zuzenean parte hartu behar du; «Lanbide Kualifikazioen Euskal Katalogoa» zehaztea, ekonomiaren eta pertsonen beharrak asetzeko. Jaurlaritza Kontseiluak onartu behar du, eta Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak lehenago txostena egin



behar du; lanbide-gaitasunak zehazteko irizpideak jartzea. Era berean, 62/2001 Dekretu bidez Lanbide Heziketaren Gaitasuna eta Kalitatea Ebaluatzeko Euskal Agentzia sortu zen. Agentziaren helburuak dira, besteak beste, lan-esperientziaren eta ikaskuntza ez-formalen bitartez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko bitarteko bat garatzea, eta aldi berean, ebaluazio horren kalitatea egiaztatzea.

Lanbide Kualifikazioen Sistema Nazionaleko lanbide-kualifikazioak –lehen aipatu ditugunak– ez dira, berez, lanbideetan sartzeko eta jarduteko zuzenean gaitzen duten titulu akademiko eta profesionalak. Lanbide-kualifikazio horiek zera dira, prestakuntza-prozesu formalaren bitartez –baita ez-formalaren bitartez ere– eskuratutako lanbide-gaitasunen multzoa, eta ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurak egin behar zaizkie. Lanbide-kualifikazioek kirol-arloko lanbideetan sartzeko gaitasuna adierazten dute, eta ofizialki egiaztatuta daude hainbat modutara: titulu akademikoak, profesionaltasun-ziurtagiriak eta abar.

Lege Organiko horren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, lanbide-heziketako tituluak zein profesionaltasun-ziurtagiriak ofizialak eta baliozkoak izango dira Estatu osoan, Administrazio eskudunek ematen dituzte, eta dagozkien ondorioak izango dituzte Europar Batasuneko Estatu kideetan eta Europar Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten gainerako Estatuetan, lanbide-heziketaren errekonozimendu-sistema orokorrari buruzko Europar Batasuneko araudiari jarraiki. Titulu eta ziurtagiri horiek lortu dituztenei dagozkien lanbide-kualifikazioa egiaztatzen diete eta, hala badagokio, aplikatu beharreko legeriaren arabera ondorio akademikoak izango dituzte.

Nola txertatu lanbide-kualifikazioen sistema hori guztia kirol-arloko lanbideen jarduna arautzen duen Lege batean? Erantzuna ez da erraza, lanbideen lege bidezko erregulazioa eskasa izateaz gain, lanbideetan lanbide-kualifikazioen egiaztapeneko eta errekonozimenduko sistemaren bitartez sartzeari buruzko erreferentziak ere ez baitira nahikoak. Eta gainera, lanbide-arloen eta arloetan sartzen diren lanbide-kualifikazioen esparrua oso dinamikoa da. Horren adierazgarri dugu Kualifikazioen Katalogo Nazionala arautzen duen irailaren 5eko 1128/2003 Errege Dekretuaren Xedapen Gehigarri bakarra:



“Produkzio-sistemaren premien eta gizarte-eskaeren bilakaerari erreparatuta, Gobernuak I. eranskinean zerrendatutako lanbide-arloak aldatu ahal izango ditu”.

Horregatik guztiagatik, Legearen aurreproiektu honetan, araubide bereziko kirol-irakaskuntzei dagozkienez gain, kirol-arloko Lanbide Heziketako titulu espezifikoak izenaren bidez jaso nahi dira (Gorputz- eta kirol-ekintzen animazioko goi-mailako teknikariaren tituluak, Landa-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritzako teknikariaren titulua eta abar).

Europar Batasuneko beste Estatu kide batzuetan lortutako lanbide-kualifikazioen errekonozimenduari dagokionez indarrean dagoen Europako Erkidegoko Zuzenbidearen arabera, eta Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzerordeak Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeari buruz hartutako Erabakian bildutako irizpideari jarraiki, Legeak lanbidean jarduteko aukera ahalbidetzen du dagozkion gaitasunak egiaztatuz gero. Horretaz gain, zenbait kasutan, Legean araututako lanbideetan jarduteko gaitasun horiek, titulu akademiko zehatzen bide orokorretik ez ezik, une bakoitzean indarrean dagoen ordenamenduaren ondoriozko beste titulu, egiaztagiri edo ziurtagiri batzuen bidez ere egiazta daitezke.

Horrela, bada, aurreproiektuaren laugarren xedapen gehigarriaren arabera, kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko, Lege honek adierazitako titulu akademiko eta ziurtagiriak izan behar dira, printzipioz. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren Sailari ahalmena ematen dio aipatutako titulu eta ziurtagiriez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzeko kasu, baldintza eta prozedurak arautzeko.

Era berean, lehen xedapen iragankorrari jarraiki, Legeak eskatutako titulazio-betebeharrak ez dituzte bete beharko lege hau indarrean sartzen denean egiaztatzen dutenek modu jarraituan –eta ez noizean behin– aritzen zirela Lege honetan arautzen diren lanbide-jardueretan. Erregelamenduz ezarriko da hori egiaztatzeko modua. Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege



Organikoaren 8.2 artikuluan aurreikusitakoaren babespean, pertsona horiek gaitasunak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalaren bitartez eskuratu dituztela egiaztatzeko aukera badute, Legean finkatutako epearen barruan lortu beharko dute egiaztapen hori.

Bigarren Xedapen Iragankorra Legea pixkanaka aplikatzeko aukerari buruzkoa da, kirol-monitore, entrenatzaile eta kirol-zuzendari lanbideetan. Behar-beharrezkoa da Lege honek kirol-modalitate, edo -espezialitate bakoitzeko kirol-monitore, entrenatzaile eta kirol-zuzendari lanbideetarako ezartzen dituen kualifikazio-baldintzak dagozkien kirol-modalitateetako kirol-teknikari eta goi-mailako kirol-teknikari titulazioak ezartzen doazen heinean exijitzea. Gogoan izan kirolaren esparruan prestakuntza-eskaintza gehienak 1913/1997 Errege Dekretuaren Lehen Xedapen Iragankorrean aurreikusitako aldi iragankorrari dagozkiola.

Horregatik, kirol-monitorearen eta entrenatzailearen berezko eremu materialetan Eusko Jaurlaritzan kirol-eremuko eskumena duen Sailak egiaztatzen badu ez dagoela dagoen eskariari erantzuteko adina tituludun profesional, edo ez dagoela prestakuntza ofizialik, edo kirol-eremu berriak daudela, beheragoko mailako lanbide-kualifikazioa dutela egiaztatzen dutenak gaitzeko aukera aurreikusi da.

e) Izenak erabiltzea lanbideak izendatzeko.

Aurreproiektuan araututako lanbide bakoitza aztertzen hasi aurretik Lege horretan bilduta dauden lanbideen izenen erabilerari buruzko azalpena egin behar da. Litekeena da gai horren inguruan zaila izatea erabateko adostasuna lortzea lanbide-nortasuna eskasa delako eta lanbideen eta titulazioen arteko nahasmendu historikoa izan delako behin eta berriz.

Doktrina zientifikoak duela denbora asko idatzi zuen kirol-arloko lanbideetan lanbide-nortasuna eskasa zela. Eta doktrina horren arabera, kirol-arloko lanbideen sektore horretan izan da nortasun-definizio historikoa, zalantzazkoa eta eskasa. Azken mende



honetan arazo hori konpontzera bideratutako ekimen batzuk izan dira, baina ekimen bakar batek ere ez du lortu behar adinako esparru juridikoa ematea.

Titulazio akademikoen eta lanbideen arteko nahasmendu historikoari dagokionez, ahaleginak egin dira lanbideak titulazioen izenekin ez deitzeko; izan ere, neurri hori garrantzitsua da nahasmendu desagoki hori saihesteko. Lanbide bat izendatzeko titulazio akademiko baten izena erabiltzeari dagokionez hainbat adibide daude, baina horrek kritika logikoak jaso ditu; nolanahi ere, titulazio akademiko baten izena erabili ahal izango da lanbide bakar batera bideratzen duen titulazio akademikoa bada, baina ez kasu honetan, zeren lanbide berean (adibidez, Gorputz Hezkuntzako Irakaslea) hainbat titulazio akademiko oinarri hartuta jarduteko aukera baitago, ezta titulazio berak –Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan edo Zuzenbidean lizentziadunak edo gradudunak– hainbat lanbidetan jarduteko aukera ematen duen kasuan ere.

Lehen ere aipatu dugu memoria honetan titulazioek eta lanbideek kontzeptu eta eremu material desberdinak osatzen dituztela eta Estatuko nahiz autonomia-erkidegoetako eskumen-tituluak ere desberdinak direla. Esperientziak egunero erakusten du jendeari bere lanbideari buruz (monitorea, esaterako) galdetzen zaionean oker erantzun duela askotan, titulazio akademikoari buruzko datuak ematen dituelako (Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentzia). Eta, alderantziz, jendeari bere titulazio akademikoari buruzko informazioa eskatzen zaionean (Zuzenbideko lizentzia) lanbide baten izenarekin erantzuten duelako (abokatutza). Zuzenbideko lizentzia edo gradua titulazioaren eta lanbidearen nahiz titulu akademikoaren eta lanbide-tituluaren arteko nahasmendu horren adibide egokia da. Normalean, Zuzenbideko lizentziadunei edo gradudunei “*abokatuaren*” lanbidearekin identifikatzen zaie. Nolanahi ere, Zuzenbideko lizentziarekin hainbat lanbidetan jardun daiteke beste baldintza batzuk bete ondoren: irakaslea, abokatua, epailea, fiskala, idazkari judiziala, notarioa, erregistratzailea, prokuradorea, higiezinetakoko agente komertziala, administrazio-kudeatzailea, industria-jabetzaren agentea, eta abar. Eta, era berean, pertsona batek lanbide berean jarduteko aukera du titulazio desberdinak izanda. Esate baterako, Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbidean jardun daiteke titulazio desberdinak izanda.



Hauxe da, hain zuzen ere, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak 2007ko apirilaren 2ko txosten batean, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Eremuan Lanbidean jarduteko aukera arautzeko Kirol Kontseilu Gorenaren Azterketa Batzordearen barruan sortutako zirriborroetako bati buruz, egin zuen ekarpen egokietako bat:

“Dena den, gai horri dagokionez larriena ematen duena zera da, ikuspegi oker batetik abiatzen dela lanbideak titulu akademikoekin identifikatzen direlako. Hain zuzen ere, 3. artikuluan profesionala deitzen zaio titulu akademikoa duen orori eta ez, ordea, jardueran jarduten duenari, egokia izango litzatekeen bezala. Horrekin guztiarekin akademikoa denaren eremuaren eta jarduera ekonomikoaren eta profesionalaren erregulazio-eremuaren arteko nahasmendua sortzen da, nahi ez den nahasmendua”.

Bestalde, dagoeneko finkatuta dauden edo tradizioa duten lanbideen izenak eta, bereziki izen laburrak erabili dira Legearen aurreproiektuan. Ez dirudi zentzuzkoa denik luzeegiak eta bizitza errealean ezagutu ezin diren lanbideen izenak erabiltzea. Adibidez, lanbide batek ezin du hau bezain izen luzea izan: “*Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako teknikaria*”, edo “*Gorputz- eta kirol-ekintzen animazioko teknikaria*”, edo antzeko izenak izan, akronimoak eta antzekoak erabiltzeko arriskua izan nahi bada izan ezik. Izen horiek nekez identifika daitezke lanbideekin. Gainera, eskakizunetako bat da gizarteak erraz ezagutzea edo identifikatzea lanbide horiek.

Izenak aukeratzeko garaian argitaratutako azterlan eta doktorego-tesi ugari hartu dira kontuan. Esate baterako, 2006. urtean, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak (Emakumearen Institutua) azterlan bat argitaratu zuen⁵. Azterlan horretan Aurreproiektuan biltzen diren lau lanbideak daude jasota, baina ez da lanbidearen eremu materiala azaltzen (adibidez, kirol-eremua), eremua agertuko balitz lanbideen zerrenda (adibidez, irakaslearena) ugaltu egin beharko baitzatekeen jardun-esparru ugaritan oinarrituta. Lanbide horiek honako ordena honetan azaltzen dira (baina gaztelaniaz utziko ditugu euskaraz ez delako bereizketarik egiten):

⁵ *Las profesiones de la A a la Z. En femenino y en masculino*. Egilea: EULALIA LLEDÓ



Directora (Deportiva) y Director (Deportivo)

Entrenadora (Deportiva) y Entrenador (Deportivo)

Monitora (Deportiva) y Monitor (Deportivo)

Profesora (de Educación Física) y Profesor (de Educación Física)

Legearen aurreproiektuak aurre egin behar dien zailtasun handietako bat da lanbideen izenak hainbat adierarekin erabiltzea edo hainbat eremuri erreferentzia egiten dioten izenak erabiltzea. Legeak erabaki du *zuzendari teknikoaren* ordez *kirol-zuzendaria* erabiltzea, lanbidearen izena bereizteko eta kirol-eremuarekin lotzeko. *Zuzendari teknikoaren* izena, *monitorearen*⁶ lanbidearekin gertatzen den bezala, kirolarekin zerikusirik ez duten beste gizarte-arlo batzuetan ere erabiltzen da, eta, azken batean, beharrezkoa da izena entzun edo irakurtzen denean kirol-arloko lanbide batekin soilik identifikatzea. Egia da, arestian esan dugunez, kirol-arloko izen batzuek esanahi desberdinak dituztela, baina berriro ere esan behar da arazo hori konponezina dela. Adibidez, txirrindularitzaren arloan, *kirol-zuzendaria* kontzeptuaren esanahia eta Legearen aurreproiektuan erabiltzen dena ez dira berdinak. Txirrindularitzaren argotean kirol-zuzendaria, neurri batean, beste kirol kolektibo batzuetako entrenatzailearen baliokidea da (eskubaloia, saskibaloia, futbola, eta abar). Era berean, *monitore* terminoa kirol-lehiaketetako maila oinarritzkoenetako entrenatzaileentzat erabiltzen da (esate baterako, behe-mailako kategorietan), baina natura-inguruneko jarduera fisikoetan, aerobicean, fitnesssean eta abarretan ere erabiltzen da.

Entrenatzailearen izena dagokion kirol-modalitatearekin edo -espezialitatearekin osatu behar da, kirol-arloko teknikarien titulazioen izenarekin gertatzen den bezala.

Izenak babesteko hainbat aurreikuspen biltzen dira aurreproiektuan. Horregatik, Lege honetan araututako lanbideen izenak erabili ahal izango dira lege honetan eta gainerako arau aplikagarrietan xedatzen denarekin bat etorritz jarduten denean bakarrik. Halaber, duten esanahiarengatik edo antzekotasunarengatik izenekin nahas daitezkeen beste izen batzuk ezin izango dira erabili.

⁶ *Monitorearen* lanbidea ere erabiltzen da gazteen jardueren eremuan, kanpamenduen eremuan, aisia-jardueretan eta abarretan, hau da, kirol-arlokoetan ez direnetan.



Memoria honetan genero-inpaktuari buruz diharduen atalean aipatzen denaren arabera, gaztelaniaz baztertu egin da substantibo maskulino orokorra erabiltzeko aukera; irizpide horri jarraitu dio Espainiako Parlamentuak honako Lege hauetan, adibidez: azaroaren 21eko 44/2003 Legean (Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa), edo urriaren 30eko 34/2006 Legean (Auzitegietako abokatu eta prokuradore izateari buruzkoa). Hortaz, Emakumearen Institutuak argitaratutako argitalpenetan bildutako gomendioei jarraitu zaie; izan ere, argitalpen horietan adierazten da “*maskulinoak zailtasunak dituela femeninoa barnean hartzeko*” eta ahaleginak egin behar direla, beraz, gaztelaniaz maskulinoa “*zentzu orokorrean*” ez erabiltzeko.

g) Legean araututako lanbideak.

Legeak hasiera batean arautzen dituen lanbideak honako hauek dira:

1.- Gorputz Hezkuntzako Irakaslea.

Kirol-arloko lanbideen artean *Gorputz Hezkuntzako irakaslearen* lanbidea da ezagunenetako bat, Konstituzio Auzitegiak berak onartu baitzuen kide anitzeko lanbide gisa urriaren 1eko 194/1998 epaian. Egia esan, Lege honetan arautzen diren lanbide guztien artetik erregulazio handiena dutenetako bat da, irakasle guztiei buruzkoa den hezkuntza-legeriaren bitartez arautzen delako.

Gai horri buruz argitaratu diren monografia edo azterlan urrietan lanbide horri buruzko aintzatespen espresua dago. *Las profesiones del mundo del deporte*⁷ liburuan “*kirol-irakaskuntza lanbide gisa*” aldarrikatzen da, eta lanbide horien artean Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbidea aipatzen da. Halaber, *La configuración jurídica de las profesiones tituladas*⁸ izeneko monografian, lanbideei buruzko kapituluan, arreta berezia eskaintzen zaio “*Gorputz Hezkuntzako irakasle*” izeneko lanbideari.

⁷ Monografia horren egilea Luis MIRACLE da, Planeta, Bartzelona, 1992.

⁸ José María SOUVIRON MORENILLAk idatzi zuen eta Unibertsitateen Kontseiluak argitaratu zuen 1988an.



Memoria honetan argitu behar den lehenengo alderdia lanbidearen izenari buruzko alderdia da. Legearen aurreproiektuan erabaki da “*maisusak*” deitutakoak “*Gorputz Hezkuntzako irakaslearen*” lanbidearen barnean sartzea, maisuek ere osatzen dutelako irakasleen kolektiboa. Hezkuntza-legeriak irakasleen kategoria desberdinak bereizten dituen arren, maisuak irakasleen irakaskuntza-generoaren barnean sartu ditu. Esate baterako, Hezkuntzaren Kalitateari buruzko 10/2002 Lege Organikoaren 19. artikulua –Gorputz Hezkuntza maisuek emateari buruzkoa denak– “*irakasleak*” izenean biltzen zituen. Beste horrenbeste ondorioztatzen zen irakaskuntza-kidegoetan sartu, bertan beste kidego batzuetara igaro eta espezialitate berriak eskuratzeari buruzko Araudia onetsi zuen otsailaren 27ko 334/2004 Errege Dekretuaren Hitzaurretik ere. Irizpide berari jarraitzen zaio Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan. Nahiz eta begien bistakoa den Derrigorrezko Bigarren hezkuntzako irakasleei eta Lehen Hezkuntzako irakasleei batzuetan modu desberdinetan deitzen zaiela, egia ere bada profesionalen bi kolektibo horiek irakasletzat hartzen direla eta irakasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko araubide osoa aplikatzen zaiela.

Erregulazio horri jar lekiokkeen oztopoetako bat da arlo horrek hezkuntza-sektoreko bere erregulazioa duela; erregulazio hori, gainera, oinarritzkoa da, eta, beraz, Lege honek ezin izango luke aldatu. Planteamendu horren inguruan erantzun ugari eman daitezke:

- a) Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbidea hezkuntza-arloa ez den beste ikuspegi batetik arautzen da (erreanimazio kardiopulmonarrari buruzko derrigorrezko prestakuntza, elkargoko kide egitea, presentzia fisikoa, betebeharrak deontologikoak, eta abar). Hortaz, oinarritzko hezkuntza-legeriak ez ditu lanbidearen alderdi guztiak agortzen. Hori egiaztatzen duen proba da autonomia-erkidegoetan legeria ugari dagoela, eta legeria horrek Estatuko oinarritzko legeriaren alderdiak osatzen dituela. Kontuan hartu behar dugu, adibidez, irakasleen autoritatearen alorrari dagokionez, irakasleen babes juridikoaren alorrari dagokionez, erantzukizun zibilaren alorrari dagokionez eta abarri dagokionez autonomia-erkidegoetan dagoen legeria guztia.



- b) Legearen aurreproiektu honetan aintzat hartzen diren lanbide-kualifikazioek Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezarritako titulazioak errespetatzen ditu, eta soilik zehaztasun bat egiten da, babestu nahi diren konstituzio-ondasunekin bat datorrena (osasuna, segurtasuna, eta abar), Auzitegi Konstituzionalak (194/1998 AKE) lanbide horretarako egindako doktrinaren arabera.
- c) Oinarrizko araudi bat, berez, arau-garapena izan dezakeen ordenamendua da, eta estatuko Parlamentuak onartutako hezkuntza-ordenamendua ezin liteke beste arau batek zehaztu ezin duen ordenamendu “izoztutzat” hartu, are gutxiago lege-maila duenean.
- d) Aurreproiektuak ezartzen du Gorputz Hezkuntzako irakasleei eskatuko zaizkien kualifikazioak Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan ezartzen direnak izango direla. Kontuan izan behar dugu Legearen aurreproiektuak ez duela Gorputz Hezkuntzako irakasleen lanbide-jarduna hezkuntza-legerian aurreikusitako titulazio desberdinetara baldintzatzen, baizik eta lanbide hori desadostasunik gabe erregulatzeko asmoz, lehentasuna ematen dio lanbide-kualifikazio jakin bati; hori guztia hezkuntza-kalitateari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren Laugarren Xedapen Gehigarrian (LOMCE) ezarritakoaren arabera.
- e) Kataluniako lanbideetan jarduteari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legear biltzen da Kataluniako hezkuntza-administrazioak aukera izango duela jarduera fisikoaren eta kirolaren eremuko prestakuntza espezifikoa balioesteko.

Lege horretatik kanpo geratzen dira erregimen bereziko kirol-arloko irakaskuntzetan eta aldi iragankorra izeneko kirol-arloko irakaskuntzetan jarduera fisikoaren eta kirolaren zientziei dagozkien eta Hezkuntzari buruzko 2/2006 Legear aurreikusten diren ikasgaiak emateko titulazio-eskakizunak. Ezin da ahaztu Lege honek Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbidea arautzen duela, eta ezin dituela arautu jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien eremuan eman daitezkeen irakaskuntza guztiak.



Dagokion titulazioa edo irakaskuntza arautzen duen Errege Dekretu bakoitzak ezarri beharko ditu dagozkion titulazio-baldintzak.

Arrazoi berak direla medio, lanbide honen eremutik kanpo geratzen dira, halaber, honako hezkuntza-maila hauetako irakasleen lanbide-jarduerak: unibertsitate-irakaskuntzetakoak, lanbide-heziketakoak, karrera militarrekoak, prestakuntza-jarduera ez-formalak, eta, azken batean berez Gorputz Hezkuntzako irakaskuntzakoak ez diren guztiak.

Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideak ahalbidetzen du aipatutako irakaskuntza-maila horietan dagozkion Gorputz Hezkuntzako eskolak ematea ikasleei eta hezkuntza-legerian aurreikusitako eginkizun instrumental edo eratorri guztiak betetzea, hala nola planifikatu, programatu, koordinatu, tutore-lanak egin, ebaluatu edo irakaskuntza-jarduera zuzentzea.

Era berean, aurreproiektuan xedatzen da ikasleei Gorputz Hezkuntzako klaseak ematen zaizkienean, irakasle batek egon beharko duela bertan. Beraz, plangintzarekin, programazioarekin, tutoretzarekin eta abarrekin lotuta irakasleek betetzen dituzten eginkizun guztietan ez da beharrezkoa izango irakaslea bertan egotea. Neurri hori justifikatuta dago gorputz-hezkuntzako klaseetan ezbehar asko gertatzen direlako irakaslea ez dagoenean.

2.- Kirol Monitorea.

Legearen aurreproiektuan kirol-monitorearen lanbidea ere onartuta dago. Aurreproiektuan proposatzen den lanbidearen izena hitzez hitz ez dator bat lehendik dauden titulu ofizialekin, lanbideen eta titulazioen arteko nahasmendu arriskutsuak saihesteko.

Eta Kirol Monitore-lanbide horren barruan hainbat motatako lanbide-jarduerak hartu dira kontuan. Hortaz, monitoreen taldean kirol-animazioko jarduera ere bildu da. Hain



zuzen ere, kirol-esparruko lanbide-merkatuari buruzko azterlanetan kirol-animazioko jarduera egungo gizartean ospe handiena duen jardueratzat hartuta dago.

Kirol-monitore profesionalaren kategoria horretan biltzen dira, halaber, oso izen desberdinak dituzten profesionalak: entrenatzaile pertsonala, prestatzaile pertsonala, *coach*, eta abar. Progresio handia duen eta oso hedatuta dagoen jarduera da, eta ezin du arautu gabe jarraitu, lanbide hori oso hertsiki lotuta dagoelako pertsonen osasunarekin eta segurtasunarekin.

Kirol-monitorearen lanbidean, edozein kirolariren kirol-heziketari, ikaskuntzari, animazioari, oinarrizko egokitze fisikoari, egoera fisikoaren berreskuratze edo hobekuntzari, monitorizazioari, kontrolari, gidatzeari eta laguntzari lotutako funtzioak eta antzekoak bete daitezke, betiere jarduera hori kirol-lehiaketara bideratuta ez badago. Horixe da kirol-entrenatzailearen lanbidearekiko desberdintasun nabarmenetako bat, jarduera hori lehiaketara bideratuta baitago.

Kirol-monitorearen zerbitzuak emateko, kirol-zuzendariaren lanbidearen kasuan ez bezala, dagokion pertsonak bertan egon beharko du garatzen diren kirol-jarduerak garatu bitartean.

3.- Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Entrenatzailea.

Legearen aurreproiektuan esanbidez onartu da dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako entrenatzaile-lanbidea. Entrenatzailearen izen orokorra dagokion kirol-modalitatearekin edo -diziplinarekin osatuko da.

Urriaren 15eko 10/1990 estatuko Legearen 55. artikulua bitartez Gobernuari agindu zitzaion kirol-teknikarien irakaskuntzak arautzeko, hezkuntza-maila desberdinek ezarritako eskakizunen arabera ez ezik, sartzeko baldintzen, programen, jarraibideen eta ikasketa-planen arabera ere. Irakaskuntzei eta kirol-teknikarien tituluei buruzko apirilaren 8ko 594/1994 Errege Dekretuak Kirolari buruzko Legearen aurreikuspen hori garatu besterik ez zuen egin, baina ez zuen kontuan hartu irakaskuntza horiek



Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 1/1990 Legearen (LOGSE) aplikazio-eremuan sartu behar ote ziren.

Ondoren, abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretua onartu zen; Dekretu horrek erregimen bereziko irakaskuntzat hartu zituen kirol-teknikarien titulazioak lortzera bideratutakoak eta Dekretu horren bitartez onartu ziren tituluen eta dagozkion gutxieneko irakaskuntzen jarraibide orokorrak. Hain zuzen ere, Errege Dekretu horretan aipatzen zen kirol-entrenatzaileen lanbide-taldea, kirol-entrenatzaileak *“kirol-modalitate edo- espezialitate baten irakaskuntzara eta entrenamendura bideratu dira batez ere, eta, beraz, lanbide arautuan bat egiten duten jardun profesionaletan izan dute beren aplikazio-esparru nagusia”*. Ondoren, Errege Dekretu hori urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretu bidez indargabetu zen; azken Dekretu hori indarrean dago gaur egun.

Entrenatzaile-lanbidea kirolaren alorrean tradizio handiena duen lanbideetako bat da. Horregatik, ez da kasualitatea kirol-arloko lan-merkatuari buruz egindako azterlanak *“entrenatzailearen”* lanbidea aipatzen denean soilik bat etortzea.

Lanbide horrek bide ematen du lehiatu nahi duten kirolariak eta kirolari taldeak entrenatu, hautatu, aholkatu, planifikatu, programatu, zuzendu, gidatu, kontrolatu, ebaluatu eta jarraitzeko, eta antzeko jardunak betetzeko. Horixe da Lege honetan bilduta dauden beste lanbide batzuekiko alde handia; kirol-monitoreak ahalmena izango du lehiaketatik kanpo irakatsi, ikasi, animatu, monitorizatu eta kontrolatzeko eta antzeko jardunak betetzeko, futboleko, errugbiko, atletismoko edo eskubaloiko entrenatzaileak, ordea, lehiatu nahi duten kirolariek edo kirolari taldeekin bete nahi izaten du bere jarduna.

Lanbide horretan jarduteko eskatzen diren lanbide-kualifikazioak desberdinak dira jardun-eremu materialaren arabera. Esate baterako, kirolariak eta kirolari taldeak oinarritzko mailako eta maila ertaineko lehiaketetan parte hartzen duten bitartean kirolari eta kirolari talde horiek zuzenduz, lanbide horretan jarduteko goi-mailako lehiaketetarako baino prestakuntza-maila txikiagoa eskatzen da.



Lege-testuan “*oinarrizko mailako, maila ertaineko eta goi-mailako lehiaketen*” kontzeptuak erabiltzen dira erregimen bereziko kirol-irakaskuntzak arautzen dituen araudian erabiltzen diren kontzeptuak direlako.

Kirol-arloko lan-merkatuaren inguruan egindako azterlanetan azaltzen den figura bat entrenatzaile-laguntzailearen figura da, baina izen asko ditu. Entrenatzaile-laguntzailearen eginkizunen artean honako hauek daude: entrenatzaile nagusiari laguntzea denboraldia planifikatzen, entrenamenduak gidatzea, lesionatutako kirolariak sendatzeko lan egitea, eta abar. Figura horrek, batez ere lanbide-kirolean garrantzi handia du eta iruzur ugari izan dira haren inguruan; izan ere, ustezko entrenatzaile-laguntzaileak ziren, de facto, lehenengo entrenatzaileak, nahiz eta federazio-araudian lehenengo entrenatzaileentzat eskatzen den kualifikazioa baino maila txikiagoko kualifikazioa izan. Horregatik guztiagatik, Legearen aurreproiektuan figura horri heltzen zaio eta aurreproiektu horretan aipatzen da lanbide-eremuan entrenatzaile nagusiari entrenamenduak gidatzen, kirolariak sendatzen, balioespen-testak aplikatzen, kirolariei jarraibideak ematen eta antzeko jardunak egiten laguntzen dioten pertsonak ere entrenatzaile-lanbidean jarduten dutela, eta, horrenbestez, lanbide hori arautzen duen artikuluan ezarritako titulazio-baldintzak bete beharko dituztela.

Begien bistako arrazoiak direla medio, artikulua honetan adierazitako lanbide-kualifikazioak bakarrik eskatuko dira lanbidea Euskal Autonomia Erkidegoan betetzen denean, edo egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten kirol-erakundeentzat eta kirolarientzat lan egiten denean. Lanbide-kualifikazio horiek ezin izango zaizkie eskatu beste lurralde-eremu batzuetakoak diren eta estatuko edo nazioarteko kirol-lehiaketak direla medio edo elkarretaratzeak edo prestaketa-saioak direla medio Euskal Autonomia Erkidegoan behin-behinean lehiatzen diren kirol-erakundeen edo kirolarien entrenatzaileei. Nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoak eskumenak eduki ditzakeen egokitzen hartzen dituen lanbide-kualifikazioak eskatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan, ez litzateke zentzuzkoa izango atzerriko edo beste autonomia-erkidego bateko edozein selekziok edo taldek Legearen aurreproiektuan aurreikusitako lanbide-kualifikazioak dituen entrenatzaile bat edukitzea.



4.- Kirol-zuzendaria.

Kirolaren alorreko lanbideei buruzko hainbat azterlanetan lanbide hori aipatzen da “*kirol-zuzendarien*” aipamena eginez.

Kirol-zentroen egiaztapena arautzen duen eta Kirol Zentroak Egiaztatzeko Andaluziako Erregistroa sortu eta arautzen duen urriaren 17ko 183/2006 Dekretuan lanbideen jarduna arautzen ez bada ere, testuan zehar *zuzendari teknikoaren figura aipatzen da*. Nolanahi ere, memoria honetan dagoeneko aipatu denez, kirol-arloko lanbideen izenen arazoa nekez konpon daiteke. Hala eta guztiz ere, egia da *zuzendari teknikoaren* izena kirol-eremuan erabiltzen dela batzuetan, baina egia ere bada kirol-arloko lanbideen izenak singularizatu egin behar direla, beste gizarte-sektore edo lanbide-eremu batzuetan erabiltzeko aukerarik ez izateko. Horregatik guztiagatik, aurreproiektu honetan *kirol-zuzendariaren* lanbidea onartzea erabaki da. Beste lanbide batzuen izenekin gertatzen den bezala, adjektibazio bereizlea eskatzen duten eremu materialen eta espezialitateen tipologia bat dago.

Kirol-zuzendariaren lanbideak aukera ematen du kirol-zentroak eta kirol-jarduerak zuzendu, programatu, planifikatu, koordinatu, kontrolatu eta gainbegiratzearekin lotutako lanbide-jarduerak egiteko, kirol-zientzien berezko ezagutzak eta teknikak aplikatuz. Kirol-zuzendariaren lanbide-jarduerak berekin dakar batzuetan kudeaketa-zeregin instrumentalak ere egin behar izatea. Bestalde, kirol-zuzendariaren lanbide-jarduera gauzatzeko, ez dago zertan fisikoki egon kirol-jarduera egiten ari den lekuan.

Ez da ulertuko pertsona bat kirol-zuzendariaren lanbidea betetzen ari dela, dagokion erakunde pribatuaren barruan izen hori erabili arren, baldin eta pertsona horren jarduera lehiatu nahi duten kirolariak eta kirolari taldeak entrenatu, hautatu, aholkatu, planifikatu, programatu, zuzendu, kontrolatu, ebaluatu, jarraitzea, eta antzeko jardunak gauzatzea bada. Kasu horretan, entrenatzaile-lanbidearen aurrean gaude.

g) Kasu berezietako kualifikazio-baldintzak. Prestakuntza-eskaintzako aldaketa-prozesuetara egokitzea.



Legearen testu artikulatuan, lanbide bakoitza, lanbidearen funtzio-eremua eta kualifikazio-baldintzak definitu ondoren, hainbat kasu berezi arautu dira.

Estatuko edo nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten klubetako eta bestelako kirol-erakundeetako profesionalen kasuan, kirol-erakundeak bere helbide soziala duen autonomia-erkidegoan aplika daitezkeen lanbide-kualifikazioak eskatuko zaizkie.

Estatu-eremuko kirol-federazioetako eta gainerako kirol-erakunde publiko edo pribatuetako profesionalei Lege honetan ezarritako titulazioak eskatuko zaizkie baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten badute. Estatu-eremuko kirol-erakunde batek bere zentroa Euskal Autonomia Erkidegoan badauka eta zentro horretan lanbide-zerbitzuak ematen badira, zentzuzkoa da zentro horretako profesionalei dagokien kualifikazioa eskatzea.

8. artikuluan, Legearen aurreproiektu honetan aurreikusitako kualifikazio-eskakizuna kualifikazio horiekin lotutako prestakuntza-eskaintzan izan litezkeen aldaketa-prozesuetara egokitzeko asmoz, kualifikazio eta titulu haiek onartzen dira, eta Eusko Jaurlaritzak gauzatu beharko du egokitzapen hori. Gai horri dagokionez, ez litzateke ulergarria izango arau-esparruko izozketa, izoztuz gero, Legea egokitzeko legegintza-proiektuak igorri beharko bailirateke etengabe Legebiltzarrera.

h) Elkargoko kide egitea.

Legearen aurreproiektuak baztertu egiten du nahitaez elkargoko kide egitea; izan ere, gaur egun indarrean dagoen Profesionalen Elkargoei buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 3.2 artikulua arabera, *“lanbideetan jarduteko, ezinbesteko baldintza izango da dagokion Profesionalen Elkargoko kide egitea, baldin eta estatuko legeren batek hori ezartzen badu”*. Era berean, zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legea egokitzeko hainbat lege aldatzeari buruzko abenduaren 22ko 25/2009 Legearen Laugarren Xedapen Iragankorrean honako hau ezarri zen: *“Lege hau*



indarrean jartzen denetik, hamabi hilabeteko epea izango du Gobernuak, autonomia-erkidegoei galdetu ostean, Gorte Nagusietara lege-proiektu bat bidaltzeko. Lege-proiektu horrek zehaztuko du zein lanbidetan aritzeko den nahitaezkoa elkargoan izena ematea”.

Bestalde, memoria honetan askotan aipatu den Zerbitzu eta elkargo profesionalei buruzko Legearen aurreproiektuaren arabera, *“lege-maila duen estatuko arau bidez soilik eskatu ahal izango da nahitaez elkargoko kide egitea”*. Legegintza-aurreikuspen horren arabera, eta Konstituzio Auzitegiaren zalantzazko doktrina baten arabera, soilik estatuko legeak sor ditzake elkargoko kide egiteko betebeharrak eta ez da lanbiderik izango autonomia-erkidego batzuetan derrigorrezkoak direnak eta beste batzuetan ez, gaur egun gertatzen den bezala; izan ere, gaur egun, autonomia-erkidego askok onartu dituzte lanbide jakin batzuetan elkargoko kide egitea derrigorrezkoa izateari buruzko lege-xedapenak.

Horregatik, aurreproiektuaren 10. artikuluan ezartzen da Legean araututako lanbideetan sartzeko eta jarduteko ezinbesteko baldintza izango dela “dagokion profesionalen elkargoan izena ematea –estatuko kasuan kasuko legeek hala ezartzen badute”.

i) Lanbidean jarduteko bestelako baldintzak

Aurreproiektuaren 14. artikuluan beste gai garrantzitsu bati heltzen zaio: lanbidean jarduteko bestelako baldintzei. Argi dago Legean arautzen diren kirol-arloko lanbideetako batean jardun nahi duen orok bestelako baldintzak bete beharko dituela, hala badagokio, hala nola zerga-arloko baldintzak, Gizarte Segurantzaren arlokoak, irekitze-lizentzien arlokoak, federazio-lizentzien arlokoak eta abar. Horregatik, agindu horretan argitzen da Legean kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko ezartzen diren lanbide-kualifikazioen baldintzak indarrean dauden legeen arabera exijitu daitekeen beste edozein lizentzia, baimen edo titulu bazter utzi gabe ulertzen direla. Entrenatzaile baten bere lanbidean jardun nahi badu ekipo federatu bat zuzenduz, kualifikazio-baldintza logikoaz gain, federazio-afiliazioaren baldintza ere bete beharko



du, hots, dagokion federazio-lizentzia lortu beharko du. Soilik horrela lortuko da dagokion kirol-federazioak diziplina-ahala erabiltzea harengan.

Irizpide hori bilduta dago Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzerdearen Akordioan ere, Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeari dagokionez. Akordio horren arabera, *“bi aldeek onartzen dute legean zehaztu gabeko aurretiazko baldintzak egon daitezkeela lanbide horietan aritzeko, Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari dagokionez gertatzen den bezala, adibidez, nahitaezkoa baita, esparru publikoan aritzeko, Estatuko irakasle-kidego bateko kide izatea”*.

14. artikulua bigarren idatz-zatiaren arabera, kirol-arloko lanbidean jarduteko, ez da federazioaren lizentziarik eskatuko, lanbide-jarduera dagokion federazio-erakundetik kanpo gauzatzen bada. Idatz-zati hori guztiz bateragarria da arestian esandakoarekin, eta, egia esan, kirol-arloan lan egiten duten profesionalek normalean egiten duten eskariari erantzuten dio. Hainbat lanbide bete ahal izateko, aurretiko federazio-lizentzia eduki behar izan da historikoki. Gai horren inguruan egoera hori salatzen duten lan eta dokumentu ugari daude⁹. Argi dago ez dela Zuzenbidearen araberakoa kirol-federazioek edo administrazio publikoek eskatzea kirol-arloko lanbide batean jardun aurretik, federazio-lizentzia lortzeko, baldin eta profesionalak ez badu bere lanbidea kirol-jarduera federatuaren eremuan bete behar. Lizentzia dokumentu bat da eta dokumentu hori federazioetan sartzeko sortu da federazio horiek antolatzen dituzten lehiaketa ofizialeetan parte hartzeko, baina ez da derrigorrezkoa kirol federatutik kanpoko zerbitzuak bete nahi dituenarentzat. Legegintza-proposamen hori bat dator Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudiarekin. Araudi horretan honako hau ezartzen da esanbidez: *“Kirol-federazioek ez dute eskumena dagokien lurralde-eremuko euren kirol modalitateko lehiaketa edo jarduera guztien gainean”* (urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 38.4 artikulua, Euskadiko Kirol Federazioena).

⁹ Esate baterako, PALACIOS AGUILAR doktorearen *La validez de la formación de Socorrismo Acuático*. Ikus horri dagokionez, *Salbamendua eta Sorospena: Ur-jarduerak eta Sorospen profesionalari buruzko 4. Biltzarren Azken Memoria*, 2005eko abendua.

**j) Profesionalen printzipioak eta betebeharrak.**

Beste lege-xedapen batzuen –Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legea, esaterako– ereduari jarraiki, erregulazioaren xede diren lanbideetan jarduteko printzipioen eta betebeharren katalogoa txertatu da.

Lanbide jakin batzuk arautzen dituen Lege batek lanbide horiek berezko eta espezifiko dituzten xedapenak antolatu besterik ez du egin behar, eta, gainerako guztian, lanbide-jardunaren esparru komunaren mende egon behar dute. Horregatik, Legearen aurreproiektuaren oinarrietako bat da honako hau: erregulazioaren xede diren kirol-arloko profesionalak kirol-arloaren berezko eta espezifiko diren printzipioei jarraitu behar diete. Aurreproiektuko printzipio gidari horiek kirol-arloan indarrean dagoen legerian finkatutako jardunaren printzipio gidarietan oinarritzen dira, hein handi batean.

Komeni da nabarmentzea hainbat betebehar Kirol-jardueretan kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoarekin lotuta daudela, baita Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearekin ere. Halaber, erantzukizun zibilaren eta ondare-erantzukizunaren esparruan dagoen jurisprudentziaren arabera, nahi baino gehiagotan betetzen ez den betebehar bat bereziki nabarmendu da: profesionalen presentzia fisikoaren betebeharra. Arazo hori desagerrarazi egin behar da, eta proposatutako lege-testuak bide horretan aurrera egiten du.

Jarduteko printzipioen zerrenda ez da zehatza, eta atal batean, profesionalen elkargoak aukera du egoki iritzitako printzipioak gehitzeko.

Era berean, betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko diziplina-neurriei buruzko azken aurreikuspen bat ere txertatu da.

k) Lanbide-sozietateak.



Aurreproiektuan konturatu dira lanbide-jarduerak –baita kirol-arlokoak ere– asko aldatu direla eta, horren ondorioz, profesionalen jardun indibidualistaren ordeztu diziiplina anitzeko taldeak dira nagusi, lanbide-jarduerak gero eta konplexuagoak direlako eta lanaren espezializazioak eta zatiketak abantailak dakartzalako. Horregatik, zerbitzu profesionalen eremuan –eta kirol-arloko lanbideak ere hor sartzen dira– lanbideetako jarduna sozietateen bidez antolatzeke joera dago. Horregatik, une honetan Lanbide Elkartegoei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legea hartu da kontuan, baita Zerbitzu eta elkargo profesionaleri buruzko Legearen aurreproiektua ere, bide beretik baitoa.

Legearen aurreproiektu honetan, arau batera jo behar dela aipatzen da; hain zuzen ere, aplikatu beharreko legeri orokorrera. Ez dirudi kirolaren lanbide-esparruak lanbideetako jarduna sozietateen bidez diziplinatzen duten arau orokorretatik urrundu behar duenik. Profesionalen sozietateen bidez antolatutako jardueran jarduteko garaian profesionalen presentzia fisikoa bermatuko duen aurreikuspen berezi bat baino ez da egin.

Lege honetan araututako lanbideetan jardun ahal izango da Legeetan aurreikusitako edozein sozietate-formari jarraiki eta profesionalen sozietateak arautzen dituzten legerian ezarritako baldintzak betez, enplegu publikora iristearen kasuetan edo hezkuntza-arloko legeek onartzen ez dituzten kasuetan izan ezik.

I) Erantzukizun zibila

Lanbideen jarduna arautzearen eremuan, gai hori esanbidez aipatzea ohikoa izaten da. Adibidez, Lanbide sanitarioak antolatzeari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legean honako hau xedatzen da:

«46. artikulua. Erantzukizunaren estaldura

Asistentzia sanitario pribatuaren eremuan jarduten duten profesional sanitarioak, eta edozein zerbitzu sanitario mota ematen duten pertsona juridikoak edo titulartasun pribatuko erakundeak erantzukizuneko aseguria izan behar dute nahitaez, edo bestela,



abal edo bestelako finantza-bermeren bat, asistentzia hori edo zerbitzu horiek ematean pertsonen eragin diezaieketen balizko kalte batek eragindako kalte-ordainak estaltzeko.

Autonomia-erkidegoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, aseguruaren oinarritzko baldintzak zeintzuk izango diren erabakiko dute, sektoreko profesionalen eta gainerako agenteen laguntzarekin.

Elkargoan bildutako lanbideen kasuan, elkargokideei betebeharrak hori betetzen laguntzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzake profesionalen elkargoak.”

Beste adibide bat da lehen aipatu dugun Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea; honako hau dio:

«12. artikulua. Asegurua

1.- Tituludun profesionalak aseguruaren bat izan behar dute erantzukizun zibila dela-eta lanean dituzten arriskuei erantzuteko.

2.- Betebeharrak hori ez da derrigorrezkoa izango hirugarrenen eskubideak bermatuta baldin badaude kasuan kasuko jarduerak bete behar duen beste legeria baten bidez edo orokorrean bete beharreko eta helburu horretarako egindako akordioaren baten bidez.

3.- Lanbide kolejiatuen kasuan, elkargoek hartu beharko dituzte beren kideek aseguru-baldintzak betetzeko beharrezko neurriak.”

Legearen aurreproiektuan, kirol-arloko profesionalen erantzukizun zibilaren nahitaezko estaldura aipatzen da bereziki. Legearen aurreproiektuaren 20. artikuluan honako hau eskatzen da: lege-mailako arau baten bidez ezarri behar dela profesionalen erantzukizun zibileko nahitaezko aseguru.



Horren arabera, Lege honen bidez araututako profesionalek erantzukizun zibila aseguraturata izan behar dute, eta aseguru horrek, nolanahi ere, zerbitzu profesionalak ematerakoan hirugarrenei eragiten zaizkien kalteengatik eman beharreko kate-ordainak estali behar ditu.

Soilik Administrazio Publiko baten zerbitzura jarduten duten profesionalen kasuan, eta azken batean, lanbide-jarduera hirugarrenen kontura gauzatzen dutenen kasuan, ez zaie eskatuko erantzukizun zibileko aseguru hori nahitaez izatea.

m) Intrusismoa. Administrazio-, diziiplina- eta zigor-erantzukizunak.

Kirol-arloko titulazio akademiko espezifikoekin lotutako kolektibo ugari urte asko daramatzate kirolaren lan-merkatuan edo merkatu profesionalean intrusismoa handia dagoela salatzen. Kolektibo horiek aipatzen duten intrusismoa ez da intrusismo teknikoa, hau da, ez dagokio Zigor Kodearen 403. artikuluan tipifikatzen den intrusismo-delituari.

Noski, lanbide bati dagozkion egintzak lanbide horretan jarduteko titulurik gabe egiteagatik intrusismo-delitua egin dela esan ahal izateko, Lege baten bidez zehaztu behar da zer den lanbidea eta lanbide horren jarduna titulazio jakin bat izatearekin baldintzatu behar da. Intrusismo-delitua ez da egiten titulazio baten berezko egintzei dagokienez; delitua egiten da dagokion xedapenaren bitartez titulu jakin bat izatea eskatzen duen lanbide baten berezko egintzei dagokienez. Konstituzio Auzitegiak, Lehenengo Salaren bitartez, intrusismo-delitu bat egitearen gaia aztertzeko aukera izan du, kirurgia plastikoko espezialitate medikoan jarduteagatik Errege Dekretu batean aurreikusitako titulu ofizialik izan gabe. Konstituzio Auzitegiaren ustez, baita Auzitegi Gorenaren ustez ere (2003ko apirilaren 1eko epaia), 127/1984 Errege Dekretua ez da egokia intrusismo mota penalean bildutako arau-aipamena txertatzeko, bi arrazoi hauengatik. Alde batetik, ikuspegi formaletik begiratuta, espezialitate medikoak arautzen dituen araua ez da egokia intrusismo mota penala osatzeko, ez duelako Lege-mailarik, Konstituzioaren 36. artikuluan “*tituludun lanbideen jarduera*” arautzeko esanbidez eskatzen den moduan. Eta, bestetik, ikuspegi materialetik begiratuta ere



ondorio horixe bera atera beharko litzateke, erregelamenduzko arau horretan ez baitira zehazten espezialitate bakoitzaren berezko agintzak, eta horrek zigor-legezketasunaren eskubidea eta segurtasun juridikoaren printzipioa txertatzen dituen *lex certa* bermea urratzen du.

Memoriaren atal honetan aipatu den intrusismoa ondorio bat baino ez da, hain zuzen ere, sektorea arautzen duen legerik ez izatearen ondorio zuzena. Lanbideak ez badira arautzen, edo lanbideak garatzeko beharrezkoak diren titulu edo kualifikazioak ez badira zehazten, zaila izango da pertsona jakin batzuei intrusismo-delitua egin izana leporatzea.

Aurreproiektuaren 15. artikuluari jarraiki, Lanbideetan lege honek xedatutakoaren arabera jardun ezean, eta, bereziki, dagokion lanbide-kualifikazioarekin jarduteko betebeharra bete ezean, ordenamendu juridiko aplikagarriaren arabera eskatu beharreko administrazio-erantzukizunak, diziplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak eskatuko dira.

Administrazio- eta diziplina-zehapenez gain, aurreproiektuan indarreko legeriaren arabera dagozkion erantzukizun penalak ere aipatzen dira. 1985. urtean onartutako Zigor Kodearen 403. artikuluan honako hau xedatzen da: *“Norbaitek lanbide bati dagozkion egintzak gauzatzen baditu, Espainian indarrean dagoen legeriaren arabera eman edo aitortutako titulu akademikorik gabe, orduan, horri sei hilabetetik hamabi arteko isuna ezarriko zaio”*. 403. artikulua hori zuriz eratutako lege penaltzat hartzen da; izan ere, elementuetako bat zehaztu egin behar baita zigor-arloaz kanpoko arauak aplikatuta eta, hartara, Lege penalean txertatzen dira. Babes penala eraginkorra izan dadin, araudi baten bitartez *“lanbide bati dagozkion egintzak”* zehaztu behar dira, hau da, profesional jakin batzuek berezko dituzten eskumenak. Legearen aurreproiektuan ez dira legez kanpoko kasu penal berriak tipifikatzen, zerengatik, esan gabe doa, Euskadik ez baitu eskumenik zigor-arloan eta, bestalde, ez gara Lege Organiko bati buruz ari. Kontua zera da, tipo penala eratzen duten funtsezko elementuak 403. artikulua horretan erabat bilduta dauden arren, *“arau osagarria, zeharka bada ere, aipatzea”* derrigorrezkoa da. Bestela esateko, Zigor Kodearen 403. artikulua horretako agindu penal horrek betetzen du tipikotasun penalaren printzipioa betetzeko betebeharra,



deskribatzen baita debekatuta dagoen jokabidearen funtsezko mamia eta zigorra ere aipatzen baita (horrela, bada, 127/1990 KAEan Zuriz eratutako lege penal esaten zaien legeek zer eskakizun bete behar dituzten aipatzen da, Konstituzioaren arabera legitimo izan daitezen). Legearen aurreproiektua arau osagarria baino ez da, kirol-arloko lanbide bakoitzaren berezko kualifikazioak eta eskumenak zeintzuk diren zehazteko. Horrela bai esan dezakegu eremu horretan babes penala eraginkorra dela.

Zigor Kodearen eta zigor-arloaz kanpoko arauen arteko lankidetzakasu guztiak ez direnez onargarriak Konstituzioaren arabera, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera eska daitezkeen baldintzak zeintzuk diren aipatzea komeni da. Horretarako, Konstituzio Auzitegiaren 2015eko otsailaren 17ko Epaian bildutako doktrina aipatzea baliagarri izan daiteke:

“HIRUGARRENA.- Organo judizialen arabera, aztergai dugun aginduaren konstituzio-kontrakotasunaren arrazoietakoa bat da Espainiako Konstituzioaren 81.1 artikuluan xedatutako Lege Organikoaren erreserba urratu izana, betiere kontuan izanik 46/1985 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriaren lehenengo zenbakian tipifikatzen den delituak askatasunaz gabetzeko zigorra dakarrela, eta Konstituzioak eskatzen duenez, zigorraren eta motaren funtsezko elementuak Lege Organiko bidez xedatu behar dira. Hori ikusita, bai Estatuko abokatuak, bai fiskalak zigor-arloaz kanpoko Lege bat dela diote eta lege horren bitartez zuriz eratutako lege penal bat osatzen dela, Konstituzioan ezarritako eskakizunak betez betiere, Lege arruntera jotzeko aipamen hori dela-eta.

Kontua, beraz, zera da orain, gure doktrinari jarraiki, Konstituzioaren arabera onar daitezkeen lankidetzakasuak –zigor-arloko eta zigor-arloaz kanpoko arauaren arteko lankidetzari dagokionez– ote den erabakitzea. Horri dagokionez, hasteko, honako hau zehaztu behar dugu: ekainaren 15eko 120/1998 KAEan (babestutako espezieekin kontrabando-delitu bat egiteagatik emandako zigorrari buruzko babes-



errekurtso batean) 7/1982 Lege Organikoaren 1.1.4 artikuluari buruz –3.2 eta 3.3 artikuluei dagokionez– aipatu genuenez, guk aztertzeko ekarritako kasu honetan "doktrinaren arabera 'zuriz' eratutako lege penal batez ari gara, eta zehatz-mehatz ezartzen du ondorio juridikoa, baina horren izatezko kasua ez dago erabat aurreikusia bertan, baizik eta beste arau batean aurreikusitako osagarria behar du; zigor-arloko arauak zigor-arlokoa ez den beste arau batera jotzeko esaten du, eta hartara, delituaren edo faltaren definizioan txertatzen da" (2. Oinarri Juridikoa; ildo beretik, eta ogasun publikoaren aurkako delituari dagokionez, 87/2001 KAE, apirilaren 2 koa, 8. Oinarri Juridikoa."

Aurrekoan oinarrituta, jarraian honako hau ere aipatu behar dugu: Auzitegi honetan errepikatzen den doktrinari jarraiki, zigor-arloko Lege-erreserbak ez duela eragozten "zuriz eratutako lege penalak" egotea, hau da, osatu gabe dauden zigor-arloko legeak, non jokabide juridiko-penala ez dagoen haietan erabat aurreikusita, eta txertatu ahal izateko beste arau batzuetara jotzeko esaten dutela (guztienatik, 24/2004 KAE, otsailaren 24koa, 3. Oinarri Juridikoa).

Zerbitzu profesionalen hartzaileen osasunaren eta segurtasunaren babesa indartzeko, Azken Xedapenetako Lehenengoak k) letra gehitu dio Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. artikuluari, arau-hauste oso astuntzat jotzen baita zerbitzu profesionalak ematea baina kirol-arloko lanbideak arautzen dituen legerian eskatzen den lanbide-kualifikaziorik izan gabe. Ezin dugu ahaztu Autonomia Erkidego gehienetan badituztela kirolari buruzko legeak, eta lege horietan bildutako administrazio- eta diziiplina-araubideak aplikatzeko modukoak izan daitezke, adibidez, kualifikazio-baldintzak bete gabe lanbideetan jarduteko kasuetan. Andaluziako Kirolaren abenduaren 14ko 6/1998 Legearen 65. artikuluan arau-hauste administratibo astuntzat jotzen da "kirol-arloko zerbitzu profesional teknikoak ematea dagokion titulua lortu gabe". Kantabriako Kirolaren uztailaren 3ko 2/2000 Legearen 65. artikuluan arau-hauste administratibo astuntzat jotzen da "kirol-arloko zerbitzu profesional teknikoak ematea dagokion titulua lortu gabe". Kataluniako Kirolaren Legea uztailaren 31ko 1/2000 Legegintzako Dekretu bidez onartu zen, eta 74. artikuluan arau-hauste administratibo astuntzat jotzen da "Lege honetan ezarritako betebeharrak edo



baldintzaren bat ez betetzea, lizentziei, kirol-instalazioei, teknikarien titulazioari, eta kontrol mediko eta sanitarioari dagokienez". Kanarietan, ordea, Kirolaren uztailaren 9ko 8/1997 Legearen 59. artikuluan diziplinazko arau-hauste astuntzat jotzen da *"kirol-arloko irakaskuntza, prestakuntza, zuzendaritza, entrenamendu edo animazio teknikoarekin lotutako zerbitzuak behin eta berriz ematea, betiere Administrazioak eta kirol-federazioek kirol-titulazioei buruz erabakitako arauen arabera dagokion titulua izan gabe"*. Lanbideetan jarduteari dagokionez, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 15. artikulua aipa dezakegu adibidetzat. Agindu horren arabera, arau-hauste oso larria da *"Lanean jardutea 5.1 a) atalean zehaztutako titulurik izan gabe"*.

n) Arau-esparru erkidea.

Esan gabe doa aurreproiektuaren proposamenak ez duela bertan bildutako lanbideen erregulazioa agortzeko asmorik. Legean, kirol-arloko berezko zenbait lanbideetan jarduteko oinarrizkoak diren alderdiak arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer funtzio-eremu eransten zaion lanbide bakoitzari.

Horregatik guztiagatik, aurreproiektuaren 16. artikuluari jarraiki, Lege honetan ezarri ez den guztian, lanbideetan jarduteko arau-esparru erkideak ezartzen duena bete beharko da lege honek arautzen dituen lanbideetan jardun ahal izateko. Une honetan, Euskal Autonomia Erkidegoak badu jada lanbideetako jardunari dagokion esparru erkidea; hain justu, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea.

Arau-esparru erkide hori erabat bateragarria da kirol-arloko lanbideen erregulazio indibidualizatuarekin; beraz, kirol-arloko lanbide bakoitzak esparru erkide bat izango du eta, halaber, xedapen sektorialak ere izango ditu eremu bakoitzari –kirolari, alegia– dagozkion berezitasunen arabera.

Lanbidean jardutearekin lotutako problematikak zalantzak eragiten ditu beti Konstituzioaren lehia askeari buruzko printzipioarekin bateragarri ote den, baina



Legearen aurreproiektu honen 16.2 artikuluan honako hau xedatzen da: Legean arautzen diren lanbideetan sartzea eta jardutea, eta elkargo-erakundeen esku-hartzea Lehiaren Defentsari eta Lehia Desleialari buruzko legeei atxikita egongo dira. Beraz, hainbat parlamentutan onartutako irizpideari jarraitu zaio. Andaluziako Profesionalen Elkargoak arautzen dituen azaroaren 6ko 10/2003 Legearen 3.2 artikuluan xedatzen denez¹⁰, *“Andaluzian elkargoetan bildutako lanbideetan jardun ahal izango da lehia aske edo librearen araubidean, eta zerbitzu-eskaintzari eta ordainsaria zehazteari dagokienez, Lehiaren Defentsari eta Lehia Desleialari buruzko legeei atxikita egongo dira”*. Extremadurako Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko abenduaren 12ko 11/2002 Legean ere horixe bera aipatzen da¹¹.

o) Kirol-arloko Profesionalen EAEko Erregistroa.

Aurreproiektuaren 10. artikulua arabera, Legean arautzen diren lanbideetan sartzeko eta jarduteko, derrigorrezko baldintza izango da dagokion profesionalen elkargoan izena ematea –estatuko kasuan kasuko legeek hala ezartzen badute– edo Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena ematea. Kasuan kasuko profesionalen elkargorik baldin badago bakarrik eskatuko da elkargoko kide egiteko baldintza. Elkargoak, gainera, elkargokideen zerrenda eman beharko dio erregistroari, informazioa edukitzeko eta estatistikak egiteko. Nolanahi ere, profesional guztiek Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena emanda egon behar dute.

Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa publikoa izango da, Kirolaren Euskal Eskolari atxikita egongo da, eta, haren bidez, gutxienez informazio hau eskainiko da argi eta garbi eta doan, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak hobeto defendatzeko: izena emanda dauden profesionalen izen-abizenak eta haien lanbide-kualifikazioa egiaztatzen duten titulazio, ziurtagiri edo antzeko dokumentuen erreferentzia. Erregelamendu bidez ezarri beharko dira erregistroaren egitura, eginkizunak eta publizitate- eta funtzionamendu-erregimena.

¹⁰ Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2003ko abenduaren 17a.

¹¹ Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2003ko urtarrilaren 29a.

**p) Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babestea.**

Memoria honetan behin eta berriz aipatu dugu kirol-arloko zenbait lanbidetako jardunak eragin handia duela kirolarien osasunean eta segurtasunean, baita kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideetan ere. Horri jarraiki, 18. artikuluan xedatzen da Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak erabiliz, kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatuko duela; eta, horretarako, lege honek arautzen diren kirol-arloko lanbideetan jarduteko kualifikazioak edukitzeari dagokionez, beharrezkoak diren baimen, erantzukizunpeko adierazpen, komunikazio, ebaluazio, egiaztapen eta ikuskapeneko sistemak ezarri ahal izango ditu.

Pertsonen egokitze fisikoarekin lotutako merkatuan inolako objektibotasunik edo oinarri zientifikorik gabeko mezuak direnez nagusi, Legeak zera ezartzen du, profesionalen elkargoek beren kideekiko duten diziplina-ahalari kalterik egin gabe, Eusko Jaurlaritza arduratuko dela lege honek arautzen dituen lanbideen arloan zerbitzuak ematen dituzten pertsona eta erakundeek egiten duten publizitatea objektiboa, zuhurra eta egiazkoa izateaz. Halaber, Jaurlaritza arduratuko da publizitate horrek kirolarien osasun eta segurtasunaren aurkako kirol-jarduerarik ez bultzatzeaz, jarduera eta preskripzioen oinarri zientifikoa zehatz-mehatz errespetatzeaz eta esperantza faltsurik ez sortzeaz. Horregatik, Lege honek ezartzen dituen arauen menpe dauden profesionalak ezin izango dute kirol-jardueren publizitaterik egin jarduera horiek osasunari onura egiten diotela egiaztatzeko ebidentziarik ez badago. Halaber, debekatuta izango dute mirarizko zerbitzu edo produktuen publizitatea egitea.

Era berean, Lege honen eremuaren barruan dauden profesionalen kualifikazioa bermatzeko, idatziz formalizatuko dira profesional horiekin zerbitzuak emateko egiten diren kontratu guztiak eta, kontratuetan argi jasota geratuko da profesionalak egiaztatuta dutela kualifikazioa.

H.- XEDAPEN GEHIGARRIAK.



Teknika parlamentarioaren esparruan aurreikusitakoari jarraiki, Legearen testu artikulatuan, oro har, araututakoak ez diren eta Legearen beste idatz-zati batzuetan kokatu ezin diren erregimenak txertatzeko erabili behar dira xedapen gehigarriak.

Lehenengo Xedapen Gehigarrian Eusko Jaurlaritzari esanbidez agintzen zaio lankidetzak-mekanismoak bultzatzea beste administrazio publiko batzuekin, profesionalen elkargo-antolamenduekin, EAEko kirol-federazioekin eta bestelako kirol-erakundeekin, kirol-arloko lanbide-jardueran kirol-jarduera osasungarri, seguru eta kalitatezkoak sustatzeko.

Bigarren Xedapen Gehigarrian aurrekoaren antzeko neurri bat aipatzen da, baina kirol-arloko lanbideetako berdintasun-politiken esparruan. Eusko Jaurlaritzak, beste administrazio publiko batzuekin, profesionalen elkargoarekin, kirol-federazioekin eta antzeko bestelako erakundeekin lankidetzan, Lege honetan arautzen diren lanbideetan tratatu- eta aukera berdintasuna egoteko politikak sustatuko ditu, lanbide horietan sartzeko eta jarduteko orduan, lanbide horietan jardutean, lanbidean aurrera egitean eta kasuan kasuko elkargo-erakundeetan.

Hirugarren Xedapen Gehigarrian, kirol-arloko araubide ez-profesionalarekin edo boluntarioen araubidearekin lotutako erreferentziak osatzen dira. Gogoan izan Legearen lehenengo artikuluan Legearen aplikazio-eremua finkatzen dela eta, horren arabera, profesionalak lanbidean sartzeko eta jarduteko modua arautzen duela Lege honek; legearen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira boluntarioen araubidean eta antzekoetan egiten diren jarduerak. Horregatik, kontuan izanik lege honek profesionalak lanbidean sartzeko eta jarduteko modua arautzen duela eta legearen aplikazio-eremutik kanpo geratzen direla boluntarioen araubidean eta antzekoetan egiten diren jarduerak, aurreproiektuan xedatzen da Administrazio Publikoek eta eskumena duten gainerako erakunde publiko edo pribatuek ezarri behar dituztela, erregelamenduz, boluntarioek kirol-jardueretan parte hartzeko bete behar dituzten kualifikazio-baldintzak. Parte-hartzaileen osasuna eta segurtasuna bermatze aldera, lege honek profesionalentzat ezartzen dituen baldintza berberak ezarriko dituzte boluntarioentzat ere. Babestu beharreko ondasun juridiko hori ezin da arriskuan egon herritarrei zerbitzuak emateak merezi duen kalifikazio juridikoa dela-eta. Profesional



baten ordainpeko zerbitzuak jasotzen dituen kirolari adingabe baten osasuna eta segurtasuna babestu beharrekoak diren aldetik, babes-maila berdina merezi du boluntario baten zuzendaritzapean entrenatzen den kirolari adingabe batek ere.

Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 25.1 eta 62. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioek ezarri beharko dituzte, erregelamenduz, beren lehiaketetan entrenatzaile gisa jarduteko gutxieneko kualifikazio-baldintzak.

Hala ere, aurretik eskaera arrazoitua aurkeztuz gero, lege honetan ezarritako kualifikazioa barkatu eta horren ordeztu bestelako kualifikazio bat eska diezaieke Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak boluntario talde jakin batzuei. Nolanahi ere, salbuespenezkoa eta behin-behinekoa izango da neurria hori.

Lege honetako azken xedapenetako seigarrenaren lehenengo zenbakiak ezartzen duen datatik gehienez ere bi urte pasatu ondoren onartuko dira boluntarioei eskatu beharreko kualifikazioak.

Laugarren Xedapen Gehigarriari jarraiki, Lege honek adierazitako titulu akademiko eta ziurtagirien bidez soilik egiazta daitezke, printzipioz, gaitasunak. Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak ezarriko ditu aurreproiektuan, oro har, aurreikusitako bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzeko kasu, baldintza eta prozedurak. Alegia, pertsona lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko beste modu batzuk aipatzen dira testuan.

Bosgarren Xedapen Gehigarriaren logikak ez du eztabaidarako biderik ematen. Kirol-arloko lanbideak arautzen dituen Legeak –gainerako lanbideekin gertatzen den bezalaxe– eremu funtzional orokorra baino ezin du ezarri artikuluen bidez, ez eginkizunen zerrenda zehatz bat. Alabaina, batzuetan, orain arautu diren profesionalen zenbait elkartek zalantzak sorrarazi dituzte beren eginkizunei buruz; beraz, beste xedapen baten bidez honako hau gehitu da: Lege honetan bildutako lanbideen eskudantzien barruan sartzen da irizpenak, ikerlanak, txostenak, aditu-txostenak eta antzekoak egitea –lanbide bakoitzaren eremu funtzional orokorra adieraztea da



eskudantzia horien helburua—, betiere profesionalek lanbidera sartzeko dauzkaten kualifikazioen barruan badaude gaitasun horiek edo gaitasun horiek beste bide batzuetatik eskuratu dituztela egiaztatzen badute.

Seigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, lehen laguntza emateko lanbide-gaitasuna ezinbestekoa da zenbait lanbidetan jarduteko. Xedapen horri jarraiki, Lege honetan araututako lanbideren batean jardun diren guztiek, kirol-jarduera egiten den lekuan fisikoki egoten badira, Lanbide-kualifikazioen katalogo nazionalako UC0272_2 gaitasun-atala dutela egiaztatu beharko dute. Eusko Jaurlaritzan kirol-eremuko eskumena duen Sailak ezarriko ditu, erregelamendu bidez, aipatutako gaitasuna egiaztatzeko baldintzak eta prozedura.

Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, testu artikulatuan eskatzen den prestakuntza egiaztatzeko, titulu edo ziurtagiri ofizialak erabiliko dira, printzipioz. Unibertsitateko masterrak eta profesionaltasun-ziurtagiriak ere onartuko dira prestakuntza egiaztatzeko. Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen Sailak prestakuntza espezifikoaren maila zehaztu ahal izango du kasu jakin batzuetan. Prestakuntza-eskaintza ofizialik ez dagoen edo eskaintza hori nahikoa ez den kasuetan bakarrik sustatu edo/eta onartu ahal izango ditu kirol-arloko Sail horrek gutxieneko kalitate-baldintzak betetzen dituzten prestakuntza, titulu edo ziurtagiri ez-ofizialak.

Lanbide-gaitasunak eskuratu direla egiaztatzeko, aurreproiektuan titulu edo ziurtagiri ofizialak aipatu izan dira behin eta berriro, baina Zortzigarren Xedapen Gehigarrian kontzeptu horiek zehaztu egin dira; Lege honen arabera, honako hauek izango dira titulu edo ziurtagiri ofizialak: Hezkuntza Administrazioak hezkuntza-arloko legeen bidez araututako ikasketetan ematen dituen titulu eta ziurtagiriak, Lan Administrazioak lanbide-kualifikazioei buruzko legeen esparruan ematen dituenak eta Kirol Administrazioak kirol-legeen esparruan ematen dituenak.

Kirol-arloko profesionalei eskatzen zaizkien kualifikazioak zerbitzu profesionalak ematen diren jardueren kirol-mailaren arabekoak diren aldetik, Bederatzigarren Xedapen Gehigarrian maila horiek zehaztu nahi izan dira, eta horren arabera, honako



hauek izango dira kirol-hastapeneko edo oinarritzko mailako jarduerak: kirolariak, edozein adin izanda ere, jarduera ikasteko aurreneko faseetan egiten dituztenak. Tipologia honen barruan sartzen dira, besteak beste, parte-hartzeko ibilbidean sartuta dauden eskola-kiroleko jarduerak. Halaber, honako hauek izango dira erdi-mailako jarduerak: kirolariak kirol-teknifikazioko etapan, hau da, teknika hobetzeko etapan egiten dituzten jarduerak. Fase honetan, kirolariak, edozein adin izanda ere, jarduera menperatzen dute. Tipologia honen barruan sartzen dira, besteak beste, errendimenduaren ibilbidean eta kirol-talentuak hautemateko ibilbidean sartuta dauden eskola-kiroleko jarduerak eta kirol federatuko lehiaketa guztiak, goi-mailakoak izan ezik. Azkenik, honako hauek izango dira goi-mailako kirol-lehiaketak: nazioarteko kirol-federazio eskumendunek edo dagokion nazioarteko liga profesionalak baimentzen, ikuskatzen eta arbitratzen dituzten nazioarteko lehiaketak, kirol-egutegi ofizialetan sartuta daudenak, bai eta estatu-mailako kategoría goreneko lehiaketa profesional eta ez-profesionalak ere.

Kirol-errealitatea askotarikoa eta heterogeneoa ez ezik, dinamikoa eta aldakorra ere badenez, une bakoitzaren sortzen diren premietara egokitu ahal izateko tresna arin eta malgua izatea beharrezkoa da. Horregatik, definizio horiek egokitu ahal izango ditu Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak, Agindu bidez.

Kirol-arloko mugimenduan kezka handiena eragin duen gaietako bat zera izan da, eskola-kiroleko jardueretan parte hartzen dutenei eskatu beharreko prestakuntzaren gaia, ez dagoelako titulu akademiko ofizialik edo profesionaltasun-ziurtagiri espezifikorik eskola-adineko kirolariak kirol anitzeko jarduerak egiteko monitoreentzat. Horregatik, eskola-adinean dauden kirolariak kirol-jarduerak egiten dituzten monitoreentzat titulu ofizial edo profesionaltasun-ziurtagiri espezifikorik ez badago edo daudenak nahikoak ez badira, Eusko Jaurlaritzan kirolaren eta kualifikazioen arloetako eskumenak dituzten sailek, elkarrekin ados jarrita, prestakuntza-ekintza espezifikoak sustatuko dituzte eskola-adinean dauden kirolariak lan egiten duten pertsonentzat. Aurreproiektuaren arabera, prestakuntza-ekintzak moduluka egin ahal izatea eskaini beharko da, eta Eusko Jaurlaritzan kirolaren eta kualifikazioen arloetako eskumenak dituzten sailek ezarri ahal izango dute modulu jakin batzuk gainditzeak berekin ekarriko duela ziurtagiriak eskuratzea. Azkenik,



aurreproiektuan xedatzen denez, Lege honetan aurreikusitako kualifikazioak dituzten profesionalen programazio, zuzendaritza, ikuskapen edo laguntzarekin jardun beharko dute pertsona horiek.

Euskal Autonomia Erkidegoan badira Estatuak onartzen ez dituen hainbat kirol-modalitate; beraz, Hamaikagarren Xedapen Gehigarriaren arabera, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak sustatuko ditu lanbide-jarduera estatuak onartu gabeko kirol-modalitate eta -diziplinetan gauzatzen duten pertsonentzako prestakuntza-ekintza espezifikoak. Halaber, sail horrek emango ditu jarduera horien ziurtagiri ofizialak ere.

Estatuak onartutako prestakuntza-planik ez duten kirol-modalitateetan errealitatea ere aipatzen da aurreproiektuan. Horri dagokionez, Hamabigarren Xedapen Gehigarrian xedatzen da Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak sustatuko dituela Estatuak onartutako prestakuntza-planik ez duten kirol-modalitate eta -espezialitate nahiz prestakuntza-mailetan jardun diren pertsonentzako prestakuntza-ekintza espezifikoak; eta sail horrek emango dituela jarduera horien ziurtagiri ofizialak ere.

Xedapen gehigarrien berezko izaerari jarraiki, Hamahirugarren Xedapen Gehigarriaren arabera, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak edo prestakuntza dualerako kontratuak dituzten langileei, lanbidean sartzeko eta jarduteko, ez zaizkie eskatuko lege honetan aurreikusten diren lanbide-kualifikazioak. Aurrekoa gorabehera, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak dituzten langileek izena eman beharko dute Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan.

I.- ZUZENBIDE IRAGANKORRA.

Lege-aldaketa guztietan edo sektore bat lehen aldiz diziplinatzen duten Lege guztien kasuan trantsizio-arazo korapilatsuak sortzen dira aurreko arau-egoeratik lege-egoera berrira igarotzeko garaian. Maiz, ez zaio jaramon handirik egiten arazo horri, baina testu artikulatu honetan, xedapen iragankorren bitartez konpondu nahi izan da arazoa.



Legearen aurreproiektuaren zirriborroan bildutako Zuzenbide iragankorrek denboren arteko gatazkak saihestu nahi izan dira.

Hain justu, Zuzenbide iragankorrak eginkizun oso garrantzitsua betetzen du lege-erregulaziorik gabeko lanbideak araututako lanbide bihurtzeko prozesuan. Prozesu horrek arazo ugari eragiten ditu; esaterako, titulu edo lanbide-kualifikazio jakin bat izan gabe, erregulazioaren xede den lanbide-jardueran ordura arte jarduten zuten profesionalak zein egoeratan geratzen diren.

Arazo hori honela konpondu da: euren egoera erregulazioaren aurretik egiaztatzen duten profesionalak lanbidean jarraitzeko gaituko dira. Horrela, bada, Legearen aurreproiektuan xedatutakoak ez du honako hauen egoerari eta eskubideei kalte egiteko asmorik: Lege hau indarrean sartzen denean egiaztatzen dutenek modu jarraituan –eta ez noizean behin– aritzen zirela Lege honetan arautzen diren lanbide-jardueretan. Erregelamenduz ezarriko da hori egiaztatzeko modua.

Zenbait xedapenetan konponbide traumatikoagoaren alde egiten dute, hau da, trantsizioaldi bat ezartzen dute titulaziorik ez duten profesionalek lege-esparru berrian eskatzen zaien titulazioa lortu ahal izateko. Alabaina, Lege honetan, jarduera sektorean garatu duten profesionalak errespetatu nahi izan dira eta, horregatik, lan-eskarmentua aldeztu aurretik egiaztatuz gero, lanbidean jarduteko aukera bermatuko zaie, baina profesional bakoitzak Legea indarrean hasi aurretik betetzen zituen zereginetara mugatuko da gaikuntza.

Xedapen iragankor honek berme garrantzitsu bat dakar. Xedapenean ezartzen denez, lehenengo zenbakian ezarritako gaikuntzari buruz esandakoari kalterik egin gabe, Administrazioak lanbidean jarduteko aukera ukatu ahal izango die eskatutako kualifikaziorik ez dutenei, jarduerak nolako ezaugarriak dituen kontuan hartuta lanbidean kualifikaziorik gabe jarduteak arrisku larrian jartzen badu pertsonen osasuna eta segurtasuna. Ez litzateke ulergarria izango Lege baten oinarri juridikoa pertsonen osasuna eta segurtasuna babesteko premia izanik, babes hori bermatzeko mekanismorik ez ezartzea. Ezaugarri horiek dituzten lanbide-jardueren zerrenda egingo du Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak.



Halaber, osasuna eta segurtasuna daudenez jokoan, konponbide horri hainbat berme esleitu zaizkio aurreproiektuan. Horrela, bada, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan aurreikusitakoaren babespean, pertsona horiek gaitasunak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalaren bitartez –erreferentetzat Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala dutela– eskuratu dituztela ebaluatzeko eta egiaztatzeko aukera badute, Legean finkatutako epearen barruan lortu beharko dute egiaztapen hori. Kontuan izan behar da ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistema hori garatzeko garaian ebaluazioaren fidagarritasuna, objektibotasuna eta zorroztasun teknikoa bermatzen duten irizpideei jarraiki egiten dela.

Kasuan kasuko federazioak baimena ematen duen bitartean estatu- edo nazioarte-mailako lehiaketetan entrenatzaile-lanak lege honetan eskatzen den kualifikaziorik gabe egiteko, behin-behineko gaikuntza emango zaie kasuan kasuko Espainiako edo nazioarteko federazioak eskatzen duen titulazio gorenena duten pertsoneri.

Erregelamenduz ezartzen den epean prestakuntza egiaztatzeko betebeharra ez betetzea arrazoitzat hartu ahal izango da Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoek kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen babesean lanpostutik kentzeko eta, horrez gain, Langileen Estatutua onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 52. artikuluko a) letran aipatzen den desgaitasuna agertutzat hartzeko.

Filosofia horri berari jarraiki, Legearen aurreproiektuaren Bigarren Xedapen Iragankorrean kirol-monitore, entrenatzaile eta kirol-zuzendari lanbideak aipatu dira. Xedapen hori Legea pixkanaka aplikatzeari buruzkoa da, aipatutako lanbide horietan. Lege honek kirol-modalitate, edo -espezialitate bakoitzeko kirol-monitore, entrenatzaile eta kirol-zuzendari lanbideetarako ezartzen dituen titulazio-baldintzak dagozkien kirol-modalitateetako kirol-teknikari eta goi-mailako kirol-teknikari titulazioak ezartzen doazen heinean exijituko dira. Aurreikuspen hori behar-beharrezkoa da. Kontuan izan kirol-irakaskuntza edo -prestakuntza asko trantsizioaldikoak direla, eta oraindik eskaini ez diren tituluei dagozkiela.



Horregatik, pixkana aplikatzeko testuinguru horretan, kirol-monitorearen eta entrenatzailearen berezko eremu materialetan Eusko Jaurlaritzan kirol-eremuko eskumena duen Sailak egiaztatzen badu ez dagoela dagoen eskariari erantzuteko adina tituludun profesional edo kirol-eremu berriak daudela, monitore eta entrenatzaile horien berezko eginkizunak betetzeko lanbide-gaitasunak edo prestakuntza izan badutela egiaztatzen dutenak gaituko dira.

Hirugarren Xedapen Iragankorra gehitu da. Horren arabera, 8.1 artikuluan aurreikusitako elkargoko kide egiteko betebeharra bete gabe lanbidean jarduteko debekua dagokion lanbideak bere elkargoa duenean baino ezin izango da eskatu. Kontuan izan gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herriko Soin Iharduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofiziala baino ez dagoela, eta hori titulu akademiko zehatz bat dutenak biltzen dituen elkargo bat da, ez aurreproiektuan arautu diren lanbide guztiak biltzen dituenak.

Laugarren Xedapen Iragankorrek lehen laguntza emateko kualifikazioa eskuratzeko betebeharra ez betetzearekin lotutako arazoa konpondu nahi du. Lege hau indarrean sartzen denean Lege honek ezartzen duen lehen laguntza emateko kualifikaziorik ez duten kirol-arloko profesionalek 2017ko abenduaren 31 arte jarraitu ahal izango dute lanbide-jardueran, xedapen iragankorretan aurreikusten diren baldintzetan. Aipatutako epean prestakuntza eskuratzeko betebeharra ez betetzea arrazoitzat hartu ahal izango da Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen babesean lanpostutik kentzeko eta, horrez gain, Langileen Estatutua onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 52. artikuluko a) idatzi-zatian aipatzen den desgaitasuna agertutzat hartzeko.

Bosgarren Xedapen Iragankorrean xedatzen denez, xedapen iragankorretako lehenengoak eta bigarrenak ezarritakoaren arabera profesionalentzat arauz ezartzen diren behin-behineko gaikuntzak boluntarioei ere aplikatuko zaizkie. Legea pixkanaka aplikatzeko prozesu hori boluntarioen eremuan zerbitzuak ematen dituztenei ere aplikatzea logikoa da.

**J.- AZKEN XEDAPENAK.**

Azken xedapenei dagokienez, orokorrean onartutako araugintza-teknikaren jarraibideetan ezarritako irizpideari jarraitu zaiola esan behar dugu.

Lehenik, azken xedapenetako lehenengoaren eta bigarrenaren bitartez Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. eta 128. artikuluetan aldaketak egin dira. Lehengoan, 127. artikuluari administrazioko arau-hauste oso astunei buruzko k) letra erantsi zaio; honela idatzita egongo da: «*k) Kirol-arloko lanbideak arautzen dituzten legeek eskatzen duten lanbide-kualifikaziorik gabe ematea zerbitzu profesionalak*». Bigarrenean, 14/1998 Legearen 128. artikuluari administrazioko arau-hauste astunei buruzko h) letra erantsi zaio; honela idatzita egongo da: «*h) Elkargoko kide egiteko edo Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena emateko betebeharra (bat edo bestea, kasuaren arabera) ez betetzea, bai eta kirol-legediak edo kirol-arloko lanbideetan jarduteko legeek ezartzen duten erantzukizun zibileko asegururik ez edukitzea ere*»

Azken Xedapenetako Hirugarrenean gaikuntza orokorra esleitzen zaio Eusko Jaurlaritzari, Lege hau garatu eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan, bere eskumenen eremuan. Aholku Batzorde Juridikoak esan duenez (231/2011 irizpena), ongi esan ere, Kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legea garatzeko erregelamendu-ahala Eusko Jaurlaritzari dagokio, baina salbuespen moduan, ahal hori eslei dakioke “*kirol-arloko eskumena duen sailaren titularrari*”. Konstituzioaren 152.1 artikulua, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 29. artikulua, eta Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. artikulua arabera, Eusko Jaurlaritzari dagokio, lehen instantzian, erregelamendu-ahal orokorra “*baina malgutasun handiz jokatu beharreko kasuetan, sailburuek legea betearazteko erregelamendua emateko eskumena dutela onartu da, betiere lege bidez erregelamendu-xedapen zehatzak emateko gaikuntza esleitzen bazaie*”.



Azken xedapen horren atzetik beste bat dator; horren bitartez, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailari gaikuntza espezifikoa esleitzen zaio Legean erabiltzen diren kontzeptuak definitzeko. Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailari dagokio Lege honetan erabiltzen diren kontzeptuak definitzea eta lanbide bakoitzaren eskudantziak eta eremu materialak zehaztea. Ezinezkoa da Lege baten bitartez lanbide bakoitzaren eginkizunen eremu guzti-guztia zehaztasunez finkatzea. Memoria honetako beste idatz-zati batean aipatu dugunez, gaikuntzak ez du urratzen legeko erreserbaren printzipioa. Legearen eta erregelamenduaren arteko lankidetzako formula hori behar-beharrezkoa da lanbideak arautzeko eremuan.

Azken Xedapenetako Bosgarrenaren bitartez, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen saila esanbidez gaitzen da Lege honetan aipatzen den prestakuntza osagarria eta esperientzia onartzeko baldintzak eta prozedura zehazteko, bere eskumenen eremuan.

Azkenik, Azken Xedapenetako Seigarrena arauaren indarraldiari buruzkoa da. Eusko Legebiltzarrean onartutako Legeekin ohiko moduan jarraitzen den irizpideari jarraitu zaio, hau da, “*Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian*” argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da indarrean. Ez dago arrazoi berezirik Legeak indarraldi berezia izateko. Aurreproiektuan, Legea indarrean hasteko eguna ez dator bat kualifikazioak eskatzen hasteko datarekin, geroago hasiko baita horiek eskatzen. Hain zuzen ere, 2018ko urtarrilaren 1ean.

K.- TESTUAK INDARREKO ARAUDIAN DUEN ERAGINA.

Araugintza-teknikaren jarraibideei jarraiki, xedapen orokorraren proposamen ororekin batera, proposamen berriak eraginpean hartzen dituen xedapenen zerrenda bat aurkeztu behar da, baita gai berari buruzko aurreko xedapenen indarraldiari buruzko taula bat ere, erabat edo partzialki indargabetuko direnak esanbidez aipatuta.

Legearen aurreproiektu honen bidez lehen aldiz arautzen direnez Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideak, indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren



gaineko eragina, izatekotan, minimoa izango da. 14/1998 Legearen bi agindu baino ez dira aldatu, zehapenei dagokienez.

Arestian adierazi dugunez, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak ezartzen zuen botere publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, titulu ofizialak eskatuko dituztela kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak eskaintzeko, hots, irakaskuntza-, zuzendaritza-, kudeaketa-, entrenamendu- eta animazio-zerbitzuak eta bestelakoak eskaintzeko. Kirolaren Legeak ez zituen zehaztu lanbide-jarduera horietarako beharrezkoak diren kualifikazioak, eta, beraz, lanbide-kualifikazioen eskakizuna arautuko duen araudi bat behar du Euskal Autonomia Erkidegoak.

L.- ARAUGINTZA-TEKNIKARI DAGOZKION KONTSIDERAZIOAK.

Memoria honen hasieran aipatu dugunez, Legearen aurreproiektua idazteko garaian araugintza-teknikaren jarraibideak bete dira; hain zuzen ere, Gobernu Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an egin zuen bilkurako Akordioaren bidez onartutako araugintza-teknikaren jarraibideak –Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomi Garapenerako sailburuak 1993ko apirilaren 6an emandako Aginduaren bidez argitaratu ziren jarraibide horiek–. Jarraibide horiek aplikatuta, Legea formaren aldetik kalitatezkoa izatea lortu nahi izan da, hartara segurtasun juridikoa handiagoa izango baita eta Legea bera hobeto ulertuko baita.

Orokorrean onartutako araugintza-teknikaren gomendio batek dioenez, xedapen bat oso konplexua eta luzea baldin bada, azalpen-zatia baino lehen aurkibide bat txertatzea komeni da. Legearen aurreproiektu hau ez denez oso luzea –18 artikulua–, ez zaigu iruditu aurkibidea txertatu behar denik.

Testu artikulatua ez dago atal, kapitulu, titulu edo liburutan banatuta; izan ere, Legearen aurreproiektuan bildutako artikulua gutxi direnez, orokorrean onartutako araugintza-teknikaren jarraibide horietan ez baita hori egitera behartzen. Artikulu gutxi dituzten lege-testuetan artikulua ez dira multzokatu behar.



M.- PROPOSATUTAKO TESTUAREN BIDERAGARRITASUNA. PREMIA, PROPORTZIONALTASUN, SEGURTASUN JURIDIKO, SINPLETASUN ETA ERAGINKORTASUNAREN BALDINTZAK BETETZEA.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legean erregulazioaren kalitatea hobetzeari buruzko oinarrizko xedapenak azaltzen dira, eta araugintza-ekimenetan aplikatu beharreko erregulazio egokiaren printzipioak jasotzen ditu. 4. artikulua arabera, araugintzari ekitean, Administrazio Publikoek hainbat printzipio bete behar dituzte (premia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa eta abar). Xedapen horretan xedatzen denez, araugintza-ekimenak printzipio horiekin bat datozela behar adina justifikatu beharko da.

Arau-ekimen horretan, Eusko Jaurlaritzak behar adina egiaztatu du premiaren, proportzionaltasunaren, segurtasun juridikoaren, sinpletasunaren eta eraginkortasunaren printzipioak bete direla.

Azken urteotan hainbat dokumentutan agerian utzi denez, gutxieneko prestakuntzarik gabeko pertsona batzuek kirolarien osasunari eta segurtasunari zuzenean lotutako lanbide-jardueretan kontrolik gabe jardutearen aspaldiko arazoa pairatzen du egungo euskal kirol-sistemak. Eusko Legebiltzarrak jakinarazi zuen hori 1998. urtean, indarrean dagoen Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea eztabaidatu eta onartu zenean, baita geroago ere. Ikuspegi horretatik begiratuta, araugintza-ekimenak **premiaren printzipioa** betetzen du, interes orokorreko arrazoi garbi bat baitago; Legeak kirol-arloko lanbide batzuek kirolarien osasunean eta segurtasunean duten eragin ukaezinari erantzuten dio; izan ere, eragin horrek lanbideen jarduna arautzea dakar ezinbestez, batez ere eremu horretan, lanbide-jarduerak prestakuntza egokirik gabeko profesionalek egin izan baitituzte kolektibo bereziki sentiberetan (eta babes egokia jasotzeko premia handiagoa dutenetan), hala nola haurrengan eta eskola-adineko gazteengan.

Kirolaren Euskal Planak (2003-2007) berak ere salatu zuenez, pertzepzio orokorra da ez dagoela lanbide-araudirik, eta horrek ekarri duela, batetik, prestakuntzarik gabeko



pertsonak sartzea merkatuan, eta, bestetik, behar baino kualifikazio gutxiagoko jendea ibiltzea lanbide horietan. Hori dela eta, plan horren lehentasunezko helburuetako bat zen arautzea zeintzuk diren lanbide horietan jarduteko behar diren gutxieneko titulazioak, kontuan izanik, planak berak onartzen duenez, zelan eragiten duen kirola egiteak kirola egiten dutenen osasunean eta segurtasunean.

Ukaezina da kirola egitea oso onuragarria dela Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren osasunerako eta ongizate pertsonalerako (betiere baldintza onargarrietan egiten bada), baina kirola egitea mehatxu handia ere izan daiteke, baldin eta beharrezkoa den prestakuntza ez duten pertsonen zuzenduta edo gainbegiratuta egiten bada.

Kirol-arloko lanbideetan jarduteko modua arautzeko premiari dagokionez, Memoria honetan nabarmendu behar da Konstituzio Auzitegiak hau azaldu zuela urriaren 1eko 194/1998 Epaian: *“Konstituzioak berak 43.3 artikuluan agintari publikoei agindua ematen die gorputz-hezkuntza eta kirola sustatzeko (Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua), eta jarduera horiek osasunarekin oso lotuta azaltzen dira, Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikuluko horretako 1. paragrafoan azaltzen denez; hain lotuta daude, ezen osasuna mantentzen laguntzeaz gain, haiei esker saihestu egin baitaiteke gorputz- eta kirol-jardueretako hainbat ariketa desegokik osasunean izan dezakeen eragin negatiboa, batez ere zenbait kirolekin jarduteak arrisku handi samarra dakarrenean*. Jakina da, bestalde, jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta balioetsiagoak direna eta, egoera horri erantzuteko, botere publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionalei”.

Testuinguru horretan, testu artikulatuak kirol-eremuaren berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarriak diren zenbat alderdi arautzea izango du helburu, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer funtzio-eremu orokor eransten zaion lanbide bakoitzari.

Legearen helburua, **proportzionaltasun-printzipioa** betez, ez da kirolari lotutako lanbide guztiak arautzea, kirol-arloko lanbide jakin batzuk baizik. Horregatik, kirol-



arloko beste lanbide batzuk arautu gabe utzi dira: epaile profesionalak, kirolari profesionalak, kirolarien agenteak eta abar. Erregulaziotik salbuetsitako lanbide horietan, hirugarrenentzako zerbitzuak emateak ez du zuzenean eragiten ondasun juridikorik garrantzitsuenetan, hau da, ez dute eragiten lanbide-zerbitzu horien hirugarren hartzaielen osasunean eta segurtasunean.

Gauzatuko den araugintza-ekimena bat dator, halaber, proportzionaltasun-printzipioarekin, baina beste ikuspegi batetik begiratuta; testu artikulatuak murrizketarik eta desitxuratzetik txikiena eragingo duten neurriak bildu ditu, emaitza bera lortzea ahalbidetuko dutenen artean.

Nolanahi ere, **segurtasun juridikoaren printzipioa** bermatzeko, arau-ekimenak gainerako ordenamendu juridikoa eta beste erregulazio sektorial batzuk hartzen ditu kontuan printzipio hori betetzeko, ziurtasun juridikoko ingurune bat sortuz. Legea lantzean, bereziki hartu dira kontuan gaur egun izapidetzen ari diren Estatuko eta Autonomia Erkidegoko arau-proiektu garrantzitsu batzuk.

Ekimenak, halaber, **sinpletasunaren printzipioari** erantzuten dio. Izan ere, Legeak Euskadin legearen hartzaille guztientzat erraza eta argia izango den eta ezagutza eta ulermena erraztuko duen arau-esparru bat lortzea du helburu.

Arau-ekimen horrek, halaber, **eraginkortasunaren printzipioari** erantzuten dio, lortu nahi diren helburuak eta heileburu horiek ahalik eta modu eraginkorrenean lortzeko aurreikusitako neurriak oso identifikatuta baitaude.

Legearen bideragarritasunari dagokionez, gizarte-onarpenaren ikuspegitik begiratuta, azpimarratu beharra dago gizarte-eragile guztiak (eta herritarren borondatea ordezkatzeko duten legebiltzar-taldeak bereziki) bat datozela Legea beharrezkoa eta egokia dela adieraztean. Legearen behar eta egokitasunaren frogak gisa, adierazi beharra dago Eusko Legebiltzarraren baitan behin baino gehiagotan eskatu zaiola Eusko Jaurlaritzari kirol-arloko lanbideen jardunari buruzko lege bat lantzeko. Zehazki, 2012ko otsailaren 9ko osoko bilkuran, "*kirol-arloko lanbideak arautzeko lege-proiektu bat*" lantzeko eskatu zion Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari. Eta, ondoren,



Eusko Jaurlaritzari gauza bera eskatu dioten hainbat legebiltzar-ekimen egin dira. Eta oso adierazgarria da, halaber, Eusko Legebiltzarraren egungo legegintzaldirako ordezkaritza lortu nahi zuten alderdien hauteskunde-programetan ia guztiek adierazi zutela kirol-arloko lanbideen jarduna arautuko zuen lege bat onartu behar zela. Oso deigarria da Legebiltzarrean dauden 75 legebiltzarkideetako 74 biltzen dituzten alderdi politikoek beren hauteskunde-programetan kirol-arloko lanbideen jarduna legez arautzeko konpromisoa hartu zutela adierazi izana. Euzko Alderdi Jeltzaleak (27 legebiltzarkide) "*kirol-esparruko lanbideak arautzeko Legea garatzea*" proposatu zuen programan. EH Bilduk (21 legebiltzarkide) honako hau proposatu zuen: "*kirol-arloko lanbideen jarduna arautzea, kirol-titulazioak barnean hartuta, kirolarien osasuna eta segurtasuna babesteko eta euskal kirolaren kalitatea bermatzeko*". Era beran, Euskadiko Alderdi Sozialistak (16 legebiltzarkide) "*kirolari eta gorputz-jarduerari lotutako lanbideen jarduna arautzea*" proposatu zuen. Azkenik, Euskadiko Alderdi Popularrak honako hau zioen bere programan: "*Kirol-arloko lanbideak arautzeko Lege Proiektua landuko da inplikaturako agenteekin batera, era horretan kirol-arloko lanbideak, profesionalen gaitasunak, prestakuntza eta trebakuntza eta lanbideen inguruko lan-merkatua finkatzeko*".

Memoria honetan aipatu beharrekoa da Legearen behin betiko bideragarritasuna bermatuta egongo dela Legea behar bezala garatzeko erronka bere gain hartzen bada, eta beharrezkoak diren giza baliabideez eta baliabide materialez hornitzen bada. Estatu espainolean dagoen legeria-aurrekari bakarra Kataluniako Kiroleko Lanbideak Betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legea da, parlamentu-talde guztiek aho batez onartu zutena. Lege hori ezarri ondoren, gizarte-eragileen balantzea positiboa izan da. Izan ere, lanbide-sektorea heztean lortu da prestakuntza eta kualifikazioa eskatzearen bidez, sektorea antolatu da, 15.000 profesional baino gehiagok eman dute izena kirol-arloko profesionalen administrazio-erregistroan (kontsumitzaile eta erabiltzaileen alde aurreikusitako bermeetako bat da hori), eta elkargokide egin diren profesionalen kopuruak gora egin du (kontuan hartu behar da horrek kualifikazioa aldeztu aurretik egiaztatzea, arriskuak nahitaez aseguratuta beharra eta abar dakarrela).

Aurreproiektuan bildutako arau-proposamenak errealista izan nahi du, Euskal Autonomia Erkidegoan egun dagoen errealitatea baitu abiapuntu, eta kirolarekin lotura



duten gizarte-eragileek urte hauetan guztietan planteatu duten problematikan oinarritu da. Horrenbestez, hainbat sektorek eta erakundek (autonomia-erkidegoetako parlamentuek, profesionalen elkargoek, ikastetxeek, doktrina zientifikoak eta abar) adierazi dute aldarrikapenari emandako erantzuna da proposatutako testua.

Noski, baliteke hartzaileen hainbat kolektibok Legearen aurreproiektuan bildutako zenbait arau agian ongi ez hartzea, baina hori gertatzea saihestezina da, Legearen bitartez hasieran libre ziren zenbait lanbide-eremu orain kualifikazio jakin batzuk izatearen baldintzapean geratu diren aldetik. Partzialki librea den lanbide-merkatua lanbide-merkatu arautu bihurtzen duen araugintza-testu orok, zerbitzu profesionalak eman ahal izateko gutxieneko kualifikazioak izatearen baldintza bete behar dela xedatzen duen testu orok erresistentzia eragin dezake. Lanbidean libreki, inolako bermerik gabe, jarduteko egoera batetik garatutako eginkizunen araberako kualifikazioak izatea eskatzen den egoera batera aldatzen den lege-sistema guztietan kostu ekonomiko bat dago, eta onartu egin behar da. Ezinbestean onartu behar da prezio hori, osasunarekin eta segurtasunarekin estu-estu lotuta dauden lanbideen jarduna antolatu nahi bada.

Bideragarritasunaren ikuspegitik begiratuta, aurreproiektuak ahalegin handia egin du erregulazioaren xede diren kirol-arloko lanbideetan jarduten dutenek ematen dituzten zerbitzuen hartzaile diren kirolariei zentzuzko babesa emateko beharrezkoak diren neurriak txertatzeko EAEko kirol-sisteman. Eta horri dagokionez, Legeak:

- a) Behar baino kualifikazio gutxiagoko egoerak saihesten ditu, kirol-arloko lanbideak lanbide-kualifikazio jakin batzuk izatearekin lotzen dituelako.
- b) Profesional jakin batzuek beste lanbide batekoak diren eta baimenik ez duten eginkizunak betetzea eragozten du.
- c) Profesional horien betebeharrak eta printzipio espezifikoak zehazten ditu.
- d) Erantzukizun zibileko aseguruaren betebeharrak ezartzen ditu.
- e) Kirol-ekipamenduetan eta zerbitzuak ematean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek lanbide-kualifikazio egokiak eskatzeko aukera ahalbidetzen du.



- f) Administrazio-erregistro bat sortzen du; erregistro horretan, inskribatutako profesionalei buruzko informazioa eta, bereziki, haien kualifikazioei buruzkoa biltzen da, kontsumitzaile eta erabiltzaileak hobeto defendatu ahal izateko.

N.- GENERO-ERAGINA.

Espainiako Konstituzioaren 14 artikulua berdintasunerako eskubidea eta sexua dela medio diskriminaziorik ez izateko eskubidea aldarrikatzen ditu. Bestalde, 9.2 artikulua araber, botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea, gizabanakoaren eta berak osatzen dituen taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eragingarriak izan daitezen.

Era berean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna giza eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan onartzen den printzipio juridiko unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar Nagusiek onartu zuten 1979ko abenduan, eta Espainiak berretsi 1983an.

Europar Batasunaren eremuan, Europar Batasuneko politikak diseinatzeko orduan, badira kontuan hartu beharreko hainbat lehentasun; horien artean dago, esaterako, politika guztietan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea eta desberdintasunak desagerraraztea. Horri jarraiki, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan jarraitu beharreko estrategiak onartu dira, eta programa horretan aipatutako helburuak betetze aldera egin beharreko ekintzetako bat da sexuaren araberako eraginaren ebaluazioa egitea esku-hartzearen eremu guztietan (bizitza ekonomikoa eta soziala, bizitza zibila, rolak eta abar).

Bestetik, egiaztatu egin da hasiera batean sexistak ez ziruditen, sexistak izan zitezkeela aurreikusi ez zen, eta sexistak izan zitezela nahi ez zen hainbat erabaki politikok eragin desberdina izan dezaketela emakumeen eta gizonen gain. Horren aurrean, Europar Batasunak bi ekintza gauzatu ditu. Alde batetik, Batasuneko politiketan genero-ikuspegia sartzearen aldeko konpromisoa gauzatzeko lehen urratsa eman zuen EBk zeharkakotasunari buruzko "*mainstreamin*" idatzia onartzearen bidez.



Bestetik, Batzordean erabili beharreko "*Eragina generoaren arabera ebaluatzeko gida*" egin zuen. Gida horren xedea zen, zehazki, diskriminazio-egoeren iturburu diren eta nahita sortu ez diren ondorio negatiboak saihestea eta, horrez gain, Batasuneko politiken kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 9.1 artikulua, Espainiako Konstituzioan ezarritakora jota, berdintasunerako eskubidea eta sexua dela medio diskriminaziorik ez izateko eskubidea aldarrikatzen ditu. Era berean, 9.2 artikulua arabera, botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea, gizabanakoaren eta berak osatzen dituen taldeen berdintasuna benetakoa eta eragingarria izan dadin.

Arau-esparru horretan, Eusko Legebiltzarrak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea onartu zuen. Lege horren arabera, euskal herri-agintek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. Jarduteko printzipio orokor hori zehazte aldera, Legearen 18. artikuluan honako hau xedatzen da: arauak garatu eta aplikatzerakoan, euskal herri-agintek modu aktiboan izango dute kontuan emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzearen helburua. Halaber, 19. artikuluari jarraiki, Administrazio-arau edo -egintza bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organoak ebaluatu egin behar du zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina. Horretarako, aztertu behar du arauan proiektatu den jarduketak ondorio positiboak edo kontrakoak izan litzakeen emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatzeko eta haien arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean.

Lege horren azken xedapenaren bitartez Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 57.1 artikulua aldatu zen.

"Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako lege-proiektuek honako hauek jasoko dituzte: zioen adierazpen bat eta beharrezko aurrekariak, haiei buruzko iritzia eman ahal izateko; generoaren arabera inpaktuari buruzko alde aurreko ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak, eta



proiektuak aurrekonturako kargarik dakarren ala ez. Lege-proiektuek aurrekonturako kargarik badakarte, dagokion finantza-eranskina izango dute.”

Bestalde, 2007ko martxoaren 23an, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarritako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean. 19. artikuluari jarraiki, izaera orokorreko xedapen-proiektuak eta berebiziko garrantzia duten plan ekonomiko, sozial, kultural eta artistikoak, Ministroen Kontseiluak onetsi behar dituzenean, txosten bat izan beharko dute generoan oinarritutako eraginari buruz.

Lege-esparru horretan, 2007ko martxoaren 13ko bilkuran, Gobernu Kontseiluak genero-eraginaren aurretiazko ebaluazioa gauzatzeko eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko jarraibideak onartu zituen.

Genero-eraginaren ebaluazioa egitearen helburua, batetik, bereizkeria-egoeren iturburu izan daitezkeen nahigabeko ondorio negatiboak saihestea da eta, bestetik, Europako Erkidegoko politiken kalitatea eta eragingarritasuna hobetzea dagokion eremuan. Proposatutako araudiak emakumezkoei eta gizonezkoei desberdin eragin diezaiekeen egiaztatzean datza ebaluazioa, bien arteko gizarte-desberdintasunak oinarri hartuta.

Baina Proiektuaren memoriari genero-eraginari buruzko azterlan xehatua gaineratu beharra aparte utzi gabe, emakumeek kirol-arloko lanbideen munduan duten presentzia gizonek duten presentzia-mailatik oso urrun dagoela adierazi behar dugu. Euskal Autonomia Erkidegoan gizonek eta emakumeek kirolaren berezko lanbideen jardunari dagokionez duten egoerari buruzko azterlan sakonik ez badago ere, jakina eta nabarmena da zirkunstantzia jakin batzuk gertatzen direla, hala nola “*kirol-modalitate guztietako entrenatzaile gehien-gehienak gizonezkoak izatea*”¹², eta Legearen aurreproiektu honetan kontuan hartu dira. Gizonek askoz erraztasun

¹² Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 2009ko apirilaren 6an emandako Goi Mailako Kirolari buruzko Dekretuaren inguruko genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena.



handiagoak izaten dituzte kirol-modalitate gehienetako monitore, entrenatzaile edo zuzendarien lanbide-eremuan sartzeko; emakumeek, berriz, aukera gutxiago izaten dituzte.

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak baditu hainbat datu emakumeak kirol-arloko lanbideetan zenbateraino txertatu diren adierazten dutenak. Euskadi Kirola Fundazioak emandako datuen arabera, 2007. urtean Fundazioaren laguntza jaso zuten emakumezko 2 kirol-teknikarik (% 10) eta gizonezko 18 kirol-teknikarik (% 90). Eta 2008ko ekitaldian, laguntza jaso zuten kirol-teknikarien artetik 3 emakumeak ziren (% 8,7) eta 26 gizonezkoak (% 91,3). Alegia, Kirol Zuzendaritzak aitortzen duenez, lehen aipatu den genero-eraginari buruzko azterlanean, *“emakumeek teknikarien artean duten presentzia urria kezagarria”* da. Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak ere jaso du egoera horren berri, 2009ko uztailaren 3ko txostenean, Goi Mailako Kirolari buruzko Dekretuaren proiektuari dagokionez; izan ere, honako hau iradoki zuen: *“emakumeak kirol-arloko entrenamendu, kudeaketa eta arbitrajearen eremuan sartzeko neurri espezifikoak hartzea”*.

Legearen aurreproiektuan agertzen diren arauak ez dute generoaren arabera eragin garrantzitsurik. Legearen aurreproiektuaren edukia aztertuz gero, ezin da esan hark bereizkeria-egoerarik eragiten dituenik, edo gizarte-desberdintasunak direla-eta desberdin eragiten dienik gizonezkoei eta emakumezkoei.

Proposatutako testuan bereziki berdintasunari eragiten dioten xedapenak biltzen dira, Berdintasun eragingarritako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoaren ildotik:

“Emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioa, enplegu pribatuaren nahiz enplegu publikoaren esparruan aplikagarri dena, bermatuko da, arautegi aplikagarrian ezarritakoaren arabera, enplegua lortzeko orduan, baita beregaineko lanaren kasuan ere; lanbide-prestakuntzan, lanbide-aurrerakuntzan, lan-baldintzetan, horien artean direla ordainsarien eta kaleratzeen ingurukoak; eta sindikatuen nahiz enpresaburuen erakundeetan afiliatu eta parte hartzean, edo beste edozein



erakundetan, baldin eta erakunde horietako kideek lanbide jakin bat gauzatzen badute, baita zerbitzua kideek eurek ematen dutenean ere.

Enplegua lortzeari dagokionez, horretara biltzen dela behar besteko prestakuntza lortzea ere, ez da bereizkeria izango, sexuarekin zerikusia duen ezaugarria, baldin eta, kasuan kasuko lanbide-jardueraren izaera edo jarduera hori gauzatzeko ingurua dela bide, ezaugarri hori oinarrizkoa eta erabakigarria bada lanbide-betekizun gisa. Horrez gain, tratu-berdintasunaren xedea legitimoa izan beharko da, eta lanbide-betekizuna proportzionala".

Lanbideen izenari dagokionez, ez da erabaki Legebiltzarrak azkenaldiko beste antzeko Lege batzuetan hartutako irizpideari jarraitzea: Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legean, edo Auzitegietako abokatu eta prokuradore izateari buruzko urriaren 30eko 34/2006 Legean. Horrela, bada, Legearen aurreproiektuaren gaztelaniazko bertsioari dagokionez, lanbideen izenak maskulinoan eta femeninoan agertzen dira, Emakumearen Erakundeak argitaratutako argitalpenetan jasotako gomendioei jarraiki; izan ere, gomendioak oso kontuan izan dira Legearen aurreproiektua idazteko garaian, zeren "*maskulinoak nekez biltzen baitu femeninoa*" eta, beraz, maskulinoa "*zentzu generikoan*" erabiltzea saihestu behar da. Lanbideei buruzko arauak onartzen dituzten erakundeek gaztelaniaz maskulino generikoa erabiltzen badute ere, lanbideen izenak maskulinoan eta femeninoan batera jasotzeko ahalegina egin da, Legearen helburua baita, Emakumearen Erakundearen testu horietako gomendioei jarraiki, kirol-arloko lanbideen jardunean "*emakumeen agerikotasuna*" ziurtatzea.

Bestalde, aurreproiektuaren Bigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, Lege honetan arautzen diren lanbideetan sartzeko eta jarduteko orduan, lanbide-sustapenean eta elkargo-erakundeetan tratu- eta aukera berdintasuna egoteko politikak sustatuko ditu Eusko Jaurlaritzak, erregulazioaren xede diren profesionalak bilduko dituen elkargoarekin lankidetzan.



Bukatzeko, aurreproiektuaren 9.1.k letran xedatzen denez, profesionalen betebeharra da kirol-arloan emakumeen benetako berdintasuna eta maila guztietako kirol-praktikan sartzea ahalbidetuko duten baldintzak bultzatzea, edozer eratako diskriminazio-ekintza oro saihestuta.

O.- ERAGIN EKONOMIKOA.

Legea onartzeak eragin ekonomikoa izango du, eta eragin horri buruz egin beharreko azterketa zehatza alde batera utzi gabe, zentzuzkoa dirudi memoria honetan aipatzea arau-proposamenak gastu publikoaren gorakada nabarmena ekarriko duela ezinbestean.

Legeari kirol-arloko lanbideen jarduna arautu baino ez da egiten, hau da, hainbat lanbide onartzen dira, lanbide horietan jarduteko kualifikazio jakin batzuk eskatzen dira eta hainbat eskumen generiko deskribatzen dira; hala ere, eta Legearen helburua erakunde edo organismo berriak espresuki sortzea eta organo berriak ezartzea ez bada ere, Legeak ezinbesteko eragina izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuan. Izan ere, Legearen helburuak lortzeko arauak garatu beharko dira, Legea indarrean jartzen den unean lanbideetan kualifikazio egokirik gabe diharduten profesionalak behin-behinean gaitzeko administrazio-prozesuak ezarri beharko dira, eta kirol-arloko profesionalen erregistro bat antolatu beharko da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen berme gisa.

Aldi berean, Legearen xede den kirol-sektore ekonomikoak profesional kualifikatuagoak beharko ditu, eta, horretarako, prestakuntza-ekintzak, gaitasunen egiaztapena eta abar beharko dira, zalantzarik gabe.

Jon Redondo Lertxundi
Gazteria eta Kiroletako zuzendaria

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**Fecha de la firma: **24/11/2014 11:09:33**Validación de la firma:  **Correcta****MEMORIA RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO Y
EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

1.- OBJETIVO PERSEGUIDO CON LA REGULACIÓN PROPUESTA

El actual sistema deportivo vasco, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos documentos a lo largo de los últimos años, viene padeciendo la vieja problemática del ejercicio de actividades profesionales directamente vinculadas a la salud y a la seguridad de las y los deportistas sin control alguno y por personas carentes de una mínima formación. Y de ello ya se hizo eco el Parlamento Vasco en 1998 con ocasión del debate y aprobación de la vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, y en momentos posteriores.

En esta iniciativa normativa queda suficientemente acreditado el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, simplicidad y eficacia.

Cumple el **principio de necesidad** en la medida que concurre una clara razón de interés general; la Ley que se va a elaborar responde a la innegable incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de las y los deportistas, incidencia que conduce inexorablemente a una regulación de su ejercicio, máxime en un ámbito en el que la realización de las actividades profesionales ha venido siendo asumida por personas carentes de una adecuada formación y sobre colectivos especialmente sensibles, como es el caso de los niños y niñas o jóvenes en edad escolar, y más acreedores de una adecuada protección.

El propio Plan Vasco del Deporte 2003-2007 ya denunció que existe una percepción general de que la falta de regulación profesional ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación. Por

ello, uno de los objetivos prioritarios de dicho Plan era regular las exigencias mínimas de cualificaciones para actividades profesionales, teniendo en cuenta, según reconocía el propio Plan, la incidencia de la práctica deportiva en la salud y seguridad de los practicantes.

Es innegable que la práctica deportiva de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi conlleva por lo general, importantes beneficios para su salud y su bienestar personal si se realiza en condiciones aceptables, pero también puede constituir una importante amenaza si se ejecuta bajo la dirección o supervisión de personas sin la formación necesaria.

Con relación a la necesidad de la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte, cabe resaltar en esta Memoria que el Tribunal Constitucional ya afirmó en su Sentencia 194/1998, de 1 de octubre, que *“la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte (artículo 43.3 de la CE) y que tales actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo 43.3 CE, de suerte que no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas”*.

En este contexto, el texto articulado que se debe elaborar tendrá como objetivo regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

El objetivo de la ley, respetando el **principio de proporcionalidad**, no será regular todas las profesiones relacionadas con el deporte sino, tan sólo, determinadas profesiones del deporte. La finalidad es dejar libres de regulación otras profesiones del deporte tales como las de jueces o juezas, de deportistas, de agentes de deportistas, etcétera. El ejercicio de estas profesiones, excluidas de la regulación la prestación de

servicios a terceros, no incide directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia como son la salud y la seguridad de los terceros destinatarios de aquellos servicios profesionales.

La iniciativa normativa que se va a llevar a cabo también es congruente con el principio de proporcionalidad desde otra perspectiva; una ley, es decir, una norma con el máximo rango, es el instrumento más adecuado para transformar determinadas actividades profesionales libres en actividades reguladas. Existe cierto consenso jurídico en que las restricciones al acceso y ejercicio profesional deben estar previstas, preferentemente, en una norma de rango de ley (artículo 7 del anteproyecto de ley estatal de servicios y colegios profesionales de 20 de diciembre de 2013). En este sentido, el texto articulado que se elabore también deberá optar por las medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.

A fin de garantizar el **principio de seguridad jurídica**, la iniciativa normativa trata de preservar tal principio contemplando el resto del ordenamiento jurídico, así como otras regulaciones sectoriales, creando un entorno de certidumbre jurídica. Especialmente, en la elaboración de la ley se tendrán en cuenta importantes proyectos normativos, estatales y autonómicos, que están tramitándose en la actualidad.

La iniciativa también responde al principio de simplicidad, pues el objetivo de la futura norma es conseguir un marco normativo en Euskadi que resulte sencillo y claro para todos los destinatarios de la ley, de modo que facilite el conocimiento y comprensión del mismo.

Asimismo, esta iniciativa normativa atiende al principio de eficacia pues se encuentran muy identificados los fines perseguidos y las medidas previstas para alcanzar los mismos.

Debe dejarse constancia en esta Memoria que el Anteproyecto de Ley se acomoda a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, eliminando los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los profesionales de los estados miembros de la Unión y a la libre circulación de servicios, garantizando tanto a las y los destinatarios de los servicios profesionales como a los propios prestadores, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También tendrá en consideración

la inminente legislación estatal básica en materia de servicios y colegios profesionales. Esta normativa estatal de carácter básico establece los principios, bases y directrices para garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y a su ejercicio.

Asimismo, uno de los objetivos de la ley es posibilitar el ejercicio profesional no sólo mediante la acreditación de titulaciones académicas oficiales, sino también mediante la acreditación de las competencias profesionales correspondientes por otras vías. Tal acreditación de las competencias profesionales para el ejercicio de las profesiones reguladas en la ley, no sólo puede realizarse a través de la vía general de títulos académicos determinados sino también mediante otras acreditaciones o certificados que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

2. - SECTORES SOCIALES QUE RESULTAN AFECTADOS

Tal y como se ha indicado anteriormente la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, ya establecía que para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. La Ley del Deporte no concretó las cualificaciones requeridas para esas actividades profesionales y, por tanto, Euskadi se ve precisada de una normativa que regule la exigencia de cualificaciones profesionales.

En principio, en esta fase administrativa de iniciación del procedimiento de elaboración, no resulta posible establecer con precisión si se va a modificar alguna disposición legal, pero es indudable que nos encontramos ante una materia huérfana de regulación y, por tanto, la afectación del ordenamiento jurídico vigente será, en todo caso, mínima.

Por el contrario, si se va a producir una afectación de la situación de los actuales profesionales que vienen prestando servicios profesionales en el campo del deporte en la actualidad. Todo cambio legislativo, y máxime aquellas leyes que disciplinan por primera vez el ejercicio de una profesión, plantean serios problemas de transición. Este es un problema que deberá resolverse en la nueva ley a través del denominado Derecho Transitorio. De este modo, la ley deberá ser respetuosa con los derechos de

quienes, a la entrada en vigor de la misma, se encuentran desarrollando profesiones objeto de esta regulación legal sin la cualificación requerida en la ley. De igual modo, la ley deberá contemplar mecanismos para la implantación progresiva y no traumática de la misma.

3.- PRESUPUESTOS JURÍDICOS HABILITANTES DE LA NORMATIVA PROPUESTA

Debe resaltarse que en los diferentes agentes sociales existe unanimidad en la necesidad y oportunidad de la Ley, especialmente significativa en los grupos parlamentarios que representan la voluntad de la ciudadanía. Como testimonios reveladores de la necesidad y oportunidad de la Ley debe reseñarse que en el seno del Parlamento Vasco, en diversas ocasiones, se ha instado al Gobierno Vasco a la elaboración de la Ley del ejercicio de las profesiones en el deporte. Concretamente, el Parlamento Vasco en sesión plenaria de 9 de febrero de 2012 instó al Gobierno Vasco a elaborar “un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte”. Y posteriormente se han producido diversas iniciativas parlamentarias instando al Gobierno Vasco en el mismo sentido.

No menos revelador es que en los programas electorales de los partidos que aspiraban a obtener una representación en la actual legislatura del Parlamento Vasco existió una casi unanimidad en la necesidad de aprobar una ley que regulase el ejercicio de las profesiones del Deporte. Resulta extraordinariamente llamativo que los partidos políticos que conforman los grupos parlamentarios que suman 74 parlamentarios, de los 75 que cuenta la cámara, formularon en sus programas electorales su compromiso de regular legalmente el ejercicio de las profesiones del deporte. El Partido Nacionalista Vasco (27 parlamentarios) proponía en su programa “desarrollar la Ley de regulaciones de las profesiones del ámbito del deporte”. EH Bildu (21 parlamentarios) propuso “regular el ejercicio de las profesiones del deporte, incluida las titulaciones deportivas, al objeto de proteger la salud y la seguridad de las y los deportistas y garantizar la calidad del deporte vasco”. Asimismo, el Partido Socialista de Euskadi (16 parlamentarios) propuso “reglar el ejercicio de las profesiones relacionadas con el deporte y la actividad física”. Por último, el Partido Popular Vasco decía en su programa: “Se elaborará el Proyecto de Ley para regular las distintas profesiones del deporte en colaboración con los agentes implicados de tal

forma que se determinen las profesiones del deporte, las competencias, la formación y capacitación de los profesionales y lo referente al mercado laboral de las mismas”.

La viabilidad jurídica y material de la Ley estarán garantizadas si se asume el reto de desarrollar adecuadamente la misma y dotar al proyecto de los necesarios recursos humanos y materiales. El único precedente legislativo existente en el Estado español es la Ley 3/2008, de 23 de abril, de Ejercicio de las Profesiones del Deporte de Cataluña, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y después de su implantación novedosa, y a pesar de las dificultades que conlleva innovar en un ámbito legislativo, el balance de los agentes sociales es satisfactorio pues se ha conseguido educar al sector profesional exigiendo formación y cualificación; se ha ordenado el sector; se han inscrito más de 15.000 profesionales en el registro administrativo de profesionales del deporte, que es una de las garantías previstas a favor de los consumidores y usuarios; se han multiplicado las colegiaciones de los profesionales, con lo que ello implica de previa acreditación de la cualificación y del aseguramiento obligatorio de riesgos, etcétera.

4.- FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA PARA INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en materia deportiva. Asimismo, ostenta, de conformidad con el artículo 10.22 competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y de ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

En ejercicio de la competencia en materia de deporte, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que ya establecía que para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. Es decir, la Ley del Deporte ya estableció la necesidad de exigir cualificaciones profesionales aunque no llegó a concretar las cualificaciones profesionales requeridas.

Por otra parte, el Parlamento Vasco también aprobó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

La iniciativa normativa cuenta, desde el punto de vista competencial, con un antecedente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con similares títulos competenciales a los de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En Cataluña se aprobó la Ley 3/2008, de 23 de abril, de ejercicio de las profesiones del Deporte, y las escasas dudas competenciales fueron resueltas por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 2009.

5.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VINCULACIÓN DE CADA UNO DE LOS AFECTADOS EN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE LA NORMA Y EN SU CASO LA NECESIDAD DE TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA

El grado de vinculación de los diversos participantes en la tramitación del proyecto afectará a:

- 1) **Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura:** Órdenes de inicio y aprobación del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley.
- 2) **Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura:** Informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.
- 3) **Trámite de audiencia e información pública:** Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, se enviará a:
 - Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
 - Asociación de Federaciones Deportivas de Álava.
 - Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia.
 - Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa.
 - Federaciones Vascas (totalidad de las existentes: 48).
 - Diputación Foral de Álava.
 - Diputación Foral de Bizkaia.
 - Diputación Foral de Gipuzkoa.
 - Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime.

- Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Dirección de Salud Pública.
- Dirección de Centros Escolares.
- Agencia Vasca de Protección de Datos.

Además se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio por el que se de trámite de audiencia por plazo de 20 días hábiles.

- 4) **Consejo Vasco del Deporte:** Informe, según lo establecido en el artículo 4 b) del Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el citado órgano.
- 5) **Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea:** Informe, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y con el artículo 3 d) de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del citado Instituto.
- 6) **Dirección de Normalización Lingüística:** Informe, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.
- 7) **Oficina de Control Económico:** Informe económico-normativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- 8) **Comisión Jurídica Asesora de Euskadi:** Informe, de conformidad con lo dispuesto el artículo 3. 1 a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

6.- LÍNEAS GENERALES DE LA REGULACIÓN PROPUESTA

El texto articulado que se debe elaborar tendrá como ámbito de aplicación el ejercicio profesional en el ámbito territorial del País Vasco.

El objetivo de la Ley es regular el ejercicio profesional por cuenta propia y ajena y, lógicamente, debe resultar aplicable tanto si la profesión se ejerce en el sector público o en el sector privado. Y debe ser exigible con independencia de la naturaleza, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, de las entidades donde se presenten los servicios

profesionales pues, en definitiva, lo que se pretende es garantizar la salud y la seguridad en la actividad deportiva de los ciudadanos y ciudadanas en el País Vasco, haciendo abstracción de si el prestador de los servicios profesionales está en un equipamiento deportivo público o privado.

En la medida que el objetivo de la Ley es regular el ejercicio profesional deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la Ley las actividades realizadas en el marco de relaciones de voluntariado, de amistad, familiares y análogas. No obstante lo anterior, el texto legal, considerando el trascendental papel que desempeña el voluntariado en el ámbito de las organizaciones deportivas, deberá recoger alguna medida para garantizar la salud y la seguridad de los deportistas.

El objetivo es que el ámbito material de la Ley aborde el deporte, al igual que la Ley 14/1998, en un sentido muy amplio y contemple el fenómeno deportivo vasco en todas sus manifestaciones, sin constreñir tal concepto a las modalidades y disciplinas deportivas oficialmente reconocidas ni al mundo de la pura competición. El sistema deportivo vasco, como puso de manifiesto el citado Plan Vasco del Deporte, está compuesto de subsistemas de características muy heterogéneas. Por esta razón, la Ley no se deberá circunscribir sólo al ámbito profesional del espectáculo, al ámbito de la alta competición o al ámbito de la competición federada, sino que tratará de contemplar toda la policromía del deporte vasco. Las profesiones que se regularán abarcarán el ámbito educativo, el ámbito recreativo, el ámbito competitivo y el ámbito de la dirección o gestión.

7.- INCIDENCIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

Aunque la Ley no tiene como objetivo la creación expresa de nuevas entidades u organismos, ni el establecimiento de nuevos órganos, va a tener un inevitable impacto en el presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma, pues los objetivos de la Ley van a precisar un desarrollo normativo, la implantación de procesos administrativos de habilitación provisional de los profesionales que, sin la debida cualificación, vienen ejerciendo las profesiones a la entrada en vigor de la misma, así como la articulación de un registro de profesionales del deporte en garantía de los consumidores y usuarios.

Al mismo tiempo, el sector económico del deporte al que va destinado la Ley va a precisar de profesionales más cualificados y ello, indudablemente, requerirá acciones formativas, acreditación de competencias, etcétera.

En esta fase administrativa, de iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición, no resulta posible realizar una evaluación detallada del citado impacto económico. Será el correspondiente informe monográfico, una vez elaborado el texto articulado, el que deberá concretar tal impacto.

8.- IMPACTO DE GÉNERO

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, dispone en su artículo 19 que, antes de acometer la elaboración de una norma, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Y ha de analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo de eliminar desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad.

En la medida que esta sucinta Memoria trata de justificar la oportunidad y conveniencia de la elaboración de la Ley, es decir, se corresponde con la Orden de iniciación del procedimiento, resulta difícil determinar con precisión el impacto por razón de género de la futura Ley. Será el correspondiente informe monográfico, una vez elaborado el texto articulado, el que deberá concretar con precisión tal impacto.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que la memoria final del proyecto legislativo deba ir acompañada de dicho estudio detallado sobre el impacto de género, procede adelantar que la presencia de la mujer en el mundo de las profesiones del deporte está lejos de alcanzar el nivel de presencia del colectivo masculino. Aunque no se dispone en estos momentos de un estudio exhaustivo sobre la situación de hombres y mujeres con relación al ejercicio de las profesiones propias del deporte en el País Vasco, es público y notorio que existen circunstancias significativas de desigualdad, como la abrumadora “mayoría de entrenadores hombres en las distintas modalidades deportivas”¹. Los hombres suelen incorporarse laboralmente al ámbito profesional de

¹ Informe sobre la evaluación del impacto de género con relación al Decreto sobre Deporte de Alto Nivel del País Vasco, emitido con fecha de 6 de abril de 2009 por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

los monitores, entrenadores o directores deportivos con mucha más facilidad y las mujeres tienen menos oportunidades.

Existen en el seno del Gobierno Vasco datos reveladores de las dificultades de integración de la mujer en el ejercicio de las profesiones del deporte. Por ejemplo, de la situación de “alarmante infrarrepresentación de las mujeres entre el personal técnico” se hizo eco Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en su informe de 3 de julio de 2009, al sugerir que “la adopción de medidas específicas dirigidas a la incorporación de las mujeres en el ámbito del entrenamiento, la gestión y el arbitraje deportivo”. Desde esta perspectiva, el proyecto legislativo a elaborar deberá contemplar este punto de partida.

Respecto a la denominación de las profesiones, el texto articulado, y sin perjuicio de las medidas normativas que se consideren oportunas, uno de los numerosos objetivos del proyecto será visibilizar mejor a la mujer en este ámbito de infrarepresentación. A tal efecto, las denominaciones de las profesiones deberán aparecer en masculino y en femenino siguiendo las recomendaciones contenidas en las publicaciones editadas por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Aunque las instituciones que aprueban normas sobre profesiones emplean generalmente el masculino genérico, el texto legislativo deberá recoger simultáneamente los nombres de las profesiones en masculino y en femenino pues la ley desea asegurar “la visibilidad de las mujeres” en el ejercicio de las profesiones del deporte.

En cumplimiento de los principios contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la elaboración del proyecto se deberá promover, entre otras cosas, la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta Ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales.

Jon Redondo Lertxundi
Director de Juventud y Deportes



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKO MEMORIA

1.- PROPOSATUTAKO ERREGULAZIOAREN BIDEZ LORTU NAHI DEN HELBURUA

Azken urteotan hainbat dokumentutan agerian utzi denez, gutxieneko prestakuntzarik gabeko pertsona batzuek kirolarien osasunari eta segurtasunari zuzenean lotutako lanbide-jardueretan kontrolik gabe jardutearen aspaldiko arazoa pairatzen du egungo euskal kirol-sistemak. Eusko Legebiltzarrak jakinarazi zuen hori 1998. urtean, indarrean dagoen Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea eztabaidatu eta onartu zenean, baita geroago ere..

Arau-ekimen horretan, behar bezala egiaztatuta geratu da premiaren, proportzionaltasunaren, segurtasun juridikoaren, sinpletasunaren eta eraginkortasunaren printzipioak bete direla.

Ildo horretan, **premiaren printzipioa** bete da, interes orokorreko arrazoi garbi bat baitago; landu beharreko Legeak kirol-arloko lanbide batzuek kirolarien osasunean eta segurtasunean duten eragin ukaezinari erantzuten dio; izan ere, eragin horrek lanbideen jarduna arautzea dakar ezinbestez, batez ere eremu horretan, lanbide-jarduerak prestakuntza egokirik gabeko profesionalek egin izan baitituzte kolektibo bereziki sentiberetan (eta babes egokia jasotzeko premia handiagoa dutenetan), hala nola haurrengan eta eskola-adineko gazteengan.

Kirolaren Euskal Planak (2003-2007) berak ere salatu zuenez, pertzepzio orokorra da ez dagoela lanbide-erregulaziorik, eta horrek ekarri duela, batetik, prestakuntzarik gabeko pertsonak sartzea merkatuan, eta, bestetik, behar baino kualifikazio gutxiagoko jendea ibiltzea lanbide horietan. Hori dela-eta, plan horren lehentasunezko helburuetako bat zen arautzea zeintzuk diren lanbide-jardueretarako behar diren

gutxieneko kualifikazio-eskakizunak, kontuan izanik, planak berak onartzen duenez, zelan eragiten duen kirola egiteak kirola egiten dutenen osasunean eta segurtasunean.

Ukaezina da kirola egitea oso onuragarria dela Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren osasunerako eta ongizate pertsonalerako (betiere baldintza onargarrietan egiten bada), baina kirola egitea mehatxu handia ere izan daiteke, baldin eta beharrezkoa den prestakuntza ez duten pertsonak zuzenduta edo gainbegiratuta egiten bada.

Kirol-arloko lanbideetan jarduteko modua arautzeko premiari dagokionez, Memoria honetan nabarmendu behar da Konstituzio Auzitegiak hau azaldu zuela urriaren 1eko 194/1998 Epaian: *"Konstituzioak berak 43.3 artikuluan agintari publikoei agindua ematen die gorputz-hezkuntza eta kirola sustatzeko (Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua), eta jarduera horiek osasunarekin oso lotuta azaltzen dira, Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua horretako 1. paragrafoan azaltzen denez; hain lotuta daude, ezen osasuna mantentzen laguntzeaz gain, haiei esker saihestu egin baitaiteke gorputz- eta kirol-jardueretako hainbat ariketa desegokik osasunean izan dezakeen eragin negatiboa, batez ere zenbait kirolean jarduteak arrisku handi samarra dakarrenean. Jakina da, bestalde, jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta balioetsiagoak direna, eta, egoera horri erantzuteko, botere publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionalei"*.

Testuinguru horretan, landu beharreko testu artikulatuak kirol-eremuaren berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzakoak diren zenbait alderdi arautzea izango du helburu, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer eremu funtzional orokor esleitzen zaion lanbide bakoitzari.

Legearen helburua, **proportzionaltasun-printzipioa** betez, ez da izango kirolari lotutako lanbide guztiak arautzea, kirol-arloko lanbide jakin batzuk baizik. Helburua kirol-arloko beste lanbide batzuk arautu gabe uztea da, hala nola kirolarien epaileak edo kirolarien agenteak. Lanbide horietan jarduteak, hirugarrenentzako zerbitzuen prestazioa erregulaziotik salbuetsita dagoela kontuan hartuta, ez du zuzenean eragiten ondasun juridikorik garrantzitsuenetan, hau da, ez dute eragiten lanbide-zerbitzu horien hirugarren hartzaileen osasunean eta segurtasunean.

Egingo den arau-ekimena beste ikuspegi batetik ere bat dator proportzionaltasun-printzipioarekin; lege bat, hau da, mailarik handieneko arau bat tresnarik egokiena da lanbide-jarduera libre jakin batzuk jarduera arautu bihurtzeko. Nolabaiteko adostasun juridikoa dago lanbideetan sartzeko eta jarduteko murrizketak, ahal bada, lege-mailako arau batean aurreikusi behar direla adieraztean (zerbitzu eta elkargo profesionalei buruzko 2013ko abenduaren 20ko Estatuko legearen aurreproiektuaren 7. artikulua) lldo horretan, landu beharreko testu artikulatuak murrizketarik eta desitxuratzetik txikiena eragingo duten neurriak bildu beharko ditu, emaitza bera lortzea ahalbidetuko dutenen artean.

Nolanahi ere, **segurtasun juridikoaren printzipioa** bermatzeko, arau-ekimenak gainerako ordenamendu juridikoa eta beste erregulazio sektorial batzuk hartzen ditu kontuan printzipio hori betetzeko, ziurtasun juridikoko ingurune bat sortuz. Legea lantzean, bereziki hartuko dira kontuan gaur egun izapidetzen ari diren Estatuko eta Autonomia Erkidegoko arau-proiektu garrantzitsu batzuk.

Ekimenak, halaber, sinpletasunaren printzipioari erantzuten dio. Izan ere, etorkizuneko arauak Euskadin legearen hartzaile guztientzat erraza eta argia izango den eta ezagutza eta ulermena erraztuko duen arau-esparru bat lortzea du helburu .

Arau-ekimen horrek, halaber, eraginkortasunaren printzipioari erantzuten dio, lortu nahi diren helburuak eta horiek lortzeko aurreikusitako neurriak oso identifikatuta baitaude.

Memoria honetan, jasota utzi behar da Legearen Aurreproiektua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitu dela. Horretarako, batetik, oztopoak kendu dira, hain zuzen ere Batasuneko estatu kideetan profesionalak kokatzeko askatasuna eta zerbitzuen zirkulazio librea eragozten duten oztopoak kendu dira; bestetik, lanbide-zerbitzuen hartzaileei zein zerbitzu-emaleei segurtasun juridiko nahikoa bermatzen zaie Europako Erkidegoa eratzen duen Ituneko oinarritzko askatasunak eraginkortasunez baliatzeko. Halaber, zerbitzu eta elkargo profesionalei buruzko Estatuko oinarritzko legeria hartuko da kontuan. Estatuko oinarritzko araudi horrek lanbide-jardueretan askatasun osoz sartzeko eta jarduteko aukera bermatuko duten printzipioak, oinarriak eta jarraibideak ezartzen ditu.

Era berean, legearen helburuetako bat lanbide-jarduna titulazio akademiko ofizialak egiaztatzearen bidez ez ezik bidezko lanbide-gaitasunak beste bide batzuetatik

egiaztatzearen bidez ere ahalbidetzea da. Legean araututako lanbideetan jarduteko lanbide-gaitasun horiek, titulu akademiko zehatzen bide orokorretik ez ezik, une bakoitzean indarrean dagoen ordenamenduaren ondoriozko beste egiaztigiri edo ziurtagiri batzuen bidez ere egiazta daitezke.

2. - ERAGINPEAN HARTUTAKO SEKTORE SOZIALAK

Arestian adierazi dugunez, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak ezartzen zuen botere publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, titulu ofizialak eskatuko dituztela kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak eskaintzeko, hots, irakaskuntza-, zuzendaritza-, kudeaketa-, entrenamendu- eta animazio-zerbitzuak eta bestelakoak eskaintzeko. Kirolaren Legeak ez zituen zehaztu lanbide-jarduera horietarako beharrezkoak diren kualifikazioak, eta, beraz, lanbide-kualifikazioen eskakizuna arautuko duen araudi bat behar du Euskadik.

Funtsean, lantzeko prozedurarekin hasteko administrazio-fase honetan ezin da zehatz-mehatz ezarri lege-xedapenen bat aldatuko den, baina, zalantzarik gabe, arautu gabeko arlo baten aurrean gaude, eta, beraz, indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren gaineko eragina, nolanahi ere, oso txikia izango da.

Aitzitik, gaur egun kirolaren esparruan lanbide-zerbitzuak egiten dituzten egungo profesionalen egoeran izango du eragina. Legeria-aldaketa guztiek trantsizio-arazo handiak planteatzen dituzte, are gehiago lanbide baten jarduna lehenengoz diziplinatzen duten legeek. Arazo hori Zuzenbide Iragankor izenekoaren bitartez konpondu beharko litzateke lege berrian. Era horretan, legeak errespetatu egin beharko ditu berau indarrean jartzen denean lege honen xede diren lanbideak legeak eskatutako kualifikaziorik gabe betetzen dituzten pertsonen eskubideak. Legeak, halaber, era progresiboan eta ez-traumatikoan ezartzeko mekanismoak hartu beharko ditu kontuan.

3.- PROPOSATUTAKO ARAUA GAITZEN DUTEN OINARRI JURIDIKOAK

Azpimarratu beharra dago gizarte-eragile guztiak (eta herritarren borondatea ordezkatzen duten legebiltzar-taldeak bereziki) bat datozela Legea beharrezkoa eta egokia dela adieraztean. Legearen behar eta egokitasunaren frogak gisa, adierazi

beharra dago Eusko Legebiltzarraren baitan behin baino gehiagotan eskatu zaiola Eusko Jaurlaritzari kirol-arloko lanbideen jardunari buruzko lege bat lantzeko. Zehazki, 2012ko otsailaren 9ko osoko bilkuran, "kirol-arloko lanbideak arautzeko lege-proiektu bat" lantzeko eskatu zion Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari. Eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzari gauza bera eskatu dioten hainbat legebiltzar-ekimen egin dira.

Oso adierazgarria da, halaber, Eusko Legebiltzarraren egungo legegintzaldirako ordezkariak lortu nahi zuten alderdien hauteskunde-programetan ia guztiek adierazi zutela kirol-arloko lanbideen jarduna arautuko zuen lege bat onartu behar zela. Oso deigarria da Legebiltzarrean 75 legebiltzarkideetako 74 biltzen dituzten legebiltzar-taldeak osatzen dituzten alderdi politikoek beren hauteskunde-programetan kirol-arloko lanbideen jarduna legez arautzeko konpromisoa hartu zutela adierazi izana. Euzko Alderdi Jeltzaleak (27 legebiltzarkide) "kirol-esparruko lanbideak arautzeko Legea garatzea" proposatu zuen programan. EH Bilduk (21 legebiltzarkide) honako hau proposatu zuen: "kirol-arloko lanbideen jarduna arautzea, kirol-titulazioak barnean hartuta, kirolarien osasuna eta segurtasuna babesteko eta euskal kirolaren kalitatea bermatzeko". Era beran, Euskadiko Alderdi Sozialistak (16 legebiltzarkide) "kirolari eta gorputz-jarduerari lotutako lanbideen jarduna arautzea" proposatu zuen. Azkenik, Euskadiko Alderdi Popularrak honako hau zioen bere programan: "Kirol-arloko lanbideak arautzeko Lege Proiektua landuko da inplikaturako agenteekin batera, era horretan kirol-arloko lanbideak, profesionalen gaitasunak, prestakuntza eta trebakuntza eta lanbideen inguruko lan-merkatua finkatzeko".

Legearen bideragarritasun juridikoa eta materiala bermatuta egongo dira Legea behar bezala garatzeko eta proiektua beharrezkoak diren giza baliabideez eta baliabide materialez zuzkitzeko erronka bere gain hartzen bada. Estatu espainolean dagoen legeria-aurrekari bakarra Kataluniako Kiroleko Lanbideak Betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legea da, parlamentu-talde guztiek aho batez onartu zutena. Lege hori ezarri ondoren, eta legeria-eremu batean berritzeak dakartzan zailtasunak gorabehera, gizarte-eragileen balantzea positiboa izan da. Izan ere, lanbide-sektorea hezteari lortu da prestakuntza eta kualifikazioa eskatzearen bidez, sektorea antolatu da, 15.000 profesional baino gehiagok eman dute izena kirol-arloko profesionalen administrazio-erregistroan (kontsumitzaile eta erabiltzaileen alde aurreikusitako bermeetako bat da hori), eta elkargokide egin diren profesionalen kopuruak gora egin du (kontuan hartu behar da horrek kualifikazioa alde aurretik egiaztatzea, arriskuak nahitaez aseguratu beharra eta abar dakarrela).

4.- HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILAK AURREPROIEKTUAREN IZAPIDEAK EGITEN HASTEKO DUEN ESKUMENAREN OINARRIA

Autonomia Estatutuko 10.36 artikulua arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak kirol-arloko eskumen eskusiboa du. Era berean, 10.22 artikulua arabera, eskumen eskusiboa du profesionalen elkargoen arloan eta tituludun lanbideak betearaztean, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluek xedatutakoa aparte utzi gabe.

Kirol-arloko eskumena betez, Eusko Legebiltzarrak ekainaren 11ko 14/1998 Legea onartu zuen, Euskadiko kirolarena. Lege horrek ezartzen zuen botere publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, titulu ofizialak eskatuko dituztela kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak eskaintzeko, hots, irakaskuntza- zuzendaritza-, kudeaketa-, entrenamendu- eta animazio-zerbitzuak eta bestelakoak eskaintzeko. Hau da, Kirolaren Legeak ezarrita zuen lanbide-kualifikazioak eskatzeko beharra, baina ez zituen zehaztu eskatutako lanbide-kualifikazioak.

Bestalde, Eusko Legebiltzarrak azaroaren 21eko 18/1997 Legea ere onartu zuen, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa.

Eskumenen ikuspuntutik, arau-ekimenak aurrekari bat du Kataluniako Autonomia Erkidegoan (eskumen-tituluak Euskal Autonomia Erkidegokoen antzekoak dira bertan). Katalunian, kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legea onartu zen, eta eskumenen inguruan sortutako zalantza urriak Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzerdeak argitu zituen 2009ko urtarrilaren 29an egindako bileran.

5.- ARAUA EGITEKO LANETAN ERAGINPEAN HARTUTAKO PERTSONA BAKOITZAREN LOTURA-MAILA ETA, HALA BADAGOKIO, ENTZUNALDI PUBLIKOA IZAPIDETZEKO PREMIA FINKATZEA

Proiektua izapidetzen parte hartuko dutenen lotura-mailak honako hauek hartuko ditu eraginpean:

- 1) **Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua:** Lege-aurreproiektua lantzeko prozedura hasteko eta onartzeko aginduak.

- 2) **Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza:** Txosten bat, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.
 - 3) **Entzunaldi-izapidea eta jendaurrean jartzeko izapidea:** Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. artikuluan xedatutakoa betez, honako hauei bidaliko zaie:
 - Euskal Kirol Federazioen Batasunari.
 - Arabako Kirol Federazioen Elkarteari.
 - Bizkaiko Kirol Federazioen Elkarteari.
 - Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari.
 - Euskal federazioei (guztien kopura: 48).
 - Arabako Foru Aldundiari.
 - Bizkaiko Foru Aldundiari.
 - Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 - EKIME Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarteari.
 - Soin Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialari.
 - Osasun Publikoko Zuzendaritzari.
 - Ikastetxeen Zuzendaritzari.
 - Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.
- Gainera, 20 egun balioduneko epean entzunaldi-izapidea egiteko iragarki bat argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.
- 4) **Kirolaren Euskal Kontseilua:** Txostena, organo hori arautzen duen azaroaren 7ko 220/2000 Dekretuaren 4 b) artikuluan ezarritakoaren arabera.
 - 5) **Emakumearen Euskal Erakundea:** Txostena, Emakume eta Gizonen Arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikuluan eta aipatutako erakundea sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legearen 3.d) artikuluan arabera.
 - 6) **Hizkuntza Normalizaziorako Zuzendaritza:** Txostena, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

- 7) **Kontrol Ekonomikoko Bulegoa:** Ekonomia- eta arau-txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.
- 8) **Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa:** Txostena, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

6.- PROPOSATUTAKO ERREGULAZIOAREN ILDO OROKORRAK

Landu beharreko testu artikulatuaren aplikazio-eremua Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuko lanbide-jarduna izango da.

Legearen helburua norberaren eta besteren konturako lanbide-jarduna arautzea da, eta, jakina, lanbidean sektore publikoan zein sektore pribatuan jardutean aplikatu behar da. Eta lanbide-zerbitzuak ematen dituzten erakundeen izaera publikoa edo pribatua, irabazi-asmokoa edo irabazi-asmorik gabekoa kontuan hartu gabe eskatu behar da legearen aplikazioa. Izan ere, azken batean, Euskal Autonomia Erkidegoan herritarren osasuna eta segurtasuna bermatu nahi da kirol-jarduerak egiten dituztenean, lanbide-zerbitzuak ematen dituen kirol-ekipamendu publiko edo pribatu batean dagoen kontuan hartu gabe.

Legearen helburua lanbide-jarduna arautzea denez gero, boluntariotza-harremanen, adiskidetasun-harremanen, familia-harremanen eta antzekoen esparruan egindako jarduerak Legearen aplikazio-eremutik kanpo geratu behar dute. Hala eta guztiz ere, boluntarioek kirol-erakundeen eremuan betetzen duten zeregin garrantzitsua kontuan hartuta, legeko testuak neurri bat edo beste jaso beharko du kirolarien osasuna eta segurtasuna bermatzeko.

Helburua, nolanahi ere, Legearen eremu materialak, 14/1998 Legearen antzera, kirola oso zentzu zabalean ulertzea eta euskal kirolaren fenomenoaren adierazpen guztiak kontuan hartzea da, kontzeptu hori ofizialki onartuta dauden kirol-modalitate eta kirol-diziplinetara edota lehiaketa hutsaren mundura mugatu gabe. Euskal kirol-sistemak, Kirolaren Euskal Planak adierazi zuenez, oso ezaugarri heterogeneoak dituzten azpisistemez osatuta dago. Hori dela-eta, legeak ez du mugatu behar ikuskizunaren lanbide-eremura, goi-lehiaketaren eremura edo lehiaketa federatuaren eremura; aitzitik, euskal kirolaren polikromia osoa jaso behar du. Arautu beharreko lanbideak

hezkuntzaren, aisiaren, lehiaketaren eta zuzendaritza edo kudeaketaren eremuak izango dira.

7.- LEGE AURREPROIEKTUAREN ERAGIN EKONOMIKOA

Legearen helburua erakunde edo organismo berriak espresuki sortzea eta organo berriak ezartzea ez bada ere, ezinbesteko eragina izango du Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuan. Izan ere, Legearen helburuak lortzeko arauak garatu beharko dira, Legea indarrean jartzen den unean lanbideetan kualifikazio egokirik gabe diharduten profesionalak behin-behinean gaitzeko administrazio-prozesuak ezarri beharko dira, eta kirol-arloko profesionalen erregistro bat antolatu beharko da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen berme gisa.

Aldi berean, Legearen xede den kirol-sektore ekonomikoak profesional kualifikatuagoak beharko ditu, eta, horretarako, prestakuntza-ekintzak, gaitasunen egiaztapena eta abar beharko dira, zalantzarik gabe.

Xedapena lantzeko prozedurari hasiera ematen dion administrazio-fase honetan, ezinezkoa da adierazitako eragin ekonomikoaren ebaluazio zehatz bat egitea. Testu artikulatua egin ondorengo txosten monografikoak zehaztu beharko du eragin hori.

8.- GENERO-ERAGINA

Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 19. artikuluan, ezartzen du arau bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organok ebaluatu egin behar duela zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina. Eta aztertu behar da arauan proiektatu den jarduerak ondorio positiboak edo kontrakoak izan ditzakeen emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta horien arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean.

Memoria labur honen bidez Lege hau egitea egokia eta komenigarria dela arrazoitu nahi den heinean, hau da, prozedura hasteko Aginduekin bat datorren heinean, zaila da etorkizuneko Legeak izango duen genero-eragina finkatzea. Testu artikulatua egin ondorengo txosten monografikoak zehaztu beharko du eragin hori.

Aurrekoa gorabehera, eta legegintza-proiektuaren azken memoriari genero-inpaktuari buruzko azterlan xehatua gaineratu beharra aparte utzi gabe, emakumeek kirol-arloko lanbideen munduan duten presentzia gizonek duten presentzia-mailatik oso urrun dagoela aurrera daiteke. Euskal Autonomia Erkidegoan gizonek eta emakumeek kirolaren berezko lanbideen jardunari dagokionez duten egoerari buruzko azterlan sakonik ez badago ere, jakina eta nabarmena da desberdintasun-zirkunstantzia esanguratsuak daudela, hala nola "kirol-modalitate guztietako entrenatzaile gehien-gehienak gizonezkoak izatea"¹. Gizonek askoz erraztasun handiagoak izaten dituzte kirol-arloko monitore, entrenatzaile edo zuzendarien lanbide-eremuan sartzeko; emakumeek, berriz, aukera gutxiago izaten dituzte.

Eusko Jaurlaritzak emakumeek kirol-arloko lanbideetan jarduteko dituzten zailtasunak agerian uzten dituzten hainbat datu ditu. Adibidez, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak "emakumeek langile teknikoen artean duten presentzia urri kezkarriaren" berri eman zuen 2009ko uztailaren 3ko txostenean. Bertan, "emakumeak kirol-arloko entrenamendu, kudeaketa eta arbitrajearen eremuan sartzeko neurri espezifikoak hartzea" iradoki zuen Emakundek. Ikuspegi horretatik, landu beharreko legegintza-proiektuak abiapuntu hori hartu beharko du kontuan.

Lanbideen izenari dagokionez, testu artikulatuaren arabera, eta bidezkotzat hartzen diren arau-neurriak aparte utzi gabe, proiektuaren helburu ugarietako bat presentzia urriaren eremu horretan emakumeak hobeto ikusaraztea izango da. Horretarako, lanbideen izenak maskulinoan eta femeninoan agertu beharko dute gaztelaniaz, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen argitalpenetan bildutako gomendioen arabera. Lanbideei buruzko arauak onartzen dituzten erakundeek gaztelaniaz normalean maskulino generikoa erabiltzen badute ere, legegintza-testuak batera jaso beharko ditu lanbideen izenak maskulinoan eta femeninoan, legearen helburua kirol-arloko lanbideen jardunean "emakumeen agerikotasuna" ziurtatzea baita.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarriko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan bildutako printzipioak eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea betez, Lege honetan araututako lanbideetan sartzeko aukeran, lanbide horien jardunean, lanbide-sustapenean eta lanbide horien inguruko elkargoetan tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko politikak sustatu beharko dira, besteak beste, proiektua lantzean.

¹ Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 2009ko apirilaren 6an emandako Goi Mailako Kirolari buruzko Dekretuaren inguruko genero-inpaktuari buruzko txostena.

Jon Redondo Lertxundi
Gazteria eta Kiroletako zuzendaria



VI

MEMORIA ECONÓMICA / MEMORIA EKONOMIKOA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**Fecha de la firma: **03/08/2015 12:06:58**Validación de la firma:  **Correcta****MEMORIA ECONÓMICA RELATIVA AL “ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE
ACCESO Y EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS
VASCO”**

La futura Ley sobre Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte en el País Vasco va a conllevar un innegable beneficio en la salud y seguridad de las personas practicantes de actividades físico-deportivas en el País Vasco, pero para que ésta sea realidad, se han de implementar una serie de nuevas acciones por parte de la Administración Vasca, acciones que, inevitablemente, conllevan un coste económico.

A continuación se van a presentar los diferentes gastos que están relacionados de una forma u otra con la ley en tres bloques diferentes:

1. Nuevos gastos propios de la ley.
2. Gastos (e ingresos) que están vinculados a partidas ya existentes en el Gobierno Vasco.
3. Nuevos gastos (e ingresos) que han de implementarse independientemente de la aprobación de la ley.

En cada uno de los tres bloques, se presenta una tabla con las cantidades correspondientes a los gastos (e ingresos) desde el año de la previsible entrada en vigor de la ley (2016) hasta el año 2021 y posteriores, de tal forma que se pueda apreciar los costes de las diferentes fases de implantación de la ley.

Posteriormente a las tablas con las cantidades, se explica y justifica, una a una, la necesidad de las diferentes acciones o conceptos para una adecuada aplicación de la ley.

1. NUEVOS GASTOS PROPIOS DE LA LEY

Los gastos que se presentan a continuación son de nueva creación; no existen hasta el momento y se han de desarrollar exclusivamente si se aprueba la ley. Todos ellos corresponden a acciones a implementar por la propia Dirección de Juventud y Deportes.



		2017	2018	2019	2020	≥2021
GASTOS	Nuevos recursos humanos de gestión (1 técnico / 1 administrativo)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Difusión y documentación informativa (guía, folleto s, web, sesiones informativas)		10.000			
	Aplicación informática habilitaciones / registro profesionales		20.000			
	Tribunales reconocimiento de la experiencia y formación no formal (Deportes)	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Organización de formaciones de primeros auxilios	30.000	30.000			
	Servicio de inspección			15.000	15.000	15.000
	Servicio de asesoría jurídica (reglamentaciones)	18.000	18.000			
	Elaboración de informes/estudios de seguimiento para la aplicación progresiva		15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAL GASTOS	138.000	183.000	120.000	120.000	90.000

a) Nuevos recursos humanos de gestión:

La Dirección de Juventud y Deportes no cuenta en la actualidad con personal suficiente para la implementación de la presente ley y, por lo tanto, va a precisar de nuevo personal que realice todas las tareas que va a conllevar su puesta en marcha y posterior mantenimiento. Se precisaría de, mínimo, una o un gestor deportivo que ejerza de responsable del apartado técnico de la ley, y una o un administrativo. Las tareas o funciones de ambas personas serían las siguientes:

Gestor/a deportivo/a:

- Definición de las necesidades de la aplicación informática del Registro de Profesionales.
- Asesoramiento técnico y supervisión del Registro de Profesionales.
- Asesoramiento técnico y supervisión del Procedimiento de Habilitaciones.
- Asesoramiento técnico a la asesoría jurídica en la elaboración de las diferentes reglamentaciones de la ley.
- Organización de los procesos de reconocimiento de las competencias (Deportes).
- Elaboración de los documentos informativos y de difusión de la ley.
- Organización e impartición de sesiones informativas sobre la ley.
- Organización de formaciones de primeros auxilios.
- Definición y organización de los nuevos cursos de monitorado escolar.
- Elaboración de informes sobre la situación formativa de los recursos humanos del deporte de cara a una posible aplicación progresiva de la ley y el grado de cumplimiento de la ley.
- Coordinación con los agentes competentes en materia de formación deportiva (Dirección de Universidades, Dirección de Formación Profesional, Dirección de Centros, Lanbide, Federaciones, etc.) para satisfacer las necesidades de la ley. Elaboración de propuestas.
- Coordinación con Lanbide para establecer los correspondientes procedimientos de reconocimiento de las competencias.
- Definición y organización de formaciones de modalidades deportivas no reconocidas o sin plan formativo.
- Asesoramiento a entidades deportivas en relación a la aplicación de la ley.

Administrativo/a:

- Responsable de realizar las tareas propias del Registro de Profesionales del Deporte (información, registro, solicitud de documentación, etc...).
- Realizar las tareas propias del Procedimiento de Habilitación (información, registro, solicitud de documentación, etc.).
- Realizar las tareas administrativas de los procedimientos de reconocimiento de las competencias (Deportes).
- Resolución de dudas y consultas en relación a la ley.
- Desarrollar las tareas administrativas que surjan de las acciones desarrolladas por la o el gestor de deportes responsable de la ley.

b) Difusión y documentación informativa:

La ley va a implicar cambios sustanciales en el sector del deporte en la CAPV. Va a exigir la posesión de una determinada cualificación para poder ejercer en el deporte y, por lo tanto, resulta imprescindible que la administración informe adecuadamente a los diferentes agentes implicados. Para ello, se realizarán una serie de sesiones informativas por todas las comarcas de la CAPV; se elaborará un manual, unos folletos informativos, de carácter divulgativo, sencillos, que permitan una rápida comprensión y, también, se habilitará un espacio en la web de la Dirección de Juventud y Deportes con toda la información y recursos de la ley.

Se realizará una campaña de difusión tras la aprobación de la ley (2016) y otra previamente a la exigencia de las cualificaciones establecidas en la ley (1 de enero de 2019).

c) Aplicación informática del Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco y del Procedimiento de Habilitaciones.

Según el anteproyecto todas las personas que ejerzan en el deporte en la CAPV tendrán que registrarse en el Registro de Profesionales del Deporte. Por lo tanto, queda clara la necesidad de contar con una aplicación específica que gestione la cantidad de información que va a ser preciso recoger. Dada la cantidad de personas que deberán pasar por el registro resulta fundamental habilitar la posibilidad de que las personas puedan registrarse vía on-line.

Asimismo, la aplicación que se cree tendrá que tener la posibilidad de incorporar a las personas que se habiliten para el ejercicio profesional del deporte a través del proceso creado para tal fin. Dicha habilitación, según el anteproyecto, será efectiva hasta la creación de los correspondientes procedimientos de reconocimiento de las competencias.

Atendiendo a la experiencia de la Dirección de Juventud y Deportes con otras aplicaciones informáticas, es posible que en un plazo determinado sea preciso su actualización y la incorporación de nuevas funcionalidades.

***d) Tribunales de reconocimiento de las competencias (Deportes).***

Existen ciertas formaciones oficiales del deporte (algunas enseñanzas deportivas de régimen especial, formaciones de periodo transitorio, enseñanzas universitarias, etc.) que no están referidas al sistema de cualificaciones y, por lo tanto, no pueden acudir a los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Por ello, y de cara a facilitar que cualquier persona que posea cierta experiencia en el ámbito del deporte, pueda capitalizar sus conocimientos deportivos, se pretende crear unos sistemas de validación de aprendizajes (Cataluña ya desarrolló estas acciones en las posteriores reglamentaciones de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte) o similares. Estos procedimientos prevén la existencia de unos tribunales, formados por personas expertas y por personal de la administración, que serán quienes valoren la experiencia y formación no formal acreditada por las personas interesadas.

Se entiende que estos procedimientos tendrán una fecha límite o, al menos, tendrán una relevancia inferior. Una vez se hayan convocado plazas suficientes para cubrir la demanda en todas las competencias referidas a las diferentes enseñanzas, dejarán de ser tan necesarios, dado que para ejercer (y obtener cierta experiencia por lo tanto) será precisa la posesión de una determinada cualificación.

e) Organización de formaciones de primeros auxilios:

El anteproyecto, en aras de la seguridad de las y los practicantes, exige que todas las personas que ejerzan en el ámbito del deporte han de poseer la correspondiente competencia en primeros auxilios. La mayoría de las formaciones actuales del ámbito del deporte cuentan con un módulo orientado a los primeros auxilios, pero se da el caso de bastantes profesionales que ejercen en el ámbito del deporte sin haber cursado formación alguna y que, independientemente de lograr el correspondiente proceso la habilitación para poder continuar con su actividad, tendrán que, obligatoriamente, obtener la cualificación en primeros auxilios. En consecuencia, será preciso la oferta de un amplio número de cursos de primeros auxilios previamente a la llegada del 1 de enero de 2019 (plazo límite para su adquisición).

f) Servicio de inspección:

Corresponde a la administración competente en materia de deporte del Gobierno Vasco velar por el cumplimiento de la ley y, para ello, el anteproyecto le atribuye las funciones de inspección. La Dirección de Juventud y Deportes carece, en la actualidad, de servicio de inspección y, por lo tanto, deberá establecer los mecanismos oportunos para contar con dicho servicio a partir del 1 de enero del 2019, momento en el que se exige la obligatoriedad de contar con la correspondiente cualificación.

**g) Servicio de asesoría jurídica:**

La Dirección de Juventud y Deportes posee personal propio para estas funciones, pero la gran cantidad de reglamentaciones que se han de realizar en un periodo de tiempo tan corto (previamente a la exigencia de las titulaciones del 1 de enero del 2019), justifica la imperiosa necesidad de contratar un servicio de asesoría jurídica externa para desarrollar dichas reglamentaciones, al menos, hasta tal fecha.

h) Elaboración de informes/estudios de seguimiento:

La disposición transitoria segunda establece que *“En todos aquellos ámbitos materiales propios del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, del Entrenador o Entrenadora y del Director Deportivo o Directora Deportiva en los que el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, en el ámbito exclusivo de su competencia, verifique la falta de profesionales con las cualificaciones previstas en esta Ley para atender adecuadamente la demanda existente, la ausencia de formación oficial o la existencia de nuevos ámbitos deportivos, se habilitará provisionalmente a aquellas personas que acrediten la posesión de una cualificación inferior u otro tipo de formación análoga.”*

Una aplicación progresiva es fundamental para una correcta y adecuada implantación de la ley. Para ello, resulta imprescindible la verificación constante a través de estudios e informes del estado de cualificación de las personas que prestan servicios en el ámbito del deporte, tanto previamente al 1 de enero de 2019, como posteriormente, de cara a las previsibles reglamentaciones que permitan una correcta aplicación de lo establecido en la disposición transitoria segunda.

2. REORIENTAR PARTIDAS YA EXISTENTES EN EL GOBIERNO VASCO

Estos gastos e ingresos no resultan de nueva creación para el Gobierno Vasco, si no que corresponden a partidas ya establecidas en los presupuestos, en aquellos conceptos relativos a la implantación del sistema de cualificaciones. En este caso, habría que orientar parte del presupuesto anual ya establecido para los mecanismos de acreditación de competencias y de certificados de profesionalidad hacia aquellos de la familia de las actividades físicas y el deporte, aspecto suficientemente justificado por la existencia de una ley que regula la exigencia de unas determinadas cualificaciones.

a) Dispositivos de reconocimiento de las competencias (Lanbide-Educación).

Al igual que se ha mencionado previamente la necesidad de reconocer las competencias de las personas que ejercen en el deporte de cara a la incorporación de formaciones no referidas al sistema de cualificaciones, lógicamente, es preciso también el reconocimiento de la experiencia y la formación no formal de aquellas personas que deseen obtener competencias referidas al sistema de cualificaciones. En



este caso, corresponde a las administraciones competentes en materia de educación y de empleo la incorporación de la familia de las actividades físicas y el deporte en sus habituales procedimientos anuales de reconocimiento.

Estos procedimientos tienen establecidas unas tasas (24€ fase de asesoramiento y 12€ por el proceso de contraste de cada competencia) que han de ser abonadas por las personas interesadas, por lo que existe en este caso una serie de ingresos, si bien no alcanzan a cubrir los gastos.

Por otra parte, se entiende que estos procedimientos también tendrán un plazo límite, o al menos se reducirá ampliamente su uso, dado que a partir de una determinada fecha únicamente se podrá adquirir experiencia profesional en el deporte a través de la posesión de una determinada cualificación.

b) Organización de oferta pública de certificados de profesionalidad (Lanbide).

La exigencia de una determinada cualificación para ejercer en el ámbito del deporte obliga a que las formaciones oficiales existentes satisfagan todas las necesidades de las personas interesadas. Así, será precisa una oferta pública de un mayor número de certificados de profesionalidad de la familia de las actividades físicas y el deporte. Hoy en día, en el ámbito del fitness por ejemplo, un número importante de personas se forma a través de formaciones no oficiales de un carácter reducido. Tras la aprobación de la ley, los certificados de profesionalidad serán las formaciones oficiales más reducidas de cara a ejercer en el ámbito del fitness, y, por lo tanto, se presume una alta demanda.

Jon Redondo Lertxundi

Director de Juventud y Deportes



EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKION MEMORIA EKONOMIKOA

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legea, ezbairik gabe, mesedegarria izango da Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-jarduera eta jarduera fisikoetan diharduten pertsonentzat, baina legea benetan aurrera eraman ahal izateko, EAEko Administrazioak hainbat ekintza berri jarri beharko ditu abian, eta ekintza horiek kostu ekonomiko bat ekarriko dute berekin, ezinbestean.

Legearekin era batera edo bestera lotuta dauden gastuak aurkeztuko dizkizuegu jarraian, hiru bloketan banatuta.

1. Legearen gastu berriak.
2. Eusko Jaurlaritzan lehendik dauden partidekin lotuta dauden gastuak eta diru-sarrerak.
3. Legea onartu edo ez abiarazi beharreko gastu eta diru-sarrera berriak.

Hiru blokeetan taula bat ageri da aurreikuspenen arabera legea indarrean hasiko den urteaz geroztik (2016) 2021. urtera eta ondorengo urteetara arteko gastu eta diru-sarrerei dagozkien kopuru eta guzti, legearen ezarpen-fase bakoitzaren kostuak ikusi ahal izateko.

Kopuruen berri ematen duten taulak aurkeztu ondoren, Legea ongi aplikatzeko ekintza eta kontzeptu horiek guztiak zergatik diren beharrezko azaldu eta justifikatzen da, banan-banan.

1. LEGEAREN GASTU BERRIAK

Jarraian aurkeztuko ditugun gastuak sortu berriak dira; oraindik ez daude indarrean beraz, eta legea onartzen bada soilik garatuko dira. Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak abiarazi beharreko ekintzekin lotuta daude gastu horiek guztiak.

		2017	2018	2019	2020	≥2021
GASTOS	Nuevos recursos humanos de gestión (1 técnico / 1 administrativo)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Difusión y documentación informativa (guía, folleto s, web, sesiones informativas)		10.000			
	Aplicación informática habilitaciones / registro profesionales		20.000			
	Tribunales reconocimiento de la experiencia y formación no formal (Deportes)	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Organización de formaciones de primeros auxilios	30.000	30.000			
	Servicio de inspección			15.000	15.000	15.000
	Servicio de asesoría jurídica (reglamentaciones)	18.000	18.000			
	Elaboración de informes/estudios de seguimiento para la aplicación progresiva		15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAL GASTOS	138.000	183.000	120.000	120.000	90.000

a) Kudeaketarako giza baliabide berriak:

Gaur egun Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak ez du lege hau abiarazteko behar adina langile, eta beraz langile berriak beharko ditu legea abian jartzeak eta ondorengo



mantentzeak ekarriko dituzten zeregin guztien ardura hartzeko. Gutxienez kirol-kudeatzaile bat beharko litzateke, legearen atal teknikoaren ardura hartzeko, baita administrari bat ere. Bakoitzak honako eginkizun hauek izango ditu:

Kirol-kudeatzailea:

- Profesionalen Erregistroaren aplikazio informatikoaren premiak zehaztea.
- Aholkularitza teknikoa eta Profesionalen Erregistroa ikuskatzea.
- Aholkularitza teknikoa eta gaikuntzen prozedura ikuskatzea.
- Aholkularitza juridikoari aholku teknikoak ematea legearen arauak egitean.
- Gaitasunak onartzeko prozesuak antolatzea (Kirolak).
- Legeari buruz informatzeko eta legea zabaltzeko dokumentuak egitea.
- Legeari buruzko informazio-saioak antolatzea eta ematea.
- Lehen laguntzetako prestakuntzak antolatzea.
- Eskola-monitoreentzako ikastaro berriak definitu eta antolatzea.
- Kirolaren giza baliabideen prestakuntza-egoerari buruzko txostenak egitea, legea pixkana-pixkana aplikatzeko eta betetzeko.
- Kirol-prestakuntzaren alorrean eskumenekoak diren eragileekin (Unibertsitate Zuzendaritza, Lanbide Heziketako Zuzendaritza, Ikastetxeen Zuzendaritza, Lanbide, federazioak eta abar) koordinatzea, legearen premiak betetzeko. Proposamenak egitea.
- Lanbiderekin koordinatzea gaitasunak onartzeko prozedurak ezartzeko.
- Onartuta ez dauden edo prestakuntza-planik ez duten kirol modalitateak definitzea eta antolatzea.
- Kirol-erakundeei aholku ematea legearen aplikazioaren inguruan.

Administraria:

- Kirol-arloko Profesionalen Erregistroaren zereginak (informatzea, erregistratzea, dokumentazioa eskatzea eta abar) egiteko arduraduna.
- Gaikuntza-prozeduraren zereginak egitea (informatzea, erregistratzea, dokumentazioa eskatzea eta abar).
- Gaitasunak onartzeko prozeduren administrazio-zereginak egitea (Kirolak).
- Legeari buruzko zalantza eta kontsultak argitzea.
- Legearen ardura duen kirol-kudeatzaileak garatutako ekintzetatik sortutako administrazio-zereginak garatzea.

b) Zabalkundea eta informazio-dokumentazioa:

Legeak funtsezko aldaketak eragingo ditu EAEko kirolaren sektorean. Kirolean jarduteko kualifikazio jakin baten jabe izatea eskatuko du, eta beraz administrazioak informazio egokia jarri beharko du inplikaturako eragile guztien eskura, ezinbestean. Horretarako, hainbat informazio-saio egingo dira EAEko eskualde guztietan barrena, dibulgazioko informazio-liburuxka xume batzuk egingo dira, erraz ulertzeko aukera



emango dutenak, eta, halaber, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren webgunean tarte bat gaituko da legearen informazio eta baliabide guztien berri emateko.

Zabalkunde-kanpaina bat egingo da legea onartu ondoren (2016), eta beste bat legean ezarritako kualifikazioak eskatzeko epemuga (2019ko urtarrilaren 1a) baino lehen.

c) Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren eta gaikuntza-prozeduraren aplikazio informatikoa.

Aurreproiektuaren arabera, EAEn kirolean diharduten pertsona guztiek erregistratu beharko dute Kirol-arloko Profesionalen Erregistroan. Hortaz, argi dago aplikazio espezifiko bat abian jarri beharko litzatekeela, bildu beharreko informazio kantitatea kudeatzeko. Erregistrotik pertsona askok igaro behar dutenez, funtsezkoa da pertsonen on-line erregistratzeko aukera eskaintzea.

Gainera, horretarako sortutako prozesuaren bitartez kirolaren jardun profesionalean aritzeko gaituko diren pertsonak eransteko aukera eskaini beharko du sortuko den aplikazioak. Aurreproiektuaren arabera gaikuntza hori indarrean egongo da gaitasunak onartzeko prozedurak sortu arte.

Gazteria eta Kirol Zuzendaritza beste aplikazio informatiko batzuekin duen esperientziaren arabera, litekeena da epe jakin batean eguneratu behar izatea funtzionalitate berriak sartzeko.

d) Gaitasunak onartzeko epaitegiak (Kirolak).

Kirol-arloko prestakuntza ofizial jakin batzuk (araubide bereziko kirol-irakaskuntza batzuk, aldi baterako prestakuntzak, unibertsitate-irakaskuntzak eta abar) ez daude lotuta kualifikazioen sistemarekin, eta beraz, lan-esperientziaren bitartez jasotako lanbide-gaitasunak onartzeko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako prozeduretara jotzeko aukerarik ez dago. Horregatik, eta kirol-arloan esperientzia pixka bat duen edonork bere kirol-jakintza kapitalizatzeko aukera izan dezan, ikaskuntzak edo antzekoak balidatzeko sistema batzuk sortu nahi ditugu (Kataluniak ekintza horiek garatu zituen jada, kirol-arloko lanbideetan jarduteari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legetik eratorritako arauetan). Prozedura horiek aurreikusten dute epaitegi batzuk indarrean jartzea, adituez eta administrazioako langileez osatuak, eta interesdunek egiaztatutako esperientzia eta prestakuntza ez-formala balioesteko ardura hartuko dutenak.

Prozedura horiek epemuga jakin bat izango dute noski, edo, gutxienez, garrantzi txikiago bat izango dute. Irakaskuntza guztiei dagozkien gaitasunetan eskaria estaltzeko behar adina plaza iragarri ondoren, epaitegiak ez dira hain beharrezko izango, jarduteko (eta beraz esperientzia pixka bat lortzeko) behar-beharrezkoa izango delako kualifikazio jakin baten jabe izatea.

**e) Lehen laguntzetako prestakuntzak antolatzea:**

Kirol-arloan dihardutenen segurtasuna bermatzeko, aurreproiektuak eskatzen du kirol-arloan diharduten pertsona guztiek lehen laguntzetako gaitasunaren jabe izan behar dutela. Kirol-arloan egun indarrean dauden prestakuntza gehienek badute lehen laguntzei buruzko modulu bat, baina kirol-eremuan diharduten hainbat profesionalak ez dute inolako prestakuntzarik jaso, eta, prozesu horretan beren jardueran jarraitu ahal izateko gaikuntza lortu edo ez, lehen laguntzetako kualifikazioa lortu beharko dute nahitaez. Ondorioz, 2019ko urtarrilaren 1a (kualifikazioa lortzeko epemuga) baino lehenago lehen laguntzetako hainbat ikastaro eskaini beharko dira.

f) Ikuskaritza-zerbitzua:

Eusko Jaurlaritzan kirol-aroko eskumenak dauzkan administrazioak bere gain hartu behar du legea betearazteko ardura, eta horretarako aurreproiektuak ikuskatze-eginkizunak esleitu dizkio. Gaur egun Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak ez du ikuskaritza-zerbitzurik, eta beraz, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera zerbitzu hori abian jartzeko behar diren mekanismoak ezarri beharko ditu, une horretatik aurrera nahitaezkoa izango delako dagokion kualifikazioaren jabe izatea.

g) Lege-aholkularitzako zerbitzua:

Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak baditu langileak eginkizun horien ardura hartzeko, baina oso denbora gutxian arau pila bat garatu behar direnez (2019ko urtarrilaren 1etik aurrera titulazioak nahitaez eskatu baino lehen), ezinbestekoa da kanpoko lege-aholkularitzako zerbitzu bat kontratatzea gutxienez egun horretara arte arau horiek garatzeko.

h) Jarraipeneko txostenak/azterlanak egitea:

Bigarren xedapen iragankorrak honako hau ezartzen du: “2.- *Kirol Monitore, Entrenatzaile edo Kirol Zuzendari lanbideei dagozkien eremu material guztietan, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak bere eskumenen eremuan egiaztatzen badu ez dagoela lege honetan aurreikusitako kualifikazioak dituen profesionalik une bakoitzean dagoen eskaintzari behar bezala erantzuteko, edo egiaztatzen badu prestakuntza ofizialik ez dagoela edo kirol-esparru berriak sortu direla, kualifikazio gutxiago edo antzeko beste prestakuntza-mota bat duten pertsonak gaituko ditu behin-behingo.*”

Pixkanakako aplikazioa funtsezkoa da legea ongi eta behar bezala ezartzeko. Horretarako ezinbestekoa da kirol-eremuan zerbitzuak ematen dituzten pertsonen kualifikazio-egoera etengabe egiaztatzea horretarako azterlanak eta txostenak eginez, 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen eta ondoren, bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoa ongi aplikatu ahal izateko etor litezkeen arauetara loturik.

**2. EUSKO JAURLARITZAN LEHENDIK DAUDEN PARTIDAK BERRORIENTATZEA**

Gastu eta diru-sarrera horiek ez dira sortu berriak Eusko Jaurlaritzarentzat, aurrekontuetan lehendik ezarritako partidetan bilduta daudelako, kualifikazioen sistemaren ezarpenari dagozkion kontzeptuetan. Kasu horretan, gaitasunak eta profesionaltasun-ziurtagiriak egiaztatzeko mekanismoetarako lehendik ezarritako urteko aurrekontuaren zati bat jarduera fisiko eta kirolen familiarako utzi beharko da, kualifikazio jakin batzuen nahitaezotasuna arautzen duen lege bat indarrean dagoela aintzakotzat hartuta.

a) Gaitasunak onartzeko dispositiboak (Lanbide Hezkuntza).

Aldez aurretik adierazi dugunez, kirol-arloan diharduten pertsonen gaitasunak onartu behar dira kualifikazio-sistemeekin zerikusirik ez duten prestakuntzak eransteko, eta logikoa denez aldi berean beharrezkoa da, halaber, kualifikazio-sistemeekin zerikusia duten gaitasunak lortu nahi dituzten pertsonen esperientzia eta prestakuntza ez-formala onartzea. Kasu horretan, hezkuntza- eta enplegu-arloan eskumenekoak diren administrazioei dagokie jarduera fisiko eta kirolen familia ere gaitasunak onartzeko urtean behin egin ohi dituzten prozeduretan biltzea.

Prozedura horietan parte hartu nahi duten pertsonak 24 €ko tasa ordaindu behar dute aholkularitza-fasean eta 12 €ko tasa gaitasun hori egiaztatzeko prozesuan, eta kasu honetan beraz diru-sarrera batzuk sortzen dira, gastuak estaltzeko nahikoak ez badira ere.

Bestetik, aintzat hartzekoa da prozedura horiek mugaegun bat ere izango dutela, edo gutxienez haien erabilera nabarmen murriztuko dela, egun jakin batetik aurrera lanbide-esperientzia jasotzeko behar-beharrezkoa izango delako kualifikazio jakin baten jabe izatea.

b) Profesionaltasun-ziurtagirien eskaintza publikoa antolatzea (Lanbide).

Kirol-arloan jarduteko kualifikazio jakin bat eskatuko denez, prestakuntza ofizialek interesdunen premia guzti-guztiak bete beharko dituzte. Hortaz, jarduera fisiko eta kirolen familiako profesional-ziurtagirien kopuru handiago baten eskaintza publikoa beharko da. Gaur egun, fitnessaren eremuan adibidez, hainbat pertsonak prestakuntza ez-ofizial murriztuen bitartez jasotzen dute prestakuntza, Legea onartu ondoren, profesionaltasun-ziurtagiriak fitnessaren eremuan jarduteko prestakuntza ofizial murriztuenak izango dira, eta horregatik eskaria handia izango dela aurreikusten da.



VII

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA / AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA**Administrazio eta Zerbitzuen
SailburuordetzaAraubide Juridikoaren eta Zerbitzuen
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA**Viceconsejería de Administración y
Servicios

Dirección de Régimen Jurídico y Servicios

FIRMADO DIGITALMENTE POR:Firmante: **AMAIA HERRAN FERNANDEZ**Fecha de la firma: **12/03/2015 16:22:02**Validación de la firma: **Correcta**Firmante: **JOSE ANTONIO CAYERO BILBAO**Fecha de la firma: **12/03/2015 16:33:48**Validación de la firma: **Correcta****INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN AL
ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE
PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO****I.- INTRODUCCION.**

El presente informe se emite en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12.2. e) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y tiene por objeto analizar el fundamento objetivo del Anteproyecto de Ley, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa vigentes en esta Administración.

Por Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, de 4 de noviembre de 2014, se procedió a la iniciación del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

Posteriormente, y una vez elaborado por los servicios técnicos del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura el texto del Anteproyecto, se procedió a su aprobación mediante Orden de 24 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Junto con las anteriores, se han remitido a esta Asesoría Jurídica para su análisis la versión definitiva del Anteproyecto, tanto en euskera como en castellano, la memoria explicativa de la propuesta y el informe de impacto de género.

II.- ANTECEDENTES.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, contenía un mandato dirigido a los poderes públicos en el sentido de regular las competencias necesarias para la realización de una serie de actividades relacionadas con el deporte (artículo 62):

“para la realización de Servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial”.

A su vez, el Plan Vasco del Deporte 2003-2007 puso en evidencia la necesidad de regular el sector, ya que incidía directamente en la protección de la salud de los participantes en la práctica deportiva. En él se hacía el siguiente análisis:

«la situación en cuanto a formación y empleo en el sector de deportes de Euskadi es bastante complicada debido a varias razones:

- Por una parte, se ha dado una irrupción en el mercado del trabajo de numerosos titulados y tituladas deportivas oficiales y no oficiales sin que se haya elaborado la necesaria regulación laboral del sector, y esto ha dado lugar a desempleo, situaciones de sobrecualificación y subcualificación, etc.
- Por otra parte, han surgido numerosas nuevas ocupaciones que han hecho que se produzca un desajuste entre la cualificación requerida y la que se tiene a través de la formación, lo cual conlleva a dificultades de empleo ya que la formación actual no responde a las necesidades presentes.
- Se une también el factor de la especialización y profesionalización del sector, lo cual requiere personal altamente cualificado y especializado.
- De las tendencias precedentes queda claro que el sistema actual de formación no es el adecuado, no cubre las necesidades que se presentan, conllevando a problemas de empleo en este sector y convirtiéndose este tema en una de las más importantes preocupaciones de las Administraciones Públicas vascas. Sería conveniente una regulación de la profesión y una clarificación de las competencias profesionales y de los ámbitos laborales de las y los trabajadores en este sector.»

Como antecedente de esta propuesta normativa, cabe señalar también la proposición no de ley (8/2012) aprobada por el Parlamento Vasco, en sesión plenaria de 9 de febrero de 2012:

«El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que presente, dentro del marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos, un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte, en colaboración con todos los agentes implicados, de tal forma que se determinen las profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral, para garantizar la seguridad y la salud de las personas».

III.- MARCO COMPETENCIAL Y NORMATIVO.

1.- OBJETO DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

El objeto del Anteproyecto de Ley analizado es regular el acceso y ejercicio de determinadas profesiones propias del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV); es decir, definir el régimen jurídico de una serie de profesiones relacionadas con el deporte, mediante la definición y delimitación funcional de dichas actividades profesionales y mediante el establecimiento de los requisitos y competencias necesarios para el acceso a las mismas.

El escenario previo a la regulación propuesta es un sector profesional que engloba múltiples actividades profesionales de libre ejercicio. El Anteproyecto no se fija en todas las posibilidades existentes, sino únicamente en las estrictamente profesionales y que, además, están directamente relacionadas con la protección de la salud y seguridad de las personas participantes en las actividades deportivas, poniendo especial atención en aquellos colectivos merecedores de una mayor protección. Esto es, el objeto de la Ley es convertir una serie de profesiones libres en profesiones reguladas y esa intervención del poder público en el control de dichas actividades se justifica en la existencia de un bien jurídico merecedor de una protección cualificada: la salud y seguridad de los participantes en las actividades deportivas.

Por tanto, la regulación propuesta deberá encontrar el equilibrio necesario entre garantizar el derecho a la libre elección de profesión (artículo 35 CE)¹, dentro de un mercado regido por el principio de libre competencia, y la necesidad de adoptar los mecanismos necesarios de intervención para el cumplimiento del mandato de tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas oportunas (artículo 43 CE)².

En cuanto a los títulos competenciales autonómicos en virtud de los cuales la Comunidad Autónoma ejerce su potestad legislativa serían, fundamentalmente, los siguientes:

- El artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (en adelante EAPV) que establece que corresponde a la Comunidad

¹ Artículo 35.1 CE: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo»

² Artículo 43.[Protección de la salud]

«1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.»

Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de "Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento".

- El artículo 10.22 del EAPV, relativo a las competencias en materia de Colegios Profesionales y de ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36³ y 139⁴ de la Constitución.

Dado que se regula también la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, debe citarse también el artículo 16 del EAPV, que atribuye a la CAPV amplias competencias en materia de enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen y de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. Asimismo, la regulación de dicha profesión encontraría apoyo competencial en el artículo 10.4 del EAPV, relativo a la competencia exclusiva de la CAPV en materia de ordenación de su función pública, sin perjuicio de la competencia exclusiva atribuida al Estado en el artículo 149.1.18 de la CE⁵.

Habría, además, otros títulos competenciales vinculados a la materia legislada, en concreto, resultarían afectados los siguientes: normas procesales y de procedimientos administrativos que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco (art. 10.6 EAPV); sector público propio del País Vasco (art. 10.24 EAPV) y defensa del consumidor y del usuario (art. 10.28 EAPV).

Por último, debemos completar las referencias competenciales aludiendo a la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos", que atribuye a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en

³ Artículo 36. [Colegios Profesionales]

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

⁴ Artículo 139. [Igualdad de derechos y obligaciones en el territorio español. Libertad de circulación y establecimiento]

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

⁵ Artículo 148.1.18 CE: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

materia de "Fomento del deporte. Programas de deporte escolar y deporte para todos" (artículo 7.c.2).

En base al título competencial previsto en el artículo 10.36 EAPV se promulgó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco (en adelante Ley 14/1998 o Ley del Deporte del País Vasco), cuyo artículo 62 dispone lo siguiente:

"para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial".

Aparte de dicha previsión legal, hasta la fecha no ha existido en el ámbito de la CAPV una regulación de las profesiones del deporte. La exigencia de determinadas titulaciones para el ejercicio de determinadas actividades sólo se ha previsto, hasta el momento, en el ámbito del deporte escolar, a través del Decreto 125/2008, de 1 de julio, de Deporte Escolar⁶ (artículo 25):

1.- Para ejercer funciones de dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y funciones análogas en materia de deporte escolar será preciso estar en posesión del título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el título de Grado correspondiente.

2.- Si las citadas actividades de dirección deportiva se ejercen con relación a una sola modalidad deportiva será posible desarrollar la actividad estando en posesión del título de Técnico Deportivo Superior de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente, o título equivalente.

3.- Para las citadas actividades de dirección del deporte escolar que se programen en el seno de los centros educativos fuera del horario lectivo también será válido el título de Maestro con especialización en Educación Física, o título equivalente.

4.- La Escuela Vasca del Deporte promoverá, de común acuerdo con los órganos forales de los territorios históricos, ofertas formativas para las personas que colaboren en el desarrollo de los entrenamientos, competiciones y demás actividades que integran los programas de deporte escolar.

5.- Mediante Orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes, podrá adaptarse la exigencia de los títulos contenidos en este Decreto a las nuevas titulaciones que se aprueben como consecuencia de las nuevas ofertas formativas.

6.- Las citadas exigencias de titulaciones se entienden sin perjuicio de la exigencia de titulaciones oficiales para el ejercicio de profesiones propias del deporte a través de la correspondiente Ley".

⁶ BOPV nº 135, de 16 de julio de 2008.

2.- REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES.

En el texto constitucional la única mención a la regulación de las profesiones aparece en el artículo 36: "La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas". Cabe señalar que dicho artículo no contiene un título competencial expreso a favor del Estado, sino que simplemente llama a la reserva de ley para la regulación del ejercicio de profesiones tituladas.

Por su parte, el artículo 10.22 EAPV confiere a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

No obstante, antes de avanzar en el análisis del marco normativo en el que se inserta la propuesta, debemos detenernos a analizar la naturaleza del objeto regulado. Tal y como se expone en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, las profesiones reguladas no son "profesiones tituladas", sino que constituirían "profesiones reguladas".

La distinción entre "profesión titulada" y "profesión regulada" es esencial para justificar la competencia del legislador autonómico en esta materia.

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones sobre el concepto de "profesiones tituladas" al que hace alusión el antes mencionado artículo 36 CE; de modo que define las profesiones tituladas como aquellas "para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia" (STC 42/1986). Asimismo, señala dicho Tribunal que "tales profesiones tituladas existen cuando se condicionan determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos" (STC 122/1989). Por tanto, "no todas las actividades laborales, los oficios o las profesiones en sentido lato son o constituyen profesiones tituladas" (STC 122/1989).

Asimismo, el TC en dicha sentencia 122/1989 relaciona el artículo 36 referido a la regulación de las profesiones tituladas con el título competencial a favor del Estado reconocido en el artículo 149.1.30 CE. Dicho artículo confiere al Estado competencia exclusiva en materia de "Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia." De este modo, el TC indica: "corresponde al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser profesión titulada, y no es dudoso que, con arreglo al texto del art. 149.1.30 de la Constitución, es el legislador estatal quien ostenta competencia exclusiva".

La competencia estatal en materia de profesiones tituladas ha sido delimitada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a través de diversas sentencias, entre las que resultan destacables: STC 82/1986, la ya mencionada STC 122/1989, la STC 83/1984 y la más reciente STC 154/2005, entre otras.

Ahora bien, tal y como se justifica en la Memoria explicativa que acompaña al Anteproyecto de Ley y en la propia Exposición de Motivos del texto legal propuesto, el objeto de la norma legal examinada no es la regulación de “profesiones tituladas”, sino que nos encontraríamos en el ámbito de las llamadas “profesiones reguladas no tituladas”. Es decir, las profesiones tituladas serían un subtipo del concepto “profesiones reguladas”, en concreto, son aquellas actividades cuyo ejercicio está condicionado a la tenencia de un concreto título académico (STC 122/1989: “tales profesiones tituladas existen cuando se condicionan determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos”). Mientras que las profesiones reguladas serían aquella “actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad de ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas a quien posea una determinada cualificación profesional” (artículo 3.1.a) de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales).

Por tanto, “profesiones reguladas” serían —en palabras de Tomás González Cueto— “aquellas respecto de las que una norma regula su competencia profesional, es decir, *ex lege* existe un conjunto de atribuciones que sólo puede desarrollar en exclusiva un profesional que venga avalado bien por un título académico, bien por la superación de unos requisitos y una prueba de aptitud que impliquen la concesión o autorización administrativa del acceso a una profesión”⁷. Las profesiones reguladas pueden ser a su vez tituladas o generales/no tituladas; resultando ser las primeras —según el mismo autor—, “aquéllas a las que afecta la reserva de ley del art. 36 CE y su previsión o regulación implica que la competencia profesional se atribuye básicamente a los sujetos que se encuentren en posesión de un determinado título académico de enseñanza superior”; mientras que las segundas (profesiones reguladas generales o no tituladas) serían “aquellas en las que el elemento o título determinante de la competencia profesional no es un título académico sino una licencia o autorización administrativa que se otorga previo cumplimiento de unos requisitos, entre los que se puede establecer una prueba de aptitud. En este caso no es el título académico lo determinante del carácter de la profesión, sino la licencia administrativa, por lo que tales profesiones aun siendo reguladas no son tituladas, por lo que no tienen incidencia en el sistema educativo y, por

⁷ Tomás González Cueto. Informe “El concepto de «profesión regulada» a que se refiere el documento «La organización de las enseñanzas universitarias en España»”. 11 de abril de 2007. Ministerio de Educación y Ciencia.

ende, en la organización y planificación de las titulaciones de educación superior.»

Pues bien, las profesiones del deporte que se delimitan en el Anteproyecto de Ley no están sujetas *per se* a la posesión de un título de educación superior, sino a la acreditación de las correspondientes cualificaciones profesionales, y estas cualificaciones podrán acreditarse mediante los títulos académicos de diferentes niveles, así como mediante aquellos otros títulos, como los certificados de profesionalidad de carácter oficial, que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

El objeto del Anteproyecto de Ley es regular ciertos requisitos necesarios para el acceso y ejercicio de ciertas profesiones, es decir, se pretende asegurar que los profesionales tengan una serie de conocimientos y competencias que se consideran indispensables para asegurar el ejercicio de la actividad profesional con la calidad suficiente para proteger la salud y seguridad de los destinatarios de dicha actividad. La acreditación de dichas competencias y conocimientos podrá hacerse mediante ciertos títulos académicos oficiales, pero también mediante certificados de profesionalidad que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

El hecho de que uno de los requisitos para su ejercicio sea la exigencia de determinadas titulaciones, no es óbice para considerar que estamos ante profesiones tituladas, sino simplemente ante la necesidad de acreditación previa de ciertos niveles de conocimiento necesarios que se consideran cubiertos con la posesión de dichos títulos, pero cuya acreditación también es posible por otros medios.

Por todo ello, cabe concluir que las profesiones deportivas recogidas en el Anteproyecto no son “profesiones tituladas”. No obstante, debe realizarse una precisión en relación a una de ellas: la profesión de Profesor/Profesora de Educación Física. Esta actividad profesional sí constituye una profesión titulada, regulada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Lo que propone el Anteproyecto es complementar la regulación estatal con ciertos contenidos mínimos que se consideran imprescindibles para garantizar la protección de la salud de los participantes en las actividades deportivas. Para ello el servicio promotor de la iniciativa justifica esta posibilidad en el mandato de protección de la salud contenido en el artículo 43 de la CE y en el título competencial atribuido a la CAPV en el artículo 10.22 del EAPV (competencia exclusiva en materia de ejercicio de profesiones tituladas).

En la Memoria justificativa se explica que el Anteproyecto es respetuoso con la legislación educativa vigente que regula la materia y que lo que se pretende es regular ciertos requisitos mínimos esenciales del ejercicio de la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, que complementarían la regulación básica sobre la materia en aras de la protección de la salud y seguridad del alumnado. Se argumenta que de ningún modo se modifica la configuración legal de la profesión de Profesor, ni se introduce ningún cambio que afecte a los contenidos de la titulación académica requerida

para el acceso a la misma, cuya determinación está conferida de forma exclusiva al Estado en virtud del título competencial recogido en el artículo 149.1.30 CE ("Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia").

Sin embargo, si bien es cierto que no se modifican los contenidos de la titulación académica exigida para ser Profesor o Profesora, no podemos estar conformes con la afirmación de que no se ve afectada la configuración legal de la profesión de Profesor. Si se analiza el contenido del artículo 3 del Anteproyecto de Ley se concluye que se está regulando el acceso a la profesión ya que se establece un mandato dirigido a la Administración educativa de valorar preferentemente para dicho acceso a quienes estén en posesión de un determinado título.

En suma, es fundamental realizar un análisis desde la perspectiva del reparto competencial en materia educativa. En este sentido, cabe señalar que el Estado tiene atribuidas competencias exclusivas en materia educativa; en concreto, le corresponden (STC 48/1985):

- la ordenación general del sistema educativo,
- la fijación de las enseñanzas mínimas,
- la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales,
- el establecimiento de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, donde se desarrolla el derecho fundamental a la educación, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el desarrollo de los deberes constitucionales y,
- la alta inspección del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Además, le correspondería —en base al título competencial del artículo 149.1.18 de la CE— el establecimiento de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios. De modo que, tal y como dispone la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, "son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas, con tal carácter, en el Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, las reguladas por esta Ley y la normativa que la desarrolle, para el ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la provisión de plazas mediante concursos de traslados de ámbito estatal. El Gobierno desarrollará reglamentariamente dichas bases en aquellos aspectos básicos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente". Asimismo, esa misma disposición establece que "Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando, en

todo caso, las normas básicas a que se hace referencia en el apartado anterior”.

El artículo 3 del Anteproyecto hace una remisión a la legislación educativa vigente y es en los apartados 2 y 3 donde realmente pretende introducir un complemento que es el que debe ser objeto de valoración. De la lectura del artículo 3.2 del Anteproyecto —que es el referido a la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física— se concluye que se establece una condición (aunque sea en forma de criterio de preferencia para el acceso a una especialidad) de ingreso a la función pública docente.

Pues bien, al respecto hay que señalar que la estructura de los cuerpos docentes y los requisitos de acceso a los mismos constituyen legislación básica del Estado y están reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículos 93 y siguientes; disposición adicional séptima; y disposición adicional novena). En concreto, las especialidades de la función pública docente y los requisitos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes están regulados en la disposición adicional séptima y en la disposición adicional novena de la LOE y tienen carácter básico.

La LOE ha sido desarrollada, entre otras normas, por el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas en régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. Este Real Decreto establece las especialidades docentes de los cuerpos de funcionarios que tienen a su cargo la enseñanza de la educación secundaria obligatoria, bachillerato y la formación profesional y crea, entre otras, la especialidad de Educación Física y las condiciones de formación para el ejercicio de dicha docencia.

Para la Educación Infantil y Primaria debe acudirse al Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. En los artículos 8 y 12 de este Real Decreto se establecen los requisitos de titulación académica de los maestros y maestras que imparten educación infantil y primaria. Esta regulación tiene carácter de norma básica.

Asimismo, para el acceso a la docencia en centros privados existe también normativa estatal de carácter básico, en la que se regulan las condiciones de acceso a la docencia y los títulos exigidos para cada especialidad. En concreto, el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato, establece que para impartir Educación Física se exige las siguientes titulaciones:

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Física.
- Licenciado en Medicina acreditando estar en posesión del Diplomoma de Especialista en Medicina Deportiva.

- Cualquier titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Graduado, y acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir el currículo de la materia.

A su vez, las condiciones de cualificación y formación de los maestros de Educación Infantil y Primaria fueron regulados por el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros de los centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria. Dicho Real Decreto constituye también normativa básica. En dicho Real Decreto, para la impartición de la docencia en Educación Infantil y Primaria en centros docentes privados, en concreto para la especialidad de Educación Física se exige lo siguiente (artículos 5 y 7):

«Artículo 5. Enseñanzas de Música, de Educación Física y de Lengua Extranjera (Inglés, Francés, Alemán) en la Educación Primaria.

1. Las enseñanzas de Música, de Educación Física y de Lengua Extranjera (Inglés, Francés, Alemán) en la Educación Primaria, serán impartidas por Maestros que estén en posesión del título de Graduado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria y que incluya, respectivamente, una mención en Música, Educación Física o Lengua Extranjera en el idioma correspondiente y, para esta última, además, la acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en la lengua correspondiente.

Estas enseñanzas también podrán ser impartidas por quienes estén en posesión del título de Maestro especialista en Música, Educación Física o Lengua Extranjera en el idioma correspondiente, respectivamente, o Diplomado en Profesorado de Educación General Básica o Maestro de Primera Enseñanza con la especialidad correspondiente.

2. Los Maestros a los que se refiere el apartado anterior que carezcan de la mención cualificadora, requisitos o especialidad indicada, podrán impartir las enseñanzas de Música, de Educación Física o de Lengua Extranjera en centros docentes privados de Educación Primaria, siempre que estén en posesión de alguno de los siguientes requisitos:

(...)

b) Enseñanzas de Educación Física:

1.º Graduado en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte.

2.º Licenciado en Educación Física o haber superado tres cursos completos de esta licenciatura.

3.º Diplomado en Educación Física.

4.º Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.º Haber superado los cursos de la especialidad de Educación Física, según lo establecido en el artículo 7 del presente real decreto.

6.º Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Educación Física, según lo establecido en el artículo 8 de este real decreto.»

«Artículo 7. Requisito de haber superado los cursos de la especialidad.

Este requisito se entenderá cumplido al haber superado los cursos de especialidad convocados bien por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o bien por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, en cuyo caso los cursos deben estar homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y haber sido iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto.»

La CAPV legisló en materia de cuerpos docentes propios en base a los títulos competenciales de los artículos 10.4 y 16 del EAPV (Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes del País Vasco) y creó sus propios cuerpos docentes partiendo de la normativa básica del Estado; de modo que:

- Estableció unas estructuras de cuerpos que se correspondían en todo caso con la ordenación de los cuerpos establecidos en la legislación básica del Estado.
- Se reconoció la existencia de concursos de ámbito estatal para la provisión de plazas vacantes en los centros docentes de enseñanza, lo que no impide que la Comunidad Autónoma realice sus concursos propios cerrados y señale los requisitos específicos necesarios.
- Se estableció la garantía de igualdad de derechos y deberes del personal docente de la CAPV y del personal docente de otras Administraciones que provea plazas vacantes en los centros de enseñanza del País Vasco.

El artículo 4 de la Ley de Cuerpos Docentes del País Vasco establece que el Departamento competente en materia de Educación tiene atribuida la función de “establecer las bases, programas y contenido de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de funcionario docente de carrera o laboral fijo, convocarlas, designar a los tribunales calificadores de las mismas y nombrar y dar posesión, o en su caso contratar, a quienes las hayan superado”.

En esta misma línea, el artículo 16.1 de ese mismo texto legal establece que: “El sistema de selección de los funcionarios de carrera docentes será el de concurso-oposición, tras convocatoria pública. En la fase de concurso se valorará, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, en su caso, de acuerdo con las áreas y materias que integran el currículo correspondiente. Para la selección de aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes. Asimismo, podrá existir una fase de prácticas que podrá incluir cursos de formación específica y que formará parte del proceso selectivo”.

La redacción propuesta para el artículo 3 del Anteproyecto excede de las competencias atribuidas a la CAPV, ya que establece que se valorará de forma preferente para impartir la materia de Educación Física, tanto en

Educación Primaria como en Secundaria, a quienes posean una determinada titulación. Esa obligación de valoración de forma preferente es indeterminada y excesiva, no ajustándose al régimen competencial antes citado. De quererse complementar la regulación actual deberá hacerse dentro de las atribuciones competenciales de la CAPV y el marco referente debería ser el delimitado en los artículos 4 y 16 de la Ley de Cuerpos Docentes del País Vasco.

Pero yendo más allá del análisis al marco competencial, también es oportuno realizar un examen de necesidad. En este sentido, debemos señalar que la regulación propuesta en el Anteproyecto resulta innecesaria porque la cualificación y calidad de conocimientos y formación de quienes ejercen la docencia en materia de Educación Física están suficientemente garantizadas con la normativa básica vigente en la actualidad antes mencionada. En la normativa antes expuesta se tiene en cuenta la especialidad de Educación Física y se regulan las condiciones de acceso o se articulan los mecanismos necesarios para asegurar que quienes accedan a dicha especialidad cuenten con los conocimientos necesarios en la materia.

Por todo ello, debería excluirse del Anteproyecto la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, por exceso competencial y por su innecesidad para el cumplimiento del fin que justifica la regulación propuesta, dado que dicha materia ya está profusamente y con mucho más detalle regulada en la normativa educativa tanto estatal como autonómica. En suma, la propuesta relativa a la profesión de Profesor/Profesora en Educación Física no aporta nada novedoso a lo ya existente en la específica regulación de dicha profesión.

Desde el punto de vista de la técnica normativa, la propuesta relativa a la profesión de Profesor/Profesora de Educación Física merece el consiguiente reproche ya que la dispersión en textos legales de diversa índole de cuestiones relativas a una materia concreta es unatécnica a evitar. Frente a la dispersión del ordenamiento jurídico, la Administración está obligada a realizar un esfuerzo por consolidar y compilar la legislación, en aras a facilitar la comprensión del marco normativo vigente por aquellos a quienes va destinada. Asimismo, antes de acometer una norma es necesario valorar, identificar los problemas existentes y las carencias y deficiencias que los ocasionan, marcar objetivos para paliarlas y aplicar el principio de proporcionalidad para ver qué propuestas normativas son las más adecuadas para conseguir superar los problemas iniciales. Vista la regulación propuesta en el Anteproyecto en relación a la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, vemos que el problema es que no se ha analizado previamente y con detalle la situación en torno a esta figura. Del examen de la normativa existente en la materia se deduce rápidamente que ya existen los mecanismos jurídicos oportunos para asegurar el objetivo de la especialización en la docencia en Educación Física, resultando, en consecuencia, la propuesta innecesaria.

A modo ilustrativo, en la reciente oferta de empleo público de la CAPV al cuerpo de maestros y maestras⁸, se ha tenido en cuenta la especialidad de Educación Física y se ha previsto que en la fase de oposición se valoren conocimientos relativos a la especialidad, elaborándose un temario específico para esta especialidad. Asimismo, en la fase de concurso se puntúan méritos relacionados con la especialidad, por ejemplo, la Titulación de Técnico Deportivo Superior o tener la calificación de Deportista de Alto Nivel.

Por último, debemos recordar al servicio promotor la doctrina ya consolidada del TC en relación al esfuerzo por el empleo de una depurada técnica normativa en aras de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; entre otras, en su Sentencia 150/1990, señala lo siguiente:

«(...) los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas, (...); puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia.»

En cuanto al resto de profesiones del Anteproyecto, aquellas se incardinan dentro del concepto de profesiones reguladas, respecto a las cuales el legislador autonómico estaría facultado para acometer la regulación necesaria en aras de proteger intereses generales que requieren la intervención del poder público; tal y como el propio TC ha reconocido:

«la sujeción a determinadas condiciones o el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ejercer una determinada actividad laboral o profesional es cosa bien distinta y alejada de la creación de una profesión titulada (...). Es así posible que, dentro del respeto debido al derecho del trabajo y a la libre elección de profesión u oficio (art. 35 de la Constitución), y como medio necesario para la protección de intereses generales, los poderes públicos intervengan en el ejercicio de ciertas actividades profesionales, sometiéndolas a la previa obtención de una autorización o licencia administrativa o a la superación de ciertas pruebas de aptitud. Pero, como se acaba de señalar, la exigencia de tales requisitos, autorizaciones, habilitaciones o pruebas no es en modo alguno, equiparable a la creación o regulación de los títulos profesionales, a que se refiere el art. 149.1.30 de la Constitución, ni guarda relación con la competencia que este precepto constitucional reserva al Estado.» (STC 122/1989).

⁸ Orden de 11 de febrero de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 18-02-2015)

En este mismo sentido se ha pronunciado más recientemente el TC en su sentencia 109/2003 (FJ.14):

«La doctrina apuntada se funda en que “como ha declarado este Tribunal en su Sentencia 122/1989, si bien es posible que dentro del respeto debido al derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio (art. 35 CE), y como medio necesario para la protección de los intereses generales, los poderes públicos intervengan en el ejercicio de determinadas actividades profesionales, sometiéndolas a la previa obtención de una autorización o licencia administrativa o a la superación de determinadas pruebas de aptitud... la exigencia de tales requisitos, autorizaciones, habilitaciones o pruebas no es en modo alguno equiparable a la creación o regulación de los títulos profesionales a que se refiere el art. 149.1.30 CE, ni guarda relación con la competencia que este precepto constitucional reserva al Estado, pues la sujeción a determinadas condiciones o el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ejercer una determinada actividad laboral o profesional es cosa bien distinta y alejada de la creación de una profesión titulada en el sentido antes indicado, cuyo ejercicio está condicionado a la posesión de concretos títulos académicos (STC 83/1984) o, lo que es lo mismo, a la posesión de estudios superiores, ratificados por el oportuno certificado, diploma o licencia (STC 42/1986)” (STC 111/1993, F.9).

De ahí que en esta misma resolución y fundamento jurídico manifestáramos que “a la vista de esta doctrina no sólo resulta avalada la distinción entre título académico oficial y capacitación oficial,... sino que dado el reconocimiento constitucional a la libre elección de profesión u oficio (art. 35 CE), se perfila la posibilidad de diversos grados de control estatal de las actividades profesionales según sea la mayor o menor importancia de los intereses constitucionales que con su ejercicio se ponen en juego.»

3.- MARCO NORMATIVO COMPARADO.

La propuesta hay que relacionarla además con el marco comunitario vigente, ya que tiene directa conexión con dos materias afectadas por las normas comunitarias. La regularización de un sector liberalizado engarza directamente con la materialización del principio de libre competencia y con la libre circulación de personas y servicios.

Habrà que analizar el proyecto a la luz de la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior) y de su norma de transposición al ordenamiento jurídico español (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).

Asimismo, resulta oportuno analizar el contenido desde la perspectiva de la armonización comunitaria en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales).

En otro orden de cosas, en el ámbito comparado y como referente principal de este Anteproyecto de Ley, cabe citar la Ley catalana 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte.

En el procedimiento de elaboración de la Ley catalana surgieron dudas sobre si algunos preceptos de dicha Ley vulneraban la competencia estatal reconocida en el artículo 36 del texto constitucional⁹.

Las dudas sobre la inconstitucionalidad de la Ley catalana fueron resueltas en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. En consecuencia, se interpretaron los preceptos objeto de dudas de la siguiente forma:

«En general, ambas partes coinciden en interpretar que la exigencia de formación para ejercer una profesión debe explicarse en las competencias y conocimientos acreditados con las titulaciones adecuadas, aunque puedan existir otras formas de certificar dicha formación, como son los títulos expedidos en otros países. Asimismo, ambas partes coinciden en admitir la posible existencia de requisitos previos para el ejercicio de estas profesiones no explicitados en la Ley, como ocurre, por ejemplo, en relación con la profesión de profesor o profesora de educación física (...).»

«El Consejo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya en relación con los arts. 4, 5 y 6 de la Ley, entiende que su contenido ha de ponerse en relación al de los artículos 1.1, 14, 15 y disposiciones adicional segunda, transitorias primera y tercera, y finales tercera y sexta y demás preceptos, pero que para el ejercicio de dichas profesiones, esos mismos grados pueden acreditarse tanto mediante los títulos a los que en cada caso aluden aquellos artículos como, de igual forma, pueden acreditarse también mediante las otras titulaciones, acreditaciones o certificados de profesionalidad que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.(...)»

IV.- RANGO LEGAL Y DESARROLLO REGLAMENTARIO.

La regulación que se pretende adopta la forma de Anteproyecto de Ley. En este sentido, entendemos oportuno realizar un breve recordatorio del significado de dicho rango legal, a los efectos de justificación de la

⁹ El Consejo de Estado, en su momento, emitió un dictamen (Dictamen C.Est. 48/2009, de 29 de enero) sobre la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley catalana. En su pronunciamiento llegó a la conclusión de que sí existían fundamento jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad ya que entendía que la decisión de exigir una determinada titulación para el ejercicio de una profesión, es decir, la delimitación de una profesión como profesión titulada corresponde en exclusiva al Estado, e interpretaba que la competencia autonómica sobre el "ejercicio de profesiones tituladas" podía "extenderse a la regulación de las condiciones de ejercicio de la profesión", con respeto de las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales y conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución y en el sentido detallada por el artículo 125.4 del Estatuto de Autonomía. Es decir, "excluyendo la determinación de las profesiones que exigen una específica titulación, es decir, teniendo como límite de su regulación, en palabras de la STC 83/1984, el condicionamiento de determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos".

naturaleza otorgada al texto, así como, a los efectos de abordar a continuación los necesarios desarrollos reglamentarios que conlleva la norma que se propone.

La reserva de ley tiene como finalidad “asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los reglamentos. El principio no excluye, ciertamente, la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador.” Sentencia TC (Pleno) núm. 83/1984 de 24 julio. En este mismo sentido: STC (Pleno) núm.235/2000, de 5 de octubre.

Analizado el contenido de la propuesta, entendemos adecuado el rango normativo, básicamente, por dos razones: por un lado, tal y como se expone en la Memoria que acompaña al Anteproyecto, existe “cierto consenso jurídico en que las restricciones al acceso y ejercicio profesional deben estar previstas, preferentemente, en una norma de rango de ley”; muestra de ello es el artículo 7¹⁰ del Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales, que prevé expresamente que las restricciones al

¹⁰ Artículo 7 del Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales.

Restricciones al acceso.

1. Las restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión basadas en la cualificación sólo podrán establecerse cuando sea necesario por razones de interés general y de acuerdo con los principios de proporcionalidad y no discriminación.
2. Las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de Ley. En el caso de transposición de una norma de derecho comunitario, las restricciones al acceso podrán estar previstas en una norma de rango inferior. La norma que establezca restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión identificará claramente la actividad o profesión a la que se restringe el acceso, haciendo referencia a las funciones que comprende, de manera que no induzca a confusión con otras actividades profesionales o profesiones.
3. Se entenderá por restricción al acceso basada en la cualificación cualquier exigencia o límite relativos a la titulación, nivel académico o educativo, formación, capacitación o experiencia que implique la reserva de funciones a favor del poseedor de dicha cualificación.
4. En la regulación de la acreditación de la cualificación requerida deberá estarse al principio de proporcionalidad, previendo el mayor número de medios de acreditación que sea posible, tales como poseer un determinado nivel académico o educativo, poseer un título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad, tener reconocida una experiencia laboral en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, haber superado una formación o un examen teórico y/o práctico sobre unos contenidos mínimos ante la autoridad competente, o poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación de personas.
5. Se podrá preservar la denominación en exclusiva de profesiones aun cuando no tengan reserva de actividad o atribuciones profesionales explícitas cuando la obtención de una determinada titulación o habilitación se encuentre regulada y en particular cuando esté sometida a la superación de unas pruebas de aptitud convocadas por la Administración competente. En ningún caso esa reserva de denominación podrá estar vinculada al requisito de colegiación cuando la profesión no sea colegiada.

acceso a una actividad profesional o a una profesión sean reguladas mediante una norma con rango de Ley (art. 7.2).

Las profesiones que se regulan no nacen con la Ley, sino que preexisten a esta como realidad social y económica previa. Lo que hace la Ley es ordenarlas y regularlas en aras de intereses públicos subyacentes. Por tanto, se parte de una serie de profesiones libres que pasan a ser objeto de ciertas limitaciones o requisitos, es decir, pasan a ser profesiones reguladas. En definitiva, se está regulando un ámbito de libertad (derecho a la libre elección de profesión, artículo 35 CE), por lo que las limitaciones que se impongan a dicho derecho no pueden ser arbitrarias y, entendemos, deberían surgir de la voluntad del legislador.

Asimismo, la regulación afecta a la profesión de Profesor/Profesora de Educación Física, que inexorablemente va unida a la reserva de ley del ya mencionado artículo 36 CE ("La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. (...)").

Dado que el Anteproyecto, además, contiene una modificación del régimen sancionador de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, resulta imprescindible introducir dicha modificación a través de una norma de rango legal; ello se desprende del artículo 25.1 del texto constitucional ("Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"), así como de la reiterada doctrina constitucional acerca del alcance del término "legislación vigente" contenido en dicho artículo 25.1 CE, la cual considera que "es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora", entre otras, STC núm.26/2005, de 14 de febrero, STC 113/2002, de 9 de mayo, STC 25/2002, de 11 de febrero, STC 60/2000, de 2 de marzo).

Por tanto, habida cuenta de la naturaleza de las materias reguladas en el Anteproyecto y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cabe concluir que el rango normativo elegido es adecuado para la regulación de dichas materias.

Por su parte el reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general emanada de la Administración, tiene subordinación a la ley, a la que complementa. Por ser el reglamento norma jurídica de colaboración, debe distinguirse entre la normación básica de las cuestiones fundamentales que siempre corresponde a la ley y aquellas normas secundarias pero necesarias para completar el ordenamiento jurídico: reglamento ejecutivo, reglamento independiente y, en su caso, reglamento de necesidad. La potestad reglamentaria es, pues, un poder jurídico que participa en la elaboración del ordenamiento jurídico, de suerte que la norma reglamentaria queda integrada en el mismo. Pero la norma reglamentaria no es incondicionada, sino que está sometida a la Constitución y a las Leyes (art. 97 de la Constitución), a la que corresponde —cuando el reglamento es objeto de impugnación— determinar su validez o su legalidad.

El Tribunal Constitucional ha manifestado de forma reiterada que los reglamentos ejecutivos están directa y concretamente ligados a una ley, de manera que dicha ley es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada y cumplimentada o ejecutada por el Reglamento: "Existe en nuestro derecho una tradición jurídica que dentro de los reglamentos, como disposiciones generales de la Administración con rango inferior a una ley, y aun reconociendo que en todos ellos se actúa el ejercicio de la función ejecutiva en sentido amplio, destaca como «reglamentos ejecutivos» aquellos que están directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada y cumplimentada o ejecutada por el reglamento. Son reglamentos que el Consejo de Estado ha caracterizado como aquellos «cuyo cometido es desenvolver una ley preexistente o que tiene por finalidad establecer normas para el desarrollo, aplicación y ejecución de una ley»." (STC (Pleno) 18/1982, de 4 de mayo).

En el proyecto analizado se recurre en varias ocasiones a la técnica de remisión al desarrollo reglamentario. Dichas remisiones serán analizadas con más detalle al examinar el contenido de la norma.

V.- CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco consta de una parte expositiva, dieciocho artículos, doce disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y seis disposiciones finales.

⇒ PARTE EXPOSITIVA.

En la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley se indican los motivos que dan origen a su elaboración, los objetivos perseguidos, los fundamentos jurídicos habilitantes en que se basa, los principios y líneas generales inspiradores de la regulación, así como su incidencia en la normativa en vigor, con especial mención de los aspectos más novedosos. Se da, consecuentemente, respuesta adecuada a los contenidos exigidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Anteproyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones (publicada en el BOPV nº 71, de 19 de abril de 1993 por Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico).

Antes de comenzar con el análisis del articulado, hemos de señalar que la norma proyectada trata de satisfacer —entre otros— los siguientes objetivos fundamentales, explicitados tanto en la memoria justificativa que acompaña al Anteproyecto, como en su exposición de motivos:

- El texto articulado trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito deportivo, para ello trata de concretar las cualificaciones necesarias para su ejercicio y definir su ámbito funcional.

- El objetivo del Anteproyecto de Ley no es regular todas las profesiones del deporte, sino únicamente aquellas que inciden directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia, en especial, la salud y seguridad de las personas que practican deporte.

⇒ **ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

En el artículo 1 se concretan el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley. Asimismo, se definen ciertos términos, tales como: “ejercicio profesional”, “voluntariado deportivo” o “deporte”. Se completa el artículo con una serie de actividades profesionales que expresamente quedan excluidas y termina el artículo con una referencia a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

En relación al contenido de este artículo se cree oportuno realizar las siguientes recomendaciones:

En el apartado 2 se dice: “se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica que, en su caso, apruebe el Estado en materia de servicios y Colegios Profesionales”. Dado que la Comunidad Autónoma también tiene competencias atribuidas en dichas materias e incluso su propia Ley de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales (Ley 18/1997, de 15 de diciembre), la referencia debería ser más genérica, incluyendo no sólo la legislación estatal vigente sino también la autonómica.

En el apartado 5 se define qué se entiende por “voluntariado deportivo” y se concreta diciendo que será voluntaria “aquella actividad que se realice de forma libre, voluntaria y sin retribución económica”, entendiendo como “retribución económica” “la percepción de compensaciones económicas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional”.

En cualquier caso, se aconseja al servicio promotor de la iniciativa la eliminación del inciso “No se considerará retribución económica a los efectos de la presente disposición la percepción de compensaciones económicas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional”, ya que no es acorde con el concepto de voluntariado previsto en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado:

«Artículo 2.- Concepto de voluntariado.

A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que se realicen en las siguientes condiciones:

- a) De manera desinteresada y con carácter solidario
- b) Voluntaria y libremente, sin traer causa de una relación laboral funcional o mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico.
- c) A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o proyectos concretos.
- d) **Sin retribución económica.**

e) Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados.

2.- No tendrán la consideración de voluntariado, a efectos de la Ley, las actuaciones voluntarias espontáneas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones, ejecutadas por razones familiares, de amistad, benevolencia o buena vecindad.»

«Artículo 4. Principios de actuación

Las acciones de voluntariado en sus distintos ámbitos se regirán por los principios de solidaridad, participación, gratuidad, autonomía frente a los poderes públicos, no discriminación, pluralismo, integración, prevención y sensibilización social, y, en general, por todos aquellos que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, moderna, participativa, justa e igualitaria.»

El no percibir retribución económica como compensación por el trabajo voluntario es un elemento intrínseco del concepto de voluntariado. La percepción de una retribución económica de forma periódica podría dar a entender que la actividad se realiza en sustitución de servicios profesionales remunerados, por un coste menor que el que supondrá contar con dichos servicios profesionales y, además, con el agravante de eludir las correspondientes obligaciones de Seguridad Social, hecho que revertiría en perjuicio, precisamente, del sector profesional que pretende protegerse en este Anteproyecto.

El hecho de que las cantidades percibidas sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional no debería ser el elemento que determine si una actividad es profesional o voluntaria. Así las cosas, la Ley de voluntariado define claramente las características de la acción voluntaria y es aquella que se realiza, entre otras cosas, sin retribución económica de ningún tipo, independientemente de la cuantía. Es más, según el artículo 5.3 de la Ley del voluntariado, el hecho de percibir una retribución económica —de la cuantía que sea— por el trabajo realizado es, precisamente, lo que diferencia al voluntario del profesional o del trabajador por cuenta ajena al servicio de la entidad.

Artículo 5. Concepto de voluntario

1. Tendrá la consideración de voluntario la persona física que libremente se comprometa a realizar las actividades a que se refiere esta ley y en las condiciones que se señalan en su artículo 2.

2. El voluntariado lleva inherente la relación entre una persona —el voluntario o voluntaria— y la organización en la que presta sus servicios. Esta relación genera unos derechos y unas obligaciones mutuas que deben quedar, al menos en sus fundamentos principales, regulados en el estatuto interno al que se refiere el artículo 8.4.a) de la presente ley.

3. La condición de voluntario será compatible con la de socio en la misma organización. **Las personas que desarrollen funciones en una organización como profesionales o tengan con la misma relaciones laborales, mercantiles o cualesquiera otras sujetas a retribución no**

podrán desarrollar las mismas funciones, en ningún caso, como voluntarios.

Las compensaciones económicas que pueden recibir los voluntarios ya están definidas en la propia Ley de voluntariado. Dichas compensaciones no tienen en ningún caso el carácter de retribución por el trabajo realizado. Por tanto, el voluntariado deportivo, en este extremo, debería también acogerse a lo previsto en la norma general sobre la materia:

Artículo 6. Derechos del voluntario

Son derechos del voluntario o voluntaria:

(...)

d) Recibir la cobertura de un seguro por los daños y perjuicios que el desempeño de su actividad como voluntario pudiera causar a terceros, con las características y por los capitales que se establezcan reglamentariamente.

e) **Recibir una compensación económica por los gastos realizados en el desempeño de su actividad, siempre que así se haya establecido en las condiciones pactadas entre el voluntario y la organización y dentro de los límites previstos en dicho acuerdo.**

Por tanto, en base a todo lo anterior debería suprimirse el límite cuantitativo previsto en el apartado 5º del artículo 1, ya que no está justificada el establecimiento de un límite en la retribución económica a percibir a partir del cual distinguir una actividad profesional de una voluntaria, siendo, precisamente, la ausencia de retribución económica la nota diferenciadora entre profesional y voluntario.

⇒ **ARTÍCULO 2. PROFESIONES PROPIAS DEL DEPORTE Y ÁMBITO FUNCIONAL GENERAL.**

Como se ha indicado anteriormente, esta ley no pretende regular todas las actividades profesionales existentes en la actualidad en relación al fenómeno deportivo, sino sólo aquellas que por su incidencia directa en la salud y seguridad reclaman la intervención del legislador.

En el artículo 2 se concretan las profesiones objeto de regulación. Comienza el artículo con una definición genérica sobre el concepto de "profesión propia del deporte" y, a continuación, concreta las que son objeto de regulación:

- Profesora/Profesor de Educación Física.
- Monitoria Deportiva/Monitor Deportivo.
- Entrenadora/Entrenador de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- Directora Deportiva/Director Deportivo.

Este artículo es uno de los pilares básicos de la ley y es esencial en la justificación de la iniciativa legislativa del ejecutivo autonómico en esta materia. Hace suyo el acuerdo adoptado por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte¹¹, ya que precisa que no se están regulando profesiones tituladas, sino que lo que se regula son las cualificaciones profesionales necesarias para el ejercicio de una serie de profesiones y que dichas cualificaciones pueden acreditarse mediante aquellas titulaciones que confieran las competencias y conocimientos necesarios para el ejercicio profesional, pero no sólo mediante las titulaciones previstas en la ley propuesta, sino cuantas otras certificaciones expedidas acreditaran niveles de formación equivalentes en cada caso conforme a la legislación vigente.

De este modo se adapta la regulación al marco europeo¹², que propugna un modelo abierto, basado en la acreditación de competencias profesionales. Es decir, para el ejercicio de una determinada profesión deben acreditarse competencias, lo cual podrá realizarse mediante el correspondiente título académico o bien por otras vías. Se opta, por tanto, de modelos abiertos de acreditación de competencias profesionales.

Asimismo, en este artículo 2 directamente se aclara que el acceso a una profesión a través de un determinado título, no limita tampoco el ámbito profesional de dicha titulación. Como ya se ha indicado, de ningún modo es objeto de esta regulación el contenido de las titulaciones que se mencionan a lo largo del articulado, cosa distinta es que para el acceso y ejercicio de una profesión se reconozca como válida una determinada titulación, por considerarse un medio adecuado para acreditar los conocimientos y competencias que se estiman necesarios para el ejercicio de dicha

¹¹ «En general, ambas partes coinciden en interpretar que la exigencia de formación para ejercer una profesión debe explicitarse en las competencias y conocimientos acreditados con las titulaciones adecuadas, aunque puedan existir otras formas de certificar dicha formación, como son los títulos expedidos en otros países. Asimismo, ambas partes coinciden en admitir la posible existencia de requisitos previos para el ejercicio de estas profesiones no explicitados en la Ley, como ocurre, por ejemplo, en relación con la profesión de profesor o profesora de educación física que, para ejercerse en el ámbito público, requiere la pertenencia a un Cuerpo estatal de profesores.»

¹² Artículo 1 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales:
«Objeto.

La presente Directiva establece las normas según las cuales un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado «Estado miembro de acogida») reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo denominado «Estado miembro de origen») y que permitan al titular de las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profesión.»

Artículo 3.1.b) de la Directiva 2005/36/CE: «"cualificaciones profesionales", las cualificaciones acreditadas por un título de formación, un certificado de competencia tal como se define en el artículo 11, letra a), inciso i), y/o una experiencia profesional;»

profesión. Ahora bien, dicho medio de acreditación no es único y se reconoce la posibilidad de acreditación de dichos conocimientos y competencias a través de otros títulos académicos o certificaciones previstos en cada momento en el ordenamiento jurídico vigente.

En los artículos siguientes (3 a 6) se concretan las profesiones objeto de regulación, las competencias profesionales de cada una de ellas y los mecanismos de acceso.

No obstante, debe señalarse que la redacción del apartado 3 es mejorable y podría optarse por algo así: "Los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la presente Ley establecen el ámbito funcional general de cada profesión y tienen un carácter enunciativo y no limitativo".

⇒ **ARTÍCULO 3. PROFESIÓN DE PROFESOR O PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA.**

La regulación de Profesor o Profesora de Educación Física ya ha sido objeto de comentario en este Informe, por lo que en este apartado nos remitimos a las consideraciones anteriormente realizadas.

⇒ **ARTÍCULO 4 (PROFESIÓN DE MONITOR DEPORTIVO O MONITORA DEPORTIVA); ARTÍCULO 5 (PROFESIÓN DE ENTRENADOR O ENTRENADORA DE LA MODALIDAD O DISCIPLINA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE), Y ARTÍCULO 6 (PROFESIÓN DE DIRECTOR DEPORTIVO O DIRECTORA DEPORTIVA).**

Los siguientes artículos relativos a las profesiones de monitor deportivo/monitora deportiva (artículo 4), entrenador/entrenadora (artículo 5) y director deportivo/directora deportiva (artículo 6) son, en el plano estrictamente jurídico, menos controvertidos que el anterior, por tratarse de profesiones libres carentes de regulación alguna, que pasan a configurarse como profesiones reguladas no tituladas a través de una regulación de mínimos, que trata de delimitar sus funciones y las cualificaciones profesionales requeridas. Su configuración legal responde más a cuestiones técnico-deportivas por lo que para la justificación de los límites establecidos nos debemos remitir a las motivaciones dadas en la memoria explicativa que acompaña al proyecto, que pivotan —como ya se ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo de este informe— sobre la protección de la salud y seguridad de los destinatarios de las actividades profesionales reguladas.

No obstante, en relación al contenido de los artículos 4, 5 y 6 resulta conveniente realizar las siguientes observaciones:

- En el artículo 5.5, se exige el título de Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, además, que la persona cuente con una formación específica para el ejercicio de la profesión de entrenador o entrenadora, cuando suponga el ejercicio de atribuciones en la recuperación y mejora de la condición física de las y los deportistas, en la prevención de lesiones, en la readaptación o reeducación tras lesiones, en la

realización de test de valoraciones y actuaciones análogas. En relación a este apartado debemos indicar que el indiso “que cuente con formación específica” debería ser objeto de un esfuerzo de concreción, ya que es tan amplio que sedesconoce a qué tipo de formación se refiere, lo que a posteriori dificultará enormemente su consiguiente desarrollo reglamentario.

- El apartado 6 del artículo 5 resulta innecesario, ya que en el artículo 7 y en el propio apartado 7 del artículo primero, ya se concreta el ámbito subjetivo de la norma y se indica que no es de aplicación a aquellos profesionales que no tengan domicilio social en el País Vasco.

⇒ **ARTÍCULO 7. REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN EN SUPUESTOS ESPECIALES.**

El artículo 7, bajo el título “requisitos de cualificación en supuestos especiales”, no se corresponde con el contenido del artículo, que en realidad lo que hace es definir el ámbito de aplicación de la norma en ciertos supuestos:

APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 7:

El apartado 1 reitera el ámbito territorial de la norma, pero expresándolo en sentido negativo, por lo que resulta una reiteración de lo ya dicho en el artículo 1 del Anteproyecto.

APARTADOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 7:

Los apartados 2 y 3 concretan el ámbito subjetivo de la norma para el caso de profesionales al servicio de clubes y otras asodaciones deportivas análogas, así como para el caso de los profesionales de las federaciones deportivas españolas y demás entidades deportivas, públicas o privadas, de ámbito estatal. En el primero de los casos se aplicará la Ley si las entidades para las que prestan sus servicios tienen domicilio social y, además, desarrollan principalmente sus actividades en la CAPV. En el segundo de los casos será de aplicación la Ley si los profesionales ejercen su profesión principalmente en centros radicados en el País Vasco.

En primer lugar, cabe señalar que el contenido de este artículo está directamente relacionado con el artículo 1, que es donde se define el ámbito de aplicación de la Ley, por lo que entendemos que en caso de tratarse, efectivamente, de excepciones o especificaciones a lo previsto en aquel, deberían situarse en ese primer artículo.

Al relacionar el artículo 7 con el artículo 1, relativo al ámbito de aplicación de la Ley, nos damos cuenta de que el ámbito de la norma adolece de falta de concreción. Es decir, en el artículo 1.2 se dice que “La ley sólo será de aplicación al ejercicio profesional en el ámbito territorial del País Vasco” y a continuación se define el ejercicio profesional como la “prestación de los

servicios propios de las profesiones del deporte” que a continuación se definirán en la norma y se excluyen las relaciones de voluntariado, de amistad, familiares y análogas. En ese mismo artículo 1 se cita de forma genérica la Ley de garantía de la unidad de mercado¹³, con el fin de

¹³ Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado:

Artículo 19. «Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional.

1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar.
2. Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar del territorio español podrá circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el momento de su puesta en el mercado.
3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno.»

Artículo 20. «Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.

1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales:
 - a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.
 - b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica.
 - c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad económica.
 - d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a una actividad económica o ejercerla.
2. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional.

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará, en particular, a los siguientes supuestos:

salvaguardar la libre iniciativa económica y evitar trabas administrativas innecesarias a aquellos operadores económicos que desarrollen la actividad profesional en otras Comunidades Autónomas. De todo ello se deduce — pero no porque se concrete en el Anteproyecto— que lo que se pretende es que el objeto de la norma sea el ejercicio profesional HABITUAL de una serie de actividades relacionadas con el deporte en el ámbito territorial de la CAPV.

Llegados a este punto debe indicarse que el ámbito objetivo de todo Anteproyecto de Ley o de proyecto de disposición de carácter general es la parte esencial de la norma, donde debe afinarse en la concreción y en la reflexión acerca de lo que se pretende, y ello si se quiere asegurar el éxito en la consecución de los objetivos perseguidos con el proyecto. De modo que podría incluso afirmarse que, por muy brillante que sea el resto del articulado, una indefinición en el ámbito objetivo y subjetivo de la norma provoca inseguridad jurídica, sumiendo, ya no sólo a los operadores jurídicos que con posterioridad sean responsables de su materialización práctica, sino también a sus destinatarios, en la inseguridad de no poder saber claramente hasta qué punto se van a ver afectados.

En suma, tras el examen del texto, parece desprenderse que están sujetos a la Ley quienes ejerzan de forma habitual en la CAPV, aplicándose la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, a efectos de evitar las duplicidades normativas y el exceso de cargas administrativas. Sin embargo, en el artículo 1 no se establece como requisito determinante de la aplicación de la Ley el poseer domicilio social en la CAPV, sin embargo, en el apartado 2 del artículo 7, a los profesionales que trabajen para clubes

-
- a) Certificaciones de calidad a efectos de la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad en los procedimientos de contratación de las autoridades competentes, para el suministro de bienes y servicios en determinadas circunstancias o a determinados sujetos y para la obtención de ventajas económicas, bien sean subvenciones o beneficios fiscales.
 - b) Certificaciones o reconocimientos oficiales, a efectos de los derechos o ventajas económicas que obtienen las personas físicas o jurídicas que contratan con un operador oficialmente reconocido.
 - c) Certificaciones, reconocimientos y acreditaciones, a efectos de comprobar la concurrencia de un nivel determinado de calidad o de profesionalidad exigido para el acceso o ejercicio de una actividad económica determinada.
4. El principio de eficacia en todo el territorio nacional no se aplicará en caso de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura física. No obstante, cuando el operador esté legalmente establecido en otro lugar del territorio, las autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente a la instalación o infraestructura.

El principio de eficacia en todo el territorio nacional tampoco se aplicará a los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.»

y entidades deportivas se les aplicará la Ley cuando dichas entidades tengan su domicilio social y desarrollen principalmente sus actividades en la CAPV. Es decir, por primera vez se habla del requisito de tener "domicilio social" y de "desarrollar principalmente sus actividades". Asimismo, para el caso de profesionales que trabajan para las federaciones deportivas españolas y demás entidades deportivas, públicas o privadas, de ámbito estatal se les aplicará la Ley cuando ejerzan su profesión "principalmente en centros radicados en el País Vasco".

Pues bien, el artículo 1 necesita de un elemento determinante acerca de qué tipo de ejercicio profesional queda subsumido dentro del ámbito de aplicación de la norma. En el artículo 7 se dice que aquellos profesionales que trabajen para clubes y otras entidades deportivas, se verán afectados por la norma cuando dichas entidades tengan domicilio social y desarrollen su actividad principalmente en la CAPV. Sin embargo, desconocemos cuál es el elemento definidor del ámbito de aplicación en la generalidad de los supuestos (profesionales que realizan la actividad por cuenta propia, conformando o no sociedades mercantiles diversas, o al servicio de la amplia gama de entidades privadas distintas a los clubes, entidades deportivas y federaciones), es decir, se debe concretar en el artículo 1 qué se entiende por "ejercicio profesional en el ámbito territorial de la CAPV" (¿tener domicilio social en la CAPV, sede en la CAPV, desarrollar la actividad de forma habitual, si es así, qué se entiende por habitualidad?).

La indefinición anterior también afecta al artículo 7, ya que debería concretarse qué es "ejercer la profesión principalmente en la CAPV".

APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 7:

El apartado 4 adolece de una gran inconcreción. En cuanto a la primera previsión ("La presente Ley se aplicará para el acceso a los puestos de trabajo") entendemos además que resulta redundante porque tal previsión ya está contenida en el apartado 3 del artículo 1.

En cuanto a la aplicación de esta Ley para la contratación de servicios, dicha previsión resulta también en exceso genérica, lo que se traducirá en la consiguiente inseguridad jurídica para el operador público que tenga que aplicarla a la hora de contratar (¿incluirlo como criterio de adjudicación, como condición esencial, como obligación?...). Se entiende que con dicho artículo se pretende que la Administración contratante incluya como obligación contractual que quienes vayan a ejercer una actividad profesional de las previstas en la norma al servicio de una Administración, no en base a una relación funcional o laboral por cuenta ajena, sino en base a una contratación administrativa, queden también sujetos a la norma. Entendemos este inciso innecesario, ya que indefectiblemente, dicha actividad profesional quedará sujeta al imperativo del artículo 1.3 del Anteproyecto, por tanto, tanto la Administración contratante, como la empresa contratista están obligadas a asegurarse de que sus profesionales estén debidamente cualificados para el ejercicio profesional, ya tenga dicha actividad un destinatario público o privado, por tanto, se recomienda la supresión del artículo 7.4 por resultar innecesario.

⇒ **ARTÍCULO 8. ADAPTACIÓN A NUEVAS CALIFICACIONES Y TÍTULOS.**

Se dispone en este artículo que el Gobierno Vasco adapte las referencias a las cualificaciones y títulos contenidos en el texto legal a las nuevas ofertas formativas y cualificaciones profesionales oficiales, previéndose que en tanto no se realice dicha adaptación resultarán válidas aquellas que se declaren equivalentes en la normativa vigente.

El contenido de este artículo es más propio de una disposición adicional. En relación a este aspecto, debemos recordar lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2003, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones (BOPV nº 71, de 19 de abril de 1993). Dicho Acuerdo, en su directriz segunda apartado III, establece que los mandatos y actuaciones no dirigidas a la producción de normas jurídicas deberán incluirse en las disposiciones adicionales. También señala que, si se establecen, fijarán el plazo en el que debe cumplirse el mandato.

⇒ **ARTÍCULO 9. RESERVA DE DENOMINACIONES.**

El artículo 9 dispone la reserva de denominaciones para las profesiones reguladas en esta Ley.

⇒ **ARTÍCULO 10. COLEGIACIÓN Y REGISTRO OFICIAL DE PROFESIONALES DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO.**

El artículo 10 trae a la Ley la obligatoriedad de colegiación en los casos en que la legislación estatal así lo disponga. En este sentido, hay que señalar que la determinación de la obligatoriedad y de la voluntariedad de la colegiación —tal como ha indicado la doctrina del Tribunal Constitucional¹⁴—

¹⁴ STC 89/2013, de 15 de diciembre (FJ2): "c) Corresponde pues al legislador estatal la determinación de las profesiones cuyo ejercicio se sujeta a colegiación obligatoria, y ello, en los términos previstos en la modificación introducida en el art. 3.2 de la Ley 2/1974 (RCL 1974, 346) de colegios profesionales, por el art. 55 y disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 (RCL 2009, 2556):

«Antes de la reforma operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, ... la Ley 2/1974, de 13 de febrero, consagraba un modelo único de colegio profesional, caracterizado por la colegiación obligatoria, pues los profesionales estaban obligados a colegiarse para "el ejercicio de las profesiones colegiadas". Tras su reforma, el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias y las obligatorias. El requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios, tal y como se deduce de la disposición transitoria cuarta de esta misma norma. En definitiva, los colegios profesionales voluntarios son, a partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el modelo común, correspondiendo al legislador estatal, conforme a lo establecido en el art. 3.2, determinar los casos en que la colegiación se exige para el ejercicio profesional y, en consecuencia, también las excepciones, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla de la colegiación obligatoria, actuando como complemento necesario de la misma. La determinación de las profesiones para cuyo ejercicio

es competencia estatal y requiere norma de rango legal. Asimismo, el artículo 3.2 de la vigente Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales dispone que "será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal". De similar modo, el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (artículo 7.1) prevé que "la colegiación obligatoria se podrá exigir únicamente mediante norma estatal con rango de ley".

Para el resto de casos en los que no exista norma estatal que establezca la obligatoriedad de la colegiación el Anteproyecto prevé la obligación de inscribirse en un registro. Hasta aquí ninguna objeción legal cabe realizar a la propuesta.

Ahora bien, el apartado 3 de este artículo 10 debería ser modificado porque genera dudas sobre su adecuación al reparto competencial reconocido por el TC en materia de Colegios Profesionales. En este apartado se dispone lo siguiente: "Los requisitos de inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte y, si procede, **de colegiación no pueden exigirse a las y los profesionales vinculados con la Administración pública mediante una relación de servicios regulada por el derecho administrativo o laboral**. Sin embargo, estos y estas profesionales deben inscribirse en dicho Registro o, si procede, deben colegiarse para el ejercicio privado de la profesión".

En fechas recientes el TC ha dictado la sentencia 150/2014, de 22 de septiembre, que ha resuelto la cuestión de inconstitucional planteada contra el inciso inicial del art. 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de colegios profesionales del País Vasco, el cual decía: «Tal requisito —la colegiación— no podrá ser exigido a los profesionales vinculados con la Administración pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho administrativo o laboral». Dicho inciso ha sido declarado inconstitucional:

(FJ.3) "(...) debemos concluir, con remisión a lo dicho entonces, que «el inciso impugnado, al eximir de la colegiación obligatoria a los empleados públicos, cuando ejercen la profesión por cuenta de la Administración, establece una excepción no contemplada en la Ley estatal de colegios profesionales». Pues, «siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria [con arreglo a los arts. 149.1.18 y 36 CE, en relación con el art. 149.1.1 CE], lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados» (por todas, STC 2/2013, de 17 de enero, FJ8)"

la colegiación es obligatoria se remite a una ley estatal, previendo su disposición transitoria cuarta que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, plazo superado con creces, el Gobierno remitirá a las Cortes el correspondiente proyecto de ley y que, en tanto no se apruebe la ley prevista, la colegiación será obligatoria en los colegios profesionales cuya ley de creación así lo haya establecido."

Si bien en el apartado 3 del artículo 10 del Anteproyecto, en la exención de colegiación para el personal al servicio de la Administración, se añade el inciso “si procede”, esta matización es tan genérica que es insuficiente para salvaguardar la competencia estatal en la materia. Por ello recomendamos que este apartado se refiera exclusivamente a la obligación de inscripción en el Registro.

Asimismo, en relación al inciso “Sin embargo, **estos y estas profesionales** deben inscribirse en dicho Registro **o, si procede, deben colegiarse para el ejercicio privado de la profesión**”, en lo que respecta a la colegiación únicamente para el ejercicio privado de la profesión, hemos de decir que no se ajusta a la interpretación dada por el TC al artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (en su redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). El artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, dice lo siguiente:

«Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, **todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial.**»

Pues bien, “sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial”, no ha sido interpretado por el TC como una excepción a la obligatoriedad de la colegiación para el caso del personal al servicio de la Administración, sino de este otro modo (STC 3/2013, de 17 de enero, FJ6):

« La institución colegial está basada en la encomienda de funciones públicas sobre la profesión a los profesionales, pues, tal y como señala el art. 1.3, son sus fines la ordenación del ejercicio de las profesiones, su representación institucional exclusiva cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. La razón de atribuir a estas entidades, y no a la Administración, las funciones públicas sobre la profesión, de las que constituyen el principal exponente la deontología y ética profesional y, con ello, el control de las desviaciones en la práctica profesional, estriba en la pericia y experiencia de los profesionales que constituyen su base corporativa. Por ello, al contrario de lo afirmado por las partes, **la expresión «sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por razón de la relación funcionarial», no contiene una exclusión del régimen de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos sino, al contrario, una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de las competencias colegiales de ordenación de la profesión que se atribuyen, en exclusiva, a los colegios profesionales y, por tanto, a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de las competencias que, como empleadora, la**

Administración ostenta sin excepción sobre todo su personal, con independencia de que éste realice o no actividades propias de profesiones colegiadas.

Una cautela especialmente necesaria en cuanto que la función de ordenación del ejercicio de la profesión que se atribuye a los colegios profesionales en el artículo 1.3, no se limita al «ejercicio libre» de la profesión, sino que se extiende «al ejercicio de la profesión» con independencia de que se realice por cuenta propia o ajena.

No puede pasarse por alto que la mención al «ejercicio libre» de la profesión como objeto de la función ordenadora de los colegios que, inicialmente figuraba en el proyecto de Ley de colegios profesionales, fuera eliminada durante la tramitación por entender que la función de los colegios profesionales era la ordenación deontológica y la reglamentación general de cualesquiera formas de ejercicio profesional, es decir, fuera en el ejercicio libre o en el prestado en régimen de dependencia administrativa, institucional o laboral.

Dudas sobre su adecuación al reparto competencial Estado-CCAA surgen también en relación al artículo 10.1 del Anteproyecto, cuando se dice: “El requisito de colegiación sólo es exigible si existe el colegio profesional correspondiente, que deberá facilitar, con finalidades informativas y estadísticas, al Registro la lista de los miembros colegiales”. Este inciso debería formularse de otra forma y evitarse establecer cualquier condición que determine la obligatoriedad o voluntariedad de la colegiación.

Asimismo, en relación a este artículo 1 debemos también recomendar la supresión del apartado: “Un solo colegio profesional podrá agrupar a las diferentes profesiones reguladas en la presente Ley”, ya que la decisión de crear uno o varios colegios dependerá únicamente de la voluntad de los colectivos profesionales implicados en tal decisión, y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales:

«1. La creación de Colegios Profesionales se hará mediante Ley a petición de los profesionales interesados y sin perjuicio de lo que se dice en el párrafo siguiente.

2. La fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución de los Colegios Profesionales de la misma profesión será promovida por los propios Colegios, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos Estatutos, y requerirá la aprobación por Decreto, previa audiencia de los demás Colegios afectados.

3. Dentro del ámbito territorial que venga señalado a cada Colegio no podrá constituirse otro de la misma profesión.

4. Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional existirá un Consejo General cuya naturaleza y funciones se precisan en el artículo 9.º.

5. No podrá otorgarse a un Colegio denominación coincidente o similar a la de otros anteriormente existentes o que no responda a la titulación poseída por sus componentes o sea susceptible de inducir a error en cuanto a quiénes sean los profesionales integrados en el Colegio.

6. Los Colegios adquirirán personalidad jurídica desde que, creados en la forma prevista en esta Ley, se constituyan sus órganos de gobierno.»

El inciso mencionado, además de prescindible —por ser una posibilidad prevista en la legislación estatal y, en último término, sujeta a la voluntad de los colectivos profesionales afectados—, plantea dudas sobre su adecuación competencial, ya que se trata de un aspecto muy relacionado con la definición del tipo o modelo de colegiación, cuestión que forma parte del núcleo de competencias atribuidas al Estado (STC 3/2013, de 17 de enero):

«Forma parte de la competencia estatal la definición, a partir del tipo de colegiación, de los modelos posibles de colegios profesionales pero, también, la determinación de las condiciones en que las Comunidades Autónomas pueden crear entidades corporativas de uno u otro tipo. (...)«Interesa recordar que la Constitución no impone en su art. 36 CE un único modelo de Colegio profesional. Bajo esta peculiar figura con rasgos asociativos y corporativos pueden englobarse por el legislador estatal, en ejercicio de su competencia para formalizar normas básicas de las Administraciones públicas ex art. 149.1.18 CE, situaciones bien distintas como son las que corresponden al ejercicio de funciones públicas en régimen de monopolio o de libre concurrencia en el mercado como profesión liberal, y con colegiación forzosa o libre. Del mismo modo, no tiene por qué erigirse, en los supuestos legales de colegiación voluntaria, en un requisito habilitante para el ejercicio profesional. Y es asimismo posible que los Colegios profesionales asuman la defensa de actividades que no configuren, en realidad, profesiones tituladas. Todos estos extremos pueden ser regulados libremente por el legislador estatal, desarrollando el art. 36, y con cobertura competencial en el art. 149.1.18, ambos de la Constitución»

En otro orden de cosas, en relación a la creación del registro se debe constatar que existe una contradicción en el apartado 2. Por un lado, parece querer crearse un sistema registral, sin embargo, en el inciso final ("Reglamentariamente habrán de fijarse la estructura, las funciones y el régimen de publicidad y funcionamiento del Registro) apuntaría más a un órgano registral.

La diferenciación entre sistema registral y órgano registral es esencial, tal y como expone la Comisión Jurídica Asesora en, entre otros, su dictamen 066/2003:

"21. Técnicamente, ha de diferenciarse (en toda la regulación proyectada o futura al respecto) el Registro, en tanto que función, sistema, institución, o cualquier otro concepto abstracto que se quiera utilizar, por un lado, y el órgano que lo gestione, por otro. A estos efectos, aunque tampoco supone problemas de validez, sugerimos un replanteamiento respecto a la coincidencia de denominación.
(...)

24. la Comisión sugiere que se distinga, claramente y con coherencia en todo el texto del Decreto, la creación del RVVA en sentido funcional, única obligada legalmente y la creación de un órgano (si es la opción que se mantiene) para su gestión. Insistimos, en este punto, que se reflexione

respecto a la coincidencia de denominaciones (resultaría clarificador hablar de Oficina o similar, del RVVA).

25. Como consecuencia se distinguiría el régimen jurídico de uno y otro. Así, el órgano tiene competencias (...), sede (...), funcionarios (...) etc. Mientras la función registral se desempeña bajo un encargado (...), en determinado soporte (...), con un ámbito (...), etc.”

Por tanto, parece que la idea inicial es que el Registro sea un sistema o función registral encomendada a la Dirección de Deportes. Sin embargo, el inciso final del artículo 10.2 genera dudas acerca de si el servicio promotor tiene clara la naturaleza jurídica que pretende para dicho Registro.

De querer crear un sistema registral debería corregirse el apartado 2 del artículo 10 para, en lugar de adscribir, situar dichas funciones dentro del ámbito funcional de la Escuela Vasca del Deporte. Además, en ningún caso procedería la *adscripción* a la Escuela Vasca del Deporte, ya que esta en sí no es una unidad administrativa, sino un servicio administrativo ofrecido por la Dirección de Deportes.

En consecuencia, debe insistirse en el cambio de redacción de dicho artículo para que no haya duda alguna de que el Registro se concibe como un sistema, es decir, en un sentido funcional y no como un órgano administrativo, que requeriría su correspondiente dotación de competencias, personal, etc...

⇒ **ARTÍCULO 11 (PRINCIPIOS Y DEBERES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL);
ARTÍCULO 13 (ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL);
ARTÍCULO 15 (EJERCICIO DE LAS PROFESIONES SIN AMPARO EN LA LEY).**

Los artículos 11, 13 y 15 versan sobre lo mismo: obligaciones a cumplir en el ejercicio profesional y, al mismo tiempo, están directamente relacionados con la disposición final primera (“Modificación del artículo 127 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco) y con la disposición final segunda (“Modificación del artículo 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco”). Estos artículos conforman el régimen sancionador en materia de acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

En relación a su contenido, se entiende oportuno realizar las siguientes observaciones:

Conceptualmente, desde un punto de vista jurídico, no son lo mismo principios y deberes. Dicha distinción también tiene consecuencias jurídicas distintas a la hora de aplicar unos y otros. Sin embargo, en el artículo 11, bajo el título de “Principios y deberes en el ejercicio profesional”, aparece un único listado. Entendemos que resultaría más oportuno tratar principios y deberes de forma separada, ya que los principios rectores inspiran y guían el ejercicio profesional, sin embargo, su incumplimiento no conlleva sanción jurídica alguna, a no ser que hayan inspirado la oportuna tipificación de conductas atentatorias contra dicho principio y, por tanto, se hayan

traducido en deberes jurídicos cuya vulneración conlleva la consiguiente sanción disciplinaria, administrativa o penal.

En el artículo 11 hay una mezcla de principios rectores que deben inspirar la actuación deportiva con deberes jurídicos extraídos de otros textos legales (por ejemplo, de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte del País Vasco), cuyo incumplimiento está expresamente tipificado y sancionado en dichas leyes. Entendemos innecesaria la reiteración de deberes jurídicos cuyo incumplimiento lleva ya aparejada sanción en otros textos legales. Esta Ley no debería ser el lugar para el recordatorio de los deberes jurídicos previstos ya en otros textos legales, sino el mecanismo para cubrir un vacío legal que— como se dice en la memoria— es necesario paliar para ordenar un sector desregularizado y proteger así la salud y la seguridad de los destinatarios de las actividades profesionales reguladas.

Junto con principios generales, se establecen algunas obligaciones más concretas que, sin embargo, no conllevan consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. De modo que, la falta de previsión de la consiguiente sanción en el Anteproyecto, hace que el objetivo inicial de erradicar el problema a través del establecimiento de una obligación concreta devenga estéril. Por tanto, la eficacia de prever dicha obligación en el texto legal resulta cuestionable. En suma, el listado contenido en el artículo 11 es más propio de un código deontológico a aprobar por los colegios profesionales o asociaciones profesionales correspondientes, que por la propia Ley.

Con ello queremos decir lo siguiente: por un lado, no resulta oportuno recoger a simple título enunciativo conductas tipificadas en otros textos legales; por otro, convendría distinguir claramente entre principios rectores y deberes jurídicos y, por último, la previsión de deberes jurídicos sin la consiguiente consecuencia jurídica en caso de incumplimiento resulta estéril y cuestiona incluso la propia necesidad de incluirlos en un texto legal, porque dichos deberes se convierten más bien en un recordatorio de tipo ético-profesional, más propios de la autonomía y capacidad ordenadora de las Colegios o Asociaciones profesionales.

Por tanto, deberían concretarse los principios rectores por un lado (esto podría hacerse en el artículo 11) y, por otro, los deberes jurídicos derivados o relacionados estrictamente con la regulación del ejercicio profesional (por ejemplo, inscripción en el correspondiente registro, deber de asegurar la actividad profesional...), no así las obligaciones generales que tienen que ver con la práctica deportiva y que ya están tipificadas en otros textos legales. Una vez concretadas las obligaciones jurídicas propias del acceso y ejercicio de la actividad profesional, este Anteproyecto es el lugar adecuado para determinar con claridad las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dichos deberes. Entendemos que se ha hecho correctamente en el caso de las siguientes obligaciones: cumplimiento de las cualificaciones profesionales para el acceso (artículo 15); cumplimiento de la obligación de colegiación (artículo 10), en los casos que sea obligatorio y aseguramiento de la actividad profesional (artículo 13). En estos tres casos se han concretado claramente deberes jurídicos propios de la materia regulada y se

han previsto las consiguientes consecuencias jurídicas (disposiciones finales primera y segunda).

En definitiva, el objeto de la Ley es confeccionar una regulación de mínimos con el fin de proteger unos sectores profesionales concretos y garantizar la calidad en la prestación de sus actividades profesionales para, en último término, proteger el derecho a la salud de los destinatarios. Para ello se regulan una serie de requisitos de acceso y ejercicio que el poder público ha entendido esenciales para la protección de la salud y seguridad de la ciudadanía. A tales efectos, y para contribuir a la consecución de dicho objetivo, el esfuerzo regulador debería aprovecharse para definir claramente los principios específicos de actuación y los deberes jurídicos, circunscribiéndolos a las obligaciones de acceso y ejercicio de estas profesiones. Traer al texto obligaciones generales ya previstas en otros textos legales relativas a la práctica deportiva resulta infructuoso de cara al objetivo inicial pretendido, por tanto, se anima al servicio promotor a que aproveche la oportunidad de configurar un elenco conciso de obligaciones específicas relativas al acceso y ejercicio de estos profesionales — correlativas a los requisitos esenciales con los que se pretende garantizar la calidad de la actuación profesional—, así como prever el régimen sancionador concreto que resultaría aplicable en caso de incumplimiento.

En un orden menor, debe indicarse que debería mejorarse la redacción del apartado c) ya que es redundante “presencia física directa”; entendemos que es suficiente con “presencia física”. Asimismo, el inciso “salvo en los supuestos previstos en esta Ley” no resulta aclaratorio, ya que en ninguna parte de la Ley se aclara cuáles son esos supuestos

En el apartado k) “hombre” debería ir en plural.

⇒ **ARTÍCULO 12. EJERCICIO A TRAVÉS DE SOCIEDADES PROFESIONALES.**

El artículo 12 no introduce ninguna especificidad en relación a la regulación de las actividades profesionales deportivas, sino que remite a la legislación general en cuanto a la posibilidad de que los profesionales se organicen en sociedades profesionales. La única previsión singular es la siguiente: “Las sociedades profesionales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la presencia física de las y los titulados correspondientes en el ejercicio de las profesiones del deporte, salvo en los supuestos previstos en esta Ley”.

No se entiende bien el objetivo de este artículo, ya que se trae al texto legal una figura societaria concreta, pudiendo estos profesionales adoptar, además de aquella, cualquier otra, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en la legislación vigente. Tal y como el propio servicio promotor señala, “Una Ley que regula unas determinadas profesiones debe ceñirse a articular aquellas disposiciones que sean propias y específicas de dichas profesiones quedando sometidas en todo lo restante al marco común del ejercicio profesional”.

La obligación en sí de adoptar una forma societaria tampoco está justificada, en tanto en cuanto la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha previsto recientemente otras formas de organización profesional, no necesariamente societarias, como es “el Emprendedor de Responsabilidad Limitada”.

Además, la única particularidad introducida (artículo 12.3) quedaría ya salvaguardada a lo largo del Anteproyecto, cuando para el ejercicio de la actividad profesional se exige la presencia física, siendo dicho requisito insoslayable en el ejercicio de la actividad deportivo-profesional regulada, independientemente de la forma organizativa adoptada para el ejercicio de la actividad profesional.

En suma, se recomienda la supresión del artículo 12.

⇒ **ARTÍCULO 14. OTROS REQUISITOS.**

Se somete a la consideración del servicio promotor la siguiente observación en relación al apartado 1 del artículo 14:

El artículo 14 hace suyo el acuerdo que en su día se adoptó en la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del Deporte de Cataluña, a efectos de reconocer cualesquiera otros requisitos previos al ejercicio profesional que pudieran existir en otros textos legales: «ambas partes coinciden en admitir la posible existencia de requisitos previos para el ejercicio de estas profesiones no explicitados en la Ley como ocurre, por ejemplo, en relación con la profesión de profesor o profesora de educación física que, para ejercerse en el ámbito público requiere la pertenencia a un Cuerpo estatal de profesores».

El acuerdo entre la Generalitat y el Estado tenía como objeto aclarar ciertas dudas que surgían sobre la posible inconstitucionalidad del Anteproyecto de Ley catalana, sin embargo, que la Comunidad Autónoma entre a regular ciertos requisitos de cualificación para el ejercicio de las actividades profesionales no supone dispensa tácita de cualesquiera otros que pudieran exigir conforme a otras normas.

En cualquier caso, el contenido del artículo 14 podría recolocarse dentro del artículo 2 relativo a “profesiones propias del deporte y ámbito funcional general”.

⇒ **ARTÍCULO 16. MARCO NORMATIVO COMÚN. LIBRE COMPETENCIA.**

En el artículo 16 hay una remisión a la normativa general en materia de ejercicio de profesiones y en materia de competencia. Se trata ambas de dos materias transversales directamente relacionadas con la materia regulada en el Anteproyecto.

En el apartado 1 se dispone que “Las profesiones reguladas en la presente Ley quedarán sujetas, en lo no establecido en la misma, por el marco normativo común sobre ejercicio de profesiones que aprueben las instituciones competentes”. Se establece, por tanto, una regla de supletoriedad, que conforme a lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones, debiera incluirse en las disposiciones finales.

Los otros dos apartados de este artículo se refieren al sometimiento de las actividades profesionales a la legislación vigente en materia de defensa de la competencia y, en particular, se conmina a las federaciones deportivas a la no realización de ninguna práctica restrictiva de la competencia, en especial, a evitar cualquier discriminación de las formaciones obtenidas en centros no federativos.

⇒ **ARTÍCULO 16.2 (APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA), ARTÍCULO 17 (RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES OBTENIDAS EN OTROS ESTADOS) Y ARTÍCULO 18 (PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES Y USUARIOS).**

Estos preceptos lo único que hacen son remisiones generales a la normativa específica aplicable (problema del que adolece el texto en líneas generales), por lo que entendemos que son innecesarios e ineficaces. Legislar para remitir a otros textos normativos es a todas luces innecesario y contrario a una buena técnica normativa, más cuando se hace mediante remisiones generales para introducir cuestiones genéricas y parciales sobre una materia específica que ya es objeto de regulación detallada.

Una adecuada técnica normativa debe evitar la proliferación y dispersión normativa y debe realizar un esfuerzo aglutinador, en aras a facilitar, tanto a los destinatarios de la norma como al operador público que luego debe desarrollarla o aplicarla, la comprensión del marco jurídico vigente en una materia concreta. Asimismo, evitando la dispersión se consigue una más adecuada y más eficaz aplicación de la norma.

Por todo ello, recomendamos al servicio promotor a que haga un esfuerzo por delimitar el objeto de la propuesta y que regule sobre aquellas cuestiones específicas de la materia y que supongan realmente un añadido, un plus innovador y necesario para mejorar la actividad de las profesiones reguladas y salvaguardar, en último término, la salud y seguridad de los destinatarios finales de dicha actividad profesional.

⇒ **DISPOSICIONES ADICIONALES.**

Se han previsto doce disposiciones adicionales. El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones establece el contenido a dar a las diferentes clases de disposiciones que

complementan el articulado. En tal sentido, las Disposiciones Adicionales incluirán por este orden los siguientes contenidos, en caso de haberlos:

- a) Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto articulado: territoriales, personales, económicos y procesales. Sólo se situarán aquí los regímenes especiales que tengan por objeto situaciones jurídicas diferentes de los regulados con carácter general en el texto articulado y, además, no tengan suficiente entidad para integrar el contenido de un artículo o de un capítulo de la parte dispositiva.
- b) Mandatos y actuaciones no dirigidas a la producción de normas jurídicas. Si se establecen, fijarán el plazo en el que debe cumplirse el mandato.
- c) Los preceptos residuales que no puedan colocarse en otro lugar de la norma. La calificación de un precepto como residual se utilizará como último recurso.

Las **disposiciones adicionales primera y segunda** conminan al Gobierno Vasco a arbitrar mecanismos de colaboración con las organizaciones colegiales correspondientes, las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas análogas del País Vasco para fomentar la práctica deportiva saludable y para promover las políticas de igualdad en el acceso y ejercicio a las profesiones deportivas objeto de esta regulación.

La **disposición adicional tercera** recoge el mandato de regular reglamentariamente la cualificación necesaria para el desarrollo de actividades de voluntariado (y análogas) relacionadas con el deporte, así como la actividad de entrenador en competiciones oficiales. Convendría corregir el título de la disposición, ya que en aquel únicamente se hace referencia a las actividades de voluntariado y análogas y, sin embargo, el contenido es más amplio y se refiere también a las actividades de entrenador.

La **disposición adicional cuarta** deja abierta la vía para una ulterior determinación de aquellas otras cualificaciones que servirían para el acceso al ejercicio profesional. Esa determinación se encomienda al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.

El contenido de esta disposición está directamente relacionado con lo previsto en la **disposición adicional séptima**, por lo que recomendamos al servicio promotor la reformulación de esta disposición junto con la 4ª.

En otro orden de cosas, se debe recordar que, en virtud de lo dispuesto en las Directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones, los mandatos de actuación o complemento normativo, es decir, los que llaman a una autoridad o norma para su desarrollo, deberían colocarse en las Disposiciones Finales. Esta regla de técnica normativa debería ser tenida en cuenta en relación a la remisión al consiguiente desarrollo reglamentario previsto en las disposiciones tercera, cuarta y séptima.

El contenido de las **disposiciones adicionales quinta y sexta** podría ser insertado dentro del articulado, ya que, tal y como se dispone en el ya citado Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, la calificación de un precepto como residual, a efectos de su incardinación en las disposiciones adicionales, debería ser excepcional. Por tanto, recomendamos al servicio promotor que estudie la posibilidad de situar el contenido de las disposiciones 5ª y 6ª dentro del articulado, ya que más que regímenes jurídicos especiales se trata de contenido propio del ámbito funcional de las profesiones y de contenidos mínimos de formación.

En aras a facilitar la lectura y comprensión del texto legal, el contenido de la **disposición adicional octava** también podría encontrar acomodo dentro del articulado, en concreto, dentro del artículo 2.

Otro tanto cabe señalar en relación a la **disposición adicional novena**, en la que se definen las competiciones deportivas de alto nivel. Dicha definición no responde a ninguno de los contenidos que según las reglas de técnica normativa debieran aparecer en las disposiciones adicionales. En otro orden de cosas no se entiende la llamada a un posterior desarrollo reglamentario a efectos de la adaptación de una definición concretada en la Ley. Podría encomendarse a la posterior potestad reglamentaria el desarrollo de lo previsto en la Ley, sin embargo, no puede modificarse vía reglamento una definición dada por Ley.

El título de la **disposición adicional décima** debería adecuarse más a su contenido, ya que este se refiere a las funciones en régimen de voluntariado realizadas en el ámbito de las actividades polideportivas con deportistas en edad escolar sin concretarse que se refiera a actividades de monitor (podría surgir la duda de si se refiere también a entrenadores voluntarios), por lo que, si la disposición se refiere exclusivamente a monitores debería preverse dicha circunstancia también en el grueso de la disposición.

Las **disposiciones adicionales undécima y duodécima** se pueden agrupar en una única disposición.

⇒ **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.**

La **Disposición Transitoria Primera** introduce un aparente régimen provisional para aquellos que vienen ejerciendo de forma continuada las actividades profesionales reguladas en el Anteproyecto.

Llama especialmente la atención el apartado 2. Este precepto está redactado de tal modo ("en el supuesto de que los departamentos del Gobierno Vasco... implanten los mecanismos y procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las correspondientes competencias profesionales... quedarán obligados a obtener tal acreditación en el plazo que se fije reglamentariamente") que no hay certeza (no se formula en forma de mandato al ejecutivo) de que vayan a establecerse los mecanismos de acreditación oportunos. La incertidumbre jurídica es considerable ya que, tal y como está redactada la disposición, da a entender que pudiera ser que los departamentos del Gobierno Vasco no implantasen

los mecanismos de reconocimiento oportunos, entonces, la consecuencia sería que aquellos que vienen ejerciendo de forma habitual su actividad profesional y que no tengan los títulos exigidos en la norma no podrían seguir con el desempeño profesional, en tanto en cuanto no se produzca un desarrollo reglamentario para su reconocimiento.

Es fundamental la concreción del régimen jurídico transitorio para aquellos que vienen ejerciendo con garantías de calidad el ejercicio profesional, no dejando espacios a la indeterminación e incertidumbre jurídica. Dicho régimen de transitoriedad debería asegurar, por un lado, el ejercicio de la actividad profesional hasta el momento en que adquieran eficacia los requisitos de cualificación exigidos en la norma y, por otro, debe contener un mandato inequívoco al Ejecutivo para prever los mecanismos de adaptación al nuevo régimen legal, de modo que en el momento de la entrada en vigor de la Ley los profesionales ejercientes vean garantizada la oportunidad de adecuarse a la norma.

Asimismo, recomendamos corregir la redacción del apartado primero de la disposición transitoria primera, ya que tal y como está redactada pudiera interpretarse que el momento de acreditarse los requisitos es el momento de entrada en vigor de la Ley. Sin embargo, entendemos que lo que realmente se ha querido decir es lo siguiente:

“1. Los requisitos de cualificación establecidos en la presente Ley no se exigirán a quienes acrediten de forma fehaciente, y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, que en el momento de la entrada en vigor de esta Ley desarrollaban las actividades profesionales reguladas de forma continuada o no esporádica”.

La **disposición transitoria segunda** contiene un régimen provisional para la exigibilidad de los requisitos de cualificación establecidos para la profesión de monitor/monitora, de entrenador/entrenadora y de director/directora en relación a una modalidad o disciplina deportiva; de tal modo que las cualificaciones previstas en la Ley serán exigibles conforme se vayan implantando las formaciones oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las correspondientes modalidades deportivas. Es decir, tal y como está redactada la disposición, parece que se condiciona la entrada en vigor de la exigibilidad de cualquiera de las cualificaciones previstas para el ejercicio de dichas profesiones al hecho de que se implanten las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior relativas a las correspondientes modalidades o disciplinas deportivas.

Esta previsión supone, por tanto, una excepción a la entrada en vigor de la exigibilidad de las cualificaciones profesionales previstas en la disposición final sexta (párrafo segundo), que dispone que las cualificaciones profesionales serán exigibles a partir del 1 de enero de 2018, de modo que pudiera posponerse más allá de esa fecha la entrada en vigor de la exigibilidad de las cualificaciones en relación a las profesiones de monitor/monitora, entrenador/entrenadora y director/directora de una modalidad o disciplina deportiva. Es más, pudiera darse el caso de que si en

una modalidad o disciplina deportiva concreta no se llegara a implantar nunca una formación oficial de Técnico Deportivo o de Técnico Deportivo Superior de la modalidad, no llegaría a ser exigible nunca la cualificación preceptuada en la Ley, suponiendo una excepción injustificada a la misma. Por todo ello, recomendamos al servicio promotor que reformule este primer apartado de la disposición transitoria segunda. Una redacción alternativa podría ser algo así: "Las titulaciones oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las correspondientes modalidades deportivas serán exigibles para el ejercicio de la profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, de Entrenador o Entrenadora y de Director Deportivo o Directora Deportiva de las correspondientes modalidades o disciplinas deportivas a medida que vayan implantándose dichas formaciones oficiales".

⇒ **DISPOSICIÓN DEROGATORIA.**

Se prevé una única disposición derogatoria genérica ("Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se pongan a lo dispuesto en la presente Ley"). Esta redacción es contraria a lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993 por el que se aprueban las directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones, que conmina a no establecer una cláusula genérica de derogación:

«Las Disposiciones Derogatorias que consistirán en una relación exhaustiva de todas las disposiciones o enunciados normativos derogados. La lista se cerrará con una cláusula de salvaguardia que acotará la materia objeto de derogación del tenor siguiente: "... y cualquier otra disposición en materia de... que se oponga a este/a...", pero nunca se establecerá sólo esta cláusula genérica».

En cualquier caso, dado que —tal como se indica en la Memoria justificativa— esta propuesta supone una regulación *ex novo*, recomendamos al servicio promotor a que analice si realmente es necesaria la inclusión de esta disposición derogatoria.

⇒ **DISPOSICIÓN FINAL.**

Las **disposiciones finales primera y segunda** modifican la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, para introducir dos infracciones administrativas nuevas relacionadas con el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en este Anteproyecto.

En la **disposición final tercera** se habilita al Gobierno Vasco para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del Anteproyecto.

Entendemos que dicha disposición responde a una previsión, que si bien puede sobrentenderse por venir referida con carácter general en otra norma como el artículo 29 del Estatuto de Autonomía y el 16 de la Ley de Gobierno, viene siendo de referencia común en la normativa comparada. No obstante, procede señalar que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno ha

venido insistiendo en que se suprima, por tratarse de una previsión legal que reitera lo que el ordenamiento ya prevé (Dictamen nº 107/2003):

“(...) recoge una cláusula habitual de habilitación para el desarrollo reglamentario que la Comisión viene insistiendo en que se suprima, por cuanto la potestad reglamentaria viene ya atribuida al Consejo de Gobierno (artículos 29 EAPV y 16 de la Ley de Gobierno). Caben previsiones legales referidas a modular, impedir o imponer un determinado desarrollo, pero no para reiterar lo que el ordenamiento estatutario ya prevé.”

Las **disposiciones finales cuarta y quinta** contienen dos habilitaciones al Departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia deportiva para la definición de conceptos y para la delimitación de las atribuciones y ámbitos materiales de las profesiones, así como para la determinación de los requisitos y del procedimiento de reconocimiento de la formación específica.

Los miembros del Gobierno tienen conferida la facultad de dictar disposiciones administrativas generales en materias de su Departamento (artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio), pudiendo, dentro de la denominada potestad de autoorganización, sin necesidad de habilitación normativa expresa, regular cuestiones con fines puramente organizativos o relativas a relaciones de sujeción especial. Asimismo, la jurisprudencia ha venido también reconociendo la potestad reglamentaria de los miembros del Gobierno para el desarrollo de las Leyes, siempre que exista la consiguiente habilitación legal para ello:

STC 185/1995, de 14 de diciembre: «Tampoco puede entenderse que el precepto ahora contemplado vulnere lo dispuesto por el artículo 97 CE. La atribución genérica de la potestad reglamentaria convierte al Gobierno en titular originario de la misma, pero no prohíbe que una ley pueda otorgar a los Ministros el ejercicio de esta potestad con carácter derivado o les habilite para dictar disposiciones reglamentarias concretas, acotando y ordenando su ejercicio. Y esto es cabalmente lo que hace el artículo 26.1 a) LTPP que se limita a atribuir a los Ministros que puedan resultar afectados, en cuanto titulares de los respectivos Departamentos ministeriales, un poder reglamentario derivado, resultado de una habilitación legal específica, para regular una materia concreta y determinada, cual es en este caso la fijación y modificación de la cuantía de los precios públicos. Las tachas de inconstitucionalidad podrían derivar, en su caso, de una hipotética vulneración del principio de legalidad si la ley habilitante no precisa suficientemente el alcance del reglamento, pero ninguna objeción puede formularse a este precepto desde el punto de vista del artículo 97 CE.»

El contenido de las disposiciones finales cuarta y quinta se insertaría dentro de esta posibilidad.

La **disposición final sexta** establece el plazo de entrada en vigor de la Ley, decidiéndose que la misma entre en vigor desde su publicación en el BOPV, salvo lo concerniente a las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas, las cuales serán exigibles a partir del 1 de enero de 2018.

III.- TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

El presente Anteproyecto de Ley ha de adecuarse en cuanto a su tramitación a los preceptos de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Dicha norma prevé que una vez redactado el Anteproyecto y contando con la aprobación del órgano que haya dictado la orden de iniciación, habrán de evacuarse los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan. A tales efectos, señalar que por Resolución de 23 de enero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, publicada en el BOPV nº 21, de 2 de febrero de 2015, se ha sometido a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

Asimismo, se ha remitido el Anteproyecto a las siguientes entidades: Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia, Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa, Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa, Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime, Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Dirección de Salud Pública y Adicciones, Dirección de Centros Escolares, Agencia Vasca de Protección de Datos y al resto de Departamentos del Gobierno Vasco. De igual modo, se ha enviado por correo electrónico el Anteproyecto a las Federaciones Vascas. Todo ello con el fin de dar cumplimiento a los artículos 8 y 9 de la antes citada Ley 8/2003, de 22 de diciembre.

Se han solicitado informes preceptivos a los siguientes órganos o entidades:

- Emakunde (artículos 19 y 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres).
- Viceconsejería de Política Lingüística (artículo 3 del Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general).
- Consejo Vasco del Deporte (artículo 4.b) del Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el Consejo Vasco del Deporte).
- Autoridad Vasca de la Competencia (artículo 3.5 de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia).

Asimismo, en el momento procedimental oportuno, se prevé solicitar informe al Consejo Económico y Social (artículo 3.1.a de la Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea).

Una vez ultimadas las consultas e informes anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, se deberá incorporar al expediente una memoria sucinta de todo el procedimiento, así como una memoria económica. A tales efectos, debemos señalar que la memoria económica es un documento fundamental en la justificación del proyecto que se presenta, así lo han reiterado tanto el Consejo de Estado

como la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. En este sentido, conviene recordar lo dicho por ésta en su Dictamen 43/1999:

“Es conveniente señalar aquí la importancia que el Consejo de Estado viene dando a este trámite dentro del procedimiento administrativo de elaboración de reglamentos. Dicho órgano, considera dicho trámite como elemental garantía de la exclusión de la arbitrariedad en el ejercicio del poder normativo y, además, lo ve como cauce para el cumplimiento del artículo 31.2 CE, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos y llama a la eficacia y economía en la programación y ejecución de dicho gasto”

En similares términos, corroborando la importancia de la memoria económica, es doctrina del Consejo de Estado la siguiente (Dictamen de 5 de diciembre de 1996, expediente nº 4.078/96):

“El artículo 31.2 de la Constitución, que establece los principios de economía y eficacia en el gasto público no permite aprobar un Reglamento sin tener constancia suficiente de los medios económicos previstos para garantizar su aplicación práctica; lo contrario sería equivalente a un proceder arbitrario proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, ya que es jurídicamente infundado y por tanto caprichoso aprobar un Reglamento que no se va a poder aplicar en la práctica, al no haber medios económicos suficientes para poner en funcionamiento las disposiciones que contiene la norma”.

Si bien ambos dictámenes se refieren al proceso de elaboración de reglamentos son igualmente aplicables al proceso de elaboración de las leyes y ello se desprende del ya citado artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, así como de la propia lógica e importancia de aprobar leyes que vayan acompañadas de los documentos y análisis necesarios que acrediten la disponibilidad de medios económicos suficientes para poder aplicarlas. La justificación de la existencia de los recursos económicos necesarios para la aplicación de la ley es determinante de la eficacia y efectividad de la propia norma.

Una vez completado el expediente con dichas memorias, se deberán recabar los informes preceptivos y los dictámenes de los siguientes órganos:

- De conformidad a los artículos 26.1 y 27.1 de la Ley 14/1994, de 13 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Anteproyectos de Ley deberán ser objeto de fiscalización mediante emisión del correspondiente informe de control preceptivo. Dicho control se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a su consideración por el Consejo de Gobierno.
- En virtud de lo previsto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se impone con carácter preceptivo la emisión de dictamen por la misma, dado que así se señala para “los Anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, excepto los siguientes, que sólo se

someten a su informe si lo requiere la titular o el titular del departamento competente en materia de hacienda:

- Los que establecen la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, concesión de créditos adicionales, variación de las condiciones de los créditos de compromiso y liquidación de los Presupuestos.”

Después, el Anteproyecto será aprobado por el órgano competente y se someterá a la toma en consideración del Gobierno Vasco, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su redacción final y a las actuaciones que, en su caso, hayan de seguirse en su tramitación ulterior hasta dicha aprobación. Finalmente, una vez aprobado se remitirá al Parlamento para su tramitación.

Este es el informe que se emite y se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho.

ASESORÍA JURÍDICA
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios

**AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA, EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAN KIROL ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA
JARDUTEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI
DAGOKIONA****I. SARRERA.**

Txosten hau egin da abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, 7.3. artikuluan agintzen duena betetzeko eta aintzat hartuta zer arautzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoak, 12.2.e) artikuluan. Txosten honen helburu edo xedea da lege-aurreproiektuaren funts objektiboa aztertzea, haren edukia legera eta zuzenbidera egokitzen den zaintzea eta Administrazio honetan indarrean dauden araugintza-teknikako irizpideak betetzen dituen ikustea.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2014ko azaroaren 4an emandako Aginduaren bitartez eman zitzaion hasiera Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektua egiteko prozedurari.

Geroago, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko zerbitzu teknikoek aurreproiektuaren testua egin ondoren, orartu egin zen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2014ko azaroaren 24an emandako agindu bidez.

Aurrekoekin batera, honako hauek bidali zaizkio Aholkularitza Juridiko honi azter ditzan: aurreproiektuaren behin betiko bertsioa, bai euskaraz bai gaztelaniaz, proposamenaren azalpen-memoria, eta generoaren arabera eragin-txostena.

II.- AURREKARIAK.

Euskadiko Kirolarena den ekainaren 11ko 14/1998 Legeak botere publikoei agintzen zien kirolarekin zerikusia duten jarduera batzuk egiteko behar diren eskumenak arautzeko (62. artikulua):

“Kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu, sustapen eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute”.

Bestalde, 2003-2007ko Kirolaren Euskal Planak argi utzi zuen sektorea arautu behar zela, eragin zuzena zeukalako kirol-jardunean parte hartzen zutenen osasunaren babesean. Hartan, honako azterketa hau egiten zen:

«Euskadiko kirolgintza oso korapilatsua da prestakuntzaz eta enpleguaz mintzo bagara, hainbat arrazoi direla medio:

- Alde batetik, lan merkatuan kirol-tituludun ofizial eta ez-ofizial asko sartu dira, sektore horren lan arauketa egin gabe dago eta hori beharrezkoa da, eta horrek eraginik, langabezia, neurriz gainera kualifikazioak, neurriz beheko kualifikazioak eta abar gertatu dira.
- Bestetik, lan berri asko sortu dira, eta horrek desoreka eragin du eskatutako kualifikazioaren eta prestakuntzaren bidez eskuratzen denaren artean. Horrek eraginik, enplegu-zailtasunak sortu dira, egungo prestakuntza ez baita egokia egungo beharrak asetzeko.
- Horri erantsi behar zaio sektorearen espezializazioa eta profesionalizatzea, eta, horretarako, langile gaituak eta espezializatuak behar dira.
- Aurreko joerak direla eta, argi dago ez dela egokia egungo prestakuntza-sistema, ez baititu dauden beharrak asetzen, eta enpleguari buruzko arazoak dakartza sektore honetan. Gai hori Euskadiko Administrazio Publikoetako kezkarik nabarmenetakoa da gaur egun. Beraz, komeniko litzateke lanbidea arautu eta sektore honetako langileen lanbide-eskumenak eta lan-esparruak argitzea.»

Arau-proposamen horren aurrekari moduan, Eusko Legebiltzarrak 2012ko otsailaren 9ko osoko bilkuran onartutako legez besteko proposamena (8/2012) ere aipa daiteke:

«Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio kiroleko lanbideak arautzeko lege-proiektu bat aurkez dezala, Autonomia Estatutuan eta Lurralde Historikoen Legean aurreikusitako eskumen-esparruaren barruan eta inplikaturako eragile guztiekin lankidetzan arituz, halatan non zehaztu daitezen kiroleko lanbideak, kiroleko profesionalen prestakuntza eta trebakuntza, kirol-lanbide bakoitzaren eskumen profesionalak eta lan-merkatuan duten jardura-eremua, era horretara bermatu ahal izateko pertsonen segurtasuna eta osasuna».

III.- ESKUMEN- ETA ARAU-ESPARRUA.

1.- LEGE-AURREPROIEKTUAREN XEDEA.

Aztertutako lege-aurreproiektuaren xedea Euskal Autonomia Erkidegoko kirol arloko lanbide jakin batzuetan sartzea eta jardutea arautzea da; hau da, kirolarekin zerikusia duten lanbide batzuen araubide juridikoa zehaztea, lanbide-jardura horien definizio eta mugatze funtzionalaren bidez, eta lanbide horietan sartzeko baldintzak eta eskumenak ezartzearen bidez.

Aritze askeko lanbide-jardura asko biltzen dituen lanbide-sektore bati dagokio proposatutako arauketaren aurretiko egoera. Aurreproiektuak ez die erreparatzen dauden aukera guztiei, hertsiki profesionalak direnei baizik, baldin eta, gainera, zerikusi zuzena badute kirol-jardueretan parte

“1.- Zuzendaritza-, programazio-, planifikazio-, koordinazio-, kontrol- eta ikuskapen-funtzioak eta eskola-kirolaren arloko beste antzeko funtzio batzuk betetzeko, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatuaren titulu ofiziala edo behar den Graduak titulua izan beharko da.

2.- Kirol-zuzendaritzaren jarduera horiek kirol-modalitate bakar bati begira egiten badira, kirol-modalitate edo espezialitate horretako Kiroleko Goi Teknikariaren titulua edo antzekoren bat izanez gero egin ahal izango dira jarduera horiek.

3.- Ikastetxeetan eskola-ordutegitik at programatzen diren eskola-kirolaren zuzendaritza-jardueretarako, Maisu/Maistraren titulua, Gorputz Hezkuntza espezialitatean, edo titulu baliokideren bat ere izango da baliagarri.

4.- Entrenamenduak, lehiaketak eta eskola-kirolaren programak integratzen dituzten gainontzeko jarduerak aurrera eramateko prozesuan lanean ari diren pertsonentzat prestakuntza-eskaintzak sustatuko ditu Kirolaren Euskal Eskolak, lurralde historikoetako foru erakundeekin ados jarrita.

5.- Kirolaren arloan eskuduntzak dituen Eusko Jaurlaritzako Sailaren titularraren aginduaren bidez prestakuntza-eskaintza berrien ondorioz onartuko diren titulazio berrietara egokitu ahal izango dira dekretu horretan exijitzen diren tituluak.

6.- Kirolaren berezko lanbideetan aritzeko titulazio ofizialak izateko exijentziaren, lege baten bidez araututakoaren, kalerik gabe interpretatuko dira aipatu diren titulazioen exijentziak”.

2. - LANBIDE-JARDUEREN ARAUKETA.

Konstituzioaren testuan, 36. artikuluan agertzen da lanbideak arautzeari buruzko aipamen bakarra: “Legeak lanbide-elkargoen erregimen juridikoaren berezitasunak eta tituludun lanbideen jarduna arautuko ditu”. Esan daiteke artikulua horrek ez duela Estatuaren aldeko berariazko eskumen-titulurik, eta lege-erreserbara jo baino ez duela egiten, lanbide tituludunetan aritzea arautzeko.

Bestalde, Autonomia Estatutuaren 10.22 artikulua eskumen eksklusiboa ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoari lanbide-elkargoei eta lanbide tituludunetan aritzeari dagokienez, bazter utzi gabe Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatua.

Hala ere, proposamena txertatuta dagoen arau-esparruaren azterketan aurrera egin baino lehen, araututako xedearen zer-makoa aztertu behar dugu. Aurreproiektuaren zioen azalpenen adierazten den bezala, araututako lanbideak ez dira “lanbide tituludunak”; aitzitik, “lanbide arautuak” lirateke.

“Lanbide tituluduna” eta “lanbide arautua” bereiztea funtsezkoa da legegile autonomikoak gai honetan duen eskumena justifikatzeko.

Konstituzio Auzitegiak aukera izan du zenbaitetan bere iritzia emateko lehen aipatutako EK-ren 36. artikuluan jasotako "lanbide tituludun" kontzeptuaz, eta honako hau dio lanbide horiei buruz: "...haietan aritzeko tituluak izan behar dira, hau da, goi-mailako ikasketak, eta ikasketa horiek ziurtagiri edo lizentzia egokia lortuz berretsi behar dira" (KA-ren 42/1986 Epaia). Era berean, auzitegi horrek honako hau dio: "...jarduera jakin batzuetan aritzeko baldintza titulu akademiko jakin batzuk edukitzea denean daude lanbide tituludun horiek" (KA-ren 122/1989 Epaia). Hortaz, "... lan-jarduera, ofizio edo, zentzu zabalean, lanbide guztiak ez dira lanbide tituludun" (KA-ren 122/1989 Epaia).

Era berean, Konstituzio Auzitegiak, aipatu 122/1989 epai horretan, lanbide tituludunak arautzeari buruzko 36. artikulua EK-ren 149.1.30 artikuluan onartutako Estatuaren aldeko eskumen-tituluarekin elazionatzen du. Artikulu horrek eskumen eskusiboa ematen dio Estatuari arlo honetan: "Titulu akademikoak eta lanbide-tituluak eskuratu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzea, eta Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak ematea, botere publikoek alor horretan dituzten betebeharrak betetzen direla bermatzeko". Hartara, KA-k honako hau dio: "legegileari dagokio zehaztea, interes publikoaren eskakizunak eta gizarte-bizitzak sorturiko datuak aintzat hartuz, noiz pasa behar duen lanbide batek lanbide tituludun izatera. Eta zalantzarik ez dago ezen, Konstituzioko 149.1.30 artikulua testuari jarraikiz, estatuko legegilea dela eskumen eskusibo hori duena".

Estatuak lanbide tituludunen arloan duen eskumena Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak zedarritu du zenbait epairen bidez, eta haien artean honako hauek dira azpimarragarriak: KA-ren 82/1986 Epaia, KA-ren 122/1989 epai aipatua, KA-ren 83/1984 Epaia eta KA-ren 154/2005 Epai berriagoa, besteak beste.

Hala ere, lege-aurreproiektuari gehitutako memorian eta proposatutako lege-testuko zioen azalpenean justifikatzen den bezala, aztertutako lege-arauaren helburua ez da "lanbide tituludunak" arautzea, eta "titulurik gabeko lanbide arautuak" direlakoan esparruan geundeko. Hau da, lanbide tituludunak "lanbide arautu" kontzeptuaren azpimota bat lirатеke; zehazki, jarduera batzuk dira, zeinetan aritzeko nahitaezkoa baita titulu akademiko jakin bat izatea (KA-ren 122/1989 Epaia): "... jarduera jakin batzuetan aritzeko baldintza titulu akademiko jakin batzuk edukitzea denean daude lanbide tituludun horiek"). Lanbide arautuak, berriz, hauek lirатеke: "...lanbide-jarduera edo -jardueren multzoa, zeinetan sartzeko, jarduteko edo jardun-motetako batean aritzeko nahitaezkoa baita, zuzenean edo zeharka, lege-, erregelamendu- edo administrazio-xedapenak betez, lanbide-kualifikazio jakin batzuk izatea; bereziki, jardun-mota izango da lege-, erregelamendu- edo administrazio-xedapenen bidez lanbide-kualifikazio jakin bat duenarentzat mugatutako lanbide-titulu bat erabiltzea" (lanbide-kualifikazioak aintzatesteari buruzko irailaren 7ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2005/36/EE Zuzentarauaren 3.1.a) artikulua).

Hortaz, "lanbide arautuak" —Tomás González Cueto-ren hitzetan— honako hauek lirateke: "lanbide-gaitasuna arau baten bidez zehaztuta dutenak; hau da *ex lege* dago eskuduntza-multzo bat, profesional batek eskusiboki gara dezakeena, baldin eta titulu akademiko baten bermea badu, edo baldintza batzuk eta gaitasun-proba bat gainditu izanarena, beraiei lotuta lanbide batean sartzeko administrazio-baimena edo -emakida dutelako"⁷. Lanbide arautuak, bestalde, tituludunak edo orokorrak/titulurik gabekoak izan daitezke; eta aurrenekoak —egile beraren arabera— hauek dira: "EK-ren 36. artikuluko lege-erreserbak eragiten die, eta beren aurreikuspenak edo arauketak berekin dakar lanbide-eskumena funtsean goi-mailako irakaskuntzako titulu akademiko jakin baten jabe direnei esleitzea"; besteetan (lanbide arautu orokorrak edo titulurik gabekoak), berriz, "lanbide-eskumenaren elementu edo titulu erabakigarria ez da titulu akademiko bat, baina, baldintza batzuk bete ondoren, besteak beste, jar daitekeen gaitasun-proba bat gainditzea, ematen den administrazio-lizentzia edo -baimen bat. Horrelakoetan, ez du titulu akademikoak erabakitzen lanbidearen zer-nolakoa, administrazio-lizentziak baizik, eta, horregatik, lanbide horiek, arautuak izan arren, ez dira tituludunak, eta ez dute eraginik hezkuntza-sisteman eta, beraz, goi-mailako hezkuntzako titulazioen antolaketan eta plangintzan.»

Bada, lege-aurreproiektuan mugatzen diren kiroleko lanbideak ez daude *per se* lotuta goi-mailako hezkuntza-titulu bat edukitzeari, baizik eta kasuan kasuko lanbide-kualifikazioen egiaztapenari, eta kualifikazio horiek zenbait mailatako titulu akademikoen bidez egiaztatu ahal izango dira, bai eta unean-unean indarrean dagoen ordenamendutik ondorioztatzen diren tituluen bidez ere; adibidez, profesionaltasun-ziurtagiri ofizialen bidez.

Lege-aurreproiektuaren xedea lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko behar diren baldintzak arautzea da; hau da, ziurtatu nahi da profesionalek ezagutza eta gaitasun jakin batzuk dituztela, ezinbestekotzat jotzen direlako lanbidean lan-jardueraren hartzailerik direnen osasuna eta segurtasuna babesteko adina kalitaterekin ariko direla. Gaitasun eta ezagutza horiek titulu akademiko ofizial jakin batzuen bidez egiaztatu ahal izango dira, baina bai eta unean-unean indarrean dagoen ordenamenduaren ondoriozko profesionaltasun-ziurtagirien bidez ere.

Lanbidean aritzeko baldintzetako bat titulazio jakin batzuk eskatzea izatea ez da eragozpen pentsatzeko lanbide tituludunen aurrean gaudela, soil-soilik behar diren ezagutza-maila jakin batzuk aurrez egiaztatzeko beharraren aurrean baizik, ezagutza horiek lortutzat jotzen baitira titulu horiek izanda, nahiz eta beste bitarteko batzuk erabiliz ere egiaztatu ahal izan.

Horregatik guztiagatik, ondoriozta daiteke aurreproiektuan jasotako kirol-lanbideak ez direla "lanbide tituludunak". Hala ere, zehaztapen bat egin behar da haietako bati buruz, Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari

⁷ Tomás González Cueto. "El concepto de «profesión regulada» a que se refiere el documento «La organización de las enseñanzas universitarias en España»" txostena. 2007ko apirilaren 11. Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa.

buruz. Lanbide-jarduera hori lanbide tituluduna da, eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan dago araututa

Aurreproiektuak proposatutakoa Estatuko araudia gutxieneko eduki batzuekin osatzea da, ezinbestekotzat jotzen direlako kirol-jardueretan parte hartzen dutenen osasuna babestea bermatzeko. Horretarako, ekimenaren zerbitzu sustatzaileak aukera hori hauen bidez justifikatzen du: EK-ren 43. artikuluan jasotako osasuna babesteko agindua; eta Autonomia Estatutuaren 10.22 artikuluan EAERI esleitutako eskumen-titulua (eskumen eksklusiboa lanbide tituludunen jardun arloan).

Justifikazio-memorian esaten da gaia arautzen duen indarreko hezkuntza-legedia errespetatzen duela aurreproiektuak, eta Gorpuz Hezkuntzako irakasle-lanbidean aritzeko funtsezkoak diren gutxieneko baldintza jakin batzuk arautu nahi direla, gaiari buruzko oinarriko araudia osatuko luketelako, ikasleen osasun eta segurtasunaren onerako. Argudiatzen da inola ere ez dela aldatzen irakasle-lanbidearen legeko taxuera, eta ez dela aldaketarik egiten eragina duenik lanbide horretan sartzeko eskatutako titulazio akademikoaren edukietan, Estatuak baino ez baitu horretarako eskumena EK-ren 149.1.30 artikuluan jasotako eskumen-titulua betez ("Titulu akademikoak eta profesionalak lortzeko, emateko eta homologatzeko baldintzak arautzea, eta Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarriko arauak, botere publikoek gai honetan dituzten betebeharrak betetzen dituztela bermatzearren").

Hala ere, egia bada ere ez direla aldatzen irakasle izateko titulazio akademikoaren edukiak, ezin gara ados egon irakasle-lanbidearen legeko taxueran eraginik izango ez delako baieztapenarekin. Lege-aurreproiektuaren 3. artikuluan edukia aztertzen bada, lanbidean sartzeara arautzen ari dela ondorioztatzen da, bertan sarrera horretarako lehentasunez titulu jakin bat dutenak balioesteko eskatzen zaiolako hezkuntza-administrazioari.

Hitz batean, funtsezkoa da azterketa bat egitea eskumenen banaketaren ikuspuntutik hezkuntza arloan. Alde horretatik, esan daiteke Estatuak esleituta dauzkala eskumen eksklusiboak hezkuntza arloan; zehazki, hauek dagozkio (KA-ren 48/1985 Epaia):

- hezkuntza-sistemaren erabateko antolamendua,
- gutxieneko irakaskuntzak ezartzea,
- titulu akademikoak eta lanbide-tituluak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzea,
- Konstituzioan hezkuntzarako funtsezko eskubidea garatzen den artikulua, 27.a, garatzeko oinarriko arauak ezartzea, botere publikoen betebeharrak, eskubideen erabileran espahiar guztien berdintasuna eta konstituzio-betebeharren garapena betetzen direla bermatzeko, eta
- hezkuntza-sistemaren goi-mailako ikuskaritza, legeak betetzen direla bermatzeko.

Gainera, administrazio publikoen araubide juridikoaren eta funtzionarioen estatutu-araubidearen oinarriak ezartzea egokituko litzaioke —EK-ren 149.1.18 artikulua eskumen-tituluan oinarrituta—. Hartara, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren seigarren xedapen gehigarriak dioen bezala, “uztailaren 28ko 23/1988 Legeak aldatutako Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legean jasotakoaz gain, Lege honetan eta garatzen diren araudian sarrerarako, irakasleen kidegoen arteko mugikortasunerako, kidegoak eta eskalak berrantolatze, eta Estatu mailako lekualdaketa-lehiaketen bidez plazak betetzeko araututakoak dira funtzionario irakasle publikoen estatutu-erregimenaren oinarriak. Irakaskuntzako funtzio publikoaren oinarritzko esparru komuna bermatzeko beharrezkoak diren oinarritzko alderdietan, Gobernuak oinarri horiek garatuko ditu araudiari jarraikiz”. Era berean, xedapen horrek berak honela dio: “Autonomia-erkidegoek beren eskumenen esparruan antolatuko dute irakaskuntzako funtzio publikoa. Nolanahi ere, aurreko paragrafoan adierazitako oinarritzko araukerrespetatuko dituzte”.

Aurreproiektuaren 3. artikulua indarreko hezkuntza-legedira igortzen du, eta egiazki 2. eta 3. idatzi-zatietan sartu nahi du osagarri bat, azterketaren xede izan behar duena. Aurreproiektuaren 3.2 artikulua irakurrita —Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari buruzkoa—, ondorioztatzen da irakaskuntza publikoan sartzeko baldintza bat ezartzen dela (espezialitate batean sartzeko lehentasunezko irizpide moduan bada ere).

Bada, horri dagokionez, esan behar da irakaskuntza-kidegoen egitura eta haietan sartzeko baldintzak Estatuko oinarritzko legegintza direla eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan daudela araututa (93. artikulua eta hurrengoak; zazpigarren xedapen gehigarria; eta bederatzigarren xedapen gehigarria). Zehazki, irakaskuntza publikoko espezialitateak eta irakaskuntzako funtzionario-kidegoetan sartzeko baldintzak Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarrian eta bederatzigarren xedapen gehigarrian daude araututa, eta oinarritzkoak dira.

Hezkuntzari buruzko Lege Organikoa, besteak beste, 1834/2008 Errege Dekretuak garatu du (azaroaren 8koa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta erregimen berezko irakaskuntzetan irakasteko prestakuntza-baldintzak ezartzen dituen eta Bigarren Hezkuntzako irakaskuntza-kidegoen espezialitateak zehazten dituen). Errege-dekretu horrek derrigorrezko bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta lanbide-heziketako irakaskuntzaren ardura duten funtzionarioen kidegoetako irakaskuntza-espezialitateak zehazten ditu, eta, besteak beste, Gorputz Hezkuntzako espezialitatea sortzen du, irakaskuntza horretan aritzeko prestakuntza-baldintzak jasotzeaz gain.

Haur Hezkuntzarako eta Lehen Hezkuntzarako, 132/2010 Errege Dekretura jo behar da (otsailaren 12koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeek bete behar dituzten derrigorrezko baldintzak ezartzen dituen). Errege-dekretu horren 8. eta 12. artikuluetan, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan irakasten duten maisu-maistrek titulazio akademikoari

dagokionez bete beharreko baldintzak jasotzen dira. Arautze hori oinarritzko araua da.

Era berean, ikastetxe pribatuetan irakasle izateko ere oinarritzko estatu-arauak daude, zeinetan irakaskuntzan sartzeko baldintzak eta espezialitate bakoitzerako eskatutako tituluak biltzen baitira. Zehazki, 860/2010 Errege Dekretuak (uztailaren 2koa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko irakaskuntzan jardun ahal izateko ikastetxe pribatuetako irakasleen hasierako prestakuntza-baldintzak arautzen dituena) esaten du honako titulazio hauek eskatzen direla Gorputz Hezkuntza irakasteko:

- Lizentziaduna Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan, Gorputz Hezkuntza.
- Medikuntzan lizentziaduna, Kirol Medikuntzako Espezialista diploma izatea egiaztatuz.
- Edozein lizentziatu-, ingeniari-, arkitekto- edo graduatu-titulazio, eta ikasgaiaren curriculum emateko irakaskuntza-esperientzia edo goi-mailako prestakuntza egiaztatzea.

Bestalde, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasleen kualifikazio- eta prestakuntza-baldintzak 476/2013 Errege Dekretuak arautu zituen (ekainaren 21ekoa, haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxe pribatuetako irakasleek izan behar dituzten kualifikazio- eta prestakuntza-baldintzak arautzen dituena). Errege-dekretu hori ere oinarritzko araua da. Errege-dekretu horretan, honako hau eskatzen da (5. eta 7. artikulua) ikastetxe pribatuetan Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan, zehazki Gorputz Hezkuntzako espezialitatean, irakasle aritzeko:

«5. artikulua. Musikako, Gorputz Hezkuntzako eta Atzerriko Hizkuntzako (ingelesa, frantsesa, alemana) irakaskuntzak Lehen Hezkuntzan.

1. Lehen Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzako maisu- edo maistra-lanbide arautuan aritzeko gaitzen duen Graduatu-titulua duten maisu-maistrek emango dituzte Musikako, Gorputz Hezkuntzako eta Atzerriko Hizkuntzako (ingelesa, frantsesa, alemana) irakaskuntzak; titulu horrek, hurrenez hurren, aipamena izan behar du Musikan, Gorputz Hezkuntzan edo Atzerriko Hizkuntzan, kasuan kasuko hizkuntzan, hain zuzen ere, eta azken horretan, gainera, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 mailako egiaztagiria, kasuan kasuko mintzairan.

Honako hauek ere irakasle aritu ahal izango dira irakaskuntza horietan: maisu edo maistra espezialistaren titulua dutenak Musikan, Gorputz Hezkuntzan edo Atzerriko Hizkuntzan, kasuan kasuko hizkuntzari dagokionez; edo Oinarritzko Hezkuntza Orokorreko irakasle-diploma dutenak, edo Lehen Hezkuntzako maisu edo maistra direnak kasuan kasuko espezialitatean.

2. Aurreko idatzi-zatian aipatutako maisu-maistrek, adierazitako kualifikazio-aipamenik, baldintzarik edo espezialitaterik izan ezean, Musikako, Gorputz Hezkuntzako edo Atzerriko Hizkuntzako irakaskuntzak eman ahal izango dituzte Lehen Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan, betiere baldintza hauetakoren bat betetz gero:

(...)

b) Gorputz Hezkuntzako irakaskuntzak:

- 1.- Graduatua Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zientzien esparruan.
- 2.- Lizentziaduna Gorputz Hezkuntzan, edo lizentzia horretako hiru kurtso osorik gainditu izana.
- 3.- Diplomaduna Gorputz Hezkuntzan.
- 4.- Lizentziaduna Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan.
- 5.- Gorputz Hezkuntza espezialitateko kurtsoak gainditu izana, errege-dekretu honen 7. artikuluan xedatuaren arabera.
- 6.- Gorputz Hezkuntza espezialitateko oposizio-fasea gainditu izana, errege-dekretu honen 8. artikuluan xedatuaren arabera.»

«7. artikulua. Espezialitateko kurtsoak gaindituak izateko betebeharra.

Baldintza hori betetzat joko da Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak deitutako espezialitate-ikastaroak gainditzeko direnean, edo autonomia-erkidegoetako organo egokiek deitutakoak, eta, azken kasu horretan, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak homologatuta egon behar dute ikastaroek, eta errege-dekretu hau indarrean jarri aurretik hasita.»

EAEk bere irakaskuntza-kidegoak legialatu zituen Autonomia Estatutuaren 10.4 eta 16. artikuluetako eskumen-tituluak oinarri hartuta (2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa), eta bere irakaskuntza-kidegoak sortu zituen Estatuko oinarritzko arauditik abiatuta; hartara:

- Ezarri zituen kidego-egiturak bat zetozen betiere Estatuko oinarritzko legedian ezarritako kidegoen antolaketarekin.
- Ikastetxeetan hutsik zeuden plazak betetzeko, estatu-esparruko lehiaketak zeudela aintzatetsi zen, baina horrek ez du eragozten Autonomia Erkidegoak bere lehiaketa itxiak egitea, eta beharrezkoak diren baldintza espezifikoak zein diren esatea.
- Erabaki zen eskubide eta betebeharren berdintasuna bermatzea EAEko irakasleei eta EAEko ikastetxeetan hutsik dauden postuak betetzen dituzten beste administrazio batzuetako irakasleei dagokienez.

Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko Legearen 4. artikulua xedatzen du hezkuntza arloan eskumena duen sailak honako eginkizun hau esleituta daukala: "karrerako irakasle funtzionarioa edo lan-legepeko behin betiko irakaslea izan ahal izateko hautaprobeen oinarri-arauak, egitarauak eta edukiak finkatu, deialdiak egin, proben epaimahaikideak izendatu eta probak gainditu dituztenak izendatu eta lanpostua ematea edo, hala behar badu, kontratatzea".

Ildo beretik, lege-testu bereko 16.1 artikulua hau dio: "Lehiaketa-oposizioaren sistema erabiliko da irakaskuntzako karrerako funtzionarioak hautatzeko, haiei dagokien deialdi publikoa egin ondoren. Lehiaketaren fasean, beste zenbait merituren artean, prestakuntza akademikoa eta alde aurreko irakaskuntza-esperientzia balioetsiko dira. Oposizio-fasean, hauek

kontuan hartuko dira: irakaskuntzan aritzeko behar diren berariazko jakintzak izatea, pedagogia-gaitasuna izatea eta irakaskuntza-jardunaren teknikak menderatzea. Probetarako deialdia, betiere, bakoitzaren curriculuma osatzen duten arlo eta gaiak kontuan izanik egingo da. Izangaiak hautatzeko, lehiaketa-oposizioaren bi faseen balioespena hartuko da kontuan, probak gaingitu izana aparte utzi gabe. Fase horiez gain, hautapen-prozesuaren baitan, praktiketako fase bat ezar daiteke, berariazko prestakuntza-ikastaroak egiteko”.

Aurreproiektuaren 3. artikulurako proposatutako idazkerak EAERI esleitutako eskumenak gaingitzen ditu, esaten baitu titulazio jakin bat dutenak lehenetsiko direla Gorputz Hezkuntza irakasteko, bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren Hezkuntzan. Lehenesteko betebeharrak hori zehaztugabea eta gehiegizkoa da, eta ez zaio egokitzen lehen aipatutako eskumen-araubideari. Egungo araudia osatu nahi izatera, hori EAEko eskumen-esleipenen barruan egin beharko litzateke, eta erreferentziazko esparrua Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko Legearen 4. eta 16. artikuluetan zedarrituak izan beharko luke.

Baina eskumen-esparruaren azterketatik harago joanda, egokia da, halaber, premia-azterketa egitea. Alde horretatik, esan behar dugu aurreproiektuan proposatutako arautzea ez dela beharrezkoa, Gorputz Hezkuntzan irakasten dutenen ezagutzen eta prestakuntzaren kualifikazioa eta kalitatea behar bezain bermatuta daudelako lehen aipatutako indarreko oinarritzko araudiarekin. Lehen azaldutako araudian, kontuan hartzen da Gorputz Hezkuntzako espezialitatea, eta sartzeko baldintzak arautzen dira, edo behar diren mekanismoak antolatzen, ziurtatzeko espezialitate horretan sartzen direnek gai horretan behar diren ezagutzak dituztela.

Horregatik guztiagatik, aurreproiektutik kanpo utzi beharko litzateke Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbidea, eskumen-gehiagiagatik, eta beharrezkoa ez izateagatik proposatutako arautzea justifikatzen duen helburua betetzeko, gai hori eurrez eta zehaztasun askoz handiagoz araututa dagoelako bai estatuko bai autonomiako hezkuntza-araudian. Hitz batean, Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari buruzko proposamenak ez dio inolako ekarpen berririk egiten lanbide horren arautze espezifikoan dagoenari.

Araugintza-teknikaren ikuspuntutik, Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari buruzko proposamenak dagokion gaitzespena merezi du, gai jakin bati buruzko kontuak askotariko lege-testuetan sakabanatzea saihezi beharreko teknika delako. Ordenamendu juridikoaren sakabanatze hori dela eta, Administrazioa legedia finkatzen eta biltzen ahalegintzera behartuta dago, indarreko arau-esparrua hobeto uler dezaten egodi horren xede direnek. Era berean, arau bati ekin baino lehen, azertu, identifikatu behar da zer arazo dauden, zer gabezia, zein diren haiek sortzen dituzten akatsak, helburuak jarri behar dira haiek guztiak arintzeko, eta proportzionaltasun-printzipioa aplikatu, ikusteko arau-proposamenetan zein diren egokienak hasierako arazoak gaingitzea lortzeko. Aurreproiektuan Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari dagokionez proposatutako arautzea ikusita,

ohartzen gara zein den arazoa: ez da aurrez eta zehaztasunez aztertu figura horren inguruko egoera. Gaiari buruz gaur egun dagoen araudia aztertuta, laster ondorioztatzen da badaudela mekanismo juridiko egokiak Gorputz Hezkuntzako irakaskuntzan espezializatzeke helburua ziurtatzeko, eta, horrenbestez, proposamena ez da beharrezkoa.

Horren adierazgarri, EAEn maisu-maistren kidegorako oraintsu egindako enplegu publikoaren eskaintzan⁸, Gorputz Hezkuntzako espezialitatea kontuan hartu da, eta oposizio-fasean espezialitateari buruzko ezagutzak balioestea aurreikusi da; gainera, espezialitate horretarako gaitegi espezifiko bat prestatu da. Era berean, lehiaketa-fasean, espezialitatearekin zerikusia duten merituko puntuatzen dira; adibidez, Goi-mailako Kiroleko teknikari-titulazioa, edo goi-mailako kirolari-kalifikazioa izatea.

Azkenik, zerbitzu sustatzaileari Konstituzio Auzitegiaren doktrina jadanik finkatua gogorarazi behar diogu, esaten baitu saiatu behar dela araugintza-tekniko zaindua erabiltzen, segurtasun juridikoaren printzipioa eta botere publikoen arbitrariotasunaren galarazpen-printzipioa zaintzeko; bestek beste, 150/1990 Epaian hau dio:

«(...) segurtasun juridikoaren printzipioa eta botere publikoen arbitrariotasunaren galarazpen-printzipioa direla eta, premiazkoa da araua argia izatea, herritarrek jakin dezaten zeri egon arauaz den bezainbatean. Eskaera horien ildotik, ezin gutxiets daiteke zer-nolako garrantzia duen zuzenbidearen ziurtasunerako eta segurtasun juridikorako teknika juridiko zaindua erabiltzeak arauak egiteko prozesuan, (...); izan ere, legedia nahasia, iluna eta osagabea izateak zaildu egiten du haren aplikazioa, eta Zuzenbidearen ziurtasuna eta herritarrek hartan duten konfiantza ahultzeaz gain, justiziaren balioa lausotu ere egin dezake azkenean.»

Aurreproiektuko gainerako lanbideei dagokienez, lanbide arautu kontzeptuaren barruan txertatuko lirateke, eta legegile autonomikoak, lanbide arautu horiei dagokienez, eskumena izango luke behar dena arautzeko, botere publikoak parte-hartzearen beharra duten interes orokorrak babesteko; KA-k berak aitortu duen bezala:

«baldintza jakin batzuei lotuta egotea edo lan- edo lanbide-jarduera jakin batean aritu ahal izateko betebeharrak jakin batzuk betetzea lanbide tituludun bat sortzearen oso bestelako kontua da, urrun dagoena (...). Hartara, posible da, lan egiteko eta lanbidea edo ofizioa libreki aukeratzeko eskubideari zor zaion errespetuaren barruan (Konstituzioaren 35. artikulua), eta interes orokorrak betetzeko beharrezkoa den bitarteko gisa, botere publikoek lanbide-jarduera jakin batzuetan jardutea interbenitzea, eta, jarduerotan aritzeko, erabakitzea aurrez administrazio-baimen edo -lizentzia bat lortu behar dela, edo gaitasun-proba jakin batzuk gainditu. Baina, esan berri den bezala, baldintza, baimen, gaikuntza edo proba horiek eskatzea ezin da inola ere parekatu lanbide-tituluak sortzearekin edo

⁸ Agindua, 2015eko otsailaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena. Honen bidez, dei egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozesurako (EHAA, 2015-02-18).

arautzearekin (Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan aipatua), eta ez dauka zerikusirik agindu konstituzional horrek Estatuari gordetzen dion eskumenarekin.» (Konstituzio Auzitegiaren 122/1989 Epaia).

Ildo beretik jo du berrikiago KA-k 109/2003 Epaian (14. OJ):

«Aipatu doktrinak honako hau du oinarri: "auzitegi honek 122/1989 Epaian esan duen bezala, posible bada ere, lan egiteko eta lanbidea edo ofizioa libreki aukeratzeko eskubideari zor zaion errespetuaren barruan (Konstituzioaren 35. artikulua), eta interes orokorrak betetzeko beharrezkoa den bitarteko gisa, botere publikoek lanbide-jarduera jakin batzuetan jardutea interbenitzea, eta, jarduerotan aritzeko, erabakitzea aurrez administrazio-baimen edo -lizentzia bat lortu behar dela, edo gaitasun-proba jakin batzuk gainditu... baldintza, baimen, gaikuntza edo proba horiek eskatzea ezin da inola ere parekatu lanbide-tituluak sortzearekin edo arautzearekin (Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan aipatua), eta ez dauka zerikusirik agindu konstituzional horrek Estatuari gordetzen dion eskumenarekin; izan ere, baldintza jakin batzuei lotuta egotea edo lan- edo lanbide-jarduera jakin batean aritu ahal izateko betebeharrak jakin batzuk betetzea lanbide tituludun bat sortzearen oso bestelako kontua da, urrun dagoena, lehen esandakoaren ildotik, aritze horretarako nahitaezkoa delako titulu akademiko jakin batzuk izatea (KA-ren 83/1984 Epaia), edo, gauza bera dena, goi-mailako ikasketak, ziurtagiri, diploma edo lizentzia egokiaren bidez berretsiak (KA-ren 42/1986 Epaia)" (KA-ren 111/1993 Epaia, 9.OJ).

Horregatik, ebazpen eta oinarri juridiko horretan hau esan genuen: "... doktrina horren ondorioz, titulu akademiko ofizialaren eta gaikuntza ofizialaren arteko bereizketa bermatzen da,... baina, gainera, lanbidea edo ofizioa libreki aukeratzeko aitortpen konstituzionala dela eta (EK-ren 35. artikulua), lanbide-jarduerak, haietan aritzeak ukitutako interes konstituzionalen garrantzi handiagoaren edo txikiagoaren arabera, Estatuak zerbait mailatan kontrolatzeko aukera agertzen da.»

3.- ARAU-ESPARRU KONPARATUA.

Proposamena, gainera, indarreko erkidego-esparruarekin erlazionatu behar da, lotura zuzena duelako erkidego-arauek eragindako bi gai-alorrekin. Sektore liberalizatu bat erregularizatzea zuzenean kateatzen da lehia askeko printzipioa gauzatzearekin eta pertsonen eta zerbitzuen zirkulazio librearekin.

Proiektua honako hauen argitan aztertu beharko da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa; eta aurreko hori Espainiako ordenamendu juridikora aldatzeko araua (17/2009 Legea, azaroaren 23koa, Zerbitzu Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzkoa).

Era berean, egokia da edukia aztertzea lanbide-kualifikazioen aintzatespen-esparruko erkidego-harmonizazioaren ikuspegitik (Europako

Lege-aurreproiektu baten figuran zertzen da eman nahi den araupena. Ildo horretatik, egokia deritzogu labur gogoraraztea lege-lerruna izatearen ondorioak, behar bezala azaltzeko zergatik eman zaion izaera hori testuari, eta, hori azaldu ondoren, proposatzen den arauaren erregelamendu bidezko garapenei ekin ahal izateko.

Lege-erreserbaren xedea da "bermatzea herritarrei dagozkien askatasun-eremuen araupena soilik haien ordezkarien borondatearen mendekoa izango dela, beraz, eremu horiek botere exekutibo edo betarazlearen ekintza-eremutik at behar dute, eta, ondorioz, haren berezko arau-tresnek, hau da, erregelamenduek, ezin dute eremu hori arautu. Egia da printzipio horrek ez duela eragozten legeek erregelamenduetarako igorpenak egiteko aukera, baina nabarmena da igorpen horiek ezin dutela araupen independenteak eta legearekiko mendetasun argirik gabekoak sorrarazi, hala eginez gero desitxuratu egiten baita Konstituzioak legegilearen alde egin duen erreserba." KA-ren 83/1984 epaia (Osokoa), uztailaren 24koa. Ildo beretik: KA-ren 235/2000 epaia (Osokoa), urriaren 5koa.

Proposamenaren edukia aztertuta, egokitzen jotzen dugu arau-lerruna; bi arrazoiengatik, nagusiki: alde batetik, aurreproiektuari gehitutako memorian esaten den bezala, badago "nolabaiteko adostasun juridiko bat, lanbide batean sartzeko eta jarduteko murrizketak lehentasunez lege-lerruneko arau batean aurreikusteko beharrari dagokionez"; horren adierazgarria da lanbide-zerbitzu eta -elkargoei buruzko Lege-aurreproiektuaren 7.¹⁰ artikulua, berariaz aurreikusten baitu jarduera profesional edo lanbide batean sartzeko murrizketak lege-lerruneko arau baten bidez arautzea (7.2 artikulua).

¹⁰ Lanbide-zerbitzu eta -elkargoei buruzko Lege-aurreproiektuaren 7. artikulua.

Sartzeko murrizketak.

1. Jarduera profesional edo lanbide batean sartzeko murrizketak, kualifikazioan oinarrituta badaude, interes orokorreko arrazoiengatik behar denean baino ezingo dira ezarri, eta betiere printzipio hauen arabera: proportzionaltasuna eta diskriminaziorik eza.
2. Sartzeko murrizketek lege-lerruneko arau batean aurreikusita egon beharko dute. Europar Erkidegoko zuzenbideko arau baten transposizio-kasuan, sartzeko murrizketak lerrun apalagoko arau batean aurreikusita egon ahal izango dira. Jarduera profesional edo lanbide batean sartzeko murrizketak ezartzen dituen arauak argi zehaztuko du zer jarduera edo lanbideetan murrizten den sarrera, eta jarduera edo lanbide horren barruko eginkizunak aipatuko ditu, nahasketarik egon ez dadin beste jarduera profesional edo lanbide batzuekin.
3. Kualifikazioan oinarritutako sarbiderako murrizketa titulazioari, maila akademikoari, hezkuntza-mailari, prestakuntzari, gaitasunari edo esperientziari lotutako edozein eskaera edo muga izango da, berekin eginkizunak kualifikazio hori duenaren alde gordetzea ekartzen badu.
4. Eskatutako kualifikazioaren egiaztapena arautzean proportzionaltasun-printzipioa kontuan hartu beharko da, eta ahalik eta egiaztapen-bitarteko gehien aurreikusi beharko dira, hala nola maila akademiko edo hezkuntza-maila jakin bat izatea, lanbide-heziketako titulu bat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat izatea, erregelamendu bidez zehaztutako baldintzetan lan-esperientzia aitortuta edukitzea, agintari eskudunaren aurrean gutxieneko eduki batzuei buruzko azterketa teoriko eta/edo praktikoa bat edo prestakuntza bat gainditu izana, edo pertsonak ziurtatzeko egiaztatutako erakunde batek emandako ziurtagiri bat izatea.
5. Lanbideak eskusiboki izendatzea babestu ahal izango da, jarduera-erreserbarik edo lanbide-esleipen espliziturik ez izanda ere, titulazio edo gaitze jakin baten lorpena araututa badago, eta, bereziki, nahitaezkoa badu administrazio eskudunak deitutako gaitasun-proba batzuk gainditzea. Izendapen-erreserba horrek ezingo du inola ere loturarik izan kolegiatzeko baldintzarekin, lanbidea kolegiatua ez denean,

Arautzen diren lanbideak ez dira sortzen Legearekin; aitzitik, legearen aurretiko errealitate sozial eta ekonomikoa dira. Legeak antolatu eta arautu egiten ditu, azpian dautzan interes publikoengatik. Hortaz, abiapuntua lanbide libre batzuk dira, zenbait muga edo baldintzaren xede izatera aldatzen direnak; hau da, lanbide arautuak izatera aldatzen dira. Hitz batean, askatasun-esparru bat arautzen ari da (lanbidea libreki aukeratzeko eskubidea; EK-aren 35. artikulua), eta, horregatik, eskubide horri ezarritako mugak ezin dira arbitrarioak izan, eta, uste dugu, legegilearen borondateetik sortu beharko lirateke.

Era berean, arautzeak Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari eragiten dio, ezinbesteko lotura baitu EK-ren aipatu 36. artikuluko lege-erreserbarekin ("Legeak lanbide-elkargoen erregimen juridikoaren berezitasunak eta tituludun lanbideen jarduna arautuko ditu. (...)").

Aurreproiektuak, gainera, Euskadiko Kirolarena den ekainaren 11ko 14/1998 Legearen zehapen-araubidearen aldaketa bat jasotzen duenez, ezinbestekoa da aldaketa hori lege-lerruneko arau baten bidez sartzea; hori testu konstituzionalaren 25.1 artikulutik ondorioztatzen da ("Ezin dakioke inori egite edo ez-egiteen ondorioz kondena edo zehapenik ezar, baldin eta, une horretan delitu, falta edo arau-hauste administratiboak ez badira, aldi horretan indarrean dagoen legeriaren arabera"), bai eta EK-ren 25.1 artikulua horretan jasotako "indarreko legeria" terminoaren norainokoari buruzko behin eta berrizko doktrina konstituzionaletik, haren ustez "zehapen arloko lege-erreserba baten adierazgarria baita" (besteak beste, 26/2005 Epaia, otsailaren 14koa; 113/2002 Epaia, maiatzaren 9koa; 25/2002 Epaia, otsailaren 11koa; 60/2000 Epaia, martxoaren 2koa).

Horrenbestez, aurreproiektu honek arautzen dituen gai-alorren izaerari erreparatuta eta egin berri ditugun oharpenak kontuan hartuta, ondorioztatu behar da aukeratutako arau-lerruna egkia dela gai-alor horiek arautzeko.

Erregelamendua, Administrazioak emandako arau juridiko orokorra den aldetik, legearen mendeko araua da, haren osagarria Erregelamendua lankidetzara-arau juridikoa izategatik, bereizi egin behar da, batetik, funtsezko alderdien oinarritzko araupena, beti legeak egin beharrekoa, eta, bestetik, bigarren mailakoak baina, aldi berean, ordenamendu juridikoa osatzeko behar-beharrezkoak direnak: erregelamendu betearazlea, erregelamendu independentea eta, hala egokituz gero, premiazko erregelamendua. Erregelamendu-ahalmena, beraz, ordenamendu juridikoa osatzen laguntzen duen ahalmen juridikoa da, ondorioz, ordenamendu horren baitan kokatzen dira erregelamendu-arauak. Erregelamendu-arauak, ordea, ez dira baldintzarik gabe ematekoak; izan ere, Konstituzioa eta Legeak bete behar dituzte (Espainiako Konstituzioaren 97. artikulua), eta, aurkatzen badira, Konstituzioa da haien baliozkotasunaren edo legezkotasunaren maila erabakitzen duen araua.

Konstituzio Auzitegiak behin baino gehiagotan adierazi du erregelamendu betearazleak edo exekutiboak zuzenean eta zehaztasunez daudela lege bati

lotuak, erregelamenduak osatu, garatu, zehaztu, aplikatu, osatu edo betearazi egiten baitu legea: "Gure zuzenbideko tradizio juridikoa da, erregelamenduen artean, Administrazioak emandako legeaz azpiko xedapen orokorrak diren aldetik eta, zentzu zabalean, funtzio betearazlea betetzen dutela jakinda, «erregelamendu exekutibo» izendatzeari zuzenean eta zehazki lege baten edo lege-multzorik baten artikulurik batera edo batzuetara lotuta dauden erregelamenduak, lege (edo lege-multzorik) hori osatu, garatu, zehaztu, aplikatu eta bete edo egikaritzen dutelarik. Hau esan du Estatuko Kontseiluak erregelamendu horiei buruz: «Beren egitekoa da aurretik emandako lege bat bideratzea edo arauak ezartzea lege bat garatu, aplikatu eta betetzeko»." (Konstituzio Auzitegiak (osoko bilkurak) emandako 18/1982 sententzia, maiatzaren 4koa).

Aztertutako proiektuan, zenbaitetan jotzen da erregelamenduzko garapenera igortzeko teknikara. Igortze horiek zehatzago aztertuko dira arauaren edukiari helduz.

V.- LEGE AURREPROIEKTUAREN EDUKIA

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektuak azalpen-zatia, hemezortzi artikulurik, hamabi xedapen gehigarri, hiru iragankor, indargabetzaile bat eta sei azken xedapen ditu.

⇒ AZALPEN-ZATIA.

Araua egiteko arrazoiak azaltzen dira lege-aurreproiektuaren zio-azalpenarekin, eta adierazten da zer helburu bete nahi diren, zer oinarri juridikok gaitzen duten araua egiteko ekimena, arauaren printzipio eta ildo orokorrak, eta indarreko araubidean izango duen eragina. Bereziki aipatzen dira berritasunak dakartzaten alderdiak. Horrenbestez, behar bezala adierazten dira Gobernu Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an hartu zuen erabakiak, Legeak, Dekretuak Aginduak eta Ebazpenak egiteko irizpideak onartzekoak, eskatzen dituen edukiak (arau hori 1993ko apirilaren 19ko EHAAn argitaratu zen, Lehendakariak, Araubide Juridiko eta Garapen Autonomikoko sailburuak 1993ko apirilaren 6an emandako Agindua betez).

Artikuluak aztertzen hasi aurretik, adierazi behar dugu aurreikusten den arauak funtsezko helburu hauek —besteak beste— lortu nahi dituela (aurreproiektuko justifikazio-memoriak eta zio-azalpenak zehazten dituzte helburuok):

- Testu artikulatuak kirol-esparruko zenbait lanbideetan jardutearen alderdi nagusiak arautu nahi ditu, eta, horretarako, haietan aritzeko behar diren kualifikazioak zehazten eta esparru funtzionala adierazten ahalegintzen da.
- Lege-aurreproiektuaren xedea ez da kiroleko lanbide guztiak arautzea, garrantzi handieneko ondasun juridikoetan eragin zuzena dutenak baizik; bereziki, kirola egiten duten pertsonen osasuna eta segurtasuna.

⇒ 1. ARTIKULUA. HELBURUA ETA APLIKAZIO-EREMUA.

Lehen artikuluan, legearen xedea eta aplikazio-esparrua zehazten dira. Era berean, zenbait termino definitzen dira, hala nola: "Lanbide-jarduna", "kirol-boluntarioria" eta "kirola". Berariaz baztertua geratzen diren lanbide-jardura batzuekin osatzen da artikulua, eta, amaitzeko, 20/2013 Legea aipatzen da, abenduaren 9koa, Merkatu-batasuna bermatzeari buruzkoa.

Artikuluaren edukiari dagokionez, egokitzen jotzen da honako hauek gomendatzea:

Bigarren idatzi-zatian honako hau esaten da: "Kaltetik eragin gabe Estatuak, hala badagokio, lanbideen zerbitzu-erakunde eta elkargo-erakunde onartzen duen oinarritzako legeriari". Autonomia Erkidegoak gai-alor horietan ere eskumenak esleituta dauzkanez, bai eta Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko Legea ere (18/1997 Legea, abenduaren 15ekoa), aipamenak orokorragoa izan beharko luke, eta Estatuko indarreko legedia ez ezik, autonomikoa ere jaso.

Bosgarren idatzi-zatian, "kirol-boluntarioria" esatean zer ulertu behar den adierazten da, eta borondatezkoa "libreaki, borondatez eta ordainsari ekonomikorik gabe egiten den jardura" izango dela zehazten da, "ordainsari ekonomikoa" "lanbide-erakunde gutxieneko soldata baino txikiagoak diren konpentsazio ekonomikoak jasotzea" dela ulertuta.

Nolanahi ere, "Xede honen ondorio-erakunde, ez da ordainsari ekonomikotzat hartuko lanbide-erakunde gutxieneko soldata baino txikiagoak diren konpentsazio ekonomikoak jasotzea" tartekia kentzeko aholkua ematen zaio ekimena sustatu duen zerbitzuari, ez baitator bat Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legean aurreikusitako boluntarioria kontzeptuarekin:

«2. artikulua.– Boluntarioria kontzeptua.

Lege honen ondorio-erakunde, pertsona fisikoei aurrea eramaten dituzten interes orokorreko ekimenen multzoa da boluntarioria, ekimen horiek honako baldintza hauek betetzen badituzte:

- a) Norberaren probetxurako ezer lortzeko asmorik gabekoak izatea eta elkartasunak bultzatuak izatea.
- b) Borondatezkoak eta askatasun osoz eginak izatea; arrazoi lan-, funtzionarioria- edo merkataritza-harremana ez izatea, ez eta obligazio pertsonala edo betebeharrak juridikoa ere.
- c) Irabazi-asmorik ez duten erakunde bidez eta programa edo egitasmo zehatzei jarraiki eginak izatea.
- d) **Ordainsaririk gabeak izatea.**
- e) Ordaindutako zerbitzu profesionalak inolaz ere ez ordezkatzeko.

2.- Legearen ondorio-erakunde ez dira boluntarioria izango erakundeetatik kanpo une jakin batean edo noizean behin famili

kontuengatik, adiskidetasunagatik, on egiteagatik edo auzoko bizikidetasun onak bultzatuta egindako borondatezko ekintzak.»

«4. artikulua. Jarduteko printzipioak

Esparru guztietako boluntariotzako ekimenek printzipio hauek izango dituzte oinarrian: elkartasuna, partaidetza, doakotasuna, autonomia aginte publikoen aurrean, bereizkeriarik eza, aniztasuna, integrazioa, prebentzioa, gizartearen sentsibilizazioa eta, oro har, gizarte demokratiko, moderno eta parte-hartzaile, zuzen eta berdintasunezko batean elkarbizitza errazten duten printzipioak.»

Borondatezko lanagatik konpentsazio moduan ordainsari ekonomikorik ez jasotzea boluntariotza kontzeptuaren berezko elementua da. Ordainsari ekonomiko bat aldi berean behin jasotzeak pentsaraz lezake jarduera ordaindutako lanbide-zerbitzuen ordezkari egiten dela, kostua lanbide-zerbitzu horiek izatearen ondoriozkoa baino txikiagoa litzatekeela, eta, gainera, aurrekoaren larriagari, Gizarte Segurantzarekiko kasuan kasuko betebeharrak saihestuko liratekeela, baina horrek, hain zuzen ere, aurreproiektu honetan babestu nahi den lanbide-sektorearen kalterako izango litzateke.

Jasotako kopuruak lanbidearteko gutxieneko soldata baino txikiagoak izateak ez luke izan behar jarduera bat profesionala edo borondatezkoa den erabakitzen duen elementua. Horiek horrela, boluntarioen legeak argi zehazten ditu borondatezko jardunaren ezaugarriak, eta jardun hori, besteak beste, inolako ordainsari ekonomikorik gabe egiten da, zenbatekoa edozein izanda ere. Are gehiago, boluntarioen legearen 5.3 artikulua araberak, hain zuzen ere egindako lanagatik ordainsari ekonomikoa jasotzeak —kopurua edozein dela— bereizten ditu boluntarioa eta profesionala, edo erakundearen zerbitzuko besteren konturako langilea.

5. artikulua. Boluntario kontzeptua

1. Boluntarioa lege honetan aipatutako ekintzak egiteko konpromezua askatasun osoz hartzen duen pertsona fisikoa da; boluntariotzat jotzeko, ekintzek 2. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

2. Boluntariotzak boluntarioaren eta erakundearen artean harremanak izatea eskatzen du. Harreman horiek hainbat eskubide eta obligazio sortzen dituzte elkarrekiko, eta horiek, edo horien alderdik nagusienak, Lege honetako 8.4.a) artikuluan aipatutako barne estatutuak arautuko ditu.

3. Boluntario izatea eta erakundeko bazkide izatea bateragarria izango da. **Erakunde batean profesional modura jarduten dutenek edo erakunde horrekin laneko, merkataritzako edo beste edonolako harreman ordainsaridunak dituztenek ezin izango dituzte, inolaz ere, lan horiek berberak boluntario gisa egin.**

Boluntarioek jaso ditzaketen konpentsazio ekonomikoak zehaztuta daude boluntarioen legean bertan. Konpentsazio horiek ez dira inolaz ere egindako lanagatik jasotako ordainsaria. Beraz, kirol-boluntariotzak ere, alde horretatik, gaiari buruzko arau orokorrean jasotakoari heldu beharko lioke:

6. artikulua. Boluntarioaren eskubideak

Boluntarioaren eskubideak dira:

(...)

d) Aseguratuta egotea, boluntario gisa lan egitean bitartekoren bati kalterik egin baliezaioke ere; asegurua araudian ezarritako baldintzetan eta araudiak ezarritako kapitalaren bidez egingo da.

e) **Boluntarioak bere lana betetzeko xahututako dirua berreskuratzea, baldin eta erakundea eta boluntarioaren artean hitzartutako baldintzetan horrela ezarrita badago, eta, betiere, hitzarmenean jarritako muga barruan.**

Beraz, aurreko guztian oinarrituta, 1. artikuluko 5. idatzi-zatian aurreikusitako muga kuantitatiboa kendu egin beharko litzateke, ez dagoelako justifikatuta muga bat ezartzea jaso beharreko ordainsari ekonomikoan, muga oinarri hartuta jarduera profesional bat borondatezko jarduera batetik bereizteko, hain zuzen ere ordainsari ekonomikorik ez izatea delako profesionaltasuna eta borondatezkoitasuna bereizten dituen ezaugarria.

⇒ 2. ARTIKULUA. KIROL ARLOKO BEREZKO LANBIDEAK ETA ESPARRU FUNTZIONAL OROKORRA.

Lehen esan bezala, lege honen asmoa ez da kirol-ferromenoari dagokionez gaur egun dauden lanbide-jarduera guztiak arautzea, baina soil-soilik osasunean eta segurtasunean eragin zuzena izateagatik legegileak esku hartzea beharrezko dutenak.

Bigarren artikuluan zehazten da zer lanbide diren arautzearen xede. Artikuluaren hasieran, "kirol arloko berezko lanbide" kontzeptuaren definizio orokorra ematen da, eta, ondoren, zein arautzen diren zehazten da:

- Gorputz Hezkuntzako irakaslea.
- Kirol-monitorea.
- Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako entrenatzailea.
- Kirol-zuzendaria.

Artikulu hori legearen oinarrizko zutabeetako bat da, eta funtsezkoa da gobernu autonomikoak gai arlo honetan izandako ekimen legegilearen justifikazioan. Bere egiten du Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzordeak Kataluniako kirol-lanbideen jardunbideari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeaz hartutako erabakia¹¹, zehazten baitu ez direla arautzen

¹¹ «Oro har, bi aldeek uste dute lanbide batean aritzeko eskatu beharreko prestakuntza titulazio egokiekin egiaztatutako eskumenetan eta ezagutzetan zehaztu behar dela, nahiz eta prestakuntza hori ziurtatzeko beste modu batzuk egon ahal izan; adibidez, beste herrialde batzuetan emandako tituluak. Era berean, bi aldeek onartzen dute legean zehaztu gabeko aurretiazko baldintzak egon daitezkeela lanbide horietan aritzeko, Gorputz Hezkuntzako

ari lanbide tituluak, baina lanbide batzuetan aritzeko behar diren lanbide-kualifikazioak, eta kualifikazio horiek lanbidean aritzeko behar diren eskumenak eta ezagutzak ematen dituzten titulazioen bidez egiazta daitezkeela, baina ez bakarrik proposatutako legean aurreikusitako titulazioen bidez, bai eta, kasu bakoitzean, indarreko legediaren arabera, prestakuntza-maila baliokideak egiaztatzen dituzten emandako beste ziurtagiri guztien bidez ere.

Era horretan egokitzen da arauketa europar esparrua¹², eredu irekia aldeztu duelako, lanbide-gaitasunen egiaztapenean oinarritua. Hau da, lanbide jakin batean aritzeko, eskumenak egiaztatu behar dira, eta hori titulu akademiko egokia edo beste bide batzuk erabiliz egin ahal izango da. Hortaz, lanbide-eskumenak egiaztatzeke eredu irekien alde egiten da.

Era berean, 2. artikulua horretan zuzenean argitzen da lanbide batean titulu jakin baten bidez sartzeak ez duela mugatzen titulazio horren lanbide-esparrua ere. Adierazi den bezala, inola ere ez da arautze honen xedea artikuluetan zehar aipatzen diren titulazioen edukia; besterik da titulazio jakin bat baliozkotzat jotzea lanbide batean sartu eta aritzeko, pentsatzen delako bitarteko egokia dela lanbide horretan aritzeko beharrezkotzat jotzen diren ezagutzak eta gaitasunak egiaztatzeke. Hala ere, egiaztatze-bide hori ez da bakarra, eta onartzen da badagoela ezagutza eta gaitasun horiek egiaztatzeke aukera, indarreko ordenamendu juridikoan unean-unean aurreikusita dauden beste titulu akademiko edo ziurtagiri batzuen bidez.

Hurrengo artikuluetan (3.enetik 6.enera), zer lanbide arautzen diren, bakoitzerako lanbide-gaitasunak eta bakoitzean sartzeko mekanismoak zehazten dira.

Hala ere, esan behar da hobetzeko modukoa dela 3. datzi-zatiaren idazkera, eta honen antzeko zerbaitek aukera litekeela: "Lege honetan jasotako lanbideen atribuzioen zerrendek lanbide bakoitzaren esparru funtzional orokorra ezartzen dute, eta adierazpenezkoak dira, eta ez mugatzaileak".

⇒ **3. ARTIKULUA. GORPUTZ HEZKUNTZAKO IRAKASLE-LANBIDEA.**

irakasle-lanbideari dagokionez gertatzen den bezala, adibidez, nahitaezkoa baita, esparru publikoan aritzeko, Estatuko irakasle-kidego bateko kide izatea.»

¹² Kualifikazio profesionalak aitortzeari buruzko irailaren 7ko Europar Parlamentu eta Kontseiluaren 2005/36/EE Zuzentarauaren 1. artikulua:

«Xedea

Zuzentarau honek zenbait arau ezartzen ditu, eta arau horien arabera, bere lurraldean lanbide arautu batean sartzeko edo aritzeko lanbide-prestakuntza jakin batzuk edukitzea eskatzen duen estatu kidea (aurrerantzean «harrerako estatu kidea») aitortu egin beharko ditu, lanbide horretan sartzeko eta aritzeko, beste estatu kide batean edo batzuetan («jatorrizko estatu kidea» hemendik aurrera) eskuratzeko lanbide-prestakuntzak, prestakuntza hori duen titularrari lanbidean aritzeko aukera ematen badiote.»

2005/36/EE Zuzentarauaren 3.1.b) artikulua: «"lanbide-kualifikazioak", prestakuntza-titulu batek, gaitasun-ziurtagiri batek (11. artikuluko a) letran, i) tartekian, zehaztu bezala) eta/edo lanbide-esperientziak egiaztatutako kualifikazioak;»

Gorputz Hezkuntzako irakaslearen arauketaz hitz egin da aurretik txosten honetan, eta, horregatik, atal honetan, lehenago esandakoetara igortzen dugu.

⇒ **4. ARTIKULUA (KIROLEKO MONITORE-LANBIDEA), 5. ARTIKULUA (KASUAN KASUKO KIROL-MODALITATE EDO -DIZIPLINAKO ENTRENATZAILE-LANBIDEA) ETA 6. ARTIKULUA (KIROLEKO ZUZENDARI-LANBIDEA).**

Hurrengo artikulua kiroleko monitore-lanbideari (4. artikulua), entrenatzaileari (5. artikulua) eta kirol-zuzendariari (6. artikulua) buruzkoak dira, eta, maila hertsiki juridikoan, aurrekoak baino eztabaida gutxiago sortzen dituzte, arautzerik gabeko lanbide libreak direlako, eta haien eginkizunak eta izan beharreko lanbide-kualifikazioak mugatzen saiatzen diren gutxieneko batzuk araututa aldatzen direlako titulurik gabeko lanbide arautua izatera. Daukaten lege-taxuera gehiago da teknika- eta kirol-kontuen ondorioa, eta, horregatik, jarritako mugak justifikatzeko, proiektuari gehitutako azalpen-memorian emandako motibazioetara jo behar dugu, ardatz —txosten honetan behin baino gehiagotan esan bezala— araututako lanbide-jardueren hartzaileen osasunaren eta segurtasunaren babesa baitute.

Hala ere, 4., 5. eta 6. artikuluen edukiari dagokionez, komeni da honako ohar hauek egitea:

- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentzia- edo gradu-titulua eskatzen du 5.5 artikulua, hala nola pertsonak prestakuntza espezifikoa izatea entrenatzaile-lanbidean jarduteko, horrek berekin badakar atribuzioak baliatzea kirolarien egoera fisikoa hobetzeko eta suspertzeko, lesioei aurrea hartzeko, lesioen ondoren berregokitzeko edo berrezteko, eta ebaluazio-testak nahiz antzekoak egiteko. idatzi-zati horri dagokionez, esan behar dugu “prestakuntza espezifikoa izatea” tartekia zehazten ahalegindu beharko litzatekeela, oso zabala baita, eta, horrenbestez, ez da jakina zer prestakuntza-motari buruzkoa den, eta horrek, *a posteriori*, izugarri zailduko du geroko erregelamenduzko garapena.
- Bosgarren artikuluko 6. idatzi-zatia ez da beharrezkoa, 7. artikuluan eta 1. artikuluan 7. idatzi-zatian bertan zehazten delako zein den arauaren esparru subjektiboa, eta adierazten delako ez zaiela aplikatu behar egoitza soziala EAEn ez duten profesionalei.

⇒ **7. ARTIKULUA. KASU BEREZETAKO KUALIFIKAZIO-BALDINTZAK.**

Zazpigarren artikulua, “kasu berezietako kualifikazio-baldintzak” izenekoa, ez dator bat artikuluan edukiarekin, kasu jakin batzuetan arauaren aplikazio-esparrua zehaztu baino ez baitu egiten ejatzen.

7. ARTIKULUKO 1. IDATZI-ZATIA:

Lehen idatzi-zatiak arauaren lurralde-esparrua errepikatzen du, baina zentzu negatiboan adierazita; horregatik, aurreproiektuaren 1. artikuluan esandakoaren errepikapena da.

7. ARTIKULUKO 2. ETA 3. IDATZI-ZATIAK:

Bigarren eta hirugarren idatzi-zatiek arauaren esparru subjektiboa zehazten dute klubak eta antzeko beste kirol-elkarte batzuen zerbitzuko profesionalen kasurako, hala nola Espainiako kirol-federazioetako eta estatu-esparruko gainerako kirol-erakunde publiko edo pribatuetako profesionalen kasurako. Bi kasu horietako lehenengoa, profesionalak lan egiten duten erakundeek helbide soziala EAEn izan eta, gainera, jarduera batez ere bertan eginez gero aplikatuko da legea. Bigarren kasuan, profesionalak nagusiki EAEn kokatutako zentroetan lan eginez gero izango da aplikagarria legea.

Lehenik eta behin, esan behar da artikulua honen edukiak zerikusi zuzena duela 1. artikuluekin, artikulua horretan zehazten baita legearen aplikazio-esparrua, eta, horregatik, gure ustez, egiazki hartan aurreikusitakoaren salbuespenak edo zehaztapenak izanez gero, lehen artikulua horretan egon beharko lukete.

Zazpigarren artikulua 1. artikuluekin —legearen aplikazio-esparruari buruzkoa— erlazionatzean, ohartzen gara arauaren esparruak zehaztasuna falta duela. Hau da, 1.2 artikuluan “Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoan baino ez da aplikatuko lanbide horietan jarduteko” esaten da, eta ondoren “kirol arloko lanbideetatik lege honek arautzen dituen lanbideen berezko zerbitzuak ematea” delako definizioa ematen da lanbide-jardunaz, eta lanbide zehatz horiek geroago zehazten dira arauan, boluntarioen, adiskideen eta familiaren arteko harremanen esparruan edo antzeko esparruetan gauzatzen diren jarduerak salbuetsita. Lehen artikulua horretan bertan, Merkatu-batasuna bermatzeari buruzko Legearen aipamen orokorra egiten da¹³, ekimen ekonomiko askea babesteko, eta premiarik gabeko

¹³ 20/2013 Legea, abenduaren 9koa, merkatu-batasuna bermatzeari buruzkoa:

19. artikulua. «Ekimen ekonomiko askea lurralde nazional osoan.

1. Eragile ekonomiko jakin bat Espainiako lurraldeko toki batean lege ezartzen denetik aurrera, lurralde osoan gauzatu ahal izango du bere jardura ekonomikoa, fisikoki ezarritik edo ezarri gabe, betiere jatorrizko tokiko jardura eskuratzeko betekizunak betetzen baditu, baita jardura ekonomikoa toki horretako betekizunen eraginpean ez badago ere.
2. Espainiako lurraldeko toki bateko araudiaren babesean legez produzitutako produktu oro askatasunez zirkula eta eskaini daiteke Espainiako lurraldeko gainerako tokietan produktu hori merkatuan jartzen denetik aurrera.
3. Helmugako tokiko araudiaren arabera, eragile ekonomiko edo ondasunei betekizunak, kualifikazioak, aurretiko kontrolak edo bermeak —jatorrizko tokiko araudiaren babesean lortutakoak ez direnak— eskatzeko bazezkie, helmugako agintaritzak bere gain hartuko du azken horien erabateko baliozkotasuna, nahiz eta

irismenari edo zenbatekoari dagokionez desberdinak izan. Halaber, askatasunez gauzatu ahal izango da jatorrizko tokiko araudian ezin betekizunik, kontrolik, kualifikaziorik edo bermerik eskatzen ez bada ere.

20. artikulua. «Administrazio-jardunen eraginkortasuna lurralde nazional osoan.

1. Jarduera ekonomiko bat eskuratzea edo erabiltzea ahalbidetzen duten edo kalitate, kualifikazio edo inguruabar jakin batzuk betetzen direla egiaztatzen duten agintaritza eskudunek esku hartzeko bitarteko guztiek erabateko eraginkortasuna izango dute lurralde nazional osoan, eta eragile ekonomikoak ez du ezein izapide gehigarriarik egiteko edo betekizun berriak betetzeko premiarik izango. Bereziki, erabateko eraginkortasuna izango dute lurralde nazional osoan, eta eragile ekonomikoari ezin izango zaio eskatu betekizun berriak betetzea edo beste izapide gehigarri batzuk gauzatzea:

- a) Jarduera jakin bat eskuratzeko edo erabiltzeko, ondasun, produktu edo zerbitzu jakin bat produzitzeko edo merkatuan jartzeko eskumena duen agintaritzak emandako baimenak, lizentziak, gaikuntzak eta lanbide-trebakuntzak.
- b) Jarduera ekonomikoa eskuratzeko edo erabiltzeko, agintaritza eskudunari aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak eta jakinarazpenak.
- c) Jarduera ekonomikoa eskuratzeko edo erabiltzeko beharrezkoak diren erregistroetako inskripzioak.
- d) Arauz ezarrita dauden eta jarduera ekonomikoa eskuratzeko edo erabiltzeko ahalbidetzen duen beste edozein betekizun.

2. Ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko erakundeek eta lurralde nazionalen edozein tokitan lege ezarrita dauden antzeko beste batzuek erabateko gaitasuna izango dute beren eginkizunak lurralde nazional osoan gauzatzeko.

Agintaritza eskudun baten edo hark onartu eta gaitutako mendeko erakunde baten aitorpenak edo egiaztapenak, kalifikazioak edo ziurtagiriak guztiz baliozkoak izango dira ondorio guztietarako lurralde nazional osoan, eta ezin izango da eskatu beste ezein izapide gehigarriarik egitea edo betekizun berriak betetzea.

3. Aurreko paragrafoan ezarritakoa kasu hauei baino ezzaie aplikatuko:

- a) Kalitate-ziurtagiriak, agintaritza eskudunen kontratazio-prozeduretan kalitate-bermeko arauak betetzen direla egiaztatzeko, ondasunak eta zerbitzuak emateko inguruabar jakin batzuetan edo subjektu jakin batzuei, eta abantaila ekonomikoak (diru-laguntzak edo zerga-onurak) lortzeko.
- b) Ziurtagiri edo aitorpen ofizialak, ofizialki aitortutako eragile batekin kontratatzen duten pertsona fisikoek edo juridikoek lortzen dituzten eskubideen edo abantaila ekonomikoen ondorioetarako.
- c) Ziurtagiriak, aitorpenak eta egiaztapenak, jarduera ekonomiko jakin bat eskuratzeko edo erabiltzeko eskatzen den kalitate- edo profesionaltasun-maila jakin bat duela egiaztatzeko.

4. Lurralde nazional osoko eraginkortasun-printzipioa ez da aplikatuko instalazio edo azpiegitura fisiko jakin bati lotutako baimenen, erantzukizunpeko adierazpenen eta jakinarazpenen kasuan. Nolanahi ere, eragilea lege ezarrita badago lurralde nazionalen beste toki batean, baimenek edo erantzukizunpeko adierazpenek ez dute jasoko instalazioari edo egiturari espezifikoari lotuta ez dagoen betekizunik.

Estatu nazional osoko eraginkortasun-printzipioa ez zaie aplikatuko, halaber, jabari publiko jakin bat okupatzearekin lotutako administrazio-egintzei, edo lurraldeko toki bateko eragile ekonomikoen kopurua mugatua denean araututako tarifen eraginpeko zerbitzu publikoak izatearen arabera.»

administrazio-trabak kentzeko lanbide-jarduna beste autonomia-erkidego batzuetan garatzen duten eragile ekonomikoei. Hortik ondorioztatzen da — baina ez aurreproiektuan zehazten delako— asmoa deb arauaren xedea hau izatea: EAEko lurralde-esparruko kirolarekin zerikusia duten jarduera batzuen OHIKO lanbide-aritzea.

Honaino iritsita, esan behar da lege-aurreproiektu edo xedapen-proiektu orokor ororen esparru objektiboa arauaren funtsezko zatia dela, eta bertan zorroztu behar dela egin asmo denari buruz hausnartuta, zehaztuta, betiere proiektuaren helburuak lortzea ziurtatu nahi izanez gero. Horrenbestez, esan ere esan liteke ezen, gainerako artikulua bikainak izanagatik ere, arauaren esparru objektiboa eta subjektiboa zehaztugabea izateak segurtasun juridikorik eza eragiten duela, eta, geroago araua praktikan gauzatzeko ardura izango duten eragile juridikoek ez ezik, hartzaileek ere segurtasuna galtzen dutela, ez baitakite argi noraino eragingo dien.

Hitz batean, testua aztertu ondoren, badirudi EAEn jardun ohi dutenak daudela Legeari lotuta, merkatu-batasuna bermatzeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legea aplikatzen dela, araugintza-bikoiztasunak eta administrazio-kargen gehiegia saihesteko. Hala ere, ez da xedatzen legea aplikatzeko baldintza erabakigarri moduan egoitza soziala EAEn izatea, baina 7. artikuluko 2. idatzi-zatian esaten da kird-klub eta -erakundeentzat lan egiten duten profesionalei legea aplikatuko zaiela baldin eta aipatu erakunde horiek EAEn badute egoitza soziala eta nagusiki bertan badihardute. Hau da, lehenengoz aipatzen da baldintza gisa "egoitza soziala" izatea, eta "jarduerak nagusiki garatzea". Era berean, Espainiako kirol-federazioentzat eta estatu-esparruko gainerako kirol-erakunde publiko edo pribatuentzat lan egiten duten profesionalen kasuan, lanbidea "batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko zentroetan" gauzatzen badute aplikatuko zaie legea.

Bada, 1. artikulua elementu erabakigarri bat behardu, arauaren aplikazio-esparruaren barruan zer-nolako lanbide-jardunak garatzen diren zehazteari dagokionez. Zazpigarren artikuluan esaten da klubentzat eta beste kirol-erakunde batzuentzat lan egiten duten profesionalei arauak eragingo diela baldin eta erakunde horiek egoitza soziala EAEn badute, eta nagusiki bertan badihardute. Hala ere, ez dakigu zer elementuk zehazten duen aplikazio-esparrua kasu gehienetan (jarduera norberaren kontra egiten duten profesionalak, askotariko merkataritza-sozietateak eratuta zein ez, edo klubak, kirol-erakundeak eta federazioak ez bezalakoak diren askotariko erakunde pribatuen zerbitzura); hau da, 1. artikuluan "lanbide-jarduna EAEko lurralde-esparruan" zer den zehaztu behar da (egoitza soziala EAEn izatea, EAEn egoitza bat izatea; jarduera ohikoa izatea, eta, hala bada, zer da ohikoa?).

Aurreko zehaztugabetasunak 7. artikuluari ere eragten dio, "lanbide-jarduna nagusiki EAEn izatea" zer den zehaztu beharko litzatekeelako.

7. ARTIKULUKO 4. IDATZI-ZATIA:

Laugarren idatzi-zatia zehaztugabetasun handikoa da. Lehen aurreikuspenari dagokionez ("Lege hau lanpostuetan sartzeko aplikatuko da"), uste dugu, gainera, errepikakorra dela, aurreikuspen hori 1. artikuluko 3. idatzi-zatian jasota dagoelako.

Lege hau zerbitzuak kontratatzeke aplikatzeari dagokionez, aurreikuspen hori ere orokorregia da, eta horren ondorioa izango da kontratatzean aplikatu behar duen operadore publikoak segurtasun juridikorik ez izatea (nola jaso: esleitzeko irizpide, funtsezko baldintza, betebeharrak... moduan?). Ulertzen da artikuluko horren bidez hau lortu nahi dela: Administrazio kontratatzaileak kontratu-betebeharrak gisa jasotzea ezen arauan aurreikusitako lanbide-jardueretako bat administrazio baten zerbitzura egin behar dutenek ere, betiere jarduera horren oinarrian besteren konturako funtzionario- edo lan-harremanik izan gabe, eta oinarria administrazio-kontratazio bat izanda, arauari lotuta geratu behar dutela. Gure ustez, ez da beharrezkoa tarteki hori, lanbide-jarduera hori ezinbestean geratuko delako aurreproiektuaren 1.3 artikuluko aginduari bista; hortaz, administrazio kontratatzailea eta enpresa kontratista behartuta egongo dira ziurtatzera beren profesionalak behar bezala kualifikatuta daudela lanbidean aritzeko, jardueraren hartzailea publikoa edo pribatua izanda ere; hortaz, 7.4 artikulua kentzea gomendatzen da, ez delako beharrezkoa.

⇒ **8. ARTIKULUA. KALIFIKAZIO ETA TITULU BERRIETARA EGOKITZEA.**

Artikulu honetan xedatzen da Eusko Jaurlaritzak lege-testuan jasotako kualifikazio eta tituluei buruzko aipamenak prestakuntza-eskaintza eta lanbide-kualifikazio ofizial berrietara egokitu behar dituela, eta aurreikusten da ezen, egokitze hori egin bitartean, indarreko araudian baliokidetzat jotakoak baliagarriak izango direla.

Artikulu honen edukia gehiago dagokio xedapen gehigarri bati. Horri dagokionez, gogorarazi behar dugu zer dagoen xedatuta 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Erabakian; erabakiak Lege Egitasmoak, Dekretuak, Aginduak eta Ebazpenak egiteko irizpideak onartu zituen (EHAA, 71. zenbakia, 1993ko apirilaren 19koa). Akordio horrek, III. idatzi-zatiko bigarren jokabidean, esaten du arau juridikoak sortzea helburu ez duten aginduak eta jarduketak xedapen gehigarrietan sartu beharko direla. Gainera, esaten du ezen, xedatzen badira, agindua zer epetan bete behar den finkatuko dutela.

⇒ **9. ARTIKULUA. IZENEN ERRESERBA.**

Bederatzigarren artikulua lege honetan araututako lanbideetarako izenen erreserba xedatzen du.

⇒ **10. ARTIKULUA. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KIROLEKO LANBIDEEN KOLEGIATZE ETA ERREGISTRO OFIZIALA.**

Estatuko legediak kolegiatzea xedatzen duen kasuetan kolegiatzeko betebeharra dakar 10. artikulua lege honetara. Alde horretatik, esan behar

da kolegiatzearen beharrezkotasuna eta borondatezkotasuna zehaztea — Konstituzio Auzitegiaren doktrina adierazi bezala¹⁴— estatu-eskumena dela, eta lege-lerruneko araua behar duela. Era berean, indarreko Elkargo profesionaleri buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 3.2 artikulua hau dio: "... lanbideetan aritzeko, ezinbestekoa izango da kasuan kasuko lanbide-elkargoan sartuta egotea, estatu-lege batek hala xedatuz gero.". Gisa berean, Lanbide-zerbitzu eta -elkargoei buruzko Lege-aurreproiektuak (7.1 artikulua) honako hau dio: "... lege-lerruneko estatu-arau bidez baino ezingo da eskatu derrigorrez kolegiatzeko".

Kolegiatzeko derrigorrezkotasuna xedatuta daukan estatu-araurik ez dagoen gainerako kasuetan, aurreproiektuak erregistro batean inskribatzeko betebeharra aurreikusten du. Honaino ezin zaio legezko eragozpenik jarri proposamenari.

Baina 10. artikulua honetako 3. idatzi-zatia aldatu egin beharko litzateke, zalantzak sortzen dituelako Konstituzio Auzitegiak lanbide-elkargoen esparruan onartutako eskumen-banaketara egokitzeari dagokionez. idatzi-zati horretan honako hau xedatzen da: "Kiroleko Profesionalen Erregistro Ofizialean inskribatzeko baldintzak eta, hala egokituz gero, **kolegiatzekoak ezin zaizkie eskatu administrazio- edo lan-zuzenbideak araututako zerbitzu-harreman baten bidez administrazio publikoari lotutako profesionaleri**. Hala ere, profesional horiek erregistro horretan inskribatu behar dira, edo, hala egokituz gero, kolegiatu egin behar dira, lanbidean pribatuki jarduteko".

¹⁴ KA-ren 89/2013 Epaia, abenduaren 15koa (2. OJ): "c) Hortaz, estatu-legegileari dagokio zehaztea zer lanbidetan aritzeko den beharrezkoa kolegiatzea, eta hori 25/2009 Legearen 5.5 artikulua eta laugarren xedapen iragankorrak (RCL 2009, 2556) lanbide-elkargoei buruzko Legearen 3.2 artikuluan (RCL 1974, 346) egindako aldaketan aurreikusitako moduan.

«Abenduaren 22ko 25/2009 Legeak egindako erreformaren aurretik, .. otsailaren 13ko 2/1974 Legeak lanbide-elkargo eredu bakarra finkatzen zuen, derrigorrez kolegiatzea ezaugarri zuena, profesionalak kolegiatzera behartuta zeudelako "lanbide kolegiatuetan jarduteko". Erreformaren ondoren, estatu-legegileak bi erakunde korporatibo mota taxutu ditu, borondatezkoak eta derrigorrezkoak. Derrigorrez kolegiatzeko baldintza lanbidean aritzen hasteko oztopoa da, eta interes publiko bereziko gaiak larri eta zuzen eragiten zaien kasuetara mugatuta utzi behar da, hau da, besteak beste, osasunaren eta osotasun fisikoaren babesari edo pertsona fisikoaren segurtasun pertsonal edo juridikoari eragiten zaien kasuetara, eta kolegiatzeak zerbitzuen hartzaileak hobeto defendatzeko lanbide-jardunaren kontrola eraginkorki egiteko tresna dela erakusten duen kasuetarako, arau honetako bertako laugarren xedapen iragankorretik ondorioztatzen den bezala. Hitz batean, abenduaren 22ko 25/2009 Legeaz geroztik, borondatezko lanbide-elkargoak dira eredu komuna, eta estatu legegileari dagokio, 3.2 artikuluan xedatuaren arabera, zehaztea zer kasutan eskatu behar den kolegiatzeko lanbidean aritzeko, eta, horrenbestez, zer salbuespen izan behar diren, salbuespenak derrigorrez kolegiatzeko arauaren norainokoa mugatu baino ez baitute egiten, eta arauaren nahitaezko osagarri baitira. Estatu-lege baterako uzten da zehaztea zer lanbidetan aritzeko den beharrezkoa kolegiatzea, eta laugarren xedapen iragankorrean aurreikusten da ezen, legea indarrean jarri eta hamabi hileko epean, epea nasaiki gaindituta dagoela, Gobernuak lege-proiektu egokia igorriko duela Gorteetara, eta, aurreikusitako legea onartzen ez den bitartean, kolegiatzea derrigorrezkoa izango dela sorrerako legeak hala xedatuta daukan lanbide-elkargoetan."

Duela gutxi, KA-k 150/2014 Epaia eman du, irailaren 22koa, eta epai horrek tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko Eusko Legebiltzarraren 18/1997 Legearen 30.2 artikuluko hasierako tartekiaren aurka planteatutako konstituzio-kontrakotasuneko arazoa ebatzi du, tartekian hau esaten baitzen: «Administrazio publikoarekin administrazio-zuzenbidean edo lan-zuzenbidean oinarritutako zerbitzu-harremana duten profesionalen ezin izango zaie baldintza hori — *kolegiatzea*— eskatu». Tarteki hori Konstituzioaren kontraketatzen da:

(3. OJ) "(...) honako hau ondorioztatu behar dugu, orduan esandakora igorrita: «aurkatutako tartekiak, enplegatu publikoak derrigorrez kolegiatetik salbuestean, Administrazioaren kontura ari badira lanbidean, lanbide-elkargoei buruzko estatu-legean jasotzen ez den salbuespen bat ezartzen du». Izan ere, «Estatuak eskumena izanik derrigorrezko kolegiatzea ezartzeko [EK-ren 149.1.18 eta 36. artikuluen arabera, EK-ren 149.1.1 artikuluan den bezainbatean], eskumena du, halaber, enplegatu publikoei, eraginpean izan daitezkeen interes orokor jakinei erreparatuta, eragiten dieten salbuespenak ezartzeko» (guztienatik, KA-ren 2/2013 Epaia, urtarrilaren 17koa, 8. OJ)".

Aurreproiektuaren 10. artikuluko 3. idatzi-zatian, Administrazioaren zerbitzuko langileentzako kolegiatze-salbuespenean, "hala egokituz gero" tartekia gehitzen bada ere, ñabardura hori hain ordokorra da, non ez baita aski Estatuak gai-alor horretan duen eskumena babesteko. Horregatik, idatzi-zati hori Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzkoa baino ez izatea gomendatzen dugu.

Era berean, "Hala ere, **profesional horiek** erregistro horretan inskribatu behar dira, **edo, hala egokituz gero, kolegiatu egin behar dira, lanbidean pribatuki jarduteko**" tartekiari dagokionez, eta lanbidean soil-soilik pribatuki jarduteko kolegiatzeaz den bezainbatean, esan behar dugu ez datorrela bat KA-k Lanbide Elkargoei buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 1.3 artikuluari ematen dion interpretazioarekin (aipatu artikulua horri abenduaren 22ko 25/2009 Legeak, zeinaren bidez zenbait lege aldatzen baitira, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko legera egokitzeko, eman zion idazkera kontuan hartuta). Honako hau dio otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 1.3 artikulua:

«Korporazio horien funtsezko helburuak dira lanbideetako jarduna antolatzea; lanbideen ordezkaritza instituzional eskusiboa, kolegiatzea derrigorrezkoa dutenean; kolegiatuen interes profesionalen defentsa; eta beren kolegiatuen zerbitzuen erabiltzaileen eta kontsumitzaileen interesen babesa; **hori guztia Administrazio Publikoak, funtzionario-harremanaren ondorioz, daukan eskumena baztertu gabe.**»

Bada, KA-k ez du interpretatu "Administrazio Publikoak, funtzionario-harremanaren ondorioz, daukan eskumena baztertu gabe" hori Administrazioaren zerbitzuko langileen kasuan kolegiatzeko beharrezkotasunarekiko salbuespen moduan, honela bazik (KA-ren 3/2013 Epaia, urtarrilaren 17koa, 6. OJ):

«Elkargo-erakundea profesionalei lanbidearen gainean emandako funtzio publikoen aginduan oinarrituta dago; izan ere, 1.3 artikulua dioen bezala, helburu hauek ditu: lanbideetako jarduna antolatzea; lanbideen ordezkaritza instituzional eskusiboa, kolegiatzea derrigorrezkoa dutenean; kolegiatuen interes profesionalen defentsa; eta beren kolegiatuen zerbitzuen erabiltzaileen eta kontsumitzaileen interesen babesa. Lanbidearen gaineko funtzio publikoak, zeinen adierazgarri nagusia deontologia eta etika profesionala baitira, eta, horrekin batera, jardun profesionalean gertatzen diren desbideratzeen kontrola erakunde horiei ematea, eta ez Administrazioari, korporazio-oinarria osatzen duten profesionalen trebezian eta esperientzian oinarrituta dago. Horregatik, aldeek esandakoaren kontrara, **«Administrazio Publikoak, funtzionario-harremanaren ondorioz, daukan eskumena baztertu gabe» esamoldeak ez du barruan hartzen funtzionario publikoen derrigorrezko kolegiatze-araubidearen bazterketa, kautela bat baizik, bermatu nahi duena lanbidea antolatzeko elkargo-eskumenen erabilerak, eskumenak elkargo profesionalei soilik esleitzen zaizkielarik, eta, beraz, profesionalei beraiei, ez duela ordezkatzeko edo eragozten Administrazioak enplegatzaile den aldetik, bere langileei dagokienez eta salbuespenik gabe, daukan eskumenen erabilera, langileek lanbide kolegiatuen berezko jarduerak egin zein ez.** Kautela hori bereziki beharrezkoa da, 1.3 artikuluan lanbide-elkargoei esleitzen zaizen lanbide-jarduna antolatzeko eginkizuna ez delako bakarrik lanbidean «libreki jarduteari» buruzkoa, bai eta «lanbidean jarduteari» buruzkoa ere, norberaren kontura edo besteren kontura izanda ere.

Ezin da aintzat hartu gabe utzi ezen lanbidean «libreki jarduteari» buruzko aipamena, elkargoen eginkizun antolatzailearen xede zela iritzita, nahiz eta lanbide-elkargoei buruzko lege-proiektuan hasieran agertu, kendu egin zela izapidetu bitartean, pentsatzen zelako lanbide-elkargoen eginkizuna lanbidean jarduteko edozein eraren antolaketa deontologikoa eta arautze orokorra zela, hau da, libreki jardunez nahiz administrazio-, erakunde- edo lan arloko mendekotasun-araubidean arituz.

Estatuaren eta autonomia-erkidegoaren arteko eskumen-banaketari egokitzen zaion zalantza sortzen dira, halaber, aurreproiektuaren 10.1 artikuluari dagokionez, honako hau dioenean: “Kasua kasuko profesionalen elkargorik baldin badago bakarrik eskatuko da elkargoko kide egiteko baldintza. Elkargoak, gainera, elkargokideen zerrenda eman beharko dio erregistroari, informazioa edukitzeko eta estatistikak egiteko”. Tarteki hori bestela adierazi beharko litzateke, eta ez litzateke inolako baldintzarik ezarri behar kolegiatzearen beharrezkotasuna edo borondatezotasuna zehazteko.

Era berean, 1. artikulua horri dagokionez, idatzi-zati hau ere kentzea gomendatu behar dugu: “Lanbide-elkargo batek lege honetan araututako lanbideak bildu ahal izango ditu”, elkargo bat edo batzuk sortzeko erabakia asmo horrekin zerikusia duten lanbide-kolektiboen nahiaren mende baino ez delako egongo, eta hori tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 4. artikuluan xedatua betez:

«1. Lanbide-elkargoak lege bidez sortuko dira, interesa duten profesionalak eskatuta, eta hurrengo lerrokadan esaten dena baztertu gabe.

2. Elkargoek berek sustatuko dituzte lanbide bereko lanbide-elkargoen bat-egitea, xurgatzea, bereizketa, izen-aldaketa eta d̄segitea, kasuan kasuko estatutuetan xedatuaren arabera, eta horiek guztiak dekretu bidez onartu beharko dira, eragindako gainerako elkargoei entzun ondoren.
3. Elkargo bakoitzarentzat zehaztutako lurralde-esparruan, ezingo da sortu lanbide bereko beste elkargorik.
4. Lanbide bereko zenbait elkargo sortuta daudenean nazio-mailatik behera, Kontseilu Orokor bat egongo da, eta haren zer-nolakoa eta eginkizunak 9. artikuluan zehaztuta daude.
5. Ezingo zaio elkargo bati eman aurretik dauden beste elkargo batzuen izen bera edo antzekoa, edo kideek daukaten titulazioarekin bat ez datorrena, edo nahasgarria izan daitekeena, elkargoko profesionalen nortasunaz den bezainbatean.
6. Lege honetan xedatutako moduan sortu eta gobernu-organoak eratu ondoren izango dute nortasun juridikoa elkargoek.»

Aipatu tartekiak, nahitaezkoa ez izateaz gain —estatu-ko legedian jasotako aukera bat izateagatik, eta, azken batean, eragindako kolektibo profesionalen borondatearen mende egoteagatik—, zāntzak sortzen ditu bere eskumen-egokitzapenaz, kolegiatze-motaren edo -ereduaren definizioarekin oso lotura handia duen alderdia delako, eta kontu hori Estatuari esleitutako eskumenetako bat delako (KA-ren 3/2013 Epaia, urtarilaren 17koa):

«Estatu-eskumenaren zatia da zehaztea, kolegiatze-motan oinarrituta, zein izan daitezkeen lanbide-elkargoen ereduak, baina bai eta erabakitzea ere zer baldintzatan sor ditzaketen autonomia-erkidegoek mota bateko edo besteko korporazio-erakundeak. (...)«Interesgarria da gogoraraztea Konstituzioak ez duela ezartzen lanbide-elkargoen eredu bakarra bere 36. artikuluan. Asoziazio- eta korporazio-ezaugarriak dituen figura berezi horretan, estatu-legegileak, Administrazio publikoen oinarritzko arauak formalizatzeko daukan eskumena baliatuz (KA-ren 149.1.18 artikulua ohia), oso egoera desberdinak bil ditzake, hala nola funtzio publikoak monopolio-egoeran baliatzeari dagozkionak, edo merkatuko lehia askeari dagozkionak, lanbide liberal gisa, eta kolegiatzea derrigorrezkoa edo askea izanda. Era berean, borondatez kolegiatzeko legezko kasuetan, ez du zertan izan lanbidean jarduteko gaitzen duen baldintza. Eta, era berean, posible da lanbide-elkargoek beren gain hartzea egiazki lanbide tituludunik lotuta ez daukaten jardueren defentsa. Kontu horiek guztiak estatu-legegileak libreaki arau ditzake, Konstituzioaren 36. artikulua garatuz eta 149.1.18 artikuluko eskumen-estaldura baliatuz».

Bestalde, erregistroa sortzeari dagokionez, esan behar da kontraesan bat dagoela 2. idatzi-zatian. Alde batetik, badirudi erregistro-sistema bat sortu nahi dela, baina, azken tartekian ("Erregelamenduz ezarri beharko dira erregistroaren egitura, zereginak eta publikotasun- eta funtzionamendu-erregimena"), ematen du xedea areago litzatekeela erregistro-organo bat sortzea.

Erregistro-sistemaren eta erregistro-organoaren arteko aldea funtsezkoa da, Aholku Batzorde Juridikoak azaldu bezala, besteak beste 066/2003 Irizpenean:

"21. Teknikoki, bereizi egin behar dira (gai-alorrari buruz proiektatutako edo etorkizuneko arautze orotan), alde batetik, erregistroa, funtzioaren, sistemaren, erakundearen edo erabili nahi den beste edozein kontzeptu abstrakturen ikuspegitik, eta, bestetik, hura kudeatzeko duen organoa. Ondorio horietarako, berekin balio-arazorik ez ekarri arren, izen bera izateari buruzko birplanteamendua iradokitzen dugu.
(...)

24. Batzordearen ustez, argi eta garbi eta koherentziaz bereizi behar dira dekretuaren testu osoan, alde batetik, Aurreratutako Borondateen Euskal Erregistroa sortzea zentzu funtzionalean, lege behartutako bakarra izaki, eta, bestetik, hura kudeatzeko organo bat (mantentzen den aukera bada) sortzea. Puntu honetan, berriz esaten dugu gogoeta egin behar dela izenak berak izateari buruz (argigarria litzateke bulegoa edo antzekoa aipatzea, Aurreratutako Borondateen Euskal Erregistroa).

25. Ondorioz, bataren eta bestearen araubide juridikoak bereiziko lirateke. Hartara, organoak eskumenak ditu (...), egoitza (...), funtzionarioak (...) eta abar. Erregistro-funtzioa, berriz, arduradun baten agintepean betetzen da (...), euskarri jakin batean (...), esparru batekin (...), eta abar."

Hortaz, badirudi hasierako ideia Erregistroa sistema bat izatea dela, edo Kirol Zuzendaritzari esleitutako erregistro-eginkizuna. Hala ere, 10.2 artikulua irakurrita, zalantzazkoa da zerbitzu sustatzaileak argi duen zein den erregistro horretarako nahi duen izaera juridikoa.

Erregistro-sistema bat sortu nahi izatera, 10. artikuluko 2. idatzi-zatia zuzendu beharko litzateke, eginkizun horiek, atxiki beharrean, Kirolaren Euskal Eskolaren esparru funtzionalaren barruan kokatzeko. Gainera, inoiz ere ez litzateke egokia izango Kirolaren Euskal Eskolari *atxikitzea*, eskola hori, berez, ez delako administrazio-unitate bat, Kirol Zuzendaritzaren administrazio-zerbitzu bat baizik.

Horrenbestez, berriz esan behar da artikulua hori bestela idatzi behar dela, guztiz argi egon dadin erregistroa sistema izatea pentsatzen dela, hau da, zentzu funtzionalean pentsatzen dela, eta ez administrazio-organo bat izatea, legozkioken eskumenez, langileez eta abarrez hornituta.

⇒ **11. ARTIKULUA (LANBIDEAN JARDUTEKO PRINTZPIOAK ETA BETEBEHARRAK); 13. ARTIKULUA (ERANTZUKIZUN ZIBILA BERMATZEA); 15. ARTIKULUA (LANBIDEETAN LEGEAREN BABESPETIK AT JARDUTEA).**

Hiru artikulua (11.a, 13.a eta 15.a) gai berari buruzkoak dira: lanbide-jardunean bete beharreko betebeharrak; eta, aldi berean, zerikusi zuzena dute azken xedapenetako lehenengoarekin ("Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. artikulua aldatzea") eta azken xedapenetako bigarrenarekin ("Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen

128. artikulua aldatzea"). Artikulu horiek osatzen dute EAEko kiroleko lanbideetan sartzeari eta jarduteari lotutako zehapen-araubidea.

Beren edukiari dagokionez, egokitzen jotzen da honako ohar hauek egitea:

Kontzeptualki, ikuspuntu juridikotik, ez dira gauza bera printzipioak eta betebeharrak. Bereizketa horrek, halaber, ondorio juridiko desberdinak ditu bata eta besteak aplikatzean. Hala ere, 11. artikuluan, "Lanbidean jarduteko printzipioak eta betebeharrak" izenpean, zerrenda bakarra agertzen da. Gure ustez, egokiagoa litzateke printzipioak eta betebeharrak zein bere aldetik aipatzea. Izan ere, printzipio gidariak lanbide-jarduna inspiratu eta gidatu egiten dute, baina ez badira betetzen, horrek ez dakar berekin inolako zehapen juridikorik, kasuan kasuko printzipioaren aurkako jokabideen tipifikatze egokia inspiratu ezean, eta, horrenbestez, betebeharrak juridiko bihurtu, orduan, berekin, urratuz gero, diziiplina-, administrazio- edo zigor-zehapen egokia ekarriko luketelako.

Adibidez, 11. artikuluan, nahasita daude kirol-jarduna inspiratu behar duten printzipio gidariak eta beste lege-testu batzuetatik (Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legetik, esate baterako) ateratako betebeharrak juridikoak, zeinen ez-betetzea berariaz tipifikatuta eta zehatuta baitago lege horietan. Gure ustez, ez da beharrezkoa betebeharrak juridikoak errepikatzea, haien ez-betetzeak berekin zehapena ekarri gero beste lege-testu batzuetan. Lege honek ez luke izan behar beste lege-testu batzuetan jasotako betebeharrak juridikoak gogorarazteko lekua, baina lege-hutsune bat betetzeko mekanismoa, hutsune hori, memorian esaten den bezala, arindu behar delako sektore arautu gabe hau antolatze eta, beraz, araututako lanbide-jardueren hartzailen osasuna eta segurtasuna babesteko.

Printzipio orokorrekin batera, betebeharrak zehatzago batzuk xedatzen dira, baina ez dute ondorio juridikorik, betetzen ez badira. Horrenbestez, aurreproiektuan ondoriozko zehapenik ez jasotzeak eraginda, antzua da arazoa betebeharrak zehatz bat ezarrita desagerrarazteko hasierako helburua. Hortaz, zalantzarikoa da betebeharrak hori lege-testuan jasotzeak duen eraginkortasuna. Hitz batean, 11. artikuluko zerrenda gehiago dagokio kasuan kasuko lanbide-elkargoek edo lanbide-elkartek onartu beharreko kode deontologiko bati, Legeak berak onartu beharreko bati baino.

Horrekin, honako hau esan nahi dugu: alde batetik, ez da egokia adierazpen huts moduan jasotzea beste lege-testu batzuetan tipifikatuta dauden jokabideak; bestetik, komeniko litzateke printzipio gidariak eta betebeharrak juridikoak argi bereiztea; azkenik, antzua da betebeharrak juridikoak aurreikustea, bete ezean ondorio juridikoa zein izango den esan gabe, eta, are gehiago, horrek zalantza jartzen du betebeharrak horiek lege-testu batean jasotzeko premia bera, betebeharrak horiek batez ere orogarri etiko-profesionala bihurtzen direlako, gehiago dagokiona lanbide-elkargo edo -elkarteen autonomia eta ahalmen antolatzaileari.

Hortaz, printzipio gidariak zehaztu beharko lirateke alde batetik (11. artikuluan egin liteke), eta, bestetik, lanbide-jarduna arautzearen ondorio diren edo arautze horri hertsiki lotuta dauden betebeharrak juridikoak

(adibidez, erregistro egokian inskribatzea, lanbide-jarduera ziurtatzeko betebeharra...); ez, ordea, kirol-jardunarekin zerkusia duten betebeharrak, beste lege-testu batzuetan tipifikatuta daudelako. Lanbidean sartzeari eta jarduteari dagozkion betebeharrak juridikoak zehaztu ondoren, aurreproiektu hau leku egokia da argi uzteko zein diren betebeharrak horiek ez betetzearen ondorio juridikoak. Gure ustez, hori ondo egin da betebeharrak hauen kasuan: sartzeko lanbide-kualifikazioak betetzea (15. artikulua); kolegiatzeko betebeharra betetzea (10. artikulua) derrigorrezkoa den kasuetan; eta lanbide-jarduna ziurtatzea (13. artikulua). Hiru kasu horietan argi zehaztu da zein diren araututako gaiari dagozkion betebeharrak juridikoak, eta ondorio juridikoak aurreikusi dira (azken xedapenetako lehenengoa eta bigarrena).

Hitz batean, legearen xedea gutxieneko batzuk arautzea da, lanbide-sektore jakin batzuk babesteko, lanbide-jardueren kalitatea bermatzeko eta, azken batean, hartzaileen osasunerako eskubidea bermatzeko. Horretarako, sartzeko eta jarduteko baldintza batzuk arautzen dira, botere publikoaren ustez funtsezkoak direlako herritarren osasuna eta segurtasuna babesteko. Ondorio horietarako, eta helburu hori lortzen laguntzeko, arautze-ahalegina baliatu egin beharko litzateke argi zehazteko zein diren jarduteko printzipio espezifikoak eta betebeharrak juridikoak, lanbide horietan sartzeko eta jarduteko betebeharrak mugatuta. Hasieran lortu nahi zen helburuaren ikuspuntutik, antzua da kirol-jardunari buruzko beste lege-testu batzuetan jasota dauden betebeharrak orokorrak ekartzea testura; horregatik, zerbitzu sustatzailea honako hauek egitera bultzatu nahi dugu: profesional horiek sartzeari eta aritzeari buruzko betebeharrak espezifikoak —eta lanbide-jardunaren kalitatea bermatzeko ezarri nahi diren funtsezko baldintzekiko korrelatiboen— zerrenda laburra egiteko aukera balatzera, eta bete ezean aplikagarria litzatekeen zehapen-araubide zehatza aurreikustera.

Maila apalagoan, esan behar da hobeto idatzi beharko litzatekeela c) idatzi-zatia, "fisikoki zuzenean han egonda" errepikakorra delako; gure ustez, aski da "fisikoki han egonda" Era berean, "lege honetan aurreikusten diren kasuetan izan ezik" tartekia ez da argigarria, legearen ezein zatitan ez delako argitzen zein diren kasu horiek.

Geroago, k) idatzi-zatian, gaztelaniaz, "hombre" hitzak pluralean egon beharko luke.

⇒ **12. ARTIKULUA. LANBIDE-SOZietATEEN BIDEZ JARDUTEA.**

Hamabigarren artikulua ez du inolako espezifikotasunik sartzen kiroleko lanbide-jarduerak arautzeko dagokionez, eta legedi orokorrera bidaltzen du, profesionalak lanbide-sozietateetan antolatzeak aukerari dagokionez. Aurreikuspen berezi bakarra hau da: "Kirol arloko lanbideen jardunean tituludunen presentzia fisikoa bermatzeko hartu beharreko neurriak hartu beharko dituzte lanbide-sozietateek, lege honetan aurreikusten diren kasuetan izan ezik".

Ez da ondo ulertzen zein den artikulua honen helburua, sozietate-mota jakin bat ekartzen delako lege-testura, baina profesionalk, eredu horretaz gain,

beste edozein balia dezakete, betiere indarreko legedian aurreikusitako baldintzak betez gero. Zerbitzu sustatzaileak berak dioen bezala: "Lanbide jakin batzuk arautzen dituzten legeek lanbide horiek berezko eta espezifiko dituzten xedapenak antolatu besterik ez dute egin behar, eta, gainerako guztian, lanbide-jardunaren esparru komunaren mende egon behar dute".

Sozietate-eredu bat izateko berezko betebeharra ere ez dago justifikatuta, ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legeak lanbide-antolakuntzako beste modu batzuk aurreikusi dituelako oraindik orain, ezinbestean sozietate-motakoak ez direnak, hala nola "erantzukizun mugatuko ekintzailea".

Gainera, sartutako berezitasun bakarra (12.3 artikulua) babestuta geratuko litzateke aurreproiektuan zehar, lanbidean jarduteko fisikoki bertan egoteko eskatzen denean, baldintza hori saihestezina izaki araututako kirol- eta lanbide-jardueran aritzean, lanbidean jarduteko hautatutako antolaketa-mota edozein izanda ere.

Hitz batean, 12. artikulua kentzea gomendatzen da.

⇒ **14. ARTIKULUA. BESTE ESKAKIZUN BATZUK.**

Zerbitzu sustatzaileari honako ohartarazpen hau egiten zaio 14. artikuluko 1. idatzi-zatiari dagokionez, azter dezan:

Hamalagarren artikulua bere egiten du bere garaian Generalitatearen eta Estatuaren arteko Alde Biko Batzordeko Gatazken Arau-jarraipen, Prebentzio eta Konponketarako Azpibatzerdean Kataluniako kirol-lanbideen jardunbideari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legeari dagokionez hartutako erabakia, beste lege-testu batzuetan egon daitezkeen lanbidean jardun aurreko baldintzetako edozein onartzekoa: «... bi aldeek onartzen dute legean zehaztu gabeko aurretiazko baldintzak egon daitezkeela lanbide horietan aritzeko, Gorputz Hezkuntzako irakasle-lanbideari dagokionez gertatzen den bezala, adibidez, nahitaezkoa baita, esparru publikoan aritzeko, Estatuko irakasle-kidego bateko kide izatea».

Generalitatearen eta Estatuaren arteko akordioaren xedea zen Kataluniako lege-aurreproiektuaren konstituzio-kontrakotasun posibleari buruz sortzen ziren zenbait zalantza argitzea, baina autonomia-erkidegoa lanbideetan jarduteko kualifikazio-baldintza jakin batzuk arautzen hasteak ez dakar berekin tazituki salbuestea beste arau batzuen arabera eska daitezkeen beste edozein bete behar izatetik.

Nolanahi ere, 14. artikulua edukia birkokatu egin liteke 2. artikulua barruan ("Kirol arloko berezko lanbideak eta esparru funtzional orokorra").

⇒ **16. ARTIKULUA. ARAU-ESPARRU ERKIDEA. LEHIA ASKEA.**

Hamaseigarren artikuluan, lanbideetan jarduteari eta lehiari buruzko araudi orokorrera igortzen da. Biak zeharkako gaiak dira, eta zerikusi zuzena dute aurreproiektuan araututako gaiarekin.

Lehenengo idatzi-zatian hau xedatzen da: "Lege honetan ezarri ez den guztian, erakunde eskudunek lanbideetan jarduteaz onartutako arau-esparru erkideak ezartzen duena bete beharko da lege honek arautzen dituen lanbideetan jardun ahal izateko". Hortaz, ordezeko arau bat ezartzen da, zeina, Lege Egitasmoak, Dekretuak, Aginduak eta Erabakiak egiteko irizpideak onartzen dituen 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Akordioan aurreikusitakoaren arabera, azken xedaperetan jaso beharko bailitzateke.

Artikulu honetako beste bi idatzi-zatiak lanbide-jarduerak lehiaren defentsa-esparruan indarrean dauden legeen mende egoteari buruzkoak dira, eta, zehazki, kirol-federazioei agintzen zaie ez dutela egin behar lehia murrizten duen ezer, eta, bereziki, ez dutela inola ere diskriminatu behar federazioenak ez diren zentroetan lortutako prestakuntza.

⇒ **16.2 ARTIKULUA (LEHIAREN DEFENTSARI BURUZKO LEGEEN APLIKAZIOA), 17. ARTIKULUA (BESTE ESTATUETAN LORTUTAKO LANBIDE-KUALIFIKAZIOAK ONARTZEA) ETA 18. ARTIKULUA (KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILAEN OSASUNA ETA SEGURTASUNA BABESTEA).**

Agindu horiek aplikagarria den araudi espezifikorako igortze orokorra baino ez dute egiten (testuak oro har daukan arazoa), eta horregatik, gure ustez ez dira beharrezkoak eta eraginkorrak. Legislatzea, beste arau-testu batzuetara igortzeko bada, argi eta garbi premiarik gabekoa da, eta araugintza onaren aurkakoa, are gehiago igorpen ordorren bidez egiten bada, zehatz araututa dagoen gai espezifikoko bati buruz kontu orokorrak eta partzialak sartzeko.

Araugintza egokiak arauak ugaritzea eta sakabanatzea saihesti behar du, eta biltzen ahalegindu, bai arauaren hartzaileek bai araua garatu edo aplikatu behar duen eragile publikoak hobeto uler dezaten gai-alor jakin batean indarrean dagoen esparru juridikoa. Era berarekin, sakabanatzea baztertuta, arauaren aplikazioa egokiagoa eta eraginkorragoa izatea lortzen da.

Horregatik guztiagatik, zerbitzu sustatzaileari gomendatzen diogu ahalegintzeko proposamenaren xedea mugatzen, eta arautzeko gai-alorrean espezifikokoak diren eta egiazki zerbait gehitzen, berritzen duten kontuak, beharrezkoak direnak araututako lanbideen jarduera hobetzeko, eta, azken batean, lanbide-jarduera horren azken hartzaileen osasuna eta segurtasuna babesteko.

⇒ **XEDAPEN GEHIGARRIAK.**

Hamabi xedapen gehigarri aurreikusi dira. Gobernu Kontseiluak 1993 martxoaren 23an onartu zituen legeen, dekretuen, aginduen eta ebazpenen proiektuak egiteko irizpideak, eta erabaki horrek arautzen du zer eduki eman behar zaien artikuluak osatzen dituzten xedapenei. Ildo horretatik, xedapen gehigarriak bada, eduki hau izango dute, ordena honetan:

- a) Testu artikulatuan sartu ezin diren lege-erregimen bereziak: lurraldekoak, pertsonalak, ekonomikoak eta prozesu-takoak. Testu artikulatuan orokorrean arautu diren egoera juridikoei buruzkoak diren eta, gainera, xedapen-zatiaren artikulua batean edo kapitulu batean sartzeko moduko garrantzirik ez daukaten erregimen bereziak bakarrik sartzen dira hemen.
- b) Arau juridikoak sortzea helburu ez duten mandatuak eta jardunak. Horiek ezartzen badira, agindua zer epetan bete behar den ezarriko dute.
- c) Hondar-aginduak, arauaren beste alde batean kokatu ezin direnak. Hondar-agindu kalifikatzearena besterik egin ezin denean erabiliko den baliabidea da

Lehen eta bigarren xedapen gehigarriak Eusko Jaurlaritzari agintzen diote lankidetzeta-mekanismoak prestatzeko kasuan kasuko elkargo-erakundeekin, kirol-federazioekin eta EAEko antzeko beste kirol-erakundeekin, kirol-jardun osasungarria sustatzeko, eta berdintasun-politikak bultzatzeko arau honen xede diren kirol-lanbideetan sartzeari eta jarduteari dagokienez.

Hirugarren xedapen gehigarriak kirolarekin zerikusia duten boluntariotza-jarduerak (eta antzekoak) hala nola lehiaketa ofizialetako entrenatzaile-jarduna garatzeko behar den kualifikazioa erregelamendu bidez arautzeko mandatua jasotzen du. Komeniko litzateke xedapenaren titulua zuzentzea, boluntariotza-jarduerak eta antzekoak baino ez baititu aipatzen, eta edukia, ordea, zabalagoa da, eta entrenatzaile-jarduerak ere aipatzen ditu.

Laugarren xedapen gehigarriak bidea irekita uzten du geroago zehazteko zer beste kualifikazio izango liratekeen baliagarriak lanbidean sartzeko. Zehazte hori kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren esku uzten da.

Xedapenaren edukia zerikusi zuzena du **zazpigarren xedapen gehigarriak** jasotakoarekin; horregatik, xedapen hau laugarrenarekin batera berriz adierazteko gomendatzen diogu zerbitzu sustatzaileari.

Bestalde, gogorarazi behar da ezen, lege-proiektu, dekretu, agindu eta ebazpenak egiteko jarraibideetan xedatua betez, jarduteko edo arauak osatzeko aginduak, hau da, garatuak izateko arau edo agintari bati deitzen diotenak, azken xedapenetan kokatu beharko liratekeela. Araugintzako teknika hori kontuan hartu beharko litzateke hirugarren, laugarren eta zazpigarren xedapenetan aurreikusitako ondoriozko erregelamenduzko garapenera igortzeaz den bezainbatean.

Bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien edukia artikuluetan txerta liteke, agindu bat, 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren aipatu Erabakiak xedatu bezala, hondarrekotzat jotzeak, xedapen gehigarrietan errotzeko ondorioetarako, salbuespena izan beharko lukeelako. Hortaz, zerbitzu sustatzaileari gomendatzen diogu aztertzeko 5. eta 6. xedapenen edukia artikuluen barruan kokatzeko aukera, araubide

juridiko bereziak baino areago, lanbideen esparru funtzionalaren berezko edukia eta prestakuntzako gutxieneko edukiak direlako.

Lege-testua errazago irakurtzeko eta ulertzeko, **zortzigarren xedapen gehigarriaren** edukiak ere leku egokia izan lezake artikuluetan; zehazki, 2. artikulua barruan.

Beste horrenbeste esan daiteke **bederatzigarren xedapen gehigarriaz**, zeinean goi-mailako kirol-lehiaketak definitzen baitira. Definizio hori ez dagokio araugintzako arauen arabera xedapen gehigarrietan agertu beharko luketen edukietako ezeini. Bestalde, ez da ulertzen zergatik egiten den geroagoko erregelamenduzko garapenerako deia, legean zehaztutako definizio bat egokitze ondorioetarako. Geroko erregelamenduzko ahalmenaren esku utz liteke legean aurreikusitakoaren garapena, baina ezin dira erregelamendu bidez aldatu legez emandako definizioak.

Hamargarren xedapen gehigarriaren izena gehiago egokitu beharko litzaioke edukiari, berori eskola-adinean dauden kirolariek egiten diren kirol anitzeko jardueren esparruko boluntariotzako-funtzioei buruzkoa delako, zehaztu gabe monitore-jardueri buruzkoa denik (borondatezko entrenatzaileei buruzkoa ere ote den zalantza sor liteke); horregatik, xedapena monitorei buruzkoa soilik balitz, hori xedapenaren zati handiengan ere aurreikusi beharko litzateke.

Hamaikagarren eta hamabigarren xedapen gehigarriak xedapen bakar batean bil daitezke.

⇒ **XEDAPEN IRAGANKORRAK.**

Lehen xedapen iragankorrak itxurazko behin-behineko araubide bat jasotzen du aurreproiektuan araututako lanbide-jarduerak jarraituki egiten dituztenentzat.

Deigarria da bereziki 2. idatzi-zatia. Agindu hori idatzita dagoen modua ("**Eusko Jaurlaritzako sailek kasuan kasuko lanbide-gaitasunak izatea egiaztatzeko administrazio-mekanismoak eta -prozedurak ezarriz gero**, behartuta egongo dira egiaztapen hori erregelamendu bidez finkatutako epean lortzera") dela eta, ez dago ziurtasunik (ez da adierazten gobernuari egindako agindu moduan) egiaztatze-mekanismo egokiak ezartzeari buruz. Ziurgabetasun juridikoa handia da; izan ere, xedapena nola dagoen idatzita kontuan hartuta, aditzera ematen du litekeena dela Eusko Jaurlaritzako sailek aintzatespen-mekanismo egokirik ez ezartzea, eta, orduan, ondorioa litzateke ezen beren lanbidean jardun ohi dutenek, arauan eskatutako tituluak izan gabe, ezingo luketela jarraitu lanbidean jarduten, aintzatetsiak izateko erregelamenduzko garapena gertatzen ez den bitartean.

Funtsezkoa da araubide juridiko iragankorra zehaztea lanbide-jardunean kalitate-bermeekin ari direnentzat, tarterik utzi gabe zehaztugabetasun eta ziurgabetasun juridikoari. Iragankortasun-araubide horrek, alde batetik, ziurtatu beharko luke lanbidean jardutea, arauak eskatutako kualifikazio-baldintzek eraginkortasuna izan arte, eta, bestetik, agindu argi bat izan

beharko luke gobernuarentzat, lege-araubide berrira egokitzeko mekanismoak aurreikus ditzan, diharduten profesionalak, legea indarrean jartzen denean, bermatua izan dezaten araura egokitzeko aukera.

Era berean, lehen xedapen iragankorreko lehen idatzi-zatiaren idazkera zuzentzeko gomendatzen dugu, idatzita dagoen moduan uler litekeelako Legea indarrean jartzen den unea dela baldintzak egaztatzekoa. Hala ere, gure ustez, benetan hau esan nahi izan da:

“1. Lege honetan xedatutako kualifikazio-baldintzak ez zaizkie eskatuko lege hau indarrean jartzean araututako lanbide-jarduerak jarraituki edo aldian behin izan gabe, frogatzeko moduan eta erregelamenduz jarritako baldintzak betez egiten zituztela egiaztatzen dutenei”.

Bigarren xedapen iragankorrak behin-behineko araubide bat dauka, monitore-, entrenatzaile- eta zuzendari-lanbidea dela eta, kirol-modalitate edo -diziplina batez den bezainbatean, jarritako kualifikazio-baldintzen galdagarritasunari begira; hartara, legean aurreikusiako kualifikazioak galdagarriak izango dira kasuan kasuko kirol-modalitateetan kiroleko teknikari- eta goi-mailako kiroleko teknikari-prestakuntza ofizialak ezarri ahala. Hau da, xedapena idatzita dagoen bezala, badrudi honako baldintza hau jartzen dela lanbide horietan jarduteko aurreikusiako kualifikazioetako edozeinen galdagarritasuna indarren jartzeko: kasuan kasuko kirol-modalitate edo -diziplinei dagozkien kiroleko teknikari- eta goi-mailako kiroleko teknikari-titulazioak ezartzea.

Aurreikuspen hori, beraz, azken xedapenetako seigarrenean (bigarren idatzi-zatia) aurreikusiako lanbide-kualifikazioen galdagarritasuna indarrean jartzearen salbuespena da, idatzi-zati horretan esaten baita lanbide-kualifikazioak 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango direla galdagarriak; hartara, data horretatik aurrera jar liteke indarrean kualifikazioen galdagarritasuna, kirol-modalitate edo -diziplina bateko monitore-, entrenatzaile- eta zuzendari-lanbideez den bezainbatean. Are gehiago, gerta liteke ezen, kirol-modalitate- edo -diziplina zehatz batean ez bada inoiz ezartzen modalitateko kiroleko teknikari- edo goi-mailako kiroleko teknikari-prestakuntza ofiziala, inoiz ere galdagarria ez izatea legean agindutako kualifikazioa, eta, horrenbestez, haren justifikaziorik gabeko salbuespena izatea. Horregatik guztiagatik, zerbitzu sustatzaileari bigarren xedapen iragankorreko lehen idatzi-zati hori bestela emateko gomendatzen diogu. Bestelako idazkera hori honelako zerbait izan liteke: “Kasuan kasuko kirol-modalitateetako kiroleko teknikari- eta goi-mailako kiroleko teknikari-titulazio ofizialak honako lanbide hauetan jarduteko galdagarriak izango dira, dagozkien prestakuntza ofizialak ezartzen diren neurrian: kasuan kasuko kirol-modalitate edo -diziplineetako kirol-monitoreak, entrenatzaileak eta kirol-zuzendariak”.

⇒ **XEDAPEN INDARGABETZAILEA.**

Xedapen indargabetzaile orokor bakarra aurreikusten da (“Indargabetuta geratzen dira lege honetan jarritakoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko arau guztiak”). Idazkera hori erabaki honetan

aurreikusitakoaren aurkakoa da: lege-egitasmoak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egiteko irizpideak onartzen dituen 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Erabakia; izan ere, indargabetze-klausula orokorrik ez ezartzeko agintzen du.

Xedapen indargabetzaileetan «indargabetu diren xedapen edo arau-maila duten enuntziatu guztiei buruzko banan-banako zerrenda jasoko da... Indargabetzearen gai izan den arloari mugak ezarriko dizkion salbaguarda-klausula batez amaituko da zerrenda. Honako era horetakoa izango da klausula hori: "... eta honen aurkakoa den... arloko beste edozein xedapen...", baina inoiz ez da soilik ezarriko klausula orokor hau».

Nolanahi ere, proposamen hori *ex novo* arautzea denez —justifikazio-memorian adierazten den bezala—, xedapen indargabetzailea sartzeari benetan beharrezkoa den aztertze gomendatzen diogu zerbitzu sustatzaileari.

⇒ **AZKEN XEDAPENA.**

Azken xedapenetatik lehenak eta bigarrenak Euskadiko Kirolarena den ekainaren 11ko 14/1998 Legea aldatzen dute, bi administrazio-urraketa berri sartzeko, aurreproiektu honetan araututako kroleko lanbideetan sartu eta jardutearekin zerikusia dutenak.

Azken xedapenetatik hirugarrenean, ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari aurreproiektua garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Xedapen horrek aurreikuspen orokor bat jasotzen du. Aurreikuspen hori ulertutzat eman daiteke Autonomia Estatutuaren 29. artikuluan eta Jaurlaritzaren Legearen 16. artikuluan ere aipatzen delako izaera orokorrarekin. Horrenbestez, aurreikuspen horren aipamena ohikoa da araubide konparatiboan. Nolanahi ere, esan beharrezkoa da Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoak behin eta berriro eskatu duela kentzeko, araubideak berez xedatutakoa errepikatzen baitu legeko xedapen horrek (107/2003 ebazpena):

"(...) arauaren garapena gaitzeko ohiko klausula jaso du, eta Batzordeak errepikatu du ezabatu behar dela, arautzeko ahalmena Gobernu Kontseiluari ematen baitzaio (Autonomia Estatutuaren 29. artikulua eta Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. artikulua). Ezar daitezke garapen-modu jakin bat modulatu, eragotzi edo ezartzeko lege-xedapenak, baina ez ordenamendu estatutarioak xedatzen duena errepikatzeko."

Azken xedapenetatik laugarrenak eta bosgarrenak bi gaitze dauzkate kirol arloan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailarentzat, kontzeptuak definitzeko eta lanbideen atribuzioak eta esparru materialak mugatzeko, hala nola prestakuntza espezifiko aintzatesteko prozedura eta baldintzak zehazteko.

Gobernuko kideek esleituta daukate beren sailaren gaitan administrazio-xedapen orokorrak emateko ahalmena (ekainaren 30eko 7/1981 Legearen

26.4 artikulua), eta, autoantolatzeko ahalmena delakoaren barruan, berariazko arau-gaikuntzaren premiarik gabe, antolaketarekin hutseko kontuak edo lotura bereziko harremanei dagozkienak arau ditzakete. Era berean, Gobernuak kideek legeak garatzeko daukaten erregelamenduzko ahalmena aitortu ohi du jurisprudentziak, betiere horretarako lege-gaikuntza egokia izanez gero:

KA-ren 185/1995 Epaia, abenduaren 14koa: «Era berean, ezin da ulertu orain kontuan hartutako aginduak EK-ren 97. artikulua xedatua hausten duenik. Erregelamenduzko ahalmenaren atribuzio orokorrak Gobernuak haren jatorrizko titular bihurtzen du, baina ez du debekatzen lege batek ministroei ahalmen hori eratorrita baliatzeko aukera eman ahalizatea, edo gaikuntza ematea erregelamenduzko xedapen zehatzak emateko, horren erabilera mugatuta eta antolatuta. Eta, zehazki, horixe egiten du Tasa eta Prezio Publikoari buruzko Legearen 26.1 a) legeak, ukituak izan daitezkeen ministroei, kasuan kasuko ministerio-sailen tituluak diren aldetik, eratorritako erregelamenduzko ahalmen bat eman baimen ez baitu egiten, legeko gaitze espezifiko baten emaitza dena, gai zehatz eta jakin bat arautzeko, halakoa baita kasu honetan prezio publikoen zenbatekoa finkatzea eta aldatzea. Konstituzio-kontrakotasun akatsak, hala egokituz gero, legekotatasun-printzipioaren balizko urraketatik ondorioztatu litezke, gaitzen duen legeak ez badu behar bezain ongi zehazten erregelamenduaren norainokoa, baina ezin zaio eragozpenik jarri agindu horri EK-ren 97. artikulua ikuspuntutik.»

Azken xedapenetako laugarrenaren eta bosgarrenaren edukia aukera horren barruan txertatuko litzateke.

Azken xedapenetatik seigarrenak legea indarrean jartzeko epea jasotzen du, eta erabakitzen da EHAAren argitaratzen denetik egongo dela indarrean, lanbide arautuetan aritzeko gaitzen duten lanbide-kualifikazioei dagokienez izan ezik, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango baitira galdagarriak.

III- LEGE-AURREPROIEKTUA IZAPIDETZEA.

Lege-aurreproiektua tramitatze prozedura Xedapen Orokorrek egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak ezarritakoa izango da.

Arau horrek esaten du, aurreproiektua idatzi eta abiatze-agindua eman duen organoaren oniritzia eskuratu ondoren, egin beharrekoak izango direla negoziatioko, entzunaldiko eta kontsultako tramiteak. Ondorio horietarako, esan behar da ezen Kultura, Gazteria eta Kirolen sailburuordeak 2015eko urtarrilaren 23an eman zuen eta 2015eko otsailaren 2an EHAAren 21. zenbakian argitaratu zen Ebazpen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektuaren jendaurreko informazio-izapidea egin dela.

Horrekin batera, erakunde hauei igorri zaie aurreproiektua: Euskal Kirol Federazioen Batasunari, Arabako Kirol Federazioen Elkarteari, Bizkaiko Kirol Federazioen Elkarteari, Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari, Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari,

Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarte-Ekimeri, Euskal Herriko Soin Iharduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialari, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari, Ikastetxeen Zuzendaritzari, Datuen Babeserako Euskal Agentziari, eta Eusko Jaurlaritzako gainerako sailei. Era berean, aurreproiektua EAEko federazioei bidali zaie posta elektronikoz. Hori guztia egin da abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 8. eta 9. artikulua betetzeko.

Organo edo erakunde hauei derrigorrezko txostenak eskatu zaizkie:

- Emakunde(otsailaren 18ko 4/2005 Legea, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa, 19. eta 21. artikulua).
- Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza (xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 23/2012 Dekretuaren 3. artikulua).
- Kirolaren Euskal Kontseilua (Kirolaren Euskal Kontseilua arautzen duen azaroaren 7ko 220/2000 Dekretuaren 4.b) artikulua).
- Lehiaren Euskal Agintaritzak (Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.5 artikulua).

Era berean, prozedura-une egokian, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari txostena eskatzea aurreikusten da (Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko ekainaren 27ko 9/1997 Legearen 3.1.a artikulua).

Aurreko kontsultak eta txostenak gauzatu ondoren, abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10. artikulua arautzen duena betetzeko, prozedura osoaren memoria labur bat eta memoria ekonomiko bat jaso beharko dira espedientean. Horretarako, esan behar dugu ezen, arkezten den proiektuaren justifikazio-lanaren barruan, memoria ekonomikoa funtsezko agiria dela. Hala berretsi izan dute Estatuko Kontseiluak eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak. Alde horretatik, komeni da gogoraraztea zer esan zuen azken horrek 43/1999 Irizpenean:

“Komeni da hemen adieraztea zer-nolako garrantzi handia eman dion Estatu kontseiluak izapide horri, erregelamenduak egiteko administrazio-prozeduraren baitan Estatuko organo horrek esan du izapide hori funtsezkoa dela arau-ahalmena arbitrariotasunik gabe beteko dda bermatzeko, eta, horrez gain, adierazi du Espainiako Konstituzioko 31.2. artikulua betetzeko bideetako bat dela, azken horrek agintzen baitu gastu publikoak ekitatezko modu batean banatu behar dituela baliabide publikoak, eta gastu horiek programatu eta betetzeko moduak eraginkorrak eta ekonomikoak izan behar dutela”.

Aurreko horren antzera, memoria ekonomikoaren garrantzia berretsita, Estatu Kontseiluaren doktrina da honako hau (Irizpenean, 1996ko abenduaren 5koa, 4.078/96 espedienteak):

“Konstituzioaren 31.2 artikulua arautzen du gastu publikoak ekonomiaren eta efikaziaren printzipioak bete behar dituela, eta, ondorioz, ez du aukerarik ematen erregelamendu bat onartzeko, baldin eta ez badira behar bezala finkatzen hura beteko dela bermatzeko bitarteko ekonomikoak;

halakorik egiten ez bada, Espainiako Konstituzioaren 9.3 artikulua debekatzen duen jardura arbitrario bat egingo litzateke, funts juridikorik gabea, eta, ondorioz, kapritxozkoa bailitzateke erregelamendu bat onartzea, baldin eta ezingo bada egiaz aplikatu, nahikoa bitarteko ekonomikorik ez dagoelako arauko xedapenak betetzeko”.

Bi irizpen horiek erregelamenduak egiteko prozesuari buruzkoak dira, baina berdin-berdin aplika daitezke legeak egiteko prozesuari. Izan ere, hori arautzen du abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10. artikulua, eta hori ondorioztatzen da legeen onarpeneko logikari eta garrantziari erreparatuta, beharrezkoa baita haiek aplikatzeko beharrezkoak diren bitarteko ekonomikoak jarri direla egiaztatuko duten agiriak eta azterketak eranstea legeak onartzeko prozesuan. Legea betetzeko behar duren baliabide ekonomikoak jarri direla justifikatzea funtsezkoa da araua bera efikaza eta efektiboa izan dadin.

Espedientea memoria horiekin osatzen denean, organo hauen derrigorrezko txostenak eta irizpenak jaso behar dira:

- Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 26.1 eta 27.1 artikuluek arautzen dutena betetzeko, derrigorrezko kontrol-txostenen bidez fiskalizatu behar dira lege-aurreproiektuak. Jaurlaritzako Kontseiluak haiek aztertu baino lehenago bete behar da kontrol hori.
- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikulua arautzen duena aintzat hartuta, ezinbestekoa da batzorde horren irizpena jasotzea, arau horrek hau esaten baitu berariaz: “... lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere. Badira batzuk, hala ere, ogasuneko eskumena duen saileko titularrak eskatuz gero baino ez dutenak beharko batzordearen txostena; alegia:
 - Baliabideen banaketarako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuak finantzatzeko foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak.
 - Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuak onartzeari, kreditu gehigarriak emateari, konpromiso-kredituen baldintzak aldatzeari eta Aurrekontuak likidatzeari buruzkoak.

Ondoren, aurreproiektua organo eskudunak onartuko du, eta Eusko Jaurlaritzari helaraziko zaio, azter dezan, eta biera berean behin betiko onartzea ala ez onartzea erabaki dezan, edo, bestela, zehatz dezan zer irizpide hartu behar diren kontuan behin betiko idazkeran, eta, hala egokituz gero, zer jarduketa egin behar diren aipatu onarpena gertatu arteko izapidetzean. Azkenik, onartu ondoren, Legebiltzarrera bidaliko da, bidera dezan.

Txosten hau idatzi da, eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste baten mende jarri.

AHOLKULARITZA JURIDIKOA
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza

VIII

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA EMPRESA EMPRESAREN INGURUKO ERAGIN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA**

Administrazio eta Zerbitzuen
Sailburuordetza
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen
Zuzendaritza
Lege Aholkularitza

**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA**

Viceconsejería de Administración y
Servicios
Dirección de Régimen Jurídico y
Servicios
Asesoría Jurídica

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **AMAIA HERRAN FERNANDEZ**
Fecha de la firma: **05/06/2015 13:32:40**

Validación de la firma: **Correcta**

Firmante: **JOSE ANTONIO CAYERO BILBAO**
Fecha de la firma: **05/06/2015 13:44:08**

Validación de la firma: **Correcta**

**INFORME DE IMPACTO EN LA EMPRESA RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE
LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL
PAÍS VASCO.**

Es objeto de este Informe el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, el cual se emite en virtud de las atribuciones que el artículo 12.1, e) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, atribuye a la Asesoría Jurídica de dicho Departamento, en relación con los artículos 7 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de carácter General y 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.

Dispone el artículo 6 de la Ley 16/2012 anteriormente citada, relativo al informe de impacto en la empresa, que con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma promovida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco, a través de sus servicios jurídicos, realizará un informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, cuya emisión será preceptiva en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, y deberá remitirse, en todo caso, al Parlamento con los proyectos de ley.

A estos efectos, conviene traer a colación el artículo 1 de la propia Ley que al fijar el objeto de la misma señala que

«1.— La presente Ley tiene por objeto la promoción y el fomento de la actividad emprendedora en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del marco de la libertad de empresa y de establecimiento y el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, por razones imperiosas de interés general, pueda establecer la normativa vigente.

2.— Para el cumplimiento de este objetivo, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco evitará todas aquellas regulaciones que impongan innecesarios costes burocráticos a las personas emprendedoras, así como legislaciones complejas que supongan barreras que desincentiven la actividad económica.»

Por su parte, el artículo 2 define qué se entiende por actividad emprendedora y por personas emprendedoras que, en términos de su Exposición de Motivos, constituyen el foco principal de la Ley y los actores clave para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

«1.— A los efectos de la presente ley, se entiende por actividad emprendedora el proceso mediante el cual una persona física, una nueva empresa o una empresa ya existente en el mercado inicia una nueva actividad productiva.

2.— Son personas emprendedoras, a los efectos de esta ley, aquellas personas físicas que, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, están realizando los trámites previos para poder desarrollar una actividad económica, con independencia de su forma jurídica, o bien ejerzan alguna actividad como autónomos o autónomas, cooperativistas, socios o socias de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades laborales o a través de cualquiera otra fórmula mercantil, y tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Asimismo, son emprendedoras a los efectos de esta ley aquellas personas que mantienen y desarrollan un compromiso ético permanente en su actuación, reflejado, entre otros aspectos, en la vinculación al territorio y en el compromiso de mantenimiento de la actividad.

3.— En lo que se refiere a las microempresas, se considerarán tales las así definidas en la Recomendación 2003/361/CE.»

Según la citada Recomendación, «en la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros».

Antes de proceder al análisis del texto en relación a su incidencia en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, hemos de indicar que el Informe se emite en relación a la última versión del Anteproyecto de Ley, esto es, la realizada tras el sometimiento del primer texto a audiencia e información pública y tras el examen y contestación de las alegaciones recibidas.

En consecuencia, visto el Anteproyecto de Ley redactado tras la incorporación de las últimas modificaciones realizadas como consecuencia de las alegaciones practicadas en el trámite de audiencia e información pública, se ha de indicar que la propuesta tiene una incidencia directa tanto en la constitución de nuevas empresas, como en la continuidad de aquellas que vienen ejerciendo las actividades profesionales objeto de regulación.

El objeto del Anteproyecto de Ley analizado es regular el acceso y ejercicio de determinadas profesiones propias del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV); es decir, definir el régimen jurídico de una serie de profesiones relacionadas con el deporte, mediante la definición y delimitación funcional de dichas actividades profesionales y mediante el establecimiento de los requisitos y competencias necesarios para el acceso a las mismas.

Como ya se ha indicado, el escenario previo a la regulación propuesta es un sector profesional que engloba múltiples actividades profesionales de libre ejercicio. El Anteproyecto no se fija en todas las posibilidades existentes, sino únicamente en las estrictamente profesionales y que, además, están directamente relacionadas con la protección de la salud y seguridad de las personas participantes en las actividades deportivas, poniendo especial atención en aquellos colectivos merecedores de una mayor protección. Esto es, el objeto de la Ley es convertir una serie de profesiones libres relacionadas con el deporte en profesiones reguladas y esa intervención del poder público en el control de dichas actividades se justifica en la existencia de un bien

jurídico merecedor de una protección cualificada: la salud y seguridad de los participantes en las actividades deportivas.

Por tanto, la regulación propuesta debe tratar de encontrar el equilibrio necesario entre garantizar el derecho a la libre elección de profesión (artículo 35 CE), dentro de un mercado regido por el principio de libre competencia, y la necesidad de adoptar los mecanismos necesarios de intervención para el cumplimiento del mandato de tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas oportunas (artículo 43 CE).

En concreto, se ven afectadas las siguientes profesiones, que hasta la fecha —y salvo la de Profesor o Profesora de Educación Física, que se trata ya de una profesión titulada— constituían actividades profesionales de libre ejercicio:

- Profesor o Profesora de Educación Física.
- Monitor Deportivo o Monitora Deportiva.
- Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.
- Director Deportivo o Directora Deportiva.

Si bien el acceso a la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física está regulado en la normativa específica en materia educativa, se incluye también en el Anteproyecto. En su artículo 3 se realiza una remisión general a lo establecido en la normativa educativa y se incluye expresamente la obligación de presencia física del Profesor o Profesora en las clases de Educación Física (artículo 3.2 del Anteproyecto de Ley):

«Artículo 3.- Profesión de Profesor o Profesora de Educación Física

1.- La profesión de Profesor o Profesora de Educación Física permite impartir Educación Física en los correspondientes niveles de enseñanza y realizar todas las funciones instrumentales o derivadas previstas en la legislación educativa.

2.- Las clases de Educación Física impartidas a los alumnos y alumnas requerirán la presencia física del profesor o profesora.

3.- Quedan fuera del ámbito de esta profesión las actividades profesionales de profesor en materias deportivas incluidas en las enseñanzas universitarias, en las enseñanzas de formación profesional, en las enseñanzas deportivas de régimen especial, en las enseñanzas de la carrera militar, en las actividades formativas no formales, y en aquellas materias que no constituyen propiamente la docencia del área de Educación Física.»

Por tanto, si bien los requisitos de acceso no se ven afectados por la propuesta normativa analizada, sí afectarían al ejercicio de dicha profesión otras obligaciones previstas en el Anteproyecto, como la obligación de acreditar formación en primeros auxilios (artículo 15 del Anteproyecto de Ley), los deberes previstos en el artículo 11 del Anteproyecto o el deber de aseguramiento de responsabilidad civil (artículo 13 del Anteproyecto). En relación a estas obligaciones, se ha de señalar que la última de ellas no tendrá efectos modificatorios sobre la actual situación ya que la actuación de los Profesores o Profesoras de Educación Física está ya sujeta a la obligación de aseguramiento de responsabilidad civil en el marco de lo dispuesto en la legislación educativa. En cuanto a los deberes del artículo 11 son obligaciones más de tipo deontológico para asegurar una adecuada praxis profesional por lo que no tienen una incidencia reseñable para el objeto de este Informe. Sí merece una mención la obligación prevista en el artículo 15

«Artículo 15

Competencia en primeros auxilios

- 1.- Todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en esta Ley con presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas, incluidos las y los voluntarios, deberán acreditar la formación en primeros auxilios.
- 2.- El Departamento competente en materia deportiva establecerá reglamentariamente las condiciones y el procedimiento de acreditación de la formación referida.»

En el artículo 15 se establece la obligación de acreditación de formación en primeros auxilios, que sí podría tener repercusión de tipo económico para los centros educativos, en la medida que resulte necesario formar a quienes carecieran de esa formación específica en materia de primeros auxilios. De hecho, esa obligación de obtener la cualificación en primeros auxilios se establece como una condición para el ejercicio de todas las profesiones reguladas en el Anteproyecto de Ley, al establecerla disposición transitoria cuarta que el incumplimiento de dicha obligación podría ser considerada causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52, apartado a, del Estatuto de los Trabajadores:

«Disposición Transitoria Cuarta.- Incumplimiento del deber de obtener la cualificación en primeros auxilios.

- 1.- Las y los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta Ley, no cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente Ley podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el 31 de diciembre de 2018.
- 2.- El incumplimiento del deber de obtener tal formación en el citado plazo, podrá ser considerado causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52, apartado a, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
- 3.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de otras responsabilidades que se puedan depurar por el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.»

En cuanto a las otras tres actividades profesionales reguladas, se ha de señalar que el Anteproyecto de Ley incide directamente tanto en el acceso a dichas profesiones y en la constitución de empresas que tengan como objeto la realización de dichos servicios profesionales, como en la continuidad de aquellos profesionales o empresas que hayan venido ejerciendo esas actividades con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley.

El Anteproyecto afecta tanto al ejercicio por cuenta propia como al ejercicio por cuenta ajena (artículo 1.3 del Anteproyecto de Ley) de las actividades de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, Entrenador o Entrenadora y Director Deportivo o Directora Deportiva. En concreto, y tal y como se refleja en la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley, «el texto articulado trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general».

Las principales obligaciones o condiciones de acceso y ejercicio de la profesión que establece el Anteproyecto de Ley son las siguientes:

- Exigencia de ciertas cualificaciones profesionales a acreditar mediante título de formación, certificado de competencia o experiencia profesional formalmente reconocida o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias. En los artículos 4, 5, 6 y disposición adicional décima (apartado primero) del Anteproyecto se especifican las titulaciones oficiales concretas exigidas para cada una de las profesiones, y se prevé la posibilidad de que la cualificación para el ejercicio profesional sea también acreditada por otros medios distintos a dichos títulos. Sin embargo, la determinación de estas otras vías se pospone a un posterior desarrollo reglamentario (disposición adicional cuarta y disposición adicional décima, apartado segundo). Asimismo, se prevé un régimen transitorio para aquellos que acrediten que a la entrada en vigor de la Ley desarrollaban las actividades profesionales reguladas de forma no esporádica (disposición transitoria primera) a fin de que puedan acreditar las cualificaciones necesarias para el ejercicio profesional. Esta cuestión también se pospone al correspondiente desarrollo reglamentario.

La determinación de los requisitos y del procedimiento para la acreditación de las cualificaciones requerirá del consiguiente esfuerzo por parte de la Administración para definir las certificaciones equivalentes con la antelación suficiente para que aquellos profesionales que vienen ejerciendo con solvencia estas actividades puedan cumplir con las obligaciones derivadas de la nueva norma. En concreto, la obligación de acreditación de la cualificación profesional exigida surtirá efecto a partir del día 1 de enero de 2019.

- Para aquellas profesiones en las que no sea obligatoria la incorporación al colegio profesional correspondiente, se establece la obligación de inscribirse en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco; registro que estará adscrito a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, de consulta pública y que contendrá, como mínimo, la siguiente información: nombre y apellidos de las y los profesionales inscritos y referencia de sus titulaciones, certificados o documentos análogos acreditativos de su cualificación profesional (artículo 10 del Anteproyecto de Ley).
- En el artículo 13 del Anteproyecto de Ley se establece la obligación de suscripción del correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que se causen a terceros con ocasión de la prestación de los servicios profesionales (artículo 13 del Anteproyecto de Ley).
- El artículo 15 establece la ya mencionada obligación de acreditación de formación en primeros auxilios. Esta obligación queda pendiente de concreción a través del consiguiente desarrollo reglamentario. Este requisito también será exigible a partir del 1 de enero de 2019 (disposición transitoria cuarta).

El incumplimiento de las obligaciones anteriores, en concreto, el ejercicio profesional sin la debida cualificación será constitutivo de una infracción muy grave. Asimismo, la falta de inscripción en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, así como el incumplimiento de la obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil serán constitutivos de una falta grave. A tales efectos se han modificado los artículos 127 y 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, a efecto de tipificar dichos incumplimientos.

En otro orden de cosas, el Anteproyecto de Ley —tal como se explica en la Exposición de Motivos— ha tratado de adaptarse a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tratando de eliminar los obstáculos que se opongan a la libertad de establecimiento de los profesionales de los estados miembros de la Unión Europea y a

la libre circulación de servicios. Esto se ha tomado en consideración a la hora de definir el ámbito subjetivo de aplicación (artículo 1.2 del Anteproyecto), así como en el artículo 18, relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados. En este sentido, la Exposición de Motivos expresa: «la ley se ha acomodado a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, eliminando los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los profesionales de los estados miembros de la Unión y a la libre circulación de servicios, garantizando a los destinatarios de los servicios profesionales como a los propios prestadores, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También se ha tenido en consideración la legislación estatal en materia de servicios y colegios profesionales y sobre garantía de unidad de mercado.»

CONCLUSIÓN: el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio del deporte en el País Vasco establece una serie de obligaciones para el acceso y ejercicio de una serie de actividades profesionales del ámbito deportivo; en concreto, se regulan aquellas actividades más directamente relacionadas con la salud y seguridad de los participantes en las actividades deportivas.

El establecimiento de obligaciones en lo que hasta ahora —salvo en el caso de los Profesores y Profesoras de Educación Física— era un sector liberalizado, no sujeto a regulación alguna, se justifica en el interés público por proteger un bien jurídico merecedor de una protección cualificada por parte de los poderes públicos: la salud y seguridad de los participantes en las actividades deportivas. En consecuencia, esta Ley establece una serie de requisitos para el acceso y el ejercicio que afectarán tanto a los profesionales autónomos que inicien o que ya estén realizando las actividades, como a las empresas que contraten o tengan contratados a profesionales de las especialidades afectadas por la nueva regulación.

El Anteproyecto configura un elenco de obligaciones cuya concreción, en cuanto a requisitos específicos y mecanismos de acreditación, pospone a un posterior desarrollo reglamentario. De modo que, será en el momento de acometer la regulación del procedimiento y de los requisitos de acreditación de esas obligaciones, cuando pueda valorarse si el sistema supone una mayor o menor traba burocrática y le incidencia del mismo en el emprendimiento. A tales efectos, en el momento de concretar las formas de acreditación de las obligaciones previstas en el texto legal ahora tramitado deberán respetarse los mecanismos para favorecer el emprendimiento previstos en la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco y, específicamente, su artículo 5:

«Artículo 5. Reducción de cargas administrativas

1.- En el marco del proceso de simplificación y racionalización, las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de actuación, determinarán las áreas prioritarias de actuación en orden a proceder a la progresiva reducción y eliminación de las cargas administrativas que generen un mayor coste a la actividad emprendedora.

2.- Las actuaciones desarrolladas a tales efectos se orientarán por los siguientes criterios:

a) La reducción y supresión de trámites que conlleven dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantías de las personas interesadas, tales como la eliminación de la duplicidad de controles o la agilización de los informes, con su eliminación o sustitución, cuando sea posible, por visados.

- b) La sustitución de la aportación de documentos por una declaración responsable, entendiendo como tal el documento suscrito por la persona interesada en el que se declare, bajo su responsabilidad, que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora de aplicación.
- c) La sustitución de autorizaciones por declaraciones o comunicaciones previas de la persona interesada, con una verificación posterior.
- d) La supresión del requerimiento a la persona interesada de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, que sean generados por la propia Administración o que se puedan conseguir a través del intercambio de datos con otras administraciones. Tales documentos deberán ser incorporados de oficio mediante la utilización de medios telemáticos, siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de la persona interesada.
- e) La reducción de los plazos máximos de tramitación, resolución y notificación de los procedimientos.
- f) El impulso de actuaciones de oficio que sustituyan la actuación a instancia de parte, a fin de no mantener cargas administrativas para la ciudadanía que pueden asumirse por la propia Administración.
- g) El impulso de la tramitación telemática de los procedimientos administrativos.
- h) La homogeneización y normalización de la producción documental, a través de la implantación de catálogos actualizados de procedimientos administrativos, manuales y modelos normalizados de solicitud, incluyendo la pertinente autorización para obtener datos y certificaciones que hayan de ser emitidos por las administraciones públicas y sus organismos dependientes.
- i) La unificación de procedimientos de naturaleza similar y que tienen el mismo tratamiento.
- j) El uso de un lenguaje administrativo claro, sencillo, comprensible y orientado a la efectiva fluidez de las relaciones de la ciudadanía con la Administración.»

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 2015.

Asesoría Jurídica

**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA**

Administrazioko eta Zerbitzuetako
Sailburuordetza
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen
Zuzendaritza
Lege Aholkularitza

**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA**

Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako
Sailburuordetza
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen
Zuzendaritza
Aholkularitza Juridikoa

ENPRESAREN GAINEKO ERAGIN-TXOSTENA, EUSKAL AUTONOMIA ERDIKEGOAN KIROL ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA

Txosten honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektua da, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 12.1 e) artikulua sail horretako Aholkularitza Juridikoari, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7. artikulua eta Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikulua den bezainbatean, esleitutako eskumenak betez ematen da.

Lehen aipatu 16/2012 Legearen 6. artikulua, zeina enpresaren gaineko eragin-txostenari buruzkoa baita, esaten du ezen Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoak sustatutako edozein arauketa edo arau berriren aurretik, eta bere zerbitzu juridikoak erabiliz, enpresen eraketa, abiarazte eta funtzionamenduan izandako eraginaren ebaluazio-txostena egingo duela; hori egitea nahitaezkoa izango da xedapen orokorrak egiteko prozeduran, eta betiere Legebiltzarrerara igorri beharko da lege-proiektuekin.

Ondorio horietarako, komeni da hizpidera ekartzea lege beraren 1. artikulua, legearen xedea zehaztean hau baitio:

«1.— Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan ekintzailetza-jarduera bultzatzea eta sustatzea, enpresa- eta kokatze-askatasunaren eta zerbitzu-jardueretara eta jarduera horiek gauzatzera askatasunez iristeko esparruaren barruan, eta indarrean dauden arauak, interes orokorreko arrazoi bazterrezinengatik, ezartzen dituzten betebeharrak betetzea eragotzi gabe.

2.— Helburu hori bete dadin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak saihestu egingo ditu ekintzaileei behargabeko kostu burokratikoak eragingo dizkieten arauketa guztiak, bai eta jarduera ekonomikoaren sustagarri izan ordez hartarako oztopo diren legeria konplexuak ere.»

Bestalde, 2. artikulua esaten du zer den ekintzailetza-jarduera, eta zein diren ekintzaileak, zeinak baitira, zioen azalpenaren arabera, legearen oinarri nagusia eta Euskal Autonomia Erkidegoko garapen ekonomiko eta sozialerako eragile nagusiak.

«1.— Lege honen ondorioetarako, ekintzailetza-jarduera da prozesu bat zeinaren bidez pertsona fisiko batek, enpresa berri batek edo merkatuan lehendik dagoen enpresa batek produkzio-jarduera berri bat hasten baitu.

2.— Lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan jarduera ekonomiko bat garatu ahal izateko aurretiazko tramiteak egiten ari diren pertsona fisikoak, forma juridikoa edozein izanda ere, edo jardueraren bat betetzen dutenak autonomo gisa, kooperatibista gisa edo mikroenpresetako nahiz enpresa txiki eta ertainetako edo lan-sozietateetako bazkide gisa edo bestelako merkataritza-formula baten bidez, beren helbide fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan dutela.

Halaber, lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira euren jardunean etengabeko konpromiso etikoa mantentzen eta garatzen duten pertsonak, besteak beste, lurraldearekiko atxikimenduan eta jarduera mantentzeko konpromisoan islatzen dena.

3.— Mikroenpresei dagokienez, halakotzat joko dira 2003/361/EE Gomendioan definitutakoak.»

Aipatutako gomendioaren arabera, «enpresa txiki eta ertainen kategorian, mikroenpresak 10 langile baino gutxiago dituztenak dira, eta beren urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra ez da 2 milioi eurotik gorakoa».

Testua enpresen eraketa, abiarazte eta funtzionamenduan duen eraginari dagokionez aztertzen hasi baino lehen, adierazi behar dugu txosten hau lege-aurreproiektuaren azken bertsioaz den bezainbatean egiten dela, hau da, lehen testuari zegokion entzunaldia egin, jendaurrean jarri eta jasotako alegazioak aztertu eta erantzunak eman ondoren idatzi zenaz den bezainbatean.

Horrenbestez, entzunaldian eta jendaurreko informazioan jasotako alegazioen ondorioz egindako azken aldaketak gehituta idatzitako lege-aurreproiektua aztertu ondoren, esan behar da proposamenak eragin zuzena duela bai enpresa berrien eraketan, bai arautzen diren lanbide-jarduerak egiten dituztenen jarraipenean.

Aztertutako lege-aurreproiektuaren xedea Euskal Autonomia Erkidegoko kirol arloko lanbide jakin batzuetan sartzea eta jardutea arautzea da; hau da, kirolarekin zerikusia duten lanbide batzuen araubide juridikoa zehaztea, lanbide-jarduera horien definizio eta mugatze funtzionalaren bidez, eta lanbide horietan sartzeko baldintzak eta eskumenak ezartzearen bidez.

Adierazi den bezala, aritze askeko lanbide-jarduera asko biltzen dituen lanbide-sektore bati dagokio proposatutako arauketaren aurretiko egoera. Aurreproiektuak ez die erreparatzen dauden aukera guztiei, hertsiki profesionalak direnei baizik, baldin eta, gainera, zerikusi zuzena badute kirol-jardueretan parte hartzen duten pertsonen osasuna eta segurtasuna babestearekin, arreta berezia jarritz babes handiena merezi duten kolektiboetan. Hau da, kirolarekin zerikusia duten lanbide aske batzuk araututako lanbide bihurtzea da legearen xedea, eta botere publikoak jarduera horien kontrolean parte-hartzea izatearen justifikazioa da badagoela ondasun juridiko bat, babes kualifikatua merezi duena: kirol-jardueretan parte hartzen dutenen osasuna eta segurtasuna.

Hortaz, proposatutako arauketak behar den oreka aurkitzen saiatu behar du honako hauen artean: alde batetik, lanbidea askatasunez aukeratzeko eskubidea (EK-ren 35. artikulua), lehia askearen printzipioa nagusi duen merkatu mota baten barruan; eta, bestetik, osasun publikoa prebentzio-neurri egokien bidez zaintzeko agindua betetzeko, behar diren parte-hartze mekanismoak ezartzeko beharra (EK-ren 43. artikulua).

Zehazki, honako lanbide hauek dira eragindakoak, zeinak orain arte —Gorputz Hezkuntzako Irakaslea izan ezik, lanbide tituluduna baita— jardute askeko lanbide-jarduerak baitziren:

- Gorputz Hezkuntzako Irakaslea.
- Kirol Monitorea.
- Dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako Entrenatzailea.
- Kirol Zuzendaria.

Gorputz Hezkuntzako Irakasle-lanbiderako sarbidea hezkuntza arloko araudi espezifikoan araututa dago, baina, hala ere, aurreproiektuan jasotzen da. Hirugarren artikuluan, hezkuntza-araudian xedatura jotzeko igortze orokorra egiten da, eta berariaz jasotzen da irakaslea Gorputz Hezkuntzako eskoletan zuzenean egoteko betebeharra (Lege-aurreproiektuaren 3.2 artikulua):

«3. artikulua.- Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbidea

1.- Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbideak bide ematen du Gorputz Hezkuntzako klaseak emateko dagozkion hezkuntza-mailetan; era berean, bide ematen du hezkuntza-legerian aurreikusitako funtzio instrumental edo eratorri guztiak betetzeko.

2.- Ikasleei Gorputz Hezkuntzako klaseak ematen zaizkienean, irakasle batek egon beharko du bertan.

3.- Lanbide honen eremutik kanpo geratzen dira honako hezkuntza-maila hauetako irakasleen lanbide-jarduerak: unibertsitate-irakaskuntzetakoak, lanbide-heziketakoak, araubide berezikoak, karrera militarrekoak, prestakuntza-jarduera ez-formalak eta berez Gorputz Hezkuntzako irakaskuntzakoak ez diren guztiak.»

Hortaz, aztertutako arau-proposamenak ez du eragink sartzeko baldintzetan, baina aurreproiektuan jasotako beste betebeharrak batzuek eragina izango lukete lanbide-jardueran; besteak beste, lehen laguntza emateko prestakuntza egiaztatzeke betebeharrak (lege-aurreproiektuaren 15. artikulua), 11. artikuluan aurreikusitako betebeharrak, eta erantzukizun zibila ziurtatzeko betebeharrak (aurreproiektuaren 13. artikulua). Betebeharrak horiei dagokienez, esan behar da azkenak ez duela adaketa-eraginik izango egungo egoeran, Gorputz Hezkuntzako irakasleen jardunak erantzukizun zibila ziurtatzeko betebeharrari lotuta dagoelako hezkuntza-legedian xedatuaren barruan. Hamaikagarren artikuluko betebeharrari dagokienez, deontologia-kutsu handiagokoak dira, lanbide-praxi egokia ziurtatzeko; horregatik, ez dute eragin aipagarriarik txosten honen xedearen ikuspuntutik. Aipamena merezi du 15. artikuluan jasotako betebeharra:

«15. artikulua.

Lehen laguntza emateko gaitasuna

1.- Lege honetan araututako lanbideren bat duten eta, aldi berean, kirol-jarduerak egiten direnean zuzenean egon behar duten pertsona guztiek, boluntarioek barne, lehen laguntza emateko prestakuntza dutela ziurtatu beharko dute.

2.- Kirol arloko eskumena duen sailak ezarriko ditu, erregelamenduz, aipatutako prestakuntza egiaztatzeke baldintzak eta prozedura.

Hamabosgarren artikuluan, lehen laguntza emateko prestakuntza ziurtatzeko betebeharra jasotzen da, eta horrek eragin ekonomikoa izan lezake ikastetxeentzat, lehen laguntzan prestakuntza espezifikorik ez dutenak prestatu behar diren neurrian. Izan ere, lehen laguntzan kualifikazioa lortzeko betebeharrak hori baldintza da lege-aurreproiektuan araututako lanbide guztietan aritzeko, laugarren xedapen iragankorrak esaten baitu betebeharrak hori ez betetzeak lanpostutik mugitzeko arrazoitzat har litekeela Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Unibertsitatekoek kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legean xedatuaren babesean, hala nola Langileen Estatutuaren 52. artikuluko a) idatzi-zatian jasotako ezgaitasuntzat:

«Laugarren xedapen iragankorra.- Lehen laguntza emateko kualifikazioa eskuratzeko betebeharra ez betetzea.

- 1.- Lege hau indarrean sartzen denean lege honek ezartzen duen lehen laguntza emateko kualifikaziorik ez duten kirol arloko profesionalak 2018ko abenduaren 31 arte jarraitu ahal izango dute lanbide-jardueran.
- 2.- Aipatutako epean prestakuntza jasotzeko betebeharra ez betetzea arrazoitzat hartu ahal izango da Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitateko kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen babesean lanpostutik kentzeko eta, horrez gain, Langileen Estatutua onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 52. artikuluko a) idatzi-zatian aipatzen den desgaitasuna agertutzat hartzeko.
- 3.- Lege honetan xedatutakoa bete ezean, aurreko paragrafoan ezarritakoa gertatzeaz gain bestelako erantzukizunak ere eskatu ahal izango dira.»

Araututako beste hiru lanbide-jarduerari dagokienez, esan behar da lege-aurreproiektuak eragin zuzena duela lanbide horietarako sarbidean eta lanbide-zerbitzu horiek egitea xede duten enpresen eraketan, hala nola jarduera horiek lege berria indarrean jarri baino lehen egin dituzten profesionalen edo enpresen jarraipenean.

Aurreproiektuak kirol-monitoreen, entrenatzaileen eta kirol-zuzendarien jardueretan norberaren kontura nahiz besteren kontura aritzeari eragiten dio (Lege-aurreproiektuaren 1.3 artikulua). Zehazki, Lege-aurreproiektuaren zioen azalpenean bertan adierazten den bezala, «testu artikulatuan, kirol arloko berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarrikoak diren zenbat alderdi arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer funtzio-eremu eransten zaion lanbide bakoitzari».

Honako hauek dira lege-aurreproiektuak lanbidean sartzeko eta jarduteko ezarritako betebeharrak edo baldintza nagusiak:

- Prestakuntza-titulu bidez egiaztatu beharreko lanbide-kualifikazio batzuen exijentzia, formalki aitortutako lanbide-gaitasun edo- esperientziaren ziurtagiria, edo, bestela, inguruabar horietako bat baino gehiago batera biltzea. Aurreproiektuaren 4., 5. eta 6. artikuluetan eta hamargarren xedapen gehigarrian (lehen idatzi-zatia) lanbide bakoitzerako eskatutako titulazio ofizialak zehazten dira, eta lanbidean aritzeko kualifikazioa titulu horiek ez diren beste bitarteko batzuekin ere egiaztatzeko aukera jasotzen da. Hala ere, geroagoko erregelamenduzko garapenerako uzten da beste bide horiek zehaztea (laugarren xedapen gehigarria eta hamargarren xedapen gehigarria, bigarren idatzi-zatia). Era berean, araubide iragankor bat aurreikusten da legea indarrean jartzean noizik eta behin arautu gabeko lanbide-jardueretan ari zirela egiaztatzen dutenentzat (lehen xedapen iragankorra), lanbidean aritzeko behar diren kualifikazioak egiaztatu ahal izan ditzaten. Kontu hori ere kasuan kasuko erregelamenduzko garapenerako uzten da.

Kualifikazioak egiaztatzeko baldintzak eta prozedura zehaztu ahal izateko, nahitaezkoa izango da Administrazioa ahalegintzea, ziurtapen baliokideak zehazteko behar bezain goiz, jarduera horietan fidagarritasunez diharduten profesionalak bete ahal izan ditzaten arau berrietik ondorioztatutako betebeharrak. Zehazki, eskatutako lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko betebeharrak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina.

- Kasuan kasuko lanbide-elkargoan sartzea nahitaezko ez duten lanbideei dagokienez, EAEko Kiroleko Profesionalen Erregistroan inskribatzeko betebeharra ezartzen da; erregistro hori kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari atxikita egongo da, kontsulta publikokoa izango da eta, gutxienez, informazio hau izango du: inskribatutako profesionalen izen-abizenak eta dauzkaten titulazioen erreferentzia, eta daukaten lanbide-

kualifikazioa egiaztatzeko ziurtagiriak edo antzeko dokumentuak (Lege-aurreproiektuaren 10. artikulua).

- Lege-aurreproiektuaren 13. artikuluan, lanbide-zerbitzuak ematean hirugarrenei egindako kalteak ordaintzeko erantzukizun zibileko aseguru egokia izenpetzeko betebeharra jasotzen da.
- Hamabosgarren artikulua lehen laguntza emateko prestakuntza egiaztatzeko aipatu betebeharra jasotzen du. Betebehar hori dagokion erregelamendu bidezko garapenaren zain geratzen da. Betebeharra ere galdagarria izango da 2019ko urtarilaren 1etik aurrera (laugarren xedapen iragankorra).

Aurreko betebeharrak ez betetzea, zehazki, lanbidean kualifikazio egokirik gabe aritzea, oso arau-hauste astuna izango da. Era berean, falta astuna izango da inskribatuta ez egotea EAEko Kiroleko Profesionalen Erregistroan, hala nola erantzukizun zibileko aseguru bat izateko betebeharra ez betetzea. Ondorio horietarako, Euskadiko Kirolarena den ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. eta 128. artikulua aldatu dira, ez-betetze horiek tipifikatzeko.

Beste alde batetik, Lege-aurreproiektua —zioen azalpenean adierazten den bezala— barne-merkatuko zerbitzuei buruzko abenduaren 12ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/123/EE zuzentaraura egokitzen ahalegindu da, Europar Batasuneko estatu kideetako profesionalak kokatzeko askatasunaren eta zerbitzuen zirkulazio askearen aurkako trabak kentzen saiatzeko. Hori kontuan hartu da aplikazio-esparru subjektiboa zehazteko orduan (aurreproiektuaren 1.2 artikulua), hala nola 18. artikuluan (beste estatu batzuetan lortutako lanbide-kualifikazioak aintzatesteari buruzkoa). Alde horretatik, zioen azalpenak honako hau dio: «... lege hau Europako Parlamentuko eta Kontseiluko Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/CE Zuzentaraura egokitu da. Horretarako, batetik, oztopoak kendu dira, hain zuzen ere Batasuneko estatu kideetan profesionalak kokatzeko askatasuna eta zerbitzuen zirkulazio librea eragozten duten oztopoak kendu dira; bestetik, bai zirkuitu profesionalen hartzaileei, bai zerbitzu-emaleei eurei ere, segurtasun juridiko nahikoa bermatzen zaie Europar Batasuna eratzen duen Ituneko oinarritzko askatasunez eraginkortasunez baliatzeko. Era berean, kontuan izan da zer legedi dagoen estatuan zerbitzuei eta lanbide-elkargoei buruz eta merkatu-batasuna bermatzeari buruz.»

ONDORIOA: Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektuak zenbait betebehar ezartzen ditu kirol arloko lanbide-jarduera batzuetan sartu eta aritzeko; zehazki, kirol-jardueretan esku hartzen dutenen osasun eta segurtasunarekin zerikusi zuzenagoa duten jarduerak arautzen dira.

Orain arte —Gorputz Hezkuntzako irakasleen kasuan izan ezik— sektorea liberalizatuta zegoen, eta inolako arauketari lotu gabe, eta sektore horretan betebeharrak ezartzeko arrazoiaren justifikazioa botere publikoen babes kualifikatua merezi duen ondasun juridiko bat babesteko interes publikoa da: kirol-jardueretan parte hartzen dutenen osasuna eta segurtasuna. Horrenbestez, legeak sartzeko eta jarduteko baldintza batzuk ezartzen ditu, eta baldintza horiek eragina izango dute jardueretan hasten diren edo jadanik ari diren profesional autonomoengan, hala nola arautze berriak eragindako espezialitateetako profesionalak kontratatzen dituzten edo kontratatuta dauzkaten enpresetan.

Aurreproiektuak betebehar-sorta bat taxutzen du, eta sorta horren zehaztapena, baldintza espezifikoak eta egiaztatze-mekanismoei dagokienez, geroagoko

erregelamenduzko garapenerako uzten du. Hartara, betebeharrak egiaztatzeko baldintzak eta prozedura arautzen hasi behar denean, neurtu ahal izango da sistemak berekin traba burokratiko handiagoa ala txikiagoa dakarren, eta zer-nolako eragina duen ekintzailatzean. Ondorio horietarako, orain izapidetutako lege-testuan aurreikusitako betebeharrak egiaztatzeko moduak zehaztean, errespetatu egin beharko dira Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legean eta, zehazki, haren 5. artikuluan ekintzailatza sustatzeko jasotako mekanismoak:

«5. artikulua. Administrazio-kargak gutxitzea

1.- Sinplifikazio- eta arrazionalizazio-prozesuaren esparruan, euskal administrazio publikoek, zeinek bere jardute-eremuan, jarduketako lehentasunezko arloak zehaztuko dituzte, ekintzailatza-jarduerari kostu handiagoa sorrazten dioten karga administratiboak modu progresiboan gutxitzeari eta ezabatzeari ekiteko.

2.- Hartarako garatuko diren jarduketek irizpide hauek izango dituzte gidari::

a) Prozedura luzatzea dakarten tramiteak murriztea eta kentzea, betiere tramite horiek kalterik egiten ez badiete interesdunen bermeei; adibidez, kontrol-bikoiztasuna kentzea edo txostenak azkartzea, besterik gabe ezabatuz edo ahal denean bisatuekin ordezkatuz.

b) Agiriak aurkeztearen ordeztu erantzukizunpeko adierazpena egitea, halakotzat ulertuz interesdunak sinatutako agiri bat non deklaratu baitu, bere erantzukizunpean, eskuratuak dituela aplikatzeko den araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.

c) Baimenen ordeztu interesdunak aurretiaz adierazpenak edo komunikazioak egitea, zeinak ondoren egiaztatuko baitira.

d) Ezabatzea jada Administrazioaren eskutik dauden, Administrazioak berak sortzen dituen edo Administrazioak beste administrazio batzuekin datuak trukatu lor ditzakeen agiriak interesdunari eskatzea. Agiri horiek ofizioz txertatu beharko dira bitarteko telematikoen bidez, betiere, izaera pertsonaleko datuen kasuan, interesdunaren onespenez gero.

e) Gehienezko epeak murriztea prozeduren tramitazio, ebazpen eta jakinarazpenari dagokionez.

f) Ofiziozko jarduketak bultzatzea interesdunak eskatutako jarduketaren ordeztu, herritarri ez harrarazteko Administrazioak berak har ditzakeen kargak.

g) Prozedura administratiboen tramitazio telematikoa bultzatzea.

h) Agiri-produkzioa homogeneizatzea eta normalizatzea, hartarako ezarritako prozedura administratiboen katalogo eguneratuak, eskaerak egiteko eskuliburuak eta eredu normalizatuak, barruan sartuta administrazio publikoek eta haien menpeko erakundeek eman behar dituzten datuak eta ziurtagiriak lortzeko baimena ematea.

i) Antzeko izaera duten eta tratamendu bera daukaten prozedurak bateratzea.

j) Erabiltzea hizkera administratibo bat argia, erraza, ulergarria eta herritarrek Administrazioarekin benetan trabarik gabeko harremanak izatera bideratua.»

Gasteiz, 2015eko ekainaren 5a.

Aholkularitza Juridikoa



IX

INFORME DE LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**



Lehiaren
Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca
de la Competencia



Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

04 MAR 2015

Erregistro Orokorra / Registro General
SARRERA zk.
Nº ENTRADA

IRTEERA zk.
Nº SALIDA

SS

INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAIS VASCO

Sumario:

I. Antecedentes y competencia de la AVC.....	2
II. Justificación y límites legales a las restricciones a la competencia en la prestación de los servicios.....	2
III. Análisis de la normativa propuesta desde la perspectiva de competencia.....	6
1. Cambio de paradigma normativo.....	6
2. Análisis de las barreras generadas por la norma propuesta.....	7
A. Exigencia de titulaciones y reserva de actividad.....	8
a. Las actividades de “monitor” o “entrenador”.....	8
b. Las actividades de “director”.....	10
c. El o la profesor de Educación física.....	11
d. Cuestiones comunes a las profesiones creadas por la propuesta.....	12
e. Valoración.....	12
B. Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco y referencia a la colegiación obligatoria.....	13
C. Reserva de denominaciones.....	14
D. Creación de infracciones y sanciones.....	15
a. Creación de sanciones por infracciones formales.....	15
b. Creación de infracciones administrativas y disciplinarias que restringen injustificadamente el ejercicio de las actividades.....	16
E. Restricciones a la publicidad de los servicios.....	16
F. Otras cuestiones que pueden afectar a la competencia.....	17
IV. CONCLUSIONES.....	18



Lehiaren
Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca
de la Competencia

Pleno

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal

Secretario: D. Ibon Alvarez Casado

El Pleno del Consejo Vasco de la Competencia, en su reunión del 3 de marzo de 2015, con la composición ya indicada, ha decidido emitir el presente informe en relación con el Anteproyecto de Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

I. Antecedentes y competencia de la AVC.

1. El 23 de enero de 2015 se ha remitido a esta Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) el Anteproyecto de Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco (en adelante Anteproyecto) para que, en el trámite de audiencia, se realicen las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

2. El presente informe se emite en virtud de la competencia que la Ley otorga a este organismo en materia de promoción de la competencia¹.

Esta función pretende fomentar la competencia efectiva en los mercados vascos por medio de acciones no sancionadoras, dentro de las cuales destaca la relación con las administraciones públicas en su función de proponente de normas jurídicas.

II. Justificación y límites legales a las restricciones a la competencia en la prestación de los servicios.

3. Los servicios profesionales se encuentran a menudo sujetos a restricciones de la competencia que requieren respuestas variadas por parte de las autoridades de

¹ Véanse los artículos 3.3 y 10.n de la Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, BOPV nº 29, de 9 de febrero de 2012.



competencia². Estas restricciones adoptan ordinariamente la forma de barreras de entrada o fijación de condiciones de ejercicio.

Las restricciones de acceso tienen el efecto de reducir la oferta de servicios profesionales en el mercado y la competencia entre los operadores económicos que operan en él. Las restricciones de ejercicio generan disfunciones en los mercados que se traducen en pocos incentivos a la mejora de los servicios y a la bajada de los precios. limitan la capacidad efectiva de los profesionales para competir, de diferenciarse entre sí y pueden potenciar la coordinación horizontal.

Existen numerosas normas de protección de los usuarios de los servicios que tratan de garantizar sus derechos³.

En principio, la administración debe permitir la existencia de ofertas diferenciadas en calidad, precio y en el resto de condiciones del servicio de que se trate, de manera que el usuario pueda ejercer plenamente su libertad, por lo que una intervención restrictiva que no se encaminase a la efectiva corrección de fallos del mercado o a la satisfacción de intereses públicos dignos de protección, resulta contraria al interés general.

² Véanse, a título de ejemplo, COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. IPN DP/003/14 Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/36/2008 de arrendamiento de vehículos con conductor. Madrid, 30 de enero 2014, en CNMC, http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/IPN%20DP_003_14%20Proyecto%20de%20Orden%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FOM_36_2008%20de%20Arrendamiento%20de%20Veh%C3%ADculo%20con%20Conductor%20.pdf; COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. IPN/DP/002/14 Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres. Madrid, 30 de enero de 2014, en CNMC, http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/IPN_DP_002_14%20PROYECTO%20DE%20REAL%20DECRETO%20QUE%20MODIFICA%20EL%20REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ORDENACI%C3%93N%20DE%20LOS%20TRANSPORTES%20TERRESTRES%20.pdf; AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA Informe en relación a la consulta realizada por el Ayuntamiento de Bilbao sobre la propuesta de modificación del art. 33.1 de la Ordenanza municipal del taxi de Bilbao, en http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/INFORME%20TAXI%20BILBAO%20DEFINITIVO_%20web.pdf (todas las páginas citadas en este informe tienen fecha de última consulta el 25 de febrero de 2015).

³ Véanse, con carácter general, la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DOUE L 304/64, de 22 de noviembre de 2011; Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, BOE nº 76, de 28 de marzo de 2014, y Ley vasca 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, BOPV nº 254, de 30 de diciembre de 2003.



4. En el ámbito de la competencia en los mercados, las barreras de entrada se conceptúan como todas aquellas dificultades y costes que desalientan o directamente imposibilitan la entrada de nuevos operadores en un determinado mercado⁴.

Las barreras de entrada generan consecuencias negativas para la economía en que se establecen en la medida en que desincentivan la entrada de nuevos operadores que pueden incrementar la tensión competitiva y generar por lo tanto mejores condiciones para los usuarios en la prestación de los servicios. La ausencia de barreras de entrada en los mercados fomenta la creación de empleo, la innovación y mejora la competitividad⁵.

Existen supuestos en que razones de interés general pueden justificar que se incluyan barreras de entrada legales que restrinjan o impidan el acceso a un mercado, pero para que estas barreras sean aceptables desde una perspectiva de competencia deben reunir una serie de requisitos⁶:

- La **necesidad** implica que estén justificadas por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.
- La **proporcionalidad** implica que la limitación sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.
- La **no discriminación** en función de la nacionalidad o de ubicación del establecimiento o del domicilio social;

Por tanto, cuando una ley establezca una medida restrictiva de acceso al mercado, deberá acreditar de manera motivada que la misma cumple las condiciones de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

5. La llamada Ley Ómnibus realizó varias modificaciones en la regulación con vistas a la liberalización de los servicios profesionales⁷. Entre ellas introdujo el artículo 39bis en la Ley

⁴ TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA *Informe del Expediente de Concentración Económica C89/05 Igualatorios Médicos*, p. 73. <http://www.cnmc.es/es-es/competencia/buscadorde/expedientes.aspx?num=C89/05&ambito=Concentraciones&b=&p=0&numero=C89/05&ambitos=Concentraciones&estado=0&sector=0&av=1>.

⁵ Las barreras de entrada pueden ser legales, técnico-económicas y derivadas de la posición consolidada que disfrutaban las empresas ya presentes en el mercado. Véase el apartado 71 de las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (2004/C 31/03), DOUE C 31/5, de 5 de febrero de 2004. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018:es:PDF>.

⁶ Artículo 5 de la Ley estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2009. Redacción dada por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013.

⁷ Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, BOE nº 308, de 23 de diciembre de 2009.



30/1992⁸. Dado el carácter básico de esta norma se exige a todas las Administraciones Públicas que, cuando vayan a adoptar una medida limitadora de la competencia o que imponga barreras a la prestación de servicios, elijan la medida menos restrictiva, motiven su necesidad para la protección del interés público y justifiquen su adecuación para lograr los fines que persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

6. Por su parte, la Ley de Economía Sostenible requiere del conjunto de las Administraciones Públicas, el respeto entre otros, del principio de mejora de la competitividad, que supone la obligación de impulsar la competitividad de las empresas, mediante marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, faciliten la asignación de los recursos productivos y la mejora de la productividad⁹. Este precepto supone una obligación a las Administraciones Públicas ajustar sus iniciativas normativas a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

7. Finalmente, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos; en la libre circulación de bienes y servicios sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica¹⁰.

Dicha Ley es de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado legalmente establecidas y conforme a su articulado, todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento.

En su virtud, ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico.

En el ámbito de la Unión Europea, y en la medida en que la regulación afecta a sujetos domiciliados o que presten principalmente sus servicios en la CAPV pudiendo ser nacionales de los estados miembros de la UE, la regulación sobre libre circulación de

⁸ Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992.

⁹ Ley estatal 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011.

¹⁰ Ley estatal 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado. BOE nº 296, de 10 de diciembre de 2013.



trabajadores o sobre libre prestación de servicios resulta igualmente de especial relevancia¹¹.

III. Análisis de la normativa propuesta desde la perspectiva de competencia.

1. Cambio de paradigma normativo.

8. El sector de los servicios profesionales del deporte está regulado en la actualidad en el País Vasco por la Ley del Deporte Vasco¹². Esta norma tiene como objeto la regulación del deporte en la CAPV pero no delimita profesiones concretas. Existen numerosas normas que regulan las diferentes formaciones vinculadas con estas actividades, algunas de ellas especializadas por deportes y otras de carácter general¹³. Además, las federaciones deportivas disponen de cursos específicos para la cualificación de los profesionales en las distintas disciplinas deportivas. No existe hasta el momento en la CAPV vínculo concreto establecido entre las titulaciones existentes y la prestación de servicios profesionales, si bien la Ley del Deporte Vasco establece que “para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial”. Dado que no se ha desarrollado el mandato normativo, los operadores económicos prestan actualmente sus servicios en la CAPV sin otras restricciones de acceso y ejercicio. La única excepción es la

¹¹ Véanse los artículos 26 (mercado interior), 49 a 55 (establecimiento) y 56 a 62 (servicios) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, DOUE, L 376 de 27 de diciembre de 2006, p. 36/68. Resulta digna de ser destacada la Resolución del Parlamento de 7 de febrero de 2013, que contiene recomendaciones a la Comisión en relación con la gobernanza del mercado único (2012/2260(INI)), y en la que hacía hincapié en la importancia del sector de los servicios en cuanto ámbito clave para el crecimiento, en el carácter fundamental de la libertad de prestar servicios y los beneficios de una aplicación completa de la Directiva de servicios.

¹² Ley vasca 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. BOPV nº 118, de 25 de junio de 1998.

¹³ El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. BOE nº 268, de 8 de noviembre de 2007. Su artículo 22.2 establece que el mismo no constituye regulación de ejercicio profesional. En consecuencia no establece una relación entre las titulaciones que regula y el ejercicio de actividades profesionales.



profesión de profesor de educación física, que tiene la categoría de profesión titulada y sujeta a colegiación, tal como se establece en la regulación educativa¹⁴.

9. El Anteproyecto instaura “*ex novo*” las denominadas profesiones de “monitor”, “educador” y “director” y pretende realizar una reserva de actividad para las mismas, así como una “parcelación” de las actividades que pueden realizar cada una de ellas.

Este cambio de paradigma supone que quien quiera ofertar sus servicios, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, deberá acreditar estar en posesión de unas concretas titulaciones u obtener una certificación oficial determinada. Deberá además solicitar su inscripción en un Registro público para el que se le requerirán, tanto una documentación concreta como el cumplimiento de unos requisitos.

10. Salvo que queden acreditadas razones de interés general o fallos del mercado necesitados de respuesta pública, la reserva de actividad tiene consecuencias negativas en primer lugar para los prestadores de servicios que ven agravadas las condiciones de acceso al mercado correspondiente (es decir, se crean barreras de entrada). Igualmente se verifican consecuencias para los usuarios que tienen menos posibilidades de opción y, en general, precios más elevados en los servicios que reciben. Esto implica menos creación de empleo y menos incentivos a la innovación y la mejora en la prestación de los servicios.

11. La propuesta señala que “una norma con rango de Ley es el instrumento adecuado para transformar determinadas actividades profesionales libres en actividades reguladas”.

Debe aclararse a este respecto que la mera opción formal por una norma con rango de Ley no fundamenta cualquier tipo de restricción de la competencia. Las limitaciones deben, en todo caso, estar amparadas en el interés público que debe constar adecuadamente motivado para que se pueda realizar el análisis de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

No hay que olvidar que el propio texto articulado manifiesta su voluntad de optar por las medidas menos restrictivas y distorsionadoras.

2. Análisis de las barreras generadas por la norma propuesta.

12. La Memoria que acompaña al Anteproyecto de Ley y su Exposición de Motivos fundamentan de manera genérica la necesidad de la regulación en la “inegable” incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de las y los deportistas. Señalan igualmente estos documentos que estas actividades han venido

¹⁴ Véase el artículo 15 del Real Decreto 2957/1978, de 3 de noviembre, Colegios Oficiales de Profesores de Educación Física, BOE de 18 de diciembre de 1978.



asumiéndose por personas carentes de una “adecuada formación” y respecto de colectivos especialmente sensibles (como niños y niñas o jóvenes en edad escolar). Del mismo modo se establece como objetivo de la norma la promoción del deporte en la sociedad.

Ni la Memoria del Anteproyecto ni su Exposición de Motivos detallan la efectiva incidencia negativa que las actividades desarrolladas hasta el momento en estos ámbitos hayan provocado en la salud y seguridad de los deportistas ni ofrecen tampoco datos que muestren la necesidad de la protección de “finés públicos constitucionalmente relevantes” que puedan justificar una limitación a la libertad de prestación de servicios¹⁵.

En la medida en que no queden acreditados daños concretos o riesgo cierto de la salud de los y las deportistas en el ejercicio de cada una de las actividades para las que se pretende una regulación, no resultaría justificada la limitación.

A. Exigencia de titulaciones y reserva de actividad.

13. La prestación de ciertos servicios relacionados con el deporte se reserva a personas que son calificadas como “monitor”, “entrenador” y “director” siempre que estén en posesión de las cualificaciones recogidas en la norma.

a. Las actividades de “monitor” o “entrenador”.

14. La norma diferencia taxativamente las labores que pueden llevarse a cabo bajo estas denominaciones y exige titulaciones académicas diferentes para cada una de ellas.

15. La identificación de distintas titulaciones como exigencia de acceso a cada una de las actividades genera una parcelación de los servicios sin que resulte suficientemente motivado cómo esta **compartimentación** contribuye, en sí misma, a la protección de la salud de los destinatarios.

Un claro ejemplo de esta situación se verifica en el artículo 4 de la propuesta. El precepto establece que los profesores de educación física pueden llevar a cabo actividades vinculadas con la actividad de “monitor” en los centros educativos fuera del horario lectivo. Sin embargo los mismos profesionales no podrían llevar a cabo las mismas labores de monitor fuera del centro escolar.

Esta situación es una clara muestra de que la nueva “habilitación” creada por la norma propuesta genera simplemente un cierre de mercado a determinadas actividades sin que se deriven de la misma ventajas para los usuarios ni un incremento en los estándares de protección de la seguridad ni de la salud.

¹⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998, de 1 de Octubre, BOE nº 260, suplemento, de 30 de octubre de 1998 que, además, tan solo hace referencia a la profesión de Profesor de educación física.



Se trataría, por lo tanto, de una barrera de entrada claramente injustificada.

Idéntica afirmación puede hacerse de la exclusión del ámbito de aplicación de la norma de actividades que se presten “en régimen de voluntariado” (con todas las complejas salvaguardas recogidas en las disposiciones adicionales y transitorias).

En idéntico sentido puede interpretarse el artículo 5.9. cuando plantea que las “cualificaciones no serán exigibles a los entrenadores de entidades deportivas o de deportistas con domicilio en otros países o Comunidades Autónomas que entrenan o compiten ocasionalmente en el País Vasco con ocasión de la preparación o participación en competiciones deportivas estatales o internacionales”.

Si la mera falta de la titulación contemplada en la norma pusiera en tela de juicio la seguridad o salud de los deportistas, ésta debería exigirse a cualquier profesional que ofrezca sus servicios aunque sea de forma temporal.

Semejantes conclusiones pueden obtenerse del artículo 7 que deja fuera del cumplimiento de estas exigencias a los profesionales que tienen su domicilio o realizan principalmente sus actividades fuera de la CAPV.

16. La norma realiza una **vinculación entre titulación determinada y actividad** para la que habilita.

Los llamados “monitores” pueden llevar a cabo tareas de “acondicionamiento físico, recuperación o mejora de la condición física, entrenamiento o preparación personal o análogas”. Para ello se exige la titulación de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

Para llevar a cabo actividades de enseñanza, aprendizaje o análogas de carácter general, multideportivo o multidisciplinar, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, se requerirá una cualificación Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

Sin embargo, cuando las actividades de enseñanza, aprendizaje y análogas posean una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, y se realicen en el ámbito de la iniciación deportiva o de nivel básico, se requerirá una cualificación acreditable con Certificado del Ciclo Inicial del Grado Medio del título de Técnico Deportivo o Técnica Deportivo de la modalidad, especialidad o disciplina deportiva correspondiente o bien de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente, o Técnico Deportivo Superior o Técnica Deportiva Superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

Esta situación nos lleva a la conclusión de que quien quiera ejercer como monitor en niveles básicos y limitados a una disciplina concreta deberá tener cualquiera de las



titulaciones no universitarias, pero no podrá actuar, por ejemplo, si tiene un grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o, lo que resulta especialmente incongruente, tampoco podrá hacerlo si está en posesión de un certificado de profesionalidad.

Conclusiones parejas (salvo por la aceptación del certificado de profesionalidad) se pueden obtener del análisis del artículo 5 cuando habla de los “entrenadores” donde los problemas que poníamos de manifiesto se plantean de la misma forma.

Además, las titulaciones que habilitan al acceso y ejercicio de las profesiones se encuentran taxativamente restringidas por la propuesta a las de ámbito deportivo sin que se prevea la posibilidad de que personas con titulaciones diferentes -o en algunos casos experiencia acreditada que garantice la adecuada prestación de los servicios- puedan acceder al mercado tal como hacen en este momento. (Nos estaríamos refiriendo a médicos deportivos, profesionales de reconocido prestigio, fisioterapeutas, personas con dilatada experiencia acreditada antes de la creación de estas titulaciones, grado en educación primaria con mención en educación física...).

17. Todo ello nos lleva a la conclusión de que existe una acusada rigidez en la separación de actividades que pueden ejecutarse que no se encuentra adecuadamente motivada.

Tampoco puede considerarse explicitada la justificación de la vinculación exigida por la norma entre titulación y actividad para la que habilita.

Además no queda acreditado cómo el nuevo sistema contribuye a garantizar una mejora en la salud ni en la seguridad de las actividades deportivas cuando sin embargo produce el efecto de generar una parcelación de los servicios que se pueden prestar.

Esta regulación dificulta la comprensión del sistema y lo hace menos permeable a la entrada de nuevos oferentes de servicios. Se crean por tanto barreras de entrada que no resultan justificadas.

b. Las actividades de “director”

18. Mención especial merece la categoría creada por la norma referida al “director”. “La profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva **permite** realizar el conjunto de actividades profesionales relacionadas con la dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y funciones análogas respecto a centros, servicios, actividades y entidades deportivas, tanto de titularidad pública como privada, aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte”. Para ello, como en los casos anteriores, se exigen concretas titulaciones.

19. Como en los casos anteriores, no queda acreditado en qué medida la exigencia de las concretas titulaciones recogidas en la norma contribuye a la protección de la salud o



seguridad de los o las deportistas por lo que se genera nuevamente una reserva de actividad.

20. Además, no queda acreditada la razón por la que resulta necesario que exista un cierre de este mercado a personas que tienen titulaciones vinculadas con el deporte del mismo modo que no se requieren vinculaciones semejantes en gerencias, direcciones empresariales... de cualquier otro sector de la economía.

21. En este caso por lo tanto la identificación de esta profesión genera barreras, si cabe, más injustificadas que en los casos precedentes.

c. El o la profesor de Educación física.

22. La propia norma establece a este respecto que “de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, para ejercer tal profesión en los centros pertenecientes a la Escuela Pública Vasca y en los centros privados radicados en el País Vasco se requerirán las cualificaciones previstas en la legislación educativa, valorándose de forma preferente en Educación Primaria el Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física o equivalente”.

No obstante, sigue diciendo el precepto, “en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se valorará de forma preferente a quien posea el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalente. Estas preferencias sólo resultarán exigibles en aquellos supuestos en los que tales titulaciones no sean requeridas con carácter preceptivo.”

23. Como indica el propio texto, la profesión de Educación física está regulada en normativa que establece las situaciones en que la titulación es preceptiva. No cabe la posibilidad de que otra norma pueda establecer títulos que se valorarán “de forma preferente”.

La propia redacción de la norma establece que esas denominadas “preferencias” “sólo resultarán exigibles en aquellos supuestos en los que tales titulaciones no sean requeridas con carácter preceptivo”.

Esta redacción parece traslucir la creación de “preferencias” que se convierten en “exigencias” de titulación referidas a la profesión regulada de Profesor de Educación Física.

Esta exigencia resulta contraria al principio de libertad de acceso a la profesión y la libertad de elección de profesionales de los centros educativos.

Por tanto genera una restricción a la competencia que no está justificada.



d. Cuestiones comunes a las profesiones creadas por la propuesta.

24. Con carácter general, en la regulación se recogen varias cuestiones que podrían generar problemas de **falta de seguridad jurídica** para los potenciales operadores que vayan a prestar sus servicios en este mercado.

Por ejemplo, la norma establece (art. 2) que “los listados de atribuciones de las distintas profesiones contenidos en la presente Ley tienen por objeto establecer un ámbito funcional general de cada profesión y como consecuencia de ello ostentan un carácter enunciativo y no limitativo”. Se estaría por tanto generando una reserva de actividades “con carácter enunciativo y no limitativo”, lo cual resulta contrario al principio de que cualquier excepción recogida en una norma debe ser interpretada con carácter estricto y no amplio (*odiosa sunt restringenda*).

Por otro lado, varios artículos hacen referencia a titulaciones concretas “o equivalentes”, sin que se precisen los métodos que van a emplearse para realizar la equivalencia. Esto supone que queda en manos de la administración la fijación de los concretos criterios de entrada en el mercado, generando un margen de incertidumbre que puede resultar en sí mismo inhibitorio para los potenciales oferentes de servicios.

Otro ejemplo se puede encontrar cuando la disposición adicional tercera hace referencia a actividades de voluntariado “o análogas”, que se podrán dispensar, “excepcionalmente y de forma provisional”, a “colectivos específicos” de voluntarios de la exigencia de cualificación prevista en la Ley y exigir una “cualificación diferente”.

Lo mismo podría decirse de los casos en que se exige “una formación específica correspondiente a la actividad” (sin que quede clara la formación suficiente) o de la distinción de actividades porque se realicen “con miras a la competición”.

e. Valoración.

25. El anteproyecto no ha explicitado los beneficios específicos que supone la limitación a la libertad de prestación de servicios generada por la exigencia de concretas titulaciones y por la compartimentación de actividades de “monitor”, “entrenador” o “director deportivo”.

Por lo tanto no puede considerarse acreditada su necesidad para garantizar la salud y seguridad de los deportistas.

En consecuencia, independientemente de las consideraciones que podrían hacerse sobre la compatibilidad de la norma propuesta con la regulación de Unidad de Mercado y la de libre prestación de servicios en la Unión Europea, debe concluirse que esta medida constituye un obstáculo al mantenimiento de una competencia efectiva en dicho mercado.



B. Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco y referencia a la colegiación obligatoria.

26. El artículo 10 del Anteproyecto establece que será requisito indispensable para la prestación de servicios en las actividades reguladas, la incorporación al Colegio Profesional correspondiente, si así lo dispone la ley estatal correspondiente, o al Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco.

27. La obligatoriedad de colegiación constituye una barrera de entrada que solo se considera justificada cuando así lo establezca una Ley¹⁶. En varios preceptos de esta propuesta se hace referencia genérica o hipotética a la existencia de colegios profesionales en este ámbito. Debe destacarse que, en la medida en que tan solo existe colegio profesional para los y las profesores de Educación física, estas referencias deberían evitarse en la medida en que pueden generar una apariencia de existencia de diferentes colegios o de la conveniencia de su existencia lo cual resultaría contrario a la competencia y, sobre todo, al interés general.

28. Por otro lado debe analizarse si la creación de un registro que genera un obstáculo a la prestación de servicios, puede justificarse por razones de interés general.

Ni la Memoria, ni la Exposición de Motivos que acompañan al anteproyecto de Ley hacen referencia alguna al requisito de inscripción de los operadores económicos en un registro administrativo. El artículo 10 de la propuesta realiza una mención general a “la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios”.

La defensa de los consumidores y usuarios, viene derivada de numerosas normas que resultan de aplicación a este sector¹⁷. Estas normas garantizan la protección de los usuarios obligando a los prestadores a facilitar la información necesaria sobre todos los elementos que la Ley considera imprescindibles para la prestación del servicio¹⁸.

¹⁶ Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/1986, de 10 de abril, BOE nº 102, suplemento, de 29 de abril de 1986, que ha reconocido la posibilidad de que determinadas profesiones sean restringidas en su acceso y ejercicio determinando titulaciones concretas o colegiación obligatoria. Sin embargo la alta instancia ha afirmado que “compete (...) al **legislador**, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión debe dejar de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia” (FJ 1).

¹⁷ Véase la página de Kontsumobide que recoge los links actualizados a la normativa autonómica y estatal que protege los intereses de las personas consumidoras http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs05/es/contenidos/informacion/kb_normativa/es_sll/normativa.html

¹⁸ Véanse a modo de ejemplo los artículos 22 y 23 de la previamente citada Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes



29. Por ello la obligatoria inscripción en un registro constituye una restricción a la libertad de prestación de servicios sin que se haya acreditado que contribuya a una mejor protección de los usuarios. Por ello debe concluirse que este Registro no resulta necesario ni proporcional, teniendo en cuenta que ya existen otras opciones menos restrictivas de la competencia como son las previstas en las normas de protección de los consumidores y usuarios y acceso a los servicios.

C. Reserva de denominaciones.

30. El artículo 9 de la norma propuesta establece que “solo podrán utilizarse las denominaciones de las profesiones enumeradas en esta Ley cuando el ejercicio profesional se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en las demás normas aplicables”. Sigue estableciendo que “No podrán utilizarse por otros profesionales aquellas denominaciones que, por su significado o por su similitud, puedan inducir a error con las reguladas en la presente Ley”. Se permite tan solo la posibilidad de emplear estos términos cuando se ejerzan acciones de voluntariado o en los casos de “organizaciones deportivas para clasificar en su seno los diferentes niveles de cualificación”.

31. En este sentido debe recordarse lo que al efecto ha manifestado la Comisión Nacional de la Competencia¹⁹.

“Los colegiados de determinados colegios de profesiones sin colegiación obligatoria disfrutaban en exclusiva del privilegio de una denominación profesional concreta, que resulta directamente identificable con la actividad profesional que realizan. Esta **reserva de denominación** puede dificultar el ejercicio profesional de los no colegiados y por tanto limita su acceso al mercado profesional correspondiente. Por tanto, este tipo de restricciones pueden tener un efecto equivalente a la colegiación obligatoria porque el profesional debe colegiarse para no tener una desventaja competitiva significativa respecto a los profesionales que pueden utilizar una denominación profesional adecuada.(...) **En profesiones en las que no es obligatoria la colegiación, esta clase de restricciones no tienen justificación.**”

Por ello debe concluirse que en actividades profesionales no sometidas siquiera a colegiación, la reserva de denominación constituye una reserva de actividad que impide a los profesionales que cumplen los requisitos académicos exigidos (y en consecuencia las

complementarias, BOE nº 287, 30 de noviembre de 2007 (modificado, entre otras, por la Ley 3/2014, de 27 marzo),), así como la Ley vasca 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarios (precitada).

¹⁹ COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. *Informe sobre los colegios profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios*. Madrid, 26 de abril de 2012, en CNC, <http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=475051>.



competencias que garantizan su adecuada prestación, cabiendo incluso que la cualificación profesional sea idéntica) el empleo de la denominación profesionalizante²⁰.

Además en el caso que nos ocupa las denominaciones empleadas por la norma para las profesiones de nuevo cuño (monitor, entrenador, director) resultan enormemente comunes en su uso cotidiano sin que hasta el momento haya existido limitación alguna (ni la haya en las regulaciones del entorno).

Por ello esta reserva de denominación debe considerarse abiertamente contraria a la libre competencia.

D. Creación de infracciones y sanciones.

a. Creación de sanciones por infracciones formales.

32. El artículo 15 del Anteproyecto, se refiere al ejercicio de las actividades reguladas sin respetar lo dispuesto en esta Ley.

Este precepto establece que ejercer la actividad sin contar con la cualificación profesional correspondiente dará lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable.

Por su parte, la Disposición Final Primera y segunda modifican los artículos 127 y 128 de la Ley de Deporte del País Vasco para añadir sendas infracciones calificadas como conducta muy grave o grave. Estas conductas son la prestación de servicios profesionales sin la posesión de la cualificación profesional exigida en la legislación reguladora de las profesiones del deporte (muy grave) y el incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco (grave).

33. Estas normas crean infracciones que pueden llevar aparejadas serias consecuencias planteándose incluso consecuencias penales.

En ninguna de ellas sin embargo se hace referencia a que la prestación de servicios se haya realizado sin garantía para la seguridad o salud de los usuarios o se hayan producido riesgos en el mismo sentido.

A parte de otras consideraciones jurídicas, la creación de infracciones por vulneración de requisitos formales (como la falta de titulaciones no exigidas por las leyes o, de manera más grave, la falta de inscripción en un simple registro administrativo) genera una barrera de entrada injustificada en la medida en que puede contribuir a inhibir a profesionales que no pondrían en cuestión en modo alguno la seguridad y salud de los usuarios de llevar a cabo sus servicios.

²⁰ Véase la Resolución del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia de la Autoridad Catalana de la Competencia en el Expte. 12/2009 - *Colegio de Economistas de Cataluña*, de 26 de julio de 2011.



El ordenamiento jurídico tiene adecuadamente reguladas las responsabilidades contractuales y civiles por generación de daños en estos sectores y puede concluirse por tanto que la creación de estas infracciones no contribuye a mejorar la protección de los usuarios.

Estas infracciones contribuyen por tanto al cierre artificial del mercado con todas las consecuencias negativas que esto conlleva (precios, innovación, puestos de trabajo) y sin que haya quedado acreditada ventaja alguna relacionada con los objetivos declarados en esta norma.

b. Creación de infracciones administrativas y disciplinarias que restringen injustificadamente el ejercicio de las actividades.

34. El artículo 11 párrafo primero de la norma propuesta crea una larga y profusa lista de obligaciones que tienen que cumplir las personas que prestan los servicios en las actividades mencionadas.

Pocas de las obligaciones recogidas en el párrafo primero están directamente relacionadas al cumplimiento de los objetivos declarados en la norma (teniendo en cuenta las obligaciones que ya existen recogidas en otras muchas normas vigentes); algunas de ellas difícilmente pueden ser objeto de control efectivo por parte de la administración por lo que su consideración como infracciones puede ir en contra de los principios básicos del derecho administrativo sancionador; se hace referencia a cualquier otra obligación que “determine el correspondiente colegio profesional al que se deban adscribir en su caso”, sin que existan colegios profesionales salvo en un supuesto.

El párrafo segundo establece taxativamente que “El incumplimiento de los citados principios y deberes dará lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades administrativas y disciplinarias”.

La tipificación de infracciones respecto de esta amplia y difusa lista de deberes puede resultar inhibitoria de la entrada en el mercado.

E. Restricciones a la publicidad de los servicios.

35. El artículo 18.3 de la norma propuesta establece que “no podrán ser objeto de publicidad por los profesionales objeto de regulación en esta Ley aquellos servicios sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para la salud, quedando prohibida la publicidad de aquellos servicios o productos-milagro”.

Las prohibiciones a la publicidad de los servicios están estrictamente restringidas por la normativa de competencia en la medida en que la publicidad es precisamente una de las herramientas más eficaces para competir en el mercado.



La protección de la salud justifica la existencia de ciertas limitaciones a la publicidad de algunas actividades. Estas limitaciones están adecuadamente reguladas en la normativa de publicidad en materia sanitaria y en la de competencia desleal (en materia de publicidad engañosa) que tienen como objetivo salvaguardar los intereses de los usuarios por encima de los intereses comerciales²¹.

No queda por tanto acreditado que esta limitación a la publicidad resulte necesaria teniendo en cuenta los cauces ya existentes de protección del interés general.

F. Otras cuestiones que pueden afectar a la competencia.

36. El artículo 18.4 de la norma propuesta establece que “con el fin de garantizar el cumplimiento de la cualificación mínima de los profesionales que se encuentran dentro del ámbito de esta Ley, todos los contratos de prestación de servicios con dichos profesionales se formalizarán por escrito y recogerán con claridad la acreditación de la cualificación de dichos profesionales”.

Esta disposición precisa la forma contractual que deben tener los contratos que afecten a las actividades previstas en esta norma sin distinguir que se celebren entre empresarios (incluyendo autónomos) o en relaciones con usuarios (respecto de los que ya existe exigencia legal de forma escrita).

Debería acreditarse si y en qué medida estas exigencias normativas (la forma escrita y la acreditación de la titulación en cada uno de los contratos) contribuyen a la mejora del interés general.

37. La Disposición Adicional Sexta del Anteproyecto establece que todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en el mismo con presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas (profesor o profesora de Educación Física, Monitor o monitora deportiva y Entrenador o entrenadora) deberán acreditar la competencia en primeros auxilios en el plazo que se determine reglamentariamente (UC0272-2 del Catálogo de cualificaciones profesionales).

La legislación educativa ya establece los requisitos legales de acceso y ejercicio de la profesión de profesor de educación física por lo que no procede establecer requisitos añadidos. Especial mención requiere la Disposición Transitoria cuarta que prevé la posible remoción de los profesionales o incluso la consideración de un supuesto de “ineptitud sobrevenida” para aquellos que, en el plazo establecido por el anteproyecto, no cumplan con esta nueva exigencia de cualificación de primeros auxilios.

²¹ Véanse el REAL DECRETO 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 6 agosto 1996 BOE num. 189 y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE nº 10, de 11 de enero de 1991.



IV. CONCLUSIONES.

PRIMERA: El Anteproyecto genera una reserva de actividad de la prestación de servicios relacionados con el deporte para las personas que ostentan unas determinadas titulaciones o cualificaciones profesionales sin que haya quedado acreditado que existan razones de interés general que justifiquen su necesidad.

SEGUNDA: El nuevo sistema complica, compartimenta y restringe la prestación de servicios en el ámbito del deporte. Está acompañado de varios elementos que tienden al cierre del mercado (creación de un registro, diseño de nuevas sanciones, reserva de denominación, formalización de los contratos por escrito, restricciones a la publicidad, delimitación de las actividades a prestar...). Todo ello genera barreras de entrada que dificultan la prestación del servicio con las consecuencias negativas que ello conlleva sin que haya quedado acreditado que tales barreras contribuyan al objeto declarado por esta norma.

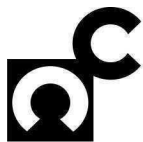
PRESIDENTE
MARIA PILAR CANEDO ARRILLAGA

SECRETARIO
IBON ALVAREZ CASADO

VOCAL
NATIVIDAD GOÑI URRIZA

VOCAL
RAFAEL ITURRIAGA NIEVA





Lehiaren
Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca
de la Competencia

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN KIROL LANBIDEEI HELDU ETA HORIETAN JARDUTEARI BURUZKO LEGE AURREPROIEKTUARI EGINDAKO TXOSTENA

Aurkibidea:

I. Aurrekariak eta LEAren eskuduntza.....	¡Error! Marcador no definido.
II. Lehiaren murrizketen justifikazioa eta legezko mugapenak zerbitzuak emateari dagokionez	2
III. Proposatutako araudiaren azterketa lehiaren ikuspegitik.	5
1. Arau-paradigmaren aldaketa	5
2. Proposatutako arauak sorrazten dituen hesien azterketa.	7
A. Titulazioak eskatzea eta jardueraren erreserba egitea.	8
a. “Begirale” edo “entrenatzailearen” jarduerak.....	8
b. “Zuzendariaren” jarduerak	10
c. Gorputz hezkuntzako irakaslea	11
d. Proposamenak sortzen dituen lanbideen gaineko alderdi erkideak.....	11
e. Balorazioa.....	12
B. Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol-Profesionalen Erregistroa eta elkargoan derrigorrez kideatzeko aipamena.	12
C. Izendapenen erreserba.	1¡Error! Marcador no definido.
D. Arau-haustea eta zehapenak sortzea.	15
a. Zehapenak sortzea arau-hauste formalen zioz.	15
b. Jardueretan aritzea justifikaziorik gabe mugatzen duten administrazio- eta diziiplina-urratzeak sortzea.	16
E. Murrizketak zerbitzuen publizitateari.....	16
F. Lehiari eragin ahal dioten beste alderdi batzuk.	17
IV. ONDORIOAK.	18



Lehiaren
Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca
de la Competencia

Osoko Bilkura

María Pilar Canedo Arrillaga and., batzordeburua

Natividad Goñi Urriza and., batzordekidea

Rafael Iturriaga Nieva jn., batzordekidea

Idazkaria: Ibon Alvarez Casado jn.

Lehiaren Euskal Agintaritzaren Osoko Bilkurak, 2015eko martxoaren 3ko saioan, goian aipaturiko kideak bilduta zeudela, honako irizpena eman du, Euskal Autonomia Erkidegoan, kirolari lotutako lanbideei heldu eta horietan jarduteko Lege Aurreproiektuaren inguruan.

I. Aurrekariak eta LEAren eskuduntza.

1. 2015eko urtarrilaren 23an, Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA) honetara heldu zen Euskal Autonomia Erkidegoan, kirolari lotutako lanbideei heldu eta horietan jarduteko Lege Aurreproiektua (aurrerantzean, Aurreproiektua), entzunaldiak irauten duen artean, egokitzen diren alegazio eta iradokizunak egiteko xedez.

2. Honako txosten hau egin da Legeak erakunde honi egilesten dion eskumenarekin bat etorriz, lehiaren sustapena dela eta¹.

Aipatutako eginkizunaren xede nagusia da euskal merkatuen lehia eraginkorra sustatzea, zehapenez kanpoko egintzen bidez; horietan, nabarmentzekoa da herri-administrazioekiko harremanak lantzea, arau juridikoen proposamen-egile den aldetik.

II. Lehiaren murrizketen justifikazioa eta legezko mugapenak zerbitzuak emateari dagokionez.

3. Askotan, lanbide-zerbitzuak lehiaren murrizketen eraginpekoak dira eta, hortaz, lehiaren agintaritzak askotariko erantzunak eman behar izaten ditu². Arestian esandako murrizketak, arruntan, lanbideari heltzeko hesiak dira edo lanbidean jarduteko baldintza zehatzak.

¹ Ikusi Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.3 eta 10.n artikulua. EHAA, 29 zk., 2012ko otsailaren 9koa.



Lanbide jakin bati heltzeko murrizketen ondorioz, lanbide-zerbitzuen eskaintza gutxitu egiten da merkatuan eta, era berean, merkatu horretan jarduten duten eragile ekonomikoen arteko lehia ere txikitzen da. Lanbide jakin batean jarduteko murrizketek, ordea, asaldurak sorrarazten dituzte merkatuetan eta, horien eraginez, pizgarri gutxi sortzen dira zerbitzuak hobetzeko eta prezioak merkatzeko. Ildo horretan, lehiatzeko gaitasun eraginkorra murrizten diete profesionalei, ez dira elkarrengandik bereizten eta koordinazio horizontala bultzatu daiteke. Zerbitzuen erabiltzaileak babesteko neurri ugari daude, azkenen eskubideak bermatzeko³.

Hasteko eta bat, administrazioak ahalbidetu behar du eskaintza bereiziak egon daitezen, kalitate, prezio eta dena delako zerbitzuaren gainerako baldintzei dagokienez, erabiltzaileak askatasun osoz hautatzea izan dezan haien artean; beraz, merkatuko akatsak zuzendu edo babestu beharreko interes publikoari eusteko asmoz bideratzen diren esku-hartze murriztaile oro interes orokorraren aurkakoa da.

² Ikusi, adibide gisa, honako hau: MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. IPN DP/003/14 Agindu Proiektua, gidaridun ibilgailuak alokatzeari buruzko FOM/36/2008 AGindua aldarazten duena. Madril, 2014ko urtarrilaren 30ekoa, MLBN. http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/IPN%20DP_003_14%20Proyecto%20de%20Orden%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Orden%20FOM_36_2008%20de%20Arrendamiento%20de%20Veh%C3%ADculo%20con%20Condutor%20.pdf; MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA.

IPN/DP/002/14 Errege Dekretuaren Proiektua, lurreko garraioen antolamenduari buruzko Legearen Araudia aldarazten duena. Madril, 2014ko urtarrilaren 30ekoa, MLBN, http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/IPN_DP_002_14%20PROYECTO%20DE%20REAL%20DECRETO%20QUE%20MODIFICA%20EL%20REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ORDENACI%C3%93N%20DE%20LOS%20TRANSPORTES%20TERRESTRES%20.pdf; LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA. Bilboko Udalak egindako kontsultari erantzuteko txostena, Bilboko taxiari buruzko udal ordenantza 33.1 artikulua aldatzearen gainekoa, in: http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/INFORME%20TAXI%20BILBAO%20DEFINITIVO_%20web.pdf (txosten horretan aipatutako orrialde guztien azken kontsultaren data 2015eko otsailaren 25a da).

³ Ikusi, izaera orokorrean, Europako Parlamentuaren eta Europako Batzordearen 2011/83 EB Zuzentaraua, 2011ko urriaren 25ekoa, kontsumitzaileen eskubideei buruzkoa. Zuzentzarau horrek Europako Batzordearen 93/13/EEE Zuzentaraua eta Europako Parlamentuaren eta Europako Batzordearen 1999/44/EB Zuzentaraua aldarazi zituen eta Europako Batzordearen 85/577/EEE Zuzentaraua eta Europako Parlamentuaren eta Europako Batzordearen 97/7/EB Zuzentaraua, DOUE L 304/64, 2011ko azaroaren 22koa indargabetu zituen; 3/2014 Legea, martxoaren 27koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina eta beste lege osagarri batzuk aldarazten dituena, azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoa, EAO, 76 zk., 2014ko martxoaren 28koa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko **6/2003 Legea, abenduaren 22ko, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuarena, EHAA, 254 zk., 2003ko abenduaren 30ekoa.**



4. Merkatuetako lehiaren esparruan, zerbitzuari heltzeko hesiak honela definitzen dira: merkatu jakin batean, operadore berrien sarbidea zailtzen edo galarazten duten oztopo eta kostu guztiak⁴.

Sartzeko hesiek ondorio kaltegarriak sorrazten dizkie arloko ekonomiari; izan ere, hesiek operadore berrien sarrera zailtzen dute eta, beraz, operadore berriek ezin izango diote lehiari eutsi, ez eta, zerbitzuen eskaintzari dagokionez, erabiltzaileentzako baldintza hobeak sortu ere. Sartzeko hesirik ez bada merkatuetan, enpleguaren sorrera eta berrikuntza sustatzen dira eta, gainera, lehia hobetzen da⁵.

Nolanahi ere, inguruabar jakin batzuetan, interes orokorreko arrazoiek bidezkotu dezakete merkatu jakin batera sartzeko modua mugatu edo galarazteko hesiak ezartzea, baina lehiaren ikuspegitik, sartzeko hesiak onargarriak izango badira, eskakizun batzuk bete beharko dituzte⁶:

- **Beharrianak** esan nahi du hesiek bidezkotuta egon behar dutela honako arrazoiengatik: ordena publikoa, segurtasun publikoa, ingurumenaren zaintza, o bestela, natur baliabideen eskasia edo ageriko traba teknikoak direla eta, merkatuko operadore ekonomikoen kopurua mugatu behar denean.
- **Proporzionaltasunak** esan nahi du mugapenak tresnarik egokiena izan behar duela lortu nahi den helburua lortuko dela bermatzeko, emaitza berdina lortzeko modua ahalbidetzen duten beste neurri batzuk (erabakitzen direnak baino muga txikiago ezartzen dutenak) ez daudelako.
- **Diskriminazio** edo **bereizketarik eza**, herritartasun, establezimenduaren kokapena edo sozietatearen egoitzaren arabera;

Beraz, zeinahi legeak merkatura sartzeko neurri mugatzailerik ezartzen duenean, arrazoitu beharko du legeak arestian azaldutako eskakizunak betetzen dituela: beharrianak, proporzionaltasuna eta bereizketarik eza.

⁴ LEHIAREN DEFENTSAKAKO AUZITEGIA C89/05 Kontzentrazio Ekonomikoaren Espedientearen Txostena, *Igualatorio Medikoak*, 73. or. <http://www.cnmec.es/es-es/competencia/buscadorde/expedientes.aspx?num=C89/05&ambito=Concentraciones&b=&p=0&numero=C89/05&ambitos=Concentraciones&estado=0&sector=0&av=1>.

⁵ Merkatura sartzeko hesiak legezkoak, teknikoak eta ekonomikoak izan daitezke edo, bestela, merkaturan lehendik dauden enpresen egoera finkoaren ondorioz sorrazitakoak. Ikusi kontzentrazio horizontalen ebaluazioari buruzko Batzordearen Zuzentarauen 71. atala, enpresen arteko kontzentrazioak kontrolatzeko Batzordearen Araudiari jarraiki (2004/C 31/03), DOUE C 31/5, 2004ko otsailaren 5ekoa. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018:es:PDF>.

⁶ Zerbitzu-jaruerei era askean heltzeko eta horietan jarduteari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 5. artikulua, EAO, 283 zk, 2009ko azaroaren 24koa. Merkatuaren batasunaren bermeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legean jasotako idazkerari jarraiki, EAO, 295 zk, 2013ko abenduaren 10ekoa.



5. Omnibus izeneko legeak hainbat aldaketa txertatu zituen araudian, lanbide-zerbitzuak liberalizatzeko xedez⁷. Besteak beste, 39bis artikulua txertatu zuen 30/1992 Legean⁸. Arau horren oinarritzko izaera dela eta, herri-administrazio guzti-guztiak behartuta daude, ezen lehia mugatzen duen neurriren bat ezarri behar dutenean edo zerbitzu-emateari hesiak ezartzen dizkiotenean, neurririk apalena edo mugarik txikiena ezartzen duena hautatu behar baitute, interes publikoa babesteko beharrezko arrazoitu behar dute eta, gainera, lortu nahi diren helburuak lortzeko egokia dela bidezkotu behar dute, betiere bereizkeriazko traturik gertatzen ez dela bermaturik.

6. Beste alde batetik, Ekonomia Iraunkorraren Legeak herri-administrazioei eskatzen die, besteak beste, lehia hobetzeko abiaburua errespetatzea. Hori horrela, herri-administrazioek enpresen lehiakortasuna bultzatu behar dute, araudi-esparruak ezarriz, lehia hobetu eta ondasun nahiz zerbitzuetako merkatuen eraginkortasuna sustatzeko eta, era berean, ekoizpen-baliabideen esleipena erraztu eta ekoizkortasuna hobetzeko helburuz⁹. Manu hori jarraiki, herri-administrazioek bideratutako araubidezko ekimenak beharizan, proportzionaltasun, segurtasun juridiko, gardentasun, irisgarritasun, erraztasun eta eraginkortasunaren abiaburuetara doitu behar dira ezinbestean.

7. Azkenik, Merkatuaren Batasunaren Bermeari buruzko Legearen funtsak ditugu operadore ekonomikoen zirkulazio eta ezarpen askeak; hala, ondasunak eta zerbitzuak era askean ibil daitezke, eta inongo agintaritzak ezin galaraz diezaieke zirkulazioa zuzenean edo zeharka, jarduera ekonomikoa gauzatu ahal izateko oinarritzko baldintzen berdintasunari eutsita¹⁰.

Lege hori aplikatzekoa da lege ezarritako merkatu-baldintzetan garatzen diren jarduera ekonomikoei heltzeko eta, legearen artikuluek xedatzen dutenarekin bat, operadore ekonomiko guztiek eskubide berdinak izango dituzte, inolako bereizkeriarik gabe egoitza edo establezimendua kokatzen deneko lekua direla eta.

Horren ildotik, jarduera ekonomikoei heltzeaz edo horietan jarduteaz diharduen izaera orokorreko xedapen batek, administrazio-egintza batek edo kalitate-arau batek ezin izango du baldintzarik edo eskakizunik ekarri, baldin eta horren ondorioz, zuzenean edo zeharka,

⁷ Abenduaren 22ko 25/2009 Legea, beste hainbat lege aldaratzen dituena, zerbitzu-jarduerei era askean heltzeko eta horietan jarduteko legearen arabera egokitzeko, EAO, 308 zk., 2009ko abenduaren 23koa.

⁸ Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena, EAO, 285 zk., 1992ko azaroaren 27koa.

⁹ Martxoaren 4ko 2/2011 Legea, Ekonomia Iraunkorrarena, EAO, 55 zk., 2011ko martxoaren 5koa.

¹⁰ Abenduaren 9ko 20/2013 Legea, Merkatuaren Batasunaren Bermeara. EAO, 296 zk.; 2013ko abenduaren 10koa.



bereizkeria ezartzen bada operadore ekonomikoaren establezimendua edo egoitza direla eta.

Europar Batasunaren esparruari gagozkiola, araudiak gehienbat Euskal Autonomia Erkidegoan helbidea duten edo zerbitzuak bertan ematen dituzten subjektuei –nazionalei edo EBko estatu kideetako subjektuei– eragiten baitie, langileen zirkulazio askeari edo zerbitzuak emate askeari buruzko araudiak ere berebiziko garrantzia dauka¹¹.

III. Proposatutako araudiaren azterketa lehiaren ikuspegitik.

1. Araudi-paradigmaren aldaketa.

8. Gaur egun, Euskadiko Kirolaren Legeak arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoan kirolari atxikitako zerbitzu profesionalen esparrua¹². Araudi horren xedea kirola arautzea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, baina ez du lanbide zehatzik aipatzen. Dena dela, kirolari atxikitako jarduerekin lotzen diren ikasketak artezten dituzten arau ugari daude; horietako batzuk kirol-motaren arabera bereizten dira eta beste batzuk izaera orokorrekoak dira¹³. Gainera, kirol federazioek ikastaro espezifikoak eskaintzen dituzte profesionalen gaikuntza bideratzeko kirol-mota guztietan. Gaurdaino, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago lotura zehatzik kirol-titulazioen eta zerbitzu profesionalen artean. Nolanahi ere, Euskadiko Kirolaren Legeak honakoa ezartzen du: “Kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamenduak, sustapena eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute”. Hala, araudiak agintzen duena oraindik ere garatu ez denez, operadore ekonomikoek, gaur egun, zerbitzuak eskaintzen dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan merkatuari heltzeko eta horretan jarduteko inolako

¹¹ Ikusi Europar Batasunaren Jardunbide Itunaren (EBJI) 26. artikulua (barruko merkatua), 49tik 55.enera (ezarpena) eta 56tik 62.enera (zerbitzuak), eta 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EB Zuzentaraua, barne merkatuko zerbitzuei buruzkoa, DOUE, L 376, 2006ko abenduaren 27koa, 36/68 or. Aipatzekoa da Europako Parlamentuaren 2013ko otsailaren 7ko Ebazpena; ebazpen horretan, hainbat gomendio ageri dira Batzordearentzat, merkatu bakarraren gobernatzaren ingurukoak (2012/2260(INI)), eta bereziki azpimarratzen da zerbitzuen sektorearen garrantzia, hazkundera ahalbidetzeko esparru giltzarria delako, zerbitzuak emateko askatasuna funtsezkoa izanik eta Zerbitzuei buruzko Zuzentarauaren aplikazio osoak onura ugari ekarriko dituelarik.

¹² Ekainaren 11ko Legea, Euskadiko Kirolarena. EHAA, 118 zk.; 1998ko ekainaren 25ekoa.

¹³ Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuak ezartzen du araubide bereziko kirol-ikasketen araudi orokorra. EAO, 268 zk., 2007ko azaroaren 8koa. 22.2 artikulua dioenari jarraiki, araudiak ez dakar lanbide-jardueraren arauketarik. Beraz, ez du zuzeneko loturarik ezartzen araututako titulazioen eta lanbide-jardueren artean.



mugapenik gabe. Salbuespen bakarra dugu gorputz hezkuntzako irakaslearen lanbidea. Izan ere, lanbide tituluduna da eta elkargo profesionalean batzen da, Hezkuntza arloko araudiak ezartzen duen lege¹⁴.

9. Aurreproiektuak “*ex novo*” ezarri zituen “begiralea”, “hezitzailea” eta “zuzendaria” izeneko lanbideak, eta horietan jarduteko erreserba egiten ahalegindu zen, bai eta lanbide horietako bakoitzak gauza ditzakeen jardueren “partzelazioa” ere.

Paradigma-aldaketa horri jarraiki, kirol-zerbitzuak eskaini nahi dituen orok, besteren kontura edo norberaren kontura, titulazio jakin batzuen jabe izan beharko du edo, bestela, egiaztapen ofizial zehatza lortu beharko du. Horrez gain, izena eman beharko du erregistro publiko egokian eta, horretarako, dokumentazio zehatza aurkeztea eta eskakizun jakin batzuk betetzea eskatuko diote.

10. Aurreko guztiagatik, interes orokorreko arrazoiak eman ezean edo herri-administrazioek erantzun beharreko merkatu-akatsak gertatu ezean, lanbide jakinetan jarduteko erreserbak ondorio kaltegarriak sorrarazten ditu, lehenengoz eta bat, zerbitzu-emaileentzat, dagokion merkatura sartzeko baldintzak zailtzen zaizkielako (hau da, sartzeko hesiak sortzen dira). Era berean, erabiltzaileentzat ere kaltegarriak dira ondorioak, aukera murrizten zaielako eta, oro har, hartutako zerbitzuen prezioa igotzen delako. Horrek guztiak badakar enpleguaren sorrera apaltzea eta berrikuntzarako nahiz zerbitzuak emateko hobekuntzarako pizgarriak ahultzea.

11. Proposamenak dioenez, “Lege mailako arau bat tresna egokia da jarduera profesional libre jakin batzuk jarduera arautu bihurtzeko”.

Horren haritik, argitu behar da lege-mailako arau bat hautatze hutsak ez duela funtsatzen lehia mugatzeko inolako neurririk. Nolanahi ere den, mugapenak interes publikoan oinarritu behar dira eta interes publikoa behar bezala bidezkotu behar da, beharrezana, proportzionaltasuna eta bereizkeriarik eza aztertzeko helburuz.

Ezin da ahaztu testu artikulatuak berak agerian uzten duela muga eta asaldura gutxien sorrarazten dituzten neurrien alde egin behar dela.

2. Proposatutako arauak sorrarazten dituen hesien azterketa.

12. Lege Aurreproiektuari eta Zioen Azalpenari erantsitako Memoriak modu orokorrean oinarritzen du arautu egin behar dela kirolari lotutako lanbide batzuek osasunean eta

¹⁴ Ikusi Gorputz Hezkuntzako Irakasleen Elkargo Ofizialei buruzko azaroaren 3ko 2957/1978 Errege Dekretuaren 15. artikulua, EAO, 1978ko abenduaren 18koa.



kirolarien segurtasunean daukaten eragin “ukaezina”. Era berean, aipatutako agirietan adierazten da “prestakuntza egokirik gabeko” pertsonak aritu direla halako jardueretan, gizatalde bereziki kalteberen kasuan (eskolako garaian dauden haurrak eta gazteak). Modu berean, arauan ezartzen da bere helburua dela kirola sustatzea gizartean.

Ez Aurreproiektuaren Memoriak, ez Zioen Azalpenak ez dute zehazten esparru horretan orain arte garatu diren jarduerak zer-nolako eragin kaltegarriak sorrarazi dioten kirolarien osasunari nahiz segurtasunari; beste alde batetik, ez dute daturik ematen “Konstituzioaren ikuspegitik esanguratsuak diren xede publikoak” babesteko beharraz jabetzeko eta, hartara, zerbitzuak era askean eman ahal izateko mugarik ezartzeko¹⁵.

Kirolariei eragindako kalte zehatzak edo haien osasunak pairatutako benetako arriskua egiaztatzen ez badira arautu nahi diren jarduera guztien jardunari dagokionez, ezin da mugapena justifikatu.

A. Titulazioak eskatzea eta jardueraren erreserba egitea.

13. Kirolari lotutako zerbitzu jakin batzuk ematea “begirale”, “entrenatzaile” eta “zuzendari” gisa kalifikatutako pertsonentzat gordetzen da, betiere arauak jasotzen dituen gaitasunen jabe baldin badira.

a. “Begirale” edo “entrenatzailearen” jarduerak.

14. Arauak zehatz-mehatz bereizten ditu izendapen horien itzalean gauzatu daitezkeen jarduerak eta titulazio akademiko bereiziak ezartzen ditu horietako bakoitzarentzat.

15. Arloan dauden titulazioak jarduerari heltzeko eskakizun gisa identifikatzeak, zalantzarik gabe, zerbitzuen partzelazioa sorrazten du, baina ez da nahikotasunez arrazoitzen **konpartimentazio** horrek ahalbidetzen duela hartzaileen osasuna babesten.

Egoera horren adibide garbia dugu proposamenaren 4. artikuluan. Manuak ezartzen duenez, gorputz hezkuntzako irakasleek “begirale” deritzon jarduerari lotutako zereginetan jardun dezakete ikastetxeetan eskola-ordutegitik kanpo. Hala ere, profesional horiek ezin dira aipatutako begirale-zereginetan aritu ikastetxetik kanpo.

Adibide horrek argi eta garbi erakusten du proposatutako arauak sortzen duen “habilitazio” berriak merkatua ixten diela jarduera batzuei, baina baldintza horiek ez dizkiete onurak ekartzen erabiltzaileei, ezta horien segurtasuna eta osasuna babesteko estandarrak areagotzen ere.

Bada, beraz, merkatura sartzeko hesi garbia, arrazoirik gabekoa.

¹⁵ Konstituzio Auzitegiaren 194/1998 Epaia, urriaren 1ekoa, EAO, 260 zk., eranskina, 1998ko urriaren 30ekoa. Epai horrek, gainera, gorputz hezkuntzako irakaslearen lanbidearen aipurik baino ez du egiten.



Aurreko paragrafoan esandako baieztapenak balio berdina dauka “boluntariotzan” gauzatzen diren jarduerak arauaren aplikazio-eremutik kanpo uzten direnean (xedapen osagarri eta iragankorretan jasotzen diren babes-klausula konplexu guztiak aintzat hartuta).

Ilido beretik interpreta dezakegu 5.9 artikulua. Artikulu horrek dioenez, “kualifikazioa ez zaie eskatuko beste herrialde batzuetan edo beste erkidego batzuetan egoitza duten kirol-elkarteen entrenatzaileei edo kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan noizbehinka entrenatzen edo lehiatzen direnean, estatuko edo nazioarteko kirol-lehiaketak prestatu edo parte hartzeari dagokionez.

Arauan jasotzen den titulaziorik ez edukitzeak zalantza jarriko balu kirolarien segurtasuna edo osasuna, titulazioa zerbitzuak eskaintzen dituen zeinahi profesionali eskatu beharko litzaioke, zerbitzu-ematea aldizkakoa izan arren.

Antzeko ondorioak atera ditzakegu 7. artikuluan; horren arabera, egoitza Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo duten profesionalek edo erkidegotik kanpo jarduten dutenek ere ez dituzte aipatutako eskakizunak bete behar.

16. Arauak lotura garbia ezartzen du titulazio jakinen eta jarduera zehatzen artean.

“Begirale” deiturikoek “egokitzapen fisikoa bideratu, sasoia berreskuratu edo hobetu, banakako entrenamenduan edo prestakuntzan jardun” edo antzeko jardueretan aritu daitezke. Horretarako, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduonak edo Jarduera Fisiko eta Kirol Jardueren Animazioko goi-mailako teknikariak izan behar dira.

Irakaskuntza, ikaskuntza edo izaera orokorreko, kirol anitzeko edo diziplina anitzeko antzeko jardueretan aritzeko, berriz, kirol-mota bakarra ez denean, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduonak edo Jarduera Fisiko eta Kirol Jardueren Animazioko goi-mailako teknikariak izan behar dira.

Alabaina, irakaskuntza, ikaskuntza edo antzeko jarduerak kirol-mota bakarren ingurukoak direnean eta kirol-hastapenen esparruan edo oinarritzko mailan egiten direnean, kualifikazio egiaztagarria beharko da, mota horretako kirol-teknikariaren erdi-mailako graduaren hasierako zikloa eskuratuta edo, bestela, dena delako kirol-motako kirol-teknikariaren goi-mailako gradua eskuratuta.

Egoera horri erreparaturik, oinarritzko mailetan eta kirol-mota bakarrean begirale aritu nahi duenak unibertsitatez kanpoko titulazioetako bat izan beharko du, baina ezin izango du horretan jardun, esate baterako, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako gradua badauka edo profesionaltasunaren ziurtagiriaren jabe bada, guztiz ulertezina dena.

Antzeko ondorioak atera daitezke (profesionaltasunaren ziurtagiria onartzen dela kenduta) 5. artikulua aztertzen badugu. Bertan, “entrenatzaileez” ari denean, arestian mahairatzen genituen arazo berdinak proposatzen dira modu berean.



Gainera, lanbideei heltzeko eta horietan jarduteko modua ematen duten titulazioak zehatz-mehatz bereizten ditu proposamenak kirol-esparruko titulazioetatik. Hala, ez da aurreikusten titulazio desberdinak dituzten pertsonak –edo batzuetan, zerbitzu-emate egokia bermatzen duen eskarmentu egiaztatua– merkatura sartzea izan dezaten une honetan egiten duten eran. (Kirol-mediku, ospe handiko profesional, titulazio horiek sortu aurretiko eskarmentu zabaleko pertsona, gorputz hezkuntzako aipua duten lehen hezkuntzako gradudun eta abarrez ari gara).

17. Horregatik guztiagatik, pentsatzen dugu zurruntasun hertsiegia dagoela gauzatu daitezkeen jarduerak bereizterakoan, bereizketa hori ez baitago behar bezala arrazoiturik.

Era berean, ezin dugu argitzat jo arauak eskatzen duen loturaren justifikazioa titulazioaren eta titulazioak gaitzen duen jardueraren artean.

Gainera, ez da inola ere ziurtatzen sistema berriak kirol-jardueren inguruko osasuna eta segurtasuna hobetzen lagunduko duenik; bai, ordea, eskaini ahal diren zerbitzuen partzelazioa eragiten du.

Arauketak sistema ulertzen zailtzen du eta bideak ixten dizkio zerbitzu-eskaintzaile berrien sarrerari. Beraz, jarduerari heltzeko hesiak sorrarazten dira, inolako justifikaziorik gabe.

b. “Zuzendariaren” jarduerak

18. Beren-beregi jorratu behar dugu arauak jasotzen duen “zuzendaria” izeneko kategoria. “Kirol-zuzendaria deritzon lanbideak ondoko jarduera profesional hauetan guztietan aritzeko **aukera** ematen du: zuzendaritza, programazioa, plangintza, koordinazioa, kontrola, gainbegiraketa eta antzeko eginkizunak, ikastetxeetan, zerbitzuetan, jardueretan eta kirol-erakundeetan, titulartasun publiko nahiz pribatuetakoetan, kirol-zientziei datxekion ezaupideak eta teknikak baliatuz”. Horretarako, arestian azaldutako kasuetan bezala, titulazio zehatzak eskatzen dira.

19. Dena dela, aurreko kasuetan esan moduan, ez da ziurtatzen arauan eskatzen diren titulazio jakinen bidez kirolarien osasuna edo segurtasuna babesten lagunduko denik, eta beraz, jardueraren erreserba egiten da berriro ere.

20. Gainera, ez da arrazoirik ematen merkatuaren itxieraren beharrezana justifikatzeko kirolari lotutako titulazioak dituzten pertsonen; izan ere, ez baita antzeko loturarik eskatzen beste sektore ekonomiko bateko gerentzietan, enpresa-zuzendaritzetan eta abarretan.

21. Kasu honetan, beraz, lanbide honen identifikazioak hesiak sorrarazten ditu, antza denez, aurreko kasuetan baino bidegabeagoak.



c. Gorputz hezkuntzako irakaslea.

22. Lanbide horri dagokionez, arauak berak ezartzen duenez, “Hezkuntza kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren Laugarren Xedapen Gehigarriak xedatutakoari jarraiki, gorputz hezkuntzako lanbidean aritzeko Euskal Eskola Publikoari atxikitako ikastetxeetan eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden ikastetxe pribatuetan, hezkuntza-arloko legerian ezarritako kualifikazioak eskatuko dira, eta Lehen Hezkuntzan lehentasunez balioetsiko da Lehen Hezkuntzako Gradua, Gorputz Hezkuntzako aipua duena edo baliokidea”.

Hala eta guztiz ere, honakoa dio jarraian manuak: “Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan, lehentasunez balioetsiko da Jarduera Fisikoaren eta Kirol Zientzietako Gradua edo horren baliokidea daukan profesionala. Aipatutako lehentasunak bakar-bakarrik ezarriko dira titulazioak derrigorrezko izaeraz eskatzen ez diren kasuetan.”

23. Testuak berak dioen legez, Gorputz Hezkuntzako lanbidea araubidez erregulatzen da eta, bertan, titulazioa derrigorrezkoa deneko inguruabarrak ezartzen dira. Ez dago aukerarik, beraz, beste arau batek “lehentasunez” balioetsiko diren tituluak ezartzeko.

Arauaren idazkerak berak ezartzen du “lehentasun” deituriko horiek “bakar-bakarrik ezar daitezkeela titulazioak derrigorrezko izaeraz eskatzen ez diren inguruabarretan”.

Ageri denez, idazkerak adierazten dituen “lehentasunak” “eskakizun” bilakatzen dira titulazioetan, Gorputz Hezkuntzako irakaslearen lanbide arautuari dagokionez.

Eskakizun hori lanbideari heltzeko askatasunaren aurkakoa da eta, era berean, ikastetxeetako profesionalen hautaketa askearen aurkakoa da.

Beraz, lehia mugatzen du inolako justifikaziorik gabe.

d. Proposamenak sortzen dituen lanbideen gaineko alderdi erkideak.

24. Izaera orokorrean, arauketan jasotzen diren alderdi batzuek **segurtasun juridikoaren gabezia** sor lezake zerbitzuak merkatu horretan eskaini nahi dituzten balizko operadoreentzat.

Esate baterako, arauak ezartzen duenez (2. artikulua), “honako lege honetan jasotzen diren lanbideen eginkizunen zerrenden xede nagusia lanbide bakoitzaren esparru funtzional orokorra ezartzea da eta, horren ondorioz, adierazpenenezkoak dira, ez mugatzaileak”. Horrela, beraz, jardueren erreserba sortuko litzateke “adierazpenezko eran, ez era mugatzailean”, baina hori ez dator bat arauak ezarri behar duenarekin; izan ere, arau batean jasotako zeinahi salbuespen zentzu hertsian interpretatu behar da, ez zentzu zabalean (*odiosa sunt restringenda*).



Beste alde batetik, hainbat artikuluk titulazio zehatzak “edo baliokideak” aipatzen dituzte, baina ez da azaltzen zein prozedura erabiliko den baliokidetasuna egiteko. Aurrekoak esan nahi du administrazioaren esku geratzen dela merkatura sartzeko baldintza zehatzak ezartzea, eta egoera horrek sorrarazten duen ziurgabetasunak, berez, eragotzi ahal du zerbitzuen eskaintzaileen jarduna.

Beste adibide bat aurki dezakegu hirugarren xedapen gehigarrian. Xedapen horrek boluntariotza-jarduerak “edo antzekoak” aipatzen ditu, eta bertan xedatzen du “salbuespenez eta behin-behinekotasunez”, boluntarioen “talde espezifikoak” ez zaiela eskatuko legean ezartzen den kualifikazioa eta “beste kualifikazio bat” eskatu ahal izango zaiela.

Gauza bera esan genezake “jarduerari atxikitako prestakuntza espezifikoak” eskatzen den kasuetan (prestakuntza nahikoa zein den argitzen ez dela) edo jarduerak bereizten direnean, “lehiaketak prestatzeko” gauzatzen bide direlako.

e. Balorazioa.

25. Aurreproiektuak ez du argiro adierazten zer-nolako onurak ekarriko lituzkeen zerbitzuak era askean emateari jarritako mugak, titulazio jakinak eskatzearen ondorioz, ezta jardueren konpartimentazioak (“begiralea”, “entrenatzailea” edo “kirol-zuzendaria”) ekarriko lituzkeena ere.

Beraz, ezin da arauaren beharrezko egiaztatutzat eman kirolarien osasuna eta segurtasuna bermatze aldera.

Horren ondorioz, proposatutako araua merkatuaren batasunarekin eta Europar Batasunean zerbitzuak era askean emateko arauketarekin bateragarria ote den eztabaida alde batera utzita, ondorioztatu behar dugu honako arau hau oztupoa dela lehia eraginkorrari eusteko aipatutako merkatuan.

B. Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol-Profesionalen Erregistroa eta elkargoan derrigorrez kide izateko aipamena.

26. Aurreproiektuaren 10. artikulua ezarrita dauka, araututako jardueren gaineko zerbitzuak eman ahal izateko, derrigorrezkoa izango dela elkargo profesional egokian izena ematea, estatuko legeak hala xedatzen badu, edo bestela, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol-Profesionalen Erregistroan.

27. Elkargo bateko kide izateko derrigortasuna jarduerari heltzeko hesitza jotzen da eta bakarrik bidezkotu daiteke lege batek hala ezartzen duenean¹⁶. Proposamen honen

¹⁶ Ikusi Konstituzio Auzitegiaren apirilaren 10eko 42/1986 Epaia, EAO, 102 zk., eranskina, 1986ko apirilaren 29koa. Epai horrek ahalbidetu du lanbide jakin batzuei heltzeko sarrera eta horietan aritzeko modua



xedapen batzuetan, esparru honetako elkargo profesionalei buruzko aipamen generikoa edo hipotetikoa egiten da. Auzi honetan, Gorputz Hezkuntzako irakasleen elkargoa besterik ez dagoenez gero, nabarmendu behar dugu aipamen horiek baztertu beharko lirатеkeela, pentsaraz dezaketelako hainbat elkargo egon badaudela, edo bestela, elkargo horiek egotea komeniko litzatekeela, baina egoera hori lehiaren aurkakoa da eta, batez ere, interes orokorraren aurkakoa.

28. Beste alde batetik, aztertu behar da zerbitzuak emateari eragozten dion erregistroa eratzea justifikagarria den interes orokorreko arrazoien zioz.

Lege Aurreproiektuarekin batera datozen Memoriak eta Zioen Azalpenak ez dute aipatzen operadore ekonomikoek derrigorrez izena eman behar dutela administrazio-erregistro batean. Proposamenaren 10. artikulua orokorrean aipatzen du "kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen defentsa onena".

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa sektore honetan aplikagarriak diren arau ugaritan oinarritzen da¹⁷. Arau horiek erabiltzaileen babesa bermatzen dute eta zerbitzu-emaileak behartzen dituzte zerbitzua era egokian emateko Legeak nahitaezkoztat jotzen dituen elementu guztiei buruzko informazioa ematera¹⁸.

29. Horregatik, dena delako erregistroan derrigorrez izena eman behar izateak muga dakarkio zerbitzuak aske emateari, baina ez da egiaztatu neurriak erabiltzaileak hobeto babesten dituenik. Esandako guztiagatik, ondorioztatu behar dugu erregistroa ez dela beharrezkoa, ez proportzionala, aintzat hartzen badugu lehendik badirela lehia horrenbeste mugatzen ez duten aukerak, esate baterako, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko neurrietan eta zerbitzuei heltzeko neurrietan ezarritakoak.

mugatzea; horretarako, titulazio jakinak edo elkargoko kide izateko derrigortasuna ezarri du. Hala eta guztiz ere, erakunde gorenak baieztatu du "legegilearen eskumena dela (...), interes publikoaren eskakizunak eta gizarte-bizitzak emandako datuak aintzat hartuta, lehendik dagoen lanbide jakin bati dagokionez, era askean gauzatzeari noiz utzi behar zaion, eta titulaziopeko lanbidetzat noiztik aurrera jo behar den erabakitzea, hau da, lanbide horretan aritzeko tituluak beharrezkoak direla ebaztea. Ildo horretan, titulutzat ulertu behar da goi-mailako ikasketen jabe izatea, egiaztagiri edo lizentzia egokia eskuratuta" (FJ 1).

¹⁷ Ikusi Kontsumobide erakundearen webgunea. Bertan, kontsumitzaileen interesak babesten dituen erkidegoko eta estatuko legeriaren gaineko lotura eguneratuak agertzen dira: http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs05/es/contenidos/informacion/kb_normativa/es_sll/normativa.html

¹⁸ Ikusi, adibide gisa, arestian aipatutako zerbitzu-jardueri era askean heltzeko eta horietan jarduteko Legearen 22 eta 23. artikulua eta azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, **Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako** Lege Orokorraren testuategina eta beste lege osagarri batzuk onartzen dituen, EAO, 287 zk., 2007ko azaroaren 30ekoa, (besteak beste, martxoaren 27ko 3/2014 Legeak aldarazita), eta Euskal Autonomia Erkidegoko 6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuarena (arestian aipatuta).



C. Izendapenen erreserba.

30. Proposatutako arauaren 9. artikulua ezartzen du “Lege honetan aipatutako lanbideen izendapena bakar-bakarrik erabili ahal izango dela lanbide-jarduna honako lege honetan ezarritakoarekin eta aplikagarriak diren gainerako arauekin bat datorrenean”. Aurrerago, arauak dio “beste profesional batzuek ezin izango dituztela erabili antzeko esangura edo antzeko idazkera duten izendapenak, baldin eta honako lege honetan arautzen direnekin nahas badaitezke”. Hala, arauari jarraiki, izen horiek bakarrik erabil daitezke boluntariotza-ekintzetan edo “kirol-elkarteen baitan, kualifikazio-mailak elkartearen barruko jardunbidean sailkatzeko asmoz.

31. Ildo horretan, gogora ekarri behar dugu gai horri dagokionez Lehiaren Batzorde Nazionalak ezarri duena¹⁹.

“Kidetzea derrigorrezkoa ez den elkargo profesional jakin batzuetako elkargokideek izendapen profesional baten pribilegioa gozatzen dute era eskusiboan, eta izendapen hori zuzenean lotzen da elkargokideek garatzen duten lanbide-jarduerarekin. **Izendapen-erreserba** horrek elkargoko kide ez direnen jarduera profesionala galaraz dezakete eta, beraz, dena delako merkatu profesionalerako sarrera mugatzen die azkenei. Hori dela eta, murriztapen horiek eta derrigorrezko kideak antzeko ondorioak izan ditzakete; izan ere, lehiaren ikuspegitik, profesionalak elkargoko kide egin behar desabantaila esanguratsurik ez edukitzeko izendapen profesional egokia bala dezaketen profesionalen aldean.(...) **Elkargokidetzea derrigorrezkoa ez den lanbideei gagozkiela, murriztapen horiek ez dute inolako justifikaziorik.**”

Hori dela eta, argiro esan behar dugu elkargoko kide egitea beharrezkoa ez den lanbide-jardueretan, izendapenaren erreserbak jardueraren erreserba ere badakarrela, eta azkenak galarazten diela eskakizun akademikoak betetzen dituzten profesionalen (eta, ondorioz, zerbitzu-emate egokia bermatzen duten gaitasunak eskuratu dituzten profesionalen, nahiz eta lanbide-kualifikazioa berdina izan) lanbidearen izendapena erabiltzea²⁰.

Gainera, hizpide darabilgun auzian, sortu berriko lanbideetan arauak erabiltzen dituen izendapenak (begiralea, entrenatzailea, kirol-zuzendaria) arruntegiak dira eguneroko erabileran eta orain arte ez da inolako murriztapenik izan (ezta inguruko arauketetan ere).

¹⁹ LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. *Elkargo profesionalen buruzko txostena, Zerbitzuen Zuzentzarauaren transposizioaren ondorioak*. Madril, 2012ko apirilaren 26an, Lehiaren Batzorde Nazionalan, <http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=475051>.

²⁰ Ikusi Lehiaren Kataluniako Agintaritzaren Lehiaren Defentsarako Kataluniako Auzitegiaren Ebazpena 12/2009 espedientearen - *Kataluniako Ekonomialarien Elkargoa*, 2011ko uztailaren 26koa.



Horregatik, argi eta garbi esan behar da izendapenaren erreserba hori lehia askearen aurkakoa dela.

D. Arau-haustek eta zehapenak sortzea.

a. Zehapenak sortzea arau-hauste formalen zioz.

32. Aurreproiektuaren 15. artikulua jorratzen ditu lege honetan ezarritakoa betetzen ez duten jardura arautuak.

Manu horretan ezartzen da jardueran arituz gero lanbide-kualifikazio egokia eduki gabe, administrazio-, diziplina- eta zigor-erantzukizunak sortuko direla, aplikagarria den ordenamendu juridikoari jarraiki.

Beste alde batetik, Azken Xedapenetan lehenengoak eta bigarrenak Euskadiko Kirolaren Legearen 127 eta 128. artikulua aldaratzen dituzte, larritzat eta oso larritzat jotako urratzeak gehitzeko helburuz. Larritzat jotako jokamoldeak zerbitzu profesionalak ematean dautza kirolari atxikitako lanbideak arautzen dituen legeriak eskatzen duen lanbide-kualifikazioaren jabe izan gabe (oso larria), eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol-profesionalen Erregistroan izena emateko betebeharra ez betetzea (larria).

33. Arau horiek urratzeak jasotzen dituzte eta urratzei ondorio larriak ezar dakizkieke, bai eta zigor-arloko zehapenak ezarri ere.

Nolanahi ere, inongo arau-haustetan ez da aipatzen zerbitzugintza gauzatu dela erabiltzaileen segurtasuna edo osasuna bermatu bari; ildo beretik, ez da esaten osasun-edo segurtasun-arriskurik gertatu denik.

Beste gogoeta juridiko batzuk gorabehera, eskakizun formalak urratzen direlako arau-haustek sortzeko (hala nola, legeak eskatzen ez dituzten titulazioak ez edukitzea edo, larriagoa dena, izena ez ematea administrazio-erregistro huts batean), sartzeko hesia sorrarazten du inolako justifikaziorik gabe, zerbitzuak emanez gero, erabiltzaileen segurtasunari eta osasunari inongo kalterik eragingo ez lieketen profesionalak bazter utz ditzakeelako.

Ordenamendu juridikoak egoki arautzen ditu kontratuko erantzukizunak erantzukizun zibilak sektore horietan kalteak gertatzen direnean eta, beraz, esan dezakegu arau-haustek sortzeko ez diola ezertan laguntzen erabiltzaileen babesa hobetzeari.

Alabaina, arau-haustek merkatuaren itxiera artifiziaa ahalbidetzen dute, eta horrek dakartzan ondorio kaltegarri guztiei bide ematen die (prezioa, berrikuntza, lanpostuak...). Gainera, ez da arau honetan adierazitako helburuekin bat datorren abantailarik egiaztatzen.



b. Jardueretan aritzea justifikaziorik gabe mugatzen duten administrazio- eta diziiplina-urratzeak sortzea.

34. Proposatutako arauaren 11. artikulua lehenengo paragrafoak betebeharren zerrenda luze eta mardula jasotzen du. Zerbitzuak aipatutako jardueri loturik ematen dituzten pertsonen bete behar dituzte betebeharrak horiek guztiak.

Lehen paragrafo horretan jasotzen diren betebeharrak guztietatik, oso gutxi lotzen zaizkio zuzen-zuzenean arauan adierazitako helburuak betetzeari (indarrean dauden beste arau askotan dagoeneko ezarrita dauden betebeharrak aintzat hartuta); horietako batzuk nekez jar daitezke administrazioaren kontrol eraginkorraren eraginpean eta, beraz, arau-haustetza jotzea administrazio-zuzenbide zehatzailearen oinarritzko abiaburuen kontrakoa izango litzateke. Arauak “kasuan-kasuan izena eman beharreko elkargo profesional egokiak erabakitzen duen beste edozein betebeharrak” aipatzen du, baina ez dago elkargo profesionalik, arauak azaltzen duen balizkoan izan ezean.

Bigarren paragrafoak zehatz-mehatz ezartzen du “aipatutako abiaburuak eta betebeharrak urratzeak administrazio- eta diziiplina-erantzukizun egokiak eskatzea sorraraziko duela”.

Betebeharren zerrenda luze eta lauso horretan oinarrituta, arau-hausteak tipifikatzeak zaildu dezake merkaturako sarrera.

E. Murrizketak zerbitzuen publizitateari.

35. Proposatutako arauaren 18.3 artikulua ezartzen du “lege honek arautzen dituen profesionalek ezin izango dutela publizitateari egin osasunarentzat ondorio onuragarri garbiak ez dituzten zerbitzuen inguruan, eta guztiz debekatuta dagoela mirari-zerbitzu edo mirari-produktuen gaineko publizitatea”.

Lehiaren gaineko araudiak hertsiki mugatzen ditu zerbitzuen publizitateari jarritako debekuak, hain zuzen ere, publizitatea tresnarik eraginkorrenetakoa delako merkatuan lehiatzeko.

Osasunaren babesak bidezkotu egiten ditu hainbat jardueraren publizitateari jarritako mugak. Muga horiek guztiak behar bezala araututa daude osasun arloko publizitatearen araudian eta lehia desleialaren araudian (iruzurrezko publizitateari dagokionez); araudi horien helburu nagusia da erabiltzaileen interesak babestea interes komertzialen gainetik²¹.

Esandako guztiagatik, ez da egiaztatzen publizitateari jarritako muga beharrezkoa denik, interes orokorra babeste aldera lehendik dauden bideak aintzat hartuta.

²¹ Ikusi abuztuaren 2ko 1907/1996 Errege Dekretua, ustezko osasun-helburua duten produktu, jardura edo zerbitzuei buruzko publizitate eta merkataritza-sustapenari buruzkoa. EAO, 189 zk., 1996ko abuztuaren 6koa, eta urtarrilaren 10eko 3/1991 Legea, Lehia Desleialarena, EAO, 10 zk., 1991ko urtarrilaren 11koa.



F. Lehiari eragin ahal dioten beste alderdi batzuk.

36. Proposatutako arauaren 18.4 artikulua ezartzen duenez, “lege honen eragin-esparruan dauden profesionalen gutxieneko kualifikazioa betetzen dela bermatzeko helburuz, profesional horiekin egindako zerbitzugintza-kontratu guztiak idatziz egingo dira eta argiro jasoko da profesional horien kualifikazioaren egiaztapena”.

Xedapen horrek ezarri behar du arau honek jasotzen dituen jarduerak eragindako kontratuak nolakoak izan behar diren, enpresaburuen artean (norberaren konturako langileak barne) edo erabiltzaileekiko harremanen artean (halakoetan, lege ezarrita dago idatziz jaso behar direla) bereizi gabe.

Bestalde, egiaztatu beharko litzateke arauzko eskakizun horiek (idatzizko kontratua eta titulazioa egiaztatu behar izatea kontratuan) zein neurritan laguntzen duten interes orokorra hobetzen.

37. Aurreproiektuaren Seigarren Xedapen Gehigarriak ezartzen du aurreproiektuan araututako lanbideren batean aritzen diren pertsonak, kirol-jardueretan aurrez aurre parte hartzen dutela (Gorputz Hezkuntzako irakaslea, kirol-begiralea eta entrenatzailea) lehen sorospenetako gaikuntza egiaztatu beharko dutela arau ezarritako epearen barruan (Kualifikazio Profesionalen Katalogoaren UC0272-2 kodea).

Hezkuntza-arloko legeriak ezartzen ditu gorputz-hezkuntzako irakaslearen lanbideari heltzeko eta horretan jarduteko legeko eskakizunak; hortaz, ez da bidezkoa eskakizun osagarriak ezartzea. Bereziki aipatzekoa da Laugarren Xedapen Iragankorra. Xedapen horrek ezarritakoari jarraiki, profesionalak kargutik mugiaraz daitezke edo “ondoren agertutako trebetasunik eza” lepora dakieke, aurreproiektuak ezarritako epean, lehen sorospenetako gaitasuna eskuratzen ez duten guztiei.



IV. ONDORIOAK.

LEHENENGOA: Aurreproiektuak jardueraren erreserba sorrarazten du kirolari atxikitako zerbitzuak ematean, titulazio edo lanbide-kualifikazio jakin batzuk eskuratu dituzten pertsonen dagokienez, baina ez da egiaztatu inolako arrazoirik dagoenik erreserbaren beharrezana justifikatzeko.

BIGARRENA: Sistema berriak zerbitzuak ematea zailtzen, konpartimentatzen eta mugatzen du kirolaren esparruan. Gainera, aurreproiektuak dakartzan elementu batzuek merkatua ixteko joera dute (erregistroa sortzea, beste zehapen batzuk ezartzea, izendapenen erreserba egitea, kontratuak idatziz egin behar izatea, mugak jartzea publizitateari, eman beharreko jarduerak zedarritzea...). Horrek guztiak sartzeko hesiak ezartzen ditu eta zerbitzugintza galarazten du; ondorio kaltegarriak sorrarazten ditu eta, gainera, ez da egiaztatzen hesiek laguntzen diotela arau honetan adierazitako helburua hobetzeari.



X

**INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO /
GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**Fecha de la firma: **19/01/2015 12:27:38**Validación de la firma:  **Correcta****INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO SOBRE EL ANTEPROYECTO
DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL
PAÍS VASCO.**

El presente informe se emite con ocasión de la tramitación del anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del Deporte en el País Vasco y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 a 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en adelante, Ley 4/2005); y, en concreto, según lo dispuesto por su artículo 19, a la vista del cual *“antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad”*.

Asimismo, se han tomado en cuenta para su elaboración las directrices fijadas en la Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (en adelante, Resolución 40/2012), por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de agosto de 2012, *«por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género (y sus anexos correspondientes) y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres»* (publicada en el Boletín Oficial del País Vasco número 187, de 25 de septiembre de 2012).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA**Denominación del proyecto:**

Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

Órgano que lo promueve:

Departamento de Educación Política Lingüística y Cultura, Dirección de Juventud y Deportes.

Normas y planes relacionados:

Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales

Objetivos generales del proyecto:

El texto articulado trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

La presente ley concibe el ámbito material del deporte al igual que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, es decir, en un sentido muy amplio y contempla el fenómeno deportivo vasco en todas sus manifestaciones, sin constreñir tal concepto a las modalidades y disciplinas deportivas oficialmente reconocidas ni al mundo de la pura competición. El sistema deportivo vasco está compuesto de subsistemas de características muy heterogéneas. Por esta razón, la ley no se circunscribe sólo al ámbito de la competición o al ámbito federado, sino que trata de contemplar toda la policromía del deporte.

Las profesiones que se regulan abarcan el ámbito educativo, el ámbito recreativo, el ámbito competitivo y el ámbito de la dirección o gestión. En cada uno de estos ámbitos se ha reconocido una profesión.

Salvo la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física, que ya es una profesión regulada y titulada con arreglo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las demás profesiones que se contienen en esta Ley sólo deben considerarse «profesiones reguladas» de conformidad con la Directiva 2005/36/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Con arreglo a la jurisprudencia constitucional «profesión titulada» es aquella profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos oficiales de educación superior cuando así se establezca en norma estatal con rango de ley por razones de interés general. Por el contrario, se define «profesión regulada» la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados, de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales,

reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales.

Esa es una de las claves de esta Ley. El acceso o ejercicio de las profesiones del deporte no está sujeto a la posesión de un título de educación superior, sino a la

acreditación de las correspondientes cualificaciones profesionales. Y estas cualificaciones podrán acreditarse mediante los títulos académicos de diferentes niveles así como mediante aquellos otros títulos, como los certificados de profesionalidad, de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

La ley comienza complementando la legislación educativa, reformada recientemente en el ámbito de las enseñanzas deportivas de régimen especial mediante la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), sobre la profesión de Profesor o Profesora de Educación Física. A pesar de constituir actualmente una profesión titulada que cuenta con una gran tradición, no se ha beneficiado hasta la fecha del reconocimiento adecuado y, además, presenta diversas carencias que esta Ley trata de cubrir para garantizar la salud y la seguridad de los alumnos y alumnas. La ley, consciente de que esta profesión constituye uno de los pilares básicos en la conformación de hábitos saludables de la ciudadanía, máxime en una sociedad con importantes problemas de sedentarismo y obesidad entre los niños y niñas, trata de garantizar la importante función del Profesor o Profesora de Educación Física y por esta razón, respetando las exigencias de cualificación de la legislación educativa y aplicando lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, otorga un protagonismo especial a las formaciones universitarias específicas del ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte y, además, exige una formación mínima en primeros auxilios, especialmente en materia de reanimación cardiopulmonar.

El deporte practicado en el País Vasco con fines recreativos, de ocio, de salud y análogos ha experimentado un extraordinario auge y por ello es un innegable campo de actuación profesional. Asimismo, el aumento cada vez mayor del interés por la práctica de los deportes de aventura, de riesgo o en el medio natural, o el mismo fenómeno de la revalorización del propio cuerpo por motivos estéticos, ha alimentado una importante oferta de profesionales que precisa una urgente regulación. Por ello, en la ley se reconoce y regula la profesión del Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, que también cuenta con una extraordinaria tradición en el mundo del deporte.

Dentro del deporte de competición conviven realidades muy diferentes y la ley ha tratado de ser sensible a dicha pluralidad. En este ámbito de la competición deportiva se

reconoce la profesión de Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente. Esta profesión permite, fundamentalmente, planificar y dirigir el entrenamiento y dirección de deportistas y equipos con miras a la competición.

El ámbito de la dirección deportiva tampoco escapa a la regulación, de modo que en la ley se ha optado por reconocer la profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva, que le permite realizar el conjunto de actividades profesionales relacionadas con la dirección, programación, planificación, coordinación, control y supervisión de centros y actividades deportivas aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte.

En el ejercicio de la iniciativa normativa, los poderes públicos deben actuar de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Por ello, la ley, respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, no regula todas las profesiones relacionadas con el deporte sino, tan sólo, determinadas profesiones del deporte. Se ha optado por dejar libres de regulación otras profesiones del deporte tales como las de jueces o juezas, de deportistas o de agentes de deportistas. Se trata de profesiones cuya prestación de servicios no incide directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia como son la salud y la seguridad de los terceros destinatarios de aquellos servicios profesionales.

Objetivos para promover la igualdad:

En cumplimiento de los principios contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco, se ha prestado especial atención al tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito profesional. Por ello, el texto promueve, entre otras cosas, la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales.

Así en el art. 11.1.k), entre los principios y deberes en el ejercicio profesional se recoge: "promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de las mujeres en el deporte y su incorporación a la práctica deportivas a todos los niveles, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza".

En la Disposición Disposición Adicional segunda se establece que “el Gobierno Vasco, en colaboración con otras administraciones públicas, con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas análogas, promoverá la realización de políticas para la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en esta Ley”.

EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?

Entendemos que si se cumple el mandato previsto en la norma exista algún impacto positivo en la disminución de desigualdades.

¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al menos, una disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?

No

¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, una representación similar al de su presencia en el ámbito?

No

¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los hombres?

Entendemos que si se cumple el mandato previsto en la norma exista algún impacto positivo en la disminución de desigualdades.

¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

No



MEDIDAS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES Y PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES		
¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna medida ...		Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción.
... para promover la incorporación de la perspectiva de género? Si ☒ No	mejorando el conocimiento de la situación diferencial de mujeres y hombres	
	☐ incorporando la igualdad de mujeres y hombres como principio, objetivo o a título declarativo o expositivo	En la Exposición de motivos
	☒ haciendo o promoviendo un uso no sexista del lenguaje	se ha procurado a lo largo del texto utilizar el lenguaje de forma integradora de mujeres y hombres.
	promoviendo la participación de personas con formación en cuestiones de género y/o entidades que trabajan por la igualdad	Art. 11.1.k)
	☒ incluyendo la igualdad como contenido o criterio (de admisión, valoración o ejecución) en procesos selectivos, subvenciones, convenios o actividades formativas, etc.	
	otras, especificar _____	
... para promover una participación equilibrada de mujeres y hombres? Si No ☒	en tribunales de selección	
	en jurados de premios	
	en órganos consultivos	
	en órganos directivos	
	otras, especificar _____	
... de acción positiva? Si No ☒	para las mujeres	
	para la implicación de los hombres a favor de la igualdad	At. 11.1.k
	otras, especificar _____	
... aparentemente neutra pero con un	para víctimas de violencia	

previsible impacto de género positivo? Si No ☒	para familias monoparentales	
	para quienes asumen el cuidado de personas dependientes	
	otras,...	
... para disminuir las desigualdades de las mujeres que sufren múltiple discriminación? Si No ☒	por edad	
	por clase social	
	por opción sexual	
	por discapacidad	
	por etnia y/o raza	
	por origen nacional	
... prohibitiva o sancionadora? Si No ☒	otras, especificar	
	por incurrir en discriminación por razón de sexo	
	por hacer un uso sexista del lenguaje y las imágenes	
	otras, especificar	

**Más allá de las medidas incorporadas al texto de la norma,
¿se puede prever la adopción de medidas referidas a la
implementación o aplicación de la futura norma?**

¿Se prevé más allá del contenido del proyecto de norma o acto administrativo la adopción de alguna medida...		Descripción
... dirigida a complementar o incrementar la eficacia de los objetivos y medidas para la igualdad? Si ☒ No	acciones de refuerzo a la difusión	
	actuaciones de seguimiento y evaluación	
	☒ adecuación de estadísticas y realización de estudios	<i>Incorporación de la variable sexo en el Registro de Titulaciones que se prevé crear.</i>



	específicos	
	acciones de información, sensibilización y formación	
	adecuación o adopción de normas, planes o programas	
	elaboración de planes para la igualdad	
	creación de estructuras o servicios	
	otras, especificar _____	

Jon Redondo Lertxundi

Director de Juventud y Deportes.

**GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA, EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA
JARDUTEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA**

Txosten hau Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetzearen kariaz eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean, 4/2005 Legea) 18. artikulutik 20. artikulura bitartean xedatutakoa betez egin da; eta, zehazki, 19. artikuluan xedatutakoa betez, hots: *“administrazio-arau edo -egintza bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organismoak ebaluatu egin behar du zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina. Horretarako, aztertu behar du administrazio-arau edo -egintzan proiektatu den jarduerak ondorio positiboak edo kontrakoak izan litzakeen emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeke eta horien arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean”*.

Orobat, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren abuztuaren 21eko 40/2012 Ebazpenean (40/2012 Ebazpena aurrerantzean) finkatutako jarraibideak hartu dira kontuan txostena lantzeko; adierazitako ebazpenaren bidez, Gobernu Kontseiluak 2012ko abuztuaren 21ean hartutako Erabakia argitaratu zen, *«generoaren arabera eraginaren alde aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak (eta dagozkien eranskinak) onartzekoa eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak saihesteko eta berdintasuna sustatzeko neurriak onartzen dituen»* (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 187. zk., 2012ko irailaren 25a).

ARAU-PROIEKTUAREN DESKRIKAPEN OROKORRA**Proiektuaren izena:**

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege Proiektua

Proiektua sustatzen duen organoa:

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila / Gazteria eta Kirol Zuzendaritza.

Lotutako arauak eta planak:

14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena

18/1997

Legea, azaroaren 21ekoa, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Testu artikulatuan, kirol-eremuaren berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzkoak diren zenbait alderdi arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer eremu funtzional esleitzen zaion lanbide bakoitzari.

Lege honek Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen antzera ulertzen du kirolaren arloa, hau da, oso zentzu irekian ulertzen du, eta euskal kirolaren arloko adierazpen guztiak jasotzen ditu, baina haien kontzeptua mugatu gabe, ez ofizialki onartutako kirol-modalitate eta -diziplinetara, ez lehiaketa hutsaren mundura. Euskal kirol-sistema oso ezaugarri heterogeneoak dituzten azpisistema batzuez osatuta dago. Hori dela-eta, legeak kirol-arloko polikromia osoa jaso nahi du; horrenbestez, ez da bakarrik mugatzen lehiaketaren eremura edo federatuen eremura.

Hezkuntzaren, aisiaren, lehiaketen, zuzendaritzaren eta kudeaketaren eremuetako lanbideak arautzen ditu. Eremu horietan guztietan onartu da lanbideren bat.

Gorputz-hezkuntzako irakaslearen lanbidearen kasuan izan ezik (maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera arautu eta titulatu baitzen), Lege honek jasotzen dituen lanbideak "lanbide araututzat" baino ezin dira jo, lanbide-kualifikazioak onartzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2005/36/EE Zuzentarauaren arabera. Jurisprudentzia konstituzionalaren arabera, «tituludun lanbidea» lanbide bat da, zeinak hezkuntzako titulu ofizialak eskatzen baititu jarduteko, baldin eta, interes orokorreko arrazoiak direla-eta hori ezartzen badu lege-mailako Estatuko arauak. «Lanbide arautua», berriz, honako hau da: lege-, arau- edo administrazio-xedapenen ondorioz sartzeko edo jarduteko (edo era jakin batean jarduteko) zuzenean edo zeharka lanbide-kualifikazio jakin batzuk edukitzea eskatzen duen lanbide-jarduera (edo lanbide-jardueren multzoa).

Hori da lege honen gakoetako bat. Kirol-arloko lanbideetan sartzeko edo jarduteko, ez da beharrezkoa goi-mailako hezkuntzako titulua izatea; bai, ordea,



lanbide- kualifikazioak egiaztatzea. Kualifikazio horiek, berriz, hainbat mailatako titulu akademikoen bidez egiaztatu ahal izango dira, baita beste titulu batzuen bidez ere, esaterako, une bakoitzean indarrean dagoen ordenamenduaren ondoriozko profesionaltasun-ziurtagiri ofizialen bidez.

Hasteko, legeak hezkuntza-legeria osatzen du Gorputz Hezkuntzako irakaslearen lanbideari dagokionez. Legeria hori oraintsu aldatu da araubide bereziko kirol-irakaskuntzen eremuan, Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren bidez (LOMCEren bidez). Izan ere, egun tituludun lanbidea izan arren eta tradizio handia izan arren, gaur arte ez du errekonozimendu egokirik izan, eta, gainera, zenbait gabezia ditu, lege honek estali nahi dituenak ikasleen osasuna eta segurtasuna bermatzeko. Legeak, lanbide hau herritarren osasun-ohiturak eratzeko funtsezko zutabea dela kontuan hartuta (are gehiago gizarte honetan, non arazo handiak dauden haurren sedentarismoarekin eta obesitatearekin), Gorputz Hezkuntzako irakasleak betetzen duen funtzio garrantzitsua bermatu nahi du. Hori dela-eta, hezkuntza-legeriaren kualifikazio-eskakizunak betez eta abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren Laugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa aplikatuz, lege honek protagonismo berezia ematen die gorputz-jardueraren eta kirolaren arloko zientzien eremuko unibertsitate-prestakuntza bereziei, eta, gainera, lehen laguntzen arloko gutxieneko prestakuntza bat eskatzen du, bereziki bihotz-biriketako bizkortzearen arloan.

Euskal Autonomia Erkidegoan, garrantzi handia hartu du jolaserako, osasunerako eta antzeko xedeetarako egiten den kirolak; hori dela-eta, eremu horretan profesionalek jardun behar dute, ezbairik gabe. Era berean, abentura-kirolak, arrisku-kirolak edota natura-ingurune kirolak egiteko gero eta interes handiagoa izateak eta estetika-arrazoien ondorioz norberaren gorputzari balio handiagoa emateak lanbide-eskaintza handia sortu du, eta lehenbailehen arautu behar da. Horrenbestez, legeak kirol-monitorearen lanbidea aitortu eta arautzen du, tradizio itzela du-eta kirolaren munduan.

Lehiaketazko kirolean, oso errealitate desberdinak daude, eta legeak ahaleginak egin ditu aniztasun horrekin sentikorra izateko. Lehiaketazko kirolaren eremu horretan, dagokion modalitateko edo diziplinako entrenatzailearen lanbidea aitortzen da. Lanbide horrek aukera ematen du, funtsean, kirolari eta taldeen entrenamendua eta zuzendaritza planifikatu eta zuzentzeko, betiere lehiaketari begira.

Kirol-zuzendaritzaren eremua ere arautu egin behar da. Ildo horretan, legeak kirol-zuzendariaren lanbidea onartu du, eta horrek aukera ematen dio profesionalari kirol-



zentroak eta kirol-jarduerak zuzendu, programatu, planifikatu, koordinatu eta gainbegiratzearekin lotutako lanbide-jarduerak egiteko, kirol-zientzien berezko jakintzak eta teknikak aplikatuz.

Araugintzari ekitean, agintari publikoek printzipio hauek bete behar dituzte: premia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna, irisgarritasuna, sinpletasuna eta eraginkortasuna. Hori dela eta, premia- eta proportzionaltasun-printzipioak betez, legeak ez ditu arautzen kirolari lotutako lanbide guztiak, kirol-arloko lanbide jakin batzuk baizik. Kirol-arloko beste lanbide batzuk arautu gabe uztea erabaki da, hala nola kirolarien epaileen edo kirolarien agenteen lanbideak. Izan ere, zerbitzu horiek ematen dituzten lanbideek ez dute zuzeneko eraginik ondasun juridikorik garrantzitsuenetan, hau da, ez dute eraginik zerbitzu profesional horien hirugarren hartzailen osasunean eta segurtasunean.

Berdintasuna sustatzeko helburuak:

Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako printzipioak betez, arreta berezia eskaini zaio emakumeen eta gizonen arteko lanbide-eremuko berdintasunaren gaiari Hori dela-eta, lege honetan araututako lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukeran, lanbide-sustapenean eta elkargoetan tratu berdina eta aukera berak emateko politikak bideratu behar direla sustatzen du testuak, besteak beste.

Ilido horretan, 11.1.k) artikuluan, lanbidean jarduteko printzipio eta betebeharren artean honako hau dago jasota: «kirol-arloan emakumeen benetako berdintasuna eta maila guztietako kirol-praktikan sartzeari ahalbidetuko duten baldintzak bultzatzea, edozer eratako diskriminazio-ekintza oro saihestuta.»

Bigarren Xedapen Gehigarrian, honako hau ezartzen da: "Eusko Jaurlaritzak, beste administrazio publiko batzuekin lankidetzan eta dagokion erakunde kolezialarekin, kirol-federazioekin eta antzeko beste kirol-erakunde batzuekin batera, tratu- eta aukera-berdintasuna bultzatzeko politikak lantzea sustatuko du Lege honetan araututako lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukerari dagokionez".

**GENEROAREN ARABERAKO**
ERAGINAREN ALDEZ AURREKO EBALUAZIOA

Aurreikusten al da etorkizuneko arauaren edo administrazio-egintzaren ondoriozko onura edo emaitzetan emakumeak eta gizonak agertzeak sektoreko desberdintasunak murrizten lagunduko duela?

Gure ustez, arauan aurreikusitako agindua betetzeak eragin positiboren bat izango du desberdintasunen murrizketan.

Aurreikusten al da etorkizuneko arauak edo administrazio-egintzak desagerrarazi edo, gutxienez, murriztu egingo dituela baliabideak lortzeko aukeran dauden desberdintasunak?

Ez

Erabakiak hartzeko garaian, gizonen eta emakumeen ordezkaritza orekatua edo, gutxienez, esparruan dutenaren antzeko ordezkaritza aurreikusten al du etorkizuneko arauak edo administrazio-egintzak?

Ez

Aurreikusten al da etorkizuneko arauan edo administrazio-egintzan planteatutako helburuak eta neurriak lagungarriak izango direla emakumeei eta gizonei egokitzen zaizkien gizarte-arauak eta balioak gainditzeko edo aldatzeko?

Gure ustez, arauan aurreikusitako agindua betetzeak eragin positiboren bat izango du desberdintasunen murrizketan.

Bermatzen al da diskriminazioa galarazteko eta berdintasuna sustatzeko arauak bete eta beste tresna juridikoak beteko direla? Eta aurreikusten al da haiek hobetzea?

Ez

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK SAIHESTEKO ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO NEURRIAK.			
Jaso al da neurriarik arau edo administrazio-egintzaren proiektuaren testuan...		Adierazi zer artikulutan jasotzen diren neurriak eta egin haien deskribapena.	
... genero-ikuspegia txerta dadin sustatzeko? Bai ☒ Ez	emakumeen eta gizonen egoerek erakusten dituzten aldean ezagutza hobetzen da		
	☐ emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna jasotzen	Zioen azalpenean	



	da printzipio moduan, helburu moduan edo adierazpen nahiz azalpen gisa	
	☒ hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten edo sustatzen da	hizkuntza emakumeak eta gizonak integratuz erabiltzeko ahalegina egin da testu osoan.
	genero-gaietan prestakuntza duten pertsonek eta/edo berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeek parte- hartzea sustatzen da	11.1.k) artikulua
	☒ berdintasuna eduki edo irizpide moduan jasotzen da (onartzeko, baloratzeko edo betetzeko) hautaketa- prozesuetan, laguntzak eta hitzarmenak egiteko prozesuetan, prestakuntza- jardueretan eta abar	
	beste batzuk, zehazki: _____	
... emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatua sustatzeko? Bai Ez ☒	Hautaketa- epaimahaietan	
	sariak emateko epaimahaietan	
	kontsulta-organoetan	
	zuzendaritza- organoetan	
	beste batzuk, zehazki: _____	
... ekintza positiboak lantzeko? Bai Ez ☒	emakumeentzat	
	gizonak berdintasunaren alde inplikatzeko	11.1.k) artikulua
	beste batzuk, zehazki: _____	
... itxuraz neutroa dena, baina generoaren arabera eragin positiboa izan dezakeena? Bai Ez ☒	indarkeriaren biktimentzat	
	guraso bakarreko familiarentzat	
	mendekotasuna duten pertsonek zaintzen dituztenentzat	

	beste batzuk,...	
... askotariko diskriminazioa pairatzen duten emakumeen desberdintasunak murrizteko? Bai Ez ☒	adinagatik	
	gizarte-mailagatik	
	sexu-aukeragatik	
	desgaitasuna izateagatik	
	etnia eta/edo arrazagatik	
	nazio-jatorriagatik	
	beste batzuk, zehazki:	
... debekuak edo zehapenak ezartzen dituenik? Bai Ez ☒	sexuagatiko diskriminazioa egiteagatik	
	hizkuntzaren eta irudien erabilera sexista egiteagatik	
	beste batzuk, zehazki:	

Arauaren testuan txertatutako neurriez gain, etorkizuneko arauaren ezarpenari edo aplikazioari lotutako neurriak hartzea aurreikusi al daiteke?

Arau edo administrazio-egintzaren proiektuaren edukiaz gain, aurreikusten al da bestelako neurririk...		Deskribapena
... berdintasunerako helburu eta neurrien eraginkortasuna osatu edo handitzeko? Bai ☒ Ez	hedapena indartzeko ekintzak	
	jarraipen- eta ebaluazio-ekintzak	
	☒ estatistikak egokitzea eta azterlan espezifikoak egitea	Aurreikusitakoaren arabera sortuko den Titulazioen Erregistroan sexuaren aldagaia txertatzea.
	informazio-, sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak	
	arauak, planak edo	



	programak egokitzea edo prestatzea	
	berdintasunerako planak egitea	
	egiturak edo zerbitzuak sortzea	
	beste batzuk, zehazki: _____	

Jon Redondo Lertxundi

Gazteria eta Kiroletako zuzendaria

XI

INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER / EMAKUNDEAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

INFORME RELATIVO AL PROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices sobre la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012, y realizar propuestas de mejora en tal sentido.

La Ley por la que se establece el acceso y ejercicio de profesiones del deporte, sobre el que se solicita el informe, tiene por **objeto** ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y expresando la cualificación requerida para el acceso de tales profesiones.

Se trata, por tanto, de una **disposición de carácter general** que debe ser evaluada sobre su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1 de la Directriz Primera. A tal fin, el órgano promotor de la norma ha emitido el correspondiente Informe de impacto en función del género, en los términos previstos en el anexo I, y de acuerdo con lo previsto por los apartados 3 y 4 de la directriz primera.

En el **Informe de Impacto** remitido se da una **descripción general** del proyecto de Decreto. Entre los **objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres** se afirma en su exposición de motivos que, *“en cumplimiento de los principios contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco, se ha prestado especial atención al tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito*

profesional. Por ello, el texto promueve, entre otras cosas, la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales”.

Así, el informe detalla, además, el articulado en el que aparece de modo explícito la promoción de las políticas de igualdad y que se analiza posteriormente: por un lado, el art. 11.1.k), sobre los principios y deberes en el ejercicio profesional y, por otro lado, la Disposición Adicional segunda.

Se valora de modo muy positivo este compromiso explícito con la igualdad entre mujeres y hombres en el texto normativo.

Por otro lado, cabe destacar que en la **Evaluación Previa del Impacto en función del género** no se aportan ni analizan datos desagregados por sexo que sustenten las previsiones posteriores.

* El informe prevé la **presencia equilibrada de mujeres y hombres** en los beneficios o resultados derivados de la normativa, sin embargo, no se aportan datos ni cuantitativos ni cualitativos sobre dicha incidencia que avalen la citada previsión. En este sentido, cabe recordar que se podrían aportar datos por sexo sobre las profesiones del ámbito deportivo que regula el proyecto de Ley: profesorado de educación física, monitorado deportivo, personal entrenador de las diversas disciplinas deportiva y, finalmente, personal director deportivo. De este modo, se puede prever el impacto en los resultados derivados de la norma en lo relativo al acceso y ejercicio de dichas profesiones. Un aspecto relevante asociado a la profesionalización es la propia práctica deportiva, dado que muchas de las personas que practican deporte posteriormente proyectan sus vidas laborales vinculadas a dicho ámbito. La presencia equilibrada de mujeres y hombres entre profesionales deportivos tiene, además, un efecto colateral, puesto que se convierten en referentes positivos tractores para favorecer trayectorias deportivas y la posterior profesionalización tanto de mujeres como de hombres.

* Por otro lado, se realiza una previsión negativa sobre la eliminación o disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos, sin embargo, no se aporta ningún tipo de dato o análisis que sustente dicha previsión. En ese sentido, se recomienda aportar datos por sexo sobre acceso a recursos formativos, sobre elecciones formativas y sobre acceso a programas de cualificación profesional. Se trata de aportar datos sobre el alumnado en las diferentes cualificaciones requeridas para cada una de las profesiones objeto de regulación¹. Estos datos sobre la trayectoria académico-profesional del alumnado en las disciplinas deportivas facilita prever la futura inserción laboral. Asimismo, sería recomendable aportar datos relativos a la presencia de mujeres y hombres entre el personal docente de las disciplinas deportivas desglosado por ciclos y familias profesionales y por tipología de puestos o funciones, con el objeto de conocer los referentes de mujeres en dichas disciplinas, muchas de ellas fuertemente masculinizadas. En este sentido, los datos indican que hay una menor presencia de las mujeres en la formación académica relacionada con la actividad física y deportiva. La mayor elección de estudios vinculados con el deporte por parte de los chicos, así como, su mayor participación en actividades formativas más especializadas hace prever un futuro con mayor presencia y proyección de los hombres en las ocupaciones laborales vinculadas al mundo deportivo, perpetuando un entorno deportivo masculinizado y con una insuficiente representación de mujeres. Un análisis diferencial de género sobre los usos del tiempo, entendido este como recurso, y como condicionante para el acceso a otros recursos, dibuja una inequidad evidente en la disponibilidad de tiempo de las mujeres para el ocio y, específicamente, para la práctica deportiva, que se vincula fuertemente con las trayectorias posteriores académicas y profesionales, dado que es un sector con un fuerte factor motivacional.

* En cuanto a la toma de decisiones, el proyecto de Ley no prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres. Sería conveniente aportar datos que reflejen esa representación equilibrada y las razones que la motivan, para poder prever mejoras a futuro.

¹ La propia Ley 4/2005, del 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres ve la necesidad de actuar, al incluir entre los objetivos coeducativos para la capacitación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice libre de condicionamientos basados en el género (artículo 29.1.d) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero).

* Por otro lado, el informe prevé algún impacto positivo de los objetivos y medidas planteadas del proyecto de Ley para la superación o modificación de las normas sociales y valores de lo que se atribuyen a las mujeres y los hombres.

Sin embargo, nuevamente, no se analiza la influencia de las normas y valores asociados al ámbito deportivo, sobre los roles tradicionales, la división del trabajo en función del sexo, o las actitudes de mujeres y hombres, así como las desigualdades en el valor que se concede a unas y otros. En ese sentido, es sustancial llevar a cabo un análisis de las normas y valores que se dan en el ámbito deportivo en su conjunto, y específicamente en la profesionalización del deporte. Regular el acceso y ejercicio de profesiones del deporte no garantiza, por sí mismo, la superación de las desigualdades de partida que pudieran existir respecto a las elecciones formativas según sexo y el posterior acceso al mercado laboral. Por lo tanto, sin detallar dichas normas sociales y valores es difícil concretar cuáles pueden ser las medidas planteadas para su superación.

En este sentido, de modo general, nos gustaría señalar que para poder evaluar el impacto de género **resulta indispensable realizar el análisis de situación requerido por las directrices mediante la recogida, de forma diferenciada, de información sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito** en que la norma desplegará sus efectos. Todo ello, con el fin de identificar las posibles desigualdades previas por razón de sexo que puedan existir. Así, podría ser de ayuda el material sectorial específico² del ámbito deportivo denominado [Deportes](#), elaborado como complemento a la [Guía para la elaboración de Informes de impacto en función del género](#).

De modo orientativo se dan algunas pinceladas sobre los principales sesgos de género presentes en el ámbito deportivo y, por ende, como un continuo interrelacionado, en la profesionalización de dicho ámbito:

² Estos materiales contextualizan el análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres en un ámbito sectorial determinado de forma orientativa y ejemplificadora, de modo que permiten:

- Identificar las principales desigualdades del sector en lo relativo a la presencia de mujeres y hombres, acceso a recursos, participación y normas sociales y valores.
- Conocer los mandatos de igualdad de mujeres y hombres específicos de ese sector.

Para facilitar su lectura y consulta rápida, los materiales son navegables desde los índices de contenido.

- Desde el inicio de la práctica deportiva en edades escolares, a través de las **actividades extraescolares**, base de la iniciación deportiva en general, se observan los primeros desequilibrios en la presencia en función del sexo, no tanto en la práctica inicial como en la posterior trayectoria de las chicas, que abandonan más su práctica. La incorporación, presencia, mantenimiento y abandono de las chicas y los chicos no se deben ni a las mismas circunstancias ni a los mismos motivos.
- En edades más adultas el nivel de **práctica deportiva** de los hombres es superior al de las mujeres. También es destacable la motivación para la práctica deportiva diferencial entre mujeres y hombres. Nuevamente, se observan diferencias notorias respecto del abandono de la práctica deportiva, que es más notoria entre las mujeres (entre los 25 a los 35 años de edad), mientras que en los hombres es más mantenida dicha práctica en todas las etapas vitales.
- En el **deporte federado** la presencia de las mujeres sigue siendo inferior y, además, se sigue produciendo una clara segregación horizontal según si son prácticas con mayor tradición masculina o femenina. A pesar de la incorporación paulatina de las mujeres al mundo deportivo, no se ha visto un incremento significativo en la presencia de las mujeres en el deporte federado. Precisamente en los entornos federados las principales brechas de género se dan entre entrenadores y entrenadoras, así como entre jueces y juezas.
- Finalmente, en el **deporte profesional** se detectan grandes brechas de género donde la presencia femenina es casi inexistente. De ahí que el apoyo de las instituciones al alto nivel femenino se convierte casi en su única vía de apoyo económico. En el caso del deporte de alto nivel los hombres consiguen doble financiación, ya que se financia el deporte profesional por la vía de las ligas profesionales y el amateur a través de las entidades públicas, además del aportado por las federaciones deportivas y patrocinio privado. En el caso de las mujeres, en cambio, la financiación es casi exclusivamente pública ya que participan en los circuitos profesionales de manera residual y no tienen la misma consideración que los hombres en el seno federativo.
- La **representación en cargos públicos y órganos consultivos y de asesoramiento** como espacios estratégicos de toma de decisiones, si bien se están dando avances progresivos, los datos denotan que aún son espacios fuertemente masculinizados. Esta segregación vertical tiene un reflejo a **nivel organizacional**

(federaciones, asociaciones deportivas), donde hay una falta de representatividad de las mujeres en estructuras deportivas privadas.

- Los **medios de comunicación** han reflejado el deporte como un ámbito eminentemente masculino, y de este modo se han venido creando y reforzando un modelo social de identificación con el deporte para chicos, en detrimento de las chicas. La sobrerrepresentación masculina mediática, y la transmisión de estereotipos de género, y sexistas, ayuda a perpetuar las brechas de género en el ámbito deportivo dado el fuerte papel socializador de los mass-media.
- Otro aspecto relevante, y que requiere de enfoques preventivos, es el **acoso y el abuso sexual en el deporte** como consecuencia de la desigualdad en las relaciones de género y los abusos de poder. A pesar de que a día de hoy es una problemática aun no suficientemente estudiada, hay constancia de que es un fenómeno que se da. En este sentido, rara vez se denuncia, aunque hay constancia de que, como en otros países, es una práctica latente con una incidencia mayor de lo que queda explicitado por ese carácter de “tabú”. Por ello, explicitarlo y visibilizarlo requiere articular estrategias preventivas así como sancionadoras. El entramado profesional vinculado al sector deportivo debe estar sensibilizado y formado en la prevención e identificación de esta problemática, para superar la vulnerabilidad de las personas que practican deporte en los diferentes niveles.

* Se explicita en el Informe que no se garantiza el cumplimiento de la normativa e instrumentos jurídicos para evitar la discriminación y promover la igualdad, lo cual resulta contradictorio con otras respuestas a cuestiones anteriores que dicen cumplir con los mandatos previstos. Resulta conveniente aclarar esta cuestión, más si cabe cuando se ha dejado constancia del compromiso con la igualdad en la exposición de motivos, en el artículo 11.1.k) y en la Disposición Adicional segunda.

Finalmente, entre las medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, se afirma que se han incluido en el texto del proyecto medidas para promover la incorporación de la perspectiva de género, tal y como se ha señalado con anterioridad.

* En ese sentido, se valora muy positivamente la incorporación de la igualdad como **principio declarativo** en la exposición de motivos que establece: *“en cumplimiento de los principios contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco, se ha prestado especial atención al tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito profesional. Por ello, el texto promueve, entre otras cosas, la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales”*.

* Así, el informe detalla, además, el articulado en el que aparece de modo explícito la promoción de las políticas de igualdad:

- En el art. 11.1 sobre principios y deberes en el ejercicio profesional se establece en el punto k): *“promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de las mujeres en el deporte y su incorporación a la práctica deportivas a todos los niveles, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza”*. En el informe se ubica como **medida para promover la participación de personas** en formación en cuestiones de género y/o entidades que trabajan por la igualdad, así como una **medida de acción positiva** para la implicación de los hombres a favor de la igualdad. Sin embargo, no se aprecia que dicho principio o deber en el ejercicio profesional conlleve, necesariamente, dicha participación, ni suponga por sí misma una medida de acción positiva. Por lo tanto, se propone que este artículo se recoja en la casilla de **otra medida** especificando que es un principio o deber en el ejercicio profesional que regula la norma.
- En la Disposición Adicional Segunda denominada Políticas de igualdad en las profesiones del deporte se establece que: *“el Gobierno Vasco, en colaboración con otras administraciones públicas, con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas análogas, promoverá la realización de políticas para la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en esta Ley”*. Dicha disposición se valora de modo muy positivo. Sin embargo, esta medida, si bien aparece señalada entre los objetivos para promover la igualdad, no se recoge como medida para eliminar las desigualdades. Por ello, se propone que sea incluida en este apartado como **otra**

medida, y especificar que repercutirá posteriormente el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la Ley. Si posteriormente se estableciera dicha colaboración entre las previsibles actuaciones a través de líneas subvencionales o convenios, se podrían contemplar cláusulas de igualdad en cumplimiento del artículo 20.2 de la Ley 4/2005. Para ello, está disponible en la web de este Instituto la [“Guía sobre cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y convenios públicos”](#) así como el espacio web específico en esa materia con materiales diversos de apoyo³.

Igualmente, se prevé la adopción de otras medidas **más allá del contenido del proyecto de norma**, relativas a la incorporación de la variable sexo en el Registro de Titulaciones que se prevé crear.

No se especifican más medidas, sin embargo, cabe preguntarse, dado que está previsto, tal y como recoge la Disposición Adicional Segunda, si una colaboración con otras administraciones, con organizaciones colegiales, con las federaciones, así como con otras entidades análogas para promover el impulso de políticas de igualdad no conllevará medidas concretas más allá del texto de la norma (acciones informativas, sensibilizadoras, formativas, planes, programas, convenios, etc...).

Finalmente, con relación al **contenido de la norma** cabe realizar una serie de reflexiones y propuestas de mejora:

* En el **artículo 2** sobre profesiones propias del deporte, ámbito funcional general y cualificaciones se establece: “*La cualificación profesional es, a efectos de esta Ley, la capacidad para el acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de competencia, por una experiencia profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias. Las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones reguladas en esta Ley podrán acreditarse mediante los títulos académicos a las que se refieren los siguientes artículos o equivalentes, así como mediante aquellos otros títulos o certificados de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento*”.

³ * [Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres](#)

Hay que poner en relevancia que cualquier reconocimiento de la competencia adquirida por experiencia laboral debe plantearse desde el enfoque de género para que no se den sesgos de género en dicha valoración. La formulación de competencias debe visibilizar y valorizar todas las actividades realizadas por mujeres y hombres sin incurrir en discriminación por sexo y más allá de los estereotipos de género, así como aquellos aprendizajes no formales adquiridos a través del trabajo no remunerado, en el ámbito doméstico y familiar, donde se desarrollan diversas capacidades. Esto también tendrá que ser contemplado en los procedimientos administrativos para acreditar las competencias profesionales previstos en la [Disposición Transitoria Primera y Segunda](#) sobre el ejercicio profesional sin cualificación, así como para el voluntariado.

* En el [artículo 3](#) sobre la profesión relativa al profesorado de educación física, sería conveniente hacer referencia, entre sus requisitos para ejercer en la escuela pública, a la capacitación mínima en materia de igualdad y coeducación de manera que pueda impartir los contenidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 y 32 de la Ley 4/20054.

* En el [artículo 7](#) sobre requisitos de cualificación en supuestos especiales se establece que la Ley se aplicara para el acceso a los puestos de trabajo y para la contratación de servicios en el sector público. En este sentido cabe reseñar que en cumplimiento del artículo 20.4 de la de la Ley 4/2005, las posteriores normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público deben incluir una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de las Administración en los que la representación de estas sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que , no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida (pertenencia a otros colectivos en especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo).

* En relación al [artículo 10](#) sobre colegiación y Registro de Profesionales del Deporte, y tal y como se ha previsto en las medidas más allá del texto de norma, las estadísticas relacionadas con el registro deberán, en cumplimiento del artículo 16.a y 16.e de la Ley 4/2005, incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas,

encuestas y recogida de datos que lleven a cabo, así como explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferencias entre mujeres y hombres, en este caso sobre las profesiones reguladas en la Ley a la que se refiere este informe.

* En relación al [artículo 11](#) sobre principios y deberes en el ejercicio profesional, más allá de que se establezca como un principio específico el k) “*promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de las mujeres en el deporte y su incorporación a la práctica deportivas a todos los niveles, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza*” sería conveniente que el enfoque de género impregne el resto de principios, y de modo destacado los que se destacan a continuación:

- En la prestación de servicios adecuados a las necesidades y condiciones personales que contemple las diferencias de género en las mismas.
- En lo relativo a velar por la salud y seguridad, y a colaborar en el control médico de las personas destinatarias de los servicios, igualmente se deberán contemplar los aspectos diferenciales de género relativos a salud y seguridad deportiva.
- Mención especial tiene la necesidad de contemplar en el fomento de la práctica deportiva exenta de cualquier tipo de violencia o de explotación abusiva una mención específica al acoso y abuso sexual en el deporte, el cual puede afectar de forma grave y negativa en la salud física y psicológica de las personas. Probablemente, ello requeriría de un acompañamiento a través de la aplicación de protocolos, y códigos éticos contra el acoso y abuso sexual en el ámbito deportivo, así como monitorear la aplicación de los mismos. Dada que es una problemática no visibilizada sería interesante que se contemple de modo explícito.
- Además, se podría establecer también como deber el procurar una utilización del material deportivo que garantice la superación de estereotipos de género, que contemple las necesidades diferencias de las y los deportistas, y garantizar una adjudicación de las instalaciones deportivas, los horarios y usos no discriminatoria. La distribución y el uso de los espacios y la organización del entorno deportivo juega un papel relevante en la transmisión de valores y normas sociales, contribuyendo a la socialización de género.

⁴ Cabe recordar que en la medida de lo posible, se debiera tratar de contar con profesorado diversificado, con referentes masculinos o femeninos que superen estereotipos de género. La presencia equilibrada de mujeres y hombres en la docencia da cumplimiento a lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 4/2005.

* Más allá de la regulación de la norma, al igual que se contempla que el Gobierno Vasco promoverá acciones formativas específicas, se podría promover la formación sensibilización de las y los profesionales del deporte en materia de coeducación, promoción de la igualdad, y prevención de acoso y abuso sexual. De igual modo, se deberá fomentar una oferta formativa deportiva que incluya el enfoque de género de los y las profesionales de la actividad física y del deporte, de acuerdo con las exigencias que establece la normativa legal vigente para los diferentes niveles: universitario, formación profesional, enseñanzas técnicas y cursos de formación permanente. Además, se puede promover o incentivar que accedan más mujeres a las enseñanzas deportivas. El hecho además de que cada vez exista más personal deportivo femenino produce un efecto multiplicador, por cuanto son referentes positivos. Disminuir esta diferencia entre sexos en la elección de enseñanzas deportivas va a mejorar la profesionalización de las mujeres garantizando la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Finalmente, es necesario hacer una revisión y adecuación de los términos enunciados exclusivamente en masculino en el texto del proyecto de Ley tales como *“los monitores, los entrenadores, directores”, “los destinatarios”, “titulados”, “los profesionales”, “los deportistas”* etc, de conformidad con el **uso no sexista del lenguaje** que señala el artículo 18.4 de la Ley 4/2005. Para hacer un uso no sexista del lenguaje, podría ser de ayuda la [Guía de lenguaje para el ámbito del deporte](#) de Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer.

En Vitoria-Gasteiz, 05 de marzo de 2015



FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **UNAY CASADO LATABURU**
Fecha de la firma: **22/02/2016 16:34:46**

Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **SONIA GONZALEZ UBIERNA**
Fecha de la firma: **22/02/2016 16:34:47**

Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **ANA JESUSA ALBERDI ZUBIA**
Fecha de la firma: **22/02/2016 16:34:47**

Validación de la firma:  **Correcta**

EUSKADIN KIROL ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKO LEGE-PROIEKTUAREN GAINEKO TXOSTENA

Txosten hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak eskatuta egin dugu, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikulua Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundeari emandako eskumena baliatuz.

Txostenaren helburua da, batetik, 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluetan eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko abuztuaren 21eko Erabakiaren bitartez onartutako Jarraibideetan ezarritakoa behar bezala aplikatzen dela egiaztatzea, eta, bestetik, gai horiekin loturiko hobekuntzak proposatzea (Jarraibideak, genero-eragina aurretiaz ebaluatzeko, eta gizonen eta emakumeen desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko).

Eskatutako txostenean aztertzen den legearen, hots, kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jardutea ezartzen duen legearen hau da: kirol-lanbide jakin batzuetan sartzeko eta horietan jarduteko oinarritzko alderdiei buruzko aginduak ematea, lanbide horiek zein diren esanbidez adierazita eta bakoitzari dagokion jardute-eremu orokorra esleituta, baita lanbide horietara sartzeko beharrezko prestakuntza zein den adierazita ere.

Beraz, **xedapen orokor bat da**, zer-nolako genero-eragina duen ikusteko ebaluatu beharrekoa, lehenengo jarraibidearen 2.1. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorritz. Horri dagokionez, araua sustatu duen organoak generoaren arabera Eraginaren Txostena egin du, I. eranskinean ezarritako baldintzak betez, eta lehenengo jarraibideko 3. eta 4. paragrafoetan aurreikusitakoaren arabera.

Bidalitako **Eraginaren Txostenean** dekretu-proiektua **deskribatzen da oro har Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburuen artean**, txosteneko arrazoiaren azalpenaren bidez honela baieztatzen da: «Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen dauden printzipioak betetzeko, arreta berezia eman zaio lanbide-alarrean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

lortzeko gaiari. Horregatik, testuak, besteak beste, lege honek arautzen dituen lanbideetan sarbidea izateko orduan, lanbide horietan jarduterakoan, lanbide promozioan eta lanbide horiei dagozkien erakunde kolegialetan aukera berdintasuna izateko politikak egitea sustatzen du.»

Hala, txostenean, berdintasun-politiken sustapena berariaz zein artikulutan dagoen adierazten da, eta, ondoren, sustapen hori aztertutako batetik, 11.1.k) artikulua, lanbidean jarduteko printzipioei eta betebeharrei buruzkoa eta, bestetik, bigarren Xedapen Gehigarria.

Era oso positiboan baloratzen dugu testu arauemailean berariaz jasotako konpromisoa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

Bestetik, nabarmendu behar da **Generoaren arabera eraginarekin aurreikusten duen eraginaren aurreikusturik** ez dela ematen eta aztertzen sexuaren arabera datu bereizirik, ondorengo aurreikuspenak sostengatuko dituenik.

* Txostenak emakumeen eta gizonen arteko presentzia orekatua izatea aurreikusten du, arauditik eratorritako onuretan edo emaitzetan; hala ere, aipatutako aurreikuspen hori bermatuko duen eragin horri buruzko daturik ez da eman, ez datu kuantitatiborik ez kualitatiborik. Ildo horretatik, gogorarazi behar da sexuaren arabera datuak eman litezkeela lege-proiektuak arautzen dituen kirol-arloko lanbideei buruz: gorputz-hezkuntzako irakasleak, kirol-begiraleak, hainbat kirol-diziplinetako entrenatzaile pertsonalak eta, azkenik, kirol-zuzendariak. Hala, arautik eratorritako emaitzetan izandako eragina aurreikus daiteke, lanbide horietan sartzeari eta jarduteari dagokionez. Profesionalizazioari lotutako alderdi nabarmen bat kirola bera praktikatzeko da; izan ere, kirola egiten duten pertsona askok arlo horretara bideratzen dute ondoren beren lan-bizitza. Kiroleko profesionalen artean emakumeen eta gizonen presentzia orekatuak, gainera, zeharkako ondorio bat du: trakzio-erako erreferente positibo bihurtzen dira, kirol-ibilbideei eta emakumeen nahiz gizonen ondorengo profesionalizazioari mesede egiteko.

* Bestetik, baliabideak eskuratzeari dagokionez, desberdintasunak ezabatzeari edo horiek murrizteari buruzko aurreikuspen negatibo bat egin da; hala ere, inolako datu

edo azterketa motarik ez da eman aurreikuspen hori sostengatzeko. Ildo horri jarraiki, gai hauei buruzko sexuaren arabera datuak ematea gomendatzen da: prestakuntza-baliabideetarako sarbidea, prestakuntza-hautapenak eta prestakuntza profesionalen programetarako sarbidea. Helburua ikasleei buruzko datuak ematea da, arauaren xede diren lanbide bakoitzarentzat eskaturiko kualifikazioei dagokienez.¹ Ikasleek kirol-diziplinetan izandako ibilbide akademiko-profesionalari buruzko datu horiek etorkizunean lan-munduan nola sartuko diren aurreikusteko lana errazten dute. Era berean, gomendagarria litzateke kirol-diziplinetako irakasleen artean dagoen emakumeen nahiz gizonen presentziari buruzko datuak ematea. Datu horiek zikloen eta familia profesionalen arabera eta lanpostuen edo funtzioen tipologiaren arabera bereizita eman beharko lirateke, diziplina horietako emakumeekin loturiko datuak jakiteko; izan ere, diziplina horietako asko oso maskulinituta daude. Ildo horretatik, datuek adierazten dute emakumeen presentzia txikiagoa dela jarduera fisikoarekin eta kirol-jarduerarekin lotutako prestakuntza akademikoan. Kirolari lotutako ikasketak hautatzen dituztenen artean gehienak mutilak direnez, eta horien parte-hartzea handiagoa denez prestakuntza-jarduera espezializatuenetan, erraz aurreikus daiteke etorkizunean ere gizonen presentzia handiagoa izango dela kirolari lotutako enpleguetan eta etorkizun hobe izango dutela jarduera horietan emakumeek baino. Hala, kirol-inguruneak maskulinituta jarraituko du aurrerantzean ere; alegia, emakume gutxiago egongo dira. Denbora erabiltzeko moduei buruzko genero-azterketa bereizgarri batek erakusten duenez (denbora baliabidetzat hartuta, eta beste baliabide batzuk eskuratzeko baldintzetat), berdintasun-ez nabarmena dago emakumeek aisiarako eta, zehazki, kirol-jarduerarako duten denboran. Eta, hain justu, jarduera estuki lotzen da ondorengo ibilbide akademikoekin eta profesionalekin, motibazioa faktore oso garrantzitsua baita sektore horretan.

* **Erabakiak hartzeari** dagokionez, lege-proiektuak ez du aurreikusten emakumeak eta gizonak modu orekatuan ordezkatzuta egotea. Komenigarria litzateke ordezkaritza orekatu hori islatzen duten datuak eta hori bultzatzen duten arrazoiak ematea, etorkizunean zer hobetu daitekeen aurreikusteko.

¹ Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako martxoaren 18ko 4/2005 Legeak jarduteko beharra dagoela ikusi du, eta horregatik sartu du ikasleen trebakuntza hezkidetza-helburuetan, aukera akademikoak egiterakoan generoan oinarrituriko baldintzetatik aske egoteko (martxoaren 18ko 4/2005 Legeko 29.1.d) artikulua).

* Bestalde, txostenak lege-proiektuan planteatutako helburuen eta neurrien eragin positiboren bat aurreikusi du, emakumeei eta gizonei esleitzen zaizkien [arau sozialak eta balioak gainditzeko edo aldatzeko](#).

Dena den, berriz ere, ez dira aztertu kirol-alorrari lotutako arauak eta balioak zer nolako eragina duten rol tradizionaletan, sexuaren arabera lanaren banaketan edo emakumeen eta gizonen jarreretan, ez eta zer nolako desorekak dauden ere haiei ematen zaien balioan. Ildo horri jarraiki, funtsezkoa da kirol-alorrean, oro har, eta, zehazki, kirolaren profesionalizazioaren eremuan zer arau eta balio erabiltzen diren aztertzea. Kirol-lanbideetarako sarbidea eta lanbide horien jarduketa arautzeak ez du bermatzen, berak bakarrik, gainditu egingo direnik sexuaren arabera prestakuntza-aukeretan eta ondoren lan-mundurako sarbidean egon daitezkeen hasierako desberdintasunak. Beraz, arau sozial eta balio horiek zehaztu gabe, zaila da horiek gainditzeko zer neurri planteatu beharko liratekeen zehaztea.

Hala, oro har, gustatuko litzaiguke azpimarratzea ezen, generoaren eragina ebaluatu ahal izateko, **ezinbestekoa dela egoera aztertzea, jarraibideetan eskatutakoaren arabera. Horretarako, bereizita jaso behar da arauak eragina izango duen alorrean emakumeek duten egoerari eta gizonek duten egoerari buruzko informazioa.** Hori guztia sexua dela eta aurretiaz izan daitezkeen desberdintasunak identifikatzeko egingo da. Horrela, lagungarria izan daiteke² [Kirolak](#) izeneko kirol-alorreko material sektorial espezifikoak. Material hori [Generoaren arabera eraginaren txostenak egiteko gida](#) osatzeko egin da.

Orientazio moduan, kirol-alorrean dauden genero-joera nagusiei buruzko zertzelada batzuk eman dira, eta ondorioz, horrekin lotuta, alor horretako profesionalizaziokoak ere bai:

² Material horien bidez, testuinguruan kokatzen da sektore jakin batean emakumeek eta gizonek duten egoera desberdinaren analisia, argibideak eta adibideak emanez. Horiei esker ahalbidetzen da:

- Sektorean dauden desberdintasun handienak identifikatzea, emakumeen eta gizonen presentziari dagokionez, balibideak eskuratzeari dagokionez, partaidetzari dagokionez eta arau sozialei eta balioei dagokienez.

- Sektore horretan emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz zer mandatu dagoen jakitea.

Materialak errazago irakurtzeko eta azkarrago kontsultatu ahal izateko, edukien indizeetatik bertatik nabigatu daiteke.

- Haurrak kirola egiten hasten direnetik –eskola-adinean eta, normalean, **eskolaz kanpoko jardueren bitartez**– antzeman daitezke lehenengo desorekak sexuaren araberako presentzian; ez horrenbeste hasierako praktikan, baina bai nesken ondorengo ibilbidean, lehenago uzten baitute bertan behera kirol-praktika. Kirol-jardueran hasteko, jarduerako horretan presentzia izateko, jarduera horri eusteko eta berau uzteko egoerak eta arrazoiak ez dira berdinak nesken eta mutilen kasuan.
- Helduagoak direnean, gizonek emakumezkoek baino **kirol gehiago egiten** dute. Kirola egiteko emakumeek eta gizonek duten motibazioan dagoen desberdintasuna ere nabarmentzekoa da. Berriz ere, kirola egiteari uzteko garaian desberdintasun handiak antzeman dira. Emakumeek gehiago uzten diote kirola egiteari (25 - 35 urteko emakumeetan kasuan); gizonek, aldiz, gehiago eusten diote kirol-jarduerari bizitzako etapa guztietan.
- **Kirol federatuan**, emakumeen presentziak txikiagoa izaten jarraitzen du, eta, horretaz gainera, bereizketa horizontal argia dago oraindik, tradizio maskulino edo femenino handiagoa duten kirolak diren kontuan izanda. Emakumeak pixkanaka kirol-munduan sartzen ari badira ere, ez da emakumeen presentziaren igoera handirik antzeman kirol federatuan. Zehazki, eremu federatuetan, entrenatzaileen eta epaileen artean daude generoari dagozkion alde handienak.
- Azkenik, genero-alde handiak daude **kirol profesionalen**, ia ez baitago emakumerik. Hori dela-eta, erakundeek emakumeen goi-mailako jarduera bultzatzea da emakumeek duten laguntza ekonomiko ia bakarra. Goi-mailako kirolaren kasuan, gizonek finantzazio bikoitza lortzen dute: alde batetik kirol profesionala liga profesionalen bidez finantzatzen da, eta amateurra erakunde publikoen bidez, eta, bestetik, kirol-federazioek eta babesle pribatuek ematen duten finantzazioa dago. Emakumeen kasuan, ordea, finantzazioa ia eskusiboki publikoa da, zirkuitu profesionaletan noizean behin bakarrik parte hartzen baitute eta federazioetan ez baitago emakumeekiko gizonezkoekiko dagoen iritzi bera.
- **Kargu publikoetan eta kontsulta- eta aholku-organoetan dagoen ordezkaritza dagokionez** –horiek izanik erabakiak hartzeko gune estrategikoak–, aurrerapen progresiboak egin badira ere, oraindik gune oso maskulinoak dira, datuek adierazten dutenaren arabera. Banaketa bertikal hori islatuta dago **erakundeetan** (federazioetan, kirol-elkarteetan), eta hala, ez dago emakumeen ordezkaritza kirol-egitura pribatuetan.
- **Hedabideek** kirola, nagusiki, eremu maskulino gisa plazaratu dute, eta, horrela, mutilak kirolarekin identifikatzeko eredu sozial bat sortu eta indartu dute, nesken

kalterako. Hedabideek gizonezkoak gehiago ordezkatzeko eta genero-estereotipoak edo estereotipo sexistak helarazteak kirol-arloko genero-arraila iraunarazten laguntzen du, rol sozializatzaile handia baitute hedabideek.

- Bada beste alderdi garrantzitsu bat, prebentzioa behar duena: **kirol-munduko sexu-jazarpena eta -abusua**; hori guztia genero-harremanetako desberdintasunaren eta botere-gehiegikeriaren ondorioz sortzen da. Nahiz eta, egun, oraindik ez den behar adina aztertu arazo hau, badakigu gertatzen dela. Abusua eta jazarpena oso gutxitan salatzen dira, baina badakigu gertatzen direla eta, berez, esaten dena baino gehiago, baina «tabua» izateak informazioa eta praktikak ezkutuan geratzea ahalbidetzen du, eta beste herrialde batzuetan ere hala gertatzen da. Horregatik, agerian jartzeko eta ikusgai bihurtzeko, prebentzio-estrategiak eta estrategia zigortzaileak ezarri behar dira. Kirol-alorrari lotutako sare profesionalak sentsibilizatuta eta arazo hori prebenitzeko eta identifikatzeko prestatuta egon behar du, maila guztietako kirola egiten duten pertsonen zaurgarritasuna gainditzeko.

* Txostenean adierazten da ez dela bermatzen diskriminazioa saihesteko eta berdintasuna sustatzeko araudia betetzen denik eta ez dela tresna juridikorik ematen horretarako, eta hori guztia kontraesanean dago agindutakoa betetzen dela dioten aurreko gaiekiko beste erantzun batzuekin. Gai hau argitzea komeni da; izan ere, arrazoiaren azalpenean, 11.1.k) artikuluan eta bigarren Xedapen Gehigarrian berdintasunarekiko konpromisoa jasota gelditu da.

Azkenik, emakumeen nahiz gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko neurrietan baieztatzen da proiektuko testuan genero-ikuspegiaren txertaketa sustatzeko neurriak sartu direla, lehen adierazi den bezala.

* Hala, modu oso positiboan baloratzen da berdintasuna **printzipio deklarativo** gisa txertatzea arrazoiaren azalpenean. Honako hau dio azalpen horrek: «Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen dauden printzipioak betetzeko, arreta berezia eman zaio lanbide-alorrean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko gaiari. Horregatik, testuak, besteak beste, lege honek arautzen dituen lanbideetan sarbidea izateko orduan, lanbide horietan jarduterakoan,

lanbide promozioan eta lanbide horiei dagozkien erakunde kolegialetan aukera berdintasuna izateko politikak egitea sustatzen du.»

* Horrela, txostenean, berdintasun-politiken sustapena berariaz zein artikulutan dagoen ere zehazten da:

- Lanbidean jarduteko printzipioei eta betebeharrei buruzko 11.1 artikulua k) idatzatziak honako hau dio: «*Kirol-arloan emakumeen benetako berdintasuna eta maila guztietako kirol-praktikan sartzeari ahalbidetuko duten baldintzak bultzatzea, edozer eratako diskriminazio-ekintza oro saihestuta.*» Eta txostenak pertsonen generoarekin loturiko gaiei buruzko prestakuntza-jardueretan eta/edo berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeetan **parte hartzea bultzatzeko neurri bat jasotzen du**, baita **ekintza positiboko neurri bat** ere, gizonen berdintasunaren alde lan egin dezaten. Hala ere, ez da antzematen printzipio edo betebeharrak horrek nahitaez dakarrenik adierazitako parte-hartzea lanbidearen jardunean, ezta berez ekintza positiboko neurri bat denik ere. Beraz, artikulua hori **beste neurri bat** atalean jasotzea proposatzen dugu, eta bertan zehaztuko beharko da arauak erregulatzen duen jardueraren profesionaleko printzipio edo betebeharrak bat dela.
- Bigarren Xedapen Gehigarriak, Kirol-lanbideetako berdintasun-politikak izenekoak, honako hau dio: «*Eusko Jaurlaritzak, beste herri-administrazio batzuekin lankidetzan, eta dagokion erakunde kolegiarekin, kirol-federazioekin eta antzeko beste kirol-erakunde batzuekin batera, tratu- eta aukera-berdintasuna bultzatzeko politikak lantzea sustatuko du Lege honetan arauturiko lanbideetarako sarbidean eta haien jardunean aplikatu daitezkeen.*» Xedapen hori modu oso positiboan baloratzen da. Hala ere, neurri hori berdintasuna sustatzeko helburuen artean nabarmenduta badago ere, ez da desberdintasunak ezabatzearen neurri gisa jasotzen. Horregatik, atal honetan **beste neurri bat** bezala sartzeari proposatzen dugu, eta, ondoren, lege honetan araututako lanbideetarako sarbidean eta jarduketan eragina izango duela espezifikatuko da. Ondoren, elkarlan hori ezarriko balitz diruz laguntzeko lerroen edo hitzarmenen bidezko balizko jarduketan artean, berdintasunerako klausulak jaso ahalko lirateke, 4/2005 Legearen 20.2 artikulua betez. Horretarako, erakunde honetako webgunean eskura daiteke [Kontratuetakoa, diru-laguntzetakoa eta hitzarmen](#)

[publikoetako gizonen eta emakumeen berdintasunerako klausulei buruzko gida](#)», baita laguntzeko hainbat material dituzten gai honi buruzko webgune bereziak ere³.

Era berean, beste neurri batzuk hartzea ere aurreikusi da: [arau-proiektuko edukiaz harago doaz](#), eta sortu nahi den Tituluen Erregistroan sexuaren aldagaia sartzearekin lotuta daude.

Ez da neurri gehiago zehaztu; hala ere, geure buruari galde diezaiokegu, aurreikusita dagoenez (Bigarren Xedapen Gehigarrian horrela baitago jasota), berdintasunerako politiken sustapena bultzatzeko administrazioekin, erakunde kolegialekin, federazioekin eta antzeko beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzeak, arauaren testuaz gain, ez ote dituen eskatuko neurri zehatz batzuk (informazio-ekintzak, sentsibilizatzeak, prestakuntza-ekintzak, planak, programak, hitzarmenak, etab.).

Azkenik, [arauaren edukiari](#) dagokionez, zilegi da gogoeta batzuk eta hobekuntza-proposamenak egitea:

* [2. artikuluan](#), kirol-lanbideei, funtzionamendu orokorrari eta prestakuntzari buruzkoan, hau ezartzen da: «*Lege honi dagokionez, prestakuntza profesionala zera da, lanbide jakin baterako sarbidea izateko edo horretan jarduteko gaitasuna. Gaitasun hori modu ofizialean ziurtatuko du prestakuntza-titulu batek, gaitasun-ziurtagiri batek, modu formalean aitortutako esperientzia profesionalak edo baldintza horietako bat baino gehiago izateak. Lege honetan araututako lanbideetan jarduteko beharrezko kualifikazioak ziurtatzeko ondorengo artikuluek edo baliokideek adierazitako ikasketa-tituluak aurkeztu beharko dira, baita unean-unean indarrean dagoen araudian aurreikusitako bestelako titulu, egiaztapen edo ziurtagiri ofizialak ere*». Nabarmendu behar da laneko esperientziari esker jasotako gaitasunari buruzko edozer ziurtagiri generoaren ikuspegia kontuan hartuta egin behar dela, balorazio horretan genero-joerarik ez egoteko. Gaitasunei buruzko adierazpenak ikusgai jarri eta balioztatu behar ditu emakumeek eta gizonak egindako jardura guztiak, baita ordaindu gabeko lanaren bidez jasotako ikaskuntza ez-formala ere (etxean eta familian, horietan hainbat gaitasun garatzen baitira), sexuagatiko diskriminazioan erori gabe eta genero-estereotipoak gaindituta. Hori guztia gaitasun profesionalak egiaztatzeke administrazio-prozeduretan jaso beharko da, kualifikaziorik gabeko jardura profesionalari

³ * [Emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak](#)

eta borondatezko lanari buruz Lehenengo eta Bigarren Xedapen Iragankorretan aurreikusitakoari jarraiki.

* 3. artikuluan (gorputz-hezkuntzako irakasleak), eskola publikoan jarduteko baldintzen artean, komenigarria litzateke berdintasunari eta hezkidetzari buruzko gutxieneko gaitasunaren gainean zerbait adieraztea, irakasleak bere ikasgaiko edukiak 4/2005 Legearen 31. eta 32. artikuluetan ezarritakoaren arabera eman ditzan.4.

* 7. artikuluan (kasu berezietako prestakuntza-baldintzak), Legea lanpostuak eskuratzeko eta sektore publikoan zerbitzuak kontratatzeko aplikatuko dela ezartzen da. Ildo horretatik, azpimarratu beharra dago 4/2005 Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoa betez, enplegu publikoko lanpostuak eskuratu, bete eta mailaz igotzeko hautapen-prozesuak erregulatzen dituzten ondorengo arauetan klausula bat txertatu behar dela, zehazteko gaitasun-berdintasuna egonez gero emakumeari emango zaiola lehentasuna haien ordezkaritza % 40tik beherakoa den administrazio talde, eskala, maila eta kategoriatan, salbu eta beste hautagai batek neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak baditu (nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik), alegia, lana lortzeko edo lanean mailaz igotzeko zailtasun bereziak dituzten beste talde bateko kide bada.

* Kiroleko Profesionalak elkargoetako kide izateari eta erregistratzeari buruzko 10. artikuluan ezarritakoari dagokionez, eta arauaren testuaz haragoko neurrietan aurreikusitakoari jarraiki, erregistroarekin erlazionatutako estatistikek (4/2005 Legeko 16.a eta 16.e artikulua betez) sexuaren aldagaia sistematikoki txertatu beharko dute gauzatzen dituzten estatistikan, inkestetan eta datu-bilketan. Horrez gain, eskuratutako datuak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak jakin ahal izateko moduan ustiatu beharko dira; dagokigun kasuan, txosten honek aipatzen duen Legeak arautzen dituen lanbideei buruzkoak datuetan.

* 11. artikuluan (jarduketa profesionaleko printzipioak eta betebeharrak), "*Kirol-arloan emakumeen benetako berdintasuna eta maila guztietako kirol-praktikan sartzea ahalbidetuko duten baldintzak bultzatzea, edozer eratako diskriminazio-ekintza oro*

saihestuta» printzipio espezifikoa gisa ezartzeaz gain, komenigarria litzateke genero-ikusuntuak gainerako printzipioetan eragina izatea eta, batez ere, jarraian nabarmentzen direnetan:

- Behar eta baldintza pertsonaletara egokitutako zerbitzu-prestazioan, betiere, behar nahiz baldintza horietan genero-desberdintasunak kontuan hartzen badira.
- Osasunaren eta segurtasunaren zaintzan eta zerbitzuak jasoko dituzten pertsonen kontrol medikoaren laguntzan, era berean, kontuan hartu beharko dira kiroleko osasunari eta segurtasunari buruzko generoaren alderdi bereizgarriak.
- Bereziki aipatu beharrekoa da, edozer erako indarkeriarik edo gehiegizko esplotaziorik gabeko kirola sustatzerakoan, berariazko erreferentzia egin behar zaiola kirol-arloko sexu-jazarpenari eta -abusuari, horrek larriki eragin baitiezaioke pertsonen osasun fisikoari eta psikologikoari. Ziurrenik, hori guztia osatu beharra dago, kirol-alorreko sexu-jazarpenaren eta -abusuen kontrako protokoloak eta kode etikoa aplikatuta. Horrez gain, horiek aplikatzen direla zaindu beharko da. Ikusgai ez dagoen arazo bat denez, interesgarria litzateke modu esplizituan jasotzea.
- Gainera, betebeharrak gisa ezarri ahal izango litzateke genero-estereotipoak gainditzea bermatzen duen eta kirolarien beharrak nahiz desberdintasunak kontuan hartuko dituen kirol-materiala erabiltzea, eta kirol-instalazioen, ordutegien eta erabileren diskriminaziorik gabeko esleipena bermatzea. Guneen banaketak eta erabilerak nahiz kirol-ingurunearen antolamenduak balio eta arau sozialak transmititzeko funtzio garrantzitsua dute, eta, horrela, generoaren sozializazioari laguntzen diote.

* Arauaren erregulazioaz harago, Eusko Jaurlaritzak prestakuntza-ekintza espezifikoa sustatuko dituela jasota dagoen moduan, kirol-arloko profesionalak sentsibilizatzeko prestakuntza sustatu ahal izango litzateke, hezkidetzaren, berdintasunaren sustapenaren eta sexu-jazarpena eta -abusea prebenitzearen arloan. Era berean, jarduera fisikoko eta kirol-arloko profesionalen genero-ikuspegia kontuan hartzen duen kirol-prestakuntzako eskaintza bat sustatu beharko da, indarreko legediak maila bakoitzerako ezarritako eskakizunekin bat: unibertsitateko maila, lanbide-heziketako maila, irakaskuntza teknikoaren maila eta prestakuntza iraunkorreko ikastaroen maila. Gainera, kirol-

⁴ Gogorarazi beharra dago, ahal den heinean, irakasle dibertsifikatuak izan beharko liratekeela, genero-estereotipoak gainditzen dituzten erreferente maskulinoak edo femeninoak dituztenak. Irakaskuntzan emakumeen eta gizonen arteko presentzia orekatua izateak 4/2005 Legearen 31.2 artikuluan aurreikusitakoa betetzen du.



irakaskuntzetan emakume gehiago sartzea sustatu edo bultzatu daiteke. Kirolean gero eta emakume profesional gehiago egoteak eragin biderkatzailea du, erreferente positiboak baitira. Kirol-irakaskuntzak hautatzeko orduan sexuen arteko desberdintasun hori gutxitzeak emakumeen profesionalizazioa hobetuko du, eta, horrela, bermatu egingo dira erabateko berdintasun-baldintzak arlo eta maila guztietarako sarbidean, parte-hartzean eta ordezkaritzan.

Azkenik, beharrezkoa da Legearen gaztelaniazko proiektu-testuan maskulinoan bakarrik idatzitako terminoak berrikustea eta egokitzea 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan adierazten den **hizkuntzaren erabilera ez-sexistarekin bat**; izan ere, gaztelaniazko testuan termino hauek agertzen dira: «*los monitores, los entrenadores, directores*», «*los destinatarios*», «*titulados*», «*los profesionales*», «*los deportistas*». Hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiteko lagungarria izan liteke Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundeak eginiko [Guía de lenguaje para el ámbito del deporte](#) (Kirol-arloko lengoaiari buruzko gida).

Vitoria-Gasteizen, 2015eko martxoaren 5ean.

XII

**INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/HERRI ADMINISTRAZIOETAN
HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA**Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
Herri Administrazioetan Hizkuntza
Normalizatzeko Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA**Viceconsejería de Política Lingüística
Dirección de Normalización Lingüística de
las Administraciones Públicas**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **ANGEL LOBERA REVILLA**
Fecha de la firma: **22/02/2016 16:34:45**Validación de la firma: **Correcta**

Josu Agirre Goitia
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Jaun hori,

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege Aurreproiektuaren berri jaso genuen Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan iragan urtarrilaren 19an, euskaraz eta gaztelaniaz, Tramitagune tresna informatikoaren bitartez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz.

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.l) artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut:

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila.

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten dut.

Bestalde, kontuan harturik Lege Aurreproiektuaren euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak daudela, bete da Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an hartutako Erabakian jasotakoa, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena.

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina.

1978. urteko Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikuluari jarraiki, botere publikoek hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituzte.

Euskal Autonomia Erkidegoko araudiari dagokionez, Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren arabera autonomia erkidegoak bakarreko eskumena du kirol arloan (10.36 artikulua). Halaber, bakarreko eskumena du lanbide-elkargoen eta lanbide tituludunen jardueraren gainean, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoari kalterik egin gabe (10.22 artikulua).

Eskumen horien babesean onartu zen ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko kirolarena. Legearen 4.2.h) artikulua arabera, autonomia erkidegoko erakunde komunei dagozkien eskumenen artean dago kirol-teknikariak prestatzeko zentroak eta horietako irakaskuntzak eta tituluak arautzea, ofizialki onartzea eta bultzatzea.

Orobat, legearen 62. artikuluan jasotzen denez, kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu, sustapen eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute, eta legea garatzeko xedapenen bidez zehaztuko da norainokoa izango den bateko eta besteko eremuetan titulazioen nahitaezkitasuna. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoak eta kirol federazioak titulazioen eskakizuna behar bezala betearazteaz arduratuko dira.

Bestalde, aipatzekoa da azaroaren 21eko 18/1997 Legeak tituludun lanbideak eta profesionalen elkargo eta kontseiluak arautu zituela.

Arau horiek aintzat hartuta, orain izapidetzen ari den Lege Aurreproiektuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzea eta jardutea arautuko da.

Lege Aurreproiektuaren 1. artikuluan helburua eta aplikazio-eremua finkatzen dira, 2. artikuluan kirol-arloko berezko lanbideak, funtzio-eremu orokorra eta kualifikazioak lantzen dira, 3. artikuluan Gorputz Hezkuntzako Irakasle lanbidea, 4. artikuluan Kirol Monitore lanbidea, 5. artikuluan Entrenatzaile lanbidea, 6. artikuluan Kirol Zuzendari lanbidea, 7. artikuluan kasu berezietako kualifikazio-baldintzak, 8. artikuluan kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzea, 9. artikuluan izenen erabilera, 10. artikuluan elkargoko kide egitea eta Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa, 11. artikuluan lanbidean jarduteko printzipioak eta betebeharrak, 12. artikuluan lanbide-sozietateen bidez jardutea, 13. artikuluan erantzukizun zibila bermatzea, 14. artikuluan bestelako baldintzak, 15. artikuluan lanbideetan legearen babespetik at jardutea, 16. artikuluan arau-esparru erkidea eta lehia askea, 17. artikuluan beste estatuetan lortutako lanbide-kualifikazioak onartzea, eta 18. artikuluan kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babestea. Azkenik hamahiru xedapen gehigarri, bost xedapen iragankor, xedapen indargabetzailea eta sei azken xedapen daude.

Beraz, aipatutako Lege Aurreproiektua aztertuta, euskararen erabileraren gaineko eraginik ez duela izango adierazten dut.

Halere, ohartarazi behar dugu Aurreproiektuaren 10. artikuluan aipatzen den Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistro publikoak euskara eta gaztelaniaren erabilera bermatu beharko duela, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 7. artikuluan xedatutakoarekin bat, eta horrela jaso beharko litzatekeela dagokion erregelamendu arauan.

Adeitasunez,

Gasteizen, 2015eko urtarrilaren 30ean.

Ángel Lobera Revilla. Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria



Josu Agirre Goitia
Director de Régimen Jurídico y Servicios.
Viceconsejería de Administración y Servicios
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Estimado señor:

La Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas recibió el pasado 19 de enero, a través de la aplicación informática Tramitagune y enviado desde esa Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, en euskera y castellano, con el requerimiento de elaboración del informe preceptivo.

En respuesta a dicha petición, y en base a lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, y en el artículo 22.1) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, emito el siguiente informe:

a) Adecuación a la normativa vigente en materia lingüística.

Una vez analizado el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, declaro que no infringe la normativa vigente en materia lingüística.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Ley dispone de versiones en castellano y en euskera, damos por cumplido lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Gobierno Vasco el 14 de mayo de 2013, mediante el que se aprobaron diversas medidas para la redacción en ambas lenguas oficiales de las disposiciones generales destinadas a convertirse en leyes, decretos de ley, decretos u órdenes.

b) Impacto sobre la normalización del uso del euskera.

La Constitución española de 1978 contiene en su artículo 43.3 un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte.

En cuanto a la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, dispone que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de deportes (artículo 10.36). Asimismo, de conformidad con el artículo 10.22, tiene competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y de ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

Al amparo de dicha competencia, se aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, de deporte del País Vasco. Tal como establece la Ley en su artículo 4.2.h), la regulación,



reconocimiento oficial e impulso de los centros de formación de personal técnico deportivo, así como de sus enseñanzas y títulos corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la Ley establece en su artículo 62 que para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial, y que, por otra parte, a través de las disposiciones de desarrollo de la Ley se efectuará, en los distintos ámbitos, la concreta delimitación del alcance de la obligatoriedad de las titulaciones. Además, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, así como las federaciones deportivas, velarán de forma efectiva por el cumplimiento de la exigencia de titulación.

Por otro lado, cabe subrayar que la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, reguló el ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

Teniendo en cuenta las normas citadas, a través del anteproyecto de ley actualmente en fase de tramitación, se regulará el acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

El artículo 1 del Proyecto de Ley establece su objeto y el ámbito de aplicación; el artículo 2 describe las profesiones propias del deporte, el ámbito funcional general y las cualificaciones; el artículo 3, la profesión de profesor o profesora de educación física; el artículo 4, la profesión de monitor deportivo o monitora deportiva; el artículo 5, la profesión de entrenador o entrenadora; el artículo 6, la profesión de director deportivo o directora deportiva; el artículo 7, los requisitos de cualificación en supuestos especiales; el artículo 8, la adaptación a nuevas cualificaciones y títulos oficiales; el artículo 9, la reserva de denominaciones; el artículo 10, la colegiación y Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco; el artículo 11, los principios y deberes en el ejercicio profesional; el artículo 12, el ejercicio a través de sociedades profesionales; el artículo 13, el aseguramiento de la responsabilidad civil; el artículo 14, otros requisitos; el artículo 15, el ejercicio de las profesiones sin amparo en la Ley; el artículo 16, el marco normativo común y la libre competencia; el artículo 17, el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados, y en el artículo 18, la protección de la salud y la seguridad de consumidores y usuarios. Por último, el Anteproyecto contiene dieciséis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

Por lo tanto, una vez de analizado el Anteproyecto de Ley, considero que no tiene ningún efecto de cara a la normalización del uso del euskera.

Conviene señalar, no obstante, que el Registro Público de Profesionales del Deporte del País Vasco mencionado en el artículo 10 deberá garantizar el uso del euskera y el castellano, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y, por lo tanto, así debería reflejarse en la correspondiente norma reglamentaria.

Atentamente,



En Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2015.

Ángel Lobera Revilla

Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas



XIII

CERTIFICADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE /

KIROLAREN EUKAL KONTSEILUAREN BATZORDE IRAUNKORRAREN ZIURTAGIRIA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**



ELISABET ALTUBE BENGOA, SECRETARIA DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE,

CERTIFICA QUE:

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Vasco del Deporte, celebrada en Vitoria-Gasteiz el día 29 de octubre de 2014, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

2.- Informe relativo al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

Se exponen los aspectos más importantes del anteproyecto:

El texto trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

Las profesiones que se regulan abarcan el ámbito educativo, el ámbito recreativo, el competitivo y el ámbito de la dirección o gestión.

El acceso o ejercicio de las profesiones del deporte no está sujeto a la posesión de un título de educación superior, sino a la acreditación de las correspondientes cualificaciones profesionales. Y éstas podrán acreditarse mediante los títulos, como los certificados de profesionalidad, de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

La ley no regula todas las profesiones relacionadas con el deporte sino, tan solo, determinadas profesiones del deporte. No regula Jueces y juezas o agentes de deportistas. Al tratarse de profesiones cuya prestación de servicios o incide directamente en bienes jurídicos de máxima relevancia como son la salud y la seguridad de las y los destinatarios de dichos servicios profesionales. Tampoco se regulan las actividades realizadas por el voluntariado deportivo.

La ley es respetuosa con los derechos de quienes, a la entrada en vigor de la misma, se encuentran desarrollando profesiones objeto de esta regulación legal sin la cualificación requerida en la ley. Además, se han contemplado mecanismos para la implantación progresiva y no traumática de la misma y se han previsto, asimismo, situaciones de falta de profesionales con titulación que puedan hacer frente a la demanda de las entidades prestadoras de servicios.

Se entiende que las Diputaciones forales tienen mucho que aportar a esta ley, y tal y como ya se ha realizado con otros agentes sociales implicados para la elaboración de la misma, se tiene



intención de realizar reuniones informativas con cada una de las mismas a fin de explicar con detalle el proyecto y recabar aportaciones. El próximo lunes se va a celebrar una reunión interna en la Dirección de Deportes a fin de fijar el calendario de reuniones.

Se informa favorablemente.

Y para que así y conste y surta los efectos oportunos donde proceda emito la presente certificación en Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014

ELISABET ALTUBE BENGOA

SECRETARIA DEL CONSEJO
VASCO DEL DEPORTE

**ELISABET ALTUBE BENGOKAK, KIROLAREN EUSKAL KONTSEILU KO
IDAZKARIAK HONAKO HAU****ZIURTATZEN DU:**

Kirolaren Euskal Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak, Gasteizen 2014ko urriaren 29an egindako bileran, erabaki hau hartu zuen aho batez, besteak beste:

2.- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko txostena.

Aurreproiektuaren alderdirik garrantzitsuenak azalduko ditugu:

Testuan, kirol-arloko berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzkoak diren zenbait alderdi arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer eremu funtzional esleitzen zaion lanbide bakoitzari.

Arautu beharreko lanbideak hezkuntzaren, aisiaren, lehiaketen, zuzendaritzaren eta kudeaketaren eremuak izango dira.

Izan ere, kirol-arloko lanbideetan sartzeko edo jarduteko, ez da beharrezkoa goi-mailako hezkuntzako titulua izatea; bai, ordea, lanbidearen lanbide-kualifikazioak egiaztatzea. Eta kualifikazio horiek tituluen bidez egiaztatu ahal izango dira, hala nola une bakoitzean indarrean dagoen ordenamenduaren ondoriozko profesionaltasun-ziurtagiri ofizialen bidez.

Legeak ez ditu arautzen kirolari lotutako lanbide guztiak, kirol-arloko lanbide jakin batzuk baizik. Ez ditu epaileak edo kirolarien agenteak arautzen. Izan ere, zerbitzu horiek ematen dituzten lanbideek ez dute zuzenean eragiten ondasun juridikorik garrantzitsuenetan, hau da, ez dute eragiten zerbitzu profesional horien hartzaileen osasunean eta segurtasunean. Era berean, ez dira kirol-arloko boluntarioek egindako jarduerak arautzen.

Legeak oso errespetu handiz jokatzen du berau indarrean jartzen denean lege-erregulazio honen xede diren lanbideetan legeak eskatzen duen kualifikazioa gabe dihardutenen eskubideekin. Gainera, Legea era progresiboan eta ez-traumatikoan ezartzeko mekanismoak hartu dira kontuan, eta zerbitzuak ematen dituzten erakundeen eskariari aurre egingo dioten profesional tituludunen gabezia-egoerak aurreikusi dira.



Foru Aldundiek ekarpen handia egin diezaiokeste lege honi, eta, legea lantzeko zereaginean inplikaturako beste gizarte-eragile batzuekin egin den bezala, Aldundi bakoitzarekin informazio-bilerak egiteko asmoa dago, proiektua zehatz-mehatz azaltzeko eta ekarpenak jasotzeko.

Datorren astelehenean, barne-bilera bat egingo da Kirol Zuzendaritzan, bileren egutegia finkatzeko.

Aldeko irizpena eman zaio.

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau ematen dut, Gasteizen, 2014ko azaroaren 14an.

ELISABET ALTUBE BENGOA

KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUKO IDAZKARIA

XIV

DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAREN IRIZPENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

DICTAMEN 11/15

sobre el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco

Bilbao, 14 de julio de 2015

I.- INTRODUCCIÓN

El día 9 de junio de 2015 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito del Departamento de Administración Pública y Justicia, solicitando informe sobre el “*Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*”, según lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco.

La iniciativa legislativa que se nos consulta tiene como objeto ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y expresando la cualificación requerida para el acceso de tales profesiones.

De manera inmediata fue enviada copia del documento a todos los miembros del Pleno del Consejo a fin de que remitieran sus propuestas y opiniones y dar traslado de las mismas a la Comisión de Trabajo pertinente, según lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Económico y Social Vasco. El día 1 de julio de 2015 se reúne la Comisión de Desarrollo Social y a partir de los acuerdos adoptados, se formula el presente Proyecto de Dictamen para su elevación al Pleno del Consejo, acordando emitir Proyecto de Dictamen que se elevó al Pleno del CES Vasco del 14 de julio de 2015 donde se aprueba por unanimidad.

II.- CONTENIDO

El texto del “*Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*” consta de Exposición de motivos, 20 artículos, 11 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 6 disposiciones finales.

Explica la **exposición de motivos** que la práctica deportiva es una combinación de aspectos biológicos y culturales, con una evidente contribución a la salud de las personas, y que existe una innegable incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de las personas que practican deporte, que conduce inexorablemente a la regulación de su acceso y ejercicio, máxime en un ámbito en el que la realización de las actividades profesionales ha venido siendo asumida por personas carentes de una adecuada formación.

El Plan Vasco del Deporte 2003-2007 denunció la falta de una regulación profesional en este ámbito, que ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de dicho Plan era regular las exigencias mínimas de titulaciones para actividades profesionales, teniendo en cuenta, según reconocía, el propio Plan, la incidencia de la práctica deportiva en la salud y seguridad de los practicantes.

Es innegable que la práctica deportiva de los ciudadanos y ciudadanas conlleva por lo general, importantes beneficios si se realiza en condiciones aceptables, pero también puede constituir una importante amenaza si se ejecuta bajo la dirección o supervisión de personas sin la formación necesaria.

En este sentido, el texto que se nos propone trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

La presente ley concibe el ámbito material del deporte en un sentido muy amplio, y contempla el fenómeno deportivo vasco en todas sus manifestaciones, sin constreñir tal concepto a las modalidades y disciplinas deportivas oficialmente reconocidas ni al mundo de la pura competición. Por esta razón, la ley no se circunscribe sólo al ámbito de la competición o al ámbito federado, sino que trata de contemplar toda la policromía del deporte de conformidad con la Carta Europea del Deporte de 1992, que comprende por deporte *«todo tipo de actividades físicas que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles»*.

Las profesiones que se regulan en esta ley abarcan el ámbito educativo, el ámbito recreativo, el ámbito competitivo y el ámbito de la dirección. En cada uno de estos ámbitos se ha reconocido una profesión.

Otra de las claves de esta norma es que el acceso o ejercicio de las profesiones del deporte no está sujeto a la posesión de un título de educación superior, sino a la acreditación de las correspondientes cualificaciones profesionales. Y estas cualificaciones podrán acreditarse mediante los títulos académicos de diferentes niveles así como mediante aquellos otros títulos, como los certificados de profesionalidad, de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento.

El texto legal ha incorporado, asimismo, un catálogo de principios y deberes de actuación para el ejercicio de las profesiones del deporte. Tales principios y deberes son, como regla general, los propios y específicos de dichas profesiones, quedando sometidas en todo lo restante al marco común del ejercicio profesional.

Por último, y en cumplimiento de los principios contenidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco, se ha prestado especial atención al tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito profesional. Por ello, el texto promueve, entre otras cosas, la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas en esta ley, en el ejercicio de las mismas, en la promoción profesional y en las correspondientes organizaciones colegiales.

El **artículo** de esta norma es el siguiente:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2.- Profesiones propias del deporte, ámbito funcional general y cualificaciones

Artículo 3.- Profesión de Profesor o Profesora de Educación Física

Artículo 4.- Profesión de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva

Artículo 5.- Profesión de Entrenador o Entrenadora

Artículo 6.- Profesión de Director Deportivo o Directora Deportiva

Artículo 7.- Requisitos de cualificación en supuestos especiales

Artículo 8.- Adaptación a nuevas cualificaciones y títulos oficiales

Artículo 9.- Reserva de denominaciones

Artículo 10.- Colegiación y Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco

Artículo 11.- Deberes en el ejercicio profesional

Artículo 12.- Ejercicio a través de sociedades profesionales

Artículo 13.- Aseguramiento de la responsabilidad civil

Artículo 14.- Otros requisitos

Artículo 15.- Competencia en primeros auxilios

Artículo 16.- Ejercicio de las profesiones sin amparo en la Ley

Artículo 17.- Marco normativo común. Libre competencia

Artículo 18.- Reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados

Artículo 19.- Protección de la salud y seguridad de consumidores y usuarios

Artículo 20.- Ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información y la comunicación

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Mecanismos de colaboración con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas

Segunda.- Políticas de igualdad en las profesiones del deporte

Tercera.- Actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas

Cuarta.- Acreditación de cualificaciones para el acceso y ejercicio de las profesiones

Quinta.- Formación específica

Sexta.- Niveles de las actividades

Séptima.- Formación en actividades con deportistas en edad escolar

Octava.- Formaciones en modalidades deportivas no reconocidas por el Estado y formaciones en modalidades deportivas sin plan formativo aprobado por el Estado

Novena.- Contratos para la formación y aprendizaje o formación dual

Décima.- Cualificaciones equivalentes a las titulaciones de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva y de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva Superior

Undécima.- Potestad sancionadora

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Ejercicio profesional sin la cualificación requerida en la Ley

Segunda.- Aplicación progresiva de la Ley para las profesiones de Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, Entrenador o Entrenadora y Director Deportivo o Directora Deportiva

Tercera.- Obligación de colegiación

Cuarta.- Incumplimiento del deber de obtener la cualificación en primeros auxilios

Quinta.- Voluntariado

Sexta.- Reglamentaciones federativas

Séptima.- Contratos vigentes a la entrada en vigor de la Ley

DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA (Apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, así como todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificación del artículo 127 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Segunda.- Modificación del artículo 128 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Tercera.- Habilitación general para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Cuarta.- Habilitación expresa para la definición de conceptos y para la delimitación de las atribuciones y ámbitos materiales de las profesiones

Quinta.- Habilitación expresa para el procedimiento de reconocimiento de la formación específica.

Sexta.- Entrada en vigor.

III.- CONSIDERACIONES GENERALES

El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social¹.

Entre sus funciones de carácter social cabe destacar, en primer lugar, el fomento de la salud y de modos de vida saludable, ya que contribuye a alargar la esperanza de vida y a mejorar la calidad de la misma. Asimismo, fomenta las relaciones sociales y contribuye a la cohesión, ejerciendo una importante función integradora. Se trata, por otra parte, de un medio para la transmisión de valores educativos y culturales a la población en general y la de edad escolar en particular, dado que enseña a convivir y a respetar las reglas del juego, al tiempo que fomenta el valor del esfuerzo personal y de la cooperación.

Por todo ello, y desde este punto de vista social, el deporte está siendo incluido en la agenda de las políticas públicas de todos los países; sin menoscabo, además, de su contribución a la actividad económica, al turismo y al ocio.

Todo esto convierte al deporte en un ámbito transversal de interés público en toda su magnitud, que precisa una continua adaptación del ordenamiento jurídico a los requerimientos vigentes, habida cuenta de su carácter dinámico.

Consciente de ello, el Parlamento Vasco, aprobó en sesión plenaria el 9 de febrero de 2012 *“instar al Gobierno Vasco a que presente, dentro del marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos, un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte, en colaboración con todos los agentes implicados, de tal forma que se determinen las profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral para organizar la seguridad y la salud de las personas”*.

Y, en este contexto, el CES se cuestiona qué agentes implicados han sido consultados, puesto que parte de las organizaciones aquí representadas con interés en esta norma no han sido preguntadas.

Se presenta a nuestra consideración el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, con la que el Gobierno pretende, tal y como dispone su artículo 1, *“ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y expresando la cualificación requerida para el acceso de tales profesiones”*. Define esta norma el ejercicio profesional como *“la prestación de los servicios propios de las profesiones del deporte reguladas en la misma bajo remuneración, quedando excluidas las actividades realizadas en el marco de relaciones de voluntariado, amistad, familiares y análogas”*.

Valoramos positivamente esta iniciativa que, asumiendo la importancia de la práctica deportiva en términos culturales, sociales y de salud, regula las condiciones y cualificaciones requeridas a las personas que ejerzan algunas de las más relevantes profesiones asociadas a esta práctica.

En concreto, queremos destacar su importante función en la protección de la salud y la seguridad de consumidores/as y usuarios/as.

Reconoce la Memoria complementaria del anteproyecto que el sector del deporte ha sido, hasta la fecha, uno de los mercados laborales más abiertos y susceptibles de permitir el ejercicio de determinadas profesiones a formaciones y titulaciones muy heterogéneas, a personas con una formación muy deficiente o, incluso, sin formación. En este mismo sentido, se pronunciaba la COJUA en su dictamen 7/2004, en el que sostiene que *“los poderes públicos no pueden seguir siendo ajenos a la seguridad de la actividad deportiva si simultáneamente hacen emerger el mensaje de su fomento e incremento. La actividad física debe realizarse en condiciones de seguridad y una parte sustantiva se encuentra en las personas que intervienen en los distintos niveles de aprendizaje y conducción de la misma”*.

¹ Art. 2.1 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.

Dada la incidencia que tiene el ejercicio de algunas profesiones del deporte en la seguridad de las y los practicantes y en los derechos de consumidores/as y usuarios/as, el anteproyecto de ley establece (art. 19), en primer lugar, que el Gobierno Vasco garantizará, en el ejercicio de sus competencias, la salud y la seguridad de las y los consumidores y usuarios pudiendo establecer los oportunos sistemas de autorización, declaración responsable, comunicación, evaluación, acreditación e inspección con relación a la exigencia de cualificaciones para el ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en esta Ley.

Tal y como se argumenta en la Memoria complementaria, el mercado relacionado con el acondicionamiento físico de las personas está salpicado de mensajes que carecen de objetividad o de base científica. Esta norma dispone, por ese motivo, que sin perjuicio de la potestad disciplinaria del respectivo colegio profesional sobre sus miembros, las Administraciones Públicas competentes velarán por que la publicidad de las personas y entidades que presten servicios en el ámbito de las profesiones reguladas en esta Ley sea objetiva, prudente y veraz, no fomentando prácticas deportivas atentatorias a la salud y seguridad de las y los deportistas y respete rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones no creando falsas esperanzas. Por esta razón, no podrán ser objeto de publicidad por los profesionales objeto de regulación en esta Ley aquellas actividades deportivas sobre las que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para la salud.

Además, y con el fin de garantizar el cumplimiento de la cualificación mínima de las y los profesionales que se encuentran dentro del ámbito de esta Ley, todos los contratos de prestación de servicios con dichos profesionales se formalizarán por escrito y recogerán con claridad la acreditación de la cualificación de dichos profesionales, lo cual también contribuirá a la protección de la salud y a la seguridad de la práctica deportiva.

En relación a la acreditación de la cualificación requerida para el ejercicio de las profesiones reguladas, el artículo 10 del anteproyecto de dictamen establece como requisito indispensable para el acceso y ejercicio de estas profesiones la incorporación al colegio profesional correspondiente, si así lo dispone la legislación estatal correspondiente, o al Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco. Tal requisito de colegiación sólo es exigible si existe el colegio profesional correspondiente, que deberá facilitar, con finalidades informativas y estadísticas, al Registro una lista de sus miembros colegiados.

El Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco, que será público, ofrecerá información del nombre y apellidos de las y los profesionales inscritos y referencia de sus titulaciones, certificados o documentos análogos acreditativos de su cualificación profesional, en aras a una mejor defensa de los derechos de las y los consumidores y usuarios.

En otro orden de cosas, valoramos positivamente que el proyecto normativo inste al Gobierno a promover las políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la ley, en colaboración con las demás administraciones públicas, la organización colegial correspondiente, las federaciones deportivas y resto de entidades análogas (D.A. Segunda), teniendo en cuenta la infrarrepresentación de las mujeres en el ejercicio de las profesiones del deporte.

IV.- CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA

Artículo 18. Reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados

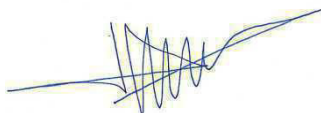
Dispone el primer apartado de este artículo que *“el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en estados miembros de la Unión Europea, o en estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios de los y las profesionales, se ajustará a lo que establezcan los convenios internacionales y las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento, así como en las disposiciones estatales de transposición de dicho ordenamiento”*.

Consideramos más apropiado, desde el punto de vista formal, que la alusión a la normativa comunitaria sea sustituida por la “normativa europea”.

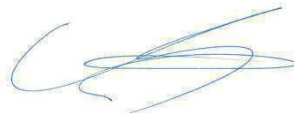
V.- CONCLUSIÓN

El CES Vasco considera adecuada la tramitación del “*Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco*”, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado.

En Bilbao, a 14 de julio de 2015



Vº Bº El Presidente
Francisco José Huidobro Burgos



La Secretaria General
Emilia Málaga Pérez

11/15 IRIZPENA

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-ogibideetara iritsi eta horietan jarduteko Lege Aurreproiektuari buruzkoa

Bilbon, 2015eko uztailaren 14an

I.- SARRERA

2015eko ekainaren 9an Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean Herri Administrazio eta Justizia Sailaren idazkia sartu zen eta “*Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-ogibideetara iritsi eta horietan jarduteko Lege Aurreproiektuari*” buruzko txostena eskatzen zuen, 8/2012 Legeak, maiatzaren 17koak, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, 3.1. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Kontsultatzen zaigun ekimen legegileak kirolaren ogibide zehatzetara iritsi eta horietan jarduteko oinarritzko alderdiak agintzea du helburu. Ildo horri eutsiz, berariaz onartzen ditu ogibideak eta bakoitzari dagokion jarduneko eremu funtzional orokorra atxikitzen dio. Horrez gain, ogibide horietan aritzeko prestakuntza adierazten du.

Horren kopia berehala bidali zitzaion Batzordearen Osoko Bilkurako kide guztiei, beren proposamenak egin eta iritziak emateko, baita lan-batzorde egokian lantzeko ere, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari dagokion Funtzionamendu Araudiak xedatutakoarekin bat. 2015eko uztailaren 1ean Gizarte Garapenerako Batzordea bildu zen eta hartutako erabakietatik abiatuta, irizpen-proiektu hau egin zen Batzordearen Osoko Bilkuran lantzeko, 2015eko uztailaren 14an Euskadiko EGABren Osoko Bilkuran lantzeko irizpen-proiektua egitea erabaki zen eta aho batez onartu zen.

II.- EDUKIA

“*Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-ogibideetara iritsi eta horietan jarduteari buruzko Lege Aurreproiektuaren*” testuak zioen azalpena, 20 artikulua, 11 xedapen gehigarri, 7 xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bakarra eta 6 azken xedapen ditu.

Zioen azalpenak aipatutakoaren arabera, kirola egitean alderdi biologikoak eta kulturalak konbinatzen dira eta pertsonen osasunerako ekarpena argia da. Aurrekoaren harira, ukaezina da kirolaren ogibide batzuek kirola egiten duten pertsonen osasunean eta segurtasunean eragiten dutela eta, ondorioz, halabeharrez horietara iristea eta horietan jardutea arautu behar da, are gehiago, jarduera profesionalak prestakuntza egokirik ez duten pertsonen burutu dituztenean.

2003-2007 aldirako Kirolaren Euskal Planak eremu horretan erregulazio profesionalik ez zegoela salatu zuen eta, horren ondorioz, merkatuan prestakuntzarik gabeko pertsonak eta prestakuntza gutxi zutenak sartu dira. Horregatik, Planaren lehentasunezko helburu bat zen jarduera profesionaletarako titulazioen gutxienezko eskakizunak arautzea, Planak berak onartutakoari jarraiki, kirol-jardunak egiten dutenen osasunean eta segurtasunean duen eragina kontuan hartuta.

Ukaezina da, orokorrean, herritarrek kirola egiten dutenean onurak garrantzitsuak direla, hori baldintza onargarrietan egiten bada; baina, halaber, mehatxu garrantzitsua izan daiteke, beharrezko prestakuntza ez duten pertsonen zuzendaritzapean edo ikuskaritzapean gauzatzen bada.

Ildo horri jarraiki, proposatzen zaigun testua kirolaren eremuak berezkoak dituen ogibide batzuen jardunari buruzko funtsezko alderdiak arautzen saiatzen da. Hala, berariaz zehazten ditu ogibideak eta horietan jarduteko beharrezko prestakuntza xedatzen du. Gainera, ogibide bakoitzari dagokion eremu funtzional orokorra atxikitzen dio.

Legeak kirolaren eremu materiala oso zentzu zabalean hartzen du eta euskal kirolaren fenomeno bere azalpen guztietan aurrez ikusten du, aipatu kontzeptua ofizialki onartutako kirol-modalitate eta -diziplinetara edo huts-hutsik lehiaketaren mundura mugatu gabe. Horregatik, legea ez da bakarrik lehiaketaren eremurako ala arlo federaturako; 1992ko Kirolaren Gutun Europarrarekin bat, kirolaren polikromia guztia aurrez ikusten du. Hala, kirola litzateke *“jarduera fisikoaren mota oro, partaidetza antolatua edo ez-antolatua bitartez, egoera fisikoa eta psikikoa adieraztea edo hobetzea, giza harremanak garatzea edo maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea xede dituen”*.

Lege honetan arautzen diren ogibideek hezkuntzaren eremua, lehiaketaren eremua eta zuzendaritzaren esparrua hartzen dituzte. Eremu bakoitzean ogibide bat onartu da.

Arau honen beste oinarri bat kirolaren ogibideetara iristeko edo horietan jarduteko goi-mailako hezkuntza-titulurik ez edukitzea da. Ildo horri eutsiz, prestakuntza profesionalak beharko lirateke egiaztatzeko. Nolanahi ere, prestakuntza horiek maila desberdinetako titulu akademikoaren bitartez edo beste titulu ofizial batzuen bidez (hala nola, profesionaltasunaren ziurtagiriak) egiaztatu ahal izango dira, une bakoitzean indarreko antolamenduak xedatzen baditu.

Era berean, legezko testuak kirolaren ogibideetan jarduteko jarduera-printzipio eta -eginkizunen katalogoa sartu du. Orokorrean, printzipioak eta eginkizunak aipatu ogibideen berezkoak eta bereziak dira eta gainerako guztirako jardun profesionalaren esparru komuna bete beharko dute.

Azkenik, 3/2007 Lege Organikoak, martxoaren 22koak, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasun eraginkorrari buruzkoak, eta 4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, Euskal Autonomia Erkidegoan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunari buruzkoak, dituzten printzipioak betetzeko, arreta berezia jarri zaio eremu profesionalean gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunaren gaiari. Horregatik, testuak, besteak beste, legeak araututako ogibideetara sartzeko, horietan aritzeko, sustapen profesionalerako eta erakunde kolegiatueterako tratu- eta aukera-berdintasunari buruzko politikak egitea sustatzen du.

Arauak hurrengo **artikuluak** ditu:

1. artikulua.- Xedea eta aplikazio-eremua
2. artikulua.- Kirolaren berezko ogibideak, eremu funtzional orokorra eta prestakuntzak
3. artikulua.- Gorputz hezkuntzari buruzko irakaslearen ogibidea
4. artikulua.- Kirol-monitorearen ogibidea
5. artikulua.- Entrenatzailearen ogibidea
6. artikulua.- Kirol-zuzendariaren ogibidea
7. artikulua.- Ustezko berezietan prestakuntza-baldintzak
8. artikulua.- Prestakuntza eta titulu ofizial berrietara moldapena
9. artikulua.- Izenak gordetzea
10. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-ogibideen elkargoko kide egitea eta erregistratzea
11. artikulua.- Jardun profesionalean eginbeharrak
12. artikulua.- Sozietate profesionalen bitartez jardutea
13. artikulua.- Erantzukizun zibila aseguratzea
14. artikulua.- Beste baldintza batzuk
15. artikulua.- Lehen sorospenetarako gaitasuna
16. artikulua.- Legean babesik ez duten ogibideetan jardutea
17. artikulua.- Lege-esparru erkidea. Leia librea
18. artikulua.- Beste estatu batzuetan lortutako prestakuntza profesionalak onartzea
19. artikulua.- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babestea
20. artikulua.- Plataforma birtualen edo informazio eta komunikazioaren teknologien bitartez ogibidean aritzea

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.- Dagokion elkargo-erakundearekin, kirol-federazioekin eta beste kirol-erakunde batzuekin lankidetzak mekanismoak

Bigarrena.- Kirolaren ogibideetan berdintasunari buruzko politikak

Hirugarrena.- Boluntarioen araubidean edo antzekoetan egindako jarduerak

Laugarrena.- Ogibideetara iritsi eta horietan jarduteko prestakuntzak egiaztatzea

Bosgarrena.- Prestakuntza berezia

Seigarrena.- Jarduera-mailak

Zazpigarrena.- Eskola-adinean dauden kirolariek jardueretan prestakuntza

Zortzigarrena.- Estatuak onartzen ez dituen kirol-modalitateetan prestakuntzak eta Estatuak prestakuntza-plana onartu gabe duen kirol-modalitateetan prestakuntzak

Bederatzigarrena.- Prestatu eta ikasteko nahiz prestakuntza dualerako kontratuak

Hamargarrena.- Kirol-teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren titulazioekiko prestakuntza baliokideak

Hamaikagarrena.- Zigor-ahalmena

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.- Legean eskatutako prestakuntzarik gabe ogibidean jardutea

Bigarrena.- Kirol-monitorearen, entrenatzailearen eta kirol-zuzendariaren ogibideetarako legea pixkana aplikatzea

Hirugarrena.- Elkargoko kide egitearen betebeharra

Laugarrena.- Lehen sorospenetan prestakuntza lortzearen eginbeharra ez betetzea

Bosgarrena.- Boluntarioak

Seigarrena.- Federazio-araudiak

Zazpigarrena.- Legea indarrean sartzean indarreko kontratuak

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA (125/2008 Dekretuak, uztailaren 1ekoak, kirol-eskolari buruzkoak, 25. artikuluko 1., 2. eta 3. ataletan eta maila bereko edo txikiagoko arau guztiek xedatutakoa, legean xedatutakoari kontra egiten badiote).

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.- Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 127. artikulua aldatzea.

Bigarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 128. artikulua aldatzea.

Hirugarrena.- Legea garatu eta aplikatzeko gaitze orokorra.

Laugarrena.- Kontzeptuak definitu eta ogibideen eremu materialak eta zereginak mugatzeko berariaz gaitzea.

Bosgarrena.- Prestakuntza berezia onartzen duen prozedurarako berariaz gaitzea.

Seigarrena.- Indarrean sartzea.

III.- GOGOETA OROKORRAK

Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da eta pertsonen prestakuntza nahiz garapen integrala lortzen eta bizi-kalitatea nahiz banan-banako eta gizarte-ongizatea hobetzen laguntzen du¹.

Gizarte-funtzioen artean, lehenik eta behin, osasuna eta bizimodu osasuntsuak sustatzen dituela azpimarra daiteke, bizi-itxaropena luzatzen eta horren kalitatea hobetzen laguntzen baitu. Era berean, gizarte-harremanak sustatu eta kohesioan laguntzen du, bere funtzio integratzailea garrantzitsua baita. Bestalde, orokorrean, jendeari eta, bereziki, eskola-adinekoei hezkuntza- eta kultura-baloreak transmititzeko bitartekoa da, bizikidetzen eta jokoaren erregelak errespetatzen erakusten baitu eta, aldi berean, ahalegin pertsonalaren eta kooperazioaren balorea bultzatzen baitu.

Horrengatik guztiaerengatik, gizarte-ikuspegitik, kirola herrialde guztietako herri-politiken agendan sartzen ari da. Gainera, ez da baztertu behar jarduera ekonomikoari, turismoari eta astialdiari ekarpenak egiten dizkiela.

Horrek guztiak kirola bere osotasunean interes publikoko zeharkako eremu bihurtzen du eta lege-antolamendua indarreko eskeei etengabe moldatu behar zaie, izaera dinamikoa kontuan hartuta.

Horretaz jakitun izanik, Eusko Legebiltzarrak, 2012ko otsailaren 9ko Osoko Bilkuraren saioan, *“Eusko Jaurlaritzari, Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoei buruzko Legeak aurrez ikusitako aginpide-esparruan, lege-proiektua aurkeztea eskatu zion, nahasitako eragile guztiekin elkarlanean kirolaren ogibide desberdinak arautzeko. Helburua kirolaren ogibideak, prestakuntza eta profesionalen gaikuntza, bakoitzaren gaitasun profesionalak eta lan-merkatuan jarduera-eremua zehaztea da, pertsonen segurtasuna eta osasuna antola daitezen”*.

Eta, testuinguru honetan, EGABk zer nahasitako eragileri kontsultatu zaion zalantzan jartzen du, hemen ordezkaturako erakunde batzuei, arau honetan interesa zutenei, ez baitzaie galdetu.

Guk iritzia emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko kirolaren ogibideetan sartu eta horietan aritzeko Lege Aurreproiektua aurkezten zaigu eta horrekin Gobernuak, 1. artikuluan xedatzen den bezala, *“kirolaren ogibide zehatzetara iritsi eta horietan aritzeko oinarritzko alderdiak antolatu nahi ditu. Hala, berariaz onartuko ditu ogibide horiek eta ogibide bakoitzari dagokion jarduteko eremu funtzional orokorra esleituko dio eta ogibideetara iristeko prestakuntza azalduko du”*. Arauak jardun profesionala hurrengo moduan definitzen du: *“kirolaren ogibideek berariazkoak dituzten zerbitzuak eskaintzea, ordainsariaren arabera horretan arautuak badaude. Boluntarioen, adiskidetasunaren, familiararteko harremanen edo antzekoen esparruan burututako jarduerak baztertzen dira”*.

Ekimen hau positiboki balioztatzen dugu. Izan ere, kulturaren, gizartearen eta osasunaren ikuspuntutik kirola egiteak duen garrantzia onartuta, praktikarekin zerikusia duten ogibide garrantzitsuenetan aritzen diren pertsonen eskatzen zaizkien baldintzak eta prestakuntza arautzen dira.

Zehatz-mehatz esanda, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babesteko duen funtzio garrantzitsua nabarmendu nahi dugu.

Aurreproiektuaren txosten osagarriak kirolaren sektorea orain arte lan-merkaturik irekienetarikoa izan dela onartzen du. Gainera, ogibide zehatzetan prestakuntza eta titulazio oso heterogeneoak zituzten pertsonen, prestakuntza oso urria zutenek edo prestakuntzarik gabekoek jardun dute. Ildo beretik, egin du bere 7/2004 irizpena Aholku Batzorde Juridikoak. Hari jarraiki, *“herri-agintariek ezin diote kirol-jardueraren segurtasunari bizkarra ematen jarraitu, aldi berean, sustapenaren eta hazkuntzaren mezua azalera badute. Gorputz-jarduera segurtasun-baldintzetan egin behar da eta oso zati garrantzitsua dago ikaste-maila desberdinetan eta gidatzen esku hartzen duten pertsonetan”*.

Kirolaren ogibide batzuen jardunak egiten dutenen segurtasunean eta kontsumitzaile nahiz erabiltzaileen eskubideetan duen eragina kontuan hartuta, lege-aurreproiektuak xedatutakoarekin bat (19. artikulua), lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzak, bere aginpideak erabiliz, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatuko ditu eta,

¹ 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kirolari buruzkoa, 2.1. artikulua.

horretarako, lege honek xedatutako kirol-ogibideetan aritzeko prestakuntzen eskakizunei dagokienez, honakoak eskatu ahal izango ditu: baimen-sistema egokiak, aitorten arduratsua, jakinarazpena, ebaluazioa, egiaztapena eta ikuskaritza.

Txosten osagarrian argudiatzen den bezala, pertsonen moldapen fisikoarekin zerikusia dagoen merkatua objektibotasunik edo oinarri zientifikorik ez duten mezuez zipriztindua dago. Horregatik, arau honek xedatutakoaren arabera, kideen gainean elkargo profesionalek duten diziiplina-ahalmena baztertu gabe, herri-administrazio aginpidedunek lege honetan araututako ogibideen eremuan zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsonen eta erakundeen publizitatea objektiboa, zuhurra eta egiazkoa izatea zainduko dute. Horrez gain, kirolarien osasunaren eta segurtasunaren kontra doazen kirol-praktikak ez dituzte sustatuko eta zorrotasunez errespetatuko dituzte jardueren oinarri zientifikoa eta preskripzioak, itxaropen faltsuak sortu barik. Hala, lege honen barruan dauden profesionalek ezingo dute osasunerako ondorio onuragarriak argi eta garbi ez dituzten kirol-jardueri buruzko publizitaterik egin.

Gainera, legearen eremuko profesionalek gutxieneko prestakuntza betetzen dutela bermatzeko, profesionalek zerbitzuak eskaintzeko kontratu guztiak idatziz legeztatuko dira eta aipatu profesionalen prestakuntza argi eta garbi egiaztatuko da. Modu horretan, kirolaren praktikan osasuna eta segurtasuna babestuko dira.

Araututako ogibideetan aritzeko eskatutako prestakuntza egiaztatzeari dagokionez, irizpen-aurreproiektuak 10. artikuluan ogibideetara iritsi eta horietan jarduteko ezinbesteko baldintza bezala, dagokion estatuko legeriak hala zehazten badu, elkargo profesionalaren kide izatea edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Profesionalen Erregistroan sartzea xedatzen du. Elkargoko kide egiteko baldintza bakarrik elkargo profesionala existitzen denean eska daiteke. Horrek erregistroari, informazio eta estatistikarako, elkargokideen zerrenda eskuratu beharko dio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Profesionalei buruzko Erregistroa publikoa izango da eta inskribatutako profesionalen izen eta abizenei buruzko informazioa eskainiko du. Halaber, titulazioak, ziurtagiriak edo antzeko dokumentuak, prestakuntza profesionala egiaztatzen dutenak, adieraziko ditu, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak hobe defendatzeko.

Nolanahi ere, positiboki balioztatzen dugu arau-proiektuak Gobernuari egindako eskea, hain zuzen ere, legeak araututako ogibideetara iristeko eta horietan jarduteko orduan tratu- eta aukera-berdintasunerako politikak sustatzea, gainerako herri-administrazioen, elkargo-erakundeen, kirol-federazioen eta antzeko erakundeen laguntzaz (Bigarren X.G.), kirol-ogibideetan aritzeko emakumezkoak ordezkaritza txikiagoa dutela kontuan hartuta.

IV.- GOGOETA BEREZIA

18. artikulua.- Beste estatu batzuetan lortutako prestakuntza profesionalak onartzea

Artikulu honen lehenengo atalak hurrengo xedatzen du: *“Europar Batasuneko estatu kideetan edo langileen zirkulazio librea, kokapen librea edo profesionalen zerbitzuen eskaintza librea aplikagarria den gainerako estatuetan lortutako prestakuntza profesionalak onartzeko, nazioarteko hitzarmenek eta Erkidegoko arauak xedatutakoari erreparatuko zaio, arloa arautzen badute. Halaber, antolamendu hori iraultzeko Estatuko xedapenak kontuan hartuko dira”*.

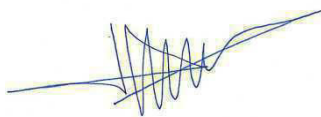
Ikuspegi formaletik, gure iritziz egokiagoa da Erkidegoko araudiari aipamena egin ordez, “europar araudiaz” hitz egitea.

11/15 IRIZPENA

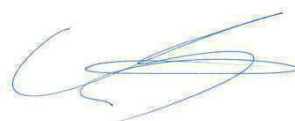
V.- ONDORIOA

Euskadiko EGABren ustez, “*Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-ogibideetara iristeko eta horietan jarduteko Lege Aurreproiektua*” izapidetzea egokia da, kontsulta-organo honek egin dituen gogoetekin.

Bilbon, 2015eko uztailaren 14an

A blue ink signature, appearing to be 'F. Huidobro', written in a cursive style.

O.E. Presidentea
Francisco José Huidobro Burgos

A blue ink signature, appearing to be 'E. Málaga', written in a cursive style.

Idazkari Nagusia
Emilia Málaga Pérez

XV

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO / KONTROL LEGE-EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA.

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **ANA CRISTINA ZABALA OCASAR**Fecha de la firma: **10/11/2015 8:56:07**Validación de la firma: **Correcta**Firmante: **FRANCISCO DE JAVIER LOSA ZIGANDA**Fecha de la firma: **10/11/2015 10:30:21**Validación de la firma: **Correcta****INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL
ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO**

Tramitagune DNCG-LEY-42126/2014-06

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico.

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones.

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente

INFORME**I. OBJETO**

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal, pretende la ordenación de los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a

cada profesión su correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y expresando la cualificación requerida para el acceso a tales profesiones.

Además, mediante la introducción de las Disposiciones Finales primera y segunda, se modifica la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, al objeto de introducir nuevas infracciones administrativas graves y muy graves.

Según la memoria que figura en el expediente *“el actual sistema deportivo vasco, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos documentos a lo largo de los últimos años, viene padeciendo la vieja problemática del ejercicio de actividades profesionales directamente vinculadas a la salud y a la seguridad de las y los deportistas sin control alguno y por personas carentes de una mínima formación (...) En este contexto, el anteproyecto tiene por objeto regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuales son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general”*

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA

El artículo 62 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, dispone que *“para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial”*.

El Parlamento Vasco, en sesión de 9 de febrero de 2012 instó al Gobierno Vasco *“a que presente, dentro del marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos, un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte, en colaboración con todos los agentes implicados, de tal forma, que se determinen las profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de ellas, su ámbito de actuación en el mercado laboral para organizar la seguridad y la salud de las personas”*

El Anteproyecto que ahora se tramita figura incluido en el listado correspondiente a “PROYECTOS LEGISLATIVOS”, cuya iniciativa se asigna al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, del Calendario Legislativo para la Legislatura 2012-2016 (Anexo I), aprobado por Consejo de Gobierno el 25 de junio de 2013, con

la denominación de “Ley sobre el ejercicio de Profesiones del Deporte del País Vasco”, cuya elaboración estaba prevista para el primer semestre de 2015.

El anexo II –Documento de fichas informativas- del citado acuerdo recoge lo siguiente:

20.- Ley sobre el ejercicio de Profesiones del Deporte en el País Vasco.

a.- Denominación: LEY SOBRE EL EJERCICIO DE PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.

b.- Objeto de la regulación propuesta con indicación de los sectores sociales que, en su caso, resulten afectados:

b.1.) Objeto principal de la regulación:

- Ordenar los aspectos esenciales del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando los títulos académicos necesarios para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.

- Se reconocen como profesiones del ámbito del deporte y se ordenan en la presente ley las siguientes:

a) Profesor o Profesora de Educación Física.

b) Monitor Deportivo o Monitora Deportiva Profesional.

c) Entrenador o Entrenadora Profesional de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.

d) Director Deportivo o Directora Deportiva.

b.2.) Otros objetivos:

Articular aquellas medidas necesarias para otorgar una razonable protección a las y los deportistas destinatarios de los servicios que prestan quienes ejercen las profesiones del deporte objeto de regulación. Y en este sentido la Ley:

a) Evita la infracualificación al vincular las profesiones del deporte a la posesión de adecuados títulos académicos y, asimismo, se evita la sobrecualificación estableciendo unos requerimientos formativos excesivos.

b) Impide que determinados profesionales realicen funciones propias de otra profesión para la que no están autorizados.

c) Establece la obligación de colegiación y, en consecuencia, somete a los profesionales del deporte a la potestad disciplinaria de los colegios profesionales por el incumplimiento de sus deberes.

d) Articula un conjunto de obligaciones y principios específicos de estos profesionales.

e) Establece obligaciones de aseguramiento de la responsabilidad civil.

f) Posibilita que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco requieran, en los equipamientos deportivos y la prestación de servicios, las titulaciones adecuadas.

b.3.) Sectores sociales implicados:

- Ciudadanía.

- Administración Vasca (Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura).

- Diputaciones Forales.

- Federaciones Deportivas.

- Ayuntamientos.

- Organizaciones colegiales representativas del sector.

- Centros educativos que imparten enseñanzas deportivas.

- Organizaciones relacionadas con la gestión de equipamientos y servicios deportivos.

c.- Estimación de la incidencia financiera:

Se determinará en la fase de estudio.

d.- Fecha aproximada de su presentación ante el Consejo de Gobierno y posterior remisión al Parlamento Vasco.

Primer semestre de 2015.

A su vez, el punto 5 del apartado 3, del anexo I al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2015 por el que se actualiza el calendario legislativo y se toma conocimiento del documento de seguimiento semestral correspondiente al primer semestre 2015, indica lo siguiente:

Proyecto de Ley sobre el ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco

A. Situación tramitación a 30 de junio de 2015: En fase de alegaciones e informes.

B. Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Segundo semestre de 2015.

En el citado contexto y al objeto de dar cumplimiento al compromiso y previsión recogidos en el calendario legislativo de referencia, se ha incoado el oportuno expediente habiéndose puesto a disposición de esta Oficina y remitido a la misma (a

través de la aplicación informática de tramitación electrónica Tramitagune DNCG-LEY-42126/2014-06), para la substanciación del trámite de control económico-normativo, la documentación que a continuación se relaciona:

1º.- Orden de 4 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se inicia el procedimiento de elaboración del texto correspondiente a la norma de referencia.

2º.- Memoria explicativa.

3º.- Memoria complementaria.

4º.- Borrador del Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco (24-11-2014).

5º.- Orden de 24 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aprueba previamente el texto correspondiente al Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

6º.- Informe previo y provisional del impacto en función del género de la norma proyectada.

7º.- Informe emitido por el Consejo Vasco del Deporte.

8º.- Resolución de 23 de enero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se somete a información pública el anteproyecto de ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco

9º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

10º.- Oficio del Departamento de Empleo y Políticas sociales indicando que no se realizan alegaciones al anteproyecto

11º.- Alegaciones formuladas por el Departamento de Salud.

12º.- Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia.

13º.- Informe de Emakunde.

14º.-Escritos de alegaciones presentados por distintos particulares y asociaciones.

15º.- Informe de la Asesoría Jurídica del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

16º.- Informe de valoración de las alegaciones recibidas y los informes realizados al anteproyecto de ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

17º.- Dictamen 11/15 del Consejo Económico y Social Vasco.

18º.- Borrador del Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco (03-06-2015).

19º.- Informe de evaluación de impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

20º.- Memoria económica.

21º.- Memoria de Tramitación del procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco.

22º.- Carátula de solicitud a la OCE para la substanciación del trámite de control.

III- ANALISIS

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de que esta Oficina materialice su actuación de control económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

A) Del procedimiento y la tramitación:

A1)- De la documentación remitida se desprende que en el procedimiento de elaboración del anteproyecto objeto de análisis se han cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente los requisitos que para la Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre.

A2)- En cualquier caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo prevenido en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, sometido con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha instancia consultiva.

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (según redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico).

Dicho lo cual y examinada la documentación remitida, esta Oficina procede a su actuación de control económico normativo y económico-organizativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuya tarea se circunscribe el presente informe.

B) Del texto y contenido

A lo largo del texto examinado son muchas las referencias que se hacen a un posterior desarrollo reglamentario. Así, entre otros aspectos, se pospone a un desarrollo posterior la regulación del Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco previsto en el artículo 10, las condiciones del aseguramiento de la responsabilidad civil, referidas en el artículo 13, las condiciones y el procedimiento para la acreditación de la formación en primeros auxilios del artículo 15, la determinación de los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes a los títulos oficiales y los certificados de profesionalidad (D.A. cuarta), el establecimiento de los términos en que quedarán habilitados para el desarrollo de las correspondientes profesiones quienes acrediten el desarrollo de forma habitual de las actividades de la ley, la implantación de los procedimientos para acreditar las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación, los plazos de acreditación (D.T. primera), entre otros aspectos. Se recomienda que, en atención al logro de una mayor seguridad jurídica, se sopesen la conveniencia de que en el propio texto legal se acote un plazo para la materialización del desarrollo reglamentario de aquellos aspectos que el propio proyecto prevé.

C) De la Incidencia organizativa.

C1).- La incidencia del proyecto en este aspecto supone la configuración de un dispositivo organizativo preciso para su operatividad, que comporta la creación de una nueva unidad administrativa –**Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco** –que no implica una nueva entidad con personalidad propia diferenciada.

La incidencia organizativa, pues, se circunscribe a la estructura de la Administración General de la Comunidad Autónoma sin afectar a ninguna de las entidades encuadradas en el sector público vinculado a la misma.

El artículo 10 del texto presentado introduce como novedad la creación de un registro público, que dependerá de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, si bien se deja para su desarrollo reglamentario la determinación de su estructura, funciones, régimen de publicidad y funcionamiento. Será requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la ley la inscripción en el citado registro salvo que sea obligatorio, porque así lo disponga la legislación estatal, la incorporación al colegio profesional correspondiente. La ley prevé en este último caso que el colegio correspondiente, facilite, con fines informativos y estadísticos al registro una lista de sus miembros colegiados.

La creación del expresado órgano se justifica en el expediente como necesaria para la efectiva aplicación de la regulación proyectada. Como ya se ha indicado, su conformación se remite a posteriores regulaciones reglamentarias sin que se acote el plazo en el que el Gobierno habrá de materializar la regulación que se le encomienda ya que el texto proyectado no establece marco temporal alguno para su realización.

C2).- Por último, con carácter más general cabe concluir que la creación de este registro, si bien se adscribe a una Dirección ya existente supondrán coste adicional para esta Administración, tal y como se especifica en la memoria económica, como más adelante se analizará.

D).- De la incidencia económico-presupuestaria

En este apartado se tratarán las cuestiones más directamente ligadas con el impacto del proyecto en los ingresos y gastos previstos, en otros aspectos económicos y en sus normas con repercusión económico-organizativa. El artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, exige para la emisión del informe de control económico normativo, la remisión de una memoria que, entre otras cosas, realice una cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasione la entrada en vigor de la norma; determine los modos de financiación de tales gastos; describa los

antecedentes y justifique la necesidad de la disposición; describa el programa económico presupuestario en el que se inserta la disposición, con identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados; realice una evaluación económica y social de su aplicación; y aporte cuantos datos, informes y estudios permitan conocer las líneas generales y los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta. Se trata, en definitiva, de que, dentro del proceso de reflexión previo a la aprobación de la norma, se realice una completa evaluación del impacto económico que comporta la regulación pretendida, y ello con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de economía y eficacia en el gasto público. Y de que se valore también la incidencia económica de la norma en los particulares y en la economía en general, a fin de garantizar su razonabilidad y viabilidad.

Por consiguiente, los contenidos exigidos a la memoria económica deben ser contrastados con la documentación que a este respecto obra en el expediente remitido a esta Oficina de Control Económico.

D1) En la vertiente del gasto la memoria económica que obra en el expediente agrupa los gastos relacionados con la ley en tramitación en dos bloques diferentes: nuevos gastos propios de la ley y gastos vinculados a partidas ya existentes en los presupuestos.

Dentro del primer apartado, nuevos gastos derivados directamente de la aprobación de la ley, la memoria adjunta el siguiente cuadro de financiación con un horizonte temporal de cinco ejercicios (2017-2021) y un incremento total de gasto para esta Administración de 651.000,00 euros.

		2017	2018	2019	2020	≥2021
GASTOS	Nuevos recursos humanos de gestión (1 técnico / 1 administrativo)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Difusión y documentación informativa (guía, folleto s, web, sesiones informativas)		10.000			
	Aplicación informática habilitaciones / registro profesionales		20.000			
	Tribunales reconocimiento de la experiencia y formación no formal (Deportes)	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Organización de formaciones de primeros auxilios	30.000	30.000			
	Servicio de inspección			15.000	15.000	15.000
	Servicio de asesoría jurídica (reglamentaciones)	18.000	18.000			
	Elaboración de informes/estudios de seguimiento para la aplicación progresiva		15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAL GASTOS	138.000	183.000	120.000	120.000	90.000

De acuerdo con la naturaleza del gasto, este se distribuirá entre gastos de personal (capítulo 1), gastos de funcionamiento (capítulo 2) e inversiones reales (capítulo 6).

- Respecto a la incidencia del anteproyecto en los recursos personales, el Departamento proponente indica que no cuenta con personal suficiente para la

implementación de la ley por lo que va a precisar de nuevo personal que realice las tareas de su puesta en marcha y posterior mantenimiento. Para ello, señalan, es necesario contar con un o una responsable del apartado técnico de la ley (gestor deportivo) y un o una administrativo. El artículo 6.1 a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública del País Vasco en relación con el artículo 16.a) Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia exige con carácter preceptivo el informe de la Dirección de Función Pública de los anteproyectos de ley en aspectos que afecten a materias de función pública. La ausencia de tal informe en el expediente examinado debe ser subsanada en el procedimiento al objeto de completar el expediente que se someta a consideración de Consejo de Gobierno.

- Los cambios que en el sector del deporte de la Comunidad Autónoma del País Vasco supondrá la entrada en vigor de la ley exigirá, a juicio del Departamento gestor, una serie de gastos con fines informativos y divulgativos que se estiman en 10.000,00 €. Para el año 2018. Estos gastos se destinarán a la elaboración de un manual, folletos informativos, página web y la contratación de dos campañas de difusión.
- La puesta en marcha del nuevo Registro de Profesionales del Deporte exige la elaboración de la aplicación informática específica que contemple la inscripción on line. Asimismo, se prevé el gasto en posibles actualizaciones e incorporación de nuevas funcionalidades. Este gasto se cuantifica en 20.000,00 €. en el ejercicio 2018.
- La memoria económica también contempla los gastos generados por los tribunales de reconocimiento de competencias que dice se constituirán por expertos y personal de la administración para valorar la experiencia y formación no formal en aquellos casos de formaciones oficiales del deporte que no están referidas al sistema de cualificaciones. La memoria valora en 30.000,00 € anuales el gasto de estos tribunales de reconocimiento. En cualquier caso, el abono de las asistencias a los miembros de los mismos deberá acomodarse a lo dispuesto por el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio. Cabe señalar al respecto que el texto examinado de la ley no prevé en ningún apartado la existencia de dichos tribunales y su única referencia aparece en la citada memoria económica, al objeto de cuantificar su coste.

- La memoria económica prevé un gasto de 60.000,00 € en la organización de cursos necesarios para obtener la cualificación en primeros auxilios con anterioridad al 1 de enero de 2019, fecha en la que según el artículo 15 en relación con la D.T. cuarta del anteproyecto, todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas, con presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas, deberán tener acreditada. Estos gastos se distribuyen en 30.000,00 € para 2017 y 30.000,00 € para 2018.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco establece en su artículo 119 que el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes ejercerá las funciones de inspección deportiva, controlando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia deportiva, especialmente el cumplimiento de aquellas que hacen referencia a los centros deportivos y a las titulaciones relativas al deporte. Según la memoria del Departamento, no existe en la actualidad constituido el servicio de inspección pero se prevé su creación antes del 1 de enero de 2019 por ser este el momento en el que se exige la obligatoriedad para los profesionales de contar con las cualificaciones correspondientes. Este servicio se cuantifica en 15.000,00 € anuales, si bien la memoria no especifica a que obedecen tales gastos.
- Se prevé un gasto anual de 18.000,00 € los ejercicios 2017-2018 destinado a contratar un servicio de asesoría externa para la elaboración de los reglamentos de desarrollo de la Ley ya que se indica por el Departamento, no es posible su realización por el personal propio dado el elevado número de reglamentos previstos.
- Por último, dentro de los gastos derivados directamente de la entrada en vigor de la ley, se incluye un gasto de 15.000,00 € anuales a partir de 2018 destinado a la elaboración de informes y estudios para la verificación constante del estado de cualificación de las personas que prestan sus servicios en el ámbito del deporte.

Los referidos gastos de personal, equipamiento y funcionamiento deberán presupuestarse en el ejercicio presupuestario que se prevea su ejecución. Para 2016, año en que previsiblemente entrará en vigor la ley, no se contempla gasto alguno en la memoria económica.

Dentro del segundo bloque de gastos previstos, están aquellos gastos vinculados a partidas ya existentes en el Departamento. En este apartado se recogen aquellos gastos relativos a la implantación del sistema de cualificaciones. La entrada en vigor de la ley obligará a orientar parte del presupuesto anual ya establecido para los mecanismos de acreditación de competencias y de certificados de profesionalidad hacia aquellos de la familia de las actividades físicas y el deporte. No se efectúa estimación del importe de estos gastos ni de que partidas presupuestarias se verían afectadas.

D2) En la vertiente del ingreso la incidencia se deriva del cobro de la tasa por acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación. El Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, arts. 95 decies a 95 quaterdecies establecen esta tasa. La memoria económica hace referencia a los importes actuales de la misma, pero hay que tener en cuenta que la Ley de Formación Profesional del País Vasco, actualmente en tramitación prevé un incremento de las cuotas de la tasa junto con la introducción de nuevas exenciones y bonificaciones.

Las cuantías de la tasa pasarán, de aprobarse la mencionada ley de Formación Profesional, de veinticuatro euros (24,00.-€) por inscripción en la fase de asesoramiento y doce euros (12,00.-€) por inscripción en cada unidad de competencia en la fase de evaluación de la competencia profesional a unas cifras que oscilan entre 60-110 euros para el primer concepto y entre 12 a 18 euros para el segundo.

En cualquier caso la memoria económica del departamento se limita a indicar que los ingresos obtenidos por la recaudación de estas tasas no alcanzan a cubrir los gastos pero no se incluye cuantificación al respecto ni de unos ni de otros.

En relación con la percepción de la Tasa por servicios administrativos como consecuencia del funcionamiento del Registro de Profesionales del Deporte del País Vasco (cuyo hecho imponible -según lo prevenido en el artículo 40.1. a), c) del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007- lo constituye la prestación por los Departamentos de la Administración General y sus organismos autónomos de los servicios administrativos de inscripción en registros y censos oficiales y expedición de copias auténticas, autenticadas) la memoria no efectúa

estimación alguna del mismo, extremo que debería subsanarse en la medida que ni en el artículo 44 del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, se establece como exención el relativo a los registros de referencia, ni en el proyecto se declara la gratuidad de la inscripción en el mismo.

Por otra parte, la nueva ley incrementa el catálogo de conductas que constituyen infracción administrativa, al modificar en este punto a la Ley del Deporte del País Vasco. En este punto, podría razonablemente deducirse algún incremento en los ingresos procedentes de las sanciones, si bien no consta en la documentación a la que ha tenido acceso esta Oficina, estimación al respecto.

D3) En cuanto el impacto económico para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general, la memoria incorporada al expediente no se ocupa de tales aspectos. Existe en el expediente una memoria de impacto en la empresa (exigida por el art. 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a Personas Emprendedoras y a la pequeña Empresa del País Vasco), en la cual se señalan dos obligaciones prevista en el proyecto en tramitación que tendrán repercusión de tipo económico para empresas y particulares. Por una parte, la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por daños que se causen a terceros con ocasión de la prestación de servicios profesionales (art. 13) y la obligación de acreditar la formación en primeros auxilios por todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en la ley con presencia física en el ejercicio de actividades deportivas, incluido el voluntariado. No obstante estos gastos no han sido evaluados.

D4) Se ha solicitado por parte de esta Oficina el correspondiente informe de la Dirección de Presupuestos, emitido el día 5 de noviembre, que como conclusión señala lo siguiente:

En el ejercicio 2016 podemos considerar que las actuaciones relacionadas con la Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, podrán ser asumidas con las dotaciones presupuestarias con las que cuenta el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, aunque para ese ejercicio no se concreta en qué créditos del Proyecto de Presupuestos Generales de la CAE se recogen las mismas.

En lo relativo al incremento planteado para los siguientes ejercicios, de 2017 a 2021, también consideramos que podrá ser asumido con las dotaciones presupuestarias con las que cuente el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para esos ejercicios. Adicionalmente, se precisa que la creación de nuevas dotaciones de personal se efectuará, en su caso, conforme a lo que establezca la ley de Presupuestos Generales de la CAE vigente ese momento.

En todo caso, cualquier necesidad adicional que pudiera resultar de la puesta en marcha y desarrollo de la ley deberá ser financiada con las oportunas reasignaciones de las dotaciones existentes en el Departamento.

Finalmente, resulta oportuno realizar la observación de que las previsiones contenidas en la memoria económica del anteproyecto de ley no deben implicar, en ningún caso, compromisos presupuestarios, aspectos éstos que sólo se recogen en los Presupuestos Generales anuales; por lo tanto, las dotaciones económicas anuales destinadas a su ejecución y desarrollo deberán acomodarse a lo que establezcan las leyes de Presupuestos Generales de la CAE.”

IV.- CONCLUSIÓN

Siendo lo expuesto cuanto cabe referir, se traslada el presente informe al Departamento remitente insistiendo en la necesidad de tomar en consideración las observaciones contenidas en el apartado III del mismo.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2015

Fdo. : Ana Zabala Ocasar

OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

VºBº

Fdo.: Javier Losa Ziganda

DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO

**KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA, EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI
BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA**Tramitagune espedientea DNCG-LEY-42126/2014-06

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia-kontrolari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak III. tituluko IV. kapituluaren arabera du ekonomiaren eta arauen kontrola. Derrigorrezko izaera du, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako kontrol-txostenaren bidez gauzatzen da.

Kontrol horren barnean sartzen da, ekonomiari eta antolaketari dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren organoen sorrerari eta ezabapenari dagokien fiskalizazioa, baita horien aldaketak eta berregituraketak ere.

Aipatutako arauan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren III. Kapituluen 3. Atalean eta Ogasun eta Finantza Sailaren egitura eta eginkizunak finkatzen dituen apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuaren 4. artikuluan xedatutakoa kontuan izanik, honako txosten hau eman da:

TXOSTENA**I. XEDEA**

Txosten honen helburua goiburuan epigrafiatutako proiektuaren ekonomiaren eta arauen kontrola egitea da. Hitzez hitz, kirolaren lanbide jakin batzuetan sartzeari eta jarduteari funtsezko alderdiak antolatu nahi ditu proiektu horrek, lanbide horiek zein diren espresuki onartuz, lanbide bakoitzari jarduteko dagokion funtzio-eremu orokorra esleitz eta lanbide horietan sartzeko eskatutako kualifikazioa zein den adieraziz.

Gainera, azken xedapenetatik lehena eta bigarrena sartuz, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea aldatu da, administrazioko arau-hauste larri eta oso larri berriak sartzeko.

Espedientean jasotako memoriaren arabera, *“azken urteotan hainbat dokumentutan agerian utzi denez, gutxieneko prestakuntzarik gabeko pertsona batzuek kirolarien*

osasunari eta segurtasunari zuzenean lotutako lanbide-jardueretan kontrolik gabe jardutearen aspaldiko arazoa pairatzen du egungo euskal kirol-sistemak (...) Testuinguru horretan, aurreproiektuak kirol-eremuaren berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzakoak diren zenbat alderdi arautzea izango du helburu, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer eremu funtzional orokor esleitzen zaion lanbide bakoitzari.”

II. AURREKARIAK ETA IGORRITAKO AGIRIAK

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 62. artikulua honako hau ezartzen du: *“kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu, sustapen eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute”.*

2012ko otsailaren 9ko bilkuran, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion *“kiroleko lanbideak arautzeko lege-proiektu bat aurkez dezala, Autonomia Estatutuan eta Lurralde Historikoen Legean aurreikusitako eskumen-esparruaren barruan eta inplikaturako eragile guztiekin lankidetzan arituz, halatan non zehaztu daitezkeen kiroleko lanbideak, kiroleko profesionalen prestakuntza eta trebakuntza, kirol-lanbide bakoitzaren eskumen profesionalak eta lan-merkatuan duten jarduera-eremua, era horretara bermatu ahal izateko pertsonen segurtasuna eta osasuna”*

Orain izapidetze-prozesuan dagoen aurreproiektua «LEGEGINTZAKO PROIEKTUAK» zerrendan agertzen da, eta hura abiarazteko ahalmena Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari dagokio. Gobernu Kontseiluak 2013ko ekainaren 25ean onartutako 2012-2016 legealdiko egutegiaren barruan dago (I. eranskina), «Kirol-lanbideak betetzearen gaineko Euskal Autonomia Erkidegoko Legea» izenarekin, 2015eko lehen seihilekorako egitekoa zena.

Aipatutako akordio horretako II. eranskinean –Fitxa informatiboen dokumentua–, honako hau jasotzen da:

20.- Kirol-lanbideak betetzearen gaineko Euskal Autonomia Erkidegoko Legea

a.- Izena: KIROI-LANBIDEAK BETETZEAREN GAINEKO EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO LEGEA

b.- Proposatzen den erregulazioaren helburua, eta gizarteko zein arlori eragingo dion, halakorik gertatzen bada:

b.1.) Erregulazioaren helburu nagusia:

- Kirol-lanbide jakin batzuetan aritzearen funtsezko alderdiak antolatzea, berariaz zehaztuz zein diren lanbide horiek, haietan aritzeko izan behar diren titulu akademikoak adieraziz eta lanbide bakoitzari dagokion funtzio-esparru orokorra egokituz

- Honako hauek kirolaren esparruko lanbideak direla onartu eta antolatu egiten dira lege honetan:

a) Gorputz Hezkuntzako Irakaslea.

b) Kirol-monitore profesionala.

c) Kasuan kasuko kirol-modalitate edo -diziplinako entrenatzaile profesionala.

d) Kirol-zuzendaria.

b.2.) Beste helburu batzuk:

Erregulatzen diren kirol-lanbideetan dihardutenen zerbitzuak hartzen dituzten kirolariei zentzuzko babesa emateko beharrezko neurriak antolatzea. Eta, alde horretatik, Legeak:

a) Kualifikazio apalegia saihesten du, kirol-lanbideak titulu akademiko egokiak izatearekin lotzen baititu, eta, era berean, gehiegizko prestakuntza-eskakizunak ezarriz neurriz gain kualifikatzea ere saihesten du.

b) Profesional jakin batzuek baimenik izan gabe beste lanbide bati dagozkion funtzioak betetzea eragozten du.

c) Kolegiatzeko betebeharra ezartzen du, eta, horrenbestez, kiroleko profesionalak elkargo profesionalen diziplina-ahalmenaren mende jartzen ditu dauzkaten betebeharrak ez betetzeagatik.

d) Profesional horien zenbait betebeharrak eta printzipio espezifiko zehazten ditu.

e) Erantzukizun zibila ziurtatzeko betebeharrak ezartzen ditu.

f) Kirol-ekipamenduetan eta zerbitzuak ematean titulazio egokiak eskatu ahal izateko aukera ematen die Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioei.

b.3.) Eraginpeko gizarte-sektoreak:

- Herritarrak.

-EAEko administrazioa (Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila).

- Foru Aldundiak.

- Kirol-federazioak.

- Udalak.

- Sektorea ordezkatzeko duten elkargo-erakundeak.

- Kirolak irakasten dituzten ikastetxeak.

- Kirol-ekipamenduak eta -zerbitzuak kudeatzearekin zerikusia duten erakundeak.

c.- Finantzetan ustez izango duen eragina:

Aztertzealdian zehaztuko da.

d.- Noiz aurkeztuko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, eta, jarraian, Eusko Legebiltzarrari.

2015eko lehen seihiilekoan.

Bestetik, legegintza-egutegia eguneratzeko eta egutegi horren 2015eko lehenengo seihiilekoaren jarraipen-dokumentua ezagutzeko 2015eko uztailaren 27ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiak honako hau dio I. eranskinaren 3. atalaren 5. puntuan:

Kirol-lanbideak betetzearen gaineko Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen proiektua

A. Izapidetze-egoera 2015eko ekainaren 30ean: Alegazioak aurkeztu eta txostenak prestatzeko fasean dago.

B. Noiz bidali zitzaion, gutxi gorabehera, Jaurlaritzaren Kontseiluari: 2015eko bigarren seihiilekoan.

Testuingurua halakoa izanik eta aipatutako legegintzako egutegian jasotako konpromisoa eta aurreikuspena betetze aldera, dagokion espediente egin eta Bulego honetara bidali da (DNCG-LEY-42126/2014-06 Tramitagune izapide elektronikoak egiteko aplikazio informatikoaren bidez), horren gaineko ekonomia- eta arau-kontrola egiteko izapidea bideratzeko, honako dokumentazio hau, kronologikoki ordenatuta:

1.- Agindua, 2015eko azaroaren 4koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, erreferentzia-arauari dagokion testua egiteko prozedurari ekitekoa.

2.- Azalpenezko memoria.

3.- Memoria osagarria.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektuaren zirriborroa (2014-11-24).

5.- Agindua, 2014ko azaroaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Lege Aurreproiektuari dagokion testua aldeztu aurretik onartzen duena.

- 6.- Generoaren arabera eraginaren aurretiazko eta behin-behineko txostena, proiektatutako arauarena.
- 7.- Kirolaren Euskal Kontseiluak emandako txostena.
- 8.- Ebazpena, 2015eko urtarrilaren 23koa, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektua jendaurrean jartzen duena.
- 9.- Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren txostena.
- 10.- Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ofizioa, aurreproiektuaren aurkako alegaziorik ez dela aurkeztu adierazten duena.
- 11.- Osasun Sailak egindako alegazioak.
- 12.- Lehiaren Euskal Agintaritzaren txostena.
- 13.- Emakunderen txostena.
- 14.- Hainbat partikular eta elkarte aurkeztutako alegazioen idazkiak.
- 15.- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Aholkularitza Juridikoaren txostena.
- 16.- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektuak jasotako alegazioak eta aurreproiektuari buruz egindako txostenak balioesteko txostena.
- 17.- 11/15 Irizpena, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena.
- 18.- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektuaren zirriborroa (2015-06-03).
- 19.- Enpresak eratzean, abian jartzean eta funtzionamenduan eragina ebaluatzeko txostena.
- 20.- Memoria ekonomikoa.
- 21.- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektua egiteko prozedura izapidetzeko memoria.
- 22.- Kontrol-izapidea bideratzeko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari egindako eskaeraren karatula.

III. ANALISIA

Bidalitako agiriak aztertu ondoren, uste dugu bat datozela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomia-kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuko 42. artikuluko aurreikuspenekin, eta agiri horiek informazio nahikoa biltzen dutela bulego honek ekonomiaren eta arauen kontrola egin dezan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeko 25., 26. eta 27. artikuluen arabera.

A) Prozedura eta izapidetzea:

A1)- Helarazitako dokumentaziotik ondorioztatzen da azterketaren xede den aurreproiektua egiteko prozeduran Xedapen Orokorrak Egiteko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak eskatutako betekizunak arrazoiz bete direla gaur arte.

A2)- Edonola ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorritz, aurreproiektua aholku-erakunde horren irizpen pean jarri behar da onartu aurretik.

Horren ildotik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorritz (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen azken xedapenetatik lehenean emaniko idazketaren arabera), Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi egin behar zaizkio lege-aurreproiektuetan eta arauzko xedapenen proiektuetan sartzen diren aldaketak, horiek Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren iradokizun eta proposamenen ondorio direnean (horretarako, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendariaren 2005eko urriaren 14ko 2/2005 zirkularrean aurreikusitakoa bete beharko da).

Hori guztia aipatuta, eta bidalitako dokumentazioa aztertuta, Bulego honek ekonomia- eta arau-kontrola nahiz ekonomia- eta antolamendu-kontrola egingo ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.etik 27.era bitarteko artikuluetan ezarritakoari jarraiki. Txosten honen zeregina, hain zuzen ere, hori da.

B) Testua eta edukia

Aztertutako testuan asko dira ondorengo arauzko garapenari buruz egindako aipamenak. Hala, besteak beste, honako gai hauek geroko utzi dira, aurrerago garatzeko alegia: Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko

Erregistroaren erregulazioa (10. artikulua), erantzukizun zibila bermatzeko baldintzak (13. artikulua), lehen laguntzetako prestakuntza egiaztatze baldintzak eta prozedura (15. artikulua), titulu ofizialez eta profesionaltasun-ziurtagiriez bestelako bideen bitartez jasotako kualifikazioak egiaztatze kasu, baldintza eta prozedurak zehaztea (laugarren xedapen gehigarria), legean bildutako jardueretan jardun ohi dutela egiaztatzen dutenak dagozkien lanbideetan aritzeko baldintzak zein izango diren ezartzea, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez formaleen bitartez jasotako gaitasunak egiaztatze epeak (lehen xedapen iragankorra). Segurtasun juridiko handiagoa lortzeko gure ustez komenigarria litzateke lege-testuak epe bat mugatzea proiektuan aurreikusitako gaien arauzko garapena gauzatzeko.

C) Antolamenduaren gaineko eragina.

C1).- Ildo horretan, proiektuak antolamendu-sistema zehatza ekarriko du berekin, eraginkortasuna bermatuko duena, eta horretarako administrazio-unitate berri bat sortuko da **–Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa–**. Nolanahi ere, horrek ez du nortasun propio bereziko erakunde berri bat ekarriko.

Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egiturari eragiten dio antolamendu horrek, hari lotutako sektore publikoan bildutako erakundeak alde batera utzita.

Aurkeztutako testuaren 10. artikulua erregistro publiko baten sorrera proposatu du, Eusko Jaurlaritzan kirol-alorrean eskumenekoa den Zuzendaritzaren mendean egongo dena, baina haren egituraren, eginkizunen, publizitate-araubidearen eta funtzionamenduaren inguruko erabakiak arauzko garapenerako utzi dira. Legean araututako lanbideetan sartu eta jarduteko ezinbesteko betekizuna izango da erregistro horretan izena ematea, estatuko legea betez dagozkion lanbide-elkargoan sartzea nahitaezkoa den kasuetan izan ezik. Azken kasu horretan legeak aurreikusten du dagozkion elkargoak erregistroaren eskura elkargokideen zerrenda jartzea, informazio-eta estatistika-xedeetarako.

Aipatu organoaren sorrera justifikatzeko, espedientean adierazten da beharrezkoa dela proiektatutako erregulazioa benetan aplikatzeko. Aldez aurretik adierazi dugunez, organo hori eratze dagozkion arauzko erregulazioak gauzatu beharko dira, eta Gobernuari ez zaio mugatu agindutako erregulazioa gauzatzeko epe bat, proiektatutako testuak ez duelako hori egiteko denbora-esparrurik ezarri.

C2).- Azkenik, beste ondorio orokorrago bat atera dezakegu: erregistro hori sortzeak lehendik dagoen Zuzendaritza bati atxiki bazaio ere, kostu osagarri bat ekarriko dio Administrazioari, memoria ekonomikoan zehaztu eta aurrerago aztertuko dugunez.

D).- Eragina ekonomian eta aurrekontuetan

Atal honetan landuko ditugu proiektuak beste alor batzuetan (aurreikusitako diru-sarrera eta gastuetan, beste alderdi ekonomiko batzuetan eta antolamenduan edo ekonomian eragina duten arauetan) izango duen eraginarekin lotutako gaiak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eremuaren barruan barne-kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuko 42. artikulua ezarritakoaren arabera, ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko txostena emateko, ezinbestekoa da honako hauek zehazten dituen memoria bidaltzea: araua indarrean jartzeak ekarriko dituen aurrekontuetako gastuak eta diru-sarrerak; gastu horiek finantzatzeko moduak; xedapenaren aurrekariak eta justifikazioa; xedapena txertatuko den aurrekontuko programa ekonomikoa, helburuak, ekintzak eta adierazleak adierazita; araua aplikatzeak ekonomian eta gizartean izango duen eraginaren ebaluazioa; aplikatu osteko ebaluazio ekonomikoa eta soziala; proposatzen den arauaren ildo nagusiak eta oinarri juridikoak ezagutzeko behar diren datu, txosten eta azterlan guztiak. Laburbilduz, araua onartu aurreko hausnarketa-prozesuan ondorio ekonomiko guztiak ebaluatu behar dira, gastu publikoan ekonomia- eta eraginkortasun-printzipioak betetzen direla bermatzeko. Eta arauak partikularren gain eta ekonomian, oro har, izango duen eragina ere balioetsi behar da, bideragarritasuna eta zentzuzkotasuna bermatzearren.

Ondorioz, memoria ekonomikoak bildu beharreko edukiak alderatu egin behar dira Kontrol Ekonomikoko Bulegoari igorritako espedientean ageri den dokumentazioarekin.

D1) Gastuari dagokionez, espedientean jasotako memoriaren barruan, izapidetzen ari den legearekin zerikusia duten gastuak bildu dira, bi bloketan banatuta: legearen gastu propio berriak eta aurrekontuetan lehendik dauden partidekin lotutako gastuak.

Lehen atalaren barruan, legea onartzetik zuzenean eratorritako gastu berriak bildu dira, eta horiei dagokienez memoriak honako finantziazio-koadro hau erantsi du bost ekitalditarako (2017-2021), Administrazioarentzat gastu-igoera guztira 651.000,00 izango delarik.

		2017	2018	2019	2020	≥2021
GASTOS	Nuevos recursos humanos de gestión (1 técnico / 1 administrativo)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Difusión y documentación informativa (guía, folleto s, web, sesiones informativas)		10.000			
	Aplicación informática habilitaciones / registro profesionales		20.000			
	Tribunales reconocimiento de la experiencia y formación no formal (Deportes)	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Organización de formaciones de primeros auxilios	30.000	30.000			
	Servicio de inspección			15.000	15.000	15.000
	Servicio de asesoría jurídica (reglamentaciones)	18.000	18.000			
	Elaboración de informes/estudios de seguimiento para la aplicación progresiva		15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAL GASTOS	138.000	183.000	120.000	120.000	90.000

Gastuak honela banatuko dira: langile-gastuak (1. kapitulua), funtzionamendu-gastuak (2. kapitulua) eta benetako inbertsioak (6. kapitulua).

- Aurreproiektuak baliabide pertsonaletan nola eragingo duen aztertuko dugu jarraian, eta zentzu horretan aipatzekoa da proposamena egin duen Sailak adieraziz duela legea abiarazteko behar adina langile ez duela, eta horrenbestez langile berriak beharko dituela, abian jartzeko eta ondorengo mantentze-lanen ardura hartzeko. Diotenez, horretarako beharrezkoa da kirol-kudeatzaile bat edukitzea, legearen atal teknikoaren ardura hartuko duena, baita administrari bat ere. Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 6.1.a) artikulua ezartzen du, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 16a) artikuluari dagokionez, nahitaezkoa dela Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak lege-aurreproiektuei buruzko txostena ematea funtzio publikoko gaitan eragina duten alderdietan. Aztertutako espedientean txosten hori ez da jaso, eta hori zuzendu behar da prozeduraren esparruan, Jaurlaritzaren Kontseiluari onartzeko helaraziko zaion espedientea osatzeko.

- Legea indarrean hasteak aldaketa batzuk eragingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko kirolaren sektorean, eta Sail kudeatzailearen iritziz horrek 10.000,00 €-ko gastuak ekarriko ditu, gutxi gorabehera, informazio- eta dibulgazio-xedeetarako. 2018. urterako. Izan ere, eskuliburu bat, informazio-liburuxkak eta webgunea sortu beharko dira, eta bi zabalkunde-kanpaina kontratatu.

- Kirol-arloko Profesionalen Erregistro berria abian jartzeko, informatika-aplikazio espezifikoak egin beharko da, on-line izen-ematea eta guzti. Gainera, egin litezkeen eguneratzeetan eta funtzionalitate berrietan gastatu beharra aurreikusten da. 2018ko ekitaldian gastu hori 20.000,00 € izango dela kalkulatu da.

- Memoria ekonomikoan aintzat hartu dira, halaber, gaitasunak onartzeko epaitegiek sortutako gastuak, administrazioako langile eta adituek epaitegi horiek

osatuko dituztelarik esperientzia eta prestakuntza ez-formala balioesteko kualifikazio-sistemarekin zerikusirik ez duten kirol-prestakuntza ofizialetan. Memoriaren arabera, gaitasunak onartzeko epaitegi horiek 30.000,00 €-ko gastua izango dute urtean. Edozein kasutan, epaitegi horietako kideei laguntzak ordaintzeko, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan ezarritakoa bete beharko da. Horri dagokionez aipatzekoa da aztertutako lege-testuan ez dela inon ere aurreikusten epaitegi horiek egon zitezkeenik, aipamen bakarra aipatutako memoria ekonomikoan agertu baita, haren kostua zenbatzeko asmoarekin eginda.

- Memoria ekonomikoak 60.000,00 €-ko gastua aurreikusten du lehen laguntzetako kualifikazioa lortzeko behar diren ikastaroak antolatzeko 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen, eta egun horretan, aurreproiektuaren laugarren Xedapen Iragankorrari lotutako 15. artikuluaen arabera, araututako lanbideetako batean diharduten pertsona guztiek kualifikazio hori egiaztatu beharko dute, baldin eta kirol-jardueretan presentzia fisikoa badute. Gastu horiek honela banatu dira: 30.000,00 € 2017. urterako eta 30.000,00 € 2018. urterako, hurrenez hurren.

- Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 119. artikulua ezartzen duenez, kirol-arloan eskumenekoa den Eusko Jaurlaritzaren Sailak kirol-ikuskapeneko eginkizunak beteko ditu, kirol-arloko legezko eta arauzko xedapenak betetzen direla kontrolatuz, bereziki kirol-zentroei eta kirolari dagozkion titulazioei dagokienez. Sailaren memoriaren arabera, orain artean ez da inolako ikuskapen-zerbitzurik eratu, baina aurreikusita dago 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen zerbitzu hori sortuko dela, une horretatik aurrera profesionalei nahitaez eskatuko zaielako dagozkien kualifikazio guztien jabe izatea. Zerbitzu hori 15.000,00 € izango da urtean, baina memoriak ez du zehazten gastu horiek zeren ondorio izango diren.

- 2017-2018 ekitaldietarako 18.000,00 €-ko gastua aurreikusten da urtean kanpo-aholkularitzako zerbitzu bat kontratatzeko, legea garatzeko erregelamenduak egin ditzan, Sailak adierazi duenez ezinezkoa delako Sailaren langileek egitea, erregelamendu kopuru handia beharko dela aurreikusten delako.

- Azkenik, legea indarrean hasteren ondorioz zuzenean eratorritako gastuen barruan, 2018tik 15.000,00 €-ko gastu bat izango da urtean hainbat txosten eta

azterlan lantzeko, eta horrela, kirolaren eremuan zerbitzuak ematen dituzten pertsonen kualifikazio-egoera etengabe egiaztatzeko.

Langileei, ekipamenduei eta funtzionamenduari buruzko gastu horiek aurrekontu batean bildu baino lehen, gastuak noiz egikarrituko diren aurreikusiko da, eta ekitaldi horri dagokion aurrekontuan bilduko dira jarraian. Aurreikuspenen arabera legea 2016an hasiko da indarrean, eta urte horretarako memoria ekonomikoan ez da gastu bat ere aintzat hartu.

Aurreikusitako bigarren gastu-blokearen barruan, Sailean lehendik dauden partidei lotutako gastuak daude. Kualifikazioen sistemaren ezarpenari dagozkion gastuak bildu dira atal horretan. Gaitasunak eta profesionaltasun-ziurtagiriak egiaztatzeko mekanismoetarako urteko aurrekontua ezarrita dago jada, eta, legea indarrean hastearekin batera, aurrekontu horren zati bat jarduera fisikoen eta kirolaren familiako mekanismoetarako gorde beharko da, ezinbestean Gastu horiek zenbatekoak izango diren ez da kalkulatu, ezta aurrekontuko zer partidatan eragingo luketen ere.

D2) Diru-sarrerei dagokienez, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez jasotako lanbide-gaitasunak egiaztatzeagatiko tasa kobratzetik eratorritakoak hartuko dira aintzat. Irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez (95 decies - 95 quaterdecies artikulua) onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bateginak ezarri du tasa hori. Memoria ekonomikoak haren egungo zenbatekoak hartzen ditu aintzat, baina kontuan hartzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko Legeak, une honetan izapidetzen ari denak, tasaren kuota igotzea aurreikusten duela, salbuespen eta hobari berriak sartzearekin batera.

Lanbide Heziketari buruzko Lege hori onartuz gero, tasaren zenbatekoak aldatuko dira. Une honetan, hogeita lau euroko tasa (24,00.-€) ordaintzen da aholkularitza-fasean izena emateagatik, eta hamabi euro (12,00.-€) gaitasun-unitate batean izena emateagatik lanbide-gaitasuna ebaluatzeko fasean. Aurrerantzean, berriz, 60-110 euro izango dira lehen kontzepturako, eta 12-18 euro bigarrenerako, hurrenez hurren.

Edozein kasutan, sailaren memoria ekonomikoak bakar-bakarrik adierazten du tasa horiek biltzeagatik lortutako diru-sarrerekin ezinezkoa dela gastuak estaltzea, baina bateko eta besteko zenbatekoak zehaztu gabe.

Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren funtzionamenduaren ondorioz administrazio-zerbitzuengatik tasa jasotzeari dagokionez (1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bateginaren 40.1. a), c) artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Administrazio Orokorraren sailek eta haien erakunde autonomoek erregistro eta errolda ofizialetan izena emateko eta benetakotzat egiaztatutako benetako kopiak egiteko emandako administrazio-zerbitzuek osatzen dute zerga-egitatea), memoriak ez du diru-sarrera horren inguruko inolako kalkulurik egin, eta hori zuzendu beharko litzateke, batetik 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bateginaren 44. artikuluan erregistro horiei dagokiena ez delako salbuespentzat jotzen, eta, bestetik, proiektuan ez delako adierazi erregistro horretan izena ematea doakoa denik.

Bestetik, administrazioko arau-haustea dakarten jokabideen katalogoa zabaltzen du lege berriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolaren Legea aldatzen duelako puntu horretan. Ildo horretan, arrazoizkoa litzateke zehapenetatik eratorritako diru-sarreretan igoeraren bat ondorioztatzea, baina esan beharra dago Bulego honi iritsi zaion dokumentazioan ez dela horrelakorik jaso.

D3) Beste Administrazio Publiko batzuetarako, partikularrentzako eta oro har ekonomiarako eragin ekonomikoari dagokionez, espedienteari erantsitako memoriak ez ditu alderdi horiek aintzat hartu. Espedientean jaso den memoria batek enpresan izango duen eragina aztertu du (Euskal Autonomia Erkidegoko ekintzaileei eta enpresa txikiei laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikulua eskatzen du), eta izapidetze-proiektuan aurreikusitako bi betebeharrak jaso dira memoria horretan, enpresa eta partikularrentzat eragin ekonomikoa izango dutenak. Batetik, erantzukizun zibileko aseguru bat sinatu behar da, zerbitzu profesionalak ematean hirugarrenei eragindako kalteen ordaina estaltzeko (13. artikulua), eta, bestetik, legean araututako lanbideetako batean diharduten pertsona guztiek, boluntarioak barne, lehen laguntzetako prestakuntza egiaztatu behar dute, baldin eta kirol-jardueretan jardutean presentzia fisikoa badute. Nolanahi ere, gastu horiek ez dira ebaluatu.

D4) Bulego honek Aurrekontu Zuzendaritzari azaroaren 5ean emandako txostena eskatu dio, eta hona hemen txosten horren ondorioak:

Esan dezakegu 2016ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearekin zerikusia duten jardunak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren kontura dauden aurrekontu-hornidurekin estal daitezkeela, nahiz eta ekitaldi horretarako ez den zehaztu hornidura horiek EAEko aurrekontu orokorren proiektuaren zer kreditutan dauden jasota.

Bestetik, 2017tik 2021era bitarteko ekitaldietarako planteatutako igoera ere Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ekitaldi horietarako dauzkan aurrekontu-hornidurekin estal litekeela iruditzen zaigu. Gainera azpimarratu behar da langile-hornidura berriak sortu behar izanez gero, une horretan indarrean dagoen EAEko Aurrekontu Orokorren Legean ezarritakoaren arabera egingo dela.

Nolanahi ere, legea abian jarri eta garatzearen ondorioz erator litekeen edozein premia osagarri finantzatzeko, Sailaren eskura dauden horniduren berresleipenetara jo beharko litzateke.

Azkenik beste ohar bat egin behar dugu: aurreproiektuaren memoria ekonomikoan bildutako aurreikuspenek ez dute aurrekontu-konpromisorik ekarri behar, inondik inora, horrelako gaiak urteko aurrekontu orokorretan baino ez direlako jasotzen; hortaz, haiek egikaritzeko eta garatzeko urteko hornidura ekonomikoak egokitu beharko dira EAEko Aurrekontu Orokorren Legeetan jasotako xedapenetara."

IV.- ONDORIOA

Aipatu beharreko guztia adierazi dugu honenbestez, eta jarraian txosten hau dagokion Sailaren esku jarriko dugu, haren III. atalean jasotako oharrek bereziki kontuan hartzekoak direla azpimarratuta.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 9a.

Sin.: : Ana Zabala Ocasar

KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA

O.E.

Sin: Javier Losa Ziganda

KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOKO ZUZENDARIA



XVI

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA
ASESORA DE EUSKADI /
EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN
IRIZPENA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.



FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA-COMISION JURIDICA ASESORA**

Fecha de la firma: **05/02/2016 11:10:00**

Validación de la firma: **Correcta**

**SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y
CULTURA**

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en la sesión del día 3 de febrero de 2016, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº 193/2015, relativa al **anteproyecto de Ley sobre sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco** (Ref.: DNCG_LEY_42126/2014_06).

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Zubizarreta Arteche.

PRESIDENTE:

D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:

D. Xabier Unanue Ortega.

VOCAL:

D^a M^a Teresa Astigarraga Goenaga.
D. Luis M^a Eskubi Juaristi.
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.
D^a Fátima Saiz Ruiz de Loizaga.
D. Gorka Erlantz Zorrozuza Aierbe.
D. Imanol Zubizarreta Arteche.
D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.
D. Iñaki Calonge Crespo.

SECRETARIO:

D. Jesús M^a Alonso Quilchano.

DICTAMEN N° 12/2016

ÍNDICE

ANTECEDENTES	2
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO	4
ASPECTOS COMPETENCIALES	11
MARCO NORMATIVO	17



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN	20
ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO	27
I Observaciones generales	27
A) Profesiones tituladas y profesiones reguladas:	29
B) El libre acceso a la realización de actividades y prestación de servicios:	34
C) La adecuación a los principios de buena regulación: simplicidad y seguridad jurídica:	40
II Observaciones sobre el articulado	42
A) Artículo 1. El Objeto y ámbito de aplicación:	42
B) Artículo 9. Reserva de denominaciones:	43
C) Artículo 11. Deberes en el ejercicio profesional:	43
D) Competencia en materia de primeros auxilios. Artículo 15 y disposición transitoria cuarta:	44
E) Artículo 16. Ejercicio de las profesiones sin amparo en la ley:	46
F) Actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas:	49
G) Formación específica. Disposición adicional quinta:	50
H) Disposición adicional séptima. Formación en actividades con deportistas en edad escolar:	51
I) El régimen transitorio:	51
Disposición transitoria primera. Ejercicio profesional sin cualificación requerida:	51
Disposición transitoria sexta. Reglamentaciones federativas:	53
Disposición transitoria séptima. Contratos vigentes a la entrada en vigor de la Ley:	53
J) Disposiciones finales. La modificación de la LDP:	54
III Otras observaciones de técnica legislativa	55
CONCLUSIÓN	56

ANTECEDENTES

1. Por Orden de 1 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, con entrada en esta Comisión el mismo día, se somete a dictamen el anteproyecto de ley señalado en el encabezamiento.
2. Integran el expediente remitido, además del texto del propio anteproyecto y de actos de comunicación, los siguientes documentos:
 - a) Orden de 4 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se inicia el procedimiento de elaboración del texto correspondiente a la norma de referencia.
 - b) Memoria explicativa.
 - c) Memoria complementaria.



- d) Orden de 24 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aprueba previamente el texto correspondiente al anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.
- e) Informe previo y provisional del impacto en función del género de la norma proyectada.
- f) Informe emitido por el Consejo Vasco del Deporte.
- g) Resolución de 23 de enero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco
- h) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.
- i) Oficio del Departamento de Empleo y Políticas Sociales indicando que no se realizan alegaciones al anteproyecto.
- j) Alegaciones formuladas por el Departamento de Salud
- k) Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia.
- l) Informe de Emakunde.
- m) Escritos de alegaciones presentados por
 - Asociación guipuzcoana de empresas gestoras de servicios y equipamientos deportivos.
 - Federación vasca de deportes aéreos.
 - Diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
 - Kirol Management, S.L.U.
 - AKTIBA, Asociación de empresas de turismo activo de Euskadi.
 - KAIT (Kirol arlorako iritzi taldea – Asociación de gestores del deporte del País Vasco).
 - Centro de formación profesional Harrobia.
 - Alegaciones a título particular de don Asier Riaño Torre.
- n) Informe de la Asesoría jurídica del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.



- o) Informe de valoración de las alegaciones recibidas y los informes realizados al anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.
- p) Dictamen 11/15 del Consejo Económico y Social Vasco
- q) Informe de evaluación de impacto en la constitución puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.
- r) Memoria económica.
- s) Memoria de tramitación del procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte del País Vasco.
- t) Carátula de solicitud a la Oficina de Control Económico (OCE) para la substanciación del trámite de control.
- u) Informe de la OCE.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

- 3. Este dictamen se emite de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (LCJAE), que incluye en su apartado a), dentro del ámbito de la función consultiva de la Comisión, los “anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos”.

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO

- 4. El anteproyecto de ley sometido a nuestra consideración tiene por objeto regular los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, identificando cuáles son tales profesiones y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional, así como la cualificación requerida para su ejercicio.
- 5. Además de la exposición de motivos, consta de veinte artículos, once disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
- 6. La exposición de motivos, tras exponer los títulos competenciales en los que se apoya el anteproyecto, recuerda lo establecido en el artículo 62 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco (LDPV), según el cual, para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. Recuerda igualmente la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales (LEPT).



7. En cuanto al ejercicio del deporte, reconoce que, de un tiempo a esta parte, ha ganado muchas posiciones en las sociedades postindustriales por su evidente contribución a la salud de las personas. Como señala, “La sociedad vasca no se escapa a esta realidad. Y, desde ese punto de vista, el deporte como fuente de salud está siendo incluido en la agenda de las políticas públicas de todos los países del mundo desarrollado y emergente; todo ello sin menoscabo de su contribución a la formación en valores y a la educación, a la actividad económica, al turismo y al ocio responsable, lo que convierten al deporte en un ámbito transversal de interés público en toda su magnitud y que precisa una continua adaptación del ordenamiento jurídico a los requerimientos vigentes habida cuenta de su carácter dinámico.”
8. Alude también al Plan vasco del deporte 2003-2007, en el que ya se denunciaba una percepción general de falta de regulación profesional, que ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación.
9. Con relación a la necesidad de la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte, cita la Sentencia 194/1998, de 1 de octubre, del Tribunal Constitucional (STC), en la que se establece que “la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte (artículo 43.3 de la CE) y que tales actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo 43.3 CE, de suerte que no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas”.
10. En ese contexto, el anteproyecto trata de regular los aspectos esenciales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito del deporte, estableciendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general.
11. En cuanto al articulado, el artículo 1 se refiere al objeto y ámbito de aplicación. Además del objeto ya adelantado, establece el ámbito refiriéndose al acceso y ejercicio profesional de forma habitual en el ámbito territorial del País Vasco. Incluye también en su ámbito de aplicación el ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información, así como las actividades que quedan expresamente excluidas de su ámbito.
12. A los efectos de esta ley, el término deporte incluye todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles. Tal concepto



engloba todas las manifestaciones físico-deportivas contempladas en la legislación deportiva y no se ciñe a las modalidades y disciplinas reconocidas oficialmente.

13. El artículo 2 establece las profesiones propias del deporte, el ámbito funcional general y cualificaciones de las mismas. Las profesiones incluidas son cuatro: profesor o profesora de educación física; monitor deportivo o monitora deportiva; entrenador o entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente y; director deportivo o directora deportiva.
14. El artículo 3 se refiere a la profesión de profesor o profesora de educación física, la cual permite impartir educación física en los correspondientes niveles de enseñanza y realizar todas las funciones instrumentales o derivadas previstas en la legislación educativa. Quedan fuera del ámbito de esta profesión las actividades profesionales de profesor en materias deportivas incluidas en las enseñanzas universitarias, en las enseñanzas de formación profesional, en las enseñanzas deportivas de régimen especial, en las enseñanzas de la carrera militar, en las actividades formativas no formales y en aquellas materias que no constituyen propiamente la docencia del área de educación física.
15. El artículo 4 se refiere a la profesión de monitor deportivo o monitora deportiva. Establece las funciones a realizar, así como la cualificación necesaria y los títulos que la acreditan. Esta profesión de monitor deportivo o monitora deportiva permite realizar funciones de planificación, instrucción, aprendizaje, animación, acondicionamiento físico, recuperación o mejora de la condición física, entrenamiento o preparación personal, monitorización, control, guía, acompañamiento, evaluación y funciones análogas sobre cualquier deportista o grupo de deportistas cuando dicha actividad no está enfocada a la competición deportiva. Se contemplan de modo específico la cualificación para ejercer la profesión en actividades de cierto riesgo o dirigidas a personas que requieran especial atención, tales como mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad, personas con problemas de salud y asimilados.
16. El artículo 5 regula la profesión de entrenador o entrenadora. Distingue entre el ejercicio de la profesión respecto a deportistas y equipos en el ámbito del deporte escolar, durante su participación en actividades de competición de carácter multideportivo o multidisciplinar, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, en actividades de competición multidisciplinarias de cierto riesgo en el medio natural, así como con animales; respecto a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de una única modalidad o disciplina deportiva de nivel básico; respecto a deportistas y equipos en competiciones de nivel y; respecto a deportistas calificados como de alto nivel o alto rendimiento.
17. El artículo 6 regula la profesión de director deportivo o directora deportiva. A diferencia de las otras tres previstas en el anteproyecto, el ejercicio de esta profesión no precisa su presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas. Se diferencia entre ejercer la profesión en actividades o servicios integrales, generales,



multidisciplinares o multideportivos, sin una orientación específica a una única modalidad o disciplina deportiva, o con respecto a una única modalidad o disciplina deportiva en el ámbito de la iniciación deportiva o de nivel básico. También diferencia entre la dirección de actividades en el ámbito del perfeccionamiento técnico o de nivel medio y respecto de actividades y servicios orientados al alto rendimiento.

18. El artículo 7 se refiere a requisitos de cualificación en supuestos especiales: profesionales de clubes y otras asociaciones deportivas análogas que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional; profesionales de las federaciones deportivas españolas y demás entidades deportivas, públicas o privadas, de ámbito estatal; profesionales de otras comunidades autónomas o países que desarrollen servicios profesionales de forma ocasional o puntual en el País Vasco y que estén dirigidos a consumidores o usuarios que residan fuera del propio País Vasco y; deportistas de alto rendimiento sin la cualificación establecida.
19. El artículo 8 contempla la adaptación a nuevas cualificaciones y títulos oficiales, atribuyendo al Gobierno Vasco la adaptación de las referencias a las cualificaciones y títulos del anteproyecto a las nuevas cualificaciones profesionales y títulos oficiales.
20. El artículo 9 establece una reserva de las denominaciones previstas en el anteproyecto tratando de evitar que mediante la denominación de otros profesionales se pueda inducir a error.
21. El artículo 10 se refiere a la colegiación y registro de los profesionales del deporte del País Vasco. Prevé la incorporación al colegio profesional correspondiente, si éste existe y así lo dispone la legislación estatal correspondiente, o al Registro de profesionales del deporte del País Vasco. Este último será público, y se remite al reglamento para la fijación de su estructura, funciones y el régimen de publicidad y funcionamiento.
22. El artículo 11 recoge una serie de deberes en el ejercicio profesional. Su párrafo 2 culmina este artículo estableciendo que el incumplimiento de los citados principios y deberes dará lugar, en su caso, a la exigencia de las correspondientes responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.
23. El artículo 12 contempla el ejercicio de las profesiones del deporte a través de sociedades profesionales, salvo en los supuestos de acceso al empleo público o en aquellos supuestos no admitidos en la legislación en materia educativa.
24. El artículo 13 prevé el aseguramiento de la responsabilidad civil para el ejercicio de las profesiones reguladas por el anteproyecto, que cubra la indemnización por los daños que se causen a terceros con ocasión de la prestación de los servicios profesionales. Esta obligación no resulta exigible a profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una Administración pública o en el caso de que la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de terceros. Para las condiciones de este aseguramiento se remite al reglamento.



25. El artículo 14 hace referencia a “otros requisitos”. Aclara que los requisitos de cualificaciones para el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte que se establecen en el anteproyecto se entienden sin perjuicio de cualesquiera licencias, autorizaciones, títulos o requisitos adicionales exigibles con arreglo a la legislación vigente.
26. El artículo 15 establece que todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas con presencia física, incluidos las y los voluntarios, deberán acreditar la formación en primeros auxilios.
27. El artículo 16 se refiere al ejercicio de las profesiones sin amparo en la ley, lo que dará lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable.
28. El artículo 17, intitulado “Marco normativo común. Libre competencia”, establece que las profesiones reguladas en el anteproyecto quedarán sujetas, en lo no establecido en la misma, por el marco normativo común sobre ejercicio de profesiones, y el acceso y ejercicio a esas profesiones estarán sujetos a la legislación sobre defensa de la competencia y sobre competencia desleal.
29. El artículo 18 contempla el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados, diferenciando las cualificaciones profesionales obtenidas en estados miembros de la Unión Europea, o en estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores, del resto de estados.
30. El artículo 19 está dirigido a la protección de la salud y seguridad de consumidores y usuarios. Prevé la posibilidad de que el Gobierno Vasco establezca los oportunos sistemas de autorización, declaración responsable, comunicación, evaluación, acreditación e inspección con relación a la exigencia de cualificaciones para el ejercicio de las profesiones del deporte. Establece también normas sobre publicidad y la obligación de que los contratos de estos profesionales se formalicen por escrito. Finalmente, hace referencia a las funciones de inspección.
31. El artículo 20 prevé el ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando los monitores y entrenadores que desarrollan su profesión por esta vía ejerzan las profesiones de forma habitual en el País Vasco deberán ostentar la cualificación prevista en el anteproyecto. Además, las páginas Web, aplicaciones y demás tecnologías de la información y la comunicación de carácter análogo que incluyan planes de entrenamiento *on line* e información de contenido técnico-deportivo similar deberán identificar adecuadamente a las y los profesionales que elaboren tales planes e informar sobre su cualificación profesional.
32. La disposición adicional primera contempla los mecanismos de colaboración con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas, para lo que conmina al Gobierno Vasco a promover mecanismos



de colaboración para que en el ejercicio de las profesiones del deporte objeto de la presente regulación se fomenten prácticas deportivas saludables, seguras y de calidad.

33. La disposición adicional segunda se refiere a las políticas de igualdad en las profesiones del deporte, para lo cual el Gobierno Vasco, en colaboración con otras administraciones públicas, con la organización colegial correspondiente, con las federaciones deportivas y con otras entidades deportivas análogas, promoverá la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso y ejercicio a las profesiones reguladas en esta ley.
34. La disposición adicional tercera se refiere a las actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas. Como regla general, exige los mismos requisitos de cualificación del voluntariado para la participación en sus actividades deportivas. No obstante, prevé que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, previa solicitud razonada, podrá dispensar a colectivos específicos de voluntarios de la exigencia de cualificación prevista en esta ley y admitir una cualificación diferente.
35. La disposición adicional cuarta establece que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva determinará los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes a los citados títulos y certificados.
36. La disposición adicional quinta se refiere a la “Formación específica” exigida a lo largo del texto articulado, estableciendo las fórmulas de acreditación y reconocimiento. En los supuestos de inexistencia o insuficiencia de ofertas formativas oficiales, podrá el departamento competente en materia deportiva promover o reconocer formaciones, títulos o certificaciones no oficiales que cumplan unos requisitos mínimos de calidad.
37. La disposición adicional sexta establece los diferentes niveles de las actividades: de iniciación deportiva o de nivel básico, de perfeccionamiento técnico o de nivel medio y de alto rendimiento.
38. La disposición adicional séptima se refiere a la formación en actividades con deportistas en edad escolar y establece que, en caso de inexistencia o insuficiencia de títulos oficiales o certificaciones de profesionalidad de carácter específico para las y los monitores y entrenadores en actividades polideportivas con deportistas en edad escolar, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia deportiva y en materia de cualificaciones promoverán conjuntamente acciones formativas específicas para aquellas personas que desarrollen sus funciones con deportistas en edad escolar.
39. La disposición adicional octava se refiere a la formación en modalidades deportivas no reconocidas por el Estado y en modalidades deportivas sin plan formativo aprobado por el Estado.



40. La disposición adicional novena establece que las cualificaciones profesionales previstas en el anteproyecto para el acceso y ejercicio profesional no serán exigibles para las y los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje o de la formación dual, siempre que esa formación sea propia del ámbito del deporte.
41. La disposición adicional décima contempla las cualificaciones equivalentes a las titulaciones de técnico deportivo o técnica deportiva y de técnico deportivo o técnica deportiva superior.
42. La disposición adicional undécima se refiere a la potestad sancionadora, que se atribuye al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.
43. En cuanto al régimen transitorio, la disposición transitoria primera contempla el ejercicio profesional sin la cualificación requerida en la ley, estableciendo diferentes habilitaciones provisionales en tanto no se implanten los procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las correspondientes competencias de las y los profesionales del deporte adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. En todo caso, los profesionales habilitados deberán inscribirse en el Registro de profesionales del deporte del País Vasco en una sección específica para habilitados.
44. La disposición transitoria segunda establece la aplicación progresiva de la Ley para las profesiones de monitor deportivo o monitora deportiva, entrenador o entrenadora y director deportivo o directora deportiva, cuando se verifique la falta de profesionales con las cualificaciones para atender adecuadamente la demanda existente, la ausencia de formación oficial o la existencia de nuevos ámbitos deportivos.
45. La disposición transitoria tercera se refiere a la obligación de colegiación, que sólo será exigible a partir del momento en que la correspondiente profesión disponga de su organización colegial.
46. La disposición transitoria cuarta contempla el incumplimiento del deber de obtener la cualificación en primeros auxilios. Las y los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta ley, no cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente ley podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el 31 de diciembre de 2018. El incumplimiento del deber de obtener tal formación en el citado plazo podrá ser considerado causa de remoción o de ineptitud sobrevenida, según se trate de una relación estatutaria o laboral.
47. La disposición transitoria quinta establece que las habilitaciones provisionales y reconocimientos de las competencias, previstas para las y los profesionales en las disposiciones transitorias primeras y segundas, y la exigencia de competencias en primeros auxilios, establecida en la disposición adicional sexta, serán también de aplicación al voluntariado.



48. La disposición transitoria sexta contempla un plazo de adaptación para las reglamentaciones federativas hasta el 1 de enero de 2018.
49. La disposición transitoria séptima, establece una moratoria en la aplicación de la ley, para los contratos con el sector público vigentes ala entrada en vigor de la ley.
50. La disposición derogatoria deroga los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar, así como todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el anteproyecto.
51. En cuanto a las disposiciones finales, la primera modifica el artículo 127 de la LDPV, añadiendo una nueva infracción muy grave, relacionada con la no posesión de la cualificación profesional exigida en la legislación reguladora de las profesiones del deporte.
52. La disposición final segunda modifica el artículo 28 de la LDPV añadiendo dos nuevas infracciones graves en relación con el incumplimiento de la obligación, en su caso, de colegiación o, en su caso, de inscripción en el Registro de profesionales del deporte del País Vasco, así como el incumplimiento de la obligación de disponer del seguro de responsabilidad civil, y con el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 11, 19 y 20 del anteproyecto.
53. La disposición final tercera contempla una habilitación general al Gobierno Vasco para el desarrollo y aplicación de esta ley.
54. La disposición final cuarta prevé una habilitación expresa al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva para la definición de conceptos y para la delimitación de las atribuciones y ámbitos materiales de las profesiones.
55. La disposición final quinta prevé una habilitación expresa al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva para el procedimiento de reconocimiento de la formación específica.
56. La disposición final sexta se refiere a la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante lo anterior, las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de las profesiones sólo serán exigibles a partir del día 1 de enero de 2019. La exigencia de cualificaciones profesionales a las y los voluntarios se realizará a partir del 1 de enero de 2020.

ASPECTOS COMPETENCIALES

57. Los títulos competenciales prevalentes sobre los que se apoya la iniciativa son, tal y como señala la exposición de motivos del anteproyecto, los contemplados en los apartados 36 (deporte) y 22 (ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución) del artículo 10 del Estatuto de



Autonomía del País Vasco (EAPV). Ello sin olvidar la incidencia más o menos puntual de otros títulos competenciales, como los previstos en los apartados 28 (defensa del consumidor y del usuario) o 4 (estatuto de los funcionarios del País Vasco, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) del artículo 10 EAPV, o las competencias previstas en sanidad interior (artículo 18.1 EAPV) y en materia de enseñanza, en los términos del artículo 16 EAPV.

58. El presente análisis se centrará en los títulos prevalentes, con una mención específica a la defensa de los consumidores y usuarios, que son los que sostienen con carácter general el proyecto, sin perjuicio de que durante el análisis detallado de su contenido resulte preciso o de interés analizar puntualmente algún otro título competencial de los arriba mencionados.
59. Ahora bien, antes de comenzar el análisis competencial que deriva de nuestro Estatuto, se ha de llamar la atención sobre la intención última del legislador: garantizar la salud de aquellos que practican algún deporte. Esa conexión entre salud y deporte no es una cuestión puntual o específica de este anteproyecto sino que, como observamos en nuestro Dictamen 231/2011, tiene un reconocimiento explícito y general incluso en la doctrina del Tribunal Constitucional. El alto tribunal, en su Sentencia 194/1998, de 1 de octubre, recuerda la estrecha vinculación existente entre salud y educación física y deporte, tanto porque la educación física y el deporte son un medio para mantener la salud, como porque un ejercicio inadecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, “especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño”, tiene repercusiones muy negativas sobre la salud.
60. Desde esta perspectiva, el análisis competencial debe partir de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución (CE); artículo que, tras reconocer en su apartado 1 el derecho a la protección de la salud, señala que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas (apartado 2), y prevé, en último término, que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Como tales principios rectores de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección han de informar la actuación de los poderes públicos, de acuerdo con el artículo 53.3 CE.
61. En este contexto, y volviendo, ahora sí, a la primera de las competencias del EAPV en los que se apoya la iniciativa, también resulta de interés recordar que el alcance de la competencia prevista en materia de deporte (artículo 10.36 EAPV) es también resultado de materializar en el Estatuto las posibilidades previstas en la propia CE. Como señala el Tribunal Constitucional en su Sentencia 80/2012, de 18 de abril, dictada en relación con un artículo de la LDPV, “la alusión contenida en el artículo 148.19 CE, según el cual las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre la promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio, tiene ciertamente un valor hermenéutico, en relación a la voluntad constitucional de que dicha materia sea asumida por las Comunidades Autónomas”.



62. El mismo tribunal se ha encargado también, no obstante, de matizar la exclusividad de las competencias autonómicas en esta materia. En su Sentencia 1/1986, de 10 de enero, ya declaró que la atribución estatutaria de la competencia exclusiva en materia de deporte debe necesariamente ponerse en conexión, de un lado, con el carácter territorialmente limitado de las competencias autonómicas y, de otro, con la posible afectación de intereses generales –supraautonómicos– del deporte español “en su conjunto” cuya defensa y promoción corresponderán, entonces, al Estado. Más recientemente, en relación con la competencia en materia de deporte desplegada en la LDPV, ha recordado que las competencias autonómicas –incluso aquellas que han sido configuradas como exclusivas– deben ejercerse: (i) con respeto a las competencias que puedan corresponder al Estado en virtud de otros títulos competenciales y (ii) de acuerdo con el principio de territorialidad de las competencias, como algo implícito al propio sistema de autonomías territoriales que de forma expresa se consagra en el art. 20.6 EAPV (STC 80/2012, de 18 de abril):

“Respecto de la primera cuestión, el hecho de que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostente la competencia exclusiva sobre la materia de deporte, de acuerdo con el art. 10.36 EAPV, y que el Estado carezca de un título competencial constitucional específico no significa, no obstante, que el Estado no pueda intervenir, en concurrencia con las Comunidades Autónomas, en la regulación del deporte. La propia «realidad» poliédrica de la materia deportiva determina necesariamente el entrecruzamiento de títulos competenciales, la concurrencia de la actuación de las diversas Administraciones públicas –estatal, autonómica y local– en las diferentes facetas sobre las que se proyecta la actividad deportiva (salud, educación, cultura, investigación, educación física, profesiones reguladas o legislación mercantil, por ejemplo) que exigen en algunos casos, una actuación supraautonómica, por requerir de un enfoque global y no fragmentado, o de la coordinación de diversas actuaciones, o por tratarse de actuaciones en las que la materia de deporte se entronca con otra materia atribuida competencialmente al Estado (por ejemplo, la especial vinculación del deporte con la salud (SSTC 194/1998, de 1 de octubre [RTC 1998, 194] , F. 7). Como señalamos en la STC 16/1996, de 1 de febrero (RTC 1996, 16) , «el Estado ostenta competencias sobre determinadas materias, singularmente educación y cultura, que pueden incidir también sobre el deporte; todo ello sin perjuicio de las competencias específicas que la Ley 10/1990 (RCL 1990, 2123 y RCL 1991, 1816) , del Deporte, atribuye al Estado, en especial de coordinación con las Comunidades Autónomas respecto de la actividad deportiva general y apoyo, en colaboración también con las Comunidades Autónomas, del deporte de alto nivel». [F. 2 C) t)].

(...)



Por lo que concierne a la segunda cuestión, conviene advertir que constatada la vigencia del principio de territorialidad de las normas y actos de las Comunidades Autónomas, no puede obviarse, no obstante, que «dichos principios [principio de territorialidad y de unidad de mercado], por su cualidad de tales, no pueden ser interpretados en unos términos que impidan a las instancias autonómicas, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar decisiones cuyas consecuencias puedan proyectarse sobre otros lugares del territorio nacional [por referencia al principio de territorialidad, SSTC 37/1981, de 16 de noviembre (RTC 1981, 37), F. 1; 150/1990, de 4 de octubre (RTC 1990, 150), F. 5; y 126/2002, de 23 de mayo (RTC 2002, 126), F. 9 a)]» (STC 168/2004, de 6 de octubre [RTC 2004, 168], F. 5). Es más, como señalamos en la ya citada STC 165/1994 (RTC 1994, 165) –respecto de la materia «relaciones internacionales»– allí donde las Comunidades Autónomas sean titulares de competencias exclusivas es constitucional la actividad internacional (proyección exterior) siempre que no se afecte a materias propias del ordenamiento internacional, ni se enerve el ejercicio de otras competencias que correspondan al Estado.”

63. Más complejo se presenta el título competencial estatutario correspondiente al ejercicio de las profesiones tituladas.
64. De inicio, el propio EAPV, a la hora de atribuir este título competencial con carácter exclusivo, menciona como salvedad lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.
65. El artículo 36 CE establece que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, estableciendo una reserva de ley en la materia, pero no incide en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. El propio Tribunal Constitucional admitió esta circunstancia en su Sentencia 20/1988, de 18 febrero.
66. En efecto, tal y como señaló previamente en su Sentencia 42/1986 de 10 abril, este artículo contiene fundamentalmente una reserva de ley en cuanto al establecimiento del régimen jurídico de colegios profesionales y al ejercicio de las profesiones tituladas, y añade que “la garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos consiste en que esta materia sea regulada por el legislador, que no encuentra, como es obvio, otros límites que los derivados del resto de los preceptos de la Constitución y, principalmente, de los derechos fundamentales. Compete, pues, al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión debe dejar de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia.”



67. Algo parecido puede afirmarse con respecto a la mención del artículo 139 CE. Su apartado primero sienta el principio de igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado, mientras que el apartado segundo impide la adopción de medidas que obstaculicen la libre circulación de personas en ese mismo territorio.
68. Este artículo, por tanto, tampoco es un precepto que incida, al menos directamente, en el reparto competencial, y así se desprende igualmente de la doctrina del Tribunal Constitucional. En su Sentencia 173/1998, de 23 de julio de 1998, deja claro, en relación con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 CE —aunque puede extenderse a todo el artículo—, que este tipo de preceptos "son presupuestos o límites, pero no títulos competenciales" (STC 61/1997, fundamento jurídico 7º). El principio consagrado en este art. 139.1 CE constituye un límite y una directriz que acota y guía el ejercicio de las competencias, que poseen el Estado ex. art. 149 CE, y las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. No obstante, también es cierto que con posterioridad, en su Sentencia 201/2013, de 5 de diciembre, afirma que "en la competencia reservada al Estado en virtud del art. 149.1.3º subyace el principio del artículo 139.1 CE, que es un principio estrechamente vinculado a esta atribución competencial" (STC 122/1989 [RTC 1989, 122], FJ 5); es decir, se trata de una competencia directamente vinculada a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en cualquier parte del territorio español y ligada asimismo a la garantía de la libertad de circulación y establecimiento de los profesionales y a la libre prestación de servicios (arts. 139 CE y 149.1.1 CE)."
69. En cualquier caso, el Estado puede incidir también en esta materia ya que, al igual que sucede con la competencia en materia de deporte, a la hora de considerar una competencia autonómica como exclusiva, deben tenerse en cuenta las competencias que puedan corresponder al Estado en virtud de otros títulos competenciales, como en este caso ocurre con la competencia del artículo 149.1.3º CE, correspondiente a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
70. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones en torno a este título competencial del artículo 149.1.3º CE, aunque no siempre con la claridad que resultaría deseable. Puede afirmarse, no obstante, que comprende la competencia para establecer los títulos correspondientes a cada nivel y ciclo educativo, en sus distintas modalidades, con valor habilitante tanto desde el punto de vista académico como para el ejercicio de profesiones tituladas, es decir, de aquellas cuyo ejercicio exige un título (por ejemplo, graduado escolar, bachiller, diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico en la especialidad correspondiente, licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor); así como comprende también la competencia para expedir los títulos correspondientes y para homologar los que no sean expedidos por el Estado (STC 42/1981, de 22 de diciembre).
71. Esta misma doctrina se reitera en la Sentencia 82/1986, de 26 de junio, así como en la Sentencia 122/1989, de 6 de julio. En esta última, el Tribunal Constitucional reitera que, "es claro, por tanto, que la competencia que los órganos centrales del Estado tienen para regular las



condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales se vincula directamente a la existencia de las llamadas profesiones tituladas, concepto éste que la propia Constitución utiliza en el art. 36, y que implícitamente admite, como parece obvio, que no todas las actividades laborales, los oficios o las profesiones en sentido lato son o constituyen profesiones tituladas.”

72. Como declaró en la Sentencia 83/1984, de 24 de julio, tales profesiones tituladas existen cuando se condicionan determinadas actividades “a la posesión de concretos títulos académicos” y, en un sentido todavía más preciso, la Sentencia 42/1986 (RTC 1986\42) define las profesiones tituladas como aquellas “para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiéndose por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia”. Según señalaba esta última sentencia, “corresponde al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser profesión titulada, y no es dudoso que, con arreglo al texto del art. 149.1.30 de la Constitución, es el legislador estatal quien ostenta esta competencia exclusiva.”
73. La Sentencia 122/1989, de 6 julio, por su parte, introduce una distinción entre las profesiones tituladas y reguladas; distinción que ha sido confirmada en sentencias posteriores (SSTC 113/1993, 386/1993, 330/1994, entre otras) asumiendo, dentro del respeto debido al derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio protegido en el artículo 35 CE que, como medio necesario para la protección de intereses generales, los poderes públicos pueden intervenir el ejercicio de ciertas actividades profesionales, sometiénolas a la previa obtención de una autorización o licencia administrativa o a la superación de ciertas pruebas de aptitud.
74. En este último caso, sin embargo, la incidencia del título estatal del artículo 149.1.30 desaparece, dado que no estaríamos en el ámbito de las profesiones tituladas en sentido estricto, y su regulación corresponde a quien ostenta la competencia material del ámbito en el que se pretende garantizar una determinada capacitación profesional, siempre teniendo en el horizonte la salvaguarda del interés público y de los consumidores.
75. Al hilo de esta última cuestión, debemos también hacer mención específica a la competencia prevista en el apartado 28 del artículo 10 EAPV en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Como dijimos en nuestro Dictamen 163/2011: “Conviene recordar, en este sentido, que, como ya se dijo en la STC 71/1982, de 30 de noviembre, la defensa del consumidor es un «concepto de tal amplitud y de contornos imprecisos que, con ser dificultosa en ocasiones la operación calificadora de una norma cuyo designio pudiera entenderse que es la protección del consumidor, la operación no resolvía el problema, pues la norma pudiera estar comprendida en más de una de las reglas definidoras de competencias» (fundamento jurídico 1.º), lo que significa, en otras palabras, que esta materia se caracteriza ante todo por su contenido pluridisciplinar, en el que se concita una amplia variedad de materias” (STC 15/89, FJ 1).



76. Ahora bien, también en este caso la materia de defensa de los consumidores es un ámbito de concurrencia competencial, de manera que la atribución estatutaria de la competencia de carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma no puede afectar a las competencias reservadas por la Constitución al Estado (art. 149.1 CE), que se proyectarán cuando materialmente corresponda (STC 15/89, F. 1), sin necesidad de que el Estatuto incorpore cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales (STC 31/2010, FJ 70).

MARCO NORMATIVO

77. Una vez establecidas las referencias constitucionales y estatutarias alrededor de las cuales gravita la iniciativa, es preciso establecer el marco normativo dentro del cual debe insertarse la futura norma.
78. Desde la perspectiva del deporte, la Ley estatal 10/1990, de 15 de octubre, del deporte (LD), es, de acuerdo con su disposición adicional primera, de aplicación general en todo el territorio nacional. No obstante, lo establecido en los artículos 14; 15.1, 2, y 3; 16; 17; 18 y 72 (este último contempla que toda instalación o establecimiento de uso público en que se presten servicios de carácter deportivo, cualquiera que sea la entidad titular, deberá ofrecer una información, en lugar perfectamente visible y accesible, de los datos técnicos de la instalación del establecimiento, así como de su equipamiento y el nombre y titulación respectiva de las personas que presten servicios profesionales en los niveles de dirección técnica, enseñanza o animación) tendrá eficacia en tanto no exista regulación específica de las comunidades autónomas con competencia en materia de promoción del deporte.
79. La disposición adicional tercera de esta misma ley prevé también que lo establecido en sus artículos 28 y 45.2, así como en su disposición adicional sexta (todas ellas referidas a aspectos fiscales), se entenderá dejando a salvo la autonomía financiera de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
80. Desde la perspectiva educativa, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), recientemente modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de mejora de la calidad educativa (LOMCE), dio a las enseñanzas deportivas un tratamiento similar al de las demás enseñanzas que ofrece el sistema educativo.
81. En su capítulo VIII prevé que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establezca las titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo y los requisitos mínimos de los centros. Las enseñanzas deportivas se organizan tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, y que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.



82. Su artículo 98 se refiere al profesorado de enseñanzas deportivas, estableciendo que para ejercer la docencia en las enseñanzas deportivas será necesario estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, o el título de grado correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, así como la formación pedagógica y didáctica que establezca el Gobierno. Contempla también que el Gobierno habilite otras titulaciones para la docencia en determinados módulos y bloques previa consulta a las comunidades autónomas.
83. Su apartado 2 admite que, de modo excepcional, para determinadas materias las administraciones educativas puedan incorporar como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito deportivo y laboral.
84. En este mismo ámbito educativo, como desarrollo del anterior, es preciso mencionar también el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, de carácter básico en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 CE.
85. Sin perder de vista el apartado 30 del artículo 149.1 CE, pero teniendo en cuenta a la vez los títulos previstos en los apartados 1 y 7 de ese mismo artículo, el Estado aprobó la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional (LOCFP), en el que se establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional como marco de las acciones formativas dirigidas a responder a las demandas del sector productivo. La propia LOE establece la posibilidad de que las enseñanzas deportivas se refieran al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales previsto en la misma ley orgánica.
86. La LOCFP, como decimos, configura un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales como eje institucional del sistema, cuya función se completa con el procedimiento de acreditación de dichas cualificaciones. Tal y como establece su exposición de motivos, este sistema no deroga el que está actualmente en vigor y no supone, en ningún caso, la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas en los términos previstos en el artículo 36 CE.
87. En desarrollo de su artículo 7, en el que se crea el citado catálogo, se establecieron la estructura y el contenido del mismo, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. El Catálogo se complementa en la familia profesional de actividades físicas y deportivas mediante Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero; Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre; Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero; Real Decreto 141/2011, de 4 de febrero; Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio; y Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre.



88. Desde la perspectiva europea, es preciso tener en cuenta el marco normativo comunitario, en el que cabe destacar la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. Como se afirma en esta directiva, la supresión, entre los estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos que se persiguen con el tratado y dicha supresión supone concretamente para los nacionales de los estados miembros la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido sus cualificaciones profesionales.
89. Mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, se incorporan al ordenamiento jurídico español la citada Directiva 2005/36/CE, así como la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, esta última relativa a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
90. Desde esa misma perspectiva, también debe tenerse en cuenta la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (la denominada Directiva de Servicios), cuya trasposición al derecho interno se ha producido fundamentalmente por la Ley estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como Ley Paraguas y, en adelante, LAASE), sin perjuicio de las numerosas adaptaciones puntuales a las que ha dado lugar a través de la Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus). En nuestra Comunidad Autónoma, esa última función la ha desarrollado la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE.
91. En este mismo bloque puede incluirse también La Ley estatal 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado (LGUM), sustentada en las competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1.1, 6, 13 y 18 CE.
92. Otra de las facetas en la que incide el anteproyecto es el de la defensa de los consumidores y usuarios; materia en la que el Estado ha intervenido con carácter básico a través de una parte importante del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Concretamente, tienen carácter básico el capítulo I del título I del libro primero, en el que se define su ámbito de aplicación, y el artículo 10; los artículos 8, 9, 17.1, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del título I del libro primero y el título IV del libro primero; el artículo 24 y el título V del libro primero, los libros segundo, tercero y cuarto, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales.
93. Aunque con una incidencia más tangencial, debemos referirnos también a la Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales. Durante la tramitación del anteproyecto se han tenido también en cuenta algunas cuestiones incluidas en el



anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales, si bien las referencias al mismo han de ser examinadas a la luz de la nueva situación creada tras el decaimiento de esta iniciativa.

94. En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma debemos hacer una mención específica a lo establecido en el artículo 62 de la LDPV, según el cual, para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. Hasta la fecha, este artículo no había sido objeto de desarrollo, salvo en lo referido al deporte escolar a través del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar, cuyo artículo 25 se refiere a las titulaciones exigibles en el deporte escolar.
95. Merece también su mención la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales. Conforme a esta ley, tiene el carácter de profesión titulada aquella que se manifiesta mediante el ejercicio y la aplicación de conocimientos y técnicas propios de una ciencia o rama del saber, cuya aptitud venga acreditada en un título académico universitario o en otro legalmente establecido o reconocido por las autoridades competentes. Las profesiones tituladas pueden ser colegiadas y no colegiadas, mientras que son profesiones tituladas colegiadas aquellas respecto a las que así se ha dispuesto mediante la pertinente ley. Todas las demás profesiones tituladas tendrán el carácter de no colegiadas.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

96. La Comisión (por todos, dictámenes 39/1999 y 84/2003) viene señalando habitualmente que, al abordar el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley en el seno del ejecutivo, tiene en cuenta que “el legislador no ejecuta la Constitución, sino que crea derecho en libertad dentro del marco que esta ofrece, en tanto que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se opera de acuerdo con la Constitución y las Leyes (art. 97 CE)” (entre otras, STC 209/1987, de 22 de diciembre), por lo que, salvo los casos en que la Constitución, el EAPV o, en ocasiones, las leyes orgánicas prevean algún trámite específico —supuestos ciertamente excepcionales en nuestro ordenamiento—, aquel examen es esencialmente un instrumento para estudiar la racionalidad de la regulación proyectada, esto es, su utilidad (con el concreto contenido propuesto) para alcanzar los objetivos que persigue su dictado.
97. Esta sustancial diferencia con las iniciativas reglamentarias, en lo que ahora importa, introduce en el examen de los procedimientos de elaboración de los anteproyectos de ley por un órgano consultivo como la Comisión una obligada flexibilidad, pues la finalidad de su dictamen se concreta esencialmente en contribuir al acierto de la regulación proyectada, esto es, su racionalidad —entendida como utilidad para alcanzar los objetivos propuestos y la corrección de la regulación en términos de



— adecuación a la realidad que se pretende regular y, por tanto, modificar, positivamente —.

98. Ahora bien, la diferente intervención consultiva descrita no ha de impedir, por consiguiente, que, con un ánimo de estricta colaboración con el órgano consultante, se hagan algunas observaciones sobre la elaboración del anteproyecto y de la memoria que lo acompaña, en aras de su mejora. Pero, insistimos, tratándose de un anteproyecto de ley, no debe olvidarse que el resultado que arroje la valoración del procedimiento de elaboración no se adentra en el terreno de la validación jurídica del texto, y en ese sentido no permite fundar objeciones a la constitucionalidad del producto normativo final.
99. A estos efectos, contamos con un importante instrumento de referencia como es la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante LPEDG), la cual, sin ignorar las mencionadas circunstancias, pretende orientar la actividad del Gobierno a fin de que procure seguir en la redacción de los proyectos de ley la misma metodología que emplea para elaborar las disposiciones generales. De ese modo, señala su exposición de motivos, se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone.
100. Para realizar su análisis —material y esencialmente finalista— del procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites; (ii) una fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente afectadas por aquélla; (iii) una fase de informes —preceptivos y facultativos— y; (iv) una fase final, en la que el órgano impulsor, trasevalúa el entero iter procedimental, establece el texto definitivo y elabora los documentos finales —memoria justificativa y económica—.
101. Siguiendo, por tanto, esas pautas señaladas en la LPEDG y analizando por orden cronológico los actos del procedimiento de elaboración, debemos comenzar por constatar la incorporación al expediente de la orden de inicio del procedimiento de elaboración.
102. Tras la aprobación de esa orden, intervino el Consejo Vasco del Deporte, mostrando su posición favorable al anteproyecto.
103. Se incorporó asimismo una primera memoria, en la que se exponen brevemente los objetivos perseguidos por la iniciativa y sus líneas generales, los sectores sociales que



resultan afectados, los presupuestos jurídicos habilitantes, así como los fundamentos de la competencia del departamento.

104. Tras estos actos de instrucción se produjo la aprobación previa del anteproyecto por parte de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.
105. Se elaboró a continuación el informe de impacto en función del género, en el que se afirma que se ha prestado especial atención al tema de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito profesional; esfuerzo plasmado expresamente en los principios y deberes en el ejercicio profesional y en una disposición adicional.
106. A continuación, se incorporó una nueva y más extensa memoria relativa al anteproyecto, con la que se busca acreditar el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, simplicidad y eficacia. Es destacable, en esta memoria, el esfuerzo realizado por el departamento promotor para mostrar tanto los objetivos como los diferentes elementos tenidos en cuenta a la hora de afrontar las cuestiones que se pretenden resolver con la iniciativa.
107. Parte esta memoria de la existencia de un notable consenso parlamentario, tanto en el ámbito autonómico como estatal, en que la práctica deportiva constituye uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia e impacto. Simultáneamente, se es consciente de que, si esa práctica deportiva no es conducida y controlada por personal debidamente capacitado, se corre el riesgo de que esa actividad resulte nociva para la salud de las personas o para su seguridad.
108. Se hace mención a lo establecido en el ya citado artículo 62 de la LDPV, así como al Plan vasco del deporte 2003-2007, en el que ya se advertía sobre una percepción general entre los agentes del deporte de que falta una regulación profesional del sector, que ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación.
109. Además de las diferentes iniciativas llevadas a cabo en la materia tanto en el ámbito estatal como autonómico, se hace mención específica al texto aprobado por el Parlamento Vasco el 9 de febrero de 2012, en el que se decía expresamente lo siguiente:

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que presente, dentro del marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos, un proyecto de ley para regular las distintas profesiones del deporte, en colaboración con todos los agentes implicados, de tal forma que se determinen las profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias profesionales de cada una de ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral para organizar la seguridad y la salud de las personas.”



110. Posteriormente, ante una pregunta parlamentaria sobre la valoración por el nuevo departamento del Gobierno de la citada declaración, la respuesta de la Consejera aclaraba la intención del Gobierno de acometer el proyecto al señalar que:

“Este Departamento valora muy positivamente aquella declaración y por esta razón se ha marcado como objetivo prioritario, tal y como ha adelantado esta Consejera en su comparecencia parlamentaria en la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte y Comisión de Educación (11/02/2013), elaborar el anteproyecto de ley regulador del ejercicio de las profesiones del deporte.”

111. No hay dudas, por tanto, sobre el interés del Parlamento Vasco en torno a esta iniciativa.
112. Ahora bien, la propia memoria afronta igualmente la complejidad que acompaña siempre a cualquier regulación que se aproxime de una manera u otra al campo de las profesiones tituladas y se insiste en que el objeto del anteproyecto no es regular las formaciones y titulaciones académicas, ni las ocupaciones, puestos o lugares de trabajo, o los perfiles profesionales de las distintas titulaciones, y tampoco se abordan los contenidos formativos necesarios para el ejercicio profesional en el sector deportivo, ni el establecimiento de las facultades o atribuciones profesionales que corresponden a cada una de las titulaciones.
113. El objeto declarado de la ley es, por tanto, regular el acceso y ejercicio de determinadas profesiones propias del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo último de garantizar la salud y la seguridad en la práctica deportiva.
114. Todo lo anterior permite valorar de forma positiva el esfuerzo realizado desde el departamento promotor para justificar la necesidad, razonabilidad y factibilidad de la iniciativa, si bien ello no excluye el que, con ánimo colaborador, esta Comisión muestre alguna carencia que considera relevante en la justificación de la iniciativa.
115. Se trataría concretamente de mostrar, aunque sólo fuera de forma aproximada, la realidad cuantificada de los actuales profesionales que actualmente desarrollan sus servicios en el sector. El propio departamento, ante alguna de las alegaciones presentadas en este sentido, añade en la memoria sobre las alegaciones que se viene trabajando en esta cuestión para conocer la situación real con mayor detalle, en orden a la adecuada implantación de la ley, e, incluso, el régimen transitorio del propio anteproyecto contempla la posibilidad de que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva detecte y verifique una falta de profesionales con las cualificaciones exigidas para atender la demanda existente, proceso que entendemos debería adelantarse, por el orden lógico de las cosas, a la elaboración y aprobación de la norma.



116. Asimismo, como cabría inferir de las conclusiones del Plan vasco del deporte 2003-2007 y de la moción parlamentaria, obrarán en el departamento promotor datos e informaciones sobre las implicaciones para la salud y la seguridad de las personas que practican la actividad deportiva tomados en consideración para delimitar los ámbitos de aplicación —recreativo, competitivo y de dirección deportiva—, los niveles (básico, medio y alto rendimiento) y las exigencias de una cualificación profesional para cada caso. Sería, por ello, conveniente incorporar dicha información a fin de mejorar la justificación de las limitaciones que conllevan tales opciones normativas.
117. La valoración económica de la iniciativa se ha desarrollado en una memoria económica que diferencia los gastos —en los ingresos sólo se hace referencia a las tasas por el procedimiento para obtener competencias referidas al sistema de cualificaciones—, según se trate de gastos nuevos que derivan de la propia ley, estén vinculados a partidas ya existentes en el presupuesto o se trate de nuevos gastos que han de implementarse independientemente de la aprobación de la ley. Todos estos gastos han sido cuantificados en la memoria y contrastados tanto por la Oficina de Control Económico (OCE) como por la Dirección de Presupuestos, que ha emitido informe a solicitud de la propia OCE.
118. En cualquier caso, la Comisión sólo puede dejar constancia de que toda la valoración económica de la iniciativa es la referida a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, mientras que la LPDEG, en su artículo 103 incluye en esa valoración el coste que pueda derivarse de su aplicación para otras administraciones públicas, los particulares y la economía general; cuestión que en el presente proyecto adquiere importancia, puesto que se desconocen los efectos que sobre el sector pueden tener, por ejemplo, las exigencias de titulación, de formación en primeros auxilios o de aseguramiento de la responsabilidad civil.
119. En la apertura del procedimiento al resto de administraciones y sectores sociales implicados, el anteproyecto ha sido analizado por las tres diputaciones forales. Todas ellas han presentado alegaciones, algunas referidas a la situación actual de los técnicos, a la validación de la formación ofrecida por las propias diputaciones, al tratamiento dado al voluntariado o específicamente dirigidas al campo del deporte escolar —ámbito en el que ostentan competencias de desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las instituciones comunes—; o cuestiones más puntuales como, por ejemplo, el régimen de inspección o sancionador. En general, han sido admitidas varias de las propuestas presentadas y también se ha dado respuesta razonada a las cuestiones inadmitidas.
120. Constan asimismo escritos de alegaciones u observaciones presentados por diferentes departamentos de la Administración General. La Secretaría General de la Presidencia no ha apreciado circunstancia alguna para realizar observaciones, al igual que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y el Departamento de Administración Pública y Justicia. El Departamento de Salud ha mostrado, por su parte, alguna



reticencia sobre la viabilidad de las reglas de publicidad, aunque finalmente, tras valorar esas observaciones, se han mantenido en el artículo 19 del anteproyecto.

121. En el apartado de audiencia, el expediente deja constancia de haber remitido el anteproyecto a una serie de entidades y asociaciones relacionadas con el mundo federativo y del deporte. Además, también se ha realizado un trámite de información pública a través del Boletín Oficial del País Vasco
122. Como resultado de la audiencia, se han presentado numerosas y diversas alegaciones u observaciones por parte de las siguientes entidades: Harrobia-Centro de Formación Profesional, Kirol Management, S.L.U., Federación Vasca de Deportes Aéreos, Kirol Arlorako Iritzi Taldea-Asociación de Gestores del deporte del País Vasco (KAIT), Asociación de empresas de turismo activo de Euskadi (AKTIBA), Asociación Guipuzcoana de Empresas Gestoras de Servicios y Equipamientos Deportivos. También ha presentado alegaciones a título particular el ciudadano don Asier Riaño Torre.
123. También consta en el expediente la invitación a participar en el procedimiento a las asociaciones de federaciones deportivas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, a la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, al Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y a la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekimen, si bien en estos casos no se ha recibido respuesta.
124. A la vista de todo ello, la Comisión valora también de forma positiva este trámite dado que, además de haber suscitado importantes cambios sobre el texto original, ha permitido al departamento promotor exteriorizar el proceso reflexivo que ha llevado a plasmar la redacción del texto finalmente remitido a esta Comisión, aunque también es preciso reconocer, a la vista del dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, que algunas de las organizaciones representadas en el citado órgano consultivo no han sido consultadas pese a mostrar interés en la norma. No obstante, el conocimiento de la misma a través del consejo permite considerar que esas organizaciones han podido también, dado que el proyecto también ha sido sometido a información pública, presentar las observaciones o alegaciones pertinentes.
125. En el terreno de los informes técnicos, se ha incorporado el informe jurídico elaborado por la Asesoría jurídica de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios, que ha realizado numerosas aportaciones al texto, varias de las cuales han sido incorporadas al texto definitivo.
126. Consta asimismo el informe de evaluación de impacto de género realizado con ocasión del proyecto de LAPV; evaluación que ha sido nuevamente verificada por Emakunde en relación con la correcta aplicación de los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. Este último informe valora de modo muy positivo el compromiso mostrado por el órgano promotor con las políticas de igualdad, aunque, por otro lado, constata que no se aportan ni analizan datos desagregados por sexo que sustenten su declaración o sus previsiones sobre la



presencia equilibrada de mujeres y hombres, la eliminación o disminución de las desigualdades o, en cuanto al acceso a los recursos o la toma de decisiones. Se dan algunas “pinceladas” sobre los principales sesgos de género presentes en el ámbito deportivo y, finalmente, se analiza el contenido del anteproyecto aportando una serie de reflexiones y propuestas de mejora.

127. También ha presentado su informe la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas en relación con la incidencia del proyecto en la normalización del uso del euskera y su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística, el cual deja constancia del cumplimiento del Acuerdo por el que se aprueban las medidas para la elaboración bilingüe de las disposiciones de carácter general que adopten la forma de ley, decreto legislativo, decreto u orden, aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 14 de mayo de 2013.
128. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha participado a través de un informe muy crítico con la iniciativa. Este informe finaliza concluyendo, por un lado, que se genera una reserva de actividad pese a no haberse acreditado que existan razones de interés general que justifiquen su necesidad. Por otro lado, entiende que el nuevo sistema complica, compartimenta y restringe la prestación de servicios en el ámbito del deporte puesto que está acompañado de varios elementos que tienden al cierre del mercado y genera barreras de entrada que dificultan la prestación del servicio con las consecuencias negativas que ello conlleva, sin que haya quedado acreditado que tales barreras contribuyan al objeto declarado por la norma.
129. El departamento proponente ha defendido su posición abiertamente discrepante con el criterio de la AVC, defendiendo tanto la relación entre la regulación de las profesiones del deporte y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, como la proporcionalidad de las diferentes medidas que se contemplan en el anteproyecto como el registro, las nuevas infracciones, la reserva de denominación, las restricciones a la publicidad o la delimitación enunciativa de las actividades que corresponden a los profesionales.
130. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco, se ha incorporado el informe de impacto en la empresa. Este informe resulta fundamentalmente descriptivo, asumiendo algunos efectos o “cargas” sobre los profesionales, si bien considera esos efectos asumibles. En cuanto a las obligaciones que se incluyen en el anteproyecto, considera que será en el momento de acometer la regulación del procedimiento y los requisitos de acreditación de esas obligaciones, vía reglamento, cuando pueda valorarse si el sistema supone una mayor o menor traba burocrática, así como su incidencia sobre el emprendimiento; afirmación que elude afrontar la cuestión y denota cierta falta de previsión, en una cuestión a la que la ley ha querido otorgar protagonismo, en el marco del procedimiento de elaboración de las normas que puedan afectar al dinamismo de la actividad económica.



131. En este estado de cosas, el departamento promotor ha valorado las alegaciones recibidas y los informes anteriormente señalados en una extensa memoria. Sin entrar al detalle, dada su extensión, puede afirmarse que se han exteriorizado suficientemente las razones que han llevado tanto a admitir las alegaciones como a rechazar aquéllas que no han tenido reflejo en el texto final del anteproyecto.
132. Con posterioridad a esta valoración, tal y como se ha adelantado, el Consejo Económico y Social ha emitido su dictamen en relación con la iniciativa, valorándola, con carácter general, de forma positiva.
133. Tras dar por concluida esta fase del procedimiento, se ha elaborado una sucinta memoria sobre el procedimiento. En esta memoria se hace una valoración de la única consideración específica contenida en el dictamen del Consejo Económico y Social, dando por concluida la valoración de los informes, alegaciones y observaciones.
134. Como último acto de instrucción previo a la intervención de esta Comisión, figura el informe de la OCE, en el que se analiza la memoria económica emitida por el departamento, constatando también que la misma no se ocupa del impacto económico para otras administraciones públicas, los particulares y la economía en general.
135. En el examen que corresponde a esta Comisión, cumple señalar que el iter procedimental analizado permite identificar el fundamento, las alternativas u opciones adoptadas y las razones de éstas, así como realizar una valoración jurídica de la norma. No obstante, convendría completar la información unida al expediente en los aspectos ya señalados, incorporando, por un lado, datos actualizados sobre la situación actual de los profesionales potencialmente afectados por la norma y sobre la posible incidencia de la actuación de estos en la salud de quienes practican deporte. Por otro lado, debería completarse la información económica en el sentido indicado en el artículo 10.3 *in fine* de la LPEDG, en especial sobre los potenciales efectos económicos de la iniciativa para sus destinatarios (profesionales del deporte y empresas).

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO

I OBSERVACIONES GENERALES

136. El anteproyecto que nos ocupa pretende regular los aspectos esenciales del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, determinándolas y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general y expresando la cualificación requerida para su ejercicio.
137. Este objetivo se engarza, a su vez, con lo dispuesto por la LDPV en sus artículos 4.2, y 62. De acuerdo con el primero, corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma la regulación, reconocimiento oficial e impulso de los centros de formación de personal técnico deportivo, así como de sus enseñanzas y títulos. El



ya citado artículo 62, por su parte, ya adelantaba que, para la realización de los servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial.

138. Todo ello sustentado en el argumento de la notable incidencia de las actividades deportivas en la salud y seguridad de las personas que lo practican.
139. El promotor de la iniciativa adopta, por tanto, como punto de partida, la conexión entre la correcta práctica deportiva y la salud y seguridad de aquéllos que lo practican pero, siendo éste el punto de partida, el modo de intervenir sobre cualquier actividad deportiva, incluida la deportiva, puede presentar diferentes opciones y dentro de éstas, diferentes grados de intensidad.
140. Cuando el legislador opta por intervenir en la actividad a través de la regulación, no tanto de la propia actividad, sino de los profesionales que la desarrollan, las posibilidades de esa intervención van desde la más intensa, que se correspondería con la configuración de una profesión titulada con colegiación obligatoria, hasta la más abierta, que se correspondería con las profesiones libres, si bien este último caso se caracterizaría precisamente por su falta de intervención. Entre estos dos extremos también son varias las posibilidades, que pueden ir desde la configuración de una profesión como titulada, aunque sin colegiación obligatoria, hasta la exigencia de obtención de una previa autorización o licencia administrativa o la superación de ciertas pruebas de aptitud.
141. En este caso, el anteproyecto ha optado por respetar el régimen de colegiación existente y que pueda establecerse, en su caso, en el futuro, y contempla cuatro profesiones unidas a una determinada cualificación educativa o profesional. Si bien no son todas las profesiones posibles en ese ámbito, sí comprenden un amplísimo campo de la actividad deportiva, de tal forma que lo que no incluye —en sus exclusiones del artículo 1.5— corresponde a ámbitos residuales o muy especializados.
142. Se han incorporado, así, las cuatro profesiones que pueden ser consideradas como más generalistas, sin perjuicio de que dentro de las mismas exista una especialización en función de la disciplina deportiva correspondiente. Dentro de esas profesiones, se ha optado también por introducir una estricta compartimentación en función, principalmente, de las diferentes disciplinas deportivas y del nivel técnico y de dedicación de los deportistas, que introduce fuertes limitaciones, incluso entre los propios profesionales del deporte.
143. Todas esas limitaciones introducidas principalmente desde la perspectiva del deporte se fundamentan, insistimos, en que la intervención autonómica persigue y se conecta con la salud y seguridad de quienes lo practican y, como consecuencia de lo anterior, se ha de asumir igualmente que las posibilidades de afrontar su regulación en los términos previstos se mantienen en la medida en la que esa conexión se perciba en el



anteproyecto de forma constante. Por el contrario, esa regulación dispondrá de menor justificación, tanto desde la perspectiva de la regulación de la profesión como desde la perspectiva de intervención en una actividad económica, en la medida en la que esa conexión se debilite y se afronten otros aspectos que pueden tener más relación con cuestiones de orden meramente profesional o corporativo.

144. En los casos más extremos, en los que esa conexión no existiera o fuera excesivamente débil, la situación podría afectar a la necesidad o proporcionalidad de la regulación y, en algún caso, incluso a la propia competencia autonómica, en la medida que, como hemos señalado en el análisis de competencia, hay un campo no suficientemente determinado en la regulación de las profesiones tituladas que ha sido reservado al Estado.
145. No es misión de esta Comisión establecer ni proponer la aptitud necesaria o adecuada para ejercer en cada caso las diferentes profesiones del deporte, pero sí procede advertir sobre la necesidad de que, más allá de su simple afirmación, esa compartimentación debe estar debidamente razonada en cada caso, mediante fundamentos técnicos que acrediten una conexión entre la exigida especialización y la protección de la salud y seguridad de quienes practican la actividad deportiva en la disciplina y nivel correspondientes.
146. Dicho esto y, antes de afrontar un análisis más pormenorizado del articulado, es conveniente adelantar tres cuestiones que también afectan de un modo más o menos directo a la factibilidad jurídica general de la norma, como son: i) la capacidad del legislador, y en concreto del legislador autonómico, para incidir en campo de las profesiones reguladas y tituladas y, ii) la incidencia del anteproyecto sobre la libertad de circulación de trabajadores dentro del ámbito de la Unión Europea y sobre la libre prestación de servicios dentro de ese mismo ámbito; iii) la adecuación del anteproyecto a los principios de la buena regulación.

A) Profesiones tituladas y profesiones reguladas:

147. El anteproyecto tiene como objetivo regular el acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en el País Vasco; propósito que ha de analizarse desde la perspectiva del espinoso campo de las profesiones reguladas y tituladas.
148. El artículo 35 CE reconoce con carácter general el derecho a la libre elección de profesión u oficio, a lo que ha de sumarse lo dispuesto en su artículo 38, en el que se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.
149. Estos derechos, no obstante, no son absolutos y es el propio artículo 36 CE el que evidencia esa limitación al establecer una reserva de ley tanto para las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales como para el ejercicio de las profesiones tituladas. El legislador puede, por tanto, crear nuevas profesiones y regular su ejercicio.



150. En cuanto al alcance y, en su caso, límites de esta reserva legal, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 83/1984, de 24 de julio, señaló en un primer momento que no hay un contenido esencial constitucionalmente garantizado de cada profesión, oficio o actividad empresarial concreta. Esta sentencia decía también lo siguiente:

“(...) las profesiones tituladas, a las que se refiere el art. 36 de la C.E., y cuya simple existencia (esto es, el condicionamiento de determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos, protegido incluso penalmente contra el intrusismo) es impensable sin la existencia de una Ley que las discipline y regule su ejercicio. Es claro que la regulación de estas profesiones, en virtud de ese mandato legal, está expresamente reservada a la Ley. También es claro, sin embargo, que dada la naturaleza del precepto, esta reserva específica es bien distinta de la general que respecto de los derechos y libertades se contiene en el art. 53.1 de la C.E. y que, en consecuencia, no puede oponerse aquí al legislador la necesidad de preservar ningún contenido esencial de derechos y libertades que en ese precepto no se proclaman, y que la regulación del ejercicio profesional, en cuanto no choque con otros preceptos constitucionales, puede ser hecha por el legislador en los términos que tenga por conveniente.”

151. Las posibilidades del legislador en este campo son establecidas con mayor claridad, si cabe, en la Sentencia 42/1986 de 10 de abril. De acuerdo con esta sentencia, la garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos consiste en que esta materia —la de los colegios profesionales y las profesiones tituladas— sea regulada por el legislador, que no encuentra otros límites que los derivados del resto de los preceptos de la Constitución y, principalmente, de los derechos fundamentales. “Compete, pues, al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión debe dejar de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia.”
152. Por otro lado, es importante también aclarar aquí la diferenciación entre las profesiones reguladas y las tituladas. Estas últimas serían, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, aquellas para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia. Por su parte, las profesiones reguladas atenderían a un significado más amplio y comprenderían todas aquellas sobre las que exista una norma que discipline su ejercicio. La Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, define la profesión regulada como la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas



cualificaciones profesionales; concepto incorporado también al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se produce la incorporación de la citada directiva.

153. Dentro de las profesiones reguladas se incluirían también los supuestos en los que para su ejercicio se requiere una capacitación oficial como medio necesario para la protección de intereses generales. En este caso, la STC 111/1993 de 25 de marzo, con una doctrina que se repite en la STC 122/1989, de 6 de julio, y en la STC 111/1993, de 25 de marzo, entre otras, declaró la posibilidad de que, dentro del respeto debido al derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, los poderes públicos intervengan en el ejercicio de ciertas actividades profesionales, sometiéndolas a la previa obtención de una autorización o licencia administrativa o a la superación de ciertas pruebas de aptitud, si bien, “en estos casos, la exigencia de tales requisitos, autorizaciones, habilitaciones o pruebas no es en modo alguno equiparable a la creación o regulación de los títulos profesionales a que se refiere el art. 149.1.30 CE, ni guarda relación con la competencia que este precepto constitucional reserva al Estado”.
154. La STC 111/1993, de 25 de marzo, añadió un matiz sobre lo que debe considerarse como profesión titulada, al identificar las profesiones tituladas con aquellas para cuyo ejercicio se requiere poseer estudios universitarios acreditados por la obtención del correspondiente título; concepto más estricto —ligada a un título universitario— que parece querer retomar en la STC 201/2013, de 5 diciembre, en la que se valida la utilización de este concepto estricto de la profesión titulada en el artículo 2 de la Ley catalana 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, precisamente por su coincidencia con el concepto utilizado por la jurisprudencia constitucional. No obstante, esa identificación entre estudios superiores y universitarios no goza de consenso entre la doctrina, y tampoco fue tomada en cuenta, por ejemplo, por el Consejo de Estado en su Dictamen 48/2009, a la hora de valorar un posible recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado frente a la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña (LEPDCat).
155. La concreta delimitación de lo que debe ser considerado como profesión titulada no tiene únicamente valor teórico sino una trascendencia real, tanto a la hora de establecer el ámbito de la reserva legal contemplada en el artículo 36 CE, como en otra cuestión, no menos compleja, como la competencial.
156. El Tribunal Constitucional abordó frontalmente la cuestión competencial en su STC 154/2005, de 9 de junio, aunque ya en la STC 122/1989, de 6 de julio, adelantó que “corresponde al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser profesión titulada, y no es dudoso que, con arreglo al texto del art. 149.1.30 de la Constitución, es el legislador estatal quien ostenta esta competencia exclusiva”.



157. Se reconoce así una competencia estatal para establecer cuándo una profesión debe pasar a ser considerada titulada, pero esa competencia se desprendería de la interpretación que el propio Tribunal Constitucional ha realizado de lo dispuesto en el artículo 149.1.30 CE y estaría referida, por tanto, a la interpretación de esa misma jurisprudencia constitucional sobre lo que ha de considerarse como “profesión titulada”.
158. Si partimos de una concepción estricta, según la cual, a efectos distributivos de competencia, sólo nos encontramos ante profesiones tituladas cuando para su ejercicio se requiere poseer estudios universitarios acreditados por la obtención del correspondiente título, el anteproyecto discurre dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma, dado que la injerencia con la competencia estatal sólo podría plantearse en el caso de los profesores o profesoras de educación física (artículo 3) y, en este aspecto, el anteproyecto es respetuoso, precisamente al omitir cualquier mención a los títulos necesarios, con la regulación que al respecto se ha dictado por el Estado a través, principalmente, de sus competencias en materia educativa y sobre función pública.
159. En el resto de los casos —las profesiones reconocidas en los artículos 4, 5 y 6— el anteproyecto no requiere necesariamente de una titulación universitaria, sino una cierta aptitud, acreditada mediante unas cualificaciones profesionales que, a su vez, serán constatadas a través de los títulos educativos, profesionales e, incluso, deportivos que contempla la norma, como se desprende de lo dispuesto en su artículo 2.6, lo cual aleja la cuestión de las profesiones tituladas y la acerca a los supuestos en los que para el ejercicio de una profesión se requiere una capacitación oficial como medio necesario para la protección de intereses generales.
160. En este ámbito de las profesiones reguladas, la competencia para intervenir corresponde a quien ostenta en la competencia material para actuar sobre el bien jurídico que se pretende proteger, constituyendo en este caso el deporte una materia sobre la que la competencia de la Comunidad Autónoma es exclusiva, sin perjuicio de las limitaciones ya advertidas en el análisis competencial.
161. A esta interpretación podría oponerse, no obstante, el llamamiento que la exposición de motivos realiza a la competencia en materia de profesiones tituladas, recogida en el apartado 22 del artículo 10 EAPV, así como el rango de la iniciativa, que parece atender asimismo a la reserva legal del artículo 36 CE.
162. Ahora bien, incluso con la interpretación más amplia de lo que debe ser considerado como título a los efectos de una profesión titulada esto es, aquella que entiende por título simplemente la posesión de estudios superiores —lo cual nos llevaría a considerar lo dispuesto al respecto en el artículo 3.5 de la LOE—, el anteproyecto rompe el esquema de las profesiones tituladas al considerar también como títulos oficiales los federativos y admitir la posibilidad de acceder a las profesiones acreditando su cualificación a través de otros medios o vías alternativas que se perfilan, además de en el ya citado artículo 2.6, en la parte final de la norma como



formaciones oficiales incompletas, certificados de competencia, experiencia profesional formalmente reconocida o el concurso de más de una de esas circunstancias.

163. Además de lo anterior, hay también otros motivos o fundamentos que legitiman la intervención del legislador autonómico en esta cuestión.
164. Tal y como hemos adelantado en el análisis competencial de la iniciativa, la intervención del legislador en esta cuestión parte de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución (CE); artículo que reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas (apartado 2), y prevé, en último término, que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
165. Hemos adelantado también que, como tales principios rectores de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección han de informar la actuación de todos los poderes públicos, ex artículo 53.3 CE.
166. Incluso el propio Estado ha considerado intervenir legislativamente en la regulación de estas profesiones, si bien no se ha llegado a materializar en un proyecto de Ley presentado ante el Parlamento, aunque sí existió un borrador para la ordenación y regulación del ámbito profesional de la actividad física y deportiva. Esa omisión estatal no impediría, sin embargo, que sean las comunidades autónomas las que, atendiendo al mandato constitucional del artículo 43 CE, hagan frente a la cuestión, siempre y cuando se respeten, además de los límites competenciales ya enunciados, otros principios constitucionales como el de la igualdad o el de la unidad de mercado.
167. Prueba de lo anterior es la aprobación de la LEPDCat, así como la reciente aprobación de la Ley extremeña 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura (LEPDEx). En ambos casos, el parlamento autonómico correspondiente ha procedido a regular las profesiones del deporte en términos similares a los del anteproyecto, sin que una ley estatal haya procedido a establecer cuáles son las profesiones tituladas en el campo deportivo.
168. Además, es preciso recordar que el conflicto por la aprobación de la LEPDCat entre el Estado y la Administración catalana—ley que ha servido de modelo al anteproyecto—dio lugar al Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, por el cual se consideraron resueltas las discrepancias en relación a las disposiciones contempladas en este Acuerdo, llegando a una serie de compromisos que han sido tenidos en cuenta en la redacción del anteproyecto, lo cual contribuye a superar las dudas que puedan subsistir en torno a la competencia de la Comunidad Autónoma para afrontar esta regulación, sin perjuicio de que tampoco se pueda excluir la posibilidad de que, en el futuro, sea el legislador estatal quien, a través de sus propios títulos competenciales, como, por ejemplo, a través de la especial vinculación del deporte con la salud,



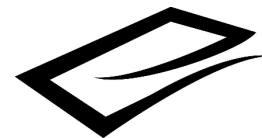
intervenga legislativamente en este campo con posibles consecuencias sobre las leyes autonómicas que se encuentren en vigor en ese momento.

B) El libre acceso a la realización de actividades y prestación de servicios:

169. Más allá de la cuestión competencial interna y al margen de la existencia de legítimos motivos, lo cierto es que el anteproyecto introduce una serie de barreras a la prestación de servicios dentro del mundo del deporte que deben ser analizadas a la luz de las directivas europeas dictadas para garantizar la libre competencia y el libre acceso a la prestación de servicios: concretamente la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, incorporada al derecho interno mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, y la Directiva de Servicios, cuya incorporación se ha producido fundamentalmente —aunque no únicamente— a través de la LAASE.
170. En cuanto al reconocimiento de cualificaciones profesionales, la Directiva 2005/36/CE establece como principio general que los estados miembros no podrán restringir, por razones de cualificación profesional, la libre prestación de servicios en otro estado miembro, siempre que se encuentren establecidos legalmente en otro estado miembro para ejercer en él la misma profesión.
171. Lo anterior no excluye el que, como pretende el anteproyecto, el prestador de servicios deba estar sujeto a la aplicación de las normas disciplinarias del lugar de acogida que estén relacionadas directa y específicamente con las cualificaciones profesionales, por ejemplo, la definición de las profesiones, la gama de actividades que abarca una profesión determinada o que le está reservada, el empleo de títulos y la negligencia profesional grave que se encuentre directa y específicamente relacionada con la protección y la seguridad del consumidor.
172. Tal y como refleja la parte expositiva de la citada Directiva 2005/36/CE, la garantía que confiere a las personas que han adquirido sus cualificaciones profesionales en un estado miembro para acceder a la misma profesión y ejercerla en otro estado miembro con los mismos derechos que los nacionales debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento por el profesional migrante de las condiciones de ejercicio no discriminatorias que pueda imponerle este último estado miembro, siempre que tales condiciones estén justificadas objetivamente y sean proporcionadas.
173. Desde esta perspectiva, el artículo 18 del anteproyecto elimina cualquier posible debate sobre esta cuestión, al remitirse a los tratados internacionales y a las normas comunitarias y a las disposiciones estatales de transposición, a la hora de reconocer las cualificaciones profesionales obtenidas en estados miembros de la Unión Europea o en estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.

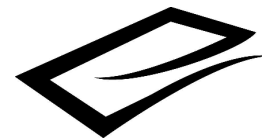


174. Desde la perspectiva de la Directiva de Servicios, la cuestión resulta algo más complicada. Uno de los principales objetivos de esta directiva es también, al igual que la anterior, el de facilitar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en la Unión Europea, con previsión de un ámbito de aplicación amplio, en el que, con carácter general y sin perjuicio de la existencia de ciertos sectores excluidos y del reconocimiento de la especificidad de determinadas actividades, se incluyen todos los servicios prestados a cambio de una remuneración.
175. La principal norma de trasposición interna de esta Directiva, esto es, la LAASE, también contempla dentro de sus objetivos establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en esta ley, no resulten justificadas o proporcionadas
176. El artículo 5 de la LAASE, por su parte, considera excepcional cualquier régimen autorizador para el acceso a una actividad de servicios o el ejercicio de la misma; excepción que únicamente podrá imponerse cuando concurran las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y que habrá de motivarse suficientemente en la ley que establezca ese régimen autorizador.
177. Por su parte, el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), en redacción dada por la Ley Ómnibus, establece que las administraciones públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Este mandato es reproducido también en el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; ley cuya entrada en vigor se pospuso un año después de la fecha de su publicación, el 2 de octubre de 2015.
178. Es decir, corresponde en principio al legislador escoger las opciones normativas que estima convenientes pero, si se trata de introducir nuevas medidas que afectan a la libre prestación de servicios, no puede obviar en su valoración considerar las diferentes opciones existentes para adoptar, en su caso, la menos restrictiva.
179. Es en este marco donde debe ser examinado el anteproyecto, en la medida en que pretende introducir barreras a la libre prestación de servicios en el campo de los profesionales del deporte que no se limitan a la exigencia de determinada cualificación unida a títulos académicos o profesionales (artículos 4, 5 y 6), sino que incluye también otras barreras al libre acceso a la prestación de los servicios como pueden ser la



obligatoriedad de inscripción en un registro (artículo 10), o la posibilidad de establecer por el Gobierno un régimen autorizador aún no definido (artículo 19.1). Por otro lado, introduce también barreras al libre ejercicio de esas profesiones al establecer una reserva de denominaciones (artículo 9), la exigencia del aseguramiento de la responsabilidad civil (artículo 13), así como otras medidas restrictivas en materia de publicidad (apartados 2 y 3 del artículo 19).

180. A la hora de analizar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de acceso, y aunque la Agencia Vasca de la Competencia no lo ha considerado debidamente acreditado, esta Comisión considera difícilmente cuestionable la existencia de una conexión entre la correcta práctica deportiva y la salud y seguridad de aquéllos que lo practican. Esa relación ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional y, si bien no está justificada mediante datos empíricos o estadísticos, sí tiene su reflejo tanto en el expediente como en la exposición de motivos del anteproyecto.
181. Para la citada agencia, la profesionalización del deporte genera una desproporción evidente y manifiesta por su incidencia en la libre prestación de servicios, creando una barrera de entrada y una restricción en la oferta de servicios profesionales no justificada, ya que, a su juicio, no supone en realidad un aumento en los estándares de protección de la seguridad y de la salud. Considera, así, que las barreras introducidas no superan ni el primer elemento del test de proporcionalidad porque no son idóneas para obtener una mejora evidente en la salud y seguridad de la práctica deportiva.
182. Por nuestra parte, y sin perjuicio de reconocer las dificultades a las que nos enfrenta el principio de proporcionalidad, no podemos concluir en este caso, con certeza absoluta, que se produce una desproporción objetivable, ya que los elementos diferenciadores escogidos — esto es, la salud y la seguridad — no son ni arbitrarios ni carentes de fundamento racional.
183. La exposición de motivos aduce a una similitud entre los modelos deportivos vasco y catalán, para “apropiarse”, en el buen sentido, de los fundamentos y razones que llevaron a aprobar en su día la LEPDCat, a lo que se añade la denuncia en el Plan vasco del deporte 2003-2007 de una falta de regulación profesional en ese mundo, que ha conducido a una irrupción en el mercado de personas carentes de formación y a situaciones de infracualificación.
184. Por otro lado, el anteproyecto adopta además dos declaraciones importantes con el fin de evitar cualquier posible discriminación de orden subjetivo o territorial. En el orden interno, el párrafo 7 del artículo 1 establece que su regulación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, asumiendo de esta forma los principios y garantías recogidos en esta ley. En el orden europeo e internacional, el ya citado artículo 18 elimina cualquier posible discriminación en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Estos dos preceptos, unidos a las reglas especiales previstas en el artículo 7 para los supuestos específicos, permiten desechar un trato discriminatorio, puesto que



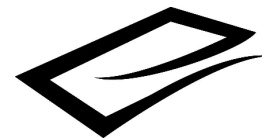
cualquier profesional que obtenga una cualificación homologada a la exigida en el anteproyecto podrá ejercer su actividad de forma habitual en el País Vasco, mientras que para las actuaciones ocasionales en la Comunidad Autónoma por parte de profesionales que no ejerzan de forma habitual en el País Vasco, este artículo también ofrece una solución abierta e integradora.

185. En este contexto, la exigencia de cualificación puede considerarse una barrera al acceso proporcionada y no discriminatoria.
186. Aunque la Comisión estima que debería haberse realizado un mayor esfuerzo para exponer todas las opciones existentes para conseguir esa finalidad, así como, si no la necesidad, sí las ventajas de la opción finalmente escogida frente a otras posibles, también es cierto que esa necesidad puede ser extraída implícitamente o, incluso, explícitamente de otros textos normativos. Prueba de esta última afirmación es lo señalado, en su momento, en el preámbulo del ya derogado Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuraban como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas (actualmente sustituido por el también citado Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre). Este texto ya reconocía cómo “(...) en los últimos años las actividades deportivas han cobrado una gran importancia en el ámbito del mantenimiento de la salud (...). Por otra parte, las prácticas deportivas (...) implican a menudo situaciones de riesgo o de peligrosidad objetiva que exigen, además de los necesarios conocimientos sobre las actividades y su práctica, una especial formación en materia de seguridad y de primeros auxilios”. De ahí que, “(...) la formación de los entrenadores demanda unas condiciones de calidad y exigencia que consideren como aspecto básico que el futuro técnico deportivo reúna una cultura apropiada y, particularmente, unos contenidos formativos asociados y acordes con las funciones y tareas que debe desempeñar”.
187. En cuanto al registro, su configuración como requisito indispensable precisa de una reflexión específica, en conexión con lo dispuesto en el artículo 19.1 del anteproyecto. Este último precepto contiene un mandato al Gobierno para garantizar la salud y la seguridad de las y los consumidores y usuarios, atribuyéndole asimismo, a nuestro juicio de modo excesivamente abierto, la capacidad para establecer los oportunos sistemas de autorización, declaración responsable, comunicación, evaluación acreditación e inspección con relación a la exigencia de cualificaciones.
188. La configuración del registro como requisito indispensable para el acceso y ejercicio de las profesiones debe ser considerado como un régimen de autorización; régimen en el que se prevé un control previo o *ex ante* del cumplimiento de los requisitos exigidos para desempeñar la actividad. Conforme al artículo 5 de la LAASE, la protección de la salud es uno de los motivos que pueden justificar la necesidad de un régimen de autorización de esta naturaleza pero, de acuerdo también con ese mismo artículo, la imposición de cualquier régimen de control sobre la actividad económica ha de atender también, según se ha adelantado, al principio de proporcionalidad; es decir, que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución



del objetivo que se persigue, porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

189. El departamento promotor, a la hora de justificar la necesidad de ese registro, ha aludido también a otros antecedentes, como el de la LEPDCat, y otros registros profesionales.
190. Ahora bien, aunque atendiendo al objetivo perseguido por el anteproyecto —la salud y seguridad— el legislador puede introducir un registro de estas características, también es cierto que en este caso la proporcionalidad de la medida puede resultar discutible, por cuanto este es uno de los casos en los que no se aprecia con nitidez la necesidad de esta fórmula de intervención previa, frente a otras posibilidades menos restrictivas. A efectos ilustrativos y dado que el propio departamento alude a otros antecedentes, consideramos de interés mencionar que la LEPDEx ha introducido, y considerado por tanto suficiente para resolver la misma cuestión, la obligación de presentar únicamente una comunicación previa.
191. Sometemos por ello al órgano promotor la posibilidad de valorar si para conseguir los objetivos del anteproyecto no resultaría suficiente con establecer una comunicación previa o, en su caso, una declaración responsable, unida a un registro de carácter informativo. Esta posibilidad constituye una medida menos restrictiva que la prevista en el anteproyecto y más acorde, a nuestro juicio, con los principios que pretende implantar la Directiva de Servicios.
192. En último término, de mantener el registro en los términos actuales, la Comisión considera que el anteproyecto debería avanzar algo más sobre su regulación, puesto que hay cuestiones, como la posible consideración del silencio, que, en el caso de entender que debiera ser negativo, requeriría rango de ley.
193. En cuanto a las barreras que se introducen al ejercicio de la actividad profesional, la Comisión no aprecia obstáculo alguno a introducir una reserva de denominaciones como la que prevé el artículo 9, dirigida a proteger a los consumidores, puesto que parece una medida igualmente proporcionada, consecuencia del propio reconocimiento legal de las profesiones.
194. Similar valoración merece la exigencia del aseguramiento de la responsabilidad civil que prevé el artículo 13, pues se trata de una exigencia que, al igual que la reserva de denominaciones, responde al objetivo de proteger a los consumidores y usuarios.
195. Cabe únicamente advertir de lo dispuesto sobre esta cuestión en el artículo 23.2 de la Directiva de Servicios. Según este artículo, “Cuando un prestador se establezca en su territorio, los estados miembros no exigirán necesariamente un seguro de responsabilidad profesional o una garantía a un [sic] en caso de que dicho prestador ya esté cubierto por una garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrece en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía y posibles exclusiones de la



cobertura en otro Estado miembro en el que ya esté establecido. Si la equivalencia sólo es parcial, los Estados miembros podrán pedir una garantía complementaria para cubrir los elementos que aún no estén cubiertos”.

196. La redacción de este artículo 13 podría también recoger esta circunstancia aunque, dado que el propio anteproyecto se remite en esta cuestión a un reglamento de desarrollo, es igualmente viable que sea el posterior reglamento el que la recoja expresamente.
197. En cuanto a las limitaciones en materia de publicidad del artículo 19, se ha de recordar que, además de las competencias ya señaladas en la materia deporte, la Comunidad Autónoma también dispone de competencias en publicidad, en colaboración con el Estado, ex artículo 10.27 EAPV. No obstante, como señaló el Tribunal Constitucional en su STC 146/1996, de 19 de septiembre, el ámbito competencial “publicidad” admite diferentes perspectivas, de tal forma que “en la ordenación jurídica de un sector, como el que ahora consideramos, el publicitario, pueden resultar involucradas las reglas definidoras de las competencias estatales y autonómicas en otros ámbitos materiales, en los que pudiera resultar comprendida la regulación de algunos aspectos o manifestaciones concretas de la actividad publicitaria, de modo que en la reglamentación de aquel sector es posible que, junto a la regla competencial específica en materia de publicidad puedan concurrir otros títulos competenciales distintos, debiendo examinarse, en tales casos, cuál de las reglas concurrentes es prevalente y, por tanto aplicable” (FJ 4).
198. En este caso, parece evidente que las limitaciones en materia de publicidad se afrontan desde la perspectiva del deporte y que no se pretende interferir, como se ha planteado en algún momento del procedimiento, en materia sanitaria. Por tanto, las limitaciones se refieren específicamente y afectan exclusivamente a los servicios prestados por los profesionales del deporte, pese a que se mantenga como último objetivo la protección de la salud y la seguridad de los que lo practican.
199. Así parece haberse entendido también en la LEPDEx, en la cual también se ha incluido un precepto relacionado con la publicidad de los servicios ofertados por los profesionales del deporte, en el que se proscribe el fomento de prácticas deportivas perjudiciales para la salud y seguridad de los usuarios y consumidores.
200. No obstante, la redacción adoptada en este caso por el anteproyecto proviene del campo sanitario, en el que la incorporación de productos y servicios al mercado debe seguir un proceso mucho más estricto que el que corresponde a los servicios deportivos. Por eso, no parece adecuado hacer referencia a que “no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para la salud” y tampoco la referencia adoptada de ese mundo a los “productos-milagro”. Se recomienda tomar como ejemplo en este caso la redacción dada a esta cuestión por la LEPDEx, ya que responde en mejor medida al objetivo perseguido.



201. En conclusión, el anteproyecto incide de modo intenso en el libre acceso a prestación de servicios deportivos y también, aunque con menor intensidad, introduce barreras al libre ejercicio de las profesiones incluidas en su ámbito de aplicación. No obstante, las limitaciones en ambos casos se atienen con carácter general a las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad exigidas tanto por la Directiva de Servicios como por la normativa interna de trasposición, si bien la inscripción en el registro como requisito previo para el acceso puede resultar excesivamente restrictivo, mientras que el régimen autorizatorio que anuncia el artículo 19.1 del anteproyecto se presenta excesivamente abierto, por lo que se recomienda reconsiderar su redacción y, en todo caso, concretar el régimen autorizatorio que se considera necesario, teniendo en cuenta siempre el principio de preferencia de la medida menos restrictiva.

C) La adecuación a los principios de buena regulación: simplicidad y seguridad jurídica:

202. El anteproyecto realiza una importante labor de ordenación en cuanto a la titulación exigible en cada caso para poder desempeñar las diferentes profesiones, aunque, por otro lado, tal y como ya hemos analizado, se aleja de las profesiones tituladas en sentido estricto, al admitir no sólo titulaciones académicas, sino también otros títulos de formación, certificados de competencia, la experiencia profesional formalmente reconocida o bien a través del concurso de estas circunstancias. Esta posibilidad se reconoce, en efecto, en el párrafo 6 del artículo 2, en un régimen que se complementa con una serie de disposiciones dispersas en la parte final, algunas de las cuales son de carácter transitorio.
203. Como decimos, de lo dispuesto en el artículo 2.6 y en la parte final —especialmente en la disposición adicional cuarta— se deduce que, además de las titulaciones académicas detalladas para cada profesión, existirán otras formas de acreditar la cualificación necesaria para ejercerlas. El problema se plantea al tratar de extraer del anteproyecto cuáles son esas vías diferentes a los títulos y cómo pueden hacerse valer frente a la Administración.
204. Se observa, de un lado, que las referencias del artículo 2.6 del anteproyecto resultan muy imprecisas, al acudir a conceptos como el de “o equivalentes a nivel profesional, así como mediante aquellos títulos o certificados de carácter oficial que resulten del ordenamiento vigente en cada momento”, cuya concreción resulta tremendamente dificultosa (en un panorama todavía incierto y en proceso de cambio); y de otro lado, que en las disposiciones adicionales séptima y octava, que contemplan acciones formativas específicas, se ponen condiciones a las mismas que revelan su limitada aplicabilidad en caso de inexistencia o insuficiencia (lo que introduce un concepto jurídico indeterminado preciso de interpretación) de títulos oficiales o certificaciones de profesionalidad en deporte escolar, o no reconocidas o sin plan formativo aprobado por el Estado.



205. La propia disposición adicional cuarta, clave en esta cuestión, presenta un mensaje con una redacción aparentemente contradictoria pues comienza declarando “sólo” la validez de los títulos académicos y certificados determinados en la ley, para luego atribuir al departamento competente en materia deportiva la determinación de los supuestos, condiciones y procedimientos para acreditar las cualificaciones adquiridas por otras vías diferentes.
206. Esa misma falta de claridad se aprecia también, como luego se verá, en la disposición transitoria primera, cuando se refiere al ejercicio profesional sin la cualificación requerida en la ley. No obstante, analizaremos con detalle esta disposición al analizar el articulado.
207. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, contempló expresamente, dentro de los principios de buena regulación, el principio de simplicidad, el cual exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo. Este principio ha sido actualizado y absorbido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, por el principio de seguridad jurídica, entendido como aquél a través del cual se persigue generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
208. La claridad de la regulación se convierte, así, en una obligación para quien tiene la iniciativa normativa y en un objetivo prioritario; objetivo que el anteproyecto, en lo que se refiere a las fórmulas alternativas de acreditar la cualificación, no alcanza.
209. La apertura para acreditar la cualificación a través de vías o medios que van más allá de las titulaciones académicas es un argumento de indudable peso la hora de considerar que no nos encontramos ante una regulación de profesiones tituladas, pero, por ese mismo motivo, podría resultar importante que tales vías alternativas queden abiertas y reconocidas en el texto articulado de la ley de manera clara y como alternativas igualmente válidas.
210. En la medida en que el propio promotor ha asumido como guía el modelo catalán, resulta procedente advertir de la modificación que se ha producido recientemente, en este sentido, en la LEPDCat por la Ley 7/2015, de 14 de mayo, con la introducción de un nuevo precepto 6 bis en el que se establecen los certificados válidos a los efectos de acreditar la formación.



II OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO

A) **Artículo 1. El Objeto y ámbito de aplicación:**

211. El artículo 1 del anteproyecto se refiere al objeto y ámbito de aplicación y en él hemos de advertir de dos cuestiones que presentan dificultades interpretativas.
212. En primer lugar, el párrafo 2 incide en el ámbito subjetivo y territorial de aplicación de la ley, uniendo ambos criterios a través de la “habitualidad”. La Comisión considera que debería realizarse un esfuerzo en determinar cuándo debe considerarse que los servicios son desarrollados en la Comunidad Autónoma de forma habitual, dado que son varias las posibilidades interpretativas. Es cierto que la norma sí define negativamente algún supuesto en el artículo 7—servicios profesionales desarrollados de forma ocasional o puntual—, pero sigue existiendo un excesivo margen interpretativo que convendría reducir en el propio anteproyecto.
213. En segundo lugar, este mismo párrafo se refiere también al ejercicio profesional a través de plataformas virtuales o de las tecnologías de la información, siendo esta cuestión posteriormente retomada en el artículo 20, aunque con un objetivo distinto. Se trata esta de una problemática novedosa que no ha sido contemplada en las normas autonómicas actualmente vigentes y sobre la cual no resulta arriesgado afirmar que se trata de una cuestión especialmente complicada a la cual el anteproyecto trata de dar una solución, pero que no deja de presentar también varias incógnitas.
214. El artículo 1.2 incluye estos servicios en el ámbito de aplicación de la ley cuando se produzcan dos requisitos: i) las personas físicas o jurídicas prestadoras de tales servicios tengan su sede en la Comunidad Autónoma y ii) puedan ser utilizados por consumidores o usuarios de la misma. Esta definición puede incluir dos supuestos diferenciados, tal y como se aprecia más claramente en el artículo 20. El primer supuesto sería aquél en el que los servicios están dirigidos a un público indeterminado a través de las nuevas tecnologías de información. El segundo sería aquel en el que las nuevas tecnologías se utilizan únicamente para salvar la distancia física, pero referida a servicios prestados a destinatarios conocidos.
215. En el primer caso —que podría identificarse con lo previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 20— la definición del artículo 1.2 deja fuera del ámbito de la ley aquéllos casos en los que los servicios, aun desarrollados en la Comunidad Autónoma, fueran exclusivamente dirigidos al exterior; solución que puede dar lugar a resultados paradójicos. Por ejemplo, un profesional sin la adecuada preparación podría ofrecer sus servicios desde el País Vasco, siempre que la tecnología permita que esos servicios no puedan ser utilizados por usuarios en nuestra Comunidad Autónoma.
216. En el segundo de los supuestos, esto es, cuando los destinatarios sean determinados —que podría identificarse con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 20—, si el



prestador o el destinatario de los servicios residieran fuera de la Comunidad Autónoma, el profesional en cuestión quedaría también fuera del ámbito de aplicación del artículo 1.

217. En conclusión, el anteproyecto ha tratado de regular los aspectos básicos de una nueva forma a través de los cuales estos profesionales pueden desarrollar su actividad, como es el de la utilización de las nuevas tecnologías, pero no deja de presentar una solución inacabada y plantea, además, un efecto inerte, por lo que se recomienda una mayor reflexión para tratar de dar una mejor solución a una cuestión incipiente, pero de gran potencial y con innegable futuro.

B) Artículo 9. Reserva de denominaciones:

218. Aunque la posibilidad de establecer esta reserva ya ha sido analizada, la Comisión considera también que debería tener su reflejo en el régimen sancionador de la LDPV, en la línea de lo que el anteproyecto contiene en sus disposiciones finales primera y segunda.

C) Artículo 11. Deberes en el ejercicio profesional:

219. Los deberes que se incluyen en este artículo tienen como claro referente los previstos en el artículo 9 de la LEPDCat, si bien el encabezado de este artículo se refiere a principios y deberes. Este hecho parece haber influido en la redacción del párrafo 2 que establece que el incumplimiento de los citados principios y deberes dará lugar, en su caso, a la exigencia de las correspondientes responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.
220. Al margen de esa redacción, y aun cuando parece evidente que la alusión a las responsabilidades penales no pretende incidir en la legislación penal, ni realizar una valoración en este sentido o tratar de rellenar una “ley penal en blanco”, se aconseja eliminar toda referencia a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se producirá, en su caso, por el cumplimiento del tipo penal y la existencia de los demás elementos que configuran el delito, pero no por el simple incumplimiento de los deberes establecidos por el artículo 11.
221. Por otro lado, se recomienda igualmente depurar la lista de deberes, limitándose a enunciar aquéllos en los que se aprecie conexión, aunque sea remota, con los objetivos perseguidos por la norma, esto es, referidos a la salud y seguridad de quienes practican deporte, y eliminando aquellos que, aun asumiendo que persiguen loables objetivos, son más propios de códigos profesionales o deontológicos, y gozan de protección dentro otros ámbitos normativos. Así, a título enunciativo, esta Comisión no aprecia conexión alguna entre la salud y seguridad y los deberes contenidos en los apartados: f) cumplimiento escrupuloso de obligaciones deontológicas correspondientes; d) ser portadores de los valores de juego limpio; q) promover el aprovechamiento respetuoso del medio natural; s) no aceptar retribuciones o



gratificaciones de terceros que puedan condicionar los resultados; t) abstenerse de declaraciones públicas que provoquen daño o descrédito en las profesiones o profesionales; v) garantizar en los deportes con animales el buen trato a éstos; w) garantizar una adjudicación de uso de instalaciones deportivas no discriminatoria por razón de género, o; x) cualesquiera otros que, en su caso, determine el correspondiente colegio profesional.

D) Competencia en materia de primeros auxilios. Artículo 15 y disposición transitoria cuarta:

222. El artículo 15 impone a las personas que ejerzan alguna de las profesiones con presencia física reguladas en el anteproyecto, incluidos los voluntarios, acreditar formación en primeros auxilios, para cuya concreción se remite a un posterior reglamento. Con respecto a los voluntarios, esa exigencia se reafirma en la disposición transitoria quinta.
223. La exigencia de una formación en primeros auxilios para los profesionales que tutelan o dirigen a quienes practican algún deporte puede considerarse coherente con el objetivo último que persigue la norma—la salud y seguridad de las personas— y no parece desproporcionada. Sí puede resultar sorprendente que esa formación o esos conocimientos no estén ya integrados en los títulos contemplados por el anteproyecto, puesto que parecen dos cuestiones inescindibles.
224. La inclusión del voluntariado en este artículo tampoco parece muy coherente, teniendo en cuenta que el artículo 1 excluye a este colectivo de su ámbito de aplicación, mientras que la disposición adicional tercera y la disposición transitoria quinta se refieren específicamente a este colectivo. Desde un punto de vista sistemático, sería más adecuado que todo lo relacionado con las voluntarias y los voluntarios se contemplara en la citada disposición adicional.
225. Este artículo 15 debe, no obstante, ponerse también en conexión con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, referida al incumplimiento del deber de obtener la cualificación en primeros auxilios.
226. El párrafo 2 de esta disposición establece que el incumplimiento del deber de obtener tal formación en el plazo señalado en el párrafo 1 podrá ser considerado causa de remoción al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como un supuesto de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52.a) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo [la referencia al Estatuto de los Trabajadores debe actualizarse aludiendo al artículo 52.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre].



227. Una vez que se agote el periodo transitorio que se prevé en esta disposición, la combinación de lo dispuesto por el artículo 15 y la disposición transitoria cuarta tendrá unos efectos sobre quienes no acrediten esta exigencia que conviene distinguir.
228. Para quienes ya estén ejerciendo su actividad profesional los efectos serán, asimismo, dispares según se trate de profesionales que trabajan por cuenta ajena o trabajadores autónomos.
229. En este último caso, del párrafo 1 de esta disposición transitoria parece desprenderse que, a partir del 1 de enero de 2019, quien no haya acreditado la formación necesaria en primeros auxilios deberá de dejar de ejercer su actividad, al menos mientras no la acredite en los términos fijados por un futuro reglamento.
230. En cuanto a los trabajadores por cuenta ajena, lo primero que llama la atención es que la responsabilidad recae exclusivamente en el empleado. El anteproyecto contempla la remoción del puesto de trabajo si la relación es funcionarial o la disolución de la relación laboral por una de las causas objetivas que contemple el Estatuto de los Trabajadores. En segundo lugar, llama igualmente la atención las consecuencias extremas contempladas por el anteproyecto, puesto que, desde la perspectiva de la proporcionalidad, pueden resultar cuestionables.
231. Los efectos de la disposición transitoria cuarta sobre los profesionales que quieran acceder al ejercicio de las profesiones a partir del 1 de enero de 2019 también resultan difíciles de calibrar ya que, al menos en lo que respecta al ámbito público, no queda claro si se pretende incidir en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco —aunque el anteproyecto no prevé su modificación—, o si bastaría con una modificación de las relaciones de puestos de trabajo en las que se añadiera la exigencia de esta formación específica en el caso de los profesores de educación física.
232. Todas estas cuestiones se plantean, además, sin conocer datos concretos sobre esta exigencia, puesto que el artículo 15 se remite al reglamento en cuanto a las condiciones y al procedimiento de acreditación de esa formación.
233. A la vista de todas estas interrogantes, la Comisión somete al promotor de la iniciativa la posibilidad de reconsiderar los extremos efectos que pueden derivar de la aplicación de la disposición transitoria cuarta. Además, expresado en sus actuales términos (podrá ser considerado...), el mensaje puede parecer potestativo o interpretativo, en dos campos en los que no cabe descartar alguna fricción con el ordenamiento estatal dictado con carácter básico (función pública docente), o con carácter exclusivo (legislación laboral).
234. En materia de función pública docente, el campo de básico que corresponde al Estado ex artículo 149.1.18 CE se ha visto ampliado por vía del artículo 149.1.30 CE, lo cual ha supuesto una simultánea restricción de las competencias autonómicas, que se ha



justificado en la necesidad de procurar la calidad y la viabilidad del sistema educativo. En cuanto a la referencia al Estatuto de los Trabajadores, es preciso recordar que la legislación laboral es una competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.7 CE y que las competencias autonómicas son únicamente de ejecución.

E) Artículo 16. Ejercicio de las profesiones sin amparo en la ley:

235. El artículo 16 vuelve a incidir en las posibles responsabilidades penales, si bien en este caso referidas a quienes ejerzan las profesiones contempladas por el anteproyecto sin la debida cualificación.
236. En su actual redacción no puede asociarse ningún efecto concreto a este artículo, ya que actúa como un simple recordatorio de la normativa que resulte aplicable, así como de las consecuencias que resulten del mismo. No obstante, uno de los efectos nada desdeñables que puede derivarse de ligar una profesión con una titulación determinada es el posible nacimiento de una responsabilidad penal, ya que el artículo 403 del vigente Código Penal contempla el delito de intrusismo mediante una “Ley penal en blanco”, esto es, su concreción obliga a acudir a otras disposiciones, como la que nos ocupa, para completar su contenido. Es conveniente, por tanto, analizar cómo el anteproyecto puede afectar a la definición penal
237. En la configuración de este delito de intrusismo, tal y como figuraba definido en el Código Penal de 1973, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 111/1993, de 25 de marzo, estimó que el término “título oficial” a que se refería el artículo 321.1 del Código Penal no podía ser entendido sino como “título académico oficial”. Por ello, consideró que cualquier interpretación de dicho artículo que admitiera la sanción como delito de intrusismo de injerencias únicamente en profesiones que exigiesen “título oficial”, pero no “título académico oficial”, vulneraba frontalmente el principio de legalidad penal y constituía un caso de extensión *in malam partem* del alcance del tipo a supuestos que no podían considerarse incluidos en él.
238. El vigente Código Penal modificó la anterior definición del delito de intrusismo, contemplando separadamente el ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente “título académico” de aquéllos que exigen únicamente un “título oficial”. Un tercer supuesto agravado recoge el supuesto en el que el culpable se atribuye públicamente la cualidad de profesional.
239. La nueva redacción del nuevo Código Penal tampoco resolvió definitivamente la interpretación que debe darse a la expresión “título oficial”. La Fiscalía General del Estado, en su Instrucción 2/1996, entendió, junto con gran parte de la doctrina, que el legislador establecía aquí un tipo atenuado autónomo, sancionando con una pena inferior la injerencia en profesiones cuyo ejercicio exija un título oficial no académico.
240. La cuestión, no obstante, tampoco quedó definitivamente resuelta porque, en la ya citada STC 111/1993, el Tribunal Constitucional también declaró contrario al principio



constitucional de proporcionalidad entre el injusto y la pena conceder la intensa protección penal frente a injerencias en profesiones que, precisamente por no requerir un título académico oficial, no afectan a bienes jurídicos de la máxima relevancia constitucional como la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad, pues en tales casos estimaba que bastaría con la mera imposición de una sanción administrativa.

241. Con posterioridad, el Tribunal Constitucional no ha dispuesto de muchas ocasiones para analizar el cambio que supuso en la configuración del delito de intrusismo la nueva definición del mismo incluida en el vigente Código Penal. En su Sentencia 174/2000, de 26 de junio, se enfrentó a un recurso de amparo en el que la condena por intrusismo se había dictado ya conforme al nuevo código, pero no analizó esta modificación puesto que aplicó el inciso primero (título académico) del artículo 403 del Código Penal a una profesión —la de gestor administrativo— que, en realidad, sólo requería título oficial. Se limitó a reiterar su doctrina tradicional, añadiendo, además, que en el ejercicio genérico de esa concreta profesión no observaba un interés público esencial que, en el juicio de proporcionalidad, se hiciera merecedor del grado de protección dispensado a través del sistema penal de sanciones.
242. En consecuencia, no se pronunció sobre la eventual constitucionalidad del inciso segundo o sobre si, al menos desde la perspectiva del principio de legalidad, existía una nueva cobertura para la sanción penal de estas conductas.
243. En este contexto, fue el Tribunal Supremo el que, en su Sentencia 2066/2001, de 12 noviembre, trató de dar una interpretación que integrara la nueva redacción del Código Penal con la doctrina del Tribunal Constitucional. Para ello estableció las siguientes pautas: i) restringir la aplicación del tipo atenuado del inciso segundo a supuestos en que el intrusismo se produzca en profesiones que requieran una especial capacitación de la que dependan bienes jurídicos de la máxima relevancia constitucional, como son la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad; ii) excluir radicalmente su aplicación en aquellas profesiones en las que ya existe pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional afirmando que no se observa en el ejercicio genérico de la misma un interés público esencial que en el juicio de proporcionalidad le haga merecedor de tan alto grado de protección como la dispensada a través del sistema penal de sanciones (p.ej. agentes de la propiedad inmobiliaria o gestores administrativos; iii) interpretar el precepto atendiendo esencialmente al bien jurídico protegido, la apariencia de verdad que poseen determinados títulos y que constituye mecanismo necesario y esencial para garantizar a los ciudadanos la capacitación de determinados profesionales. Bien jurídico de carácter colectivo y no individual, cuya lesión afecta a la sociedad y no a particulares intereses patrimoniales individuales o de grupo, como pueden ser los miembros de un colectivo profesional.



244. De acuerdo con esta doctrina, el único interés que puede fundamentar y legitimar cualquier restricción penal al acceso a una profesión mediante la exigencia de un título oficial, académico o no, es el interés público.
245. Volviendo al anteproyecto que nos ocupa, ya hemos reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de este dictamen la existencia de una íntima conexión entre la adecuada práctica del deporte y la salud y seguridad de los deportistas. Aunque ceñido exclusivamente a la profesión de profesor de educación física, el propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 194/1998 de 1 octubre, estableció de modo explícito esa conexión al señalar que “la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte (art. 43.3 CE) y que ambas actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud —a la que se refiere el apartado 1 del mismo art. 43 CE—. De suerte que no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, a las que los poderes públicos vienen respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de cualificación para los profesionales dedicados a las mismas y de modo especial, para quienes tienen como función la de docentes de esta materia en los centros de enseñanza. Debe, además, tenerse en cuenta que los destinatarios de tales actividades son en una buena parte de los casos, menores de edad, y ello redonda en unas mayores exigencias de preparación y responsabilidad para quienes asumen dicha docencia.”
246. Esta argumentación llevó al Tribunal Constitucional a rechazar el amparo solicitado por haber sido condenado el recurrente como autor de una falta de intrusismo del art. 572.2 del Código Penal de 1973.
247. Resulta obligatorio reconocer, por tanto, la posibilidad de que el ejercicio de alguna de las profesiones reguladas por el anteproyecto sin la adecuada titulación pueda dar lugar a alguno de los tipos penales contemplados en el artículo 403 del vigente Código Penal, según se trate de un título oficial o académico. Ninguna duda cabe al respecto con respecto a la profesión de profesor de educación física, si bien en ese caso no sería por efecto del anteproyecto, puesto que la ley penal en blanco ya habría sido completada con anterioridad por la legislación estatal dictada en materia educativa.
248. Más complicado resulta determinar si esa protección podría extenderse al resto de profesiones del anteproyecto. El párrafo 7 del artículo 7 considera títulos o certificaciones oficiales, además de las expedidas por la Administración educativa, las expedidas por la Administración laboral en el ámbito de la legislación sobre cualificaciones profesionales y las expedidas por la Administración deportiva en el marco de la legislación deportiva.
249. Ahora bien, aunque finalmente se refiera a unas titulaciones determinadas, lo que el anteproyecto pretende imponer es una adecuada cualificación profesional, que puede acreditarse en cada caso mediante diferentes títulos y, en algunos casos, incluso

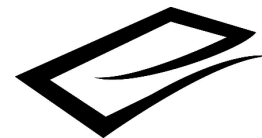


mediante formación oficial incompleta y certificados académicos o de profesionalidad que acreditan las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. En otros casos, se limita a requerir una “formación específica” relacionada con la concreta actividad a desarrollar.

250. Siendo esta la situación, la Comisión considera que dejando al margen la de profesor de educación física por los motivos ya expuestos, otorgar protección penal a su ejercicio a través de todas esas titulaciones parece excesivo en el resto de las profesiones contempladas, siendo suficiente la protección que ofrece el ámbito administrativo y ello, pese a la trascendencia del bien jurídico que se pretende defender con la regulación de estas profesiones. No obstante, hasta que no se clarifique con carácter definitivo el alcance del tipo atenuado previsto en el inciso segundo del artículo 403 del Código Penal, no parece prudente avanzar una conclusión definitiva sobre esta cuestión.

F) Actividades realizadas en régimen de voluntariado o análogas:

251. El anteproyecto reconoce, en diferentes momentos, la existencia de personas que desarrollan la actividad, o parte de las funciones que se atribuyen a los profesionales del deporte, sin recibir una remuneración por desarrollar esa actividad. Este elemento es utilizado en su artículo 1 para excluir del ámbito de aplicación de la norma las actividades realizadas en el marco de relaciones de voluntariado, amistad, familiares y análogas al considerar que, no existiendo remuneración, no pueden ser considerados como profesionales del deporte.
252. Sin embargo, el propio anteproyecto asume, en la disposición adicional tercera, que la salud y seguridad de quienes practican deporte guiados por terceros, es igualmente protegible, independientemente de si existe ánimo de lucro en esa relación; de ahí que exija al voluntariado idénticos requisitos de cualificación a los establecidos para los profesionales. También el artículo 15, tal y como hemos adelantado, exige al voluntariado acreditar la misma formación en primeros auxilios que se exige a los profesionales.
253. El legislador puede afrontar esta realidad desde diferentes perspectivas y con resultados también diferentes. Las dos leyes autonómicas actualmente vigentes que regulan las profesiones del deporte han adoptado en esta cuestión posiciones opuestas. La LEPDCat ha optado por excluir de su ámbito de aplicación a los voluntarios, si bien en su reciente reforma de 2015 los atiende de forma puntual, y la LEPDEx ha optado por incluirlos con todas las consecuencias, siendo ambas opciones igualmente legítimas. Mientras en el caso catalán se ha considerado que no es este el campo a través del cual debe condicionarse la actividad del voluntariado, en Extremadura se ha optado por preponderar la salud y la seguridad de quienes practican deporte, aunque ello pueda afectar a la actividad que se ha venido desarrollando por el voluntariado.



254. El anteproyecto adopta una posición intermedia con respecto a este colectivo; postura que pretende mantener un equilibrio entre las dos posturas anteriores, pero que no deja de presentar cierta indefinición. En inicio (artículo 1.4), se excluye a este colectivo de la aplicación de la norma. Posteriormente, les exige la misma cualificación que a los profesionales (disposición adicional tercera), incluida la formación en primeros auxilios (artículo 15), para, nuevamente, volver a rebajar ese nivel de exigencia contemplando una posible dispensa para colectivos específicos, a los que podría exigirse una cualificación diferente a la exigida a los profesionales (último inciso de la disposición adicional tercera). Finalmente, prevé que también este colectivo pueda acceder a las habilitaciones provisionales y reconocimientos de las competencias previstas para los profesionales (disposición transitoria quinta), y se establece un plazo transitorio de adaptación superior en un año al de los profesionales (disposición final sexta).
255. Se ha de partir, no obstante, de la exclusión del artículo 1.4, por lo que debe entenderse que este colectivo no tendría que cumplir más que aquellos aspectos del anteproyecto que así se establecen de forma expresa. Esto no ocurre con el resto de obligaciones exigidas a los profesionales, como el acceso al registro (aunque podrían acceder voluntariamente si disponen de la cualificación) o el aseguramiento de la responsabilidad civil. Tampoco estaría sujeto a ningún otro posible régimen autorizador que pudiera derivar del artículo 19.1, ni estaría sometido al mismo régimen sancionador que los profesionales, aunque no queda claro si le afectará la reserva de denominaciones del artículo 9, puesto que deben disponer de la cualificación necesaria.
256. Se ha de reconocer en el anteproyecto el intento de lograr un equilibrio entre los intereses en conflicto: el de la continuidad de la actividad en este campo del voluntariado y el de la seguridad y salud de quienes practican algún deporte. No obstante, se ha de advertir asimismo que, tal y como está planteado, se corre el riesgo de que la exigencia de cualificación para el voluntariado, al limitarse a un mero enunciado cuyo incumplimiento no acarrea consecuencia alguna, quede únicamente en el terreno testimonial.

G) Formación específica. Disposición adicional quinta:

257. La disposición adicional quinta establece una serie de reglas para determinar la formación específica a la que el anteproyecto alude en varias ocasiones. La habilitación al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva que plantea el párrafo 3 resulta excesivamente indeterminada, ya que se limita a habilitarlo para especificar el nivel de formación específica “en determinados supuestos”.
258. La Comisión considera que esa habilitación precisa de mayor concreción, y no sólo por una cuestión de técnica normativa, sino porque la potestad reglamentaria originaria está atribuida al órgano colegiado Consejo de Gobierno (artículos 29 EAPV y 16 de la Ley de Gobierno) y, como hemos dicho en numerosas ocasiones, cabe realizar una remisión al titular de la potestad reglamentaria de segundo grado por motivos



técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por la norma, pero siempre que venga orientada por aquella y la llamada a su complemento no sea incondicionada o carente de límites ciertos y estrictos.

H) Disposición adicional séptima. Formación en actividades con deportistas en edad escolar:

259. En este caso, la Comisión sólo quiere advertir que la solución que esta disposición apunta para la inexistencia o insuficiencia de título oficiales o certificaciones de profesionalidad de carácter específico para las y los monitores y entrenadores en actividades polideportivas con deportistas en edad escolar, deberá entenderse, en todo caso, sin perjuicio de las competencias de desarrollo normativo y ejecución que los territorios históricos ostentan en materia de deporte escolar, ex artículo 7.b).6 de la Ley 27/83, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (LTH).

I) El régimen transitorio:

260. El régimen transitorio incluye una serie de precauciones para que el anteproyecto no provoque un colapso en la situación actual del sector. Nos detendremos únicamente en aquellos mensajes que pueden plantear problemas aplicativos.

Disposición transitoria primera. Ejercicio profesional sin cualificación requerida:

261. En este caso nos encontramos ante otro de los supuestos en los que la claridad del anteproyecto resulta mejorable.
262. En primer lugar, cabe llamar la atención sobre la forma de redactar varios de sus párrafos, en los que se introduce una excepción en un supuesto a su vez excepcional. Esta fórmula complica en exceso la comprensión del mensaje que, como veremos, se pretende trasladar.
263. Dentro de este régimen transitorio, el párrafo 3 atribuye a los “departamentos del Gobierno Vasco competentes” la implantación de unos procedimientos administrativos para acreditar la disposición de las competencias necesarias a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en aparente contradicción parcial con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, que atribuye expresamente al departamento competente en materia de deportes determinar tanto los supuestos como las condiciones y procedimientos para acreditar la cualificación a través de vías diferentes de las titulaciones académicas. La integración de este precepto —el párrafo 3 de la disposición transitoria primera— dentro del régimen transitorio permite pensar que se está refiriendo a un régimen excepcional, diferenciado del general previsto en la disposición adicional cuarta y especialmente dirigido a los supuestos contemplados en los párrafos 1 y 2, pero, en cualquier caso, precisa de una clarificación.



264. Otro ejemplo de la falta de claridad es el párrafo 4 de esta disposición transitoria primera. Su ubicación permite interpretar que se está refiriendo a quienes, a la entrada en vigor del anteproyecto, no dispongan de la cualificación exigida, pero desarrollan las actividades profesionales reguladas de forma continuada o no esporádica. Su redacción, sin embargo, se refiere a “dejar sin efecto la habilitación para el ejercicio profesional”, por lo que también puede interpretarse que se refiere a personas que ya disponen de esa habilitación, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
265. La diferenciación es importante ya que, en el primer caso, se trataría de una excepción sobre una regla general de habilitación, que se aplicaría sobre personas que no disponen de la cualificación exigida. Es decir, no se les habilitaría porque no tendrían de la cualificación, pero nunca habrían estado habilitados conforme a lo dispuesto en el anteproyecto. En el segundo caso, sin embargo, nos encontraríamos ante la revocación de un acto declarativo de derechos para cuya revisión la Administración debe acudir a las causas y vías previstas en la LRJPAC. Debe, por tanto, clarificarse su objeto teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa básica sobre la revisión de los actos en vía administrativa.
266. Además de la anterior advertencia, cabe también llamar la atención sobre el excesivo margen de apreciación que en ese mismo párrafo 4 se atribuye al departamento competente en materia deportiva a la hora de considerar, en el marco de ese régimen transitorio, cuáles son las actividades profesionales cuyo ejercicio sin la cualificación exigida ponen en riesgo grave y directo la salud y seguridad de las personas. En este caso, dado su carácter excepcional, se recomienda clarificar ese régimen en el propio anteproyecto, bien incluyendo una relación de esas actividades, actualizable vía reglamentaria, bien estableciendo los criterios a los que debe someterse el departamento para realizar dicha determinación.
267. Una situación similar se produce en el párrafo 5 de esta misma disposición transitoria primera, aunque también se detecta alguna diferencia, ya que la habilitación, al contrario que en el caso anterior, es en este caso automática para aquellos casos en los que la correspondiente federación internacional o española permitan desarrollar las funciones de entrenador o entrenadora en las competiciones deportivas de alto rendimiento. Tanto la habilitación como su excepción, por tanto, vendrían establecidas, en su caso, por vía normativa.
268. El mensaje que parece trasladarse en este caso es también el de una habilitación automática general que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva podrá dejar sin efecto en ciertas modalidades o disciplinas deportivas. En este caso, el problema se encuentra también en el excesivo margen de apreciación que concede el anteproyecto ya que no se contempla ningún criterio, límite o supuesto, en el marco del cual, el departamento señalado pueda hacer efectiva esta contra-excepción.



269. En tercer lugar, debemos nuevamente plantear la reconsideración de un mensaje como el previsto en el párrafo 6 de la disposición transitoria, en relación con las consecuencias del incumplimiento del deber de acreditación de la cualificación profesional para los habilitados provisionalmente conforme a esta misma disposición transitoria, por los mismos argumentos anteriormente señalados con respecto al incumplimiento de la obligación de acreditación de formación en primeros auxilios, regulado en la disposición transitoria cuarta.

Disposición transitoria sexta. Reglamentaciones federativas:

270. Esta disposición establece un plazo para que las federaciones deportivas vascas adapten su reglamentación o aprueben las disposiciones necesarias para su aprobación e inscripción antes del 1 de enero de 2018. En el supuesto de que se incumpla tal función, que califica de pública y de carácter administrativo, resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 o 20 del Decreto 16/2006, de 31 de enero, de federaciones deportivas del País Vasco.
271. La Comisión estima que sería suficiente establecer el plazo en el cual las distintas federaciones han de adaptar su reglamentación o aprobar las disposiciones necesarias. El resto del precepto, de naturaleza más coercitiva, puede resultar superfluo al tratarse de un mensaje meramente aplicativo que no innova, ni lo pretende, el ordenamiento jurídico ya vigente.

Disposición transitoria séptima. Contratos vigentes a la entrada en vigor de la Ley:

272. La disposición transitoria séptima excluye la exigencia de cualificación prevista en el anteproyecto a las empresas con respecto a los contratos que hayan suscrito con las entidades del sector público para la prestación de servicios deportivos con anterioridad a su entrada en vigor; regla transitoria que esta Comisión considera innecesaria.
273. Innecesaria porque las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de las profesiones sólo serían exigibles, de acuerdo con la disposición final sexta, a partir del 1 de enero de 2019, mientras que esta disposición se refiere al momento en el que se produce la entrada en vigor, esto es, el día siguiente al de su publicación oficial, de manera que las empresas y profesionales tendrían tiempo suficiente hasta esa fecha para acomodarse a las nuevas exigencias de cualificación.
274. No se ha señalado, además, ningún motivo —o al menos, no se han incorporado al expediente— que justifique un diferente tratamiento, en cuanto al plazo para cumplir con la exigencia de cualificación, cuando se trata de empresas contratadas por la Administración; sobre todo, si se tiene en cuenta las extremas consecuencias que el anteproyecto contempla —despido objetivo o remoción del puesto— para los trabajadores por cuenta ajena, cuando esas exigencias no sean cumplidas en los plazos establecidos.



J) Disposiciones finales. La modificación de la LDPV:

275. En su parte final, el anteproyecto introduce dos modificaciones puntuales en los artículos 127 y 128 de la LDPV, introduciendo la tipificación de una nueva infracción muy grave y dos nuevas infracciones calificadas como graves.
276. Tanto la nueva infracción introducida en el artículo 127 de la LDPV, dedicado a las infracciones muy graves, como la introducida en el artículo 128 como nuevo apartado h) son consecuencia lógica de la exigencia de cualificación, registro o, en su caso, colegiación y el seguro de responsabilidad civil. En estos dos casos, la descripción de las nuevas infracciones es precisa y clara.
277. El nuevo apartado i) que se pretende introducir en el artículo 128 de la LDPV con una nueva infracción grave es diferente, pues alude genéricamente a un incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 11, 19 y 20 del anteproyecto.
278. Tal y como hemos señalado en otras ocasiones (dictámenes 118/2007 o 191/2008) corresponde al legislador la atribución de la potestad sancionadora (ley previa) y a la hora de describir las infracciones y sanciones correspondientes debe hacerlo con la mayor precisión y claridad posible, de tal manera que el ciudadano conozca, de antemano, y con la mayor certeza alcanzable, cuáles de sus conductas constituyen infracción y cuál es la respuesta punitiva que puede esperar (lex certa).
279. Otro de los grandes principios es el de proporcionalidad que, no sólo hace referencia a la tarea de fijar en concreto la sanción para cada infracción, sino también a la tarea de fijar la concreta calificación de la conducta infractora.
280. En este caso, la definición que el anteproyecto introduce en el nuevo apartado i) —mediante su remisión a los artículos 11, 19 y 20— constituye, a su vez, una amalgama de posibles infracciones que difícilmente puede concilarse con la claridad y precisión exigibles en el derecho sancionador. Asimismo, desde la perspectiva de la proporcionalidad, esa genérica referencia, especialmente la que corresponde al artículo 11 del anteproyecto en su totalidad, no parece muy adecuada, ya que se asimilan en cuanto a la gravedad de la infracción supuestos muy diferentes, tanto en su naturaleza como en su gravedad.
281. Atendiendo a un debido cumplimiento del principio de legalidad (artículo 25 CE) —del que es manifestación el de tipicidad—, sería preciso que la tipificación y calificación de las infracciones que se pretenden introducir en ese apartado concreto se determinaran con mayor certeza y precisión, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a la infracción introducida por la norma.



III OTRAS OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

282. Aunque en el análisis del contenido del anteproyecto ya se han adelantado algunas sugerencias sobre técnica legislativa, cabe realizar también las siguientes observaciones, atendiendo a lo dispuesto en las Directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 23 de marzo de 1993.
283. En el artículo 1 deben numerarse todos los párrafos. Concretamente, el párrafo 2 incluye a su vez dos mensajes diferenciados que deben ser numerados individualizadamente.
284. En este mismo artículo 1.2, la referencia a la sede debe acompañarse también del domicilio, ya que se refiere tanto a personas jurídicas como físicas.
285. El párrafo 6 de este artículo 1 establece una definición del término deporte excesivamente redundante, lo que no beneficia al mensaje. Se recomienda reducir su extensión eliminando el segundo inciso completo (Tal concepto... oficialmente), y el inicio del tercero (En virtud de ello, el término deporte...) retomando la definición a partir de “incluye a todas las actividades...”
286. En el artículo 2.3, donde dice tienen un carácter enunciativo, se recomienda eliminar el artículo indeterminado “un”.
287. El párrafo 4 de este mismo artículo 2 contiene un mensaje genérico dirigido a los profesionales que resulta superfluo y podría eliminarse.
288. El párrafo 2 del artículo 10 establece la adscripción del Registro de profesionales del deporte del País Vasco a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, entrando en un terreno organizativo más propio de los decretos de estructura. Se sugiere establecer únicamente la adscripción al departamento correspondiente.
289. En las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, se utilizan fórmulas gramaticales “como regla general” o, “en principio”, que relativizan y debilitan el mensaje normativo, por lo cual deberían eliminarse.
290. La disposición adicional cuarta contiene dos mensajes que, con su actual redacción, pueden parecer contradictorios. Para evitar este efecto, bastaría con eliminar el primer inciso o, de mantenerlo, únicamente dijera que el acceso y ejercicio de las profesiones puede realizarse a través de las cualificaciones acreditadas mediante los títulos académicos y certificados determinados en esta ley, esto es, eliminando la palabra “sólo” y la expresión “en principio”.



291. Las disposiciones adicionales quinta y sexta contienen mensajes normativos referidos a la formación específica exigida y a los niveles de actividad deportiva que, a tenor de lo dispuesto en las citadas directrices, deberían integrarse en el articulado de la norma.
292. Algo similar puede afirmarse con respecto a la disposición adicional undécima. Esta disposición realiza una atribución competencial al departamento competente en materia deportiva que también debería integrarse en el articulado de la norma.
293. Tal y como ya se ha advertido con respecto a la disposición transitoria cuarta, también en el párrafo 6 de la disposición transitoria primera, en el caso de mantenerse, la remisión al artículo 52.a) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, debe actualizarse aludiendo al artículo 52.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
294. La disposición transitoria sexta, referida al voluntariado, debe ser revisada o eliminada ya que, por un lado, la disposición adicional tercera ya establece que los requisitos de cualificación exigibles a los voluntarios serán idénticos a los exigidos a los profesionales, lo que incluiría el periodo transitorio. Por otro lado, la exigencia de competencias en primeros auxilios a los voluntarios se establece en el artículo 15.

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de Ley de referencia.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 5 de febrero de 2016 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).

Vº Bº:

Jesús María Alonso Quilchano,
Secretario

Sabino Torre Díez,
Presidente



HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAKO SAILBURUA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, 2016ko otsailaren 3an egindako bilkuran, alboan adierazten diren kideak bertan zeudela, zure **kontsulta** (erregistro-zenbakia: 193/2015) aztertu du, **Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko Legearen Aurreproiektuari** buruzkoa (Erref.:DNCG_LEY_42126/2014_06).

Eztabaidatu ondoren, aho batez eman du irizpen hau. Zubizarreta Arteche batzordekide jaunak adierazi du Batzordearen iritzia.

LEHENDAKARIA:

Sabino Torre Díez jauna.

LEHENDAKARIORDEA:

Xabier Unanue Ortega jauna.

BATZORDEKIDEAK:

Maria Teresa Astigarraga Goenaga andrea.

Luis M^a Eskubi Juaristi jauna.

Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.

Fátima Saiz Ruiz de Loizaga andrea.

Gorka Erlantz Zorrozueta Aierbe jauna.

Imanol Zubizarreta Arteche jauna.

Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.

Iñaki Calonge Crespo jauna.

IDAZKARIA:

Jesús M^a Alonso Quilchano jauna.

12/2016 ZENBAKIKO IRIZPENA

AURKIBIDEA

AURKIBIDEA.....	1
AURREKARIAK	2
BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA	4
AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA.....	4
ESKUMENEN INGURUKO ALDERDIAK.....	11
ARAU-ESPARRUA.....	16
LANTZEKO PROZEDURA.....	20
AURREPROIEKTUAREN AZTERKETA.....	26



I	Ohar orokorrak.....	26
	A) Tituludun lanbideak eta lanbide arautuak:.....	28
	B) Jarduerak egiteko eta zerbitzuak emateko aukera libre:.....	32
	C) Erregulazio egokiaren printzipioetara egokitzea: sinpletasuna eta segurtasun juridikoa:.....	38
II	Artikuluari buruzko oharra.....	40
	A) 1. artikulua. Helburua eta aplikazio-eremua:	40
	B) 9. artikulua. Izenen erabilera.	41
	C) 11. artikulua. Lanbidean jarduteko betebeharrak:.....	41
	D) Lehen laguntzaren arloko eskumena 15. artikulua etalagarren xedapen iragankorra:.....	42
	E) 16. artikulua. Lanbideetan legearen babespetik at jardutea:	44
	F) Boluntariotza-araubidean egindako jarduerak eta antzekoak:.....	47
	G) Prestakuntza espezifikoak. Bosgarren xedapen gehigarria:.....	48
	H) Zazpigarren xedapen gehigarria. Eskola-adinean dauden kirolariek jarduerak egiteko prestakuntza:.....	49
	I) Araubide iragankorra:	49
	Lehen xedapen iragankorra. Legeak eskatutako kualifikaziorik gabe jardutea lanbidean	49
	Seigarren xedapen iragankorra. Federazioen erregelamentazioak:	51
	Zazpigarren xedapen iragankorra. Legea indarrean jartzean indarrean dauden kontratuak.	51
	J) Azken xedapenak. Euskadiko Kirolaren Legearen aldaketa:.....	51
III	Legegintza-teknikari buruzko beste ohar batzuk	52
	ONDORIOA.....	54

AURREKARIAK

1. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko abenduaren 1eko Aginduen bidez (egun bereko sarrera-erregistroa du), goiburuan adierazitako Legearen aurreproiektua aurkeztu da, irizpena eman dadin.
2. Bidalitako espedientearen barruan, aurreproiektuaren beraren testuaz eta komunikazio-egintzez gain, honako hauek ageri dira:
 - a) 2014ko azaroaren 4ko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, erreferentziazko arauari dagokion testua lantzeko prozedurari hasiera ematekoa.
 - b) Azalpen-memoria.



- c) Memoria osagarria.
- d) 2014ko azaroaren 24ko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektuaren testua aurrez onartzekoa.
- e) Proiektatutako arauak generoaren arabera duen eraginari buruzko alde zuzeneko eta behin-behineko txostena.
- f) Kirolaren Euskal Kontseiluak emandako txostena.
- g) 2015eko urtarrilaren 23ko Ebazpena, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektua jendaurrean jartzekoa.
- h) Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren txostena.
- i) Aurreproiektuaren aurkako alegaziorik egin ez dela adierazten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ofizioa.
- j) Osasun Sailak egindako alegazioak.
- k) Lehiaren Euskal Agintaritzaren txostena.
- l) Emakunderen txostena.
- m) Honako hauek aurkeztutako alegazio-idazkiak:
 - Kirol Ekipamendu eta Zerbitzuen Enpresa Aholkulariaren Gipuzkoako Elkarte.
 - Euskadiko Aire Kirol Federazioa.
 - Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiak.
 - Kirol Management SLU.
 - AKTIBA, Euskadiko Turismo Aktiboko Enpresen Elkarte.
 - KAIT (Kirol Arloko Iritzi Taldea).
 - Harrobia lanbide-heziketako zentroa.
 - Asier Riaño Torre jaunaren alegazio partikularrak.
- n) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren aholkularitza juridikoaren txostena.



- o) Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektuaren inguruan jasotako alegazioen eta egindako txostenen balioespen-txostena.
- p) Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren 11/15 irizpena.
- q) Enpresen eraketaren, abian jartzearen eta funtzionamenduaren gaineko eraginaren ebaluazio-txostena.
- r) Memoria ekonomikoa.
- s) Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektua lantzeko prozeduraren izapidetzearen memoria.
- t) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari (KEB) kontrol-izapideak bideratzeko aurkeztutako eskabidearen karatula.
- u) KEBen txostena.

BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

- 3. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1 artikulua betez ematen da irizpen hau; izan ere, artikulua horren a) letran, Batzordearen aholku-funtzioaren esparruan, berariaz aipatzen dira “lege-aurreproiektuak, haien gaiak eta helburuak edozein izanik ere”.

AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

- 4. Aztergai dugun Legearen aurreproiektuaren xedea kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartu eta jardutearen inguruko funtsezko alderdiak arautzea eta, horretarako, lanbide horiek identifikatzea eta lanbide bakoitzari dagokion eremu funtzionala eta jarduteko eskatzen den kualifikazioa esleitzea da.
- 5. Zioen azalpenaz gain, hogeit hamar artikulua, hamaika xedapen gehigarri, zazpi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken sei xedapen ditu.
- 6. Zioen azalpenean, aurreproiektuaren oinarri diren eskumen-tituluak azaldu ondoren, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 62. artikuluan ezarritakoa gogorarazten da. Artikulu horren arabera, botere publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, titulu ofizialak eskatuko dituzte irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu eta animazioko zerbitzuak eta kirolarekin zuzenean lotuta dagoen beste edozein zerbitzu egiteko. Halaber, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea gogorarazten da.
- 7. Kirol-jardunari dagokionez, onartzen da posizio asko irabazi dituela azken aldi honetan industria ondoko gizarteetan, ekarpen nabarmena egiten baitio pertsonen osasunari..



Adierazten denez, “Euskal gizartea ez dago errealitate horretatik kanpo. Eta, ikuspuntu horretatik, kirola, osasun-iturri gisa, garatuta eta garapen-bidean dauden mundu osoko herrialdeetako politika publikoen agendan sartzen ari da, balioetan oinarritutako prestakuntzari eta hezkuntzari, jarduera ekonomikoari, turismoari eta aisia arduratsuari egiten dion ekarpena ahaztu gabe. Horrela, beraz, interes publikoa duen eta, izaera dinamikoa dela-eta, ordenamendu juridikoa indarrean dauden eskakizunetara etengabe egokitzea behar duen zeharkako eremu bihurtu da kirola.

8. Halaber, Kirolaren Euskal Plana (2003-2007) aipatzen da. Plan horretan salatzen zenez, lanbide-erregulaziorik ez zegoela hautematen zen orok har, eta, horren ondorioz, prestakuntzarik ez duten eta behar baino maila txikiagoko kualifikazioa duten pertsonak sartu dira merkatuan.
9. Kirol-arloko lanbideetan jarduteko modua arautzeko premiari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren urriaren 1eko 194/1998 Epaia aipatzen da. Epaia horretan ezartzen denez, “Konstituzioak berak agintari publikoei agindua ematen die gorputz-hezkuntza eta kirola sustatzeko (Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua), eta jarduera horiek osasunarekin oso lotuta azaltzen dira, Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua horren 1. idatz-zatian azaltzen denez; hortaz, jarduera horiek ez dira, besterik gabe, osasuna zaintzeko baliabideak; aitzitik, haiei esker saihestu egin daitezke gorputz- eta kirol-jardueretako hainbat ariketa desegokik osasunean izan ditzaketen ondorio negatiboak, batez ere zenbait kirolean jarduteak arrisku handi samarra dakarrenean. Jakina da, bestalde, jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta balioetsiagoak direna, eta, egoera horri erantzuteko, agintari publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionali”.
10. Testuinguru horretan, aurreproiektuak kirol-eremuaren berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarritzakoak diren zenbait alderdi arautzea izango du helburu, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, zehazten da zer kualifikazio izan behar den lanbide horietan jarduteko, eta zer eremu funtzional orokor esleitzen zaion lanbide bakoitzari.
11. Artikuluei dagokienez, 1. artikulua xedeari eta aplikazio-eremuari buruzkoa da. Adierazitako xedear gain, aplikazio-eremua ezartzen da, eta, ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremua aipatzen da lanbidean sartzeko eta jarduteko ohiko eremu gisa. Aplikazio-eremuan, halaber, lanbideetan plataforma birtualen edo informazioaren teknologien bitartez jarduteko aukera jasotzen da, eta eremutik espresuki salbuetsita dauden jarduerak aipatzen dira.
12. Legearen ondorioetarako, parte-hartze antolatuen edo beste mota bateko parte-hartzearen bidez egoera fisiko eta psikikoa adierazi edo hobetzeko, gizarte-harremanak garatzeko edo maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzeko helburua duen jarduera fisiko oro biltzen du kirol terminoak. Kontzeptu hori ez dago ofizialki onartutako modalitate eta diziplinetara mugatuta. Aitzitik, kirol-legerian jasota dauden gorputz- eta kirol-adierazpen guztiak biltzen ditu.



13. 2. artikulua kirolaren berezko lanbideak, eremu funtzional orokorra eta lanbideen kualifikazioak ezartzen ditu. Lau lanbide sartzen dira: gorputz-hezkuntzako irakaslea, kirol-monitoreia, dagokion kirol-modalitate edo kirol-diziplinako entrenatzailea, eta kirol-zuzendaria.
14. 3. artikulua gorputz-hezkuntzako irakaslearen lanbideari buruzkoa da. Lanbide horrek bide ematen du gorputz-hezkuntzako klaseak emateko dagozkion hezkuntza-mailetan; era berean, bide ematen du hezkuntza-legerian aurreikusitako funtzio instrumental edo eratorri guztiak betetzeko. Lanbide honen eremutik kanpo geratzen dira honako hezkuntza-maila hauek: irakasleen lanbide-jarduerak: unibertsitate-irakaskuntzetakoak, lanbide-heziketakoak, araubide berezikoak, karrera militarrekoak, prestakuntza-jardura ez-formalak eta berez gorputz-hezkuntzako irakaskuntzakoak ez diren guztiak.
15. 4. artikulua kirol-monitorearen lanbidea aipatzen du. Bete beharreko funtzioak, beharrezkoa den kualifikazioa eta kualifikazio horiegiaztatzen duten tituluak ezartzen ditu. Kirol-monitorearen lanbidean, edozein kirolariaren edo kirolari talderen plangintzari, instrukzioari, ikaskuntzari, animaziorik, egokitze fisikoari, egoera fisikoaren berreskuratze edo hobekuntzari, entrenamendu edo prestaketa pertsonalari, monitorizazioari, kontrolari, gidatzeari, laguntzari eta ebaluazioari lotutako funtzioak eta antzekoak bete daitezke, betiere jardura hori kirol-lehiaketara bideratuta ez badago. Espezifikoak, nolabaiteko arriskua duten edo arreta berezia behar duten pertsonen (hala nola 65 urtetik gorakoak, desgaitasunen bat dutenak, osasun-arazoak dituztenak eta parekoak) zuzenduta dauden jardueren kasuan lanbidean jarduteko kualifikazioa hartzen da kontuan.
16. 5. artikuluan, entrenatzailearen lanbidea dago araututa. Lanbidean jarduteko modu hauek bereizten ditu: kirol edo diziplina anitzeko lehiaketa-jardueretan (beren beregi kirol-modalitate edo diziplina bakar batera mugatu gabe) eta nolabaiteko arriskua dakarten ingurune naturaleko eta animaliekiko diziplina anitzeko lehiaketa-jardueretan parte hartzen duten eskola-kirolaren eremuko kirolari eta taldeekin; oinarritzko kirol-modalitate edo kirol-diziplina bakarreko lehiaketetan parte hartzen duten kirolari edo taldeekin; maila handiko lehiaketetan parte hartzen duten kirolari eta taldeekin; eta maila edo errendimendu handiko kirolariek.
17. 6. artikuluan, kirol-zuzendariaren lanbidea dago araututa. Aurreproiektuan aurreikusitako beste hiru lanbideen aldean, lanbide honetan jarduteko ez da beharrezkoa presentzia fisikoa kirol-jardueretan. Bereizketa bat egiten da jardura edo zerbitzu integral, orokor eta diziplina edo kirol anitzekoetan kirol-modalitate edo kirol-diziplina bakar baterako orientazio espezifikorik gabe jardutearen eta kirol-hastapenetako edo oinarritzko mailako kirol-modalitate edo kirol-diziplina bakar batera bideratuta jardutearen artean. Halaber, bereizketa bat egiten da hobekuntza teknikoko edo erdi-mailako jardueren eta errendimendu handira bideratutako jardura eta zerbitzuen artean.



18. 7. artikulua kasu berezietako kualifikazio-baldintzak aipatzen ditu: Estatuko edo nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten klub eta kirol-elkarteetako profesionalak, Espainiako kirol-federazioetako edota Estatuko gainerako kirol-erakunde publiko edo pribatuetako profesionalak, adizka edo puntualki Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-zerbitzuak (Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizi diren kontsumitzaile edo erabiltzaileei zuzenduak) egiten dituzten beste autonomia-erkidego edo herrialde batzuetako profesionalak; eta ezarritako kualifikazioa ez duten errendimendu handiko profesionalak.
19. 8. artikulua kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzea lantzen du, eta Eusko Jaurlaritzari esleitzen dio aurreproiektuan jasotako kualifikazio eta tituluen aipamenak lanbide-kualifikazio eta titulu ofizial berrietara egokitzeko zeregina.
20. 9. artikulua aurreproiektuan aurreikusitako izenen erabilera bat ezartzen du, beste profesional batzuen izenarekin nahasmendurik sor ez dadin.
21. 10. artikulua Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-arloko profesionalak elkargoko kide egitea eta erregistratzea aipatzen du. Profesionalen elkargoan (elkargorik baldin badago eta Estatuko kasuan kasuko legeek hori ezartzen badute) edota Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena emateko betebeharra aurreikusten du. Erregistro hori publikoa izango da, eta araubidera jo beharra dago egitura, funtzioak eta publizitate- eta funtzionamendu-araubidea finkatzeko.
22. 11. artikulua lanbide-jardunari lotutako hainbat betebeharrak jasotzen ditu. Artikulu horren amaierako 2. zenbakian ezartzen denez, aipatutako printzipio eta betebeharrak bete ezean, dagozkion administrazio-, diziplina- eta zigor-erantzukizunak eskatuko dira.
23. 12. artikuluan, kirol-arloko lanbideetan lanbide-sozietateen bidez jarduteko aukera hartzen da kontuan, enplegu publikora iristearen kasuetan edo hezkuntza-arloko legeek onartzen ez dituzten kasuetan izan ezik.
24. 13. artikuluan, aurreproiektuak araututako lanbideetan jarduteko erantzukizun zibila bermatzeko betebeharra aurreikusten da; aseguruak, nolahi ere, zerbitzu profesionalak ematerakoan hirugarrenei eragiten zaizkien kalteengatik eman beharreko kate-ordainak estali behar ditu. Betebeharrak hori ez zaie eskatuko administrazio publikoen zerbitzura bakarrik diharduten profesionalak, ezta lanbide-jardura hirugarrenen kontura bakarrik gauzatzen den kasuetan ere. Aseguramendu horren baldintzetarako, erregelamendura jo beharra dago.
25. 14. artikulua “bestelako baldintzak” aipatzen ditu. Argitzen duenez, aurreproiektuan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko ezartzen diren kualifikazio-baldintzak betetzeaz gain, eduki edo bete egin beharko da indarrean dauden legeen arabera exijitu daitekeen beste edozein lizentzia, baimen, titulu edo baldintza.



26. 15. artikuluan ezartzen denez, araututako lanbideetako batean presentzia fisikoarekin diharduten pertsona guztiek (boluntarioak barne) lehen laguntzako prestakuntza egiaztatu beharko dute.
27. 16. artikulua ezartzen duenez, lanbideetan legearen babespetik at jardunez gero, ordenamendu juridiko aplikagarriaren arabera aplikatu beharreko administrazio-erantzukizunak, diziplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak eskatuko dira.
28. 17. artikulua ("Arau-esparru erkidea.Lehia librea") ezartzen duenez, aurreproiektuan araututako lanbideek, aurrekontuan ezartzen ez den orotan, lanbideetan jarduteko arau-esparru erkideak ezartzen duena bete beharko da, eta lanbideetan sartzeko eta jarduteko, lehiaren defentsari eta lehia desleialari buruzko legeak bete beharko dira.
29. 18. artikulua beste estatu batzuetan lortutako lanbide-kualifikazioen onarpena aipatzen du, eta Europar Batasunaren barruko estatuetan edo langileen zirkulazio librea aplika daitekeen estatuetan lortutako lanbide-kualifikazioak eta gainerako estatuetan lortutakoak bereizten ditu.
30. 19. artikulua kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasunari eta segurtasunari buruzkoa da. Artikulu horretan, Eusko Jaurlaritzak kirol-arloko lanbideetan jarduteko kualifikazioak edukitzeari dagokionez beharrezkoak diren baimen, erantzukizunpeko adierazpen, komunikazio, ebaluazio, egiaztapen eta ikuskapeneko sistemak ezartzeko aukera aurreikusten da. Halaber, publizitateari buruzko arauak eta profesionalen kontratuak idatziz formalizatzeko betebeharra ezartzen ditu. Azkenik, ikuskapen-funtzioak aipatzen ditu.
31. 20. artikulua plataforma birtualen edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidezko lanbide-jarduna aurreikusten du. Bide horretatik lan egiten duten monitore eta entrenatzaileek normalean Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten badute, aurreproiektuan aurreikusitako kualifikazioa izan beharko dute. Gainera, *online* bideratu beharreko entrenamendu-planak eta antzeko eduki teknikoko edo kirol-edukiko informazioa biltzen dituzten webgune, aplikazio eta informazioaren eta komunikazioaren gainerako teknologietan, plan horiek landu dituzten profesionalak behar bezala identifikatu beharko dira, eta haien lanbide-kualifikazioari buruzko informazioa eman beharko da.
32. Lehenengo xedapen gehigarrian, dagokion elkargoarekin, kirol-federazioekin eta bestelako kirol-erakundeekin lankidetzan aritzeko mekanismoak jasotzen dira, eta, adierazten denez, Eusko Jaurlaritzak lankidetzak-mekanismoak sustatuko ditu, lege honek arautzen dituen kirol-arloko lanbideetan jardutean kirol-jarduera osasungarri, seguru eta kalitatekoak sustatzeko.
33. Bigarren xedapen gehigarriak kirol-arloko lanbideen inguruko berdintasun-politikak aipatzen ditu, eta, horren arabera, Lege honetan arautzen diren lanbideetan sartzeko eta jarduteko orduan tratu- eta aukera-berdintasuna egoteko politikak sustatuko ditu



Eusko Jaurlaritzak, beste administrazio publikoekin, kasuan kasuko elkargo-antolamenduarekin, kirol-federazioekin eta antzeko beste kirol-erakundeekin lankidetzan.

34. Hirugarren xedapen gehigarria boluntarioen eta antzekoen jardueri buruzkoa da. Oro har, boluntarioei kualifikazio-baldintza berak eskatzen zaizkie kirol-jardueretan parte hartzeko. Hala ere, aurretik eskaera arrazoitua aurkeztuz gero, lege honetan ezarritako kualifikazioa barkatu eta horren ordeztu bestelako kualifikazio bat eska diezaieke Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak boluntario-talde jakin batzuei.
35. Laugarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailak ezarriko ditu aipatutako titulu eta ziurtagiriez bestelako bideetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzekokasu, baldintza eta prozedurak.
36. Bosgarren xedapen gehigarriak testu artikulatuan eskatutako “Prestakuntza espezifikoa” azaltzen du, eta prestakuntza egiaztatzeko eta onartzeko formulak ezartzen ditu. Prestakuntza-eskaintza ofizialik ez dagoen edo eskaintza hori nahikoa ez den kasuetan bakarrik sustatu edo/eta onartu ahal izango ditu kirol-arloko eskumena duen sailak gutxieneko kalitate-baldintzak betetzen dituzten prestakuntza, titulu edo ziurtagiri ez-ofizialak.
37. Seigarren xedapen gehigarriak kirol-hastapenetako edo oinarritzko jardueren, hobekuntza teknikoko edo erdi-mailako jardueren eta errendimendu handiko jardueren mailak ezartzen ditu.
38. Zazpigarren xedapen gehigarriak eskola-adinean dauden kirolariek jarduerak egiteko prestakuntza aipatzen du, eta, bertan ezartzen denaz, eskola-adinean dauden kirolariek kirol-jarduerak egiten dituzten monitoreentzat titulu ofizial edo profesionaltasun-ziurtagiri espezifikorik ez badago edo daudenak nahikoak ez badira, Eusko Jaurlaritzan kirolaren eta kualifikazioen arbetako eskumenak dituzten sailek, elkarrekin ados jarrita, prestakuntza-ekintza espezifikoa sustatuko dituzte eskola-adinean dauden kirolariek lan egiten duten pertsonentzat.
39. Zortzigarren xedapen gehigarriak Estatuak onartu gabeko kirol-modalitateetako prestakuntza eta Estatuak onartutako prestakuntza-planik ez duten kirol-modalitateetako prestakuntza azaltzen ditu.
40. Bederatzigarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak edo prestakuntza dualerako kontratuak dituzten langileei, lanbidean sartzeko eta jarduteko, ez zaizkie eskatuko aurreproiektuan aurreikusitako lanbide-kualifikazioak, betiere prestakuntza hori kirolaren eremuko bada.
41. Hamargarren xedapen gehigarriak kirol-teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren titulazioen baliokideak diren kualifikazioak biltzen ditu.



42. Hamaikagarren xedapen gehigarriak kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailari esleitzen zaion zigor-ahala aipatzen du.
43. Araubide iragankorrari dagokionez, lehenengo xedapen iragankorrak Legeak eskatutako kualifikaziorik gabeko lanbide-jarduna α altzen du, eta hainbat lanbide-gaikuntza ezartzen ditu kirol-arloko profesionalak lan-eskarmentuaren bidez edo prestakuntza ez-formalaren bidetik eskuratutako gaitasunak egiaztatzeko administrazio-prozedurak egokitzen ez diren bitartean. Nolanahi ere, gaitutako profesionalak Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatu beharko dute, gaituentzako sekzio espezifiko batean.
44. Bigarren xedapen iragankorrak kirol-monitore, entrenatzaile eta kirol-zuzendariaren lanbideetan Legea pixkanaka aplikatzeko aukera ezartzen du, dagoen eskariari behar bezala erantzuteko beharrezkoak diren kualifikazioak dituen profesionalik ez dagoela, prestakuntza ofizialik ez dagoela edo kirol-esparru berriak sortu direla egiaztatzen bada.
45. Hirugarren xedapen iragankorrak elkargoko kide egiteko betebeharra aipatzen du. Bertan adierazten denez, dagokion lanbideak bere elkargoa duenean baino ezin izango da betebehara hori eskatu.
46. Laugarren xedapen iragankorrak lehen laguntza emateko kualifikazioa eskuratzeko betebeharra ez betetzeko aukera aipatzen du. Lege hau indarrean jartzen denean Lege honek ezartzen duen lehen laguntza emateko kualifikaziorik ez duten kirol-arloko profesionalak 2017ko abenduaren 31ra arte jarraitu ahal izango dute lanbide-jardunean. Aipatutako epean prestakuntza jasotzeko betebeharra ez betetzea lanpostutik kentzeko arrazoitzat edo ondoren agertutako gauzaeztat hartu ahal izango da, estatutu-harremana ala lan-harremana den kontuan hartuta.
47. Bosgarren xedapen iragankorrak ezartzen duenez, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorretan profesionalentzat aurreikusitako behin-behineko gaikuntzak eta gaitasunen onarpenak eta seigarren xedapen gehigarrian ezarritako lehen laguntzen arloko gaitasunen eskakizuna boluntarioei ere aplikatuko zaizkie.
48. Seigarren xedapen iragankorrak federazioen erregelamentazioak egokitzeko epe bat hartzen du kontuan (2018ko urtarrilaren 1era artekoa, hain zuzen ere).
49. Zazpigarren xedapen iragankorrak Legearen aplikazioaren luzamendu bat ezartzen du Legea indarrean jartzean indarrean dauden sektore publikoarekiko kontratuetan.
50. Xedapen indargabetzaileak eskola-kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren 25. artikuluko 1., 2. eta 3. zenbakiak eta aurreproiektuan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko arau guztiak indargabetzen ditu.



51. Azken xedapenei dagokienez, lehenengoak Euskadiko Kirolaren Legearen 127. artikulua aldatzen du, eta arau-hauste oso astun b~~a~~ gaineratzen du, hots, kirol-arloko lanbideei buruzko legerian eskatutako lanbide-kualifikazioa ez edukitzea.
52. Azken xedapenen arteko bigarrenak Euskadiko Kirolaren Legearen 128. artikulua aldatzen du, eta bi arau-hauste oso astun gainerat~~zen~~ ditu, hots, elkargoko kide egiteko edo Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan izena emateko betebeharra (bat edo bestea, kasuaren arabera) ez betetzea, erantzukizun zibileko asegururik ez edukitzea, eta aurreproiektuaren 11., 19. eta 20. artikuluetan adierazitako betebeharrak ez betetzea.
53. Azken xedapenen arteko hirugarrenak ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzak gaikuntza orokorra izango du Lege hau garatu eta aplikatzeko.
54. Azken xedapenen arteko laugarrenak aurreikusitakoaren arabera, kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren saila espresuki gaitzen da kontzeptuak definitzeko eta lanbideen atribuzioak eta eremu materialak mugatzeko.
55. Azken xedapenen arteko bosgarrenak aurreikusitakoaren arabera, kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren saila espresuki gaitzen da prestakuntza espezifikoa onartzeko prozedurarako.
56. Azken xedapenen arteko seigarrenak ezartzen duenez, araua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Hala ere, lanbideetan jarduteko gaikuntza ematen duten lanbide-kualifikazioak 2019ko urtarilaren 1etik aurrera baino ezin izango dira eskatu. Boluntarioei 2020ko urtarilaren 1etik aurrera hasiko zaizkie lanbide-kualifikazioak eskatzen.

ESKUMENEN INGURUKO ALDERDIAK

57. Ekimenaren oinarri diren eskumen-titulu nagusiak, aurreproiektuaren zioen azalpenean adierazten denez, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren (EHAE) 10. artikuluko 36. zenbakian (kirola) eta 22. zenbakian (tituludun lanbideen jarduna, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa aparte utzi gabe) jasotakoak dira. Dena dela, ez da ahaztu behar beste eskumen-titulu batzuen eragin puntuala (neurri handiagoan edo txikiagoan), hala nola Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren (EHAE) 10. artikuluko 28. zenbakian (kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa) eta 4. zenbakian (Euskal Autonomia Erkidegoko funtzionarioen estatutua, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe) aurreikusitakoak edo barne-osasunean (EHAE, 18.1 artikulua) eta irakaskuntza arloan (EHAE, 16. artikulua) aurreikusitako eskumenak.
58. Azterketa hau titulu nagusietan oinarrituko da, eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsaren aipamen espezifikoa egingo da, horiek baitira, oro har, proiektuaren euskarria; nolanahi ere, edukiaren azterketa zehatza egitean, beharrezkoa edo



interesgarria izango da goian adierazitako eskumentituluetakoren bat puntualki aztertzea.

59. Dena dela, gure Estatutuaren ondoriozko eskumen-azterketa hasi aurretik, legegilearen azken asmoa azpimarratu behar da: kirden bat egiten dutenen osasuna bermatzea. Osasunaren eta kirolaren arteko lotura hori ez da aurreproiektu honen alderdi puntual edo espezifiko bat. Aitzitik, gure 231/2011 Irizpenean ikus daitekeenez, oro har eta esplizituki onartuta dago, baita Konsttuzio Auzitegiaren doktrinan ere. Goi-
auzitegiak osasunaren eta gorputz-hezkuntza eta kirolaren artean dagoen lotura estua gogorarazten du urriaren 1eko 194/1998 Epaian, gorputz-hezkuntza eta kirola osasunari eusteko bitartekoak direlako zein gorputz- eta kirol-jarduerak era desegokian egiteak, “batez ere zenbait kiroletan jarduteak arrisku handi samarra dakarrenean”, osasunean oso ondorio negatiboak dituelako.
60. Ikuspegi horretatik, eskumen-azterketak Espainiako Konstituzioaren (EK) 43. artikuluan xedatutakotik abiatu behar du. Artikulu horretan, 1. zenbakian osasuna babesteko eskubidea aitortu ondoren adierazten denez, botere publikoei dagokie osasun publikoa prebentzio-neurrien bitartez antolatua eta babestea (2. zenbakia). Eta artikulu horren amaieran aurreikusten denez, botere publikoek osasun-hezkuntza, gorputz-hezkuntza eta kirola sustatuko dituzte, eta aisiaren erabilera egokia bultzatuko dute. Politika sozial eta ekonomikoaren printzipio gidari diren heinean, haien onarpenak, errespetuak eta babesak izan behar dute botere publikoen jardunaren oinarri, Espainiako Konstituzioaren 53.3 artikulua arabera.
61. Testuinguru horretan, eta ekimenaren euskarri diren EHAEko eskumenetako lehenengora itzuliz, komeni da gogoraraztea, halaber, kirol-arloan aurreikusitako eskumenaren norainokoa (EHAE, 10.36 artikulua) Espainiako Konstituzioan bertan aurreikusitako aukerak Estatutuan gauzatzearen emaitza dela. Konstituzio Auzitegiak Euskadiko Kirolaren Legearen artikulua baten inguruan emandako apirilaren 18ko 80/2012 Epaian adierazten duenez, “Autonomia Erkidegoek kirola eta aisiaren erabilera egokia sustatzeko eskumenak beren gain hartu ahal izango dtuztela dioen Espainiako Konstituzioaren 148.19 artikuluan jasotako aipamenak balio hermeneutikoa du Konstituzioak arlo hori Autonomia Erkidegoek beren gain hartzeko agertzen duen borondateari dagokionez”.
62. Dena dela, Auzitegi horrek berak Autonomia Erkidegoek arlo horretan dituzten eskumenen eskusibotasuna zehaztu du. Urtarrilaren 10eko 1/1986 Epaian adierazi zuenez, kirol-arloko eskumen eskusiboaren atribuzioak ezinbestez lotuta egon behar du, alde batetik, Autonomia Erkidegoen eskumenen lurralde-mugarekin, eta, bestetik, Espainiako kirolaren –“oro har”– interes orokorren –Autonomia Erkidegoaz gaindikoan– afektazio posiblearekin (kasu horretan, Estatuari dagokio defentsa eta sustapena). Berrikiago, Euskadiko Kirolaren Legean garatutako kirol-arloko eskumenaren inguruan gogorarazi duenez, Autonomia Erkidegoen eskumenak –baita eskusibo gisa ezarri direnak ere– baliatu behar dira: (i) Estatuari beste eskumen-titulu batzuen arabera dagozkion eskumenak errespetatuz, eta (ii) eskumenen lurraldetasun-printzipioari jarraikiz, lurralde-autonomien sisteman inplizitu dagoela kontuan hartuta, Euskal



Herriko Autonomia Estatutuaren 20.6 artikuluan espresuki ezarrita dagoenez (Konstituzio Auzitegiaren 80/2012 Epaia, apirilaren 18koa):

"Lehen alderdiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoak kirol-arloko eskumen eskusiboa izateak (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10,36 artikuluari jarraikiz) eta Estatuak eskumen-titulu konstituzional espezifikorik ez izateak ez du esan nahi Estatuak kirolaren erregulazioan Autonomia Erkidegoekin batera esku hartu ezin duenik. Kirol-arloaren «errealitate» poliedrikoak berak eskumen-tituluak gurutzatzea eta administrazio publikoek –Estatukoak, Autonomia Erkidegokoak eta toki-administrazioak– kirol-jarduerari lotutako alderdietan (osasunean, hezkuntzan, kulturean, ikerketan, gorputz-hezkuntzan, lanbide arautuetan edo merkataritza-legerian, adibidez) jardutea dakar ezinbestez, eta, zenbait kasutan, beharrezkoa da Autonomia Erkidegoaz gaindiko jarduna, ikuspegi ordkor eta zatikatu gabeko bat behar delako, hainbat jardun koordinatu behar direlako, edota jardun horietan kirol-arloa Estatuaren eskumenpean dagoen beste arlo batekin uztartuta dagoelako; adibidez, kirolaren eta osasunaren arteko lotura berezia aipa daiteke (Konstituzio Auzitegiaren urriaren 1eko 194/1998 Epaia [1998, 194 KAB] , 7. oinarria). Konstituzio Auzitegiaren otsailaren 1eko 16/1996 Epaian (1996, 16 KAB) adierazi genuenez, «Estatuak eskumenak ditu kirolean ere eragina izan dezaketen arlo jakin batzuetan, hezkuntzan eta kulturean bereziki; eta, hori guztia, Kirolaren 10/1990 Legeak (1990, 2123 LBK, eta 1991, 1816 LBK) Estatuari esleitzen dizkion eskumenak aparte utzi gabe (Autonomia Erkidegoekin kirol-jarduera orokorrari dagokionez koordinatzeko eta Autonomia Erkidegoekin lankidetzan goi-mailako kirda babesteko eskumenak bereziki». [F. 2 C) t)].

(...)

Bigarren gaiari dagokionez, ohartarazi beharra dago Autonomia Erkidegoetako arau eta egintzen lurraldetasun-printzipioaren indarralda egiaztatuta ere, ezin dela ahaztu «printzipio horiek [lurraldetasun-printzipioa eta merkatu-batasunaren printzipioa], beren izaeragatik, ezin direla interpretatu Autonomia Erkidegoetako instantziei beren eskumenak baliatzean lurralde nazionalako beste leku batzuetan ondorioak izan ditzaketen erabakiak hartzea eragozteko moduan [lurraldetasun-printzipioari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren honako Epai hauek: azaroaren 16ko 37/1981 (1981, 37 KAB), 1. oinarria; urriaren 4ko 150/1990 (1990, 150 KAB), 5. oinarria; eta maiatzaren 23ko 126/2002 (2002, 126 KAB) , 9. a oinarria]]» (Konstituzio Auzitegiaren urriaren 6ko 168/2004 Epaia [2004, 168 KAB], 5. oinarria). Are gehiago, arestian adierazitako Konstituzio Auzitegiaren 165/1994 Epaian (1994, 165 KAB) «nazioarteko harremanen» arloari dagokionez adierazi genuenez, Autonomia



Erkidegoak eskumen eskusiboen titularrak direnean, nazioarteko jardura (kanpoko proiektzioa) Konstituzioaren arabera da, betiere nazioarteko ordenamenduaren berezko arloak eraginpean hartzen ez badira eta Estatuari dagozkion beste eskumen batzuk baliatzeko aukera eragozten ez bada”.

63. Konplexuagoa da, nolanahi ere, tituludun lanbideen jardunari dagokion Estatutuaren eskumen-titulua.
64. Hasteko, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak berak, eskumen-titulu hori eskusiboki esleitzeko garaian, salbuespentzat hartzen du Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa.
65. Espainiako Konstituzioaren 36. artikulua ezartzen duenez, legeak profesionalen elkargoen araubide juridikoaren berezko berezitasunak eta tituludun lanbideen jarduna arautuko ditu, eta lege-erreserba bat ezartzen du arlo horretan, baina ez du eraginik Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketan. Konstituzio Auzitegiak berak onartu zuen zirkunstantzia hori otsailaren 18ko 20/1988 Epaian.
66. Izan ere, apirilaren 10eko 42/1986 Epaian adierazitakoaren arabera, artikulua horrek ezartzen duen lege-erreserba profesionalen elkargoen araubide juridikoaren ezarpenari eta tituludun lanbideen jardunari lotuta dago funtsean, eta honako hau gaineratzen du: “herriarren askatasun eta eskubideen bermea arlo hau legegileak arautzean datza, eta legegilearen muga bakarrak, jakina, Konstituzioaren gainerako aginduen eta, nagusiki, oinarriko eskubideen ondoriozkoak dira. Legegileari dagokio, beraz, interes publikoaren eskakizunak eta bizitza sozialak sortutako datuak kontuan hartuta, zehaztea lanbide bat noiz den lanbide eta lanbide horrek noiz uzten dion guztiz libre izateari eta noiz bihurtzen den tituludun lanbide, hau da, jarduteko tituluak edukitzea (goimailako ikasketak izatea eta ikasketa horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidezberrestea) eskatzen duen lanbide”.
67. Antzekoa gertatzen da Espainiako Konstituzioaren 139. artikulua aipamenari dagokionez. Artikulu horren lehen zenbakiak espainiar guztien berdintasun-printzipioa ezartzen du Estatuako lurralde osoan, eta bigarrenak, berriz, lurralde horretan bertan pertsonen zirkulazio librea oztatzeko neurriak hartzeko aukera eragozten du.
68. Artikulu hori, beraz, ez da eskumen-banaketan eragina duen –zuzenean bederen– agindu bat, eta horixe ondoriozta daiteke, halaber, Konstituzio Auzitegiaren doktrinatik. 1998ko uztailaren 23ko 173/1998 Epaian, argi utzi zuen, Espainiako Konstituzioaren 139. artikulua 1. zenbakian xedatutakoari dagokionez —artikulu osora zabal badaiteke ere—, horrelako aginduak “oinarriak edo mugak direla, ez, ordea, eskumen-tituluak” (Konstituzio Auzitegiaren 61/1997 Epaia, 7. oinarri juridikoa). Espainiako Konstituzioaren 139.1 artikuluan ezarritako printzipioa Estatuak Konstituzioaren 149. artikulua zenari eta Autonomia Erkidegoek beren estatutuei jarraikiz dituzten eskumenak baliatzeko zeregina mugatzen eta bideratzen duen muga



eta jarraibidea da. Dena dela, honako hau adierazi zuen geroago, abenduaren 5eko 201/2013 Epaian: “149.1.30 artikulua arabera Estatuarentzat erreserbatuta dagoen eskumenaren azpian, Espainiako Konstituzioaren 139.1 artikuluko printzipioa dago, eta printzipio hori hertsiki lotuta dago eskumen-esleipen honi» (Konstituzio Auzitegiaren 122/1989 Epaia [1989, 122 KAB], 5. oinarri juridikoa); hau da, Espainiako lurraldeko edozein lekutan eskubideak baliatzeko berdintasuna bermatzen duten oinarriko baldintzei zuzenean lotuta dagoen eta profesionalek zirkulatze eta ezartzeko duten askatasunaren bermearekin eta zerbitzuen prestazio librearekin ere zerikusia duen eskumena da (Espainiako Konstituzioaren 139. artikulua eta 149.1.1 artikulua)”.

69. Nolanahi ere, Estatuak arlo horretan ere eragin dezake. Izan ere, kirol-arloko eskumenarekin gertatzen den bezala, Autonomia Erkidegoko eskumen bat eskusibotzat hartzeko garaian, kontuan hartu behar dira Estatuari beste eskumen-titulu batzuei jarraikiz dagozkion eskumenak, kasuhonetan Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikuluko eskumenarekin gertatzen den bezala; eskumen hori, zehazki, titulu akademiko eta profesionalak lortu, eman eta homologatzeko baldintzen erregulazioari lotuta dago.
70. Konstituzio Auzitegiak askotan eman du bere iritzia Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikuluko eskumen-titulu honen inguruan, beti behar bezain garbi azaldu ez badu ere. Edonola ere, esan daiteke hezkuntza-maila eta hezkuntza-ziklo bakoitzari dagozkion tituluak ezartzeko eskumena biltzen duela (modalitate guztietan) eta gaitzeko balioa duela, bai ikuspuntu akademikotik, bai tituludun lanbideetan, hau da, jarduteko titulu bat izatea (hala nola eskola-graduata, batxiler-titulua eta diplomatu, arkitekto tekniko edo ingeniari tekniko –dagozkion espezialitatean–, lizentziatu, arkitekto, ingeniari eta doktorearen tituluak) eskatzen duten lanbideetan jarduteko. Halaber, dagozkion tituluak emateko eta Estatuak ematen ez dituenak homologatzeko eskumena biltzen du (Konstituzio Auzitegiaren 42/1981 Epaia, abenduaren 22koa).
71. Doktrina hori bera berresten da ekainaren 26ko 82/1986 Epaian eta uztailaren 6ko 122/1989 Epaian. Azken Epaia horretan, Konstituzio Auzitegiak honako hau berresten du: “garbi dago, beraz, Estatuko organo nagusiek lanbide-tituluak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzeko duten eskumena tituludun lanbideei zuzenean lotuta dagoela; “tituludun lanbide” kontzeptua Konstituzioak berak erabiltzen du 36. artikuluan, eta, nabarmena dirudenez, lan-jarduera, ofizio edo lanbide (zentzu zabalean) guztiak tituludun lanbideak ez direla onartzen du inplizituki”.
72. Uztailaren 24ko 83/1984 Epaian adierazi zuenez, tituludun lanbide horiek jarduera jakin batzuk “titulu akademiko jakin batzuk edukitzearen” baldintzapean jartzen direnean dira lanbide, eta, are zentzu zehatzagoan, 42/1986 Epaian (1986/42 KAB) arabera, tituludun lanbideak “jarduteko tituluak edukitzea (goi-mailako ikasketak edukitzea eta ikasketak horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidez berrestea) eskatzen dutenak” dira. Azken epai horren arabera, “legegileari dagokio zehaztea, interes publikoaren eskakizunak eta gizarte-bizitzak sortutako datuak aintzat hartuz, noiz pasatu behar duen lanbide batek tituludun lanbide izatera. Eta zalantzarik ez dago ezen, Konstituzioaren 149.1.30 artikulua testuari jarraikiz, Estatuko legegilea dela eskumen eskusibo hori duena”.



73. Bestalde, uztailaren 6ko 122/1989 Epaia bereizketa bat egiten du tituludun lanbideen eta araututako lanbideen artean, eta bereizketa hori berretsi egin da ondorengo epai batzuetan (Konstituzio Auzitegiaren 113/1993, 386/1993 eta 330/1994 epaietan, besteak beste). Ildo horretan, lan egiteko eta lanbidea edo ofizioa askatasun osoz aukeratzeko Espainiako Konstituzioaren 35. artikulua babesten duen eskubideari zor zaion errespetuaren barruan, onartzen da botere publikoek, interes orokorrak babesteko beharrezkoak diren baliabideak direnez gero, lanbide-jarduera jakin batzuen jarduna kontrolatu ahal izango dutela eta jarduera horiek administrazio-baimena edo administrazio-lizentzia lortzearen edota gaitasun-proba jakin batzuk gainditzearen baldintzapean jarri ahal izango dituztela.
74. Hala ere, azken kasu horretan, 149.1.30 artikuluan jasotako Estatuko tituluaren eragina desagertu egiten da. Izan ere, zentzu hertsian, ez gaude tituludun lanbideen eremuan, eta haien erregulazioa lanbide-gaitasun jakin bat bermatu nahi den eremuaren eskumen materiala duenari dagokio, betiere interes publikoa eta kontsumitzaileen interesa zaindu behar direla ahaztu gabe.
75. Azken alderdi horren ildotik, bereziki aipatu behar dugu Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10. artikuluko 28. zenbakiak kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsaren arloan aurreikusitako eskumena. 163/2011 Irizpenean adierazi genuenez: “Ildo horretan, gogoratu beharra dago kontsumitzaileen defentsa, Konstituzio Auzitegiaren azaroaren 30eko Epaian adierazitakoaren arabera, «oso kontzeptu zabala eta ezaugarri zehaztugabeak dituen dela, eta kontsumitzaileak babesteko xedea duen arau bat kalifikatzeko eragiketa zenbaitetan zailtasun handikoa izateaz gain, eragiketak ez lukeela arazoa konponduko, araua eskumenak zehazten dituzten erregeletako batean baino gehiagotan jasota egon bailiteke» (1. oinarri juridikoa); beste hitzetan esanda, arlo horren ezaugarri bereizgarri nagusia diziplina anitzeko edukia da, eta askotariko arloak lantzen dira bertan” (Konstituzio Auzitegiaren 15/89 Epaia, 1. oinarri juridikoa).
76. Dena dela, kasu horretan ere kontsumitzaileen defentsaren eremua eskumen-konkurrentziako eremua da, eta Estatutuak eskumena eskusiboki Autonomia Erkidegoari esleitzeak ez du eraginik izango Konstituzioan (149.1 artikuluan) Estatuarentzat erreserbatutako eskumenetan. Eskumen horiek materialki dagokionean proiektatuko dira (Konstituzio Auzitegiaren 15/89 Epaia, 1. oinarria), eta ez da beharrezkoa izango Estatutuan Estatuko eskumenak zantzeko klausulak txertatzea (Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia, 70. oinarri juridikoa).

ARAU-ESPARRUA

77. Ekimenaren euskarri diren Konstituzioaren eta Estatutuaren erreferentziak ezarri ondoren, etorkizuneko araua txertatu behar den arau-esparrua ezarri behar da.
78. Kirolaren ikuspegitik, Kirolaren urriaren 15eko 10/1990 Estatuko Legea lurralde nazional osoan aplikatu beharrezkoa da, haren lehenengo xedapen gehigarriaren arabera. Hala ere, 14., 15.1, 2 eta 3, 16., 17., 18. eta 72. artikuluetan ezarritakoak (azken artikulua horren arabera, kirol-izaerako zerbitzuak ematen dituen erabilera publikoko instalazio edo



establezimendu orok, erakunde titularra edozein izanik ere, instalazio edo establezimenduaren datu teknikoei eta ekipamenduari buruzko informazioa eta zuzendaritza teknikoan, irakaskuntzan edo animazioan lanbide-zerbitzuak ematen dituzten pertsonen izena eta titulazioa eskaini beharko ditu ongi ikusteko eta iristeko leku batean) kirolaren sustapenaren arloan eskumena duten autonomia-erkidegoetan erregulazio espezifikorik ez dagoen heinean izangodu eraginkortasuna.

79. Lege horren hirugarren xedapen gehigarriak aurreikusten duenez, zerga-alderdiak lantzen dituzten 28. eta 45.2 artikuluetan eta seigarren xedapen gehigarrian xedatutakoak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako finantza-autonomiak salbuesten dituela ulertzen da
80. Hezkuntzaren ikuspegitik, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak (LOE) –duela gutxi hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoak (LOMCE) aldatu duenak– hezkuntza-sistemak eskaintzen dituen gainerako irakaskuntzek jaso zutenaren antzeko tratamendua eman zien kirol-irakaskuntzei.
81. Zehazki, VIII. kapituluak aurreikusten denez, Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, kirol-irakaskuntzei lotutako ikasketei dagozkien titulazioak, curriculumaren oinarrizko alderdiak eta ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezarriko ditu. Kirol-irakaskuntzak antolatzeke, Kirol Kontseilu Gorenak onartutako kirol-modalitateak eta kirol-espezialitateak hartuko dira oinarritzat. Modalitate eta espezialitate horien helburua honako hau da: ikasleak kirol-modalitate edo kirol-espezialitate bati lotutako lanbide-jarduerarako prestatzea, eta lan- eta kirol-munduaren bilakaerara eta herritartasun aktibora egokitzeke prozesua erraztea.
82. Lege horren 98. artikulua kirol-irakaskuntzetako irakasleak aipatzen ditu, eta, ezartzen duenez, kirol-irakaskuntzetan irakasle izateko, beharrezkoa izango da lizentziatu, ingeniari edo arkitektoaren titulua, graduiko titulua edo irakaskuntzarako baliokidea izango den titulazioa edukitzea, baita Gobernuak ezartzen duen prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa ere. Halaber, Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, beste titulazio batzuk gaituko ditu modulu eta bloke jakin batzuetan irakasteko.
83. Nolanahi ere, 2. zenbakiak onartzen du, salbuespen gisa, jakintzagai jakin batzuetan hezkuntza-administrazioek beren jardura kirol- eta lan-eremuan garatzen duten eta nahitaez tituludunak izan behar ez duten profesionistak hartzea irakasle espezialista gisa, haien kualifikazioa eta hezkuntza-sistemaren premiak kontuan hartuta.
84. Hezkuntza-eremu horretan bertan, aurrekoaren garapen gisa, aipatu beharra dago, halaber, araubide bereziko kirol-irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzen duen urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretua, oinarrizkoa Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikulua Estatuari esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.



85. Espainiako Konstituzioaren 149.1 artikulua 30. puntua ahaztu gabe, baina aldi berean artikulua horren 1. eta 7. puntuetan aurreikusitako tituluak kontuan hartuta, Estatuak kualifikazioei eta lanbide-heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoa onartu zuen, eta, bertan, Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionala ezarri zen produkzio-sektorearen eskariei erantzuteko prestakuntza-ekintzen esparru gisa. LOEk berak kirol-irakaskuntzak lege horretan bertan aurreikusitako Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalera egokitzeko aukera ezartzen da.
86. Kualifikazioei eta lanbide-heziketari buruzko Lege Organikoa, beraz, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala ezartzen du sistemen erakunde-ardatz gisa, eta haren funtzioa kualifikazio horiek egiaztatzekeko prozedurarekin osatzen da. Zioen azalpenean ezartzen denez, sistema horrek ez du inbargabetzen gaur egun indarrean dagoena, eta ez dakar, ezein kasutan, tituludun lanbideen jarduna Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluan aurreikusi bezala arautzea.
87. Adierazitako katalogoaren sorkuntzari buruzko 7. artikulua garatuz, katalogoaren egitura eta edukia ezarri ziren azaroaren 25eko 1416/2005 Errege Dekretuak aldatutako irailaren 5eko 1128/2003 Errege Dekretuaren bidez. Katalogoa honako hauen bidez osatzen da gorputz- eta kirol-jardueren lanbide-arban: 295/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, 1087/2005 Errege Dekretua, irailaren 16koa, 1521/2007 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, 146/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa, 141/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa, 1034/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15koa, eta 1788/2011 Errege Dekretua, abenduaren 16koa.
88. Europako ikuspegitik, Erkidegoko arau-esparrua hartu behar da kontuan, eta, horren barruan, lanbide-kualifikazioen onarpenari buruzko irailaren 7ko 2005/36/EE Zuzentaraua azpimarratu behar da. Zuzentarau horretan adierazten denez, estatu kideen artean pertsonen eta zerbitzuen zirkulazio libreak dituen oztopoak kentzea tratatuaren bidez lortu nahi diren helburuetako bat da. Oztopo horiek kentzeak, zehazki, ahalmena ematen die estatu kideetako herritarrei beren lanbide-kualifikazioak eskuratu dituzten estatua ez den estatu kide batean norberaren edo besteren kontura lanbide batean jarduteko.
89. Azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuaren bidez, adierazitako 2005/36/EE Zuzentaraua eta Kontseiluaren 2006ko azaroaren 20ko 2006/100/EE Zuzentaraua (abokatuaren lanbidearen jardunari lotutako alderdi jakin batzuei buruzkoa) Espainiako ordenamendu juridikoan txertatu ziren.
90. Ikuspegi horretatik, kontuan hartu behar da, halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa (Zerbitzuen Zuzentarau izenekoak). Zuzentarau hori, funtsean, zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko azaroaren 23ko Estatuko 17/2009 Legearen bidez lekualdatu da barne-zuzenbidera (Euritako Lege izenekoaren bidez, alegia); nolanahi ere, egokitze puntual ugari egin dira zenbait lege aldatu eta



17/2009 Legea egokitzeko abenduaren 22ko Estatuko 25/2009 Legearen bidez (Omnibus Legea). Gure Autonomia Erkidegoan, azken funtzio hori zenbait lege aldatu eta 2006/123/EE Zuzentzura egokitzeko apirilaren 23ko 7/2012 Legeak garatu du..

91. Multzo horretan bertan, merkatu-batasuna bermatzeari buruzko abenduaren 9ko Estatuko 20/2013 Legea ere sar daiteke. Lege hori Estatuaren eskumen eksklusiboetan (Espainiako Konstituzioaren 149.1.1, 6, 13 eta 18 artikulua) oinarrituta dago..
92. Aurreproiektuak aipatzen duen beste alderdi bat kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa da. Arlo horretan, Estatuak oinarritzko esku-hartzea izan du kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren zati handi baten bidez Zehazki, honako hauek dute oinaritzko izaera: lehen liburuko I. tituluaren I. kapituluak (aplikazio-eremua zehaztenda bertan), 8., 9., 17.1, 18., 23.1 eta 3, 25. eta 26. artikuluek, lehen liburuko I. tituluaren III. eta V. kapituluak, lehen liburuko 24. artikulua eta V. tituluak, bigarren, hirugarren eta laugarren liburuek, xedapen iragankorrek eta azken xedapenak.
93. Eragin tangentialagoa badu ere, aipatu beharra dago, halaber, profesionalen elkargoei buruzko otsailaren 13ko Estatuko 2/1974 Legea. Aurreproiektua izapidetzeko prozesuan, zerbitzu profesionaleri eta profesionalen elkargoei buruzko Legearen aurreproiektuan jasotako alderdi batzuk ere kontuan hartu dira, aurreproiektu horren aipamenak ekimenak behera egin ondoren sortutako egoera berria kontuan hartuta aztertu behar badira ere.
94. Gure Autonomia Erkidegoaren eremuan, bereziki aipatu behar dugu Euskadiko kirolaren Legearen 62. artikuluan ezarritakoa. Artikulu horren arabera, botere publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala izatea eskatuko dute irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu eta animazioko zerbitzuak eta kirolarekin zuzenean lotuta dagoen beste edozein zerbitzu egiteko. Orain arte, artikulu hori ez da garatu, eskola-kirolari dagokionez izan ezik. Kasu horretan, eskolako kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren bidez garatu da. Dekretu horren 25. artikuluan, zehazki, eskola-kirolean eskatu beharreko titulazioak aipatzen dira.
95. Aipatu beharra dago, halaber, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea. Lege horren arabera, zientzia edo jakintza-arlo baten berezko ezagutzak eta teknikakerabiliz eta aplikatuz egiten direnak dira tituludun lanbideak, eta lanbide horietan jarduteko gaitasuna unibertsitateko titulu akademiko baten bidez edo lege ezarritako edo agintari eskudunek onartutako beste titulu baten bidez egiaztatzen da. Tituludun lanbideak elkargoetan bildutakoak eta elkargoetan bildu gabekoak izan daitezke. Elkargoetan bilduta dauden tituludun lanbideak bidezko legearen bidez horrela xedatuta daudenak dira. Gainerako tituludun lanbideak elkargoetan bildu gabekoak izango dira.



LANTZEKO PROZEDURA

96. Batzordeak adierazi izan duenez (denen erakusgarri, 39/1999 eta 84/2003 irizpenak), lege-aurreproiektuak Jaurlaritzaren barruan lantzeko prozeduraren azterketari ekitean, honako hau hartzen du kontuan: “legegileak ez du Konstituzioa exekutatzen, baizik eta zuzenbidea askatasunean sortzen, Konstituzioak ematen dion esparruan; erregelamenduak egiteko ahala, aldiz, Konstituzioaren eta legeen arabera betetzen du (Espainiako Konstituzioaren 97. artikulua)” (besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren 209/1987 Epaia, abenduaren 22koa); beraz, Espainiako Konstituzioak, Autonomia Estatutuak edo, batzuetan, lege organikoek berariazko izapideren bat aurreikusten dutenean salbu —eta benetako salbuespenak dira horiek gure ordenamenduan—, azterketa hori, funtsean, tresna bat da, proiektatutako erregulazioaren arrazoizkotasuna aztertzeko; hau da, duen edukiarekin, noraino balio duen lortu nahi diren helburuak erdiesteko..
97. Arau-ekimenekin duen funtsezko desberdintasun horrek, axola zaigun gaian, derrigorrezko malgutasuna sartzen du aholku-organo batek (hala nola batzordeak) lege-aurreproiektuak lantzeko prozeduren azterketan; izan ere, irizpenaren helburua proiektatutako erregulazioan —hau da, haren arrazoizkotasunean— laguntzea da. Arrazoizkoa izateak esan nahi du erabilgarria dela proposatutako helburuak lortzeko, eta erregulazioa zuzena dela arautu nahi den eta, beraz, positiboki aldatu nahi den errealitatera egokitzeari dagokionez.
98. Dena dela, deskribatutako kontsulta-arloko esku-hartze desberdinak, ordea, ez dio batzordeari eragotzi behar hainbat ohar egitea, kontsulta egin duen organoarekin batera elkarlanean jarduteko asmotan betiere, aurreproiektua eta memoria lantzeko prozedurari buruz, betiere hobetzeko asmotan. Baina, berriz diogu, lege-aurreproiektua izaki, ez da ahaztu behar aurreproiektua lantzeko prozeduraren balioespenak ematen duen emaitza ez dela testuaren baliozkotze juridikoaren esparruan sartzen, eta ez duela objektioak oinarritzeko biderik ematen azkenean sortuko den arau-produktuaren konstituzionaltasunazalantzan jartzeko.
99. Ondorio horietarako, beraz, badugu erreferentzia-tresna garrantzitsu bat, hots, abenduaren 22ko 8/2003 Legea, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzkoa (aurrerantzean, XOEPL), zeinak, inguruabar horiek ahaztu gabe, Jaurlaritzaren jardura bideratu nahi izan baitu, Jaurlaritza, lege-proiektuak idazterakoan, xedapen orokorrak egiteko metodologia berbera erabiltzen saia dadin. Hala, zioen azalpenean esaten duenez, oso ekarpen ona egiten da legegintza-ahaladuenaren lana errazteko, hobeto oinarritutako eta antolatutako proiektuak, teknika juridiko txukunago eta xede dituen helburuak lortzeko egokiagoa dutenak aurkezten zaizkiolako, eztabaidatu eta erabaki dezan.
100. Lege-proiektuak egiteko prozedurari buruzko azterketa —materialki eta funtsean finalista— egiteko, batzordeak Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legearen jarraibideak sistematizatu ditu, eta honako hauek bereizi: (i) hasierako fasea,



ekimena sustatu duen organoaren barrukoa, helburu nagusitzat hasierako testua finkatzea, hari eusten dioten arrazoiak kanporatzea eta kasuan kasu bidezko izapideetarako beharrezkoa den dokumentazioa egitea duena; (ii) prozedura irekitzeko fasea, arauak eragin diezaiekeen sektore eta administrazioak aintzat hartuta; (iii) txostenak —nahitaezkoak eta aukerakoak— egiteko fasea; eta (iv) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak prozedura-iter guztia ebaluatu ondoren, behin betiko testua finkatu eta azken dokumentuak prestatzen ditu —justifikazio-memoria eta memoria ekonomikoa—.

101. Beraz, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legean adierazitako jarraibide horiei jarraituz eta lantzeko prozedurari lotutako egintzak ordena kronologikoan aztertuz, lantzeko prozedurari hasiera emateko agindua espedientean txertatu den egiaztatu behar da lehenik eta behin.
102. Agindu hori onartu ondoren, aurreproiektuaren alde zegoela adierazi zuen Kirolaren Euskal Kontseiluak.
103. Halaber, lehen memoria bat txertatu zen. Bertan, honako hauek azaltzen ziren labur-labur: ekimenaren bidez lortu nahi ziren helburuak eta ekimenaren ildo orokorrak, eraginpean hartutako gizarte-sektoreak, gaitzen duten oinarri juridikoak eta Sailaren eskumenaren funtsak.
104. Instrukzio-egintza horien ondoren, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak alde zureko aurreproiektuari.
105. Ondoren, generoaren arabera eraginari buruzko txostena egin zen. Txosten horretan adierazten denez, arreta berezia eskaini zaio emakumeen eta gizonen lanbide-eremuko berdintasunaren gaiari, eta ahalegin hori espresuki islatu da printzipio eta betebeharretan, lanbide-jardunean eta xedapen gehigarri batean.
106. Ondoren, aurreproiektuari buruzko memoria luzeago bat gaineratu zen. Horren bidez, premia, proportzionaltasun, segurtasun juridiko, sinpletasun eta eraginkortasunaren printzipioak betetzen zirela egiaztatu nahi zen. Memoria horretan, sail sustatzaileak ekimenaren helburuak eta ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoei aurre egiteko garaian kontuan hartutako elementuak azaltzeko egindako ahalegina azpimarra daiteke.
107. Autonomia Erkidegoko zein Estatuko parlamentuetan, adostasun handia lortu da kirol-jarduna garrantzi eta eraginik handieneko gizarte-fenomenoetako bat dela adieraztean, eta adostasun hori du abiapuntu, hainzuzen ere, adierazitako memoriak. Aldi berean, kirol-jardun hori behar bezala trebatutako langileek bideratzen eta kontrolatzen ez badute jardura hori pertsonen osasun edo segurtasunerako kaltegarria izateko arriskua dagoela adierazten da.
108. Halaber, Euskadiko Kirolaren Legearen 62. artikuluan eta 2003-2007ko Kirolaren Euskal Planean ezarritakoa aipatzen da. Plan horretan ohartarazten zenez, kirol-arloko



agenteek lanbide-erregulaziorik ez zegoela hautematen zuten oro har, eta, horren ondorioz, prestakuntzarik ez duten eta behar baino maila txikiagoko kualifikazioa duten pertsonak sartu dira merkatuan.

109. Arlo horretan Estatuan zein Autonomia Erkidegoan g ratutako ekimenez gain, Eusko Legebiltzarrak 2012ko otsailaren 9an onartutako testua aipatzen da espezifikoki. Testu horrek honako hau zioen espresuki:

«Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio kiroleko lanbideak arautzeko lege-proiektu bat aurkez dezala, Autonomia Estatutuan eta Lurralde Historikoen Legean aurreikusitako eskumen-esparruaren barruan eta inplikaturako eragile guztiekin lankidetzan arituz, halatan non zehaztu  itezen kiroleko lanbideak, kiroleko profesionalen prestakuntza eta trebakuntza, kirol-lanbide bakoitzaren eskumen profesionalak eta lan-merkatuan duten jardura-eremua, era horretara antolatu ahal izateko pertsonen segurtasuna eta osakuna».

110. Geroago, Legebiltzarrean Jaurlaritzaren sail berriak adierazpen horren inguruan egindako balioespenari buruz egindako galdera bati erantzutean, Jaurlaritzak proiektuari ekiteko asmoa zuela argitu zuen sailburuak:

"Sail honek oso balioespen positiboa egiten du adierazpen horren inguruan, eta, hori dela-eta, sailburu honek Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Batzordeko eta Hezkuntza Batzordeko agerraldian (2013/02/11) aurreratu duenez, lehentasunezko helburu gisa ezarri da kirol-arloko lanbideen jarduna arautzeko Legearen aurreproiektu bat lantzea".

111. Beraz, ez dago zalantzarik Eusko Legebiltzarrak ekimen horren inguruan duen interesari dagokionez.
112. Hala ere, modu batean edo bestean tituludun lanbideen esparruarekin zerikusia duen edozein erregulaziorik beti izaten duen konplexutasuna aipatzen du memoriak, eta azpimarratzen du aurreproiektuaren xedea ez dela prestakuntza eta titulazio akademikoak, okupazioak, lanpostuak, lanlekuak edo titulazioen lanbide-profilak arautzea, eta ez direla lantzen kirol-sektoreko lanbide-jardunerako beharrezkoak diren prestakuntza-edukiak, ezta titulazio bakoitzari dagozkion lanbide-ahalmenen edo lanbide-atribuzioen ezarpena ere.
113. Legearen xedea, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbide jakin batzuetan sartzeko eta jarduteko aukera arautzea da, kirol-jardunean osasuna eta segurtasuna berma dadin.
114. Aurreko guztiak aukera ematen du sail sustatzaileak ekimenaren premia, arrazoizkotasuna eta egingarritasuna justifikatzeko egindako ahalegina era positiboan



balioesteko, baina Batzorde honek, laguntzeko asmoz, gabeziaren bat utzi du agerian ekimenaren justifikazioan.

115. Zehazki, gaur egun beren zerbitzuak sektore horretan ematen dituzten profesionalen errealitate kuantifikatua agertu nahi da, gutxi gorabehera bada ere. Sailak berak, ildo horretan aurkeztutako alegazioetako baten aurrean alegazioei buruzko memorian gaineratu duenez, gai hori lantzen ari da benetako egoera zehaztasun handiagoz ezagutzeko eta, era horretan, legea behar bezala ezartzeko, eta aurreproiektuaren beraren araubide iragankorrak kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailak dagoen eskariari erantzuteko eskatzen diren kualifikazioak dituzten profesionalen gabezia detektatzeko eta egiaztatzeak aukera hartzen du kontuan. Gauzen ordena logikoari jarraiki, araua landu eta onartu aurretik beharko litzateke prozesu hori.
116. Era berean, 2003-2007ko Kirolaren Euskal Planaren ondorioetatik eta Legebiltzarreko mozioetik ondoriozta daitekeenez, sail sustatzaileak kirol-jarduera egiten duten pertsonen osasun eta segurtasunerako inplikazioei buruzko datuak eta informazioak izango ditu, hain zuzen ere aplikazio-eremuak —jolasa, lehiaketa eta kirol-zuzendaritza —, mailak (oinarrizkoa, ertaina eta errendimendu handia) eta kasu bakoitzerako lanbide-kualifikazio baten eskakizuna mugatzeko kontuan hartzen direnak. Hori dela-eta, komenigarria izango litzateke informazio hori gaineratzea, arau-aukera horiek dakartzaten muga justifikazioa hobetzeko.
117. Ekimenaren balioespen ekonomikoa jasotzen duen memoria ekonomikoan, legearen beraren ondoriozkoak diren eta aurrekontuan bildutako partidei lotuta dauden gastu berriak eta legearen onarpena kontuan hartu gabe ezarri beharreko gastu berriak bereizten dira (diru-sarrereri dagokienez, kualifikazio-sistemari lotutako eskumenak lortzeko prozedurari lotutako tasak baino ez dira aipatzen). Gastu horiek guztiak memorian kuantifikatu dira, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) zein Aurrekontu Zuzendaritzak kontrastatu dituzte (azken horrek txosten bat egin du KEBek berak eskatuta).
118. Nolanahi ere, ekimenaren balioespen ekonomiko osoa Autonomia Erkidegoko Aurrekontuei lotutakoa dela baino ezin du jasota utzi Batzordeak; Xedapen Orokorrek Egiteko Prozedurari buruzko Legearen (XOEPL) 10.3 artikulua, berriz, aplikazioak beste administrazio publiko batzuetan, partikularrean eta ekonomia orokorrean eragin dezakeen kostua sartzen du balioespen horretan. Alderdi horrek garrantzia du proiektu honetan, ezezagunak baitira titulazioari, lehen laguntzako prestakuntzari edota erantzukizun zibilarren ziurtapenari lotutako eskakizunek —adibidez— sektorean izan ditzaketen ondorioak.
119. Prozedura inplikaturako gainerako administrazio eta gizarte-sektoreetara irekitzean, aurreproiektua hiru foru-aldundiek aztertu dute. Guztiek alegazioak aurkeztu dituzte, eta horietako batzuk teknikarien egungo egoerari, aldundiek berek eskaintako prestakuntzaren balidazioari eta boluntarioei emandako tratamenduari lotuta daude, eskola-kirolaren eremura zuzenduta daude espezifikoki —eremu horretan, erakunde



komunek emandako arauak garatu eta betearazteko eskumenak dituzte—, edota alderdi puntualago batzuekin dute zerikusia, hala nola ikuskapen- edo zigor-araubidearekin. Oro har, aurkeztutako hainbat proposamen onartu dira, eta erantzun arrazoitua eman zaie onartu gabeko gaiei.

120. Halaber, Administrazio Orokorreko hainbat salek aurkeztutako alegazio-idazkiak edo oharra daude jasota. Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiak ez du oharra egitea eragin dezakeen zirkunstantziarik ikusi, ezta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eta Herri Administrazio eta Justizia Sailak ere. Osasun Sailak, bestalde, errezeloren bat agertu du publizitate-arauen bideragarritasunaren inguruan, baina, azkenean, ohar horiek balioetsi ondoren, aurreproiektuaren 19. artikuluan jasota geratu dira.
121. Entzunaldiari dagokionez, aurreproiektua federazioen eta kirolaren munduarekin zerikusia duten hainbat erakunde eta elkarteri igorri zaiela jaso da espedientean. Gainera, jendaurrean jartzeko izapidea egin da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bitartez.
122. Entzunaldiaren emaitza gisa, alegazio eta ohar ugari eta askotarikoak aurkeztu dituzte honako erakunde hauek: Harrobia Lanbide Heziketako Zentroa, Kirol Management SLU, Euskadiko Aire Kirol Federazioa, Kirol Arlorako Iritzi Taldea (KAIT), Euskadiko Turismo Aktiboko Enpresen Elkarte (AKTIBA) eta Kirol Ekipamendu eta Zerbitzuen Enpresa Aholkularien Gipuzkoako Elkarte. Halaber, Asier Riaño Torre herritarrak aurkeztu ditu alegazio partikularrak.
123. Espedientean jasota dago, halaber, honako hauei prozeduran parte hartzeko egindako gonbidapena: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kirol-federazioen elkarteak, Euskal Kirol Federazioen Batasuna, Gorputz Jardueraren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofiziala eta Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarte (Ekime). Dena dela, kasu horietan ez da erantzunik jaso.
124. Hori guztia kontuan hartuta, Batzordeak balioespen positiboa egin du izapide horren inguruan, jatorrizko testuan aldaketa garrantzitsuak sorrarazteaz gain aukera eman baitio sail sustatzaileari Batzorde honi azkenean gorritako testua idaztea eragin duen gogoeta-prozesua agertzeko. Hala ere, aitortu beharra dago, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak emandako irizpena kontuan hartuta, adierazitako aholku-organoan ordezkaturik dauden erakundeetako batzuei ez zaiela kontsulta egin, arauarekiko interesa agertu badute ere. Dena dela, araua Kontseiluaren bitartez ezagutzeko aukerari esker, pentsa daiteke erakunde horiek bidezko oharra edo alegazioak aurkeztuko zituztela, proiektua ere jendaurrean jarri baita.
125. Txosten teknikoei dagokienez, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Aholkularitza Juridikoak landutako txosten juridikoa gaineratu da Txosten horrek ekarpen ugari egin dizkio testuari, eta haietako batzuk behin betiko testuari gaineratu zaizkio.



126. Halaber, Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektua dela-eta egindako genero-eraginari buruzko ebaluazio-txostena gehitu da; ebaluazio hori berriz ere egiaztatu du Emakundek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluen aplikazio zuzenaz den bezainbatean. Azken txosten horretan, oso balioespen positiboa egiten da organo sustatzaileak berdintasun-politikekin agertutako konpromisoaren inguruan, baina, bestalde, sexuaren arabera bereizita dagoen eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatuari, desberdintasunen desagerrarazte edo murrizketari, edota baliabideak lortzeko edo erabakiak hartzeko aukerari buruzko adierazpenaren edo aurreikuspenen oinarri izango den daturik ematen eta aztertzen ez dela egiaztatzen da. Kirol-eremuan dauden genero-joera nagusiei buruzko “zertzelada” batzuk ematen dira, eta, azkenik, aurreproiektuaren edukia aztertzen da eta hobetzeko hainbat gogoeta eta proposamenen ekarpena egiten da.
127. Halaber, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak proiektuak euskararen erabileraren normalizazioan izango duen eraginari eta hizkuntza-arloan indarrean dagoen araudiarekiko egokitasunari buruzko txostena aurkeztu du, eta, bertan, Gobernu Kontseiluak 2013ko maiatzaren 14an onartu zuen eta legearen, legegintzako dekretuaren, dekretuaren edo aginduaren forma hartzen duten xedapen orokorrak bi hizkuntzetan lantzeko neurriak onartzen dituen Erabakia betetzen dela geratu da jasota.
128. Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA) ekimenarekin oso kritikoa den txosten baten bitartez hartu du parte. Txosten horretan ondorioztatzen denez, alde batetik jarduerarreserba bat sortzen da, haren premia justifikatzen duen interes orokorreko arrazoiak badaudela egiaztatu ez bada ere. Bestetik, sistema berriak kirol-eremuan zerbitzuen prestazioa zaildu, zatitu eta murrizten duela adierazten du txostenak. Izan ere, merkatuaren itxierara bideratutako hainbat elementu ditu sistema horrek, eta zerbitzuaren prestazioa zailtzen duten (horrek dakartzan ondorio negatiboekin) sartzeko oztopo batzuk sortzen ditu, baina ez da egiaztatuta geratu oztopo horiek arauan adierazitako xederako lagungarriak direla.
129. Proposamena egiten duen sailak LEAren irizpidearen guztiz kontrako iritzia azaldu du, eta kirol-arloko lanbideen erregulazioaren eta herritarren osasun eta segurtasunaren babesaren arteko erlazioa zein aurreproiektuan bildutako neurrien (erregistroa, arauhauste berriak, izenen erabilera, publizitate-murrizketak edo profesionali dagozkien jardueren azalpenezko mugaketa) proportzionaltasunadefendatu ditu.
130. Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, enpresaren gaineko eraginari buruzko txostena txertatu da. Txosten hori deskribatzailea da funtsean, eta profesionalen gaineko ondorio edo “karga” batzuk onartzen ditu, baina ondorio horiek onargariak direla dio. Aurreproiektuan bilduta dauden betebeharrei dagokienez, txostenak dio prozeduraren eta betebeharrak egiaztatzeko baldintzen erregulazioari erregelamendu bidez ekin beharreko garaian balioetsi ahal izango dela sistemak oztopo burokratiko handiagoa



edo txikiagoa dakarren eta ekintzaileak jasotako alegazioak eta arestian adierazitako txostenak balioetsi ditu memoria luze batean. Xehetasunetan sartu gabe, balioespena oso luzea baita, esan daiteke alegazio batzuk onartzeko eta aurreproiektuaren azken testuan islatu ez diren alegazioak baztertzeko arrazoiak behar bezala agertu direla.

131. Egoera horretan, sail sustatzaileak jasotako alegazioak eta arestian adierazitako txostenak balioetsi ditu memoria luze batean. Xehetasunetan sartu gabe, balioespena oso luzea baita, esan daiteke alegazio batzuk onartzeko eta aurreproiektuaren azken testuan islatu ez diren alegazioak baztertzeko arrazoiak behar bezala agertu direla.
132. Arestian aurreratu dugunez, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak ekimenari buruzko irizpena eman du balioespen horren ondoren, eta, oro har, balioespen positiboa egin du.
133. Prozeduraren fase hori amaitu ondoren, prozedurari buruzko memoria labur bat egin da. Memoria horretan, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren irizpenean bildutako kontsiderazio espezifiko bakarra balioesten da, eta amaitutzat ematen da txostenen, alegazioen eta oharren balioespena.
134. Batzorde honen esku-hartzearen aurreko azken instrukzio-egintza gisa, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena agertzen da. Bertan, sailaren memoria ekonomikoa aztertzen da, eta memoria horrek beste administrazio publiko batzuen, partikularren eta, oro har, ekonomiaren gaineko eragina lantzen eta duela egiaztatzen da.
135. Batzorde honi dagokion azterketan, adierazi beharra dago aztertutako prozedura-iterak aukera ematen duela funtsa, alternatibak, egindako aukerak eta horien arrazoiak identifikatzeko eta arauaren balioespen juridikoa egiteko. Dena dela, espedienteari erantsitako informazioa osatu egin behar da adierazitako alderdietan. Alde batetik, arauak eraginpean har ditzakeen profesionalen egungo egoerari eta profesional horien jardunak kirola egiten dutenen osasunean izan dezakeen eraginari buruzko datu eguneratuak gaineratu behar dira. Bestalde, informazio ekonomikoa osatu beharko litzateke XOEPLaren 10.3 artikuluan *-in fine-* adierazitako zentzuan, eta ekimenak hartzaileengan (hots, kirol-arloko eta enpresetako profesionalengan) izan ditzakeen ondorioei dagokienez bereziki.

AURREPROIEKTUAREN AZTERKETA

I OHAR OROKORRAK

136. Aztergai dugun aurreproiektuaren xedea kirol-arloko lanbide jakin batzuen jardunaren inguruko funtsezko alderdiak arautzea eta, horretarako, lanbide horiek finkatzea, lanbide bakoitzari dagokion eremu funtzional orokorra esleitzea eta jarduteko eskatzen den kualifikazioa adieraztea da.



137. Helburu hori, edonola ere, Euskadiko Kirolaren Legearen 4.2 eta 62. artikuluetan xedatutakoari lotuta dago. Lehen artikuluen arabera, Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokie kirol-teknikariak prestatzeko zentroak eta horietako irakaskuntzak eta tituluak arautzea, ofizialki onartzea eta bultzatzea. Bestalde, adierazitako 62. artikulua aurreratzen zuenez, kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots, irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendua, sustapena eta bestelakoak egin ahal izateko, botere publikoek beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala edukitzea eskatuko dute.
138. Horren guztiaren oinarria kirol-jarduerak pertsonen osasunean eta segurtasunean duten eragin nabarmenaren argudioa da.
139. Ekimenaren sustatzaileak, beraz, kirol-praktika egokiaren eta kirola egiten dutenen osasun eta segurtasunaren arteko lotura hartzen du abiapuntutzat, baina, hala ere, edozein kirol-jardueratan esku hartzeko hainbat modu egon daitezke, eta, modu bakoitzaren barruan, hainbat intentsitate-maila.
140. Legegileak jardueran esku hartzeko jardueraren beraren ordez jarduera egiten duten profesionalak arautzea erabakitzen duenean, esku-hartze horren aukeren artean, intentsitaterik handienekoa nahitaez elkargoko kide egitea eskatzen duen tituludun lanbide bat prestatzea da, eta aukerarik irekiena, berriz, lanbide libreak prestatzea, azken kasu horren ezaugarri bereizgarria esku-hartzerik eza bada ere. Muturreko bi aukera horien artean, beste hainbat aukera daude, hala nola nahitaez elkargoko kide egiteko betebeharririk gabeko tituludun lanbide bat prestatzea edota alde aurreko baimen edo lizentzia administratiboa lortzeko edo gaitasun-proba jakin batzuk gainditzeko eskakizuna sartzea.
141. Kasu honetan, gaur egun dagoen eta etorkizunean, hda badagokio, ezartzen den araubidea betetzen du aurreproiektuak elkargoko kide egiteko aukerari dagokionez, eta hezkuntza- edo lanbide-kualifikazio jakin bati lotutako lau lanbide hartzen ditu kontuan. Eremu horretako lanbide posible guztiak ez badira ere, kirol-jardueraren oso esparru zabala biltzen dute, eta jasota ez dagoena—1.5 artikuluko salbuespenetan—hondarreko eremuei edo oso eremu espezializatuei dagokie.
142. Horrela, beraz, jeneralistenak diruditen lau lanbideak txertatu dira, lanbide horien barruan kirol-diziplinaren arabera espezializazio bat dagoela ahaztu gabe. Lanbide horien barruan, bereizketa zorrotz bat egin da, kirol-diziplinen eta kirolariek duten maila teknikoaren eta dedikazioaren arabera nagusiki. Bereizketa horrek muga handiak sartzen ditu, baita kirol-arloko profesionalengan ere.
143. Muga horiek guztiak kirolaren ikuspegitik sartu dira nagusiki, eta, berriz diogu, Autonomia Erkidegoko esku-hartzea kirola egiten dutenen osasun eta segurtasunera bideratuta eta lotuta dagoela dute oinarri muga horiek. Horren ondorioz, erregulazioari aurreikusitako baldintzetan ekiteko aurreproiektuan lotura hori etengabe hauteman behar dela onartu beharko da. Aitzitik, erregulazio horrek



justifikazio txikiagoa izango du, lanbidearen erregulazioaren ikuspegitik zein jarduera ekonomiko batean esku hartzeko ikuspegitik, lotura hori ahulagoa bada eta gai profesional edo korporatibo hutsekin zerikusi handiagoa duten beste alderdi batzuk lantzen badira.

144. Kasurik muturrenekoetan (loturarik ez dagoen edota lotura hori ahulegia den kasuetan), egoera horrek erregulazioaren premia edo proportzionaltasuna eta, zenbait kasutan, Autonomia Erkidegoko eskumena bera ere eraginpean har lezake. Izan ere, eskumenen azterketan adierazi dugunez, behar bezala finkatuta ez dagoen eta Estatuak erreserbatuta duen esparru bat dago tituludun lanbideen erregulazioan.
145. Batzorde honen eginkizuna ez da kirol-arloko lanbide bakoitzean jarduteko beharrezkoa edo egokia den gaitasuna ezartzea eta proposatzea, baina ohartarazi beharra dago beharrezkoa dela, adierazte hutsaz gain, bereizketa hori kasu bakoitzean behar bezala arrazoitzea, eta, horretarako, eskatutako espezializazioaren eta kirol-jarduera dagokien diziplinan eta mailan egiten dutenen osasun eta segurtasunaren babesaren arteko lotura egiaztatuko duten oinarri teknikoak behar dira.
146. Hori argitu ondoren, eta artikuluen azterketa xehatuagoa egin aurretik, komeni da arauaren egingarritasun juridikoa nolabait ere eraginpean hartzen duten hiru alderdi aurreratzea: i) legegilearen –eta, zehazki, Autonomia Erkidegoko legegilearen– ahalmena lanbide arautuen eta tituludun lanbideen esparruan eragiteko; ii) aurreproiektuak langileek Europar Batasuneko eremuaren barruan zirkulatzeko duten askatasunean eta eremu horren barruko zerbitzuen prestazioan duen eragina; iii) aurreproiektuaren eta erregulazio egokiaren printzipioen arteko egokitasuna.

A) Tituludun lanbideak eta lanbide arautuak:

147. Aurreproiektuaren helburua Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeko eta jarduteko aukera arautzea da, eta lanbide arautuen eta tituludun lanbideen esparru korapilatsuaren ikuspegitik aztertu behar da asmo hori.
148. Espainiako Konstituzioaren 35. artikulua lanbidea edo ofizioa askatasun osoz aukeratzeko eskubidea onartzen du oro har, eta merkatu-ekonomia baten esparruko enpresa-eskubidea onartzen duen 38. artikulua gainaratu behar zaio horri.
149. Dena dela, eskubide horiek ez dira erabatekoak, eta Espainiako Konstituzioaren 36. artikulua berak uzten du agerian muga hori, lege-erreserba bat ezartzen baitu profesionalen elkargoen araubide juridikoaren berezko berezitasunen zein tituludun lanbideen jardunaren kasuetarako. Legegileak, beraz, lanbide berriak sor ditzake, eta haien jarduna arautu.
150. Lege-erreserba horren norainokoari eta, hala badagokio, mugei dagokienez, Konstituzio Auzitegiak, uztailaren 24ko 83/1984 Epäan, Konstituzioan lanbide, ofizio



edo enpresa-jarduera jakin bakoitzaren funtsezko edukirik bermatzen ez dela adierazi zuen hasiera batean. Epai horrek, halaber, honako hau zioen:

“(...) Espainiako Konstituzioaren 36. artikulua aitazten dituen tituludun lanbideak, izateko ere (hau da, jarduera jakin batzuk titulu akademikoak edukitzeko baldintzapean jartzeko) Lege bat (diziplinatuko dituen eta jarduna arautuko duena) ezinbesteko dutenak. Garbi dago lanbide horien erregulazioa, lege-agindu hori jarraikiz, Legeak espresuki erreserbatuta duela. Hala ere, garbi dago, halaber, aginduaren izaera dela-eta erreserba espezifiko hori eta eskubide eta askatasunei dagokienez Espainiako Konstituzioaren 53.1 artikuluan bilduta dagoen erreserba orokorra oso desberdinak direla. Horren ondorioz, legegileari ezin zaio planteatu agindu horretan aldarrikatzen ez diren eskubide eta askatasunen ezein funtsezko eduki zaintzeko beharra, eta lanbide-jardunaren erregulazioa, Konstituzioaren beste agindu batzuen kontrako ez den heinean, legegileak egin dezakeela komenigarritzat hartzen dituen baldintzetan.

151. Legegileak esparru horretan dituen aukerak are garbiago daude ezarrita apirilaren 10eko 42/1986 Epaiari. Epai horren arabera, herritarren askatasun eta eskubideen bermea arlo hori —profesionalen elkargoena eta tituludun lanbideena, alegia— legegileak arautzean datza, eta legegilearen muga bakarrik Konstituzioaren gainerako aginduen, eta nagusiki oinarritzko eskubideen ondoriozkoak dira. "Legegileari dagokio, beraz, interes publikoaren eskakizunak eta bizitza sozialak sortutako datuak kontuan hartuta, zehaztea lanbide bat noiz den lanbide eta lanbide horrek noiz uzten dion guztiz libre izateari eta noiz bihurtzen den tituludun lanbide, hau da, jarduteko tituluak edukitzea (goi-mailako ikasketak izatea eta ikasketa horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidez berrestea) eskatzen duen lanbide".
152. Bestalde, hemen ere argitu beharra dago lanbide arautuen eta tituludun lanbideen arteko desberdintasuna. Azken horiek, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera, jarduteko tituluak edukitzea (goi-mailako ikasketak izatea eta ikasketa horiek bidezko ziurtagiria edo lizentzia lortzearen bidez berrestea) eskatzen dutenak dira. Lanbide arautuek, berriz, esanahi zabalagoa dute eta jarduna diziplinatzeko arau bat duten lanbide guztiak biltzen dituzte. Irailaren 7ko 2005/36/EE Zuzentarauak honela definitzen du lanbide arautua: lege-, erregelamendu- edo administrazio-xedapenei jarraikiz, sartzeko, jarduteko eta era jakin batean jarduteko zuzenean edo zeharka lanbide-kualifikazio jakin batzuk edukitzea eskatzen duen jarduera edo jardura multzoa. Kontzeptu hori, halaber, zuzentzari hori kaltetzen duen azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak biltzen du.
153. Lanbide arautuen barruan, halaber, jarduteko trebakuntza ofiziala —interes orokorrak babesteko beharrezkoa den baliabide gisa— behar duten kasuak sartzen dira Kasu horretan, Konstituzio Auzitegiaren martxoaren 25eko 111/1993 Epaiak, besteak beste uztailaren 6ko 122/1989 Epaiari eta martxoaren 25eko 111/1993 Epaiari errepikatzen den



doktrinarekin, adierazi zuen botere publikoek, lan egiteko eta lanbidea edo ofizioa askatasun osoz aukeratzeko eskubidea behar bezala errespetatuta, lanbide-jarduera jakin batzuen jardunean esku har dezaketela eta lanbide-jarduera horietarako alde zuzenetik baimen edo lizentzia administratibo bat lortzeko edota gaitasun-proba jakin batzuk gainditzeko eska dezaketela. Hala ere, “kasu horietan, betekizun, baimen, gaikuntza edo proba horien eskakizuna ezin da inola ere parekatu Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan aipatzen diren lanbide-tituluen sorkuntza edo erregulazioarekin, eta ez du zerikusirik konstituzio-agindu horrek Estatuari erreserbatzen don eskumenarekin”.

154. Konstituzio Auzitegiaren martxoaren 25eko 111/1993 Epaia tituludun lanbidetzat hartu behar denaren inguruko xehetasun bat gaineratu du. Izan ere, jarduteko dagokion titulua lortzearen bidez egiaztatu beharreko unibertsitate-ikasketak eskatzen dituzten lanbideekin identifikatzen ditu tituludun lanbideak. Eta Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 5eko 201/2013 Epaia kontzeptu zorrotzago horri —unibertsitate-titulu bati lotutakoari— heltzen diola dirudi, balidatu egiten baitu tituludun lanbidearen kontzeptu zorrotz hori tituludun lanbideen jardunari eta profesionalen elkargoei buruzko maiatzaren 31ko Kataluniako 7/2006 Legearen 2. artikuluan erabiltzea, hain zuzen ere bat datorrelako jurisprudentzia konstituzionalak erabilitako kontzeptuarekin. Hala ere, goi-mailako ikasketen eta unibertsitate-ikasketen arteko identifikazio horrek ez du erabateko adostasunik doktrinan, eta, adibidez, Estatuko Kontseiluak ez zuen kontuan hartu 48/2009 Irizpenean, Estatuak Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko apirilaren 23ko 3/2008 Legearen (LEPDCat) aurrean jarritako konstituziokontraotasuneko errekurtso posible bat balioesteko garaian.
155. Tituludun lanbidetzat hartu behar denaren mugaketazehatzak, balio teorikoa ez ezik, garrantzi erreala ere badu, bai Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluan kontuan hartutako lege-erreserbaren eremua ezartzeko garaian, bai beste gai konplexu batean, eskumenen gaian, alegia.
156. Konstituzio Auzitegiak zuzenean landu zuen eskumenen gaia ekainaren 9ko 154/2005 Epaian. Dena dela, Konstituzio Auzitegiaren uztailaren 6ko 122/1989 Epaia honako hau aurreratu zuen: “legegileari dagokio zehaztea, interes publikoaren eskakizunak eta gizarte-bizitzak sortutako datuak aintzat hartuz, noiz pasatu behar duen lanbide batek tituludun lanbide izatera. Eta zalantzarik ez dago ezen, Konstituzioaren 149.1.30 artikulua testuari jarraikiz, Estatuko legegilea dela eskumen eskusibo hori duena”.
157. Horrela, beraz, Estatuak lanbide batek tituludun lanbide izatera noiz pasatu behar duen ezartzeko eskumena duela onartzen da, baina eskumen hori Konstituzio Auzitegiak berak Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan xedatutakoaz egindako interpretaziotik ondoriozta liteke, eta jurisprudentzia konstituzionalak “tituludun lanbidetzat” hartu behar denaz egiten duen interpretazioari dagokio.
158. Ikuskera zorrotz batetik abiatuta (eta, horren arabera —eta eskumen-banaketaren ondorioetarako—, jarduteko dagokion titulua lortzearen bidez egiaztatutako unibertsitate-ikasketak izatea eskatzen dutenak baino ez dira tituludun lanbideak),



aurreproiektua Autonomia Erkidegoko eskumen-eremuan kokatuta dago. Izan ere, Estatuko eskumenarekiko injerentzia gorputz-hezkuntzako irakasleen kasuan baino ezin da planteatu (3. artikulua), eta, alderdi horretan, aurreproiektuak errespetua agertzen du, hain zuzen ere beharrezkoak diren tituluen inolako aipamenik egiten ez duelako, Estatuak nagusiki hezkuntzan eta funtzio publikoan dituen eskumenak baliatuz horren inguruan eman duen erregulazioarekin.

159. Gainerako kasuetan — 4., 5. eta 6. artikuluetan aipatutako lanbideetan —, aurreproiektuak ez du nahitaez unibertsitate-titulaziorik eskatzen, lanbide-kualifikazio batzuen bidez egiaztatutako nolabaiteko gaitasun bat baizik (eta kualifikazio horiek, aldi berean, arauak 2.6 artikuluan xedatutakotik ondorioztatzen denez— kontuan hartzen dituen hezkuntza-, lanbide- eta kirol-tituluen bidez egiaztatuko dira). Horrek urrundu egiten du gaia tituludun lanbideetatik, eta lanbide batean jarduteko trebakuntza ofizial bat —interese orokorrak babesteko beharrezkoa den baliabide gisa— izatea eskatzen den kasuetara hurbiltzen du.
160. Lanbide arautuen eremu horretan, esku hartzeko eskumena babestu nahi den ondasun juridikoaren gainean jarduteko eskumen materiala duenari dagokio, eta Autonomia Erkidegoak eskumen eksklusiboa du kirolaren gainean, eskumenen azterketan ohartarazitako mugak aparte utzi gabe.
161. Dena dela, zioen azalpenean tituludun lanbideen arbko eskumenaren inguruan egiten den deialdia (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10. artikuluko 22. zenbakian jasotakoa) eta ekimenaren maila (dirudienez Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluko lege-erreserbarekin lotuta dagoena) interpretazio horren aurkakoak izan daitezke.
162. Edonola ere, tituludun lanbide baten ondorioetarako titulutzat hartu behar denaren interpretaziorik zabalenarekin ere (hau da, titulutzat besterik gabe goi-mailako ikasketak izatea hartzen duen interpretazioarekin —eta, beraz, LOEren 3.5 artikuluan horri buruz xedatutakoa kontuan hartuta—, aurreproiektuak tituludun lanbideen eskema hausten du. Izan ere, federazio-tituluak ere titulu ofizialtzat hartzen ditu, eta kualifikazioa adierazitako 2.6 artikuluan ez ezik arauaren amaierako zatian ere adierazten diren beste bide alternatibo batzuen bidez egiaztatuz (hala nola osatu gabeko prestakuntza ofizialen, gaitasun-ziurtagiriaren, formalki aitortutako lanbide-esperientziaren edota zirkunstantzia horietako bat baino gehiago biltzearen bidez) lanbideetan jarduteko aukera onartzen du.
163. Aurrekoaz gain, badira Autonomia Erkidegoko legegileak gai horretan esku hartzea legitimatzen duten beste arrazoi edo funts batzuk ere.
164. Ikuspegi horretatik, eskumen-azterketak Espainiako Konstituzioaren (EK) 43. artikuluan xedatutakotik abiatu behar du. Artikulu horretan, 1. zenbakian osasuna babesteko eskubidea aitortu ondoren adierazten denez, botere publikoei dagokie osasun publikoa prebentzio-neurrien bitartez antolatu eta babestea (2. zenbakia). Eta artikulu horren amaieran aurreikusten denez, botere publikoek osasun-hezkuntza,



gorputz-hezkuntza eta kirola sustatuko dituzte, eta aisiaren erabilera egokia bultzatuko dute.

165. Arestian aurreratu dugunez, halaber, politika sozial eta ekonomikoaren printzipio gidari diren heinean, haien onarpenak, errespetuak eta babesak izan behar dute botere publikoen jardunaren oinarri, Espainiako Konstituziaren 53.3 artikuluko *ohiaren* arabera.
166. Estatuak berak ere kontuan hartu du lanbide horien erregulazioan lege bidez esku hartzeko aukera, baina ez da Parlamentuan aurkeztutako lege-proiektu batean gauzatu, gorputz- eta kirol-jardueraren lanbide-eremua antolatu eta arautzeko zirriborro bat egin bazen ere. Dena dela, Estatuaren ez-egite horrek ez du eragozten autonomia-erkidegoek gaiari heltzeko aukera, Espainiako Konstituzioaren 43. artikuluko agindutakoari jarraikiz, betiere adierazitako eskumen-mugez gain Konstituzioaren beste printzipio batzuk errespetatzeko badira (hala nola berdintasunaren edo merkatu-batasunaren printzipioak).
167. Aurrekoaren adierazgarri ditugu Kataluniako kiroleko lanbideak betetzeari buruzko Legearen (LEPDCat) onarpena eta Extremadurako kiroleko lanbideen jarduna antolatzen duen apirilaren 16ko 15/2015 Legearen (LEPDEx) onarpena. Bi kasuetan, dagokion Autonomia Erkidegoko parlamentuak aurreproiektuaren antzera arautzen ditu kirol-arloko lanbideak, eta ez dago kirolaren esparruko tituludun lanbideak zein diren ezartzen duen Estatuko legerik.
168. Gainera, gogorarazi beharra dago aurreproiektuaren eredu gisa erabili den LEPDCat legearen onarpena dela-eta Estatuaren eta Kataluniako Administrazioaren artean sortutako gatazkaren ondorioz Generalitatearen eta Estatuaren arteko Bitariko Batzordearen Arau Jarraipenerako eta Gatazken Prebentzio eta Konponbiderako Azpibatzerdearen Erabakia hartu zela. Horren arabera, konpondutzat hartzen ziren Erabakian jasotako xedapenen inguruan sortutako desadostasunak. Gainera, ildo horretan hartutako konpromiso batzuk kontuan hartu dira aurreproiektua idaztean, eta hori lagungarria izan da Autonomia Erkidegoak erregulazio horri ekiteko duen eskumenaren inguruan egon daitezkeen zalantzak gairiditzeko; nolana ere, ezin da baztertu etorkizunean Estatuko legegileak, bere eskumen-tituluen bidez (hala nola kirolaren eta osasunaren arteko lotura bereziaren bidez), esparru horretan lege bidez esku hartzeko aukera, eta horrek ondorioak izango ditu gaur egun indarrean dauden autonomia-erkidegoetako legeetan.

B) Jarduerak egiteko eta zerbitzuak emateko aukera libre:

169. Barneko eskumen-gaitik eta arrazoi legítimoetatik kanpo, aurreproiektuak hainbat oztopo jartzen ditu kirolaren munduaren barruko zerbitzuak emateko, eta oztopo horiek zerbitzuak emateko aukera libre eta lehia libre bermatzeko emandako Europako zuzentarauak kontuan hartuta aztertu behar dira; zehazki, lanbide-kualifikazioen onarpenari buruzko irailaren 7ko 2005/36/EE Zuzentaraua (azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuaren bidez barne-zuzenbidean txertatua) eta Zerbitzuen



Zuzentzarua (nagusiki —baina ez bakarrik— zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legearen bidez txertatua) hartu behar dira kontuan.

170. Lanbide-kualifikazioen onarpenari dagokionez, 2005/36/EE Zuzentzariak honako printzipio orokor hau ezartzen du: estatu kideek ezin izango dute mugatu, lanbide-kualifikazioei lotutako arazoak tarteko, beste estatu kide batean zerbitzuak askatasun osoz emateko aukera, betiere beste estatu kide batean lanbide berean jarduteko legez ezarrita egonez gero.
171. Aurrekoa gorabehera, zerbitzu-emaileak, aurreproiektuari jarraikiz, lanbide-kualifikazioei zuzenean eta espezifikoki lotuta dauden harrerako lekuko diziplina-arauen aplikazioaren mende egon beharko du, hala nola honako alderdi hauen inguruko arauen aplikazioaren mende: lanbideen definizioa, lanbide jakin batek hartzen duen edo hertsiki dagokion jardura sorta, tituluen erabilera, eta kontsumitzailearen babesari eta segurtasunari zuzenean eta espezifikoki lotuta dagoen lanbide-zabarkeria astuna.
172. Adierazitako 2005/36/EE Zuzentzariaren azalpen-zatiak islatzen duenez, lanbide-kualifikazioak estatu kide batean eskuratzen dituzten pertsonen beste estatu kide batean lanbide bera lortzeko eta nazionalen eskubide berekin jarduteko ematen dien bermea profesional migratzaileak azken estatu kideak ezar diezazkiokeen jardun-baldintza ez-diskriminatzaileak betetzeko betebeharra aparte utzi gabe ulertu behar da, betiere baldintza horiek objektiboki justifikatuta badaude eta neurrikoak badira.
173. Ikuspegi horretatik, aurreproiektuaren 18. artikulua baztertu egiten du gai horren inguruko eztabaida oro, nazioarteko tratatuei, Europako Erkidegoko arauari eta Estatuko transposizio-xedapenei helduz baita Europar Batasuneko estatu kideetan edota langileen zirkulazio librea, ezartzeko askatasuna eta zerbitzuak emateko askatasuna aplikatzen duten estatuaren batean lortutako lanbide-kualifikazioak onartzeko garaian.
174. Zerbitzuen Zuzentzariaren ikuspegitik, gaia korapilatsuagoa da. Era berean, zuzentzari horren helburu nagusietako bat Europar Batasunean ezartzeko eta zerbitzuak emateko askatasuna erraztea da, eta aplikazio-eremu zabal bat aurreikusten du horretarako. Eremu horretan, oro har eta baztertutako sektore jakin batzuk eta jardura jakin batzuen espezifikotasunen onarpena aparte utzi gabe, ordainsari baten truk emandako zerbitzu guztiak sartzeko dira.
175. Zuzentzari horren barne-transposizioari buruzko arau nagusiaren (hots, zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legearen) helburuen artean, honako hauek ditugu: zerbitzu-emaileen ezarpen-askatasuna eta zerbitzu-prestazio librea errazteko beharrezkoak diren xedapen orokorrak ezartzea, eta, ildo horretan, prozedurak sinplifikatzea, aldi berean zerbitzuen kalitate-maila handia sustatzea, eta, azkenik, zerbitzu-merkatuen funtzionamenduari Lege honetan ezarritakoari jarraikiz justifikatua ez dauden edo neurri kanpokoak diren mugak jartzeko aukera saihestea.



176. Bestalde, zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legearen 5. artikulua salbuespentzat hartzen du zerbitzu-jardura batean sartzeko edo jarduteko baimen-araubide oro. Salbuespen hori diskriminaziorik ezari, premiari eta proportzionaltasunari lotutako baldintzak betetzen direnean baino ezin izango da ezarri, eta behar bezala arrazoitu beharko da baimen-araubide hori ezartzen duen legean.
177. Bestalde, herri-administrazioaren araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 39 bis artikulua, Ómnibus Legean emandako idazkuntzaren arabera ezartzen duenez, beren eskumenak baliatuz eskubide indibidualak edo kolektiboak erabiltzeko aukera mugatzen duten edo jardura bat garatzeko betekizunak betetzea eskatzen duten neurriak ezartzen dituzten administrazio publikoek murrizketarik txikiena dakarten neurria aukeratu, interes publikoa babesteko beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuak lortzeko egokia dela justifikatu beharko dute, eta ezein kasutan ez da tratu-desberdintasun diskriminatzaile izango. Agindu hori bera ematen du sektore publikoaren araubide juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4.1 artikulua; lege hori, nolana ere, argitaratu eta hurrengo urtean jarri zen indarrean, 2015eko urriaren 2an, alegia.
178. Hau da, funtsean legegileari dagokio dauden arau-aukeren artean komenigarritzat hartzen dituenak aukeratzea, baina zerbitzuen prestazio librea eraginpean hartzen duten neurri berriak sartu nahi baditu, balioespena egitean kontuan hartu behar ditu dauden aukera guztiak, eta, hala badagokio, murrizketarik txikiena dakarrena aukeratu beharko du.
179. Aurreproiektua esparru horretan aztertu behar da, oztopoak jarri nahi baitizkio kirol-arloko profesionalen esparruan zerbitzuak emateko askatasunari, eta oztopo horiek ez dira titulu akademiko edo lanbide-tituluei lotutako kualifikazio jakin baten eskakizunera mugatzen (4., 5. eta 6. artikulua): aitzitik, zerbitzuak emateko aukera librerako beste oztopo batzuk hartzen ditu kontuan, hala nola erregistro batean izena emateko nahitaezotasuna (10. artikulua) eta Jaurlaritzak oraindik zehaztu gabeko baimen-araubide bat ezartzeko aukera (19.1 artikulua). Bestalde, oztopo gehiago jartzen dizkio lanbide horien jardun libreari, izenen erabilera bat (9. artikulua), erantzukizun zibila ziurtatzeko eskakizuna (13. artikulua) eta publizitatearen arloko beste neurri murriztaile batzuk (19. artikuluko 2. eta 3. zenbakiak) ezartzen baititu.
180. Sartzeko neurrien premia eta proportzionaltasuna aztertzeko garaian, eta Lehiaren Euskal Agentziak behar bezala egiaztatutzat hartzen ez badu ere, Batzorde honen ustez nekez jar daiteke zalantzan lotura bat dagoela kirol-jardun egokiaren eta kirola egiten dutenen osasun eta segurtasunaren artean. Lotura hori Konstituzio Auzitegiak berak onartu du, eta datu enpiriko edo estatistikoekin justifikatuta ez badago ere, espedientearen zein aurreproiektuaren zioen azalpenean islatuta dago.



181. Adierazitako agentziarentzat, kirolaren profesionalizazioak desproporazio nabarmena dakar zerbitzuen prestazio librean eragitean. Izan ere, sartzeko aukeran sortzen duen oztupoak eta lanbide-zerbitzuen eskaintzan sortzen duen murrizketak ez dute justifikaziorik, agentziaren ustez ez baitakarte hobekuntzarik segurtasunaren eta osasunaren babes-estandarretan. Horrela, beraz, agentziaren ustez, sartutako oztupoek ez dute proportzionaltasun-testaren lehen elementua ere gainditzen, ez baitira egokiak kirol-jardunari lotutako osasunean eta segurtasunean ageriko hobekuntza bat lortzeko.
182. Gure aldetik, eta proportzionaltasun-printzipioak dakartzan zailtasunak onartuta ere, kasu honetan ezin dugu erabateko ziurtasunez ondorobztatu desproporazio objektibagarri bat gertatzen denik, aukeratutako bereizketa-elementuak —hau da, osasuna eta segurtasuna— ez baitira arbitrarioak eta funts arrazionalik gabekoak.
183. Zioen azalpenak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Kataluniako kirol-ereduen arteko antzekotasuna aipatzen du bere garaian LEPDcat legea onartzera bultzatu zuten funtsez eta arrazoiez “jabetzeko” (zentzu onean), eta Kirolaren Euskal Planean (2003-2007) egiten den salaketa gaineratzen du. Plan horretan salatzen zenez, prestakuntzarik ez duten eta behar baino maila txikiagoko kualifikazioa duten pertsonak sartu dira merkatuan.
184. Bestalde, izaera subjektiboko edo lurralde-izaerako diskriminazio posible oro saihesteko bi adierazpen garrantzitsu biltzen dituaurreproiektuak. Barne-esparruan, 1. artikulua 7. zenbakiak ezartzen duenez, merkatu-batasuna bermatzeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legean ezarritakoa aparte utzi gabe ulertu behar da erregulazioa, eta, beraz, lege horretan jasotako printzipioak eta bermeak onartzen dira. Europako eta nazioarteko esparruan, berriz, arestian adierazitako 18. artikulua diskriminazio oro baztertzen du lanbide-kualifikazioak onartzean. Bi agindu horiek eta 7. artikuluan kasu espezifikoetarako aurreikusitako arau bereziek tratu diskriminatzailea baztertzea ahalbidetzen dute, aurreproiektuan eskatutakoarekin homologatutako kualifikazio bat lortzen duen edozein profesionalak ohiko izaerarekin jardun ahal izango baitu bere jardueran Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta Autonomia Erkidegoan ohiko izaeraz ez diharduten profesionalak bertan egiten dituzten aldizkako jardunen kasuan ere, irtenbide ireki eta integratzaile bat eskaintzen du artikulua horrek.
185. Testuinguru horretan, sartzeko oztupo ez-diskriminatzaile eta neurrikotzat har daiteke kualifikazioaren eskakizuna.
186. Batzordearen ustez, ahalegin handiagoa egin beharkozatekeen helburu hori lortzeko dauden aukera guztiak eta azkenean egiten den aukeraren premia edo, are neurri handiagoan, aukera horrek beste batzuen aldean dituen abantailak azaltzeko, baina egia da, halaber, premia hori beste arau-testu batzuetatik atera daitekeela inplizituki (eta, hala badagokio, esplizituki ere bai). Arestian adierazitakoaren erakusgarri, dagoeneko indargabetuta dagoen abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren hitzaurrean adierazitakoa da (gaur egun, arestian aipatutako urriaren 24ko 1363/2007



Errege Dekretuak ordeztzen du Dekretu hori). Errege Dekretu horren bidez, kirol-technikarien titulazioak lortzeko irakaskuntzak araubide bereziko irakaskuntza gisa eratu eta tituluen eta bidezko gutxieneko irakaskuntzen jarraibide orokorrak onartu ziren. Testu horretan onartzen zenez, “(...) azken urteotan, kirol-jarduerak garrantzi handia hartu dute osasunaren zaintzaren eremuan (...). Bestalde, kirol-jardunek (...) arrisku-egoerak edo arriskugarritasun objektiboko egoerak dakartzate sarritan, eta haiei aurre egiteko beharrezkoak dira, jardueri eta horien jardunari buruzko ezagutzez gän, segurtasunaren eta lehen mailako laguntzaren arloko prestakuntza berezia”. Hortaz, “(...) entrenatzaileen prestakuntzarako, kalitateko baldintzak behar dira, eta etorkizuneko kirol-technikariak kultura egokia eta, bereziki, bete beharreko funtzio eta zereginekin bat etorriko diren prestakuntza-eduki batzuk bildu behar izatea oinarrizko alderditzat har dadin eskatu behar da”.

187. Bestalde, gogoeta espezifikoa egin behar da erregistroa ezinbesteko betekizun gisa jasotzeko aukeraren inguruan, aurreproiektuaren 19.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Aurreproiektuan, Jaurlaritzak kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatzeko emandako agindu bat biltzen da, eta, kualifikazioen eskakizunari dagokionez, baimenari, erantzukizunpeko adierazpenari, komunikazioari, ebaluazioari, egiaztapenari eta ikuskapenari lotutako bidezko sistemak ezartzeko ahalmena esleitzen dio (era irekiegian gure ustez).
188. Erregistroa lanbideetan sartzeko eta jarduteko ezinbesteko betekizun gisa jasotzea baimen-araubidetzat hartu behar da. Araubide horretan, jardura egiteko eskatutako betekizunen betetzearen aldez aurreko –edo ex ante– kontrol bat aurreikusten da. Zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legearen 5. artikuluari jarraikiz, osasunaren babesa horrelako baimen-araubide baten premia justifika dezaketen arrazoietako bat da, baina, aldi berean, artikulua horren arabera, jardura ekonomikoa kontrolatzeko edozein araubideren ezarpenak kontuan hartu behar du, arestian aurreratu dugunez, proportzionaltasun-printzipioa; hau da, araubide horrek tresnarik egokiena izan behar du nahi den helburua lortzeko, emaitza bera lortzea ahalbidetuko duen eta murrizketa txikiagoak dakartzan bestelako neurririk ez dagoelako.
189. Sail sustatzaileak beste aurrekari batzuk aipatu ditu erregistro horren premia justifikatzeko, hala nola LEPDCat legea eta profesionalen beste erregistro batzuk.
190. Dena dela, aurreproiektuaren helburua —osasuna eta segurtasuna— kontuan hartuta legegileak horrelako erregistro bat sar badezake ere, neurriaren proportzionaltasuna eztabaidagarria da. Izan ere, hain murriztaileak ez diren beste aukera batzuen aldean aldez aurretik esku hartzeko formula horren premia oso garbi hautematen ez den kasuetako bat da hori. Adierazgarri gisa, eta sailak berak beste aurrekari batzuk aipatzen dituen gero, gure ustez aipatu beharra dago LEPDEx legeak aldez aurreko komunikazio bat aurkezteko betebeharra baino sartu ez duela (eta, beraz, nahikotzat hartu duela) arazo bera konpontzeko.



191. Hori dela-eta, aurreproiektuaren helburuak lortzeko aldez aurreko komunikazio bat edo, hala badagokio, erantzukizunpeko adierazpen bat –informazio-izaerako erregistro batekin batera– ezartzea nahikoa den ala ez balioesteko aukera ematen diogu organo sustatzaileari. Neurri horrek aurreproiektuan aurreikusitakoak baino murrizketa txikiagoa dakar, eta, gure ustez, neurri handiagoan dator bat Zerbitzuen Zuzentzarauaren bidez ezarri nahi diren printzipioekin.
192. Azken batean, erregistroa gaur egungo baldintzetan utziz gero, Batzordearen ustez aurreproiektuak neurri handiagoan egin beharko luke aurrera erregulazioari dagokionez. Izan ere, zenbait gaitan, hala nola isltasuna kontuan hartzean, negatiboa izan beharko lukeela ulertuz gero, lege-maila ezarri beharko litzateke.
193. Lanbide-jardunean sartutako oztopoei dagokienez, Batzordeak ez du inolako eragozpenik ikusten kontsumitzaileak babestera bideratuta egongo den izenen erabilera bat sartzeko (9. artikuluan aurreikusitakoa, adibidez), lanbideen legezko onarpenaren ondoriozko neurriko neurria dela baitirudi.
194. Antzeko balioespena egin behar da 13. artikuluan aurreikusitako erantzukizun zibila ziurtatzeko eskakizunaren inguruan, eskakizun horrek, izenen erabileraren ingurukoak bezala, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko helburuari erantzuten baitio.
195. Nolanahi ere, ohartarazi beharra dago Zerbitzuen Zuzentzarauaren 23.2 artikuluan gai horri buruz xedatutakoaz. Artikulu horren arabera, “Zerbitzu-emaile bat bere lurraldean kokatzen denean, estatu kideek ez dute nahitaez eskatuko lanbide-erantzukizuneko aseguru bat edo berme bat, ezta zerbitzu-emaile horrek berme baliokide edo funtsean konparagarri bat duenean ere (helburuari eta honako alderdi hauetan eskaintzen duen estaldurari dagokienez: aseguraturako arriskua, aseguraturako zenbatekoa edo bermearen muga, eta kokatuta dagoen beste estatu kide batean estaldurak izan ditzakeen salbuespenak). Balokidetasuna partziala baino ez bada, estatu kideek berme osagarri bat eskatu ahal izango dute artean estalita ez dauden elementuak estaltzeko”.
196. 13. artikulua horrek zirkunstantzia hori ere jaso lezake, baina aurreproiektuak berak gai horretan garapen-erregelamendu bati jarraitzen dionez gero, bideragarria da, halaber, zirkunstantzia hori ondorengo erregelamenduak espresuki jasotzea.
197. 19. artikuluan jasotzen diren publizitate-arloko mugei dagokienez, gogorarazi beharra dago Autonomia Erkidegoak, adierazitako kirol-arloko eskumenez gain, publizitate-arloko eskumenak dituela, Estatuarekin lankidetzan (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.27 artikulua ohia). Hala ere, Konstituzio Auzitegiak irailaren 19ko 146/1996 Epaian adierazi zuenez, “publizitatearen” eskumen-eremuak hainbat ikuspegi onartzen ditu; horrela, beraz, “aztergai dugun sektorearen –hots, publizitatearen– antolamendu juridikoan, inplikaturik egon daitezke Estatuak eta autonomia-erkidegoek publizitate-jardueraren alderdi edo adierazpen jakin batzuen erregulazioa biltzen duten beste eremu material batzuetan dituzten eskumenak zehazten dituzten arauak; horrela, beraz, sektore horri buruzko arauetan, baliteke publizitate-arloko eskumen-arau espezifikoarekin batera beste eskumen-titulu desberdin



batzuk biltzea, eta, kasu horietan, arau guztien alean zein den nagusia eta, beraz, aplikagarria aztertu beharko da” (4. oinarri juridikoa).

198. Kasu horretan, nabaria dirudi publizitate-arloko mugak kirolaren ikuspegiari oinarrituta daudela eta asmoa ez dela, planteatu izan den bezala, osasun-arloan interferitzea. Mugek, beraz, kirol-arloko profesionalek ematen dituzten zerbitzuak baino ez dituzte eraginpean hartzen, azken helburua kirola egiten dutenen osasuna eta segurtasuna babestea bada ere.
199. Dirudenez, LEPDEx legean ere gauza bera ulertu da. Izan ere, kirol-arloko profesionalek eskaintako zerbitzuen publizitateari lotutako agindu bat sartu da lege horretan, eta, horren arabera, galarazita dago erabiltzaile eta kontsumitzaileen osasun eta segurtasunerako kaltegarriak diren kirol-jarduerak sustatzea.
200. Hala ere, aurreproiektuak kasu horretan egin duen idazkuntzak osasun-esparruan du jatorria, eta, esparru horren barruan, merkaturako produktuak eta zerbitzuak txertatzeko beharrezkoa da kirol-zerbitzuei dagokiena baino askoz prozesu zorrotzago bati jarraitzea. Hori dela-eta, ez dirudi egokia denik ”osasunari onura egiten diotela egiaztatzeko nabaritasunik ez badago” aipatzea, ezta ”mirarizko produktuak” aipatzea ere. Kasu horretan, LEPDEx legeak gai horri emandako idazkuntza eredu gisa hartzea gomendatzen da, neurri handiagoan erantzuten baitiolortu nahi den helburuari.
201. Ondorioz, aurreproiektuak neurri handian esku hartzen du kirol-zerbitzuen prestazio librean, eta, neurri txikiagoan bada ere, oztupoak jartzen dizkio bere aplikazio-eremuko lanbideetan askatasun osoz jarduteko aukerari. Edonola ere, Zerbitzuen Zuzendarauan zein transposizioarako barne-araudian eskatutako diskriminaziorik ezari, premiari eta proportzionaltasunari lotutako baldintzekin dute zerikusia mugek, oro har, bi kasuetan, baina erregistroan izena ematea lanbideetan sartzeko alde aurreko betekizun gisa ezartzea murriztaileegia izan daiteke, eta aurreproiektuaren 19.1 artikulua iragartzen duen baimen-araubidea, berriz, irekiegia. Hortaz, idazkuntza berriz aztertzea eta, nolana ere, beharrezkotzat hartzen den baimen-araudia zehaztea gomendatzen da, betiere murrizketarik txikiena dakarren neurriaren lehentasunaren printzipioa kontuan hartuta.

C) Erregulazio egokiaren printzipioetara egokitzea: sinpletasuna eta segurtasun juridikoa:

202. Aurreproiektuak antolamendu-lan garrantzitsua egiten du lanbideetan aritzeko kasu bakoitzean eskatu beharreko titulazioari dagokionez, baina arestian adierazi dugunez, tituludun lanbideetatik urruntzen da zentzu hertsian, titulazio akademikoak ez ezik, beste prestakuntza-titulu batzuk, gaitasun-ziurtagiriak, formalki aitortutako lanbide-esperientzia edota zirkunstantzia horietako bat baino gehiago biltzea ere onartzen baititu. Aukera hori 2. artikulua 6. zenbakian onartzen da, amaieran barreiatutako



hainbat xedapenekin osatzen den araubide baten baruan (xedapen horietako batzuk iragankorrek dira).

203. Beraz, 2.6 artikuluan eta amaieran —laugarren xedapen gehigarrian bereziki— xedatutakotik ondoriozta daitekeenez, lanbide bakoitzeko zehaztutako titulazio akademikoek gain beste era batzuk daude lanbide horietan jarduteko beharrezkoa den kualifikazioa egiaztatzeko. Arazoa, ordea, aurreproiektutik tituluez bestelako bide horiek zein diren eta Administrazioaren aurrean nola balia daitezkeen ondorioztatzen saiatzean sortzen da.
204. Alde batetik, aurreproiektuaren 2.6 artikuluko erreferentziak oso zehaztugabeak dira, kontzeptu batzuk zehaztea —hala nola “edo une bakoitzean indarrean den ordenamenduan ofizialtzat jotzen diren beste titulu edo ziurtagiri ofizial batzuk”— oso zaila baita (oraindik zalantzazkoa den eta aldatzeko prozesuan dagoen egøra batean), eta, bestetik, prestakuntza-ekintza espezifikak kontuan hartzen dtuzten zazpigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan baldintzak jartzen zaizkie ekintza horiei, baina oso aplikagarritasun mugatua dute eskola-kiroleko titulu ofizialik edo profesionaltasun-ziurtagiririk ez badago edota urriak badira (eta horrek interpretatu beharreko kontzeptu juridiko zehaztugabe bat sartzen du), onatuta ez badaude edota Estatuak onartutako prestakuntza-planik ez badute.
205. Gai honetan funtsezkoa den laugarren xedapen gehigarriak berak kontraesankorra dirudien mezu bat dauka. Izan ere, legean finkatutako titulu akademikoak eta ziurtagiriak “soilik” izango direla baliozkoak adierazten du hasieran, baina gero kirol-arloan eskumena duen sailari esleitzen dio beste bide batzuetatik eskuratutako kualifikazioak egiaztatzeko kasuak, baldintzak eta prozedurak finkatzeko ahalmena.
206. Argitasun-gabezia hori bera ikus daiteke, aurrerago ikusiko dugunez, lehen xedapen iragankorrean, lanbidean legeak eskatutako kualifikazioa izan gabe jarduteko aukera aipatzen duenean. Nolanahi ere, artikulua aztertzean landuko dugu zehatz-mehatz xedapen hori.
207. Ekonomia jasangarriari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak espresuki hartu zuen kontuan, erregulazio egokiaren printzipioen artean, sinpletasun-printzipioa. Printzipio horren arabera, arau-ekimen orok erraz jakiteko eta ulertzeko moduko arau-esparru sinple, argi eta zehatz bat lortzera bideratuta egon behar du. Printzipio hori herri-administrazioen administrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eguneratu eta xurgatu da segurtasun juridikoaren printzipioarekin; printzipio horren arabera, arau-esparru egonkor, aurreikusgarri, integratu, garbi eta ziur bat sortu nahi da, erraz jakiteko eta ulertzeko modukoa, eta, beraz, pertsonei eta enpresei jarduteko eta erabakiak hartzeko aukera emango diena.
208. Horrela, beraz, erregulazioaren argitasuna betebeharra da arau-ekimena duenarentzat, baita lehentasunezko helburua ere, baina aurreproiektuak ez du helburu hori lortzen kualifikazioa egiaztatzeko formula alternatiboei dagokienez.



209. Kualifikazioa titulazio akademikoez bestelako bide edo baliabide batzuen bitartez egiaztatzeko aukera irekitzea pisuzko argudioa da, zalantzarik gabe, tituludun lanbideen erregulazio baten aurrean ez gaudela adierazteko, baina, arrazoi horrengatik beragatik, garrantzitsua izan liteke bide alternatibo horiek legearen artikuluetan garbi eta baliozko alternatiba gisa iekita eta onartuta geratzea.
210. Sustatzaileak berak gida gisa Kataluniako eredia hartu duela kontuan hartuta, ohartarazi beharra dago duela gutxi, maiatzaren 14ko 7/2015 Legearen bidez, LEPDCat legean sartu den aldaketaz. Izan ere, 6 bis agindua txertatu da, eta prestakuntza egiaztatzeko baliozkoak diren ziurtagiriak ezartzen dira bertan.

II ARTIKULUEI BURUZKO OHARRAK

A) 1. artikulua. Helburua eta aplikazio-eremua:

211. Aurreproiektuaren 1. artikulua helburuari eta aplikazio-eremuari buruzkoa da, eta interpretatzeko zailtasunak dakartzan bi alderdi ditu aipagarri.
212. Lehenik eta behin, 2. zenbakiak legearen aplikazioaren eremu subjektiboa eta lurralde-eremua aipatzen ditu, eta bi irizpide horiek lotzen ditu “ohikotasunaren” bidez. Batzordearen ustez, ahalegina egin beharko litzateke zerbitzuak Autonomia Erkidegoan ohikotasunez noiz egiten diren finkatzeko, hainbat interpretazio-aukera baitaude. Egia da arauak era negatiboan definitzen duela kasuren bat 7. artikuluan —aldizka edo puntualki emandako lanbide-zerbitzuak—, baina interpretatzeko aukera gehiegi geratzen dira oraindik, eta murriztu egin beharko lirateke aurreproiektuan.
213. Bigarrenik, zenbaki horretan bertan lanbidean plataforma birtualen edo informazioaren teknologien bidez jarduteko aukera aipatzen da, eta berriz ere aipatzen da 20. artikuluan, beste helburu batekin bada ere. Problematika berria da, eta ez da kontuan hartu gaur egun indarrean dauden Autonomia Erkidegoko arauetan. Nolanahi ere, lasai esan daiteke gai bereziki korapilatsua dela, eta aurreproiektuaren bidez irtenbide bat eman nahi zaio, baina zenbait zalantza uzten ditu agerian.
214. 1.2 artikulua legearen aplikazio-eremuan kokatzen ditu zerbitzu horiek, honako bi betekizun hauek betetzen direnean: i) zerbitzu horiek ematen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek egoitza Autonomia Erkidegoan izatea, eta ii) bertako kontsumitzaile edo erabiltzaileek erabili ahal izatea. Definizio horrek bi kasu desberdin bil ditzake, eta 20. artikuluan garbiago ikus daiteke hori. Lehen kasuan, zerbitzuak publiko zehaztugabe bati zuzenduta daude informazioaren teknologia berrien bitartez. Bigarren kasuan, berriz, teknologia berriak distantzia fisikoa gainditzeko baino ez dira erabiltzen, eta hartzaile ezagunei zuzendutako zerbitzuei lotuta.
215. Lehen kasuan —20. artikuluan 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitakoarekin identifika daitekeena—, 1.2 artikuluan definizioak legearen eremutik kanpo uzten ditu Autonomia Erkidegoan garatzen badira ere kanpora bideratuta dauden zerbitzuak,



baina irtenbide horrek emaitza paradoxikoak eman ditzake. Adibidez, prestaketa egokirik ez duen profesional batek Euskal Autonomia Erkidegoan eskaini litzake bere zerbitzuak, betiere teknologiak aukera ematen badu erabiltzaileek zerbitzu horiek gure Autonomia Erkidegoan erabili ezin izateko.

216. Bigarren kasuan, hau da, hartzaileak zehaztuta daudenean —eta 20. artikulua 1. zenbakian aurreikusitakoarekin identifikatu liteke kasu hori—, zerbitzuen emaitza edo hartzailearen Autonomia Erkidegoatik kanpo biziko balitz, profesionala ere 1. artikuluko aplikazio-eremutik kanpo geratuko litzateke.
217. Ondorioz, aurreproiektuak beste era batera arautu ditu oinarritzko alderdi batzuk (hala nola teknologia berrien erabilera), profesionalak beren jardura garatu ahal izan dezaten, baina ongi burutu gabeko irtenbidea da, eta, gainera zalantzazko ondorio bat planteatzen du. Hori dela-eta, gogoeta sakonagoa egitea gomendatzen da, hasiberria den baina potentzial handia eta etorkizun ukaezina duen gai horri irtenbide hobea emateko.

B) 9. artikulua. Izenen erabilera.

218. Erreserba hori ezartzeko aukera aztertu badugu ere, Batzordearen ustez Euskadiko Kirolaren Legearen zigor-araubidean islatu beharko litzateke, aurreproiektuak amaierako xedapenen arteko lehenengoan eta bigarrenaren jasotzen duenaren ildotik.

C) 11. artikulua. Lanbidean jarduteko betebeharrak:

219. Artikulu honetan jasota dauden betebeharren erreferentzia nabarmenak LEPCat legearen 9. artikuluan aurreikusitakoak dira, artikulua 1. artikulua goiburuan printzipioak eta betebeharrak aipatzen badira ere. Horrek eragina izan du 2. zenbakiaren idazkuntzan. Izan ere, bertan ezartzen denez, adierazitako printzipioak eta betebeharrak bete ezean, bidezko administrazio-, diziplina- eta zigorerantzukizunak eskatuko dira.
220. idazkuntza hori alde batera utzita, eta zigor-erantzukizunaren aipamenaren asmoa zigor-legerian eragitea, horren inguruko balioespen bat egitea edota “zigor-lege zuri” bat betetzea ez dela nabarmena badirudi ere, zigor-erantzukizunaren aipamen oro kentzea gomendatzen da. Zigor-erantzukizuna, hala badagokio, zigor-tipoa betetzean eta delitua osatzen duten gainerako elementuak agertzean gertatuko da, ez, ordea, 11. artikuluan ezarritako betebeharrak ez betetze hutsagatik.
221. Bestalde, betebeharren zerrenda murriztea, arauaren bidez lortu nahi diren helburuekin (hau da, kirola egiten dutenen osasun eta segurtasunarekin) zerikusia duten (zerikusi txikia bada ere) betebeharrak mugatzea eta helburu laugarriak dituztela onartuta ere kode profesional edo deontologikoekin zerikusi handiagoa duten eta beste arau-eremu batzuetan babestuta dauden betebeharrak kentzea gomendatzen da. Hortaz, eta aipatzearen baimo ez, Batzorde honek ez du loturarik ikusten osasun eta segurtasunaren eta honako letrahuetan bildutako betebeharren



artean: f) kasu bakoitzean bete beharreko betebeharrak deontologikoak zehatz-mehatz betetzea; d) joko garbiaren balioak transmititzea; q) natura-ingurunea errespetuz aprobetxatzea; s) ez onartzea emaitzak baldintzatzeko asmoz beste hirugarren batzuek emandako ordainsari edo haborokirik; t) larbide edo profesionali mina edo izen ona galtzea eragin diezaiekeen ezer ez esatea jendaurrean; v) animaliekin egiten diren kirolekin animaliei tratu ona emango zaiela bermatzea; w) kirol-instalazioak erabiltzeko esleipenak genero-diskriminaziorik eragingo ez duela bermatzea; edo x) profesionalen elkargoak ezartzen dituen gainerako guztiak.

D) Lehen laguntzaren arloko eskumena 15. artikulua eta laugarren xedapen iragankorra:

222. 15. artikulua lehen laguntzako prestakuntza egiaztatzeke betebeharra ezartzen die aurreproiektuan araututa dauden eta lekuan bertan egotea eskatzen duten lanbideetako batean diharduten pertsonen, boluntarioen barne; gaineratzen duenez, geroagoko erregelamendu batean zehaztuko da hori guztia. Boluntarioei dagokienez, eskakizun hori bosgarren xedapen iragankorrean berresten da.
223. Kirolen bat egiten dutenak babesten edo zuzentzen dituzten profesionalen lehen laguntzako prestakuntza eskatzea arauaren azken heburuarekin —pertsonen osasun eta segurtasunarekin— bat datorrela esan daiteke, eta ez dirudi neurritz kanpoko denik. Nolanahi ere, harrigarria da prestakuntza hori edo jakintza horiek dagoeneko aurreproiektuan bildutako tituluetan txertatuta ez egotea, bi alderdi bereiztezinak direla baitirudi.
224. Era berean, artikulua horretan boluntarioak sartzea ez dirudi oso koherentea denik. Izan ere, 1. artikuluan salbuetsi egiten da kolektibo hori aplikazio-eremutik, eta hirugarren xedapen gehigarrian eta bosgarren xedapen iragankorrean, berriz, espezifikoki aipatzen da. Ikuspuntu sistematiko batetik, egokiagoa izango litzateke boluntarioekin zerikusia duen guztia adierazitako xedapen gehigarrian jasotzea.
225. 15. artikulua, nolanahi ere, lehen laguntzako kualifikazioa lortzeko betebeharra betetzen ez den kasuari buruzko laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoarekin lotu behar da.
226. Xedapen horren 2. zenbakiak ezartzen duenez, prestakuntza hori 1. zenbakian adierazitako epean lortzeko betebeharra ez betetzea lanpostutik kentzeko arrazoitzat hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateko kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen xedatutakoaren babesean, baita martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Langileen Estatutuaren 52.a) artikuluan aurreikusita dagoen ondoren agertutako gauzaezaren kasutzat ere [Langileen Estatutuaren aipamena eguneratu eta urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52.a artikulua aipatu behar da].



227. Xedapen horretan aurreikusitako aldi iragankorra amaitu ondoren, 15. artikuluan xedatutakoaren eta laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoaren arteko konbinazioak ondorioak izango ditu eskakizun hori egiaztatzen ez dutenengan, eta bereizi egin behar dira ondorio horiek.
228. Lanbidean dihardutenentzat ere, ondorioak desberdinak izango dira besteren kontura lan egiten duten profesionalak ala langile autonomak diren kontuan hartuta.
229. Azken kasu horretan, xedapen iragankor horren 1. zenbakitik ondoriozta daiteke 2019ko urtarilaren 1etik aurrera lehen laguntzan beharrezkoa den prestakuntza egiaztatzen ez duenak jardueran aritzeari utzi behariko diola, prestakuntza hori etorkizuneko erregelamendu batek finkatu bezala egiaztatzen ez duen bitartean bederen.
230. Besteren konturako langileen kasuan, oso deigarria da, lehenik eta behin, erantzukizuna langilearena baino ez izatea. Aurreproiektuak lanpostutik mugiarazteko aukera hartzen du kontuan (funtzionario-harremanaren kasuan), edota lan-harremana desegiteko aukera (Langileen Estatutuan jasotako arazoi objektiboren baten ondorioz). Bigarrenik, oso deigarriak dira, halaber, aurreproiektuak kontuan hartzen dituen muturreko ondorioak, proportzionaltasunaren ikuspegitik eztabaidagarriak izan baitaitezke.
231. Laugarren xedapen iragankorrek 2019ko urtarilaren 1etik aurrera lanbideetan jardun nahi duten profesionalengan izango dituen ondorioak ere zailak dira neurtzen. Izan ere, eremu publikoari dagokionez bederen, ez dago garbi Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateko kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legean eragin nahi den —aurreproiektuak horren aldaketa aurreikusten ez badu ere— ala nahikoa izango litzatekeen lanpostuen zerrenda aldatzearekin eta gorputz-hezkuntzako irakasleen kasuan prestakuntza espezifiko horren eskakizuna gaineratzearekin.
232. Gai horiek guztiak, gainera, eskakizun horri buruzko datu zehatzak ezagutu gabe planteatzen dira, 15. artikuluko erregelamendura jotzen baitu prestakuntza hori egiaztatzeko baldintzei eta prozedurari dagokienez.
233. Galdera horiek guztiak kontuan hartuta, Batzordeak ekimenaren sustatzailearen esku uzten du laugarren xedapen iragankorraren aplikazioak izan ditzakeen muturreko ondorioak berriz aztertzei aukera. Gainera, egun idatzita dagoen bezala adierazita (hartu ahal izango da...), mezua aukerakoa edo interpretaziozkoa dela dirudi, eta bi esparru horietan ezin da baztertu oinarrizko izaeraz (irakaskuntzako funtzio publikoa) edota izaera eskusiboz (lan-arloko legeria) emandako Estatuko ordenamenduarekin desadostasunen bat ager daitekeenik.
234. Irakaskuntzako funtzio publikoaren arloan, Estatuari dagokion oinarrizko esparrua (Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikulua *ohia*) zabaldu egin da 149.1.30



artikuluaren bidez. Horrek, aldi berean, Autonomia Erkidegoko eskumenak murriztea eragin du, eta hezkuntza-sistemaren kalitatea eta bideragarritasuna lortzeko premiarekin justifikatu da. Langileen Estatutuaren aipamenari dagokionez, gogorarazi beharra dago lan-arloko legeria Estatuaren eskumen eksklusiboa dela (Espainiako Konstituzioaren 149.1.7 artikulua ohia) eta Autonomia Erkidegoko eskumenak betearaztekoak baino ez direla.

E) 16. artikulua. Lanbideetan legearen babespetik at jardutea:

235. 16. artikulua zigor-erantzukizunak aipatzen ditu berriz, kasu horretan aurreproiektuan bildutako lanbideetan beharrezkoa den kualifikazioa gabe diharduten pertsonen lotutakoak badira ere.
236. Gaur egun idatzita dagoen bezala, artikulua horri ezin zaio ezein ondorio zehatzik lotu, araudi aplikagarriaren eta haren ondorioen orogarri gisa baitihardu. Hala ere, lanbide bat titulazio jakin batekin lotzeak eragin ditzakeen ondorioetako bat (batere baztergarria ez dena) zigor-erantzukizun baten sorrera da. Izan ere, indarrean dagoen Zigor Kodearen 403. artikulua intrusismoaren delitua hartzen du kontuan “zigor-lege zuri” baten bidez, hau da, edukia osatzeko beste xedapen batzuetara (aztergai dugun xedapenera, adibidez) jotzera behartzen du haren zehaztapenak. Komeni da, beraz, aurreproiektuak zigor-definizioan nola eragin dezakeen aztertzea.
237. Intrusismo-delitu horren konfigurazioan, 1973ko Zigor Kodean zehaztuta zegoen bezala, Konstituzio Auzitegiak, martxoaren 25eko 11/1993 Epaian, Zigor Kodearen 321.1 artikuluan aipatutako “titulu ofizial” terminoa “titulu akademiko ofizial” gisa ulertu behar zela adierazi zuen. Hori dela-eta, artikulua hori interpretatzean zigorra injerentzia-intrusismo gisa “titulu ofiziala” eskatzen zuten lanbideetan baino onartzen ez bazen(ez, ordea, “titulu akademiko ofiziala” eskatzen zuten lanbideetan), interpretazio horrek zigor-legezketasuna erabat urratzen zuela eta zigor-tipoaren norainokoa tipo horretan bildutakotzat hartu ezin ziren kasuetarakin *malam partem* zabaltzearen kasu bat zela ulertu zuen.
238. Indarren dagoen Zigor Kodeak intrusismo-delituaren aurreko definizioa aldatu zuen, eta bereizi egin zituen lanbide baten berezko zeregnetan bidezko “titulu akademikoa” eduki gabe jardutea eta “titulu ofizial” bat baino eskatzen ez duten lanbideetan jardutea. Hirugarren kasu astungarri batean, errudunak publikoki adierazten du profesional-izaera.
239. Kode Penal berriaren idazkuntzak ere ez zuen behin betiko konpondu “titulu ofizial” terminoari eman beharreko interpretazioa. Estatuko Fiskaltza Nagusiak bere 2/1996 Instrukzioan doktrinaren zati handi batekin batera ulertu zuenez, legegileak tipo arindu autonomo bat ezarri zuen kasu horretan, eta zigor txikiagoa ezarri zuen titulu ofizial ez-akademiko bat eskatzen zuten lanbideetako injerentziaren kasuan.



240. Hala ere, arazoa ez zen behin betiko konponduta geratu. Izan ere, arestian adierazitako 111/1993 Epaian, Konstituzio Auzitegiak bidegabekeriaren eta zigorraren arteko proportzionaltasunaren printzipio konstituzionalaren aurkakotzat hartu zuen zigor-babes handia ematea, hain zuzen ere titulu akademiko ofizialik eskatzen ez dutelako garrantzi konstituzionalik handieneko ondare juridikoak (hala nola bizitza, gorputz-osotasuna, askatasuna eta segurtasuna) eraginpean hartzen ez dituzten lanbideetako injerentzien aurrean, kasu horietan nahikoa izango bailitzateke zigor-administratibo bat ezartzearekin.
241. Harrez geroztik, Konstituzio Auzitegiak ez du aukera handirik izan indarrean dagoen Zigor Kodean intrusismo-delituari dagokionez txertatutako definizio berriak delitu horren konfigurazioan eragin zuen aldaketa aztertzeko. Ekainaren 26ko 174/2000 Epaian, intrusismoagatiko zigorra kode berriaren arabera eman zen kasu bati lotutako babes-errekurtso bati egin zion aurre, baina ez zuen aldaketa hori aztertu, Zigor Kodearen 403. artikuluko lehen tarterkia (titulu akademikoa) aplikatu baitzuen titulu ofiziala baino eskatzen ez zuen lanbide batean—hots, administrazio-kudeatzailearen lanbidean—. Ohiko doktrina errepikatu zuen, besterik gabe, eta lanbide zehatz haren jardun generikoan proportzionaltasunari dagokionez zigorraren sistemaren bitartez emandako babes-maila merezi zuen funtsezko interes publikorik ikusten ez zuela gaineratu zuen.
242. Horrela, beraz, ez zuen erabaki bigarren tarterkia konstituzionala zen ala ez, edota, legezkotasun-printzipioaren ikuspegitik bederen, jokabide horiek zigortzeko estaldura berririk bazegoen ala ez.
243. Testuinguru horretan, Auzitegi Gorena saiatu zen, azaroaren 12ko 2066/2001 Epaian, Kode Penalaren idazkuntza berria eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina bateratuko zituen interpretazio bat ematen. Horretarako, honako jarraibide hauek ezarri zituen: i) bigarren tarterkiko tipo arinduaren aplikazioa intrusismoa garrantzi konstituzionalik handieneko ondasun juridikoak (hala nola bizitza, gorputz-osotasuna, askatasuna eta segurtasuna) eraginpean hartzen dituen trebakuntza berezi bat eskatzen duten lanbideetan gertatzen diren kasuetara mugatzea; ii) lanbide jakin batzuetan tipo horren aplikazioa erabat salbuestea, hain zuzen ere Konstituzio Auzitegiaren erabaki espresuaren arabera proportzionaltasunari dagokionez zigorraren sistemaren bitartez emandakoa bezalako babes-maila handia merezi duen funtsezko interes publikorik ikusten ez denean (higiezinen jabetzako agenteen edo administrazio-kudeatzaileen kasuan, adibidez); iii) agindua interpretatzeko, batez ere babestutako ondasun juridikoa eta titulu jakin batzuen egia-itxura (heritarrei lanbide jakin batzuen inguruko trebakuntza bermatzeko beharrezkoa eta funtsezkoa den mekanismoa) kontuan hartzea. Ondasun juridiko hori kolektiboa eta ez-indibiduala da, eta haren lesioak ez ditu ondare-interes berezi indibidualak edo taldekoak (hala nola profesionalen kolektibo bateko kideenak) eraginpean hartzen, gizarteak baizik.



244. Doktrina horren arabera, lanbide batean jarduteko aukerari titulu ofizial baten (akademikoa zein bestelakoa) eskakizunaren bidez ezarritako zigor-murrizketa oro oinarritu eta legitimatu dezakeen interes bakarra interes publikoa da.
245. Aztergai dugun aurreproiektura itzuliz, irizpen horetan behin eta berriz adierazi dugu lotura ukaezin bat dagoela kirolaren jardun egokiaren eta kirolarien osasun eta segurtasunaren artean. Gorputz-hezkuntzako irakaslearen lanbidera mugatuta bada ere, Konstituzio Auzitegiak berak, urriaren 1eko 194/1998 Epaian, esplizituki ezarri zuen lotura hori honako hau adieraztean: “Konstituzioak berak agintari publikoei agindua ematen die gorputz-hezkuntza eta kirola sustatzeko (Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua), eta jarduera horiek osasunarekin oso lotuta azaltzen dira —Espainiako Konstituzioaren 43.3 artikulua horren 1. zenbakian azaltzen denez—. hortaz, jarduera horiek ez dira, besterik gabe, osasuna zaintzeko baliabideak; aitzitik, haiei esker saihestu egin daitezke gorputz- eta kirol-jardueretako hainbat ariketa desegokik osasunean izan ditzaketen ondorio negatiboak, batez ere zenbait kirolekin jarduteak arrisku handi samarra dakarrenean. Jakina da, bestalde, jarduera horiek gero eta garrantzitsuagoak eta balioetsiagoak direna, eta, egoera horri erantzuteko, agintari publikoek kualifikazio-eskakizun berriak jarri dizkiete jarduera horietan diharduten profesionalei, eta, bereziki, ikastetxeetan jakintzagai horretako irakasle-funtzioa betetzen dutenei.. Kontuan hartu behar da, gainera, jarduera horien hartzaileak adingabeak direla kasu askotan, eta horrek prestaketa- eta erantzukizun-eskakizun handiagoak dakartza irakasle-lan hori beren gain hartzen duten pertsonentzat.
246. Argudio horri jarraikiz, Konstituzio Auzitegiak baztertu egin zuen eskatutako babes, errekurtsogilea zigortu egin baitzuten 1973ko ZigorKodearen 572.2 artikuluan jasotako intrusismo-falta batengatik.
247. Onartu beharra dago, beraz, aurreproiektuan araututako lanbideetako batean titulazio egokirik gabe jarduteak indarrean dagoen Zigor Kodearen 403. artikuluan bildutako zigor-tiporen bat eragin dezakeela, titulu ofiziala ala akademikoa den kontuan hartuta. Gorputz-hezkuntzako irakaslearen lanbideari dagokionez, ez dago zalantzarik alderdi horretan, ez, ordea, aurreproiektuaren ondorioz, hezkuntza-arloan emandako Estatuko legeriak aurretik osatu baitzuen zigor-lege zuria.
248. Nolanahi ere, korapilatsuagoa da finkatzea babes hori aurreproiektuan kontuan hartutako gainerako lanbideetara heda daitekeen. 7. artikulua 7. zenbakiaren arabera, hezkuntza-administrazioak ematen dituenek gain lan-administrazioak lanbide-kualifikazioei buruzko legeriaren eremuan ematen dituenak eta kirol-administrazioak kirol-legeriaren esparruan ematen dituenak dira titulu edo ziurtagiri ofizialak.
249. Dena dela, aurreproiektuak titulazio jakin batzuk apatzen baditu ere, lanbide-kualifikazio egoki bat ezarri nahi du. Kualifikazio hori titulu desberdinen bidez egiaztatu daiteke kasu bakoitzaren arabera, eta, zenbait kasutan, osatu gabeko prestakuntza ofizialaren bidez edota Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionalaren arabera eskuratutako lanbide-gaitasunak egiaztatzen dituzten ziurtagiri akademiko edo profesionaltasun-ziurtagirien bidez. Beste kasu batzuetan, egin beharreko jarduera zehatzari lotutako “prestakuntza espezifiko” baino ez du eskatzen.



250. Egoera hori kontuan hartuta, Batzordearen ustez, eta azaldutako arrazoiengatik gorputz-hezkuntzako irakaslearen lanbidea alde batera utzita, titulazio horien guztien bidez lanbidearen jardunari zigor-babesa emateak gehiegizkoa dirudi kontuan hartutako gainerako lanbideetan, nahikoa baita administrazio-eremuak eskaintzen duen babesa, lanbide horiek arautzearen bidez babestu nahi den ondasun juridikoa oso garrantzitsua bada ere. Hala ere, Zigor Kodearen 403. artikulua bigarren tartekian aurreikusitako tipo arinduaren norainokoa behin betiko argitu arte, ez dirudi oso zuhurra denik gai horren inguruko behin betikoondorio bat aurreratzea.

F) Boluntariotza-araubidean egindako jarduerak eta antzekoak:

251. Aurreproiektuak hainbat unetan onartzen du badaude pertsona batzuk beren jarduera –edo kirol-arloko profesionalei esleitzen zaizkien funtzioetako batzuk– ordainsaririk jaso gabe egiten dutenak. Elementu hori 1. artikuluan erabiltzen da boluntariotza-harremanen, adiskidetasun-harremanen, familia-harremanen eta antzekoen esparruan egiten diren jarduerak arauaren aplikazio-eremutik salbuesteko, pertsonak ordainsaririk jasotzen ez duenez gero kirol-arloko profesionaltzat hartu ezin dela ulertzen baita.
252. Hala ere, aurreproiektuak berak hirugarren xedapen gehigarrian onartzen duenez, kirola hirugarren batzuek zuzenduta egiten dutenen osasuna eta segurtasuna neurri berean babes daiteke, harreman horretan irabazi-asmoa dagoen ala ez kontuan hartu gabe. Hori dela-eta, boluntarioei profesionalentzat ezarritako kualifikazio-betekizun berdinak eskatzen dizkie. Arestian aurreratu dugunez, profesionalei eskatzen zaien lehen laguntzako prestakuntza bera egiaztatzeko eskatzen zaie boluntarioei 15. artikuluan.
253. Legegileak hainbat ikuspegitatik eta emaitza desberdinekin egin diezaioke aurre errealitate horri. Autonomia-erkidegoetan kirol-arloko lanbideak arautzen dituzten indarreko bi legeek aurkako bidetik jo dute gai honetan. LEPDCat legeak bere aplikazio-eremutik kanpo utzi ditu boluntarioak, 2015eko erreforman puntualki aipatzen baditu ere, eta LEPDEx legeak, berriz, txertatu egin ditu ondorio guztiekin, eta bi aukerak dira zilegi, neurri berean. Kataluniako kasuan, boluntarioen jarduera esparru horretan baldintzatu behar ez dela ulertu da, eta Extremaduran, berriz, kirola egiten dutenen osasunari eta segurtasunari eman zaie lehentasuna, baita boluntarioek egin izan duten jardueran eragina izan badezake ere.
254. Aurreproiektuak erdiko bidetik jo du kolektibo horri dagokionez. Ikuspuntu horrek aurreko bi ikuspuntuen artean oreka bat lortzea du helburu, baina nolabaiteko zehaztugabetasuna agertzen du. Hasieran (1.4 artikulua), arauaren aplikaziotik salbuetsi egiten da kolektibo hori. Ondoren, profesionalek eduki beharreko kualifikazio bera eskatzen zaie (hirugarren xedapen gehigarria), lehen laguntzako prestakuntza barne (15. artikulua), eta geroago, berriz, eskakizun-maila txikiagotu egiten da berriz; izan ere, lekapean posible bat hartzen da kontuan kdekotibo espezifikoetarako, eta profesionalek dutenaz bestelako kualifikazio bat eska liezaieke (hirugarren xedapen



gehigarriaren azken tartekia). Azkenik, kolektibo horrek profesionalentzat aurreikusitako behin-behineko gaikuntzak eta gaitasunen onarpenak lortzeko aukera izatea aurreikusten du aurreproiektuak (bosgarren xedapen iragankorra), eta profesionalena baino urtebete luzeagoa izango den egokitze-epe iragankor bat ezartzen da (amaierako xedapenen arteko seigarrena).

255. Nolanahi ere, 1.4 artikuluko salbuespenetik abiatu beharra dago, eta, beraz, kolektibo horrek espresuki ezartzen diren aurreproiektuko alderdiak baino bete behar ez dituela ulertu behar da. Hori ez da gertatzen profesionali eskatutako gainerako betebeharrekin, hala nola erregistratzeko (kualifikaziorik izanez gero borondatez erregistra badaitezke ere) eta erantzukizun zibila ziurtatzeko betebeharrekin. Era berean, kolektibo hori ez litzateke egongo 19.1 artikularen ondoriozko beste baimen-araubide bati lotuta egongo, eta ez litzateke profesionalen zigor-araubide beraren mende egongo; dena dela, ez dago garbi 9. artikuluko izenen erabilerak eraginpean hartuko duen, beharrezkoa den kualifikazioa behar baita.
256. Onartu beharra dago aurreproiektuan ahalegina egin dela gatazkan dauden interesen arteko oreka lortzeko, hau da, boluntariotzaren esparru horretan egiten den jardueraren jarraitutasunaren eta kirolen bat egiten dutenen segurtasun eta osasunaren arteko oreka lortzeko. Dena dela, ohartarazi beharra dago gaia planteatuta dagoen bezala arriskua dagoela boluntarioentzat ezarritako kualifikazio-eskakizuna adierazpen hutsa baino ez izateko, eskakizun hori ez betetzeak ez baitakar inolako ondoriorik.

G) Prestakuntza espezifikoa. Bosgarren xedapen gehigarria:

257. Bosgarren xedapen gehigarriak hainbat arau ezartzen ditu aurreproiektuak hainbat aldiz aipatzen duen prestakuntza espezifikoa finkatzeko. Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen sailaren gaikuntza (3. zenbakian planteatzen dena) zehaztugabeegia da, prestakuntza espezifikokoaren maha "kasu jakin batzuetan" zehazteko helburuarekin gaitzera mugatzen baita.
258. Batzordearen ustez, gaikuntza hori hobeto zehaztu behar da, arau-teknikako kontuengatik zein jatorrizko erregelamendu-ahala Gobernu Kontseilua kide anitzeko organoari esleituta dagoelako (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 29. artikulua eta Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. artikulua). Izan ere, askotan aipatu dugunez, bigarren mailako erregelamendu-ahalaren titularrarengana jo daiteke, arrazoi teknikoengatik edota arauaren bidez lortu nahi diren helburuen betetzea optimizatzeko, betiere arauari jarraitzen bazaio eta osatzeko deia baldintzatu gabea ez bada edota muga ziurrak eta zehatzak baditu.



H) Zazpigarren xedapen gehigarria. Eskola-adinean dauden kirolariek in jarduerak egiteko prestakuntza:

259. Kasu honetan, Batzordeak ohartarazi nahi du eskola-adinean dauden kirolarien kirol anitzeko jardueretan diharduten monitore eta entrenatzaileek titulu ofizialik edo profesionaltasun-ziurtagiri espezifikorik ez duten edo horiek urriak diren kasurako xedapen horretan ematen den irtenbidea, nolanahi ere, lurralde historikoek eskola-kirolaren arloan arauak garatzeko eta betearazteko dituzten eskumenak aparte utzi gabe ulertu beharko dela (Autonomia Erkidego osorako erakundeek eta bertako lurralde historikoetako foru-entzako arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/83 Legearen 7.b).6 artikulua *ohia*).

I) Araubide iragankorra:

260. Aurreproiektuak sektorearen egungo egoeran kolapsorik ez eragiteko hainbat neurri biltzen ditu araubide iragankorra. Aplikatzeko arazoak sor ditzaketen mezuak baino ez ditugu aztertuko.

Lehen xedapen iragankorra. Legeak eskatutako kualifikaziorik gabe jardutea lanbidean

261. Kasu honetan ere, aurreproiektuaren argitasuna hobetu egin daiteke.
262. Lehenik eta behin, zenbaki batzuk idazteko modua azpimarratu behar da, salbuespen bat sartzen baita salbuespenezko kasu baten barruan Formula horrek neurri handiegian zailtzen du helarazi nahi den mezua iletzea.
263. Araubide iragankor horren barruan, beharrezkoak diren gaitasunak lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bidez egiaztatze administrazio-prozedura batzuen ezarpena “Eusko Jaurlaritzan eskumena duten sailei” esleitzen die 3. zenbakiak, eta horrek kontraesan partziala dakar laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin. Izan ere, xedapen horrek kirol-arloko eskumena duen sailari esleitzen dio espresuki kualifikazioa titulazio akademikoek bestelako bide batzuetatik egiaztatze kasuak, baldintzak eta prozedurak finkatzeko zeregina. Agindu hori —lehen xedapen iragankorraren 3. zenbakia— araubide iragankorrean sartzean, pentsa daiteke laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako araubide orokorrak bereizitako eta 1. eta 2. zenbakietan kontuan hartutako kasuetara bereziki zuzendutako salbuespenezko araubide bat dela, baina, nolanahi ere, argitu egin behar da.
264. Argitasunik ezaren beste adibide bat lehen xedapen iragankorraren 4. zenbakia da. Duen kokapena kontuan hartuta, aurreproiektua indarrean jartzean eskatutako kualifikazioa ez duten, baina araututako lanbide-jarduerak era jarraituan edo ez-noizbehinkakoan garatzen dituzten pertsonen ari dela interpreta daiteke. idazkuntzan, ordea, “lanbide-jardunerako gaikuntza ondorioz gabe uztea” aipatzen da, eta, beraz,



erregelamenduz ezartzen den prozeduraren arabera gaikuntza hori baduten pertsonez ari dela ere interpreta daiteke.

265. Bereizketa garrantzitsua da. Izan ere, lehen kasuan, eskatutako kualifikazioa ez duten pertsonei aplikatzen zaien gaikuntza-arau orokor baten salbuespen bat izango litzateke. Hau da, pertsona horiek ez dira gaituko kualifikazioa ez dutelako, baina inoiz ez dira gaituta egon aurreproiektuan xedatutakoari jarraikiz. Bigarren kasuan, berriz, eskubideen deklarazio-egintza baten aurrean gaude, eta herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen legean aurreikusitako arrazoi eta bideetara jo behar du Administrazioak hori berrikusteko. Hortaz, xedea argitu behar da, oinarrizko araudian egintzak administrazio-bidetik berrikusteko aukerari buruz xedatutakoa kontuan hartuta.
266. Aurreko ohartarazpena egiteaz gain, araubide iragarkor horren esparruan eskatutako kualifikaziorik gabe jardutean pertsonen osasuna eta segurtasuna zuzeneko arrisku larrian jartzen duten lanbide-jarduerak zein diren adieraztean kirol-arloan eskumena duen sailari esleitzen zaion hautemate-marjina handegia azpimarratu beharra dago 4. zenbaki horretan bertan. Kasu horretan, salbuespenizaera dela-eta, aurreproiektuan bertan araubide hori argitzea gomendatzen da, jardura horien zerrenda bat sartuta (erregelamendu bidez egunera daitekeena) edota sailak horiek finkatzeko jarraitu beharreko irizpideak ezarrita.
267. Antzeko zerbait gertatzen da lehen xedapen iragankorraren 5. zenbakiarekin, baina desberdintasunen bat ere ikus daiteke. Izan ere, gaikuntza hori, aurreko kasuan ez bezala, automatikoa da dagokion nazioarteko edo Espainiako federazioak entrenatzaile-funtzioak errendimendu handiko kirol-hehiaketetan garatzea ahalbidetzen duen kasuetan. Beraz, gaikuntza zein haren salbuespena araudi bidez ezartzen dira, hala badagokio.
268. Kasu horretan ere, kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailak kirol-modalitate edo kirol-diziplina jakin batzuetan ondorioz gabe utzi ahal izango duen gaikuntza automatiko orokor baten aurrean gaudela da helarazi nahi den mezua. Kasu horretan, berriz ere, aurreproiektuak ematen duen hautemate-marjina handiegian datza arazoa, ez baita kontuan hartzen adierazitako sailak kontrasalbuespen hori gauzatu ahal izateko irizpide, muga edo kasurik.
269. Hirugarrenik, xedapen iragankorraren 6. zenbakian xedapen horren beraren arabera behin-behineko izaeraz gaitutako pertsonek lanbidekualifikazioa egiaztatzeke duten betebeharra ez betetzearen ondorioei dagokienez aurreikusitakoa berriz aztertzeke aukera planteatu beharra dago, hain zuzen ere lehen laguntzako prestakuntza egiaztatzeke betebeharra (laugarren xedapen iragankorrean araututakoa) ez betetzeari dagokionez adierazitako arrazoi berengatik.



Seigarren xedapen iragankorra. Federazioen erregelamentazioak:

270. Xedapen horrek epe bat ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioek beren erregelamentazioa egokitu dezaten edota 2018ko urtarrilaren 1a baino lehen onartu eta inskribatzeko beharrezkoak diren xedapenak onar ditzaten. Publikotzat eta administrazio-izaerakotzat hartzen den funtzio horibetetzen ez bada, Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 19. edo 20. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.
271. Batzordearen ustez, nahikoa izango litzateke federazioek beren erregelamentazioa egokitzeko edo beharrezkoak diren xedapenak onartzeko epe bat ezartzearekin. Aginduaren gainerako zatia hertsagarriagoa da, eta baliteke beharrezkoa ez izatea, indarrean dagoen ordenamendu juridikoa berritzen ez duen –eta asmo hori ere ez duen– aplikazio-izaerako mezu bat baino ez baita.

Zazpigarren xedapen iragankorra. Legea indarrean jartzean indarrean dauden kontratuak.

272. Zazpigarren xedapen iragankorrek enpresei salbuetsi egiten die aurreproiektuan aurreikusitako kualifikazioaren eskakizuna, sektore publikoko erakundeekin indarrean jarri aurretik kirol-zerbitzuak emateko izenpetutako kontratuei dagokienez; Batzorde honen ustez, arau iragankor hori ez da beharrezkoa.
273. Izan ere, amaierako xedapenen arteko seigarrenaren arabera, lanbideetan jarduteko gaitzen duten lanbide-kualifikazioak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera baino ezin izango dira eskatu, eta xedapen horrek indarrean jartzeko unea aipatzen du, hau da, argitalpen ofizialaren hurrengo eguna; hortaz, enpresek eta profesionalek denbora nahikoa izango lukete kualifikazio-eskakizun berrietara egokitzeko.
274. Gainera, ez da ezein arrazoirik adierazi —edo ez da espedientean txertatu— kualifikazio-eskakizuna betetzeko epeari dagokionez Administrazioak kontratatutako enpresen kasuan tratamendu desberdina justifikatzeko, eta, batez ere, eskakizun horiek ezarritako epeetan betetzen ez direnean aurreproiektuak besteren konturako langileentzat jasotzen dituen muturreko ondorioak kontuan hartzen badira —kaleratze objektiboa edo lanpostutik mugiaraztea—.

J) Azken xedapenak. Euskadiko Kirolaren Legearen aldaketa:

275. Amaierako zatian, aurreproiektuak bi aldaketa puntual sartu ditu Euskadiko Kirolaren Legearen 127. eta 128. artikuluetan. Ildo horretan, arau-hauste oso astun baten eta astuntzat hartutako bi arau-hauste berriren tipifikazioa sartu ditu.
276. Euskadiko Kirolaren Legearen 127. artikuluan (arau-hauste oso astunei buruzkoan) sartutako arau-hauste berria zein 128. artikuluan h) letra berri gisa sartutakoa



kualifikazioari, erregistroari edo, hala badagokio, elkargoko kide egiteari eta erantzukizun zibileko aseguruari lotutako eskakizunen ondorio logikoak dira. Bi kasu horietan, arau-hauste berrien deskribapena zehatzaeta garbia da.

277. Euskadiko Kirolaren Legearen 128. artikuluan arau-hauste astun berri bati dagokionez sartu nahi den i) letra berria desberdina da, aurreproiektuaren 11., 19. eta 20. artikuluetan bildutako betebeharren ez-betetze bataipatzen baitu generikoki.
278. Beste zenbaitetan adierazi dugunez (118/2007 eta 191/2008 irizpenak), legegileari dagokio zigor-ahalaren atribuzioa (aldez aurreko legea), eta ahalik eta zorrotzen eta argien deskribatu behar ditu arau-haustea eta zigorrak, halako moldean non herritarrek aldez aurretik eta ahalik eta ziurren ezagutu ahal izango baititu zer portaera edo jokabide diren arau-hauste, eta zer zigor-erantzun espero dezakeen (lex certa).
279. Printzipio nagusietako beste bat dugu proportzionatasunarena, eta printzipio horrek, arau-hauste bakoitzarentzako zigorra finkatzeko zeregina ez ezik, portaera arau-haustearen kalifikazio zehatza finkatzeko zeregina ere adierazten du.
280. Kasu honetan, aurreproiektuak —11., 19. eta 20. artikuluetara jotzearen bidez— i) letra berrian jasotzen duen definizioa arau-hauste multzo bat da, eta nekez uztar daiteke zigor-zuzenbidean eskatzen den argitasun eta zehaztasunarekin. Halaber, proportzionaltasunaren ikuspegitik, ez dirudi erreferentzia generiko hori —aurreproiektuaren 11. artikulua osoari dagokiona bereziki— oso egokia denik, arau-haustearen astuntasunari dagokionez oso kasu desberdinak biltzen baitira (izaeragatik zein astuntasunagatik).
281. Legezkotasun-printzipioa behar bezala betez (Espainiako Konstituzioaren 25. artikulua) —eta tipikotasuna printzipio horren adierazpena da—, beharrezkoa izango litzateke letra zehatz horretan jaso nahi diren arau-hausteen tipifikazioa eta kalifikazioa ziurtasun eta zehaztasun handiagoarekin finkatzea, arauak jasotako arau-hausteari segurtasun juridiko handiagoa emateko.

III LEGEGINTZA-TEKNIKARI BURUZKO BESTE OHAR BATZUK

282. Aurreproiektuaren edukiaren azterketan legegintza-teknikari buruzko iradokizun batzuk aurreratu badira ere, ohar batzuk egin behar dira Gobernu Kontseiluak 1993ko martxoaren 23ko bilkuran onartutako lege, dekretu, agindu eta ebazpenak lantzeko jarraibideetan xedatutakoari jarraikiz.
283. 1. artikuluan, zenbaki guztiak aipatu behar dira. Zehazki, 2. zenbakian bi mezu desberdin agertzen dira, eta bakoitzak zenbaki batean egon beharko luke.
284. 1.2 artikuluan bertan, egoitzaren aipamenarekin batera helbidea adierazi beharko litzateke, pertsona fisikoez zein fisikoez ari baita.



285. 1. artikuluaaren 6. zenbakian kirol terminoari ematen zaion definizioa erredundanteegia da, eta horrek ez dio mesederik egiten mezuari. Zenbaki hori laburtzea, bigarren tarteki osoa ("Tal concepto... oficialmente") eta hirugarrenaren hasiera ("En virtud de ello, el término deporte...") kentzea eta definizioa "incluye a todas las actividades..." puntutik aurrera jarraitzea gomendatzen da.
286. 2.3 artikuluan, "un carácter enunciativo" dioen lekuan "un" artikulua mugagabea kentzea gomendatzen da.
287. 2. artikulua horren beraren 4. zenbakiak profesionalei zuzenduta biltzen duen mezu generikoa ez da beharrezkoa eta kendu liteke.
288. 10. artikuluaaren 2. zenbakiak Kirol-arloko Profesionalen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa Eusko Jaurlaritzan kirol-arloko eskumena duen zuzendaritzari atxikita egongo dela ezartzen du, eta egitura-dekretuen berezko antolamendu-esparru batean sartzen da. Dagokion sailarekiko atxikipena baino ez ezartzea gomendatzen da.
289. Amaierako xedapenen arteko hirugarren, laugarren eta bosgarrenean, "como regla general" edo "en principio" formula gramatikalak erabiltzen dira, baina erlatibizatu eta ahuldu egiten dute arau-mezua; hori dela-eta, kenduegin beharko lirateke.
290. Laugarren xedapen gehigarriak egungo idazkuntzarekin kontraesankorrak izan daitezkeen bi mezu jasotzen ditu. Ondorio hori saihesteko, nahikoa izango litzateke lehen tartekia kentzearekin. Bestela, utziz gero, esan beharko luke lanbideetan sartzeko eta jarduteko lege honek adierazitako titulu akademiko eta ziurtagiriaren bidez egiaztatutako kualifikazioak erabil daitezkeela, hau da, "sólo" hitza eta "en principio" terminoa kenduta.
291. Bosgarren eta seigarren xedapen gehigarriek eskatutako prestakuntza espezifikoki eta adierazitako jarraibideetan xedatutakoaren arabera arauaren artikuluetan txertatu beharko liratekeen kirol-jardueraren maila buruzko arau-mezu batzuk jasotzen dituzte.
292. Antzeko zerbait esan daiteke hamaikagarren xedapen gehigarriari dagokionez. Xedapen horrek eskumenak esleitzen dizkio kirol-arloko eskumena duen sailari, eta esleipen hori ere arauaren artikuluetan txertatu beharko litzateke.
293. Laugarren xedapen iragankorraren inguruan ohartarazitakoaren antzera, lehen xedapen iragankorraren 6. zenbakian eguneratu egin behar da martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 52.a) artikulua aipamena, eta urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52.a) artikulua aipatu behar da.
294. Boluntarioei buruzko seigarren xedapen iragankorra berrikusi edo kendu egin behar da; izan ere, alde batetik, hirugarren xedapen gehigarriak ere ezartzen du boluntarioei eskatu beharreko kualifikazio-betekizunak profesionalak eskatzen zaizkien berdinak



izango direla, eta aldi iragankor bat hartzen du kontuan. Bestalde, boluntarioek lehen laguntzako gaitasunak izateko eskakizuna 15. artikuluan ezarrita dago.

ONDORIOA

Batzordeak emandako irizpenaren arabera, aipatutako Legearen aurreproiektua, behin irizpen honen mamian egindako oharrak aintzakotzat hartutakoan, Jaurlaritzaren Kontseiluari aurkeztu ahal izango zaio, onar dezan.

Eta hori ziurtatzen dugu Gasteizen, 2016ko otsailaren 5ean, jakin eta kontuan har dadin. Era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2. artikuluan aurreikusitako betebeharra gogorarazi nahi dugu: azkenean onartzen den xedapen edo ebazpena Batzordeari jakinarazi behar zaio, irailaren 12ko 167/2006 Dekretuaren bidez onartutako Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 34. artikulua xedatzen duen moduan eta epean.

O. E.:

Jesús María Alonso Quilchano,

Idazkaria

Sabino Torre Díez,

Lehendakaria



XVII

ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO / PROZEDURA HASTEKO AGINDUA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **CRISTINA URIARTE TOLEDO**Fecha de la firma: **04/11/2014 9:21:09**Validación de la firma:  **Correcta****ORDEN de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se da inicio al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.**

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, regula el procedimiento de elaboración de las normas, estableciendo en su artículo 4.1 que estos procedimientos se iniciarán por Orden del Consejero o Consejera titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen. En este supuesto es competente la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, cuyo artículo 10 atribuye al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura las funciones y áreas de actuación en materia de deportes; y en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, según el cual, corresponde a la Dirección de Deportes *“analizar las necesidades y proponer las medidas normativas que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de deporte”*.

Asimismo, el artículo 5 de la citada Ley 8/2003, establece el contenido de la orden de inicio:

1.- Objeto y finalidad de la regulación.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, dispone en su artículo 4.2 que corresponde a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la regulación, reconocimiento oficial e impulso de los centros de formación de personal técnico deportivo, así como de sus enseñanzas y títulos.

En este sentido, la Ley pretende ordenar los aspectos esenciales del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional general y expresando la cualificación requerida para el ejercicio de tales profesiones.

2.- Estimación sobre la viabilidad jurídica y material.

El marco legal de la competencia que se ejercita deriva de lo dispuesto en el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, que confiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de deporte. En ejercicio de dicho título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, en virtud de la cual, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial, para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros relacionados con el deporte. A través de las disposiciones de desarrollo de la presente ley se efectuará, en los distintos ámbitos, la concreta delimitación del alcance de la obligatoriedad de las titulaciones.

3.- Repercusión en el ordenamiento jurídico.

La Ley cuya regulación se pretende supone un desarrollo nuevo de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, en lo que se refiere al ejercicio de las profesiones del deporte. Por lo que no modifica ni deroga norma alguna

4. Incidencia en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La disposición de carácter general que se insta mediante ésta Ley tiene una evidente incidencia económica que será analizada detalladamente a lo largo del procedimiento de aprobación.

Por lo expuesto, y en vista del contenido necesario que debe tener la Orden de inicio conforme al artículo 5.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, ya mencionada,

RESUELVO

Primero.- Acordar el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley sobre el acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco.

Segundo.- El expediente de elaboración de la disposición, que se inicia mediante esta Orden, deberá ser completado con los siguientes trámites e informes:

- 1.- Elaboración del anteproyecto.
- 2.- Aprobación previa del proyecto por este Órgano.
- 3.- Informe jurídico del Departamento, según lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.
- 4.- Audiencia e información pública prevista en el artículo 8 de la Ley 8/2003 mencionada, a los efectos de que puedan realizar sus aportaciones diversas entidades (federaciones deportivas vascas y territoriales, Unión de Federaciones deportivas, etc...) Además, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio por el que se dará trámite de audiencia por el plazo de 20 días hábiles.
- 5.- Participación y consulta a otras Administraciones prevista en el artículo 9 de la Ley 8/2003 mencionada, a los efectos de que puedan realizar sus aportaciones las tres Diputaciones Forales (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), así como a otros Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- 6.- Memoria del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 8/2003.
- 7.- Memoria económica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 8/2003.
- 8.- Informe del Consejo Vasco del Deporte, conforme a lo estipulado en el artículo 4 b) del Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el Consejo Vasco del Deporte.
- 9.- Informe de evaluación previa del impacto en función del género e Informe del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, artículo 3 d) de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del citado Instituto y con las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de agosto de 2012, publicado mediante la

Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

10.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

11.- Informe de la Dirección de Función Pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6.1, a) de la Ley de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y 16, a) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

12.- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, de conformidad con el artículo 18, c) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

13.- Informe del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1, a) de la Ley Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea.

14.- Informe de control económico-normativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

15.- Informe de de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

16.- No se aprecia la necesidad de ningún trámite ante la Unión Europea.

Tercero.- Se incorporará al expediente la presente Orden de inicio, toda la documentación correspondiente, en su caso, a los estudios y consultas evacuados, y una memoria sucinta de todo el procedimiento, con el contenido que señala el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, y a los efectos de su aprobación final, en los términos que señala el artículo 12 de la referida Ley.

En Vitoria-Gasteiz,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura
CRISTINA URIARTE TOLEDO



Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren AGINDUA, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektua egiteko prozedurari hasiera ematekoa.

8/2003 Legeak, abenduaren 22koak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak arauak prestatzeko prozedura antolatzen du, eta, horretarako, 4.1. artikulua bidez agintzen du prozedurek jorratzen duten dena delako gaian eskumena daukan sailaren titularra den sailburuaren aginduz abiarazi behar direla prozedurok. Kasu honetan Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua da eskumenekoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituz batetik, haren 10. artikulua Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren esku uzten baititu kirol-arloko egitekoak eta jardun-arloak, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan ezarritakoari jarraituz bestetik, horren arabera Kirol Zuzendaritzari dagokiolako *“kirol-arloaren beharrian aztertzea, eta arauzko neurriak proposatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari”*.

Azkenik, 8/2003 Legearen 5. artikulua, hasiera onartzeko aginduak zer eduki izan behar dituen ezartzen du:

1.- Arautzearen xedea eta helburua.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 1471998 Legearen 4.2 artikulua xedatzen duenez, Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eskumena da kirol-teknikariak prestatzeko zentroak eta horietako irakaskuntzak eta tituluak arautzea, ofizialki onartzea eta bultzatzea.

Zentzu horretan, Lege honen xedea da: kirol-arloko lanbide jakin batzuetan jarduteko oinarritzko alderdiak antolatzea, espresuki adieraziz zentzuz diren lanbide horiek; lanbide bakoitzari esleitzea zer funtzio-eremu orokorretan jardun behar duen, eta adieraztea zer kualifikazio eskatzen den lanbide horietan jarduteko.

2.- Bideragarritasun juridikoaren eta materialaren azterketa.

Gauzatzen den eskumenaren lege-esparrua Autonomia Estatutuko 10.36 artikulua da, kirol-arloko eskumen eskusiboa ematen baitio Euskal Autonomia Erkidegoari. Eskumen-titulu hori baliatuz, Eusko Legebiltzarrak Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea onartu zuen, eta lege horri jarraikiz, aginte publikoek, beren eskumenen eremuaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa entrenamendu, sustapen eta bestelakoak eskaini ahal izateko. Lege hau garatzeko xedapenen bitartez, titulazioen nahitaezkotasunaren norainokoa mugatuko da, zehazki,

3.- Antolamendu juridikoan izango duen eragina.

Arautu nahi den Legeak Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen garapen berri bat dakar berekin, kirolaren lanbideetan jarduteari dagokionez. Hortaz, ez du beste legerik aldatzen edo indargabetzen.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan duen eragina.

Lege honek berekin dakarren xedapen orokorrak eragin nabaria izango du ekonomian, eta eragin hori zehatz-mehatz aztertuko da onartzeko prozeduraren esparruan,

Horregatik guztiagatik, eta hasteko aginduak abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 5.1. artikulua araberaren arabera izan behar duen edukia kontuan hartuta, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehena.-- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko lege-proiektua egiteko prozedurari hasiera ematea onartzea.

Bigarrena.-- Xedapen hori egiteko espedientea, agindu honen bidez abiarazten dena, izapide eta txosten hauekin osatu beharko da:

1.- Aurreproiektua egitea.

2.- Organo honek proiektua aldez aurretik onartzea.

3.- Sailaren txosten juridikoa, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3. artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.- Jendaurreko entzunaldia eta informazioaldia, 8/2003 Lege horren 8. artikuluan aurreikusitakoa, hainbat erakundek (EAEko eta lurraldeko kirol federazioak, Kirol Federazioen Batasuna eta abar) beren ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarki bat argitaratuko da 20 egun balioduneko epean entzunaldi-izapidea betetzeko.

5.- Aipatutako 8/2003 Legearen 9. artikuluan adierazi bezala, beste administrazio publiko batzuek parte-hartzea eta haiei kontsulta egitea, hiru foru-aldundiek (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko beste sail batzuek ekarpenak egin ahal izan ditzaten.

6.- Prozeduraren memoria, 8/2003 Legearen 10.2. artikuluan xedatutakoaren arabera.

7.- Memoria ekonomikoa, 8/2003 Legearen 10-3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorritz.

8.- Kirolaren Euskal Kontseiluaren txostena, Kirolaren Euskal Kontseilua arautzen duen azaroaren 7ko 220/2000 Dekretuaren 4 b) artikulua ezarritakoari jarraituz.

9.- Generoaren araberako eraginaren alde aurreko ebaluazioari buruzko txostena, eta Emakumearen Euskal Erakundearen txostena, honako hauekin bat etorritz: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 5eko 2/1988 Legearen 20. eta 21. artikulua, erakunde hori sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1998 Legearen 3 d artikulua, eta genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak onartzeko eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzko Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakia, 2012ko abuztuaren 21eko bilkuran hartutakoa, eta Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren abuztuaren 21eko 40/2012 Ebazpenaren bidez argitaratua.

10.- Hizkuntza Normalizaziorako Zuzendaritzaren txostena, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoarekin bat.

11.- Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostena, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko Legearen 6. 1 a) artikuluan eta Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 16.a) artikuluan xedatutakoa oinarritzat hartuta.

12.- Herritarrek Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren txostena (Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 18.c artikulua).

13.- Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen txostena, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1, a) artikuluan ezarritakoa betez.

14.- Ekonomia- eta arau-kontrolerako txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.

15.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren txostena, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1 c) artikuluan xedatutakoari jarraiki.

16.- Ez da beharrezkotzat jotzen Europar Batasunean inolako izapiderik egiterik.

Hirugarrena.- Hasteko agindu hau espedienteari erantsiko zaio, baita kontu honen inguruko agiri guztiak, emandako azterlan eta kontsulta guztiak, eta prozedura osoaren berri ematen duen memoria labur bat ere (abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.2 artikulua adierazitako edukia bildu behar du); hori guztia beharrezkoa da behin betiko onartzeko, lege horren 12. artikulua ezarritako moduan.

Vitoria-Gasteiz,

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua
CRISTINA URIARTE TOLEDO



XVIII

ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO / PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN
SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA
LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY
SOBRE ACCESO Y EJERCICIO DE PROFESIONES
DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO.**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **CRISTINA URIARTE TOLEDO**Fecha de la firma: **24/11/2014 16:11:24**Validación de la firma:  **Correcta****ORDEN de la Consejera de Educación Política Lingüística y Cultura, de aprobación previa del Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco**

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General dispone, en su capítulo II, que el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general se iniciará por Orden del Consejero o Consejera titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen.

Conforme a lo establecido en el artículo 7.1 de dicha Ley “una vez redactados los proyectos de disposiciones de carácter general, deberán contar con la aprobación previa por el órgano que haya dictado la orden de inicio, antes de evacuar los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan”.

Mediante Orden de 3 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, se ordenó el inicio del procedimiento de elaboración del Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en el País Vasco.

Una vez redactado el texto del proyecto, de acuerdo con la finalidad establecida en la citada Orden de inicio, procede su aprobación previa y anterior a los trámites de audiencia y consulta pertinentes.

Por cuanto antecede,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en el País Vasco.

Segundo.- Continuar los trámites de instrucción del procedimiento de elaboración de la citada disposición.

En Vitoria-Gasteiz,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura
CRISTINA URIARTE TOLEDO



Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren AGINDUA, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektua alde aurretik onartzekoa.

8/2003 Legeak, abenduaren 22koak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, II. kapituluaren xedatzen duenez, xedapen orokorrak egiteko prozedura jorratzen duten dena delako gaian eskumena daukan sailaren titularra den sailburuaren aginduz abiarazi behar da.

Lege horren 7.1 artikuluan esaten denez, “xedapen orokorren egitasmoak idatzitakoan, prozedura hasteko agindua eman duen organoak alde aurreko onarpena eman beharko die, dagozkion negoziazio-, entzunaldi- eta kontsulta-izapideak egin aurretik”.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2014ko azaroaren 4an emandako Aginduaren bitartez eman zitzaion hasiera Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legearen aurreproiektua egiteko prozedurari.

Proiektuaren testua idatzi ondoren, eta hasiera emateko agindu horretan ezarritako helburuarekin bat etorriz, proiektua onartu beharra dago, entzunaldi- eta kontsulta-izapideak egin aurretik onartu ere.

Hori guztia ikusirik, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehenena.- Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen Aurreproiektua onartzea.

Bigarrena.- Xedapen hori egiteko prozedura bideratzeko izapideekin jarraitzea.

Vitoria-Gasteiz,

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua
CRISTINA URIARTE TOLEDO